

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA



TESIS DOCTORAL

**Génesis y desarrollo de las asociaciones agrícolas y de propietarios
territoriales en España**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Miguel Martín-Albo Lucas

Madrid, 2016

Génesis y desarrollo de las asociaciones agrícolas y de propietarios territoriales en España

Miguel Martín-Albo Lucas

VOLUMEN I

A mi madre Ángeles. In memoriam

Agradecimientos

Decidí emprender este proyecto sobre las asociaciones agrícolas y de propietarios, hace ya algún tiempo, gracias a la ilusión y al empeño del profesor José Luis Martínez Sanz, mi primer Director de Tesis, después de comprender la importancia que habían tenido aquéllas en el desarrollo del Estado y de la modernización de la sociedad a lo largo de todo el siglo XIX en nuestro país. Esa labor ha sido continuada por mi actual Director, Antonio López Vega, sin el cual este trabajo no hubiera visto nunca la luz. Por todo ello, además de por tantas tardes de charlas y discusiones, muchas gracias a los dos.

Para llevar a buen puerto este proyecto ha sido precisa la ayuda de numerosas personas, sin las cuales y sin su desinteresado esfuerzo, no hubiese sido posible detallar muchos de los avances que el sector agrícola puso en marcha en España durante todo el siglo XIX.

Es de justicia, por tanto, agradecer en primer lugar a Rafael Cebrián Gimeno todo su corazón y empeño en abrirme las puertas de la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia. En sus archivos todavía se encuentra una buena parte de la historia de las relaciones que se originaron entre muchas de las asociaciones de agricultores establecidas entonces en España. Apuntes que han servido, al fin y a la postre, para apuntalar muchas de las ideas inmersas en esta Tesis Doctoral. Mi reconocimiento, aquí y ahora, para esas personas, muchas veces anónimas, que como él han mantenido vigentes y mantienen todavía un buen puñado de documentos que seguirán siendo imprescindibles para el futuro de muchas generaciones de investigadores.

También mi agradecimiento a Vicent A. Úbeda Balaguer por darme acceso a la maravillosa biblioteca de la *Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes*. A Jesús García-Molina, por tanta información recibida desde el Archivo Municipal de Orihuela. Mi reconocimiento, asimismo, a Amelia Baquero, por darme tanta libertad para trajojar y estudiar todo el Archivo de Alcázar de San Juan, su Casino Principal y las Actas del Ayuntamiento correspondientes a una gran parte de siglo XIX.

No puedo olvidar a Bartolomé Domínguez Morales. De su interés regalado y toda la información encontrada en el Archivo Municipal de Córdoba han partido algunas de las respuestas sobre la actividad de las asociaciones decimonónicas de propietarios instituidas en Andalucía. Igualmente ha sido muy importante contar con la ayuda del personal de la Biblioteca del Congreso de los Diputados en Madrid. Sin el estudio y las opiniones vertidas en la revista *La Liga Agraria*, revista conservada íntegramente en su Hemeroteca, las conclusiones sobre la actividad liguera no hubieran sido tan patentes.

Debo un especial agradecimiento, tanto al personal del Archivo como de Biblioteca y de la Hemeroteca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De sus fondos tan cuidadosamente guardados han salido gran parte de las ideas y conclusiones que se exponen al final de esta Tesis Doctoral. Gracias a Cristina, Elena, Pedro, María, pero muy especialmente a Isabel Jiménez y Carlos Moreu, siempre dispuestos a proporcionarme desde esos mismos Archivos, todos los «papeles» y publicaciones del antiguo Ministerio de Fomento.

Gracias a todos mis compañeros y amigos, estén donde estén, y sin excepción alguna. Se merecen todo por obsequiarme con incontables horas de trabajo y buenos momentos, algo que no podré nunca compensar.

A Sergio, a Gonzalo, mis hijos. A Ana, mi mujer. Todo esto no hubiera sido posible sin el amparo incondicional de mi familia. Sin su paciencia y protección hubiera sido imposible dar un paso hacia adelante en esta Tesis Doctoral. A mi padre Miguel; mis hermanos Pepe y Javier. De todos vosotros es una parte importante de cuantas líneas han quedado impresas aquí.

A todos... mi mayor reconocimiento y toda mi gratitud para siempre.

ÍNDICE

VOLUMEN I

INTRODUCCIÓN

1. OBJETO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	9
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN	11
• <i>Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el tejido asociativo</i>	<i>25</i>
• <i>Las asociaciones agrícolas y de propietarios</i>	<i>29</i>
• <i>Élites, trigueros y grupos de presión</i>	<i>42</i>
3. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y ACOTACIÓN TEMPORAL	48
4. LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX	52
5. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS EN LA ESPAÑA DECIMONÓNICA	58

CAPÍTULO I

LIBERALES Y MODERADOS. ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA ESPAÑA DE FERNANDO VII	67
---	-----------

1. ANTECEDENTES Y PRIMEROS INTENTOS DE LEGISLACIÓN ASOCIATIVA	67
• <i>La asociación, manifestación y reunión en Europa. Un precedente para los liberales en España</i>	<i>67</i>
• <i>El derecho de asociación y de reunión en el primer período del liberalismo español</i>	<i>74</i>

2. LA AGRICULTURA Y LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS. LAS CONSECUENCIAS DE LA ILUSTRACIÓN Y LOS PRIMEROS ENSAYOS DE SOCIEDADES DE PROPIETARIOS Y LABRADORES	80
• <i>Las Sociedades Económicas en el siglo XIX. La persistencia de la memoria ilustrada</i>	<i>80</i>
• <i>Instrucción, capacitación y desarrollo tecnológico en el primer tercio del siglo XIX</i>	<i>88</i>
• <i>Los primeros intentos de asociacionismo agrícola en España. Las Sociedades de Agricultura y el asociacionismo voluntario</i>	<i>99</i>
3. DE LA PROPIEDAD INMOVILIZADA AL ACCESO A LA TIERRA	113
• <i>Propiedad e inmovilismo</i>	<i>113</i>
• <i>La abolición de los señoríos</i>	<i>120</i>
• <i>La liquidación del mayorazgo como vinculación jurídica</i>	<i>126</i>
• <i>La desamortización de tierras en España hasta 1830</i>	<i>131</i>
4. LA CONCIENCIA DE UNA CLASE PRODUCTORA. LOS INICIOS DE LA POLÍTICA PROTECCIONISTA EN LOS CEREALES	148
• <i>La transformación de la sociedad agraria. Los propietarios agrícolas en los comienzos de la España liberal</i>	<i>148</i>
• <i>Algunas notas sobre la propiedad y el poder local</i>	<i>158</i>
• <i>La importancia del trigo y los trigueros en la agricultura española. El mercado de los cereales hasta 1830</i>	<i>165</i>
• <i>La prohibición sobre el trigo extranjero. El peso de la clase propietaria terrateniente</i>	<i>186</i>
• <i>El problema del trigo en Cataluña</i>	<i>208</i>
• <i>El Arancel General de 1820 y la reacción absolutista a partir de 1823</i>	<i>211</i>

CAPÍTULO II

EL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN EL REINADO DE ISABEL II

1. DESAMORTIZACIÓN Y EFECTOS SOBRE LA PROPIEDAD	229
• <i>La desamortización de Mendizábal. Una síntesis</i>	<i>229</i>
• <i>La desamortización de Madoz. Tierras, propietarios y trigo</i>	<i>240</i>

2. LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS HASTA 1850. DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS TERRITORIALES DE ESPAÑA A LAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS COMARCALES DEL AMPURDÁN	256
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La Asociación de Propietarios Territoriales de España</i>256 • <i>La Sociedad de Agricultura del Ampurdán. Agricultura comarcal y de Estado</i>270 • <i>La percepción del asociacionismo agrario en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz</i>294 	
3. UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO AGRÍCOLA ASOCIATIVO. LA ADMINISTRACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA DURANTE EL REINADO DE ISABEL II.	308
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Del Comercio y las Obras Públicas al Fomento y la Agricultura</i>308 • <i>El Consejo de Agricultura y Comercio. Un «espacio» colectivo para la propiedad rural y agrícola</i>325 • <i>Propiedad y representatividad. Las Juntas Provinciales de Agricultura</i>339 	
4. EL «EJE» ASOCIATIVO BARCELONA-SEVILLA-VALENCIA. PARTENARIADO AGRÍCOLA Y REPERCUSIONES REGIONALES	358
<ul style="list-style-type: none"> • <i>La reforma arancelaria de 1849 y la cuestión triguera de los años cincuenta. Crisis de subsistencias y primeras respuestas del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro</i>358 • <i>El semblante activo del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro</i>387 • <i>Trigos y aranceles. Presión y representación. La Comisión Permanente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro en Madrid</i>411 • <i>El carácter asociativo agrícola valenciano. La Sociedad Valenciana de Agricultura y la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia</i>442 • <i>La singularidad reivindicativa del asociacionismo agrícola valenciano. Acción conjunta y disidencia</i>458 • <i>La contribución de consumos</i>473 • <i>La acción desempeñada desde La Agricultura Española y la aparición del Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla. La articulación del recreo, el desarrollo agrícola y el protagonismo territorial en Andalucía</i>486 	

- *La reorganización y extensión del movimiento asociativo agrícola. El Fomento Agrícola*510
- *Regionalismo y fomento agrícola castellano-leonés. La construcción reivindicativa triguera y harinera a través de la Sociedad Castellana de Emulación y Fomento*533

VOLUMEN II

CAPÍTULO III

REVOLUCIÓN Y CRISIS. TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN EL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN ESPAÑA, 1868-1887543

1. LA PROYECCIÓN DE CASTILLA A TRAVÉS DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)543

- *La Revolución de 1868. Reforma arancelaria y resistencia participativa*543
- *La Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*560
- *Ocaso y decepción. De la inestabilidad económica a la participación política*588
- *Necesidades y respuestas. El Círculo Agrícola Salmantino y su tránsito hacia la Liga de Contribuyentes*602

2. PROPIETARIOS Y CONTRIBUYENTES. EL «TURNO» DE LAS LIGAS624

- *Las Ligas de Propietarios*624
- *Política y comportamientos patronales*641
- *Las Ligas de Contribuyentes. Un primer intento de asociacionismo «global» para la propiedad y la agricultura*668
- *Protección y movilización política. Obstáculos y limitaciones a la actividad liguera*683
- *La pluralidad tipológica en el asociacionismo agrícola español. Escrutinios y balances a lo largo del último cuarto del siglo XIX*701

CAPÍTULO IV

LA ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES Y LA LIGA AGRARIA. UN INTENTO FRUSTRADO POR CONSTITUIR EL PRIMER LOBBY AGRARIO EN ESPAÑA	739
1. INGENIEROS, PROPIETARIOS Y LABRADORES. LA ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES AGRARIOS	739
• <i>Algunos rasgos del afianzamiento en el nuevo asociacionismo finisecular</i>	739
• <i>Auge y crisis. La vuelta a la estrategia del «todo» en el asociacionismo agrario</i>	750
2. UN LOBBY AGRARIO EN MARCHA. LOS AGRICULTORES Y LA LIGA AGRARIA	770
• <i>Primeras Asambleas y primeras directrices</i>	770
• <i>La Exposición a las Cortes. Del manifiesto de la Liga al «meeting» de Borjas Blancas</i>	783
• <i>La Unión económico-electoral y el «meeting» de Barbastro</i>	798
• <i>La tercera Asamblea y la reforma de los Estatutos. El manifiesto de Adolfo Bayo</i>	810
• <i>Las Cámaras Agrícolas y el final de la Liga Agraria</i>	826
3. LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA LIGA AGRARIA	837
• <i>Las tendencias proteccionistas y el «tercer» partido</i>	837
• <i>Los conservadores al encuentro de la Liga Agraria. La dictadura de Gamazo y la alternancia en el poder</i>	857
• <i>Ruptura y disidencia. La consumación de la legislatura del partido liberal</i>	875
CONCLUSIONES	887
ABSTRACT	895
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	901

Abreviaturas utilizadas

- AHN → Archivo Histórico Nacional
 - AMA → Archivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
 - ANABAD → Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas
 - ARSEAPV → Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia
 - CSIC → Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 - DSC → Diario de las Sesiones de las Cortes
 - GEA → Grupo de Estudios Agrarios
 - GEAS → Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad
 - RIACSI → Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro
 - SEHA → Sociedad Española de Historia
- Tanto las citas como las fuentes utilizadas en esta Tesis Doctoral, correspondientes al siglo XIX, se han reproducido tal y como figuran en las fuentes originales, respetando la ortografía de la época.

INTRODUCCIÓN

1.- OBJETO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Desde hace tiempo se ha venido considerando la etapa última del Antiguo Régimen como un asiento fundamental de las transformaciones del mundo contemporáneo¹. Al hilo de esa misma idea y coincidiendo con los últimos momentos de las políticas ilustradas del siglo XVIII, hemos querido establecer nuestro principal objeto de la investigación en las asociaciones de carácter agrícola, considerándolas desde su inicio y atendiendo a su desarrollo y extensión a través de un holgado período cronológico del siglo XIX en España. El estudio de las personas y los hechos relacionados con la realidad asociativa, política y económica, no tardaron en llevarnos a situar nuestra atención en las élites propietarias surgidas del proceso liberal, así como su exordio y asentamiento en los distintos niveles de poder del Estado. Grupos que necesariamente estuvieron directamente implicados en la génesis y en el desarrollo de las primeras asociaciones de agricultores en nuestro país.

La investigación relativa al estudio de las asociaciones agrícolas y de propietarios en la España liberal, pretende evidenciar la evolución, identificación y análisis del entramado asociativo relacionado con la propiedad y la producción agrícolas, en un eje temporal que hemos establecido, como luego se comprenderá, entre los años 1820 y 1891. Asimismo, por la importancia que representa para nuestros estudios, hemos querido atender a la incidencia que tuvieron las políticas económicas de los diferentes gobiernos liberales, ya fuera en el ámbito de las clases vinculadas a producción en la agricultura, como en aquellas tenedoras de tierras

¹ Arias de Saavedra, Inmaculada, ob. cit., pág. 21.

productivas, estuvieran o no explotadas, especialmente las referidas al cereal, al olivo y al viñedo. Dichas políticas deberán, por tanto, ser contempladas como objeto de análisis en esa Tesis Doctoral.

En línea con lo expuesto más arriba, nos ha parecido igualmente necesario observar las relaciones que existieron entre los distintos colectivos de propietarios de tierras productivas, así como el posterior desarrollo hacia lo que más tarde serían verdaderos grupos de presión. Se pretende, de esta forma, valorar la participación política y los intentos por mediar en las decisiones económicas, especialmente en las cuestiones arancelarias, por parte de los grandes propietarios, a partir de las primeras tentativas proteccionistas de 1820.

La aparición del asociacionismo agrícola en España hemos de situarla luego de un significativo recorrido de años de distintas políticas económicas y sociales, iniciado en los primeros momentos de la presencia liberal en nuestro país y culminado ya entrado el siglo XX. De la misma manera, el desarrollo asociativo, en general, necesitó de un tiempo de pluralismo ideológico y de libertades que habría de tener su culminación en el Sexenio democrático. Circunstancia, esta última, que finalmente sería decisiva para emprender el impulso de las leyes de asociación voluntaria.

Por otra parte, uno de los principales objetivos de nuestro trabajo debe ser, en primer lugar, la interpretación y el análisis de los condicionamientos que condujeron a una eventual demora en la aparición de sociedades y asociaciones de labradores y agricultores en España, a pesar de la notable pervivencia de otras entidades asociativas, como así sucedería, por ejemplo, con las *Sociedades Económicas de Amigos del País*. Aspecto que trataremos en un primer bloque de nuestra Tesis. Dentro de este contexto, ha sido preciso trazar y determinar la evolución de la legislación asociativa en España desde el Trienio Liberal hasta la ulterior aprobación de la ley de asociaciones en 1887.

Otra de nuestras pretensiones se refiere al necesario seguimiento de aquellos colectivos y asociaciones agrícolas, que incoaron y pusieron en marcha en España un proceso de mecanización y avances biotecnológicos, ya fuera a través de escuelas, publicaciones o experimentaciones y que fueron llevadas a la práctica en distintos campos de la agricultura. Esta

cuestión será igualmente tratada en el desarrollo de la investigación que aquí se presenta.

Finalmente, en lo que a los objetivos se refiere, hemos creído igualmente necesario adicionar al estudio de la historia social del poder, las contribuciones metodológicas y de procedimiento utilizadas en los últimos años en la historiografía del asociacionismo. Ello nos ha permitido fijar nuestra atención en las transformaciones y desarrollo de las clases dependientes de la propiedad y de la tierra, posibilitándonos explicar su acceso a los foros de influencia social, política y económica. Del mismo modo, hemos procurado tener en cuenta los mecanismos e instrumentos que permitieron alcanzar y mantener a las élites agrícolas en un prolongado estadio de influencia a lo largo de gran parte del siglo XIX.

2.- JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

A medida que el tiempo ha ido transcurriendo, las personas hemos demostrado un particular interés por nuestro pasado. Los primeros homínidos no tardaron en comprender la importancia que tenía la asociación para afianzar su dominio y control frente a los desafíos que planteaba la propia naturaleza. El camino desde entonces hasta los *sapiens*, y desde éstos hasta nosotros, ha ido conformando una evolución biológica y cultural, pero también del sentir social. La propia necesidad de compartir hechos e ideas entre individuos de la misma especie, ha provocado que perfeccionáramos capacidades diferenciadas y progresivamente más complejas. En cualquier caso, resulta lógico pensar que en el vasto paseo por la evolución desarrolláramos una capacidad diferenciadora del resto de seres vivos. Un hecho, este último, que permitió la concepción de un planeta humano con señaladas diferencias en nuestros comportamientos, en nuestras incertidumbres y, por ende, en nuestras relaciones con los demás.

No obstante, y a pesar de vivir de manera permanente en sociedad, el estudio de la «sociabilidad», en términos generales, no ha sido una disciplina abordada hasta hace relativamente poco tiempo. En nuestro país, Jordi Canal, a principios de los años noventa, se quejaba de la escasa repercusión

e interés que tenían los estudios sociales². Casi un siglo y medio antes, en su traducción de la obra de Alexandre de Laborde, sobre el espíritu de asociación, el marqués de Sanfelices se expresaba de manera similar. En concreto se lamentaba por carecer de “una noticia de las asociaciones y compañías de todas clases que al presente existen o han existido en nuestra patria”³. En cualquier caso, no sería hasta mediados de los años setenta del siglo pasado, cuando la historiografía española iba a comenzar a preocuparse tímidamente por los estudios vinculados a las sociedades y asociaciones de distinta índole.

Los primeros trabajos que los historiadores admiten como estudios concernientes a la sociabilidad, propiamente dicha, son los realizados por el francés Maurice Agulhon. Es indudable que la historiografía de la sociabilidad en Francia se vio favorecida por la llamada «nouvelle histoire», enfocada, según Christophe Charle, al estudio y análisis de los microfenómenos⁴. A pesar de que en nuestra investigación las sociedades a nivel general no tienen una especial atención, sí conviene recordar los trabajos que el propio Agulhon publicó a partir del año 1966, referidos a la vida asociativa en el sur de Francia, en un período correspondiente a los siglos XVIII y XIX⁵. La obra, publicada en dos volúmenes, sería reeditada años después y debido al interés que ocasionó el nuevo modelo de estudio no tardaron en aparecer nuevos trabajos relacionados con el asociacionismo y la vida en sociedad. En los años setenta se editó otro ensayo, esta vez relativo a los círculos sociales en la Francia burguesa del siglo XIX, también elaborado por el propio Agulhon⁶.

² En este sentido podemos leer lo siguiente: “La consulta de un fichero temático de una biblioteca universitaria francesa, también — aunque en menor grado — italiana, nos permite conocer las obras disponibles en aquella institución sobre sociabilité (o sociabilità). El mismo ejercicio, hecho en España, no conduce a ningún sitio”. En Canal i Morell, Jordi, “La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea”, *Historia Contemporánea*, número 7, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992.

³ Nos referimos a las primeras páginas introductorias “Al público. El Traductor”, de la obra de Alexandre de Laborde, *Del espíritu de asociación aplicado a cuanto puede interesar al pro-comunal de una nación y al fomento de la riqueza pública*, traducida por el marqués de Sanfelices, Valladolid, 1834, pág. VI.

⁴ Una visión bastante concreta de los objetivos de la «nouvelle histoire» pueden estudiarse en la obra de Charle, Christophe (ed.), *Histoire sociale, histoire globale?*, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1993.

⁵ Agulhon, Maurice, *La sociabilité méridionale. Confréries et associations en Provence orientale dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle*. Aix-en-Provence, 1966.

⁶ Son varios los trabajos realizados por Maurice Agulhon que están relacionados con la sociabilidad en la Francia del siglo XIX. Aquí citaremos a modo de referencia solamente algunos de ellos como por ejemplo: *La République au village: les populations du Var de la révolution à la IIe République*, Paris, 1970; *La vie sociale en Provence intérieure au lendemain*

Del mismo modo que se había generado un interés considerable hacia los estudios relacionados con las sociedades decimonónicas en Francia, huelga decir que, influenciados por dichos trabajos, no tardaron en sucederse otros referidos a distintos ámbitos de la sociabilidad en el resto de países europeos. La mayoría de las veces, estos trabajos estaban dirigidos a explicar el mundo laboral, el político o a los espacios de índole recreativo propios de las clases altas o populares⁷.

Si bien en España no se había atendido de una manera razonable a las prácticas asociativas hasta las últimas décadas del pasado siglo, conviene, no obstante, recordar que ya en el año 1739 el término de «sociabilidad» aparecía recogido de forma tácita en el tomo sexto del conocido *Diccionario de Autoridades*. En concreto, el texto se refería al mismo como “el tratamiento, y correspondencia de unas personas con otras”. Al mismo tiempo definía otras expresiones y vocablos como «sociedad», «sociable» o «socio», e incluso no faltaban ejemplos como la Academia Real de las Ciencias de París o la misma Sociedad Regia de Londres⁸. De igual forma no podemos olvidarnos de la extraordinaria obra de Alonso de Herrera, publicada a principios del siglo XVII y reeditada hasta nuestros días, en la que dedica todo un capítulo al fomento de la actividad asociativa entre los labradores y agricultores⁹. Algunos siglos más tarde, sería la propia *Sociedad*

de la Révolution, París, 1971 y *Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848: étude d'une mutation de sociabilité*, París, 1977.

⁷ No introduciremos aquí muchos más datos relacionados con la sociabilidad en otros países, puesto que este trabajo pretende estar dirigido principalmente al estudio de las asociaciones agrarias en España y, por ende, a la propia sociabilidad en nuestro país. En cualquier caso, son muchas las publicaciones e investigaciones que en la propia Tesis Doctoral quedarán expuestas más ampliamente. Sirvan aquí tan solo algunos ejemplos en los que se incluyen suficientes referencias, además del ya citado sobre la sociabilidad en España de Jordi Canal, a las publicaciones y obras en otros países. Entre ellas, están las del Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad, *España en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998; *Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898*, Cuenca, 1999, e incluso de: Guereña, Jean-Louis, “Espacios y formas de la sociabilidad en la España contemporánea”, *Revista Hispania*, Volumen 63/2, número 214, Instituto de Historia (CSIC), Madrid, 2003.

⁸ En efecto, nos referimos al *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Tomo sexto que contiene las letras S, T, V, X, Y, Z*, Imprenta de la Real Academia Española, Madrid, 1739, pág. 133. Se trata del primer diccionario ideado y publicado por la Real Academia Española a modo de las que ya existían en Francia o Italia.

⁹ En uno de los capítulos titulados “Discursos del pan y del vino”, Herrera, entre otras cosas, trata de “las necesidades grandes en que están los labradores...” por lo que aconseja que: “en cada Lugar ò Villa, ò Ciudad, se haga y ordene una Cofradía del Señor San Anton, la qual ha de confirmar [...] el Rey nuestro Señor, para que tenga fuerza y autoridad”. Alonso de Herrera, *Agricultura General, que trata de la labranza del campo, y sus particularidades*,

Económica Matritense de Amigos del País, la que se encargaría de realizar sucesivas ediciones, especialmente durante la primera mitad del siglo XIX.

Siguiendo esta misma línea en la producción bibliográfica, acostumbramos a olvidar el interés y el conocimiento que ya demostraron algunos eruditos sobre el asociacionismo y la sociabilidad en nuestro país. Un último ejemplo, entre los varios que existen y que aquí queremos recoger, es el de Genaro Morquecho y Palma. Catedrático de la Escuela Central de Agricultura, fue un importante autor que nunca llegó a ser reconocido en la medida que hubiera merecido. Hoy apenas es recordado o citado en los trabajos sobre el asociacionismo en España. Respecto al «espíritu de asociación», llegó a escribir lo siguiente en 1858:

por último, constituye ó debe constituir entre los labradores una fuerza poderosa, para resistir el exclusivismo de todo interés ilegítimo, para realizar toda suerte de mejoras a favor de la agricultura rural, como son: modificar los malos usos y costumbres, para hacer que la propiedad sea respetada; difundir el amor al trabajo, el espíritu de economía, el gusto del progreso, y ensayar de común acuerdo nuevos cultivos; introducir del mismo modo instrumentos, máquinas y animales perfeccionados. El espíritu de asociación, bien desenvuelto y sostenido, es el que puede y debe remover, en una palabra, los obstáculos que paralizan la marcha de la agricultura rural; puesto que á la potencia colectiva compete cuanto es superior á las fuerzas del individuo aislado, y cuanto sale fuera de la órbita de una administración pública celosa ó descuidada¹⁰.

Por sus obras, Morquecho demostró un conocimiento notable de la economía y de las sociedades existentes en aquel momento. Llegó a consultar fuentes del entonces Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas y detalló la existencia de Sociedades como la *Sociedad de Labradores de Córdoba*. En suma, hoy podríamos considerarlo un pionero en la cuestión. Aunque no fue el único que desarrolló esa labor en el siglo XIX.

crianza de animales, propiedades de las plantas que en ella se contienen, y virtudes provechosas a la salud humana, 1645, págs. 187 y 188. Hay que advertir que la primera edición fue publicada en el año 1513. Nosotros hemos utilizado una edición facsímil, publicada recientemente por el Ministerio de Agricultura.

¹⁰ Morquecho y Palma, Genaro, *Principios razonados e ideas de economía rural*, Imprenta de Manuel Minuesa, Madrid, 1858, págs. 159 a 161.

Son muchos los que consideran que la primera aportación española a la sociabilidad se produjo en 1972 con la publicación de Isidoro Moreno Navarro de un libro dedicado a las hermandades rurales en Andalucía. Lo cierto es que se trataba más de un análisis antropológico que de un trabajo propiamente dedicado a las asociaciones españolas¹¹. Sin embargo, fue a mediados de los años setenta cuando se editó un ensayo que es ya toda una referencia en la sociabilidad en nuestro país. Antonio Miguel Bernal y Jacques Lacroix publicaron en 1975 un amplio artículo en el que se introducía un nuevo marco teórico que serviría para modificar los estudios de la sociabilidad en nuestro país¹². En efecto, por primera vez iban a ser tenidos en cuenta conceptos sobre el asociacionismo como el casino, el círculo, el ateneo o la propia asociación. Conceptos, muchos de ellos, que con posterioridad irían vinculados a las actividades agrarias y a los grupos de propietarios.

Bernal y Lacroix consideraron como patrón en su trabajo, dedicado a las asociaciones sevillanas entre 1845 y 1974, a grupos y sociedades con un importante rango de influencia colectiva, además de detallar y clasificar las asociaciones por su actividad y de manera cronológica, indicando su fecha de creación y desaparición cuando esta última procedía. Sin embargo, lo más destacable, desde nuestro punto de vista, es la particular importancia e interés que observaron los autores por las sociedades y grupos de élite en la sociedad sevillana de esos años. La *Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento*, creada en 1844, así como el *Casino de Labradores y Propietarios*, formado en 1859, aglutinaban a la nobleza local, además de la práctica totalidad de la clase dirigente económica y política de Sevilla¹³.

¹¹ Nos referimos a: Moreno Navarro, Isidoro, *Propiedad, clases sociales y hermandades en la Baja Andalucía. La estructura social de un pueblo de Aljarafe*, Madrid, 1972. Estos trabajos tuvieron continuidad en el propio Moreno Navarro con su publicación: *Cofradías y Hermandades Andaluzas. Estructura, simbolismo e identidad*, Sevilla, 1985, y también en Escalera Reyes, Javier, *Sociabilidad y asociacionismo: Estudio de Antropología social en el Aljarafe sevillano*, Sevilla, 1990.

¹² Bernal, A. Miguel y Lacroix, Jacques, "Aspects de la sociabilité andalouse. Les associations sevillanes (XIXe - XXes.)", *Mélanges de la Casa de Velázquez*, tome XI, É. des Hautes Études Hispaniques, Paris, 1975, págs. 435 a 507.

¹³ Es destacable por su singularidad el *Casino de Labradores y Propietarios*, que todavía hoy permanece vivo con el nombre de *Real Círculo de Labradores de Sevilla*. Fundado, entre otros, por Joaquín Auñón León de Orbaneja, acaudalado propietario y primer presidente entre 1859 y 1861 y por Ignacio Vázquez Gutiérrez, importante terrateniente y segundo presidente de la Institución, acogió durante años a personalidades con una gran vocación por el desarrollo y la modernización de la agricultura. Así, no nos debe de extrañar que fuera el mismo Ignacio Vázquez el primer propietario en adquirir, en el año 1859, la primera

Entre los años 1845 y 1870, serían varias las asociaciones y sociedades que formarían una auténtica plataforma de grandes propietarios y hombres de negocios de la provincia. Además de las señaladas anteriormente, formaron parte de esa élite el *Casino Sevillano* (1844), el *Casino Andaluz* (1845) o el *Casino Mercantil y Agrícola* (1870), entre otros. Considerados muchas veces como lugares de reunión y a menudo de recreo, lo cierto es que constituyeron auténticas plataformas para las actividades políticas, convirtiéndose muy pronto en referencias del control económico y social. De esta forma, la nobleza y la oligarquía terrateniente, amén de la nueva burguesía propietaria y mercantil, encontró espacios suficientemente protegidos para poder, al margen de la escasa o ninguna legislación que existía en materia de asociación en esos momentos, tomar decisiones que, en conjunto, les permitieran alcanzar sus objetivos.

Antonio Miguel Bernal y Jacques Lacroix, decidieron dedicar finalmente un apartado específico a la morfología y organización del referido *Círculo de Labradores*, elaborando un itinerario histórico para resaltar su singularidad, así como la especial cohesión que fue capaz de mantener entre las clases vinculadas a la tierra, principalmente entre los propietarios latifundistas. Una dinámica, esta última, que estuvo siempre ligada a otros espacios de sociabilidad, ya fueran centros de reunión, asambleas, juntas, ligas o asociaciones propiamente creadas para la ocasión.

Con el auge y el creciente interés que habían tomado las investigaciones acerca de la sociabilidad en España, no tardaron en aparecer publicaciones, congresos y grupos de investigación dedicados a los estudios que estaban estrechamente relacionados con la sociabilidad, especialmente para la época contemporánea. Entre las primeras cabe destacar la revista *Estudios de Historia Social* que mantuvo su vigencia desde 1980 a 1991. Publicación que editaba el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Es importante destacar el número monográfico dedicado a «La sociabilidad en la España Contemporánea»¹⁴, en el que hicieron sus

segadora mecánica por un coste de seis mil reales. Máquina, que por entonces estaba considerada como uno de los mayores avances tecnológicos en Europa.

¹⁴ *Estudios de Historia Social*, Madrid, números 50 y 51 (julio a diciembre, 1989, aunque publicado de forma excepcional en 1991). Por su particular interés destacaremos solo alguno de los artículos, especialmente el de: Guereña, Jean-Louis, “Fuentes para la historia de la sociabilidad en la España contemporánea”, págs. 273 a 242 y también el elaborado por Lecuyer, Marie-Claude, “Algunos aspectos de la sociabilidad en España hacia 1840”, págs. 145 a 159. La coordinación de los números estuvo a cargo de un equipo de la Universidad

aportaciones Jean-Louis Guereña y Marie-Claude Lecuyer, entre otros investigadores.

No cabe ninguna duda, que el estudio acerca de las fuentes para la historia de la sociabilidad, presentado por el profesor y catedrático de la Universidad de Tours, marcó un nuevo rumbo en las investigaciones, ya fuera para el conocimiento, la cuantificación o la propia clasificación de las sociedades y grupos sociales en España.

Es en el trabajo de Marie-Claude Lecuyer, profesora de la Universidad de Rouen, donde encontramos muchas de las señas de identidad que ya nos aportara unos años antes el estudio de Bernal y Lacroix. Aunque no deja de recordarnos la existencia en España de espacios de sociabilidad como los liceos, academias literarias y científicas, cafés o baños públicos, es especialmente destacable el apartado dedicado a las nuevas estructuras asociativas, en una España en la que hacia 1857, prácticamente la cuarta parte de la población vivía en ciudades de más de 5.000 habitantes. Asimismo, la autora dedica una especial atención a las Sociedades Económicas de Amigos del País que, dotadas de nuevos estatutos, fueron adquiriendo a partir de 1835 un nuevo impulso económico y social¹⁵. Por último, resulta muy significativo el apunte que hace en relación a la *Sociedad de Labradores* de Arjona, ligada al entramado asociativo de la propiedad agraria y que fue fundada por un puñado de propietarios de la provincia de Jaén¹⁶.

Sin duda, las aportaciones del hispanismo francés al estudio de la sociabilidad en nuestro país han sido muy importantes, sobre todo en lo que

de París, en concreto el *Equipe de Recherche sur les Sociétés et les Cultures de l'Espagne Contemporaine*.

¹⁵ Más adelante haremos una especial mención al estudio, a menudo ignorado en vertiente agrícola, de las Sociedades Económicas de Amigos del País y su importancia, en algunos casos, en la actividad política, cultural y económica en la España decimonónica.

¹⁶ Sabemos, aunque Lecuyer no lo destaca en su artículo, que la *Sociedad de Labradores* de Arjona ya aparecía en la prensa andaluza y nacional del siglo XIX. En concreto, en el número del día 8 de octubre de 1877, correspondiente a *La Ilustración Española y Americana*, se menciona a la Sociedad por el sobresaliente pabellón (reproducido en uno grabados de la publicación) instalado con motivo de una Feria organizada en el paseo de Las Tiendas, en el mes de septiembre de aquel mismo año. La larga existencia de la *Sociedad de Labradores*, está demostrada al aparecer en el Tomo II del *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*, publicada en Madrid en el año 1847 y dirigida por D. Pascual Madoz, así como en la obra de Joaquín Costa y Martínez, *Reconstitución y europeización de España. Programa para un partido nacional*, Madrid, 1900, pág. 104.

se refiere a los cambios en las formas sobre el asociacionismo en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos de la siguiente centuria. Esta contribución, además de los trabajos presentados en la mencionada revista *Estudios de Historia Social*, se hizo todavía más ostensible en los coloquios celebrados en Madrid, Besançon y París a finales de los años ochenta y principio de los noventa, con el fin de investigar los grupos sociales en la España contemporánea¹⁷. Dos son los períodos destacados dentro de la cronología abordada por los hispanistas. El primero estaría situado entre los años 1830-1840, momento en el que aparecerán los gabinetes de lectura, cafés, teatros, etc., correspondientes a la aparición de nuevos espacios públicos, así como nuevas configuraciones asociativas, fundamentalmente provenientes del ámbito burgués, quienes igualmente impulsarán los círculos, liceos o ateneos en un importante número de localidades y poblaciones. Un segundo estadio correspondería a la Restauración, etapa en la que se irán modelando las bases de una sociabilidad más amplia, llegando a las clases populares y obrera. En este mismo orden de cosas, merecen una especial atención las sociedades de socorros mutuos que terminarán representando prácticamente el 20% de todas las asociaciones de la época¹⁸.

Asimismo, entre las aportaciones de los historiadores franceses destaca el interés hacia los modelos asociativos propios de la burguesía, que han sido abordados por algunos estudios individuales con el fin de aportar una visión más fiel de los objetivos y estrategias perseguidos por la misma. Tertulias, liceos o casinos debieron, en efecto, asumir un papel destacado en la transmisión y difusión de los valores de la cada vez más numerosa «clase media», entre los que destacaba la defensa de sus propios intereses económicos. Conviene recordar que entre estos últimos, figuraban los que procedían de las explotaciones agrícolas, adquiridas gracias a los distintos

¹⁷ En torno a los mencionados coloquios aparecieron las siguientes publicaciones: Guereña, J. L. y Tiana, A. (eds.), *Clases populares, Cultura, Educación. Siglos XIX-XX*, Casa de Velázquez y UNED, Madrid, 1989; *Solidarités et sociabilités en Espagne (XVI^e-XX^e siècles)*, (*Etudes réunies et présentées par Rafael Carrasco*), Annales Littéraires de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Besançon, 1991; Maurice, J., Magnien, B. y Bussy Genevois, D. (eds.), *Peuple, mouvement ouvrier, culture dans l'Espagne contemporaine. Cultures populaires, cultures ouvrières en Espagne de 1840 à 1936*, Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1990.

¹⁸ Lecuyer, Marie-Claude, "Las aportaciones de los historiadores e hispanistas franceses: Balance de una década", *Sociabilidad en la España contemporánea: historiografía y problemas metodológicos*, Maza Zorrilla, Elena (Coordinación), Instituto Universitario de Historia, Simancas, Universidad de Valladolid, 2002, págs. 15 y 16).

procesos de liberalización de tierras acaecidos a lo largo de una gran parte del siglo XIX¹⁹.

Con los estudios sobre la sociabilidad afianzándose en España, a comienzos de los años noventa unos cuantos profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha organizaron el Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad (GEAS). El mismo, presentó un volumen en 1998 titulado *España en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX*²⁰. Con la publicación de este trabajo se pretendía demostrar la realidad de un verdadero entramado asociativo en la España finisecular del XIX.

De esta forma, tomando la actual división política y administrativa de nuestro país, el tejido asociativo queda patente al contabilizarse un total de 3.984 asociaciones de muy diversa índole, entre los años 1880 y 1900. El amplio examen realizado por el GEAS demuestra que, hacia las dos últimas décadas del siglo XIX, las provincias que conformaban Cataluña y Andalucía agrupaban casi el cuarenta y cinco por ciento del total de asociaciones contabilizadas. Un dato, suficientemente sólido, para refutar el estereotipo tan extendido acerca del individualismo español en la época contemporánea.

Basándose en fuentes de la época tan importantes como los anuarios estadísticos, las encuestas del Ministerio de Gobernación, los censos, así como las guías de forasteros, el GEAS pudo desarrollar un análisis de la evolución seguida por los distintos modelos asociativos existentes a finales del siglo XIX, definiendo con detalle todos aquellos términos de la sociabilidad española y agrupándolos de forma alfabética²¹. De igual manera se pudo atender al grado de sociabilidad y de dispersión por provincias, además de determinar la diversidad tipológica, comenzando por las academias, alianzas y ateneos para terminar con las tertulias y reuniones distribuidas por toda la geografía española.

Desde nuestro particular punto de vista y por lo que se refiere a nuestra investigación, tanto por el análisis cuantitativo como por las fuentes

¹⁹ En este sentido se ha estudiado el asociacionismo en la provincia de Cádiz en época isabelina. Véase, por ejemplo, de Brey, Gérard, "La sociabilidad burguesa en la Andalucía de Isabel II (1833-1868)", *Les sociabilités dans le monde hispanique (XV^e-XX^e siècle). Formes, lieux et représentations*, Brenot, Anne M. y Martín, Luis P., (eds.), Université de Valenciennes, 2000.

²⁰ Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad, ob.cit.

²¹ Ibídem, págs. 39 a 59.

requeridas para el estudio del GEAS, es significativo resaltar la considerable importancia que adquirieron algunas de las asociaciones recogidas²². Naturalmente los casinos, figura por otra parte muy característica del asociacionismo español, aparecen como la forma asociativa más significativa, sin olvidar los círculos o las propias sociedades agrarias²³. Tanto estas últimas, como las denominadas «Ligas», fueron desarrollándose hasta quedar convertidas en un valiosísimo instrumento para la defensa de los intereses de propietarios y contribuyentes²⁴. En definitiva, no resulta difícil comprobar el elevado número de asociaciones que aparecen vinculadas a la propiedad y a la agricultura en particular. En términos generales, son numerosas las provincias que entre las formas asociativas de sus municipios mantienen alguna asociación, casino o sociedad agrícola y de labradores, incluso círculos con parecida denominación. Sociedades que en muchos casos se nos presentan con nombres tan definidos como *La Tertulia Agrícola*, *Círculo de Labradores y Amigo*, etc.

A finales del pasado siglo, el ya citado GEAS coordinó un nuevo trabajo sobre el fenómeno asociativo²⁵. De entre todas las aportaciones cabe destacar la de Jean-Louis Guereña sobre la sociabilidad en la España contemporánea²⁶. En efecto, el autor nos propone una nueva serie de planteamientos surgidos a raíz de la llegada al trono de Isabel II y que se prolongarían hasta la primera Restauración de finales de 1874. En cualquier caso, lo cierto es que las nuevas formas de sociabilidad del XIX, lejos de los planteamientos ilustrados, comenzaron a sugerir también nuevas dificultades ante la falta de legislación y ante la falta de control por parte del Estado.

²² Más adelante comentaremos la importancia de contar con fuentes como el *Anuario Estadístico de España*, 1860...; la *Guía de forasteros*, 1871-1872, Madrid, 1871, o el *Anuario-almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración o Directorio de las 400.000 señas de España, estados hispano-americanos y Portugal*, Madrid, 1879. Este último será conocido como el Anuario «Bailly-Baillièr» y seguirá publicándose hasta 1970.

²³ El Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad ha contabilizado más de 1.300 casinos y alrededor de 600 círculos. Ibidem, págs. 67 a 73.

²⁴ En efecto, en el último tercio del siglo XIX aparecerán por gran parte de las provincias españolas las ligas de propietarios, además de las ligas de contribuyentes. Mención aparte tendrá la Liga Agraria que desde finales de los ochenta y de la mano de Bayo y Gamazo pondrán a las sociedades de propietarios, en particular los trigueros castellanos, una alianza a nivel nacional.

²⁵ Nos referimos a la obra coordinada por los profesores Sánchez Sánchez, Isidoro y Villena Espinosa, Rafael, *Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898*, Cuenca, 1999.

²⁶ Guereña, Jean-Louis, «La sociabilidad en la España Contemporánea», en *Sociabilidad fin de siglo...* ob. cit., págs. 15 a 43.

Prácticamente, desde el establecimiento del Estado liberal, los distintos gobiernos moderados y progresistas procuraron el control y la vigilancia de las posibles actividades políticas que afloraban en las nuevas sociedades repartidas por todo el país. Consideradas ilícitas, en 1841 los gobernadores civiles recibieron la orden de clausurar aquellas sociedades y centros de reunión en los que pudieran debatirse cuestiones políticas²⁷. Previamente, los controles y las prohibiciones ya se habían aplicado a los gremios profesionales en una ley presentada en el mes de diciembre de 1836²⁸. Las limitaciones constantes a los grupos asociativos en España tuvieron un período de cierta mesura al instaurarse los *Registros* de forma obligatoria, amén de los *Anuarios Estadísticos*, que durante el período isabelino fueron capaces de verificar un buen número de ateneos, sociedades de recreo, así como sociedades de carácter científico y literario.

Hemos de recordar, sin embargo, que la limitación al derecho de asociación no fue, ni mucho menos, una particularidad del régimen liberal español y de nuestro siglo XIX. Sabemos, por ejemplo, que la ley Le Chapelier, vigente en Francia desde junio de 1791, en su artículo primero prohibía expresamente la creación de asociaciones sin importar su razón de creación y la forma en que se hiciera. Incluso el Código Penal francés de 1810 condenaba las coaliciones de empresarios. Es lógico suponer que, ante el aumento considerable de una gran parte de las sociedades en demanda de libertades, la legislación pretendiera impedir de esta forma la aparición de grupos y coaliciones que pudieran añadir elementos discordantes al Estado. Consecuentemente, la ley de asociaciones que se ponía finalmente en marcha en España el 30 de junio de 1887, no se distanció en gran medida de la aprobada en Francia solo unos años antes. En efecto, en 1884 se aprobaba en Francia la ley Waldeck-Rousseau, ampliando el reconocimiento asociativo y permitiendo las asociaciones profesionales.

²⁷ Guereña en su artículo plantea algunas cuestiones relacionadas con este tema referido a las prohibiciones. De todas formas la legislación a este respecto, así como la Real Orden del mes de febrero de 1841 y su reiteración del 30 de mayo de 1848, puede advertirse en *Los Códigos españoles. Concordados y anotados*. Tomo noveno, 1850, pág. 137. También en la *Coleccion legislativa de España (continuacion de la coleccion de Decretos). Segundo cuatrimestre de 1848*. Tomo XLIV, Madrid, 1849, pág. 88.

²⁸ Con anterioridad, un Real Decreto de la Regente María Cristina, de enero de 1834, ya regulaba los gremios y la libertad de fabricación. La legislación y comentarios a la ley de 1836 pueden encontrarse, entre otros, en el *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*. Tomo II, Madrid, 1847, págs. 386.

Lo cierto es que tanto en Francia como en España, además de otros países en Europa, se practicó un movimiento de cierta tolerancia, lo que permitió que permanecieran activas un importante número de asociaciones de muy diversa índole, entre las que no faltaron las de agricultores o labradores, mucho antes incluso de la aprobación definitiva de la legislación a la que antes aludíamos. De ello dan prueba las numerosas huellas y testimonios que han quedado, tanto en la bibliografía, como en la prensa decimonónica de nuestro país.

Con la intención de plantear una visión de conjunto acerca de la historia social y del asociacionismo en España, se han ido publicando sucesivos trabajos que, en líneas generales, abordaban los siglos XIX y XX, insistiendo una vez más en la «revolución» burguesa y la vía del liberalismo. Una visión que nos advertía de las nuevas élites y que dejaba abierta la puerta a una nueva clase de propietarios y, consecuentemente, a distintos tipos de grupos y sociedades.

Solamente destacaremos aquí un par de autores, suficientes para comprender el itinerario asumido respecto a la evolución societaria en España. En primer lugar, fue Adrian Shubert, quien publicó en 1991 una obra de carácter general en la que ya dejaba claro alguno de los principios fundamentales que muchos asumirían años más tarde²⁹. En efecto, a finales de los años ochenta y principio de los noventa, algunos historiadores como Bartolomé Clavero, Ángel García Sanz, Josep Fontana o Ramon Garrabou comenzaron a interesarse por una cuestión hasta entonces poco manejada³⁰. La premisa parecía sencilla. No existiendo una sociedad industrial perfectamente desarrollada, las grandes propiedades agrarias siguieron siendo un patrimonio exclusivo de la nobleza y de los grandes terratenientes procedentes del Antiguo Régimen. Ello implicaba que, por un lado, la burguesía no habría tenido más remedio que plegarse a los intereses y condiciones de las clases aristocráticas mejor situadas. Por otro, quedaba la

²⁹ Shubert, Adrian, *Historia social de España (1800-1990)*, Madrid, 1991.

³⁰ Entre los trabajos mencionados por el profesor de la Universidad de York en Toronto, Adrian Shubert, se encuentran algunos tan importantes como: García Sanz, A. y Garrabou, Ramon, *Historia agraria de la España contemporánea*, Barcelona, 1985; Clavero, Bartolomé y otros, *Estudios de la Revolución Burguesa en España*, Madrid, 1979; Fontana i Lázaro, Josep, “Colapso y transformación del comercio exterior español entre 1792 y 1827”, *Moneda y Crédito*, 1970 y Herr, Richard, “Spain”, en D. Spring (ed.), *European Landed Elites in the Nineteenth Century*, Baltimore, 1977), etc.

idea de admitir que, como consecuencia de todo ello, en España no se habría producido una auténtica revolución desde las clases burguesas.

En este orden de cosas, Shubert cambia los planteamientos iniciales para asumir que desde la formación de una nueva clase de propietarios agrícolas, consecuencia directa del proceso de liberalización de tierras, se habría de formar una nueva clase política. En consecuencia y respecto al resto de países europeos, entre 1812 y 1914, España habría tenido más años de gobiernos constitucionales representativos que cualquier otro en Europa³¹. Así, siempre siguiendo los criterios del autor, sería más correcto hablar de una «revolución liberal» y no de una revolución burguesa.

En cualquier caso, Shubert, acude a hechos tan significativos como el decreto de agosto de 1820, sobre aranceles y prohibición de importación de trigos o al recuento de cantidades reales que se pusieron en cultivo hasta 1860, para terminar llamando nuestra atención sobre el perfeccionamiento del cultivo de cereal en Andalucía, gracias al capital invertido en maquinaria agrícola moderna³². Ello implicaba unas connotaciones diferentes para la propiedad y la gestión de la tierra, tanto en Andalucía o Cataluña y, sobre todo, en la mayoría de las zonas productoras de cereales en Castilla. Como cabe suponer, en todo este proceso de protección de la tierra tuvieron mucho que ver las oligarquías y los llamados grupos de presión, así como las asociaciones de propietarios y agricultores, ya estuvieran organizadas desde las mismas raíces del poder o desde el asociacionismo voluntario surgido a tal fin. Una cuestión que analizaremos más adelante.

Por último, por lo que se refiere a lo que hemos llamado obras sobre el conjunto de la historia social en España, la Universidad de Valladolid publicó en el año 2003 un trabajo coordinado por Elena Maza, bajo el título *Asociacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis interdisciplinar* que, en cierta medida, pretende buscar una revisión interpretativa del asociacionismo desde perspectivas antropológicas, sociológicas e incluso historiográficas. Como ya sucediera en estudios anteriores, el recorrido por las distintas formas asociativas fue esbozado por

³¹ Shubert, Adrian, ob. cit., pág. 17.

³² Esta condición de avance en el proceso tecnológico aplicado al cultivo de las tierras ya se había puesto de manifiesto con la publicación de Héran, François, *Tierra y parentesco en el campo sevillano: la revolución agrícola del siglo XIX*, Serie estudios, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980.

diversos autores, desde las Sociedades Económicas a las Academias, pasando por otros grupos como las Cofradías y Maestranzas de caballería³³.

Es particularmente interesante el estudio presentado por Pilar Calvo Caballero, profesora de la Universidad de Valladolid, en relación al modelo asociativo patronal en la provincia de Palencia, en el período 1876-1931³⁴. Sobre todo porque sondea en la búsqueda de nuevas asociaciones capaces de aportar, además de servicios, un refuerzo en la autoridad política. De ahí que su recorrido transcurra entre las Ligas de Contribuyentes de finales de los setenta del siglo XIX, hasta los Sindicatos Harineros o la propia *Liga Agraria* en 1887. Razones de tipo fiscal y de política económica, animaron al asociacionismo patronal en la segunda mitad del siglo XIX, siendo una de las primeras y más importantes asociaciones castellanas la *Sociedad Castellana de Emulación y Fomento*, creada en 1859. La lucha contra el libre cambio fue asumida de manera inmediata por los trigueros castellanos con asociaciones como el *Fomento* en 1869, más tarde convertida en el *Círculo Productor*.

Fueron, no obstante, las Ligas Agrarias junto a la de Contribuyentes, las que llegaron a sobrepasar, a finales de la centuria, el centenar de fundaciones, pasando a popularizarse el asociacionismo elitista, tal como explica Pilar Calvo, siendo capaces al mismo tiempo de aglutinar a propietarios agrarios, comerciantes e industriales. Serán tiempos de una nueva cultura asociativa que, finalmente, romperá las viejas estructuras individualistas, gracias, sobre todo, al amplio abanico de piezas que vendrán a componer el moderno panorama social. Una miscelánea formada esencialmente por propietarios agrarios, ingenieros, periodistas y la casi totalidad de los escalones de la burguesía rural y urbana castellana.

En último término, el liderazgo patronal castellanoleonés fue gestado alrededor de sociedades tradicionales como las *Económicas*, sobre todo la palentina, el *Círculo Productor* y la *Liga de Contribuyentes*, muchos de los cuales finalizarían en las filas de la *Liga Agraria* a comienzos de los años noventa. Junto a Palencia, otras provincias como Valladolid y Salamanca sobresalieron en el terreno de las movilizaciones trigueras alcanzando pronto

³³ Arias de Saavedra, Inmaculada, "El asociacionismo en la España del siglo XVIII", Elena Maza Zorrilla (coord.), *Asociacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis interdisciplinar*, Universidad de Valladolid, 2003, págs. 21 a 59.

³⁴ Calvo Caballero, Pilar, "El modelo asociativo patronal palentino (1876-1931), *Asociacionismo...* ob. cit., págs. 176-216.

una proyección tanto a nivel regional como nacional. Aunque en el artículo de Pilar Calvo encontramos un período más corto, si lo comparamos con nuestra línea temporal de estudio, lo cierto es que destaca por confirmar la privilegiada situación de las oligarquías castellanas, presidiendo en muchos casos las principales instituciones de la provincia³⁵. Un modelo, pues, a caballo entre la tradición y la modernidad que, sin duda alguna, vino a reforzar la sociedad civil, amén del empeño por colectivizar un individualismo que, si había existido en décadas anteriores, no lo había sido en modo alguno de forma rigurosa.

- Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el tejido asociativo

Sorprende que a las Sociedades Económicas de Amigos del País se las haya excluido de manera sistemática de la mayoría de estudios dedicados a la sociabilidad en nuestro país. Desconcierta, sobre todo, porque la bibliografía y los estudios dedicados a las mismas están presentes ya en los primeros años del siglo XIX, siendo hoy muy amplia en muchas bibliotecas y universidades³⁶. Pero si extraña esa falta de atención hacia las *Económicas*, lo es sin duda, por su importante aportación en momentos determinados a la historia española, no solo en materia económica, sino también política.

Como es sobradamente conocido, nacidas al abrigo de la Ilustración y del reinado de Carlos III, las Sociedades Económicas surgieron a partir de 1765 con el propósito de fomentar la economía y especialmente la

³⁵ Fueron varios los propietarios que en los años ochenta del siglo XIX alcanzaron cargos de responsabilidad en cuestiones agrarias. Pedro Romero Herrero, José Nieto Mozo y Eusebio Sanz ocuparon los puestos de vocales en la *Liga Nacional de Contribuyentes* durante 1879, Romero Herrero llegó incluso a presidir la *Junta de Labradores*, mientras que Nieto Mozo presidiría la *Liga Agraria* de Palencia. Ibidem, pág. 213.

³⁶ En efecto, sobre las Sociedades Económicas, existe un importante número de trabajos específicos que, prácticamente, se pierden en el tiempo desde los mismos momentos de sus fundaciones. Ejemplo de todo ello son, por ejemplo: Bertemati, Manuel, *Memoria histórico-crítica de la Real Sociedad Económica Jerezana y de los tiempos anteriores y posteriores a su fundación de 1781 a 1833*, Jerez, 1862; Aguilar Mendoza, Enrique, *Memoria histórica del origen y vicisitudes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y de los trabajos en que se ha ocupado desde su fundación*, Valencia, 1876; Espejo y García, Eloy, *Memoria o reseña histórica de cien años de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Provincia de Jaén*, 1886; de Labra, Rafael María, *Las Sociedades Económicas de Amigos del País. Su razón histórica, sus medios y su misión actual*, Madrid, 1906, etc.

agricultura³⁷. A ello se añadía el objetivo de servir de canalización para hacer viables nuevos modelos sociales y políticos, tal y como sus iniciadores pretendían. Este tipo de asociaciones y academias habían sido ya oídas y respetadas en otros países europeos, como era el caso de las Sociedades de París, de Zúrich o Dublín. Lo cierto es que desde 1765 a 1808, fueron aprobadas más de un centenar de ellas en toda España, aunque la mayoría no llegarían a tener una vida muy dilatada³⁸.

Si observamos las cifras de las Sociedades Económicas existentes entre 1861 y 1871, comprobaremos que solamente alrededor de una treintena se habían mantenido activas, siendo algo más de cuarenta las que sobrevivían a finales del siglo XIX³⁹. Sin embargo, las *Económicas* llegaron allí donde apenas pudo desarrollarse algún tipo de sociedad agraria a lo largo del mismo período de tiempo⁴⁰. Una buena muestra de todo el desarrollo que adquirieron desde su inicio fue reflejado por Paula y Jorge Demerson y posteriormente por Mariano García Ruipérez, dejando todos ellos un excelente trabajo impreso que todavía hoy resulta de una gran utilidad para cualquier investigador⁴¹.

Al mismo tiempo que entraban en decadencia, con el paso del tiempo la mayoría de estas sociedades fueron desvinculándose de los poderes públicos, debido a la falta de reformas por parte de los sucesivos gobiernos,

³⁷ Entre la dilatada bibliografía de las actividades y el fomento de la agricultura en las Sociedades Económicas véase de Pérez Pulido, Margarita, "Bibliotecas, sociedades y fomento de la agricultura en el siglo XIX", *Boletín de la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, ANABAD*. Tomo 48, número 1, 1998, págs. 141 a 154.

³⁸ Piqueras Haba, Juan, *Sociedades Económicas y fomento de la Agricultura en España 1765-1850*, Generalitat Valenciana, 1992.

³⁹ Se pueden ver las cifras correspondientes a los años sesenta y setenta del siglo XIX en: *Anuario Estadístico de España 1860-1861*, Madrid, 1862, págs. 428 y 429, y la *Guía de Forasteros*, ob. cit., págs. 742 a 755. Para los últimos años del XIX en la *Guía Oficial de España 1902*, págs. 775 a 785.

⁴⁰ Conocemos el caso concreto de Galicia en la que no existía ninguna sociedad de labradores a finales del siglo XIX, hecho confirmado por el gobernador de Lugo en 1888. Una posterior encuesta realizada por la Dirección General de Agricultura sobre las sociedades agrícolas existentes en España confirmaba la fundación de un Banco Agrícola de 1856 en Pontevedra, la Sociedad Económica de Santiago y las Ligas de Contribuyentes de Ferrol y Cedeira. Véase Villares, Ramón, *La propiedad de la tierra en Galicia 1500-1936*, Siglo veintiuno, Madrid, 1982, pág. 383. En la misma línea: Planas i Maresma, Jordi, "La crisis agraria de fines del siglo XIX: nuevas contribuciones y nuevos enfoques", *Noticiario de Historia Agraria*, número 3, 1992, pág. 178.

⁴¹ Demerson, Jorge, Demerson, Paula de, y Aguilar Piñal, Francisco, *Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el siglo XVIII. Guía del investigador*, San Sebastián, 1974 y García Ruipérez, Mariano, *Nuevas aportaciones al estudio de las Sociedades Económicas de Amigos del País*, CSIC, Madrid, 1988.

manteniendo solamente unas pocas una actividad relevante⁴². Divididas en distintas secciones, esta conducta se reveló de una forma mucho más palpable, especialmente en el largo período de proteccionismo arancelario vivido en el siglo XIX.

Todas las Sociedades Económicas de Amigos atendían a un mismo principio en sus estatutos. Exentas de cualquier intención política y dirigidas por una nobleza instruida y laboriosa, lo cierto es que muy pronto tuvieron que posicionarse ante la amalgama de hechos generados a partir del Trienio Liberal y el Arancel de 1820. Al margen de la actividad promovida desde las comisiones de agricultura, difundiendo entre los labradores los adelantos en la materia o promoviendo los canales de riego o la construcción de embalses, fue la defensa del proteccionismo agrario y comercial lo que produjo un giro radical en sus aspiraciones políticas.

Fue la *Sociedad Económica de Valencia* una de las primeras en hacerse escuchar cuando asomaron las protestas contra las importaciones de arroz norteamericano⁴³. Hacia 1844, el arroz producido en las regiones levantinas abastecía con carácter exclusivo al mercado interior, además de hacerlo a las colonias americanas que todavía mantenía la Corona española⁴⁴. Los socios valencianos no pudieron conseguir en los años inmediatamente posteriores una retirada de las importaciones de granos, ni tampoco en 1853. Sin embargo, solo cuatro años más tarde lograron, a través de sus «diputados», retirar la prórroga que permitía la libre introducción en el país de granos extranjeros⁴⁵.

Al contemplar la bibliografía y la prensa de la época, resulta fácil entender los problemas que ocasionó la política proteccionista a las

⁴² Se atribuye generalmente el retroceso de las Sociedades Económicas al cansancio, la búsqueda de intereses personales... y, en algunos casos, a la aparición de formaciones políticas, lo que no tardó en generar diferencias políticas entre sus miembros. Además de todo ello, no debemos perder la pista de la notable ausencia de dotaciones económicas, sobre todo si atendemos la larga lista de tareas que la mayoría de ellas estaban llamadas a desempeñar.

⁴³ Existe una extraordinaria documentación en el Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia. En el mismo se encuentra correspondencia mantenida durante algunos años con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Informes y solicitudes de propietarios a las Cortes, así como Reglamentos y Estatutos de algunas sociedades prácticamente desconocidas como la asociación de labradores *La Protección Agrícola* de 1859 en Denia o la *Real Sociedad de Agricultura de Pareja*, nacida en Guadalajara en 1817.

⁴⁴ Piqueras, ob. cit., págs. 65 y 66.

⁴⁵ *Ibidem*.

Sociedades Económicas de entonces. Unos años antes de producirse los sucesos del arroz en Valencia, grupos de comerciantes y de importantes propietarios de viñas en Jerez intentaron presionar al gobierno de Madrid para acelerar un posible tratado comercial con Gran Bretaña. La cuestión era mitigar e incluso eliminar el Arancel que había estado vigente desde 1820 y que acaba de prorrogarse en 1841. La coalición en las Cortes entre trigueros castellanos e industriales catalanes había impedido eliminar hasta entonces el decreto arancelario, imposibilitando de esta forma que los vinos jerezanos llegaran hasta Inglaterra y, en consecuencia, evitando la entrada de manufacturas algodoneras a nuestro país. Esto dio paso a una dura disputa entre la *Económica* de Barcelona y las Sociedades Económicas de Amigos del País de Cádiz y Jerez.

Varios grupos en representación del Ayuntamiento, de la Junta de Comercio y de la propia Sociedad Económica gaditana, llegaron a plantear la creación de una asociación que tuviera entre sus propósitos la defensa de los intereses agrícolas y mercantiles, al mismo tiempo que reforzara las actividades económicas de la región⁴⁶.

Desde Cataluña la respuesta fue concluyente a la vez que arbitraria. Apoyados desde Madrid por un grupo de diputados, entre los que destacaba Pedro Mata Fontanet y la *Económica Barcelonesa*, el planteamiento de una modificación del prohibicionismo en las manufacturas de algodón hizo temer a los industriales catalanes un inmediato estrangulamiento en sus rentas⁴⁷. La idea de vinos por manufacturas, no solo acabó enfrentando a dos instituciones. Puso enfrente a dos regiones productivas, al mismo tiempo que terminaría fragmentando las bases políticas del partido progresista.

⁴⁶ La noticia figura en *El Globo*, publicado en la ciudad de Cádiz del día 23 de julio de 1841. En la misma puede constatarse la idea defendida por los comerciantes y productores gaditanos sobre la idea de que: “los intereses agrícolas y mercantiles del reino” estaban seriamente perjudicados por los privilegios concedidos a la industria catalana.

⁴⁷ *Exposiciones que la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del país, ha elevado al Regente del Reino y a las Cortes contradiciendo y refutando una memoria que la Sociedad Económica de Cádiz dirigió á la Rejencia provisional del reino sobre un tratado de comercio con la Inglaterra, reforma del sistema prohibitivo, y fomento de las fábricas nacionales*, Imprenta de José Tauló, Barcelona, 1842. Respecto a los planteamientos y desavenencias entre el diputado por Barcelona Pedro Mata y el diputado por Cádiz Sánchez Silva, puede consultarse el *Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados*, de los días 6, 7 y 8 de abril de 1842, así como el correspondiente al día 8 de agosto del mismo año; aunque las reseñas en este sentido son, como se comprenderá, muy profusas.

A pesar de todo ello, para muchos, el balance del trabajo llevado a cabo por las Sociedades Económicas de Amigos del País durante el siglo XIX no ha dejado de ser decepcionante. Se suele aludir al disentimiento entre los objetivos recogidos en sus estatutos y las realizaciones concretas⁴⁸. Por el contrario, una lectura más tranquila de las fuentes, nos plantea serias dudas respecto a las decepciones, proponiendo nuevas alternativas a esta interpretación.

En primer lugar, las administraciones consiguieron, al no dotar económicamente a las Sociedades, que éstas acometieran permanentes reformas entre los socios y sus objetivos, llegando en algunos casos a establecerse como auténticos grupos de presión; tal y como acabamos de ver más arriba. Este hecho, a pesar de que, en efecto, fueron pocas las Sociedades Económicas operativas durante todo el XIX, nos conduce a pensar en una segunda posibilidad. Teniendo en cuenta la estructura administrativa del Estado en materia agraria, de la que hablaremos más adelante, así como las dificultades legislativas puestas en marcha por los gobiernos liberales en materia de asociación, la fuerza asociativa se distribuyó con las pocas piezas posibles con las que contaba el país. De ahí que, entre un buen puñado de asociaciones, fueran finalmente establecimientos como los casinos, los círculos o las tertulias, los llamados a iniciar el desarrollo societario agrario en la España del XIX. Un desarrollo al que nunca faltaron las «maltrechas» Sociedades Económicas de Amigos del País.

- Las asociaciones agrícolas y de propietarios

Valga como punto de partida, anotar la diferencia entre los términos «agrícola» y «agrario», ya que a lo largo de las páginas que aquí se exponen se utilizará el concepto «agrario» para evidenciar las cuestiones relativas a todos los sectores relacionados con el mundo rural, incluidas la agricultura y la ganadería.

Hecha esta primera salvedad, desde hace ya unos cuantos años no han faltado las investigaciones y los estudios relativos a las organizaciones

⁴⁸ Arias de Saavedra, Inmaculada, ob. cit., pág. 40.

patronales y agrarias establecidas en España a principios del pasado siglo. Trabajos que en algunos casos partían de delimitaciones regionales concretas y que llegaban hasta nuestros días. En ellos, rara vez se mencionaba a alguna de las asociaciones agrarias y de propietarios surgidas en el XIX, a no ser que su presencia se hubiese prolongado hasta el siglo XX. En este sentido han sido de mucha utilidad las publicaciones de Mercedes Cabrera, Fernando del Rey Reguillo o Jordi Planas i Maresma, entre otros⁴⁹.

Por el contrario, son escasas las referencias al siglo XIX y al entramado asociativo agrario y agrícola, si exceptuamos las relativas a las Sociedades Económicas y a algunos estudios monográficos dirigidos a asociaciones muy concretas. Hay que remontarse hasta los primeros años del siglo pasado para encontrar las primeras reseñas o escritos que mencionan al asociacionismo agrario en nuestro país. En este sentido, José Elías de Molins realizó un estudio titulado *La asociación y cooperación agrícolas*, publicado en 1912, en el que constata el recuento de sociedades que llevó a cabo el Consejo de Castilla en 1770. Una red social, compuesta principalmente por cofradías y hermandades de agricultores y pequeños propietarios del campo.

En la actualidad es frecuente encontrar el artículo de Juan Pan-Montojo, como la primera referencia moderna al nacimiento del asociacionismo agrario español⁵⁰. Se olvida, no obstante, otro publicado en el año 1953 por Gonzalo Marcos Chacón en el que se repasaba la puesta en marcha de los Consejos de Agricultura a mediados del XIX, la Ley General de Asociaciones de junio de 1887, así como el establecimiento de las Cámaras Agrícolas y las Comunidades de Labradores entre 1890 y 1898⁵¹.

⁴⁹ Cabrera, Mercedes, *La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia (1931-1936)*, Siglo XXI, Madrid, 1983; Rey Reguillo, Fernando del, *Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923)*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992, y Planas i Maresma, Jordi, *Els Propietaris i l'associacionisme agrari a Catalunya, 1890-1936*, Girona, 2006.

⁵⁰ Pan-Montojo, Juan, "La naissance des associations agraires en Espagne 1833-1898", en *Histoire, économie et société*, volume 16, n° 2, 1997. Aunque el término «agraires», es traducido generalmente al castellano como a «agrarias», lo cierto es que Pan-Montojo habla de forma generalizada de asociaciones agrícolas, es decir, relacionadas con sectores del cereal, viticultura, etc.

⁵¹ Marcos Chacón, Gonzalo, "Las organizaciones agrícolas en España", *Revista de Estudios Agrosociales*, número 5, Ministerio de Agricultura, 1953.

Es, por tanto, con la publicación de Pan-Montojo, cuando se hace por vez primera en España un recorrido más completo y cronológico por el desarrollo de las asociaciones agrícolas, desde el inicio del liberalismo hasta los últimos años de la Regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.

La supresión de los privilegios ligados a la tierra, además del cambio profundo en las estructuras políticas y administrativas, dieron lugar a formas muy distintas de asociacionismo y de relaciones con el poder. Igual que sucediera con los predecesores del liberalismo, la idea de modernización de la economía dio paso a la creación de grupos y sociedades, esta vez desligados de las influencias del gobierno, con la aspiración de reivindicar los derechos de una nueva burguesía propietaria.

Aunque suelen hacerse comparaciones con otros países de nuestro entorno en materia de asociacionismo agrario, lo cierto es que en otros Estados próximos, la formación de verdaderas sociedades con capacidad de movilización entre los propietarios tardó en producirse. En Francia, la *Société des Agriculteurs de France* se organizó en torno al año 1867, con el apoyo de los grandes propietarios rurales, la mayoría con título nobiliario. La *Société nationale et centrale d'agriculture de France*, refundada en 1871, procedía de la antigua *Société royale d'agriculture de France*, una sociedad que recordaba mucho a nuestras Sociedades Económicas de Amigos del País. Finalmente en 1872 se fundaba el *Cercle agricole de Paris*, fechas muy similares a la de creación de otras sociedades en España⁵².

En otros Estados europeos la situación era similar. La *Associação Central da Agricultura Portuguesa* data de 1860 y proporcionó apoyo y defensa al asociacionismo agrario en Portugal⁵³. Lo mismo podemos decir de la *Lega di difesa agraria* en Italia (1885) o del *Bud der Landwirte* alemán, fundado en 1893, que consiguió organizar alrededor de la misma a un gran número de terratenientes consiguiendo relajar las tarifas aduaneras⁵⁴.

⁵² Malatesta, Maria, "Une nouvelle stratégie de reproduction: les organisations patronales agraires européennes (1868-1914)", *Histoire, économie et société*, número 2, 1997, págs. 203 a 219, y Subacchi, Paola, "Organisations économiques et groupes de pression en Europe au XIXe siècle et au début du XXe siècle", *Histoire, économie...* ob. cit., págs. 155 a 166. Sobre la *Société des Agriculteurs de France*, un artículo específico es el de Félix Vidalin en *Revue des Deux Mondes*, T. 13, 1876.

⁵³ Pereira Leite, Pedro, *Memórias da Herdade Rio Frio*, Lisboa, 2009, págs. 122 a 131, y Rodrigues Bernardo, Maria Ana, "Las élites agraires portugaises au XIXe siècle: entre groupes de pression et associations", *Histoire...* ob. cit., págs. 189 a 202.

⁵⁴ En ambos casos, Malatesta, ob. cit.

De un modo parecido, en España aparecería el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en 1851, amén de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, solo unos años más tarde. Instituciones voluntarias, creadas con la intención de defender la nueva propiedad agraria e integrarla a la dinámica capitalista abierta en Europa. Fue la de Valencia, entre el período de 1859 a 1868, un grupo de presión muy activo, tal como nos recuerda Pan-Montojo, llegando a contar en 1880 con cerca de 800 miembros entre sus filas⁵⁵.

De la mano de un importante propietario catalán, Narciso Fages i de Romá, junto a un nutrido grupo de innovadores en la agricultura, había comenzado sus actividades unos años antes la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*. Y como ella, otras similares como la *Sociedad de Reforma Agrícola* en Sevilla o la *Sociedad de Fomento Agrícola* en Jerez, que, constataban de esta manera, la existencia, por primera vez, de tres niveles asociativos diferenciados. Por un lado, los restos de las viejas cofradías y gremios profesionales. En segundo lugar, las Sociedades Económicas de Amigos del País. Y, finalmente, en palabras de Montojo, «les associations pour le développement».

La Revolución de 1868 y el Sexenio volvieron a cambiar sensiblemente la situación renovando por completo la clase política y la función pública, reforzando esta última con técnicos en cada área administrativa. Ello provocó una ampliación del espectro social y político y, consecuentemente, un relevo en el quehacer económico. Las políticas proteccionistas que, hasta ese momento habían estado vigentes prácticamente desde 1820, comenzaron a desmoronarse para dar paso a políticas más librecambistas.

Tanto el reconocimiento al derecho de asociación, al menos de manera transitoria, como el desmantelamiento progresivo de las estructuras administrativas de representación, influyeron seguramente en la creación, en Valladolid, de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* en 1869. Sociedad que llegaría a reunir a más de 500 socios en varias de las provincias de Castilla y León, pero que en 1873 terminaría disolviéndose por diferencias internas y de intereses particulares.

⁵⁵ Pan-Montojo, Juan, ob. cit., pág. 173. También se hacen referencias a la misma en Piqueras Arenas, J. A., *La revolución democrática (1868-1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión*, Madrid, 1992, pág. 531.

Mientras, una parte de la burguesía agraria esperaba el momento para entrar en conflicto con las líneas fiscales diseñadas en 1869. Entre los años 1871 y 1872 se crearon, casi de manera simultánea, la *Liga de Propietarios* y la *Liga de Contribuyentes*, con la finalidad de luchar contra la reforma fiscal del Sexenio. Tanto la *Liga de Contribuyentes* iniciada en Cádiz, como la *Liga de Propietarios* fundada en Valencia, apoyadas por sectores de la prensa afines a la propiedad territorial, comenzaron a organizarse en reuniones públicas lo que se tradujo en una inmediata repercusión entre las clases medias, contrarias a las iniciativas librecambista, tanto a nivel local como nacional.

Las reformas puestas en marcha no tardaron en incluir a un importante número de ingenieros agrónomos en la administración pública. Así, en 1872 se iniciaron los trabajos que, poco después, concluirían con la formación de la *Asociación de Ingenieros Agrónomos*. Un cuerpo de funcionarios que, a la postre, facilitarían la creación de una de las más importantes asociaciones de agricultores en nuestro país.⁵⁶

Fue en 1881, cuando con el apoyo del Duque de Medinaceli y el de la propia Asociación de Ingenieros, inició su andadura la *Asociación General de Agricultores de España*, organizada con la idea de ser el punto de encuentro de la patronal agraria española. Con un planteamiento cercano al libre comercio, mantuvo durante toda su vida activa a distintos representantes en los cuadros políticos, convirtiéndose en un importante instrumento de representación de la gran propiedad.

Sin profundizar en detalles concretos, el trabajo de Pan-Montojo descubrió algunas de las asociaciones agrarias que, hasta ese momento, apenas se les habían prestado atención. En el importante recorrido hecho en su artículo, el autor no olvida la mención a distintas sociedades de agricultores que tuvieron su significación e importancia. Entre ellas, la *Sociedad Catalana de Horticultura de Barcelona*, fundada en 1860; la *Unión Agrícola Orcelitana*; la *Sociedad Agrícola de Málaga y Desarrollo Agrícola de Yecla*.

El episodio finisecular de la *Liga Agraria*, vino a representar un primer intento de transformar el proteccionismo agrícola, consecuencia de la crisis

⁵⁶ Pan-Montojo, Juan, ob. cit., pág. 178.

finisecular, en un amplio movimiento político. Pero, finalmente, como veremos en esta investigación, también se malogró⁵⁷.

Al margen de los artículos citados más arriba, apenas se han hecho en España trabajos específicos sobre asociaciones agrícolas. Las escasas investigaciones que hasta el momento se han llevado a la práctica han estado relacionadas principalmente con aquellas sociedades que han perdurado con el paso del tiempo y que todavía mantienen una cierta vida operativa. Es el caso, por ejemplo, de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, en la actualidad *Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes* que, desde el año 1859, ha permanecido dedicada a la defensa, protección y fomento de la agricultura, o del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en Barcelona, con una historia de más de siglo y medio a sus espaldas. Es distinto, sin embargo, el caso del antiguo *Círculo de Labradores y Propietarios*⁵⁸ de Sevilla que, desde 1859, ha permanecido en activo, sin que apenas existan en la actualidad trabajos de sus actividades, así como de su organización.

La excepción a todo lo anterior es el excelente trabajo de Rafael Serrano García que, en el año 1997, publicó un libro dedicado a la historia de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, formada en Valladolid en 1869⁵⁹. En el desarrollo del Sexenio Democrático se produjo, en efecto, una etapa que favoreció la creación de grupos de presión, manteniéndose muchos de ellos hasta la Restauración. Serrano cree, como algunos investigadores, que la acción coordinada de algunos de estos grupos influyó en el fracaso final del experimento democrático de la Revolución⁶⁰.

La iniciativa de llevar a cabo la creación de la *Asociación Agrícola* partió de varios propietarios y labradores, entre los que se contaban a Francisco Cabeza de Vaca, José Guzmán, Leandro de Blas o Agustín Cañas, entre otros. En el mes de marzo de 1869 habían hecho circular un prospecto

⁵⁷ Un *lobby agrario frustrado. Los agricultores y la Liga Agraria 1887-1891*, Memoria de Licenciatura (Tesina) presentada por Miguel Martín-Albo y dirigida por J. L. Martínez Sanz, mayo 2000. Inédita.

⁵⁸ En la actualidad es el *Real Círculo de Labradores*. En algunas fuentes bibliográficas del siglo XIX, el Círculo aparece también como *Casino de Labradores y Propietarios*. En cualquier caso, se trata de la misma sociedad.

⁵⁹ Serrano García, Rafael, *Revolución liberal y asociación agraria en Castilla (1869-1874)*, Universidad de Valladolid, 1997.

⁶⁰ Además de Rafael Serrano, la idea está recogida igualmente en la obra citada de José Antonio Piqueras Arenas.

sobre la situación agrícola en la provincia, ejemplares que llegaron a un número de 4.000 y que tuvo el apoyo de *La Crónica Mercantil*. Los efectos fueron inmediatos al inscribirse en la nueva sociedad más de doscientas personas. Número que se incrementaría en los meses sucesivos. La sociedad estaba abierta a propietarios, labradores, terratenientes, además de otras profesiones y actividades como la de economistas, veterinarios y hombres vinculados al derecho, con el fin de obtener asesoramiento técnico y jurídico y poder demostrar al resto de la nación, al menos así lo creían, hasta dónde podían llegar los labradores por sí mismos.

Además del respaldo que tenía por parte de la prensa pucelana, la propia asociación comenzó a publicar una revista que llevaba el mismo nombre, manteniéndose hasta marzo de 1874. Asimismo, durante años, las relaciones con el *Fomento de la Producción Nacional* de Cataluña dieron como resultado un decidido impulso a sectores sociales que habían sido afectados por la reforma arancelaria de Figuerola. Para contrarrestar la misma, se planteó la creación de centros análogos en distintos puntos de España. Interesada por el desarrollo de la agricultura, tampoco faltaron los estímulos para la creación de escuelas de agricultura y ensayos mecánicos.

El 24 de junio de 1870, una asamblea celebrada en Valladolid planteó la creación de un partido económico que tuviera capacidad suficiente para representar los verdaderos intereses de los contribuyentes. Tanto el *Fomento*, como la *Asociación Agrícola*, temieron por el recelo que provocaría entre los labradores el acceso a la política. En cualquier caso, las medidas adoptadas entonces fueron la de no elegir en las elecciones a diputados provinciales, a ningún candidato que no gozara de la condición de labrador y que no tuviera su residencia en alguno de los pueblos de la circunscripción.

El control de la sociedad no tardó en verse afectado por los diversos intereses de terratenientes y harineros, además del resto de grupos asociados, dejando serias dudas respecto a la verdadera idea de cómo y dónde actuar con exactitud. En 1873 la *Asociación Agrícola* terminaba su recorrido, habiendo primado más en ella los factores defensivos que los del fomento agrario. Por eso, en opinión de Rafael Serrano, una vez logrados los objetivos pretendidos en relación con la elevación de los aranceles, el entusiasmo de la Asociación concluyó, dejando de esta forma paso a su desaparición.

En el año 2009 se celebró el 150 aniversario de la creación de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*. Simultáneamente se editó un volumen referido exclusivamente a la historia de la misma y de sus sucesivos presidentes⁶¹. Ideada para hacer frente a los difíciles años de sequías y plagas, la *Sociedad Valenciana* tuvo que encarar un período de anarquía política en los precios, lo que determinaba una pobre revalorización de los productos agrícolas. Igual que sucediera en Castilla, la idea de una acción coordinada que defendiera los intereses de los agricultores puso en la misma senda a propietarios y labradores para constituir la asociación.

En el período de alternancia en el gobierno entre Serrano y O'Donnell, se alimentó en Valencia la idea de instalar en la provincia una entidad independiente de la *Sociedad Económica de Amigos del País*, que pudiera aglutinar a colonos y propietarios terratenientes con el fin de desarrollar una tarea específica a favor de los intereses agrícolas. Desde la propia Junta Provincial de Agricultura de Valencia, de la que formaban parte algunos miembros destacados de la *Económica*, se propuso la fundación de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* el 24 de febrero de 1859. Entre los socios fundadores se encontraban algunos de los más importantes propietarios de la región como Vicente Prosper Blanchard, diputados a Cortes o José María Ferrándis Estruch, además de aristócratas comprometidos con la producción agrícola como Francisco de Paula Faus y Escrivá, Conde de Rótova que, más tarde, fundaría la revista *La Agricultura Valenciana*, órgano impreso de la Asociación.

A lo largo de su dilatada historia intervino, a través de diversas comisiones, en cuestiones tan necesarias para la agricultura como la solicitud del ferrocarril desde Madrid o el intento de rebaja en la contribución de consumos. Apoyó sin reparos las iniciativas de otras asociaciones como las del *Fomento Agrícola de Jerez de la Frontera* y a la de Sevilla en sus proyectos de explotación y mecanización del campo o la protección arancelaria conjuntamente con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*.

Aparte de la publicación de Úbeda Balaguer, nos queda solamente la propia revista y las reseñas de la prensa de la época para seguir la actividad

⁶¹ Úbeda Balaguer, Vicent A., *La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes a través de sus Presidentes (1859-2009)*, Valencia, 2009.

de la *Sociedad Valenciana* que, sin duda, mantuvo una tarea destacada a favor de los intereses agrarios valencianos, constituyéndose como un auténtico grupo de presión en la segunda mitad del siglo XIX.

Solo un año después de su aparición en Barcelona, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* comenzó sus publicaciones que, con distinto nombre, se han mantenido constantes hasta la actualidad. Fue Monserrat Caminal i Badia, quien en 1979 presentó una Tesis Doctoral dedicada a la asociación agraria más antigua de cuantas se conservan hasta hoy en nuestro país. La misma investigadora publicaría años más tarde un artículo dedicado a la fundación del *Instituto* y sus actividades hasta comienzos del siglo XX⁶².

Probablemente y debido a su larga existencia, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* ha sido motivo de constantes referencias en artículos y trabajos, generalmente dedicados a la economía agraria en España, destacando también el realizado por Jordi Planas hace relativamente pocos años⁶³. Todo ello nos conduce a pensar que, con toda probabilidad, sea una de las instituciones agrícolas más conocidas hasta el momento en la historiografía relacionada con el asociacionismo agrario español.

Desde sus comienzos en 1851, se convirtió en la asociación más representativa con capacidad para defender los intereses de la propiedad agraria en Cataluña, además de un estímulo para el establecimiento de otras similares en el resto del país. Al igual que sucediera con otras instituciones agrarias del XIX, los grandes propietarios fundadores consideraron que era necesaria una organización que estuviera lejos de quienes mantenían ciertos vínculos con el poder, tal y como venía sucediendo con las Juntas de Comercio o las Sociedades Económicas de Amigos del País. De ahí que, tanto la *Agrícola* como el *Instituto Industrial de Cataluña*, constituido en 1848, caminaran de la mano en la lucha política hacia el gobierno de Madrid, especialmente cada vez que se establecían dudas hacia el proteccionismo o se relajaba la cuestión del arancel. Ello no debe de extrañarnos, ya que años

⁶² Caminal i Badia, Monserrat, *L'Institut Agrícola Català de Sant Isidre (1851-1901)*, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1979. También en Caminal i Badia, Monserrat, "La fundació de l'Institut Agrícola Català de San Isidre: els seus homes i les seves activitats (1851-1901)", *Recerques*, número 22, Universitat Pompeu Fabra, 1989, págs. 118 a 135.

⁶³ Planas i Maresma, Jordi, "El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y la organización de los intereses agrarios (1880-1936)", *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, número 217, Madrid, 2008, págs. 13 a 47.

después de las desamortizaciones serían algunos industriales quienes invertirían en el sector agrícola, ingresando igualmente en el *Instituto*.

El establecimiento de oficinas y delegaciones produjo unos años más tarde la posibilidad de que muchos propietarios estuvieran al corriente de las últimas técnicas agrícolas, maquinaria, así como la ampliación de su campo de acción ideológica⁶⁴. Un hecho fundamental de esa influencia fue la integración al *Instituto Agrícola* de la *Sociedad Agrícola del Ampurdán* que se había establecido en Cataluña en 1845.

Al margen de las actividades orientadas a los estudios agronómicos, administrativos o económicos, el *Instituto* convocaba exposiciones y congresos de carácter monográfico. Pero fue la defensa de los propietarios de la tierra el motivo fundamental por el que se justificó la creación de la propia institución, especialmente en aquellos temas que afectaban a la estructura de la propiedad y el régimen de explotación de la tierra. En ese orden de cosas la lucha fue continua respecto al sistema hereditario en Cataluña, el de los conocidos censos enfitéuticos o la *rabassa morta*. Esta lucha se mantuvo hasta su discusión en el Código Civil a partir de 1880.

A finales del siglo XIX se produjo una reorganización del *Instituto Agrícola Catalán*, debido a la apatía que manifestaba una parte importante de los propietarios rurales para organizarse, en contra de lo que sucedía en otros sectores de la sociedad. La falta de respuestas por parte del Estado a la crisis agraria de finales de siglo, unido a los primeros brotes de la filoxera, produjeron una reacción de carácter reivindicativo que tuvo su estímulo, con la aprobación en 1887 de una ley que, definitivamente, iba a permitir el establecimiento de cualquier tipo de asociación. La defensa patronal impulsada por la clase propietaria, exigió entonces un cambio para ampliar su base social. Una idea interclasista que debía ser capaz de atraer al campesinado, evitando así una confrontación colectiva y movilizándolo a todos hacia un proteccionismo a ultranza de la propiedad. En 1888 la asociación cambió su reglamento, permitiendo la incorporación a la misma de cultivadores no propietarios y otros sectores indirectamente vinculados al sector agrícola. Con unas cuotas más bajas, tanto «adheridos» como propietarios, no tardaron en conformar un verdadero entramado dirigido a

⁶⁴ Existieron subdelegaciones, por ejemplo, en Maó (1856), Murcia (1858) o Alicante (1866). *Ibidem*, pág. 18.

ser un efectivo grupo de presión. Como resultado de aquella renovación, la misma *Liga Agraria*, liderada por entonces por Adolfo Bayo, accedió a reunirse con los agricultores catalanes, constituyéndose la primera federación de asociaciones agrarias⁶⁵.

A comienzos de los años ochenta del siglo XIX comenzó a consolidarse un nuevo tipo de asociacionismo agrario, fundamentado en la defensa de unos intereses sectoriales frente al Estado. De esta forma se pretendía llegar directamente a la esfera política. Hasta entonces la mayor parte de las veces se había actuado desde posiciones políticas o de partido, pero no desde una perspectiva plenamente agraria. Los grupos de presión ejercían su influencia agrupados desde intereses partidistas pero, en ningún caso, se podía hablar de una asociación propiamente agrarista. La *Asociación de Agricultores de España*, cuya trayectoria estudiaremos desde 1881 hasta 1891, surgió en este estado de cosas con la pretensión de reunir y movilizar a todas las clases agrícolas, hecho que implicaría la representación plena de la agricultura en su conjunto.

Recientemente la *Asociación de Agricultores* ha sido tratada por Pan-Montojo en dos artículos en los que recoge su itinerario histórico durante la primera Restauración y hasta 1942⁶⁶. Aunque es muy citada en multitud de estudios sobre el asociacionismo agrario en el siglo XX o en los relativos a la economía de fin de siglo, lo cierto es que, los de Pan-Montojo, son los únicos que conocemos al respecto que tratan aspectos específicos de dicha asociación.

Su origen arranca en la convocatoria del Congreso general celebrado por agricultores y ganaderos en Madrid, en el mes de junio de 1880. Dirigido por la *Asociación de Ingenieros Agrónomos*, el discurso de sus miembros adquirió un más que evidente rechazo al proteccionismo, apostando por una especialización productiva. Para ello eran necesarias nuevas aportaciones en los campos de la mecanización, el empleo de abonos o la industrialización en diversos aspectos rurales, condiciones que se requerían necesarias para iniciar un considerable crecimiento en las exportaciones agrarias.

⁶⁵ La acción conjunta constituyó la *Unión Agrícola de Cataluña*, Ibídem, pág. 22.

⁶⁶ Pan-Montojo, Juan, “La Asociación de Agricultores de España y la clase política, 1881-1942”, *Ayer*, número 66, 2007 y “La Asociación General de Agricultores de España y el asociacionismo agrario en la primera Restauración, 1881-1899”, *XI Congreso de Historia Agraria*, Sociedad Española de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, 2005.

Leídos los proyectos, el 18 de junio de 1881, se aprobaban finalmente los estatutos en el paraninfo de la Universidad Central de Madrid, poniéndose en marcha en España la que sería la primera asociación de agricultores con un marcado carácter librecambista. En ella, tendrían cabida los agricultores, los ingenieros agrónomos, nobles terratenientes y una amalgama de grupos relacionados con la agricultura⁶⁷.

En su intento por emular a otras asociaciones extranjeras y dar mayor participación a los interesados en la asociación que acababa de crearse, los congresos de agricultores fueron trasladándose a distintas ciudades (Valencia en 1882, Valladolid en 1883 y Zaragoza en 1884), no alcanzando por ello el éxito que se esperaba.

Los sucesivos intentos por competir en el exterior llevaron a los asociados a solicitar constantes tratados de comercio que pudieran facilitar la exportación, sin olvidar las reformas que la propia agricultura y la agroindustria necesitaban en esos momentos. Especialmente entre los trigueros existía la idea de promover una mecanización sistemática en los campos, con la introducción masiva de abonos en aquellos territorios en los que era posible. En esa dirección transcurrió el Congreso de Valencia de 1882, al que acudieron, por ejemplo, la *Liga de Propietarios de Valencia* (muy vinculada a la propiedad agraria) y la *Sociedad Valenciana de Agricultura*. Entre las conclusiones adoptadas estaba la idea sobre los pocos beneficios que aportaba el trigo a los agricultores en España. La producción triguera debía llevarse a la práctica allí donde hubiera posibilidades de regar y de añadir la mecanización al cultivo. En consecuencia, se conseguirían mayores rendimientos si, además del trigo cultivado en esas condiciones, se añadían la vid y el olivo a las vías de exportación.

Sin embargo, la idea de llegar a una libertad de comercio tuvo que matizarse a partir del Congreso en Valladolid de 1883, una zona que se definía por su proteccionismo histórico al trigo. Un cambio que la *Asociación* se vería obligada a realizar en los años siguientes y que quedó cristalizada en

⁶⁷ Para poder ser admitido de la *Asociación de Agricultores de España* era indispensable pertenecer a alguna clase vinculada a las actividades agrarias desde propietarios, ingeniero agrónomo o de montes, veterinarios... incluso aquellas personas que hubieran sido anteriormente Ministros de Fomento o Directores generales del ramo, sin olvidar a periodistas y publicistas que tuvieran alguna vinculación con la agricultura. Pan-Montojo, Juan, "La Asociación General de Agricultores de España y el asociacionismo agrario en la primera Restauración, 1881-1899", ob. cit., págs. 5 y 6.

algunas iniciativas a favor de las subidas arancelarias y la petición de protección adicional a los tejidos de lana. En suma, la llegada de una crisis agrícola y ganadera puso a la *Asociación de Agricultores de España* en una situación delicada, ya que no podía ceder al discurso inicial de conseguir que el país se transformara en una economía agraria y exportadora. Por otro lado, estaba en juego la participación de los grandes propietarios con vocación al trigo.

La *Asociación de Agricultores* alcanzaría su punto máximo de movilizaciones entre los años 1887 y 1888, además de hacerlo en el número de socios. En cualquier caso, las fricciones con otras entidades fueron constantes, debido a la incompatibilidad que tenía la defensa de los intereses agrarios con la protección que se demandaba desde algunas regiones españolas⁶⁸.

Los problemas se agravarían con la aparición de la crisis vinícola en 1886 y la caída de los precios en la mayoría de los sectores agrícolas y ganaderos. Algunos miembros de la *Asociación de Agricultores* que «trabajaban» desde Madrid, como el senador Diego García, acordaron pedir la elevación de los derechos de importación a ganados, carburantes y cereales, hecho que fue aceptado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, a pesar de lo alcanzado por la *Asociación*, varios de los inscritos en la misma no tardaron en buscar una vía diferente para organizar más convincentemente la protesta. Uno de los socios, el diputado conservador Adolfo Bayo, pondría así en marcha, durante el verano de 1887, las bases para lo que poco después sería la *Liga Agraria*. Mientras, la *Asociación de Agricultores de España* había comenzado un letargo que mantendría sus actividades al margen de las acciones y círculos de influencia agraria. De hecho, tendrían que pasar nueve años para que el Vizconde de Eza, en 1899, resucitara a la *Sociedad*. El proyecto de Eza conseguiría mantener a la *Asociación de Agricultores* en una posición de privilegio, logrando más de 40.000 socios en 1914 y siendo aceptada en la mayoría de los consejos y juntas de agricultura hasta 1931.

⁶⁸ En concreto con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*. En Caminal, ob. cit., o Pan-Montojo, Juan, ob. cit.

- Élites, trigueros y grupos de presión

El desarrollo económico y la formación de una oligarquía dirigente en la España del XIX han tenido en los últimos años un importante tratamiento bibliográfico, tanto a nivel general como local o regional. Las vicisitudes económicas, especialmente en la agricultura, así como las particularidades políticas, incluso antes del período isabelino, condujeron a muchos historiadores a tratar el tema desde distintas perspectivas. Así, puede decirse que la bibliografía es considerable desde que Varela Ortega comenzara con *Los amigos políticos*, o Pedro Carasa abordara el estudio de las élites castellanas en el período de la Restauración⁶⁹.

Y es que la ligazón al poder político de determinados grupos sociales no ha pasado inadvertida, a pesar de las carencias que todavía quedan por resolver. Una de ellas es, precisamente, el motivo de esta investigación. Asociaciones tácitas que operaban en la opacidad del sistema liberal con la intención de obtener ventajas, al margen de legislaciones más o menos permisivas, ya fuera en las lindes del poder local o nacional.

La realidad es que existió en la España liberal un sistema oligárquico casi obligatorio⁷⁰. En el período que transcurrió desde 1834 a 1868 hubo veintidós elecciones generales a diputados en las Cortes, lo que no quiere decir, como sabemos, que existiera una diversidad en las opciones políticas cuantitativamente hablando. El requerimiento para ser ciudadano políticamente activo era entonces estricto y deliberadamente favorecedor a las clases propietarias. Además de la condición de ser varón, la exigencia de propiedad constituyó una máxima dentro del liberalismo del siglo XIX en España.

Quienes componían el cuerpo estamental de las Cortes eran básicamente propietarios territoriales, dueños de industrias manufactureras o de establecimientos mercantiles... Además, en cada provincia debía existir un número determinado escogido entre los máximos contribuyentes. En

⁶⁹ Varela Ortega, José, *Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)*, Marcial Pons Historia Estudios, Madrid, 2001, y Carasa, Pedro, *Élites castellanas de la Restauración. Una aproximación al poder político en Castilla*, Salamanca, 1997.

⁷⁰ Romero, Carmelo y Caballero, Margarita, "Oligarquía y caciquismo durante el reinado de Isabel II (1833-1868)", *Historia Agraria*, número 38, 2006.

cualquier caso, la gran propiedad era la garantía del funcionamiento pleno del poder legislativo. Existía, de la misma forma, un cuerpo electoral reducido y selectivo, por lo que, de entre un total de más de veinte mil municipios, tan solo tenían cabida 451. Y lo mismo sucedía con la población. De los más de doce millones de habitantes, solamente dieciséis mil tenían asegurada la participación en las elecciones. Un panorama, pues, que concedía un sobrado protagonismo a las oligarquías y a los grupos de poder⁷¹.

Los trabajos que a lo largo de estos últimos años se han realizado en relación a las oligarquías y grupos de poder en nuestro país, han puesto de manifiesto la importancia del componente agrario y de la propiedad para poder ser elector y elegible en todas las legislaciones electorales⁷². Este hecho se ha demostrado en trabajos con un marcado carácter regional, en los que aparecen también ligados a la tierra nuevos grupos de terratenientes surgidos tras las desvinculaciones y desamortizaciones llevadas a cabo, especialmente a partir de los gobiernos de Mendizábal y Madoz⁷³.

El diseño liberal de la administración agraria en España, sin duda ayudó igualmente a que gran parte de la oligarquía disfrutara de los privilegios que iba adquiriendo a través del acceso a la tierra y a la propiedad. Sin embargo, uno de los elementos imprescindible en la construcción del poder de los grupos propietarios estuvo relacionado con la Administración y con el propio control de las instituciones locales. En este sentido, la presencia en los ayuntamientos, diputaciones o juntas de agricultura, significó un elemento esencial para la proyección social de aquellos grupos que buscaban el salto a la representación política nacional.

⁷¹ Ibidem, pág. 12.

⁷² Excepcionalmente se aplicó el sufragio universal masculino (indirecto) en las elecciones de 1836 recuperando el 4º grado de la reglamentación de 1812. Ibidem, pág. 24.

⁷³ Son innumerables las referencias que se refieren a estudios localizados espacialmente sobre la evolución de los poderes municipales y regionales. Entre ellos destacamos los de Carasa, Pedro, "Un análisis microhistórico del poder local en Castilla: La familia Aparicio y Ruíz en la ciudad de Burgos durante la Restauración", Sánchez Mantero, Rafael (ed.), *En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX: actas del IV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, vol. 1, 24-26 septiembre, 1998, págs. 313 a 326; Bayona Fernández, Gloria, "Élites e instituciones como bloque de poder en Murcia (Evolución y reconversión. Siglo XIX-1ª mitad del siglo XX)", *En torno...* ob. cit., págs. 425 a 433, y Gómez Carbonero, Sonsoles, "Mecanismos y estrategias del poder local en el mundo rural castellano durante la Restauración: Villalón de Campos", *En torno...*, vol. 2, ob. cit., págs. 375 a 387. Para el caso de las estructuras de poder en la región mediterránea en Díaz Marín, Pedro, *Las estructuras de poder durante la década moderada: Alicante, 1844-1854*, Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 1997.

En 1847 se creó un Ministerio de Fomento cuyo cometido estaba destinado a ser el patrón de la agricultura, la industria y el comercio, en cuya cúspide administrativa se erigía el Consejo de Agricultura, Industria y Comercio⁷⁴.

Juan Pan-Montojo elaboró de nuevo otro trabajo sobre la evolución de la administración agraria durante el siglo XIX, en un período en el que los grupos de poder accedieron también al control de los organismos periféricos y desde el que podían ejercer mejor su influencia local y regional⁷⁵. Solo así podemos entender que las Juntas Provinciales de Agricultura, subordinadas en un principio a los gobernadores civiles y puestas en funcionamiento en 1848, se modificaran solo unos años después. En 1855, el nuevo Real Decreto reformó el sistema de elección de sus miembros, estableciendo que los vocales fueran designados por un colegio electoral formado por los dos mayores contribuyentes de cada partido judicial. Otro Real Decreto de 1859, aglutinó las Juntas de Agricultura, las de Comercio y las Comisiones de Fábricas, aunque seguía siendo necesaria la participación de las élites ciudadanas. Como consecuencia del Decreto, para la selección de los 5 vocales electivos que correspondían a la sección de agricultura, debían intervenir los 50 mayores contribuyentes del partido judicial correspondiente, situación que se mantendría hasta las reformas ministeriales de los años setenta del siglo XIX⁷⁶.

Aparte de la cuestión meramente política y administrativa, lo cierto es que el empuje de los propietarios y agricultores había dado comienzo años atrás con la instauración del régimen liberal en 1820. Fue con la puesta en práctica del prohibicionismo en el comercio exterior del trigo cuando los grupos de presión afectados se evidenciaron de una manera más constante. Recientemente se ha publicado una investigación de Enrique Montañés Primicia en la que se aborda la cuestión arancelaria y la relación de los grupos de poder con la misma⁷⁷. En esta línea, Pilar Calvo Caballero ha

⁷⁴ Se trataba del Ministerio de Fomento cuya estructura estaba dividida en tres grandes direcciones generales. La primera era la de Agricultura, Industria y Comercio; la de Obras Públicas y la de Instrucción Pública.

⁷⁵ Pan-Montojo, Juan, "La administración agraria en España, 1847-1907", *Noticiario de Historia Agraria*, número 10, 1995, págs. 67 a 88.

⁷⁶ El funcionamiento de la administración agraria en las provincias periféricas puede consultarse en: Luque Ballesteros, Antonio, *Hacendados, labradores y agrónomos en el marco de la Administración Agraria, Córdoba, 1847-1885*, Diputación de Córdoba, 2011, entre otros trabajos.

⁷⁷ Montañés Primicia, Enrique, *Grupos de presión y reformas arancelarias en el régimen liberal 1820-1870*, Universidad de Cádiz, 2009.

tratado la cuestión de la identidad corporativa de los propietarios trigueros en Castilla, a través de una investigación en la que refleja la importancia que tuvieron en el modelo de crecimiento castellano⁷⁸. Como ella misma reconoce, el corporativismo de los productores de trigo adoleció durante décadas de un sentimiento asociativo y de acción colectiva que fue modificándose en los años próximos a la Restauración.

Las señas de identidad corporativas se vieron fortalecidas en los constantes enfrentamientos con los gobiernos por las políticas económicas y de fomento. El aparato de presión, como ha matizado Montañés, hay que buscarlo en el medio siglo de política arancelaria en el que fue posible la configuración de los distintos grupos económicos. En concreto, la lucha por el control político en los años cuarenta del siglo XIX, entre moderados y progresistas, permitió alianzas entre productores de trigo castellanos e industriales del algodón catalanes. Conviene recordar que los proyectos reformistas del liberalismo afectaron muy directamente al sector agrario, al ser este último el que mayor porcentaje de la población activa agrupaba. Incluso y debido principalmente a la caída de los precios en los mercados, antes de 1820 los labradores habían solicitado al gobierno absolutista un cambio de reglamentación para el comercio exterior del trigo.

Sin embargo, este comportamiento no fue en modo alguno exclusivo de los propietarios castellanos. Las sucesivas legislaturas que acompañaron a los distintos gobiernos liberales nunca dejaron de atender las reiteradas peticiones sobre protección en política aduanera. Sabedores de la importancia que tenían los grupos directamente implicados en la propiedad y la gestión de las actividades económicas, el régimen liberal no pudo hacer frente a las reiteradas alianzas entre diputados que, con idénticos intereses, impelían los procedimientos de tramitación. Sin un tejido asociativo legal que pudiera entonces desarrollar una política de defensa clara hacia las demandas del núcleo de propietarios, se constituyó un funcionamiento de presión ante la demanda de un modelo proteccionista «ex profeso». En ese

⁷⁸ Calvo Caballero, María del Pilar, *Defensa de intereses y cultura de la patronal castellano-leonesa (1876-1931)*, Tesis de doctorado, Universidad de Valladolid, 1999. También en “La identidad corporativa de los trigueros castellano-leoneses: gestación, naturaleza y proyección política”, Beramendi, Justo y Baz, M^a Xesús (coords.), *Memoria e Identidades. VII Congreso da Asociación de Historia Contemporánea. Santiago de Compostela-Ourense, 21-24 de setembro de 2004*, Universidad de Santiago de Compostela, 2004.

estado de cosas, ni siquiera la burguesía catalana hizo frente al proteccionismo cerealista amparado por las élites trigueras castellanas⁷⁹.

Enrique Montañés, así como quienes han estudiado las actividades de los grupos de presión y de las élites agrarias en España durante el siglo XIX, nos ha dejado en sus investigaciones un hilo conductor que conviene no dejar en el olvido. En las sucesivas legislaturas que se sucedieron desde el Trienio Liberal hasta «La Gloriosa», fueron muchos los distintos políticos que, paralelamente a la condición de propietario terrateniente, ejercieron una influencia incuestionable en el régimen prohibicionista. Agricultores o labradores, como ellos mismos se autodenominaban, no dudaron en emplear todos sus esfuerzos para obtener una coyuntura favorable, al mismo tiempo que establecían alianzas con otros grupos sectoriales vinculados a la agricultura.

Las políticas económicas que giraron alrededor del trigo, además de la evolución del liberalismo como proyecto de gobierno, fueron determinantes a la hora de establecer el inicio y las pautas de comportamiento del asociacionismo agrícola en España. Con la imposibilidad de operar en los mercados extranjeros, los propietarios agrícolas mantuvieron durante décadas un volumen considerable de transacciones, tanto en el litoral peninsular como en las regiones del interior, gozando así de unos precios más altos. En consecuencia, desde los ayuntamientos hasta las Cámaras legislativas, la oligarquía propietaria y productora de trigo se vio en la necesidad de buscar alianzas que permitieran la defensa y al mismo tiempo el mantenimiento de unas políticas arancelarias restrictivas.

En los trabajos que disponemos hasta el momento se han podido constatar los cambios producidos a partir de 1868 y los que posteriormente se producirían con la llegada de la crisis finisecular. Con la primera aprobación del sufragio universal masculino en 1869, así como la puesta en marcha de un sistema político que demandaba una mayor amplitud social, amén de un librecambio aceptado por la mayoría política, comenzaron a plantearse serias dudas desde los sectores proteccionistas sobre los estímulos que producirían al crecimiento económico nacional. Un proceso que, del mismo modo, vendría a precipitar la aparición sistemática de grupos

⁷⁹ Fradera, Josep M., “El comercio de cereales y la prohibición de 1820 (el caso del mercado catalán)”, *Agricultura y Sociedad*, número 30, Ministerio de Agricultura, 1984.

de participación, así como asociaciones de propietarios, contribuyentes y agricultores, todos ellos comprometidos con la consolidación del estado liberal.

De esta forma, nuestra investigación relativa a la reconstrucción del asociacionismo agrícola en España, una vez observado el contexto historiográfico, estaría justificada, en gran medida, por la posibilidad de añadir aquellos aspectos que no han sido todavía suficientemente tratados. En este sentido, las aportaciones de carácter teórico y metodológico que se han venido incorporando en las últimas décadas, nos han permitido diseñar en la actualidad nuevas propuestas para la búsqueda e identificación de quienes iniciaron la difícil empresa de la asociación voluntaria de propietarios de la tierra, quienes la ejercieron, los mecanismos de actuación y acceso a la misma, sin olvidar el mantenimiento dentro de los diferentes escenarios sociales, políticos o económicos que se sucedieron prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX en nuestro país.

La decisión de iniciar una revisión en este sentido, se ha visto también estimulada al haber podido establecerse algunos rasgos comparativos, aun sin entrar de lleno en la comparación del método historiográfico, con la actividad asociativa en otros países de nuestro entorno. En efecto, y si bien es cierto que este trabajo no tiene la intención de utilizar un aporte documental dilatado relativo a la historiografía de las asociaciones agrarias y de propietarios decimonónicas en otros Estados próximos, la realidad es que en la actualidad se hace necesario adicionar una justa matización al tan mencionado atraso o retraso español, como se prefiera, respecto al asociacionismo agrícola y de propietarios. Como se verá más adelante, en el desarrollo de la presente Tesis Doctoral nos ha parecido evidente, una vez estudiadas las fuentes, que existen aspectos a tener en cuenta en este sentido que no pueden ser tomados como concluyentes a la hora de determinar una parálisis nacional en materia asociativa, sino más bien todo lo contrario.

A la ya citada *Société des Agriculteurs de France*, iniciada en 1867, podemos añadir las élites del Piamonte italiano a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Incluso, organizaciones con un gran liderazgo e influencia entre los Países Bajos y Bélgica como la «Liga de Agricultores» o *Belgische Boerenbond* de Lovaina, no iniciarían su actividad hasta el año

1890. Una fecha que se nos antoja ya tardía si la comparamos con las actividades del asociacionismo agrícola en España. En este sentido, el caso más distante es, con toda probabilidad, el del Reino Unido. Por su particular proceso de urbanización e industrialización y como consecuencia del posterior éxodo de los pequeños campesinos, los grandes propietarios pudieron aumentar todavía más la superficie de sus explotaciones, adquiriendo las de aquellos hacendados que dejaban sus propiedades. El resultado fue un aumento de la productividad. Ciertamente es, como se presentará en este trabajo, que las élites agrarias en Gran Bretaña no sobrepasaron el 25% de la representación parlamentaria. Hecho éste que se produciría en la última década del siglo XIX. Un aspecto que sí puede distinguirse del caso español y que se comprende por el cambio en la correlación de fuerzas económicas y sociales surgidas tras la Revolución Industrial⁸⁰.

En cualquier caso, la investigación que presentamos creemos que queda finalmente justificada al acometer una carencia todavía presente en la historiografía relativa al asociacionismo agrícola y de propietarios terratenientes, especialmente en lo que se refiere a su génesis y a la ausencia en los primeros momentos del XIX. Cuestión que, además, está directamente relacionada con la transformación del poder político, social y económico en la España liberal. Una realidad que, como se comprenderá, tiene que ver aún con las capacidades de legitimación de los grupos de poder a través del patrimonio territorial y que será parte esencial de la singular importancia de los grupos de presión a finales del siglo XIX español.

3.- HIPÓTESIS DE PARTIDA Y ACOTACIÓN TEMPORAL

Como muy bien sabemos, el origen de cualquier tarea investigadora debe estar fundamentado en una serie de preguntas y problemas irresueltos, lo que suele traducirse generalmente en el planteamiento de una serie de hipótesis de trabajo. Conviene recordar que, en contra de lo que se piensa, la mayor parte de los aspectos relacionados con una investigación científica no tienen su origen en las observaciones o «hechos», sino más bien en una

⁸⁰ Una introducción al inicio de la actividad asociativa agraria en diversos países europeos puede consultarse en: Moyano Estrada, Eduardo, *Acción colectiva y cooperativismo en la agricultura europea*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993.

batería de preguntas o problemas aún sin resolver. Ciertamente, que en el caso de una investigación relacionada con las ciencias sociales, a menudo resulta difícil la propuesta de hipótesis de trabajo, debido, en principio, al número elevado de variables que llegamos a manejar⁸¹. A ello deben añadirse las correspondientes dificultades a la hora de proceder a su verificación o refutación. Para algunos historiadores la cuestión queda resuelta cuando se formulan un número de hipótesis alternativas capaces de explicar un mismo fenómeno; hecho que no impide que puedan aparecer nuevas hipótesis en cualquier momento de la investigación⁸².

La aparición relativamente reciente de los estudios acerca del asociacionismo en nuestro país, ha dejado, en efecto, una serie de incógnitas y preguntas no resueltas aún acerca de la ausencia, el origen, así como la consolidación y mecanismos de permanencia de las asociaciones de propietarios y agricultores en la España del siglo XIX. Hablamos, en suma de un registro tanto a nivel cuantitativo como cualitativo y de una realidad estrechamente relacionada con la formación de la sociedad española del siglo XIX. Para ello, hemos encaminado nuestra tarea investigadora con el propósito de evidenciar un determinado número de hipótesis de trabajo.

En este sentido, pretendemos verificar que, además de la existencia de las Sociedades Económicas de Amigos del País, tras la finalización de las Guerras napoleónicas y la llegada del régimen liberal en 1820, existieron asociaciones de agricultores y labradores voluntarias, que ya participaban en la solicitud a las autoridades de mejoras que pudieran revertir en sus propios intereses.

Otra cuestión a demostrar está directamente relacionada con la aprobación del Arancel llevada a cabo por el gobierno liberal de 1820. Estimamos que una gran parte de los grupos formados por propietarios y terratenientes con intereses agrícolas, conformaron, a través de pactos y alianzas, sociedades no perceptibles desde un punto de vista de las asociaciones formales, si bien, suficientemente evidenciadas en el entramado

⁸¹ En relación a la complejidad a la hora de formular hipótesis, un buen argumento puede consultarse en: Güell, Antoni M., "Hipótesis y variables", en Boudon, R. y Lazarsfeld, *Metodología, de las ciencias sociales. I. Conceptos e índices*, traducción de Jaume Melendres, Editorial Laia, Barcelona, 1973, págs. 47 y ss.

⁸² Pardinás, Felipe, *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*, Editorial Siglo XXI, trigésimo octava edición, México D.F., 2005, págs. 151 a 165.

organizativo de los municipios y provincias en los que mantenían su influencia. Esta situación se hizo todavía más perceptible, a nivel nacional, a través de la sucesiva toma de decisiones políticas surgidas de las Cortes por la misma colectividad agrícola. Aunque sin formas jurídicas palpables, como podemos suponer, ya que no existían asociaciones expresamente para tales fines, las comunidades de propietarios actuaron con el mismo empeño y esmero que las organizaciones legítimas de agricultores que habrían de formarse ulteriormente a partir de los años ochenta del siglo XIX.

Parece igualmente irrefutable que, como consecuencia de los acuerdos tácitos entre las distintas comunidades propietarias y latifundistas, además de la falta de legislación en materia de asociaciones, las sociedades productoras vinculadas a la producción de cereal y de propietarios comenzaron su presencia formal cuando las condiciones fueron intrínsecamente necesarias. Esto es, con la aparición de una política de librecambio en detrimento del proteccionismo en los cereales (1868).

Junto a todo ello, existió un importante desarrollo del asociacionismo agrícola en España gracias a entidades de pequeño tamaño como casinos, círculos y otras entidades de menor ámbito, ya fueran a nivel local o regional. A pesar de la poca importancia que se les ha dado, se buscará comprobar cómo todas ellas contribuyeron al aumento de la masa asociativa entre propietarios y agricultores a partir de los años sesenta del siglo XIX.

Además, creemos verificable que, al margen de las iniciativas privadas surgidas de los mismos propietarios y productores trigueros que operaban principalmente desde las regiones castellanas, en cierta medida el Estado vino a desempeñar igualmente un papel importante en la articulación de leyes y decretos, que permitieron finalmente la creación de plataformas institucionales, como el Ministerio de Fomento o las Juntas de Agricultura, con el fin de obtener un destacado control de la incipiente idea asociativa que comenzaba a surgir a mediados del siglo XIX en nuestro país.

Desde que se pusieran en marcha en España, tal como advertimos antes, las ideas sobre el librecambio, parece bastante evidente que un selecto grupo de élites productoras agrícolas buscaron a través de asociaciones formalmente establecidas, una defensa a ultranza de las tesis económicas, basadas en un proteccionismo férreo que permitiera el uso

exclusivo de los mercados nacionales para la introducción de la mayor parte de la producción triguera⁸³. En este sentido, cabe la posibilidad de demostrar que tras muchos años de reivindicaciones proteccionistas, éstas serían finalmente aceptadas por parte del partido conservador en 1891. Fecha que coincidiría con la práctica desintegración de la Liga Agraria⁸⁴.

Finalmente, manejamos la hipótesis de que las asociaciones de agricultores, labradores y propietarios contribuyeron a la consolidación del Estado liberal, a la aprobación de la ley de asociaciones, así como al avance en materia tecnológica y de cultivos. En este último punto, ello fue posible gracias a las posibilidades que, tanto propietarios como asociaciones agrícolas, detentaron en medios económicos, amén de una evidente disponibilidad de tierras donde debían ponerse en práctica las experimentaciones con abonos, así como la adquisición y adaptación de maquinaria agrícolas.

Respecto a la delimitación cronológica y espacial, como en todo trabajo histórico, hemos acotado nuestra investigación, teniendo en cuenta la importancia que tienen los fenómenos globales al dedicar una parte importante de nuestro estudio a las distintas sociedades agrícolas existentes en la España del siglo XIX. Sociedades que aparecen muy diversificadas, tanto en el tiempo, como en el espacio. Por ello creemos que al período transcurrido entre los años 1820 y 1891, le correspondería igualmente una significación en lo que a la delimitación geográfica se refiere. Trabajar en la génesis del asociacionismo agrario referido a todo un país nos obliga a examinar cada una de las regiones de la España liberal del XIX. De ahí que para nosotros el ámbito espacial y cronológico sean cuestiones difícilmente separables. Al referirnos a la acotación geográfica, hemos convenido en destacar la importancia del establecimiento de un ámbito nacional y no regionalizado, ya que se pretende comprender la interrelación de los grupos

⁸³ En esa misma línea de actuación se movieron, por ejemplo, la *Sociedad de Reforma Agrícola*, la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* o la *Liga Agraria*. Esta última ya en los años finales de los años ochenta y hasta 1891.

⁸⁴ En efecto, en los últimos momentos de vida de la *Liga Agraria* se produjo una importante subida arancelaria mediante formas selectivas de ataques al gobierno liberal de Sagasta. La asunción por parte del partido conservador de las tesis proteccionistas defendidas por los propietarios y agricultores, además de la supuesta ineficacia del gobierno en esos instantes, terminaría siendo pieza esencial en la vertebración del discurso de la propia *Liga* en aquellos años. Un *lobby agrario frustrado. Los agricultores y la Liga Agraria 1887-1891*, ob.cit., Inédita.

y sociedades agrícolas, sus influencias, acuerdos, etc., precisos para la puesta en marcha de acciones comunes.

En cuanto al marco cronológico, son varios los aspectos que conviene subrayar. En primer lugar, sabemos que las primeras asociaciones voluntarias de agricultores tienen su inicio en el primer cuarto del siglo XIX, según consta en las fuentes consultadas. Por otra parte, creemos que ya se ha destacado la particular significación que habría de tener el arancel de 1820 en la toma de conciencia de propietarios y agricultores en el sector del cereal. Asimismo, el análisis y desarrollo de esta investigación concluye en 1891 como consecuencia de varios hechos significativos. El primero está referido a la aprobación del Real Decreto de 14 de noviembre de 1890, que autorizaba la creación de las Cámaras Agrícolas. En segundo lugar, con la III Asamblea de la *Liga Agraria* a primeros de ese mismo año. Este último hecho supondría el final del primer gran intento por establecer un partido agrarista en nuestro país. A partir de ese instante, el número de asociaciones y sociedades agrícolas iba a comenzar a incrementarse paulatinamente, situación que continuaría hasta las primeras décadas del siglo XX.

4.- LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX

Dentro de lo que debe ser la metodología historiográfica, dos aspectos claves como son la crítica y la evaluación de las fuentes, deben necesariamente dar cobertura a todos aquellos hechos que procedamos a realizar con el fin de materializar la práctica de cualquier investigación. A tal fin, se ha buscado lógicamente el contraste de fuentes con la intención de que la información histórica generada tuviera un sólido grado de credibilidad. Del mismo modo, las fuentes hemerográficas están en todo momento adecuadas a las hipótesis de trabajo formuladas más arriba.

Las fuentes de investigación disponibles para este trabajo han sido, sin duda, uno de los factores más determinantes a la hora de delimitar nuestro campo temporal y geográfico. Todo un reto si se tiene en cuenta que los estudios realizados referidos al asociacionismo agrario, élites y grupos de presión, suelen arrancar, precisamente, en los últimos años del siglo XIX.

Momento éste, en el que habría de producirse un impulso asociativo en todos los órdenes. Nosotros hemos querido iniciarlo en un período en el que la exploración de la documentación existente, las posibilidades de acceso y el estado de las mismas no son las más deseables.

La carencia de fuentes para reconstruir la historia de las primeras asociaciones agrícolas en nuestro país ha sido una limitación metodológica que tuvimos que asumir desde el comienzo. La importancia que tenía registrar los primeros intentos de asociacionismo nos llevó a buscar en la bibliografía de la época. Se ha podido comprobar a través de los *Diarios de las Actas y Discusiones de las Cortes*, o en los *Diarios Oficiales de Sesiones de Cortes*, la existencia de asociaciones de propietarios en Castellón y Antequera (Málaga), entre 1820 y 1837, manifestando quejas o presentando exposiciones sobre los graves perjuicios ocasionados por los «bagages». Del mismo modo, acudiendo a las fuentes bibliográficas del siglo XIX se han localizado las Ordenanzas y Reglamentos de la *Real Sociedad de Agricultura* en la villa de Pareja (Guadalajara) de 1817. Para ello se ha acudido a Dictionarios de Bibliografía Agronómica y a la publicación original de las mismas publicadas en Madrid en ese año.

Una mayor exactitud ofrecen los Dictionarios Geográficos. Hasta la primera mitad del siglo XIX se han utilizado tanto el *Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal (1826-1829)* de Miñano y Bedoya, el *Diccionario Geográfico-Histórico de España* (1846) y el *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar* de Pascual Madoz (1845-1850). Este último ha sido de gran utilidad para conocer aspectos de algunas sociedades escasamente conocidas como la *Sociedad de Agricultura de Barbastro*.

En algunos casos se han podido localizar los Estatutos y Reglamentos de asociaciones cuya existencia ya está documentada en los años cincuenta. Así la *Protección Agrícola* de 1858 o la *Sociedad Española de Agricultura, Industria y Comercio* de 1852, publicaron, por ejemplo, sus programas y reglamentos nada más constituirse. Igualmente, se han podido adquirir en algunas bibliotecas anticuarias privadas, prospectos originales relativos a las bases de fundación de algunas asociaciones. Es el caso de la *Asociación de Propietarios Territoriales de España* que data del mes de junio de 1842.

En cualquier caso, como complemento y contraste a esta base documental también se han utilizado *Guías del Viajero* de distintas ciudades y provincias, así como las *Guías de Forasteros*, correspondiente a diversos años.

En lo que respecta a las grandes sociedades aparecidas a partir de la segunda mitad del siglo XX, se ha acudido a los archivos de las mismas; del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* o del *Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla*, entre otras cosas para consultar sus publicaciones y comprobar la correspondencia y contactos con otras sociedades de España. Por su importancia también se ha acudido a archivos de Diputaciones o de alguna Sociedad Económica, por su particular actividad en momentos puntuales de la historia económica y política de nuestro país.

La localización y seguimiento de algunos propietarios y sociedades en particular nos ha llevado a casinos y archivos provinciales. Es el caso de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Córdoba u Orihuela en Alicante. Ha sido de interés la comprobación en el Archivo de Alcázar de San Juan de las Actas Municipales, del peso ejercido por algunos propietarios. Lo mismo sucede en otros lugares como Córdoba o Palencia.

Los *Anuarios Estadísticos de España*, publicados desde 1860 nos han servido para valorar cuantitativamente la evolución de las Sociedades Económicas de Amigos del País, siendo de una extraordinaria ayuda las ediciones de 1879 y 1880 del *Anuario-Almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración o Directorio de las 400.000 señas de España, estados hispano-americanos y Portugal*. Una ambiciosa publicación que nos ha permitido cuantificar y valorar los casinos y círculos agrarios, entre otras sociedades, existentes en los años setenta y ochenta del XIX.

Es evidente que para la localización y seguimiento de la mayoría de asociaciones menos conocidas, ha sido necesario efectuar un amplio estudio de las asociaciones registradas en el «Resumen de las Sociedades de todas las clases existentes en España en 1 de enero de 1887», correspondiente a la sección de Gobernación, legajo 575, que se encuentra en el Archivo Histórico

Nacional; un documento esencial para cualquier investigación sobre sociabilidad en España.

Sin embargo, son los legajos del archivo del antiguo Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los que nos han dado la posibilidad de estudiar a fondo la administración agraria a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La documentación ha sido especialmente interesante en cuanto a los ensayos con maquinarias, disposición del personal en las Juntas Provinciales de Agricultura, funcionamiento de las mismas, solicitudes de distintas asociaciones de agricultores y especialmente la información recogida en la *Circular a Ingenieros Agrónomos [...] remitiendo relación de Sociedades agrícolas...* (Legajo nº 8, expediente nº 2) 1890. Aunque de una fecha ya tardía, se han podido cuantificar un buen número de sociedades de las que no teníamos noticia.

A todo ello, se ha tenido que añadir fondos documentales de las ligas de propietarios y contribuyentes, en forma de reglamentos, exposiciones, etc., y una amplia información relacionada con los Congresos de Agricultura y los trabajos que en ellos se realizaban. En las sesiones de muchos de ellos está recogida una parte importante de los proyectos económicos, políticos y motivaciones para la formación de grupos de presión. Se han ido recogiendo de diversas bibliotecas (Nacional, del Congreso, Municipales...) y forman parte importante de la investigación.

Un aspecto importante de esta investigación ha sido, sin duda, el período finisecular, referido naturalmente a la Restauración canovista. Dentro del mismo convendría distinguir dos etapas. Una primera que se iniciaría aproximadamente con la creación de la *Asociación de Agricultores de España* en el año 1881, continuaría con la toma de conciencia por parte de la clase propietaria en España de los problemas de la agricultura, para finalizar con la creación de la *Liga Agraria* en 1887. La segunda etapa podríamos circunscribirla desde ese mismo año, hasta la finalización de las actividades de la Asociación en mayo de 1891, registrándose en dicho período, un cambio significativo en la coyuntura económica y apareciendo signos evidentes de un inequívoco perfeccionamiento y desarrollo en la actividad asociativa por parte de las clases vinculadas al mundo agrícola y al campesinado.

Respecto a la información historiográfica que ha sido precisa para llevar a cabo la investigación de las dos últimas partes de este trabajo, no cabe duda, que tanto la documentación hemerográfica como la bibliográfica, han prevalecido sobre el resto de fuentes posibles a la hora de realizar una selección de las mismas.

En un principio, además de los artículos y trabajos que sobre la *Liga Agraria* escribiera y publicara en los primeros años del siglo XX Santiago Alba, contábamos tan sólo con algunas referencias de escaso alcance referidas a la propia Asociación⁸⁵. De aquellos años, más concretamente de 1897, es la obra de Jesús Pando y Valle, *Regeneración económica*, en la que dedica uno de sus capítulos a las reformas económicas y a la actividad de la *Liga*. También, aunque de forma muy escueta, aparecen algunas líneas que mencionan parte de las actividades de la *Liga Agraria* en las obras publicadas por Antonio Pirala y Juan Ortega Rubio, trabajos que están dedicados básicamente a la exposición del desarrollo político habido durante la etapa de la Restauración⁸⁶. De las publicaciones reeditadas en este sentido que tratan de ubicar, entre otros muchos temas, las actuaciones de la *Liga Agraria* dentro del ámbito económico y político, una de las referencias fundamentales es la mencionada obra del profesor José Varela Ortega sobre los «amigos políticos», cuya primera edición es del año 1977. Además de esta última, otras obras dentro ya de un ámbito perteneciente más a la historia económica o política, han hecho algunas menciones, aunque no tratan en profundidad el tema específico de las asociaciones agrarias y particularmente el de la *Liga Agraria*.

Hay que decir en cualquiera de los casos citados anteriormente que, con las aportaciones de las fuentes que aquí se han hecho, ha habido que modificar y en su caso corregir, algunos detalles que se habían dado como válidos hasta el día de hoy. Así, conviene matizar todo lo referido al número de Asambleas celebradas por la Liga y particularmente los datos e

⁸⁵ En este sentido son tres los trabajos referidos de forma expresa a la *Liga Agraria*: Alba, Santiago, «La Liga Agraria», en *Nuestro Tiempo*, Madrid, 1902; *Durante la Regencia. Movimientos organizados de opinión*, Madrid, 1902, y *Problemas de España*, Madrid, 1916.

⁸⁶ En efecto, se trata de: Pirala, Antonio, *España y la Regencia. Anales de diez y seis años (1885-1902)*, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1905, y de Ortega Rubio, Juan, *Historia de la Regencia de María Cristina Habsbourg-Lorena*. Tomo I, Imprenta, Litografía y Casa Editorial de Felipe González Rojas, Madrid, 1905. Ambas obras se encuentran en varios volúmenes siendo los libros segundo y tercero para el caso de Pirala, e igualmente los tomos primero y segundo para el caso de Ortega Rubio, los más indicados para el tema que aquí se aborda.

informaciones que mencionan la finalización de las actividades de la misma, propuestos en su momento por Santiago Alba en sus trabajos, aunque si bien es verdad, en ningún caso dichos artículos pueden ser considerados como rigurosos desde una perspectiva historiográfica actual. La obra de Varela Ortega, importante por el número de fuentes tratadas, no pormenoriza, sin embargo, en aspectos más concretos de la *Liga* prescindiendo del sentido que en esta investigación se ha pretendido, complementando y explicando el sistema y funcionamiento del poder en la España de la Restauración.

La búsqueda de fuentes más precisas que nos hablaran de la *Liga Agraria* en el mayor número de contextos posibles, no ha sido desde luego una tarea fácil. En primer lugar, lo habitual hasta ahora había sido, dentro de lo que significaba la propia documentación hemerográfica, conceder validez a un numeroso conjunto de publicaciones periódicas, donde se echaba en falta probablemente, la documentación generada por la propia Asociación. En este sentido y gracias al acceso que para la realización de este trabajo se ha obtenido por parte del Archivo y Biblioteca del Congreso de los Diputados, así como de la Hemeroteca Municipal de Madrid, se han podido reunir las dos colecciones del órgano oficial de publicación de la Asociación que, con el nombre de *La Liga Agraria*, comenzó a publicarse en el mes de enero de 1888, sólo unos días después de constituida la propia Sociedad.

Una de las mayores dificultades encontrada en la mencionada publicación, estuvo referida, además de su localización, a la dispersión de la misma, ya que en la actualidad no existe una recopilación uniforme, ni respecto a su cronología ni en cuanto a su ubicación se refiere. Por dicho motivo, y dentro de lo que son los fondos de la Biblioteca del Congreso de los Diputados, pueden encontrarse catalogados los aproximadamente tres primeros años de existencia de *La Liga Agraria*. El resto de la publicación se encuentra en las salas de la Hemeroteca Municipal de Madrid, encontrándose algunos números de la misma en proceso de restauración debido al mal estado de conservación de los mismos.

No obstante, y como ya se ha advertido, la documentación hemerográfica nos coloca al mismo tiempo que ante uno de los conjuntos documentales de mayor interés, al menos por lo que respecta a esta

investigación, ante la necesidad de proceder a un profundo y minucioso análisis documental. En este sentido, tanto la fiabilidad como la adecuación, han sido consideradas como características esenciales a tener en cuenta en el criterio de selección de las fuentes con vistas a ser las más acordes con el objeto de estudio.

Al margen de las fuentes que se han mencionado, hemos seguido careciendo de la información que nos permitiera seguir con detalle las huellas de algunas sociedades y asociaciones que, por decirlo de alguna forma, se pierden en el tiempo. Todo ello es debido, bien por la imposibilidad de acudir a archivos concretos o, sencillamente, por la pérdida de los testimonios escritos como consecuencia de los distintos conflictos y guerras acaecidos en España durante los pasados siglos XIX y XX.

5.- UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS EN LA ESPAÑA DECIMONÓNICA

Resulta complejo proponer un método de investigación, especialmente cuando abordamos por primera vez un trabajo que comprende la génesis y la formación de sociedades de propietarios de la tierra y de agricultores, amén de su posterior desarrollo e influencia en la vida social, económica y política en la España del siglo XIX. A las dificultades lógicas de toda investigación historiográfica, hemos de sumar aquellas otras que de forma permanente se manifiestan al tratar estudios de relativa originalidad, especialmente si tenemos en cuenta que, hasta el momento, solo se han llevado a la práctica estudios parciales de algunas sociedades y grupos suficientemente bien organizados.

En este orden de cosas, la comparación ha tenido y tiene todavía una singular importancia en el método histórico, especialmente en aquellos estudios destinados al análisis de sociedades, sean éstas de cualquier género o territorio. De hecho, Tucídides ya en el siglo V a. C. contrapuso Atenas y Esparta refiriéndose a las instituciones de ambas ciudades-estado⁸⁷. Se comprende así, que la investigación histórica debe ser en algún sentido

⁸⁷ Maier, Charles S., "La historia comparada", *Studia Historica*, X-XI, Salamanca, 1992-1993, pág. 12.

comparativa para llegar a captar los sucesivos estados de las sociedades, bien sea hallando homologías o diversidades, en períodos graduales coetáneos o cercanos a una lógica simultaneidad⁸⁸.

Si bien es cierto que teníamos la opción de utilizar la comparación en nuestra metodología de trabajo, la realidad ha sido que hemos concedido una prioridad ciertamente limitada al aporte documental relativo a las asociaciones agrícolas y de propietarios de otros países. El estudio comparativo, pues, se ha dirigido especialmente hacia aquellos aspectos puntuales que nos podían permitir definir mejor las causas o la relación entre fenómenos, evitando en la medida de lo posible la aparición de ciertos anacronismos. Así, se ha tenido un especial cuidado a la hora de tratar las diferencias cronológicas relativas a nuestro país, en lo que a la presencia de sociedades de agricultores se refiere, evitando el tan pronunciado *atraso* o *retraso* respecto a otras construcciones asociativas de nuestro entorno. Es por este motivo, por lo que se ha decidido no circunscribir la investigación exclusivamente al ámbito comparativo de la asociaciones en los distintos países europeos, y sí hacerlo refiriéndonos a la verdadera importancia que tenían la particularidades de su formación y desarrollo en la España decimonónica.

En cualquier caso, la comparación en la evolución de fenómenos como la aparición y el desarrollo de asociaciones voluntarias por parte de las élites agrícolas y de propietarios en España y en otros países del contexto europeo, ha dado como resultado un conjunto de respuestas que nos recuerdan el escaso margen en la secuencia temporal en la aparición de aquéllas a lo largo de todo el siglo XIX. Si acaso, evidenciar, una vez más, la especificidad española en este asunto, tal como se mostrará en los capítulos correspondientes a la exposición de esta investigación⁸⁹.

Existen, sin embargo, aspectos que sí conviene recordar en relación con la cuestión comparativa dentro del marco metodológico. En concreto, aquellas que están relacionadas con las ideas francesas y que durante el

⁸⁸ Aróstegui, Julio, *La investigación histórica: teoría y método*, Barcelona, 1995, págs. 310 a 313.

⁸⁹ En este sentido la singularidad con Maier parece evidente, en particular en lo que se refiere precisamente a la individualización de las formaciones sociales semejantes en diferentes países, regiones o culturas. Para el caso que nos ocupa, en España pueden explicarse diferencias notables en el ámbito del asociacionismo en general, lo que supone un aspecto distintivo para la metodología comparativa (Maier, Charles S., ob. cit., pág. 12).

siglo XVIII convirtieron a España en un campo de pruebas del enciclopedismo y de las ideas fisiocráticas francesas. El *Tableau économique*, que Quesnay escribiera en 1758, reconocía la existencia de una estructura social reducida a tres clases de ciudadanos. En un primer escalón situaba a la clase productiva compuesta principalmente por los agricultores encargados del cuidado y cultivo de la tierra. Una segunda clase estaría compuesta precisamente por los propietarios de tierras, amén de los diezmeros que identificaba con la Iglesia. En un tercer grado establecía a los ciudadanos estériles que Quesnay atribuía a los comerciantes, industriales y artesanos principalmente⁹⁰.

Algo más atrás en el tiempo, la consulta del Consejo de Castilla de 1619, sobre los males de la monarquía, advertía de un señalado aumento en la despoblación, así como un extraordinario retroceso de la agricultura, unido a una presión fiscal sin precedentes. Los nuevos economistas surgidos como consecuencia de la decadencia castellana trataron de dilucidar planes que fueran capaces de recuperar la prosperidad perdida. Entre aquéllos, se encontraban algunos nombres tan conocidos como los de Martín de Azpilicueta, Tomás de Mercado, o Sancho Moncada, este último de la llamada escuela de Salamanca, cuyos *Discursos*, publicados por primera vez en 1619, volverían a ser reimpresos en el año 1746 con el título de *Restauración política de España*. Moncada no escatimó palabras para censurar la presencia de productos extranjeros, denunciando que el Reino acabaría siendo un gigantesco deudor de las potencias extranjeras, recomendando por ello la aplicación de un severo plan proteccionista. La nueva realidad, supuso por parte de aquellos entusiastas de la economía, la elaboración de un auténtico modelo de mercantilismo español. Sin embargo, a los nuevos teóricos del saber económico se les acabó conociendo por el nombre de «arbitristas». Un planteamiento que sencillamente descansaba en el intento por idear soluciones, un tanto excéntricas o chocantes, es decir, por fijar «arbitrios»⁹¹.

⁹⁰ Existe suficiente bibliografía acerca de las ideas económicas en el siglo XVIII. Véase, por ejemplo, de Zorrilla Arena, Santiago, *Cómo aprender económica. Conceptos básicos*, Noriega editores, México, 2004, págs. 62 a 66.

⁹¹ Algunas ideas importantes sobre los arbitristas en nuestro país en: García Guerra, Elena María, *Moneda y arbitrios: consideraciones del siglo XVII*, CSIC, Madrid, 2003. Un buen trabajo sobre la historia del pensamiento económico lo encontramos en Colmeiro Manuel, *Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII*, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 5ª edición, Madrid, 1979. Asimismo, Gutiérrez Nieto, Juan Ignacio, "El pensamiento económico, político y social de los arbitristas", en *Historia de*

Con todo, no cabe duda, que en la España de la Ilustración las ideas fisiocráticas acerca del excedente agrario calaron profundamente. Originalmente los fisiócratas habían afirmado que la industria no podía añadir grandes elementos a la riqueza de una comunidad. De la idea anterior, se desprendía que solamente a la agricultura debían imponérsele tasas tributarias, dejando libres, tanto al comercio como a la producción industrial. Las teorías sobre la agricultura y el orden natural tuvieron, sin duda, una gran influencia en Jovellanos. De hecho, en su conocido *Informe*, al referirse al tema de las contribuciones en relación a la agricultura, Jovellanos afirmaba lo siguiente:

Débese partir desde el principio, que presenta la agricultura, como la primera fuente, así de la riqueza individual, como de la renta pública, para inferir que solo puede ser rico el erario, cuando lo fueren los agentes del cultivo. No hay duda que la industria y el comercio abren muchos y muy copiosos manantiales á una y otra riqueza; pero estos manantiales se derivan de aquel origen, se alimentan de él, y son dependientes de su curso⁹².

El mismo enfatizaba y advertía sobre el complejo reparto en el sistema añadiendo:

Nada es tan cierto en la ciencia del gobierno, como que las leyes fiscales de cualquier país, deben ser principalmente calificadas por su influencia en la buena o mala suerte de su agricultura. Nuestro sistema de rentas provinciales peca directa y conocidamente contra esta máxima, no solo por los obstáculos que presenta á la libre circulación de los productos de la tierra, sino por los que ofrece en general al interes de sus propietarios y colonos⁹³.

Las reflexiones posteriores de Turgot, dentro del enciclopedismo, llevaron a matizar el ideario respecto a los conceptos de agricultor y de propietario. Era evidente que todo poseedor de tierras debía diferenciarse notablemente del simple cultivador. De esa forma, propietario y propiedad

España Menéndez Pidal, El siglo del Quijote (1580-1680): Religión, filosofía, ciencia, Espasa Calpe, Madrid, 1986, págs. 235 a 354.

⁹² Melchor de Jovellanos, Gaspar, *Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de la Ley Agraria, extendido por su individuo de número el Señor Don Gaspar Melchor de Jovellanos, y con arreglo a sus opiniones*, edición facsímil realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para conmemorar el bicentenario de dicha publicación en el año 1795, Madrid, 1994, pág. 155.

⁹³ *Ibidem*, pág. 156.

privada pasaban a formar parte de un mismo concepto. En consecuencia, iban a ser las matizaciones del propio Turgot, las que cabrían identificarse unos años después en el liberalismo económico practicado por la burguesía del siglo XIX en Europa⁹⁴.

Las limitaciones que el propio Jovellanos tuvo a lo largo de su vida para exponer su pensamiento a finales del siglo XVIII no tardaron finalmente en hallar una salida en las primeras décadas del siglo XIX. Consciente de que era preciso disminuir las leyes al mínimo posible, a su visión sobre la difusión de los conocimientos en la agricultura se unió la idea de la necesidad de derogar aquellas partes de la legislación que impedían y limitaban la acción del interés individual⁹⁵. La ruptura precisamente con el ideario fisiocrático y la asimilación del nuevo liberalismo económico, complementando el esencial y primigenio liberalismo político en el que se observaba la disminución del control del Estado, nos ha servido para comprender de forma apreciable la formación de las sociedades de agricultores, cuyos principios no eran otros que la defensa de sus derechos. A todo ello, además, habría que añadir la concienciación que, paulatinamente, fue haciéndose extensible sobre la necesidad de las mismas.

Toda esta problemática relacionada con la historiografía comparada nos ha conducido, lógicamente, a una interesante reflexión metodológica, planteándonos nuevos problemas surgidos del examen de otras tantas cuestiones sobre las características propias en las diversas sociedades agrícolas de nuestro país. En este sentido, hemos decidido encaminar nuestro trabajo a la delimitación de dos líneas distintas de investigación que serían las siguientes:

1ª. Esta primera línea estaría determinada por la Historia Social del Poder. Las distintas manifestaciones del poder en las sociedades preindustriales han sido abordadas hasta el momento a partir de distintas vías de exploración que, entre otras cuestiones, se apoya en la territorialidad y los conflictos sociales, además de la cultura y el pensamiento político. En

⁹⁴ Zorrilla Arena, Santiago, ob. cit., págs. 64 a 65.

⁹⁵ Anes, Gonzalo, "Del «Expediente de la Ley Agraria» al Informe de Jovellanos", en García Sanz, Ángel y Sanz Fernández, Jesús (coordinadores), *Reformas y políticas agrarias en la historia de España (De la Ilustración al primer franquismo)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1996, págs. 69 a 103.

definitiva, los procesos de cambio, ya estuvieran dirigidos hacia aspectos económicos o sociales.

Otra de las razones que justifican la introducción en nuestra investigación de los estudios asociados al poder, se asienta sobre la posibilidad de examinar el peso de los poderes locales, directamente relacionados para el caso que nos ocupa, con las sociedades elitistas y territoriales de la esfera local. Estas asociaciones, como sabemos, alcanzaron durante algunas fases de la Restauración importantes parcelas de poder a nivel nacional, acceso que fue recabado desde las instancias periféricas del Estado.

Esta propuesta se ha traducido en la idea de la existencia de grupos que, al mismo tiempo de ser propietarios, ejercían una significativa influencia en municipios y ciudades. Individuos que en el ejercicio de dicha autoridad hacían inútil cualquier otro intento de asociacionismo regularizado. Un aspecto revelador, si se quiere, de la propia dinámica del poder en cuanto a la concurrencia y distribución social del mismo. La realidad, en definitiva, demostró la mediatización en el poder central por parte de los intereses que se reclamaban desde los estamentos locales. Durante décadas, algunas acciones de gobierno estuvieron condicionadas por élites y grupos de presión, estrechamente vinculados con la producción y comercialización de cereales en nuestro país. Un hecho que, a pesar de suponer un obstáculo, contribuyó igualmente al mantenimiento del complejo entramado político liberal del siglo XIX en España.

Esta sucesión de factores como el patrimonio económico, la propiedad de la tierra, el acceso al control de la misma, etc., ha resultado ser un gran estímulo al verificarse en muchos casos, la importancia de los factores personales en la formación del poder local y en el de la configuración de sociedades dirigidas a la defensa de intereses comunes, acciones directamente relacionadas con el asociacionismo que no siempre adquirirían una estructura institucionalizada⁹⁶.

⁹⁶ Un claro ejemplo, en relación a la cohesión y la movilización en momentos de defensa de intereses comunes, puede consultarse en: Pro Ruiz, Juan, "Las élites en la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)", *Historia Social*, número 21, 1995, págs. 47 a 69).

2ª. En segundo lugar, hemos basado una parte sustancial de nuestra investigación en lo que algunos historiadores han denominado la Historia de las Mentalidades, con el fin de comprender mejor la adaptación y comportamiento de los individuos a las sociedades organizadas⁹⁷. Para nuestro caso concreto, sería más correcto hablar de todos aquellos grupos homogéneos que fueron capaces de intuir nuevas formas de representación, fundamentadas en las prácticas de sociabilidad, haciendo hincapié en las sociedades agrícolas, así como en los actores sociales que las iniciaron en España.

Lo anterior nos ha llevado a considerar las características socio-culturales a lo largo de los distintos gobiernos liberales, la nueva clase administrativa o los nuevos tipos de sociabilidad, entre los que se han incluido los casinos y círculos de propietarios y labradores, además de advertir las consecuencias que pudieron tener entre la población propietaria y terrateniente. Para ello ha sido imprescindible avanzar igualmente en el conocimiento colectivo de las asociaciones que gradualmente fueron gestándose en nuestro país.

Asimismo, y dada la amplia tipología de los grupos asociativos relacionados con el tema que se investiga, su aparición y progreso en el espacio y el tiempo acotados, nuestro interés nos ha llevado necesariamente a la búsqueda de aspectos relacionados con la presencia de la agricultura en todas sus vertientes, ya estuvieran referidos al ámbito económico, al político o al meramente estructural. Remitiéndonos a la segunda línea de investigación expuesta más arriba, una de nuestras prioridades ha sido atender al recorrido social que abarca desde lo individual hacia lo colectivo. Para tal fin, se han utilizado todas las fuentes que, de una forma explícita, mencionaran o atendieran a las sociedades rurales, así como su evolución para comprender las relaciones interpersonales y el nuevo carácter

⁹⁷ Existe una historia social de las mentalidades que arranca desde la Escuela de los *Annales* con Marc Bloch y Lucien Febvre, cuya intención en 1929, era la de estudiar tanto las bases económicas como las bases psicológicas y culturales de los hechos históricos. Otros llevan su origen hasta Estrabón o Julio César, incluso a Montaigne o Montesquieu. Una explicación bastante coherente puede encontrarse en los artículos de: Barros, Carlos, "Historia de las mentalidades, Historia social", *Historia Contemporánea*, número 9, Universidad del País Vasco, 1993, págs. 111 a 140 y también en Alberro Solange, Serge Gruzinski, "La historia de las mentalidades: trayectoria y perspectiva", *Revista Hmex*, XLII, número 2, 1992, págs. 333 a 351.

reivindicativo surgido de las clases agrarias a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

En dicho seguimiento ha sido preciso determinar los grupos sociales relacionados con las élites agrarias, manejando un amplio catálogo de órdenes, estatutos y reglamentos, además de toda la documentación que nos pudiera aportar detalles e información acerca de la fundación de sociedades y atender a las diferentes estructuras organizativas. A ello se ha sumado el interés por analizar cuantitativamente dichos grupos, encontrando algunas carencias; aspecto al que ya se aludió en el apartado de las fuentes.

El camino que se ha propuesto, pasa por suplir esas deficiencias con lo que está suponiendo uno de los mayores esfuerzos metodológicos en esta investigación. La necesidad de acceder a la mayor información posible de prensa escrita y bibliografía del siglo XIX que abarcara el mayor período de tiempo posible, se ha resuelto gracias a los sistemas de digitalización de la información. El elevado volumen de páginas localizadas, tanto en bibliotecas como en diferentes archivos públicos y privados, se ha tratado informáticamente con el fin de poder acceder a cualquier palabra, término o expresión relacionado con la agricultura, las élites de propietarios o las asociaciones y sociedades vinculadas con los intereses agrícolas.

La necesidad de ofrecer una explicación más adecuada sobre el desarrollo del asociacionismo agrícola durante el período liberal en nuestro país, así como de la reconstrucción de las relaciones entre las élites propietarias en dicho período, nos ha impulsado a trabajar sobre una significativa base documental que fuera capaz de permitirnos consultar parte de la actividad del asociacionismo, a través de la prensa escrita reunida y referida a la mayoría de las regiones españolas. Bajo la misma línea metodológica, hemos podido examinar igualmente las actividades de aquellas otras asociaciones y sociedades que, desaparecidas en algún momento, mantuvieron, no obstante, unas funciones y tareas destacadas, bien fuera en el sector social, político o económico. En algunos casos, hemos tenido acceso a las páginas de algunas publicaciones puestas en marcha por los propios grupos asociativos, como son la *Protección Agrícola* o *La Agricultura Española. Periódico andaluz de intereses materiales*, en Andalucía o las realizadas por el *Instituto Agrícola*, entre otras.

Finalmente, junto a las vías sugeridas para abordar este trabajo de investigación, hemos de seguir destacando aquellas herramientas que nos están permitiendo alcanzar una visión más exacta del asociacionismo agrícola, dentro del escaso conocimiento que todavía impregna nuestra historiografía reciente. Cuestiones como la estructura, funcionamiento, sociabilidad o eficacia, nos conduce reiteradamente a buscar los medios con los que poder observar mejor la amplia interrelación y los elementos aglutinadores de la sociedad en la España agrícola y liberal del siglo XIX. El resultado de todo ello nos encamina al reconocimiento de que las élites agrarias, en su conjunto, estuvieron presentes en la política activa, siendo uno de los factores más determinantes las instituciones locales. La propiedad agraria, de esta forma, no tardó en convertirse en una pasarela que habría de conectar con la élite política propiamente dicha. Esta Tesis Doctoral, en definitiva, ha sido concebida para dar respuesta a estas y a otras muchas preguntas que han ido surgiendo conforme se desarrollaba y, al mismo tiempo, para permitirnos tener una visión más exacta del acceso al poder de las sociedades agrarias durante la etapa del liberalismo español. De todo ello trataremos en los sucesivos capítulos que, a continuación, pasamos a exponer.

CAPÍTULO I

LIBERALES Y MODERADOS. ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA ESPAÑA DE FERNANDO VII

1.- ANTECEDENTES Y PRIMEROS INTENTOS DE LEGISLACIÓN ASOCIATIVA

- La asociación, manifestación y reunión en Europa. Un precedente para los liberales en España

Ya desde la antigüedad, algunas sociedades humanas estimaron necesaria la conveniencia de asociarse, creándose comunidades y grupos organizados, vinculados, por lo general, a actividades de trabajo de muy diversa índole. A lo largo de generaciones y mucho antes que se dieran a conocer los llamados *gremios* en la Edad Media, se mantuvieron vigentes en la India agrupaciones de agricultores conocidos como *sreni*, incluso comunidades de oficios en Egipto, cuya presencia debió ser casi preceptiva, al estar obligadas las distintas ocupaciones a tributar con un impuesto diferente. La historia social nos ha recordado la existencia de los *Izici*, asociaciones de ayuda mutua entre los obreros de la Grecia Clásica, así como a las organizaciones de artesanos o *collegia* en la Roma de Numa Pompilio, hacia el año 37 d.C. Grupos que sin duda mantuvieron durante algún tiempo privilegios sociales, además de una identidad propia y diferenciada, pero que, en cualquier caso, no llegarían a prosperar al estar inmersos, desde una perspectiva puramente económica, en sistemas de producción de tipo esclavista⁹⁸.

⁹⁸ Machicado, Jorge, *Libertad de asociación profesional*, Universidad San Francisco Xavier, Sucre, 2010, págs. 5 y 6.

Durante siglos, los *gremios* o *corporaciones de oficios* constituyeron prácticamente las únicas formas de asociación organizada en Europa a nivel profesional, prolongándose hasta épocas relativamente recientes. Regida por los llamados *Estatutos*, éstos aportaban las normas rectoras y de organización que las distintas corporaciones aplicaban entre sus integrantes. Paralelamente y durante una gran parte del período medieval, en los territorios germanos actuaron las conocidas *guildas*, comerciantes y artesanos asociados cuya finalidad era la de encontrar protección frente a los maestros de una misma profesión u oficio. En realidad, estas corporaciones o asociaciones laborales surgidas hacia el siglo XII, herederas de las organizaciones romanas o *collegia*, son consideradas en la actualidad por algunos historiadores el origen de lo que más tarde serían las asociaciones de empresarios⁹⁹.

Como es natural, a lo largo de muchas centurias, los Estados ignoraron cualquier tipo de jurisprudencia, tanto en lo concerniente a la asociación como en lo referido a la reunión y a la manifestación de las personas. Las luchas reivindicativas frente al poder político o las dirigidas para lograr el reconocimiento de algún derecho en buena parte de Europa, debieron concluir, por lo general, en un enfrentamiento armado y desigual a favor de la autoridad de turno. La Revolución Francesa, como después veremos, tampoco contribuyó de manera eficaz a solucionar el problema, al prevalecer finalmente la individualidad de la persona sobre el grupo. Únicamente, tras el avance de la Revolución Industrial, comenzaron a surgir corrientes preocupadas por el aumento deshumanizado del denominado «sistema de producción capitalista». Estos movimientos tendrían en la primera mitad del siglo XIX a Elanc, Cabet y Fourier, como los más destacados impulsores, iniciándose de esta forma una pugna reivindicativa que habría de llevar años más tarde al reconocimiento de los derechos de asociación, reunión y manifestación. Así, y por primera vez, el derecho de reunión y asociación serían recogidos en la Constitución belga de 1831. En concreto, en su artículo 20 puede leerse lo siguiente: “Los belgas tienen el derecho de asociarse; este derecho no puede someterse a medida preventiva”¹⁰⁰.

⁹⁹ Ibidem, págs. 6 y 7.

¹⁰⁰ Flaquer Montequi, Rafael, “Los derechos de asociación, reunión y manifestación”, Revista *Ayer*, número 34, año 1999, Asociación de Historia Contemporánea, Marcial Pons, págs. 155 y 156.

La libertad de asociación era todavía en la España de finales del siglo XIX un tema de interés y preocupación. Su legislación habría de incorporarse tardíamente a las Constituciones europeas y puede decirse que estuvo ausente en todas las declaraciones de derechos a finales del siglo XVIII y principios del XIX. De hecho, durante el transcurso del año 1902, un todavía joven Manuel Azaña pronunció en la Academia de Jurisprudencia y Legislación una conferencia sobre la libertad de asociación. Resulta, pues, lógico, comprender la importancia que tenía el asociacionismo, aún a comienzos del siglo XX. El derecho de asociación, como el propio Azaña describiría, era un «derecho innato» derivado de la propia naturaleza humana, resultando, además, imprescindible y necesario¹⁰¹.

En cierta medida, las consideraciones de Azaña sobre el derecho de asociación, que suponía para él la garantía de todos los demás, no había sido, ni mucho menos, un sentimiento compartido cien años atrás por los liberales del Trienio¹⁰². La desconfianza y el temor a las reuniones y manifestaciones de cualquier índole, habían quedado suficientemente demostradas en los gobiernos absolutistas del siglo XVIII. En concreto, Carlos III en la *Pragmática Sanción de S. M.* de 1774, establecía: “Mando que se observen inviolablemente las Leyes preventivas de los bullicios, y conmociones populares, y que se impongan, à los que resulten Reos, las penas que prescriben en sus personas, y bienes”. La mencionada norma continuaba:

Por quanto la defensa de la tranquilidad pública, es un interes, y obligacion natural comun à todos mis Vasallos, declaro, asimismo, que en tales circunstancias no puede valer Fuero, ni esencion alguna, aunque sea la mas privilegiada; y prohíbo à todos indistintamente que puedan alegarla: y aunque se proponga, mando à los Jueves que no la admitan, y que procedan, no obstante, à la pacificacion de el bullicio, y justa punicion de los Reos de qualquiera calidad y preeminencia que sean. [...] Se mandará tambien, que

¹⁰¹ Pau Pedrón, Antonio, *Azaña, jurista*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1990, págs. 27 a 29.

¹⁰² En este sentido, Manuel Azaña se refiere de este modo al derecho de asociación: “Todo el conjunto de facultades que corresponden al hombre libre, todos los principios que la obra de la civilización ha proclamado, la libertad de trabajo, la libertad de conciencia, la propiedad, encuentran en la asociación su garantía y, en las facilidades que proporciona, condiciones de firmeza y seguridad”, *Ibíd.*, pág. 29. *Traslado de la Real Pragmática dada en Aranjuez, 17 abril, relativa a la prevención de bullicios y conmociones populares, 1774.*

incontinenti se cierran todas las Tabernas, Casas de Juego, y demás Oficinas públicas¹⁰³.

En consecuencia, toda forma de manifestación quedaba sometida a una estrecha observación de las autoridades que, incluso en 1805 y a través de una Real Cédula, volvían a reiterar las disposiciones recogidas en la Pragmática antes aludida. Los derechos de reunión, asociación o manifestación, en tanto demostraban una libertad individual ejercida colectivamente, suscitaban una evidente desconfianza dentro del poder político¹⁰⁴. Solo así se entiende que en España, la inexistencia de un reconocimiento constitucional relativo a dichos derechos, se mantuviera hasta la Constitución de 1869.

El reconocimiento del derecho de asociación, así como los inicios del liberalismo español, estuvieron muy determinados por los acontecimientos en Francia a finales del siglo XVIII y, por ende, por la evolución del desarrollo del capitalismo y los movimientos liberales en Europa¹⁰⁵. Es sabido, que los primeros liberales en nuestro país contemplaron con cierto recelo cualquier instancia que pudiera mediar entre las libertades individuales y el propio Estado, ya que era este último el único que debía proteger el ejercicio de los derechos individuales. Una idea que había surgido pocos años atrás en el transcurso de la Revolución Francesa. El derecho de asociación y de reunión quedaban por tanto impedidos, al concebir los gobiernos liberales un Estado obligado a mantener una relación específica con cada ciudadano¹⁰⁶.

¹⁰³ *Pragmatica Sancion de S. M. en fuerza de Ley, por la qual se prescribe el orden con que se ha de proceder contra los que causen bullicio ò commociones populares*, Imprenta de Pedro Marin, Madrid, 1774. También puede encontrarse el texto ampliado en la obra *Traslado de la Real Pragmatica dada en Aranjuez, 17 abril 1774, relativa a la prevención de bullicios y commociones populares*, Madrid 1774.

¹⁰⁴ Puede encontrarse en la *Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en doce libros*. Tomo XII, Título XI, Ley V, Madrid, 1805.

¹⁰⁵ Dentro de los casos especialmente complejos en la Europa del siglo XIX, hemos de señalar la particular situación de los territorios italianos durante el proceso de unificación o *Risorgimento* que quedaría completado hacia 1870. Debido al desarrollo del mismo, los derechos sobre la asociación, reunión y manifestación no empezarían a ser reconocidos hasta 1864. Un amplio trabajo puede verse en Garrido, Fernando, *Historia de las asociaciones obreras en Europa ó las clases trabajadoras regeneradas por la asociación*. Tomo II, Imprenta y librería de Salvador Manero, Barcelona, 1864, págs. 421 y siguientes. Igualmente en Cardarelli Bringas, Alberto, *Derecho industrial y obrero comparado: doctrina, legislación y jurisprudencia*, J. Roldán y cía, Buenos Aires, 1929, pág. 208.

¹⁰⁶ Colomer Viadel, Antonio y López González, José Luis, "Las garantías jurisdiccionales del derecho de reunión y manifestación", *Los derechos fundamentales y libertades públicas: XII Jornadas de Estudio*, Vol. II, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992, pág. 1407.

Si bien es cierto que desde el ideario revolucionario francés se había proclamado la libertad del hombre, permitiéndosele la libertad de contratar, sin embargo debía permanecer ajeno a cualquier protección surgida de las asociaciones. Unas entidades que, en cualquier caso, imposibilitaban desde la perspectiva revolucionaria de aquel momento, la independencia de los individuos. A ello hubo que sumar las ideas fisiocráticas inspiradas por Anne Robert Jacques Turgot, barón de l'Aulne e intendente del distrito de Limoge en 1761 y ministro de finanzas en 1774. Influido por los planteamientos ilustrados y las doctrinas económicas de la Fisiocracia, Turgot plasmó una profunda reforma en sus *Seis Edictos* aprobados en 1776 por Luis XVI, en los que, entre otras medidas, se suprimía la *corvea* o prestación laboral personal a la comunidad por un impuesto en metálico, además de abolir los privilegios fiscales de la nobleza. En palabras del propio ministro y refiriéndose a la prestación forzosa, explicaba lo siguiente: “Todo el peso de esta carga recae y no puede recaer más que sobre la parte más pobre de la nación, sobre los que no tienen más propiedad que sus brazos y su industria. [...] Los propietarios, casi todos privilegiados, están exentos o no contribuyen más que en pequeña proporción y, sin embargo, los caminos se hacen para los propietarios”¹⁰⁷.

Finalmente, Turgot, un liberal convencido, decidió suprimir los gremios y cofradías, entendidos como corporaciones de oficios, así como sus estatutos y toda clase de privilegios por considerarlos contrarios a la libertad del trabajo¹⁰⁸. Quedaba establecido así un principio de libertad contractual que intentaba la normalización en toda clase de negocios entre personas particulares. Aunque destituido más tarde por la enemistad de la reina y de una gran parte de la nobleza francesa y tras ser suprimidos sus razonamientos económicos durante algún tiempo, la perenne influencia de sus *Edictos*, además de la llegada de la Revolución a todos los rincones del país, devolvieron pronto los ideales de Turgot a la sociedad francesa¹⁰⁹.

¹⁰⁷ Escartín González, Eduardo, *Estudio y traducción de la obra: Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas de R. J. Turgot* (noviembre 1776), Universidad de Sevilla, 2003, págs. 64 y 65. Sobre la política económica de Turgot existe abundante bibliografía. Nosotros, no obstante, hemos partido del clásico de Groenewegen, Peter, *The economics of A. R. J. Turgot*, The Hague, M. Nijhoff, edición de 1977.

¹⁰⁸ *Historia de La Francia*, por M. Ph. Le Bas. Traducida al castellano por una sociedad literaria. Tomo II, Imprenta del Nacional, Barcelona, 1841, págs. 120 a 122.

¹⁰⁹ Escartín González, Eduardo, ob. cit., pág. 65.

A los *Decretos de Allard*, en marzo de 1791, le siguió la *Ley Le Chapelier* ese mismo año que restablecía la prohibición del derecho a organizarse profesionalmente. La Asamblea Nacional aprobaba una propuesta del diputado Chapelier con la misma orientación que un tiempo atrás promoviese Turgot. La ley de 1791 prohibía expresamente las asociaciones de patronos y obreros y concedía libertad a la hora de negociar un contrato de trabajo con los dueños o propietarios de cualquier explotación, ya fuera una empresa industrial o agrícola. La restricción quedaría recogida años más tarde en el Código Penal francés de 1810, en el que en su artículo 414 condenaba las coaliciones de empresarios.

Como consecuencia del proceso revolucionario francés y de las teorías acerca de la inviolabilidad del individuo, la Constitución de 1791 consideró el derecho de asociación ilegal al suponer que las asociaciones gozaban de privilegios. Tras la abolición de las asociaciones y el fortalecimiento del individualismo revolucionario, no tardaron en aparecer los llamados *clubes* o sociedades políticas, adquiriendo pronto un singular poder en todos los ámbitos de la vida del país. Aunque sin una base legal, llegaron a ejercer una gran influencia durante la I República, cuestión que el I Imperio utilizaría más tarde, entre los años 1804 y 1815, para establecer severas medidas de control y de prohibición en todas las asociaciones y grupos organizados franceses¹¹⁰.

Esta eliminación de la figura asociativa se dictaba bajo el argumento de que no debía existir más asociación que el propio Estado. El hecho, aparentemente loable entre las ideas revolucionarias y liberales, contrastaba con la indefensión ante la explotación de los nuevos métodos productivos surgidos de la nueva economía capitalista en Europa. Ante la imposibilidad de asociarse, ya fuera para la defensa de productores, propietarios o de resignados trabajadores, el siglo XIX iba a verse abocado a una nueva

¹¹⁰ Era precisamente el artículo 291 del Código Penal de 1810, el que establecía la autorización previa del Gobierno para la constitución de aquellas asociaciones que superaran en número las 20 personas. La violación del artículo llevaba consigo la consideración de delito. Respecto a la legislación francesa en materia de asociación puede verse un amplio resumen en Velloso Jiménez, Luisa, “Los orígenes constitucionales del derecho de asociación en España (1868-1923)”, *Anuario de la Facultad de Derecho*, número 1, 1982, págs. 307 a 355.

progresión de conflictos y de entidades asociativas, capaces de amparar y propagar los derechos e intereses de ambos colectivos¹¹¹.

Aunque algo más alejado de nuestro entorno, las leyes dictadas en Inglaterra durante el período 1824-1825 reconocían la posibilidad de asociación por parte de patronos y trabajadores. No obstante, el sistema jurídico británico o *Common Law*, podía aplicar, en caso de acción de protesta o huelga, severos castigos como delito con arreglo a las llamadas «Acts of Conspiracy». La temprana reacción de obreros y trabajadores de las ciudades industrializadas atemperó sin duda las posibilidades de actuación colectiva, aunque no serían restablecidos todos los derechos hasta el año 1871 con la aprobación de la Trade Union Act¹¹².

Antes de la frustrada revolución de 1848 y de los planteamientos de la reunificación alemana bajo la hegemonía prusiana de Guillermo I, las organizaciones profesionales y de empresarios fueron consideradas ilegales en todos los Estados alemanes. Sus actividades, estimadas como un atentado al libre desarrollo de la personalidad, fueron perseguidas y reprimidas con mayor severidad que en otros países europeos. La aparición más tardía de la llamada industrialización no evitó, sin embargo, el surgimiento de sindicatos clandestinos de obreros, además de asociaciones secretas formadas por líderes e intelectuales alemanes. Sociedades que terminarían en algunos casos en el exilio, como la conocida *Liga de los Proscritos* o *Deutscher Bund der Geachteten*, encabezada por Jacobo Venedey y Teodoro Schuster. Con un ideario fourierista y cooperativista, la *Liga*, compuesta fundamentalmente por obreros, artesanos y líderes políticos, estuvo afincada desde su creación en 1834 en París, pasando unos años más tarde a ser liderada por Karl Marx¹¹³.

¹¹¹ Alarcón Caracuel, Manuel R., *El derecho de asociación obrera en España (1839-1900)*, Madrid, 1975, págs. 19 a 35, y Machicado, Jorge, ob. cit., págs. 7 y 8.

¹¹² Para el caso británico sobre el derecho de asociación puede consultarse: Gala Durán, Carolina, y Espuny Romás, María Jesús, “Ordenación jurídica de las relaciones laborales (II)”, *Teoría de las relaciones laborales. Desafíos*, Blanch Ribas, Josep Maria (coordinador), Barcelona, 2003, págs. 336 a 413; Roel Paniagua, Guillermo, *El arbitraje del conflicto en caso de huelga y su procedimiento*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1966, pág. 57, y Xuclá Mauricio, Manuel, *Las grandes revoluciones jurídicas y el problema social*, 1897, Hernando y Compañía, Madrid, 1897, pág. 162 y siguientes.

¹¹³ Pueden consultarse los conocidos trabajos de Duque, Félix, *La Restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios*, Akal, Madrid, 1999, págs. 111 a 113; Alba, Víctor, *Las ideologías y los movimientos sociales*, Plaza & Janes, Barcelona, 1977, pág. 101, y Juarranz de la Fuente, José María, *Las revoluciones de 1848*, Akal, Madrid, 1984, pág. 18.

A pesar de las restricciones, no hubo de esperar mucho tiempo hasta ver aprobada una ley prusiana sobre asociaciones en 1850. Una legislación que, entre otras cuestiones, acogía el derecho de reunión de los prusianos siempre que se hiciera de forma pacífica y sin armas. Las reuniones quedaban exentas de autorización previa en cualquier recinto o estancia. La misma norma recogía más adelante la legitimidad de asociación para aquellas finalidades permitidas y tuteladas por el resto del ordenamiento jurídico del Estado. Por último, respecto al asociacionismo político se advertía de la posibilidad de consentir medidas y disposiciones restrictivas e incluso prohibitivas, dependiendo de las alteraciones que pudieran sobrevenir respecto al orden público¹¹⁴. Decisiones que, sin duda, recordaban las aprobadas en otros países y que estaban directamente relacionadas con el auge de las luchas reivindicativas y del nuevo asociacionismo surgido del proletariado industrial y urbano. Un hecho que tampoco pasaría inadvertido en España.

- El derecho de asociación y de reunión en el primer período del liberalismo español

Antes de la llegada a España de las doctrinas revolucionarias surgidas en la Francia de finales del siglo XVIII, algunas entidades colectivas gozaron de una indiscutible personalidad jurídica a través de una serie de prerrogativas y privilegios que durante algún tiempo se habían venido manteniendo vigentes en nuestro país. En consecuencia con lo anterior, a pesar de no existir una legislación definida para tal fin, en todo el reino estaba admitida la posibilidad de asociarse siempre que se salvaguardara el orden y el bien público. En efecto, existieron a lo largo del período ilustrado español una serie de asociaciones de índole económica y cultural, cuyas bases reguladoras debían ajustarse a una *Resolución del Consejo* dictada en tiempos de Carlos III. Las *Sociedades Económicas de Amigos del País* contenían, por ejemplo, todos los elementos que más tarde pasarían a detentar el resto de sociedades organizadas y formadas con arreglo al proyecto de Constitución de 1869 y de la Ley General de Asociaciones de 1887. Con ello, quedaban establecidos los estatutos, la estructura de los

¹¹⁴ En concreto, el párrafo se refiere a los artículos 29 y 30 de la citada ley y que está recogido de forma expresa en el artículo de Flaquer Montequí, Rafael, ob. cit., pág. 156.

asociados, el número de asambleas, etc. Tal como reconoce Luisa Velloso, lo que en realidad resultaba diferente era la técnica jurídica a la hora de administrar tales derechos, así como el grado de elaboración doctrinal. Lo cierto es, que el asociacionismo en España terminaría imponiéndose y obteniendo el pleno reconocimiento a lo largo de todo el siglo XIX, no sin antes salvar una larga secuencia de vicisitudes lógicas¹¹⁵.

Con el pronunciamiento militar de Riego en 1820 y la vuelta a la legalidad de la Constitución de 1812, el derecho de reunión iba a crear nuevas expectativas que, en la práctica, no iban a resultar tan favorecedoras. A pesar de quedar derogado el régimen restrictivo de la *Novísima Recopilación* de 1805 que había estado en vigor durante el Sexenio (1814-1820), el Decreto de octubre de 1820 establecía la obligatoriedad de la oportuna autorización para celebrar reuniones públicas que trataran de asuntos políticos¹¹⁶. El gobierno del Trienio Liberal venía a interpretar de esta forma los posibles peligros que, asociaciones de carácter político, podían conferir al orden público¹¹⁷. Esta situación, particularmente restrictiva al derecho de reunión y de asociación, habría de mantenerse durante una buena parte del siglo XIX. Inevitablemente, las *sociedades patrióticas* surgidas de la corriente liberal del Trienio acusarían relativamente pronto un estrecho control por parte del poder político, lo que no evitó, en cualquier caso, que las mismas terminaran alcanzando un destacado reconocimiento y prestigio en muchas de las capitales y ciudades del país. El hecho de que algunas de las publicaciones más destacadas de la época pudieran hacerse eco de sus actividades, demuestra la idea anterior de su merecida reputación

¹¹⁵ Velloso Jiménez, Luisa, ob. cit.

¹¹⁶ Nos referimos al Decreto LIV de 21 de octubre de 1820 que en su artículo 1º cuestionaba la práctica totalidad de las reuniones en el siguiente sentido: “No siendo necesarias para el ejercicio de la libertad de hablar de los asuntos públicos las reuniones de individuos constituidos y reglamentados por ellos mismos, bajo los nombres de sociedades, confederaciones, juntas patrióticas ó cualquiera otro sin Autoridad pública cesarán desde luego con arreglo á las leyes que prohíben estas corporaciones”. Más adelante, en su artículo 3º se expresa así: “Los individuos así reunidos no podrán jamas considerarse corporación ni representar como tal, ni tomar la voz del pueblo, ni tener correspondencia con otras reuniones de igual clase”, extraído de la *Colección de los decretos y ordenes generales de la primera legislatura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821, desde 6 de julio hasta 9 de noviembre de 1820*. Tomo VI, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, pág. 229.

¹¹⁷ Rojas Sánchez, Gonzalo, *Los derechos políticos de asociación y reunión en la España contemporánea (1811-1936)*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1981, págs. 27 y siguientes.

social y política dentro de las corrientes liberales de la primera mitad del siglo XIX¹¹⁸.

En las primeras Cortes del año 1820 se comenzó a redactar el proyecto de regulación para las discusiones políticas. Álvarez Guerra, diputado extremeño, propuso el nombramiento de una comisión que iniciara los trabajos¹¹⁹. En dicha propuesta, no se pretendía otra cosa que el reconocimiento legal de las mencionadas sociedades patrióticas. Sin embargo, aquélla iba a encontrar muy pronto recelos entre los diputados más conservadores. El primero de ellos fue Agustín de Argüelles, en aquellos instantes Secretario del Despacho de la Gobernación, cuya exposición en las Cortes estuvo dirigida a exigir seguridad en el control de las reuniones y de las sociedades a las que se pretendía dar autorización¹²⁰.

Con la comisión constituida, ésta emitió un dictamen el día 16 de septiembre de 1820 favorable a la disolución de cualquier sociedad política al no contemplar la propia Constitución el derecho de asociación¹²¹. No será hasta octubre de 1822, cuando el Gobierno presente un informe con el objeto de fomentar y mantener las sociedades patrióticas, reglamentándolas con el fin de que pudieran ser de utilidad. Hecho que no se prolongaría excesivamente en el tiempo al ser suspendidas en julio de 1823, ya con supresión del Trienio Liberal¹²².

¹¹⁸ Así, algunos de los discursos pronunciados en algunas sociedades patrióticas pueden verse, por ejemplo, en: Salas, Ramón, *Lecciones de derecho público constitucional, para las escuelas de España*. Tomo I, Imprenta del Censor, Madrid, 1821, pág. 304. Algunas de sus actividades también pueden encontrarse en la *Novísima Recopilación de las Leyes de España*. Tomo VI, Madrid, 1829, págs. 193 y 404. Entre los trabajos de investigación más próximos a nosotros, además de los estudios parciales realizados para algunas provincias, están los dos volúmenes de Gil Novales, Alberto, *Las Sociedades Patrióticas (1820-1823)*, Tecnos, Madrid, 1975.

¹¹⁹ En este sentido, el diputado Álvarez Guerra se expresaba de la siguiente manera: “Nómbrese una comisión que proponga al congreso un proyecto de ley que asegure á los ciudadanos la libertad de ilustrarse con discusiones políticas, evitando los abusos”, en *Diario de las Sesiones de las Cortes*, en adelante DSC, sesión del día 4 de setiembre de 1820, número 62, pág. 806.

¹²⁰ En alusión a las reuniones políticas el propio Argüelles exponía, entre otras cuestiones, lo siguiente: “El Gobierno está penetrado de las rectas intenciones y del celo patriótico de los individuos que en Madrid y otros puntos de la Península han compuesto y componen estas sociedades; pero toda reunión ilegal y abandonada á sí misma puede tener una tendencia más ó menos peligrosa, segun los elementos de que se compone, el número de individuos que la forman y las circunstancias que la acompañan”. *Ibidem*, pág. 811.

¹²¹ Flaquer Montequi, ob. cit., pág. 158.

¹²² *Ibidem*, págs. 158 y 159.

Además de las limitaciones a las sociedades políticas, la legislación a lo largo del primer tercio de siglo vino a demostrar la pugna entre los liberales moderados del Trienio, durante los años 1820 y 1823, y los absolutistas del período posterior, pertenecientes a la conocida *Década Ominosa*, entre 1823 y 1833. Las sucesivas etapas de gobierno transcurridas desde Evaristo Pérez a Francisco Martínez de la Rosa, dieron lugar a la aparición de un nuevo Código Penal en el que se mostraba un cierto hostigamiento a la pertenencia a congregaciones o asociaciones religiosas. El artículo 316 del mencionado Código era muy explícito: “Los que so color de culto religioso, formaren hermandades, cofradías u otras corporaciones semejantes sin conocimiento y licencia de gobierno, serán obligados á disolverlas inmediatamente y castigados con una multa de uno á treinta duros, ó con un arresto de dos días á dos meses”¹²³.

Con la llegada de la *Década*, las tendencias pronto se alteraron. Liquidadas las sociedades patrióticas al mismo tiempo que los gobiernos moderados, durante los años siguientes de rígido absolutismo fueron aprobados un importante número de reglamentos en forma de reales cédulas y decretos, cuyo objetivo no era otro que la persecución de las congregaciones francmasónicas y de las sociedades secretas. El primer día de julio de 1823, las Cortes aprobaban un decreto que suspendía la legislación anterior referida a las sociedades y asociaciones políticas. Tres meses más tarde, Fernando VII asumía plenos poderes invalidando de esta forma la práctica totalidad de obra legislativa del Trienio¹²⁴. Asimismo, el primero de agosto de 1824 se aprobaba una Real Cédula en cinco páginas y compuesta por 15 artículos, por la que se prohibían «absolutamente» todas las congregaciones de francmasones, comuneros, así como el resto de sociedades secretas. En la misma, se recordaba la posibilidad de indulto, aprobado mediante Real Decreto unos meses antes, siempre que los interesados se presentaran libremente en el plazo del mes siguiente a la publicación de la norma¹²⁵.

¹²³ Recogido del Código Penal de 9 de julio de 1822, en la *Enciclopedia Española de Derecho y Administración, ó Nuevo Teatro Universal de Legislación de España e Indias*. Tomo IV, Imprenta de los Señores Andrés y Díaz, 1851, pág. 276.

¹²⁴ Flaquer Montequi, Rafael, ob. cit., pág. 159.

¹²⁵ *Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, Por la cual se prohíben de nuevo y absolutamente para en lo sucesivo en los dominios de España é Indias todas las Congregaciones de Franc-masones, Comuneros y otras Sociedades secretas, cualquiera que sea su denominación y objeto; y se declara que los que hayan pertenecido á ellas hasta ahora gocen del indulto concedido en Real Decreto de 1º de Mayo de este año, en los términos y con*

Siguiendo la misma tónica general de todos los gobiernos absolutistas, el Proyecto de Código Penal de 7 de mayo de 1830 admitía la posibilidad de aplicar penas de muerte para quienes estuvieran implicados en promover y celebrar reuniones de marcado contenido político. Solo un año más tarde, un nuevo Proyecto de Código Penal presentado por Pedro Sainz de Andino reconocía las reuniones habilitadas dentro de recintos particulares, siempre que no perturbaran el orden público y tuvieran como objeto algún festejo, pasatiempo o recreo¹²⁶.

Las asociaciones profesionales tampoco se vieron favorecidas por los liberales en la España durante las primeras décadas del siglo XIX, al coincidir con los primeros movimientos del asociacionismo obrero en Europa¹²⁷. La supresión de los gremios en plena fase de prohibiciones ya había tenido uno de sus primeros intentos en nuestro país en el último cuarto del siglo XVIII con la liquidación en 1783 de las cofradías asistenciales¹²⁸. Además, la idea acerca de que los gremios denotaban una importante traba para la industria produjo una reacción de hostilidad entre aquéllos y el Estado. Así, en el año 1770, un Decreto ordenado por Carlos III suspendía todas las Hermandades, Cofradías y Congregaciones que no hubieran sido aprobadas mediante acuerdo de magistrados reales. Es a partir de estas medidas cuando se intentará liberalizar la producción en las distintas ramas de los sectores económicos, a través de Resoluciones, Órdenes y Reales Cédulas, con el fin de favorecer el desarrollo de la burguesía y acometer el tránsito a un sistema capitalista¹²⁹.

las excepciones que se expresan, Imprenta Real, Madrid, 1824. La misma Cédula está recogida en la *Gaceta de Madrid*, correspondiente al día 10 de agosto de 1824.

¹²⁶ López González, José Luis, *El derecho de reunión y manifestación en el ordenamiento constitucional español*, Madrid, 1995, págs. 23 a 25.

¹²⁷ Hacia 1819 se producirán las primeras exigencias de carácter político y social en las manifestaciones de la ciudad británica de Manchester. En 1824 conseguirán la revocación de la prohibición de las agrupaciones. En este sentido puede consultarse la obra de Alarcón Caracul, Manuel R., ob. cit., págs. 12 a 16.

¹²⁸ La preocupación en el siglo XVIII hacia los pobres estaba justificada por el temor a un levantamiento debido a la precaria situación de los mismos, además del peligro que suponía por el riesgo de contagios y epidemias. En consecuencia, surgieron las llamadas cofradías asistenciales para albergar a los pobres en hospitales y otros locales, con el fin de aislarlos del resto de las ciudades, pueblos y aldeas. Véase de Egido, Teófanés, *Pobreza y sociedad en España: siglos XV-XVIII*, Institut Universitaire Européen, Florencia, 1980, págs. 59 a 71. Asimismo, sobre el origen de las mismas y la actitud hacia los pobres, puede encontrarse un trabajo más detallado en Bennassar, Bartolomé, *Valladolid en el Siglo de Oro: una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI*, Ayuntamiento de Valladolid, 1989, págs. 407 y 408.

¹²⁹ Mediante distintas normas legislativas se acometerá, por ejemplo, la admisión de maestros extranjeros (1772); la liberalización del proceso productivo en la industria de la

Con todo, fueron los gremios de labradores y agricultores los menos afectados por las cortapisas legislativas. Como comprobaremos en el apartado siguiente, esta línea de argumentación está justificada al constatarse la existencia de las referidas corporaciones a lo largo de las subsiguientes décadas del siglo XIX, llegando incluso a reavivarse en los años finales del mismo.

En cualquier caso, el modelo político y económico del liberalismo no tardó en incorporarse a la Constitución gaditana de 1812, concediendo a las Cortes la facultad de promover la industria y evitar los obstáculos que pudieran entorpecerla (art. 131). Un año después, en concreto el 8 de junio de 1813, se aprobaba un Decreto por el que se reconocía, tanto a españoles como extranjeros, la libertad en el ejercicio de cualquier actividad o profesión, sin que para ello fuera necesario examen, título o la incorporación a cualquier gremio. Se eliminaba de esta forma el monopolio de los oficios que hasta esos momentos había estado en manos de las instituciones gremiales¹³⁰.

Aunque con la restauración absolutista de Fernando VII se volviera a una situación anterior a 1812, lo cierto es que el propio monarca encargó en 1815 a la Junta de Comercio y Moneda una reforma de las ordenanzas en lo que a los gremios se refería. En esta dinámica de vaivenes políticos, otro Decreto del Ministerio de la Gobernación, en mayo de 1820, restauraba las disposiciones de 1813 en materia gremial, siendo nuevamente derogadas tras la llegada de los Cien Mil Hijos de San Luis¹³¹. Sometidos a una estricta censura, tanto las sociedades patrióticas como los gremios profesionales, el resto del ordenamiento legislativo en relación con las asociaciones y la reunión o manifestación de los ciudadanos quedó resumido en el Decreto de septiembre de 1825, ejemplo del temor del rey ante los avatares políticos del liberalismo acaecido durante el Trienio¹³². Una realidad que, como

seda (1777); el trabajo femenino (1778); la libertad de trabajo en los sectores de la arquitectura y la escultura (1782); la concentración industrial (1787), o la reforma de las ordenanzas gremiales (1790). Una importante relación de disposiciones y normativas relacionadas con la disolución de los gremios y el impulso a la producción se encuentra en Alarcón Caracuel, Manuel, ob. cit., págs. 35 a 48.

¹³⁰ García Abellán, Juan García, *Curso de Derecho Sindical. Segunda edición revisada y puesta al día*, Universidad de Murcia, 1986, pág. 39.

¹³¹ *Ibidem*, págs. 39 y 40. También en Alarcón Caracuel, Manuel, ob. cit., págs. 40 y 41.

¹³² El clima de desconfianza de las autoridades durante el absolutismo de la Década, puede resumirse en el artículo 1º del Real Decreto que disponía lo siguiente “Renuevo y amplío la prohibición de que el pueblo ó una parte, multitud ó asociacion de él, ó cualquiera cuerpo ó

comprobaremos más adelante, ya se mantendría hasta la regencia de la reina Isabel II, con el Decreto de enero de 1834 sobre las libertades de las asociaciones gremiales y el ejercicio de la industria.

2.- LA AGRICULTURA Y LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS. LAS CONSECUENCIAS DE LA ILUSTRACIÓN Y LOS PRIMEROS ENSAYOS DE SOCIEDADES DE PROPIETARIOS Y LABRADORES

- Las Sociedades Económicas en el siglo XIX. La persistencia de la memoria ilustrada

Al mismo tiempo que se producía un significativo rechazo legislativo frente al fenómeno asociativo, especialmente dirigido a los gremios y corporaciones profesionales, un considerable número de Sociedades Económicas de Amigos del País seguían manteniendo su actividad en una gran parte de las provincias españolas. Surgidas en 1765, en las primeras décadas del siglo XIX la lista de Sociedades Económicas superaban el centenar, siendo aprobadas algunas más en décadas posteriores. Aunque con un papel enfocado principalmente al fomento de la agricultura y a la difusión de las técnicas agrícolas, lo cierto es que durante algún tiempo fueron, además, las encargadas del control y reconocimiento de gremios y otros grupos relacionados con la vida profesional¹³³.

compañía ó trozo de mis Ejércitos, Milicias Provinciales y Voluntarios Realistas ú otra gente armada, fuerza organizada de tierra ó mar, esté ó no en servicio, se reuna o comuniquen entre sí ó con otros en público ni en secreto, de palabra, por escrito ú otros signos, para hacerme á Mí ó á cualquiera autoridad representaciones ó mensajes, ó cooperar á sostener las que otros hagan sobre materias generales de Gobierno, contra las determinaciones de este ó los actos de Justicia, ni para pedir indultos, perdones, bajas de derechos Reales, municipales que Yo haya determinado o aprobado, ni de precios de otras cosas establecidas por la Autoridad legítima, ni bajo otro pretexto, por importante ó necesario que parezca". El Real Decreto de 4 de septiembre de 1825 está recogido en *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1825, por Don Josef Maria de Nieva*. Tomo X, Imprenta Real, Madrid 1826, pág. 269.

¹³³ En efecto, el 23 de enero de 1779 el Consejo envió una circular a todas las Reales Sociedades Económicas con la intención de establecer un plan de reforma de las corporaciones. Véase, por ejemplo, Molas Ribalta, Pedro, *Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la Revolución Industrial*, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1970, pág. 146; Moral Roncal, Antonio Manuel, *Gremios e Ilustración en Madrid (1775-1836)*, Editorial Actas, Madrid, 1998, pág. 236, y

Si bien, en apartados sucesivos seguiremos refiriéndonos a las Económicas y su importante actividad a lo largo del período tratado en esta investigación, dentro de este mismo contexto, los trabajos e investigaciones relacionados con las Sociedades Económicas se han venido sucediendo de manera considerable desde los años setenta del pasado siglo XX hasta nuestros días. A las publicaciones ya comentadas con anterioridad, habría que añadir una larga nómina de historiadores y conocedores de esta parte del asociacionismo español, habiéndose registrado hasta la actualidad un importante número de estudios monográficos y trabajos parciales referidos al tema que nos ocupa¹³⁴.

En realidad, el advenimiento de este tipo de asociacionismo hacía tiempo que era ya conocido en toda Europa occidental, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. En muchos casos, incluido el de las Sociedades Económicas en España, el apoyo del Estado resultó decisivo para su creación y posterior expansión. Con la idea de perfeccionar la agricultura a través de experimentos y otras prácticas afines al desarrollo agrícola, no tardaron en surgir un sinfín de instituciones análogas en la mayoría de países europeos. Este hecho que ya podía advertirse en las publicaciones de la época, ponía en consideración la utilidad que habían reportado a la agricultura en general y a los labradores en particular, las distintas sociedades, además de un considerable número de tratados surgidos de las mismas dedicados al desarrollo de prácticas agrarias más avanzadas y de mayor eficacia. Las mismas páginas, aportaban listados de asociaciones que operaban en países como Prusia o Polonia, así como en las más importantes ciudades de Holanda, Francia o Gran Bretaña¹³⁵.

Alarcón Caracuel, Manuel R., ob. cit., pág. 38. Asimismo, en la serie de Expedientes Generales del Archivo Histórico Nacional, en adelante AHN, Sección Consejos, Legajo 3.228, Expediente 9, año 1816, *Expediente formado de orden del Consejo para que las Sociedades del Reino reconozcan las ordenanzas de los gremios y artesanos, y demás que en ella se expresa*.

¹³⁴ Además de los ya citados Demerson, Aguilar Piñal o García Ruipérez, encontramos un amplio listado de eruditos que han basado sus investigaciones en las Sociedades Económicas de Amigos del País, en la obra de Enciso Recio, Luis Miguel, *Las Sociedades Económicas en el Siglo de la Luces*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2010, págs. 115 a 119.

¹³⁵ Entre los años 1818 y 1830 existían ya varios Institutos Agrícolas en Hoheinhein y Sajonia, además de decenas de sociedades provinciales, cuyo objeto era el progreso en las ciencias agronómicas. De igual forma encontramos menciones a las asociaciones de propietarios nobles en Silesia, bajo la protección del rey Federico II o las primeras asociaciones organizadas para la defensa de los agricultores en Polonia a partir de 1825. Puede consultarse una parte importante de esta información en el *Diccionario de Agricultura Práctica y Economía Rural*, redactado bajo la dirección de D. Agustín Esteban Collantes y D.

En cierta medida, la influencia en España de estas sociedades era previsible, en tanto el principio de asociación era considerado a finales del siglo XVIII y primeros años del XIX como origen de progreso y prosperidad¹³⁶. Por otra parte, las mismas Sociedades Económicas de Amigos del País eran las encargadas de mencionar y atender la existencia de otras Academias y Sociedades similares en el resto de Europa, dando a entender lo que suponían como «cruzada» económica, allí donde las mismas ejercían su influencia¹³⁷. Para conseguir resultados más favorables, las sociedades ya constituidas en otros países pusieron en marcha, desde comienzos del siglo XIX, un plan estadístico basado en encuestas acerca de la situación económica y agrícola en cada población y ciudad, además de la realización de estimaciones sobre la naturaleza física y química de sus tierras, los cultivos, las posibles mejoras, etc. Esta cuestión, también recogida en la prensa de la *Sociedad Económica Matritense*, se reflejaba de la siguiente manera: “La España, que tanto necesita de estadística y fomento, puede y debe aprovechar las luces y los deseos de estas beneméritas Sociedades económicas, que tanto han contribuido á su reforma política y social y que tanto pueden hacer el día que se considere la intervencion de las Sociedades en el fomento de la riqueza, como una de las bases de un programa de gobierno”¹³⁸.

En este sentido, una parte de la historiografía relativa al período al que nos referimos, ha venido defendiendo la idea de que el modelo de las Sociedades Económicas acabó siendo una imagen retocada y con importantes analogías a las existentes en otros países europeos¹³⁹. El

Agustín Alfaro, Gefes Superiores de Administración Civil, individuos de la Sociedad Económica Matritense y de otras corporaciones científicas y literarias, Imprenta de Don Luis García, Madrid, 1852, págs. 526 a 529. La importancia de esta obra se comprende al comprobar la existencia pocos años más tarde de una edición ampliada. Véase también el *Diccionario de Agricultura Práctica y Economía Rural*, redactado bajo la dirección del Exmo. Sr. D. Agustín Estaban Collantes y D. Agustín Alfaro. Tomo I, Madrid, 1855, pág. XVII y XVIII.

¹³⁶ Así queda recogido en relación a países como Bélgica e Inglaterra en la *Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la Exposición General de 1857, presentada al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento por la Junta Directiva de aquel Concurso*, Imprenta Nacional, Madrid, 1859-1861, pág. 151.

¹³⁷ El interés de las Sociedades Vascongada, Matritense y Aragonesa por los trabajos de algunas Academias de Francia, Alemania, Inglaterra, Prusia o Suecia y los contactos de aquéllas con otras Sociedades de países europeos puede verse en Sarrailh, Jean, *La España Ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII*, Fondo de Cultura Económica, México, 1957, págs. 235 a 237.

¹³⁸ *El Amigo del País. Periódico de la Sociedad Económica Matritense*. Tomo Primero, Imprenta y Librería de Ignacio Boix, Madrid, 1844, págs. 9 a 11.

¹³⁹ Shafer, R. J., *The Economic societies in the Spanish world (1763-1821)*, University Press, Syracuse, 1958, pág. 24. Luis García de la Huerta citaba como antecedentes de nuestras

ejemplo de las Academias provinciales francesas y su proyección hacia otros estados europeos fue tratado de forma sobresaliente ya a mediados de la pasada centuria por Daniel Mornet¹⁴⁰. A este propósito contribuyó igualmente Richard Herr, al vincular el origen de las Económicas en España a la iniciativa de Xavier María de Munibe e Idiáquez, conde de Peñaflorida, después de que éste viajara y estudiara en la ciudad de Toulouse. A su regreso a España en 1746, resultó decisiva la idea de emular el funcionamiento de algunas Academias y Sociedades científicas que, en opinión de Peñaflorida, tanto aportaban a la cultura y al conocimiento en otros países extranjeros. De esta forma, junto a Manuel Ignacio Altuna y José María de Eguía, marqués de Narros, pondría en marcha unos años más tarde la *Real Sociedad Bascongada de Amigos del País*¹⁴¹.

Como es sabido, las Sociedades Económicas en España dimanaron principalmente de dos modelos pioneros como fueron la Sociedad Bascongada, citada anteriormente y autorizada en 1765, además de la *Sociedad Económica Matritense* que vería aprobados sus estatutos en 1775. La primera tuvo sus comienzos en las tertulias celebradas por parte de algunos nobles y otras personalidades notables y del clero en Azcoitia. Animados unas veces por sus inquietudes en temas científicos y otras por asuntos vinculados a las artes, la literatura o la historia, no tardaron en incorporarse a las tertulias cuestiones cercanas a la actualidad política y social. Munibe presentó en el año 1763 un proyecto que contemplaba la creación de una *Sociedad Económica o Academia de Agricultura, Ciencias y Artes útiles y Comercio*, que deseaba adaptar a la economía y circunstancias particulares de la provincia de Guipúzcoa¹⁴².

Sociedades Económicas a las constituidas en Francia, Suecia, Toscana, incluso a la Sociedad de Dublín, a la que consideraba un modelo a imitar. Véase García de la Huerta, Luis, *Discurso sobre la obligacion que tiene la Nacion de contribuir al fomento de las Sociedades Económicas*. Casa de Salvador Savall, Mallorca, 1785, págs. 16 y 29. Puede consultarse, asimismo, la obra de Aguilar Piñal, Francisco, *La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Conferencia pronunciada en el Aula Cultural del Ayuntamiento de Madrid el día 6 de abril de 1977*, Artes Gráficas Municipales, 1977.

¹⁴⁰ Mornet, Daniel, *Les origines intellectuelles de la Révolution française, 1715-1787*, Edition La Manufacture, Lyon, 1989, págs. 416 a 459.

¹⁴¹ Fue muy valorada por Peñaflorida, la *Academia de Ciencias de Toulouse*, institución que conocía de su etapa como estudiante. Véase en Herr, Richard, *España y la Revolución del siglo XVIII*, Aguilar, Madrid, 1979, pág. 129. En relación a las posibles influencias de las Sociedades Económicas de Amigos del País respecto a sus homólogas europeas puede consultarse la obra citada de Enciso Recio, Luis Miguel, págs. 118 y 119.

¹⁴² González Martínez, R. M., *La Real Sociedad Económica de Amigos del País de León*, León, 1981, pág. 53. Sobre la Real Sociedad Bascongada en particular, es de obligada consulta el trabajo del catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, Tellechea Idígoras, José

La admiración declarada del conde de Peñaflorida por las obras de Voltaire, Rousseau o Mirabeau, unido a la amistad que Ignacio Altuna mantenía con Rousseau, aceleró la idea de poner en marcha, por primera vez en España, una Sociedad Económica a través de lo que manifiestamente era una iniciativa privada. Esta misma iniciativa serviría para establecer, alrededor de 1774, otras Sociedades de Amigos del País en las ciudades de Baeza, Cádiz y Jaén¹⁴³.

Al mismo tiempo que comenzaban a constituirse las primeras Sociedades Económicas, Pedro Rodríguez Campomanes publicaba su famoso *Discurso*, en el que quedaba impregnada la idea de establecer estas mismas instituciones en cada una de las provincias del país¹⁴⁴. La idea tenía mucho que ver con la relación que, desde esos momentos, debía prevalecer entre las Económicas y el Gobierno. Una concepción nueva que, sin embargo, iba a permitir la utilización de aquéllas como «instrumento» para la difusión del ideario ilustrado, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo económico¹⁴⁵.

De la publicación llegaron a editarse cerca de 30.000 ejemplares, lo que invita a pensar que las sugerencias de Campomanes tuvieron una más que aceptable acogida, remitiéndose a las chancillerías, audiencias, corregidores y otras autoridades e invitando a la constitución de nuevas Sociedades Económicas. Los efectos no tardaron en producirse, llegando al Consejo de Castilla borradores de solicitud desde distintas ciudades y localidades, con la finalidad de establecer instituciones similares¹⁴⁶.

Fue la *Sociedad Económica Matritense*, tras obtener la aprobación de sus estatutos en 1775, la destinada a servir de modelo a todas las que pudieran constituirse con posterioridad. Aprobada por Real Cédula de 25 de junio, la entidad se organizó con el beneplácito del entonces Fiscal del

Ignacio, "La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Cien años de investigaciones", *IX Congreso de Estudios Vascos, Bilbao 1983. Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos XVIII y XIX*, Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, 1984, págs. 217 a 235.

¹⁴³ Enciso Recio, Luis Miguel, ob. cit., pág. 122.

¹⁴⁴ Rodríguez, Pedro de, conde de Campomanes, *Discurso sobre el fomento de la industria popular*, Imprenta de D. Antonio de Sancha, Madrid, 1774.

¹⁴⁵ Los planteamientos sobre la utilización de las Sociedades Económicas como un instrumento para fomentar la económica están recogidos en varios artículos y libros de historia. Esta idea está recogida igualmente en Anes, Gonzalo, *Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII*, Barcelona, 1969.

¹⁴⁶ Enciso Recio, Luis Miguel, ob. cit., pág. 123.

Consejo de Castilla, que no era otro que el propio Campomanes. El Gobierno veía en la Matritense una posibilidad de estimular una futura red de Sociedades, las cuales, además, debían mantenerse debidamente relacionadas, siempre bajo vigilancia y control de la primera. El efecto centralizador, por el contrario, no tardó en crear ciertos inconvenientes en la aprobación de algunos estatutos que pretendían obtener un cierto grado de autonomía. En consecuencia, en la solicitud para la aprobación de los estatutos de la *Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén*, se presentaron 13 comisiones, en vez de las 3 en que estaba dividida la de Madrid¹⁴⁷. A pesar de las primeras oposiciones, y tras una espera que duraría cuatro años, Carlos III accedió finalmente a su aprobación autorizando a que la de Jaén contara con 10 comisiones¹⁴⁸.

Poco tiempo después de que las Sociedades Económicas se pusieran en funcionamiento en España, surgieron los primeros decaimientos, más como consecuencia de las personas que las constituían que de las propias instituciones en sí. En el mes de junio de 1786, Floridablanca advierte a Campomanes de las dificultades por las que atraviesan algunas Sociedades. Se acuerda entonces por parte del Consejo de Castilla remitir una circular para deducir las causas y las soluciones. Solamente treinta y cinco de las Económicas contestan. Entre los motivos se apuntarán la escasa preparación intelectual para el desarrollo de las tareas que tenían encomendadas; la apatía e inoperancia o la búsqueda de intereses personales. En realidad, a estas causas habría que añadir, además del ideario utópico, unas dotaciones insuficientes y Sociedades ubicadas en poblaciones reducidas en cuanto al número de habitantes¹⁴⁹.

¹⁴⁷ La Sociedad Matritense estaba conformada en tres comisiones: la de agricultura, la de artes y oficios, y por último la de industria. Sobre este tema puede consultarse de Palma García, Dolores, “Las escuelas patrióticas creadas por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en el siglo XVIII”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, vol. 5, Universidad Complutense, Madrid, 1984, págs. 37 a 55.

¹⁴⁸ *Ibídem*, pág. 125. En relación a los conflictos entre la Matritense y otras Sociedades en España puede encontrarse en Sánchez Lozano, María José, “La Real Sociedad Económica de Jaén: El destierro de la ignorancia”, *Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Edición facsímil de los estatutos del año 1790. Estatutos actuales e historia*, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén/Caja Rural de Jaén, 2002, págs. 153 a 181.

¹⁴⁹ Son bastantes los trabajos al respecto de la decadencia de las Sociedades Económicas en nuestro país. A título de ejemplo, puede encontrarse una idea aproximada en Cabral Chamorro, Antonio, “Decadencia y crisis de la Sociedad Económica de Sanlúcar de Barrameda: La respuesta de Herranz Dávila a la circular del Consejo de Castilla en fecha de 14 de julio de 1786”, *Estudios Regionales*, número 38, Universidades Públicas de Andalucía, 1994, págs. 285 a 300; Pérez Rioja, J. A., “La Sociedad Económica Numantina de Amigos del País de Soria y su provincia”, *Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y su*

Corresponde preguntarse si existió uniformidad entre todas las Sociedades Económicas de Amigos del País. No es una casualidad el escaso relieve alcanzado por éstas en ciudades como Barcelona, La Coruña, Bilbao o Cádiz. Será después de 1814 cuando en la ciudad de Barcelona aparezca la fundación de una Sociedad Económica, aunque con un perfil bien distinto al de las iniciadas en el resto de España unas décadas atrás. Si la idea de Campomanes había sido la creación de una industria de carácter popular y dispersa a través de estas asociaciones en todo el país, lo cierto es que ya existía una nutrida burguesía comercial en algunas capitales opuesta lógicamente a la formación de las mismas¹⁵⁰. Una idea distante, como se comprenderá, del modo de producción industrial que se estaba desarrollando en ciudades como Barcelona o Bilbao, y contrario a la acentuada actividad comercial gaditana¹⁵¹.

La propuesta relativa a la creación de una Sociedad en Barcelona reproduciendo los criterios ilustrados chocó frontalmente con los planteamientos de las fuerzas productivas de la ciudad. Existía incluso una clara disconformidad con la eliminación de los gremios y con el pensamiento de Campomanes respecto al punto de partida sobre el desarrollo, al tratarse de un proceso que ya estaba en marcha en muchas zonas de Cataluña. Además, existía otra connotación notable, como aclaraba el profesor Ernest Lluch, que tenía que ver con el agrarismo inmerso en el ideal del propio Campomanes. Éste había atacado a los gremios, precisamente por considerarlos un obstáculo a la monarquía absoluta y a la intención que él mismo proyectaba de llevar la industria al campo. La inexistencia de una institución de tales características, no era sino el resultado lógico de un rechazo a una estrategia de desarrollo económico que se separaba de los que ya tenía la sociedad de Barcelona¹⁵².

obra, San Sebastián, 1972, págs. 339 a 346; San Martín Payo, J., “La Sociedad Económica de Palencia. Su fundación y actividades”, *Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País...*, ob. cit., págs. 391 a 400, y Demerson George y Demerson, Paula, “La decadencia de las Reales Sociedades de Amigos del País”, *Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII*, números 4 y 5, Universidad de Oviedo, 1977, págs. 87 a 101.

¹⁵⁰ En su *Discurso*, Campomanes apuntaba lo siguiente: “De lo antecedente resulta, que las fábricas populares no pueden prosperar por medios de compañías, ni de cuenta propia de comerciantes. Estos reducirían los vecinos, y fabricantes á meros jornaleros, dependientes de su voluntad; quedando los tales comerciantes ó compañías con la ganancia, y el pueblo en la misma miseria, y acaso mayor que la actual”, ob. cit. pág. CXXI.

¹⁵¹ Piqueras Haba, Juan, ob. cit. págs. 42 y 43.

¹⁵² Lluch, Ernest, *Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración*, Crítica, Barcelona, 1999, págs. 182 y 183.

En la práctica, de todos los intentos por lograr crear una Sociedad Económica en Cataluña durante el siglo XVIII solamente llegaron a concretarse dos de ellos, manteniéndose poco tiempo. Nos referimos a las Sociedades Económicas de Tárrega, iniciada en 1777, y la Tarragona, puesta en funcionamiento solo unos años después, en 1788. En la obra de Paula y Jorge Demerson, y Francisco Aguilar, queda recogida la no existencia durante dicho período de Sociedades de Amigos del País. Sí queda constancia, sin embargo, de las actividades en el cercano pueblo de Gracia de una asociación denominada *Sociedad Económica Graciense de Amigos del País*, que desde 1775 y hasta 1881 mantuvo su labor activa. Así y todo, fue tras el regreso de Fernando VII a España cuando finalmente quedó establecida en la misma capital barcelonesa una Sociedad Económica¹⁵³.

Aún cuando no siempre fuera la agricultura la principal tarea de las Sociedades Económicas de Amigos del País, con la creación de las mismas y su prolongación a lo largo de todo el siglo XIX, se contribuyó de alguna forma a la organización de la economía y al mantenimiento de una preocupación por la vida rural y agrícola¹⁵⁴. En una última observación, los Amigos del País evidenciaron uno de los pocos nexos de unión entre la investigación y el estímulo que precisaba la producción de la tierra en manos de unos propietarios, casi siempre inmersos en el clero o la nobleza. A ello hay que sumar la vigilancia en el comercio exterior o la instrucción, muchas veces dirigida a la difusión de nuevas ideas y nuevos métodos de cultivo, muy necesarios en esta última etapa del proyecto ilustrado¹⁵⁵.

Hecha esta precisión, aunque muchas de las Sociedades ubicadas en pequeños núcleos cayeron en el olvido y su labor resultara finalmente escasa o nula en el fomento de la economía y de la agricultura, las perspectivas en las primeras décadas del siglo XIX por parte de aquellas que no habían ofrecido síntomas de decadencia, condujeron, sin duda, a un período más

¹⁵³ Demerson, Jorge, Demerson, Paula de y Aguilar Piñal, Francisco, ob. cit., págs. 43 y 89. También puede estudiarse la cuestión de las Sociedades Económicas en Cataluña en Lluch, Ernest, "El caso de la no fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País de Barcelona", *Revista de Occidente*, número 115, octubre de 1972, págs. 51 a 70.

¹⁵⁴ Entre las actividades no relacionadas con la economía o la agricultura existen numerosas citas en la bibliografía del siglo XIX. Un ejemplo está recogido en la *Exposición de las razones que la Sociedad Riojana y los comisionados por los pueblos de sus Distrito presentan al Congreso Nacional en apoyo de su solicitud para que en la Rioja se forme una Provincia separada é independiente*, Imprenta de Álvarez, Madrid, 1820.

¹⁵⁵ Renom i Ferrer, María Teresa, *Miquel Ferrer i Bauçà protagonista en la sociedad de Mallorca*, Barcelona, 1999, págs. 94 y 95.

próspero que el anterior. La tarea persistente de las que sobrevivieron a los conflictos sociales en general y especialmente al duro deterioro sufrido durante la guerra con la Francia napoleónica en particular, pudo continuarse a través de sus secciones y publicaciones, contribuyendo en gran medida al cambio de mentalidad de las clases dirigentes y de la sociedad, especialmente las más arraigadas a la agricultura y al mundo rural. Una transformación que, como luego veremos, acabaría también teniendo una destacada representación en el asociacionismo agrícola español del siglo XIX.

- Instrucción, capacitación y desarrollo tecnológico en el primer tercio del siglo XIX

La atención y la protección a la agricultura supuso para los ilustrados del siglo XVIII una de las tareas más importantes en el programa de reformas para mejorar la economía. En Europa, hacía tiempo que las agrupaciones científicas y económicas tenían por costumbre promover premios a las innovaciones, realizar conferencias e incluso facilitar fertilizantes para nuevos cultivos¹⁵⁶. El modelo de Campomanes pretendía difundir la enseñanza de la agricultura entre labradores y productores utilizando un patrón de asociaciones bastante similar al de otros países europeos. En su idea de progreso estaba: “el establecimiento de Academias económicas y de agricultura — llegará a escribir Campomanes —, para examinar el modo de promover estas industrias, traduciendo las mejores obras escritas en este género fuera de España, puede hacer familiares los mas importantes descubrimientos”¹⁵⁷.

Hasta la aparición de las Sociedades Económicas en nuestro país, el conocimiento y la divulgación de los avances en la agricultura habían quedado reducidos a viejos tratados de agronomía práctica, así como cierto número de cuadernos y manuales, cuyas publicaciones se sucedían periódicamente a lo largo del tiempo. En realidad, varias de estas

¹⁵⁶ Una síntesis de esta cuestión en Flombart, Vicente, *Absolutismo e Ilustración: la génesis de las Sociedades Económicas de Amigos del País*, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 1979.

¹⁵⁷ *Discurso sobre el fomento...*, ob. cit., pág. XXXIII.

publicaciones llegaron a reeditarse hasta finales del siglo XIX, gracias al singular interés de algunas Sociedad Económica de Amigos del País. En muchos casos, se trataba de obras con más de un siglo de existencia, incluso de escritos cuya primera edición se había producido a principios del siglo XVI¹⁵⁸.

La publicación por parte de Jovellanos del *Informe sobre la Ley Agraria*, finalizando el siglo XVIII, vino a reforzar la idea de Campomanes y los ilustrados al insistir en la instrucción que precisaban la clase propietaria y los labradores. Una formación que iba de la mano de otros problemas todavía sin resolver como la falta de infraestructuras para el riego, las comunicaciones o el comercio¹⁵⁹. Con la idea puesta en allanar los obstáculos enunciados por el propio Jovellanos, las Sociedades Económicas se comprometieron a la creación de escuelas prácticas de agricultura, así como a la elaboración de las denominadas cartillas rústicas. Entre 1800 y 1810, y siguiendo otros modelos agrícolas europeos, poblaciones de la importancia de Córdoba, Comillas o Barcelona contaban ya con distintas cátedras y escuelas de agricultura y botánica¹⁶⁰.

Al mismo tiempo, el Estado quedaba comprometido a establecer una enseñanza agrícola obligatoria. La acción corporativa de las Sociedades Económicas, insuficiente a todas luces para llevar a cabo dicha tarea en todo

¹⁵⁸ Como quedó expuesto en las primeras páginas de esta Tesis Doctoral, la obra de Gabriel Alonso de Herrera, agrónomo y escritor español, nacido en 1470, se ha reeditado hasta prácticamente nuestros días. Animado por el Cardenal Cisneros, su tratado de *Agricultura General...*, publicado en 1513 ha sido reimprimido en siglos sucesivos. En concreto, hemos comprobado la existencia de los años 1645, 1790 y 1819. Esta última, reeditada por la Sociedad Económica Matritense con el título de *Agricultura General de Gabriel Alonso de Herrera, corregida segun el testo original de la primera edición publicada en 1513 por el mismo autor, y adicionada por la Real Sociedad Económica Matritense*, Imprenta Real, 1819. Igualmente la obra de Miguel Caxa de Leruela, Alcalde de la Mesta, titulada *Restauracion de la Antigua Abvdancia de España o Prestantissimo, unico, y facil reparo de su carestia presente*, y entregada como informe a la Junta de Cortes de los Reinos de Castilla y León en 1625, ha sido reproducida desde su publicación en 1631, en distintas ocasiones (1713, 1732, 1975). Una excelente muestra de la relación de obras existentes en el siglo XIX, dedicadas a la instrucción y las prácticas agronómicas puede encontrarse en Anton Ramirez, Bráulio, *Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la agricultura; seguido de un índice de autores y traductores con algunos apuntes biográficos*, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1865.

¹⁵⁹ Jovellanos, G. M., *Informe de la Sociedad Económica de esa Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria, extendido por su individuo de numero el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, á nombre de la Junta encargada de su formación, y con arreglo á sus opiniones*, Imprenta de Sancha, Madrid, 1.795, págs. 119 a 126.

¹⁶⁰ Fernández Clemente, Eloy, "La enseñanza de la agricultura en la España del siglo XIX", *Agricultura y Sociedad*, número 56, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990, págs. 119 y 120

el país, requería como referente y promotor a nivel nacional al Gobierno y a las Administraciones. Con las Cortes de Cádiz constituidas, un decreto de junio de 1813 proyectó la creación de las llamadas *Escuelas Prácticas de Agricultura*. Una idea irrealizable que pretendía ubicar al menos un establecimiento de enseñanza en cada capital de provincia. Consecuentemente, una Real Orden del año 1815 limitó las cátedras a Andalucía, Extremadura, Galicia, León y las dos Castillas. Dentro de este mismo contexto, proyectos posteriores de los años 1818 y 1821 nunca llegarían a ponerse en práctica¹⁶¹. Sin embargo, durante el Trienio, las Cortes tramitaron un plan de enseñanza universitaria que contemplaba la obligatoriedad de la agricultura. Propósito que tendría sus efectos a partir de los años treinta con la fundación de colonias y escuelas prácticas en capitales como Burgos, Salamanca, Trujillo, Córdoba, Ciudad Real, Cuenca y Zaragoza¹⁶².

La preocupación por el incremento de la producción agraria a medida que la demanda de productos alimentarios se sucedía en España, hizo que a principios del siglo XIX algunas Sociedades comenzaran a preocuparse por la introducción de nuevos cultivos que pudieran sustituir parcialmente la producción de trigo. Entre las primeras medidas estuvo el fomento de la oleicultura, el maíz o el cultivo de patatas entre los propietarios de tierras, a la vez que se promovieron nuevas plantaciones teniendo en cuenta las posibles mejoras en la recolección¹⁶³. Algo similar se produjo con el vino y el aguardiente. Para ello, algunas de las Sociedades Económicas de Amigos del País se ocuparon de repartir entre los viticultores folletos explicativos; unas veces con la intención de combatir las plagas, otras con la idea de desarrollar nuevas técnicas en los procesos de fermentación, etc. El interés despertado por la viticultura podría resumirse con lo sucedido en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda al prosperar la ubicación, bajo la tutela de la Sociedad Económica de aquella localidad, de un establecimiento

¹⁶¹ Ibídem, pág. 117.

¹⁶² *Memorias de Agricultura y Artes*. Tomo XII, Junta Nacional del Gobierno del Comercio de Cataluña, Barcelona, junio 1821, págs. 241 a 250.

¹⁶³ En concreto, sobre las nuevas variedades de cultivos o la producción de aceite, puede consultarse Lesen y Moreno, José, *Historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, escrita con la autorización de la misma y en vista de los datos que existen en su Archivo y Biblioteca*, Colegio de Sordomudos y Ciegos, Madrid, 1863, págs. 232, 507, 588 y 589.

experimental y de aclimatación para la vid en la primera década del siglo XIX¹⁶⁴.

Tal y como hemos advertido, el fuerte aumento de la población española y del comercio internacional en los primeros años del XIX, desencadenaron una demanda de productos agrarios más diversificada. Cubrir las nuevas necesidades trajo consigo un lógico incremento de la producción de cereales en Castilla y Aragón, llegándose a la importación de granos en las zonas costeras de Valencia y Cataluña. Al mismo tiempo comenzaron a crecer las producciones de otros artículos no básicos como los licores, almendras, higos, además de las frutas y hortalizas. Acompañando este crecimiento, para cubrir las demandas alimenticias se fueron incorporando nuevos cultivos en las distintas regiones españolas; maíz en Asturias o Galicia y patatas en La Mancha y posteriormente en el resto de España¹⁶⁵.

Con este nuevo panorama, las posibilidades para atender las demandas de la población debían pasar por la ampliación de las superficies cultivadas. Hecho que supuso la promulgación de una política de rompimiento de tierras baldías, bosques y pastizales. A ello hubo que sumar la colonización de nuevas tierras, la desecación de humedales, y finalmente la distribución de propios junto a una política desamortizadora que permanecería activa durante todo el siglo XIX¹⁶⁶.

En todo caso, los cereales eran además del alimento básico, el cultivo más extendido por las tierras cultivadas en España. Todavía durante los siglos XVIII y XIX era habitual encontrarse con períodos de escasez, debido a malas cosechas, sequías, etc. Fuertes crisis que parece no llamaron la atención de las Sociedades Económicas de Amigos del País, si exceptuamos el arroz y el maíz, mostrando una mayor preocupación por el impulso del comercio de los mismos que por la difusión de su cultivo¹⁶⁷.

¹⁶⁴ La Sociedad Económica de Amigos del País de Sanlúcar de Barrameda puso en marcha el «Jardín experimental y de aclimatación de la Paz». Algunos detalles se encuentran recogidos en la obra de Boutelou, Esteban, *Memoria sobre el cultivo de la vid en Sanlúcar de Barrameda y Xerez de la Frontera*, Imprenta de Villalpando, Madrid, 1807, pág. 21.

¹⁶⁵ Piqueras Haba, Juan, ob. cit., págs. 13 y 14.

¹⁶⁶ *Ibidem*, págs. 15 a 17.

¹⁶⁷ *Ibidem*, pág. 56 y 57.

El empobrecimiento producido en los terrenos de cultivo por la intensificación agrícola tuvo también su importancia a la hora de establecer los criterios de actuación de los Amigos del País. A la introducción de los abonos químicos se unieron las sucesivas convocatorias de premios entre labradores y propietarios para que éstos pudieran aportar sus proyectos en esta materia¹⁶⁸. Los canales para el riego o la elevación de aguas subterráneas, además de un importante número de contribuciones relativas a las tareas de cultivo y a la introducción de máquinas sembradoras, formaron parte de las innovaciones promovidas por las Sociedades Económicas en las dos primeras décadas del siglo XIX. Transcurrido el mismo, cualquier experto en agronomía podía constatar los adelantos adquiridos hasta entonces desde que hicieran su aparición las Sociedades Económicas¹⁶⁹.

En realidad, la inclusión de los premios como recompensa a las nuevas aportaciones técnicas intentaba situar a un nivel similar los conocimientos que se venían logrando en el extranjero. En cierta medida, hoy podríamos considerar estas invenciones como precursoras de los diseños y patentes de la actualidad. Las Sociedades Económicas intentaron atajar el problema de la escasa organización y capacidad de la Administración al mostrarse lenta en procesos como la concesión de privilegios reales o el sistema de certificaciones de autor. En su ideario, el premio o recompensa no era sino una medida más de fomento, a través del cual se podía promover el desarrollo de nuevos productos y modernos procedimientos frente a los problemas técnicos que suscitaba, entre otras, la producción agrícola¹⁷⁰.

¹⁶⁸ Pérez Pulido, Margarita, ob. cit., págs. 144 y 145.

¹⁶⁹ La calidad de los terrenos de cultivo, los abonos, así como los utensilios y herramientas empleados para los distintos cultivos de la época, están descritos de forma pormenorizada en el volumen de Boutelou, Claudio, *Elementos de Agricultura*, Don Francisco Martínez Dávila, Impresor de Cámara de S. M., Madrid, 1817. La actividad de las Económicas en al realización de nuevos proyectos de regadío está suficientemente recogida en Piqueras Haba, Juan, ob. cit., págs. 187 a 204.

¹⁷⁰ Véase, por ejemplo, *Estatutos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País*, Imprenta de Sancha, Madrid, 1816, págs. 9, 39, 40, 7 y 85; *Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, celebrada el día 9 de diciembre de 1800*, Imprenta Don Benito Monfort, Valencia, 1801, págs. 3, 72, 76, 78, 79, 179 y 251, y “Decreto CCLXI de 8 de junio de 1813: sobre el establecimiento de cátedras de agricultura, y de sociedades económicas”, en *Colección de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de setiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones*, Tomo IV, Imprenta Nacional, Madrid, 1814, págs. 91 y 92.

Ya advertimos en su momento que la agricultura no fue siempre la principal tarea en algunas Sociedades Económicas. Con todo, en líneas generales los temas agrícolas fueron los más destacados, ya se tratara desde la perspectiva de la educación o la instrucción, el cultivo, incluso desde perspectivas supeditadas al comercio o la industria. En realidad, las tareas sobre la producción agrícola fueron atendidas por las Económicas en cada una de las regiones donde éstas ejercían su labor. Quizá, como resalta el profesor Piqueras, el caso de Andalucía con respecto al olivo, o el de Castilla en relación al trigo, no fue tratado por aquéllas como hubiera sido de esperar¹⁷¹. Ciertamente es también, que Sociedades Económicas como la de León dedicaron desde su inicio en 1784 y hasta finales de la siguiente centuria la mayor parte de sus actividades a la agricultura¹⁷².

La importancia dada por la *Sociedad Aragonesa* al comercio del trigo quedó patente en 1779, al convocar sus primeros premios con una dotación de 60 pesos al que mejor pudiera explicar en una disertación las ventajas que habían producido en la región de Aragón la abolición de la tasa de granos y su libre comercio¹⁷³. Esta derogación procedente de la Real Pragmática de 11 de julio de 1765 y la actitud mostrada por la Económica en Zaragoza, décadas antes a que se iniciara el conflicto sobre la cuestión arancelaria, volvían a recordar en el interés existente por parte de algunas Sociedades Económicas y de importantes sectores propietarios agrícolas, en conseguir el libre comercio de los cereales en todo el país, además de

¹⁷¹ Piqueras Haba, Juan, ob. cit., pág. 22.

¹⁷² Con fecha 31 de enero de 1815 se mandó crear, entre otras, la cátedra de agricultura de León, con una dotación de 20.000 reales por cuenta de los propios y arbitrios de la citada localidad; 12.000 destinados a sueldo del profesor y los 8.000 restantes para gastos de material. Así está recogido en la nota a pie de página (1) en la *Colección de leyes, reales decretos y demás disposiciones de interés general referidas al ramo de agricultura, expedidas desde el 30 de Noviembre de 1833 hasta 3 de Agosto de 1866*, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1866, pág. 175. Véase también González Martínez, R. M., ob. cit.

¹⁷³ Para darnos una idea de la significación del premio y del tema, el segundo premio estaba dotado con 40 pesos y podía leerse en estos términos: “2º de 40 al que justificare haber plantado en el presente año de 1779 mayor número de árboles bravos ó silvestres, que no baje de ciento, y los de vivos y prendidos en la primavera del año 1780, cuyo plantío ha de hacerse en las margenes, ó riberas de los rios, ó en sitio erial”, en *Mercurio Histórico Político que contiene el estado presente de la Europa, lo sucedido en todas las Cortes, los intereses de los Príncipes, y generalmente todo lo mas curioso, perteneciente al mes de marzo de 1779. Con reflexiones políticas sobre cada Estado*. Tomo I, Imprenta Real de la Gaceta, Madrid, 1779, pág. 318.

elaborar una ley agraria que reformara las viejas estructuras del campo en España¹⁷⁴.

Socios y propietarios mostraron mucho interés en las cuestiones comerciales del trigo, especialmente en la búsqueda de variedades y en los procedimientos más óptimos para la conservación de los cereales. La misma *Sociedad Aragonesa*, por medio de Ramón Amat de Mauleon, publicó una *Memoria sobre la conservación de granos*, que posteriormente sería divulgada en otras regiones¹⁷⁵. Procedentes de la misma Sociedad, otros propietarios como Juan Antonio Hernández Larrea e Ignacio de Asso, este último Director de las *Reales Escuelas de Química y Botánica*, llegaron a prestar sus tierras para realizar ensayos relativos a las diferentes variedades de trigo y su mejor adaptación al terreno. Una vez realizadas las pruebas, generalmente se emitían los correspondientes informes que, en no pocas ocasiones, eran publicados para beneficio de otros hacendados¹⁷⁶.

Las campañas a favor de algún producto agrícola eran frecuentes en las primeras décadas de existencia de las Sociedades Económicas. La *Sociedad Asturiana* prolongó su campaña a favor del cultivo de maíz hasta bien entrado el siglo XIX, con la intención de eliminar el barbecho y obtener de esta forma una mayor rentabilidad de la tierra. Algo parecido sucedió con el cultivo del arroz en las comarcas valencianas. Por añadidura, y al ser la región que surtía de arroz a toda España, las Sociedades de Valencia y Motril dedicaron muchos esfuerzos en este sentido, prestando un gran interés por su cultivo y comercialización. Esta situación produjo rápidamente entre los cosecheros y comerciantes asociados a los Amigos del País un importante giro proteccionista mediante la petición de tasas arancelarias que pudieran ser aplicadas a los arroces provenientes del exterior, incluidos los que arribaban de las colonias españolas. Años más tarde, la ostensible acción de protección hacia el arroz, como más adelante explicaremos, dio lugar

¹⁷⁴ Coronas, Santos M., *Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII*, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1991, pág. 149.

¹⁷⁵ Entre las obras que mencionan los trabajos de Ramón Amat, está la de Latassa y Ortiz, Félix de, *Biblioteca Nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año de 1795 hasta el de 1802*, Oficina de Joaquin de Domingo, Pamplona, 1802, pág. 125.

¹⁷⁶ Sobre las calidades, clases y comercio del trigo, consúltese de Asso, Ignacio, *Historia de la economía política de Aragón*, Imprenta de Francisco Magallon, Zaragoza, 1798, asimismo, en relación a las actividades de Ignacio Asso y Juan Antonio Hernández Larrea, puede consultarse el volumen de Forniés Casals, José Francisco, *La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País*, Madrid, 1978, págs. 43, 123 y 320.

importantes protestas políticas contra las importaciones llegadas desde los puertos norteamericanos y antillanos¹⁷⁷.

Con toda probabilidad, el papel de las Sociedades Económicas en los proyectos y realizaciones referidos a las innovaciones técnicas en el ámbito agrícola debió ser mayor de lo que hoy conocemos. La historiografía nos ha dejando un buen número de referencias, apuntes y reseñas, en forma de publicaciones, que nos han permitido valorar, hasta un cierto punto, el alcance de las Sociedades Económicas de Amigos del País como difusoras de los adelantos en este campo, tal y como había sucedido con la *Enciclopedia Francesa*, dirigida por Diderot y D'Alembert a partir de 1751¹⁷⁸. Sin embargo, la posibilidad de que dichas tareas no siempre fueran recogidas por la prensa o por el resto de obras divulgativas, deja abiertas algunas incertidumbres en relación con la totalidad de los proyectos que pudieron ser puestos en marcha por estas instituciones¹⁷⁹.

Minimizada o no esta cuestión, la función de las Sociedades en el campo de las innovaciones técnicas estuvo enfocada a distintas áreas de la producción agrícola e industrial, desde la mejora en la elaboración de vinos y aceites hasta la cría del gusano de seda. Respecto a los avances que se registraron en nuevos arados, trilladoras e instrumentos para la siembra de cereales, muchos de ellos aparecían en los distintos semanarios y revistas de agricultura, por lo que debemos pensar, existieron realmente más

¹⁷⁷ Piqueras Haba, Juan, ob. cit., págs. 62 a 67.

¹⁷⁸ En este sentido cabe destacar los artículos de la *Enciclopedia* escritos por François Quesnay, “Fermiers” y “Grains”, en 1756 y 1757, respectivamente. León, Virginia, *La Europa Ilustrada*, Istmo, Madrid, 1989, págs. 44, 45, 177 y 178. Asimismo, sobre el pensamiento progresista de la *Enciclopedia* puede consultarse de Hobsbawm, Eric, *La era de la revolución, 1789-1848*, Crítica, Barcelona, 2005, págs. 28 y 29.

¹⁷⁹ Desconocemos el alcance que tuvieron en su totalidad las Sociedades en la tarea divulgativa respecto a las innovaciones técnicas en la agricultura. No obstante, algunos casos puntuales nos pueden dar una idea de los conocimientos que existían en algunas localidades y de los intentos por difundirlos por parte de particulares, en muchos casos sin éxito. Así queda registrado a finales del siglo XVIII en una carta enviada por un cura de Lucillos a un semanario de agricultura: “Quiero dar á Vms. Parte, no de un nuevo invento, sino de un instrumento de labor que se usa en algunos parages del reyno, y en otros muchos no lo conocen: este es el arado ligero de que tira una sola caballería”. Él mismo continúa explicando la utilidad del arado de la siguiente manera: “Otra labor se dá á los trigos que ahorra muchos jornales de escarda. También sirve este arado — continúa — para arar los garbanzales, y todas las semillas que están sembradas á liños”. Al final, el párroco declara su decepción por la falta de divulgación en estos términos: “Casi todas las ventajas referidas las estoy experimentando yo mismo, y así me admiro, como no se propaga mas este modo de trabajar con tanta utilidad y ahorro de gastos”. Véase en *Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos*, número 49, Madrid, jueves 7 de diciembre de 1797.

innovaciones que se perdieron o, sencillamente, no llegaron finalmente a sus destinatarios¹⁸⁰.

De hecho, las propias Sociedades Económicas tenían a menudo dificultades para divulgar nuevos aperos y herramientas, incluso para especificar los resultados de sus experimentos. Algo que también sucedía con la información referida a los arados de ruedas puestos en funcionamiento en Europa y que eran utilizados para horadar con mayor facilidad en terrenos dedicados al cultivo de cereales y tubérculos. El desconocimiento ya era recogido por Claudio Boutelou, al mismo tiempo que informaba de la construcción de arados semejantes por parte de Antonio Perla, mariscal de las Reales Caballerizas. El objetivo, en cualquier caso, de introducir estas herramientas entre los grandes hacendados y propietarios no tardó en alcanzarse. Arados de rueda estaban en posesión de la casa de Alba en la provincia de Sevilla en la primera década del siglo XIX, lo que suponía, a tenor de las publicaciones de entonces, toda una gran novedad técnica¹⁸¹.

De igual modo, la *Sociedad Matritense* intentó difundir sin éxito un modelo de arado creado por Antonio Regás, alrededor del año 1818, a pesar de haber realizado los correspondientes experimentos en unos terrenos próximos a la capital. Regás, miembro de mérito de varias Sociedades Económicas, realizó a lo largo de su vida distintos ensayos y proyectó diseños de sembraderas que, al parecer, todavía tenían cierta notoriedad a mediados del siglo XIX¹⁸². A la Matritense o a la de Valladolid, se sumaron

¹⁸⁰ Existieron a comienzos del siglo XIX varias publicaciones especializadas que tuvieron una gran repercusión entre los propietarios y agricultores en España. Una detallada descripción la podemos encontrar en el *Catálogo de la Biblioteca de la Escuela Central de Agricultura*, Imprenta Nacional, Madrid, 1856. En el mismo se destaca el ya citado *Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos*, publicado desde 1797 a 1808, así como el *Semanario de Agricultura y Artes*, inicialmente publicado en Londres en 1829 por Marcelino Calero, y posteriormente en Sevilla y Madrid hasta el año 1833; la revista *Elementos de Agricultura*, publicada en Madrid a partir de 1817, o las conocidas *Lecciones de Agricultura*, explicadas en la cátedra del Jardín Botánico de Madrid en 1815, entre otras.

¹⁸¹ Al respecto podemos leer: “Debemos á D. Antonio Perla, Mariscal de las reales caballerizas un buen modelo de arado que señala la fig. 2. lám. 6. el qual han copiado ya algunos agricultores curiosos, y podrá qualquiera exâminarle quando guste”, en *Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los Párrocos*, número 76, Madrid, jueves 14 de junio de 1798. También en Díez Rodríguez, Fernando, *Prensa agraria en la España de la Ilustración: el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (1797-1808)*, Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1980, pág. 99. Sobre la introducción del arado en las propiedades de Alba, véanse las referencias en Piqueras Haba, Juan, ob. cit., pág. 217.

¹⁸² En relación a los inventos de Antonio Regás, véase el *Informe descriptivo, y diseño de una sembradera inventada y presentada á la Real Sociedad Económica de Valladolid, por su*

otras Económicas como la de Sanlúcar en la invención de nuevos arados o la *Sociedad de Valencia*, que en el año 1820 registró un invento similar por parte de un agricultor en Albalat de Sergat. La fabricación de arados propios, al margen de las especulaciones de algunos historiadores, llegaron a llamar la atención de algunos viajeros extranjeros en nuestro país. Es el caso del británico Joseph Townsend, médico y estudioso aficionado a la geología y la botánica, que recorrería España entre enero de 1786 y febrero de 1787. En sus escritos relata con asombro las variedades de arado, algunos de ellos muy avanzados, que se utilizan y construyen en Cataluña y Salamanca¹⁸³.

Dentro del proceso de perfeccionamientos mecánicos, las Sociedades de Amigos del País mostraron su interés por las trilladoras, máquinas que facilitaban la separación del grano de las espigas en la recogida de los cereales. Una vez más, es el profesor Piqueras quien se refiere a las primeras soluciones aportadas por la *Real Sociedad Bascongada de Amigos del País* en 1768, concediendo un premio a un «modelo de trillo económico»¹⁸⁴. Entre los particulares también se produjeron avances desde finales del siglo XVIII que fueron publicándose sucesivamente, lo que aumentó las posibilidades de que pudieran fabricarse herramientas muy similares por parte de labradores y propietarios agrícolas en otras localidades¹⁸⁵. Estas iniciativas estuvieron dirigidas, en otros muchos casos, a la construcción de ingenios de muy diversa índole, tal y como hemos podido comprobar entre algunos documentos del Archivo Histórico Nacional¹⁸⁶.

individuo Don Antonio Regás, visitador general de las fábricas de Madrid y sus cercanías, miembro de la Real Academia de Ciencias naturales y artes de la ciudad de Barcelona, y de mérito de varias Sociedades económicas el Reyno, Imprenta de la Real Compañía, Madrid, 1817. También en la *Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la exposición general de 1857, presentada al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento por la Junta Directiva de aquel*, Imprenta Nacional, Madrid, 1859-1961, pág. 276, y en Moral Ruiz, Joaquín del, *La agricultura española a mediados del siglo XIX. 1850-1870. Resultados de una encuesta agraria de la época*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1979, págs. 43 a 45 y 226.

¹⁸³ Guerrero, Ana Clara, *Viajeros británicos en la España el siglo XVIII*, Aguilar, Madrid, 1990, págs. 148 y 163.

¹⁸⁴ Piqueras Haba, Juan, ob. cit., pág. 217. Igualmente en Demerson, Jorge, Demerson, Paula de y Aguilar Piñal, Francisco, ob. cit., págs. 370 y 371.

¹⁸⁵ De algunos inventos hemos llegado a saber de su transmisión y posterior reproducción gracias a labradores particulares. Es el caso de un párroco de Tutelilla, que habría construido un instrumento para facilitar la trilla, inventado por Juan Cristóbal Manzanares, cura de la parroquia e la Villa de Orcajo, unas décadas antes. Este hecho está recogido en Díez Rodríguez, Fernando, ob. cit., pág. 99.

¹⁸⁶ AHN, Sección Consejos, Legajo 2.556, Expediente 14, año 1806, *La Sociedad Económica de Sevilla, sobre que se conceda privilegio exclusivo por diez años a don Ildefonso Martínez Delgado para construir una máquina hidrostática que ha inventado*.

En esta misma línea la *Sociedad de Amigos del País para incremento e la Agricultura e Industria del Pueblo*, establecida en la localidad de San Clemente, en la provincia de Cuenca, realizó pruebas con una máquina de trillar, cuyos resultados satisfactorios fueron publicados en la *Gaceta de Madrid* en 1787. Del mismo modo que había sucedido con la omisión de herramientas eficaces para el arado, puede decirse que sucedió en muchos casos con las máquinas de trillar. En 1805, Claudio Boutelou advertirá, una vez más, de la poca utilidad y desconocimiento dado a un trillo por parte de los agricultores. La máquina, ideada por Salvador Pavón, había sido examinada tras la petición hecha por la Junta de la Moneda a la Sociedad *Económica de Granada*, en 1803. Sin embargo, en el informe se recogía expresamente que a pesar de tener “tan señaladas ventajas, no parece ha tenido uso fuera de su examen, corriendo igual suerte que otras muchas máquinas que economizan y perfeccionan muchas labores de la agricultura”¹⁸⁷.

Nueva maquinaria siguió experimentándose a partir del año 1815 en Valencia y otras provincias españolas, según consta en las fuentes que hemos ido manejando. A ello habría que sumar inventos de máquinas y herramientas que eran recibidos en las Sociedades Económicas, algunas veces desde otras provincias con el ánimo de ser probadas, que nunca vieron publicados sus resultados, o sencillamente sus informes se perdieron. En cualquier caso, a los ingenios ideados por Manzanares y Pavón se unieron otros como Andrés Herrarte o Lucas Vélez, este último autor de un trillo de aspas ensayado en Madrid, sin olvidar a los religiosos bernardos de la Oliva en Navarra, quienes en sus tareas llegaron a utilizar un trillo compuesto por cinco rodillos de madera dispuesto de pedernales y cuchillas¹⁸⁸.

En definitiva, al igual que sucedería en toda Europa a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, existieron actuaciones concretas desempeñadas por parte de las Sociedades Económicas encaminadas a la innovación y al desarrollo de la agricultura en prácticamente todas las

¹⁸⁷ Castellano, Juan Luis, *Luces y reformismo. Las Sociedades Económicas de Amigos del País del Reino de Granada en el siglo XVIII*, Diputación Provincial-Universidad de Granada, Granada, 1984, pág. 288.

¹⁸⁸ Puede consultarse una excelente lista de inventos con sus artífices y sus correspondientes grabados en López Linaje, Javier y Arbex, Juan Carlos, *Agricultores, botánicos y manufactureros en el siglo XVIII*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1989, págs. 80 a 82. En relación a los ensayos en la Sociedad Valencia puede consultarse a Piqueras Haba, Juan, ob. cit., pág. 218.

provincias de España. De igual modo, contamos en la actualidad con un considerable número de obras y documentos que, a nuestro juicio, nos han permitido confiar en la existencia de una constante en las actuaciones de carácter innovador en la agricultura española. Documentos que en su mayoría comenzaron a aparecer, casi al mismo tiempo que surgían los Amigos del País. A este respecto, desgraciadamente no siempre se le dio la importancia merecida a las nuevas herramientas y descubrimientos ideados para las tareas agrícolas. De todo ello también ha quedado constancia, lo que produjo que en ocasiones quedaran olvidados en los archivos de las *Económicas* importantes documentos que nunca llegaron a su posterior estudio y puesta en marcha.

- Los primeros intentos de asociacionismo agrícola en España. Las Sociedades de Agricultura y el asociacionismo voluntario

El panorama asociativo referido a la propiedad agrícola en España a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XIX puede parecernos desolador a primera vista. Como ya se señaló en apartados anteriores, Pan-Montojo nos recordaba en su excelente artículo dedicado a las asociaciones agrarias en el período 1833-1898, la existencia a partir de los años treinta de tres niveles de asociacionismo en el mundo rural. Si las comunidades campesinas, los gremios y las Sociedades Económicas habían ocupado prácticamente todo el espacio asociativo agrícola durante los primeros años del XIX, la pregunta es evidente ¿Qué otras asociaciones dedicadas específicamente a la agricultura existieron hasta 1833 en nuestro país?

Hacia los primeros años del XIX, se tenía conocimiento en España de la existencia de un buen número de asociaciones, sociedades e instituciones dedicadas a la agricultura, algunas de ellas directamente relacionadas con las explotaciones agrarias de señalados propietarios en Europa. Si bien, aquí solamente trataremos algunos ejemplos, la literatura y la prensa de aquellos días hacían gala de un perfecto seguimiento en relación al asociacionismo, destacando de especial manera el que acontecía en los Estados alemanes y en Francia.

El interés por el asociacionismo y progreso en la agricultura comenzó en Francia alrededor de 1750 de la mano de Duhamel de Monceau con su *Tratado del cultivo de la tierra*. La importancia adquirida por la modernización de la economía tuvo su reflejo en la agronomía apareciendo una amalgama de sociedades de agricultura, unas veces creadas de forma espontánea por propietarios de tierras acomodados, otras con el apoyo o iniciativa del Estado, que veían en éstas un medio útil para la divulgación de las investigaciones y obtener información sobre la economía regional. En Bretaña se abrieron pronto las primeras sociedades agrarias, siendo Rennes la primera en hacerlo en el año 1760. Solo unos años después, en 1765, existían cerca de catorce¹⁸⁹.

Una de las más influyentes en toda Europa fue la *Sociedad Nacional de Agricultura* que, dependiente del ministro francés correspondiente, se complementaba en los distintos distritos y cantones con otras asociaciones subvencionadas igualmente por la Administración, así como por institutos destinados a la instrucción en materia de agricultura. De la misma forma, la *Sociedad de Agricultura de París* era mencionada en numerosas ocasiones en obras especializadas como un constante paradigma del fomento de la agricultura en Francia. En la edición de la *Agricultura General* de Gabriel Alonso de Herrera, correspondiente al año 1819, editada por la *Real Sociedad Económica Matritense*, se recuerda la existencia de una *Sociedad de Agricultura de Versailles*, que ya funcionaba en 1805, así como la *Sociedad de Agricultura del Sena*, hacia los años 1812 y 1813¹⁹⁰. Entre las distinguidas por los Amigos del País, se encontraba también otra situada en la ciudad de Meillant, conocida por haber solicitado la formación de sociedades de agricultura y economía rural en los diferentes distritos del país. La relación entre ellas, así como entre sociedades de distintos países, se realizaba a través de una fluida correspondencia que ya era conocida igualmente por nuestras Sociedades Económicas en la segunda mitad del siglo XIX¹⁹¹.

¹⁸⁹ Soboul, Albert, Lemarchand, Guy y Fogel, Michèle, *El siglo de las Luces. Los inicios (1715-1750)*. Tomo I. Libro I, Akal, Madrid, 1992, págs. 202 y 203.

¹⁹⁰ *Agricultura General de Gabriel Alonso de Herrera, corregida segun el testo original de la primera edicion publicada en 1513 por el mismo autor, y adicionada por la Real Sociedad Economica Matritense*. Tomo III, Imprenta Real, Madrid, 1819, págs. 193 y 453.

¹⁹¹ *El Ateneo. Órgano del Ateneo de Lima. Revista mensual de Ciencias y Bellas Artes*. Tomo III, Lima, 1800, págs. 308 y 309, y *Semanario de Agricultura y Artes. Dirigido á los párrocos*. Tomo II, Imprenta de Villalpando, Madrid, 1797, págs. 15 y 16. En relación a la correspondencia entre las sociedades europeas dedicadas al fomento de la agricultura, véase

El caso de los Estados alemanes era aludido de forma reiterada entre las publicaciones de la *Sociedad Matritense*. Para tener una idea de la actividad y del número de asociados, las cifras que por entonces se publicaban estaban alrededor de ciento sesenta sociedades de agricultura en Prusia, además de las existentes en otros Estados como Baviera, Sajonia o Hannover, lo que hacía que más de sesenta mil personas formaran parte de aquéllas. Aunque las primeras asociaciones aparecieron por 1764 en Hannover y Leipzig, la política seguida por los alemanes en materia de asociacionismo agrícola dio lugar a la formación, por parte de los propietarios más solventes, de varios institutos agrícolas, lo que suponía, según las noticias publicadas en España, un alto grado de prosperidad y una seguridad a los propietarios para la libre disposición del suelo. A todo ello, se sumó una considerable regularización entre éstos y los colonos, años antes de la unificación alemana¹⁹².

En este contexto, el triunfo liberal en determinados países como Portugal, produjo la consolidación de nuevas instituciones y de las sociedades agrícolas que tendrían su reflejo, como ya explicamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La expansión y el crecimiento de las asociaciones económicas y de carácter agrícola, en general, tuvieron a partir de esa misma fecha un importante avance en toda Europa, creándose sociedades de prestigio en la práctica totalidad de países.

En otros lugares del continente europeo los movimientos y el interés por la agricultura se habían iniciado pronto, estableciéndose, por ejemplo, secciones para el desarrollo agrícola en Suecia, gracias a la labor, primero de la *Academia Real* en 1739, con cinco de ellas dedicadas a la agricultura, y posteriormente, ya en 1767, a la *Real Sociedad Patriótica de Estocolmo*. En Dinamarca, la primera sociedad con dedicación a las tareas agronómicas fue la *Sociedad Real Económica y Agrícola* fundada en 1769. Mientras, en los

Instituciones Económicas de la Sociedad de Amigos del País de la ciudad, i Reino de Valencia. Primera Parte, 1777, págs. XLIII y siguientes.

¹⁹² La lista es amplia si nos atenemos a las noticias publicadas a mediados del siglo XIX, Así, por ejemplo, se mencionan el *Instituto Agrícola de Hoheinhein*, creado en 1818; el de *Scheleischem* en Baviera de 1822; el *Instituto Agrícola de Tharand* de Sajonia en 1830, etc. A la creación de estos establecimientos le siguieron otros de similares características en Dusseldorf y Darmstadt. Sobre la difusión en la prensa de las asociaciones agrícolas en los Estados alemanes basta con ojear la publicación ya citada de *El Amigo del País. Periódico de la Sociedad Económica Matritense*. Tomo Primero, Imprenta y Librería de Ignacio Boix, Madrid, 1844, pág. 9, o el *Diccionario de Agricultura Práctica y Economía Rural*. Tomo I, Madrid, 1855, págs. XVII y XVIII.

Países Bajos no pasarían muchos años hasta establecerse la *Sociedad para el Adelanto de la Agricultura de Amsterdam*. Movimiento que también llegaría a Noruega y Rusia en muy pocos años¹⁹³.

En el Reino Unido, numerosos propietarios acomodados con fuertes intereses en conseguir seguidores impulsaron investigaciones destinadas a racionalizar la economía en el campo. Durante el transcurso del siglo XVIII, figuras como Jethro Tull, Townshend, Lowel o Thomas Loke, aportaron nuevos conocimientos sobre la sustitución del barbecho o la utilización sistemática de maquinaria y abonos para el enriquecimiento y una mejor explotación de las tierras de labor¹⁹⁴. A la destacada actividad de la *Sociedad de los Pioneros para el Conocimiento de la Agricultura*, fundada por lord Cathcart en Escocia en 1723, le siguieron otras a nivel regional en Highlands o la *Sociedad Agrícola de Londres* que ya publicaba estudios y memorias en 1784. La existencia de establecimientos como la *Sociedad de Bath*, creada para el fomento de la agricultura y de las artes a finales del siglo XVIII, contrasta con la situación a mediados del siglo XIX de un significativo sector de la sociedad que reclamaba la regulación de asociaciones agrícolas de menor tamaño, estancadas, entre otras cuestiones, por las dificultades legislativas y el deficiente reparto de las tierras productivas¹⁹⁵.

¹⁹³ Mellado, Francisco de P., *Enciclopedia moderna. Diccionario Universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio*. Tomo I, Establecimiento Tipográfico de Mellado, Madrid, 1851, págs. 203 y 204. Respecto a los movimientos para el progreso de la agricultura en Europa y las sociedades agrícolas puede consultarse de Pacheco, Germán, *Agricultura, modernización y ciencias agrícolas en Venezuela. De la ilustración borbónica a los ilustrados del gomecismo, 1770-1935*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2007, pág. 39, así como la obra citada de Soboul, Albert, Lemarchand, Guy y Fogel, Michèle, págs. 295 y 206.

¹⁹⁴ Existen referencias a sus escritos en Soboul, ob. cit., págs. 203 y 204.

¹⁹⁵ Sobre la *Sociedad de Bath*, pueden encontrarse algunas reseñas en P. Mellado, Francisco de, ob. cit., págs. 201 y 202. Por otro lado, las llamadas asociaciones de producción agrícola, asociaciones de pequeños propietarios en Inglaterra, no tenían todavía, mediado el siglo XIX, una difusión amplia y efectiva. Sobre las dificultades de estas sociedades de labradores y propietarios, Salvador Manero recogía la cuestión de la siguiente manera: “Para esto han tenido hasta ahora en Inglaterra una dificultad poco menos que insuperable en los mayorazgos, y en las onerosas leyes que han regido sobre las traslaciones de dominio de la propiedad inmueble. Esta dificultad ha sido en parte removida por el actual parlamento, que ha modificado la ley facilitando el que pueda poseerse colectivamente la tierra, y reduciendo los gastos de escrituras, derechos del fisco y otros. Otra de las dificultades está en la concentración de la propiedad en pocas manos, pues todo el territorio inglés pertenece á 30.000 familias, cuando 30.000.000 de personas lo necesita para poder vivir en él. Donde la propiedad está muy dividida, como sucede en Francia, Bélgica y en alguna provincia de España, los pequeños propietarios cuyas tierras están limítrofes, pueden asociarse para cultivarlos en comun”. Extraído del ejemplar de Garrido, Fernando, *Historia de las asociaciones obreras en Europa ó las clases trabajadoras regeneradas por la asociación*. Tomo I, Imprenta y librería de Salvador Manero, Barcelona, 1864, págs. 325 y 326.

La divulgación y el reconocimiento suscitados por algunas Sociedades Económicas y otros modelos asociativos de marcado acento económico y cultural, debieron contribuir muy rápidamente a la aparición y al desarrollo de un cierto número de asociaciones al otro lado del Atlántico. Casi al mismo tiempo que habían comenzado a consolidarse en Europa, algunas publicaciones ya mencionaban el funcionamiento de sociedades similares en los Estados Unidos. De hecho, la *Sociedad de Agricultura y de Industria* de Nueva York era conocida en España por sus memorias que periódicamente publicaba desde el año 1829¹⁹⁶. Además de esta última, existían otras como la *Philadelfia Society for the Improvement of Agriculture* o la *Massachussets Society for Promoting Agriculture*, constituidas casi a finales del siglo XVIII, que serían la base para la aparición, décadas después, de sociedades similares en el resto del país¹⁹⁷.

En España, antes de concluir el siglo XVIII, en pleno auge y desarrollo de las Sociedades Económicas, se fundaron algunas Sociedades de Agricultura que no llegaron a consolidarse, en parte, debido a la influencia ejercida por Campomanes en su *Discurso*. La fuerte irrupción alcanzada por éste, provocó una rápida respuesta por parte de grupos de ilustrados deseosos de poner en marcha todo lo que estuviera relacionado con el fomento. Una actitud que, a la postre, favoreció la formación de asociaciones que tenían que ver más con los Amigos del País que con aquellas otras de exclusiva atención a la agricultura¹⁹⁸.

No es una casualidad el hecho que ya existiera una asociación de labradores en la provincia de Córdoba en 1656, sobre todo si recordamos y tenemos en cuenta que Alonso de Herrera ya había insistido, unos años antes, en el fomento de la actividad asociativa en nuestro país¹⁹⁹. A

¹⁹⁶ P. Mellado, Francisco de, ob. cit., pág. 207 y 208.

¹⁹⁷ Germán Pacheco, José, ob. cit., pág. 40. A partir de la segunda década del siglo XIX se fundarán, entre otras, la Sociedad de Agricultura de Boston, en el año 1854, y la Sociedad de Ohio. Éstas y algunas más están recogidas en el *Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística*. Tomo XII, Imprenta de Ignacio Cumplido, México, 1866, págs. 23 y 24.

¹⁹⁸ Además del fomento de la agricultura, Campomanes propone el fomento de las artes y oficios, en especial, los «oficios mecánicos», y la creación de fábricas, para lo que era imprescindible la creación de Academias Económicas y de Agricultura. Véase de Campomanes, ob. cit., págs. XXXIII, CXCIV y CCX. También puede consultarse Enciso Recio, Luis Miguel, ob. cit., pág. 123.

¹⁹⁹ En la «Memoria sobre el estado de la agricultura en la provincia de Córdoba», elaborada por el marqués de Benamejí y Joaquín de la Torre en 1849, se recoge la noticia de la existencia de una asociación de labradores cuyas ordenanzas fueron aprobadas por el rey el

comienzos del siglo XIX, la necesidad de crear asociaciones voluntarias de agricultores y propietarios destinadas a mejorar las condiciones en la producción y en la agricultura en España era todavía proyecto incipiente. Sin embargo, como veremos, sí se había iniciado un proceso sin retorno hacia la asociación espontánea, a la vez que se había comenzado un camino lleno de estímulos hacia la asociación organizada por parte de aquellas personas que vivían mayoritariamente de los recursos de la tierra.

Con la creación de las organizaciones económicas a mediados del siglo XVIII se habían puesto en marcha, además, los primeros órganos de opinión y de divulgación en la economía agraria, también en nuestro país. Al mismo tiempo que las Sociedades Económicas de Amigos del País intentaban organizarse, coexistían en las zonas rurales de la mayoría de las provincias grupos y colectivos de personas preocupados por lo que hoy podríamos denominar la sostenibilidad de la agricultura y el mantenimiento de la producción de los propietarios. Así, y a pesar de haber sido redactadas sus ordenanzas a mediados del siglo XVI por Juan Bernal Díez de Luco, las llamadas *Arcas de Misericordia* todavía se mantendrían reglamentadas hasta más allá de 1883, desapareciendo en algunas pequeñas ciudades y pueblos del País Vasco como consecuencia de las guerras carlistas. Establecidas con el propósito de prestar principalmente trigo a los labradores para la siembra, las conocidas *Juntas Vecinales* tenían otorgada la facultad para elegir dos vecinos «inteligentes y probos» para ejercer los empleos de Secretario y Depositario de las Arcas²⁰⁰.

A diferencia de las anteriores, una Real Instrucción de 31 de mayo de 1753 reconocía la doble función de los *pósitos*, reglamentados ya en tiempos del rey Felipe II, de otorgar protección al consumidor y al productor²⁰¹.

9 de marzo de 1656. Un resumen está recogido en el *Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos...* ob.cit., pág. 658. La mención al fomento de la actividad asociativa por Alonso de Herrera ya fue expuesta en capítulos anteriores.

²⁰⁰ *Revista Hidalguía. La Revista de genealogía, nobleza y armas*, números 286-287, Madrid, 2001, pág. 293. En relación a las funciones de las Juntas Vecinales y las Arcas de Misericordia, regularizadas con distintos Reglamentos en junio de 1849 y abril de 1883, se ha consultado la comunicación de Aranegui y Coll, Manuel de, “Síntesis de las peculiaridades de las Entidades locales alavesas”, *Ponencias, Comunicaciones y Conclusiones del I Congreso Italo-Español de Historia Municipal y de la V Asamblea de la Asociación de Hidalgos*, celebrada en Roma los días 5 al 10 de octubre de 1958, Instituto Luis Salazar y Castro (CSIC), Madrid, 1958, págs. 61 y 62.

²⁰¹ Silvestre Martínez, Manuel, *Librería de jueces, utilísima, y universal para todos los que desean imponerse en la Jurisprudencia Práctica, Derecho Real de España, y Reales Resoluciones mas modernas de rigurosa observancia; y en especial para Abogados, Alcaldes,*

Algunos historiadores han querido ver en esta institución la principal sociedad de ahorro, propia del Antiguo Régimen. En realidad, cada pósito se enmarcaba en el escenario local en el que estaba inmerso. En los inicios del siglo XIX todavía se prestaba atención a estos depósitos de grano como un remedio a los problemas de financiación en la agricultura española. En muchos casos, actuaban como auténticos centros de planificación agrícola, invirtiéndose sus beneficios en los gastos públicos, ya fueran relativos a la instrucción o a los gastos médicos del municipio, llegando incluso a realizarse obras públicas y préstamos a algunos agricultores²⁰².

A medida que la Ilustración daba paso al liberalismo, los pósitos dejaron de ser un elemento dedicado a la protección de los labradores para convertirse en un peculiar y cómodo acceso a los Ayuntamientos por parte de los propietarios mejor situados, con el fin de controlar los caudales de aquéllos. La falta de organizaciones agrícolas voluntarias de cierta entidad a comienzos de 1800 provocó que los grandes terratenientes y productores de cereales controlaran la práctica totalidad de estas instituciones de almacenamiento de granos. Como muy bien nos recuerda Cándido Román Cervantes, la actividad de los productores terminó por transformar sus funciones iniciales “logrando que sus activos en especie y en metálico fueran desviados hacia lucrativos negocios personales”²⁰³. En el futuro, todo ello trajo consigo una preocupación por las autoridades que darían lugar a distintas reglamentaciones y normativas. Lo cierto es que a las puertas del siglo del liberalismo en España, había, en cifras de José Canga Argüelles, un número de 5.251 pósitos reales. Cifra que no difiere considerablemente de los 3.371 contabilizados para el año 1751 y los 5.225 que calculó para el año 1854 el economista e historiador Gonzalo Anes²⁰⁴.

Corregidores, Intendentes, Prelados Regulares, y Jueces Eclesiásticos, Parrocos, Regidores, Escribanos, Diputados, Syndicos, y Personeros. Tomo séptimo, Imprenta de Blas Román, Madrid, 1774, págs. 265 a 294. Recogido también en el Título XX, titulado “De los pósitos, y sus Juntas municipales”, *Novísima recopilación de las leyes de España*. Tomo II, Libro VII, Galvan y Rosa, librero, Méjico y París, 1831, págs. 180 a 199.

²⁰² Sobre el funcionamiento de los pósitos en España existe una copiosa bibliografía. Para este caso, nosotros hemos utilizado de Román Cervantes, Cándido, *V Concurso de Historia de la Región Ciudad de Cartagena* (1989). *Accésit. El Comercio de Granos y la política de abastos en una ciudad portuaria. Cartagena 1690-1760*, Ayuntamiento de Cartagena, 1990, págs. 31 a 33.

²⁰³ Véase de Losa Serrano, Pedro y Cózar Gutiérrez, Ramón, “Los pósitos municipales. El ejemplo de Tobarra (1753-1764)”, *El mundo rural en la España Moderna*, Aranda Pérez, Francisco José (coordinador), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004, pág. 341. La cita es de Román Cervantes, Cándido, ob. cit., pág. 32.

²⁰⁴ Del cálculo están excluidos los llamados pósitos píos. Las cifras correspondientes al año 1800 están recogidas de las tablas publicadas por Canga Argüelles, José, *Diccionario de*

Separadas considerablemente de las anteriores formas asociativas, existieron otras tipologías de asociaciones voluntarias de agricultores y propietarios que transitaron a lo largo de las tres primeras décadas del siglo XIX por nuestro país. En realidad, su localización sigue resultando hoy compleja dada la escasa información que dejaron y la poca difusión que tuvieron. Un problema que todavía nos impide determinar en la mayoría de los casos cuándo comenzaron y cuándo dejaron de desempeñar su actividad. Así, todo ello es motivo suficiente para pensar que debieron existir más, en un número que todavía resulta difícil determinar. Tenemos, eso sí, algunos ejemplos que demuestran la capacidad colectiva para ejercer, unas veces las tareas destinadas a mejorar las actividades agrícolas, otras para reivindicar derechos, etc.

En un estudio reciente, Estíbaliz González ha analizado la transformación en sociedades de propietarios de las antiguas comunidades rurales guipuzcoanas, que durante el proceso de desamortización en España llegaron a constituirse en sociedades vecinales con la intención de acceder a la compra de tierras en las subastas y ventas de fincas enajenadas. Dichas sociedades, una vez realizada la compra, inscribían las nuevas propiedades en el Registro de la Propiedad a nombre de la sociedad. Aunque escasamente estudiado, el asociacionismo puesto en marcha por estas comunidades de pequeños propietarios y labradores, era utilizado como mecanismo de defensa ante el proceso de reformas liberales que se habían puesto en marcha, antes incluso de la llegada del Trienio Liberal²⁰⁵.

Entre los años 1816 y 1819, un joven y viajero francés, Jaubert de Passá, nombrado solo unos años antes auditor del Consejo de Estado, recorrió el principado de Cataluña y el reino de Valencia por encargo del

Hacienda con aplicación a España. Tomo segundo, Imprenta de Don Marcelino Calero y Portocarrero, Madrid, 1834, pág. 419. Asimismo se ha consultado el artículo de Anes, Gonzalo, "Los pósitos en la España del siglo XVIII", *Moneda y Crédito*, número 105, año 1968, págs. 39 a 69. En ambos casos, no se ha incluido el número de fanegas contabilizadas por los autores, por considerarlas no relevantes al tratar esta investigación de aquellas instituciones y asociaciones vinculadas o relacionadas con la propiedad agrícola en España.

²⁰⁵ Existe una interesante comunicación de Estíbaliz González Dios sobre las antiguas comunidades rurales guipuzcoanas que después comentaremos en el apartado dedicado a las primeras desamortizaciones realizadas en nuestro país. En cualquier caso, una reseña muy significativa al asunto está recogida en el artículo de Garrido, Samuel, Planas i Maresma, Jordi y Sabio, Alberto, "Asociacionismo y cooperativismo agrario: España en el contexto europeo", *Historia Agraria*, número 40, Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), Universidad de Valladolid, diciembre 2006, págs. 609 a 619.

gobierno de su país con el fin de informar sobre las leyes y costumbres que administraban dichos territorios, dejando recogidos en sus escritos muchos de los aspectos relacionados con la agricultura y las formas de explotación y organización en las haciendas rurales. Su obra sería traducida y publicada en dos volúmenes en 1844, gracias a la *Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia*. Passá hablaba ya de una *asociación de labradores* regida por unos sencillos, a la vez que dilatados estatutos en la ciudad de Tarragona²⁰⁶.

Aunque constituida entre lo que podríamos considerar una comunidad de regantes y una asociación agrícola propiamente dicha, a menudo Jaubert utiliza también el término de «gremio» para referirse al conjunto de asociados. En realidad nos está retratando la estructura de una asociación perfectamente delimitada, compuesta por la mayoría de los labradores domiciliados en la localidad. Entre otras muchas cuestiones, en la descripción está recogida la división de los socios en dos secciones, las funciones de la Junta General, la de los recaudadores, así como la del comisario de aguas y la vigilancia del archivo que debe quedar bajo la autoridad del gobernador de la ciudad. Como él mismo especifica en relación a los estatutos y ordenanzas: “algunas están dictadas á favor de la agricultura, y tienden á disminuir ó reprimir los abusos”. Finalmente, se refiere a la aportación de sus miembros que, según el autor: “pagan una misma contribución, que es la de una peseta todos los años, para ocurrir á los cargos y otros gastos imprevistos”²⁰⁷.

Más aún, y al referirse a la ciudad de Castellón, un poco más adelante nos subraya lo siguiente en relación a la existencia de otra sociedad de agricultores: “De lo dicho resulta que la institución de un gremio ó corporacion de labradores ha producido á la vez, entre los habitantes de la

²⁰⁶ En palabras del propio Jaubert de Passá “Esta asociacion de labradores se rige por estatutos muy sencillos, sin ponerlos aquí por estenso será útil el conocer y analizar algunas de sus disposiciones”, Jaubert de Passá, François, *Canales de Riego de Cataluña y Reino de Valencia, leyes y costumbres que los rigen: Reglamentos y ordenanzas de sus principales acequias: obra escrita en francés por Mr. Jaubert de Passá, traducida al castellano por el Señor D. Juan Fio, Socio de Mérito, Magistrado Honorario de esta Audiencia y Juez de primera instancia de Madrid. Publicada y Adicionada por la Sociedad Económica de Amigos del País*. Tomo I, Imprenta de D. Benito Monfort, Valencia, 1844, pág. 52. Existe una edición facsímil, preparada por la Universitat de València y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del año 1991 que está ampliada con una completa introducción. Nosotros, en cualquier caso, hemos utilizado ambas ediciones.

²⁰⁷ *Ibidem*, pág. 55.

villa y los de su término, una dichosa reforma en las costumbres, la estincion casi total de los robos, y una admirable seguridad entre los colonos”²⁰⁸.

Esta situación de oportunidad en la asociación voluntaria para actuar en defensa de los intereses de agricultores y propietarios está recogida en distintas publicaciones desde los mismos inicios del siglo XIX. A menudo aparecen como manifestaciones de intereses de los propietarios y otras como resultado de colectivos más amplios y mejor organizados. Sin embargo, sería necesario acceder a toda la bibliografía producida durante esos años y proceder a realizar un estudio muy detallado para hallar todas y cada una de las manifestaciones hechas en este sentido. En consecuencia, y en referencia a lo antes mencionado, sabemos que los labradores propietarios de Zaragoza fueron oídos por las Cortes de 1820 en su petición sobre las cargas de diezmos que venían sufriendo desde hacía tiempo²⁰⁹.

Las quejas y manifestaciones de malestar dirigidas hacia el Gobierno de la nación o a los representantes políticos en las Cortes encontraron en las «Exposiciones» una manera muy recurrente para ser oídos desde cualquier circunscripción del país. En consecuencia, no era difícil encontrar la referencia de algún importante propietario al lado de grupos de agricultores y labradores que desde una determinada región o provincia solicitaban algún favor o disposición de las autoridades correspondientes. Es el caso, por ejemplo, de Victoriano Jiménez y otros labradores, en relación a las cargas ocasionadas por la contribución territorial²¹⁰.

En esa misma línea se produjeron Decretos y Órdenes que dictaban derechos y disposiciones en respuesta a peticiones formuladas desde distintos espacios geográficos, agrarios y económicos del país, casi siempre referidos a la derogación de normativas relacionadas con el uso de tierras o

²⁰⁸ Ibídem, pág. 108.

²⁰⁹ “Los labradores propietarios de Zaragoza, regantes del canal llamado imperial, esponian las enormes cargas que sufrían, equivalentes al pago doble de diezmos, y pedían que se les aliviase alguna cosa el canon con que contribuyen por regar sus tierras. Las Córtes mandaron pasar la representacion á la comision ordinaria de hacienda”, en *Diario de las actas y discusiones de las Córtes. Legislatura de los años de 1820 y 1821*. Tomo IV, Imprenta especial de las Córtes, Madrid, 1820, pág. 381.

²¹⁰ Aunque no está especificada con claridad la procedencia de la misma, sí queda recogida la petición de la siguiente forma: “Una exposición de Victoriano Jimenez y otros labradores, sobre la exaccion de la contribución territorial”, en *DSC, Legislatura de 1822*. Tomo II, número 72. Sesión del día 30 de abril de 1822, Madrid, 1872, pág. 1089.

abaratamientos en las tasas impositivas²¹¹. En ocasiones, las peticiones se sucedían por aspectos más puntuales, gracias a lo cual, hemos podido conocer la existencia de asociaciones voluntarias plenamente conformadas en relación a la agricultura y la propiedad territorial, entre los años 1817 y 1821. La primera noticia que hemos encontrado relativa a la *Sociedad de Labradores de la ciudad de Antequera* está fechada en el año 1790 y se refiere a una protesta realizada contra su corregidor, por cuanto éste habría proyectado la construcción de dos paseos con daños significativos a los labradores²¹².

La Sociedad, que aparece con sensibles cambios en la denominación, según la fecha a la que nos refiramos en las fuentes, la encontramos unos años después, el 26 de agosto de 1817, en la *Gaceta de Madrid* correspondiente a ese mismo día. En efecto, un Real Decreto de 30 de mayo de ese año, en contestación a una petición formulada por la citada Sociedad, es motivo nuevamente de respuesta por parte de la asociación antequerana en los siguientes términos:

Señor: La Real sociedad de labradores de la ciudad de Antequera con el mas profundo respeto se dirige á V. M. para manifestar su gratitud y reconocimiento por el Real decreto de 30 de Mayo último, en que V. M., siempre solicito por la felicidad de sus vasallos, los acaba de redimir con dicho decreto de las pesadas y mortíferas trabas que les imponia el sistema

²¹¹ Hemos querido detenernos en lo publicado respecto a algunos municipios y localidades de la provincia de Albacete y Murcia, además de la ciudad de Ronda, en relación a la derogación del artículo primero del decreto de 8 de junio de 1813, por el que se dejaba “expedito á los propietarios forasteros el uso de sus montes y pastos”. En concreto la Orden dictada el 12 de junio de 1822 comenzaba de la siguiente forma: “Las Cortes, habiendo tomado en consideración las exposiciones de Antonio Alonso y Antonio Ruez Cubezar, individuos del gremio de ganado lanar y cabrío de esta corte; de los Ayuntamientos de la ciudad de Chinchilla y villa del Bonete; del Ayuntamiento de la villa de Zahara; de varios labradores de Fuente de Cantos; de D. Juan de Troya, vecino de Benoacaz, y de varios vecinos y labradores de la ciudad de Ronda...”, extraído de la *Colección de los decretos y ordenes generales expedidos por las Cortes desde 1º de marzo hasta 30 de junio de 1822*. Tomo IX, Imprenta Nacional, Madrid, 1822, págs. 396 y 397.

²¹² AHN, Sección Consejos, Legajo 1.276, Expediente 13, año 1790, *La Sociedad de Labradores de la ciudad de Antequera, sobre que el corregidor de ella cese en la construcción de dos paseos que ha proyectado por los daños que se siguen a los labradores*. Asimismo en AHN, Sección Consejos, Legajo 6.030, Expediente 162, año 1790, *Consulta de 26 de agosto de 1790 con motivo de una instancia de la Sociedad de Labradores y Ganaderos de la ciudad de Antequera, sobre que cese en la continuación del paseo y camino proyectado por el corregidor desde la puerta de Granada al callejón de La Mancha*.

antiguo de rentas que por desgracia gobernó hasta ahora, sistema tan perjudicial al vasallo como á la prosperidad del reino y erario de V.M.²¹³.

El entonces obligado suministro y abastecimiento proporcionado por los municipios a las tropas, conocidos como «bagages», provocó en la ciudad malagueña de Antequera una fuerte desaprobación a través de una extensa exposición que apareció publicada en distintos textos y publicaciones de la época. La citada exposición presentada por el diputado por Extremadura, Diego Muñoz Torrero, conteniendo los males que originaba el sistema de bagages en la localidad, era lo suficientemente preciso al quedar recogido en las actas de las Cortes de la siguiente manera:

La sociedad de labradores de Antequera, provincia de Málaga, hacia á las Córtes una larga esposicion sobre bagages, en la cual manifestando los trámites por donde este servicio se habia ido graduando en términos que al presente arruinaba á la benemérita clase de labradores, tragineros y vecinos pobres, indicaba los medios de remediar unos males no menos funestos á las espresadas clases que á la milicia²¹⁴.

A tenor de la limitada documentación con la que contamos, sabemos por los fondos de la Sección Consejos del Archivo Histórico Nacional, correspondientes al año 1820, que la *Sociedad de Labradores de Antequera* dispuso igualmente de terrenos en los que experimentaba distintas técnicas de cultivo, al mismo tiempo que recaudaba recursos para las necesidades que pudieran surgir entre los labradores y propietarios²¹⁵. Información que, en cierta medida, confirma la acción común que en muchos casos se forzó ante los problemas que planteaba la agricultura antes del Trienio.

²¹³ En realidad, es el único texto en el que la hemos encontrado como «Real sociedad». Véase la *Gaceta de Madrid*, martes 26 de agosto de 1817.

²¹⁴ *Diario de las actas y discusiones de las Córtes. Legislatura de los años de 1820 y 1821*. Tomo IV, ob. cit., pág. 425. También en el *Índice General de las cosas más notables contenidas en los tomos del Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, desde el 1º al 11º, en que se comprenden las sesiones de legislatura de 1820*, Imprenta Nacional, Madrid, 1821, pág. 13.

²¹⁵ AHN, Sección Consejos, Legajo 3.449, Expediente 15, año 1820, *Don Antonio Palomo, vecino e individuo de la Sociedad de Labradores de Antequera, sobre que se apruebe el acuerdo que ésta ha celebrado relativo a que todos los labradores de aquella ciudad y término por cada yunta que posean paguen diez reales, invirtiéndose este producto en el coste de los embargos de carruajes que se ofrezcan*. Asimismo, en el Expediente 16 del mismo Legajo referido al: *Expediente a instancia de la Sociedad de Labradores de Antequera sobre que se apliquen a ella las fincas y caídos de la extinguida Hermandad de Labradores para por este medio hacer experimentos útiles*.

En la actualidad resulta de mucha utilidad conocer el ánimo de asociación que existía entre las comunidades rurales de principios de siglo XIX. Gracias a los legajos conservados en el Archivo Histórico Nacional, en particular a las solicitudes realizadas por parte de algunos propietarios y vecinos labradores para establecer Sociedades Económicas de Amigos del País, sabemos que durante algunos años se mantuvo con cierta regularidad otra *Sociedad de Agricultura* ubicada en la localidad de Pareja, en la provincia de Guadalajara²¹⁶.

Junto a esta información existe otra relevante en los archivos de la *Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia*, perteneciente a la misma Sociedad de Agricultura. Una carta fechada en 1817, y dirigida a la *Económica Valenciana* por el Comisionado de la *Sociedad de Agricultura de Pareja*, Juan Benito Hermosilla, manifiesta sus deseos de mantener correspondencia con aquélla, enviando un ejemplar de sus Ordenanzas²¹⁷. En el volumen correspondiente a las Ordenanzas de la Sociedad que todavía se conserva en la biblioteca de los Amigos del País en Valencia, queda justificada la constitución de una asociación de agricultura en la villa de Pareja y sus aldeas limítrofes en los siguientes términos:

Que asolado su término en la permanencia de las tropas de los Guerrilleros, principalmente de las de Don Juan Martin el Empecinado, que durante la Guerra con la Francia y la invasion del intruso tuvo de continuo la residencia y Quartel general en sus inmediaciones, vieron los vecinos á la feliz restitucion de S. M. al Trono, destruidos sus Campos, los Plantios talados, deshechos los Caminos, confundidas las regueras y servidumbres públicas, y los Rios que fluyen por sus hermosas Vegas, inutilizados y sin poder servirse de sus Aguas para el uso y aprovechamiento de sus Sementeras y demas objetos de la Agricultura, de la que exclusivamente depende su subsistencia. Esta miserable situación de los vecinos que no tienen otro modo de vivir, los

²¹⁶ Buena prueba de ello puede encontrarse también en las obras ya citadas de Demerson y Aguilar Piñal, y de Mariano García Ruipérez, referidas a las Sociedades Económicas de Amigos del País. En relación a la *Sociedad de Agricultura de Pareja*, la información recogida corresponde al AHN, Sección Consejos, Legajo 3.031, *Expediente 14, año 1817, El procurador síndico de la villa de Pareja sobre aprobación de las ordenanzas y establecimiento de una Sociedad de Agricultura compuesta de cierto número de vecinos honrados*, y AHN, Sección Consejos, Legajo 3.423, *Expediente 34, año 1819, Expediente formado en virtud de real orden con la que se remite al Consejo para que consulte una solicitud de la Sociedad de Agricultura de la villa de Pareja en que pide la concesión de un terreno baldío y realengo para destinarlo a la Escuela práctica de Agricultura*.

²¹⁷ Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, en adelante ARSEAPV, caja C-60, legajo II, Agricultura, signatura número 3, año 1817.

ha conducido á la necesidad de pensar sobre el médio mas pronto y eficaz de repararse en sus pérdidas y atrasos, y adelantar en lo posible sus fortunas é intereses; y en consecuencia fixando la vista en la proteccion que el Gobierno dispensa a los Labradores, y seguros del amor que inspira á la Agricultura, único recurso del Estado, han creido conveniente y necesario formar una Sociedad de Agricultura limitada á este único objeto, compuesta de cierto número de vecinos Labradores honrados de la Villa y sus Aldeas, presidida de uno de sus Alcaldes ordinarios, con el instituto de proteger al Labrador, establecer y cuidar de la policía agraria, crear propietarios en los terrenos yermos y abandonados, que los hagan frutíferos²¹⁸.

Tanto en las Ordenanzas, como en la carta de Juan Benito Hermosilla dirigida a la Sociedad Económica, evidencian, en efecto, la creación de una asociación de agricultores y propietarios en el año 1816, con la finalidad de fomentar «por quantos medios son imaginables» el sector de la agricultura, además de promover el aumento de la producción en las propiedades agrícolas²¹⁹. En la holgada lista de socios y vocales se encontraban alcaldes, algún miembro de la Diputación de Gremios de la Corte, así como párrocos y oficiales del ejército, entre otras profesiones, destacando especialmente los propietarios hacendados de las villas alcarreñas²²⁰.

Por último, a pesar no poder determinar la duración de la actividad de la *Sociedad de Agricultura de la Villa de Pareja*, lo cierto es que debió ejercer una gran influencia en las comarcas alcarreñas y otras regiones del país. De hecho, en las publicaciones del *Real Jardín Botánico de Madrid*, aparece mencionada en varias ocasiones la figura de Antonio Regás, del que ya dejamos alguna reseña más arriba. En efecto, éste aparece como socio «Honorario y de Mérito» en las Ordenanzas de la referida Sociedad, autor, además, de un nuevo modelo de arado que verificó la propia Sociedad de Pareja. Con la publicación de los logros conseguidos por parte del innovador Regás, se pierde la secuencia histórica de una de las asociaciones

²¹⁸ *Ordenanzas de la Real Sociedad de Agricultura, creada en la Villa de Pareja y sus Aldeas el año de 1816*, Imprenta de López y Hermano, Madrid, 1817, págs. 3 y 4.

²¹⁹ *Ibidem*, pág. 10.

²²⁰ A los vecinos naturales de Pareja y otras localidades alcarreñas, con especial dedicación en las tareas agrícolas, se les anota específicamente dicha condición figurando unas veces como hacendado o labrador y otras sencillamente como simple hacendado. Así, encontramos distintas aclaraciones en las Ordenanzas del tipo: “natural, vecino, Labrador y hacendado en la misma”, y otras veces como “natural y hacendado en la misma”. Evidentemente, por pura definición, el término «hacendado» está haciendo referencia a un propietario terrateniente o latifundista, de la comarca. *Ibidem*, págs. 37 a 42.

voluntarias de propietarios y labradores que tuvo, con seguridad, un crédito señalado en los primeros años del siglo XIX en España²²¹.

3.- DE LA PROPIEDAD INMOVILIZADA AL ACCESO A LA TIERRA

- Propiedad e inmovilismo

Consumido el Antiguo Régimen, el siglo XIX supondrá un período de transformaciones en la administración de la propiedad agraria, además del comienzo en la redistribución de la principal fuente de poder en España. Un tiempo marcado por la puesta en marcha de mecanismos e instrumentos legales con los que habría de llevarse a cabo la mayor enajenación de tierras en nuestro país. A su estudio han contribuido en las últimas décadas muchos investigadores con el fin de constatar los efectos que tuvieron sobre la economía, la sociedad y la hacienda, cuestiones como la abolición de los señoríos, la eliminación de los mayorazgos o las sucesivas etapas desamortizadoras.

Mediado el siglo XVIII, Europa había experimentado un crecimiento demográfico muy importante, produciéndose de manera casi simultánea una mayor demanda de productos alimenticios, así como el aumento en los arrendamientos y el precio de las tierras de cultivo. Consecuentemente, todo ello dio lugar a un trascendental incremento en los precios agrícolas y un descenso notable en los costes de la mano de obra. Un panorama que no tardaría en mostrarse nocivo contra una población campesina, empobrecida como consecuencia del descenso en sus salarios. Junto a todo ello, el aumento de las rentas de la tierra y una creciente demanda del suelo agrícola darían lugar a cambios ineludibles en la propiedad y en la coyuntura económica. Nuevas ideas que habrían de impulsar el incremento en los cultivos y en la producción agraria en toda Europa²²².

²²¹ Ibidem, pág. 42. La descripción detallada de la invención de Antonio Regás y su vinculación a la Sociedad de Agricultura de la Villa de Pareja, puede consultarse en Arias y Costa, Antonio Sandalio de, *Lecciones de Agricultura esplicadas en la Cátedra del Real Jardín Botánico de Madrid el año de 1815*. Tomo Primero. Segunda Edición corregida, y considerablemente aumentada por el mismo autor, Imprenta de Fuentenebro, Madrid, 1818, págs. 173 a 177.

²²² Existe abundante bibliografía sobre la historia económica y agraria en Europa. Nosotros para este período hemos consultado, entre otros textos, el capítulo correspondiente a “La

Conviene sin embargo advertir, que el proceso de cambio de propiedad de la tierra en España no fue sino un episodio más que afectó por igual al viejo continente europeo, dando lugar a la modernización de las economías y sociedades del siglo XVIII. La introducción de nuevas técnicas de cultivo, la política de nuevas roturaciones en el terreno, el abandono de barbechos gracias a la introducción de abonos y fertilizantes, el cultivo de nuevos vegetales destinados a la industria y el aumento notable en la productividad, son algunos de los cambios que prueban la transición hacia una auténtica revolución agraria. Ésta, sin duda, produjo cambios en los sistemas de tenencia de la tierra y en los métodos de cultivo, forzando a la economía a la comercialización de la producción en un nuevo mercado mundial. Por ende, la producción y el comercio dieron paso a una nueva clase social más dependiente de los éxitos especulativos y comerciales que de los antiguos títulos nobiliarios²²³.

Hasta el advenimiento de la Revolución Industrial, las demandas de productos no agrícolas requeridos por la mayoría de la población campesina apenas sí existían. Lo que en realidad importaba eran las variaciones en los ingresos de los hacendados y propietarios de la clase dirigente y administradora, ya que la mayoría de la población, dedicada al trabajo de la tierra, no podía actuar con libertad aceptando o dejando, según conviniera, el terreno de cultivo del que obtenían su subsistencia. Una parte importante, pues, de las comunidades rurales en Europa y, por consiguiente, en España, hacía tiempo que había asumido una serie de lazos que, legalmente, quedaban sometidos a un Señor o propietario de la tierra²²⁴.

Durante años, fueron precisamente los modos de producción una de las partes esenciales del discurso marxista que asumía la integración de las

agricultura en la época moderna (c. 1550 – c. 1850”, en Slicher van Bath, Bernard H., *Historia agraria de Europa occidental: 500-1850*, Serie Universitaria, Ediciones Península, Barcelona, 1974, págs. 289 a 477, y Abel, Wilhelm, *La Agricultura: sus crisis y coyunturas. Una historia de la agricultura y la economía alimentaria en Europa Central desde la Alta Edad Media*, en particular el capítulo dedicado a los “Cambios en agricultura y economía alimentaria en Europa Central, del siglo XVI a mediados del siglo XVIII”, Fondo de Cultura Económica, México, 1978, págs. 145 a 223. Finalmente son de interés los artículos de la obra de Aston, T. H. y Philpin, C. H. E. (eds.), *El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial*, Crítica, Barcelona, 1988.

²²³ Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, *Historia económica y social moderna y contemporánea de España. Tomo I. Siglos XV-XIX*, UNED, 4ª reimpresión, Madrid, 1997, pág. 200.

²²⁴ Para tener una idea acerca de los llamados «modos de producción», hemos consultado la obra ya citada de Aston, T. H. y Philpin, C. H. E., (eds.), págs. 14 y 15.

estructuras de la propiedad en el conjunto formado por las relaciones de producción. Por consiguiente, las diversas formas de propiedad surgidas en el transcurso de este período tan significativo para la economía hemos de considerarlas una parte esencial de la historia económica. En particular, cuando nos referimos a instituciones como el mayorazgo o los señoríos, ya fueran territoriales o jurisdiccionales²²⁵.

Tratándose nuestro trabajo de la acción colectiva de propietarios de tierras y agricultores, resulta obvio considerar también en el mismo los aspectos y las consecuencias de un proceso que se resolvió, en líneas generales, de manera favorable en lo relativo a la creación y posterior consolidación de una amplia cáfila de hacendados y terratenientes medios, capaces de quebrar el desequilibrio estructural de la propiedad agrícola en la España liberal del siglo XIX.

Nuestro país, al igual que sucedería con el resto de economías mediterráneas, se incorporaría algo más tarde al proceso general de transformaciones en la agricultura. A comienzos del siglo XIX cada país se iba a ver frente a una serie de problemas similares. En Gran Bretaña sería la reparcelación de los «open fields» y el reparto de los suelos comunales o «enclosures». Francia afrontaría la expropiación de los bienes eclesiásticos. Alemania pondría en marcha en las zonas orientales el «gutsbesitz»²²⁶. Como han subrayado en más de una ocasión las profesoras Ana Clara Guerrero y Sagrario Torres, junto al profesor Santos Juliá, es probable que dicho retardo esté justificado por la retirada del comercio mundial durante un período importante de la Edad Moderna. Este hecho, motivó además la imposibilidad de integrar económicamente y en un mercado único a los reinos que en esos momentos formaban parte de todo el Estado. Circunstancia, no olvidemos, que para algunos investigadores acarreó el no desarrollo de una industria moderna y comercial, lo que hubiera estimulado una mayor productividad, así como una mayor competitividad en el mercado mundial. Hecho que demuestra, una vez más, la autoridad y consistencia

²²⁵ También en este aspecto relativo a los modos de producción resultan de interés las reflexiones que se aportan en Pérez Picazo, María Teresa, “Mayorazgo y desvinculación en el municipio de Murcia, 1750-1850”, *Historia, instituciones, documentos*, número 16, Universidad de Sevilla, 1989, págs. 289 a 304.

²²⁶ Slicher van Bath, Bernard H., ob. cit., pág. 467.

que tuvieron durante un período suficientemente amplio la sociedad estamental y las distintas instituciones del Antiguo Régimen²²⁷.

Más de las dos terceras partes de la población española de principios del siglo XIX tenía su principal fuente de ingresos en la tierra, siendo ésta más del 50 por ciento de la riqueza nacional. En concreto la agricultura suponía el 56 por ciento del total de la producción (más del 80 por ciento si se incluye la ganadería), limitada por una organización y explotación de la propiedad cargada de inconvenientes²²⁸. Del total del territorio productivo, el clero y la nobleza poseían alrededor del 60 por ciento. Los datos que se aportaron a las Cortes de Cádiz en 1811, nos dejan la cifra de 17,6 millones aranzadas de tierra bajo jurisdicción regia o «realengo», siendo algo más de 28 millones de señorío nobiliario o secular y 9,1 millones de señorío de abadengo o eclesiástico y de las órdenes militares. Unas cifras que se aproximan bastante a la distribución realizada en el censo de 1797 (véase el cuadro 1)²²⁹.

Precisamente, es muy significativo que en dicho censo se hallasen enumeradas 12.071 ciudades, villas y otros lugares de realengo, 8.752 de señorío secular, 1.332 de abadengo, 2.594 de señorío eclesiástico y 714 villas, lugares y otras aldeas pertenecientes a las órdenes religiosas (véase el cuadro 2)²³⁰. En consecuencia, cerca de un 30 por ciento de toda la población masculina formaba parte de la llamada clase improductiva u

²²⁷ Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, ob. cit., págs. 199 y 200.

²²⁸ Rueda Hernanz, Germán, *España 1790-1900. Sociedad y condiciones económicas*, Istmo, Madrid, 2006, pág. 115.

²²⁹ Antes de que se pusiera en vigor el Sistema Métrico Decimal en España, por un Real Decreto de 1879 (en Europa Ley de Pesas y Medidas de 1853), dependiendo de las regiones se utilizaba como unidad de medida la aranzada, equivalente en Castilla a unos 4.472 metros cuadrados y en zonas de Andalucía, como es el caso de Córdoba, a 3.672. En algunos textos la aranzada «normalizada» suponía un área de 4.474 metros cuadrados. Véase, por ejemplo, en González Jiménez, Manuel, «Repoblación de El Puerto de Santa María», González Jiménez, Manuel (Ed.), *Repartimiento de El Puerto de Santa María*, Universidad de Sevilla, 2002, pág. XCVIII. Pero especialmente es recomendable el capítulo dedicado a las «medidas superficiales y agrarias» de Alvera Delgras, Antonio, *Consultor Métrico y Monetario, cuentas hechas de todas clases, a todos los precios, por mayor y menor*, Librería de León Pablo Villaverde, Madrid, 1834. Respecto a los datos del total de tierras productivas hemos utilizado los trabajos de Castells, Irene y Moliner, Antonio, *Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845)*, Ariel Practicum, Barcelona, 2000, págs. 18 a 22; Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, ob. cit., pág. 201, y Bernal, A. M., *La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen*, Taurus, Madrid, 1979, pág. 43.

²³⁰ *Censo de la población de España de el año de 1797. Ejecutado de Orden del Rey en el de 1801*, Imprenta de Vega y Compañía, Madrid, 1801, pág. XLIV.

CUADRO 1

Distribución por regiones de los tipos tierras según el Señorío en el censo de 1797

Provincias	% del total tierras cultivadas			% del total de cada grupo		
Señorío:						
	Realengo	Eclesiástico	Secular	Realengo	Eclesiástico	Secular
Vascongadas	51,4	-	48,6	4,37	-	2,79
Navarra	83,4	1,6	15	3,85	0,14	0,46
Cataluña	28,5	20,9	40,5	6,08	11,28	6,44
Aragón	38	20,9	40,5	9,91	10,46	7,05
Valencia	14	13,3	71,1	1,98	3,65	6,80
Murcia	70,3	16,8	12,8	9,61	4,45	1,18
Andalucía						
oriental	63,3	6,8	29,8	10,92	2,28	3,48
Andalucía						
occidental	32,6	4,1	63,1	8,36	2,06	10,95
Extremadura	16,8	34,2	48,8	4,22	16,65	8,28
Castilla la Nueva	26,8	16,2	56,9	15,92	18,76	22,89
Castilla la Vieja	33,9	7,8	58,1	11,65	5,23	13,51
Asturias-León	34,7	12,6	52,5	11,56	8,18	11,83
Galicia	9,1	52,5	38,3	1,50	16,81	4,27

FUENTE: Castells, Irene y Moliner, Antonio, *Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845)*, Ariel, Madrid, 2000, pág. 20.

ociosa. El resultado final, además de las propias condiciones geográficas del terreno, era una realidad formada por una gran parte de tierras incultas, que ya en los primeros años del siglo XIX era constatada por Alexandre Moreau de Jonnés en su *Estadística de España*. En palabras del autor: “Consultado el censo oficial de 1803, se puede conocer hasta que punto estaba reducida aun en esta época, que no está muy distante, la estension del cultivo de las cereales en España, y por consiguiente el trabajo la industria de los agricultores”. Más adelante continúa explicando la situación de la agricultura de la siguiente forma: “Una agricultura tan reducida dejaba incultas de 14 á 15 mil leguas cuadradas; y para encontrar en la Península una llanura de una legua sembrada de cereales, era menester andar 8 por

pastos, bosques de encinas ó alcornoques, en que rara vez habia alguna viña, moreras, olivares, y algun campo sembrado de lino ó cáñamo”²³¹.

CUADRO 2

Distribución de la población en las ciudades, villas... según el censo de 1797

	Ciudades	Villas	Lugares y feligresías	Aldeas	Granjas	Cotos	Despo- blados	Corregi- mientos
Realengo	126	1.703	7.870	879	934	118	291	150
Abadengo	-	135	948	42	46	129	25	7
Señorio Eclesiástico	7	260	1.254	123	644	154	149	3
Señorio Secular	15	2.286	4.267	671	612	400	430	71
De órdenes Religiosas	-	332	186	106	15	36	37	2
TOTAL	148	4.716	14.525	1.821	2.251	837	932	233

FUENTE: *Censo de la población de España de el año de 1797*, Madrid, 1801, pág. XLIV.

La España de comienzos del período contemporáneo mostraba una perspectiva en la que prácticamente el 62 por ciento de las tierras eran pastos, baldíos, comunales y otros bienes concejiles, siendo el resto explotado en propiedad o arriendo. No existía mejora sustancial en los campos al no invertirse los excedentes en nuevas tierras o en técnicas más modernas. Las diferencias sustanciales en cuanto a la propiedad de la tierra, los sistemas de cultivo, modos de vida u organización social, confirmaban una desigualdad, más apreciable cuanto más se viajaba hacia el sur

²³¹ *Estadística de España. Territorio, población, agricultura, industria, comercio, navegación, colonias y rentas. Por Al. Moreau de Jonnés. Puesta en castellano por D. José Garriga y Baucís*, Imprenta de Cabrerizo, Valencia, 1835, págs. 127 y 128.

peninsular²³². La nobleza y el clero, preocupada más de los gastos suntuarios y no productivos, salvo excepciones, apenas sí utilizaba los beneficios para multiplicar su pequeña escala comercial. Salvo por la existencia de Sociedades Económicas en las grandes poblaciones, los hacendados quedaban muchas veces excluidos del posible desarrollo agrícola. Una herencia que, además, era transmitida sin apenas cambios en sus estructuras.

La senda que debía abrir el camino de la asociación entre agricultores y propietarios debía todavía salvar diversas reglamentaciones procedentes de la época feudal. Tierras inmovilizadas que pertenecían a la Iglesia, a la nobleza y a los municipios. Propiedades amortizadas que en ningún caso podían enajenarse. En este orden de cosas se encontraba el mayorazgo que exigía, entre la clase noble, el traspaso de todas las propiedades y bienes a una sola persona, por lo general al hijo mayor de la casa o linaje, lo que suponía olvidarse de una posible venta o traspaso a otros titulares. A las vinculaciones familiares de la tierra había que añadir las «manos muertas» de los municipios. Tierras, estas últimas, más extensas que las de la institución eclesiástica, dedicadas en su mayoría al monte y a los pastos²³³.

Como dueños de las grandes extensiones, una parte importante de propietarios dedicaban una mayor atención a los cereales. Éstos, resistían como el cultivo por excelencia en casi todas las regiones predominando en Castilla la Vieja, las comarcas de La Mancha y Aragón. Tomando como referencia el año 1818, el trigo ocupaba el 70 por ciento de las tierras de cereal. Tras el trigo, eran la cebada, el maíz o el centeno los cereales más cultivados, dejando el olivar para las regiones del sur como Andalucía interior, Extremadura y diversas áreas de Cataluña y Aragón. La vid era cultivada en mayor o menor medida en la práctica totalidad del territorio español, si bien con distintas calidades. A todos ellos había que añadir el laboreo de leguminosas y productos de la huerta, lo que daba a la agricultura española una importante diversidad con distintos rendimientos; una huerta más rica y triguales exiguos respecto a los réditos en Europa²³⁴.

²³² Rueda Hernanz, Germán, ob. cit., pág. 116.

²³³ Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, ob. cit., pág. 200

²³⁴ Rueda Hernanz, Germán, ob. cit., págs. 118 y 119.

No es una casualidad el hecho de que en España concurrieran las mismas circunstancias que en otros países europeos respecto a la presión sobre las propiedades de la tierra. El crecimiento demográfico acaecido desde mediados del siglo XVIII, además de una manifiesta bancarrota como consecuencia de los conflictos contra Francia e Inglaterra, movilizaron al Estado en busca de soluciones que amortiguaran la zozobra económica. Asimismo, y debido a la vinculación de las propiedades, resultó prácticamente imposible recalar en el ámbito del comercio, tanto interior como exterior, hecho que motivó, por parte de los ilustrados, la consideración de un verdadero obstáculo político y económico el mantenimiento de inmovilización de las tierras productivas²³⁵.

En tal caso, las medidas reformadoras dirigidas a transformar el régimen jurídico de la propiedad de la tierra comenzaron a concebirse tímidamente en pleno auge de la Ilustración, tratando de limitar los efectos feudales que todavía perduraban y llevando a cabo una transformación de los antiguos derechos sobre la propiedad para privatizarla de un modo concluyente. Para ello hubo que implementar un período de promulgación de leyes y decretos dirigido contra las antiguas clases propietarias. Es decir, articular toda una legislación orientada a la abolición de los señoríos, la desvinculación y supresión de los mayorazgos, además de una desamortización de todos aquellos bienes eclesiásticos y municipales incapacitados jurídicamente para su enajenación. La liquidación, en suma, de los antiguos privilegios sobre la tierra. Un asunto que, aunque de una forma esbozada, conviene poner en consideración en las páginas siguientes.

- La abolición de los señoríos

La consecución de algún título nobiliario suponía para su propietario y sus herederos recursos suficientes para el mantenimiento de una vida holgada, como correspondía a un miembro de la nobleza. El heredero del

²³⁵ En efecto, los trabajos ya clásicos en la demografía de Livi Bacci, nos presentan una población española que pasó de tener en el año 1717 algo más de siete millones y medio de habitantes a diez millones y medio en 1797. Véase Livi Bacci, M., "Fertility and nuptiality changes in Spain from the late 18th to the early 20th century", *Population Studies*, number 22, 1968, pág. 84. Igualmente en las primeras páginas dedicadas a la desamortización del suelo en Nadal, Jordi, *El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913*, Ariel Historia, 15ª reimpresión, Barcelona, 1997, págs. 54 y 86.

título, el mayor de los hijos, adquiriría igualmente todos los bienes vinculados a la casa nobiliaria. Así, al menos, era el esquema social en el Antiguo Régimen. Por otra parte, existían los señoríos de «propiedad» o territoriales, que implicaba la tenencia de títulos sobre la tierra y especialmente los de «jurisdicción» que, en opinión de Artola, se debían al reconocimiento o atribución, por parte de la Corona, del desempeño de funciones judiciales o administrativas. Es decir, derechos de «señorío» que tenían que ver con privilegios sobre la pesca, la caza, molinos, etc., así como restos de vasallaje relativos a cobros de impuestos y demás excepciones legales²³⁶. Los señores, de esta manera, podían adquirir rentas procedentes de los distintos títulos por los que podían ejercer su particular sometimiento social y económico.

En efecto, si a los derechos sobre la propiedad le correspondían rentas contractuales o establecidas por la cesión temporal de haciendas a colonos y campesinos, a los de jurisdicción iban especialmente las derivadas de la administración de justicia por parte del señor. Rentas señoriales que muchas veces consistían en la entrega de una parte de las cosechas y de animales en un número determinado por cada año natural. De esta forma quedaba reconocido el llamado vasallaje²³⁷.

No es difícil imaginar la poca falta de ánimo asociativo que debía existir, máxime cuando por la condición de señores y propietarios de la tierra, éstos podían recibir rentas con la simple alegación de títulos a través de distintas formas de explotación. Había derechos adquiridos procedentes de la antigua corona de Castilla mientras que otros se habían originado a través de la compra de tierras, enajenaciones o sencillamente por la fuerza. Sin embargo, esta situación de privilegio comenzó a cambiar con la conclusión del siglo XVIII, en parte debido a las propuestas reformadoras de los ilustrados en su idea de recuperar para el Estado la titularidad de todos los derechos jurisdiccionales y la de convertir los derechos señoriales sobre la tierra en propiedades jurídicamente libres. Solo de esta forma se creía posible recuperar para el mercado y la hacienda pública grandes extensiones de tierra y de patrimonio. Pues bien, todo ello se iba a ver favorecido con la

²³⁶ Una buena explicación en Artola, Miguel, *La burguesía revolucionaria: (1808-1874)*, Alianza Editorial, Madrid, 1990, págs. 104 y 157.

²³⁷ Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, ob. cit., pág. 202.

llegada de un nuevo siglo y con él, la invasión francesa y la obra legislativa de las Cortes de Cádiz²³⁸.

La liquidación de los señoríos, tal como reconoce el profesor Azagra Ros, debemos incluirla en el inicio de un largo proceso que se inició con el fin de abolir la propiedad vinculada²³⁹. Aunque, en efecto, el 6 de agosto de 1811 las Cortes promulgaron un decreto de abolición del régimen señorial, otro decreto de 1798 otorgaba la facultad a los poseedores de vínculos, mayorazgos y otros títulos, de enajenarlos mediante pública subasta siempre que los capitales obtenidos se inscribieran en la llamada Caja de Amortización. Las condiciones de dicha operación aparecían con bastante evidencia en un texto explicativo de mediados del siglo XIX, dedicado a ilustrar las particularidades de los vínculos y mayorazgos en España. El político, jurista y economista español Juan Sempere y Guarinos lo describía de la siguiente forma:

Entre los medios adoptados en el año 1798 para atender á los inmensos gastos de la guerra con los ingleses, fué uno el de abrir suscripciones á un donativo voluntario, y á un préstamo patriótico por acciones de mil reales, sin interés, reintegrables por suerte en diez años siguientes á los dos primeros e paz. Y para facilitar mas dicho empréstito, por otro real decreto de 19 de setiembre del mismo año, se concedió á los poseedores de vínculos y mayorazgos la facultad de enagenar sus bienes, para poner en la tesorería real todo su producto, hasta su reintegracion, y que verificada esta, se impusiera en la caja de Amortizacion al tres por ciento á favor de los mismos poseedores²⁴⁰.

Hasta la aparición del decreto en 1798 se habían concedido de forma esporádica permisos individuales y concesiones para poder llevar a cabo enajenaciones de algunos bienes, ya fuera para saldar las deudas de algún

²³⁸ Un buen ejemplo de todos los procesos que se llevarían a cabo en este sentido pueden consultarse en Clavero, Bartolomé, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836*, Siglo XXI, Madrid, 1989. Asimismo en Rueda Hernanz, Germán, ob. cit., págs. 135 a 139.

²³⁹ Azagra, Ros, Joaquín, *La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807)*, Alfons El Magnànim, Valencia, 1986, pág. 118.

²⁴⁰ Sempere y Guarinos, Juan, *Historia de los vínculo y mayorazgos*. Segunda Edición, Ramón Rodríguez de Rivera, Editor, Madrid, 1847, pág. 135. Un estudio más moderno puede encontrarse en el ensayo del catedrático de derecho Espín Cánovas, Diego, "Fermín Caballero y el pensamiento jurídico agrario español en el siglo XIX", en Carrasco Perera, Ángel y Carretero García, Ana (coordinadores), *El Derecho Agrario entre la Agenda 2000 y la Ronda del Milenio. Actas del VIII Congreso Nacional de Derecho Agrario, Toledo 16 y 17 de noviembre de 2000*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001, págs. 310 y 311.

titular o para satisfacer otras causas justificadas, si bien el Estado nunca había impulsado una venta o traspaso patrimonial con carácter general. De hecho, lo sucedido entre 1798 y 1813 en ningún caso ocasionó convulsiones sociales. Se trató, siguiendo la idea de Germán Rueda, de una acción indicadora hacia los grupos de privilegio que habían sustentado, hasta ese instante, el Antiguo Régimen. En realidad, tampoco fueron muchos los propietarios que liberaron tierras voluntariamente, llegándose entonces a unas cifras cercanas a los ciento veinte millones de reales, después que se contabilizaran las ventas de fincas y otros bienes con motivo de la legislación de 1798²⁴¹.

De hecho, en los estudios de Azagra en Valencia, sorprende que algunos de los compradores fueran los propios titulares de las tierras. En efecto, los propietarios interesados compraron con vales reales devaluados un 33 por ciento, a pesar de que el Estado compensase después con un 3 por ciento anual el valor de esos bienes. Sin embargo, la cuestión más relevante quizá era que cada propietario podía ser dueño de unos dominios que, desde ese momento, podía vender o someter a especulación como él mismo quisiera. Propiedad que, además, podía incorporarse al mercado como libre y plena²⁴².

De todas formas, con el decreto de agosto de 1811 que ya mencionamos, las Cortes de Cádiz iban a suprimir los derechos jurisdiccionales. De esta forma, en la sesión parlamentaria del 30 de marzo de 1811, el diputado por Valencia Lloret y Martí manifestó su deseo de reintegrar a la Corona todas las jurisdicciones civiles y criminales, mientras que otro diputado, Joaquín Lorenzo Villanueva, solicitaba la restitución a la a la misma de las ciudades, villas y lugares enajenados del Reino de Valencia. A ellos se unieron inmediatamente otros, pidiendo que se sumaran las propuestas de Galicia y otras provincias²⁴³. Esto suponía que tanto el llamado vasallaje, las sernas y otras prestaciones personales y privilegios feudales debían quedar abolidos, al tiempo que los campesinos quedaban liberados de la sujeción legal a los señores y, en su caso, a los

²⁴¹ Herr, Richard, "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV", en *Moneda y Crédito*, número 118, 1971, págs. 66 a 69. Véase también Rueda Hernanz, Germán, ob. cit., pág. 137.

²⁴² Azagra, Ros, Joaquín, ob. cit., págs. 123 y 124.

²⁴³ Morán Martín, Remedios, "«Abajo todo: fuera Señoríos y sus efectos» El Decreto de 6 de agosto de 1881", *Revista de Derecho Público*, número 82, UNED, pág. 246.

administradores que hubieran sido nombrados por los primeros. Quedaban anulados los monopolios y prerrogativas señoriales y los servicios a que los citados derechos hubieran dado lugar. El decreto, en definitiva, suponía la incorporación a «la nación» de los señoríos jurisdiccionales de cualquier clase y condición, siendo de competencia pública el nombramiento de alcaldes, corregidores, jueces y demás funcionarios necesarios para la administración²⁴⁴.

Las campañas abolicionistas y antiseñoriales estaban justificadas si se tiene en cuenta que en 1811 había en la península 20.428 señoríos. Según los datos de García Ormaechea, 6.620 eran de realengo y el resto de los 13.808 estaban repartidos entre laicos, eclesiásticos y órdenes militares²⁴⁵. A ello había que añadir que mientras los pueblos de realengo estaban cargados con una serie de contribuciones generales, los de señorío debían contribuir además con diversas prestaciones e impuestos a sus señores. La duplicidad de cargas obligaba a unas condiciones más duras en estas últimas poblaciones. Asimismo, la principal preocupación de los grandes propietarios o señores estaba en el mantenimiento de la titularidad de la propiedad, por lo que suponía de utilidad al mantenimiento económico de las haciendas. Éstas se habían endeudado en el último siglo, lo que hacía pensar en la posibilidad de un plan de mejora de ingresos mediante la racionalización dentro de las explotaciones agrarias²⁴⁶.

La nueva legislación, sin embargo, no afectaba a los derechos de propiedad. Los señoríos territoriales y solariegos, es decir, aquellos sobre los que todavía los señores tenían los títulos de propiedad, quedaron convertidos en propiedades particulares. De hecho, el artículo 6º del decreto de 6 de agosto de 1811, advertía concretamente: “Por lo mismo los contratos, pactos ó convenios que se hayan hecho en razon de aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos ú otros de esta especie celebrados entre los llamados señores y vasallos se deberán considerar desde ahora como contratos de particular á particular”²⁴⁷. En consecuencia, resultaba evidente

²⁴⁴ Casaus Ballester, María José, “La repercusión del decreto de 1811 y de la ley de 1823 en los señoríos nobiliarios a través de la casa ducal e Híjar”, *Cuadernos de Investigación Histórica*, número 22, Fundación Universitaria Española, 2005, pág. 3

²⁴⁵ García Ormaechea, Rafael, *Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurisprudencia sobre señoríos*, Editorial Reus, Madrid, 1932, pág. 9.

²⁴⁶ Casaus Ballester, María José, ob. cit., pág. 3 y 4.

²⁴⁷ *Diario de las discusiones y actas de las Cortes*. Tomo XVIII, Imprenta Nacional, Cádiz, 1813, pág. 133.

que se producía un cambio en la relación contractual que hasta esos momentos había existido entre el señor o propietario y el colono o campesino encargado de trabajar las tierras, estableciéndose de esta suerte un contrato privado entre particulares²⁴⁸.

En este estado de cosas, los señores perdían jurisdicción a cambio de propiedad libre, plena e individual. Es decir, renunciaban a las rentas que los derechos feudales les habían originado. Algo que no contentó plenamente a todos los propietarios y que trajo consigo una lucha legal, interrumpida por el retroceso absolutista de Fernando VII en el año 1814. Desde ese instante hasta 1820, sí mantendría vigente, sin embargo, la transformación de los títulos jurídicos de propiedad²⁴⁹.

La obra de las Cortes de Cádiz se vio rescatada a partir del triunfo liberal en 1820, con la aprobación del Decreto de 27 de septiembre, promulgada poco tiempo después como Ley de Desvinculación, el día 11 de octubre de 1820. Ésta, suprimía totalmente los mayorazgos y las vinculaciones por lo que suponía una invitación a la nobleza a enajenar sus tierras. Acontecimiento que terminó afectando de forma más directa a aquellos propietarios con menos recursos. Exactamente lo que producía la nueva legislación no era la expropiación propiamente dicha de las haciendas o las casas, sino más bien la obligación a ejercer un reparto entre los herederos, generalmente los hijos, permitiendo la enajenación al desvincularlas. En la ley se advertía que una vez muerto el poseedor de los bienes, éstos debían ser divididos entre los descendientes pudiendo ser enajenados por sus sucesores²⁵⁰.

Finalmente, a pesar de todo el esfuerzo y el empeño liberal, el mapa resultante no fue tampoco el esperado, ya que apenas hubo tiempo de poder aplicar la normativa que se había aprobado en 1820. La vuelta, una vez más, al episodio del Absolutismo en España que se prolongaría esta vez hasta 1833, supuso la suspensión de la vigencia de la ley. Anulada ésta por medio de la Real Cédula de 11 de marzo de 1824, se obligaba a devolver a sus

²⁴⁸ Hernández Montalbán, Francisco J., *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Universitat de València, Valencia, 1999, págs. 49 y 50.

²⁴⁹ Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, ob. cit., pág. 204.

²⁵⁰ Rueda Hernanz, Germán, ob. cit., pág. 137.

antiguos propietarios los bienes vinculados que hubieran sido adquiridos mediante los decretos aprobados en Cortes, en septiembre de 1820 y junio de 1821 sobre señoríos. Otra ley que sería aprobada el 6 de junio de 1835, volvería en un futuro a reintegrar los bienes adquiridos durante el Trienio. Una cuestión que enlazaría con un período de reformas mucho más decidido sobre la propiedad de las tierras y que trataremos más tarde al referirnos a las desamortizaciones de 1834 y 1855, así como a sus repercusiones en la propiedad en nuestro país.

- La liquidación del mayorazgo como vinculación jurídica

A lo largo de los siglos y desde tiempos del medioevo, instituciones como la Iglesia había venido utilizado la vinculación de la propiedad como modo de garantizar e incrementar el patrimonio. A través de un mecanismo jurídico como la vinculación, las diferentes identidades eclesiásticas, desde los obispados hasta las abadías, fueron adquirieron bienes a pesar de no tener capacidad jurídica para enajenarlos, dejando una parte importante del territorio de cultivo inalienable.

Pues bien, dentro de las formas existentes de vinculación, fue la corona de Castilla, desde finales del siglo XV, la que generalizó el mayorazgo como forma de propiedad vinculada. En realidad, el mayorazgo imposibilitaba a su titular disponer de los bienes mientras éste viviera. A ello se sumaba un orden sucesorio preferente después de su muerte, ya que los bienes debían pasar de forma íntegra al primogénito varón, es decir, al «mayorazgo», dando esta manera nombre a la institución. Formas muy similares de vínculos sobre el patrimonio existieron en otros países europeos. Así, el «majorat» fue muy extendido en países como Francia, Inglaterra o Alemania, siendo el «morgado» la institución equivalente en Portugal²⁵¹.

En el transcurso del siglo XVIII, muchos vieron en el mayorazgo una traba para el desarrollo de la agricultura, motivo por el cual se comenzó la elaboración de propuestas en la línea de limitar la institución, dificultando

²⁵¹ Clavero, Bartolomé, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836*, Siglo XXI, Madrid, 1974, págs. 35 y siguientes.

su crecimiento y obstaculizando su concentración. Los bienes amayorazgados, además de inalienables e inconfiscables, basaban su régimen de explotación de tierras en arrendamientos cortos, utilizándose raras veces la enfiteusis²⁵².

En este orden de cosas, la trayectoria legislativa seguida por la desvinculación de los mayorazgos fue dilatada, recordando en mucho la acontecida con la abolición del régimen señorial. Las primeras medidas comenzaron ponerse en marcha durante el mes de junio de 1808 en la ciudad de Bayona, por parte de los redactores de la Constitución que debían normalizar la nueva monarquía española. La normativa fijaba la desvinculación de la propiedad y la abolición de los mayorazgos cuyos bienes no llegaran a los 5.000 pesos de renta al año y los de más de 20.000 pesos en la parte que sobrepasara tal cuantía²⁵³. Una cuestión que volvería a ser planteada en Cádiz y que vería todas sus propuestas lapidadas con la reacción absolutista. Las dilaciones en este sentido y en las de ver finalmente aprobada una ley general para la desvinculación de las tierras, fueron bien aceptadas por la nobleza que veía mejor la finalización de los señoríos siempre que se hiciera en condiciones favorables²⁵⁴.

Fueron, por tanto, los liberales de 1820 quienes acometieron la cuestión en toda su extensión. Así, por la ley de 11 de octubre de 1820, en su artículo primero quedaba expresado lo siguiente: “Quedan suprimidos todos los mayorazgos, fideicomisos, patronatos, y cualquiera otra especie de vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, juro, foros, ó de cualquiera otra naturaleza, los cuales se restituyen desde ahora a la clase

²⁵² Yun Casalilla, Bartolomé, *La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII)*, Akal, Madrid, 2002, pág. 296.

²⁵³ En la Constitución de 1808, en su artículo 136 se recogía el siguiente texto: “Todo poseedor de bienes actualmente afectos á fideicomiso, mayorazgo ó substitucion, que produzcan una renta anual de mas de 5.000 pesos fuertes, podrá pedir, si lo tiene por conveniente, que dichos bienes vuelvan á la clase de libres. El permiso necesario para este efecto ha de ser el Rei quien le conceda”. Posteriormente en su artículo 139, la Constitución se expresaba en los siguientes términos: “La renta anual de estos fideicomisos, mayorazgos ó substituciones no podrá en ningun caso exceder de 20.000 pesos fuertes, ni baxar de 5.000”. Puede consultarse la 3ª edición de la obra de Rico Linaje, Raquel, *Constituciones Históricas. Ediciones Oficiales*, Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones, Imprime Pedro Cid, S. A., Madrid, 1999, págs. 15 y 16. Igualmente un buen comentario en Clavero, Bartolomé, ob. cit., pág. 347.

²⁵⁴ Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, ob. cit., pág. 206.

de absolutamente libres”²⁵⁵. La propia ley fijaba una limitación en la posible enajenación de los bienes vinculados. La propiedad debía distribuirse por partes iguales entre el poseedor del vínculo en el momento de la promulgación de la ley y su sucesor inmediato. Así, el usufructuario del vínculo no podía enajenar, en caso de querer hacerlo, más de la mitad de todo el patrimonio vinculado. En realidad, el hecho era que una vez producida la sucesión, el heredero de la otra mitad pudiera efectuar la venta de los bienes restantes. De esta forma, el patrimonio heredado sería completamente libre en la generación siguiente a la de la promulgación de la ley. Esta limitación era consecuente ya que lo que se pretendía era que no se produjera una venta masiva de tierras en el mercado; hecho que hubiera provocado una considerablemente disminución en su valor real²⁵⁶.

Tampoco se señalaban plazos ni trámites para la desvinculación, sino que se declaraban todos los bienes desvinculados desde la propia promulgación de la ley. Sin embargo, la pérdida de los territorios en América, los conflictos con la Iglesia y los problemas de liquidez en la Hacienda Pública, acabaron por menoscabar el régimen constitucional que, además, acabaría precipitándose a partir del año 1822 con un período de malas cosechas y una mayor presión fiscal. Ello hizo que las condiciones para un levantamiento rural aumentaran en muchas regiones del país. Si bien es cierto que el objetivo de la abolición del mayorazgo no era la creación de nuevos propietarios capaces de sostener el nuevo régimen constitucional, como así se procuró que sucediera con las sucesivas desamortizaciones, la realidad es que con la redención de bienes inmovilizados se aumentaban las posibilidades de la libre circulación de las tierras en los mercados. Podríamos pensar, por tanto, que esta situación produjo finalmente un eventual acceso a la propiedad por parte de labradores y agricultores que en aquel momento disponía de ciertos recursos. Incluso, puede considerarse la posibilidad de que se viera incrementada de forma ostensible la cantidad de titulares de nuevas haciendas. A pesar de las intenciones liberales, la realidad es que las cosas no sucedieron como se esperaba en todas las regiones²⁵⁷.

²⁵⁵ Véase la Introducción del capítulo “Comentario a las leyes de desvinculación”, en Sempere y Guarinos, Juan, ob. cit., pág. 9.

²⁵⁶ Casaus Ballester, María José, ob. cit., pág. 8.

²⁵⁷ Pérez Picazo, María Teresa, *El mayorazgo en la historia económica de la región murciana: expansión, crisis y abolición (siglos XVII-XIX)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1990, pág. 224.

En 1821 el Gobierno constitucional ordenó un censo de la población con fines electorales y administrativos, que finalmente sería publicado en el mes de marzo de 1822. Con una población de 11.661.865 habitantes, más del 65 por ciento de la población en edad de trabajar dedicaba su actividad principal a las tareas en el campo. El predominio agrícola suponía la existencia de una fuerte presión social sobre las estructuras agrarias, tanto desde un punto de vista productivo como de la propiedad. Era evidente que labradores, aparceros, foreros, rabassaires o enfiteutas, aspiraban a ver pronto la propiedad de las tierras desvinculadas y desamortizadas. Los legisladores del Trienio no dudaron, pues, en rescatar las decisiones que las Cortes de Cádiz habían tomado en este sentido solo unos años antes²⁵⁸.

Los trabajos que se han realizado hasta el momento caminan en la dirección de que el proceso de desvinculación contribuyó en algunas regiones a acentuar la concentración y la polarización. En efecto, la tierra cambió de manos, pero sin producirse un alcance significativo en su distribución. Ello se debió en parte a que la venta de pequeños mayorazgos hizo descender el porcentaje de medianos y otros propietarios menores que hasta ese momento existían. Además, la distribución en algunas comarcas españolas de las tierras enajenadas estuvo en razón directa al número de compradores que podían adquirirlas, gracias a los recursos de los que disponían. Por último, y a pesar de existir un número de compradores de procedencia diversa, lo cierto es que un elevado porcentaje de bienes terminaron en manos de colectivos procedentes de descendientes de la antigua oligarquía²⁵⁹.

Añadamos que entre 1820 y 1823, a raíz de la publicación de la ley de 1820 se produjo una primera oleada de participaciones y ventas ciertamente discreta, explicable del lado de la oferta porque los terratenientes cercanos

²⁵⁸ Las cifras del recuento de la población en 1821 en Moral Ruiz, Joaquín del, *Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional, 1820-1823*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975, pág. 24.

²⁵⁹ Para un análisis del alcance de las desvinculaciones en algunas provincias en España contamos con algunos trabajos, incluidos los citados en esta Tesis Doctoral de María Teresa Pérez Picazo para la Región de Murcia, además de otros como son, por ejemplo: Díez Espinosa, J. R., *Revolución liberal en Castilla: tierra, nobleza y burguesía*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987; Sánchez Marroyo, F., *El proceso de formación de una clase dirigente. La oligarquía agraria en Extremadura a mediados del siglo XIX*, Universidad de Extremadura-Caja de Salamanca, Salamanca, 1991, y Carmona, Juan, *Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la España del siglo XIX: la casa de Alcañices (1790-1910)*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 2001.

ideológicamente al régimen absolutista no procedieron, en palabras de María Teresa Picazo, a las operaciones de partición. De otro lado, el de los que demandaban potencialmente posibles bienes desvinculados temieron evidenciarse políticamente, incluso perder el patrimonio invertido si finalmente el régimen liberal fracasaba²⁶⁰.

Esta nueva legislación, en cualquier caso, apenas sí dispuso de tiempo para ser llevada a la práctica debido a la vuelta al absolutismo en 1823. La misma Real Cédula del mes de marzo de 1824 que anulaba las desvinculaciones de los señoríos, eliminaba igualmente las desvinculaciones realizadas mediante la ley de octubre de 1820, decretando el retorno de las propiedades a sus anteriores titulares. A diferencia de las desamortizaciones que habrían de realizarse profundamente solo unos años más tarde, las desvinculaciones y la abolición de los mayorazgos produjeron una participación selectiva que tuvo como protagonistas a distintos grupos sociales en ámbitos regionales desiguales. Hubo una acumulación relativamente importante de bienes por parte de quienes habían sido un tiempo atrás titulares de mayorazgos, a los que pronto se sumaron grupos de comerciantes. Una proporción de tierras de menor tamaño fueron adquiridas por labradores y miembros de la clase media urbana.

A decir verdad, resulta evidente que hasta ese momento, las condiciones para que en España se estableciera un proceso de implantación de propietarios que rompiera la estructura de desequilibrio, existente desde tiempo atrás en la propiedad agraria, todavía estaban por llegar. Con todo, durante la primera mitad del siglo XIX siguió funcionando la tan mencionada dicotomía «concentración-fragmentación» de la tierra, iniciada en el siglo XVII, y que como muchos historiadores han reconocido condujo a la separación del mercado libre una cantidad considerable de tierras de cultivo. Junto a las desvinculaciones aquí tratadas, la larga cronología de las desamortizaciones en España pondría en marcha un proceso de liberación de propiedades que se vería culminada en los últimos años del siglo XIX.

²⁶⁰ En los estudios mencionados de María Teresa Pérez Picazo se apuntan distintos casos en los que notables hacendados no intervinieron en las operaciones de partición y enajenación de bienes. En estas circunstancias estuvieron, por ejemplo, el marqués de Villar o Antonio Riquelme en la provincia de Murcia. Véase Pérez Picazo, María Teresa (1990), ob. cit., pág. 300.

- La desamortización de tierras en España hasta 1830

Tanto la abolición de los señoríos como la desvinculación producida con la eliminación de los mayorazgos tuvieron como resultado un importante cambio jurídico en la forma de tenencia de la propiedad, aunque en ningún caso produjeron cambios de la misma, ya fueran de procedencia señorial o territorial. Desde el siglo XVIII se venía observando una fuerte corriente ilustrada en España, tendente a la liberalización de tierras en posesión de las instituciones que impedían su libre utilización. Con el arranque del proceso desamortizador iba a dar comienzo un largo período que, inaugurado hacia 1769, vería su finalización casi un siglo y medio después aglutinando en su recorrido a un importante contingente de nuevos propietarios.

Las tierras afectadas por las desamortizaciones venían siendo explotadas en nuestro país de muy diferentes formas, según pertenecieran a la Iglesia o a los municipios. Las primeras, generalmente eran cedidas por medio de arrendamientos a campesinos y labradores manteniéndose la propiedad plena en poder del arrendador. El sistema se basaba en los censos, a través de los cuales el censalista retenía la propiedad directamente mientras que el censitario recibía el dominio útil mediante un pago o canon. Las tierras municipales podían estar igualmente arrendadas por lo que normalmente los ayuntamientos podían recibir una renta que luego era utilizada en los presupuestos vecinales. Estos bienes o «propios», diferían de los «comunes», habitualmente formado por pastos y monte (pasto y leña), que podían ser aprovechados colectivamente por los habitantes de los pueblos. En no pocas ocasiones, eran los propietarios mejor situados los que intentaban sacar los mayores beneficios a los terrenos amortizados²⁶¹.

La idea de tener una masa tan importante de tierras amortizadas fue considerada por los reformadores del siglo XVIII una verdadera traba para el progreso de la agricultura y para la riqueza del Estado. Además, en aquel momento, la concentración de la propiedad en estamentos tan privilegiados como la Iglesia, exenta de la mayor parte de las cargas fiscales, provocaba

²⁶¹ Puede consultarse, dentro de la abundante bibliografía existente para este tema, las obras citadas de Germán Rueda y Ana Clara Guerrero, Santos Juliá y Sagrario Torres. También en Artillo González, Julio, “La reforma agraria en la España contemporánea”, *Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada*, número 32, julio-septiembre 1978, págs. 49 a 57.

una mayor presión tributaria sobre una porción cada vez más reducida de la población. Como se podrá comprender, ante dificultades hacendísticas o empresas que requerían gastos para la guerra, los ilustrados no dudaron en realizar los primeros intentos para liberar algunas tierras de sus propietarios y comenzar a eliminar las «manos muertas», haciendo de los bienes un patrimonio circulante. En consecuencia, el verdadero sentido de la desamortización en España hemos de buscarlo en esas dificultades y no en la propuesta sobre la conocida «revolución liberal».

Esa necesidad presupuestaria del Estado, sumada a la idea de obstáculo al progreso que ocasionaban los bienes amortizados en la nación, provocaron el comienzo ineludible de las desamortizaciones a partir de la segunda mitad del siglo XVIII (véase el cuadro 3). Una actitud que pondría en jaque dos formas jurídicas, vinculación y amortización, que hasta entonces había llevado consigo la inalienabilidad e indivisibilidad de la propiedad.

Desde la perspectiva de la investigación que aquí desarrollamos, son probablemente los resultados finales de este período de desamortizaciones lo que más debe interesarnos, especialmente en todo aquello relacionado con el número de nuevos propietarios de tierras, la movilidad de las mismas en el paso de unas manos a otras, etc., así como la cantidad final que fue liberada para pasar directamente a formar parte de la producción agraria. Fueron los propietarios, inmersos en la nueva economía dependiente de los mercados internacionales, quienes no tardarían en sufrir las consecuencias de los precios del trigo y, en general, de los productos agrícolas. La formación de un amplio escenario de propietarios preocupados por la consecución de resultados óptimos pondría en marcha la asociación de intereses mutuos. Grupos de presión y de influencia sobre el territorio, la política y las leyes que necesariamente necesitaban un cambio en la estrategia de la tenencia y explotación de la propiedad agraria.

A la hora de profundizar en los aspectos relacionados con los propietarios compradores, conviene detenerse en un aspecto importante como es la regionalización. Hace décadas que los investigadores tomaron conciencia de la dimensión y el problema que suponía abordar las desamortizaciones a nivel general, optando muchas veces por un todo lo relativo a la venta, repartos de tierras y parcelaciones si se distinguió estudio

CUADRO 3
Etapas de la desamortización en España hasta 1834

1ª. 1766-1808, 1818-1834	<ul style="list-style-type: none"> - Enajenación de bienes a canon perpetuo (Finalización en propiedad plena). - Repartimientos, cesiones o daciones de bienes concejiles y roturaciones arbitrarias de baldíos entre 1766 y 1808. Segundo período entre 1818 y 1834. - Repartimientos de tierras en las colonizaciones (Sierra Morena y valle del Guadalquivir entre 1766-1834).
2ª. 1769-1798	<ul style="list-style-type: none"> - Venta de las «temporalidades» de la Orden de los Jesuitas.
3ª. 1798-1808	<ul style="list-style-type: none"> - Desamortización de Godoy: <ul style="list-style-type: none"> - Bienes paraeclesiásticos y eclesiásticos - Venta de bienes de propios antes de 1808 - Desvinculación de mayorazgos con subasta de los Bienes
4ª. 1808-1813	<ul style="list-style-type: none"> - Desamortización de la Guerra de la Independencia: <ul style="list-style-type: none"> - Desamortización de José I - Venta de bienes concejiles para abastecer las tropas - Repartimientos de bienes concejiles entre combatientes, pobres y labradores
5ª. 1821-1823	<ul style="list-style-type: none"> - Desamortización de regulares en el Trienio Liberal.

FUENTE: Rueda Hernáiz, Germán, *España 1790-1900. Sociedad y condiciones económicas*, Istmo, Madrid, 2006, pág. 125.

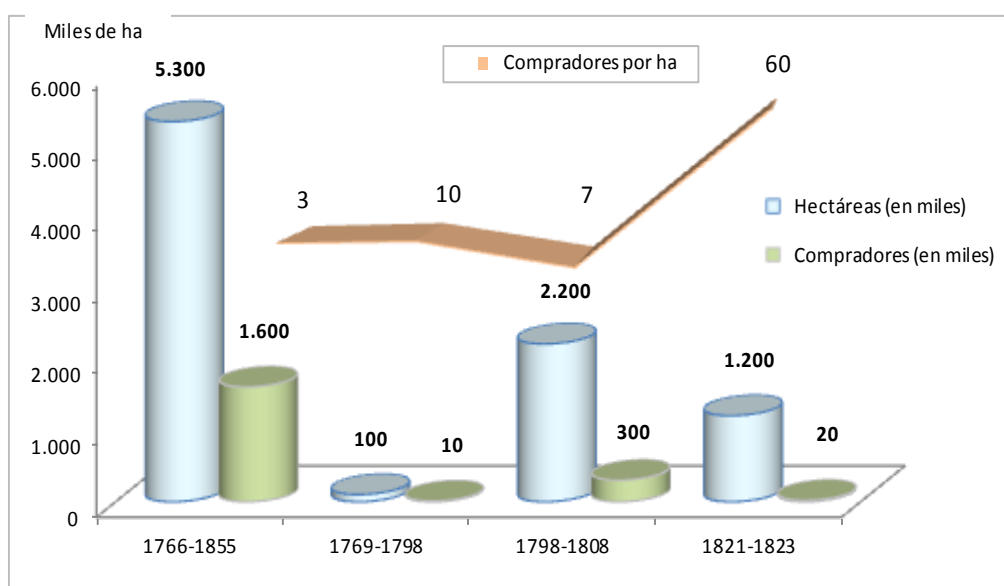
más racional que tuviera en cuenta la división regional de nuestro país. Sin que todavía los estudios sean completos, la realidad es que dependiendo de las regiones²⁶².

²⁶² Son muchas las publicaciones y los artículos dedicados a la desamortización observada desde ámbitos regionales. Para este periodo previo a las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz, hemos utilizado algunos artículos y trabajos relativos a distintas zonas del territorio español, además de obras de ámbito nacional. En particular la documentación recogida en el volumen primero sobre *Desamortización y Hacienda Pública*, presentada por el profesor Francisco Tomás y Valiente, publicados por el Ministerio de Economía y Hacienda, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el año 1986. Asimismo, el trabajo de

Siguiendo en este contexto, el resultado final en las primeras tres décadas del siglo XIX fueron desiguales (véase el gráfico 1). Si bien es verdad que sobre las tareas desamortizadoras en España se han realizado y llevado a la práctica interesantes e importantes trabajos, finalmente nos hemos ajustado a los estudios elaborados por Germán Rueda por ser los que globalizan y sintetizan mejor, a nuestro entender, este primer período de enajenación de la propiedad territorial. Por tal motivo y antes de concretar las actuaciones que en este sentido se acometieron en el ámbito político, social y económico, debemos contemplar las consecuencias que realmente tuvieron las distintas fases desamortizadoras durante el espacio de tiempo transcurrido entre 1766 y 1830.

GRÁFICO 1

Distribución de tierras y beneficiarios entre 1766 y 1823



FUENTE: Rueda, Germán, *La desamortización en España: un balance (1766-1924)*, Arco Libros, Madrid, 1997, pág. 61

* Enajenación de bienes concejiles por adquisición en la guerra de Independencia, repartimientos a canon o roturaciones arbitrarias que finalizaron en propiedad plena, entre 1766 y 1855.

Robledo Hernández, Ricardo, “La liberalización del mercado de tierras en Castilla-León: aproximación regional”, *El pasado histórico de Castilla y León. Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León*. Tomo III, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1984, págs. 115 a 149, y Frieria Álvarez, Marta, *La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen al liberalismo (La desamortización de Carlos IV)*, Caja Rural de Asturias, Gijón, 2007. Igualmente ha sido de una gran ayuda por su visión más próxima en el tiempo el ejemplar de Ferrer del Río, Antonio, *La desamortización en España*, Edición del “Globo”, México, 1868.

Las sucesivas legislaciones que vendrían a aplicarse en materia de enajenaciones en España comenzaron en 1766 con la venta y repartos de algunos bienes concejiles y roturaciones de baldíos; terrenos que en su mayor parte eran de procedencia medieval. Siguiendo las estimaciones de Germán Rueda, resulta complejo todavía hoy determinar la extensión exacta de bienes «concejiles» enajenados. De hecho, las cifras apuntan a que se pusieron en circulación algo más de 20 millones de hectáreas, aunque si tomamos como referencia el catálogo de bienes de propios de 1958, la diferencia resultante es de 12 millones de hectáreas al establecer dichos bienes en cuatro millones de hectáreas. Las conclusiones sobre el municipio de Cartagena, recogidas por Eugenio Carreño para este período apuntan a la dificultad por parte de los labradores para poner en explotación algunas tierras, siendo necesario el arriendo y la roturación de baldíos concejiles sin la oportuna autorización o repartimiento preceptivo. El hecho es que solamente así puede entenderse el aumento de la superficie cultivada²⁶³.

En el caso de las roturaciones arbitrarias de baldíos, Rueda nos recuerda que supusieron la puesta en cultivo de miles de hectáreas por parte de acaudalados labradores, amén de otros peor situados que finalmente terminaron asumiendo la propiedad como propia. Los casos documentados de Sevilla y Cartagena apuntan a que los repartimientos municipales tuvieron bastante repercusión entre grandes y medianos propietarios absentistas, quedando al margen los pequeños labradores que terminarían décadas más tarde uniéndose a la lista de jornaleros asalariados. En cualquier caso, el hecho es que este proceso produjo, en primer lugar, una fuerte deforestación al poner en cultivo nuevas tierras y, en segundo lugar, se lograron buenas cosechas los primeros años, pasando a empobrecerse los suelos al poco tiempo por falta de abonos. Estas ventas y repartos que venían sucediéndose desde el siglo XVIII terminaron por ser reconocidos en 1819 y finalmente en un Real Decreto de marzo de 1834, regularizando las cesiones y ocupaciones de bienes municipales hechas hasta entonces. Otro caso bien distinto fue la relación de colonizaciones practicadas en el Valle del Guadalquivir entre 1767 y 1834. A este respecto cabe señalar la cadencia decreciente que finalmente se produjo, ya que si el número de colones era de

²⁶³ Rueda Hernanz, Germán, *La desamortización en España: un balance (1766-1924)*, Arco Libros S. L., Madrid, 1997, págs. 14 y 15.

10.500 en el año 1776, la cifra descendió muy rápidamente hasta los 5.500 en poco más de veinte años, tal como se recogía en el Censo de Godoy²⁶⁴.

La expulsión de la Orden de los Jesuitas en 1767 dio lugar a la nacionalización de sus bienes por un importe de más de 113 millones de reales, comprobándose el apresurado ritmo de ventas de los mismos. Sabemos que en algunas comarcas como en Tierra de Campos, un buen número de labradores locales adquirieron una considerable porción de tierras de cultivo. Asimismo, consta la compra por el Duque de Alba de algunos bienes, además de una cantidad cercana a las 50.000 hectáreas pertenecientes a la Orden de Calatrava e incorporadas, como explica Germán Rueda, al organismo denominado «Temporalidades de los jesuitas». Éstas, finalmente fueron a parar en 1773 a la administración particular de Manuel Godoy²⁶⁵.

Precisamente y durante la estancia en el gobierno del primer ministro y Príncipe de la Paz, fueron los sucesivos problemas de liquidez los que llevaron a tener que proyectar un plan de desamortización para liquidar una parte de la deuda adquirida por la Administración de la época. Con el beneplácito del monarca Carlos IV, se pensó en liberar una parte de los bienes raíces de colegios mayores e instituciones eclesiásticas, excepción hecha de obras pías, hospicios y otras obras de misericordia, para lo que fue preciso negociar con el Vaticano, obispos y prelados, la enajenación de los bienes solicitados. En muchos casos, parte de los bienes compendiados para su venta no se pudieron liberar hasta ya comenzado el siglo XIX²⁶⁶. Recientemente se ha evaluado la trascendencia de la desamortización durante el período 1798 a 1808, suponiendo en el conjunto del país alrededor de 1.650 millones de reales, teniendo mayor amplitud en las provincias del sur español donde se llegaron a realizar ventas cercanas al 15 por ciento de los bienes eclesiásticos. Ello es explicable debido a la existencia

²⁶⁴ *Ibidem*, págs. 21, 22 y 23.

²⁶⁵ *Ibidem*, pág. 28.

²⁶⁶ Hay que advertir que tampoco se incluyeron los bienes vinculados a parroquias, cabildos y Órdenes religiosas. Véase Rueda, Germán, “El proceso de la desamortización de bienes de origen eclesiástico (1769-1964) en España. Cuantificación y consecuencias socioeconómicas”, Bodimier, Bernard, Congost, Rosa y Luna, Pablo F. (editores), *De la Iglesia al Estado. Las desamortizaciones de bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina*, Sociedad Española de Historia Agraria, Zaragoza, 2010, págs. 181 a 183.

de un mayor número de establecimientos de propiedades a desamortizar en Andalucía, especialmente en la provincia de Sevilla²⁶⁷.

Por otra parte, las leyes desamortizadoras durante el breve reinado de José I no difirieron de la que se había puesto en marcha por Godoy solo unos años antes. En todo caso, fue una continuación de la enajenación de bienes religiosos regulares que habían sido suprimidos. Quizá por la inconveniencia de la guerra, la determinación de qué bienes debían ser subastados y la organización en las ventas y adjudicaciones se hicieron de una forma abusiva y arbitraria. El propio rey José había apremiado a realizar todo lo necesario para no demorar el curso de las desamortizaciones. Pero la efectividad de esta desamortización no fue como se esperaba. En el transcurso del mes de mayo de 1808 se restableció la llamada Comisión gubernativa de Consolidación de la Deuda Pública que había sido suprimida por Fernando VII dos meses atrás. El escenario nada favorecedor del conflicto napoleónico en España y Europa produjo que el gobierno de José I necesitara recursos urgentemente, estableciéndose en junio de 1809 otra Comisión más, esta vez de Verificación y Liquidación de las Deudas del Estado. Con ello, la pretensión francesa y del propio rey en España se fundamentaba fundamentalmente en suprimir las comunidades eclesiásticas de regulares, es decir, las órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales, además de la conocida «Tercera Orden» y las órdenes militares²⁶⁸.

Dichos bienes fueron sumados a los que todavía existían de los Jesuitas, la Inquisición y los que habían sido confiscados destinados al servicio público, incorporándose a los bienes nacionales desamortizados. Sabemos que a su adjudicación acudieron grandes propietarios como Urquijo, ministro de Estado del propio rey José I, o Espinosa, adquiriendo uno y otro, propiedades entre 1809 y 1811. Fincas y propiedades que fueron pagadas, además de en metálico, a través de títulos de deuda como hipotecas, cédulas de indemnización y libramientos de empréstito, emitidas precisamente por el Rey y con las que podían pagar las compras los adquirentes²⁶⁹. Dentro de este contexto, lo poco efectivo de esta venta y

²⁶⁷ Bernecker, Walther L., *España entre tradición y modernidad. Política, economía, sociedad (siglos XIX y XX)*, Siglo XXI, Madrid, 2009, págs. 9 a 26.

²⁶⁸ Frieria Álvarez, Marta, ob. cit., pág. 216.

²⁶⁹ Entre los fondos del Archivo Histórico Nacional, se encuentran los libros de cuentas corrientes de los compradores de fincas de bienes nacionales realizados entre 1809 y 1811.

enajenación de bienes se demostró al quedar anuladas en 1814, exigiendo Fernando VII su devolución. Más todavía, si tenemos en cuenta que ninguna disposición posterior permitió su recuperación.

En cuanto a las ventas de bienes concejiles para el abastecimiento de las tropas, debemos decir que apenas contaron con legislación para tal fin. Si acaso, fueron los propios acontecimientos quienes forzaron la respuesta legislativa a medidas que aquéllas se iban sucediendo. Las variaciones constantes del ejército a través del territorio terminaron afectando a la práctica totalidad de los pueblos y ciudades del país, lo que nos lleva a la idea de pensar que un buen número de localidades se vieron afectadas para hacerse cargo de los suministros. Volviendo a las investigaciones de Germán Rueda, cabe la posibilidad de que quedaran en situación de desamortización bienes en más de un millar de poblaciones. Se ha estudiado relativamente poco esta desamortización y sus efectos, pero ciertamente se vendieron tierras concejiles en muchos pueblos de España (véanse los cuadros 4 y 5). Los «premios patrióticos» han quedado perfectamente documentados en la excelente obra de Fraçois Héran sobre el campo sevillano y la revolución agrícola, pudiéndose comprobar como en algunos ayuntamientos se procedió, como en el de Guillena, en la provincia de Sevilla, a la fragmentación de una parte de sus baldíos, en lotes de 30 fanegas para tal fin. A ellas accedieron algunas de las familias más notables de la provincia de Sevilla como la de Ignacio Vázquez y Gutiérrez o José Antonio Herrera²⁷⁰.

La propuesta de la Junta de Subsistencia apoyada por la Regencia, contemplaba, por ejemplo, la venta de la tercera parte de los propios y la mitad de los baldíos de Extremadura, lo que suponía casi la tercera parte de todos los terrenos en la provincia. Esta situación contrastaba con la exigüidad de propietarios existentes en el momento. De hecho, como nos advierte la profesora Sánchez Salazar, en 1852 algunos pueblos no disponían ya de bienes de propios, como consecuencia precisamente de las enajenaciones realizadas durante la guerra contra Francia. Las ventas realizadas, por ejemplo, en Guipúzcoa fueron de tal magnitud entre 1808 y 1814 que durante la aplicación de la Ley de Madoz, a partir de 1855, apenas tuvo significado alguno para la región. Y lo mismo podemos decir de la

Un extracto de los mismos puede verse en el trabajo de Frieria Álvarez, Marta, ob. cit., pág. 217.

²⁷⁰ Rueda Hernanz, Germán, *La desamortización en España*, ob. cit., págs. 36 y 37. Véase también Héran, Fraçois, ob. cit., pág. 135.

CUADRO 4
Compradores de tierras, superficie adquirida y precio

Localidad	Número de compradores					Superficie (ha)					Dinero (rs-mrs)				
	0 a 5,09	5,10 a 24,85	24,86 a 50	Total		0 a 5,09	5,10 a 24,85	24,86 a 50	Total		0 a 5,09	5,10 a 24,85	24,86 a 50	Total	
Leza (Álava)	45			45		21,84			21,84		?			?	
Ciudad de Logroño	63	11		74		81,29*	101,70		182,99		682.279-27	469.847		1.152.126-27	
Manzanares de Rioja (Logroño)	2			2		3,80			3,80		?			?	
Cuenca de Campos (Valladolid)	27	5		32		41,03	40,39		81,42		94.074-22	47.594-31		141.669-19	
Frómista (Palencia)	20	3		23		27,56	47,07		74,66		56.414	67.853-16		124.267-16	
Villada (Palencia)	13			13		6,67			6,67		19.368-25			19.386-25	
Cañizar (Zamora)	52	4		56		73,78	32,64		106,42		?	?		?	
Requena (Cuenca)	60	21	5	86		121,91	229,66	172,39	523,96		237.634	439.239	437.990	1.114.863	
Anchuelo (Madrid)		2		2			16,54		16,54			50.001**		50.001	
Redondela (Sevilla)	1			1		4,16			4,16		7.000			7.000	

* Adquirieron 468 árboles

** Precio de 15,49 hectáreas

FUENTE: Sánchez Salazar, Felipa, "Incidencia de la ocupación francesa en el medio rural: venta de tierras de propios y comunales. Una aproximación al estado de la cuestión", *Agricultura y Sociedad*, n° 55, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, abril-junio 1990, pág. 143.

CUADRO 5
Compradores de tierras, superficie adquirida y precio (en %)

Localidad	Número de compradores (%)			Superficie (%)			Dinero (%)		
	0 a 20	21 a 99	100 en adelante	0 a 20	21 a 99	100 en adelante	0 a 20	21 a 99	100 en adelante
			(fanegas)		(fanegas)			(fanegas)	
Provincia de Álava	80,9	10,5	8,4	11,4	15,2	73,2	31,3	31,0	37,6
Ciudad de Logroño	85,13	14,86		44,42	55,57		59,22	40,78	
Cuenca de Campos									
(Valladolid)	84,37	15,62		50,39	49,60		66,40	33,59	
Frómista (Palencia)	86,95	13,04		36,92	63,07		45,39	54,60	
Cañizar (Zamora)	92,85	7,14		69,33	30,67		?	?	
Requena (Cuenca)	69,76	24,41	5,81	23,26	43,83	32,90	21,31	39,39	39,28

FUENTE: Ibidem, pág. 144.

provincia de Salamanca que soportó una fuerte carga desamortizadora en el patrimonio de sus municipios (véanse los cuadros 6 y 7)²⁷¹.

Sabemos que hubo provincias a las que afectó más la enajenación de baldíos, caso de Navarra, donde la desamortización fue intensa en la Zona Media y la Ribera, así como que benefició en mayor medida a labradores locales cuando el enclave de los terrenos desamortizados no distaban de las poblaciones. En algunas ocasiones, habida cuenta de las dimensiones enajenadas, los baldíos eran incultos por lo que precisaban importantes esfuerzos para su puesta en cultivo e iniciar una explotación adecuada. Esto mismo provocó que pudieran acceder a dichas tierras las personas mejor dotadas económicamente. Sin embargo, en líneas generales podemos decir que se accedió a pequeñas propiedades por parte de un considerable conjunto de labradores de menor entidad²⁷².

Obviamente, la salida al mercado de tierras suponía, de una u otra forma, un mayor número de propietarios que ponían sus recursos en explotación. Una vez consultada la documentación a la que hemos tenido acceso y observando los cuadros antes mencionados relativos a este período, puede comprobarse que existieron ventas de un tamaño medio que beneficiaron a propietarios con recursos ciertamente discretos o menores. Así, podemos encontrar, por ejemplo, que en la provincia de Guipúzcoa, donde solamente el 2,5 por ciento del total de bienes vendidos acabó en manos de la nobleza, el 1,2 por ciento fue al clero y el 95,3 por ciento restante pudo ser comprado por personas pertenecientes a diversos grupos sociales, entre los que estaba incluido algún gran propietario.

Sin embargo, sí es de destacar en este sentido las compras que se hicieron por parte de vecinos que, asociados expresamente para poder optar a la adquisición de tierras, lograron hacerse con un porcentaje de las mismas. En efecto, la agrupación de vecinos para participar en las compras

²⁷¹ Sánchez Salazar, Felipa, "Incidencia de la ocupación francesa en el medio rural: venta de tierras de propios y comunales. Una aproximación al estado de la cuestión", *Agricultura y Sociedad*, número 55, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, abril-junio 1990, págs. 131 a 134.

²⁷² Torre Campo, Joseba de la, *Los campesinos navarros ante la guerra napoleónica: financiación bélica y desamortización civil*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1991, pág. 199, y Rueda Hernanz, Germán, *La desamortización en España*, ob. cit., pág. 37

CUADRO 6

Compradores de tierras y precio

Localidad	Número de compradores			Dinero (rs-mrs)				
	Por encima de 100.000 rs	entre 10.000 y 100.000 rs	por debajo de 10.000 rs	Total	Por encima de 100.000 rs	entre 10.000 y 100.000 rs	por debajo de 10.000 rs	Total
9 pueblos (Guipúzcoa)	12	201	1.245	1.458	1.956.713	5.078.237	2.813.161	9.848.111
Aroche (Sevilla)	1	1		2	732.734	36.666		769.400
Gibraleón (Sevilla)	1			1	317.449			317.449
Puebla Nueva (Toledo)				2				?
Oreja (Guipúzcoa)		1		1		52.290-25	79.969	52.290-25
Lumbrales (Salamanca)			46	46				79.969

FUENTE: “Incidencia de la ocupación francesa en el medio rural: venta de tierras de propios y comunales. Una aproximación al estado de la cuestión”, *Agricultura y Sociedad*, nº 55, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, abril-junio 1990, pág. 145.

CUADRO 7

Compradores de tierras y precio (en %)

Localidad	% de compradores			% Dinero (rs-mrs)		
	Por encima de 100.000 rs	entre 10.000 y 100.000 rs	por debajo de 10.000 rs	Por encima de 100.000 rs	entre 10.000 y 100.000 rs	por debajo de 10.000 rs
9 pueblos (Guipúzcoa)	0,82	13,78	85,39	19,86	51,56	28,56
Aroche (Sevilla)	0,5	0,5		95,23	4,76	

FUENTE: Ibidem.

es un hecho contrastado, registrado en otros puntos de la geografía española durante las desamortizaciones. En este sentido, como ya advertimos unas páginas más arriba, está suficientemente documentado el caso de las antiguas comunidades rurales guipuzcoanas, adaptadas tras el nuevo marco legislativo referido a las desamortizaciones en los territorios vascos. En su adecuación, las antiguas organizaciones formadas por pequeñas comunidades vecinales terminaron formando parte de entes corporativos privados, donde la participación debía hacerse conforme a la condición de socios de pleno derecho. De esta forma, lo que hasta ese momento habían sido agrupaciones de agricultores o ganaderos, pasaron a buscar nuevas formas de asociación en defensa de sus antiguos derechos sobre la propiedad²⁷³.

Originalmente, las Comunidades estaban formadas por propietarios residentes, contando con un presidente y un administrador elegido por los vecinos. Todos los socios participaban de las decisiones en función de las «acciones» que poseían; entendiendo éstas las casas y haciendas. Desde finales del siglo XVIII y hasta las primeras décadas del XIX, la organización y gestión del territorio corría a cargo de los vecinos «asociados» a la Comunidad. En este sentido se ocupaban de la administración de los bienes y de las rentas obtenidas, el mantenimiento de abastecimientos, reparación de los caminos, etc., además de regular las actividades propias de las tierras de cultivo o pastoreo²⁷⁴.

Sorprende, por ejemplo, que de toda la documentación existente entre las solicitudes de posesión y títulos de bienes correspondientes al proceso desamortizador, y estudiada por Estíbaliz González, aparecen varias agrupaciones de vecinos propietarios de bienes desamortizados como la *Sociedad de Berastegui* y la *Sociedad de Elduayen*. Se han examinado también numerosos casos en los que fincas desamortizadas y adquiridas por particulares, a través de subastas, fueron cedidas a distintas Sociedades. Hay que recordar que en muchas localidades del norte peninsular, especialmente en las provincias que hoy conforman el País Vasco, fueron

²⁷³ González Dios, Estíbaliz, “La reestructuración de las antiguas comunidades rurales guipuzcoanas en Sociedades de Propietarios”, Comunicación presentada a la 2ª Sesión del XI Congreso de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, entre los días 15 al 18 de junio de 2005, Organizado por la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), Universidad de Valladolid.

²⁷⁴ Ibídem, págs. 8 y 9.

desamortizados y subastados terrenos que habían pertenecido a la Iglesia, además de otras corporaciones religiosas y seculares. De estos hechos, podemos comprender como las Comunidades vecinales, una vez perdido el concepto de institución y órgano administrativo local, pasó de pronto a verse convertido en una sociedad de propietarios con plenos intereses territoriales²⁷⁵.

En este mismo sentido, al examinar en todo su conjunto lo sucedido en la provincia de Guipúzcoa, podemos comprobar como el 10 por ciento de los beneficiarios llegó a adquirir cerca de un 60 por ciento del valor total puesto en venta. Junto a ello, pequeños y medianos propietarios accedieron todavía a fincas más reducidas, siendo limitado el grupo que procedió a realizar operaciones de bienes más considerables²⁷⁶.

Como advertimos para el caso de Andalucía, en las desamortizaciones de este período se vendieron tierras de labor, además de otros terrenos incultos o destinados a pastos. Se construyeron caseríos y se cercaron propiedades para el cultivo de granos, árboles frutales, etc., con el fin de habitar las tierras y proceder a su explotación agrícola y ganadera. No es posible cuantificar qué número total de suelo fue roturado. Los estudios realizados sí han probado, por ejemplo, que el 80 por ciento de la tierra enajenada en Álava pasó de baldía a ser de labranza, aumentando así la superficie roturada, con lo que igualmente aumento la producción de cereales²⁷⁷.

Otro aspecto favorable a la proliferación de pequeños y medianos propietarios se produjo en Extremadura, donde los bienes puestos a la venta se enajenaban a condición de que éstos fueran cercados. Este hecho implicaba el aprovechamiento pleno para la producción agrícola, a menudo a cambio de ocasionar graves perjuicios al ganado²⁷⁸. A ello hubo que añadir el pago de deudas en tierras. En efecto, muchos Ayuntamientos durante la

²⁷⁵ *Ibidem*, págs. 10 a 15.

²⁷⁶ Sánchez Salazar, Felipa, ob. cit., págs. 142 y 146.

²⁷⁷ *Ibidem*, págs. 147 a 148. También en Ortiz de Orruño, Legarda, José María, *Álava durante la invasión napoleónica: reconversión fiscal y desamortización en el término municipal de Vitoria*, Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1983, págs. 155 y 156.

²⁷⁸ En efecto, en zonas de Cañizar (Zamora), la superficie de pastos quedó reducida hasta el extremo de ser insuficientes para “sustentar a 95 pares de ganado de labor, 14 reses holgonas vacunas y 12 de ganado caballar”. Véase Sánchez Salazar, Felipa, ob. cit., pág. 148.

guerra tuvieron que pedir fondos a particulares por lo que no hubo más remedio que hipotecar parte e incluso en algunos casos todos los bienes concejiles. En términos reales, está demostrado que en la mayoría de los pueblos el coste de la guerra había superado los ingresos municipales. La recompensa final fueron tierras para labor. De la misma manera están documentados los pagos para compensar las deudas contraídas en muchos municipios. Pagos que terminaron con otra parte importante de los bienes propios y que reflejan las dificultades contraídas una vez finalizada la contienda napoleónica²⁷⁹.

Desde esta perspectiva, parece comprensible que finalizada la guerra, los procedimientos legales para el mantenimiento de las propiedades enajenadas se tradujeran en constantes pleitos en los tribunales. Por lo general, éstos fueron en beneficio de los compradores. En cualquier caso, la insistencia en los litigios acabó dando la razón a quienes los interponían.

En el último tramo de las desamortizaciones realizadas antes de 1835 se pusieron a la venta, durante el Trienio Liberal, los bienes eclesiásticos derivados de la legislación de las Cortes de Cádiz, además de los procedentes de los monasterios y de la Inquisición. En un trabajo ya clásico realizado por Manuel Revuelta sobre la política religiosa liberal, y otro algo más reciente de Manuel González de Molina, relativo a la desamortización eclesiástica de la época, ha quedado constancia que llegaron a venderse la mitad de los bienes pertenecientes a monasterios y conventos por un importe próximo a los 1.500 millones de reales, siendo los compradores más de 10.000²⁸⁰.

En esta maniobra desamortizadora destacó el volumen de compras realizado por propietarios absentistas y personas de la nobleza, junto con algunos hombres de negocios. La amplitud en el tamaño de las mismas y que los pagos debían hacerse en títulos de deuda, limitó el perfil de los compradores, que debían poseer necesariamente dichos títulos si querían optar a las tierras. Ciertamente es que los títulos se habían devaluado y que el precio final de tasación resultó muy inferior al esperado. En concreto,

²⁷⁹ Para este asunto en particular puede consultarse la obra citada de Sánchez Salazar, especialmente el apartado dedicado a las consecuencias de la desamortización.

²⁸⁰ Revuelta González, Manuel, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX*, CSIC, Madrid, 1973, y González de Molina, Manuel, "La desamortización eclesiástica en el trienio liberal (1820-1823). Un primer acercamiento a los datos generales", *Estudios de Historia Social*, números 36 y 37, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986, págs. 141 a 148.

algunas monografías sobre el tema revelan que la adquisición media se pagó a un 40 por ciento del valor real del mercado. La desamortización eclesiástica durante el Trienio fue el ejemplo más específico del acceso a la tierra por parte de los ricos terratenientes del mundo rural que, por unos títulos muy depreciados, llegaron a acceder a extensas explotaciones agrícolas. Personas cuyo objetivo fue obtener el máximo beneficio a través de la posterior reventa de los bienes o en su caso mediante el arrendamiento y el aumento de rentas a labradores y campesinos.

Así y todo, en 1823 parecía evidente que los tres años de liberalismo en el poder iban a finalizar. Ya en las últimas sesiones del Trienio celebradas en Sevilla, existía una sensación de los errores que se habían cometido en la enajenación de monasterios y patrimonios eclesiásticos. En la sesión de las Cortes celebrada en Sevilla, el domingo 4 de mayo de 1823, el diputado por la provincia de Salamanca, González Alonso, se refería a esta cuestión de la siguiente forma y en los términos siguientes:

La experiencia, señores, es la que me ha movido á hacer estas proposiciones: yo he visto que se están haciendo ventas escandalosas de pueblos, tierras y despoblados á personas poderosas, que repartidas en propiedades regulares podrían hacerse con ellas muchos ricos labradores: dígalo sino esa Extremadura, en donde pingües dehesas y fértiles campos son poseídos por un rico propietario: ¿y no sería mas útil al Estado que esto lo poseyeran muchos?²⁸¹.

Aún cuando el procedimiento tuviera críticas, los nuevos propietarios, en su mayoría, iban a poner en marcha en pocos años una nueva economía de mercado permitiendo la modernización de un número considerable de explotaciones y entrando de lleno en lo que se dio en llamar el «sistema capitalista». Habría que sumar también a todo ello una dosis nada despreciable de intereses comunes y de ideas asociadas al prestigio de una clase agrícola que, con el paso de las décadas, iría acrecentándose en la mayoría de las regiones españolas. Propietarios que vendrían a significarse con el desarrollo de una sociedad más dinámica en las relaciones sociales, políticas y económicas, creando a partir de la segunda mitad del siglo XIX en el ámbito agrícola auténticos grupos de presión.

²⁸¹ *Diario de las Sesiones de Cortes celebradas en Sevilla y Cádiz en 1823*, Imprenta Nacional, Madrid, 1858, pág. 54.

En cualquier caso, la desamortización durante el Trienio, no cabe duda que impulsó un proceso que ya no se detendría durante el tiempo que restaba para finalizar el siglo XIX. Los casos documentados de labradores y agricultores que pudieron acceder finalmente a fincas enajenadas demuestran que las consecuencias, a la postre, fueron beneficiosas para el aumento de la masa de pequeños y medianos propietarios que tanta importancia tendrían décadas después en el desarrollo del asociacionismo en el mundo rural²⁸². Como se ha dicho en algún caso, el Antiguo Régimen pareció que en 1823 volvería a recobrase. Sin embargo, sus fundamentos y principios hacía tiempo que se habían fragmentado, incluso ya durante el siglo XVIII, siendo uno de sus más letales heridas la propia desamortización iniciada en la segunda mitad del mismo.

En líneas generales, el desarrollo en nuestro país de todo el proceso desamortizador, como ya trataremos más adelante, incluidos los primeros pasos recorridos hasta el Trienio, a pesar de producir un acceso razonable a las tierras por parte de la clase terrateniente, produjo igualmente una incorporación de nuevos propietarios que habían mostrado una mayor capacidad para emprender mejores y más productivos proyectos. Una intención que estaba dirigida a conseguir igualmente un más adecuado aprovechamiento y comercialización del campo. Junto a ellos, se prodigaron grupos de compradores formados por comerciantes y funcionarios, muchas veces realizando compras cercanas a las localidades de residencia, sin olvidar a los labradores con recursos, cuyo acceso a las tierras más asequibles produjo una sensible mejora en las explotaciones y un ahorro en los arrendamientos²⁸³.

Por lo que se refiere al ámbito geográfico, la desamortización efectuada en destacadas áreas de las dos Castillas, Extremadura y Andalucía, fue significativamente importante para el decisivo fortalecimiento de la burguesía, entre la que se encontraban grupos de labradores acomodados,

²⁸² El caso del acceso a las propiedades desamortizadas en Asturias, por parte de 63 labradores del partido de Infiesto, está suficientemente documentado en la historiografía de nuestro país. En efecto, el Jefe Político de la provincia de Asturias informó al ministro de la Gobernación en julio de 1822, que dicho número de labradores habían comprado varias fincas del Monasterio de San Vicente. Él mismo, expone que habría que modificar la legislación con el fin de hacer posible y extensible el acceso a otras muchas subastas por parte de los pequeños propietarios. Véase Ruiz, David, *Asturias contemporánea 1808-1975. Síntesis histórica: textos y documentos*, Siglo XXI, Madrid, 1981, pág. 26; Moral Ruiz, Joaquín del (1975), ob. cit., pág. 149, y Rueda Hernanz, Germán (1997), ob. cit., pág. 41.

²⁸³ Rueda Hernanz, Germán, *La desamortización en España*, ob. cit., págs. 32 y 33.

además de un considerable contingente de medianos propietarios. Asimismo, a lo largo de todo el proceso, pequeños lotes de tierra fueron adquiridos de manera continuada por vecinos cuya residencia no distaba significativamente de las localidades próximas. A éstos, habría que añadir otras partidas de mayor tamaño a las que sí tuvieron acceso aquellos propietarios mejor situados y con mayores posibilidades de adquisición. Finalmente, y en las zonas meridionales de la Península, la desamortización acentuó la concentración de la propiedad, generando el establecimiento de nuevos latifundios a manos de grandes latifundistas que no tardaron en «proletarizar» amplias zonas campesinas del Sur; lugares a los que el proceso de industrialización aún estaba por llegar²⁸⁴.

4.- LA CONCIENCIA DE UNA CLASE PRODUCTORA. LOS INICIOS DE LA POLÍTICA PROTECCIONISTA EN LOS CEREALES

- La transformación de la sociedad agraria. Los propietarios agrícolas en los comienzos de la España liberal

Es sobradamente conocida, entre los trabajos historiográficos de los últimos años, la opinión relativa a que la expiración de la monarquía absoluta en España produjo una significativa transformación en las relaciones existentes entre las personas que conformaban las sociedades agrarias en nuestro país. Éstas, no obstante, apenas habrían tenido protagonismo en dichos cambios al no poder atribuírseles el propósito de modificar las bases económicas, que en esos momentos pasaban por pertenecer a lo que durante mucho tiempo se ha denominado «economía tradicional». Al margen del conocimiento que pudieran tener en su momento los primeros liberales en España sobre los logros obtenidos en algunos países de Europa en relación al proceso industrial, dentro de su ideario sí estaba el hecho de alcanzar un mayor crecimiento económico, además de acometer un cambio en el modelo social²⁸⁵.

²⁸⁴ Herr, Richard, “El significado de la desamortización en España”, *Moneda y Crédito*, número 131, 1974, págs. 55-94, y Rueda, Germán (1997), ob. cit., págs. 65 y 66.

²⁸⁵ Artola, Miguel, *Antiguo Régimen y revolución liberal*, Ariel, Barcelona, 1978, págs. 157 y 158. También en Tedde de Lorca, Pedro, “Revolución liberal y crecimiento económico en la España del siglo XIX”, en *Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola*. Vol. 1, Visiones generales, Alianza Editorial, Madrid, 1994, pág. 31.

Para un nutrido grupo de intelectuales de la época, la limitación fundamental ocurrida durante mucho tiempo en el desarrollo agrícola, derivaba de una combinación de la vieja idea de maltusiana de la población y los recursos agrícolas, a la que se había añadido una inadecuada presión fiscal. Una síntesis, por lo que se puede comprobar, de factores demográficos, económicos y políticos que, naturalmente, hoy no debe sorprendernos²⁸⁶. En la mente de los reformadores, como sucediera con Campomanes y Jovellanos, permanecía la idea de crear una clase de pequeños y medianos campesinos, propietarios que estarían respaldados por la Corona y que, junto a un sentido de la obligación cívica, proporcionarían al país la base económica necesaria para asegurar su prosperidad²⁸⁷.

Las reformas, cuyo éxito solo sería parcial, se impulsaron con varios planes agrarios definidos, estimulando el desarrollo de los intercambios económicos en el campo de la agricultura gracias a la desregulación de los mercados de cereales a partir de la aprobación de la Pragmática del año 1765. En la misma, se recogía la extracción de trigo fuera del país, siempre y cuando su precio se mantuviera en un intervalo de los 32 a 35 reales por fanega en los pueblos e inmediaciones a los puertos de embarque, así como su importación cuando el precio excediera de dichos niveles²⁸⁸. Este hecho produjo, sin duda alguna, un importante beneficio en los nobles rentistas y el clero, además de proporcionar mayores oportunidades a los ricos propietarios de tierras en algunas regiones del interior peninsular. A todo ello se unió también la desamortización de las tierras municipales y eclesiásticas y la puesta en marcha de nuevos asentamientos de labradores y colonias, compuestas y organizadas principalmente por pequeños

²⁸⁶ La teoría demográfica, económica y sociopolítica del británico Thomas Malthus, defendida en su obra *Ensayo sobre el principio de la población* (1798), mantenía que el ritmo de crecimiento durante la Revolución Industrial se producía mediante una progresión geométrica, mientras que los recursos lo hacían en una progresión aritmética. La falta de recursos para la supervivencia solo podría compensarse mediante enfermedades y otras catástrofes que podrían equilibrar dichos medios. Evidentemente Malthus no entendió que al mismo tiempo también los avances tecnológicos aumentaban las formas para obtener más alimentos. Del texto original del propio Thomas Malthus existe una brillante traducción de José María Noguera y Joaquín Miquel en español, publicada en Madrid en el año 1846. Véase también de Rodríguez González, Guillermo, *El socialismo del Siglo XXI*, Centro de Economía Política Juan de Mariana, Caracas, 2006, págs. 67 a 91.

²⁸⁷ Pérez-Díaz, Víctor, "Transformaciones de una tradición. Campesinos y agricultura en Castilla entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XX", *Homenaje a Miguel Artola*, ob. cit., pág. 104.

²⁸⁸ Martínez Ruiz, José Ignacio, "El mercado internacional de cereales y harinas y el abastecimiento de la periferia española en la segunda mitad del siglo XVIII: Cádiz, entre la regulación y el mercado", *Investigaciones de Historia Económica*, número 1, Universidad de Salamanca, 2005, págs. 46 y 47.

agricultores. Éstas últimas realizadas bajo la iniciativa de otro conocido ilustrado como Pablo de Olavide²⁸⁹.

Los primeros resultados fueron muy llamativos al comprobarse el aumento de las rentas, debido principalmente a la expansión de las tierras puestas en cultivo y a la producción agrícola. Todo ello condujo a la regulación y redistribución de la tierra entre labradores con menores recursos, especialmente en Extremadura y Andalucía, a través de leyes y decretos que fueron mal aceptados por la nobleza y los propietarios más acomodados, dueños en esos momentos de las administraciones locales en la práctica totalidad de las provincias del Estado²⁹⁰. Al mismo tiempo, existió también el empeño por activar el interés hacia la agricultura por parte de las Sociedades Económicas de Amigos del País. Una contribución que, desde nuestro punto de vista, impulsó y contribuyó a la difusión de determinadas innovaciones técnicas, relativas al cultivo, entre una población que hasta entonces había sido muy descuidada en este sentido.

Sin embargo, la situación en la mayoría de países europeos varió con el advenimiento de un largo período de crisis económicas, sobrevenidas a partir de los últimos años del siglo XVIII como consecuencia de los temores originados después del triunfo de la Revolución en Francia. Además, hubo que sumar a la misma los incesantes conflictos políticos y militares acaecidos entre distintas naciones en Europa a lo largo de sucesivas décadas. Una realidad que siguió manteniéndose, también en España, hasta después de 1820.

Hasta los años treinta del siglo XIX, las repercusiones de las primeras desamortizaciones, desvinculaciones y redistribución de los bienes productivos de la tierra trajeron consigo un proceso de centralización burocrática, ya apuntado por varios historiadores, además de una consolidación de una nueva oligarquía rural. El conjunto de intereses de nobiliarios y terratenientes, unidos a los nuevos propietarios locales y administradores de grandes fincas, comenzaron a aunarse, algunas veces a través de lazos matrimoniales, para conformar lo que se ha considerado en llamar el «orden moderado» del Estado liberal. Dicho de otro modo, en una

²⁸⁹ Perdices Blas, Luis, *Pablo de Olavide (1725-1803), el Ilustrado*, Editorial Complutense, Madrid, 1992, págs. 179 a 187.

²⁹⁰ Pérez-Díaz, Víctor, ob. cit., pág. 105.

coalición de intereses oligárquicos que se desarrollaría con más intensidad mediada ya la centuria²⁹¹.

De cualquier forma, con la entrada en el siglo XIX, España iba a quedar inmersa en una multiplicidad de enfoques que habrían de dar lugar a un cambio significativo, tanto en los modelos sociales como en los económicos y políticos que, de una u otra forma, terminarían haciéndose visibles en todas las regiones del país. Aspectos tan esenciales como el cambio social, producido en el tránsito hacia la sociedad burguesa, o la paulatina politización del mundo agrario tras la finalización del Antiguo Régimen, produjeron notables transformaciones en una gran parte las estructuras agrarias, afectando muy directamente a la actividad de los propietarios en la agricultura. En este sentido, también se han venido realizando estudios parciales a nivel regional, con la idea de escudriñar los problemas surgidos a raíz de las distintas actitudes y de los conflictos provocados ante el cambio en las estructuras económicas sobrevenidas con el liberalismo. Desde esa perspectiva, conviene tener presente la evolución que experimentaron los poderes locales, tanto desde la óptica económica y social, lo que definitivamente dio un nuevo aspecto al ámbito de lo local.

Dado el carácter preeminente de la tierra en las comunidades rurales, durante siglos, la propiedad constituyó una de las más importantes fuentes de poder en los municipios. No obstante, y con las nuevas reglas de juego establecidas por el triunfo liberal, esto es, la aparente igualdad ante la ley, los impuestos, la propiedad privada y la pugna en los mercados, no cabe duda que las anteriores relaciones se vieron alteradas, constituyéndose una nueva funcionalidad económica dentro de los poderes locales. De esta manera, la tierra, aun cuando siguió siendo una fuente de riqueza en los primeros años del siglo XIX, la misma ya no garantizaba el acceso a la cúspide municipal²⁹².

Precisamente, la aparente dualidad entre señores y campesinos, abordada durante largos años en los trabajos sobre el paso a la sociedad liberal, ha dejado un planteamiento bien diferente del que pudiera esperarse.

²⁹¹ Guerrero Latorre, Ana Clara, Juliá Díaz, Santos y Torres Ballesteros, Sagrario, ob. cit., pág. 212.

²⁹² Grupo de Estudios Agrarios (GEA), "Transformaciones agrarias y cambios en la funcionalidad de los poderes locales en la Alta Andalucía, 1750-1950", *Noticiario de Historia Agraria*, número 10, 1995, págs. 37 y 38.

Así, tanto en las comarcas de Galicia como en Andalucía, el esquema anterior se ha puesto en duda al comprobarse una estructura social mucho más amplia y compleja. En la misma, junto a la monarquía y los poderes señoriales tantas veces destacados, se ha demostrado la importancia ejercida por distintos grupos de propietarios comprometidos con las explotaciones agrarias²⁹³.

En algunos de los trabajos llevados a cabo sobre la Alta Andalucía, se ha tratado de reflejar la posición de preeminencia mantenida desde mediados del siglo XVIII por la «burguesía agraria» en el terreno de la producción, no así en lo relativo al poder político, lo que le habría conferido una cierta hegemonía temprana en algunas zonas del sur peninsular²⁹⁴. Desde esa perspectiva, el cambio de siglo habría supuesto, además de un claro paso hacia el «capitalismo», una modificación en los modelos de jerarquía, destacando el particular protagonismo ejercido por los grupos sociales agrarios y, en especial, los más humildes.

En Córdoba, el cambio liberal supuso el progreso de un nuevo grupo de terratenientes desligados de la oligarquía anterior. Su importancia se resume en el aumento, casi el doble, del número de nuevos propietarios en tan solo medio siglo. De esta forma, la provincia pasó a ser una ciudad de «labradores» poniendo al margen a los anteriores rentistas acomodados del siglo XVIII²⁹⁵. De forma similar, en algunas de las comarcas orientales de Andalucía, las reivindicaciones de grupos de jornaleros dieron lugar, en muchos casos, al reparto de tierras de propios. La magnitud de las adjudicaciones de tierras motivaron, a pesar del sufragio censitario, que

²⁹³ Millán y García-Varela, Jesús, “Poderes locales, conflictividad y cambio social en la España agraria. Del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 6, 1993, pág. 28. Véase también de Calatayud Giner, Salvador, “Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 5, 1993, págs. 197 a 204.

²⁹⁴ Millán y García-Varela, Jesús, ob. cit., págs. 28 y 29. En relación a la Alta Andalucía, hacemos referencia a una denominación, no oficial, utilizada desde el siglo XVII, sin efectos jurisdiccionales y compuesta por los territorios de las Cordilleras Subbética, Penibética, así como el Surco Intrabético (Comarcas de la Alpujarra y Alhama, Valle de Lecrín, Vega de Granada, Sierra Mágina y Sur de Jaén, Sierra de Cádiz y Serranía de Ronda).

²⁹⁵ A este respecto, para conocer algo más de la situación a comienzos del siglo XIX en Córdoba puede consultarse la comunicación presentada por el Grupo de Historia Social Agraria Andaluza en la VI Reunión del Seminario de Historia Agraria, celebrada en la localidad de Cabezón de la Sal, Cantabria, durante los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1993, y con el título de “Terratenientes, labradores y poder local en Córdoba (siglo XIX)”.

muchos medianos y pequeños propietarios andaluces surgidos desde finales del XVIII tuvieran cabida en los procesos electorales²⁹⁶.

La consolidación, por ejemplo, de la sociedad burguesa en las comarcas valencianas, contó con un claro influjo de propietarios pertenecientes a la nobleza, encargados muchas veces de gestionar las actividades agrícolas. En este orden de cosas, la agricultura era a comienzos del siglo XIX el sector más decisivo en la ciudad de Valencia y las comarcas meridionales, donde ejercían su influencia política destacadas personalidades como el barón de Casanova, el conde de Ripalda o el marqués de Cáceres, todos ellos con un destacado patrimonio. Una élite propietaria procedente del entorno urbano y con patrimonios vinculados al regadío en zonas de litoral que, en ocasiones, alcanzó un sitio entre la nobleza de forma tardía, teniendo sus principales fuentes de ingresos escasa relación con los derechos señoriales. Al mismo tiempo, este acceso a los títulos de la clase nobiliaria, conseguido solo unos años antes del triunfo liberal en nuestro país, se reflejó en una notable falta de integración con las grandes casas señoriales²⁹⁷.

Contrariamente a lo sucedido en Valencia, la nueva oligarquía de la provincia de Castellón, formada sobre todo por grupos agrarios, mostró a comienzos del siglo XIX un destacado papel en la política local. Así, por ejemplo, la reorientación producida en el equilibrio de los poderes locales en la capital castellanense dio como resultado, en palabras de Manuel Martí: “la desaparición casi completa de la oligarquía urbana que había regido la villa durante el siglo XVIII”²⁹⁸. En su lugar, el liberalismo castellanense, en su mayoría progresista, logró consolidar un grupo de personas dedicadas a las actividades agrarias y comerciales que, al mismo tiempo, pudo ir

²⁹⁶ Millán y García-Varela, Jesús, ob. cit., págs. 30 y 31.

²⁹⁷ Así parece desprenderse de los estudios realizados en relación a la actividad política y económica del conde de Pinohermoso, cuyo título nobiliario lo habría adquirido en 1790, o de la familia Ripalda, heredera de los marqueses de Campo Salinas. Véase de Calatayud, Salvador; Millán, Jesús y Romero, M^a Cruz, “El ideal del propietario agrícola y estabilidad de la sociedad de clases. Discurso y gestión en la nobleza valenciana del siglo XIX”, *VIII Congreso de Historia Agraria. Salamanca, 28-30 de mayo de 1997*, Universidad de Salamanca, Departamento de Economía e Historia Económica, 1997, pág. 35.

²⁹⁸ Martí, Manuel, “Los grupos agrarios en la política urbana del País Valenciano: Castelló de la Plana, ss. XIX-XX”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 11, 1996, pág. 59 y 60.

adquiriendo, a través de la compra de bienes desamortizados, un patrimonio rústico y rural de considerables rendimientos²⁹⁹.

En esta misma línea argumental y coincidiendo con los primeros gobiernos liberales, la caída de los precios en el mercado agrícola vino a trastocar los rendimientos de una buena parte de los arrendatarios y aparceros repartidos por todo el país. A pesar de todo ello, la particularidad de la agricultura valenciana, ligada al comercio, tanto interior como exterior, produjo en la zona una estabilidad en los ingresos, ocasionando leves oscilaciones en los mismos. Recientemente, en los trabajos relacionados con la agricultura valenciana se ha comprobado la amplia repercusión que tuvo la clase propietaria, así como la *Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia*, en el impulso por conseguir mejoras en la productividad agrícola de la región³⁰⁰. En este aspecto, el pensamiento del propio José Joaquín Agulló, conde de Ripalda, era claro al manifestar que: “El impulso de la agricultura se conoce más que en nada por los propietarios que dedican sus caudales, tiempo y estudio a la industria agrícola, teniendo el placer y variedad en mejorar sus tierras y obtener más pingües cosechas”³⁰¹.

La acumulación de tierras por parte de algunos sectores acomodados produjo igualmente, y en palabras de Enric Vicedo Rius, un claro desarrollo en colectividades de «campesinos enriquecidos» distribuidos en amplias comarcas de Cataluña. Así ha quedado demostrado en el caso de Anastasi Jordà, al pasar de 15,4 hectáreas de tierras de regadío en 1777 a poseer algo más de 22 hectáreas a comienzos del siglo XIX. La inversión en fincas, los arrendamientos y especialmente el acceso a la propiedad, suponen el mejor y más claro exponente de que también el campesinado, en el caso de la antigua provincia de Lérida, se había diversificado de manera relevante,

²⁹⁹ Badenes, Miquel. A., “La venta de bienes eclesiásticos en las comarcas castellonenses. Desamortización de Mendizábal (1836-1845), *Estudis Castellonencs*, número 1, Diputació de Castelló, 1983, págs. 233-261.

³⁰⁰ *Ibidem*, págs. 341 a 345.

³⁰¹ *Boletín de la Real Sociedad Económica del País de Valencia*. Tomo I, años 1839-1841, Valencia, págs. 398. A mediados del siglo XIX, el conde de Ripalda destacaba la importancia que tenían los ricos hacendados en las explotaciones agrícolas en Valencia, asegurando que de haber tenido los labradores más medios económicos para comprar yeguas y estiércoles con los que trabajar y cultivar las tierras, toda la provincia habría sido más próspera. Véase, por ejemplo, Agulló, José Joaquín, conde de Ripalda, *Cartilla agrícola del labrador de la Huerta de Valencia*, Imprenta Monfort, Valencia, 1845, pág. 24.

dando lugar a una incipiente burguesía y, al mismo tiempo, a una intensificación en el proceso de proletarización del propio campesinado³⁰².

De hecho, en muchos casos la transformación de la propiedad se alejó en exceso de los primeros razonamientos liberales, al coincidir en una misma circunscripción grandes propiedades junto a numerosos labradores sin tierra³⁰³. La idea de adjudicar a los labradores una parcela de tierra cultivable y facilitar los medios de producción adecuados ya había sido discutida en la segunda mitad del siglo XVIII, pasando a formar parte del ideario propiamente ilustrado³⁰⁴. No obstante, y debido al peso cada vez mayor de los grandes propietarios a partir del Trienio, el proyecto acabó desvirtuándose, encontrándonos con casos como el que antes se ha comentado.

Campomanes había advertido del peligro existente en relación con las antiguas ordenanzas municipales y sus objetivos en muchas zonas de Castilla, lo que provocaba la miseria de la clase jornalera³⁰⁵. Entre sus preocupaciones estaba igualmente la idea de la despoblación. En un Memorial de la época, siendo el propio Rodríguez Campomanes el Fiscal más antiguo del Consejo de Castilla, y refiriéndose a este problema concreto, apuntaba lo siguiente: “La despoblacion ha dimanado tambien de la facilidad

³⁰² Vicedo Rius, Enric, “Crisis de las solidaridades tradicionales y nuevas formas de asociación y resistencia campesina en la Cataluña Occidental”, *Historia Agraria*, número 18, Sociedad Española de Historia Agraria, año 1999, págs. 207 y 208.

³⁰³ José Castel, director de la Económica en Lérida, afirmaba en un informe lo siguiente: “En esta provincia los propietarios cultivan generalmente sus tierras, y puedo asegurar que ni la décima parte de los mismos está administrada por puros colonos. No obstante esta generalidad, á cuatro leguas de circunferencia de esta Ciudad hay más de cien mil aranzadas de tierra perteneciente á Beneficencia, Corporaciones Eclesiásticas, ó Señores laicos que no están divididas en propiedad; y por consiguiente cultivadas su mayor parte por colonos, ó yermas para pastos naturales de ganado. Este es un mal gravísimo porque hace improductivas gran parte de aquellas tierras, ó que por lo menos no producen la mitad de lo que rendirían reducidas á propiedad particular”. Más adelante matizaba: “Acaso solo en la Ciudad de Lérida hay seiscientos jornaleros que no tienen ninguna propiedad y por consiguiente quedan sin ocupación los días que no encuentran jornal. Este mal se evitaría dividiendo en propiedades aquellos dilatados territorios”. Véase el *Informe del Director de la Sociedad Económica de Lérida sobre el crédito territorial*, en *Preguntas realizadas por el Ministerio de Fomento a la Juntas de Agricultura y Sociedades Económicas... Bancos agrícolas*, Archivo del Ministerio de Agricultura, Sección Fondos del siglo XIX (en adelante AMA), legajo número 123 A.

³⁰⁴ Robledo Hernández, Ricardo, *Economistas y reformadores españoles: La cuestión agraria (1760-1935)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993, págs. 28 a 33.

³⁰⁵ Robledo, Ricardo, “El ascenso de una burguesía agraria: los «granjeros». Salamanca, 1780-1840”, Saavedra, Pegerto y Villares, Ramón, eds., *Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. Volumen 1. «Os señores da terra»*, Editorial Crítica, Barcelona, 1991, pág. 219.

de arrojar y despojar los colonos de sus tierras arrendadas: haciendose dueños de ellas grangeros, y apoderandose, en perjuicio de la Corona, de los terminos realengos y públicos: lo que ha extinguido en Castilla la Vieja mas de 1.500 pueblos”³⁰⁶.

La incidencia de los diversos mecanismos de liberalización sobre la tierra en la provincia de Valladolid, estudiada, entre otras personas, por José Ramón Díez Espinosa, muestra la significativa reducción de la propiedad nobiliaria en las primeras décadas del siglo XIX. Las investigaciones confirman que aquélla pasó de una riqueza superior al 20 por ciento, en tiempos del Catastro de Ensenada, a ser en 1852 tan solo del 4 por ciento. Una pérdida progresiva que, en definitiva, significó el mantenimiento de unos patrimonios infravalorados por parte de algunos nobles terratenientes en las comarcas vallisoletanas³⁰⁷.

Una de las particularidades de la disolución del ordenamiento agrario del Antiguo Régimen, como ya vimos en su momento, fue la movilización de importantes cuotas de terrenos de cultivo mediante la desvinculación de los mismos. Precisamente, unos años antes de la llegada del liberalismo, un nutrido número de propietarios pertenecientes a la nobleza debía una parte considerable de su patrimonio a la herencia de los desaparecidos mayorazgos en nuestro país. Más aún, y como ha quedado documentado, en no pocas ocasiones dichas propiedades dejaron de pertenecer a familias tituladas, no sin antes haber hecho frente a dilatados y complicados pleitos para defender la titularidad de unos bienes, hasta entonces en manos de la nobleza terrateniente. Así, y por lo que respecta al trasvase de fincas en Extremadura, es un hecho que durante los primeros compases el siglo XIX, y debido a las sucesivas ventas de propiedades, un buen número de grandes patrimonios amayorazgados cambiaron de manos. A ello hubo que añadir, como consecuencia de las dificultades económicas de la Corona y de las necesidades municipales, la enajenación de propiedades pertenecientes a las órdenes militares y a los bienes concejiles, ya en pleno siglo XIX. Dominios

³⁰⁶ Paño y Hurtado, Vicente, *Memorial ajustado, hecho en virtud de decreto del Consejo del expediente consultivo, que pende en él, en fuerza de Real Orden, comunicada por la Secretaría de Estado, y del Despacho Universal de Hacienda, con fecha en San Ildefonso del 20 de Julio del año de 1764*, 2ª parte, Librería de Francisco Fernández, Madrid, 1771, pág. 67.

³⁰⁷ Díez Espinosa, José Ramón, “Estructura de la propiedad y revolución liberal en Valladolid. Tierra, nobleza y burguesía”, Saavedra Pegerto y Villarés, Ramón, ob. cit., págs. 201 a 217.

que permitieron considerables transferencias de patrimonio a un buen número de particulares³⁰⁸.

Durante los años del Trienio, la tarea iniciada en las últimas dos décadas del siglo XVIII continuó su marcha hacia un cambio en la estructura de la oligarquía, especialmente al enajenar haciendas de un cuantioso valor superficial. Aunque todavía no se ha completado el estudio del proceso de enajenaciones en Extremadura, grandes dehesas pasaron a propietarios privados. A pesar de todo ello, no sería hasta 1836, con las nuevas medidas liberales, cuando habría de completarse de manera definitiva el traspaso de bienes públicos y eclesiásticos, llevando al mercado un importante volumen de bienes rurales³⁰⁹.

En último término, se comprende la preocupación que desde los primeros momentos del establecimiento de las Cortes en 1820 se produjo en relación a la acumulación de amplios territorios en poder de pequeños grupos de propietarios. En este sentido, José María Vecino, diputado por Sevilla, establecía la siguiente proposición:

Siendo contraria y perjudicial al fomento y prosperidad de la agricultura la enorme extensión de territorio que poseen los grandes en algunas provincias, especialmente en las meridionales, se darán á censo dichas tierras, repartíéndolas en suertes á los pobres jornaleros, y en ranchos ó pequeños cortijos á los que teniendo cuatro ó seis yuntas puedan cultivar y beneficiar mayor número de fanegas. [...] El censo que se impondrá á las referidas tierras será igual á la renta que en el día ganan; y las incultas y montuosas, que son en gran número, pagarán el censo segun su calidad y á juicio de peritos³¹⁰.

Al hilo de lo tratado anteriormente, el gradual aumento en las atribuciones y la capacidad de gestión de los ayuntamientos con la aparición del nuevo Estado liberal, iba a establecer una clara vía diferenciadora en el

³⁰⁸ Sánchez Marroyo, Fernando, "Notas sobre los orígenes de la oligarquía agraria extremeña de mediados del siglo XIX", *Ibidem*, págs. 72 y 73.

³⁰⁹ Sánchez Marroyo ha documentado en el término de Trujillo un relevante registro de patrimonio rústico, en concreto más de 250.000 fanegas amillaradas, al que concurrían grandes nombres de la nobleza. En este caso puede seguirse perfectamente el «relevo» de los bienes y la quiebra de algunas fortunas, una vez desaparecidos los mayorazgos. Algo muy similar sugiere en su investigación en otros términos fiscales de Villanueva de la Serena, Alcántara o Herrerueta. *Ibidem*, págs. 72 a 74.

³¹⁰ DSC, sesión del día 19 de julio de 1820, número 15, pág. 199.

tratamiento de la política local, además de hacerlo con las viejas oligarquías que habían controlado los municipios durante el Antiguo Régimen. La persistencia o el cambio de dichos círculos de poder a raíz del Trienio, deben entenderse, por tanto, como fenómenos dentro de la secuencia en la actividad de los municipios, así como una pieza más en la evolución del poder de los propietarios agrícolas dentro de los mismos.

- Algunas notas sobre la propiedad y el poder local

El tránsito entre la monarquía absoluta y el régimen liberal puso en marcha transformaciones importantes relacionadas con el acceso a la tierra, entrecruzando viejos derechos y nuevos conceptos en la propiedad que se irían desarrollando gradualmente a lo largo de todo el siglo XIX. En apariencia, la imagen del país antes de 1820 presentaba una sociedad agraria absorbida por grandes desigualdades y conflictos sociales. Idea que, sin embargo, no era generalizable ni respondía a un estancamiento de todo el país³¹¹. Perdidos los mercados coloniales, tanto la burguesía industrial como la agraria iban a intentar la única alternativa posible: el mercado interior. Una apuesta que exigiría un claro alineamiento de la burguesía liberal en favor de las reformas, tanto en el ámbito fiscal, económico y territorial.

El centralismo introducido por las leyes liberales en España dejó un amplio margen de maniobra a las oligarquías locales, especialmente en lo que se refería al gobierno en los ayuntamientos y en los juzgados municipales, asumiendo de esta forma competencias que directamente estaban relacionadas con los recursos y la fiscalidad de los municipios. Esta «soberanía», como han dejado patente García-Varela y José María Cardesín, tuvo mucho que ver con las exigencias derivadas del grado de producción en

³¹¹ La idea está recogida del artículo de Calatayud, Salvador; Millán, Jesús y Romero, M^a Cruz, “El Estado en la configuración de la España contemporánea. Una revisión de los problemas historiográficos”, en Calatayud, S.; Millán J., y Romeo, M. C., eds., *Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques*, Universitat de València, 2009, págs. 10 y 11.

la agricultura, así como el destacado papel que finalmente asumirían los propietarios en las distintas etapas en la política local³¹².

Conviene recordar que entre los nuevos planteamientos genéricos ideados por los liberales para el siglo XIX no estaba el admitir a la burguesía y la aristocracia como grupos diferenciados. Ya fuera por sus respectivas actividades económicas o como consecuencia de las obligaciones contraídas en el amplio terreno de la política, lo cierto es que la realidad social iba a significarse de forma muy similar con los miembros de las elites, fueran o no éstos pertenecientes al escalón nobiliario. Como se ve, la sociedad conceptual en el liberalismo debía reconocer la igualdad de oportunidades conjugando méritos personales y ascenso social a un mismo tiempo. Esto no quiere decir que se pensara en una sociedad igualitaria, como ha apuntado Juan Pro Ruiz³¹³. Aún mucho menos en un mundo rural o siquiera cercano a él. Sin embargo, algunos aspectos relacionados con los ideales de justicia sí verían notables cambios respecto a lo sucedido en el Antiguo Régimen.

En los últimos años se ha venido insistiendo en destacar el fortalecimiento de los grupos de labradores como el auténtico «germen» de la burguesía agraria en el siglo XIX³¹⁴. En realidad, una coincidencia comúnmente aceptada entre los historiadores contemporáneos es la dificultad para establecer la naturaleza de determinados grupos sociales. No obstante, los intentos de cohesión por parte de grupos de terratenientes o propietarios están suficientemente documentados, siendo relativamente tempranos en muchas regiones. Casos como los de Morón de la Frontera y la

³¹² Millán y García-Varela, Jesús, ob. cit., pág. 33. Asimismo, estas conclusiones fueron defendidas en la comunicación presentada por José María Cardesín, en la ya citada VI Reunión del Seminario de Historia Agraria, celebrada en la localidad de Cabezón de la Sal, Cantabria, durante los días 1, 2 y 3 de diciembre de 1993, con el título “Estructura social y poder político local en el mundo rural lucense: las consecuencias de la Revolución Liberal”.

³¹³ Pro Ruiz, Juan, ob. cit., págs. 53 a 57.

³¹⁴ Existe abundante bibliografía referida al declive de las clases aristocráticas en España. Entre los trabajos consultados a este respecto está el de Bartolomé Yun, referido al desarrollo agrario y los conflictos a finales del Antiguo Régimen entre grupos de antiguos campesinos y «sexmeros», y casas aristocráticas. En el mismo se destaca la complejidad y las diferencias al finalizar el siglo XVIII entre las clases privilegiadas establecidas en las ciudades y las enclavadas en zonas rurales de provincias. Véase Yun Casalilla, Bartolomé, “Crisis del Antiguo Régimen y «crisis de la aristocracia», *Ayer*, número 48, 2002, págs. 41 a 57. Asimismo, por la información que aporta a nuestra investigación, en particular al carácter y personalidad de la nueva clase propietaria, resulta relevante de Morales Moya, A., *Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII: la posición de la nobleza*, Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1983, así como Aragón Mateos, Santiago, *La nobleza extremeña en el siglo XVIII*, Consejo Ciudadano de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner, Badajoz, 1991.

Cofradía de la Santísima Trinidad, formada por pequeños propietarios y campesinos, y el de los labradores de Córdoba, organizados bajo una Hermandad a mediados del siglo XVIII, demuestran la influencia en la configuración de los poderes locales por parte de quienes estaban exentos de privilegios reales o alejados de la nobleza³¹⁵.

En el caso que nos ocupa, hemos de referirnos a las élites agrarias que comenzaron a aparecer poco antes de la llegada al poder de los partidos adheridos a las tesis liberales. Un núcleo que de forma mayoritaria habría de estar formado por propietarios procedentes de la conocida «hidalguía» y, especialmente, por aquellos nuevos propietarios constituidos gracias a los beneficios procedentes del comercio y del acceso a las tierras liberadas en las primeras décadas del Ochocientos³¹⁶. Como quiera que sea, Jürgen Kocka ya advertía que las élites por sí solas no constituían un grupo social concreto³¹⁷. Si acaso, la incuestionable superioridad atribuida a las élites en general, y a la de los propietarios en las zonas agrícolas de la España de comienzos del siglo XIX en particular, se ha basado en razones de tipo diverso, relacionadas sobre todo con el desarrollo de funciones y tareas consideradas importantes en las zonas rurales repartidas por todo el país. Teniendo en cuenta lo significativo del sector agrario y la situación de predominio del mismo en el contexto económico de la época a la que nos estamos refiriendo, es evidente que no podemos definir a todo el colectivo de propietarios y labradores como un grupo lo suficientemente homogéneo.

Como resultado de las reformas desamortizadoras y del desarrollo de las nuevas instituciones políticas liberales del Trienio, los grupos de la élite rural comenzaron a formar parte indistintamente del sistema agrario y de las

³¹⁵ Christian Windler ha estudiado y documentado la organización de los campesinos y pequeños propietarios de Morón de la Frontera desde 1770 hasta comienzos del siglo XIX, con el fin de mantener activa la defensa de intereses en los recursos iniciados en favor de sus tierras. Véase Windler, Christian, "Landarbeiter und Kleinbauern als Kläger. Die Auseinandersetzungen um die Verteilung des Gemeindelandes von Morón de la Frontera (Sevilla) im späten 18. Jahrhundert", Scholz, Johannes-Michael, ed., *Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Justiz 15. bis 20. Jahrhundert*, Vittorio Klostermann, Frankfurt-am-Main, 1994, págs. 73 a 110. Respecto a la *Hermandad de Labradores de Córdoba*, vigente entre mediados del siglo XVIII y principios del siglo XX, puede consultarse en la ya citada comunicación presentada por el Grupo de Historia Social Agraria Andaluza en la *VI Reunión del Seminario de Historia Agraria*, "Terratenientes, labradores y poder local en Córdoba (siglo XIX)", Cantabria, 1993. También en el artículo de Millán y García-Varela, Jesús, ob. cit., pág. 34.

³¹⁶ Calatayud, Salvador; Millán, Jesús y Romero, M^a Cruz, ob. cit., págs. 17 a 23.

³¹⁷ Rubí, G. y Ferrán Toledano, Ll., "A propòsit de la història social crítica alemanya", en *L'Avenç*, número 170, mayo de 1993, págs. 44 a 47.

instituciones que daban acceso a una más efectiva participación en los asuntos de la vida pública y económica. Para ser más exactos, la adaptación de los nuevos propietarios pasaba por modificar en parte el panorama que presentaba un Estado debilitado y unos municipios en España que, tal y como nos recordara en su día Concepción Castro, eran de una inapelable complejidad y falta de uniformidad³¹⁸. Sin una regulación común para los distintos Reinos que formaban la Corona, el ordenamiento normativo había estado basado en las costumbres y procedimientos de cada lugar, y en su defecto, en virtud de las instrucciones de corregidores y funcionarios sometidos a la jurisdicción real o señorial³¹⁹. Las investigaciones de los últimos años nos sugieren que el acceso a la propiedad permitió no volver a reproducir el esquema invariable de los propietarios arraigados durante el período absolutista. A pesar de todo ello, hemos de convenir que debió ser el marco de la Administración local, el espacio más indicado para valorar la efectividad de los diversos grupos sociales y su representatividad en el mundo rural.

En todo caso, el escenario de la vida agrícola y campesina iba a significarse como el punto de confluencia para las élites propietarias, tanto de la vieja aristocracia como de los nuevos inversores procedentes del mundo del comercio y de la industria. La adquisición de bienes en la agricultura por parte de estos últimos se ha pretendido ver en ocasiones como un medio para acceder a patrimonios inmobiliarios y no como una inversión productiva en este sector³²⁰. Hemos de tener en cuenta que, aún cuando en algunos casos los propietarios en ascenso practicasen actitudes propias de tiempos pasados, sus aspiraciones a partir del XIX representaron un cambio diferenciado del individualismo económico y de las relaciones contractuales que habían predominado durante el Antiguo Régimen³²¹.

³¹⁸ Castro, Concepción de, *La Revolución Liberal y los municipios españoles (1812-1868)*, Alianza Editorial, Madrid, 1979, pág. 22.

³¹⁹ Caro Cancela, Diego, "Las élites locales de Jerez, entre el absolutismo y el liberalismo (1808-1823)", Caro Cancela, Diego (ed.), *El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, economía y sociabilidad*, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2005, págs. 89 a 126.

³²⁰ Un buen ejemplo es el término acuñado por David Cannadine de «landed elites» para definir en el Reino Unido a los propietarios inversores en bienes agrícolas que, a su vez, participaban de manera intensa en los gobiernos locales; especialmente en centros urbanos con un incipiente desarrollo económico. Una exposición detallada en Moll, Isabel y Salas Pere, "Las pequeñas élites agrarias y su participación en la vida política durante la segunda mitad del siglo XIX", *Ayer*, número 48, año 2002, págs. 161 y 162.

³²¹ Calatayud, Salvador; Millán, Jesús y Romero, M^a Cruz, ob. cit., pág. 37.

Es obvio que a partir de iniciado el liberalismo, la propiedad iba a producir nuevos patrones de crecimiento económico. Pero, también, un modelo nuevo de asociacionismo, producto del interés progresivo hacia la propiedad agraria. Un sector, el de la tierra, que durante la Ilustración no se había desarrollado intensivamente. Quizá uno de los ejemplos más clásicos pueda ser el de la oligarquía urbana madrileña. Su particular actividad financiera y de afinidad hacia los negocios fue sustituyéndose por una evidente tendencia a la inversión en las propiedades y la producción en el campo. Ello permitió también que los antiguos propietarios arraigados no pudieran eludir en sus mercados a las nuevas fortunas procedentes del mundo de los negocios urbanos, amén de otros que pertenecían al de los labradores acomodados³²².

En consecuencia, la formación del nuevo Estado nacional quedó muy pronto inmersa en un largo proceso incierto en el que hubo que acotar nuevamente lo «político» y lo «particular», y en el que no faltó la necesidad de lograr apoyos sociales ante las fuertes alteraciones que habían sufrido las viejas jerarquías. Con todo ello, el problema se situaba en las conexiones que debían crearse entre el propio Estado y las periferias, estas últimas con un desarrollo económico más activo. Más aún, y después de ver la dinámica que había adquirido la sociedad en general, se trataba de establecer puentes entre el campo y la ciudad, o si se prefiere entre lo urbano y lo rural. Ciertamente, se trató de un proceso largo, cuyo panorama, aunque con algunos matices, todavía a mediados del siglo XIX podía describirse como un Estado en el que la hegemonía de las fuerzas sociales no estaba formada por un compacto bloque de propietarios³²³.

La Constitución de 1812 había establecido, más en un plano teórico que en el real, un régimen local escalonado y ciertamente uniforme, que intentaba responder a los principios de representatividad, partición de poderes, y al que intentaba dotar de una amplia eficacia administrativa. Al mantenimiento de los municipios ya formados podían adherirse aquellos que hubieran adquirido una población total de más de mil almas, con lo que se definitivamente se fortalecía la idea respecto a que debían ser los ayuntamientos los principales medios de participación ciudadana³²⁴.

³²² *Ibidem*, págs. 37 a 39.

³²³ *Ibidem*, págs. 42 y 43.

³²⁴ Castro, Concepción, *ob. cit.*, pág. 57.

A estos argumentos no tardaron en sumarse, a partir de los años treinta del ochocientos, los desacuerdos respecto al régimen municipal y a la figura del alcalde entre moderados y progresistas. Las desavenencias tenían su justificación y estaban cargadas de razón, en tanto para los moderados el alcalde debía ser el representante del gobierno de la Nación en el municipio. De ahí la importancia de la designación del mismo que debía ser, según argumentaban los seguidores de Martínez de la Rosa, compartida entre el propio Gobierno y los concejales electos. Para el conjunto de progresistas, la alcaldía pasaba por ser un cargo netamente electivo sin posibilidad de reelección³²⁵.

Las aspiraciones de lograr un Estado liberal centralizado y al mismo tiempo con escasas injerencias, reabrieron necesariamente una profunda movilización dentro de las filas políticas y un intenso debate en todo lo relativo a la territorialidad y su Administración, que tendría su punto más álgido en el Sexenio, entre 1868 y 1874. En consecuencia, la reorganización territorial del Estado, aunque puesta en marcha con cierta lentitud por Floridablanca en 1785, alcanzaría su cenit con Javier de Burgos y su nueva división territorial provincial en 1833. Sin embargo, la remodelación de todo el aparato administrativo en la esfera local hubo de esperar bastantes décadas para verse completada definitivamente a finales del siglo XIX. De todos modos, la evidencia del vacío político en los municipios tras el hundimiento del régimen absolutista, puso en marcha la maquinaria legislativa liberal para fortalecer la figura de los Ayuntamientos a través de una leve regulación local entre los años 1820 y 1822³²⁶.

Hasta 1820, los municipios habían estado regulados por una Instrucción del año 1813. Fue el diputado González Allende el primero en presentar a las Cortes unas proposiciones dirigidas a regular los Ayuntamientos en casos de comicios electorales. Además, se establecieron las nuevas competencias de los Jefes políticos, figura que creó cuantiosas discrepancias al exigirse que su nombramiento lo realizara el Rey por un plazo no superior a un año, entre ocho candidatos propuestos por los Ayuntamientos constitucionales de cada provincia. A pesar de todo, su definitiva aprobación no se produciría hasta los primeros meses de 1822.

³²⁵ Grupo de Estudios Agrarios (GEA), ob. cit., pág. 44.

³²⁶ Orduña Rebollo, Enrique, *Municipios y Provincias*, Instituto Nacional de Administración Pública; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y Federación Española de Municipios y Provincias, Madrid, 2003, págs. 30 y 361.

Próximo a finalizar el Trienio Liberal, se decidió aprobar el Decreto de 3 de febrero de 1823 como «Instrucción para el gobierno económico-político de las provincias», que había sido presentado a debate en la legislatura de 1822. La norma fue sancionada por el monarca como Ley del 2 de marzo de 1823, aunque publicada como un Decreto de Cortes. Su vigencia, como se comprenderá, fue muy sucinta, estando en vigor escasos meses y volviendo a ser recuperada para la legislación del Estado en 1836. La ley no estuvo exenta de varias supresiones, siendo en 1854 derogada definitivamente³²⁷.

En definitiva, la regulación de los poderes locales abordada por la legislación liberal se comprende desde la perspectiva de una población que, mayoritariamente dependía de la tierra prácticamente en su totalidad. A las comunidades locales, con predominio de propietarios agrícolas y labradores, correspondía, en opinión de González Molina, la protección y regulación de los espacios agrícolas, así como el establecimiento de un equilibrio en los recursos. Sociedades que, al fin y a la postre mantenían amplias competencias en todos los factores productivos³²⁸. De este modo, se comprende que el control de la maquinaria política local llevara implícito una carga importante en la capacidad decisoria, dentro las mencionadas comunidades locales.

Por último, el cambio hacia el liberalismo en España supuso la transformación sustancial de la sociedad rural y, consecuentemente, de las prácticas y procedimientos utilizados en el poder local, modificando incluso las estructuras políticas y jurídicas de los municipios. Con la consolidación de un nuevo sistema administrativo, judicial y electoral, necesariamente se hizo preciso pensar en nuevos mecanismos que fueran capaces de posibilitar el acceso al gobierno de los ayuntamientos y sus órganos de dirección. En suma, el control de las instituciones locales terminó por hacerse necesario para los grandes propietarios, incluyendo al resto de agentes sociales expuestos a los procesos de producción. En concreto, y como ya anotara el propio González Molina refiriéndose a la vinculación con los mercados: “Téngase en cuenta que el mercado, es decir, una institución que encarnaba el poder de negociación e imposición de precios por parte de unos individuos sobre otros, necesitaba concretar dicho poder en regulaciones sobre los

³²⁷ Ibídem, págs. 310 a 313.

³²⁸ González de Molina, Manuel, “Las bases sociales de los poderes locales y las transformaciones de la sociedad agraria en la España del siglo XIX”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 6, 1993, págs. 10 y 11.

mercados más importantes de entonces, los locales, competencia de los ayuntamientos”³²⁹.

- La importancia del trigo y los trigueros en la agricultura española. El mercado de los cereales hasta 1830

Existen determinados elementos, a nuestro entender, que pueden explicar la importancia dada a la política triguera en todo el proceso económico y agrícola, y que se prolongaron hasta las décadas centrales del siglo XIX. Desde mediados del siglo XVIII, las zonas periféricas o de costa españolas se habían definido por su condición de importadoras de productos agrícolas, entre ellos el trigo. Esta situación, interrumpida por las guerras napoleónicas y la deflación sufrida a principios de siglo, continuó hasta 1820, momento en el que se aprobó un arancel que finalmente rompería los vínculos con el exterior e iniciaría un largo período de prohibiciones en las importaciones de trigos y otros productos agrarios.

En la actualidad, se han hecho matizaciones en los planteamientos teóricos que inicialmente ponían de relieve el papel de la agricultura en el crecimiento económico contemporáneo, situando en un mismo plano las vinculaciones intersectoriales producidas en todo el proceso de desarrollo³³⁰. Así, y al menos hasta los años setenta de la pasada centuria, existían tres modelos aceptados y conexados entre sí. El primero de ellos ponía en relieve una revolución agrícola en la Inglaterra del siglo XVIII, previa a la Revolución Industrial. Es sabido, que dicho avance agrícola habría elevado considerablemente la productividad en los cultivos y habría puesto en marcha las condiciones para el surgimiento de la industria manufacturera moderna. Esta tesis abría la puerta a un nuevo paradigma. En concreto, la idea se basaba en que a todo avance industrial se debería anteponer siempre otro relativo al ámbito agrario. Finalmente, y muy relacionado con los dos modelos anteriores, debía existir un tercero que consideraba el atraso

³²⁹ Ibídem, págs. 14 y 15.

³³⁰ Pinilla Navarro, Vicente, “Sobre la agricultura y el crecimiento económico en España (1800-1935), *Historia Agraria*, número 34, diciembre 2004, pág. 137.

económico de algunos Estados la consecuencia directa de un deficiente grado de transformaciones en la agricultura³³¹.

Sin embargo, en los nuevos moldes revisionistas se ha cuestionado la revolución agraria como requisito al crecimiento económico. Es más, el debate sobre la propia revolución agraria inglesa, su ritmo y las dudas vertidas en relación a su verdadera aportación a la Revolución Industrial son muy recientes, lo que ha suscitado la reconsideración del auténtico papel jugado por el sector agrario en aquel país³³². Ramon Garrabou ha aportado una interesante visión a la revolución agrícola en Inglaterra, expresando la importancia que tuvieron los sistemas energéticos orgánicos, en contra de la opinión que supeditaba el éxito en el campo a las energías fósiles, especialmente el carbón o el vapor. Éstos, según el propio Garrabou, apenas habrían tenido una presencia testimonial en el sector agrario³³³.

En cualquier caso, hasta el momento se ha venido aceptando, frente al éxito británico y de los países escandinavos, un menor desarrollo en el área mediterránea, explicado a través del avance en la productividad agraria de los países del norte europeo como Holanda, Bélgica, Irlanda o la propia Inglaterra³³⁴. En España, comparativamente hablando, cabría destacar, precisamente a comienzos del siglo XIX, una situación presidida por una baja productividad en la agricultura, niveles de urbanización sin apenas crecimiento y una población estancada en número de habitantes. A ello podría sumársele una caída en los salarios y una pérdida en cuanto a la

³³¹ Ibídem, pág. 138.

³³² Entre los llamados revisionistas y la bibliografía existente al respecto existe en la actualidad una considerable bibliografía. Para nuestro trabajo hemos consultado las obras, que son ya todo un clásico en este campo, de C. Allen, Robert, *Enclosure and the yeoman: the agricultural development of the South Midlands 1450-1850*, Oxford University, 1992, y muy especialmente el artículo del mismo autor "Tracking the agricultural revolution in England", *Economic History Review*, vol. LII, n° 2, 1999, págs. 209 a 235. Al mismo tiempo, algunos autores han puesto en cuestión el mismo concepto de la revolución agrícola, argumentando que dicho proceso se produjo en una larga sucesión de siglos, no observándose una aceleración en el mismo hasta las primeras décadas del siglo XIX. En este sentido se recomienda el excelente artículo del profesor Clark, Gregory, "The Agricultural Revolution and the Industrial Revolution: England, 1500-1912", University of California, Davis, June 2002, 46 páginas (<http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/gclark>).

³³³ Garrabou, Ramon, "Revolución o revoluciones agrarias en el siglo XIX: su difusión en el mundo mediterráneo", Sánchez Picón, Andrés (coordinador), *Agriculturas mediterráneas y mundo campesino*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1994, págs. 96 y 97.

³³⁴ Un buen ejemplo en Reis, Jaime, "How poor was the European periphery before 1850? The Mediterranean vs Scandinavia", Pamuk, S. y Williamson, J. G., *The Mediterranean Response to Globalization Before 1950*, Routledge, Londres, 2000, págs. 17 a 44.

diversificación económica, si la comparamos, por ejemplo, con las primeras décadas del siglo XVIII³³⁵.

La historiografía dentro de nuestras fronteras se ha encargado de mostrar las dificultades existentes en la agricultura, supeditando la producción agraria a la cabaña ganadera³³⁶. El profesor Reis ha podido comprobar la debilidad que presentaba a mediados del siglo XIX el campo español como consecuencia del menor peso relativo de la producción ganadera, siendo España el que mostraba peores resultados en una comparativa realizada con otros seis países de nuestro entorno³³⁷. A esta circunstancia cabría añadir los inconvenientes del medio natural mediterráneo y la escasez de recursos naturales adecuados para dotar al ganado de una alimentación necesaria³³⁸.

En muchos casos no hubo más remedio que recurrir a un crecimiento agrario más extensivo cimentado en la roturación de terrenos baldíos, pastizales o zonas de bosque. De hecho, España contaba a comienzos del siglo XIX con importantes reservas de suelo agrícola a las que se sumaban importantes extensiones de pradería. Esta situación de labrado de nuevas tierras hubo que impulsarse después de la guerra contra Francia, como consecuencia del control que hasta esos momentos había existido por parte de ganaderos y rentistas, interesados estos últimos en controlar y limitar dichas roturaciones para no dañar sus intereses. De esa forma, se

³³⁵ Pinilla Navarro, Vicente, ob. cit., págs. 141 y 142.

³³⁶ Distintos historiadores y economistas han mostrado enfoques distintos atribuyendo el escaso avance en la agricultura española a factores geográficos, institucionales o de retraso tecnológico, lo que finalmente provocó un discreto crecimiento de la productividad agrícola. En este sentido véase, por ejemplo, Prados de la Escosura, L. *De Imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930)*, Alianza, Madrid, 1988; Tortella, Gabriel, "Producción y productividad agraria, 1830-1930" en Sánchez Albornoz, Nicolás (ed.), *La modernización económica de España 1830-1930*, Alianza Editorial, Madrid, 1985, págs. 63 a 88; Tortella, Gabriel, "La historia económica de España en el siglo XIX: un ensayo comparativo con los casos de Italia y Portugal" en Prados de la Escosura, Leandro y Zamagni, Vera (eds.), *El desarrollo económico en la Europa del Sur: España e Italia en perspectiva histórica*, Alianza Editorial, Madrid, 1992, págs. 56 a 81, y Coll Martín, Sebastián y Gutiérrez Bringas, Miguel Ángel, "Estimating Production Figures from Price Data. An Application to the Case of 19th Century Spanish Agricultural Production", *Documentos de Trabajo*, Volumen 95-06, Departamento de Economía, Universidad de Santander, 1995. De este último trabajo existe una edición en castellano con el título "Estimando cantidades a partir de precios: el caso de la agricultura española del siglo XIX", en *VII Congreso de Historia Agraria. Baeza, 31 de mayo a 3 de junio de 1995: libro de comunicaciones*, Universidad de Jaén, Universidad Internacional de Andalucía, 1995, págs. 335 a 351.

³³⁷ Reis, Jaime, ob. cit., pág. 27.

³³⁸ Pinilla Navarro, Vicente, ob. cit., pág. 142.

comprende igualmente el pausado ritmo en relación a la puesta en cultivo de nuevas tierras que había tenido lugar desde mediados del siglo XVIII hasta los primeros años del siglo XIX. Esta lentitud debió provocar una limitación en el crecimiento de la población española, además de hacerlo con el de la propia economía nacional³³⁹.

Al mismo tiempo, las alternativas al cereal no llegaron a ponerse en práctica. Ramon Garrabou ha meditado sobre este tema aludiendo a la necesaria búsqueda de alternativas al cultivo de cereales en un medio natural como el de la Península Ibérica. El crecimiento de la productividad agrícola hubiera sido posible, en su opinión, promoviendo la sustitución de cereales por cultivos leñosos como olivos, viñedo o frutales, de forma directa o llevando los cereales a superficies incultas³⁴⁰. A estas dificultades cabría añadir otras relacionadas con la falta de una mayor demanda urbana, producto de las dificultades y el elevado coste del transporte.

En este orden de cosas, en países como Gran Bretaña o Francia, se ha explicado el crecimiento de la productividad en la agricultura en función de la disponibilidad de los mercados y el crecimiento de la economía no agraria, entendiendo que la oferta agrícola se adaptó a los precios, provocando una explotación más intensiva con unas técnicas que pudieran rentabilizar más adecuadamente las inversiones. Además, la utilización de grandes mercados ubicados en ciudades de mayor tamaño permitió un considerable incremento en la producción y la productividad. Una cuestión que, para Llopis, no hubiera sido posible en España debido, precisamente, al débil avance en la urbanización del país³⁴¹.

³³⁹ Las estimaciones realizadas por Llopis en relación al supuesto crecimiento agrario en España, sugieren que si hacia 1800 la superficie cultivada hubiese sido de unos 13 o 14 millones de hectáreas en vez de los 10 millones y medio, la productividad a comienzos del siglo XIX podría haber llegado a ser entre un 20 y un 25 por ciento superior a la efectivamente obtenida. Véase de Llopis Agelán, Enrique, "Otras caras «menos amables» de la agricultura española contemporánea", *Historia Agraria*, número 28, 2002, págs. 180 a 182. Asimismo, son de un especial interés los estudios realizados por el Grupo de Estudios de Historia Rural, "Más allá de la «propiedad perfecta». El proceso de privatización de los montes públicos españoles (1859-1926)", *Noticiario de Historia Agraria*, número 8, 1994, pág. 140.

³⁴⁰ Garrabou, Ramon, "Crecimiento agrario, atraso y marco institucional", Pujol, Josep; González de Molina, Manuel; Fernández Prieto, Lourenzo; Gallego, Domingo y Garrabou, Ramon (autores), *El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea*, Editorial Crítica, Barcelona, 2001, págs. 215 a 251.

³⁴¹ Llopis, Enrique, "España, la «revolución de los modernistas» y el legado del Antiguo Régimen", Llopis, Enrique (coord.), *El legado económico del Antiguo Régimen en España*,

Si bien el crecimiento de la productividad se desarrolló de forma diferente al del resto de países del Norte de Europa, el número de propietarios que gestionaban directamente sus tierras aumentó considerablemente. Si nos fijamos en los dos censos de población, en concreto en los realizados durante 1797 y 1860, que recogieron la información sobre propietarios y arrendatarios, así como el de jornaleros dedicados a las tareas en el campo, nos daremos cuenta de la considerable progresión que se produjo en los poco más de sesenta años a los que nos estamos refiriendo (véase el gráfico 2). La falta de datos reales en torno al año 1830 no debe ser óbice para considerar igualmente el incremento de las haciendas y de sus propietarios en dicho periodo. De esta forma, entre el censo publicado a finales del siglo XVIII y los datos reflejados en el posterior, realizado mediada la centuria siguiente, se alcanzó una cifra próxima al 27 por ciento; lo que indica que los propietarios de tierras prácticamente se triplicaron en número³⁴².

Tampoco podemos obviar el aumento total de la población española que pasó de los 10.541.221 a 15.673.536 habitantes, entre 1797 y 1860. Cifra que expresa un incremento de algo más del 67 por ciento. Se constata de esta forma el equilibrio y afianzamiento en el número de arrendatarios, lo que indica un bajo nivel de absentismo durante los años 1797 y 1860. Finalmente, es muy significativo que el número de jornaleros del campo se multiplicara por tres, lo que refleja un crecimiento considerable de la fuerza de trabajo asalariada en las tareas agrarias que, consecuentemente, sería empleada por los propietarios agrícolas.

Otro de los datos que conviene advertir es el relativo a los «activos agrarios», determinado en nuestro caso por todas las personas relacionadas con la tierra, ya fuera mediante la propiedad (incluido el absentismo), a través de la fuerza del trabajo en propiedades arrendadas o por mediación de los jornaleros dedicados a tareas de laboreo y de labranza. Dichos activos experimentaron, respecto a la población total, un incremento próximo al 10 por ciento; en concreto del 17,2 al 27,6 por ciento. Y lo mismo podemos decir

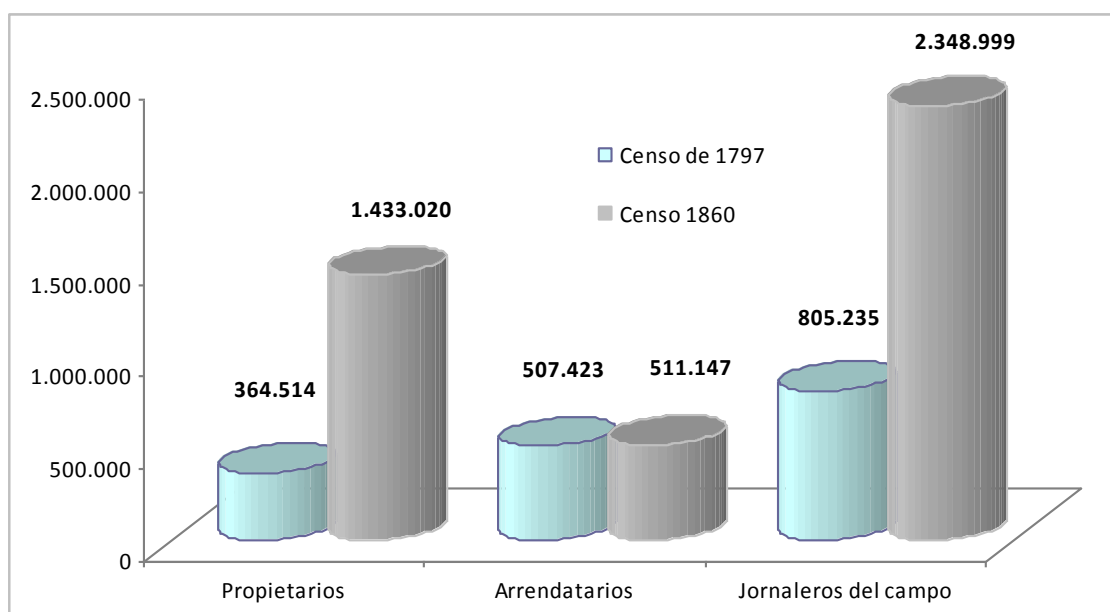
Editorial Crítica, Barcelona, 2004, págs. 11 a 76. También en Pinilla Navarro, Vicente, ob. cit., pág. 143.

³⁴² *Censo de la población de España de el año de 1797. Ejecutado de Orden del Rey en el de 1801*, Imprenta de Vega y Compañía, Madrid, 1801, pág. XLV, y *Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística*, Imprenta Nacional, Madrid, 1863.

del peso de la población activa agraria que, según se desprende de los trabajos realizados por el profesor García Sanz, se pasó del 61,4 al 69,7 por ciento entre ambos censos³⁴³.

GRÁFICO 2

Evolución de los propietarios, arrendatarios y jornaleros del campo (1797-1860)



FUENTE: Censos de población correspondientes al año 1797 y 1860.

Del mismo modo, si observamos la distribución por regiones, se hace más evidente la dualidad Norte-Sur, además de las particularidades de las comarcas del Levante español en relación al reparto de la población activa agraria en España, entre 1797 y 1860. No cabe duda, que el establecimiento de las medidas aprobadas por los gobiernos liberales en materia de agricultura, supuso un importante incremento en lo que al número de

³⁴³ Los datos están recogidos del artículo de García Sanz, Ángel, "Desarrollo del capitalismo agrario en Castilla y León en el siglo XIX. Algunos testimonios, algunas reflexiones y un epílogo", en Yun Casalilla, Bartolomé (coord.), *Estudios sobre el capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos XIX y XX)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991, pág. 23. Como advierte el propio García Fernández, conviene no olvidar que el concepto de «activo agrario» generalmente está referido a los propietarios. Sin embargo, en el gráfico se han recogido y valorado también las personas arrendatarias, es decir, quienes tomaban en arriendo las tierras de cultivo, así como los llamados absentistas, etc., que como sabemos no forman parte de los llamados activos sobre la propiedad.

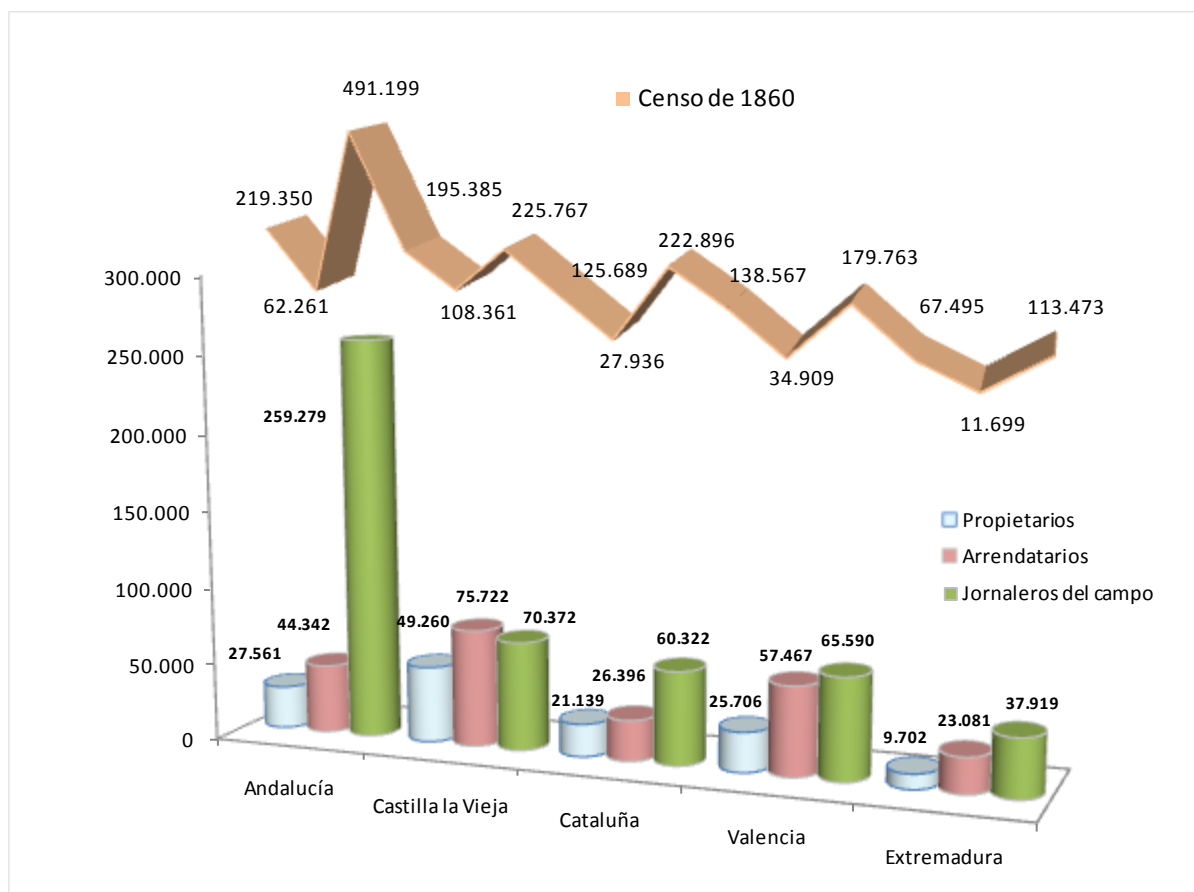
propietarios territoriales se refiere. Este hecho, en particular, es más evidente si comparamos las cifras de cinco de las regiones más significativas en la producción agrícola en nuestro país (véase el gráfico 3). Teniendo presente el mencionado crecimiento de la población a nivel nacional, al aumento importante de propietarios hubo que sumar el de jornaleros que prácticamente duplicó su número durante los años transcurridos entre ambos recuentos en las provincias de Andalucía. Un crecimiento que se originó de forma distinta al de las comarcas castellanas, zonas estas últimas en las que las aspiraciones del campesinado condujeron al acceso a la tierra por parte de un buen número de pequeños propietarios. Un detalle que es fácilmente contrastable al acceder a los datos registrados en los censos analizados.

Estas aspiraciones que, naturalmente, fueron consolidándose hasta mediada la centuria, consiguieron aumentar en la práctica totalidad de las regiones el número de hacendados y propietarios de tierras de cultivo, superando en cuantía a quienes las arrendaban. Una de las pocas excepciones fue la antigua región de Castilla la Vieja, donde se hizo evidente un mayor acceso a las haciendas de labrantío, manteniendo un bajo porcentaje de jornaleros en relación con el resto de regiones. Precisamente en las zonas seleccionadas, los arrendatarios se mantuvieron e incluso disminuyeron, un hecho que podemos hacer extensible a nivel del conjunto del país.

En resumen, los cambios en la distribución de propietarios agrícolas y jornaleros del campo fueron, en el tránsito del último periodo del Antiguo Régimen al liberalismo, hechos irrefutables que modificaron sensiblemente los viejos y tradicionales esquemas entre el Centro y la Periferia peninsular, y entre la Meseta Norte y el Sur de España. Una agricultura controlada por un número no muy elevado de propietarios pasó a estar algo más equilibrada, si se exceptúa la práctica totalidad de Andalucía, donde el número de trabajadores que dependían de un jornal se mantuvo ciertamente elevado en relación a otras regiones del país.

GRÁFICO 3*

Distribución de los propietarios, arrendatarios y jornaleros del campo según los censos de 1797 y 1860 (Andalucía, Castilla la Vieja, Cataluña, Valencia y Extremadura)



FUENTE: Censos de población correspondientes al año 1797 y 1860.

* En la distribución por regiones se ha tenido en cuenta la división territorial realizada por Javier de Burgos en 1833. De esta forma, en el recuento de los datos presentados para ambos censos se ha considerado la región de Castilla la Vieja formada por las provincias de Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid. Provincias como las de Toro, Cantabria o Logroño, presentes en el Censo de 1797, fueron asimiladas a partir de 1833 por otras como Zamora, Palencia o Valladolid, cuestión que hemos corregido oportunamente para obtener unos resultados más consecuentes. En consecuencia, no hemos considerado en el cómputo final la antigua región de León (León, Salamanca y Zamora). De igual forma se ha tenido presente la división en Andalucía antes de la llegada del siglo XIX y la reforma mencionada, considerando los cuatro Reinos (Granada, Sevilla, Córdoba y Jaén) equivalentes a las ocho provincias que conocemos en la actualidad.

El descenso o mantenimiento del número de propietarios que arrendaban sus tierras entre 1797 y 1860 muestra que hacia las primeras décadas del siglo XIX se había comenzado una transformación consistente en la explotación de las haciendas sobre el propio terreno, disminuyendo en cierta medida el número de propietarios absentistas. Tal y como queda reflejado en el último gráfico, esta situación tuvo algunos matices en Andalucía, donde sí aumentó respecto al anterior censo el total de arrendatarios y, muy especialmente, el de los trabajadores del campo. En regiones como Castilla la Vieja fue significativo el incremento en el número de propietarios. La sobreexplotación, tanto de renteros como de jornaleros en las comarcas castellanas, se vio en parte «amortiguada» durante las primeras décadas del ochocientos, al contar con un número de arrendatarios relativamente pequeño. De acuerdo con lo anterior, en 1860 había 108.361 frente a 225.767 jornaleros; todo ello en un territorio cuya población rondaba los dos millones de habitantes.

El comportamiento en este sentido de algunas regiones costeras como Cataluña y Valencia, refleja un destacado descenso en las cesiones de tierras y arrendamientos, además de un considerable aumento en el total de titulares de suelo agrícola. Especialmente en esta última, el descenso en los arriendos fue un hecho destacado, algo que también sucedería en otras regiones más alejadas como Extremadura.

No cabe duda que la llamada «Revolución Liberal» acabó por reforzar la coexistencia entre la pequeña y la gran propiedad en importantes zonas del país, proporcionando a la historiografía un capítulo sobresaliente en lo concerniente a las consecuencias de las desamortizaciones y el reparto de las tierras de propios. Una concentración de la tierra que de forma paralela se desarrolló junto a otro de los procesos más influyentes del XIX como fue el de la «campesinización»³⁴⁴. Obviamente, con el mayor número de propietarios en la escena rural, unido al hecho de que parte del patrimonio territorial de los municipios se privatizó, produjo un efecto diferenciador, tanto en lo económico como en lo social, dentro del mundo agrario. Un hecho, que en opinión de algunos historiadores dio lugar a una lógica

³⁴⁴ Sobre dicho proceso véase de Martínez Martín, Manuel, *Revolución liberal y cambio agrario en la Alta Andalucía (1750-1930)*, Universidad de Granada, 1995. Del mismo autor puede consultarse su trabajo: *Mancha Real: un modelo de crecimiento agrario y campesinización, (1750-1875)*, Universidad de Jaén, 1995.

complicidad hacia el carlismo, ya en los primeros indicios del conflicto sucesorio tras la muerte de Fernando VII³⁴⁵.

En todo caso, y dada la inexistencia de una evolución en la agricultura similar a la de Inglaterra o a la de los países del Norte de Europa, en amplias zonas de Castilla, pasados los años treinta del siglo XIX se comenzaron a recuperar los niveles de la renta de la tierra que se habían logrado a finales de la centuria anterior³⁴⁶. El aumento de las cantidades de cereal que pasaron a comercializarse determinó un crecimiento de la producción, así como de los rendimientos por superficie, gracias a la extensión de tierra puesta en cultivo con las desamortizaciones. Algunos trabajos coinciden en destacar el auge en el cultivo y la producción de cereales que hacia 1860 ya se había duplicado en muchas regiones y comarcas de Castilla, en un período de tiempo de tan solo treinta años³⁴⁷. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios de los cereales a lo largo de las tres primeras décadas del siglo planteó serios problemas a la producción y muy especialmente a los productores de trigo (véase el cuadro 8). En este sentido, la bibliografía también es extensa en lo relativo a la llamada «cerealización del terrazgo» en todo el período del siglo XIX³⁴⁸.

La guerra había provocado importantes alteraciones en los mercados y, en general, en una gran parte de la sociedad rural. En los años siguientes al conflicto, el descenso de los precios del trigo y de la mayor parte del resto de cereales aminoró los beneficios de los grandes propietarios y poseedores de excedentes, haciendo inevitable la compra de granos en otros mercados exteriores. Sería a partir del año 1830 cuando se comenzase una etapa de mayor equilibrio y, al mismo tiempo, de expansión en la producción

³⁴⁵ García Sanz, Ángel, ob. cit., pág. 27.

³⁴⁶ Robledo, Ricardo, *La renta de la tierra en Castilla y León (1836-1913)*, Banco de España, Madrid, 1984, págs. 132 a 135.

³⁴⁷ Ricardo Robledo ha estudiado la evolución de la renta del trigo y el centeno en un importante número de explotaciones de la región castellana entre 1774 y 1870, comprobando el comportamiento ascendente de las rentas en las mismas hacia la segunda mitad del siglo XIX. *Ibidem*, págs. 121 a 131.

³⁴⁸ Nos referimos a la transformación de pastizales en tierras de cultivo, talas de bosques, etc., recogida, por ejemplo en Cabo Alonso, Ángel, "La Arnuña y su evolución económica", *Estudios Geográficos*, números 58 y 59, año 1955, págs. 73 a 136 y 367 a 427. También en Sanz Fernández, Jesús, "Estructura, desarrollo agrario y formación del mercado regional. Siglos XIX y XX", *El pasado histórico de Castilla y León, Junta de Castilla y León, Volumen 3*, Salamanca, 1984, págs. 29.

agrícola³⁴⁹. A ello contribuyó la relajación en el pago de algunos tributos, especialmente el diezmo, o la reserva del mercado interior que, al menos en Castilla, determinaron una mejor comercialización de los excedentes y un mayor volumen de salida de granos hacia el puerto de Santander. Una vía que integraba las zonas productoras en la Meseta Norte con los centros comerciales de cereales en Cataluña³⁵⁰.

CUADRO 8
Producción agrícola estimada en España (1800-1839)

Períodos	Trigo (miles de Tm)	Centeno (miles de Tm)	Maíz (miles de Tm)	Arroz (miles de Tm)	Producción (millones de pesetas de 1900)	Población (en millones de habitantes)
1800-1809	1.643	376	208	25	2.400	11,14
1810-1819	1.722	383	229	34	2.468	11,45
1820-1829	1.801	390	252	43	2.562	11,84
1830-1839	1.938	408	282	54	2.722	12,51

FUENTE: Tortella, Gabriel, *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Alianza Editorial, Madrid, segunda edición 1995, pág. 53. Los datos presentados por Tortella están basados en el *Censo de Frutos y Manufacturas* del año 1799, así como en las obras de James Simpson y Prados de la Escosura dedicadas al desarrollo económico y a la producción de cereales en España durante el siglo XIX.

Estas circunstancias en muchos casos fueron acompañadas de una apertura de las economías familiares al mercado lo que supuso un hecho diferenciador de las sociedades rurales con respecto al Antiguo Régimen. Son muchos los historiadores han insistido en la importancia que

³⁴⁹ Yun Casalilla, Bartolomé, “Mercado de cereal y burguesía en Castilla, 1750-1868: (sobre el papel de la agricultura en el crecimiento económico regional)”, en Yun Casalilla, Bartolomé (coord.), *Estudios sobre el capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos XIX y XX)*, ob. cit., pág. 60.

³⁵⁰ Martínez Vara, Tomás, *Santander de villa a ciudad (un siglo de esplendor y crisis)*, Ayuntamiento de Santander, 1983, págs. 215 a 217. A ello hay que sumar por un lado la mejora de las comunicaciones con el Norte, gracias al Canal de Castilla y, posteriormente, el conflicto carlista que actuó como acicate para la producción de cereales, debido a la necesidad de aprovisionamiento de las tropas. En este último apartado se recomienda el artículo de Yun Casalilla, Bartolomé (1991), ob. cit., pág. 61.

adquirieron los precios del trigo en los diferentes mercados a comienzos del siglo XIX, lo que suponía un mejora o debilitamiento en los costes de vida entre la población rural. En este sentido, la obra pionera por excelencia fue la de Earl J. Hamilton, que ya en los años treinta del siglo XX elaboró una serie de precios y salarios para las dos Castillas, Valencia y Andalucía entre los años 1500 y 1800³⁵¹.

En cualquier caso, y como en su día advirtieron David Reher y Esmeralda Ballesteros, hasta el momento no se ha podido disponer de una sola serie completa de precios o salarios para todo el período 1800-1900³⁵². Por los datos examinados hasta el momento, los precios de la mayoría de cereales cayeron considerablemente desde 1817 a 1821 en los principales mercados en España, manteniéndose algo más estables hasta 1826 (véase el cuadro 9). Según las fuentes que se han manejado para esta investigación, entre los años 1814 y 1833, a excepción de los mercados de Medina de Rioseco y Segovia, los precios del trigo experimentaron un importante descenso en el resto de mercados españoles. Estas fluctuaciones no eran sino una muestra más de que el país estaba dejando atrás la vieja estructura de poblaciones rurales aisladas y con escaso o ningún comercio entre ellas³⁵³.

Precisamente, la preocupación mostrada por muchos ayuntamientos por conocer y vigilar los precios del trigo, además del pan y otros cereales, motivó que se realizaran sucesivos seguimientos de los mismos a través de los registros municipales conocidos como «mercuriales». Cada mercurial recogía el precio medio sin realizar las anotaciones correspondientes al volumen comercializado, o lo que es igual, el precio del mercado³⁵⁴. Esta información, por su destacada importancia, solían reproducirse en algunos

³⁵¹ Nos referimos a Hamilton, Earl J., *American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650*, Harvard University Press, Cambridge, 1934. Existen varias ediciones en español. La última está editada por la Editorial Crítica bajo el título *El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650*.

³⁵² Reher, David S. y Ballesteros, Esmeralda, “Precios y salarios en Castilla la Nueva: la construcción de un índice de salarios reales, 1501-1991”, *Revista de Historia Económica*, año XI, I, año 1993, págs. 102 y 103.

³⁵³ Martínez Vara, Tomás y Guigó, Miguel Ángel, “Fluctuaciones estacionales e integración de mercados en Santander y Castilla durante la primera mitad del siglo XIX,” *Studia Histórica. Historia Contemporánea*, número 17, pág. 189.

³⁵⁴ Anes, Gonzalo, *Las crisis agrarias en la España moderna*, Editorial Taurus, Madrid, 1979, págs. 69 a 84.

CUADRO 9

Precios del trigo en los principales mercados de España entre 1814-1833. (Ptas/hl)

Años	Burgos	Fraga	Gerona	Granada	Lérida	Lorca	Medina de Rioseco	Mérida	Oviedo	Pamplona	Santander	Segovia	Tolosa	Tudela	Zaragoza
1814-1815	17,09		31,02	37,18	33,57		13,04		31,85	22,85		17,19	29,81	21,01	27,99
1815-1816	21,16		40,79	42,95	38,54		17,60	28,29	32,80	32,63			33,41	31,37	34,30
1816-1817	20,78		36,95	34,54	35,98		14,95	21,02	32,55	21,91		17,47	30,52	23,40	28,42
1817-1818	16,25		40,61	31,03	37,14		12,61	20,72	25,24	19,40		13,58	24,37	22,62	28,39
1818-1819	12,22		25,09	25,77	28,41		10,50	24,81	17,70	17,39		14,48	19,32	20,78	23,57
1819-1820	11,48		21,72	17,63	20,11		9,41	14,01	12,32	13,33		12,59	15,59	14,31	16,78
1820-1821	13,49		22,60	16,93	19,58		12,37		13,74	16,92		14,85	17,49	16,52	16,87
1821-1822	9,51		24,27	17,14	22,53		8,04		16,23	11,73	14,09	10,36	15,62	13,30	16,07
1822-1823	11,64		29,12	22,51	29,22		7,89		19,79	15,66	18,16	8,10	19,24	17,32	20,74
1823-1824	11,35	26,94	21,91	24,57	21,44		8,55			12,76	18,05	10,09	18,00	13,53	16,60
1824-1825	14,30	20,63	24,82	30,95	26,30		12,00		16,55	13,55	20,43	17,26	16,38	17,06	20,92
1825-1826	14,19	25,57	23,39	29,08	21,64		11,15		16,47	12,81	18,97	16,62	15,99	16,15	18,96
1826-1827	12,94	22,31	25,07	24,10	21,47		9,67		17,67	13,61	19,37	12,89	16,77	14,29	18,17
1827-1828	10,08		23,09	13,88	18,54		8,73		16,46	12,56	19,37	9,69	16,49	13,03	15,61
1828-1829	9,45	17,22	22,34	12,83	18,15	15,19	8,73		15,34	12,85	19,16	7,90	17,24	12,20	14,89
1829-1830	9,03	13,37	20,13	16,04	14,41	17,94	7,18		14,22	9,77	17,57	7,66	14,18	8,48	11,16
1830-1831	11,97	14,40	19,83	19,69	15,18		8,85		15,90	11,09	17,56	11,39	14,83	9,86	12,36
1831-1832	15,76	16,11	22,46	17,60	18,02		13,72		16,19	16,10	19,45	17,46	19,27	15,79	17,77
1832-1833	15,14		22,38	16,74	18,34		14,35		17,51	13,67	19,97	17,77	17,35	13,45	

FUENTE: Barquín Gil, Rafael, *Precios de trigo e índices de consumo en España. 1765-1883*, Universidad de Burgos, 2001, págs. 100 a 144.

periódicos con tiradas provinciales. La minuciosidad de las anotaciones ha permitido hacer series homogéneas del precio de algunos artículos como el trigo, centeno, arroz o maíz, en los más importantes mercados como Medina de Rioseco, Burgos, Segovia o Santander, este último no productor. En nuestro caso, utilizando el magnífico trabajo de Barquín Gil, basado precisamente en las series mercuriales y los boletines provinciales, se ha podido comprobar también el descenso apreciable en los índices de precios de cierto número de productos cerealícolas desde el año 1815 hasta 1830 (véase el gráfico 4).

Basándose en los datos publicados por el *Diario de Barcelona*, Juan Sardá pudo a finales de los años cuarenta del pasado siglo, organizar una serie de diferentes artículos desde 1812 hasta 1890. Sus resultados fueron publicados por vez primera en el año 1947 bajo el título “Spanish Prices in the XIX Century”, en el *Quarterly Journal of Economics*, de la Universidad de Harvard. En las sucesivas series elaboradas por Sardá se comprueba la tónica general de las variaciones en el trigo, la cebada y la harina partiendo de precios elevados al iniciarse la centuria (véase el gráfico 5). A partir de esos momentos puede comprobarse el descenso persistente, interrumpido solamente por oscilaciones en los precios en los primeros años veinte, coincidiendo con la política proteccionista liberal del trigo. No obstante, este descenso de los precios continuaría, experimentando una cierta mejoría entre 1835 y 1839. Los «picos» sucesivos anotados tanto en los ascensos como en los descensos de los precios suponían, según su autor, una prueba evidente del proceso económico cimentado en un crecimiento «per saltum» que solo el capitalismo podía entonces ofrecer³⁵⁵.

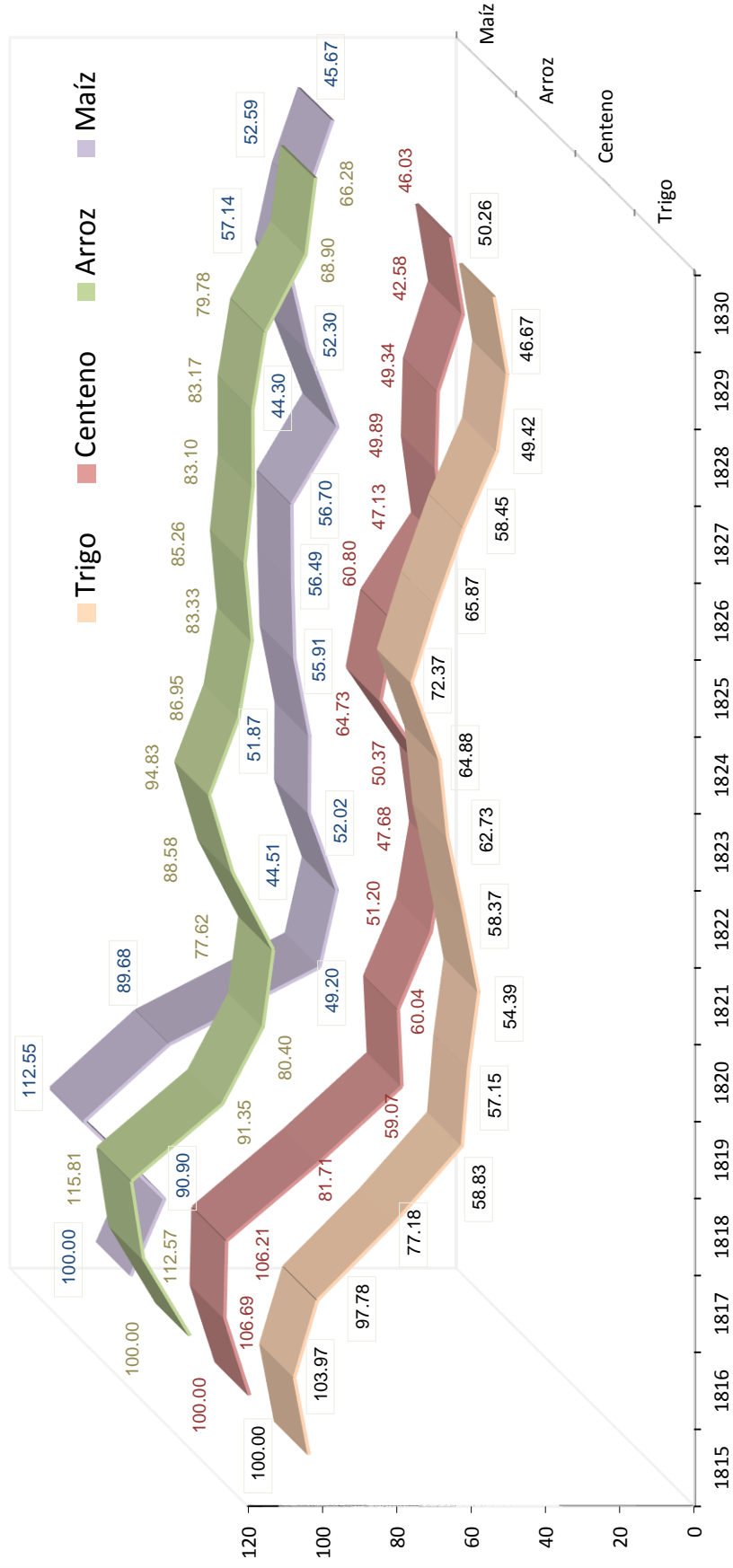
Estas alteraciones o fluctuaciones de los precios ciertamente tuvieron comportamientos desiguales dependiendo de las provincias, especialmente si éstas pertenecían al interior o a las plazas costeras en donde se comercializaba el trigo (véase el cuadro 10).

Si pudiéramos superponer todas las gráficas realizadas correspondientes a los precios de los cereales, observaríamos una lenta unificación de los mismos a lo largo de todo el siglo XIX. En otros estudios

³⁵⁵ Sardá, Juan, *La Política Monetaria y las fluctuaciones de la Economía española en el siglo XIX*, Instituto de Economía «Sancho de Moncada», Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1948, págs. 290 y 300.

GRÁFICO 4

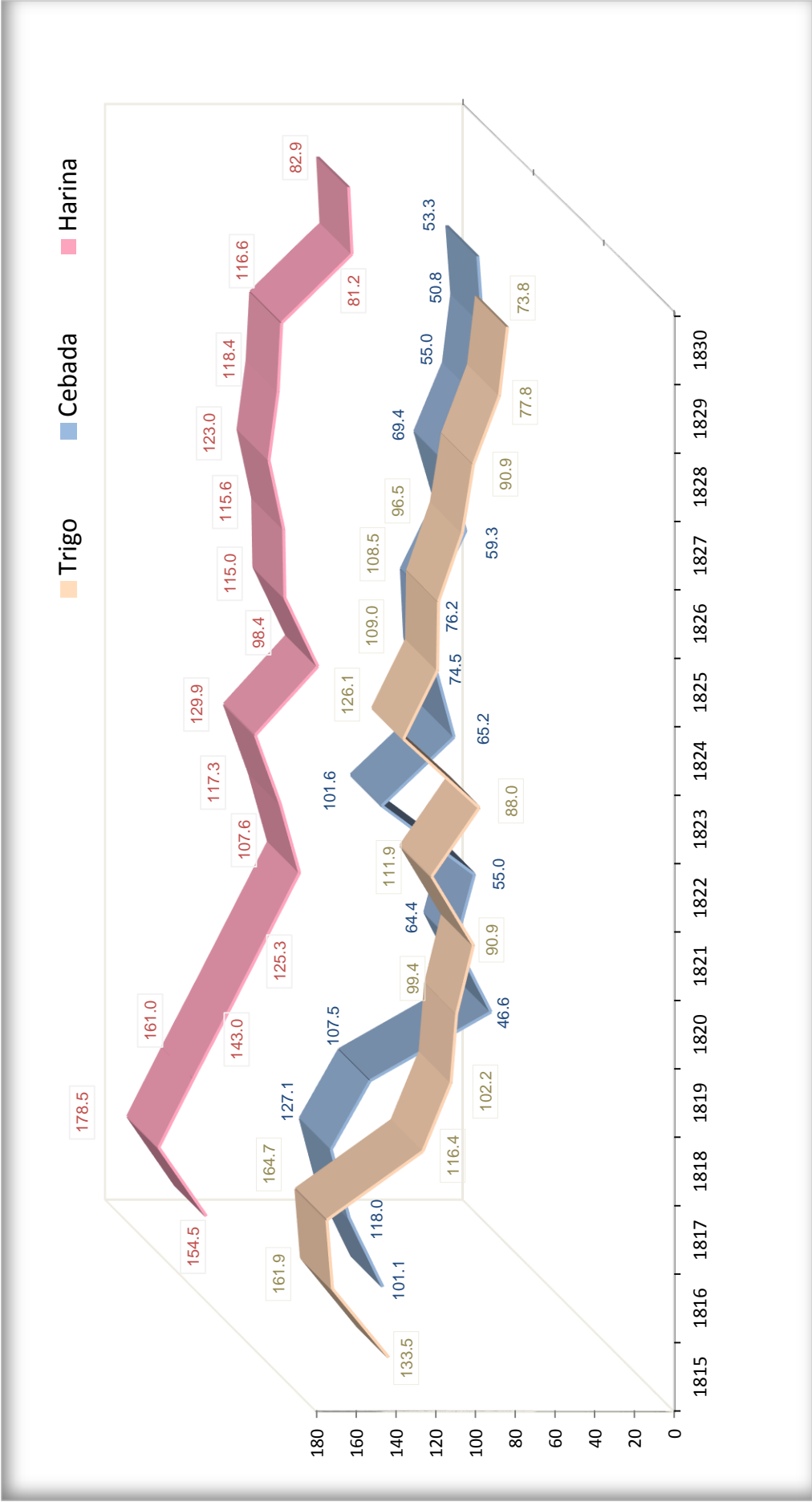
Índice de precios. Base: 1815 = 100



FUENTE: Cálculos realizados utilizando las tablas referidas al índice de precios desde 1815 a 1860. Véase Barquín Gil, Rafael, ob. cit., págs. 212 y 213.

GRÁFICO 5

Índice de precios al por mayor. Base: 1913 = 100



FUENTE: Sardá. Juan, *La Política Monetaria y las fluctuaciones de la Economía española en el siglo XIX*, Instituto de Economía Sancho de Moncada, CSIC, Madrid, 1948, págs. 302 y 303.

llevados a cabo en relación a los mercados interiores como León, Burgos, Medina de Rioseco o Tudela, se ha podido verificar la existencia de precios más bajos a cambio de fluctuaciones más considerables. Por el contrario, en las ciudades más próximas a la costa como Oviedo y Tolosa, los resultados han mostrado unos precios más elevados, aunque con unas oscilaciones mucho más ligeras. La comparativa nos da una idea muy aproximada del grado de integración de los mercados locales a lo largo de todo el período analizado³⁵⁶.

CUADRO 10

Índice nacional de precios del trigo. Datos especificados por año agrícola en las plazas y mercados de «Costa» e «Interior» entre 1815 y 1830. (Ptas/hl)

Años	Costa	Interior	España
1815	76,75	46,06	62,49
1816	80,97	46,56	64,98
1817	78,04	41,58	61,10
1818	59,87	34,32	48,00
1819	42,41	30,31	36,78
1820	38,49	32,55	35,73
1821	39,84	27,28	34,00
1822	47,49	23,80	36,48
1823	51,63	24,87	39,20
1824	49,14	30,63	40,54
1825	52,48	36,68	45,23
1826	50,23	30,77	41,19
1827	44,76	26,99	36,51
1828	37,90	22,84	30,91
1829	37,30	19,55	29,16
1830	38,74	22,80	31,43

FUENTE: Barquín Gil, Rafael, ob. cit., págs. 171 a 183.

³⁵⁶ Barquín Gil, Rafael, "Precios del trigo en el Norte de España (1814-1883), en *VII Congreso de Historia Agraria. Baeza, 31 de mayo a 3 de junio de 1995: libro de comunicaciones*, Universidad de Jaén, Universidad Internacional de Andalucía, 1995, págs. 279 a 289.

Variaciones que no siempre obedecían a causas naturales, sino al propio soporte institucional y a los grupos sociales que configuraban el mismo. La preocupación por esta realidad tan constante movería años más tarde a la Administración a realizar un cuestionario en el que se solicitaba la confirmación de dichas alteraciones en el precio. Éste se recibió en el Consulado de Santander en 1845 y su respuesta fue concluyente. “Las hay constantemente, y de cierto puede asegurarse que cada semana, cuando no cada día, suben ó bajan los precios del trigo”. En relación a las causas se argumentaba lo siguiente:

el aspecto de la futura cosecha, la ventaja más o menos favorable, que consigue una expedición a las Antillas, ó á la costa de Levante; los temores que inspira el contrabando de cereales en el Mediterráneo; el casual aumento de pedidos; los temporales, que detienen los arrastres; la falta de comunicación; ó séase el completo aislamiento, en que algunos pueblos productores de Castilla se encuentran en varios meses del invierno; y una infinidad de causas imprevistas, é imposibles de calcular, de las que cada parte contratante saca partido³⁵⁷.

Iniciada la segunda mitad del siglo XIX, al mercado del trigo en España le faltaba poco para conseguir una integración completa. Por el puerto de Santander, y en menor medida el de Oviedo, salían con destino a Europa y a otros puertos peninsulares el grano cosechado en amplias zonas castellanas, especialmente en la Tierra de Campos³⁵⁸. Junto al trigo, el centeno o la cebada no tardaron en incorporarse, tanto a los mercados de Rioseco y de Santander, destacándose un período si cabe de mayor actividad que habría de transcurrir entre 1823 y 1859. Un tiempo que transitaría entre la legislación proteccionista iniciada con el Arancel de 1820 y la aparición de las primeras líneas férreas.

Con unos precios más bajos que a comienzos de siglo, pero con una mayor producción de cereales, el rasgo más señalado a mitad de la década de 1820 fue el de un fuerte auge en el comercio exterior, lo que daba idea de la recuperación tras el lapso de la independencia de las colonias de

³⁵⁷ Sierra, Luis María de la, *Cuestión de harinas. Contestación al Sr. D. Mariano Torrente*, Imprenta de Martínez, Santander, 1845, págs. 82 y 83.

³⁵⁸ A este respecto existe un trabajo que es de obligado estudio. Nos referimos a Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús, *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985.

Ultramar. Como ya destacara Prados de la Escosura, precisamente el trigo y la harina llegaron a ser dos de los elementos más destacados en el esfuerzo expansivo, a los que se unieron un amplio abanico de factores legislativos y de producción que finalmente posibilitaron el protagonismo al trigo y a la harina en las exportaciones desde nuestro país³⁵⁹.

Es sabido que a la prohibición de introducción de trigo en España le acompañó una liberalización en las relaciones comerciales a nivel de todo el Estado y, por otra parte, una proliferación en la extensión de los cultivos debido a las nuevas roturaciones que estaban destinadas, principalmente, a la producción de cereal. El país arrastraba desde mediados del siglo XVIII unos bajos rendimientos en los cereales, que solo a partir de 1818 iban a verse mejorados. La realidad del país por esas fechas evidenciaba que el trigo, con una productividad media de 5 q/ha, representaba el 65 por ciento de la producción y el 69 por ciento de la superficie destinada al cultivo de cereales. Tras el trigo, la cebada y el maíz se acercaban a unas cifras próximas a los 7 q/ha. Por último, el centeno y la avena tenía unos rendimientos de 3 a 4 q/ha (véase el gráfico 6).

Todo ello demuestra una vez más el estancamiento al que los propietarios sometían las tierras, antes de 1820, con superficies cultivadas por el sistema de «año y vez», lo que implicaba dejar en «descanso» alrededor del 50 por ciento de las tierras dedicadas al laboreo de cereales y leguminosas. El aumento del barbecho entre un 10 y un 15 por ciento, justificaría en parte, la rebaja en el rendimiento de las tierras de cultivo en un 20 por ciento, además de provocar el descenso tan comentado de la producción durante las dos primeras décadas del siglo XIX³⁶⁰.

Simultáneamente al desarrollo del mercado interior, el grado de articulación del mismo difería de unas zonas a otras, debido, entre otras razones, al volumen de la producción, a la regularidad de los flujos del grano o a la fluidez de la información que a nivel local o comarcal podían producirse respecto a las expectativas de extracción entre los propietarios y productores de cereales. A todas ellas se unían las ya explicadas sobre el

³⁵⁹ Prados de la Escosura, Leandro., ob. cit., págs. 150 y 151.

³⁶⁰ Gutiérrez Bringas, Miguel Ángel, “La productividad agraria e España, 1752-1945”, en *VII Congreso de Historia Agraria. Baeza, 31 de mayo a 3 de junio de 1995: libro de comunicaciones*, ob. cit., págs. 268 a 278.

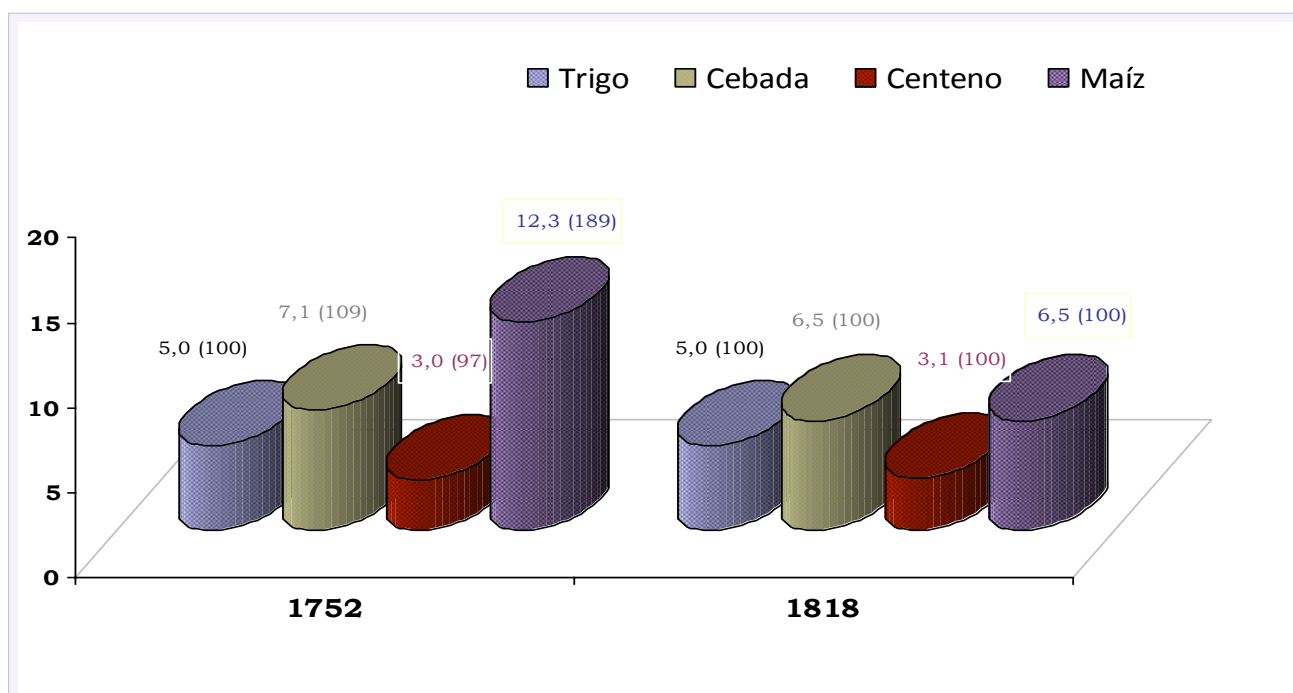
estado de los caminos y la regularidad del tráfico y movimientos de granos³⁶¹.

A partir de aquí, el camino quedaba expedito por parte de muchos propietarios y trigueros al mantenimiento de explotaciones agrarias poco productivas como consecuencia, entre otras causas, del precario estado tecnológico. En cualquier caso, la escasa productividad no implicaba un comportamiento parejo con respecto a la rentabilidad. Precisamente, el proteccionismo cerealista, pretendido y gestionado en las Cortes por los propietarios de tierras productivas, iba a permitir a comienzos de 1820 la combinación de un cierto estancamiento técnico, una mediocre productividad, junto a elevados beneficios³⁶².

GRÁFICO 6

Productividad de las superficies sembradas en quintales métrico/hectárea.

Base: 1918 = 100



FUENTE: Gutiérrez Bringas, Miguel Ángel, ob. cit., datos obtenidos del Catastro del Marqués de la Ensenada y de los Cuadernos Generales de la Riqueza, pág. 270.

³⁶¹ Martínez Vara, Tomás y Guigó, Miguel Ángel, ob. cit., pág. 192.

³⁶² García Sanz, Ángel, "Desarrollo del capitalismo agrario en Castilla y León en el siglo XIX. Algunos testimonios, algunas reflexiones y un epílogo", ob. cit., págs. 20 y 21.

Lejos de cualquier improvisación, si tomamos como ejemplo el punto de partida la política liberal iniciada en 1820, el desarrollo de la economía agrícola en las antiguas regiones de Castilla y León no tardaría en modelarse a través de empresas agrarias y de producción de cereales, un aumento considerable en la comercialización de granos hacia otras regiones y el exterior, además de una sustancial acumulación de capital por parte de los propietarios de la tierra, ya fueran explotadores directos o absentistas. En este sentido y como citaremos más adelante, debemos tener en cuenta que mediado el siglo la industria harinera en Castilla suponía la tercera parte de toda la producción en España. A esta realidad habría que añadir el hecho de que en el año 1848 ya se habían establecido en Valladolid pequeñas industrias que elaboraban arados de vertedera del modelo Hallie-Reinoso³⁶³.

Así y todo, una de las particularidades más señaladas en este período iba a ser protagonismo logrado por los propietarios del trigo, al mismo tiempo que se sucedían los primeros años de liberalismo en España. Una identidad corporativa que, partiendo de las clases propietarias rurales, tendría su mayor exponente en las respuestas políticas y legislativas que se sucederían a partir del año 1820 como consecuencia del firme propósito de proteger la producción de trigo nacional. Se ha querido ver en la iniciativa de la Junta General de Comerciantes de Valladolid, celebrada en 1847, el primer indicio de la gestación por parte de los trigueros castellanos de una identidad única y corporativista del sector³⁶⁴.

Los escasos trabajos existentes a este respecto y al período correspondiente a las primeras décadas del siglo XIX en nuestro país han mantenido durante años una visión bastante más pesimista de la situación de los propietarios trigueros de lo que, en apariencia, realmente fue. Si exceptuamos las asociaciones agrícolas de carácter más general, es cierto que los primeros intentos asociativos importantes, surgidos del mercado elitismo triguero castellano, solo empezaron a aflorar en los últimos años de la década de 1850 y comienzos de la siguiente, especialmente con la

³⁶³ Ibidem, pág. 21. Respecto a la progresión de la industria harinera en Castilla y su importancia respecto al resto de España puede consultarse de Manero, Fernando, *La industria en Castilla y León*, Editorial Ámbito, Valladolid, 1983, pág. 22. La información relativa a la fabricación de arados en Valladolid se ha extraído del AMA., Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 77, expediente 1 referido a "Maquinaria y material agrícola. Adquisiciones".

³⁶⁴ Véase Calvo Caballero, Pilar, "La identidad corporativa de los trigueros castellano-leoneses: gestación, naturaleza y proyección política", ob. cit., 2004, págs. 1 a 19.

aparición de la *Sociedad Castellana de Emulación y Fomento*, en el año 1859 o la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, diez años más tarde. La propia Junta General de Comerciantes de Valladolid intuía, antes de que finalizara la primera mitad del siglo XIX, la capacidad que habrían de desarrollar, en relación al comercio de los cereales y harinas, los propietarios castellanos³⁶⁵.

La situación de marcado desarrollo del trigo, tanto en zonas de Castilla como en otras del resto de España, es un hecho comprensible si tenemos en cuenta que la espectacular expansión de tierras con dedicación exclusiva al cereal, mantuvo su crecimiento hasta aproximadamente 1860; momento en el que comenzaría un leve retroceso. Una atenuación que, en cualquier caso, fue acompañada de un aumento en el rendimiento por hectárea³⁶⁶. Muy al contrario de lo que se pudiera creer, las posiciones del colectivo triguero se verían fortalecidas, sabedores los propietarios de la importancia del modelo de crecimiento basado en la reserva de los mercados peninsulares y de las plazas antillanas en el extranjero. Entretanto, el corporativismo político llevado a la práctica mediante la alianza tácita de diputados y políticos con intereses agrícolas, iba a significar la puesta en marcha de un nuevo axioma basado en el principio de «poder sin asociación». Un camino que iniciado en los años veinte, llegaría décadas más tarde y gracias a la presencia de grupos de presión procedentes del ámbito agrario, a ser una parte esencial de las estructuras del llamado «turnismo» político.

- La prohibición sobre el trigo extranjero. El peso de la clase propietaria terrateniente

La importación de cereales fue uno de los elementos definitorios del comercio exterior durante las últimas décadas del Antiguo Régimen. El

³⁶⁵ El mencionado Informe sugiere a lo largo de sus 30 páginas la utilización del Canal y el futuro ferrocarril desde Alar del Rey hasta el puerto de Santander, con el fin de establecer un tejido comercial hasta Cuba desde la propia Castilla. Esta posición de privilegio de los trigueros castellanos con respecto a la del resto de España, les permitiría exportar sus granos a cambio de productos coloniales. Aspecto este último que, necesariamente habría de ir acompañado de una razonable libertad de comercio. A tal fin puede consultarse de López Morales, Blas, *Informe presentado a la Junta General de Comerciantes con el programa de las bases sobre que debe reorganizarse el comercio de Valladolid*, Imprenta de D. M. Aparicio, Valladolid, 1847.

³⁶⁶ Rueda Hernanz, Germán (2006), ob. cit., págs. 149 y 150.

déficit en la producción nacional de trigo exigió durante años la importación de granos extranjeros, hecho este último que se significó como una prueba más de la baja productividad interior y del inferior precio de los cereales extranjeros en los puertos españoles. Unos precios que, en efecto, siguieron manteniéndose por debajo de los granos cosechados en la Península durante todo el siglo XIX. Esa debilidad en la producción cerealista española se había venido consolidando durante el siglo anterior como consecuencia del mayor desarrollo del mercado colonial. Un aspecto que terminaría provocando la apertura de nuestro país a los cereales y harinas procedentes del exterior³⁶⁷.

No cabe duda que la articulación de una economía con un claro predominio del comercio colonial enfatizó la disociación de la periferia con el centro peninsular. Este hecho puso en evidencia el escaso impulso integrador que tenía dicho funcionamiento para la economía española, limitando las mejoras del mercado interior y, en consecuencia, restringiendo el desarrollo económico de las provincias castellanas, generalmente vinculadas a la producción de trigo y cereales³⁶⁸.

Las distintas valoraciones que siguen haciéndose acerca del «affaire» proteccionista en nuestro país se han sucedido prácticamente sin solución de continuidad desde las primeras valoraciones realizadas en los años sesenta del pasado siglo XX. Referido a este mismo contexto económico, Sánchez Albornoz apuntó en 1963 la extensa y dilatada duración de la prohibición que se mantuvo en vigor desde 1820 hasta 1869. Una idea que le llevó a considerar este hecho como una de las señas de identidad del régimen liberal en España³⁶⁹. El arancel, como parte de la política prohibicionista, fue un elemento incontestable durante todo el período de asentamiento liberal, lo que no deja de sorprender al configurarse como una discordancia dentro de lo que era el propio programa político defendido antes del Trienio. A este respecto han contribuido las observaciones de

³⁶⁷ Garrabou, Ramon, “La crisi agrària de finals del s. XIX: una etapa del desenvolupament del capitalism”, *Recerques*, número 5, año 1975, págs. 163 a 216, y Fradera, Josep M. (1984), ob. cit., pág. 138.

³⁶⁸ Una visión del problema en Fontana, Joseph, *La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820*, Ariel, Barcelona, 1972, págs. 169 y siguientes. Existen distintas ediciones de la obra, la última de ellas publicada por la editorial Crítica, fechada en el año 2002.

³⁶⁹ Nos referimos al texto de Sánchez Albornoz, Nicolás, *Las crisis de subsistencias en España en el siglo XIX*, Instituto de Investigaciones Históricas, Rosario, 1963.

Sánchez León, al considerar que prevalecieron los objetivos políticos en detrimento de las políticas económicas ideadas por los liberales³⁷⁰.

No hay duda que las limitaciones impuestas en España a partir de 1820 para la importación de trigos y harinas, ha sido considerada como germen de importantes efectos en la economía, la sociedad, así como en el medio ambiente³⁷¹. Desde hace años se han hecho valoraciones al respecto, argumentando que sin las políticas prohibicionistas el suelo hubiera asumido unas explotaciones de distinta índole variando sustancialmente la carga adquirida por el trigo y otros tipos de cereales. Con la puesta en funcionamiento de otras alternativas en las políticas aplicadas al cereal, hubiera cabido la posibilidad de reorientar los usos del suelo hacia una producción con una mayor rentabilidad, combinando igualmente el abastecimiento interior con un volumen apropiado de exportaciones. A todo ello se añade el criterio sobre una prohibición que ha querido ser entendida como uno de los ejes sobre los que finalmente acabaría asentándose la formación de un mercado interior. Esta negativa a la entrada de trigo extranjero habría significado igualmente una mayor estabilidad económica en las inversiones de muchos terratenientes y hacendados, una vez que éstos accedieran al mercado de tierras desamortizadas³⁷².

No obstante, Domingo Gallego ha comprobado en su excelente investigación relativa a la formación de los precios del trigo en España, el crecimiento real de los mismos en los principales países exportadores. Este hecho, en opinión del profesor Gallego, provocó que el coste de oportunidad en las sucesivas prohibiciones de importación de trigos extranjeros no fuera

³⁷⁰ A este respecto son interesantes las conclusiones de Sánchez León, Pablo, *Libertad económica versus pluralismo político: la movilización a favor del libre comercio en Inglaterra y en España, 1840-1849*, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, 1999. Asimismo, puede consultarse en Montañés Primicia, Enrique, “La consolidación del prohibicionismo en el comercio del trigo (1820-1847)”, en Caro Cancela, Diego (coord.), *El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868): política, economía y sociabilidad*, Universidad de Cádiz, 2005, págs. 208 y 209.

³⁷¹ Algunas ideas en este sentido están recogidas en los trabajos de Llopis Agelán, Enrique, “Otras caras «menos amables» de la agricultura española contemporánea”, ob. cit., págs. 187 a 195, y en Gallego Martínez, Domingo, “Historia de un desarrollo pausado: integración mercantil y transformaciones productivas de la agricultura española (1800-1936)”, en Pujol, Josep; González de Molina, Manuel; Fernández Prieto, Lorenzo; Gallego, Domingo y Garrabou, Ramon (autores), *El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea*, ob. cit., págs. 150 a 155.

³⁷² Gallego Martínez, Domingo, “La formación de los precios del trigo en España (1820-1869): el contexto internacional”, *Historia Agraria*, número 34, diciembre 2004, págs. 61 y 62.

tan elevado como algunos autores han supuesto. Entendemos así que, en cualquier caso, y para el período comprendido entre 1820 y 1869, “los posibles cambios en la política comercial no hubieran modificado sustancialmente las líneas de transformación efectivamente conseguidas”³⁷³. En realidad, durante este tiempo el cambio más sustancial en el mercado europeo de trigo fue el aumento considerable de las importaciones británicas, debido a las malas cosechas sufridas por aquel país.

Conviene dejar claro que tanto Gran Bretaña como Francia simbolizaron de forma muy distinta su papel en el mercado de las importaciones de trigo. Las entradas de granos con ritmos irregulares en Francia, muy similares a las del caso español, contrastaron con la intensa acción de compra en el exterior por parte de los gobiernos británicos. Gallego también ha investigado los precios en los mercados de varios países europeos destacando la comparación entre España y Gran Bretaña. El caso es que entre los años 1821 y 1846, los precios del trigo en este último superaron el 21 por ciento de los que en esos momentos tenían los mercados en la periferia española. Como muy bien argumenta su autor, el problema tuvo que estar relacionado con la oferta y la demanda interior de trigo en cada país, lo que implicaba que los precios del trigo en un mercado cerrado como el británico debían ser más elevados que en España. Esto dejaba en muy mal lugar las ideas que explicaban el problema en función de las diferentes políticas comerciales. En consecuencia, mientras que en nuestro país se prohibía las importaciones, Gran Bretaña recurrió a la prohibición hasta 1828 y solo de manera extraordinaria³⁷⁴.

Por último, y en lo concerniente a las políticas restrictivas sobre el trigo estudiadas por Domingo Gallego, éstas fueron bastante similares en Gran Bretaña, Francia y España durante los años que transcurrieron entre 1820 y 1830, si bien es verdad que en el primero de los casos el proceso finalizó en 1846 con la supresión de las «leyes de granos». Las políticas de restricción de cereales se mantuvieron, empero, vigentes en Francia y en España hasta los años sesenta del siglo XIX, no observándose grandes desviaciones en los precios en sus respectivos mercados litorales respecto a los existentes en las plazas internacionales. El resultado de aplicar políticas distintas implicó que para el proteccionismo francés y español el precio del

³⁷³ *Ibidem*, pág. 62.

³⁷⁴ *Ibidem*, págs. 68 y 69.

mismo fue menor del que se pretendió con la aplicación de las políticas comerciales que todos conocemos. En el caso británico, las ventajas del inmediato librecambio fueron menos profundas de lo previsto una vez liquidadas las leyes de granos³⁷⁵.

Como se ve, el protagonismo dispensado a la política triguera ha servido de explicación a las transformaciones que tuvieron lugar una vez finalizado el Antiguo Régimen y las deflaciones en los mercados agrarios de comienzos del XIX. En el contexto de nuestra investigación, hemos de apuntar la importancia que, en efecto, adquirió el trigo y el arancel de 1820 como pieza clave para comprender la formación de sociedades de propietarios, especialmente las surgidas entre los sectores con mayores intereses agrícolas en la defensa a ultranza de los cereales nacionales.

Para ello, ha sido preciso conocer los trabajos y exposiciones realizados en las Cortes en este intervalo temporal, especialmente las iniciativas legislativas relacionadas con la protección al trigo y a los propietarios, con el fin de comprender los efectos de dicha prohibición sobre los mercados de cereales. En este sentido, uno de los aspectos que debemos tener más en cuenta es la estrecha vinculación que existió entre la política arancelaria, los propietarios trigueros y el «régimen» liberal del Trienio. Así se desprende, por ejemplo, de una de las respuestas dada por el diputado Martínez de la Rosa al conde de Toreno en las Cortes de 1820. En referencia a los esfuerzos que debían realizarse en beneficio de la «revolución liberal», de la Rosa expresaba lo siguiente: “El Sr. Conde de Toreno dijo muy bien el otro día que el único medio de consolidar la revolución y de asegurar la libertad era crear propietarios é interesarlos en ella”³⁷⁶.

Como ya subrayara Enrique Montañés, los trabajos relacionados con el momento proteccionista en nuestro país tienen que ver con la información que manejaron los diputados liberales sobre el funcionamiento de los mercados de trigo. Todavía es difícil saber si aquéllos se apoyaron en datos suficientemente verificados o, por el contrario, se estableció un criterio de actuación basado en las peticiones realizadas por los grupos de presión al régimen liberal³⁷⁷. En esta misma línea se han movido las investigaciones de

³⁷⁵ *Ibídem*, págs. 84 y 85.

³⁷⁶ DSC, sesión del día 14 de agosto de 1820, número 41, pág. 513.

³⁷⁷ Montañés Primicia, Enrique (2005), *ob. cit.* pág. 208.

Josep Maria Fradera al plantear el viraje proteccionista como el resultado lógico de las presiones soportadas por el Estado en aquellos momentos. Así, el deterioro en la balanza comercial, consecuencia directa de la pérdida del comercio americano, incitó a frenar el consumo de manufacturas extranjeras, especialmente las textiles, y de cereales de importación³⁷⁸.

El resultado final solo es comprensible si atendemos a las presiones que se produjeron desde las grandes áreas productoras de cereales después de los años 1818 y 1819. El empuje promovido por la gran propiedad triguera terminaría traduciéndose en una clara acometida contra el liberalismo arancelario y el cambio en la política cerealista en 1820. Esta transformación, en opinión del propio Fradera, no era posible atribuirle al avance en las nuevas concepciones de la política económica liberal, sino más bien a la presión de la «marea» proteccionista promovida por las áreas productoras del país³⁷⁹.

Esta actitud de conminación al proteccionismo también es constatable en las Cortes de 1820 a través de sus *Diarios de Sesiones*. En concreto, y durante el verano de 1820, varios labradores de Écija enviaron una exposición a la Comisión de Agricultura de las Cortes en protesta por las excesivas contribuciones a las que estaba expuesta su producción triguera y a la falta de circulación de la misma. La queja estaba justificada en razón a la cantidad de trigo que se almacenaba en los puertos andaluces procedentes del extranjero, lo que significaba, en opinión de los labradores, la pérdida de importantes capitales y la ruina de la labranza en las tierras de cultivo³⁸⁰.

La cuestión de los trigos de Écija tuvo bastante repercusión y fue recogida por José María Moreno Guerra y Navarro, pequeño propietario y diputado por Córdoba³⁸¹. Éste describió la dramática situación de los agricultores andaluces en los siguientes términos: “En muchos pueblos de Andalucía he visto á los labradores determinados á no hacer la siega en este

³⁷⁸ Fradera, Josep Maria (1984), ob. cit., pág. 139.

³⁷⁹ Ibídem, pág. 140.

³⁸⁰ La primera referencia que hemos encontrado al respecto en el Diario de las Sesiones de las Cortes está fechada el 15 de julio de 1820. Véase DSC, sesión del día 15 de julio de 1820, número 11, pág. 130.

³⁸¹ Sobre los aspectos biográficos del diputado Moreno Guerra, véase la obra ya citada de Gil Novales, Alberto, *Las sociedades patrióticas (1820-1823)*, Volumen II, Tecnos, Madrid, 1975, págs. 811, 823 y 1156.

año, porque el precio de la cebada era de 8 ó 10 rs., y el del trigo de 15 á 20, al paso que el de los jornales se mantenía como siempre. He visto en ellos el desaliento y la ruina que amenaza á la agricultura si no se pone un pronto remedio”³⁸². El precio descrito por Moreno Guerra estaba referido a reales por fanega. Su razonamiento, en otro momento de la intervención, continuó para solicitar medidas prohibicionistas que evitaran la competencia de los trigos procedentes del exterior. En este sentido y refiriéndose a las facilidades de la producción del trigo en algunas regiones de Rusia, su explicación era la siguiente:

Por otra parte, aquellos naturales no pagan diezmos ni primicias ni demás gabelas que sufren nuestros labradores; y así, vendiendo el trigo á 8 ó 10 rs., ganan mucho dinero. Comprando el trigo á este precio en Odesa, y costando su transporte á Cádiz 4 ó 6 rs. menos tal vez que costará de Toledo á Madrid, puede venderse en Cádiz infinitamente más barato que el propio del país. Comerciantes de aquella plaza me han asegurado que vendiéndolo á 20 reales ganan mucho dinero³⁸³.

Era evidente que los labradores andaluces no podían competir con los precios del exterior debido a los gastos más elevados que los trigos nacionales tenían en la producción. Así, cuando el precio del mismo bajaba en las zonas de litoral de los 40 reales, o incluso de los 20 reales por fanega en el interior, el desastre y las pérdidas estaban garantizados³⁸⁴. En el verano de 1820 el trigo se situó entre los 15 y 20 reales por fanega, hecho que motivó la petición de Moreno Guerra ante las Cortes para prohibir la entrada de cereales desde otros países por los puertos de Andalucía³⁸⁵.

El caso de los labradores andaluces siguió latente durante varias semanas. A la misma causa se incorporaron otros diputados como Juan María Álvarez de Sotomayor y Juan Antonio Doriga, éste último representante de Santander que explicó la inconformidad con la entrada de

³⁸² DSC, sesión del día 18 de julio de 1820, número 11, pág. 190.

³⁸³ *Ibidem*.

³⁸⁴ Montañés Primicia, Enrique (2005), *ob. cit.* pág. 210.

³⁸⁵ A este respecto, el diputado Moreno Guerra se expresaba así: “Es necesario, pues, prohibir absolutamente la entrada de granos extranjeros en las Andalucías; de lo contrario, dejarán de producir nuestros campos, se quemarán los aperos, se destruirán las labores, y dentro de poco tiempo se acabará la agricultura. Y entonces, cuando los griegos y rusos se hayan llevado nuestra plata á las partes orientales de Europa, de donde nunca despues vuelve á España un peso duro, entonces, entonces ni caros ni baratos nos traerán sus granos, y perecerá nuestro pueblo por falta de cálculo y de conocimientos en la economía política”, DSC, sesión del día 18 de julio de 1820, número 11, pág. 190.

harinas procedentes de La Habana. La llegada de este producto había provocado la salida de trigos desde Castilla a precios muy inferiores a los que se consideraban razonables para no causar graves perjuicios a la agricultura castellana³⁸⁶. En las discusiones participaron el Conde de Toreno y Martínez de la Rosa, quienes motivaron la propuesta con el propósito de priorizar las resoluciones que se refirieran al problema de las importaciones de trigos en España³⁸⁷.

Estos hechos demostraban el interés de los diputados por la causa agrícola, en especial del trigo. La pregunta en cualquier caso es obvia. Si existía ese interés, entonces ¿quiénes formaron parte de las primeras Cortes del Trienio? Con la llegada al poder del liberalismo se procedió a conformar el nuevo Parlamento. El número de diputados que representaban a cada una de las provincias se calculaba con arreglo al censo que se había realizado en el año 1797, teniendo en cuenta que por cada 70.000 almas se elegía a un representante para cada una de las mismas. Además de las regiones peninsulares y las regiones insulares de Canarias y Baleares, las Cortes de 1820 contaron con representantes de Buenos Aires, Caracas, Chile, Cuba, Filipinas, Guatemala, Lima y México. Tras el proceso electoral se eligieron 147 diputados y 52 suplentes. La bibliografía nos ha proporcionado algunos datos interesantes en relación a las actividades declaradas por cada uno de los mismos (véase el gráfico 7).

A primera vista, parece evidente que los primeros representantes liberales del poder legislativo estaban muy diversificados en sus actividades. Militares, eclesiásticos y altos cargos de la Administración copaban el mayor número de los asientos. En el gráfico que hemos elaborado no hemos querido reflejar aquellas ocupaciones que, en menor número, algunos cargos declaraban tener al margen de su condición de diputado. En efecto, Magin Coruminas, representante de Cataluña y «fabricante», o Luis Aquilino Pulleyro, médico y diputado por Galicia, son algunos ejemplos de todo ello. Asimismo, hemos comprobado la existencia de quince diputados que no constataron su actividad profesional³⁸⁸.

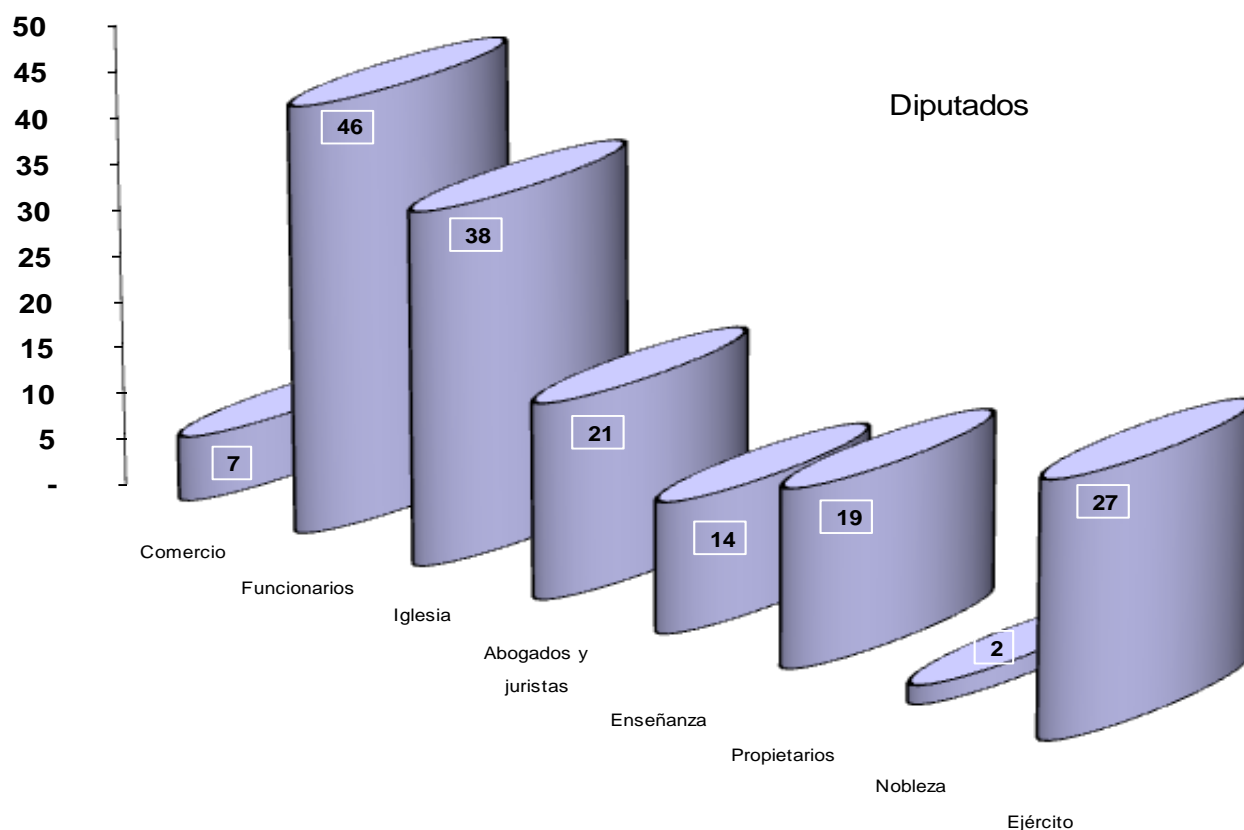
³⁸⁶ DSC, sesión del día 24 de julio de 1820, número 20, págs. 257 y 261, y sesión del día 26 de julio de 1820, número 22, pág. 272.

³⁸⁷ *Ibidem*, págs. 272 y 273, y DSC, sesión del día 27 de julio de 1820, número 23, págs. 284 y 285.

³⁸⁸ *Lista de los Señores Diputados á las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821*, Imprenta de Doña Rosa Sanz, Madrid, 1820.

GRÁFICO 7

Distribución por sectores de actividad. Diputados a Cortes (1820-1821)



FUENTE: *Lista de los Señores Diputados á las Córtes Ordinarias de los años 1820 y 1821*, Imprenta de Doña Rosa Sanz, Madrid, 1820. Se han excluido las regiones de Ultramar y Canarias.

De entre todos los cargos electos en las Cortes de 1820, solo figuraban diecinueve personas como propietarios o hacendados. Cinco de ellos mantenían otras actividades, además de las agrícolas, vinculadas al mundo del derecho y del ejército (véase el cuadro 11). Este hecho tan significativo nos ha llamado la atención, ya que otras fuentes demuestran que el número de diputados con intereses en lo agrario debieron ser más de los que hemos referenciado en el citado cuadro. Un ejemplo de todo ello es el propio Moreno Guerra, propietario que no figura como tal en la célebre *Lista de los Señores Diputados á las Cortes*, obra a la que ya hemos hecho mención. Algo que

CUADRO 11

*Diputados propietarios y hacendados en las Cortes durante los años 1820 y 1821**

Nombre	Provincia	Actividad
Solanot (D. Valentin)	Aragón	Hacendado
Lopez Artieda (D. Alonso)	Aragón	Hacendado
Ladron de Gúevara (D. Leandro)	Ávila	Hacendado y vecino de Monveltran
Rubin de Celis (D. Fulgencio)	Burgos y Santander	Hacendado
Navarro (D. Fernando)	Cataluña	Hacendado en Tortosa
Desprat (D. Esteban)	Cataluña	Hacendado
Mensa (D. Joaquin)	Cataluña	Hacendado en Lérida
Becerra (D. José Ramon)	Galicia	Propietario
Fernandez de Romero (D. José)	Guipúzcoa	Hacendado
Fernandez Gasco (D. Francisco)	Madrid	Abogado y Hacendado en el lugar de Daganzo
Medrano (D. José)	La Mancha	Hacendado en Ciudad Real, y oficial del primer regimiento de Guardias españolas y de la Sección de Historia
Aguila del Bolaños (D. Bernabé)	La Mancha	Hacendado en Villarubia
Lázaro (D. Manuel)	Segovia	Vecino y hacendado en la villa de Berganzones
Cabalery (D. Francisco)	Sevilla	Propietario en dicha ciudad (Sevilla)
La Llave (D. Vicente de)	Toledo	Hacendado en la villa de Puebla Nueva
García Ochoa (D. Sebastian)	Toledo	Abogado y propietario en el lugar de Mascaraque
Denche (D. Plácido Felix)	Toledo	Abogado y hacendado, vecino de Madrid
Manzanilla (D. José)	Toledo	Capitán retirado y hacendado, vecino de Madrid
Berdu (D. Antonio)	Valencia	Hacendado de Monovar

* No se han tenido en cuenta las zonas de Ultramar, así como las Insulares (Baleares y Canarias)

FUENTE: *Lista de los Señores Diputados á las Córtes Ordinarias de los años 1820 y 1821*, Imprenta de Doña Rosa Sanz, Madrid, 1820.

también puede deducirse del diputado por Extremadura Juan Álvarez Guerra, abogado y al mismo tiempo persona unida al mundo de la agricultura, autor del *Tratado de las reformas del trillo* que sería publicado en esos años por la *Sociedad Económica de Valladolid*. A él están atribuidas obras dedicadas al cultivo del arroz, así como la traducción con notas del *Diccionario de agricultura* de Rozier, lo que nos da una idea de sus intereses hacia el cultivo y la producción agraria³⁸⁹.

Sin embargo, uno de los ejemplos más significativos es el de José María Moscoso, alcalde constitucional del Ferrol y diputado que se definirá como propietario en uno de los debates con motivo de la aprobación de las prohibiciones de entrada de trigo en España. “Si hablase como propietario que soy — explicaba Moscoso —, y no consultase más que mis intereses particulares, me adheriría desde luego al dictamen de la comisiones; pero hablando como Diputado debo usar de otro lenguaje”³⁹⁰.

Sabemos que entre el total de las personas que acudieron a las Cortes del Trienio Liberal ejercieron la labor legislativa agrónomos y botánicos como Simón de Rojas Clemente y Rubio, diputado y bibliotecario que dedicó muchos años al estudio de los cereales, así como hombres provenientes de familias de la antigua nobleza y de la oligarquía terrateniente como Álvaro Flórez Estrada³⁹¹.

A este respecto, conviene decir que las condiciones concretas en la España de 1820, unidas a una emergente clase política liberal, entre cuyas prioridades estaba la de favorecer a los grupos económicos que podían garantizar su continuidad, tuvieron mucho que ver con la opción

³⁸⁹ Algunas reseñas de su biografía pueden encontrarse en Moratilla, Bernardo, *Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de España*, Imprenta Nacional, Madrid, 1858; Nombela, Julio, *Los Ministros en España desde 1800 a 1869*, Tomos primero y segundo, J. Castro y Compañía, editor, Madrid, 1869-1870, y Aviraneta, Eugenio de y Bertrán Soler, Tomás, *Mina y los proscritos*, Imp. de la Colonia, Argel, 1836.

³⁹⁰ DSC, sesión del día 27 de julio de 1820, número 23, pág. 284.

³⁹¹ Hemos encontrado obras de Simón de Rojas en la Biblioteca del Jardín Botánico de Madrid, en concreto nos referimos a: Rojas Clemente Simón de; La Gasca, Mariano, y García, Donato, “Introducción a la criptogamia de España”, en *Anales de Ciencias Naturales*, número 5, págs. 135 a 215, Madrid, 1802, y Rojas Clemente, Simón de, *Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía*, Madrid, 1807. Referencias a su vida pueden encontrarse en Colmeiro, Miguel, *La botánica y los botánicos de la Península hispano-lusitana: estudios bibliográficos y biográficos*, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1858, págs. 195 a 197. En relación al diputado Flórez Estrada es conocida la biografía que sobre el mismo realizó Prados Arrate, Jesús, *Don Álvaro Flórez Estrada, un español excepcional (1766-1853)*, Real Academia Española, Madrid, 1982.

prohibicionista adoptada por las Cortes durante el Trienio Liberal. Hemos de tener presente quiénes constituían la base fiscal del Estado, especialmente en un momento en el que el Gobierno era incapaz de recuperar el control de las regiones de Ultramar. Este punto fue esencial a la hora de invertir los parámetros que sobre la libertad de actuación económica tantas veces había puesto sobre la mesa la «revolución liberal» en nuestro país. En consecuencia con todo ello, los diputados liberales accedieron a solucionar los inconvenientes que obstaculizaban el mercado interior, desarrollando igualmente restricciones en los intercambios comerciales con el exterior³⁹².

Al hecho anterior habría que añadir las constantes dificultades en la Hacienda del Estado, lo que no dejó de ser en todo momento un motivo más de limitación en las actuaciones relativas a la política comercial³⁹³. Ciertamente, la liquidación de las instituciones del Antiguo Régimen puso en el camino de las nuevas perspectivas económicas a las distintas categorías sociales que se estaban formando en las primeras décadas del siglo XIX. La llamada clase burguesa no tardó en reivindicar la defensa de la propiedad y de la economía de mercado, agrupándose alrededor de un sistema representativo, lo suficientemente poderoso como para poder incluir también las inquietudes agrarias que comenzaban a preocupar en las zonas productoras de las regiones del interior peninsular. Ciertamente es que para el historiador Vives Vives solo habían existido dos grupos representativos de la burguesía a comienzos del siglo XIX: los comerciantes establecidos en torno al puerto de Cádiz, así como los fabricantes y resto de personas dedicadas al comercio en Cataluña. No obstante, y en la medida que se habían comenzado ya a aplicar las desvinculaciones en las tierras de cultivo, podemos hablar igualmente de un grupo pujante dentro del medio agrario³⁹⁴.

Junto a esta burguesía agraria, el resto de grupos económicos que habían surgido en las primeras décadas del XIX se apresuraron a lanzar sus demandas al nuevo Estado liberal, muchas veces de manera discordante.

³⁹² Véase, por ejemplo, Artola, Miguel (1978), ob. cit., así como Fontana, Joseph (1972), ob. cit.

³⁹³ Sobre las distintas orientaciones en la política comercial liberal existen muchos trabajos interesantes publicados los últimos años. En cualquier caso, puede consultarse el artículo de Comín, Francisco, “El sector público y la economía: Hacienda, regulación y proteccionismo en la España liberal”, en Fernández García, Antonio (coord.), *Los fundamentos de la España liberal (1834-1900). La sociedad, la economía y las formas de vida*, Espasa Calpe, Madrid, 1997, págs. 413 a 461.

³⁹⁴ Nos referimos al trabajo de Vives Vicens, Jaime, *Coyuntura económica y reformismo burgués*, Ariel, Barcelona, 1974, pág. 24.

Esto dio lugar al planteamiento en las Cortes, tanto de solicitudes liberalizadoras como de posturas completamente en consonancia con los planteamientos prohibicionistas, llegándose incluso al extremo de rivalizar entre sí las distintas coaliciones con sus respectivos intereses³⁹⁵.

Fue precisamente la consolidación del régimen representativo y la posibilidad de participar políticamente en las distintas Administraciones constitucionales, lo que acrecentó las posibilidades de que cualquier grupo de personas con un señalado interés influyera en la regulación de los mercados, convirtiendo los mismos en un instrumento político de primer nivel. Esa contienda entre los distintos grupos de presión que se produciría a partir del año 1820 se tradujo en la solicitud, por parte de agricultores e industriales, de un proteccionismo firme frente al prohibicionismo más moderado al que instaban comerciantes y vendedores con intereses en la exportación³⁹⁶. En definitiva, podemos convenir, como veremos a después, que la clase política liberal se vio subordinada respecto a los requerimientos y las alianzas que de forma tácita se fueron conformando entre los diversos grupos con intereses en los mercados económicos. En este sentido, no cabe duda que fueron los propietarios y grupos de agricultores quienes terminaron por superar el primer enfrentamiento económico del Trienio Liberal. Con estas premisas, desde la apertura de las Cortes liberales en 1820, la mayor parte de los grupos interesados en la cuestión arancelaria mostraron una predisposición excesiva a las restricciones en el comercio exterior³⁹⁷.

Más aún, y en lo que respecta a nuestra investigación, fueron los propietarios agrícolas, especialmente en lo que se refería a la producción triguera, los primeros en solicitar un cambio arancelario más taxativo. A ellos no tardaron en unírseles quienes, desde los sectores industriales, demandaban una mayor protección hacia los productos manufacturados. En efecto, por un lado las dificultades agrarias, unidas a la preeminencia de las manufacturas británicas, no tardaron en mostrarse como un cúmulo de obstáculos a los que solamente con la aplicación de un prohibicionismo tenaz se podía atemperar. Esta actitud produjo constantes conflictos de

³⁹⁵ Algunos apuntes de todo este proceso pueden leerse en Fraile Balbín, Pedro, *Industrialización y grupos de presión. La economía política de la protección en España 1900-1950*, Alianza, Madrid, 1991.

³⁹⁶ Montañés, Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 19.

³⁹⁷ *Ibíd*em, pág. 24.

intereses entre grupos agrarios, de industriales y aquellos dedicados al comercio, además de continuas desavenencias a nivel territorial. Sin embargo, y como trataremos de explicar, a pesar de la discordancia a la que el liberalismo iba a ser sometido en su ideario económico, el gobierno optó por amparar aquellas medidas que favorecieran a los grupos que constituían la principal base fiscal de la nación. Un hecho con el que se pretendían dar los primeros pasos para la consolidación del régimen representativo que se acababa de instaurar³⁹⁸.

Como ha defendido el profesor Montañés, “la puesta en práctica del prohibicionismo en el comercio exterior del trigo no sólo era coherente con el objetivo de integrar en el régimen liberal a los propietarios y labradores, sino que también reforzaba el atractivo del proceso desamortizador al facilitar un incremento en la renta de la tierra”³⁹⁹. Alcanzado el acuerdo de prohibición por las Cortes a través del arancel de 1820, los conflictos de intereses se mantuvieron, incluso se vieron aumentados, al tratarse de una aprobación de índole temporal. Asimismo, Artola nos ha recordado los intentos por parte de los liberales «moderados» por aprobar un programa de reformas restringido con el que el propio Rey pudiera integrarse en el sistema constitucional. Por otra parte, los llamados «exaltados» optaron por una política de ruptura continua con lo que todavía restaba de los estamentos más privilegiados procedentes del Antiguo Régimen e imposibilitando la colaboración con el resto de sectores más concertadores⁴⁰⁰.

Las reformas liberales afectaron, como es lógico, al sector agrario al que pertenecía la mayoría de la población activa del país. En este estado de cosas, el debate sobre el arancel tuvo desde sus primeros instantes un protagonismo destacado, motivado, como explicamos más arriba, por el grupo de diputados que directamente estaba relacionado con la agricultura. Desde el año 1817 se había venido produciendo una caída en el precio del trigo en los mercados nacionales. Este hecho, unido a las abundantes cosechas de los años 1818 y 1819 provocó la petición por parte de

³⁹⁸ Ibídem, pág. 28 y 29. Igualmente en Fontana, Josep, “La crisis agraria de comienzos del siglo XIX y sus repercusiones en España”, en García Sanz, Ángel y Garrabou Ramon (eds.), (2005), ob. cit., págs. 103 a 128.

³⁹⁹ Montañés, Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 29.

⁴⁰⁰ Artola, Miguel Artola, Miguel (1990), ob. cit., págs. 52 y siguientes.

labradores y productores el cese de las importaciones y un estímulo para los trigos que se producían en España⁴⁰¹.

Las demandas tuvieron inmediatamente su contestación, incluso unos días antes de que el propio monarca jurara la Constitución. Así, el día 7 de marzo de 1820, el rey Fernando firmaba una Real Orden autorizando la exportación de cereales, al mismo tiempo que imponía una serie de derechos en relación a la importación de productos extranjeros. En este sentido, en sus artículos primero y segundo se precisaba lo siguiente:

1º Que subsista en todo su vigor la facultad de extraer del reino las harinas, granos semillas de su cosecha con absoluta libertad de derechos. 2º Que á estos mismos artículos cuando se introduzcan del extranjero se cobren por ahora los que están señalados en los aranceles y órdenes que rigen; pero en las introducciones que se hagan desde 1º de Mayo de este año en adelante se exigirán 65 rs. de vn. por cada barril de harina con peso de 194 libras, y 26 rs. de vn. por cada quintal de granos y semillas conducido en bandera extranjera, y 18 rs. en la nacional⁴⁰².

La normativa, a pesar de su alta protección, fue considerada insuficiente por los labradores andaluces. Como ya se indicó, la intensificación de la campaña a favor de la protección de los cereales se había producido en el verano de 1820. El descontento y las protestas presentadas por los labradores de Écija, apoyados por los diputados Moreno Guerra y Torre Marín, representante este último por la provincia de Granada, obligaron a intervenir a las comisiones de Comercio, Agricultura y Artes. El texto presentado por dichas comisiones a las Cortes limitaba la entrada de granos en España. En concreto, la proposición en su artículo primero especificaba lo siguiente: “Se prohíbe la importación del trigo extranjero por todos los puertos de la Península, siempre que no exceda de 70 rs. vn. el precio de cada fanega de este grano, valor que habrá de regularse por los mercados de los puertos de su entrada”. Más adelante se señalaba: Será libre la exportación del trigo nacional para el extranjero, cuando el precio de cada fanega no exceda de 40 rs. vn.”⁴⁰³.

⁴⁰¹ Artola, Miguel (1978), ob. cit., pág. 192 a 194.

⁴⁰² Balmaceda, Fermín Martín de, *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por su Majestad desde que fue libre del tirano poder revolucionario, comprensivo al año de 1823*, Imprenta Real, Madrid, 1824, págs. 39 y 40.

⁴⁰³ DSC, sesión del día 24 de julio de 1820, número 20, pág. 258.

Esta prohibición, tal y como expresara el *Diario de Sesiones*, era un «paliativo momentáneo». Al menos, debía estar vigente mientras los granos retomaban los precios con anterioridad a 1820. Además, en el texto entregado a las Cortes se incluían algunas medidas con el fin de impulsar las actividades agrarias. En concreto, una de las medidas fiscales que se proponía era la reducción a la mitad del diezmo. De esta forma, se pretendía una disminución en la carga fiscal a los grupos que más contribuían, especialmente a labradores y propietarios, lo que significaba la posibilidad de competir con los trigos extranjeros⁴⁰⁴. El informe acentuaba la importancia de este tipo de medidas al reducir los costes y mejorar la competitividad, ya que consideraba que las restricciones comerciales no eran suficientes⁴⁰⁵.

De los trece miembros encargados de redactar el texto, tres manifestaron su acuerdo a la prohibición temporal respecto a los cereales y harinas, aunque no lo hicieron en relación al resto de medidas. Las diferencias entre el conde de Toreno y Florez Estrada, que habían surgido a raíz de la formación de las comisiones, terminaron con la aprobación de la mayoría de las propuestas del primero y la prioridad en las discusiones de todo lo relativo a la prohibición en la importación de cereales.

Tras el dictamen de las comisiones de Agricultura y Comercio, el 27 de julio de 1820 comenzaron los debates que sobre el mismo debía realizarse para adoptar un acuerdo conjunto en las Cortes. La oposición a las medidas prohibicionistas no tardaron en ponerse de manifiesto. Las primeras manifestaciones en contra partieron de Justo José Banqueri, diputado por Granada y Oficial de la Secretaría del Despacho de Hacienda, quien se vio

⁴⁰⁴ Sin embargo, estas medidas exigían la no pérdida de ingresos hacia el Estado, a pesar de reducir el diezmo a la mitad. Por ello, las comisiones de las Cortes calcularon que las prohibiciones impulsarían una subida de 20 reales por fanega en el precio del trigo. De esta forma podría compensarse la rebaja en la mitad del diezmo. Este hecho se recogía así en las Cortes de 1820: “De esta manera, en opinion de las comisiones, se alivia al labrador, se dota al clero, y el Gobierno percibirá una cantidad próximamente igual á la que percibe ahora por tercias, excusado y noveno. Porque no se debe olvidar que si el diezmo del trigo es de 6 millones de fanegas; si la cosecha de éste es á la de los demás granos como 3 á 5, y si con la medida restrictiva que las comisiones proponen sube el precio del trigo 20 rs. en fanega, subirá el total del diezmo 10 millones de duros”. Véase el *DSC*, sesión del día 24 de julio de 1820, número 20, pág. 260.

⁴⁰⁵ El informe de las comisiones apuntaba, entre otras cuestiones, que: “El remedio radical es nivelas los provechos del labrador español con los de los labradores de los demás países, á fin de que sus producciones puedan entrar en concurrencia en el mercado general del mundo”. *Ibidem*.

apoyado por algunos representantes americanos. El análisis de Banqueri era muy explícito:

Tengo por muy delicada esta cuestión, y si dejar de convenir con la comision en la necesidad de tomar una providencia, creo que al expediente le faltan datos para acertar la resolucion, y que por esta causa debería ser el término de la prohibición por ahora muy corto, sin perjuicio de adoptar una medida general. Necesitaríamos saber la existencia de granos en España y el producto de la cosecha actual; y graduando si por ejemplo se necesitaban en España para el consumo 70 millones de fanegas, compraríamos dicho consumo con la existencia, y no se arriesgaría el acierto. De lo contrario, nos exponremos á perjudicar algunas provincias por la diferencia de sus cosechas con las de otras⁴⁰⁶.

Juan Subercase, diputado por Valencia fue todavía más lejos indicando que “Estaría conforme con el dictámen de la comision si no previese que al paso que se favorece á los labradores, y singularmente á los de la Andalucía, se perjudica á las demás clases del Estado; pues con la subida de los granos, el jornalero, el artesano, el comerciante y los demás ser verán precisados á comprar un renglon de primera necesidad á un precio excesivo, comparado con el que debiera tener”⁴⁰⁷. Adherido a la opinión de Subercase, otro hacendado y diputado por México, Francisco Fagoaga, en relación a Andalucía explicaba lo siguiente:

En efecto, la medida de que se trata es gravosa á varias clases de la sociedad, sin ser tan ventajosa á la agricultura como aparece de pronto. La prohibición de introducir granos extranjeros aumentará el precio pecuniario del trigo, pero no su valor real ó la cantidad de trabajo que representa, porque el fabricante aumenta conforme se encarecen los artículos de primera necesidad. No habiendo canales ni caminos por donde conducirse los trigos de Castilla y la Mancha á las provincias litorales, se va á tomar una medida que favorece á unas provincias en perjuicio de otras⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ DSC, sesión del día 27 de julio de 1820, número 23, pág. 285.

⁴⁰⁷ *Ibidem*.

⁴⁰⁸ *Ibidem*. En relación a los nombres de los diputados hemos encontrado algunas anomalías dependiendo de las fuentes que se consulten. En particular, los nombres de los diputados Subercase y Fagoaga, recogidos así en el *Diario de Sesiones*, figuran como Subelcacer y Fagaoga, respectivamente, en la citada obra del año 1820, *Lista de los Señores Diputados á las Córtes Ordinarias de los años 1820 y 1821*, págs. 33 y 39. En cualquier caso, hemos preferido utilizar los nombres que se recogen en los *Diarios de Sesiones de las Cortes*.

La ruptura con el grupo proclive a la subida de aranceles en el trigo tuvo también entre sus filas a quienes desestimaban desde su posición como diputado y propietario tales posiciones. El diputado Moscoso, que ya se había definido como propietario ante el resto de representantes, pidió, sin embargo, una toma en consideración respecto a los 80 reales que la Comisión juzgaba oportuno fijar como precio para la introducción de granos en España. Era, en palabras del mismo, un precio excesivo que perjudicaba a los consumidores. “Si el precio que ahora se señala se hubiera prefijado hace seis años — advertía Moscoso —, hubiera sido tal vez útil; pero en la época actual me parece que oprimiría á la clase más numerosa, cual es la de los consumidores, aun cuando pudiera favorecer á la de los propietarios; y el Congreso se halla en el caso de conciliar los intereses de unos y otros”. Finalmente, y por si quedaba todavía alguna duda a quienes se intentaba favorecer con el arancel, el mismo Moscoso proponía: “Yo, que conozco sus intereses, creo que fijando el precio de 70 rs. por fanega habremos conciliado el interés del pueblo en general con el del propietario, que es el objeto de las proposiciones. Esta es mi opinión con respecto á mi provincia, que conozco, los demás señores dirán lo que entiendan con relación á las suyas”⁴⁰⁹.

Las contestaciones a estas actitudes no se hicieron esperar. Es evidente la importancia y las repercusiones que tuvieron para una parte importante de propietarios y productores de cereal, en particular del trigo, la iniciativa tomada por Moreno Guerra y por los labradores andaluces⁴¹⁰. Los efectos de las distintas propuestas y la polémica arrastraron a la Cámara de diputados a constantes rifirrafes con argumentaciones de muy diversa índole. Sin embargo, el grupo de diputados que era partidario de aprobar un arancel más restrictivo era numéricamente más amplio. Esto se tradujo, por ejemplo, en la paralización de iniciativas que solicitaban nuevas comisiones y más informes⁴¹¹.

⁴⁰⁹ DSC, sesión del día 27 de julio de 1820, número 23, pág. 284.

⁴¹⁰ El propio diputado en un momento del debate recuerda la importancia que ha tenido la petición de los agricultores andaluces comentándolo a la Cámara de la siguiente manera: “El Congreso habrá visto por el contesto del informe, que las comisiones de Agricultura y Comercio no se han excedido un ápice de lo que se les mandó. A las comisiones reunidas no se les pasó solo mi proposicion y la del Sr. Torre Marin, sino tambien la representacion de los 49 labradores de Écija, en que piden y esperan del Congreso que, conociendo que la agricultura es la base de la felicidad nacional, la aliviarán quitándola cuantas trabas la entorpecen”. *Ibidem*.

⁴¹¹ Montañés, Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 34.

Las malas perspectivas planteadas respecto a los agricultores andaluces, si no se aprobaban las medidas sugeridas por las comisiones de Agricultura y Comercio, fueron justificadas por los bajos precios del trigo en la región, lo que provocaba, además, el abandono constante de las tierras de cultivo. El diputado Romero Alpuente quiso unir la situación agrícola de Aragón a la de los propietarios andaluces, argumentando que la agricultura en ambas regiones atravesaba por malos momentos, especialmente si se tenía que comprar el trigo 10 reales más caro por fanega. La solución estaba en impedir su introducción en España⁴¹². La consideración de este tipo de problemas indujo a solicitar por parte de otros sectores una prohibición más amplia y a más largo plazo. Esta actitud, al menos fue expuesta por otro propietario como Francisco Fernández Gascó al defender con toda su energía a la clase propietaria. “Prohíbase, pues — incitaba el diputado Gasco —, la introducción de harinas y trigos extranjeros, con que nos extraen un número considerable de millones que debemos conservar, y con que podemos reanimar nuestras provincias productoras del centro y Mediodía, próximas á perecer entre la abundancia de granos que la ahoga”⁴¹³.

El hecho es que la mayoría de quienes defendían la prohibición entendían que ésta debía ser un recurso a corto plazo que paliaría las dificultades por las que atravesaba en esos momentos la economía española. Había quien, por el contrario, entendía que tales medidas habrían de prolongarse en el tiempo. Sin embargo, el conde de Toreno fue muy explícito al considerar que los aranceles conseguirían conciliar los intereses, tanto de labradores como del resto de clases productoras del país. Advertía el propio diputado que cualquier otra fórmula a más largo plazo acarrearía un valor excesivo de los granos, perjudicando así al resto de clases del país. Con estos planteamientos y una restricción que, a todas luces se hacía imprescindible, el articulado aprobado establecía la prohibición de importar trigos y harinas siempre que no alcanzasen los 80 reales para el trigo y los 120 reales por fanega para la harina en los mercados marítimos más significativos de la Península. Antes de la votación, el conde de Toreno insistió en que la medida debería ser temporal, fijándose el plazo hasta el mes de marzo de 1821, fecha en la que habría de comenzar la siguiente legislatura⁴¹⁴.

⁴¹² DSC, sesión del día 27 de julio de 1820, número 23, pág. 286.

⁴¹³ DSC, sesión del día 27 de julio de 1820, número 23, pág. 288.

⁴¹⁴ DSC, sesión del día 27 de julio de 1820, número 23, págs. 289 y 290.

Alcanzada la prohibición en la importación de trigo, mediante dos nuevos artículos la Comisión de Agricultura estableció unos días más tarde la posibilidad de exportar “toda clase de granos por los puertos”. La desproporción entre importaciones y exportaciones debía permitir a los propietarios y labradores el almacenamiento de grano durante las épocas de malas cosechas, además de permitir su exportación en el momento que los precios en los mercados internacionales crecieran⁴¹⁵. Con esta actitud, los grandes propietarios del país creían haber ganado una batalla importante. Sin oposición y aprobada la adición al articulado sin apenas discusión, inteligentemente se había elegido una alternativa que pretendía originar un rápido crecimiento en los precios. Era obvio, que los postulados a los que se iba a someter al nuevo Estado liberal contradecían los principios generales que habían sostenido hasta ese momento el recién estrenado Gobierno constitucional. El mismo Argüelles iba a proclamar que la protección que el Gobierno acaba de dar al proteccionismo era una cuestión adversa⁴¹⁶.

Hay otro asunto que convendría recordar. Una solicitud para importar trigo realizada a las comisiones de Comercio y Agricultura por varios comerciantes barceloneses fue rechazada, a pesar de que las negociaciones sobre la importación se habían desarrollado antes de la prohibición⁴¹⁷. Era evidente que las Cortes no habían necesitado un estudio profundo sobre la situación de los mercados, tal y como algún diputado había solicitado durante los debates. Como afirma el profesor Montañés, la prohibición fue derivada de la presión de los propietarios y arrendatarios con el propósito de obstaculizar la caída de los precios en los mercados del litoral andaluz. No fue posible reunir datos relativos a las series de precios⁴¹⁸. Tampoco los que podrían haber determinado la verdadera situación del abastecimiento, especialmente de trigo, en los puertos españoles, etc., lo que nos deja una idea de la pujanza de la clase propietaria, antes incluso de la proliferación de

⁴¹⁵ DSC, sesión del día 31 de julio de 1820, número 27, págs. 346 y 347.

⁴¹⁶ En concreto, Argüelles argumentaba así su explicación: “Las personas ilustradas saben que la proteccion que el Gobierno debe á la agricultura y á la industria es mas bien negativa que positiva: que su accion debe limitarse á remover estorbos, á hacer respetar la propiedad, dejar obrar libremente al interes individual, causa harto mas eficaz que todos los estímulos que puede suministrar el favor del Gobierno. Esta máximas dirigieron la formacion de los sabios decretos de las Córtes acerca de la materia, y han dirigido tambien al Gobierno actual para restablecer los mas notables por su influjo en la prosperidad de la agricultura, de la ganadería y de las artes”. Véase el *Apéndice al Diario de Cortes. Número 1º. Memoria leída a las Cortes por el Señor Secretario del Despacho de Estado en la sesión de 11 de julio de 1820*, Imprenta Nacional, Madrid, 1820. pág. 28.

⁴¹⁷ DSC, sesión del día 20 de octubre de 1820, número 108, pág. 1808 y 1809.

⁴¹⁸ Montañés, Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 36.

sociedades específicas para el proteccionismo triguero, surgidas a partir de los años cincuenta del siglo XIX.

Los aspectos sobre los precios del trigo en los mercados de los puertos andaluces estuvieron durante mucho tiempo en el punto de mira de propietarios productores, comerciantes y políticos. A comienzos del siglo XIX, Cádiz era considerado uno de los principales accesos de entrada para los cereales y harinas extranjeros, en particular de los productos llegados de Ucrania, norte de África o del sur de Italia, artículos que llegaban al puerto gaditano y desde ahí se comercializaban al resto de núcleos de la Bahía. Todo ello minimizaba los mercados de trigo de Jerez y Sevilla, lo que suponía que el propio núcleo gaditano funcionara como un auténtico redistribuidor de cereales importados⁴¹⁹.

Desde su cargo como Secretario del Despacho de la Gobernación, nuevamente Argüelles tuvo que reconocer en el año 1820 la limitada fiabilidad que existía en España en relación con la producción y el consumo de cereales. A pesar de no contar con los datos necesarios para medir el impacto que suponían los trigos extranjeros, Argüelles no dejaba dudas sobre la necesidad de importar granos debido a la insuficiencia en la producción nacional de cereales. Él mismo aportaba los siguientes datos reveladores:

Todavía es mas facil oscurecer la verdad cuando se trata de la riqueza de un Estado. El año de 1799, segun las relaciones de aquel tiempo, se cogieron en la Península é islas adyacentes 60.000,000 de fanegas de trigo, centeno y cebada, y en el de 1818 solo se han cogido 51.000,000 de fanegas de los mismos granos, segun los estados remitidos de las provincias, á pesar de haber sido generalmente la cosecha abundante. Separados 6.000,000 de fanegas para la siembra, solo quedaron 45 para el consumo; siendo asi que, segun las relaciones de los Intendentes, se consumen al año 49, y que no puede haber gran diferencia entre el trigo que se introduce por la costa de levante, y el que se extrae por las fronteras de poniente. Todos los indicios son de que estamos todavía muy distantes de poseer los datos verdaderos en este punto; aunque siempre puede decirse que de 20 años á esta parte han

⁴¹⁹ Martínez Ruiz, José Ignacio (2005), ob. cit., pág. 60.

bajado considerablemente los productos de nuestra agricultura, tanto en el ramo de granos, como en otros de los mas importantes⁴²⁰.

Acudir a las importaciones, de acuerdo a las fluctuaciones de las cosechas, se había convertido en una necesidad ineludible, ya que las mismas resultaban indispensables en las poblaciones deficitarias del litoral mediterráneo. Con la aprobación de la medida prohibicionista de las Cortes, la importación se facultaba a partir del precio regulador de 80 reales por fanega. Más allá de este precio, la realidad era que la protección del trigo podía llegar hasta el 85 por ciento. Un umbral que podía superarse en épocas de malas cosechas y que se acercaba a la protección efectiva del 70 por ciento; cifra que en esos mismos años tenían algunos países como Gran Bretaña⁴²¹.

En definitiva, la política restrictiva adoptada para los cereales extranjeros formó parte de las aspiraciones liberales donde debían insertarse también la disolución de señoríos o la desamortización, entre otras medidas, con el fin de estabilizar la Hacienda e incorporar a los propietarios de tierras al nuevo proyecto político del liberalismo español. Era más que evidente que mediante la protección se podían garantizar unos beneficios superiores, debido a la oferta insuficiente que se produciría en los mercados del litoral peninsular. La falta de entrada de granos reorganizaría el sector agrario e incrementaría la presión fiscal sobre la producción en el campo. De esta forma, y gracias a la prohibición, se conseguía un mecanismo capaz de contrarrestar la mencionada carga fiscal⁴²².

Como muy pocos adheridos al recién inaugurado régimen liberal ignoraban, las limitaciones impuestas al trigo añadía una lista de

⁴²⁰ *Apéndice al Diario de Cortes. Número 1º. Memoria leída a las Cortes por el Señor Secretario del Despacho de Estado en la sesión de 11 de julio de 1820*, ob. cit., pág. 39. En este mismo sentido, Gonzalo Anes calculó para el año 1799 un déficit de más de 22 millones de fanegas. Véase de Anes, Gonzalo, "La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas", en Schwartz (ed.), *Ensayos sobre la economía española a mediados del siglo XIX*, Ariel, Madrid, pág. 258.

⁴²¹ Generalmente suele tomarse para el cálculo del porcentaje la diferencia entre el precio regulador y el precio del cereal en los mercados de la costa. Sobre este tema en particular puede consultarse de H. O'Rourke, Kevin y G. Williamson, Jeffrey, *Globalización e historia. La evolución de una economía atlántica del siglo XIX*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, pág. 62.

⁴²² El incremento de la presión fiscal sobre la agricultura durante el Trienio Liberal puede consultarse en Moral Ruiz, Joaquín del (1975), ob. cit. pág. 102.

dificultades a las ciudades repartidas por todo el litoral. A cambio, el Gobierno pensó obtener así la integración de la mayoría de sectores agrarios en el régimen representativo. Este argumento, unido al interés que mostraban algunos sectores del interior sobre la posibilidad de extender las prohibiciones a determinadas actividades manufactureras, llevó a las Cortes a plantear un nuevo reto que agudizara el prohibicionismo recientemente aprobado. El Trienio, de esta forma, acometía un ambicioso proyecto. Un propósito que se concretaría, solo unos meses más tarde, en una ley general de aranceles.

- El problema del trigo en Cataluña

Si bien el problema en Andalucía y las regiones castellanas parecía resuelto, uno de los aspectos que más había preocupado era la situación del trigo y sus productores en Cataluña. En efecto, los propietarios catalanes no habían permanecido al margen en las discusiones sobre la prohibición durante el verano de 1820. La producción cerealista en Cataluña durante el Trienio seguía siendo insuficiente, aproximadamente unos 780.000 hectolitros, lo que suponía menos de la mitad necesaria para asegurar la alimentación esencial de una población dependiente básicamente del trigo. El problema, como sucediera en el resto de España, era debido a la limitada articulación del mercado interior, a lo que había que añadir una carencia importante en la comercialización de la agricultura, salvo contadas excepciones repartidas por todo el país⁴²³.

Ya conocemos que el déficit en el volumen de la producción de cereales en España venía exigiendo desde el siglo XVIII el complemento de granos traídos desde el exterior. Al mismo tiempo, los precios en los mercados próximos a los puertos marítimos, fue hasta bien entrado el siglo XIX siempre inferior al que podía encontrarse en el interior del país. Toda esta situación se acentuó en las provincias de Cataluña, sobre todo con el crecimiento urbano de Barcelona, lo que forzó a realizar compras intensivas, tanto de cereales como de alimentos en el mercado internacional, hecho que

⁴²³ Moral Ruiz, Joaquín del, “Sociedades secretas «Apostólicas» y partidas «Realistas» en el Trienio Constitucional (1830-1823)”, Varios autores, *Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973, pág. 29.

comportó el refuerzo de un desarrollo económico asentado en unas relaciones con el exterior más extendidas, a la vez que complejas⁴²⁴.

Es sabido, igualmente, que la libre importación influyó notablemente en el desarrollo mercantil catalán, lo que permitió un sostenimiento del crecimiento en la población desde el siglo XVIII. Población que implicaba contingentes importantes de mano de obra y un considerable transvase de efectivos desde el campo hacia la industria, lo que hacía posible también el mantenimiento de unos salarios con posibilidades de inversión en la práctica totalidad de los sectores económicos de la región⁴²⁵.

Precisamente, desde la finalización de la guerra contra Francia hasta aproximadamente el comienzo del Trienio Liberal, las importaciones de trigo y cereales fueron un elemento clave en la economía catalana al permitir canalizar otros productos del mercado colonial, principalmente azúcar y café, hacia otros puertos mediterráneos. De hecho, los cereales de origen nacional no sobrepasaban el 18 por ciento, mientras que los trigos extranjeros que llegaban al puerto de Barcelona, alrededor de la mitad procedían del Atlántico y un 30 por ciento de Italia⁴²⁶.

La disyuntiva en Cataluña, entre productores de trigo e importadores, comenzó a variar alrededor del año 1818, coincidiendo con la buena cosecha de ese mismo año y el inicio de la bajada de los precios agrícolas, situación que se prolongaría en las décadas siguientes. Esa caída en los valores del trigo supuso el interés de propietarios castellanos y andaluces para adoptar medidas que protegieran la pérdida de ingresos. La Real Orden del 14 de junio de 1819 había sido un primer éxito al gravar con 6 y 12 reales el quintal de trigo foráneo, según llegara a puerto con bandera nacional o extranjera. Todo ello daría lugar, como ya sabemos, al prohibicionismo cerealícola, convirtiéndose en uno de los ejes de la política económica para los distintos gobiernos que se sucederían hasta casi finalizado el siglo XIX⁴²⁷.

⁴²⁴ Entre todos los trabajos que han realizado respecto a la evolución de los mercados en Cataluña, es muy significativo el artículo de Garrabou, Ramon, "Sobre la formació del mercat català en el Segle XVIII. Una primera aproximació a base dels preus dels grans a Tàrrrega (1732-1811)", en *Recerques*, número 1, 1970, págs. 83 a 121.

⁴²⁵ Fradera, Josep M. (1984), ob. cit., págs. 140 y 141.

⁴²⁶ Ibídem, págs. 143 y 144.

⁴²⁷ Sánchez Albornoz, Nicolás (1963), ob. cit., pág. 16.

Un año antes de la prohibición aprobada por las Cortes, la Junta de Comercio del Principado había solicitado una subida en los derechos de entrada para el trigo y la harina⁴²⁸. En aquella ocasión se aludió al «infeliz estado» en el que se hallaba la agricultura en la provincia por la abundante cantidad de trigo que estaba introduciéndose desde diversos puertos de Levante⁴²⁹. En enero de 1820 un importante grupo de importadores se dirigió a la Junta con el propósito de desaprobando los recargos con los que se estaba gravando a los cereales extranjeros. Desde luego, la Junta de Comercio acabó por reflejar las preocupaciones de los productores, antes que de cualquier otro colectivo, insistiendo en la necesidad de proteger a los grandes propietarios catalanes como el barón de Castellet o Ramón de Bacardí⁴³⁰.

Desde el *Diario de Barcelona* se comenzaron a verter opiniones de ambos lados, unas veces a favor del proteccionismo, otras de la libre entrada de cereales. Para algunos, la suspensión de las importaciones implicaba una mejora sustancial de las condiciones en los mercados nacionales, en particular los del interior⁴³¹. Sin embargo, no eran pocos quienes alegaban que la situación anterior a la prohibición de 1820 ya suponía una traba importante a la importación, por lo que todo lo aprobado después supondría un deterioro evidente a la economía de la región⁴³².

La aparente provisionalidad del Decreto de prohibición determinó en una gran parte de la burguesía en Cataluña una moderación en las posibles reacciones contra el mismo. Esta idea de vacilación entre las clases más acomodadas catalanas frente a la política de las Cortes se ha interpretado como una imposición, lo que explica el silencio durante muchas de las sesiones y debates del discutido proyecto. Salvo la excepción del diputado y comerciante de Tarragona Guillermo Oliver, la posición de los representantes

⁴²⁸ La Junta se había creado con el nombre de *Real Junta Particular de Comercio de Barcelona* en el año 1758. En 1847 sus funciones serán asumidas por la *Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio*.

⁴²⁹ Fradera, Josep M. (1984), ob. cit., pág. 151.

⁴³⁰ La preocupación económica en Cataluña durante la primera mitad del siglo XIX ha sido estudiada por Lluch, Ernest, *El pensament econonòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana*, Edicions 62, Barcelona, 1973.

⁴³¹ *Diario de Barcelona*, 21 de julio de 1820.

⁴³² La prohibición de importar trigo y harina aprobada en Madrid era vista por muchos críticos como una postura «antieconómica» que solamente beneficiaría a unos pocos productores en detrimento del mayor número de consumidores. Véase el artículo publicado por M.J.P., en el *Diario de Barcelona*, 11 de agosto de 1820.

de la clase política y económica en Cataluña frente al prohibicionismo triguero fue de una extraordinaria ambigüedad⁴³³. En palabras de Josep María Fradera: “ni mostraron frente a él discrepancias radicales, ni ofrecieron soluciones alternativas”⁴³⁴.

Se ha argumentado que la falta de opciones a la política sobre los cereales de 1820 se debió, entre otros factores, a la necesidad que existía de alterar las relaciones con el mercado interior, incluso al propio agotamiento del modelo en las relaciones exteriores con el Mediterráneo y con los territorios de Ultramar. A todo ello restaría por sumar el interés que había comenzado a extenderse sobre la necesidad de incorporar al prohibicionismo triguero, otro dirigido a tutelar los intereses de la industria de Cataluña.

- El Arancel General de 1820 y la reacción absolutista a partir de 1823

Acabada la disputa sobre el trigo se iniciaron los trámites para aprobar una ley de aranceles. El Secretario de Estado de Hacienda, José Canga Argüelles, presentó en las Cortes el proyecto que había preparado la Junta de Aranceles en el que estaban plasmados los nuevos argumentos que debían regir la organización de las aduanas. Argüelles preludiaba una aspiración sobre la que planeaban serias dudas acerca de las posibilidades que tenía para mejorar la economía nacional⁴³⁵.

Por primera vez se disponía de un proyecto que pretendía un arancel único para todos los territorios, incluidos las regiones coloniales, con la obligación de proceder a su revisión cada año. Se añadían al articulado aspectos como la simplificación en la clasificación sobre los productos o la implantación de la libre circulación por las provincias interiores del país de

⁴³³ Las intervenciones del diputado Oliver tenían como base económica que “la riqueza de un país consistía en no admitir del extranjero, y sacar de lo propio cuanto se podía”. Véase *DSC*, sesión del día 18 de junio de 1820, número 14, pág. 195.

⁴³⁴ Fradera, Josep M. (1984), ob. cit., pág. 155.

⁴³⁵ En la Memoria presentada a las Cortes podía leerse lo siguiente: “¿Y acaso con las leyes prohibitivas hemos logrado la abundancia? ¿Crecen el número de los labradores, las cosechas de granos y el valor de los terrenos cultivados? Por el contrario, éste va en disminucion, como lo convencen los despoblados y los baldíos. El censo último solo nos da 871.937 labradores en 11 millones de habitantes; y no pasando la cosecha de granos de 68.691.772 fanegas, se necesitan traer del extranjero cantidades muy considerables”. Extraído del *DSC*, sesión del día 13 de julio de 1820, Apéndice al número 9, pág. 110.

aquéllos que recalaran por las aduanas. Pero la reorganización que se pretendía de éstas no gustó a los diputados con intereses en las colonias americanas.

En efecto, en su intervención, el diputado por Cuba José Benítez alegó a este respecto lo siguiente: “Señor, se trata de un reglamento de aranceles, y yo veo que este proyecto es un reglamento de comercio, no de aranceles”. Más adelante aseguraba: “En la isla de Cuba el comercio es libre en el día para importar y exportar extranjeros y nacionales, y el proyecto de la comisión á lo que camina es á limitar este comercio á buques nacionales solo”⁴³⁶. Con todo, el proyecto iba a ser aprobado con escasas modificaciones⁴³⁷.

Frente a los comerciantes gaditanos que solicitaban una liberalización del comercio exterior, fueron apareciendo multitud de colectivos, ayuntamientos y Administraciones de todo el país solicitando una ampliación del sistema de prohibición. Algunas de estas peticiones estaban referidas, entre otros productos, al carbón, a la seda e incluso a la loza extranjera⁴³⁸. También desde Cádiz se habían solicitado prohibiciones a la Comisión de Agricultura, Industria y Artes. En concreto, ebanistas y carpinteros, cuyo interés estaba en impedir la entrada de cualquier obra extranjera de ebanistería y carpintería⁴³⁹.

Las demandas para liberalizar el comercio español se presentaron a través de una *Memoria* redactada por un grupo de comerciantes de Cádiz⁴⁴⁰.

⁴³⁶ DSC, sesión del día 16 de septiembre de 1820, número 74, pág. 1.064.

⁴³⁷ Montañés, Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 40.

⁴³⁸ Se recibieron en la Comisión de Agricultura, Industria y Artes multitud de peticiones. Algunas de las más significativas se hicieron desde Valencia, en concreto desde el municipio de Alcora, para solicitar la prohibición de loza extranjera, en DSC, sesión del día 29 de septiembre de 1820, número 87, pág. 1.303; desde la provincia de Valencia, una representación de 20 fabricantes y comerciantes de seda envió a las Cortes otra solicitud intentando la prohibición en la introducción de tejidos realizados con dicho artículo, en DSC, sesión del día 1 de octubre de 1820, número 89, pág. 1.338. También desde Gijón, otra representación de comerciantes intentaba evitar la entrada de carbón de piedra por los puertos españoles, recogido en el DSC, sesión del día 4 de octubre de 1820, número 92, pág. 1.397. Incluso, se realizaron peticiones por 15 fabricantes de fideos de Cádiz para que, además del trigo y de la harina extranjeros, se prohibiera también “la de fideos y pastas en la Península y América, para el fomento de esta clase de industria”, véase el DSC, sesión del día 5 de octubre de 1820, número 93, pág. 1.415.

⁴³⁹ DSC, sesión del día 29 de septiembre de 1820, número 87, pág. 1.303.

⁴⁴⁰ En el escrito se advertía que “Si no se alzan estas prohibiciones, y si no se modifican los derechos, por creer que así se favorece á nuestra agricultura y fábricas, seguiremos

En los debates sobre el proyecto, fue el propio conde de Toreno el que advirtió sobre el peligro que existía de encontrarse frente a posibles monopolios que impedirían el total desarrollo de las fábricas del país. Mucho más firme fue la actuación de Flórez Estrada. La dureza de su discurso, en contra de la prolongación del sistema prohibicionista, quedaba patente en la siguiente exposición:

Las comisiones de Agricultura y Comercio, á las que asistí con mucha repugnancia mía, convinieron en que esta ley debia ser únicamente extensiva hasta el día 1º de Marzo del año próximo: esto no es decir que el Congreso haya establecido leyes prohibitivas, y bajo este pié debemos caminar. Con mucho trabajo he firmado este dictamen, lo cual hice más por condescender con la preocupación general que por otra cosa, y no hay razón para decir que el Congreso por haber tomado aquella medida temporal ha establecido una base, porque no hay tal base, y aun se podia remediar si se creyese que las Córtes se habian equivocado⁴⁴¹.

También el diputado Martínez de la Rosa entendió las dificultades que entrañaban unas propuestas tan estrictas. Matizó las diferencias que habían existido respecto a los planteamientos que habían llevado con anterioridad a aprobar las restricciones de cereales extranjeros. Para algunos políticos catalanes, la cuestión primordial era extender la prohibición que se había aplicado a los cereales, prestando atención a las peticiones que se estaban haciendo en otras provincias. Guillermo Oliver solicitaba la necesidad de dar los pasos necesarios y no exponer a la industria nacional⁴⁴². No obstante, en opinión de Martínez de la Rosa, pensar que un prohibicionismo tan exagerado podría acrecentar el desarrollo económico en España era una ingenuidad. Como respuesta al diputado catalán Oliver, Martínez de la Rosa optó por explicarse, aludiendo que:

El Sr. Oliver ha querido sacar ventajas de la resolución de las Córtes en que prohibieron la importacion en España de granos extranjeros; pero ¿es igual esta resolución temporal cuyos efectos están reducidos á un corto término, á una ley tan general y tan absoluta, que yo desafío al Sr. Oliver á que me cite

esperimentando los mismos males que hasta ahora han ocasionado las desgracias del comercio español, y la prosperidad de los estrangeros”, en la *Memoria sobre los males que sufre el comercio español y medios de repararlos. Escrita y dirigida á las Córtes por una Comisión del comercio de Cádiz, Imprenta de Roquero, Cádiz, 1820*, págs. 226 y 227.

⁴⁴¹ DSC, sesión del día 24 de octubre de 1820, número 112, pág. 1.877.

⁴⁴² DSC, sesión del día 24 de octubre de 1820, número 112, pág. 1.876, y DSC, sesión del día 24 de octubre de 1820, número 112, págs. 1.879 y 1.880.

una nación que tenga otra igual? Respecto a los granos, las Córtes tuvieron muchas y muy fundadas razones para aprobar esa prohibición: tuvieron en consideración el estado de nuestra agricultura, la multitud de productos y su absoluto desprecio, de manera que anegaba a la Nación, á la clase agricultora⁴⁴³.

Lo que parece evidente es que tanto propietarios agrícolas, sobre todo de las zonas castellanas y andaluzas, como industriales catalanes, protagonizaron ya en el año 1820 un esfuerzo considerable para representar un papel de unidad ante un interés obvio como lo era la protección frente a países del exterior. Las propuestas de las comisiones de Hacienda y Comercio se sucedieron de forma casi continua para establecer una extensa lista de artículos cuya importación iba a ser prohibida⁴⁴⁴. Apenas hubo debate, excepción hecha del diputado catalán Juan Valle. Su intervención fue para aseverar que los grupos productores exigían el prohibicionismo, toda vez que la política arbitraria de la monarquía, durante las décadas anteriores, había arruinado a la industria algodonera en Cataluña. Valle, como muchos otros representantes, entendían la necesidad que tenía el nuevo régimen por ligar las medidas prohibicionistas al desarrollo de la agricultura y de la industria. De hecho, en una de sus intervenciones llegó a declarar lo siguiente: “El sistema prohibitivo que proponen las comisiones, es el mismo que han promovido y adoptado todas las naciones ilustradas, y con él han llevado su agricultura é industria al grado al grado de perfección en que la vemos”. Más adelante afirmaba: “Si en las provincias de Andalucía, Murcia, Valencia, y especialmente en la de Cataluña, ha prosperado más ó menos la agricultura, este incremento se debe al comercio que sostienen, y á su industria frabril y manufacturera”. Finalizaba el diputado Valle con estas palabras: “Concluyo, pues, este punto recordando á las Córtes la máxima

⁴⁴³ DSC, sesión del día 24 de octubre de 1820, número 112, pág. 1.879.

⁴⁴⁴ Entre la lista tan extensa de manufacturas y otros artículos destacan los de la alimentación que estaban regulados principalmente en el artículo 2º. Éste los describía de la siguiente manera: “Se añadirá á dicha prohibición con especialidad la galleta, el bizcocho de toda clase, el arroz, las patatas, las legumbres, las algarrobas, las pasas, las castañas, los higos, las pastas y hortalizas; las carnes saladas y secas y sus despojos, la manteca, el queso, el sebo y las grasas; los pescados y sus despojos secos y salados; los aguardientes de uvas y de caña; los licores y aceites de toda clase; el azúcar, el cacao, el café, el azafran, la miel y los dulces procedentes del extranjero: exceptuándose por ahora de esta prohibición el bacalao, pezpalo y el vino, que pagarán á su entrada del extranjero el derecho máximo de 30 por 100”, en DSC, sesión del día 29 de octubre de 1820, número 117, pág. 1.965.

justa y política de que lo que conviene á los catalanes, conviene á todos los españoles: la pobreza de Cataluña arruinaría la España”⁴⁴⁵.

Naturalmente la respuesta de los trigueros fue inmediata. Ante la demanda realizada por Valle, el propietario Moreno Guerra se congratulaba de las peticiones catalanas. Guerra, que había sido solo unos meses antes un activo muy importante en las discusiones sobre la protección al trigo, intervino para secundar las propuestas del diputado catalán. La constitución de un bloque entre agraristas e industriales había dejado sin opciones al resto de representantes con distintos intereses, más cercanos al libre comercio, o en cualquier caso partidarios de una reglamentación más permisiva. A pesar de todo, el comercio gaditano tuvo en el diputado Vadillo el último baluarte para intentar defender a los sectores manufactureros. Vadillo expresó la insuficiencia que a nivel nacional existía en nuestra industria. Esta situación le llevó a plantear la aprobación de unos derechos arancelarios que permitieran, además de mantener los mercados, conservar la producción nacional⁴⁴⁶.

La propuesta de Vadillo resultó inútil entre la mayoría prohibicionista del Congreso. Era evidente que a pesar de los intentos y las críticas de algunos grupos de diputados, partidarios de un sistema más próximo al liberalismo económico y con menos trabas para la importación, la mayoría de representantes terminó inclinándose por un tipo de política comercial que favorecía a propietarios agrícolas, labradores e industriales. Como ya vimos, el intento de revalorizar la producción de cereales en España, unido a la necesidad de crear un mercado de exclusividad nacional, propició un especial interés en los debates cuyas perspectivas eran la prohibición de entrada de granos extranjeros en nuestro país. Este antecedente posibilitó la labor legislativa de atender otras demandas prohibicionistas referidas a otros

⁴⁴⁵ DSC, sesión del día 5 de noviembre de 1820, número 124, pág. 2.099.

⁴⁴⁶ En la intervención del diputado José Manuel Vadillo, éste intentó convencer a la Cámara de la imposibilidad de cubrir todas las demandas del país con la producción nacional. En este sentido advertía lo siguiente: “Si, pues, todas estas razones convencen que necesariamente desde luego los españoles, valiéndose de la favorable ocasión que se les presenta, han de procurarse todas las ventajas que ella les ofrece aplicándose a la agricultura, ¿dónde tenemos los brazos indispensables para dar á esta todas las mejoras que es susceptible, y convertirnos repentina y simultáneamente en fabricantes de toda especie de manufacturas de algodón, seda, lana y demás, cuya sola nomenclatura es inmensa, y de algunas de las cuales no tenemos hoy fábrica alguna?”, véase DSC, sesión del día 6 de noviembre de 1820, número 125, pág. 2.121.

productos. Así, lo que había sido una propuesta por parte de un grupo numeroso de labradores andaluces, al margen de un asociacionismo explícito para tal fin, terminó por aunarse a la mayoría de los parlamentarios para aprobar una legislación que favoreciera unos intereses concretos y particulares.

Aprobado el arancel en 1820, un año más tarde se procedió a solicitar la prórroga de la prohibición relativa a la entrada de cereales. En las sesiones de los días 10 y 16 de mayo de 1821, Martínez de la Rosa procedió a leer la proposición que sobre la misma se había realizado, lo que produjo un áspero debate entre el conde de Toreno, el diputado Moreno Guerra y el propio de la Rosa. Para el primero la cuestión no merecía tal debate ya que la prohibición de granos declaraba “quedar subsistente hasta que las Cortes determinasen otra cosa”. Martínez de la Rosa reconoció que, en efecto, el decreto admitía su permanencia, sin embargo, esta duración estaba referida “hasta que otra cosa determinasen las Cortes en la legislatura de 1821”, por lo que era preciso su revisión. Continuaba su exposición con la siguiente observación: “además de que convendría siempre hacer una declaración para que los comerciantes fijasen sus cálculos sobre datos ciertos”⁴⁴⁷. Ante la falta de acuerdo intervino otro diputado catalán en el debate. Joaquín Rey, catedrático en la Universidad de Cervera, expuso que la ley de prohibiciones era posterior, por lo que habría que considerar la normativa relativa a los granos refundida en la que acababa de aprobarse⁴⁴⁸.

A continuación, el diputado Moreno Guerra advirtió a los parlamentarios que la Comisión de Agricultura, ante las reclamaciones de algunos comerciantes de Barcelona, estaba estudiando la posibilidad de hacer extensiva la prohibición a otros productos como eran las habas, judías, así como a otros productos que se producían en tierras de Cataluña⁴⁴⁹. Finalmente, aceptado el carácter permanente del arancel, las discusiones cesaron, no sin que surgieran nuevos problemas que habrían de abordarse durante los siguientes dos años.

Las dificultades para aplicar la normativa sobre Aranceles Generales de 1820 no tardaron en manifestarse dentro de los marcos político y

⁴⁴⁷ DSC, sesión del día 16 de mayo de 1821, número 78, pág. 1632.

⁴⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁴⁹ DSC, sesión del día 16 de mayo de 1821, número 78, pág. 1632 y 1633.

económico que se habían puesto en marcha durante el Trienio. Las protestas desde el otro lado del Atlántico, unidas a las demandas para combatir el contrabando, se fueron evidenciando igual que lo hacían los distintos intereses de los diferentes grupos más compactos dentro de las Cortes. Para Cuba, la nueva reglamentación arancelaria había supuesto un cambio insostenible por lo que se precisaban cambios específicos para la Isla. La propuesta para solicitar un trato diferenciado fue presentada por el representante cubano Benítez y por los diputados de Cádiz Vadillo y Rovira. Aunque desde los asientos del Congreso se escucharon expresiones como «desobediencia» o «privilegio», finalmente, en el transcurso del mes de enero de 1822 se reconoció la excepcionalidad en el comercio de Cuba, estableciéndose unos derechos concretos sobre las mercancías extranjeras, tanto por razones políticas, como fiscales⁴⁵⁰.

Con una política económica tan restrictiva en relación a las importaciones, los comerciantes que dependían del intercambio exterior no aminoraron las presiones. Desde Cádiz, Santander y las provincias vascas se realizaban la mayoría de solicitudes para rebajar los aranceles, con el fin de obtener excepciones que lograran no limitar las actividades comerciales. Siempre con la oposición de los prohibicionistas, los intereses gaditanos se reactivaron una vez que se suspendieron los aranceles en la isla de Cuba. Cádiz necesitaba también mantener un tráfico comercial debido a sus intereses, lo que motivó la presentación de una nueva solicitud a las Cortes para convertir a la ciudad en un puerto franco⁴⁵¹.

La posibilidad de establecer un criterio diferenciador con Cádiz, suponía, según sus defensores, la recuperación de la actividad comercial con América, además de un impulso en el crecimiento de la agricultura y la industria. A este respecto, el diputado Alcalá Galiano declaraba lo siguiente: “solo debe verse si el declarar á Cádiz puerto franco puede ser útil á la

⁴⁵⁰ No hay que olvidar que Cuba resultaba esencial para el mantenimiento de los ingresos de la Hacienda en la Isla, puesto que las rentas obtenidas de las aduanas suponían la fuente más importante de recaudación. Las observaciones de Benítez en el *DSC*, sesión del día 28 de junio de 1821, número 121, pág. 2.583. En la intervención del diputado por Soria, Ramón Sánchez Salvador, éste manifestó su disconformidad con la propuesta específica para Cuba alegando que “sería autorizar la desobediencia que la ley ha experimentado de parte de los habitantes de la isla de Cuba, lo cual sería un ejemplo muy funesto”. Asimismo, consideró la medida un privilegio. Véase *DSC*, sesión del día 28 de junio de 1821, número 121, pág. 2.605.

⁴⁵¹ La propuesta de la Diputación de Cádiz en *DSC*, sesión del día 28 de marzo de 1822, número 39, pág. 605.

Nacion entera; si el dar salida á los frutos que se pudren en Andalucía por falta de extraccion, lo cual se conseguiria indudablemente con esa medida, es un bien; si lo es el trasladar á Cádiz muchas de las ventajas que goza Gibraltar”⁴⁵².

Obviamente, la solicitud gaditana produjo un reguero de peticiones similares para otros puertos entre los que destacaban San Sebastián o Santander. Lo cierto es que la propuesta finalmente llegó al Parlamento. En su defensa actuaron el propio Alcalá Galiano, el diputado y miembro de la Diputación Provincial de Cádiz Joaquín Abreu Orta, así como Pedro Juan de Zulueta, que en aquellos instantes ocupaba un puesto en la Comisión de Hacienda. Las discusiones dieron comienzo a principios del verano de 1822. Se solicitaron nuevos informes sobre los sectores que podrían verse afectados, lo que no era sino una maniobra más para reforzar el régimen prohibicionista que poco tiempo atrás se había aprobado⁴⁵³.

La realidad era que el arancel no estaba aportando a la Hacienda todo lo que se había esperado desde que éste se aprobara. En la *Memoria* sobre el estado de la Hacienda pública presentada a las Cortes por Felipe Sierra Pambley, Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda, se reconocía el poco o ningún avance experimentado con la nueva política arancelaria. La renta de aduanas había descendido y el contrabando era más evidente cada día, consecuencia de los pocos medios disuasorios que tenía el país en esos momentos. Pambley reflejaba las cuentas relativas al año 1822 de la siguiente manera: “Es de temer que en el año corriente no lleguen los valores de la de aduanas á la suma obtenida en el de 1821, si se atiende al lastimoso estado en que se ve el comercio nacional, á la reducción que han experimentado nuestras relaciones con las provincias ultramarinas, y á los obstáculos que desgraciadamente se oponen á la navegación de nuestra marina mercante”⁴⁵⁴.

⁴⁵² DSC, sesión del día 28 de marzo de 1822, número 39, pág. 606.

⁴⁵³ No extraña que el diputado Torres pidiera, por ejemplo, informes a distintos órganos económicos y administrativos. Entre ellos estaban las Diputaciones provinciales, intendentes, consulados y Juntas de Comercio en todas las provincias. Véase el DSC, sesión del día 29 de junio de 1822, número 166, pág. 2.253.

⁴⁵⁴ *Memoria leída á las Córtes por el Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda* en DSC, sesión del día 5 de marzo de 1822, Apéndice al número 11, pág. 157.

Con los precios en los mercados a la baja y unos productos nacionales que apenas sí podían beneficiarse del régimen de prohibiciones, se evidenciaba una reforma en el sistema, que casi puede decirse era una urgencia. En el punto 5º del informe leído por el Secretario de Estado se advertía:

Que se reduzcan las prohibiciones de entrada á lo que exija nuestra situación presente, y se disminuyan además los derechos, á imitación de lo que han ejecutado las Córtes extraordinarias en el artículo de lencería, sin que exceda el máximun en bandera nacional del 24 por 100, ni el 30 en bandera extranjera. La meditación del Congreso se ocupará en un punto tan árduo y trascendental como el presente, teniendo en consideración las poderosas razones con que los defensores y los impugnadores de sistema prohibitivo le ensalzan y le combaten. Las manufacturas de que carecemos del todo, ó que no poseemos tan perfectas como los extranjeros, no han de crearse ó perfeccionarse con solo prohibirlas⁴⁵⁵.

En todo el articulado, nada se apreciaba en relación al trigo o los cereales. Lo cual, suponía un nuevo golpe de mano de los grupos que habían defendido la producción y los beneficios agrícolas. Si con anterioridad en Cataluña se había vivido una especial preocupación por consolidar la política proteccionista, lo cierto es que durante los años 1821 a 1827, el peso del transporte procedente del extranjero continuó siendo determinante en todas las provincias. Además, los cereales provenientes de la periferia mediterránea destacaron de una manera especial durante el período de prohibición en las importaciones. El cabotaje a lo largo de la costa en el Mediterráneo, aunque de forma fraccionada, supuso un volumen importante en los mercados y en los movimientos de cereales y legumbres hacia Cataluña⁴⁵⁶. De la misma forma tuvieron su significación los mercados clandestinos con origen en Génova y Marsella, lo que no quita importancia a los trigos y las harinas producidos en España. En este sentido, parece que en los años posteriores a 1820, en efecto, comenzaron a llegar al litoral catalán un considerable número de fanegas procedentes de la producción del interior peninsular. Cantidad que sería mucho más significativa a partir de los años treinta del siglo XIX⁴⁵⁷.

⁴⁵⁵ DSC, sesión del día 5 de marzo de 1822, Apéndice al número 11, pág. 158.

⁴⁵⁶ Fradera, Josep M. (1984), ob. cit., págs. 165 y 166.

⁴⁵⁷ Pueden consultarse las tablas con la media anual en Figuerola, Laureano, *Estadística de Barcelona en 1849*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1968.

Con la entrada del ejército francés al mando de Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, en abril de 1823, se iba a poner fin al Trienio Constitucional. Tras el fraudulento Tratado de Verona en 1822, el absolutismo volvería a ocupar diez años de la vida española, estableciéndose un período de continuas represiones⁴⁵⁸. A la huida de muchos liberales hacia otros países como Inglaterra, Francia o las nuevas colonias americanas, le acompañó un largo tiempo de ejecuciones públicas, como la de Rafael del Riego, Mariana Pineda o Antonio Miyar. A todo ello vino a añadirse una fuerte censura en la prensa y varios intentos de levantamientos sofocados como la de Torrijos o la Expedición de los Coloraos.

Tal y como había sucedido durante el Trienio, en relación a la escisión de liberales entre los llamados «moderados» y «exaltados», también durante los años correspondientes al absolutismo férreo se producirán entre sus seguidores diferentes desuniones entre los «reformistas» y «apostólicos». Esta nueva situación quebró el régimen de representatividad por lo que también quedó anulado el mecanismo que debía revisar y debatir el marco arancelario que se había aprobado poco tiempo atrás. Sin embargo, las primeras intenciones que habían sugerido la vuelta atrás en relación a la legislación prohibicionista no tardaron en ser rectificadas.

Para seguir manteniendo el apoyo social y una legitimidad política que podía quedar en entredicho, los gobiernos de la Década Ominosa hubieron de prestar su aquiescencia con parte de la legislación que se había aprobado en 1820. Una Real Orden iba a restablecer la vigencia de otra anterior que disponía una serie de derechos a la importación de trigos y harinas⁴⁵⁹. Un año más tarde, el 17 de febrero de 1824, volvía a prohibirse la importación de granos, harinas y legumbres en España, al mismo tiempo que se declaraba libre el tráfico interior y el de cabotaje con bandera nacional⁴⁶⁰.

⁴⁵⁸ Torre del Río, Rosario de la, “El falso tratado secreto de Verona de 1822”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Volumen 33, año 2011, págs. 277 a 293.

⁴⁵⁹ “Real Orden circular, por la que se confirma la de 7 de Marzo de 1820 sobre la facultad de extraer del Reino los granos y semillas con absoluta libertad de derechos, pagando lo que procedan de extranjero á su introduccion los que en la misma se designan”, en Martín de Balmaceda, Fermín, *Decretos y Resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por su Magestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, comprensivo al año de 1823*, Tomo VII, Imprenta Real, Madrid, 1824, págs. 193 y 194.

⁴⁶⁰ “Real Orden prohibiendo la introduccion de granos, harinas y legumbres del extranjero en la Península, exceptuando por ahora las islas de Baleares y Canarias”, en Nieva, José María de, *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones*

Se ha visto en esta actitud un gesto de debilidad ante la fuerte oposición liberal y las conspiraciones, en un momento en el que el propio monarca amenazaba con expeler la obra legislativa del Trienio. Lo cierto es que se necesitaba una mayoría social que pudiera dar un matiz de legitimación al nuevo régimen absolutista y en ese escenario los aranceles iban a detentar un importante papel en la acción política. Además, tampoco había indicios para que se modificara el pacto entre el sector agrario y el manufacturero. La particular idiosincrasia del nuevo régimen no podía ni debía ignorar a quienes podían ser los sustentadores del mismo, cuestión por la que no tardó en ser reintroducida una nueva legislación restrictiva con las importaciones.

Ante el proceso deflacionista que vivía la economía, la posición del absolutismo fue casi una copia del que había sido durante el Trienio Liberal. En primer lugar se restableció la prohibición en la importación de cereales durante 1824, y un año después se promulgó un arancel general siguiendo los cauces proteccionistas⁴⁶¹. En cualquier caso, podría decirse que lo que se acometió no fue sino un «calco» de lo aprobado en 1820, con las diferencias que se referían al comercio con las antiguas colonias, difíciles de regular en aquellos años, y especificando la singularidad de Cuba que continuaba bajo una apreciable libertad de comercio.

El arancel de 1825 mantenía la prohibición respecto al trigo exterior, la harina o el pan, además de otros cereales y leguminosas. La inmensa lista de más de dos mil artículos impedidos para su importación suponía un considerable reconocimiento a los productores agrícolas, así como a los industriales al incluir en la prohibición abundantes productos metalúrgicos. Con este panorama, el resultado no era mejor que en el pasado. Los comerciantes continuaron limitados en sus actividades y la administración de las aduanas tampoco mejoró la ineficacia de años anteriores. A todo ello, se añadía un contrabando en alza y unos sectores ya protegidos, pero que reclamaban aun una mayor contundencia por parte del Estado⁴⁶².

y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. en los seis meses contados desde 1º de enero hasta fin de junio de 1824, Tomo octavo, Imprenta Real, Madrid, 1824, págs. 205 y 206.

⁴⁶¹ Nos referimos al *Real arancel general de entrada de frutos, géneros y efectos del extranjero, para gobierno de las Aduanas del Reyno*, Imprenta Real, Madrid, 1825.

⁴⁶² Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 59.

Sin la posibilidad de que nuevas disposiciones fueran discutidas en las Cortes y con la insatisfacción de importantes sectores con el arancel de 1825, lo cierto es que hubo que proceder a modificar la legislación aprobada poco tiempo atrás. Las primeras iniciativas surgieron desde la Hacienda pública que seguía manteniendo una situación delicada. Ante la escasez y el elevado precio que estaban alcanzando algunos productos en el litoral levantino y andaluz, el Gobierno aceptó la importación de trigo, hecho que supuso un aumento inmediato en la recaudación sobre los derechos del mismo⁴⁶³.

Aunque suprimidos los mecanismos que pudieran alcanzar un pacto arancelario, tal como sucediera en el Trienio, la crisis de la Hacienda en España facilitó nuevamente una política económica contradictoria que aplicaba concesiones y privilegios, con insistentes rectificaciones en los aranceles pero que, al mismo tiempo, satisfacían al sector comercial e industrial⁴⁶⁴. Junto a estas medidas, Fernando VII mantuvo la libertad de comercio en Cuba, tal como se había aprobado durante el gobierno liberal.

Con respecto a la cuestión cubana, ésta originó desavenencias entre grupos económicos cubanos y una amplia representación formada principalmente por agricultores y harineros castellanos. Estos últimos hacía tiempo que ambicionaban controlar el mercado de harinas en la Isla, lo que había provocado en más de una ocasión la petición al Gobierno de la nación del establecimiento de unos altos derechos sobre las harinas de procedencia norteamericana. Una idea que contrastaba con el interés que se tenía en Cuba por reducir los aranceles sobre las harinas extranjeras, con lo que se podía garantizar el suministro y la reducción de costes en el interior.

Como quiera que sea, hacia el año 1824 ya se había conseguido un incremento en los impuestos sobre las harinas extranjeras que llegaban a Cuba. A partir de 1828 se optó por conceder a los comerciantes cubanos un trato preferencial respecto a los productores españoles. En consecuencia, los

⁴⁶³ El gobierno autorizó, en efecto, la importación de cereales extranjeros en el año 1825 en las ciudades de Cádiz, Sevilla, Málaga y Almería. Se aplicaba de esta forma la ley que admitía la importación cuando los precios en los mercados del litoral español superaran los 80 reales por fanega. Véase en Montañés Primicia, Enrique (2005), ob. cit., pág. 221.

⁴⁶⁴ Joseph Maria Fradera se ha referido a la alteración del arancel, entre los años 1825 y 1838, que llegó a superar el centenar. Los datos están recogidos en Fradera, Josep Maria, *Indústria i mercat: les bases comercials de la indústria catalana moderna (1814-1845)*, Crítica, Barcelona, 1987, pág. 188.

aranceles aplicados a las harinas extranjeras aumentaron mientras se redujeron los relativos a las que procedían de los territorios españoles. Este régimen de protección aplicado a las harinas de nuestro país siguió siendo muy elevado, situándose, en opinión de Moreno Lázaro, por encima del 80 por ciento. Hecho que llevó a incrementar la cuota de mercado en toda la Isla⁴⁶⁵.

Debe señalarse que desde el comienzo de las políticas proteccionistas y las pérdidas de territorios coloniales se estaba produciendo una paulatina caída en el volumen de intercambios entre nuestro país y el exterior (véase el cuadro 12). De este modo, mientras los intereses particulares de un buen número de propietarios agrícolas y de industriales se habían visto «blindados» por la acción y la presión continua ejercidas en las Cortes, la actividad de los grupos de comerciantes en la periferia peninsular se fue volviendo más compleja. La pérdida, por ejemplo, de la franquicia en el puerto de Cádiz, no hizo sino favorecer todavía más el comercio y el contrabando en Gibraltar. En este sentido, conviene recordar las palabras que Enrique Montañés escribiera en relación a este tema. En su opinión: “Es probable que una parte de los comerciantes con base en Cádiz trasladaran sus operaciones con América y el Mediterráneo a Gibraltar a partir de la definitiva entronización del prohibicionismo”⁴⁶⁶.

Durante el período proteccionista, tanto los cereales como las manufacturas textiles compartieron un protagonismo que se prolongaría durante años en la política económica española. Sabemos que la cuestión triguera dio lugar al inicio de una legislación prohibicionista que no siempre produjo los resultados esperados. De acuerdo con las conclusiones del profesor Fradera, Barcelona que había sido una de las grandes ciudades importadoras de cereales antes de 1820, no logró después de esta fecha un

⁴⁶⁵ Moreno Lázaro, Javier, “Harina, azúcar y esclavitud: las relaciones comerciales entre Castilla y Cuba en el siglo XIX”, en Diego García, Emilio de y Velarde Fuertes, Juan (coord.), *Castilla y León ante el 98*, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1999, págs. 111 a 119. Asimismo, en relación al incremento en la cuota de exportaciones hacia Cuba, según el profesor Martínez Vara se pasó de un 25 por ciento en los años 1826 y 1827 a un 46 por ciento entre 1829 y 1833. En este sentido puede consultarse de Martínez Vara, Tomás, “Aproximación al comercio marítimo de Santander en los siglos XVIII y XIX”, en Martínez Vara, Tomás (coord.), *Mercado y desarrollo económico en la España contemporánea*, Siglo XXI, Madrid, 1986, pág. 196.

⁴⁶⁶ El profesor Montañés ha comprobado como la incidencia del prohibicionismo en el puerto de Cádiz durante los periodos más intensos del proteccionismo. Véase de Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 67.

abastecimiento suficiente. La situación se palió, como sucediera también en otras ciudades de Andalucía, a través de la compra de trigos nacionales, el contrabando, así como por la importación temporal de considerables partidas de cereales extranjeros⁴⁶⁷.

Tal y como habían pretendido los productores castellanos y andaluces, la eficacia en la prohibición de entrada de cereales desde otros países proporcionó un aumento significativo de los precios. La acertada maniobra, tanto de propietarios y de labradores, unido a los inevitables años de malas cosechas, tuvieron un significativo carácter a la hora de condicionar el alza en los precios y, consecuentemente, en los beneficios de los hacendados y propietarios de tierras de cultivo.

CUADRO 12

Evolución del comercio exterior en España entre 1797 y 1830 (millones de reales)

Períodos	Exportaciones	Importaciones	Total
1797-1801	509,2	669,8	1.179
1802-1804	921	1.167	2.087,6
1805-1814	613	1.130	1.742,7
1815-1820	449	712	1.161,1
1821-1825	426	508	934,1
1826-1830	406	516	922,4

FUENTE: Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 64.

Ya era sabido, desde que se publicaran los primeros trabajos en este sentido, que los labradores habían reaccionado ante la bajada de precios disminuyendo igualmente los costes de explotación; merma que se vio reflejada en la minoración de la superficie cultivada y en el número de

⁴⁶⁷ Fradera, Josep María (1987), ob. cit., pág. 103.

jornales⁴⁶⁸. Por su parte, los comerciantes ante la falta de importaciones optaron por el acopio con el fin de obtener unos precios más ventajosos durante el último trimestre del año agrícola. Consecuentemente, si se retrasaba la entrada de cereales en los mercados hasta que aquéllos alcanzaran su precio máximo, los beneficios se multiplicaban. Este detalle del acaparamiento fue denunciado en numerosas ocasiones por parte de la prensa gaditana. En uno de los números del *Diario Mercantil de Cádiz*, correspondientes al mes de marzo de 1825, un artículo titulado «Del comercio del trigo, y de los acopiadores», comentaba entre otras cosas lo siguiente: “La mayor parte de los que hacen (en todos los países) el trigo objeto de sus especulaciones en grande, empiezan por amontonar. Es así que todo hombre que tiene hechos grandes acopios, mira con temor y aversion la abundancia, por que de esta le ha de resultar una inferioridad de precio, siendo unicamente la escasez la que puede presentarle ganancias ciertas; luego todo el bien de los acopiadores estriba en el padecimiento general”⁴⁶⁹. En definitiva, las estrategias especulativas en los mercados de cereales y especialmente en los del trigo, daban lugar a importantes beneficios entre los distintos operadores⁴⁷⁰.

Sucedía, además, que a la especulación le seguía el contrabando, lo cual hacía que éste acabara convirtiéndose en una actuación regular. Debe entenderse, pues, que todo el entramado de acciones puestas en marcha por los labradores y comerciantes, amén de las circunstancias propias de la Naturaleza, como sucedía con las sequías, daban lugar a una pronta subida del precio del trigo, lo que implícitamente significaba la autorización para adquirirlo fuera de nuestro país. Dicha dinámica encarecía, como es comprensible, las subsistencias en las mencionadas plazas del litoral. Mercados que abastecían, solamente en la costa mediterránea y andaluza, a

⁴⁶⁸ Bernal, A. M. (1979), ob. cit., pág. 170.

⁴⁶⁹ *Diario Mercantil de Cádiz*, número 3.147, lunes 14 de marzo de 1825. Los acaparadores de trigo ubicados en zonas de litoral retenían sus existencias hasta el momento en el que los precios se acercaban al valor regulador. Si el mismo era superado con el riesgo a que fuese autorizada la importación, entonces se vendían algunas fanegas a un precio menor, desalentando de esta forma a los posibles importadores. Como resultado, por lo general la escasez no se solucionaba a corto plazo y se producían meses de hambrunas en las clases con menores rentas. Véase Sánchez Albornoz, Nicolás (1963), ob. cit., págs. 25 y 26.

⁴⁷⁰ Reher, David S., “Producción, precios e integración de los mercados regionales de grano en la España preindustrial”, *Revista de Historia Económica*, número 3, Otoño-Invierno, 2001, pág. 562.

una población que suponía más del treinta por ciento de los habitantes de todo el territorio español⁴⁷¹.

Después de las subidas de precios registradas entre 1824 y 1827 se produjo una cierta tendencia al descenso. Los altos precios que se habían registrado con anterioridad motivaron, como ya se comentó, la expansión de la superficie cultivada, hecho que produjo el abaratamiento del trigo. Simultáneamente comenzó a llegar más cereal y harinas nacionales a los mercados de Barcelona. El trigo fue relajando más sus precios llegando a estar a mediados de los años treinta alrededor de los 40 reales la fanega⁴⁷².

Los productores de trigo castellanos sabían que los precios del trigo extranjero en los puertos de origen podían oscilar entre los 20 y 30 reales por fanega. Este hecho, denunciado frecuentemente por los propios interesados, solamente resultaba beneficioso a los comerciantes que habían adquirido una gran capacidad en la exportación a base de acarrear productos hacia las zonas coloniales. Solo de esta manera podían compensar los altos precios del transporte. Ésta era de hecho la situación que se había creado en Cádiz y Barcelona. Ciertamente es también que hubiera sido inútil llevar el mismo trigo hacia zonas del interior, ya que el encarecimiento hubiera sido elevado y, por lo tanto, en ningún caso rentable. Además, el objetivo buscado por los aranceles era el de mantener unos precios elevados en los mercados del litoral, lo que proporcionaba un elevado interés, tanto en ganancias monetarias como en el crecimiento de la producción, tal como explicamos más arriba⁴⁷³.

Después de todo, el derecho de protección sobre el trigo posibilitó, tanto a propietarios como a labradores, un notable incremento en el volumen de beneficios, consecuencia directa de los altos precios que venían produciéndose en los mercados del litoral. Aunque se prescindió de los cambios en los factores de producción que, por otra parte, hubieran mejorado sustancialmente la productividad, la fuerza política adquirida desde 1820 por los grandes hacendados consiguió marcar una línea de actuación en la actividad económica que se mantendría varias décadas

⁴⁷¹ Barquín Gil, Rafael, *Precios de trigo e índices de consumo en España: 1765-1883*, Universidad de Burgos, Burgos, 1995, pág. 169.

⁴⁷² Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., págs. 71 y 72.

⁴⁷³ La relación entre prohibicionismo y expansión en García Sanz, Ángel (2005), ob. cit., págs. 82.

después. Una actitud de preeminencia que se pondría en marcha, aún sin unas estructuras consolidadas sobre el asociacionismo, y que pocos años más tarde comenzaría a plantearse como un movimiento para la protección agrícola en nuestro país.

Con la ruptura y la finalización inesperada del Trienio, las consecuencias que se hubieran podido derivar de un prohibicionismo a más largo plazo son una incógnita. El régimen absolutista sí rompió en ocasiones el compromiso arancelario, concediendo determinados privilegios a la importación y adquiriendo un cierto alivio para la Hacienda pública. Un aspecto que se debió, tal y como nos enseñó el profesor Artola, a la asfixia económica que provocó el gasto militar empleado en el mantenimiento del absolutismo en el poder⁴⁷⁴.

El efecto último de la aplicación del prohibicionismo no dejó de ser contradictorio. Entre los años 1815 y 1820 la renta aduanera se había mantenido próxima a los cien millones de reales. Sin embargo, en 1825 dicha renta había descendido hasta los ochenta millones, siendo de algo menos de cincuenta millones de reales en 1832. De ahí que en pleno absolutismo se infringiese constantemente el pacto arancelario. Además, mientras los distintos sectores presionaban al Gobierno en demanda de un mayor celo en el cumplimiento de la legislación arancelaria y poder consolidar de esa forma los mercados interiores, se procuraba el acceso a las importaciones ilegales con el fin de reducir los costes en la producción⁴⁷⁵.

Tras la muerte de Fernando VII se iba a abrir en España un período de inseguridades políticas, siendo la sucesión a la Corona uno de los mayores retos para los primeros gobiernos de la Regencia. A los problemas sucesorios no iban a tardar en unírseles las incertidumbres originadas por la petición de un nuevo consenso en relación a la política arancelaria. De acuerdo con las nuevas estructuras políticas y la recuperación de la representatividad en las Cortes, la puesta en marcha de nuevos debates en relación al proteccionismo y el libre comercio no tardaron en producirse. En realidad, será durante todo el período isabelino cuando comiencen a asomar en nuestro país las primeras asociaciones de agricultores de cierta significación

⁴⁷⁴ Artola, Miguel (1978), ob. cit., pág. 273.

⁴⁷⁵ El continuo recurso a las importaciones ilegales, unido a la acumulación de prohibiciones, impuso, en opinión de Enrique Montañés, una legislación arancelaria frágil. Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 76.

al margen del control oficial. Ideadas desde entonces para promover una nueva conciencia entre la clase propietaria, no será hasta la finalización de la primera mitad del siglo XIX cuando, tanto propietarios como labradores, comiencen a asumir nuevas capacidades y estrategias, lejos de los grupos que, hasta esos momentos, implícitamente habían ejercido la representatividad de los mismos en las Cortes constitucionales del Trienio Liberal.

CAPÍTULO II

EL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN EL REINADO DE ISABEL II

1.- DESAMORTIZACIÓN Y EFECTOS SOBRE LA PROPIEDAD

- La desamortización de Mendizábal. Una síntesis

La llegada al Ministerio de Hacienda de Juan Álvarez Mendizábal, en julio de 1835, se produjo en una situación compleja, tanto por la difícil realidad política, enmarañada con las disputas internas de los liberales, como por el desarrollo que había tomado la guerra contra los carlistas. Al finalizar el año 1834 el déficit español era aproximadamente de unos 400 millones de reales, lo que suponía más de la mitad del presupuesto nacional en un año. Los esfuerzos de José María Queipo de Llano, VII conde de Toreno y ministro de Hacienda en aquellos momentos, evitaron durante el año siguiente un mayor desequilibrio presupuestario. No obstante, los problemas del déficit y de la deuda no tardaron en agravarse todavía más llegando la situación a ser ciertamente delicada⁴⁷⁶.

A la falta de dinero que impedía cualquier posibilidad de acelerar las soluciones, el recién llegado ministro Mendizábal se propuso encontrar recursos que serenaran la vida civil, política y militar⁴⁷⁷. Por otra parte, pretendía reformar el Estatuto Real sosegando de esta forma los ánimos de los liberales contrariados, e impulsar la guerra contra los carlistas para

⁴⁷⁶ A este respecto puede consultarse de Rueda Hernanz, Germán (1997), ob. cit., págs. 43 y 44.

⁴⁷⁷ Como nos relata el propio Germán Rueda, el Gobierno se había comprometido en aquellos años a pagar a las distintas legiones extranjeras que se estaban preparando para intervenir junto al ejército regular español, con el fin de finalizar en breve la guerra contra los partidarios del Archiduque Carlos. *Ibidem*.

finalizar el conflicto en pocos meses. Solo así, pensaba restablecer la Hacienda del Estado acudiendo a créditos en el exterior. Por último, aspiraba a reformar el sistema tributario, cuestión que no podía resolver sin previamente solucionar la amalgama problemas anteriores⁴⁷⁸.

Al contrario de lo que hasta ahora se ha venido manteniendo, creemos, tal y como sugirieron en su momento los profesores Fontana y Rueda, que el programa de desamortización emprendida por Mendizábal no tuvo como objetivo esencial la obtención de recursos con los que sobreponerse a la guerra carlista⁴⁷⁹. Bajo la perspectiva de nuestra investigación, nos preocupan las repercusiones que tuvieron los sucesivos planes de desamortización en la propiedad de la tierra y en los labradores propietarios. Sirva el siguiente dato como ejemplo. Entre 1818 y 1860 se pusieron en cultivo alrededor de 4.000.000 de hectáreas⁴⁸⁰. Al margen de los razonables conflictos de cifras que pudieran provocar los distintos trabajos sobre las desamortizaciones en España, en la propia Exposición de Motivos del Decreto de Mendizábal se significaba la importancia que adquiriría “la posibilidad de introducir modificaciones en la estructura de la propiedad”⁴⁸¹. También en el Preámbulo de dicha norma se especificaba que para lograr el máximo provecho el Estado debía atender “á la necesidad y conveniencia de disminuir la Deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la Nación, á fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas, que no podrian conseguirse por entero en su actual estado”⁴⁸².

⁴⁷⁸ Ibidem, pág. 44.

⁴⁷⁹ En efecto, Germán Rueda ha planteado la cuestión, refiriéndose a la idea que el propio Mendizábal tenía sobre la guerra. En la opinión del profesor, el ministro creía que la duración sería breve por lo que era evidente que los recursos derivados de las desamortizaciones no se dedicarían en su totalidad a tal fin. Además, los bienes no comenzaron a subastarse en cantidades importantes hasta el año 1838. Existían una serie de trámites legales que podían retrasar todo el proceso. Por si fuera poco, en muchas ocasiones los pagos eran realizados en varios plazos. Mendizábal pensaba que el dinero obtenido por las ventas de bienes debían tener el objetivo de aliviar el problema del crédito público. Ibidem. También son interesantes la reflexiones que a este respecto se encuentran en Fontana i Lázaro, Josep, *La Revolución Liberal (Política y Hacienda en 1833-1845)*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1977, págs. 113 y 145.

⁴⁸⁰ El dato está recogido de uno de los trabajos de Vicens Vives, en García Pérez, Juan, “Efecto de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos”, *Ayer*, número 9, 1993, pág. 108.

⁴⁸¹ Exposición de motivos del decreto de 19 de febrero de 1836 en la *Gaceta de Madrid*, número 426, 21 de febrero de 1836.

⁴⁸² “Real decreto declarando en venta todos los bienes que hayan pertenecido á las suprimidas Corporaciones religiosas con la excepcion que se dice”, en *Decretos de S. M. la Reina Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su Augusta Madre La Reina Gobernadora*,

Pocos dudan de las intenciones del ministro de Hacienda por conformar lo que se ha llamado una «capa de compradores» que finalmente se sintieran identificados con el régimen liberal. Un grupo de propietarios que estarían inmersos en las llamadas clases media y alta, y a los que terminarían incorporándose pequeños hacendados y arrendatarios del campo. Este considerable aumento en casi todas las regiones de nuevos hacendados, en mayor o menor grado, resultó muy favorable para legitimar una conciencia más sólida en derredor de los grandes patronos de tierras de cultivo, labradores, así como de hacendados con una menor importancia social y económica.

La prolongación, empero, de la guerra y el fracaso de los primeros proyectos de la era Mendizábal, sumado al problema de la deuda y a la misérrima situación en la Hacienda española, fueron suficientes para poner en marcha la etapa desamortizadora que más tarde llevaría su nombre. No es de extrañar, pues, que la desamortización eclesiástica comenzara incluso algunos meses antes, en concreto con la legislación concerniente a la disolución de las órdenes religiosas de 1834, siendo declarados «nacionales» todos los bienes y puestos a disposición de los ciudadanos a través de subastas públicas. A los mismos se unirían los de los monasterios, a través de otro decreto de octubre de 1835, y los de las casas de religiosos y religiosas en los meses de marzo y julio de 1847 respectivamente. Tal y como reconoce Germán Rueda, los bienes, tanto muebles como inmuebles comenzaron a venderse de forma inmediata⁴⁸³.

Algo más lento se desarrolló el proceso de enajenación de los bienes del clero secular, ya que el decreto advertía que la venta no podría iniciarse hasta el año 1840. Sabemos, además, que mediante el Concordato de 1851, una buena parte de la legislación desamortizadora fue suprimida o aminorada, paralizándose en 1854 como consecuencia de la nueva propuesta que iba a iniciar Pascual Madoz.

En realidad, el período transcurrido desde 1834 a 1854 ha venido siendo estudiado desde hace tiempo, destinándose un importante número de trabajos a la desamortización protagonizada por Mendizábal y Espartero. Si

y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1836, Tomo XXI, Imprenta Nacional, Madrid 1837, págs. 77 a 83.

⁴⁸³ Rueda Hernanz, Germán (1997), ob. cit., pág. 46

bien es verdad que a través de los estudios generales y las monografías se han ido procurando unos conocimientos más exactos de todo el proceso desamortizador, debemos considerar los efectos y las consecuencias que el mismo tuvo en la sociedad y en la economía con el mismo empeño que el utilizado para argumentar la verosimilitud de las cifras que a este respecto se han ido aportando en los últimos años. Si a las cifras nos referimos, a mediados de la década de los sesenta del pasado siglo XX, Simón Segura afirmaba que entre los bienes «propios» se habían desamortizado varios millones de hectáreas, matizando unos años después que entre 1836 y 1900 la cifra de ventas en España se había aproximado a los 10 millones de hectáreas; una superficie equivalente al 20 por ciento de todo el territorio español⁴⁸⁴.

Sin embargo, y atendiendo a la desamortización iniciada por Mendizábal, hay que destacar el valor obtenido en las subastas de bienes eclesiásticos que alcanzaron un valor próximo a los cinco mil millones de reales. En concreto, Rueda lo ha situado en unos cuatro mil quinientos millones, con unas cantidades cercanas a los quinientos millones de reales que habrían sido abonadas en metálico. El resto se materializó en títulos de la Deuda que, con la depreciación mantenida en esos años, produjo considerables pérdidas a una buena parte de los perceptores originarios y un claro beneficio para el Estado⁴⁸⁵.

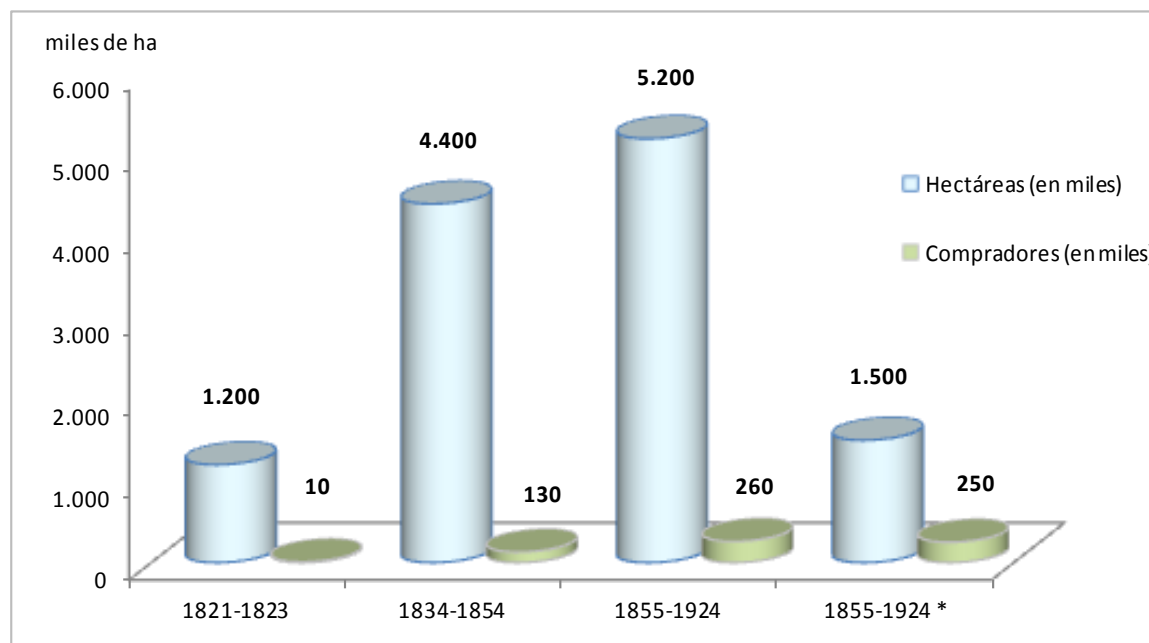
En cualquier caso, la desamortización, al margen de otras medidas que ya se estaban tomando para mejorar la agricultura, contribuyó necesariamente al incremento de la producción total de las cosechas y, en consecuencia, a una mayor recaudación fiscal. La comparativa respecto a la desamortización desarrollada por Pascual Madoz indica que en ésta el número de compradores fue muy superior (véase el gráfico 8). A ello contribuyó que las personas adquirientes en las zonas rurales fuera considerablemente más numerosa allí donde el latifundio no era la forma predominante de explotación. A este respecto, hemos encontrado un número inferior entre los compradores en zonas de Levante, probablemente al existir una oferta de tierras mucho menor.

⁴⁸⁴ Simón Segura, Francisco, “La desamortización de 1855”, en *Economía Financiera Española*, números 19 y 20, 1967. También en Simón Segura, Francisco, *La desamortización española del siglo XIX*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1973, págs. 219, 282, 283 y 293 a 300.

⁴⁸⁵ Rueda Hernanz, Germán (1997), ob. cit., págs. 48 y 49.

GRÁFICO 8

Distribución de tierras y beneficiarios correspondiente a las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz



FUENTE: Rueda, Germán (1997), ob. cit., pág. 61.

* Roturaciones arbitrarias llevadas a cabo entre los años 1855 y 1924.

Desde un punto de vista de la propiedad y de los propietarios de tierras, en provincias como Valladolid o Segovia la importancia de las adquisiciones rurales fue superior a las de los compradores urbanos⁴⁸⁶. En amplias comarcas de la zona meridional peninsular se produjo también un acceso a la tierra por parte de compradores rurales, sobre todo en áreas de Cáceres y Sevilla, alternándose esta circunstancia con las adquisiciones de grandes propietarios y latifundistas. Cantidades poco significativas en cuanto la superficie adquirida, pero que supuso un número cercano a la mitad de compradores. En 1838 las ventas más importantes se habían realizado en las provincias de Toledo, Badajoz, Cádiz, Jaén, Valencia, Córdoba y Sevilla. Como explicara en su momento Martí Gilabert, “la desamortización se había generalizado y los pequeños propietarios iban a los

⁴⁸⁶ Un buen ejemplo en Rueda Hernanz, Germán, *La desamortización de Mendizábal en Valladolid (1836-1853). Transformaciones y constantes en el mundo rural y urbano de Castilla la Vieja*, Diputación de Valladolid, Valladolid, 2009.

remates”⁴⁸⁷. El propio Gilabert ha contabilizado más de quince mil fincas vendidas durante el año 1839 en todo el país, con un valor próximo a los ochocientos millones de reales. Un proceso de desamortización que alcanzaría mayores dimensiones a partir de los años 1842 y 1843⁴⁸⁸.

Otro aspecto a destacar es la relación que en mayor medida mantenían los compradores con el campo y la producción agrícola. Es evidente que el acceso a las tierras desamortizadas se realizó desde diferentes andamiajes sociales y económicos, que variaron desde los grandes terratenientes hasta los pequeños labradores y arrendatarios. En muchos casos, especialmente en las dos Castillas, se produjo un hecho bastante significativo que acarrearía interesantes consecuencias en el futuro. Nos estamos refiriendo al numeroso grupo de agricultores y especialmente a labradores con la condición de arrendatarios que, con menguados recursos, accedieron mediante la desamortización a lotes de tierras. Una circunstancia que les permitió mejorar su situación e incluso acceder a niveles sociales más destacados. Esta «burguesía rural», denominada así por muchos autores, no tardó en integrarse a una colectividad agraria de más envergadura y de mayor proyección, que tendría su culminación en las últimas décadas del siglo XIX como parte integrante de asociaciones como la *Liga Agraria* o la propia *Asociación General de Agricultores de España*.

En provincias como Ciudad Real, con igual tendencia sobre el latifundio y el cereal, el acceso a la tierra se realizó a través de la adquisición de pequeñas superficies por un número igualmente pequeño de compradores. Desde luego, y aunque no se produjo igual en todas las provincias, en conjunto y en relación a las zonas de no latifundio, el peso de los compradores rurales fue razonablemente importante, tanto si nos referimos al porcentaje de las extensiones adquiridas, como al número de propietarios que finalmente accedieron a alguna de las parcelas subastadas⁴⁸⁹. En este aspecto, y más concretamente para toda la región castellano-manchega, ha trabajado el profesor Ángel Ramón del Valle estableciendo un número mayoritario de compradores cercanos a las fincas desamortizadas en la provincia de Ciudad Real. Sin embargo, respecto al porcentaje en las subastas o «remates», el análisis refuerza la visión,

⁴⁸⁷ Martí Gilabert, Francisco, *La desamortización española*, Rialp, Madrid, 2003, pág. 56.

⁴⁸⁸ *Ibidem*.

⁴⁸⁹ Rueda Hernanz, Germán (1997), *ob. cit.*, pág. 51.

verificada igualmente en otras regiones, que indica que se adquirieron pequeñas parcelas por parte de vecinos enmarcados en el ámbito rural (véase el cuadro 13).

CUADRO 13
Compradores en la provincia de Ciudad Real (1836-1854)

Lugar/vecindad	Nº de compradores	%	% del remate
Ciudad Real	745	94,06	41,0
Madrid	25	3,15	58,0
Otras provincias	6	0,75	0,7
Origen desconocido	17	2,14	0,1
TOTAL	792	100	99,8

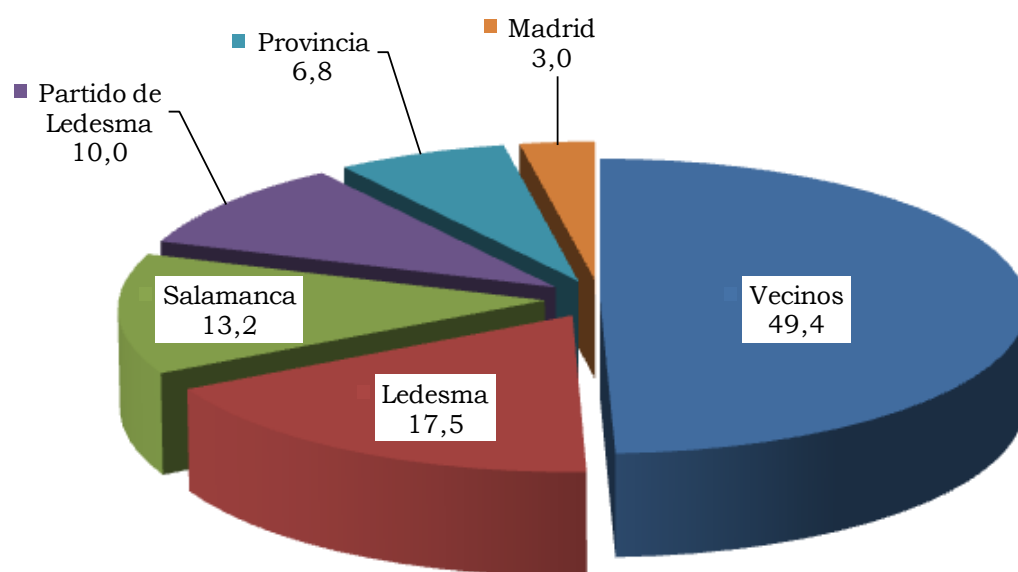
FUENTE: Ramón del Valle, Ángel, *Desamortización y cambio social en La Mancha, 1836-1854*, Diputación de Ciudad Real, 1996, pág. 109.

En amplias comarcas de Castilla la Vieja, y a tenor de las investigaciones realizadas por Eugenia Torijano Pérez, la situación fue muy similar. La supuesta «endogamia» de los compradores en el partido de Ledesma ha quedado demostrada, siendo los salmantinos quienes de forma mayoritaria accedieron a las fincas desamortizadas (véase el gráfico 9). De hecho, casi la mitad de los compradores de los aproximadamente 160 que se han documentado, eran vecinos del mismo lugar en el que se localizaban las fincas a subastar. Torijano ha podido comprobar, además, la escasa importancia de las compras llevadas a cabo por parte de la nobleza, cuya participación, con extensiones de tierras bastante minoradas, se redujo a los vizcondes de Revilla, el duque de Tamames, la condesa de Montijo, el marqués de Castellanos y el de Miraflores. El perfil establecido para el comprador de tierras desamortizadas presentaba unas características que lo

situaban entre la burguesía rural y residente en Ledesma o Salamanca, existiendo casos de residentes en el propio partido judicial⁴⁹⁰.

GRÁFICO 9

Procedencia de los compradores de bienes desamortizados en el partido de Ledesma entre 1836 y 1855 (en %)



FUENTE: Torijano Pérez, Eugenia, ob. cit., pág. 249.

Asimismo, conocemos algunos datos interesantes sobre la participación de los arrendatarios en la adquisición de fincas rústicas durante la desamortización de Mendizábal en Valladolid. En efecto, los trabajos de investigación llevados a cabo en esa provincia han demostrado la existencia de 1.438 arrendatarios, siendo un total de 215 los compradores de fincas desamortizadas. La cifra, que representaba un 15 por ciento del número de arrendatarios en la provincia, podía desglosarse en dos partes equivalentes entre clases medias y bajas. Un porcentaje, al que Germán Rueda ha podido añadir la relación existente entre medianos arrendatarios y pequeños propietarios, y propietarios acomodados. De esta forma, de los 215 adquisidores, 104 estarían dentro del segundo grupo, es decir, formando

⁴⁹⁰ Torijano Pérez, Eugenia, *Los Nuevos Propietarios de Ledesma 1752-1900. De la propiedad territorial feudal a la propiedad territorial capitalista*, Ediciones de la Diputación de Salamanca, 1999, pág. 249.

parte de aquellos hacendados con más medios económicos. El hecho es que al menos un 51,6 por ciento accedió a la tierra como pequeños propietarios y arrendatarios menores⁴⁹¹.

Tal y como había sucedido con anterioridad, en los distintos procesos de enajenación y desamortización acometidos desde los años finales del Antiguo Régimen, otros sectores de la sociedad no implicados directamente con la explotación y los rendimientos agrarios tuvieron acceso a considerables cantidades de tierras secularizadas. Entre ellos destacaron los funcionarios y militares, además de un importante número de miembros pertenecientes a la abogacía y al comercio. Muchas veces dedicados a la especulación, Tomás y Valiente no dudó en su día en calificarlos como los «negociantes de la desamortización»⁴⁹². Grupos a los que otros especialistas quisieron atribuirle una definición más acorde, como la «burguesía de los negocios»⁴⁹³.

Si bien la naturaleza de los compradores fue distinta dependiendo de las zonas o de los tipos de bienes que se ponían a la venta, se dieron también diferentes formas para adquirir las fincas secularizadas. Tanto durante el período de adjudicaciones de tierras correspondientes a la desamortización de 1836, como el siguiente iniciado por Pascual Madoz a partir del año 1855, se constituyeron sociedades y asociaciones de compradores con el fin de acceder a un buen número de tierras desamortizadas. Esta cuestión no puede considerarse es en absoluto como un aspecto intrascendente, ya que se han encontrado muchos casos de individuos que obtuvieron bienes accediendo a las subastas de forma

⁴⁹¹ Rueda Hernanz, Germán (2009), ob. cit., págs. 279 a 281.

⁴⁹² En efecto, la expresión utilizada, así como su descripción la debemos al profesor Tomás y Valiente. Véase por ejemplo: Tomás y Valiente, Francisco, “El proceso de la desamortización de la tierra en Escapa”, en *Agricultura y Sociedad*, número 7, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1978, pág. 21. También en Tomás y Valiente, Francisco, “Recientes investigaciones sobre la desamortización”, en Hernández Andreu, Juan, *Historia Económica de España*, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1978, págs. 253 y 254.

⁴⁹³ Aunque muy difundidos en la historiografía actual, a finales de los años ochenta y comienzos de los noventa del pasado siglo comenzaron a generalizarse los términos de «burguesía mercantil» o «burguesía de los negocios» para definir a un sector concreto de las sociedades económicas en Europa. Para nuestro país, véase por ejemplo de Mauri Villanueva, Ramón, *La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850: cambio social y de mentalidad*, Universidad de Cantabria, Santander, 1990, págs. 30 a 32; García-Bauero González, Antonio, *La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración*, Diputación Provincial de Cádiz, 1991, y Bustos Rodríguez, Manuel, *Burguesía de negocios y capitalismo en Cádiz: los Colarte (1650-1750)*, Excma. Diputación de Cádiz, 1991.

conjunta. En ocasiones, como ha recogido el profesor Germán Rueda para la provincia de Valladolid, se ha podido comprobar la relación de los nombres de todos los compradores como «adquirientes», amén de otras en las que las compras las realizaba una sola persona, indicándose que lo hacía también para sus «consortes». En este caso, únicamente aparecía un comprador que asumía el compromiso de pago, aunque solía indicarse que tras él, en la compra figuraban un número determinado de personas que adquirirían los bienes con los mismos derechos⁴⁹⁴.

La formación y adecuación de sociedades compradoras está demostrada para un importante conjunto de regiones, repartidas en aquellos lugares en los se colocaron para ser subastadas tierras que mostraban posibilidades de cultivo. En algunos casos, la única alternativa de alcanzar tierras con un volumen adecuado para el laboreo pasaba, precisamente, por organizarse en sociedades de agricultores, vecinos y pequeños propietarios. Tierras que, como ha dejado claro Eugenia Torijano para el caso de Salamanca, se adquirirían con el fin último de ser trabajadas⁴⁹⁵.

Siguiendo esta misma línea, entre 1836 y 1854, del total de compradores de fincas enajenadas en la provincia de Ciudad Real, el 88,6 por ciento, es decir 661 personas, lo hizo de manera individual. Sin embargo, algo más del 4 por ciento, alrededor de 32 compradores, optó a los bienes desamortizados a través de asociaciones y sociedades creadas para la ocasión. Finalmente, y estimando las cantidades calculadas por Ángel Ramón del Valle, un total de 52 personas, lo que suponía el 7 por ciento del

⁴⁹⁴ Los profesores Germán Rueda y Francisco Tomás y Valiente han documentado algunos casos de grupos y sociedades de compradores de bienes, no siempre concretados con el final previsto. Apoyándose en la documentación del Archivo Provincial de Valladolid, Rueda ha reseñado el suceso de la sociedad compuesta por Cesáreo Nieto y 47 vecinos de la localidad vallisoletana de Berrueces. Adquiridas unas fincas por el propietario Jacinto Valentín, éste convino en cederlas al vecino de la citada localidad, Cesáreo Nieto, en nombre de otros 46 copropietarios más. Una vez en su poder, Nieto no traspasó la parte proporcional que correspondía a los miembros de la sociedad creada con el fin de adquirir los bienes desamortizados. Este hecho supuso la demanda por parte del resto de la sociedad y su vista en el Tribunal Supremos, ganando finalmente la causa en 1860. Puede consultarse en Tomás y Valiente, Francisco, “Algunos ejemplos de jurisprudencia civil y administrativa en materia de desamortización”, en Tortella Casares, Gabriel y Nadal, Jordi (coord.), *Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea: actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España*, Ariel, Barcelona, 1974, págs. 70 a 73. Asimismo en Rueda Hernanz, Germán (2009), ob. cit., pág. 283.

⁴⁹⁵ Torijano Pérez, Eugenia, ob. cit., pág. 248.

total de compradores, decidió hacerlo a través de uno u otro procedimiento, es decir, bien a través de sociedades o de forma individualizada⁴⁹⁶.

No es una casualidad el hecho de que solo en la provincia de Ciudad Real se formaran 39 asociaciones hasta 1854, con el fin de acceder a la compra de bienes que habían sido desamortizados. Ángel Ramón del Valle ha documentado en su Tesis Doctoral las actividades y los trabajos llevados a cabo por una de las más importantes asociaciones que actuaron con el citado propósito en la provincia. Constituida por vecinos de Almodóvar del Campo, dicho colectivo se estableció con el propósito de adquirir bienes del clero secular. El resultado fue la compra de 88 fincas de un total de 264 hectáreas, rematadas por un valor de 74.747 reales. De los archivos consultados se desprende que en 1844 se realizó la división de los bienes por partes iguales⁴⁹⁷.

Estas asociaciones, sin limitación en el número de socios o participantes, accedieron a numerosas subastas de tierras a través de repartos proporcionales con funcionamientos similares allí donde se establecían. Aunque ocasionalmente podían estar formadas por dos miembros, las hubo también de tres y cuatro compradores con una señalada actividad. De estas últimas conocemos la formada por tres adquirientes de Almagro, cuyas compras se centraron en 31 fincas por un valor de 257.086 reales. Sucesivamente fueron organizándose asociaciones que, con socios procedentes de distintas localidades, accedieron a bienes desamortizados de ámbito rústico o municipal⁴⁹⁸.

En definitiva, lo que han revelado los estudios acerca de estas asociaciones de compradores, no es sino una prueba más del interés que mostraron determinados grupos de pequeños agricultores por adquirir tierras de labor, fundamentalmente en las localidades y pueblos próximos a los lugares de residencia, con la intención de ser explotadas y trabajadas. Si bien es verdad que todo ello produjo un limitado crecimiento en el número de beneficiarios, las asociaciones surgieron como una alternativa a la hora

⁴⁹⁶ Valle Calzado, Ángel Ramón del, *La desamortización eclesiástica en la provincia de Ciudad Real, 1836-1854*, Tesis Doctoral publicada por la Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones, Cuenca, 1995, pág. 132.

⁴⁹⁷ *Ibidem*, págs. 132 y 133.

⁴⁹⁸ Bibiano Hellín, domiciliado en San Clemente, así como José Pérez Gómez y Manuel Moreno, ambos de Villanueva de la Fuente, constituyeron la única asociación con el fin de adquirir fincas rústicas y urbanas de la provincia de Ciudad Real, *Ibidem*, pág. 133.

de adquirir algunos de los bienes que debían rematarse, y probablemente como único mecanismo de tipo «defensivo» que los labradores y propietarios con menor patrimonio podían utilizar frente a los adquirientes más influyentes y acaudalados. Dadas las circunstancias, los menos favorecidos acabaron siendo los campesinos que no contaban, ni podían hacerlo, con los recursos exigidos. En cualquier caso, la incorporación a la ciencia historiográfica de las sociedades y asociaciones de carácter civil, surgidas como resultado de los procesos de desamortización para la tenencia y explotación de bienes rústicos enajenados, debe ser una de las tareas a tener en cuenta en sucesivos trabajos de investigación. Su investigación ayudará en un futuro a comprender mejor aspectos todavía novedosos sobre la canalización y el aprovechamiento colectivo de los bienes rústicos que fueron enajenados durante el siglo XIX en nuestro país.

- La desamortización de Madoz. Tierras, propietarios y trigo

A partir de 1855, la legislación relativa a la desamortización pasó a estar reglamentada por la Ley del 1 de mayo sobre Desamortización Civil y Eclesiástica impulsada por Pascual Madoz. En su artículo primero se especificaba lo siguiente: “Se declaran en estado de venta, con arreglo á las prescripciones de la presente ley, y sin perjuicio de las cargas y servidumbres á que legítimamente estén sujetos todos los prédios rústicos y urbanos censos y foros pertenecientes al Estado. Al clero. A las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa, y San Juan de Jerusalem. A cofradías, obras pías y santuarios. Al secuestro del ex-Infante D. Carlos. A los propios y comunes de los pueblos. A la beneficencia. A la instrucción pública. Y cualesquiera otros pertenecientes á manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores”. En la citada ley, firmada en Aranjuez por el propio Madoz, se exceptuaban de ser vendidos los edificios destinados al servicio público, de beneficencia e instrucción, además de otros bienes y establecimientos cuya condición estuviera determinada por intereses determinados y específicos como las minas de Almadén, salinas y otras tierras que así considerase el Gobierno⁴⁹⁹.

⁴⁹⁹ Reus y García, José, *Manual de desamortización civil y eclesiástica, por los Directores de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Segunda edición, corregida y*

Se trababa, pues, de una ley de carácter más general que, a diferencia de anteriores normas, establecía el pago de los bienes desamortizados en metálico. En las condiciones figuraba la posibilidad de pagar un 10 por ciento al contado permitiéndose el aplazamiento hasta un total de 14 plazos. Sin embargo, otra ley inmediatamente posterior, de 14 de julio del mismo año, autorizó al Gobierno a emitir 230 millones de reales en billetes del Tesoro para que fueran aplicables al pago de bienes nacionales⁵⁰⁰. El caso es que la llamada Ley General Desamortizadora estuvo activa hasta la segunda década del siglo XX, soportando algunas interrupciones como la del gobierno de O'Donnell, que en septiembre de 1856 suprimiría la enajenación de los bienes del clero secular hasta los acuerdos con la Iglesia un año después, en abril de 1860.

A las dificultades de estimación sobre el valor total vendido durante este período, hay que añadir otras que están justificadas por el distinto valor adquirido por las propiedades subastadas durante el largo período en el que se desarrolló la desamortización. Entendemos así que el valor del dinero no pudo ser el mismo en las sucesivas etapas, hecho que no impide considerar significativas las cifras de todo el proceso desamortizador.

Otra consideración más está vinculada a las personas que, de una u otra forma, participaron en las compras de bienes rústicos. De los trabajos llevados a cabo por Francisco Simón Segura y Germán Rueda, puede deducirse que del total del millón seiscientas mil personas, estimadas en un primer momento que acudieron a las subastas de bienes nacionales, debe hacerse una importante revisión a la baja, toda vez que se ha podido comprobar las diferentes intervenciones que, en muchos casos, tuvieron los mismos adquirientes en dichas licitaciones. Esto significa, por ejemplo, una importante rebaja de los 965.000 beneficiarios contabilizados por Rueda entre 1766 y 1833. Disminución que podría llegar a más de la mitad en el número de personas que participaron en los diferentes procesos de enajenación de propiedades en España⁵⁰¹.

considerablemente aumentada con las disposiciones legales publicadas hasta fin de 1891, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1862, págs. 116 a 127.

⁵⁰⁰ “Ley autorizando la emisión de 230 millones de 230 reales en billetes del Tesoro, aplicables al pago de bienes nacionales y redención de censos y foros”, *Ibidem*, pág. 245.

⁵⁰¹ Simón Segura, Francisco (1973), *ob. cit.*, pág. 282. Las observaciones en relación a la disminución en los beneficiarios puede verse en Rueda Hernanz, Germán (1997), *ob. cit.*, págs. 60 y 61.

Como en anteriores fases, los efectos sociales y económicos de la desamortización emprendida por Madoz se sucedieron según los espacios geográficos donde se desarrollaba la misma. Hoy tenemos un importante número de monografías e investigaciones que han particularizado la cuestión a la mayoría de regiones y provincias de nuestro país. Utilizando los datos del excelente trabajo de Juan García Pérez sobre los efectos que la desamortización produjo en la propiedad y los cultivos, hemos podido conocer con más detalles la estimación, tanto en la distribución de la superficie enajenada, como del número de compradores aparecidos a partir de 1836 (véase el cuadro 14).

A pesar de estar en duda las estimaciones de Simón Segura sobre la cantidad desamortizada en España, la ley de 1855 puso en marcha un proceso en el que a los bienes de la Iglesia que estaban por vender, unía los patrimonios del Estado, de los pueblos y de las corporaciones civiles. Una considerable cantidad de patrimonio rústico que suponían un elevado número de fincas y de superficie enajenada, mayor que la puesta en almoneda durante el período de Mendizábal. En consecuencia, los efectos sobre la propiedad debieron ser más acusados que los producidos con anterioridad.

Los datos que se han recogido en el mencionado cuadro sobre la estimación de superficies enajenadas, sitúan en algo más de cinco millones de hectáreas la superficie vendida en toda España entre los años 1836 y 1900. El contenido de bienes rústicos que se pusieron a subasta varió sensiblemente dependiendo de las regiones. En zonas del norte y noreste peninsular las superficies desamortizadas no llegaron al 5 por ciento del total del suelo regional. El volumen de tierras movilizadas resultó mayor en Valencia y las provincias de Castilla la Vieja y León, llegándose a rematar cerca de 900.000 hectáreas, lo que suponía un 7 por ciento de toda la superficie regional. La tierra desamortizada en Murcia, Andalucía y las comarcas manchegas oscilaron entre el 10 y el 20 por ciento del total, siendo Extremadura

CUADRO 14

Estimación de las superficies enajenadas en España entre 1836 y 1900

Provincias	Lotes	Parcelas	Hectáreas	Media	Compradores	Fincas por comprador	Extensión Media
Pontevedra (1855-1908)	4.628		5.187,9	1,1	1.510	3	3,4
Coruña-montes (1859-1900)	34		503,6	14,8			
Lugo-montes (1859-1900)	595		127.663,4	214,5			
Orense-montes (1859-1900)	616		5.356,2	8,7			
TOTAL GALICIA	5.873		138.711,1	23,6			
Asturias (1836-1851)	1.635	8.228	2.115,8	1,3	863	1,8	2,4
Asturias (1855-1894)	12.300		16.500	1,34	4.890	2,5	3,4
TOTAL ASTURIAS	13.925		18.615,8	1,3	5.753	2,4	3,2
Guipúzcoa (eclesiástica)			1.607				
Guipúzcoa (civil)			4.182				
TOTAL GUIPÚZCOA			5.789				
Navarra (1836-1851)			6.852		351		19,5
Navarra-montes (1859-1900)			156.194				
TOTAL NAVARRA			163.046				
Barcelona-montes (1859-1900)	42		938,0	22,3			
Gerona-montes (1859-1900)	16		211,7	13,2			
Lérida-montes (1859-1900)	202		109.809	543,6			
Tarragona-montes (1859-1900)	25		84,9	3,4			
TOTAL CATALUÑA	285		116.343,6	389,6			

Provincias	Lotes	Parcelas	Hectáreas	Media	Compradores	Fincas por comprador	Extensión Media
Zaragoza (1836-1851)	5.110		7.091,9	1,4	1.133	4,51	6,23
Zaragoza (1855-1875)			134.287,0				
Huesca-montes (1859-1900)	145		18.248,0	125,8			
Teruel-montes (1859-1900)	123		60.530,4	492,1			
TOTAL ARAGÓN			220.157,3				
Alicante (1837-1850)	770		2.201,1	2,8	176	4,4	12,5
Alicante-montes (1859-1900)	361		97.736,0	270,7			
Castellón-montes (1859-1900)	317		46.389,0	146,3			
Valencia-montes (1859-1900)	154		14.584,0	94,7			
Valencia-proprios (1855-1867)			17.660				
TOTAL VALENCIA			178.570,1				
Mallorca (1836-1846)	62		1.363,0	21,9	150	2,4	9,1
Mallorca (1855-1864)	267		1.967,6	7,4	187	1,4	10,5
TOTAL MALLORCA	329		3.330,6	10,1	337	1	9,8
Murcia (1836-1854)			6.000				
Murcia-montes (1859-1900)			206.753				
TOTAL MURCIA			212.753				
Badajoz (1836-1854)	6.790		77.242,2	46			
Badajoz (1855-1900)	10.500		482.800,0	45,9			
Cáceres (1836-1854)	3.223		87.902,0	27,3	522	6,2	168,4
Cáceres (1855-1870)	11.805		505.439,5	42,8	2.486	4,3	183,7
TOTAL EXTREMADURA	32.318		1.153.383,7	35,6			

Provincias	Lotes	Parcelas	Hectáreas	Media	Compradores	Fincas por comprador	Extensión Media
Almería-montes (1859-1900)	13		7.333	564			
Málaga-montes (1859-1900)	144		44.659	310,1			
Granada (1836-1854)			19.390,0				
Granada (1855-11874)	3.504		42.035,6	11,9			
Cádiz-montes (1859-1900)	389		93.657	240,7			
Huelva (1836-1845)			7.775				
Huelva-montes (1859-1900)	237		39.194	165,4			
Jaén-montes (1859-1900)	244		238.131				
Córdoba * (1836-1925)	1.952		165.000	32,5			
Sevilla (1836-1845)	3.248		72.533,8	22,3	418	7,8	173,5
Sevilla (1855-1899)			76.056,8				
TOTAL ANDALUCÍA			805.765,2	23,6			
Madrid-montes (1859-1900)	896		102.900,0	114,8			
Toledo-montes (1859-1900)	275		287.251,0	1.044,5			
Ciudad Real (1836-1845)			590.000,0				
Cuenca (1836-1845)	1.538		41.604,7	27,5			
Cuenca (1855-1856)			130.119,0				
Guadalajara (1836-1851)	34.779		4.180,0	0,17			
Guadalajara-montes (1859-1900)	557		57.882,0	103,9			
Albacete-montes (1836-1859)	252		157.732,0	625,9			
TOTAL CASTILLA-LA NUEVA			1.371.668,7				

Provincias	Lotes	Parcelas	Hectáreas	Media	Compradores	Fincas por comprador	Extensión Media
Santander (1836-1849)	400	6.826	924,6	2,31	267	1,5	3,5
Santander (1859-1889)	2.332	6.073	1.549,2	0,7	1.500	1,5	1
León-montes (1859-1900)	1.246		102.032,0	81,8			
Zamora (1836-1854)	3.840		61.643,0	16	1.272	3	48,5
Zamora-montes (1859-1900)	756		55.758,0	73,7			
Salamanca-montes (-)	681		26.321,2	11,9			
Burgos (1855-1865)	3.355	39.858	42.858,4	12,8	1.846	1,8	23,2
Burgos (1866-1869)	4.097		35.332,7	8,62			
Valladolid (1836-1854)	3.550	54.003	58.562,2	16,50	1.321	2,68	44,3
Valladolid (1855-1869)	6.318		50.640,0	8	2.478	2,54	20,4
Valladolid (1869-1900)	1.952		43.564,5	32,5			
Valladolid-montes (1859-1900)	161		94.204,5	585,1	418	7,8	173,5
Palencia-montes (-)	293		72.183,8				
Ávila-proprios (1855-1885)			47.102,0				
Ávila-montes (1859-1900)	261		133.744,0	512			
Logroño (1840-1843)	3.378		1.810,5	0,53			
Logroño-montes (1859-1900)	303		78.322,6	258,5			
Soria (1838-1851)	288		6.305	21,9	94	3	67,1
Soria (1855-1896)	5.033		57.560	11,4	3.890	1,3	14,8
Segovia-montes (-)	90		4.870,5	54,1			
TOTAL CASTILLA LA VIEJA Y LEÓN			975.288,7				

* Se han incluido las 63.363 hectáreas correspondientes a terrenos de “campiña”.

FUENTE: García Pérez, Juan, “Efecto de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos”, *Ayer*, número 9, 1993, págs. 171 y 172.

la única región que sobrepasó la cifra del 25 por ciento de suelo subastado de todo su territorio regional. Así, pues, de haberse producido cambios en el régimen de la propiedad, éstos deberían haberse logrado en las regiones castellano-manchegas, Andalucía y sobre todo en Extremadura, como consecuencia de las amplias extensiones de tierra colocadas en el mercado entre 1836 y 1855⁵⁰².

A pesar de las posibilidades abiertas para la transformación, la mayoría de los autores han considerado que los cambios en las estructuras agrarias fueron poco significativos, probablemente como consecuencia de las aspiraciones de quienes impulsaron los procesos de desamortización en nuestro país. La preocupación por conseguir un incremento en la productividad y, consecuentemente, de las rentas y la riqueza de los propietarios, produjo, eso sí, una modificación en la naturaleza jurídica de los bienes adquiridos y el mantenimiento de la naturaleza jurídica de las tierras que iban adjudicándose, manteniéndose intacta la distribución de las parcelas entre los mismos compradores. El propio Fontana llegó a reconocer que la capacidad de explotación que conocían quienes accedían a las nuevas propiedades enajenadas derivaba de una formación basada en las grandes explotaciones. Un régimen de la propiedad que, en palabras de García Pérez, era el característico del Antiguo Régimen⁵⁰³.

Si bien, tal y como explicamos, las intenciones de Mendizábal y Madoz era la de distribuir grandes propiedades reduciéndolas para su mejor reparto y explotación, la realidad en las investigaciones ha demostrado que los organismos encargados de proceder a dichas divisiones tuvieron escasa incidencia en las mismas. Hecho que explicaría los distintos efectos que tuvieron los repartos, a pesar de tratarse de las mismas leyes, según nos refiramos a unas regiones u otras⁵⁰⁴. Aunque con una intensidad suficientemente diferenciada, en áreas de las dos Castillas, León, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia, las grandes propiedades fueron, en efecto, fragmentadas para su venta. Esta cuestión no deja de tener un interés especial, debido a que la misma terminó generando un incremento en

⁵⁰² García Pérez, Juan, ob. cit., págs. 123 y 124.

⁵⁰³ Fontana i Lázaro, Josep, "La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes", en García Sanz, Ángel y Garrabou, Ramon (eds.), *Historia de la España Contemporánea I. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850)*, Crítica, Barcelona, 1985, pág. 239. Asimismo en García Pérez, Juan, ob. cit., pág. 125.

⁵⁰⁴ González de Molina Navarro, Manuel, *Desamortización, deuda pública y crecimiento económico en Andalucía, 1820-1823*, Diputación Provincial de Granada, 1985, pág. 205.

el número de propietarios, muchas veces procedentes de una situación relacionada con la explotación agrícola, ya fuera a través del arrendamiento, o bien mediante la participación de labradores y pequeños propietarios con reducidos recursos y patrimonios menores.

Hecha esta precisión, fue precisamente en estas mismas regiones donde la extensión media de las parcelas enajenadas fluctuó entre las que eran inferiores a las 2 hectáreas, es el caso de zonas de las provincias de Zaragoza, Guadalajara y Logroño, y las que se situaban entre las 10 y las 20 hectáreas de territorios ubicados en Zaragoza, Burgos o Valladolid, siendo en estas dos últimas provincias de 23 y 28 hectáreas de media, respectivamente. Los territorios de Andalucía, Extremadura y amplias extensiones de la Mancha, configuraciones tradicionalmente de dominio latifundista, vieron repartidas sus tierras desamortizadas en extensiones medias más amplias. Las fincas enajenadas en los campos andaluces y extremeños, oscilaron entre las 22 hectáreas de media en Sevilla, hasta extensiones cercanas a las 40 hectáreas en Córdoba y Cáceres⁵⁰⁵.

Sin duda, las nuevas roturaciones y puestas en cultivo de todas las tierras que paulatinamente se iban comprando, nos ha ayudado a entender mejor el subsiguiente aumento que se produjo en muchas zonas castellanas en los cultivos de trigo y otros cereales, productos que para la población española eran esenciales en cuanto a la producción de harinas y de pan se refiere. Los trabajos en este sentido son profusos como más tarde veremos. Sin embargo, e insistiendo en las zonas de Castilla la Vieja, los compradores y trigueros castellanos vieron reforzados sus esfuerzos lucrativos al acceder a propiedades próximas a las explotaciones cerealícolas que ya mantenían con anterioridad. La realidad es que, al menos en Valladolid, las propiedades subastadas entre los años 1836 y 1869 estuvieron próximas a las 11 hectáreas de media, tan solo algo más altas que los bienes puestos en subasta en la provincia de Burgos. Las compras realizadas en esta última provincia dieron como resultado un elevado incremento en los pequeños patrimonios de un elevado número de vecinos de muy diversa posición social (véase el cuadro 15). Asimismo, tal como sucediera durante la desamortización de Mendizábal, la compra a través de sociedades fue otro de

⁵⁰⁵ Se han documentado casos excepcionales de repartos de más de 200 hectáreas en el Valle de Alcudia (Ciudad Real). En cualquier caso, los datos están extraídos del trabajo de García Pérez, Juan, ob. cit., págs. 10 y 131.

CUADRO 15

Compradores de fincas rústicas en la provincia de Burgos entre 1855 y 1865

	Número de compradores	Extensión (hectáreas)	Tasación (en millones de reales)	Desembolso (en millones de reales)
RURALES	Clases medias/altas	⇒ 16.340	⇒ 17,9	⇒ 34,0
	621			
	Clases bajas	⇒ 8.801	⇒ 8,9	⇒ 18,3
	1.747			
URBANOS	Clases medias/altas	⇒ 14.385	⇒ 14,0	⇒ 23,9
	192			
	Clases bajas	⇒ 583	⇒ 0,6	⇒ 1,1
	32			

FUENTE: Castrillejo Ibáñez, Félix M^a, ob. cit., pág. 125.

los recursos utilizado en muchas comarcas de Castilla, especialmente en zonas de Burgos y Valladolid, formadas por propietarios con limitados recursos⁵⁰⁶.

Este último aspecto, el referido a los grupos de adquirentes, vuelve a ser de relevancia al representar en muchos lugares de Castilla un porcentaje muy significativo. En este sentido, se ha comprobado que para la provincia de Burgos más de un 15 por ciento de las compras se realizaron a través de asociaciones o consorcios de varios vecinos o licitadores. Cifra que supuso

⁵⁰⁶ Castrillejo Ibáñez, Félix M^a, *La desamortización de Madoz en la provincia de Burgos (1855-1869)*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987, pág. 127.

un importe de 17 millones de reales. Ya advertimos más arriba la escasa capacidad que tenían los pequeños labradores y propietarios a la hora de alcanzar lotes importantes de tierras. A diferencia de lo sucedido durante la desamortización de Mendizábal en áreas castellano-manchegas, sabemos que a partir de 1855 se produjeron licitaciones por parte de poblaciones enteras y de asociaciones que superaban en número de socios a sus homólogas manchegas⁵⁰⁷.

La decisión por constituir este tipo de sociedades, utilizadas fundamentalmente por campesinos, se vio igualmente favorecida por el interés de un importante número de vecinos que procedían de diversas capitales de provincia, entre las que figuraban Madrid. Otras veces las asociaciones se formaban con residente de alguna ciudad importante, amén de otros vecinos de los lugares en los que se ubicaba la finca a subastar. También era factible la unión de campesinos y propietarios, especialmente cuando estos últimos tenían en arriendo sus tierras. Una vez adjudicadas, el mismo propietario volvía a arrendarlas al labrador, dándose en algunos casos la circunstancia de aparecer este último como testaferro en la operación. Esta opción de acceso a la tierra permitió en no pocos casos mantener al colono al frente de las explotaciones agrícolas y al propietario aumentar sus bienes. De cualquier modo, el hecho fundamental y contrastado es que esta modalidad de compra fue predominantemente utilizada por los labradores y campesinos asentados en áreas de Castilla y León. Este hecho lo justifica que solo en la provincia de Burgos, dentro del apartado de sociedades con más de 10 socios, asociaciones como las que aquí se han expuesto acudieran al remate de fincas cultivables por valor de más de seis millones de reales. A ellas estaban incorporados la mayor parte de campesinos no propietarios de la provincia⁵⁰⁸.

Hemos de convenir, pues, que los efectos del proceso desamortizador sobre las estructuras del suelo y la propiedad, tanto en la provincia de

⁵⁰⁷ Se han documentado pujas con éxito en subastas de fincas desamortizadas por parte de todos los habitantes de poblaciones como Cortes, Torrecilla del Monte, Quintanalaranco, Cardeñadizo, etc., Ibidem, pág. 155.

⁵⁰⁸ El estudio de las sociedades burgalesas en Moreno Peña, José Luis, *La gran propiedad agraria en la provincia de Burgos*, Memoria de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, 1983, págs. 79 a 81. Las adquisiciones en forma de asociación o consorcio de forma generalizada en otras provincias está comentada por Castrillejo Ibáñez, Félix, "Transformaciones en los grupos sociales de compradores", *Ayer*, número 9, año 1993, pág. 230.

Valladolid como en la de Burgos, mostraron importantes similitudes a las del resto de provincias de Castilla y de León. Esa idea, defendida en más de una ocasión por García Pérez, se debe a la descomposición de los patrimonios hasta entonces en poder de las instituciones eclesiásticas, y a la incorporación de una buena parte de los bienes en poder de los municipios, los comunes de los pueblos y de otras entidades civiles repartidas por toda la región. La enajenación y venta de todos ellos en un número abultado de parcelas, no hizo sino reforzar en las zonas de predominio del cereal las propiedades de tamaño medio que ya gozaban de un gran arraigo regional⁵⁰⁹.

La excepcionalidad mostrada por las provincias de predominio triguero en Castilla la Vieja y otras zonas septentrionales del país, siguen contrastando en la actualidad con el peso del latifundio y de los grandes terratenientes de las regiones situadas más al sur del país. De esta forma, y atendiendo nuevamente a los datos presentados en el cuadro 14, se habrían vendido considerables porciones de tierra en las provincias de Andalucía, con parcelas de una mayor amplitud a las subastadas en la meseta norteña peninsular. Mirándolo así, los resultados no se distinguieron tanto por el aumento en el número de latifundios como por el reforzamiento de los mismos en un medio en el que las grandes fincas y haciendas formaban ya parte de un paisaje centenario.

En términos generales, a pesar del conjunto de trabajos monográficos y de ámbito regional que se han dedicado en las últimas décadas al impacto de las ventas enajenadas durante el siglo XIX en España, el grado de incidencia, así como la evolución en el sistema de cultivos y en los usos del suelo ha seguido resultando muy difícil de determinar. Parte de esa responsabilidad la hemos teniendo los historiadores, al no conseguir un acuerdo sobre cuestiones esenciales que pudieron afectar a los posibles cambios en el régimen de propiedad tras los largos períodos de desamortizaciones en nuestro país. Es conocida la visión historiográfica de Vicens Vives relativa a la cantidad de tierras puestas en cultivo tras las expropiaciones, en especial después de ponerse a la venta los bienes propios. Vives afirmó que la superficie cultivada se habría duplicado tras dicho período, cuestión que para Artola era inaceptable. Para el propio Artola, la roturación masiva de tierras dedicadas al cultivo de cereal solamente habría estado justificada para casos muy determinados, ya que las

⁵⁰⁹ García Pérez, Juan, ob. cit., págs. 139 y 140.

desamortizaciones apenas habrían afectado a la estructura y distribución de los cultivos⁵¹⁰.

En cualquier caso, y hasta donde nosotros sabemos, el vínculo entre el cultivo de cereales y los propietarios de tierras fue durante todo el siglo XIX consustancial, especialmente desde que comenzaran las políticas proteccionistas en 1820. Con la aparición de las desamortizaciones en el horizonte político y económico de nuestro país, la especialización en el monocultivo de cereales iba a ser pronto un hecho que se vería reforzado en la mayoría de territorios distribuidos por las dos Castillas, León y gran parte de Andalucía (véase el gráfico 10).

En este mismo orden de cosas, y en relación a la importancia del cultivo de cereales en España, Raymond Carr ha sostenido que a comienzos del siglo XIX, éstos ya ocupaban las tres cuartas partes del suelo cultivable. De hecho, el primer impulso expansivo en la agricultura decimonónica en nuestro país se debió, siguiendo los planteamientos del propio Carr, fundamentalmente a la actividad cerealística en las tierras de Castilla⁵¹¹. Existen algunos matices referidos a las tierras desvinculadas, tanto de Cataluña como de Andalucía, que ha intentado explicar la proliferación de la vid en ambas regiones como consecuencia de una especialización agrícola. Esta actitud asumida en ambas zonas del país, dejaba a los territorios castellanos y a sus propietarios la mayor parte de la producción y de los réditos de los granos nacionales⁵¹². Dentro de este mismo contexto, podemos comprobar a tenor de los datos expuestos en el gráfico anterior, que Andalucía poseía, todavía en la segunda mitad de los años cincuenta, más de un 17 por ciento de sus tierras de cultivo dedicadas a la producción de cereales. De esta forma, cerca del 64 por ciento de las tierras que podían ser trabajadas en esas mismas fechas en ambas Castillas y Andalucía, lo eran para el cultivo de trigo y cereal.

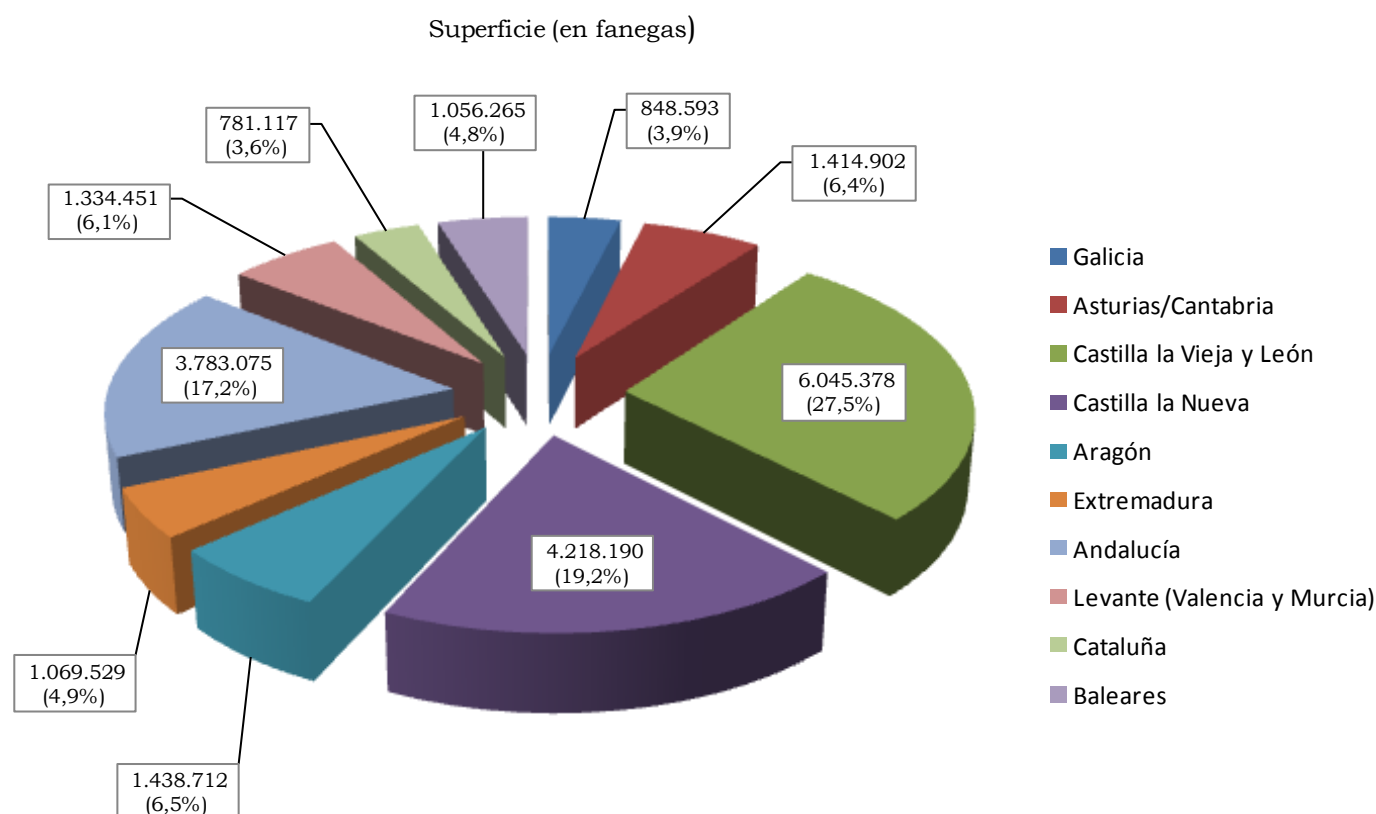
⁵¹⁰ Vicens Vives, Jaume, *Historia social y económica de España y América. Burguesía. Industrialización. Obreroismo. Los siglos XIX y XX. América Independiente*, Volumen 5, Editorial Teide, Madrid, 1957, págs. 234 y siguientes, y Artola Gallego, M., *La burguesía revolucionaria (1808-1878)*, Alfaguara, Madrid, 1974, págs. 110 y 153.

⁵¹¹ Carr, Raymond, *España 1808-1975*, Ariel Historia, Barcelona, 2008, págs. 38, 39 y 40.

⁵¹² Triguero Cano, Ángela, "La persistencia del subdesarrollo agrario", en Pardo Pardo, Miguel R. (coordinador), *Historia económica de Castilla-La Mancha (siglos XVI-XX)*, Celeste Ediciones, Madrid, 2000, pág. 99.

GRÁFICO 10

Superficies dedicadas al cultivo de cereales en España entre 1855 y 1858



FUENTE: Elaboración basada en los datos recogidos en Yoshiyuki Kondo, Agustín, *La agricultura española del siglo XIX*, Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Editorial Nerea, Madrid, 1990, págs. 79 y 80.

A pesar de las circunstancias favorables para la expansión de la siembra de trigo surgida con las desamortizaciones, ello no implicó que su explotación tuviera una mayor rentabilidad para los propietarios. Las numerosas roturaciones efectuadas de esta suerte, durante la primera mitad del siglo XIX, debieron alcanzar su máxima expansión en las décadas siguientes, cuestión que limitaba la capacidad de cultivo. No obstante, y a pesar de que las opiniones en este sentido se encuentran en la actualidad todavía divididas, algunos datos que hemos reflejamos más abajo indican que aumentaron considerablemente las roturaciones en la producción de cereales en toda España⁵¹³.

⁵¹³ Distintas opiniones en García Pérez, Juan, ob. cit., págs. 161 y 162.

Mayor acuerdo existe a la hora de reconocer el impulso en la producción, durante la segunda mitad del XIX, en los territorios latifundistas, especialmente en las regiones meridionales de la Península y Cataluña, coincidiendo precisamente con la considerable extensión de tierras puestas en el mercado entre 1836 y los primeros años del siglo pasado. En este sentido, fue Andalucía la región donde las roturaciones alcanzaron una mayor proporción, a lo que hubo que añadir, en opinión de Bernal, una notable transformación en las técnicas de cultivo⁵¹⁴.

La dualidad entre las pequeñas y medianas explotaciones, sumada a las condiciones naturales y a las limitaciones técnicas, basadas todavía en el arado romano o de reja de madera, condujeron a rendimientos bajos que se prologarían en muchas áreas hasta las primeras décadas del siglo XX⁵¹⁵. Esta situación de bajos rendimientos podía advertirse con una mayor intensidad en épocas de dificultades y crisis de subsistencias, como así sucedió en 1835, 1854 o 1868. Momentos en los que el precio del pan, componente esencial en la alimentación, disparaba sus precios y en los que apenas podía paliarse por las severas restricciones que políticamente ya se habían tomado por parte de los grupos de presión en 1820.

Todavía entre los años 1860 y 1888, la extensión empleada por el llamado «sistema cereal» vería aumentar su extensión en más de un millón y medio de hectáreas. Un crecimiento inferior al del viñedo y el olivo que, de manera conjunta, no llegarían a superar en esos mismos años las 850.000 hectáreas de nuevos cultivos⁵¹⁶. Asimismo, la ley de 1855 produjo un ataque directo a los montes, lo que ha provocado que algunos historiadores de lo

⁵¹⁴ Bernal, A. M. (1979), ob. cit., págs. 172 a 174.

⁵¹⁵ En efecto, es bien conocida que la práctica del barbecho en nuestro país también acusó una baja rentabilidad en los cultivos del trigo. Aunque a mediados del siglo XIX se comenzó a introducir los abonos en las siembras, el barbecho podía reducir a la mitad e incluso a la tercera parte los gastos de explotación. Las tierras «barbechadas» servían como pastos para el ganado, mientras éste servía de abono natural a los campos. Sin embargo, era evidente que con dichas prácticas la cantidad de tierra cultivable disminuía. Solamente a finales de siglo, la utilización más generalizada de fertilizantes permitió aumentar las áreas cultivadas y disminuir el barbecho. Véase por ejemplo: Rodríguez Labandeira, José, *El trabajo rural en España: 1876-1936*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1991, págs. 93 a 96. También en Argemí, Lluís, "La revolución agrícola en España", *Historia de la Ciencia y de la Técnica*, número 29, Akal, Madrid, 1993, págs. 43 y 44.

⁵¹⁶ García Sanz, A. y Garrabou, Ramon (1985), ob. cit., págs. 103 a 110.

agrario lo calificaran como “el mayor desastre ecológico de nuestra historia forestal”⁵¹⁷.

No cabe duda que allí donde el latifundio se acentuó, el impacto de las desamortizaciones sobre el paisaje resultó finalmente muy superior al producido en las restantes regiones españolas. Con todo, la expansión de la agricultura y la transformación en los sistemas de cultivo logrados a partir de la segunda mitad del siglo XIX, hemos de situarlas como un incontestable acervo de diversos factores, además de los referidos trasvases de fincas a nuevos propietarios, entre los que destacaron un crecimiento sostenido de la población, la demanda de alimentos, una coyuntura alcista en los precios agrícolas, y la progresiva articulación de los mercados interiores, fruto, una vez más, de la política prohibicionista consensuada en 1820.

En definitiva, para entender los cambios producidos en la sociedad española a partir de las grandes desamortizaciones emprendidas por Mendizábal y Madoz, hemos de establecer una amplia línea en el tiempo en la que, sucesivamente fueron produciéndose importantes cambios sociales, más allá de los logrados por los vastos grupos de compradores. Entre los logros, no cabe duda que se distinguieron aquellos que contribuyeron a la consolidación de una buena parte de la clase burguesa que, por esos mismos años, continuaba desarrollándose en buena parte de las zonas rurales y urbanas de todo el país. Los grandes propietarios siguieron manteniendo de manera sistemática el empleo de administradores y grandes arrendatarios, aumentando aún más las relaciones con los grupos dirigentes en las grandes ciudades.

Con la presencia de nuevas tierras en el mercado y de nuevos propietarios en el marco agrario, pudo afrontarse el comprometido reto de las mejoras, así como de las innovaciones en los cultivos, cuestión que se habría tornado aún más compleja de no haber sido por la gran oferta de nuevas tierras de cultivo. Unos avances que, en cualquier caso, no llegaron a significarse como cabría esperar, y que contaron con el apoyo de labradores acomodados y grupos de la burguesía urbana y agraria. A pesar de todo, la desamortización terminó afectando incuestionablemente al mundo rural, ya fuera a través de los sistemas de explotación de la tierra, o por el manifiesto

⁵¹⁷ Sanz Fernández, Jesús, “Historia contemporánea de los montes públicos españoles, 1812-1930. Notas y reflexiones”, *Ibidem*, pág. 188.

incremento de efectivos vinculados a la misma, dando lugar a lo que ha sido para importante grupo historiadores el tránsito de un tipo de sociedad singular a otra más diversificada.

2.- LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS HASTA 1850. DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS TERRITORIALES DE ESPAÑA A LAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS COMARCALES DEL AMPURDÁN

- La Asociación de Propietarios Territoriales de España

El año 1845 se publicaba en Madrid el primero de los dieciséis volúmenes del *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar*. Solo dos años más tarde iba a aparecer el tomo correspondiente a Madrid. Sin embargo, a pesar de la extensa lista de sociedades y otras comunidades relacionadas con el mundo de la propiedad y la agricultura, recogidas en toda la obra de Madoz, apenas se hacía mención, salvo en lo concerniente a la ciudad de Barcelona, al primer colectivo de propietarios territoriales con carácter nacional constituido en la capital de nuestro país⁵¹⁸.

No sabemos de la sucinta o extensa existencia de la *Asociación de Propietarios Territoriales de España*. Conocemos, en cualquier caso, algún trabajo en el que se ha querido ver el final de las actividades de dicha Asociación en el transcurso de 1846, así como un artículo fechado a finales del siglo XIX y firmado por Salvador Raventós, en el que se explica la existencia de unas cuantas actas correspondientes al mes de marzo de 1846⁵¹⁹. Un año antes, pues, de ser publicado el mencionado volumen de

⁵¹⁸ Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo X, Imprenta del Diccionario Geográfico, Madrid, 1847, págs. 520 a 1.121. Con posterioridad, Pascual Madoz publicaría un volumen íntegramente dedicado a Madrid bajo el título: *Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa*, impreso por la misma Imprenta que *Diccionario* en el año 1848.

⁵¹⁹ Nos referimos al artículo titulado “Un poco de historia” de Salvador Raventós e incluido en el índice del número 96 del *Boletín de la Asociación de Propietarios de Madrid*. Aunque fechado en 1899, lo cierto es que, tanto en los ejemplares que figuran en la Biblioteca Nacional, como en el Ateneo de Madrid, el mencionado artículo aparece en las páginas iniciales correspondientes al año 1900 sin paginación. En el propio artículo puede leerse: “La última acta que hemos podido examinar, de la primitiva Sociedad, es de Marzo de 1846”. Más tarde añade lo siguiente: “Al mudarse la actual Corporación a la calle de San Agustín á la de Silva, según referencias de los empleados de la casa, se perdieron varios libros de actas; así es que ignoramos lo que ocurrió en un gran lapso de tiempo”. Asimismo,

Madoz. Este hecho, el de una aparente dificultad para seguir adelante con sus trabajos, o la posible y precipitada desaparición en la ciudad de Madrid, debió influir negativamente a la hora de su inclusión en el *Diccionario*, a pesar de servir como referencia a otras asociaciones un cuarto de siglo después⁵²⁰.

Hasta donde conocemos, a mediados del siglo XIX, la mentalidad de la clase propietaria, tanto en las grandes ciudades como en el entorno rural, se había desarrollado hasta el punto de condicionar el éxito o fracaso de muchas de sus reivindicaciones a los intereses de grupo. Esta motivación evidenciaba una «vuelta de tuerca» más de una colectividad interesada en todos aquellos aspectos que afectaban a la defensa de sus intereses, en un momento significativo para el movimiento asociativo dentro la burguesía española. En 1846, un periódico de Guadalajara señalaba:

La agricultura es esencialmente ciencia de localidades, y por eso cada uno ha de echar cuentas con su terreno, con sus medios, con los productos que puede prometerse diversificando los cultivos, y con la salida que hayan de tener en los mercados. Pero no olvide que necesita aplicarse y estudiar, que el no haberse hecho una cosa, no es razón para que nunca se intente, y que si al lado del aliciente del mejorar está el peligro del innovar, el hombre cuerdo y diligente halla el medio de proceder con cautela para no aventurar su fortuna, especialmente si considera que en todas cosas hay aprendizaje que sufrir y premio que alcanzar. A la verdad hacen mucha falta entre nosotros la instrucción en el cultivador, la mejora en las castas de los animales, la perfección en los cultivos, y la facilidad en las comunicaciones. De esto puede y debe hacer mucho el estado, pero no es poco lo que le toca al labrador, y especialmente al gran propietario⁵²¹.

puede consultarse, por ejemplo, el trabajo de Rodríguez Chumillas, Isabel, “Asociacionismo y defensa de la propiedad urbana. Madrid durante la Restauración”, en *Historia Contemporánea*, número 24, 2002, págs. 161 a 183. En este último trabajo, y siguiendo el argumento de Salvador Raventós, se da por hecho que las actividades de la *Asociación del Propietarios Territoriales de España* se prolongaron hasta 1846. Este aspecto, como después veremos, no puede afirmarse de un modo categórico, toda vez que existen referencias en años posteriores de actividades emprendidas por parte de dicha Asociación en otras provincias españolas.

⁵²⁰ En efecto, en 1869 se fundará en Madrid la *Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas de Madrid y su Zona de Ensanche*, apoyándose precisamente en el modelo de la *Asociación de Propietarios Territoriales de España*.

⁵²¹ *El Buen Deseo. Semanario de Agricultura, Industria y Comercio*, 16 de septiembre de 1846.

Las transformaciones jurídico-institucionales, abiertas con el nuevo proceso liberal, habían comenzado ya por esas fechas a producir igualmente cambios en la estructura de la propiedad, además de hacerlo en los sistemas de explotación de la tierra, consecuencia también del progreso en las adquisiciones de predios por parte de los nuevos propietarios. La burguesía, la clase que aspiraba a ser la mayor beneficiada por los cambios, venía esbozando un modelo social donde los obstáculos jurídicos e institucionales no supusieran un freno a las «relaciones capitalistas de producción»⁵²². Todo ello, unido a las viejas estructuras participativas iniciadas desde el poder durante siglo anterior y al nuevo ideal asociativo, cada vez más latentes entre los implicados en el desarrollo agrícola, no tardaron en alentar un rimero de demandas que, con frecuencia, suponían un incontestable clamor. El mismo diario alcarreño explicaba: “Las sociedades económicas han merecido bien del país, y es mucho lo que aun debe esperarse de ellas; pero nosotros quisiéramos ver una asociación de propietarios en cada capital de partido, en cada población de alguna importancia, de tendencia mas bien práctica que especulativa, de celo, de tesón y de verdadero patriotismo”⁵²³.

Buena prueba de todo ello fue la creación en Madrid, en el transcurso del año 1842 y en uno de los salones del Banco Español de San Fernando, de la *Asociación de Propietarios Territoriales de España*, gracias a la iniciativa de un escogido grupo de propietarios ligados a la aristocracia, la burguesía mercantil e industrial y a su marcado carácter y preponderancia en los ámbitos económico y político de la sociedad madrileña. En la reunión de propietarios celebrada el 26 de junio de ese mismo año se aprobaron por unanimidad las Bases por las que debía regirse la Sociedad⁵²⁴. Unos principios que, además de abogar por la defensa ante cualquier daño dirigido hacia las propiedades de sus socios, mantenía la voluntad de exigir alivios en las cargas que sobre la propiedad territorial se estaban produciendo en aquellos momentos⁵²⁵.

⁵²² García Sanz, Ángel, “Introducción. Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800-1850”, en García Sanz, Ángel y Garrabou Ramon (eds.), ob. cit., págs. 7 y 8.

⁵²³ *El Buen Deseo. Semanario de Agricultura, Industria y Comercio*, 16 de septiembre de 1846.

⁵²⁴ Raventós, Salvador, ob. cit.

⁵²⁵ El punto segundo del artículo primero expresaba con claridad lo siguiente: “*Procurar la justa disminución de las cargas, que pesan sobre la Propiedad territorial, y el equitativo repartimiento de ellas*”, en *Bases para la Asociación de Propietarios Territoriales de España*, Madrid, 1842.

Se exhortaba a obtener protección a través de la denuncia en los órganos impresos, así como la puesta en marcha de cuantas gestiones fueran necesarias para reparar las lesiones producidas. Por otra parte, dejaba abierto el camino a otras actuaciones practicadas mediante el influjo, la ascendencia y la petición⁵²⁶. Estas mismas propuestas quedarían igualmente reflejadas en el Reglamento que habría de publicarse un año más tarde, una vez aprobada la Real Orden a favor de la Asociación, en octubre de 1842⁵²⁷.

En contra de lo que se pudiera pensar, y al margen de quienes iban a formar parte entre los asociados en el momento de su fundación, la *Asociación de Propietarios Territoriales de España* estableció desde el principio vínculos con el mundo agrícola, especialmente con aquellos sectores de propietarios y labradores inmersos en el contexto rural. Esta afirmación queda evidenciada al repasar las primeras páginas de su *Reglamento* y los primeros objetivos específicos recogidos en las *Bases* presentadas para su aprobación. Entre las finalidades recogidas en las mismas se consideraba sustancial: “Promover, auxiliar y aun plantear en las épocas y del modo que la Asociación determine, establecimientos dirigidos á la ilustración y socorro de la clase Labradora, á mejorar los métodos de cultivo, ó asegurar las Propiedades y las cosechas”⁵²⁸.

Este hecho, el de acoger a un buen número de propietarios agrícolas entre sus filas por parte de una asociación erigida en la capital del país, es fácilmente explicable al comprobar las conexiones que desde muy pronto se establecieron con la propiedad y sus áreas de influencia en varias de las

⁵²⁶ En el punto tercero del artículo segundo se expresaba, como forma para alcanzar los objetivos: “Pedir del modo competente la abolición ó reforma de cualesquiera leyes ó costumbres perjudiciales á la Propiedad territorial, y el establecimiento de las disposiciones legales, que puedan serle beneficiosas”. Asimismo, el apartado cuarto del mismo artículo se mostraba lo suficientemente explícito respecto al uso de la presión en los siguientes términos: “Usar la influencia de la Asociación y de las relaciones particulares de los Asociados para conseguir el buen éxito de las gestiones que, con los objetos arriba indicados, se juzgue oportuno practicar”, Ibidem.

⁵²⁷ La Real Orden expedida a favor de la Asociación, fechada el 28 de octubre de 1842, y firmada por Pedro Gómez de la Serna, Jefe Político del Ministerio de la Gobernación, quedó recogida en el citado Reglamento, cuya estructura quedó conformada por 66 artículos; treinta y uno más que las Bases aprobadas el año anterior. Véase el *Reglamento de la Asociación de Propietarios Territoriales de España*, Compañía Tipográfica, Madrid, 1843.

⁵²⁸ Apartado quinto del artículo segundo de las citadas *Bases*, ob. cit. El texto es idéntico al que aparece en mencionado *Reglamento*, excepción hecha de la palabra “dirigidos”, que aparece en este último con la letra “j”; cuestión que hemos respetado a la hora de transcribir la documentación en esta investigación.

provincias de castellanas. A ello contribuyó, sin duda, el deseo expresado por la mayoría de los propietarios fundadores, en sus disposiciones reglamentarias, de asumir el carácter de corporación nacional desde su implantación. En este sentido, en lo que respecta a su organización y régimen de actuación, el propósito era organizar una entidad capaz de aglutinar todos los territorios de España. Dicha idea de establecer tantas secciones como provincias, estaba recogida en el artículo décimo cuarto de las *Bases* y en el tercero del *Reglamento* al disponer que: “La Asociación comprenderá toda la monarquía española: se dividirá en tantas secciones como provincias, siempre que en cada una se inscriban cien propietarios por lo menos; y se subdividirá por medio de secciones subalternas en los pueblos principales de las provincias, si se inscribieren en cada una cincuenta Socios”⁵²⁹.

La iniciativa enlazaba con la necesidad de ser poseedor de una propiedad territorial rústica o urbana para ser admitido en la Asociación, pudiéndose verificar dicha admisión en las capitales de provincia en la que se residiese, incluso en aquellas localidades en las que se tuviera el título de alguna hacienda o alquería dentro del territorio español⁵³⁰. Los miembros propietarios podían inscribirse en una o más provincias, siempre que se tuvieran terrenos en propiedad en todas ellas, siendo, no obstante, las cuotas de entrada y anual proporcional a los dominios declarados⁵³¹.

Entre los precursores y redactores que se reunieron en Madrid el 26 de junio de 1842, con el fin de aprobar las Bases para la creación de la *Asociación de Propietarios Territoriales de España*, figuraban un selecto grupo de personas, miembros de una burguesía en alza que, además de

⁵²⁹ *Reglamento de la Asociación*, ob. cit., pág. 7.

⁵³⁰ En el Capítulo II del *Reglamento* relativo a los socios, se recogía la necesidad, para ser admitido en la Asociación de: “Poseer propiedad territorial rústica ó urbana en España, acreditándolo por medio de la carta de pago de una cuota cualquiera de contribución por riqueza territorial”. Además de todo ello, cada miembro debía: “Satisfacer seis reales vellon al tiempo de ser inscrito en la Asociación, y obligarse á pagar diez reales al año”. En relación al ingreso en la misma, el artículo 10 admitía, como ya se ha dicho, la posibilidad de constatarlo en la capital de provincia en la que se residiese, incluso: “en la de aquella en que tengan propiedades segun estimen convenirles, y asimismo en los pueblos en que residan ó tengan propiedades, si en ellos hubiese seccion subalterna”. *Ibidem*, pág. 10.

⁵³¹ Los artículos 13 y 14 establecían que tener propiedades en dos provincias requería un pago de entrada de nueve reales; doce reales en caso de ser tres, etc. La cuota anual en dos provincias exigía un pago de quince reales al año, veinte si las propiedades se declaraban en tres provincias, con un aumento progresivo de cinco reales sucesivamente. *Ibidem*, págs. 11 y 12.

mantener una buena posición económica, pasaban por estar bien relacionados con la política del momento. Este es el caso, por ejemplo, de Aniceto de Álvaro, colaborador de Mendizábal, el marqués de Casa-Irujo, miembro del «gabinete Sotomayor» durante el gobierno de 1846, o propietarios con raíces en el Antiguo Régimen y la nobleza como los condes de Torre-Muzquiz y de las Navas, además de otros miembros como el duque de Veragua. Entre los fundadores se contaban propietarios urbanos con adquisiciones de bienes desamortizados. El ejemplo más notable era Manuel de Anduaga que, junto al resto de iniciadores, terminaron por acordar la formación de una Comisión que redactase las Bases de la primera corporación de propietarios del país⁵³².

En la reunión celebrada el 25 de enero de 1843 fue elegido presidente el marqués de Malpica, nombrándose cinco vocales y un tesorero, entre los que se encontraban Lino de Campos, Mauricio Carlos de Onís, diputado hasta 1841 y senador desde ese mismo año por la provincia de Salamanca⁵³³, además de Manuel Cortina y el propio marqués de Casa-Irujo, quien, al mismo tiempo de ser diputado electo por la provincia de Málaga, mantenía la condición de importante hacendado en distintas localidades y provincias de España⁵³⁴.

Desde finales de 1842 y hasta los primeros meses de 1844, las *Bases*, así como el *Reglamento de la Asociación de Propietarios* comenzaron a publicarse en distintos diarios nacionales y Boletines Oficiales de numerosas provincias, al mismo tiempo que se sucedían las peticiones y autorizaciones de un profuso conjunto de delegaciones de aquélla para su puesta en

⁵³² Rodríguez Chumillas, Isabel, ob. cit., pág. 162. Algunos detalles sobre su constitución también en Raventós, Salvador, ob. cit.

⁵³³ Los distintos cargos políticos y representativos ocupados por Mauricio Carlos de Onís pueden seguirse en la *Colección de las leyes, decretos y declaraciones e las Cortes, y de los reales decretos, ordenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1837*, Tomo XXIII, Imprenta Nacional, Madrid, 1838. El nombramiento como senador por la provincia de Salamanca está recogido en el *Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados en la legislatura de 1841*, Tomo I, Imprenta Nacional, Madrid, 1841, págs. 50 y 51. Asimismo,

⁵³⁴ Existen documentos notariales que verifican un importante número de propiedades en distintas localidades y provincias en los años próximos a la fundación de la *Asociación de Propietarios Territoriales*, que van desde villa de Aguilar en Córdoba hasta Toledo. Véase Matilla Tascón, Antonio, *Catálogo de documentos notariales de nobles*, Instituto Salazar y Castro (CSIC), Madrid, 1987, págs. 111 y 112. En relación a la presentación del Acta de su elección como diputado por Málaga y de su participación en las Cortes puede consultarse, por ejemplo, el *Diario de las Sesiones del Congreso de Diputados en la legislatura de 1838*. Tomo I, Oficina de D. Tomás Jordan, Impresor de Cámara de S. M., Madrid, 1838, pág. 8.

marcha en buena parte del resto de provincias españolas⁵³⁵. Si nos atenemos a la información de Salvador Raventós, las solicitudes de inscripciones el primer día de quedar instituida la Asociación llegaron a noventa y tres, siendo el primer asociado Carlos Martín del Romeral. Asimismo, sería la Junta Directiva de Vizcaya la primera en ver la luz fuera de la provincia madrileña, comenzando su «vida legal» el 23 de julio de 1842⁵³⁶.

En este mismo orden de cosas, la situación en la provincia de Valladolid, estudiada por Germán Rueda, arroja datos suficientemente significativos de la aceptación que tuvo en buena parte de las comarcas vallisoletanas. Rueda ha comprobado la adhesión a la *Asociación de Propietarios* de un nutrido grupo de grandes hacendados, muchos de ellos compradores de bienes desamortizados. De hecho, ocho de los trece miembros que conformaban la Comisión Directiva en la provincia eran adquirentes de fincas «liberadas»⁵³⁷.

Entre los más destacados propietarios castellanos pertenecientes a la Asociación, figuraban nombres como Francisco Rodríguez Guillén, accionista del ferrocarril; Francisco Posadas, vecino de Mota del Marqués y administrador del duque de Alba; Antonio Rodríguez; Manuel López Puga, residente en Valoria la Buena; Joaquín Maldonado; Juan Manuel Arévalo; Donato Basanta, estos tres últimos propietarios accionistas del ferrocarril de Alar en Santander; Pedro Gómez de Rozas, importante terrateniente con haciendas en Madrid y Tordesillas, y Antonio García Navarro, vecino de Medina de Rioseco⁵³⁸. En las listas del *Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid* aparecían también algunos labradores acomodados, compradores

⁵³⁵ En este sentido, son muchos los números de publicaciones que aparecen con menciones a la *Asociación de Propietarios Territoriales de España*. Como ejemplo, puede consultarse: *El Patriota*, 4 de julio de 1842; los *Boletines Oficiales de la Provincia de Cáceres*, números 86, 87 y 88 correspondientes a los días 19, 23 y 26 de julio de 1843, respectivamente, o el *Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid*, 10 de enero de 1844. Asimismo, en relación a las peticiones realizadas al entonces Ministerio de la Gobernación, un modelo de resolución podemos encontrarlo en el *Boletín Oficial de la Provincia de Orense*, número 154, correspondiente al 27 de diciembre de 1842. Por último, algunas publicaciones no tardaron en solicitar a la nueva Sociedad la creación de «bancos de provincia», con el fin de dotar de medios suficientes a quienes deseaban emprender nuevos métodos de cultivo. *La España Agrícola*, primer año, Madrid, 1843, págs. 81.

⁵³⁶ Salvador Raventós, ob. cit.

⁵³⁷ Rueda Hernanz, Germán (2009), ob.cit., págs. 173 y 174.

⁵³⁸ *Ibidem*, págs. 326 a 330.

de un menor número de tierras, como Fernando Altés, aunque miembro destacado en el entramado asociativo en Valladolid⁵³⁹.

Llama la atención que prácticamente la mitad de todos ellos fueran electores en el año 1846, lo que da una idea del número importante de propietarios perteneciente a las clases acomodadas (véase el cuadro 16)⁵⁴⁰. No en vano, la mayoría figuraban en las listas de inversores del ferrocarril, cuya conexión a Santander presentaba un avance, a la vez que un atractivo más a la hora de asignar un mayor número de recursos en el terreno agrícola. Por último, entre los comerciantes, miembros de la *Asociación de Propietarios Territoriales de España*, aparecían los nombres de Manuel Fernández Montealegre, administrador de las fincas del marqués de Bedana y contratista, años más tarde, de la obra del ferrocarril del Norte en Valladolid, así como el de Máximo Losada, igualmente accionista de la línea férrea del Norte⁵⁴¹.

Sabemos por las noticias que se sucedían en los diferentes Boletines de las provincias, detalles de las actividades que la Asociación mantuvo durante sus años de presencia en la vida asociativa del país. A finales de diciembre de 1842, una Circular del Ministerio de Gracia y Justicia suspendía, ante la solicitud, entre otros, de varios miembros de la *Asociación de Propietarios Territoriales*, la ejecución de una Real Orden de 24 de agosto de ese mismo año, relativa a censos e hipotecas.

Por real orden de 24 de agosto próximo tuvo á bien el Regente del reino señalar lo que restaba de año, como último plazo, para que se tomase razon en las contadurías de hipotecas de las escrituras de censo, venta y demas que, según la ley, deben tener este requisito, anteriores á la pragmática sancion de 1768; y creyó S. A. que esta medida, que á nadie interesa tanto como á los mismos propietarios cuyos antiguos derechos se desea asegurar, no daría lugar á nuevas reclamaciones después de tantos plazos anteriormente concedidos. Sin embargo, han acudido diferentes corporaciones populares, la asociacion de propietarios territoriales de España y otros varios individuos esponiendo las dificultades que ya por el carácter de

⁵³⁹ Rueda Hernanz, Germán, “Los beneficiarios del proceso desamortizador en una zona de Castilla la Vieja (1821-1891)”, *Móneda y Crédito*, número 137, Madrid, 1976, pág. 64.

⁵⁴⁰ Existe un “Anuncio” a la *Asociación de Propietarios Territoriales de España* en la provincia de Valladolid, comunicando el período para efectuar los pagos correspondientes a las cuotas de entrada, así como para efectuar la retirada de la Carta de Pago. *Boletín Oficial de Valladolid*, 6 de junio de 1844.

⁵⁴¹ Rueda Hernanz, Germán (2009), ob. cit., págs. 330 y 331.

CUADRO 16

Miembros de la Asociación de Propietarios Territoriales de España en Valladolid (año 1844)

Nombre	Residencia	Elector*	Nombre	Residencia	Elector*
Francisco Rodriguez Rubio	Tordesillas		Francisco Sanchez de las Rivas	Valdestillas	
Damian Conde	"		Félix María de Berzosa	"	
Ramon de Guzman	"		Gregorio Roman	Simancas	
Pedro Gomez de Rozas	"	•	Manuel de Llanos Sanchez	"	•
Máximo Losada	"		Salvador María de los Rios	"	•
Francisco Posadas	Mota del Marqués		Juan de los Rios	"	
Francisco Pelayo Flores	Villafrechós		Manuel García	"	
Juana Cuadrillero de Nágera	"		Jacobo Ayala	"	•
Pedro Pascual de la Maza	Villalón		Ildefonso García	Nava del Rey	
Marceliano Moro	Rueda		Luis Gomez Villavedon	"	•
Vicente Pimentel	"		Benito Moreno	Tordehumos	
Juan José Santander	"		Jerónimo Carro	Villavicencio de los Caballeros	
Antonio Reina y Docampo	"		Mariano Herrero	Villafrades	
Francisco Arévalo	"	•	Epifanio Sobrino	Quintanilla de arriba	
Fernando Altés	Medina del Campo	•	Bernardo Fernandez	San Roman de la Hornija	•
Manuel Fernandez Montealegre	"	•	Joaquin Maldonado	Isicar	•
Vicente Torres	"	•	Frutos Sanz	Portillo	
Matías Rico	"		Antonio Martinez de Soto	"	
Jacinto Ventosa	Ventosa		Manuel del Rio	Olmedo	
Donato Lasanta	Mojados	•	Rafael Faustino Sanz	Moral de la Reina	
Eugenio Diaz	"	•	Antonio Rodriguez	Valoria la Buena	•
Juan Manuel Arévalo	"	•	Bernardo de Prado	"	
Francisco Arranz	Pesquera de Duero		Fermin Lopez Puga	"	•
Antonio García Navarro	Rioseco	•	Manuel Lopez Puga	Cevico de la Torre	
Laureano Giron	"	•	Toribio Monedero	Villavicencio de los Caballeros	•
Juan Manuel de Cagigas	"	•	Ciriaco Francos	Tiedra	
Hermenegildo Cuadrillero	"	•	Primo Guerra	"	
José Pizarro Diaz	"	•	Mateo Lopez	Cabezón	•
Felix Vicente y Largo	"	•	Fernando Martinez	Mojados	•
Manuel Domingo Urquiza	"	•	Juan Manuel Arévalo	Herrin de Campos	•
Mariano Semprum	"		Miguel Pantaleón de la Rosa	"	
Francisco Gago	Quintanilla de Trigueros	•	Mariano de la Rosa y Cermeño	Ciguñuela	
Jacinto Rosales	"		Ambrosio Llorente	Torrescárcela	•
Leonardo Alonso	"	•	José Fernandez	Becilla de Valderaduey	•
José Serrano	Palazuelo de Vedija	•	Juan Valbuena	"	
Ignacio Gonzalez	Villalbarba	•	Francisco Valbuena	Quintanilla de la Cueva	•
Feliciano Martín	Serrada	•	Benito Diez		

* Está referido a los electores de la provincia de Valladolid para el año 1846

FUENTE: *Boletín Oficial de Valladolid*, 6 de junio de 1844, 8 de diciembre de 1846 y 10 de diciembre de 1846.

los contratos, ya por su antigüedad, y ya también por la diferente localidad de las propiedades afectas en una misma escritura, se ofrecen á la toma de razon; todo lo cual es la voluntad de S. A. que se examine con la detencion que su importancia requiere. En su virtud se ha servido mandar que se remita el espediente instruido con los antecedentes de su razon a informe con urgencia del tribunal supremo de Justicia, suspendiéndose entretanto, y hasta que con vista de lo que propusiere se adopte una resolucion definitiva, los efectos de la citada real orden de 24 de agosto último⁵⁴².

De igual forma, con fecha 20 de marzo de 1846, la Comisión Directiva de la *Asociación de Propietarios* de la provincia de Barcelona, presentó una protesta al ministro de la Gobernación por los perjuicios que causaba a los propietarios y a la agricultura las «calicatas» y otros trabajos mineros que se estaban llevando a cabo en distintos distritos de Cataluña sobre propiedades particulares, sin autorización y sin las correspondientes indemnizaciones. Por los datos encontrados, sabemos que demanda de la Comisión llegó a manos de la Reina Isabel. Circunstancia que significó las reparaciones pertinentes⁵⁴³.

En efecto, los grupos más conservadores, junto al colectivo de grandes propietarios barceloneses, habían creado en 1844 la *Asociación de Propietarios de la Provincia de Barcelona*, a imagen y semejanza de la que se

⁵⁴² *Boletín Oficial de la Provincia de Orense*, número 6, 14 de enero de 1843. En mayo de 1848, otra Circular del Ministerio de Gracia y Justicia dejaba sin efecto, definitivamente, la citada Real Orden de agosto de 1842. En la misma se recordaba la actuación de la Asociación de Propietarios Territoriales en relación a las quejas que en su día habían sido remitidas a la Administración de Justicia. Véase el *Boletín Oficial de la Provincia de Orense*, número 62, 23 de mayo de 1848. Un recorrido de todo el proceso hasta 1848, puede verse en Gutiérrez Fernández, Benito, *Códigos ó Estudios fundamentales sobre el derecho civil español*, Tomo II, Imprenta de D. F. Sánchez, Madrid, 1863, págs. 689 a 691.

⁵⁴³ En el escrito dirigido por el Ministro de la Gobernación a la Dirección General de Minas, referido a la legislación minera y a su posible revisión en nuestro país, se puede leer lo siguiente: “Pero como en esta se previene terminantemente la prévia indemnizacion de daños y perjuicios á los dueños de los terrenos en que se emprendan tales calicatas ú otros cualesquiera trabajos mineros; y considerando que la queda producida bajo este concepto por los interesados, si fuere fundada, sería muy justa, no precisamente por culpa de la ley, sino por la inobservancia de sus disposiciones, quiere S. M. la Reina que V. S. encargue al inspector del distrito de Cataluña, y lo circule á todos los demas el mas exacto cumplimiento de lo preceptuado acerca del particular, á fin de que por ningun concepto permitan que dejen de indemnizarse previamente, ó de asegurarse como es debido la indemnizacion de daños y perjuicios á favor de los propietarios en cuyos términos se emprendan calicatas ó labores de minas, de cualquier especie que sean, amprándolos y administrándoles recta y pronto justicia si la reclamasen por hechos d esta especie, segun es debido, en justo respeto al derecho de propiedad y conforme al espíritu y letra de la ley vigente de la minería”. *Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo*, número 90, 10 de noviembre de 1846.

había constituido en 1842⁵⁴⁴. Su Comisión Directiva permaneció activa, al tiempo que advertía lo que acontecía con su homóloga en Madrid. En cualquier caso, superada ya la mitad del siglo XIX, dicho empeño y esfuerzo terminó por singularizarse en importantes obras de referencia como parte de unos ideales propios de una asociación de propietarios al servicio de la agricultura. Así, el Reglamento que años atrás se había propuesto para la puesta en servicio de la Guardia Rural en España, todavía aparecía detallado en el *Diccionario de Bibliografía Agronómica* de 1865. Un hecho notable, cuya iniciativa había corrido a cargo de la propia Asociación barcelonesa y había estado apoyado por la de Sevilla. El ejemplar, en cuestión, se manifestaba en estos términos:

Dicha Asociación encarece la importancia que siempre ha tenido la guardia rural, pues si bien reconoce que ha provocado controversia, la cuestión no ha sido con objeto de destruirla, sino de mejorarla, y concurre á dar su parecer comprendiendo que uno de los principales deberes de estas Asociaciones, creadas en 28 de Octubre de 1842, es hacer notar los males que á la Agricultura afligen y proponer los oportunos remedios⁵⁴⁵.

Como ya se ha explicado, no consta que a lo largo del año 1846 las actividades de la Asociación cesaran⁵⁴⁶. Todavía, en enero y febrero de ese mismo año, se publicaban a través de la prensa las convocatorias de sus asambleas generales que reunía a los delegados de las provincias en el domicilio del marqués de Malpica⁵⁴⁷. A ello habría que añadir la escueta noticia publicada en *El Español*, correspondiente al mes de enero de 1846, congratulándose de la vuelta a la actividad de la propia Asociación.

Con satisfaccion vemos vuelve á tomar impulso la sociedad formada en esta corte, ramificada en todo el reino por los propietarios territoriales del mismo. Esta asociacion, de la que tan ventajosa y general opinion se formó al

⁵⁴⁴ El dato está recogido de Pons i Altés, J. M., "Los grupos dirigentes en la Cataluña urbana y su relación con el Estado centralista (1844-1868)", en Calatayud, S.; Millán J., y Romeo, M. C., eds., (2009), ob. cit., pág. 196.

⁵⁴⁵ Anton Ramirez, Bráulio, ob. cit., págs. 748 y 749. Véase también el *Reglamento para la creación y servicio de Guardias Rurales, proyectado por la Comisión Directiva de la Asociación de propietarios de la provincia de Barcelona, y sometido por la misma á la aprobación de S. M., con exposición de 31 de Mayo de 1846*, Imprenta de José Tauló, Barcelona, 1846. El Reglamento definitivo relativo a la regulación de la Policía Rural fue aprobado en 1849. En relación al apoyo prestado por la Comisión Directiva de la *Asociación de Propietarios de Sevilla*, puede consultarse la misma obra de Bráulio Anton Ramirez, pág. 597.

⁵⁴⁶ La idea de la finalización de la misma en Rodríguez Chimillas, Isabel, ob. cit., pág. 162.

⁵⁴⁷ Las convocatorias están recogidas en *El Español*, 23 de enero y 28 de febrero de 1846.

instalarse, había paralizado, no sabemos por qué, sus útiles trabajos, y el público debe agradecer á sus fundadores que hayan vuelto á ocuparse de tan provechoso pensamiento⁵⁴⁸.

En cualquier caso, el resultado de aquel período de cuatro años no cabe ser interpretado como un fracaso. De la misma forma, creemos que no sería razonable hablar de inmovilismo, toda vez que la existencia y actuación de la *Asociación de Propietarios Territoriales de España* en el campo participativo, suscitó el desarrollo y, en algunos casos, dilató estructuras asociativas similares en distintos puntos de la geografía de todo el país. Para justificar tal argumento puede servirnos como ejemplo la reacción de la *Asociación de Propietarios de Cádiz*, en relación a la Ley Tributaria, y su actitud frente a la misma en los primeros meses de 1847, además de la protesta llevada al Congreso, una vez más, por la Asociación de Barcelona, contra el proyecto de ley sobre la reforma de los laudemios en presentada ese mismo año⁵⁴⁹.

La reacción de una buena por parte de los hacendados y propietarios agrícolas de la provincia de Cádiz no tardó en producirse, aprobándose el 14 de abril de 1847, en una Junta general de labradores, el Reglamento de la que sería la *Sociedad Agrícola de Jerez de la Frontera*. Se trataba de una respuesta que intentaba irrumpir las peticiones que, cada vez con una mayor firmeza, manifestaban las comunidades de comerciantes, y que posibilitaba la opción, dadas las circunstancias, de proteger los intereses de la agricultura. Los Estatutos, aprobados entre otros por Juan García Pérez,

⁵⁴⁸ *El Español*, 22 de enero de 1846.

⁵⁴⁹ Sabemos que en 1847 ya se había constituido una sociedad de propietarios "para representar y defender los intereses de los propietarios de la ciudad de Cádiz" y que mantenía una actitud opuesta a determinadas cargas contributivas. En el texto titulado "Esposiciones que la Asociacion de propietarios de Cádiz eleva a S. M. y al Congreso de Diputados" podía leerse, entre otras cosas, lo siguiente: "La ley tributaria últimamente publicada contiene otros muchos vicios y defectos que no podemos ménos de presentar á V. M. los cuales hacen mas resbaladiza y espuesta la posicion de estos propietarios". El documento que contenía las manifestaciones de los propietarios gaditanos estaba firmado por los directores de la *Asociación* que en esos momentos eran los marqueses de Pedroso, Carvallo y el de Torre-Soto. Figuraban, además, entre los firmantes cuatro adjuntos y un secretario. Véase el *Suplemento al Propagador. El Propagador del Libre Comercio. Periódico de la Asociación Mercantil Española*, 27 de marzo de 1847. En relación a la propuesta barcelonesa, véase la *Espocicion al Congreso de Señores Diputados por la Comision Directiva de la Asociacion de Propietarios de la provincia de Barcelona contra el Proyecto de Ley sobre Reforma de Laudemios presentado por el Señor D. José Manuel Planas y otros diputados en la Sesión de 4 de marzo de 1847*, Imprenta de José Tauló, Barcelona, 1847. Esta última desaprobación aparece firmada por un presidente «accidental», Erasmo de Janer y de Gónima, y otras cuatro personas más, entre las que destacan José Catá de la Torre y el barón de Maldá, siendo secretario Ramón Busanya

Miguel de Giles, miembros de la primera Junta Directiva, además de José Zuleta y María Gallardo y Celis, advertían del objeto de la nueva Sociedad, al mismo tiempo que lanzaban una proclama a quienes quisieran inscribirse, siempre que se tratara de agricultores de la provincia dispuestos a defender los provechos agrícolas en todas sus ramificaciones. En su articulado manifestaba la intención de extender al resto de capitales andaluzas los ideales de la *Sociedad Agrícola*, estimulando las mejoras en la producción de cereales y animando a ejercer, una vez más, un destacado peso en las instituciones políticas del país.

Como esta Sociedad no puede ni debe jamás tener tendencia política de ninguna clase, y su objeto debe ser los adelantos é intereses materiales: teniendo esto por norte, podrá y deberá ejercer una influencia considerable en la elección de los representantes de la Nación, para que los nombrados, identificados en sus intereses, sean los órganos por donde el Gobierno de S. M. y el Congreso puedan informarse de las necesidades de la agricultura, de los beneficios á que es acreedora, y de los adelantos que estos beneficios podrán producir⁵⁵⁰.

A la vista de estas consideraciones, las relaciones entre distintas asociaciones de propietarios se mantuvieron, teniendo en cuenta las difíciles circunstancias que el entramado de las comunicaciones presentaba en ese momento, fruto muchas veces de los conflictos sucesorios, además del ya comentado vacío reglamentario que sobre el colectivo social pesaba todavía sobre el país⁵⁵¹. Esta actitud, la de buscar la conexión con otros grupos ya coligados, no fue solo una dinámica generada por el impulso de los primeros precursores, sino una demanda de cuantos formaban ya parte del entramado asociativo en España. Algunas publicaciones dedicaban secciones al resto de «Sociedades de Agricultura», muchas veces para establecer vínculos con los que posteriormente ampliar la presión en las

⁵⁵⁰ En el Título 5 del Reglamento se podía leer, además, lo siguiente: “ya que la propiedad y el comercio tienen sus representantes, no les falte á los agricultores, y para que siendo esta clase la mas numerosa, y que la constituye la riqueza de la provincia, recupere la categoría que le corresponde”. El citado Reglamento está recogido de forma impresa en los Archivos del actual Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con el título de: *Reglamento aprobado en junta de labradores, para la Sociedad Agrícola de Jerez de la Frontera*. El mismo está fechado en el año 1847 y acompañado por las solicitudes de la Junta Directiva y las autorizaciones correspondientes del Director General de Agricultura, Industria y Comercio, fechadas en mayo de ese mismo año. Véase AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 9, expediente 34.

⁵⁵¹ Conviene no olvidar el conflicto carlista que entre 1846 y 1849 afectó de manera singular a Cataluña.

relaciones con los gobiernos de Madrid. Así, no es de extrañar que se utilizaran términos como «unión» o «fraternidad» para hacer referencia a la proximidad con otras colectividades de propietarios o asociaciones de agricultores.

Uno de los casos más incuestionables que afectaron a las asociaciones de propietarios fue el de la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*, creada en 1845, que a través de su primera publicación periódica estableció un destacado acercamiento con los propietarios barceloneses. Las razones quedaban explicadas, como después trataremos, en un compendio de apartados que comprometían a ambas agrupaciones. Esta actitud quedaba justificada de la siguiente forma:

La asociacion de propietarios de Barcelona y la Sociedad de Agricultura del Ampurdan, mutuamente convencidas de que se han propuesto un mismo fin, cual es el fomento de la Agricultura, cuya primera base es el respeto á la propiedad, y penetradas de que la union de los propietarios y personas que se interesen en los adelantamientos de la Agricultura, es un medio poderoso de adquirirlos, han acordado prestarse recíproco apoyo, y al efecto han convenido en los capítulos siguientes⁵⁵².

En consecuencia, cabe creer que el modelo propuesto en 1842 había originado un considerable número de seguidores en distintas regiones. A pesar de ello, a la finalización de los años cuarenta del siglo XIX, eran todavía muchos los hacendados y propietarios de tierras en España que mantenían posiciones desiguales respecto a la producción y al comercio, por lo que la dicotomía entre comerciantes y agricultores se tornó en una situación prácticamente irreconciliable. Esta dualidad no hizo sino reforzar posicionamientos que terminarían afectando a aquellos grupos de propietarios y de clases elevadas que poseían una cierta capacidad para influir en el entramado social, político y económico del país. Las respuestas a esta situación se hicieron evidentes. Las nuevas reglas de juego propuestas por la burguesía española, tanto para la política como para la economía, al mismo tiempo que intentaban impulsar la producción y el crecimiento, perfilaban un mapa asociativo escindido, ya fuera entre partidarios del libre comercio, o simpatizantes a ultranza de un proteccionismo cada vez más aceptado y respaldado.

⁵⁵² *El Bien del País*, nº 3, mayo 1846, págs. 28 a 31.

- La Sociedad de Agricultura del Ampurdán. Agricultura comarcal y de Estado

Con la presencia de los moderados en el poder, la nueva fase política abierta a partir de 1844 iba a centrarse principalmente en el mantenimiento de las restricciones representativas, con un cuerpo electoral que no llegaba ni al uno por ciento de la población. El proyecto de reforma constitucional de 1845, la legislación referida a ayuntamientos y diputaciones, y los cambios producidos en la ley electoral, planteaba un objetivo político dirigido a debilitar claramente las instituciones representativas, llevando casi hasta el olvido las políticas progresistas de años atrás. Dichas perspectivas dejaban prácticamente vacías las expectativas de victoria a cualquier grupo político con intenciones de alcanzar el poder⁵⁵³.

A todo ello se sumó una prioridad económica fundamentada en la reforma del sistema impositivo, la solución a la deuda, así como una nueva reforma arancelaria con la que obtener recursos y eludir una más que verosímil quiebra del Estado. La misión, encomendada al ministro de Narváez, Alejandro Mon, tuvo pronto su continuación en unas Cortes que, a partir de 1845, aprobarían leyes sin la presencia de los progresistas y contra una oposición que veía como la prensa no afín a la nueva administración política era objeto de un intenso hostigamiento⁵⁵⁴.

La reforma arancelaria, considerada en un principio una prioridad por la obligación que establecía la ley de 1841 en relación a su revisión, fue relegada a un segundo plano, consecuencia de la ruptura con la etapa anterior. La indeterminación de Narváez motivó la intervención de los grupos que pugnaban por una liberalización en el comercio, en especial los colectivos gaditanos, cuyo objetivo era volver a plantear el debate arancelario

⁵⁵³ Pro Ruiz, Juan, “La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)”, *Historia Contemporánea*, número 23, 2001, págs. 445 a 482).

⁵⁵⁴ Comín Comín, Francisco, y Vallejo Pousada, Rafael, *Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882): Pensamiento y reforma de la Hacienda*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2002, págs. 52 y 221. El período de la contrarrevolución moderada puede consultarse en Fontana, Josep, *La época del liberalismo*, Crítica y Marcial Pons, Barcelona, 2007, págs. 219 a 266. Asimismo, en Montañés, Primicia, Enrique, ob. cit., págs. 138 a 140. En relación al control de la prensa resulta, al menos, llamativo, que se examinaran publicaciones agrarias. Esta circunstancia puede comprobarse en la Circular número 206 del día 1 de julio de 1848, por la que el Gobierno Superior Político de Gerona, muestra su aprobación al periódico *El Cultivador*, recomendando su adquisición en los Ayuntamientos de la provincia. *El Bien del País*, número 5, agosto de 1848, págs. 58 y 59.

como una prioridad política. Cuestión que había quedado relegada tras los intentos surgidos en la etapa regente de Baldomero Espartero. Al frente de este movimiento se situaron los diputados Alejandro Llorente, Augusto Amblard, Bernardino Núñez de Arenas y Luis Hernández Pinzón, entre otros, sostenidos por el colectivo de comerciantes y exportadores de las ciudades de Cádiz y Jerez de la Frontera. Una situación que recordaba a la acaecida con Sánchez Silva, unos pocos años atrás⁵⁵⁵.

En todo caso, eran relativamente recientes las publicaciones en la prensa de algunos artículos y trabajos señaladamente librecambistas, especialmente los que editaba la *Guía del Comercio*, órgano que por aquellos años estaba al servicio de la *Confederación Mercantil Española*. Ésta se había formado en junio del año 1845, aunque su verdadero origen descansaba en la *Sociedad Mercantil Matritense*, fundada solo un año antes. Ambas asociaciones contaban entre sus afiliados con importantes incondicionales vinculados al comercio de los tejidos, del metal, además de contar con un nutrido grupo de propietarios aferrados al libre cambio⁵⁵⁶.

No es una casualidad, que la *Asociación Española para propagar las doctrinas del Libre Comercio*, surgida en Cádiz en 1846, y cuyo órgano de prensa era *El Propagador del Libre Comercio*, se refiriera en 1847 a una de las frecuentes reuniones que tenían lugar en Jerez de la Frontera y que solía congregar a los partidarios de la «libertad de comercio». De lo tratado sabemos que se sugirió la formación de una Junta Auxiliar para que pudiera desarrollar las peticiones de la Asociación. Sin embargo, un grupo de labradores y propietarios terminó por no aceptar las nuevas condiciones que sugería la libertad de comercio. Este hecho, que tendría después una singular importancia en el mundo agrícola de la provincia, lo explicaba así el semanario gaditano: “Con el mayor sentimiento hemos sabido que varios labradores y propietarios que asistieron á esa junta, no han creído oportuno afiliarse, temerosos de que en el caso de que cesen completamente entre

⁵⁵⁵ Las discusiones planteadas sobre el importe de las rentas de aduanas y la urgente modificación del valor de algunos productos, considerados elevados, fueron tratados en el Congreso de los Diputados los días 18 y 19 de abril de 1845. El diputado Alejandro Llorente llegó a plantear los serios problemas que tenía la agricultura debido a la rigidez de los aranceles proteccionistas. *Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados en la legislatura de 1844 á 1845*, Tomo III, Imprenta Nacional, Madrid, 1845, págs. 1 a 22.

⁵⁵⁶ Román Collado, Rocío, "José Joaquín Mora y Sánchez (Cádiz, 1783-Madrid, 1864)", en Sánchez Lissen, Rocío (coordinadora), *Economía y economistas andaluces. Siglos XVI al XX*, Ecobook. Editorial del Economista, Madrid, 2013. pág. 376.

nosotros las prohibiciones, no puedan sostener la competencia de los granos extranjeros y especialmente de los de la vecina costa de Africa”⁵⁵⁷.

Estas consideraciones hacia el libre cambio y su vinculación con la agricultura se venían tratando en Madrid desde hacía casi un año por varios diputados, destacando especialmente los nombres de Luis Hernández Pinzón, Augusto Amblard y Alejandro Llorente. Este último, en una larga intervención, apelaba a los intereses de todos los ciudadanos e instituciones, en relación a las normas arancelarias vigentes.

Los intereses de los consumidores, los intereses de la Hacienda pública, los intereses del comercio, los intereses de los productores del país, si, señores, también los de la agricultura y de nuestros frutos lo están gravemente en esta cuestión; pero creo que no es tan difícil hallar una solución que satisfaga a unos y a otros, al comercio, a la Hacienda pública, a los interesados en la exportación de nuestros frutos; no creo, digo, que es difícil hallar el medio de dejar satisfechos los intereses creados por las leyes vigentes, por absurdas que sean, y cuyos efectos no por eso deben ser menos respetados en el momento⁵⁵⁸.

Por otra parte, los grupos cercanos a Llorente y Amblard, tal y como ya sucediera unos años antes, eran partidarios de compensar a todas aquellas empresas que no estuvieran a la altura o, en su caso, no fueran capaces de soportar la competencia extranjera⁵⁵⁹. Las intervenciones de Alejandro Llorente intentaban conjugar las presiones que sobre el Gobierno se cernían en relación a las medidas liberalizadoras, y aquellas otras que demandaban más moderación y que podían finalmente perjudicar al nivel de producción en el campo. En cualquier caso, en su ideario, la agricultura no pasaba por quedar al margen de las materias que precisaban ser reformadas.

⁵⁵⁷ *El Propagador del Libre Comercio*, 20 de febrero de 1847. Al título de la publicación le acompañaba una línea muy explícita que advertía ser el «periódico de la Asociación Mercantil Española». Dicho semanario se editó, en sus inicios, todos los sábados.

⁵⁵⁸ Sesión del 18 de abril de 1845, en *Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados en la legislatura de 1844 a 1845*, Tomo III, Imprenta Nacional, Madrid, 1845, pág. 9.

⁵⁵⁹ En efecto, una parte importante de los llamados «puritanos», entre los que sobresalían nombres como los de Antonio de los Ríos Rosas, Francisco Javier Istúriz o Joaquín Francisco Pacheco, dentro del partido moderado, apoyaron a Llorente y Amblard en lo referente a la eliminación de las prohibiciones y la instauración de un sistema proteccionista más prudente y moderado. Cánovas Sánchez, Francisco, *El partido moderado*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, págs. 130 a 246. Véase también Montañés Primicia, Enrique, ob. cit., pág. 142.

Los labradores, señores, los propietarios, los cosecheros, todos cuantos tomen interés por el fomento de nuestra prosperidad y riqueza, todos tienen interés en que se reforme el sistema que seguimos. La agricultura ¿cuánto interés no tiene en ver cambiar el sistema comercial y económico que se sigue en España?⁵⁶⁰.

En lo que atañe al desarrollo de nuevas entidades asociativas en España, los primeros trabajos de la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán* hubieron de efectuarse bajo el mismo clima de adversidades que se estaba perfilando en relación a los propietarios agrícolas de tendencia proteccionista, y de estímulo para quienes veían en la libertad de comercio un nuevo orden económico⁵⁶¹. En medio de estas dificultades, fue el agrónomo y abogado liberal figuerense Narciso Fages de Romá, quien tuvo la idea de organizar en 1845, una sociedad de propietarios que fuera capaz de promover todo tipo de mejoras en la agricultura y que favoreciese de manera singular los intereses de la clase propietaria agrícola de la comarca del Ampurdán.

Llama la atención que la Sociedad tampoco apareciera incorporada a las páginas del *Diccionario* de Pascual Madoz. Aunque éste subrayaba el espíritu de asociación de la villa y citaba la existencia de algunas sociedades como la concerniente a los *Amigos del País*, el Casino o la *Sociedad de Arqueología*, además de otras cinco sociedades de socorros mutuos, el texto no hacía mención, empero, a la que luego sería considerada, por sus propios socios, como la primera Sociedad de agricultura del «país» concebida para promover la economía rural⁵⁶².

⁵⁶⁰ Sesión del 18 de abril de 1845, en *Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados en la legislatura de 1844 á 1845*, Tomo III, Imprenta Nacional, Madrid, 1845, pág. 10.

⁵⁶¹ A raíz del viaje a España del político liberal británico Richard Cobden, perteneciente a la Liga Anti-Corn Law, los seguidores de las doctrinas librecambistas se vieron reforzados, produciéndose, al mismo tiempo, una sensación de aislamiento para quienes abogaban todavía por una política económica basada en un proteccionismo a ultranza. Este aspecto está recogido, por ejemplo, en Lluch, Ernest, “La «gira triomfal» de Cobden per Espanya (1846)”, *Recerques; Història, economia i cultura*, número 21, (Ejemplar dedicado a: Homenatge á Pierre Vilar). Vol. II, 1988, págs. 71 a 90. Asimismo, la idea está recogida en Montañés Primicia, Enrique, ob. cit., pág. 148.

⁵⁶² En efecto, a pesar de la aparición del volumen VIII en 1847, incorporando la descripción detallada de dicha población al contenido de la obra, no se menciona la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán* en ninguna de sus páginas. Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo VIII, Imprenta del Diccionario Geográfico, Madrid, 1847, págs. 92 y 93. En relación a la condición de la *Sociedad de Agricultura*, como primera asociación en España con carácter agrícola y rural, véase el discurso de Narciso Fages de Roma en *La Granja*, número 10, octubre de 1853, págs. 188 y 189. En dicho número, Romá, en referencia a la Sociedad agrícola, advierte del “*exclusivo objeto de fomentar la economía rural*”.

Las primeras noticias de la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán* aparecieron en *El Bien del País*, periódico que por entonces formaba parte de la *Sociedad Académica y Recreativa* de Figueras, y que servía de boletín de agricultura, además de contribuir como soporte para la divulgación de conocimientos que tenían una cierta utilidad. Gracias a la serie de ejemplares conservados, tanto de *El Bien del País* como de *La Granja*, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Municipal de Madrid, se han podido detallar parte de las actividades iniciadas por un numeroso grupo de propietarios y hacendados agrícolas de la región gerundense el Ampurdán.

En realidad, no era el primer intento en la provincia de Gerona por conseguir una asociación económica que aunara los esfuerzos de comerciantes e industriales. Jaume Oliveras, a punto de finalizar el siglo XVIII, no logró la movilización de las clases más acomodadas de la provincia, muy probablemente por coincidir con un momento de alza en los precios del trigo⁵⁶³. Unas décadas más tarde, durante el mes de noviembre de 1845, aparecía impresa una de las primeras noticias de la *Sociedad de Agricultura*, anunciando la formación de una Comisión fundadora entre las que se encontraban los propietarios José de Pagés, José María de Puig, Sebastián Casellas, además del propio Narciso Fages de Romá⁵⁶⁴. Desde el mismo inicio de sus actividades y antes, incluso, de que fuesen redactados sus Reglamentos, la Sociedad afianzó su atención en un primer propósito: “Llamando gravemente la atencion de la misma la extremada baratura que sufren los granos del país, se han procurado datos acerca las causas de tan grave mal, y se ha redactado y aprobado una exposición para S. M. de que se dará conocimiento á los Sres. Socios”⁵⁶⁵.

Las Bases, aprobadas aquel mismo mes, advertían del carácter esencialmente económico de la Sociedad, apuntando entre sus objetivos el aumento de la producción agrícola, la mejora de la calidad y, de una forma particular, la liberalización de la competencia que pudiera surgir del exterior⁵⁶⁶. Con la aprobación de las Bases, *El Bien del País* quedaba,

⁵⁶³ Lluch, Ernest (1973), pág. 162 y Congost, Rosa, *Els propietaris i els altres. La regió de Girona 1768-1862*, EUMO Editorial, Vic, 1990, pág. 237.

⁵⁶⁴ *El Bien del País*, noviembre de 1845, págs. 123 a 125.

⁵⁶⁵ *Ibidem*, pág. 124.

⁵⁶⁶ El punto 2º de las Bases Constitutivas señalaba lo siguiente: “El objeto de la Sociedad es el fomento de la Agricultura del país, teniendo en cuenta el conseguir mayores productos,

además, convertido en el instrumento escrito de la *Sociedad Académica*, así como de la propia *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*⁵⁶⁷.

En consecuencia, la política parecía una estrategia al margen. Una idea que, en principio, iba a distinguir a los socios hacendados que estaban próximos a comprometerse con la clase propietaria. El artículo 3º del Reglamento de la Sociedad, referido al rechazo a toda tendencia política, llegó incluso a aparecer en las portadas de *El Bien del País* en sus primeros números. Parecía evidente que la unión de los grandes terratenientes de la región solo podía llegar de la mano de Romá, siempre bajo una divisa unívoca de la unidad frente a la posibilidad de acarrear futuras divisiones políticas.

Sin embargo, lo anterior tenía una serie de matices que merece la pena abordar. Si bien es cierto que hacia 1850 la *Sociedad de Agricultura* había logrado tener 152 socios, al margen este número de personas comprometidas, no era ningún secreto que la práctica totalidad de los mismos formaban parte de las listas de electores. Familias principales de la región gerundense que, por otro lado, en muchos casos mantenían una estrecha vinculación con los principales ayuntamientos, las diputaciones y, por ende, con las recién creadas Juntas Provinciales de Agricultura, cuyo mejor ejemplo estaba representado por Fages de Romá, iniciador y fundador de la Asociación. Con la ocupación, por parte de los principales hacendados, de los cargos más importantes a nivel político en toda la región, el entendimiento entre la *Sociedad de Agricultura* y los diputados en Madrid, se hizo muy pronto evidente⁵⁶⁸. Una situación que, en una cierta medida, venía a recordar el trabajo desarrollado por los diputados comprometidos con los grandes propietarios y con el proteccionismo triguero incoado en las Cortes de 1820. Con todo ello, la ausencia, todavía, de una legislación que fuera capaz de normalizar las asociaciones en España, parecía tener un singular efecto en un Estado donde el camino hacia la política podía desarrollarse,

mejorar su calidad y asegurarles el valor que merezcan, procurando libertarlos de la competencia de frutos extranjeros que no autoricen las leyes". *Ibíd.*, pág. 125.

⁵⁶⁷ En la cabecera del mes de noviembre de 1845 se podía leer el título completo de la publicación que, a partir de ese momento, pasaba a denominarse: *El Bien del País, periódico de las Sociedades Académica y Recreativa de Figueras, y de Agricultura del Ampurdán*.

⁵⁶⁸ Esta misma idea es sugerida por Rosa Congost, cuya explicación la fundamenta de la siguiente forma: "Els hisendats gironins ocupaven en aquell moment els principals càrrecs polítics i hi havia, per tant, una perfecta entesa entre les associacions, el governador, els principals ajuntaments, la diputació i els diputats a corts; les proclames de la societat arribaven sense problemes a Madrid", Congost, Rosa (1990), pág. 238.

como se ha señalado, por la acción conjunta de los más destacados terratenientes del país.

La rápida presencia de propietarios y labradores de la región en las filas de la nueva asociación agrícola, trajo como primera consecuencia el compromiso para mejorar los cultivos y aumentar la producción, lo que debía provocar a medio plazo un aumento de las rentas en los productores agrícolas. Era frecuente leer a través de las páginas de su boletín las facilidades y las colaboraciones de algunos de sus afiliados, por lo general propietarios con suficientes recursos, para experimentar con prados artificiales y forrajes, o para el ensayo y puesta en marcha de trillas y arados modificados para la ocasión⁵⁶⁹.

La defensa de la propiedad y el respeto a la clase agricultora había sido una premisa esencial en Fages de Romá. A ello había que sumar el progreso económico de todo el Estado, necesario para evitar desequilibrios en las rentas y en el patrimonio. En su ontología particular, la agricultura formaba parte de la fuerza moral de los Estados, además de subsistir en la misma un poder material perfectamente fundamentado. Estas ideas, junto con sus trabajos, le llevarían a ser elegido vocal de la Junta Provincial de Agricultura de Gerona en 1848. Un año después, el Gobierno de Madrid le designaba Comisario Regio de Agricultura de la Provincia⁵⁷⁰. Romá, asumía así las riendas del programa agrario gerundense. Las formas de asociación, aunque todavía reducidas al ámbito comarcal, no dejaban de ser una constante reivindicación, necesaria para alcanzar el respeto al que tantas veces se refería el propio Romá.

Esta defensa y ese respeto se conseguirán de seguro si se ponen en combinación y se dirigen á un mismo fin los poderosos elementos con que cuentan en todos los países las clases propietaria y cultivadora. Aun cuando las Sociedades de Agricultura no produjesen otro resultado que el de hacer cesar el aislamiento en que se han hallado hasta el presente los propietarios del suelo y los que le explotan, produciría resultados inmensos, pues desde

⁵⁶⁹ Algunos ejemplos son los del marqués de La Torre, José Antonio Llobet, o Francisco Moranges. *El Bien del País*, febrero y septiembre de 1846, y septiembre de 1848, respectivamente.

⁵⁷⁰ La información relativa a las Juntas Provinciales y su establecimiento en la provincia de Gerona puede verse en *El Bien del País*, número 3, junio de 1848, págs. 17 y 18. En relación al nombramiento de Romá como Comisario Regio de Agricultura, en *El Bien del País*, número 11, febrero de 1849, págs. 73, 74, 75.

el momento que cese este aislamiento, se crea un centro de acción y fuerza á que nada es capaz de resistir⁵⁷¹.

Al lado de todo lo expuesto hasta ahora, en los estudios de las relaciones nominales de contribuyentes y propiedades «amillaramientos», así como en los archivos patrimoniales correspondientes a la primera mitad del siglo XIX en las comarcas de la provincia de Gerona, llevados a cabo por la profesora de historia económica Rosa Congost a finales de los años ochenta de la pasada centuria, se ha puesto de manifiesto la existencia de unas unidades de explotación que apenas superaban las 50 hectáreas. Esta misma cuestión ya fue abordada en el año 1865 por Pedro Martínez Quintanilla que, basándose en los datos del *Anuario Estadístico* de 1858, los datos proporcionados por la Junta General Estadística derivados de las encuestas realizadas en varios municipios, y de los propios amillaramientos, estableció datos concretos de la producción agrícola, además de la distribución territorial en las comarcas gerundenses⁵⁷². Los trabajos acerca de la sociedad agraria en esta región de Cataluña, vistos los catastros de finales del siglo XVIII y los mencionados amillaramientos de la centuria posterior, evidencian una realidad de una sociedad vertebrada en pequeñas unidades de explotación que, fundamentalmente, estaban dirigidas al autoconsumo⁵⁷³. No en vano, a este respecto, Narciso Fages de Romá advertía todavía en 1849 el estado de fragmentación que vivían las clases agrarias.

El aislamiento en que vive el propietario reduce á la impotencia y sume en la degradación á la clase que es llamada por la naturaleza á brillar sobre todas las demás y á preponderar en el estado social y civil; así es que los comerciantes, los fabricantes, los empleados, los facultativos, y hasta los que se llamaban antes gremios de los oficios mas humildes acuden en Cuerpo ó por medio de representantes siempre que les conviene, y hacen valer sus pretensiones y salen airoso en sus demandas, al paso que los propietarios y cultivadores, á pesar de ser el nervio del estado y los sustentadores de todas

⁵⁷¹ *El Bien del País*, número 3, mayo de 1846, pág. 22.

⁵⁷² Martínez Quintanilla, Pedro, *La provincia de Gerona. Datos Estadísticos*, Imprenta de F. Dorca sucesor de J. Grases, Gerona, 1863, págs. 295 a 304.

⁵⁷³ Congost, Rosa, "Presión demográfica, relaciones de clase y producción agrícola en la región de Gerona (1768-1862)", *Agricultura y Sociedad*, número 50, enero-marzo 1989, pág. 173.

las demas clases, no saben unirse para presentar una personificación, y por consiguiente no son respetados⁵⁷⁴.

Las comarcas del Ampurdán, de las que tantas veces escribiría Romá, se habían configurado y estructurado en los antiguos «remences» enfiteutas de la Edad Media. Propietarios que bajo un régimen feudal disponían de extensos dominios y campos de cultivo. Durante siglos, los propietarios obtuvieron una estabilidad, tanto en las rentas como en los sistemas de explotación de las tierras que, salvo excepciones, apenas llegaron a soportar cambios significativos. Tras la abolición de los diezmos y del cobro de las indemnizaciones correspondientes, los contratos de aparcería dieron lugar a un continuo requerimiento, por parte de los propietarios, del pago de las antiguas cuotas «decimales». Lo cierto es que con la redención de los censos y el debate iniciado a partir de 1811, se comenzaron a verter algunas apreciaciones que, en opinión de Rosa Congost, no pretendían sino legitimar la práctica de la enfiteusis en lo que era ya, por aquellos años, el nuevo «orden liberal»⁵⁷⁵.

Dada la distinta naturaleza de las tierras en la Península, los efectos sobre la agricultura en el Ampurdán, durante el advenimiento liberal, fueron muy significativos. Hubo propietarios que, o bien aceptaron los idearios carlistas o bien decidieron adquirir bienes desamortizados. Estos últimos fueron los que, aceptando los principios de liberalismo, entendieron la necesidad que existía de participar en las nuevas instituciones conformadas para la ocasión. Como ya sabemos, quienes finalmente se aventuraron a aceptar la segunda opción, no tardaron en comprobar cómo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el poder político iba a quedar unido al prestigio de los grandes propietarios de tierras gerundenses⁵⁷⁶.

Este diagnóstico ha llevado a algunos investigadores a pensar en Cataluña como uno de los ejemplos más claros dentro de la corriente productivista, siendo el Ampurdán una de las comarcas que más matices presentaba en este sentido. Las investigaciones de Francesc Romagosa

⁵⁷⁴ Fages de Romá, Narciso, *Memoria acerca de los medios de mas fácil y oportuna aplicacion para promover los adelantamientos de nuestra economía rural, presentada á la Junta de Agricultura de la provincia de Gerona en su primera sesion general*, Imprenta y Librería de Gregorio Matas de Bodalles, Figueras, 1849, págs. 12 y 13.

⁵⁷⁵ *Ibidem*, pág. 179.

⁵⁷⁶ *Ibidem*, pág. 180.

Casals, relativas a dicha región, apuntan a que el productivismo se asentó a lo largo del siglo XIX, hecho que provocó una intensificación de las producciones. Esta circunstancia se tradujo en la necesaria roturación de nuevas tierras, lo que en muchos casos exigió importantes transformaciones en el drenaje, dando lugar a la eliminación de importantes humedales en toda la comarca⁵⁷⁷.

La puesta en marcha de la Asociación en el Ampurdán, coincidió con un momento de avance en los cultivos comercializables que permitían compensar el déficit triguero de la región. Tanto las producciones de viñedo como aquellas otras vinculadas al olivo, a los frutos secos y al corcho, evitaron, en cierta forma, un crecimiento unilineal permitiendo, no obstante, mantener la producción cerealícola en la base de la economía agraria en toda la provincia de Gerona (véase el cuadro 17). Este nivel productivo que presentaban los cereales, junto al de las legumbres y las patatas, sirvió en cada partido judicial para completar el autoconsumo de sus habitantes, sorteando la posibilidad de que se produjera un proceso de sustitución del trigo en prácticamente toda la región⁵⁷⁸.

Aún así, de la exposición enviada a la Reina en 1845 sobre la incursión de granos del exterior, quedó en años sucesivos una preocupación manifestada de forma permanente por los propietarios, a través de continuas proclamas y escritos que, de una manera sucesiva, fueron apareciendo, primero en *El Bien del País*, pasando a la finalización de éste a la nueva publicación en *La Granja*. No es de extrañar, por tanto, que todavía en 1850 pudieran leerse artículos en los que se advertía de la seria amenaza que sobre los cereales catalanes estaba por llegar.

En todo nuestro litoral empieza á hacerse sentir el movimiento ese progresivo que se da el comercio, cuyas operaciones no se limitan ya al mercado considerable de Barcelona y otros centros de poblacion industrial, si que tambien en cuantos otros puede, ejerce un tráfico lucrativo por correr los precios de cereales producidos en los mismos á precios elevados. El resultado cierto de esta lucha entre los productores y el comercio ha de ser en perjuicio de los primeros. Importa pues que nuestros cultivadores prevean ese

⁵⁷⁷ Romagosa Casals, Francesc, *Els aiguamolls de l'Empordà: un paisatge en transformació*, Tesi Doctoral, Departament de Geografia. Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona, juliol de 2007, págs. 221 y 22.

⁵⁷⁸ Congost, Rosa (1989), ob. cit., pág. 164.

porvenir, y que acuerden los medios para dar á su produccion otra direccion. Recurran á los henos y forrages, crien y ceben ganados de toda clase; pónganse en la posibilidad de abastecer de carnes y primeras materias á las poblaciones industriales, ya que no les sea posible sostener la concurrencia en los mercados de cereales⁵⁷⁹.

CUADRO 17

Producción de algunos cereales, legumbres y caldos en los Partidos Judiciales de Gerona, recogidos por la Junta General de Estadística en 1860, correspondientes a la cosecha del año 1859

Partidos	Trigo (cuarteras)	Cebada (cuarteras)	Maíz (cuarteras)	Habas (cuarteras)	Patatas (arrobas)	Aceite (olivo) (mallales)	Vino (mallales)
Bisbal (La)	141.500	17.000	21.000	21.000	240.000	80.000	250.000
Figueras	150.000	13.000	34.000	18.000	380.000	900.000	1.600.000
Gerona	245.000	20.000	50.000	34.000	300.000	200.000	500.000
Olot	100.000	3.000	84.000	8.000	1110.000	30.000	40.000
Puigcerdá	41.500	3.500	12.000	400	3.800.000	30.000	40.000
Santa Coloma	108.200	12.000	25.000	25.000	360.000	3.000	160.000
	786.200	68.500	226.000	106.400	5.190.000	1.213.000	2.550.000

Una *cuartera* de Gerona = 72,32 litros; 1 *arroba* = 16,4 kilogramos; 1 *mallal* de aceite = 13,035 litros, y de vino = 15,48 litros

FUENTE: Martínez Quintanilla, Pedro, *La provincia de Gerona. Datos Estadísticos*, Imprenta de F. Dorca sucesor de J. Grases, Gerona, 1863, pág.166.

No eran exclusivamente los trigos castellanos la mayor preocupación de los propietarios y productores gerundenses, sino la afluencia que se esperaba de los granos procedentes de algunas provincias de Andalucía, además de la harina, cuyo origen sí se encontraba en importantes áreas productoras de Castilla la Vieja. Pero, además, un problema más apremiante

⁵⁷⁹ Foix, Miguel de, "Baja que amenaza á nuestros cereales y medio de ocurrir al daño", *La Granja*, número 7, julio de 1850, pág. 123.

era la iniciación de las obras de un nuevo canal de riego que habría de afectar a distintas comarcas agrícolas de Cataluña. En uno de sus artículos, Miguel de Foix lo explicaba así:

Otro acontecimiento amaga así mismo los intereses agrícolas de nuestra provincia. Es este la realización de un canal de riego en los llanos del Urgel. Si no estamos mal informados la empresa que se ha formado al intento, cuenta con los fondos necesarios y con una franca y decidida protección del Gobierno. ¿Cuál fuera en este caso la situación de nuestros cultivadores? Nuestros abuelos vendían los trigos á 40 reales, pero en verdad se contentaban con poco; era su vida menos cómoda, mas frugal; sus nietos no son así contentadizos y nuestra agricultura ha venido á ser mas costosa⁵⁸⁰.

Análogamente, cabe preguntarse qué alternativas mostraron los propietarios catalanes a la hora de proteger su agricultura, y si ésta superó los retos a los que se refería Miguel de Foix en el año 1850. Basándonos en los datos de la época, resulta difícil imaginar los progresos alcanzados en la agricultura ampurdanesa de mediados del siglo XIX, si no tenemos en cuenta los esfuerzos realizados por los grupos de propietarios, amén de otras colectividades de eruditos que mostraron su preocupación e interés por los cultivos y la agronomía del «país». En el año 1863, Fermín Caballero publicó un trabajo dedicado a la población rural, obra que fue premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas el año anterior, y en la que se refería en estos términos al trabajo agrícola de sus gentes:

En la provincia de Gerona, y señaladamente en el Ampurdan, se sigue la práctica de año y vez, donde faltan abonos, y por eso se considera abusivo el resiembro; mas en los campos que pueden beneficiarse hay sucesión de cosechas, alternando los cereales y las legumbres; y donde prevalecen la alfalfa, esparceta y otras forrajeras, siguen á ellas tres ó cuatro cosechas consecutivas de trigo y avena. Se suelen entregar las labores á un menestral ó colono, cuando no puede manejarlas el dueño; pero el sistema general es el arriendo á parte de frutos, dos tercios para el arrendatario y un tercio para el propietario; renta subida que acredita bastante producción. El término medio del terreno que cultiva una familia son cincuenta y cuatro vesanas reales, unas doce hectáreas, que prueba también la intensidad del cultivo.

⁵⁸⁰ Ibídem. En relación al proceso de construcción del canal, en 1847 se constituyó, en efecto, una empresa cuyo director fue el ingeniero Pedro de Andrés y Puigdollers. Apoyado el proyecto por la propia Reina Isabel II, las obras comenzaron en noviembre de 1853, siendo la primera finca regada propiedad de Jaume Mestres, en tierras de Tarassó. Véase de Renyer, Josep, *Historia del canal d'Urgell (1346-1862)*, Fondarella, Palestra, D. L., 1990.

Modernamente Tarragona y el Ampurdan han mejorado mucho su agricultura: en la primera, si bien está reservado el vivir en el campo para los colonos, alternan para la labranza los bueyes con el ganado mular: en el segundo se aumentan los prados artificiales, crece la ganadería, y los labradores mejoran su bienestar; á lo que ha contribuido el ejemplo de propietarios inteligentes y celosos, que se ocupan del cultivo, hasta ahora confiado exclusivamente á la pobreza y á la ignorancia⁵⁸¹.

De las observaciones realizadas por Fermín Caballero, se comprende de inmediato la importancia que estaban adquiriendo, por aquellos mismos años, los prados artificiales en el Ampurdán. En cierta medida, la *Sociedad de Agricultura* se había mostrado siempre partidaria de los mismos, al considerarlos un símbolo de las nuevas innovaciones en la agricultura, asegurando la subsistencia a la ganadería⁵⁸². Esta nueva categoría de plantas, en efecto, mejoraban la rotación de los cultivos y, consecuentemente, afectaban a la producción ganadera, cuyas cabezas eran generalmente alimentadas con hierbas procedentes de las dehesas y los prados naturales⁵⁸³.

En otro orden de cosas, entre los años 1845 y 1850, la *Asociación de Agricultura* llegó a adquirir un cierto reconocimiento, permitiéndole mediar en no pocos conflictos relacionados con la propiedad agrícola, las cargas tributarias, además de las dificultades añadidas que, de manera sucesiva, iban llegando desde el gobierno de Madrid. No en vano, en febrero de 1846, la Comisión fundadora liderada por José de Pagés, su presidente, Carlos Bosch, Mauricio Albert y Terrades, así como su promotor Narciso Fages de Romá, en conformidad con algunos socios más, puso en conocimiento de la Reina las dificultades que se derivaban de la creciente permisibilidad respecto a la entrada de granos extranjeros y de su constante paso a la Península a través del contrabando de cabotaje. Un daño que, además de

⁵⁸¹ Caballero, Fermín, *Memoria sobre el fomento de la población rural, premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso de 1862*, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1863, pág. 35.

⁵⁸² Así está recogido en un artículo sin firmar, en el que se llega a decir que los prados artificiales forman parte del “verdadero progreso agrícola que tiene emprendida, y que nadie puede negar á esta Sociedad la gloria de impulsar”. Entre las plantas enumeradas describe, por ejemplo, la esparceta y la alfalfa. *La Granja*, número 6, junio de 1851, pág. 110.

⁵⁸³ Armengol i Custal, Dolors, “La agricultura en el Alto Ampurdán a mediados del siglo XIX”, *Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos*, vol. 14, 1979, pág. 49.

menoscabar la actividad de los propietarios de la región y disminuir sus expectativas de beneficios, afectaba también a la «Agricultura nacional»⁵⁸⁴.

Aquel mismo año de 1846, las nuevas Cortes volvían a llenar sus bancos, devolviendo un cierto protagonismo a los diputados, especialmente después de los contactos entre los sectores puritanos del moderantismo y los recién llegados progresistas. Concluido el gobierno de Francisco Javier de Istúriz, la gestión de su sucesor, el duque de Sotomayor, y especialmente la de su ministro de Hacienda, Ramón de Santillán, dio lugar a un retroceso en las expectativas liberalizadoras dejando estancados los proyectos de reforma arancelarias que se habían elaborado en la etapa del ministro Mon⁵⁸⁵.

A estos problemas vino a sumarse la crisis de subsistencias de 1847. La misma, apenas fue comentada en la prensa comarcal. Probablemente, tal y como ha explicado Pedro Díaz Marín, Cataluña era ya por aquellos años una región especializada en el sector vitivinícola, lo que produjo, con toda seguridad, una limitación en la expansión de los cereales. De esta forma, es sabido que cuando las cosechas eran escasas en el interior, la importación de trigo se realizaba a través de los puertos del litoral. De ahí, el paso siguiente era la distribución hacia las zonas del interior. Pese a las dificultades sufridas por muchas regiones de España, la existencia de una crisis de subsistencias en Cataluña se ha considerado menor, aunque con ligeros matices, ya que el abastecimiento de granos, en opinión de Antoni Segura, no parece que corriera peligro a tenor de la entrada de los mismos en los mercados catalanes⁵⁸⁶.

⁵⁸⁴ La *Sociedad de Agricultura del Ampurdán* llegaba a solicitar en su exposición a la Reina: "nuevas y mas represivas prevenciones". *El Bien del País*, número 21, febrero de 1846, págs. 161 a 163. Además de esta solicitud, tenemos constancia de la remisión de un oficio al Ministerio de la Gobernación, con fecha 18 de enero de 1846, solicitando la represión al contrabando de cereales extranjeros. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 10, expediente 13.

⁵⁸⁵ En efecto, Santillán se encontraba más próximo a los planteamientos prohibicionistas. Véase, a este respecto, el punto referido a "La preparación de la reforma arancelaria entre 1845 y 1849" en Comín Comín, Francisco, y Vallejo Pousada, Rafael (2002), ob. cit., pág. 419.

⁵⁸⁶ Segura, Antoni, "El mercat de cereals i Llegumes a Barcelona, 1814-1868, *Recerques*, número 14, año 1983, págs. 177 a 213. Asimismo, otros trabajos relativos a la crisis de 1847 coinciden en señalar una entrada en los mercados catalanes de algo más de 300.000 hectolitros de trigo, así como una cantidad cercana a los 23 millones de kilogramos de harina en 1846. Cataluña era, por aquellos años, la región que mayor concentración evidenciaba en el tráfico de cabotaje, además del principal consumidor del país. Véase de Díaz Marín, Pedro, "Crisis de subsistencia y protesta popular: los motines de 1847", *Historia Agraria*, número 30, SEHA, agosto 2003, págs. 35 y 36.

En otro orden de cosas, mientras las reformas apadrinadas por Santillán alentaban un aumento en las iniciativas parlamentarias por parte de los diputados gaditanos, la Comisión de la *Sociedad de Agricultura* volvía a reclamar, esta vez a las Cortes, la supresión de varias disposiciones recogidas en el Real Decreto de 25 de mayo de 1845, relativa a contribuciones sobre bienes inmuebles, cultivos y ganadería. Decreto que consideraba sujetos a contribución, tanto las casas de labranza como el resto de edificios rústicos, habitualmente utilizados por los propietarios y hacendados como albergue de colonos y ganados de labor. En opinión de los asociados, dichos bienes debían considerarse al margen de la producción, lo que implicaba la exención o, en su caso, la aplicación de una contribución mucho menor⁵⁸⁷.

En medio de todas estas dificultades, la búsqueda de acercamientos entre colectividades societarias cercanas había llevado a la Sociedad ampurdanesa y a la de propietarios de Barcelona, a establecer, en febrero de 1846, un acuerdo entre ellas mediante el cual, ambas se comprometían a contribuir en la defensa de la propiedad y los intereses agrícolas. El acuerdo de «fraternidad» se publicó en el mes de mayo de aquel mismo año. A través de cuatro capítulos que invitaban al acercamiento en el terreno asociativo, la antigua idea relativa al respeto a la propiedad y al fomento de la agricultura empezaba a tener cabida en una parte importante de la sociedad en Cataluña⁵⁸⁸. Con la creación en los años finales de la década de 1840 de distintas sucursales de la *Sociedad de Agricultura* en algunas comarcas del Ampurdán y, especialmente, con el establecimiento a partir del año 1851 del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en Barcelona, el tejido asociativo catalán iba a quedar convertido en una señal inequívoca para los grupos de presión que comenzaban a organizarse.

Aquella cooperación, muchas veces solicitada desde la comunidad propietaria, pudo verificarse, por ejemplo, en la solicitud, así como en los

⁵⁸⁷ *Recopilación extractada, ordenada y metódica de las leyes y reales disposiciones promulgadas en el año 1845*, Imprenta de D. Ramón Martín Indar, Barcelona, 1846, págs. 208 a 230. Los planteamientos u Exposición dirigida por la *Asociación de Agricultura del Ampurdán* a las Cortes están recogidos en *El Bien del País*, número 23, marzo de 1846, págs. 179 y 180.

⁵⁸⁸ El acuerdo de fraternidad entre la *Asociación de Propietarios de Barcelona* y la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán* estaba basado en cuatro puntos esenciales, entre los que se citaban las reuniones y deliberaciones conjuntas de asuntos de interés mutuo, el uso compartido de los medios de prensa, o la comunicación correlativa en la toma de resoluciones. *El Bien del País*, número 3, mayo de 1846, págs. 30 y 31.

trabajos preparatorios del Reglamento que regulaba la creación y la puesta en servicio de la guardia rural⁵⁸⁹. Un hecho, este último, que remarcaba el interés que existía sobre la particular protección que se debía a las propiedades, y que contó con el apoyo de los propietarios de Barcelona. No sabemos, sin embargo, cómo se desarrollaron otras relaciones con entidades e instituciones del resto de localidades y provincias. A la vista de las noticias que iban siendo publicadas a través del periódico que la misma asociación difundía en el Ampurdán, hemos podido conocer la existencia de corresponsales, tanto en las ciudades de Madrid y de Sevilla como en el Rosellón⁵⁹⁰.

Al mismo tiempo que aumentaba la extensión de las tierras cultivadas, la agricultura ampurdanesa había comenzado a experimentar un proceso de intensificación que ya era notable mediado el siglo XIX. Dicho proceso de aceleración en la elevación de los rendimientos era debido, en gran medida, a la modernización y mecanización a la que se habían sometido los campos de cultivo en todas las comarcas del Ampurdán y, desde luego, a la actividad que en este sentido dedicaba la *Sociedad de Agricultura*. Entre 1845 y 1850, una parte importante de su éxito se debía a la alternancia desarrolla en el campo agrícola y en el de la desaprobación a la política del gobierno.

En septiembre de 1847, mediante un nuevo informe elaborado por la Comisión directiva, se volvía a insistir en las dificultades que para la clase propietaria representaba el proyecto de ley que Álvarez Mendizábal, junto a otros diputados, intentaba aprobar en las Cortes sobre contribuciones territoriales⁵⁹¹. Solo unos años más tarde, en 1850, la Asamblea General correspondiente al mes de mayo, puso sobre la mesa de decisiones, entre otras, generalizar el arado de hierro. En concreto, en la propuesta segunda de la Asamblea se cuestiona lo siguiente: “2ª la de si seria útil generalizar el arado de hierro introducido en el país de pocos años á esta parte y reformar

⁵⁸⁹ El tema relativo a la policía rural fue ampliamente difundido en las páginas de la Asociación agrícola. Véanse, por ejemplo, *El Bien del País*, números 13 y 14 correspondientes al mes de octubre de 1846.

⁵⁹⁰ En una reseña presentada por la Comisión fundadora a la Asamblea General de Socios se ponía en conocimiento, en relación a los vínculos establecidos con otras entidades asociativas, lo siguiente: “Ha conseguido ya tener celosos é inteligentes corresponsales en el Rosellon, en Madrid y en Sevilla, y ha entablado relaciones para tenerlos en otros puntos”, Recogido en *El Bien del País*, número 5, junio de 1846, pág. 56.

⁵⁹¹ *El Bien del País*, número 6, septiembre de 1847, págs. 41 a 47.

el comun, que en él se usa, añadiéndole una reja cortante por el lado de la vertedera”⁵⁹².

Los progresos declarados en la nueva instrumentación de labranza, especialmente en los arados de vertedera, se sucederían en los años siguientes, siendo publicados, primero en *El Bien del País*, y posteriormente en *La Granja*, a partir de enero de 1850, periódico que sustituía al anterior como órgano de difusión de la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*. No es extraño, pues, que con los nombramientos de Narciso Fages de Romá, inicialmente como miembro de la Junta de Agricultura de Gerona, y después asumiendo el cargo de Comisario Regio de Agricultura en dicha provincia, se produjera un salto cualitativo y cuantitativo respecto a los intereses agrícolas de la región y de las sociedades de propietarios en toda la comarca⁵⁹³.

La idea de promover asociaciones agrícolas de comarca apareció publicada por primera vez en el número 1 de la revista de agricultura *La Granja*. Desde joven, Fages de Romá había creído que las clases que verdaderamente constituían los Estados eran las de los propietarios agrícolas. A partir de 1850, las aspiraciones de quien había sido el iniciador de una de las primeras asociaciones formada íntegramente por individuos ligados al mundo agrario, estaban resueltas a extender las fronteras del asociacionismo más allá del mero territorio ampurdanés.

¡Qué mucho pues que digamos que los propietarios y cultivadores son los que verdaderamente constituyen el país! Mucho se ha censurado y con razón á aquel Rey que decia. «Yo soy el Estado» pero consideramos que ningun hombre pensador hallaria motivo de justa censura en que las clases propietaria y cultivadora se apropiasen igual frase y dijese nosotros, nosotros somos los que constituimos verdaderamente el país; suprimidnos sino y vereis si puede subsistir esa asociacion política ó civil que llamamos Estado; suprimidnos y vereis que la actual civilización desaparece para renacer el estado de salvages⁵⁹⁴.

⁵⁹² *La Granja*, número 6, junio de 1850, pág. 90.

⁵⁹³ Los miembros de la Junta de Agricultura en Gerona pueden consultarse en *El Bien del País*, número 3, junio de 1848, págs. 17 y 18. El nombramiento de Romá como Comisario Régio para la inspección de la Agricultura, en *El Bien del País*, número 11, febrero de 1849, págs. 73 a 75.

⁵⁹⁴ *La Granja*, número 1, enero de 1850, págs. 3 y 4.

La inclusión en las demarcaciones rurales de las llamadas asociaciones de comarca, eran para Romá una alternativa que debía paliar las deficiencias que la agricultura mostraba como consecuencia de la desatención que el Gobierno de la Nación mantenía desde hacía tiempo. Con la aprobación en julio de 1849 del Real Decreto sobre reuniones de la Junta General de Agricultura, el cambio de actitud en la Asociación fue evidente⁵⁹⁵. Precisamente, los resultados obtenidos con el funcionamiento de la Juntas provinciales, creadas por Real Decreto de 7 de abril de 1848, incitó al Gobierno, y muy especialmente al Ministerio de Fomento, a crear una Junta general de Agricultura que habría de celebrarse anualmente. El nuevo órgano colegiado se reuniría, en efecto, una vez al año en la «estación de otoño» y en él tendrían cabida los miembros de las Juntas provinciales de agricultura, los de las Sociedades Económicas, la Comisión permanente de la *Asociación General de Ganaderos*, y demás personas que se distinguieran por sus conocimientos en agronomía. Los debates, además de las actas, debían ser públicos, lo que proporcionaría una mejor divulgación entre los labradores⁵⁹⁶.

En febrero de 1850, el mismo Fages de Romá, teniendo conocimiento de los movimientos que se venían sucediendo para constituir más comunidades similares en la provincia de Gerona, se congratulaba de la instalación en la propia capital de una asociación de agricultura con las mismas bases que la del Ampurdán, y cuya presidencia iba a recaer en el propietario José de Caramany⁵⁹⁷. En el mes de mayo de aquel año inició sus trabajos la *Sociedad de Agricultura del Bajo Ter*, presidida por Francisco Maranges, para poco después, en el mes de agosto, quedar conformada la *Sociedad de Agricultura de la Comarca de Olot*, ésta última con el beneplácito de los miembros de la Junta provincial y a instancias de un nutrido grupo

⁵⁹⁵ En relación a la importancia que debían tener los propietarios y las asociaciones en todo el país, así como la atención que parecía prestar el Gobierno, Romá explicaba lo siguiente: “*De todos modos, ello es que brilla al fin para España un lucero de esperanza, y que es un deber nuestro, y deber imperioso, poner en obra todos los medios propios para que estas bellas esperanzas tengan cumplida realización*”. *Ibíd.*, pág. 5. El “Real Decreto de 26 de julio mandando reunir en Madrid todos los años una junta general de agricultura”, en Cárdenas, Francisco de, *El Derecho Moderno, Revista de Jurisprudencia y Administración*, Establecimiento tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, Editor, Madrid, 1849, págs. 93 y 94.

⁵⁹⁶ Pérez Juan, José Antonio, *El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, 1847-1851*, INAP, Madrid, 2008, pág. 82, y en Cárdenas, Francisco de, *ob. cit.*, pág. 93.

⁵⁹⁷ *La Granja*, número 2, febrero de 1850, págs. 34 y 35. Los nombres de quienes componían la asociación en *La Granja*, número 8, agosto de 1850, págs. 154 y 155.

de «cultivadores acomodados», entre lo que destacaba su presidente Mas de Xaxás (véase el cuadro 18)⁵⁹⁸.

Con la publicación de las personas incorporadas a la *Sociedad de Agricultura de la Comarca de Santa Coloma de Farnés*, en el número correspondiente al mes de noviembre de 1850 de *La Granja*, el listado de asociaciones comarcales promovido por Romá quedaba concluido⁵⁹⁹. Entre los proyectos pendientes estaba la creación de una asociación más en La Bisbal. Pero este hecho, al parecer, nunca se llegaría a concretar⁶⁰⁰.

CUADRO 18
Asociaciones Agrícolas de Comarca (Ampurdán)

Nombre	Presidente	Vicepresidentes	Fecha de publicación en <i>La Granja</i>
<i>Sociedad de Agricultura del Ampurdán</i>	José de Pagés	- Narciso Fages de Romá - José María de Puig - Sebastián Casellas	Noviembre 1845*
<i>Sociedad de agricultura de la comarca de Gerona</i>	José de Caramany	- Joaquín Cors de Guinard - José Coll y Lliura - Joaquín de Carles	Febrero 1850
<i>Sociedad de Agricultura de la Comarca de Olot</i>	José Mas de Xaxás	- José Estorch y Siqués - Narciso Conill	Febrero 1850
<i>Sociedad de Agricultura de la Comarca de Santa Coloma de Farnés</i>	Marcial Iglesias	- Marcial Iglesias - Ramón Geronés	Marzo 1850
<i>Sociedad de Agricultura de la Comarca del Bajo Ter</i>	Francisco Maranges	- Francisco Maranges - Joaquín Ferrer	Abril 1850

* Fecha de la fundación

FUENTE: *La Granja*, números 6 al 11 (junio – noviembre de 1850).

⁵⁹⁸ La expresión es de Narciso Fages de Romá que a este respecto se manifestaba de la siguiente forma: “Confianza decimos otra vez, confianza en las asociaciones, fomento a las mismas; que no haya propietario alguno, que no haya cultivador acomodado que no considere como un desdoro el no tener su nombre inscrito en los registros de las mismas”, *Ibidem*, pág. 35. Los nombres de todos los propietarios miembros de la *Sociedad de Agricultura de la Comarca de Olot* aparecen detallados en *La Granja*, número 10, octubre de 1850, pág. 180.

⁵⁹⁹ *La Granja*, número 11, noviembre de 1850, págs. 200 y 201.

⁶⁰⁰ *La Granja*, número 4, abril de 1850, pág. 71.

La llamada a la colaboración fue, en definitiva, un emplazamiento a la organización de toda la clase propietaria agrícola que se sobrepuso, incluso, a las divisiones que todavía provocaba los resentimientos de la última guerra carlista en Cataluña. En ese difícil contexto, Fages de Romá siempre había tenido claro que la religión y las ideas políticas podían tener su repercusión a la hora de buscar la unidad. Ese era el paso previo y así lo reflejaba ya en 1846 con estas palabras: “Huiremos como hasta el presente de la Política y de cuanto tenga relacion con ella”⁶⁰¹. La unidad requerida se había hecho ostensible en 1850 con la creación de asociaciones comarcales, de las que Romá no podía ocultar su satisfacción. Esta circunstancia motivó, además, la publicación de un artículo de agradecimiento en *La Granja*, en el que incluía una mención especial al trabajo realizado por los vocales de la Junta Provincial⁶⁰². El citado artículo ya había tenido un precedente en la *Memoria* publicada en 1849, en la que se hacían evidentes las diferenciaciones que debían existir entre los distintos cometidos las Juntas y la Asociaciones libres de agricultores. En este sentido se decía lo siguiente: “No se crea que la existencia de esta Junta provincial puede dispensar la de las asociaciones que reclamo; pues las funciones y organización de estas han de ser distintas. La Junta provincial debe ser la cabeza, pero la cabeza que solo en las sociedades de que se trata puede encontrar el cuerpo y los miembros que necesita”⁶⁰³.

Justo es decir que el rechazo a la militancia política se venía defendido desde distintos escenarios. El propietario Joaquín Ferrer, impulsor de la *Sociedad* en el Bajo Ter, también había sugerido la idea de no militancia con el lema «Fuera Partidos» desde las páginas impresas de *La Granja*⁶⁰⁴. Sin embargo, la fuerza política venía impulsada, muchas veces, por la actitud de los socios que, al mismo tiempo, ocupaban puestos de responsabilidad política y un número en la filas de la *Sociedad de Agricultura*. Un ejemplo de todo ello pudo constatarse tras la aprobación y aplicación del Reglamento sobre actividades de vigilancia y protección de la policía rural en las comarcas del Ampurdán. En 1849, tras la aprobación del Reglamento que regulaba dichas actividades, algunos ayuntamientos pusieron obstáculos al nombramiento de guardas que debían realizar las tareas de vigilancia en las

⁶⁰¹ *El Bien del País*, número 23, marzo de 1846.

⁶⁰² *La Granja*, número 1, enero de 1850, págs. 2 a 8.

⁶⁰³ Fages de Romá, Narciso (1849), pág. 14.

⁶⁰⁴ *La Granja*, número 7, julio de 1850, pág. 119.

propiedades. La situación quedó resuelta desde el propio Gobierno de la Provincia, en cuyo Boletín Oficial fue publicado un formulario para facilitar a todos los municipios su aplicación y puesta en servicio de la mencionada Guardia Rural⁶⁰⁵. Esa actitud de cierto “enojo”, también quedó recogida en las páginas del periódico, propiedad de la *Asociación*.

Decíamos en nuestro último número que «la institución de la Guardia rural era uno de los mayores beneficios que debe la agricultura á la benévola solicitud del Gobierno de S. M., y que menos por ello debe consentirse que sus benéficos efectos sean contrariados por los que son llamados por la ley á hacerlos mas fecundos». Así nos expresábamos dirigiéndonos á aquellos Alcaldes y Ayuntamientos, de quienes se nos decia, que ya abierta, ya solapadamente trataban de suscitar obstáculos al establecimiento de dicha Guardia, llegando al extremo de oponerlos tambien al logro de los deseos de algunos propietarios, que usando del beneficio de la ley trataban de establecer para la vigilancia de sus propiedades, Guardas particulares jurados, costeados de sus propios fondos, y por consiguiente sostenidos si ninguna clase de gravámen por parte del público⁶⁰⁶.

Las asociaciones de agricultores propietarios creadas en torno al Ampurdán, mantuvieron un constante influjo y estímulo hasta finales del siglo XIX, en la puesta en marcha de nuevas aventuras corporativas y societarias en Cataluña. Sin embargo, con la aparición en Barcelona del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en el año 1851, y el posterior emplazamiento de una delegación del mismo en Figueras, ocho años más tarde, se produjo un decaimiento en las actividades de la Asociación que había sido levantada años atrás por Narciso Fages de Romá. El propio fundador de la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*, iba a ser el encargado de asumir la presidencia de la nueva asociación, hecho que supondría el fin de las actividades de aquélla, a finales de la segunda mitad de la década de los años cincuenta⁶⁰⁷. En el mismo acto de constitución de la Subdelegación

⁶⁰⁵ Los formularios debían ir firmados por el Alcalde del municipio, así como por el Secretario del Ayuntamiento del mismo. Véanse: *Boletín Oficial de la Provincia de Gerona*, número 44, 12 de abril de 1850; *La Granja*, número 6 de junio de 1850, págs. 93 y 94, y número 12 de diciembre de 1850, págs. 231 y 232.

⁶⁰⁶ *La Granja*, número 1, enero de 1851, pág. 1.

⁶⁰⁷ Incluso, la revista *La Granja* había dejado de publicarse, al menos desde finales de 1855. Sobre las últimas actividades de la *Asociación Agrícola del Ampurdán* puede consultarse de Planas i Maresma, Jordi, *Cooperativisme i associacionisme agrari a Catalunya: Els propietaris rurals i l'organització dels interessos agraris al primer terç del segle XX*, Tesis doctoral elaborada per Jordi Planas i Maresma sota la direcció del Dr. Ramon Garrabou i Segura, Departament d'Economia i Història Econòmica. Facultat de Ciències Econòmiques i

del *Instituto Agrícola*, Romá alentaba a los propietarios a unirse a la nueva aventura corporativa remontando el «vuelo» que tan digno nombre había proporcionado a la anterior asociación.

No desmerezcamos, pues, de nuestros antiguos hechos, sostengámonos á su altura, conservemos nuestro puesto, y no olvidemos que si gloria hubo en adquirirle, mengua habría en perderle. Hagamos un nuevo llamamiento á nuestros compañeros que no podrán mostrarse sordos á una voz amiga, hagámosles entender de nuevo como en la asociación está el medio de lograr los altos y benéficos fines que nos proponemos, y como el aislamiento produce la debilidad el abatimiento. Si toda union produce fuerza, ¿qué es lo que no alcanzaria la de los que poseen la tierra y la cultivan?⁶⁰⁸.

Durante los primeros años de coexistencia con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, la asociación ampurdanesa siguió adelante con sus proyectos, sobre todo aquellos que estaban relacionados con la enseñanza agrícola en la comarca y el fomento de la economía rural. Respecto al primero, es sobradamente conocido el hecho de la fundación de la primera granja-escuela en la localidad de Fortianell en 1855. Romá consideraba que era preciso dotar de una mejor enseñanza a los propietarios y generalizar la misma a todos los rincones del Ampurdán. Solo de esta forma podrían conseguirse en un futuro nuevos productos que contrarrestaran el peso de los cereales. Ciertamente es que para que la Granja-Escuela comenzara su andadura, Fages de Romá estimaba que sería preciso contar con la ayuda del Gobierno. Una situación que, a su modo de entender, debía quedar resuelta si la pretensión final era dotar a las regiones de un verdadero sistema de desarrollo en la agricultura. En suma, tanto el avance en la educación como en el desarrollo de las economías rurales quedaba justificado de la siguiente forma:

Al efecto, y ya que es preciso poner en ejercicio prácticas rurales distintas de las conocidas hasta el presente por el país, nada mas conveniente que generalizar la enseñanza de estas mismas prácticas, y como para facilitarla

Empresarials, Universitat Autònoma de Barcelona, setembre de 2003, pág. 277. Una parte sustancial de dicho trabajo fue publicada posteriormente en Planas i Maresma, Jordi, *Els propietaris i l'associacionisme agrari a Catalunya (1890-1936)*, Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona i Documenta Universitaria, Girona, setembre de 2006.

⁶⁰⁸ *Revista de Agricultura Práctica, Economía Rural, Horticultura y Jardinería. Publicada por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, en adelante *RIACSI*, Tomo VIII, 1º de octubre de 1859, Barcelona, pág. 249.

no hay cosa mas propia que el establecimiento de Granjas escuelas que ilustren á los propietarios y que creen la clase de mayordomos del campo desconocida entre nosotros, y cuya falta hace casi imposible el régimen directo, que es el mas fecundo de todos los sistemas de cultivo, estos establecimientos es lo que han pedido nuestros delegados, haciendo conocer que un ligero subsidio bastaria para plantear desde luego la Granja escuela del Ampurdan, pues las cosas se hallan aqui tan adelantadas en este punto, que pronto ya el personal, buscada la hacienda y dispuesto el propietario, es solo el pequeño empuje que del Gobierno se solicita lo que hace falta para dotar al país de un establecimiento que puede ejercer muy eficaz influencia en su prosperidad, allanando la difícil tarea de cambiar las rutinas de un país y de afirmarle en un nuevo sistema de economía rural, que nos ponga en situacion de neutralizar con la consecucion de nuevos productos y con la mejora de los actuales la depreciacion indeclinable de los cereales⁶⁰⁹.

Este deseo, que tantas perspectivas despertaba en la economía rural gerundense, fue finalmente llevado a cabo en 1855. Narciso Heras de Puig, abogado y comisario de montes de la Provincia, calificaba en una Memoria presentada a la Junta de Agricultura, a finales de aquel mismo año, la puesta en funcionamiento de la Granja-Escuela como un importante referente de los progresos agrícolas en España⁶¹⁰. Esta llamada al Estado o a la Nación era igualmente utilizada por parte de la propia Junta, con motivo de la convocatoria del primer concurso ideado para fomentar los todos sectores de la economía rural. El «Concurso de premios para el fomento de la cría caballar y mejora del ganado vacuno» tuvo lugar, finalmente, en el mes de octubre de 1852⁶¹¹.

Un año más tarde se organizó, también por parte la Junta de Agricultura de la Provincia, el «Concurso de premios para el fomento de la economía rural». La medalla de oro de primera clase debía ser adjudicada al

⁶⁰⁹ *La Granja*, número 8, agosto de 1852, págs. 195.

⁶¹⁰ «La Agricultura en la Exposicion Universal de Paris de 1855. Memoria presentada á la M. I. Junta de agricultura de la provincia de Gerona, y leída en la sesion del 2 de noviembre del mismo año por D. Narciso Heras de Puig», *La Granja*, número 6, noviembre de 1855, págs. 115 a 131. Una breve reseña biográfica de Narciso Heras de Puig en Torres Amat, Félix, *Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña*, Imprenta de J. Verdaguer, Barcelona, 1836, pág. 129.

⁶¹¹ *La Granja*, número 3, marzo de 1852, pág. 88. El programa completo apareció en el número 5, correspondiente al mes de mayo de ese mismo año, págs. 146 a 148. Los miembros, tanto de la Junta como de la *Asociación de Agricultura del Ampurdán* consideraron que era el primer concurso de estas características que se celebraba en España.

propietario que acreditase tener la mayor superficie destinada a prados artificiales, siempre que la misma tuviera más de 20 hectáreas. A este respecto, el artículo 2º del programa dejaba claro el destino de los mismos, al especificarse que la producción debía servir para el «sustento» del ganado. Una idea que volvía a resultar innovadora, en opinión de los miembros de la *Sociedad de Agricultura* y del resto de asociaciones comarcales. Todavía más novedosa podía resultar otra de las categorías que estaba llamada a ser premiada al disponer lo siguiente: “Art. 3.º Título de corresponsal de la Junta y medalla de oro de primera clase, al que acreditase haber cultivado con mejor éxito, en una superficie lo menos de media hectárea, sita en la Provincia, una planta tintorea, cuyos productos líquidos superen los del trigo, considerándose éste al precio de 50 reales vellon la cuartera”⁶¹².

Existían, además, premios a los propietarios y cultivadores que exhibieran instrumentos de agricultura desconocidos, así como para quienes presentaran las mejores plantaciones de árboles frutales. En todo caso, los más ilustres hacendados del momento se repartieron los principales premios, estando entre los ganadores varios de los nombres que pertenecían a las sociedades agrícolas de toda la Comarca. José de Pagés, que presidía en aquellos momentos la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*, accedió a dos premios. Narciso Heras de Puig expuso la mejor colección de arados que, aunque adquiridos en el extranjero, no iban a tardar en ser emulados por los constructores Cortacans y Solà. Precisamente, el primero de ellos sería reconocido como el mejor constructor de herramientas de labranza de Gerona⁶¹³.

No caben hoy muchas dudas acerca del resultado del éxito de la oligarquía terrateniente en el Ampurdán. Su influencia a nivel nacional, unida a la dependencia mostrada por parte del «capital» agrario respecto a los grupos de agricultores y propietarios, y al gradual desarrollo de los mercados interiores, no tardaron en conformar, ya en el último cuarto de siglo, sociedades de propietarios más abiertas y menos elitistas, aunque dependientes del «poder» de los grandes hacendados. El sostenido y prolongado acceso a la tierra acaecido a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX, además de la brecha, cada vez más abierta entre los

⁶¹² *La Granja*, número 9, septiembre de 1853, págs. 145 a 150.

⁶¹³ *Ibidem*. El dato de Cortacans y Solà está recogido en el trabajo de Congost, Rosa (1990), ob, cit., pág. 251.

partidarios del proteccionismo y los grandes defensores del librecambio, allanaron el camino a quienes ya se consideraban los grandes mecenas del bienestar en todo el país. Terratenientes, cuya mirada estaba dirigida a la agricultura y que, a través del asociacionismo creciente, no iban a tardar mucho tiempo en asumir por igual, el poder económico y político en el mundo rural.

- La percepción del asociacionismo agrario en el *Diccionario geográfico-estadístico-histórico* de Pascual Madoz

A lo largo de los años cuarenta del siglo XIX, la prensa agrícola seguía manteniendo un elevado interés por las asociaciones de carácter agrario. Ya fuera a través de semanarios o revistas especializadas, la realidad es que las secciones dedicadas a las «asociaciones agrícolas» seguían mantenido a un importante grupo de seguidores, interesados por el estado de las mismas. Al igual que había venido sucediendo desde hacía unos años, la exposición sobre la conveniencia y las virtudes de dichas sociedades era un constante reclamo que habitualmente gustaba ser dirigido a los propietarios del país. Un ejemplo muy significativo fue la aparición del *Semanario Industrial* en 1840, cuyas primeras líneas estaban dedicadas a la agricultura. En particular a las crecientes dificultades por las que atravesaban los cultivadores, y lo manifestaba así: “El principal obstáculo que dificulta ó imposibilita los progresos de nuestra agricultura, consiste en no encontrar el labrador quien le preste oportunamente el dinero que le hace falta á un rédito ó interés moderado”⁶¹⁴.

Entre los remedios declarados estaba la opción de formar sociedades de préstamo a labradores, superando así la vieja institución de los pósitos que, en el año 1800, ya habían sobrepasado los 8.000 establecimientos, siendo fundados en su mayoría por particulares⁶¹⁵. La otra alternativa era, naturalmente, la unión de labradores y propietarios. Fue el propio *Semanario Industrial* el que publicó, solo un mes más tarde, el Reglamento u

⁶¹⁴ *Semanario Industrial*, destinado especialmente a ilustrar a los labradores, á los artesanos, y á todas las clases industriosas de la sociedad por medio de conocimientos útiles, económicos y de fácil aplicación en las necesidades de la vida, en adelante *Semanario Industrial*, número 1, domingo 2 de agosto de 1840, pág. 1.

⁶¹⁵ *Ibídem*.

«Ordinaciones» de la *Unión de Labradores del lugar de Cosuenda* del año 1654. Un ejemplo que, como se explicaba en los decretos o condiciones, atendía al bien común de todos los agricultores⁶¹⁶.

El caso de la localidad zaragozana de Cosuenda no era el único de la época concerniente a las bondades del asociacionismo, ya estuviera éste referido a tiempos pasados o a su implantación en el extranjero. Este aspecto, comentado con anterioridad, nos hace pensar en la existencia de un interés subyacente en aquel momento, un tanto ignorado por la investigación histórica hasta tiempos muy recientes, al menos en todo lo que concernía a las sociedades de agricultores y propietarios durante la primera mitad del XIX⁶¹⁷.

Hay que decir también, que mediada la centuria, no solo la prensa se había hecho eco de la importancia social y económica del asociacionismo. Además del profuso interés que despertaban las Sociedades Económicas, tanto los gremios de labradores como el resto de pequeñas asociaciones que estaban extendidas por la Península, eran, con relativa frecuencia, parafraseadas en distintas obras impresas de muy diferentes categorías⁶¹⁸. En consecuencia, y como explicamos en su momento, hacia el primer cuarto del siglo XIX eran sobradamente conocidas algunas formas asociativas de cierta entidad como la *Sociedad de Labradores de Antequera*, o la *Sociedad de Agricultura de Pareja*, esta última, tal y como se apuntó en apartados

⁶¹⁶ El título completo del mencionado Precepto era: *Tratado de la egecucion de la Union, tesoro y reparo de labradores del lugar de Cosuenda, compuesto por el licenciado Pablo García Romeo, Rector del mismo, é impreso en Zaragoza en 1654*. Los veintiséis artículos o «condiciones» están recogidos en el *Semanario Industrial*, número 6, correspondiente al domingo 6 de setiembre de 1840, págs. 61 a 65. La importancia dispensada a tal asociación de agricultores ocasionó que en los dos números siguientes, del 13 y 20 de septiembre de aquel mismo año, se mantuviera la inserción de varias páginas relativas a la misma.

⁶¹⁷ A las noticias publicadas en este sentido en el *Semanario Industrial* o *El Bien del País*, hay que añadir otras páginas impresas mencionadas más atrás, como el *Ateneo*, el *Semanario de Agricultura y Artes*, la *Gaceta de Madrid*, o *El Amigo del País*. Incluso en el *Semanario Erudito*, del año 1788, ya se dedicaban algunos números al progreso de las asociaciones de agricultores, dentro y fuera de nuestro país.

⁶¹⁸ En efecto, entre los últimos años de 1847 y comienzos de 1848, la Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, que a todos los efectos servía como una parte del actual Ministerio de Agricultura, todavía recibía peticiones de autorización y modificación de Reglamentos por parte de algunos gremios de labradores. Véase AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 12, expediente 1, referido a la modificación y aprobación de las Ordenanzas del Gremio de Labradores de la ciudad de Reus del año 1847.

anteriores, gracias al esfuerzo de notables personajes como Antonio Sandalio de Arias y Costa⁶¹⁹.

Con la aparición de los dieciséis volúmenes del *Diccionario* de Madoz, se iba a producir un notable avance desde una perspectiva cuantitativa, y aun cualitativa, respecto a la obra similar publicada por Sebastián Miñano, el *Diccionario geográfico y estadístico de España y Portugal*, editado entre los años 1826 y 1829. Una obra muy criticada en su momento por Fermín Caballero, quien describió las insuficiencias de la misma en diez *Cuadernos* y un volumen adicional en el que se mostraban numerosos equívocos y desaciertos⁶²⁰.

El *Diccionario* de Miñano, aunque con referencias a las *Sociedades Económicas* de aquellos años, adolecía de un tratamiento específico al resto de grupos y sociedades organizadas, tal como se detallarían años más tarde con Madoz. Ciertamente es que Miñano no mencionaba, por ejemplo, las Sociedades de Antequera o de Pareja, instituidas unos años antes de que hicieran su aparición los once volúmenes del citado trabajo. Ello no es motivo para que hoy no sea valorada, sobre todo, después de comprobar que Madoz también incurriría en serios «olvidos».

El conocido *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar* es una obra publicada en dieciséis tomos, entre los años 1845 y 1850, y en la que está incluida información cuantitativa sobre localización, demografía, instrucción pública, industria, comercio, navegación, caminos, riqueza territorial e impuestos, entre otros muchos datos, pero que tiene, desde un punto de vista de la organización social, aspectos muy interesantes y detallados de una gran parte de la geografía nacional, excepción hecha de los territorios de Puerto Rico, Cuba y Filipinas⁶²¹. Así, determinadas colectividades, como ya advertimos en las

⁶¹⁹ Algunas referencias a la *Sociedad de Labradores de Antequera* pueden encontrarse, además de las fuentes citadas en apartados anteriores, en el *Índice General de las cosas más notables contenidas en los tomos del Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes*, ob. cit., pág. 13.

⁶²⁰ Nos referimos al geógrafo conquense Fermín Caballero y Morgáez (en algunos casos aparece como Morgay), autor de los diez *Cuadernos de la corrección fraterna que dá al presbítero Miñano*, escrita a finales de los años veinte del siglo XIX, así como las *Añadiduras á la corrección fraterna y suplemento al Suplemento de Miñano, ó sea, Tomo XX de su Diccionario geográfico estadístico*, Imprenta de Don Eusebio Aguado, Madrid, 1830.

⁶²¹ Madoz, Pascual, “Prólogo”, ob. cit., pág. XIX. Sobre la imposibilidad de publicar finalmente la parte correspondiente a los territorios de Ultramar véase, por ejemplo:

páginas iniciales de esta investigación, quedaron registradas en las páginas de la colosal obra de Pascual Madoz. Son los casos, por ejemplo, de la *Sociedad de Agricultura de Barbastro*, creada en 1841, la *Sociedad de Labradores de Arjona*, la *Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento*, de 1844, o la citada *Sociedad de Labradores de Antequera*.

La facilidad y comprensión de la obra de Madoz está fundamentada en la organización alfabética de las entradas, disponiendo el contenido de las mismas según su importancia, y dedicando una amplia extensión en las descripciones a las ciudades y capitales más importantes de las distintas provincias; dejando pocas líneas para la explicación de pueblos, aldeas y otros lugares menores. En este sentido, son Madrid y Barcelona, las ciudades con un mayor censo de detalles. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas por Madoz y sus colaboradores quedaron detalladas en el primer volumen, dejando entrever la importancia adquirida por las informaciones de los corresponsales. Hecho que la convierte en una obra de cierta relevancia al tratarse, en realidad, de un verdadero trabajo de campo.

En la elaboración del *Diccionario*, Pascual Madoz se sirvió de la ayuda de un buen número de cronistas, además de contar con un grupo cercano de colaboradores que permitieron organizar la obra, muchas veces seleccionando solo una parte de la abultada información que se recibía⁶²². Este hecho es suficientemente elocuente para comprender la demora en algunos detalles, incluso la omisión en determinados aspectos que debieran haber aparecido entre el glosario de términos. Tanta información fue debida, como se comprenderá, a los los más de quince años que se dedicaron a su definitiva elaboración.

Pasan de mil los ilustrados españoles, que con el mayor desinterés me han favorecido y me favorecen con su correspondencia, remitiendo noticias, enviando artículos, corrigiéndolos despues, por si alguna equivocacion pudo

Tapiador, Francisco J.; Mezo, Josu, y Navarro Andrés, “El «Proyecto Madoz». La reconstrucción del Diccionario de Madoz en la web 2.0”, *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, Volumen XVI, número 916, Universidad de Barcelona, 25 de marzo de 2011, <<http://www.raco.cat/index.php/Biblio3w/issue/view/16417/showToc>>. Para esta investigación hemos utilizado la primera edición de la obra de Madoz, además de la segunda edición del tomo I, editado en 1846. De esta forma, el tomo primero en la segunda edición aparece en su portada con la fecha de 1846.

⁶²² Todavía se desconoce el destino final de las cajas con los datos que originalmente sirvieron para preparar el *Diccionario* de Madoz. Tapiador, Francisco J.; Mezo, Josu, y Navarro Andrés, ob. cit., págs. 1 y 6.

haberse padecido. A estos colaboradores, hoy mis amigos, cuyos nombres daré á conocer con entusiasmo y por gratitud, si logro vencer su excesiva delicadeza, que ecsige de mí por hoy el sacrificio del silencio, á estos colaboradores repito, á su incansable laboriosidad, á su celo por una obra de este género, la mas completa de cuantas hasta el dia se han publicado, debo el haber reunido materiales para mas de cien volúmenes, materiales que yo no podré utilizar, pero de los que en su día entregaré una copia á la corporación que designe el Gobierno, cualesquiera que sean las personas que le compongan, para que mas adelante puedan aprovechar las interesantes noticias que contienen, y que no puede comprender una obra de suyo bastante voluminosa, de suyo bastante cara⁶²³.

En esta misma línea y a diferencia del enfoque dado en el *Diccionario* de Miñano a las Sociedades Económicas de Amigos del País, el trabajo de Madoz destaca, de forma preferencial y pormenorizada, las actividades de las mismas en cada población, definiendo en muchos casos sus distintas secciones y a sus responsables, además de las fechas de sus respectivas fundaciones. No obstante, y teniendo en cuenta lo dicho en apartados anteriores en relación a las *Económicas*, hemos preferido centrar nuestra atención en el resto de formas asociativas recogidas en el *Diccionario geográfico* de Madoz, relacionadas con la agricultura o, en su caso, con la actividad agraria.

Aunque hasta el momento se han dedicado parcelas de estudio muy puntuales a la obra geográfica de Pascual Madoz, la realidad es que las relativas al ámbito asociativo, en particular a las asociaciones agrícolas, salvo excepciones muy contadas no se han realizado hasta la actualidad. En consecuencia, uno de los efectos al verificar la existencia de dichas sociedades en el *Diccionario*, ha sido la localización de comunidades, grupos de corporaciones de agricultores y propietarios de tierras de cultivo, cuya presencia solo ha sido posible evidenciar en la citada fuente.

Algunos ejemplos de lo que acabamos de exponer los encontramos en localidades como Almenara, perteneciente a la antigua provincia de Castellón de la Plana, con una población de 1.270 almas y una sociedad

⁶²³ Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo I, Madrid, 1845, pág. IX. La mención al tiempo dedicado a la realización de la obra puede consultarse en las “Advertencias”, impresas las páginas finales del primer tomo.

dedicada al cultivo de arroz⁶²⁴. Agramunt, en la provincia de Lérida, una asociación de vecinos propietarios era la encargada en la apertura de pozos artesianos para el riego de campos de cultivo y la transformación de tierras áridas en labrantíos⁶²⁵. Poco más podemos saber en la actualidad de una asociación llamada la *Setena*, fundada en el municipio de San Mateo, también en la provincia de Castellón, cuya actividad estaba dedicada a “la mancomunidad de yervas y pastos de los montes de Turmell en virtud de concordias y convenios anteriores”⁶²⁶. Una sociedad agrícola organizada en Ciudad Real, con el título de *La Prosperidad*, proyectaba la construcción de canales de riego en el Guadiana a mediados del siglo XIX, un hecho que no hemos podido confirmar en otras fuentes⁶²⁷. En algunos casos las sociedades de propietarios podían ser los responsables de la construcción de teatros, como en Priego, en la provincia de Córdoba⁶²⁸. Otras veces, vecinos y terratenientes daban lugar a asociaciones como la Sociedad denominada *Unión y Constancia*, en el municipio navarro de Cortés, siempre con el objetivo puesto en el aumento de la productividad agrícola⁶²⁹.

Con ser importantes las sucesivas referencias al asociacionismo local, son igualmente significativas las reseñas a las de asociaciones que ya mantenían un cierto grado de consolidación. La *Sociedad de Labradores* de Antequera es un ejemplo. A la ciudad dedica el *Diccionario* ocho páginas, quedando reflejada la existencia de una comunidad próspera de agricultores en toda la comarca⁶³⁰. Una circunstancia muy similar a la de Arjona, villa perteneciente a la provincia de Jaén, y en la que se describe la existencia de

⁶²⁴ Así lo explica el *Diccionario* de Madoz: “porque una sociedad ha tomado la resolución de desaguar aquellos charquinales, aprovechando las tierras para el cultivo del arroz”. *Ibidem*, Tomo II, Madrid, 1845, pág. 92. El concepto de «almas», está referido a las personas e individuos que habitan en la localidad. En toda la obra, tal y como sucedía en el resto de trabajos realizados en la época del *Diccionario geográfico*, el número de «vecinos» está relacionado con las unidades familiares. Esta «unidad de cuenta» utilizada para determinar el número de habitantes en el transcurso del siglo XIX ya era común en los censos del siglo XVI, adjudicando en algunos casos cinco almas por cada vecino. Gonzalez, Tomas, *Censo de poblacion de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI*, Imprenta Real, Madrid, 1829, pág. 110.

⁶²⁵ Madoz, Pascual, ob. cit, Tomo I, Segunda Edición, Madrid, 1846, pág. 108.

⁶²⁶ *Ibidem*, Tomo XI, Madrid, 1848, pág. 308 y 309.

⁶²⁷ *Ibidem*, Tomo VI, Madrid, 1847, pág. 423.

⁶²⁸ “*El teatro fue construido el año 1841 por una sociedad de 35 hacendados y comerciantes; se halla en la plaza del Palenque*”, *Ibidem*, Tomo XIII, Madrid, 1849, pág. 218.

⁶²⁹ De esta forma queda reseñado en el *Diccionario* de Madoz: “se ha formado entre el canal imperial y la carretera de Navarra y á la distancia de 1.500 varas de la villa, un establecimiento de regadío por cuenta de la sociedad Union y Constancia en virtud de contrato celebrado con los vecinos y terratenientes de la villa”, *Ibidem*, Tomo VII, Segunda Edición, Madrid, 1847, págs. 33 a 35.

⁶³⁰ *Ibidem*, Tomo II, Madrid, 1845, págs. 332 a 339.

“un instituto llamado Sociedad de Labradores, donde se reúnen los propietarios y otras personas notables á tratar de asuntos pertenecientes á la agricultura, á leer los periódicos y otras ocupaciones, que les sirven de recreo y distracción”⁶³¹.

Las grandes capitales de provincia, con Barcelona, Valencia y Sevilla a la cabeza, aparecen muy detalladas. Así, en lo que concierne al estímulo y protección a la agricultura hay que subrayar el amplio artículo dedicado a la *Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento*, fundada en 1844. Una asociación cuyos objetivos estaban dirigidos al desarrollo y avance de las ciencias, la educación y el fomento en materia agrícola, y que contaba a finales de los años cuarenta del siglo XIX con las secciones de comercio, educación, ciencias, bellas artes, artes mecánicas y agricultura. Su importancia se deduce de las notas y precisiones que contiene el *Diccionario* de Madoz, sobre todo en lo relativo a los trabajos llevados a cabo por las cátedras de agricultura, la mención a sus socios y fundadores, así como del resto de empresas acometidas por la propia asociación⁶³².

La protección a la propiedad agrícola está resaltada en varias de las páginas dedicadas a la ciudad de Barcelona. El asociacionismo iniciado por parte de los propietarios barceloneses, del que ya nos fuimos ocupamos en capítulos pasados, es destacado como un elemento esencial en la defensa del territorio dedicado a las explotaciones agrícolas⁶³³. En este mismo sentido y en el referido al desarrollo de la riqueza agrícola, se creó en el año 1846, en la ciudad de Valencia, la *Sociedad Valenciana de Fomento* de la que prácticamente están extraídas las principales líneas de actuación en el *Diccionario geográfico*, colegidas de sus propios Estatutos⁶³⁴. La misma, había sido fundada por Joaquin Fores, José Ordoñez, Peregrin Caruana y Martín, Joaquin Marco, Francisco de Liano, y José Campo, este último, un

⁶³¹ Ibídem, pág. 563.

⁶³² Ibídem, Tomo XIV, Madrid, 1849, págs. 363 y 364.

⁶³³ Los atentados contra la propiedad agrícola y sus posibles soluciones están recogidos en el *Diccionario* de Madoz de la siguiente forma: “La represión de este delito pende tanto de los propietarios, como del Gobierno; los primeros asociándose para la reciproca protección de sus intereses, con el establecimiento de guardas, y otras medidas que permite la ley; y el segundo, por medio de la competente policía rural y la fijación de procedimientos especiales para el conocimiento de los delitos que afectan la seguridad de los frutos del campo, bosques y arbolados”. Ibídem, Tomo III, Madrid, 1846, pág. 437.

⁶³⁴ En efecto, constituida el 22 de mayo de 1846, la Sociedad tenía por objeto en su punto primero: “el fomento y desarrollo de la riqueza agrícola, industrial y mercantil, interesándose en los establecimientos creados, ó que se creen en adelante”. Ibídem, Tomo XV, Madrid, 1849, págs. 423 y 424.

conocido valenciano dedicado a las finanzas. Aunque con el objeto de desarrollar la agricultura, la importancia de este tipo de asociaciones llevaría en muchos casos a la participación e inversión en obras públicas. Así sucedió, por ejemplo, en la propia capital valenciana con la referida *Sociedad de Fomento*, al participar unos años más tarde en las infraestructuras para llevar el agua potable hasta la ciudad, el gas, además del ferrocarril que habría de construirse desde Almansa a Valencia y Tarragona⁶³⁵.

En localidades como Écija, donde la agricultura era la ocupación preferente, se habían organizado algunas comunidades de propietarios y vecinos como la *Sociedad de Fomento*, que venía funcionando desde comienzos de 1843 y ocupándose de distintos trabajos en la ciudad⁶³⁶. Una situación parecida a la de Ribadeo, en la provincia de Lugo, donde otra *Sociedad de Fomento*, establecida en 1840, asumía, además, las tareas de mantenimiento de la única escuela elemental de la ciudad⁶³⁷.

Aunque no conocemos con exactitud cuándo cesaron las actividades de la *Sociedad de Agricultura de Barbastro*, sí sabemos que hacia el año 1841 dicha asociación mostraba ya cierta actividad⁶³⁸. En realidad, gracias al *Diccionario*, hoy podemos advertir algunos detalles de su existencia. Con algo más de seis mil habitantes, además del teatro y de los dos establecimientos entregados al entretenimiento, los popularmente conocidos «cafés», la ciudad oscense de Barbastro contaba con una *Sociedad de Comercio* para regocijo de los comerciantes de la población. Parece que la *Sociedad de Agricultura* proporcionaba, mediado el siglo XIX, muchas satisfacciones a la ciudadanía. A este respecto, conviene reproducir la consideración que a dicha asociación se le atribuía:

Igualmente hay otra sociedad de agricultura, que habiendo principiado bajo los mas brillantes auspicios, prospera de dia en dia, trabaja incesantemente

⁶³⁵ *Estatutos de la Sociedad Valenciana de Fomento*, Imprenta de Lopez y C^a., Valencia, 1846. Algunas de las actividades están recogidas en el trabajo de Monlleó Peris, Rosa, *La burguesía valenciana en el Sexenio democrático*, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 1996, págs. 38 y 39.

⁶³⁶ Una detallada descripción de esta Sociedad en Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo VII, Madrid, 1847, págs. 433 a 438.

⁶³⁷ *Ibidem*, Tomo XIII, Madrid, 1849, pág. 507.

⁶³⁸ El dato relativo a la fecha está recogido de Lecuyer, Marie-Claude (1989), ob. cit., pág. 150.

por la proteccion de la propiedad, y facilita ademas al vecindario el abasto de carnes buenas y baratas⁶³⁹.

Son muchos los aspectos relevantes que aparecen reflejados en el trabajo de Madoz, aun dejando al margen algunas entidades asociativas menores como los denominados pósitos o bancos de labradores, a los que habría que añadir las generosas explicaciones y referencias que de las *Económicas* se hacen en el *Diccionario*. Como era habitual, todavía a mediados del siglo XIX, muchas decisiones municipales que afectaban, tanto a vecinos como a propietarios, eran tratadas de manera frecuente dentro de la localidad; un hecho que habitualmente no ha quedado significado en las propias fuentes historiográficas. De ahí, que de la geografía detallada por Madoz y sus colaboradores, nos hayan servido como referencia muchas de las formas de participación anotadas dentro de los municipios y consistorios que en esos momentos estaban repartidos por el país.

Dentro del extenso listado de lugares enumerados en el *Diccionario geográfico*, algunos ejemplos de lo que acabamos de exponer los podemos encontrar en localidades como Aldeaseca, en la provincia de Ávila, dotada de una casa llamada de «concejo» para la reunión del Ayuntamiento y los vecinos⁶⁴⁰. La descripción realizada de Arevalillo, lugar de la provincia de Segovia, va más allá al indicar que de las cincuenta casas «muy ordinarias», una, la conocida igualmente como «casa del concejo», era utilizada para reuniones y acuerdos de los asuntos generales⁶⁴¹. Dichos concejos, muy citados a lo largo de los dieciséis volúmenes, llegaban a celebrarse en corralones preparados para la ocasión, como así sucedía en Arjonilla, villa perteneciente a la provincia de Jaén⁶⁴². Para los casos en los que debían celebrarse juntas populares, existían edificios habilitados para la ocasión, siendo las grandes casas consistoriales de las más importantes capitales de provincia las que mejores y más «elegantes» medios poseían para la celebración de reuniones⁶⁴³.

⁶³⁹ Ibidem, Tomo III, Madrid, 1846, pág. 391.

⁶⁴⁰ Ibidem, Tomo I, Madrid, 1845, pág. 509.

⁶⁴¹ Ibidem, Tomo II, Madrid, 1845, pág. 530.

⁶⁴² «1 corralon llamado de concejo». Ibidem, Tomo II, Madrid, 1845, pág. 656.

⁶⁴³ De las cuarenta y nueve casas levantadas en la localidad de Atallo, en Navarra, una estaba destinada a albergar las juntas populares. Ibidem, Tomo III, Madrid, 1846, págs. 86 y 87. Existe abundante información, en la práctica totalidad de las ciudades españolas con mayor número de habitantes que aparecen en el *Diccionario* de Madoz, acerca de las edificaciones de carácter municipal destinadas a la celebración de las reuniones más importantes que acaecían en las mismas.

Al lado de todo lo anteriormente explicado, son igualmente numerosas las menciones a otros espacios sociales como eran los cafés, los círculos y ateneos, sin olvidarnos de los liceos y casinos, por citar solo algunos de los más importantes establecimientos donde se fomentaba la asociación. En este sentido, sigue desconociéndose una parte importante de las corporaciones o sectores sociales que los promovían. Al mismo tiempo, la influencia del gremio de los labradores sí es una constante, haciéndose evidente en incontables ocasiones. Consecuentemente, no resulta difícil comprobar la participación de aquéllos, ya sea en la construcción de acequias para riego, en pósitos para el almacenamiento de granos, e incluso en la edificación de ermitas y hospitales⁶⁴⁴. En este último caso, tenemos la constatación de la participación de un importante contingente de labradores en la construcción del *Hospital civil* de la ciudad de Castellón de la Plana. Al mismo acudieron un número considerable de labradores y vecinos para la conducción gratuita de materiales, desempeñando, además, las ocupaciones como peones para su definitiva realización⁶⁴⁵.

Es, pues, evidente, el interés que por el asociacionismo se pretendió mostrar en los distintos apartados recogidos por el *Diccionario* de Pascual Madoz, como una parte más del propósito general expresado en la misma obra⁶⁴⁶. En relación al estado de la agricultura, son varias las líneas dedicadas al fomento de las comunicaciones, la supresión de los diezmos, la creación de bancos agrícolas, así como a los beneficios acarreados por la supresión de los señoríos. A ello, hay que sumar, además, la insistente solicitud de reformas al Gobierno, lo que nos ha llevado a pensar en el desarrollo de la agricultura como uno de los ejes y denominadores comunes más significativos a lo largo de toda la producción geográfica, estadística e histórica de Madoz⁶⁴⁷.

⁶⁴⁴ La ermita conocida por el nombre de San Isidro, en Antequera (Málaga), consta como parte de las obras realizadas por la *Sociedad de Labradores* ubicada en dicha ciudad. Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo II, Madrid, 1845, pág. 336.

⁶⁴⁵ *Ibidem*, Tomo VI, Madrid, 1847, págs. 114 a 120.

⁶⁴⁶ "Contando que una de las utilidades de este Diccionario consiste en reunir y consignar en él noticias de todo género". *Ibidem*, Tomo XV, Madrid, 1849, pág. 474.

⁶⁴⁷ A este respecto resultan muy significativas las líneas dedicadas a la problemática en Albalate de las Nogueras, en la provincia de Cuenca: "*Esta villa está miserable á pesar de la fecundidad de sus tierras, porque la excesiva vinculacion tiene cortado el vuelo á la riqueza territorial, y a los pobres labradores apenas pueden hacer frente con su trabajo á las necesidades de sus familias*". *Ibidem*, Tomo I, Segunda Edición, Madrid, 1846, págs. 290 y 291. Son muchas y distintas las referencias hechas en favor de la mejora de la agricultura en nuestro país. Sirvan también como ejemplos las líneas dedicadas en este sentido a: Almegíjar (Granada), Baena (Córdoba), Barcelona, Jaén, Lérida, Llimiana (Lérida), Melgar de

Además de las comunidades y grupos relacionados con la agricultura y el desarrollo de la misma, de los que hemos intentado hacer un sucinto resumen en este trabajo (véase el cuadro 19), el siempre traído «espíritu» de asociación aparece algunas veces como una apremiante necesidad entre la clases productoras, aunque no siempre como benefactor de los sectores agrícolas⁶⁴⁸. La idea esencial de la época estaba basada en abrir puertas al asociacionismo, bien mediante la simple unión de vecinos, bien a través de asociaciones *ex professo* que contribuyeran a animar la economía y a dar soluciones a los problemas de las clases propietarias. Uno de los problemas más acuciantes era la escasez de medios para incrementar y, en algunos casos, para mantener la irrigación en las tierras de labranza. De ahí que el *Diccionario* presente abundantes ejemplos, con una especial incidencia en los rasgos más sobresalientes del regadío, y de un modo especial en las Comunidades de Regantes⁶⁴⁹.

Durante los primeros decenios del siglo XIX, distintos grupos de propietarios españoles mantuvieron una constante reivindicativa, a la que incorporaron las protestas, con el propósito de exigir mejoras subjetivas. Una cuestión que, como es sabido, hemos venido considerando casi desde el principio de esta investigación. Fueron, en este sentido, las reclamaciones de los propietarios de Almazora, en la antigua provincia Castellón de la Plana, las que, en palabras textuales del Diccionario geográfico “dieron lugar á una

Fermental (Valladolid), Motril (Granada), Palencia, Sam Baudillo de Llobregat (Barcelona), Santander, Sevilla, Tamarite (Huesca), Torrente (Valencia) y Valencia, entre otras muchas localidades y ciudades reunidas por Madoz.

⁶⁴⁸ En relación a la ciudad de Almería quedaba explicado de la siguiente manera: “El espíritu de asociacion que en otros pueblos se dirige á diversos ramos de utilidad general, no se promueve ni egercita en Almería sino para hacer calicatas, abrir pozos, laborear minas y las demas faenas y operaciones consiguientes á buscar metales y ponerlos en circulacion, y esta mino-mania ha ocasionado la falta de brazos necesarios para la agricultura”. *Ibidem*, Tomo II, Madrid, 1845, pág. 109.

⁶⁴⁹ A pesar de estar ampliamente relacionados con la agricultura, y de estar considerados como temas interdisciplinarios, tanto el estudio del regadío como el de las Comunidades de Regantes en España, por su amplitud y sus singularidades han quedado excluidos del tema de investigación que aquí tratamos. Para los historiadores conocedores de esta materia, las asociaciones o comunidades de regantes arrancan en la España ocupada por los pueblos árabes. En este sentido, un buena síntesis puede encontrarse en *Historia de los regadíos en España (... a.C. – 1931)*, Segura Graiño, Cristina (Directora), Asociación Cultural Al-Mudayna, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1991. También en Bentabol y Ureta, Horacio, *Las aguas de España y Portugal*, Est. tip. de la viuda é hijos de M. Tello, Impresor de Cámara de S. M., Madrid, 1900. Edición facsímil publicada por Ediciones El Viso, Madrid, 1995.

CUADRO 19

La sociabilidad agrícola en España según el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz

Localidad, población/Provincia	Nombre/Actividad
<ul style="list-style-type: none"> • Aguilar de Río Alhama (Logroño) • Agramunt (Lérida) • Alberite (Logroño) • Alcañiz (Teruel) • Alcudia de Crispins (Valencia) • Almenara (Castellón de la Plana) • Antella (Valencia) • Antequera (Málaga) • Arafo (Tenerife) • Arjona (Jaén) • Barbastro (Huesca) • Barcelona • Carcar (Navarra) • Castellón de la Plana • Ciudad Real • Ciudad Rodrigo (Salamanca) • Cortés (Navarra) • Denia (Valencia) • Don Benito (Badajoz) • Écija (Sevilla) • Frigiliana (Málaga) • Granada • San Esteban de Granollers (Barcelona) • Higuera La Real (Badajoz) • Huesca • León 	<p>Unión de propietarios y terratenientes para la conservación de una acequia para el riego de propiedades (938)</p> <p>Asociación de vecinos propietarios (2.680)</p> <p>Propietarios contribuyen a la conservación del riego (650)</p> <p>Junta de Gobierno compuesta por los principales propietarios. Ordenanzas aprobadas por el Rey en 1768 (5.100)</p> <p>Sociedad de propietarios para reparto de aguas de riego (626)</p> <p>Una Sociedad para el cultivo de arroz (1.270)</p> <p>Comunidad de Regantes (652)</p> <p><i>Sociedad de Labradores</i> (17.031)</p> <p><i>Asociación de Propietarios</i> para conducción de riegos (850)</p> <p><i>Sociedad de Labradores</i> (3.598)</p> <p><i>Sociedad de Agricultura</i> (6.175)</p> <p><i>Asociación de Propietarios</i> (121.815)</p> <p>En 1763, la unión de labradores hace posible el reparto de tierras; unas 3 robadas para cada uno (1.278)</p> <p>Un gremio de labradores (16.952)</p> <p><i>Sociedad Agrícola "La Prosperidad"</i> (15.660)</p> <p>Un Liceo "<i>cuyos socios son las personas más notables y distinguidas de la plaza</i>" (4.852)</p> <p>Sociedad <i>Unión y Constancia</i>, formada por vecinos y terratenientes para regadio de las tierras (960)</p> <p>Una Sociedad fundada en 1842 para el riego (2.619)</p> <p>Existe una Junta llamada <i>Villas y Lugares</i>, para la conservación de los montes (14.610)</p> <p><i>Sociedad de Fomento</i> (23.722)</p> <p>Una agrupación de vecinos junto al duque de Montellano han construido una acequia para riego (661)</p> <p>Existe un "Casino, <i>asociación amistosa de personas acomodadas y unidas</i>" (61.610)</p> <p>La unión de propietarios y particulares para la construcción de molinos de riego (391)</p> <p>Una comunidad de vecinos construye fuentes para el riego de los campos (3.800)</p> <p>Obras de riego a iniciativa de los vecinos y propietarios (10.576)</p> <p>Un "Casino <i>de selecta reunión con papeles públicos</i>" (7.074)</p>

Localidad, población/Provincia	Nombre/Actividad
<ul style="list-style-type: none"> • San Mateo (Castellón de la Plana) • San Llorens dels Piteus ó Moruns (Lérida) • Motril (Granada) • Priego (Córdoba) • Rivadeo • Salamanca • Sanlúcar La Mayor (Sevilla) • Segovia • Sevilla • Tamarite (Huesca) • Tivenis (Tarragona) • Used (Zaragoza) • Valdepeñas (Ciudad Real) • Valencia • Zaragoza 	<p>Una Sociedad llamada "la Setena" para la mancomunidad de yerbas y pastos de los montes de Turnell (2.546)</p> <p>Existe un banco de labradores, cuyo origen se remonta una Sociedad de agricultores fundada en el año 1343, con objeto de socorrer las necesidades de los labradores (648)</p> <p>Comunidad de propietarios para mantenimiento de una acequia para el riego con Ordenanzas de 1803 (10.170)</p> <p>Una Sociedad de 35 hacendados y comerciantes (13.464)</p> <p><i>Sociedad de Fomento</i>, establecida en 1840</p> <p>El <i>Círculo</i> compuesto por las "<i>personas principales de la clase media de la población</i>" (13.786)</p> <p>Existe una Junta de labradores y propietarios presidida por el Ayuntamiento, que ostenta un banco de labradores (1.739)</p> <p>Un Casino "<i>sostenido por asociados en el que se presenta una reunión bastante escogida</i>" (6.625)</p> <p><i>Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento</i> (100.498)</p> <p><i>Sociedad del Canal de Litera</i> (1.976)</p> <p>La unión de 42 propietarios para adquirir y montar una máquina hidráulica para riego (1.292)</p> <p>Unión de vecinos para construir una presa para el riego del trigo (863)</p> <p>Sociedad La Unión, compuesta por harineros y productores de vino (11.085)</p> <p><i>Sociedad Valenciana de Fomento</i> (66.355)</p> <p>Un Monte-Pío de labradores que procura recursos para que puedan "<i>ejercitarse en sus labores</i>" (30.000)</p>

* Entre paréntesis figuran el número de habitantes

FUENTE: Madoz, Pascual, ob. cit., Tomos I al XVI, Madrid (1845-1850).

de las obras mejores de agricultura”, en referencia a las obras de acondicionamiento para el riego de los campos irrigados por el río Mijares⁶⁵⁰. Entre la amalgama de circunstancias parecidas están las recogidas para las poblaciones de Amusco, en la provincia de Palencia, los descontentos sobre los recursos y la riqueza en Vizcaya, o las quejas presentadas en la ciudad de Ávila por los propietarios y hacendados de la provincia, inherentes a las comunicaciones y la producción en la provincia. A este último caso, el trabajo de Madoz se refiere de la siguiente forma:

Muy graves son las quejas que en este particular recibimos de cuantos tienen algún interés en el bienestar de la provincia, porque reconocidos los buenos caminos como uno de los medios mas principales para aumentar la riqueza y prosperidad de un país, dando salida á sus frutos estancados, y poniendo en movimiento todos sus intereses; la provincia de Avila está viendo su estado humillante, y no puede menos de clamar por un pronto y eficaz remedio⁶⁵¹.

Entre los innumerables aspectos que refleja el *Diccionario geográfico-estadístico-histórico* está también el interés mostrado por vecinos y propietarios por el desarrollo y experimentación en la agricultura. Próxima a concluir la década de los años cuarenta, y a tenor de los datos reseñados por Madoz, existían algunos municipios en España cuyo interés en el fomento y perfección de las técnicas agrícolas era lo suficientemente significativo como para hacer de todo ello un hecho destacable. Este puede ser el caso de la localidad de Bujalance, perteneciente a la provincia de Córdoba, en cuyo término se estaba preparando la instalación de un jardín de ensayo, o de Bujaraloz, localidad cesaraugustana, con la puesta en marcha y la posterior experimentación de nuevas plantaciones bajo la dirección de Mariano Gros, un agrónomo e importante hacendado de la localidad⁶⁵².

Coincidiendo con la publicación de los últimos volúmenes del trabajo llevado a cabo por Pascual Madoz, comenzaron a aparecer, casi de forma simultánea, las Juntas de Agricultura en las principales capitales de provincia. Este hecho causó, sin duda, la aparición en las páginas del *Diccionario* de un cierto número de alusiones relativas a la incipiente

⁶⁵⁰ Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo II, Madrid, 1845, págs. 88 y 89.

⁶⁵¹ Ibídem, Tomo III, Madrid, 1846, pág. 123.

⁶⁵² Ibídem, Tomo IV, Madrid, 1846, págs. 489 y 494.

actividad de las mismas⁶⁵³. La medida, acordada en Consejo de Ministros, dotaba al Estado de unas nuevas corporaciones administrativas, al mismo tiempo que participativas, con el propósito de servir de vehículo de conocimiento en aquellas necesidades que pudieran surgir, tanto a nivel local como regional. Dotadas de autorización para proponer al Gobierno todas aquellas medidas que sirvieran para el fomento de los intereses territoriales, las Juntas, «empachadas» de propietarios y grandes terratenientes, no tardaron en mostrarse como un recurso, cuya oportunidad y rumbo, además del meramente administrativo, llevaba la dirección del poder político y económico en la provincia.

3.- UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO AGRÍCOLA ASOCIATIVO. LA ADMINISTRACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA DURANTE EL REINADO DE ISABEL II

- Del Comercio y las Obras Públicas al Fomento y la Agricultura

La realidad de la España liberal a lo largo de los primeros cincuenta años del siglo XIX, trajo consigo un progresivo alejamiento de lo que hasta esos momentos había sido el rígido centralismo procedente del llamado «Antiguo Régimen». El protagonismo concedido hasta ese momento a la agricultura se había fundamentado esencialmente en las medidas arancelarias sobre la protección de granos, iniciadas a partir de 1820, además de todo lo relacionado con los derechos de la propiedad. Unas soluciones iniciadas precisamente con las primeras reformas agrarias propuestas por los liberales.

Durante la etapa a la que se refiere la presente investigación, la política desarrollada por el Estado en nuestro país, en materia de organización administrativa agraria, se mantuvo en clara coherencia con el desarrollo que se estaba produciendo en otros países europeos. Los sucesivos gobiernos no tardaron en ser consecuentes con la necesidad de equiparar las instituciones agrarias a otros sectores que ya disponían de ciertos órganos administrativos, como así sucedía con los montes, las minas,

⁶⁵³ En concreto, así lo hemos podido comprobar para el caso de las ciudades de Santander, Sevilla y Zamora. *Ibídem*, Tomos XIII, XIV y XV.

etc. De la misma forma que había venido sucediendo con la Administración francesa, y los procesos similares acaecidos tras las unificaciones italiana y alemana, se pusieron en marcha una serie de mecanismos para modelar y organizar medios e instituciones de carácter público que fueran capaces de fomentar la innovación y reforzar el desarrollo agrario en España⁶⁵⁴.

La Administración española, desde la llegada de los Borbones, había sido pionera en instituir las llamadas «Secretarías de Estado y del Despacho», verdaderos precedentes de lo que años más tarde serían los Ministerios. De forma lenta, pero llevados de un esfuerzo perseverante, estos órganos de la Administración fueron abriéndose paso a través de un territorio con un precario entramado social y caracterizado por un centralismo pretérito y tradicional. En estas condiciones, no fue hasta el año 1847 cuando habría de aparecer el primer ente administrativo encargado de atender específicamente los contenidos relacionados con las actividades productivas en sus diferentes ramos, es decir, lo que conocemos comúnmente como «fomento»⁶⁵⁵.

Durante bastante tiempo, la apretada Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda, base en esos momentos de la recaudación, mantuvo inamovible sus estructuras, salvo excepciones, como la creación durante el gobierno de Godoy de la Dirección de Fomento General del Reino. La misma, dirigida en un principio por el diplomático Juan Bautista Virio, asumió algunas competencias que estaban relacionadas con la agricultura, la ganadería y el comercio, además de ostentar atribuciones en la recaudación de algunos impuestos. Fue esta Dirección uno de los primeros órganos de la Administración en proponer la creación de escuelas de agricultura y juntas de labradores en las provincias españolas. La importancia que fue adquiriendo llevó al propio Bautista Virio a plantear al Rey la creación de una Secretaría de Fomento que asumiera los trabajos y proyectos de la Dirección. Muy al contrario, la realidad fue que la propia Dirección de

⁶⁵⁴ Fernández Prieto, Lourenzo, “La política agraria del Estado español contemporáneo hasta 1936. Del propietario innovador al fomento de la innovación en la pequeña explotación”, *Historia Contemporánea*, número 17, 1998, págs. 242 y 243. En este sentido resultan muy interesantes las primeras páginas del magistral trabajo póstumo de Luque Ballesteros (2011), ob. cit., págs. 33 a 71.

⁶⁵⁵ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., págs. 34 y 35.

Fomento terminó por integrarse en la Secretaría de Hacienda, evitando de esta forma que se produjera un menoscabo en las competencias de ésta⁶⁵⁶.

En los trabajos que sobre el tema se han publicado recientemente, se ha querido culpar a una burguesía débil de la inexistencia en nuestro país de unas Administraciones central, provincial y local más eficientes. Ramon Garrabou, atendiendo a la evolución producida en otros sistemas oligárquicos europeos, ha explicado, en cambio, la responsabilidad que, además de la propia burguesía, tuvieron el resto grupos y clases sociales⁶⁵⁷. En realidad, muchas de las iniciativas del Estado solamente comenzaron a ponerse en marcha después de escuchar las demandas de los propietarios «ilustrados», además de una holgada lista de expertos y competentes en la materia que eran apoyados, la mayoría de las veces, por sus propios ayuntamientos o diputaciones⁶⁵⁸. Una situación que se resumía en la toma de conciencia del mundo rural y agrario a través de una significativa elaboración de informes y discusiones en el Gobierno, o mediante peticiones y reclamaciones por parte de los labradores propietarios y vecinos acomodados.

Mirándolo de esta forma, podemos decir que en España la necesidad de financiación surgida en los últimos años de reinado de Fernando VII suscitó que se atendieran nuevas propuestas procedentes de algunos nombres importantes, como los de Javier de Burgos o López Ballesteros, dando lugar a la creación de una nueva *Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento general del Reino*⁶⁵⁹.

⁶⁵⁶ Ibídem, págs. 35 y 36.

⁶⁵⁷ Garrabou, Ramon, “Crecimiento agrario, atraso y marco institucional”, ob. cit., págs. 221 y 222.

⁶⁵⁸ Fernández Prieto, Lourenzo, ob. cit., pág. 247.

⁶⁵⁹ La nueva Secretaría se constituía tras un primer intento fallido en 1830. En el Decreto de aprobación, firmado por Victoriano de Encina y Piedra se apremiaba a que se estableciera “inmediatamente el Ministerio decretado”, y continuaba: “que tenga el título de Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento general del Reino: que sea de aquí en adelante una de las Secretarías del Despacho igual á las existentes, disfrutando de las mismas atribuciones que estas; y que su formacion se realice sin aumento de gastos, y aprovechando las luces y sujetos diseminados actualmente en varios establecimientos”. Véase en el Real decreto mandando establecer la Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento general del Reino, en Nieva, José María de, *Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su Augusta Esposa: Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1832*, Tomo decimoséptimo, Imprenta Real, Madrid, 1833, págs. 237 y 238.

Más aún, la España de la primera mitad del siglo XIX intentó establecer una más clara definición de los conceptos «propietario», «hacendado» y «labrador» en el ámbito del mundo rural. Un propósito que, aunque plausible, solo se quedaría en un intento. En concreto, y a través de la lectura realizada por Rosa Congost de los protocolos notariales de finales del XVIII, son muchos los que se definían como «pagès hacendat», «pagès acendat», incluso «pagès asendat», dependiendo de las diferentes versiones ortográficas correspondientes a los distintos tipos de escritura utilizada en la región⁶⁶⁰. Esta simplificación no era sino una constatación de quienes se habían definido, así mismos, como labradores con capacidad jurídica y con disposición sobre el dominio de sus explotaciones. Situación muy distinta a la que en el sur peninsular implicaba ser titular de una hacienda. El hacendado, tal y como recogió en su trabajo Antonio Luque Ballesteros, implicaba la titularidad de unos bienes materiales, suficientes para el sostenimiento de una economía familiar «desahogada», la mayoría de las veces con el privilegio de disfrutar de una posición social dominante⁶⁶¹.

De los estudios llevados a cabo por Rosa Congost y Antonio Luque, se desprende la falta de acuerdo que seguía existiendo, todavía en el año 1866, de un lenguaje administrativo que concretara los términos de «hacendado» y «propietario». Es más, aún en las postrimerías del siglo XIX, el literato y diplomático cordobés Juan Valera y Alcalá-Galiano, utilizaba la expresión de «hacendado» para hacer referencia a quienes representaban los intereses del campo frente a la Administración⁶⁶².

El labrador era, desde la Edad Media, un término utilizado para describir a la persona que poseía un número conveniente de yuntas que dedicaba a la labranza propia o la de otros. A menudo utilizando el arriendo a nobles, a otros hacendados, e incluso a la Iglesia. De esta forma, si el hacendado se enmarcaba en una singularidad próxima a ser una persona rentista, el labrador lo era como gestor directo de sus propias tareas de labranza⁶⁶³. Tras la desamortización efectuada en el siglo XIX, la situación de estos últimos en algunas regiones españolas fue variando sensiblemente

⁶⁶⁰ Congost, Rosa, «De pagesos a hisendats: Reflexions obre l'anàlisi dels grups socials dominants. La regió de Girona (1780-1840)», en *Recerques*, número 35, Universitat Pompeu Fabra, 1997, págs. 56 y 57.

⁶⁶¹ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 22.

⁶⁶² Lombardero Suárez, Manuel, *Otro don Juan. Vida y pensamiento de Juan Valera*, Editorial Planeta, Barcelona, 2004, pág. 308.

⁶⁶³ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 23.

hasta el extremo de llegar a equipararse en muchos casos a importantes terratenientes. Refiriéndose a este mismo asunto, y en palabras de Carmen Ocaña, la perceptible mejora de numerosos labradores en Andalucía la definía de la siguiente forma: “Los «labradores», ahora convertidos en auténticos propietarios, pueden afrontar, si quieren, con jornaleros, la explotación de sus tierras. La parcelación de éstas, para arrendamientos, es entre estos nuevos terratenientes, una cuestión más ligada a coyunturas de intereses que una condición estructural como lo fue en los grandes patrimonios nobiliarios”⁶⁶⁴. En todo caso, la capacidad económica y el estatus social, tanto de propietarios y labradores, siguieron manteniéndose diferenciados, todavía en los censos electorales correspondientes al año 1866, en buena parte del sur peninsular⁶⁶⁵.

En otro orden de cosas, una parte de la historiografía en nuestro país ha venido insistiendo en la debilidad durante el siglo XIX de las políticas administrativas del Estado destinadas a impulsar el crecimiento en el sector agrario⁶⁶⁶. En este sentido, se ha aludido en no pocas ocasiones, a la falta generalizada de medidas destinadas a potenciar la capacidad de producción, ya fuera a través de una actuación eficaz en los proyectos hidráulicos o mediante la implantación de entidades estatales, capaces de poner en marcha una parte importante de las innovaciones en el campo de la agricultura, tal y como se estaba produciendo en otras economías europeas. Cabe pensar que con la creación de un sistema generalizado de enseñanza agraria y el impulso de un servicio agronómico estatal, como ya se ha apuntado en alguna ocasión, muy probablemente se habría acentuado el proceso de perfeccionamiento y mejora en el terreno agrícola⁶⁶⁷.

La existencia de un Estado liberal en España debía significar la plenitud de garantías a la propiedad privada y el fortalecimiento de los mercados, con el fin de que propietarios y labradores iniciaran un proceso de mejoras en la agricultura que repercutiera en su propio interés. Todo ello debía suceder con una limitada intervención por parte de la Administración, siguiendo la costumbre de otros Estados europeos, donde la importancia

⁶⁶⁴ Ocaña Ocaña, Carmen, *Latifundio, gran explotación y modernización agrícola: una reflexión sobre Andalucía*, Universidad de Málaga, 1987, pág. 22.

⁶⁶⁵ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 23.

⁶⁶⁶ Una magnífica síntesis en Garrabou, Ramon, “Crecimiento agrario, atraso y marco institucional”, ob. cit., págs. 219 a 225.

⁶⁶⁷ *Ibidem*, pág. 222.

dada a la actuación de los gobiernos como impulsores de los cambios técnicos era muy reducida⁶⁶⁸.

Que el Estado liberal apenas concediera ayudas al sector agrario ha sido uno de los planteamientos sugeridos por Niek Koning en un interesante trabajo de historia comparada, observando los distintos comportamientos de algunos países europeos y de Estados Unidos. La razón fundamental de esta negativa aparece en el principio según el cual, las cuestiones sobre innovación y mejora de los sistemas de producción dependían plenamente de los propios agricultores. De esta manera, en países como Irlanda y determinados territorios de Escocia, los grandes terratenientes se resistieron a la fragmentación de sus explotaciones agrarias, con el fin de mantener las estructuras agrícolas y obtener una mayor rentabilidad⁶⁶⁹.

Tanto en el Reino Unido como en Alemania y Holanda, conscientes del beneficio que podría tener la iniciativa privada se produjeron importantes inversiones en nuevas máquinas y fertilizantes, además de las ya conocidas roturaciones. Esta importancia adquirida por las asociaciones e instituciones privadas, a tenor de los resultados aportados por Koning, fueron muy similares en los tres países. Los llamados «farmers' clubs», junto a las sociedades de agricultura y otras organizaciones menores, alentaron en todo momento la mejora de la agricultura, lejos de lo que pudieran hacer los gobiernos en a favor de los gobernados. A las sociedades de propietarios y agricultores se les unió de manera activa la prensa agraria y un abundante número de publicaciones y documentos confeccionados por los «scientific farmers» que rápidamente eran difundidos por las zonas productivas del país⁶⁷⁰. Las sociedades «paraguas», así denominadas por Niek Koning, podían emprender acciones de una mayor significación, como el patrocinio de granjas experimentales o la participación en conferencias de expertos en asuntos relacionados con las explotaciones agrícolas, la realización de pruebas sobre el terreno, etc.

Todo ello no impidió, sin embargo, que en Alemania el liberalismo basado en el *laissez-faire*, tuviera una profunda oposición por parte de los

⁶⁶⁸ Ibídem, págs. 222 y 223.

⁶⁶⁹ Koning, Niek, *The Failure of Agrarian Capitalism: Agrarian politics in the United Kingdom, Germany, the Netherlands and the USA, 1846-1919*, Routledge and Taylor & Francis e-Library, London and New York, 2001, pág. 49.

⁶⁷⁰ Ibídem, págs. 59 a 61.

grandes campesinos, jugando un papel muy destacado en los levantamientos de 1848. Ciertamente es también, que una vez conseguidas las demandas en materia económica, aquellos mismos que habían desaprobado la actitud del gobierno no tardaron en pasar a un segundo plano, desinteresándose muy pronto por la política económica que se desarrollaba en el país. En Holanda, a pesar de desconocerse la postura adoptada por los grandes terratenientes, la actitud general fue de una fuerte división entre partidarios del proteccionismo y del libre comercio. En consecuencia, un importante número de propietarios agrícolas apoyaron al liberal Johan Rudolph Thorbecke, mientras otros optaron por las tesis del conservador Van der Brugghen, más partidario del libre comercio⁶⁷¹.

Nada nuevo si se compara con nuestro país. En España ya se había comenzado, mediado el siglo XIX, a explicar los rendimientos de los fertilizantes, la maquinaria agrícola, siendo la propia prensa especializada la que insistía en las ventajas de la innovación en el campo. Por otro lado, los concursos, muestras y otros certámenes organizados por algunas sociedades de propietarios y agricultores, incluidas las Sociedades Económicas de Amigos del País, habían comenzado a proliferar y a disfrutar de una buena acogida en aquellas zonas donde tenían lugar. Si nos fijamos en la actitud adoptada por agricultores, propietarios y comerciantes, ha quedado evidenciada la división reinante desde los inicios de la política arancelaria de 1820. En todos estos casos, incluido el interés por el fomento de la agricultura, ha habido que aludir, por lo general, a la iniciativa privada surgida a la vez que se intentaban consolidar en nuestro país los ideales del liberalismo. Por último, cabría añadir, respecto a la experiencia aportada por otros países europeos, la idea de que algunos proyectos, aunque sugeridos desde el poder, no siempre fueron de la mano del éxito. Un ejemplo puede ser el relativo logro que alcanzó en el Reino Unido el proyecto de establecimientos de enseñanza técnica y de investigación agronómica. Un episodio que ya fue estudiado en su día por E. J. T. Collins⁶⁷².

⁶⁷¹ *Ibidem*, pág. 67.

⁶⁷² En efecto, Collins se preguntaba por qué en Inglaterra se retrasó tanto la adopción de políticas encaminadas a la educación como a la investigación en el campo del conocimiento agrícola. A este respecto, véase de Collins, E. J. T., "Ciencia, educación y difusión de la cultura agrícola en Inglaterra desde la fundación de la Royal Society hasta la Gran Guerra (1660-1914)", en *Noticiario de Historia Agraria*, número 8, año 1994, págs. 15 a 42.

Los primeros intentos frustrados por organizar un sistema de enseñanza agronómica en Francia arrancan de finales de los años cuarenta del siglo XIX. Sin embargo, no sería hasta el último cuarto de siglo, en 1875, cuando finalmente se lograra organizar un sistema de escuelas prácticas de agricultura⁶⁷³. Tanto los laboratorios agrícolas como las estaciones agronómicas en ese país, tuvieron serias dificultades para su financiación, ya procediera ésta de entidades privadas como del propio Estado. En relación a este asunto y en palabras de la investigadora Natalie Jas: “En general, el presupuesto y los medios materiales de los que disponían los nuevos organismos fueron poco importantes; de ahí que la mayor parte de las veces se constituyeran como simples centros de análisis. Al final de los años 1870 sólo las estaciones de las Escuelas de Grignon, Auxerre, Arras y la de Grandeau podían aspirar a llevar a cabo una verdadera investigación científica”⁶⁷⁴.

De acuerdo con las políticas iniciadas en distintos territorios alemanes unos años antes de la unificación, se logró establecer una red de estaciones experimentales agronómicas con el objetivo de estudiar la repercusión de los nuevos abonos en el suelo. De esta forma, y durante los años de 1860, los establecimientos de investigación llegaron a adquirir una importancia sin precedentes, sirviendo de paradigma en el extranjero⁶⁷⁵. Si bien estas actuaciones por parte de otros Estados europeos, tal como nos recuerda Garrabou, habían comenzado en la primera mitad de siglo, lo cierto es que no sería hasta los primeros años de la siguiente centuria, ya en el siglo XX, cuando verdaderamente habrían de consolidarse las políticas estatales dirigidas a la mejora de la agricultura⁶⁷⁶.

Con algunos matices importantes, podría explicarse en un contexto muy parecido la política agraria en España. Es discutible para algunos autores, como el propio Ramon Garrabou ha apuntado, la actuación de la Administración respecto a la promulgación de algunas medidas concretas

⁶⁷³ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo I, octubre a diciembre de 1876, págs. 279 y siguientes.

⁶⁷⁴ Jas, Natalie, “La promoción de la investigación agronómica en Francia durante el siglo XIX. Louis Grandeau, las estaciones agronómicas y el control de los fertilizantes”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 13, SEHA, año 1997, pág. 202.

⁶⁷⁵ *Ibidem*, págs. 196 y 197.

⁶⁷⁶ De hecho, en muchos casos, la financiación estatal había sido moderada. Garrabou, Ramon (2001), *ob. cit.*, pág. 224.

que hubieran supuesto un impulso favorable en la agricultura. No obstante, cabe señalar entre los matices a los que nos acabamos de referir, la creación de un Ministerio con competencias en dicho sector, y de una manera especial la gestación y consolidación de las Juntas de Agricultura, ésta última de una gran importancia para el desarrollo de las asociaciones de propietarios y agricultores en nuestro país.

Pues bien, aunque la aparición de los primeros ministerios en España se produjo a comienzos del siglo XVIII, hubo que esperar casi un siglo en desarrollar uno que estuviera dedicado específicamente al fomento y, en consecuencia, a la agricultura. Una situación no muy diferente de la que se había producido en Francia, en cuya Administración, tanto el Comercio, la Industria y la Agricultura funcionaban de manera yuxtapuesta en un mismo órgano ministerial. Lentamente, la evolución administrativa francesa dio lugar a la creación de órganos autónomos como el Servicio Forestal, la Escuela de Montes, además de las Escuelas Superiores de Agricultura, estas últimas distribuidas por una parte importante del país⁶⁷⁷.

Volviendo a la situación en España, y como ya se apuntó en su momento, fue Fernando VII, llevado por las iniciativas de Francisco Javier de Burgos y Olmo, Pedro Sainz de Andino, miembro del Consejo de Hacienda, y Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, quien finalmente accedió el 5 de noviembre de 1830 a la creación de un Ministerio o Secretaría con competencias en Agricultura. Un proyecto que debió esperar dos años como consecuencia de la oposición de Pedro Alcántara de Toledo, duque del Infantado y miembro del Consejo de Estado, que apoyado por José Cafranga, por entonces titular de Gracia y Justicia, redactaría un dictamen contrario a la creación del mismo⁶⁷⁸. Con la dimisión del propio Cafranga y la aprobación definitiva del Real Decreto en 1832, las palabras iniciales expresaban lo siguiente:

Concediendo mi augusto Abuelo el Señor D. Carlos IV al fomento de la riqueza pública el preferente lugar y la verdadera importancia de que es indispensable disfrute para la buena administracion del Estado, estimó oportuna la creacion de un departamento especial en el ministerio de

⁶⁷⁷ Boulaine, Jean, *Histoire de l'Agronomie en France*, Tec Doc, París, 1992, pág. 237.

⁶⁷⁸ Guaita, Aurelio, *El Ministerio de Fomento, 1832-1931*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1984, págs. 15 y 16.

Hacienda que ahora está á vuestro cargo, y se sirvió designar los diferentes objetos en que habia de ocuparse para desempeño de sus funciones⁶⁷⁹.

Afianzar la Administración en el interior y atender al fomento general del país eran los propósitos de la nueva Secretaría del Despacho, creada en un momento en el que el Estado necesitaba contar imperiosamente con un departamento que fuera capaz de proporcionar nuevas infraestructuras económicas y sociales. La nueva Secretaría de Estado debía asumir, además, un señalado catálogo de competencias, englobando los grandes sectores económicos, la instrucción pública, así como los censos generales, la estadística de la riqueza o el catastro, y a cuya cabeza iba a situarse Victoriano de Encima y Piedra, que durante algún tiempo compatibilizaría el cargo con la Secretaría del Despacho de Hacienda (véase el cuadro 20).

Las nuevas funciones del departamento iban a requerir los esfuerzos de un profuso personal, en principio separado del despacho de Hacienda, junto al de Gracia y Justicia. De este modo, se adscribían a Fomento la Junta General de Comercio, la Dirección de Correos, Caminos y Canales, la Conservaduría de Montes, e incluso el Honrado Concejo de la Mesta, entre otras entidades. Un departamento que vería muy pronto cambiar su denominación, incluida la pérdida de competencias, en el mes de diciembre del año 1834, al crearse una nueva *Secretaría de Estado y del Despacho de la Gobernación del Reino*. Con ello, no se recuperaría la terminología relativa al «fomento» hasta 1851⁶⁸⁰.

Entre 1832 y 1847 las actuaciones sobre aspectos relacionados con la agricultura no fueron, desde luego, relevantes, si exceptuamos la creación de los Subdelegados de Fomento, figura que se convertiría un símbolo de referencia dentro de la Administración periférica del nuevo Estado liberal. Si acaso, a lo anterior habría que destacar la creación de la Escuela de Ingenieros de Bosques en Madrid y un Real Decreto de 20 de julio de 1835 que suprimía la Real Junta de Fomento de la Riqueza del Reino, organismo

⁶⁷⁹ *Gaceta de Madrid*, número 135, 6 de noviembre de 1832. El Decreto tuvo que ser expedido por la reina durante la enfermedad del rey Fernando. Además, tal y como nos recuerda Aurelio Guaita en su trabajo, María Cristina era nuera-nieta de Carlos IV, al mismo tiempo que sobrina de su marido Fernando VII. Véase Guaita, Aurelio, ob. cit., págs. 16 y 17.

⁶⁸⁰ Cuéllar Villar, Domingo, "Política de obras públicas y políticas liberales. El Ministerio de Fomento (1851-1874)", *Revista de Historia TsT: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones*, número 2, año 2002, págs. 44 y 45.

que se había creado en 1824. A la anterior supresión hubo que añadir la de la Dirección General de Montes, creada por Javier de Burgos dos años atrás. Una actividad, como se comprenderá, dominada por los innumerables y constantes cambios⁶⁸¹. De ahí que no fuera hasta 1847, y prácticamente siguiendo el modelo de la Administración francesa, cuando verdaderamente se comenzase a elaborar una política dirigida a atender aquellas competencias propias de sectores que afectaban al fomento⁶⁸². Para ello hubo que modificar, tanto la denominación como las competencias que hasta entonces había asumido la anterior Secretaría, aprobándose un nuevo Real Decreto en enero de 1847 que iba a poner en marcha la *Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas*. Un departamento que, a la vista de sus competencias, podía haber asumido para sí el patronímico de «fomento» con más razones que su predecesor, dentro del complicado marco de competencias administrativas que se estaban perfilando en la época.

Según avanzaban los años, la maquinaria burocrática fue creando órganos e instrumentos que necesariamente iban a terminar afectando al ordenamiento administrativo español, y más concretamente a aquellos que estaban directamente relacionados con la actividad productiva en sus diferentes campos. Cabe la posibilidad que por esta misma razón, el Real Decreto de 28 de enero de 1847 tuviera rápidamente una prolongación en los dos aprobados el 18 de febrero de aquel mismo año. En el primero de ellos se establecían tres Direcciones Generales. Las dos primeras atenderían la Instrucción, además de las Obras Públicas. Finalmente la tercera sería la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio. Tal y como reflejaba el Real Decreto en su artículo 3º, entre las atribuciones que el mismo confería a sus responsables se encontraban las siguientes competencias: “Los Directores tendrán facultades propias, no solamente para la tramitación é instrucción de los expedientes, sino también para dictar las disposiciones que estimen oportunas, y decidir los negocios que no exijan ni Real resolución; todo con arreglo á los decretos y reglamentos que rijan en sus respectivos ramos”⁶⁸³.

⁶⁸¹ Guaita, Aurelio, ob. cit., págs. 41 a 50.

⁶⁸² La idea del modelo francés en la Administración española, en Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 33.

⁶⁸³ *Colección legislativa de España. Primer Cuatrimestre de 1847*, Tomo XL, Imprenta Nacional, Madrid, 1849. págs. 216 y 217.

Los aspectos considerados más destacados, dentro de las competencias en el campo de la agricultura, estaban referidos a la protección y al fomento de los distintos sectores, incluyendo una base legislativa para su desarrollo, la mejora en la enseñanza y en la perfección de los procedimientos agrícolas, la introducción de nuevos útiles de cultivo, el establecimiento de escuelas especiales, la eliminación de plagas en el campo, además del impulso en el establecimiento de premios para los agricultores y en los usos y aprovechamientos de los rendimientos agrícolas⁶⁸⁴.

Pese a la exhaustiva meticulosidad que se había adoptado en las delimitaciones de atribuciones, la realidad condujo a una serie de tensiones entre las distintas Secretarías y Ministerios ocasionando en muchos casos trabas e irregularidades. Bajo estas condiciones, a principios del mes de marzo de 1847, el entonces Ministerio de la Gobernación ignorando las competencias que tenía atribuidas la Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en materia agrícola, publicó una Orden en la que prohibía la exportación de trigo, junto a otros cereales, al mismo tiempo que autorizaba la entrada de granos extranjeros con el fin de paliar las dificultades de la población debido a la escasez de subsistencias⁶⁸⁵.

Con el tiempo, la amalgama de nuevas entidades e instrumentos surgidos de la Administración fue regularizándose, lo que no evitó que durante algún tiempo siguieran presentándose problemas derivados de las competencias atribuidas a otros Departamentos, principalmente con los de Hacienda y Gobernación, al tener estos últimos un gran número de responsabilidades atribuidas⁶⁸⁶. En todo caso, la estructura funcional dentro de la Administración agraria en España no tardó, pese a las dificultades políticas, en establecer una serie de órganos, tanto ejecutivos como consultivos, que al menos hasta los años ochenta del siglo XIX fueron un constante referente en el fomento agrario y de los grupos de propietarios agrícolas del país.

⁶⁸⁴ *Gaceta de Madrid*, número 4.533, 11 de febrero de 1847 y número 4.534, de 12 de febrero de 1847.

⁶⁸⁵ Pérez Juan, José Antonio, ob. cit., pág. 105.

⁶⁸⁶ *Ibidem*, págs. 103 a 111. Resulta muy esclarecedor, en relación a la delimitación competencial y los problemas surgidos con la *Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas*, el capítulo que dedica el autor a las atribuciones.

En el curso de la carrera iniciada en materia de política agraria, asumida por el Estado a partir de la segunda mitad de los años cuarenta, fue decisiva la consolidación del partido moderado en el poder al quedar modificada sustancialmente la idea de presentar una Administración basada en los principios de idoneidad y eficacia, por otra más proclive al control, con la que orientar las relaciones entre el Gobierno y las clases propietarias en los ámbitos provincial y local. Consiguientemente, con los cambios introducidos quedaba establecida una alternativa a las relaciones que ya existían en Madrid, especialmente en lo concerniente al espacio parlamentario.

Con toda probabilidad, la actitud «moderada» está justificada si consideramos los recelos, todavía latentes en 1843, que por parte de los grupos más acomodados seguían existiendo hacia los elementos revolucionarios. Esta misma idea, defendida por Antonio Luque, es muy probable que posibilitara un cambio en el papel que, en un principio, se había querido atribuir a la Administración de Fomento como acicate y estímulo para desarrollo económico del país⁶⁸⁷.

Algunas pruebas de lo que hemos apuntado se materializaron a través de la regulación del derecho de asociación mercantil, mediante la interrupción del proceso desamortizador, del mantenimiento proteccionista con vistas a asegurar el comercio interior, o en la férrea aplicación del principio de equilibrio presupuestario por parte de los responsables de la cuentas del Estado. Todas estas conductas no hicieron sino derivar a la propia Administración, con competencias en la agricultura, a establecer instrumentos de tutela y control hacia los sectores de la sociedad más destacados, tanto desde el punto de vista social como económico⁶⁸⁸.

De los llamados órganos ejecutivos del Ministerio creado en 1847, las responsabilidades concernientes al mundo rural fueron asumidas por la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio. Unas competencias que estaban ligadas a la actividad económica y que, salvo contadas excepciones, pasaron a manos de abogados y personal con escasa formación técnica, pero

⁶⁸⁷ *Ibíd.*, pág. 40.

⁶⁸⁸ Una síntesis de la política económica en los años de 1840, así como las dificultades y temores a un derrumbamiento del gobierno moderado, puede verse en Beltrán Villalba, Miguel, *Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX. Sociología de una dominación de clase*, Universidad de Granada, 2010, págs. 66, 76 y 87.

con excelentes relaciones entre el mundo liberal⁶⁸⁹. Una situación que contrastaba con quienes estaban siendo elegidos para encabezar las jefaturas en las nuevas Secretarías. De esta manera, cada Dirección estaba compuesta por un director, oficiales de secretaría, jefes de negociado y oficiales de dirección. Solo los dos primeros directores, Cristóbal Bordiú y Góngora, y José Caveda y Nava, iban a ser quienes permanecieran más tiempo en el cargo, entre los años 1847 y 1853. En este mismo periodo, Bordiú pasaría a ocupar otros puestos en la Administración, más concretamente en el Ministerio de Hacienda, ejerciendo el cargo de Subdirector en la Dirección General de Aduanas, Derechos de Puertas y Consumos⁶⁹⁰.

En un peldaño ulterior a la Dirección General estaban los Negociados de Agricultura y Montes, unidades administrativas de naturaleza técnica, atendidas generalmente por personas cuya preparación estaba más adaptada a las tareas que tenían encomendadas. En 1853, a iniciativa del segundo de ellos, se crearía el Cuerpo de Ingenieros de Montes. Al frente del Negociado de Agricultura estuvieron, primero el catedrático de derecho Fermín de la Puente Apezechea, entre 1847 y 1856, siendo posteriormente su titular Bráulio Anton Ramirez, funcionario del Ministerio desde su fundación y hasta 1868. Citado en esta Tesis Doctoral, Anton Ramirez fue el autor una magistral obra, el *Diccionario de bibliografía agronómica*, que durante décadas sería utilizado como manual insustituible entre profesores y alumnos de ciencias agronómicas; un verdadero inventario de personas, instituciones y publicaciones vinculadas al mundo agrario⁶⁹¹.

Las competencias en el Negociado de Agricultura fueron paulatinamente ampliándose, poniéndose una especial atención, a partir de los años cincuenta, en el desarrollo legislativo que estaba referido a los cambios que se habían venido produciendo en la propiedad desde la llegada del liberalismo a nuestro país. Con Fermín de la Puente al frente de las tareas administrativas se consideraron cuestiones relativas a la divulgación en materia de innovaciones de utillaje, la autorización de asociaciones de regantes y el fomento de la enseñanza agrícola. Con la consolidación del

⁶⁸⁹ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 44.

⁶⁹⁰ Ibídem. Además en Pérez Juan, José Antonio, ob. cit., pág. 46. Véase, también, el *Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda. Segundo Semestre de 1852*, Tomo VI, Imprenta Nacional, Madrid, 1852, pág. 465.

⁶⁹¹ Algunas notas de su biografía en Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 44.

Negociado en los años de dirección de Anton Ramirez se abordaron las cuestiones concernientes a la política de colonización, bancos agrícolas o guardería rural, entre otras. A pesar de ello, la falta de personal en las cabeceras provinciales, unido a las dificultades presupuestarias, restaron efectividad hasta que en la década de los años sesenta del siglo XIX se pudieron dotar suficientemente las actividades relacionadas con la agricultura⁶⁹².

Si bien en los escalafones inferiores de la Administración agraria en España no siempre el personal estuvo a la altura de los que se hubiera deseado, por la cabeza de propia la *Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas* llegarían a desfilar nombres como el de Roca de Togores, primer Secretario, Nicomedes Pastor Díaz, Ros de Olano, sin olvidar a Juan Bravo Murillo (véase el cuadro 20). Este último, ejerciendo la presidencia en el Consejo de Ministros en 1851, propuso el cambio de nombre, además de las competencias que hasta ese momento había desempeñado la Secretaría. En efecto, un Real Decreto de 20 de octubre de aquel mismo año, creaba el Ministerio de Fomento con Mariano Miguel de Reinoso como primer titular del mismo⁶⁹³. Reinoso, hombre de confianza del presidente Bravo Murillo, procedía del ramo de la agricultura. Comisario regio de Agricultura por la provincia de Valladolid, había ejercido también el cargo de vocal en la Sección de Agricultura del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, precisamente como representante de los propietarios y productores trigueros en Castilla. Este hecho, como después se destacará, dejaba claro el papel que las Juntas de Agricultura estaban ejerciendo desde 1849.

Mariano Miguel de Reinoso estaba considerado algo más que un «rentista». Procedente de una familia de comerciantes, llegó a convertirse en un importante propietario castellano, asumiendo como actividad principal la de «agricultor». A él se le atribuye la introducción de variedades de semilla de trigo procedentes de Chile, además de numerosas mejoras en arados que supo adaptar a sus propiedades. Como nos recuerda Germán Rueda, entre los años que transcurrieron desde 1837 a 1848, Reinoso compró 560 hectáreas en las llamadas comarcas de «Tierra del Vino», Medina y la

⁶⁹² *Ibíd.*, pág. 45.

⁶⁹³ *Boletín Oficial de Comercio, Instrucción y Obras Públicas*, número 199, jueves 23 de octubre de 1851.

CUADRO 20

Departamentos Ministeriales vinculados con la Agricultura (1832-1868)

Denominación	Competencias	Responsables (Secretarías de Estado y primeros ministros de Fomento)
<p>Secretaría de Estado y del Despacho del Fomento general del Reino</p> <p>(Real Decreto de 9 de noviembre de 1832)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Policía urbana y rústica ▪ Seguridad pública ▪ Juzgados, cárceles y casas de corrección ▪ Ayuntamientos ▪ Sanidad ▪ Establecimientos de caridad ▪ Construcción y conservación de caminos, canales y puertos ▪ Fomento de la agricultura ▪ Correos, postas y diligencias ▪ Conservación de montes ▪ Industria, artes, oficios, manufacturas y gremios ▪ Minas y canteras ▪ Estadística general del Reino ▪ Moneda y comercio ▪ Instrucción pública, imprenta y periódicos ▪ Teatros y espectáculos públicos ▪ Alistamientos, sorteos y levas para Ejército y Marina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Victoriano Encima y Piedra (1832) ▪ Narciso Fernández de Heredia y bejines de los Ríos, conde de Ofelia (1832) ▪ Francisco Javier de Burgos y Olmo (1833-1834) ▪ José María Moscoso de Altamira (1834) ▪ Nicolás M^a. Garelli - <i>interino</i> - (1834) ▪ Diego Medrano - <i>interino</i> - (1835) <p style="text-align: center;">*</p>
<p>Secretaría de Estado y del Despacho de Comercio, Instrucción y Obras Públicas</p> <p>(Real Decreto de 28 de enero de 1847)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obras públicas municipales y provinciales ▪ Agricultura, aguas y comercio ▪ Privilegios de invención ▪ Establecimientos industriales ▪ Policía rural ▪ Ganado lanar y cría caballar ▪ Minería ▪ Caza y pesca 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mariano Roca de Togores (1847) ▪ Nicomedes Pastor Díaz (1847) ▪ Antonio Ros de Olano (1847) ▪ Luis José Sartorius (1847) ▪ Juan Bravo Murillo (1847-1849) ▪ Manuel de Seijas Lozano (1849) ▪ Trinidad Balboa (1849) ▪ Manuel de Seijas Lozano (1849-1850) ▪ Saturnino Calderón Collantes (1850-1851) ▪ Santiago Fernández Negrete (1851) ▪ Fermín Arteta (1851)
<p>Ministerio de Fomento</p> <p>(Real Decreto de 20 de octubre de 1851)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Obras públicas y Escuelas de Ingenieros de Caminos... ▪ Agricultura, Industria y Comercio ▪ Academias de Arquitectura y Comercio ▪ Institutos y Escuelas Industriales 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mariano Miguel de Reinoso (1851) ▪ Manuel Bertrán de Lis - <i>interino</i> - (1851) ▪ Rafael Aróstegui, conde de Mirasol (1852) ▪ Antonio Benavides (1853) ▪ Claudio Moyano (1853) ...

* Entre el 13 de mayo de 1834 al 4 de diciembre de 1835 los encargados de la Secretaría desempeñaban competencias de Interior. A partir del 4 de diciembre de 1835 hasta el 28 de enero de 1847, asumieron, además, las competencias de Gobernación.

FUENTES: Guaita, Aurelio, ob. cit., págs. 21 a 117; Pérez Juan, José Antonio, ob. cit., pág. 45 y Cuéllar Villar, Domingo, ob. cit., págs. 47 y 48.

Campaña del Pisuerga, destacando las adquisiciones realizadas en el pueblo de Arroyo. En total, parece que el desembolso final fue de unos 934.000 reales. Después de su experiencia política, siempre entre las filas del partido moderado, en 1852 decidió dedicarse por completo a la agricultura. Una circunstancia que aclara suficientemente la procedencia y la disposición de los hombres que, en adelante, iban a ocupar muchos de los cargos ligados a la Administración de fomento⁶⁹⁴.

Por otra parte, el Real Decreto de 20 de octubre de 1851 reglamentaba por primera vez en España una estructura administrativa concerniente al fomento. Se comprende, pues, que fuera precisamente a partir de ese momento cuando se comenzara a pensar en la aprobación de una serie de medidas destinadas a fomentar el desarrollo económico. La «revolución liberal» en España, a semejanza de la acontecida en otros Estados occidentales, adquirió una configuración basada en gran medida en el equilibrio jurídico y la igualdad de los individuos frente a las instituciones. Conviene recordar, en consonancia con lo anteriormente dicho, algunas de las actuaciones como la generalización del sistema métrico decimal, la eliminación de los privilegios de la nobleza en los procesos judiciales, la universalidad de los códigos, la liquidación de las aduanas interiores o la unificación monetaria, entre otras medidas⁶⁹⁵.

Además de la agricultura, el Ministerio de Fomento, de acuerdo al concepto burgués de sociedad, hubo de acometer durante los años cincuenta y sesenta del siglo XIX la importante empresa de mejorar las infraestructuras, y en muchos casos estrenar nuevos trazado en las comunicaciones de una gran parte del territorio nacional, sin olvidar aspectos relativos a su conocimiento, lo que iba a permitir un más óptimo dominio de la propiedad territorial. A ello, tuvo que contribuir el nuevo Estado liberal con recursos que progresivamente fueron multiplicándose, alcanzándose el máximo de inversión en el transcurso de los presupuestos 1863-1864⁶⁹⁶. Esta organización político-administrativa acabaría afectando también a la periferia agrícola que, en pocos años, terminaría revistiéndose de un mapa de autoridades y entidades impulsoras del fomento agrícola, como del asociacionismo de las clases propietarias.

⁶⁹⁴ Rueda Hernanz, Germán (2009), ob. cit., pág. 275.

⁶⁹⁵ Cuéllar Villar, Domingo, ob. cit., págs. 46 y 47.

⁶⁹⁶ *Ibidem*, págs. 49 y 50.

- El Consejo de Agricultura y Comercio. Un «espacio» colectivo para la propiedad rural y agrícola

Junto a los órganos ejecutivos de la Administración agraria surgieron muy pronto aquellos que debían actuar como órganos de control externo, formando parte de lo que se ha dado en llamar la administración consultiva. Dentro de este apartado y siguiendo patrones similares de legalidad y de ordenamiento administrativo a los que desde hacía unos años se venían desarrollando en Francia, las competencias en materia agraria en España fueron concretándose bajo el control de unidades o Ministerios entregados al Comercio y a las Obras Públicas. Bajo dicha premisa, fue el Consejo Superior de Agricultura el encargado de atender en los departamentos y distritos franceses la representación de los intereses de los sectores más acomodados relacionados con la propiedad rural y la producción agrícola del país. Finalmente, dicho Consejo hubo de ser remodelado a finales de los años veinte y comienzos de los años treinta, estableciéndose en abril de 1831, a través de una Ordenanza Real, su definitiva estructura y funciones⁶⁹⁷.

Convertidos en órganos de asesoramiento de los correspondientes Ministerios, los Consejos, tanto en Francia como en nuestro país, podían informar, al propio tiempo que opinar sobre las cuestiones que a él eran dirigidas desde los distintos departamentos y provincias. Al Consejo no tardaron en unirse, como parte del resto de órganos consultivos en España, las Juntas de Provinciales dependientes de la Sección de Agricultura, y de los gobernadores civiles que, como veremos más adelante, seguían manteniendo el modelo de la administración napoleónica⁶⁹⁸. En un oficio dirigido al ministro de Comercio por parte del Director de Agricultura, Cristóbal Bordiú, éste justificaba así la necesidad de crear el nuevo establecimiento administrativo:

En toda la escala administrativa se van colocando al lado de la administracion activa cuerpos consultivos que sin entorpecer su marcha preparan é ilustran su accion. El Ministerio de Comercio que dignamente

⁶⁹⁷ Un interesante extracto puede leerse en la Introducción de: Charmasson, Thérèse, Lelorrain, Anne-Marie et Ripa, Yannick, *L'enseignement agricole et vétérinaire de la Révolution à la Libération*, Institut National de Recherche Pédagogique, Publications de la Sorbote, Paris, 1992, pág. XXIV y XXV.

⁶⁹⁸ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 46.

dirige V.E. por el caracter particular de los asuntos de su competencia necesita tener á su inmediacion cuerpos especiales de consulta, que agenos del espíritu de localidad, y superiores a los mexquinos intereses que suelen moverle, ilustren su accion por una discusion razonada y entendida. La libertad concedida al Comercio, á la industria y á la agricultura no basta para su completo desarrollo; el interés individual á pesar de su actividad y energia no siempre está en armonia con el progreso y verdaderas necesidades de la Sociedad. Es preciso establecer un medio de comunicacion entre los centros parciales de produccion y de cambio y el centro comun de actividad que es el poder administrativo. Este medio, Escmo. Señor, es la creacion de instituciones especiales en toda la escala social que traigan al Gobierno todas las necesidades mercantiles del pais, y la mas urgente y mas facil de realizar es la de un Consejo de Comercio y agricultura, que si detener la rapidez de la accion administrativa la prepare y la ilustre con la disminucion de hombres entendidos. En su consecuencia la Direccion tiene el honor de someter a la consideracion de V.E. el adjunto proyecto de Real decreto⁶⁹⁹.

Tras la aprobación del Real Decreto de 9 de abril de 1847, quedaba constituido el Consejo de Agricultura y Comercio en España. Presidido por el Ministro, los primeros meses de existencia estuvo integrado por un vicepresidente y catorce vocales vitalicios, elegidos doce de ellos por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, y dos que debían ser propuestos por el de Hacienda, además de un secretario, cargo que habitualmente recaía en el oficial encargado de la sección de comercio⁷⁰⁰. La idea de contar con un organismo como el Consejo se comprende, toda vez que los asuntos que llegaban al Ministerio eran de una cumplida heterogeneidad, hecho que redundaba en la necesidad de contar con un personal conocedor de las distintas materias y capaz de acordar las decisiones más viables; de ahí su carácter consultivo

Señora: Habiéndose dignado V. M. encargar á un ministerio especial el despacho de los negocios relativos á la agricultura y el comercio, á la instruccion y á las obras públicas, el impulso que recibirán en adelante estos poderosos medios de prosperidad será superior al que habria podido esperarse cuando estaban confundidos entre las diversas y heterogéneas atribuciones de los antiguos departamentos ministeriales. Mas no basta, Señora, que la accion sea rápida para llegar á los altos propósitos de V. M.,

⁶⁹⁹ "Proyecto de Real Decreto para la creacion de un Consejo de Agricultura y Comercio", "Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

⁷⁰⁰ Pérez Juan, José Antonio, ob. cit., págs. 71 y 72.

sino que es preciso tambien que vaya acompañada del acierto, el cual debe esperarse mas bien de la discusion entre individuos de cierta capacidad, que de la mera concepcion de uno solo⁷⁰¹.

Aunque con un nombramiento de índole honorífico, el número de vocales resultó ser escaso. De hecho, veinte días después de aprobarse el Decreto de creación del Consejo de Agricultura y Comercio, hubo que ampliarlo hasta un número de veinte, añadiendo también un secretario más. Nicomedes Pastor Díaz, ministro en aquellos momentos, lo justificaba así en el mismo precepto legislativo: “Habiéndome hecho presente mi Ministerio de Comercio, Instruccion y Obras públicas la conveniencia de aumentar con personas entendidas en las materias agrícolas los individuos del Consejo de Agricultura y Comercio, vengo en decretar que el número de vocales de dicho Consejo sean de 20, en lugar de los 14 designados en mi Real decreto de 9 del actual”⁷⁰².

Hasta aquí, podemos admitir una cierta lógica a la hora de interpretar el aumento en el número de personas que iban a conformar el nuevo órgano ministerial. Máxime si conocemos la prioridad que existía en cuestiones tan valoradas entonces como eran la propiedad y el aumento de la productividad en el predio agrícola. Sin embargo, al examinar separadamente a cada uno de sus integrantes, resulta todavía más sorprendente comprobar el acentuado número de propietarios territoriales que acababan de acceder al Consejo. Veamos esta cuestión un poco más en profundidad.

Existe una notable diferencia entre los dos Decretos de abril de 1847, sobre todo en el que se refería al aumento en el número de vocales del Consejo de Agricultura y Comercio. Si lo comparamos con el del día 9 de abril, vemos la detallada descripción realizada en cuanto a las actividades de sus miembros; algo que no había sucedido veinte días atrás. Así quedaba descrito en la *Gaceta de Madrid*:

Para vocales del Consejo de Agricultura y Comercio, cuyo número he tenido á bien aumentar por decreto de este día, vengo en nombrar á D. Mariano Miguel de Reinoso, propietario y Diputado á Córtes; á D. Pascual Asensio, catedrático de agricultura en el jardin Botánico de esta corte; á D. José María

⁷⁰¹ *Gaceta de Madrid*, número 4.591, 10 de abril de 1847.

⁷⁰² *Gaceta de Madrid*, número 4.612, 1 de mayo de 1847.

Benjumea, propietario y Senador del reino; á D. Luis Piernas, propietario y teniente de alcalde de Madrid; á D. Julian Aquilino Perez, propietario y Senador del reino, y á D. Antonio Bulnes, propietario y comandante de artillería retirado⁷⁰³.

Como se comprenderá, la falta de anotaciones relacionadas con la actividad profesional de los miembros del Consejo, incluida en el Real Decreto del día 9 de abril, es evidente. En el mismo, solo se enumeran a las personas elegidas como vocales, así como el nombramiento de su vicepresidente en la persona de Gaspar Remisa, marqués de Remisa. Esta situación, en principio de desconocimiento, se ha resuelto al contrastar información de la época con otros estudios realizados en la actualidad. Sorprende, no obstante, que una parte importante de todos los miembros elegidos estuvieran relacionados con la propiedad agraria, siendo solo unos pocos los que estaban consagrados al Derecho, la Política o el Comercio. Entre estos últimos destacaban los nombres de Juan Manuel Calderón, definido como «banquero capitalista», que llegaría a ocupar, entre otros, el cargo de Consejero de Gobierno en el Banco Español de San Fernando, o el de vocal en la Junta de Gobierno del ferrocarril Madrid a Aranjuez, así como el de Fermin Lassala, que durante años también formaría parte de la misma institución financiera⁷⁰⁴.

El resto de vocales no propietarios estaba integrado por Buenaventura Carlos Aribau, comerciante y financiero, asesor de la Comisión de Fábricas y fundador del periódico *El Europeo*⁷⁰⁵; el diputado por Alicante Juan Antoine y Zayas⁷⁰⁶; José Manuel Collado, marqués de La Laguna, hombre fuerte dentro del partido progresista, acaudalado financiero y ministro de Hacienda

⁷⁰³ Entre las personas nombradas figuraba Mariano Miguel de Reinoso que sería ministro de Fomento en 1851. *Gaceta de Madrid*, número 4.612, 1 de mayo de 1847.

⁷⁰⁴ *Repertorio General. Índice Alfabético de los principales vecinos de Madrid, con indicación de sus domicilios: ó Nueva Guía de la Corte para el año 1852*, Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid, 1852, págs. 66 y 108. Fermin Lassala aparece citado también en la *Revista General de Legislación y Jurisprudencia, publicada por una reunion de abogados del ilustre Colegio de esta Corte*. Año Primero, Tomo I, Imprenta de Díaz y Compañía, Madrid, 1853, pág. 592.

⁷⁰⁵ *Diario de Avisos de Madrid*, sábado 26 de abril de 1834. También en Domingo López, Fernando, *El Indicador de Madrid para 1858, ó sea Índice General de los principales habitantes con las señas de sus habitantes, así como de los contribuyentes y oficinas públicas y particulares, con un breve resumen de noticias de esta capital*, Imprenta Nacional, Madrid, diciembre de 1857, pág. 13. Finalmente, puede encontrarse una breve reseña biográfica en Pabón, Jesús, *Cambó 1876-1947*, Editorial Alpha, Barcelona, 1999, pág. 110.

⁷⁰⁶ Zozaya Montes, María, *Del ocio al negocio. Redes y capital social en el Casino de Madrid, 1836-1901*, Catarata, Madrid, 2007, pág. 58 y 59.

con el gobierno de Espartero en 1854, y de Fomento y Ultramar en 1856⁷⁰⁷; José Buchenthal, Gentilhombre de la Reina, y José Caveda, miembro de la Real Academia de San Fernando, literato e historiador, Secretario de la Reina, además de autor de una *Memoria histórica del Principado de Asturias*, publicada en 1834⁷⁰⁸.

La lista de propietarios nombrados el 9 de abril de 1847 comenzaba por el vicepresidente Gaspar Remisa, marqués de Remisa, hacendado afincado en Madrid y comprador durante la desamortización de Mendizábal de fincas rústicas y urbanas (véase el cuadro 21)⁷⁰⁹. Entre los vocales nombrados en primera instancia se encontraba Manuel de Gaviria y Alcoba, conde de Buena Esperanza y marqués de Casa Gaviria, propietario de tierras de labor y pastos⁷¹⁰. Joaquín Fagoaga, dueño de tierras de cultivo, comerciante y director de banco. Desde finales de los años treinta, había figurado como candidato a diputado por la coalición monárquico-constitucional de Madrid, lista que estaba compuesta por los mayores contribuyentes de la provincia⁷¹¹. Otro de los vocales nombrados era Manuel Salvador López. Además de propietario, tenía el cargo de administrador de la Casa Gaviria, logrando con los años un importante patrimonio territorial en la periferia de Madrid. Poseedor de fincas urbanas, sabemos que Salvador López adquirió a partir de 1838 bienes desamortizados⁷¹². Juan García Carrasco era otro destacado propietario, conde de Santa Olalla, del que conocemos algunos de sus negocios de compra y venta de tierras. Gracias al elaborado trabajo de Antonio Matilla Tascón, ya citado en esta investigación,

⁷⁰⁷ Fernández Escudero, Agustín, "El duque de Sevillano: banquero de la revolución de 1854", *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, número 11. Separata, 2013.

⁷⁰⁸ Algunos datos biográficos de Buchenthal en la *Guía de Casa Real y Patrimonio. Año de 1848*, Aguado, Impresor de Cámara de S. M. y de su Real Casa, Madrid, 1847, pág. 42. Asimismo, pueden consultarse las notas biográficas de José Caveda en Pérez de Castro, José Luis, "La obra inédita de Caveda y Nava", *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, número 92, año 1977, págs. 651 a 675, y sobre todo en Peiró Martín, Ignacio y Pasamar Alzuria, Gonzalo, *Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos*, Akal, Madrid, 2002, págs. 183 y 184.

⁷⁰⁹ Hidalgo, Dionisio, *Diccionario de Bibliografía Española*, Tomo I, Imprenta de las Escuelas Pías, Madrid, 1862, pág. 24, y Sánchez Recio, Glicerio, *La desamortización de Mendizábal en la provincia de Alicante: el clero regular, 1836-1850*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Excma. Diputación Provincial, 1983, pág. 81.

⁷¹⁰ López Martínez, Antonio Luis, *Ganaderías de lidia y ganaderos. Historia y economía de los toros de lidia en España*, Universidad de Sevilla, 2002, pág. 441.

⁷¹¹ *El Estudiante. Periódico de Madrid satírico y festivo, político y literario*, número 30, domingo 14 de julio de 1839, pág. 50.

⁷¹² Rodríguez Chimillas, Isabel, *Vivir de las rentas. El negocio del inquilinato en el Madrid de la Restauración*, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid, 2002, págs. 150 y 151.

CUADRO 21
Miembros del Consejo de Agricultura y Comercio

	Nombre	Actividad
Vicepresidente (Real Decreto de 9 de abril de 1847)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gaspar Remisa, marqués de Remisa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propietario
Vocales (Real Decreto de 9 de abril de 1847)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manuel Gaviria y Alcoba ▪ Joaquín Fagoaga ▪ Manuel Salvador López ▪ José Buchenthal ▪ José Caveda ▪ Juan García Carrasco, conde de Santa Olalla ▪ Fermin Lassala ▪ Buenaventura Carlos Aribau ▪ Juan Manuel Calderon ▪ Juan Antoine y Zayas ▪ José Manuel Collado ▪ Antonio Guillermo Moreno ▪ Antonio Jordá Santandreu * ▪ Nazario Carriquiri * 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propietario ▪ Propietario y comerciante ▪ Propietario y Administrador de la Casa Gaviria ▪ Gentilhombre de S. M. ▪ Historiador y literato ▪ Propietario ▪ Consejero del Banco de San Fernando ▪ Secretario de Intendencia en la Real Casa ▪ Banquero ▪ Diputado y ministro ▪ Ministro ▪ Propietario y senador ▪ Propietario ▪ Propietario
Vocales (Real Decreto de 29 de abril de 1847)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mariano Miguel de Reinoso ▪ José María Benjumea ▪ Luis Piernas ▪ Julian Aquilino Pérez ▪ Antonio Bulnes ▪ Pascual Asensio 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Propietario y diputado ▪ Propietario y senador ▪ Propietario y teniente de alcalde de Madrid ▪ Propietario y senador ▪ Propietario y comandante Retirad ▪ Catedrático de agricultura en el Jardín Botánico

* Vocales nombrados por el Ministerio de Hacienda.

FUENTES: Elaboración propia con datos procedentes de la *Gaceta de Madrid* correspondientes a los días 10 de abril y 1 de mayo de 1847, así como de textos de la época.

García Carrasco vendió en 1848 varias fincas, entre ellas la dehesa conocida como la «Encomienda de Las Pueblas», localizada en el término cacereño de Brozas. A ella hay que sumar igualmente la venta del olivar «La Cañada» situado en la localidad de Perales, también en la provincia de Cáceres. Una venta que había realizado, el mismo año de 1848, a su hermano Rufino.

Entre los terrenos comprados figura una dehesa extremeña denominada de «Malladas» situada en Moraleja. Compra que habría realizado en 1845⁷¹³.

El último de los vocales nombrados por Comercio, Instrucción y Obras Públicas era el senador, propietario y comerciante Antonio Guillermo Moreno, durante años candidato monárquico-constitucional por la provincia de Madrid, tal y como sucediera con su condiscípulo y vocal del Consejo Joaquín Fagoaga⁷¹⁴. El Ministerio de Hacienda designó y nombró a dos vocales más. Antonio Jordá Santandreu y Nazario Carriquiri detentaban también la condición de propietarios, siendo este último, además, diputado a Cortes, ganadero y banquero. Carriquiri, domiciliado en Madrid, participó en la compra de bienes municipales desamortizados en tierras de Navarra procedentes del clero regular y secular. Según los estudios de López Martínez, la inversión llegó a los 3.311.000 reales⁷¹⁵.

En pocos meses, las nuevas competencias asumidas por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas obligaron a organizar de nuevo el Consejo. En efecto, a comienzos del mes de octubre de 1847 se inició una reforma profunda que terminaría atañendo, tanto a su composición como a sus competencias, pasando a denominarse Consejo Real de Agricultura, Industria y Comercio. En su artículo 5º, el Real Decreto recogía las tres secciones en las que quedaba dividido, esto es, una de agricultura, otra de industria, estando la última dedicada al comercio. La representación de las nuevas secciones obligó a llevar a cabo una ampliación en el número de miembros del antiguo Consejo, refundiéndose, además, la Junta Consultiva de la Cría Caballar al propio Consejo, nombrándose diez y ocho vocales más que se unían, de esta forma, a los ya existentes⁷¹⁶.

⁷¹³ Matilla Tascón, Antonio, ob. cit., págs. 442 y 443.

⁷¹⁴ *El Estudiante. Periódico de Madrid satírico y festivo, político y literario*, número 30, domingo 14 de julio de 1839, pág. 51. Véase también el *Boletín de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia; periódico oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid*. Año Sesto, Tomo X. Primer semestre de 1859, Imprenta de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1859, pág. 179.

⁷¹⁵ Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo XII, Imprenta del Diccionario Geográfico, Madrid, 1849, pág. 87; *Almanaque Político y Literario de La Iberia para el 1861*, Imprenta y redacción de La Iberia, Madrid, 1861, y López Martínez, Antonio Luis, ob. cit. págs. 233 y 234.

⁷¹⁶ *Colección legislativa de España (continuación de la colección de Decretos). Tercer cuatrimestre de 1847*, Tomo XLII, Imprenta Nacional, Madrid, 1849, pág. 221, y *Gaceta de Madrid*, número 4.773, 9 de octubre de 1847.

Entre los incorporados había menos propietarios y un mayor número de profesionales y comerciantes. Ingenieros como Rafael Cabanillas, hombres de negocios como Vicente Juan Pérez, o licenciados en Derecho y consagrados a la política que llegarían a alcanzar un gran renombre. De estos últimos, el caso más señalado quizás sea el de Pascual Madoz. La inclusión de grandes propietarios en el Consejo se materializó con los nombramientos, entre otros, de Nicolás Pérez de Osorio, marqués de Alcañices, García Golfín, conde la Oliva, y Miguel Lasso de la Vega, marqués de las Torres⁷¹⁷. Esta mayoría de nombres vinculados a la agricultura partía de una configuración que integraba a vocales pertenecientes a la Sección de Agricultura, muchas veces integrados a las actividades políticas. Una prioridad que el ministro Bravo Murillo no tuvo más remedio que aceptar al carecer en Madrid de personas que pudieran representar al sector de la industria con verdaderas garantías. Aquéllos, como se ha comprobado, pertenecían en algunos casos a la nobleza titulada. Una colectividad que, además, en muchos casos militaba o se declaraba afín al partido moderado⁷¹⁸.

En realidad, los cambios que afectaban al Consejo no cesaron de producirse. El 24 de febrero de 1848 se unió al pleno el presidente de la Asociación General de Ganaderos⁷¹⁹. La ausencia frecuente de algunos vocales, así como la deficiente dotación de personal técnico en los Negociados, dificultó en muchos casos la tramitación de los expedientes, lo que provocó un aumento en el número de consejeros al ser éstos los que atendían la evacuación de las consultas en última instancia⁷²⁰. Con el

⁷¹⁷ Gamero Rojas, Mercedes, "Nobleza y desvinculación en la Sevilla de fines del Antiguo Régimen", en *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, Tomo IV, Sarasa Sánchez, Esteban y Serrano Martín, Eliseo (eds.), Institución "Fernando el Católico", Zaragoza, 1993, pág. 345; Torijano Pérez, Eugenia, ob. cit., pág. 176, y Héran, François, ob. cit., pág. 205.

⁷¹⁸ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 47.

⁷¹⁹ Así está recogido en el Decreto del 24 de febrero de 1848. *Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas*, Tomo I, pág. 451. Véase también la "Consulta del Consejo Real de Agricultura y Comercio al Sr. Ministro del ramo, en 27 de mayo de 1847, y que produjo la incorporación al mismo del de ganadería y cría caballar". AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

⁷²⁰ Las ausencias, unas veces justificadas y otras no, llegaron a adquirir tal importancia que todavía se conserva una carpeta con abundante información en los archivos del Ministerio de Agricultura. Así, por ejemplo, José María Bejumea alegaba "Un conjunto de circunstancias independientes de mi voluntad", debido, según explicaba, a las "importantes ocupaciones que me rodean". Significativa también es la explicación de Mariano Miguel de Reinoso: "Cuando me disponía para regresar á las Cortes por la Diligencia del día 7, caí enfermo, y cuando despues de ocho dias de cama preparaba mi biaje, he experimentado la doble y cruel desgracia de perder con solas 24 horas de direncia a mi hermano mayor y a su

nombramiento de José Eustaquio Moreno y Joaquín María Suárez del Villar, comenzaron una sucesión de sustituciones y nuevos nombramientos que se prolongarían hasta el año 1851; entre ellos el del Director General del Arma de Caballería. Un nombramiento que estaba pensado para informar al Ministerio sobre las necesidades en materia de defensa⁷²¹. La importancia de este cuerpo funcional llegó a hacerse notoria y muy significativa socialmente. Tal y como recoge José Antonio Pérez en su libro ya citado, y dedicado al antiguo Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, algunos de los miembros del Real Consejo participaron activamente en actos oficiales, entre ellos, la asistencia al bautizo del hijo de la infanta María Luisa Fernanda.

La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que se invite al vicepresidente del Consejo Real de agricultura, industria y comercio, al del consejo de instrucción pública, y al de la junta consultiva de caminos, canales y puertos, y al rector de la universidad de Sevilla, para que asistan al acto de presentación y bautismo del Príncipe ó Princesa que diere á luz S. A. P. la Sra. Infanta Doña Maria Luisa Fernanda, cuyo alumbramiento ha de verificarse en Sevilla, y se espera tenga lugar á fines del presente mes; pudiendo los referidos consejos y junta designar, si lo tuvieren ó bien, otro individuo de su seno que lo verifique en lugar del vicepresidente, si á este no le fuese dado concurrir⁷²².

Pese a la naturaleza honorífica de las vocalías y de que algunas fueran concedidas como consecuencia de favores de muy distinta índole, el Consejo de Agricultura, Industria y Comercio terminó por adquirir una relevancia indiscutible en muchas de las materias relacionadas con los diversos

muger". Por último, había vocales que debían atender sus negocios particulares. Entre los casos quizás más llamativos está el de José Segundo Ruiz que con fecha 13 de mayo de 184, ante la dificultad para encontrar quienes atendieran sus negocios particulares se justificaba y delegaba así sus tareas administrativas: "Teniendo que pasar por unos quince días al labadero de Alfaro inmediato a Segovia a cuidar del esquila y, beneficios de mis ganados [...] dejo delegadas mis veces para el despacho de las atribuciones que están concedidas a esta Presidencia de mi cargo, al vocal más antiguo que queda en esta Corte, de los de la Comisión permanente y de la Asociación de Ganaderos". Toda la información en este sentido puede consultarse en la carpeta de "Comunicaciones de los Sres. Consejeros tributando las gracias por sus nombramientos, y otras dando aviso de sus ausencias temporales". "Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

⁷²¹ *Gaceta de Madrid*, número 6.145, 11 de mayo de 1851.

⁷²² *Gaceta de Madrid*, número 5.088, 18 de agosto de 1848. Asimismo, en Pérez Juan, José Antonio, ob. cit., págs. 73 y 74.

campos de la actividad económica⁷²³. Ciertamente es que la agricultura en sus distintas parcelas iba a verse favorecida, sobre todo entre los productores trigueros de Castilla, si pensamos en la capacidad de influencia que podía tener un hombre como Mariano Miguel Reinoso, primero desde la vocalía del Consejo durante 1847 y posteriormente como ministro de Fomento en 1851. Junto a él, un buen plantel de propietarios y expertos en la materia trataron de centralizar todas las cuestiones que se planteaban en las distintas provincias, atendiendo peticiones personales de los distintos municipios e instituciones, así como de las Juntas Provinciales que enseguida comenzaron a elaborar.

No hay duda que los temas agrícolas alcanzaron una gran difusión y una importancia considerable en el seno del Ministerio de Comercio. La entonces aplaudida coyuntura de expansión en la agricultura provocó un volumen nada despreciable de consultas que, procedentes de las provincias, se dirigían hacia la Administración Central con competencias sobre el fomento y el desarrollo agrario⁷²⁴. Esta política practicada desde el Departamento era de hecho un arma de doble filo que podía provocar cierto malestar entre otros sectores productivos implicados en el desarrollo del país. Algo que por entonces conocía suficientemente bien Juan Bravo Murillo, ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1848. En una carta «confidencial» escrita el 12 de febrero de 1848, y dirigida a Francisco Ramos y Gómez por parte del ministro, éste le refería lo siguiente:

⁷²³ En efecto, el tema de los favores dentro del Consejo está documentado también en la documentación conservada en el Archivo del Antiguo Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas. Así, el vocal Pascual Asensio, en un escrito fechado en el mes de octubre de 1847, calificado como «confidencial», y enviada al entonces Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Antonio Ros de Olano, expresaba lo siguiente: “Mi apreciable amigo suplico á V. tenga la bondad de leer la adjunta comunicacion oficial por si en ella encuentra alguna frase que impida darle curso: tengo con mis electores contraidos compromisos á que no puedo renunciar, y por eso he debido esplicarme de ese modo: con esta aclaracion, podré complacer á V. tomando parte en los debates del Consejo, y ayudarle en lo poco que mis conocimientos alcancen”. La gratitud a los que le acababan de elegir es celebrada en el escrito adjunto de la forma que se señala: “Con suma gratitud he recibido el nombramiento que de mi humilde persona se ha dignado hacer S. M. la Reina que D. g. para vocal del Consejo Real de Agricultura, industria y comercio. Cuando se trata de servir á mi país gratuitamente, sin estipendio alguno, procurando la proteccion y el desarrollo de sus intereses materiales; cuando no se trata de obtener ni honores ni sueldos, sobre cuyo punto tengo contraidos compromisos, á que no puedo ni debo renunciar caballerosamente, nada para mi mas satisfactorio, que robar al necesario descanso el tiempo que deba emplear en debatir las cuestiones que afecten la prosperidad de España, prestando este servicio a mi Reina y á mi Patria”. Véase la documentación correspondiente al “Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

⁷²⁴ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., págs. 47 y 48.

Muy Sr. mio: por los números del Boletín del Ministerio de Comercio publicados hasta ahora habrá V. S. visto que su adquisición importa no solamente á los funcionarios públicos sino a cuantos se egercitan en las diferentes industrias y con especialidad en la del comercio. Convencido yo de la necesidad de prestar á esta clase una proteccion decidida, me he propuesto hacer los esfuerzos posibles para facilitar las comunicaciones y para remover las trabas que entorpezcan así el tráfico interior, como el comercio interior. A estas medidas directas es preciso añadir otras indirectas. No siempre el comercio reducido á sus fuerzas privadas puede adquirir datos bastantes para asegurar el éxito en sus especulaciones; ni siempre puede tener á la vista los obstáculos que de improviso suelen crear por necesidad los Gobiernos. Deber es de la administracion en tales casos adquirir y dar publicidad á toda clase de hechos que puedan interesar al Comercio, puesto que cuenta con ayudas interiores y exteriores destinadas esencialmente á procurarlos. Me he propuesto llenar religiosamente estos deberes, haciendo del Boletín el conducto principal por donde llegue á noticia de los comerciantes del Reyno todo cuanto convenga á su ilustracion y al acrecentamiento de las probabilidades del buen éxito en sus empresas. Para ello, ademas de las publicaciones doctrinales que pueden servir para instruccion de los comerciantes, se insertan en el Boletín los aranceles de importación de otras Naciones, como se ha hecho ya con el de la república Mejicana; se revisa el estado de las producciones y fluctuaciones de los objetos comerciales, según se ha verificado ya respecto del algodón de Nueva Orleáns; se estampan los precios medios de los cereales así en cada una de nuestras provincias como en todo el reino⁷²⁵.

Consciente de la importancia que las clases mercantiles tenían para la economía y la Hacienda del país, Bravo Murillo llegará a solicitar a Francisco Ramos y Gómez, un esfuerzo todavía mayor para paliar el posible deterioro al que podían verse sometidas aquéllas. Aunque sin mencionar a la

⁷²⁵ El documento considerado como «confidencial», escrito y firmado por Juan Bravo Murillo se encuentra en la sección del “Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-B. En dicho escrito aparece tachado el nombre del destinatario, en este caso Francisco Ramos y Gómez, a pesar de lo cual ha sido posible su identificación. Se trata del Prior del Tribunal de Comercio del Reino en Sevilla desde el año 1842, y que se mantuvo en el cargo de manera intermitente hasta 1850. Perteneciente al partido moderado, Francisco Ramos sería posteriormente nombrado Vicepresidente de la Diputación de Sevilla. Una parte de su biografía puede consultarse en la *Guía de Forasteros de la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, situada en la orilla izquierda del río Guadalquivir, á los 37.º 23.’ 12.” de latitud N. y 2.º 6.’ Longitud occidental, con arreglo al meridiano del Real seminario de nobles de Madrid*, Imprenta del Diario de Comercio, Sevilla, junio de 1832, págs. 75 y 433. También existen datos de sus nombramientos en el *Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas*, Tomo Quinto, Imprenta de La Publicidad, Madrid, 1849, págs. 577 y 578.

agricultura o la industria, el ministro finalizaba su carta de la siguiente manera:

Conviene, pues, que V.S., que forma parte del Gobierno en virtud de las funciones que egerce, ilustre sobre este punto á los comerciantes, haciéndoles ver que lejos de ser venal el fin que propone el Gobierno en esta publicacion, tiene solamente por objeto facilitar á todas las clases y especialmente á la mercantil medios de ilustracion para que prosperen; convencido como esta de que el mas seguro de hacer rico al Estado es enriquecer de antemano á los individuos que lo componen. Espero que V.S., secundando estas ideas, procurará el aumento de suscripciones al Boletín de este Ministerio entre la clase mercantil, ya dirigiéndose á las corporaciones encargadas de velar por los intereses del comercio, ya á los individuos mismos, pues no dudo que estos pasos ajenos de todo interés personal ó fiscal, serán recibidos como un loable esfuerzo a favor de las clases mismas, á las cuales por toda recompensa se impone un gravamen tan ligero⁷²⁶.

En cierto sentido, el papel del Consejo en la agricultura supuso un toque de atención en todo lo que estaba referido al mundo rural en su conjunto, y en particular a todo aquello que afectaba a la propiedad territorial. Como cabe suponer, los vocales, así como el resto de funcionarios asignados al Consejo, asumieron en cada caso las tareas que afectaban al grueso de las materias. Unos trabajos que podían estar referidos al crédito territorial, la difusión de los avances técnicos, pasando por la consolidación del prohibicionismo en lo que concernía a la entrada de trigos extranjeros. En este último caso, hubo que asumir, por ejemplo, las peticiones para modificar la Real Orden de 13 de julio de 1839, que exceptuaban a Baleares del libre tráfico de cereales hacia la Península⁷²⁷. Esta incesante tramitación de expedientes correspondientes a la entrada de trigos en España procedentes del exterior se mantendría inalterable hasta casi los últimos años del reinado de Isabel II⁷²⁸.

⁷²⁶ “Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-B.

⁷²⁷ *Gaceta de Madrid*, número 1.704, 16 de julio de 1839. Véase también la documentación relativa a la Isla de Menorca en la carpeta del “Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

⁷²⁸ Sin ir más lejos, el Ayuntamiento del Valle de Arán, en Lérida, realizó al Ministerio de Fomento en el mes de noviembre de 1865 una petición para que se permitiera la introducción desde Francia de una cierta cantidad de trigo y otros productos agrícolas. Todo ello está recogido en la documentación referida al “Real Consejo de Agricultura, Industria y

La situación, muchas veces precaria de los propios labradores, se vio igualmente reflejada en las continuas peticiones que pretendían mejorar las condiciones de los mismos, unas veces innovando y otras transformando antiguos «estados» en la agricultura. Uno de estos aspectos fue la puesta en marcha de establecimientos que pudieran facilitar el socorro directo a los labradores. La Comisión de Agricultura abordó en 1849 el lamentable estado en el que se encontraban los pósitos. Las soluciones manejadas por la Comisión y el Ministerio pasaron por la creación de bancos agrícolas y el establecimiento de cajas de ahorros que, en muchos casos, podían organizarse con fondos de propios. En este sentido, en uno de los borradores elaborados por la Comisión, y en clara referencia a la decadencia de los pósitos y la posible creación de un banco agrícola en cada partido, se postularon algunas soluciones que intentaban minorar en la medida de lo posible algunas de las dificultades que podía presentar el proyecto. En concreto se apuntaba lo siguiente:

Las dificultades que se presentaban para realizarla, consignando la insuficiencia de los anteriores Pósitos, esponiendo que á los bancos agrícolas, cuya formacion se halla recomendada por Real Decreto de 30 de Setiembre de 1841, se oponían, 1º: la desconfianza en el Gobierno; 2º: la desconfianza en la administración local; 3º: el estado del sistema hipotecario; 4º: las leyes sobre la tasa del interés del dinero. Proponía por tanto, para preparar la posibilidad de estos establecimientos: 1º: reforma del sistema hipotecario; 2º: reforma de las leyes que regulan la tasa del interés del dinero; 3º: liquidación pronta y definitiva de los Pósitos, donde aun se conserven, procurando la cobranza de débitos, la efectividad de los reintegros y la transación de los pleitos; 4º: aplicación de estos fondos en union con los de particulares que á ello se prestasen, al establecimiento de bancos territoriales⁷²⁹.

Por último, y en referencia al interés que mediado el siglo XIX ya mostraban algunas asociaciones particulares de propietarios, tanto por la agricultura como por su fomento, así como por la defensa de la propiedad territorial, la Comisión Directiva del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*

Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-B.

⁷²⁹ “Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-B. La situación provocó la publicación de una Real Orden el 31 de mayo de 1850, “mandando la remision de varios datos relativos á los Pósitos del reino”, en *Coleccion legisltiva de España (continuacion de la coleccion de Decretos)*. Segundo Cuatrimestre de 1850, Tomo L, Imprenta Nacional, Madrid, 1850, pág. 179 y 180.

de Barcelona envió una petición en el verano de 1853, en apoyo de la libre publicación de los llamados «calendarios». En la instancia preparada en el Consejo de Agricultura para tal fin, el vocal encargado de realizar el informe correspondiente era claro en sus conclusiones:

Tengo la honra de pasar a las superiores manos de V.E. la instancia que dirige á S.M. la Comision Directiva del Instituto agrícola catalan, en solicitud de que se permita la libre publicacion de calendarios, que uniendo diferentes máximas morales y políticas, pueda ilustrar la clase agricultora, contrarrestando de este modo las ideas de socialismo que tal vez pudieran introducirse entre la gente sencilla que habita los campos. Al verificarlo cumple á mi deber rogar á V.E. se sirva inclinar el ánimo de S.M. para que se digne acceder á la petición de la junta del Instituto, pues las razones espuestas por la misma, las creo bastante dignas de consideracion⁷³⁰.

El asunto de las publicaciones de contenido agrícola fue un tema bastante recurrido, que si bien apenas causó problemas en el seno de la Comisión, sí fue muy solicitado por distintas instituciones y organismos de la Administración periférica. La misma Comisión Regia de Agricultura de la provincia de Barcelona alegaba que: “La clase que menos lee entre las que componen la nacion es sin duda la agricultora. El aislamiento en que viven los labradores por la naturaleza de sus trabajos; sus moradas, que en particular en este principado, se hallan en despoblado y en el centro de las haciendas, hace que en toda la semana no ven mas que á sus familias, y en los dias festivos á sus vecinos que pasan la vida tan aislados como ellos”⁷³¹. El conocimiento de periódicos de agricultura, cartillas rurales y otras obras elementales eran desconocidos por la mayor parte de los labradores. No sucedía lo mismo con los calendarios, en cuyas páginas podían establecerse los trabajos agrícolas identificándolos con cada uno de los meses del año, aspecto que preocupaba a los propietarios de tierras de labor y al comisionado regio de Barcelona, Ramón de Casanova y de Mir, para quien

⁷³⁰ El informe corresponde al elaborado por Melchor Ordoñez el día 3 de agosto de 1853. “Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

⁷³¹ “El Comisionado regio de Agricultura espone la conveniencia de formar un programa y publicar un concurso para la formacion del Calendario, en el cual deberían contener diferentes materias de verdadera utilidad é interes para los agricultores”, en “Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio. Expedientes Generales. Años 1847 a 1859, AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

“la mejora intelectual y moral de la clase agricultora” era un hecho con el que se encontraba plenamente identificado⁷³².

En tiempos del gobierno ejercido por la Unión Liberal, se procedió a una reforma más del Consejo de Agricultura, ampliando el número de vocales en ocho personas más. Entre las novedades que presentaba el Real Decreto de reorganización del Consejo de Agricultura, aprobado en diciembre de 1859, estaba la de limitar la condición de miembros efectivos del Congreso a quienes residieran entonces en la capital del país⁷³³. El resto pasarían a ser reconocidos como consejeros «honorarios». A todos ellos, la nueva norma especificaba el área de competencias al que debían circunscribirse. Unos meses más tarde, esta vez en septiembre de 1860, se aprobaba el primer reglamento del Consejo, en el que se obligaba a todos los consejeros ordinarios a asistir a las reuniones que tuvieran lugar⁷³⁴. De esta manera, conformado el reajuste, no volverían a sucederse más cambios hasta su completa disolución en abril 1869, siendo entonces la Junta Superior de Agricultura, Industria y Comercio la que habría de asumir muchas de las competencias y de los retos que hasta ese momento había mantenido el Consejo.

- Propiedad y representatividad. Las Juntas Provinciales de Agricultura

Por sí mismas, las Juntas Provinciales de Agricultura podrían constituir un tema único de investigación, debido, tanto a la influencia provocada en las economías rurales, como por la abundante información que sobre ellas existe. Ciertamente es que durante los primeros años de andadura administrativa, las Juntas Provinciales se mostraron algo vacilantes, pero

⁷³² Ibidem. Además, Ramón de Casanova y Mir es autor de una *Cartilla de Agricultura*, editada en Figueras a partir del año 1852. Anton Ramírez, Bráulio, ob. cit., pág. 55.

⁷³³ En uno de los borradores elaborado por una Comisión nombrada en 1856 cuyo objetivo era preparar el proyecto de reorganización del Consejo, el artículo 2º expresaba la intención de que el mismo estuviera compuesto por el Ministro de Fomento; el Director General de Agricultura, Industria y Comercio; sesenta Consejeros ordinarios, y finalmente por los Consejeros extraordinarios que "S.M. autorice para tomar parte en las deliberaciones del Consejo". "Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio". Expedientes Generales. Años 1847 a 1859. AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 221-A.

⁷³⁴ *Gaceta de Madrid*, número 351, 17 de diciembre de 1859, y *Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio: Real decreto de su reorganización en 14 de diciembre de 1859 y Reglamento de 5 de setiembre de 1860*, Imprenta Nacional, Madrid, 1861.

con el paso del tiempo fueron determinantes para fortalecer la imagen de la propiedad y del propietario en las zonas agrícolas, actuando, además, como resorte a la formación de asociaciones independientes que fueran contrarias a la política del Gobierno del país.

En principio, dependientes de la Sección de Agricultura del Consejo y de los gobernadores civiles, comenzaron a constituirse en “todas las provincias del reino” las Juntas de Agricultura con un presupuesto de “tres mil reales vellon anuales”. El artículo 6º del Real Decreto de 7 de abril de 1848 establecía que:

Son individuos natos de la Junta el Gefe político, el gefe civil del distrito, si lo hubiere, el alcalde del pueblo donde se halle establecida, los cuales las presidirán por su orden cuando concurren; el regidor síndico de la poblacion, el catedrático de agricultura o botánica de la Universidad, ó á falta de esta, del instituto; el delegado de la cria caballar, el mariscal que actualmente fuere de la comision consultiva hasta la primera renovacion de la mitad de la junta, y en adelante el subdelegado de veterinaria⁷³⁵.

En realidad, existía un elevado interés en conseguir que las clases agrarias de las distintas regiones españolas quedaran integradas en los nuevos órganos consultivos. Se pretendía, entre otras cosas, acercar a las instituciones provinciales el amplio contingente de propietarios que todavía estaban fuera de los órganos del poder económico y político. Sin embargo, a pesar del carácter abierto mostrado para todo aquel que perteneciera al ámbito de la agricultura, también se establecían criterios económicos que, en cierto modo, venían a limitar las condiciones para acceder a las Juntas. El artículo 19 era muy significativo en este sentido al expresar que:

Deliberarán las juntas y propondrán al Gobierno lo que estimen conveniente acerca de los medios para hacer la eleccion de sus individuos en lo sucesivo, partiendo de la base de que ha de ser directa, hecha por el cuerpo de agricultores, y en personas que lo sean, ó propietarios rurales, ganaderos ó catedráticos de agricultura ó botánica, ó dotadas de conocimientos especiales en el ramo, fijando las cuotas que deben pagarse respectivamente para ser electores y elegibles⁷³⁶.

⁷³⁵ *Gaceta de Madrid*, número 4.956, 9 de abril de 1848.

⁷³⁶ *Ibidem*.

Para completar la dotación de personal de las Juntas, debía establecerse un colegio electoral que el mismo Real Decreto puntualizaba en su artículo 23. En él se establecía lo siguiente: “Para completar el número de vocales de las juntas, se reunirán ante el Gefe político los consejeros y diputados provinciales, el alcalde, el regidor síndico y otro regidor del Ayuntamiento de la capital, tres labradores que nombrarán esta corporacion, y los individuos de las comisiones consultivas la cria caballar que haya en la provincia”⁷³⁷.

De la misma manera que venía sucediendo con la sección correspondiente del Consejo de Agricultura, las Juntas debían actuar como órganos de consulta, evacuando aquellos informes que pudieran ser solicitados por el Gobierno de la Nación, el propio Consejo Real de Agricultura, Industria y Comercio, su sección de agricultura, o el Jefe político, con la única objeción que en ningún caso fueran suministrados datos relativos a la fiscalidad que pudieran servir “para la imposicion ó levantamiento de contribuciones”⁷³⁸. Todo ello, sin embargo, no produjo en un principio el efecto que se esperaba. Las Juntas Provinciales de Agricultura quedaron incapacitadas en la práctica a partir de 1850 y no volverían a retomar su actividad con un mayor celo hasta las reformas de 1855, coincidiendo con los gobiernos del *Bienio Progresista* y la llegada de Manuel Alonso Martínez al Ministerio de Fomento⁷³⁹.

Las circunstancias que hacían de las Juntas el ser órganos exclusivamente consultivos, además de la falta de independencia al estar subordinadas a los gobiernos civiles, y al parco reconocimiento que el trabajo de los vocales tenía en estancias más elevadas del poder económico y político, hizo que se les concediera un escaso valor a sus actuaciones, alcanzando muy pronto un relativo fracaso. Incluso después de las reformas de 1855, las Juntas Provinciales se encontraron con problemas desiguales, ya fuera por la falta de recursos en algunos casos o por la carencia de personal capacitado para llevar hasta el final las tareas encomendadas en otros.

⁷³⁷ Ibídem. También en la *Coleccion legisltiva de España (continuacion de la coleccion de Decretos)*. Tercer Cuatrimestre de 1850, Tomo LI, Imprenta Nacional, Madrid, 1850, pág. 452 y 456.

⁷³⁸ Artículo 8º del Real Decreto para la creación de las Juntas Provinciales de Agricultura, *Gaceta de Madrid*, número 4.956, 9 de abril de 1848.

⁷³⁹ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., págs. 48 y 49.

No es de extrañar, por tanto, que todavía en los años sesenta del siglo XIX, la Dirección de Agricultura del Ministerio de Fomento recibiera escritos referidos a la imposibilidad de formar Juntas de Agricultura en algunas provincias, al carecer de partidas para material y pago del personal de las Secretarías. En esta disyuntiva, por ejemplo, estuvo la provincia de Álava en el año 1867, al comprobarse en uno de los escritos dirigidos por el responsable de la Sección de Fomento de la provincia al Director de Agricultura en Madrid, la falta de medios para proceder a la creación de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio. Una circunstancia que, como después veremos, también estaba relacionada con un marcado desinterés por proceder a establecer allí el citado organismo. Esta actitud quedó así reseñada:

Segun los informes que me han comunicado parece que el principal obstáculo con que se ha tropezado en este asunto y que ha hecho ineficaces las gestiones y buenos deseos de aquellos los celosos funcionarios, fue la negativa de la Diputacion general a consignar en su presupuesto provincial las partidas prefijadas en el Reglamento orgánico de las mismas para atender a los gastos de material y pago de haberes del personal de la Secretaria por consideralas innecesarias en esta provincia⁷⁴⁰.

Durante años, las dificultades en algunas Juntas Provinciales fueron alternándose con los éxitos. Entre las primeras, hay que recordar la falta, en determinados casos, del número mínimo de electores que debían conformar los órganos de las mismas. De hecho, llegaron a producirse demoras en las renovaciones de algunos cargos no pudiendo llevarse a la práctica al no contar con las suficientes personas para formar una mayoría conforme a lo que establecían los reglamentos⁷⁴¹. La situación de dificultad en la provincia

⁷⁴⁰ "Comunicacion en demanda de que no se instale la Junta de Agricultura", carpeta de documentos relativa a las "Juntas Provinciales de Agricultura, Expedientes y asuntos varios", en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 223.

⁷⁴¹ El caso de Badajoz es suficientemente demostrativo al no contar en el año de 1855 con el número suficiente de electores para renovar la Junta Provincial. Este hecho se puso en conocimiento del Ministerio en dos ocasiones. "Juntas Provinciales de Agricultura, Expedientes y asuntos varios", en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 223. Casos similares están documentados en las Juntas de Córdoba en 1856; en Ciudad Real por no haber concurrido el número suficiente de electores en 1855, o en Logroño, donde la falta de asistencia de los electores estaba justificada tal y como consta en el escrito dirigido al ministro de Fomento: "Mientras el cólera tenga invadidas como hasta ahora las dos Riojas, las personas notables y por tanto los mayores contribuyentes están alejados de la provincia ó al menos de su domicilio, y serán vanos por tanto cuantos esfuerzos se hagan para reunir en la Capital los diez mayores contribuyentes que se necesitan como minimo para verificar la eleccion de la mencionada Junta con arreglo al artículo 11 del Real Decreto de Mayo

de Zamora llevó al Ministerio a dictar disposiciones especiales al no existir una Comisión Consultiva de la Cría Caballar. A este respecto, Bravo Murillo firmó una Orden dirigida al Jefe Político de Zamora en los siguientes términos: “Proceda V. S. á elegir los vocales de la junta de agricultura, constituyendo la junta electoral los diputados provinciales y los consejeros, con inclusión de los supernumerarios, el alcalde, el regidor síndico y otro regidor de los del ayuntamiento, y tres labradores nombrados por esta corporación; y teniéndose por constituida en la primera reunion si concurren las dos terceras partes de los electores”⁷⁴².

Otras veces la propia legislación, unida a las limitaciones geográficas, terminaron por alterar el normal funcionamiento de las Juntas. Así, el Ayuntamiento de Mahón llegó a solicitar mediante una carta dirigida a la Reina, la creación de una Junta de Agricultura en la Isla de Menorca ante la falta de medios en la Diputación y el propio Ayuntamiento para poder desplazar sus dos representantes a “cien millas de la capital, y no siendo de esperar que para tomar parte en las decisiones de la Corporacion, emprendan un viage por mar, abandonando sus familias, é intereses”. Esta circunstancia se debía a las reformas que contemplaba el Decreto de diciembre de 1859, en el que se obligaba a unir las primeras Juntas de Agricultura a las de Comercio e Industria, lo que añadía serias dificultades a la que hasta esos momento había sido la primitiva Junta, creada en octubre de 1847. Ésta, siguiendo las explicaciones del alcalde de la ciudad, quedaba convertida: “en una especie de comisión del Ayuntamiento, sin vida propia, y privada”. A todo ello añadía: “El Ayuntamiento puede asegurar á V.M. que ni la agricultura, ni la Industria, ni el Comercio de esta isla han estado hasta ahora ni probablemente estarán jamas representados de hecho en la junta provincial, pues de nada sirve que uno ó dos menorquines sean elegidos vocales”⁷⁴³.

último". "Juntas y Consejos Provinciales de Agricultura. Asuntos Generales. Córdoba 1849-1898)", en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 225. La documentación correspondiente a Logroño se encuentra en la carpeta: "Dando conocimiento que no se ha reunido suficiente número de electores para el nombramiento de la Junta de Agricultura y proponer el medio de conseguirlo. Logroño 1855", en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 227. Otros casos documentados en el año 1855 están localizados en las Juntas correspondientes a Jaén, Palencia, Sevilla y Zaragoza, véanse AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajos números 227, 229, 230 y 231, respectivamente.

⁷⁴² *Gaceta de Madrid*, número 4.973, 26 de abril de 1848.

⁷⁴³ La extensa carta de nueve páginas aparece firmada, entre otros, por Juan Sancho, Guillermo de Olivas, Juan Puigserver y Marcos Pons. "Juntas Provinciales de Agricultura, Expedientes y asuntos varios", en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 223.

En efecto, y aún cuando el camino recorrido era somero, con la primera reforma iniciada en 1855 los vocales pasaron a ser designados por un colegio electoral compuesto por los dos mayores contribuyentes de cada uno de los partido judicial que conformaban la provincia. Esta circunstancia dejaba clara la intención, por parte del Gobierno y de los responsables de Fomento, de acercar todavía más a los grandes propietarios a las Juntas, lo que no impidió, como ya advertimos en el párrafo anterior, la falta en muchos casos de personas que reunieran los requerimientos legislativos. Todo ello, además del hecho de que muchos propietarios residieran fuera de los distritos y de las provincias, apremió a las autoridades a tener que aceptar el voto por correo en 1856⁷⁴⁴.

Sin embargo, tanto la existencia de un colegio electoral exiguo como el hecho de que una parte importante del electorado residiera lejos de los distritos, forzó a los gobernadores civiles a tener que designar a los vocales en diferentes Juntas Provinciales. Un hecho que no hizo sino deformar, en gran medida, la idea original que sobre la participación y la representación en los órganos consultivos se había pretendido desde el principio. Con ello, una nueva reforma, esta vez todavía más profunda, iba a ponerse en marcha a finales de 1859.

La idea del gobierno presidido por O'Donnell, de hacer todavía más extensible la base social del régimen durante los años de protagonismo de la Unión Liberal, tuvo uno de sus principales reflejos en la refundición en una sola sección de lo que hasta entonces habían sido las áreas económicas de agricultura, comercio e industria. A partir de ese momento, con el Real Decreto de 14 de diciembre de 1859, se comenzó a diferenciar entre los miembros «natos», con un carácter más técnico, de los que eran «electos».

⁷⁴⁴ "Real Decreto señalando los sujetos que han de componer las Juntas de Agricultura, su elección, reunión y renovación", en la *Gaceta de Madrid*, número 857, 8 de mayo de 1855. Véase también Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 49. Asimismo, para prevenir la falta de concurrencia de los mayores contribuyentes, no siempre domiciliados en las capitales de provincia, se dictó la Real Orden de 7 de octubre de 1856 que autorizaba a los Gobernadores, en cuyos territorios no se hubiese procedido a la renovación de cargos, para que se publicasen en los Boletines oficiales los nombres de todos los electores y se permitiese la remisión de los votos en caso de no asistencia, por conducto del respectivo Alcalde, verificándose la elección con los asistentes, cualquiera que fuese su número. De no ser posible la renovación por dicho procedimiento, el Gobernador podía completar los cargos con el nombramiento de las personas "más acreditadas por su inteligencia, por su celo y amor á la agricultura". *Memoria elevada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por la Direccion General de Agricultura, Industria y Comercio sobre el estado de los ramos dependientes de la misma en octubre de 1861*, Imprenta Nacional, Madrid, 1861, pág. 249.

Las vocalías técnicas se asignaron a los cargos siguientes: el Jefe de la Sección de Fomento de la provincia; el Comisario regio de Agricultura; los ingenieros jefes de distrito de los ramos de Caminos, Minas y Montes; el Director del Instituto provincial de Segunda Enseñanza; los presidentes de la juntas sindicales de los colegios de Agentes de bolsa y Corredores de comercio; el Delegado de la cría caballar; el Visitador principal de ganadería y cañadas y el Subdelegado de veterinaria. Al quedar unidas las tres ramificaciones de la economía, se pasó a elegir cinco representantes electos en cada Sección que en la de Agricultura debían salir de un colegio electoral formado por “los 50 mayores contribuyentes de propiedad rural y pecuaria”⁷⁴⁵.

El artículo 23 del Real Decreto establecía las nuevas materias sobre las que debían ser consultadas las Juntas. Tanto el Gobierno, como la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, los Gobiernos civiles, así como el Real Consejo del ramo correspondiente, podrían recabar de aquéllas información que estuviera relacionada, entre otras muchas cuestiones, sobre la aprobación de ordenanzas municipales, la autorización para la instalación de nuevos riegos y aprovechamiento de las aguas, disposiciones sobre la importación de granos extranjeros — siempre que se tratara de soslayar supuestas carestías —, autorizaciones para la celebración de ferias y mercados, establecimientos de granjas-modelo, arbitrios que pudiera afectar a la agricultura, así como “en todos aquellos asuntos que crean conveniente oír su parecer”⁷⁴⁶.

La reforma de la Juntas, aunque ampliaba de manera considerable las competencias, supeditaban el éxito o fracaso a la capacidad de gestión de los propietarios que habían quedado inmersos en su dirección. El objetivo, enmarcado dentro de lo que era el fomento y la promoción de la riqueza en las provincias, y que podía servirse de todas aquellas medidas que pudieran ser creadas para tal fin, tuvo distintas respuestas dependiendo del mayor o menor peso que tenía el latifundio y los grandes hacendados. Si nos

⁷⁴⁵ “Real decreto de 14 de Diciembre 1859, aprobando el adjunto Reglamento orgánico de la Juntas provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, en las cuales quedan refundidas las antiguas Juntas de Agricultura y las de Comercio”, *Coleccion de leyes, reales decretos y demas disposiciones de interés general referentes al ramo de Agricultura, expedidas desde el 30 de Noviembre de 1853 hasta 5 de Agosto de 1866*, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1866, págs. 390 a 402.

⁷⁴⁶ *Ibidem*, pág. 395.

atenemos a los trabajos realizados en este sentido por Antonio Luque, fue precisamente en estas circunscripciones donde las Diputaciones prestaron menos atención, dotando a las Juntas con muy pocos recursos económicos. Ello se explica por la escasa repercusión que tenían los latifundios en la evolución de los mercados interiores. Situación que contrastaba con las zonas de costa o con aquellas en las que comercio y burguesías locales iban de la mano⁷⁴⁷.

En determinados casos, como ya vimos más arriba con la provincia de Álava, se llegó a desestimar por innecesarias la creación de las Juntas, consideradas por las clases más notables como una forma de control dirigido hacia las Diputaciones Forales. Éstas, ya contaban por entonces con instrumentos propios de fomento y estaban constituidas conforme a los deseos de los grandes propietarios locales. Las Juntas no podían significar más que una forma de cesión de competencias, minorando gran parte de la autonomía que hasta esos instantes habían preservado las instituciones provinciales⁷⁴⁸.

Junto a las recién creadas Juntas Provinciales de Agricultura, Industria y Comercio, y a los Jefes políticos de cada provincia, venían colaborando en la gestión y mejora de la producción agrícola, desde octubre de 1848, las llamadas Comisiones Regias de Agricultura, cuyo objeto era el de asesorar e informar sobre todas las cuestiones que estuvieran relacionadas con el sector agrario. Los comisarios regios al no disponer de retribuciones, ni de medios materiales y humanos con los que realizar sus funciones, apenas sí dejaron muestras de su quehacer, salvo destacadas excepciones, desatendiendo de esta forma una de las premisas que se habían pretendido desde su creación.

La creación de comisiones régias, convenientemente distribuidas y completamente caracterizadas, como requieren la altura y gravedad de su encargo, tan autorizadas que no carezcan de recurso alguno, ni material, ni moral, para producir los bienes que de ellas se esperan, es el único medio posible de ensayar este sistema, sobre el cual ha de basar el Gobierno sus ulteriores resoluciones. Su gran principio ha de ser verlo todo, observarlo todo, recoger lo que convenga, aconsejar con oportunidades, ni ciegamente

⁷⁴⁷ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., págs. 51 y 52.

⁷⁴⁸ *Ibíd.*, pág. 52.

apegada á cuanto existe, ni empíricamente preocupada contra cuanto tiene en su abono la presuncion favorable de la existencia⁷⁴⁹.

Hay que decir que entre los comisionados hubo grandes propietarios como Mariano Miguel de Reinoso, primer ministro de Fomento en 1851, senador, vocal del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, y vicepresidente de la Junta de Agricultura en la provincia de Valladolid, así como Federico Martel y Bernuy, conde consorte de Torres Cabrera, un notable representante de la gran propiedad cordobesa; también miembro de la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio⁷⁵⁰. A ellos habría que sumar el nombre de Narciso Fages de Romá, persona vinculada a la agricultura gerundense y catalana que desarrolló, como pudimos ver en apartados anteriores, un papel decisivo desde la Junta Provincial de Agricultura y desde su condición de gran propietario, en el impulso hacia el asociacionismo de los propietarios agrícolas de la región del Ampurdán.

Con el paso de los años, dentro de la etapa de reinado de Isabel II, la propiedad y los propietarios fueron ganando terreno y peso político en el conjunto de las actividades desarrolladas en la vida rural. De hecho, los ajustes en la Administración en relación a este mismo asunto, denotaban un cierto paralelismo con la evolución que venía experimentando el cuerpo electoral. De esta manera, si en las elecciones del año 1837 el número de electores había superado la cifra de 265.000 personas, hombres en su totalidad, las elecciones de 1854 mostraron un balance mucho más favorecedor, aproximándose a los 700.000. Este aumento era debido, en palabras de Carmelo Romero y Margarita Caballero, a una gradual incorporación “en la que intervinieron los propios candidatos y su más activos afines, de individuos que cumplían los requisitos y no habían sido inscritos en el censo”. Otras veces, la inclusión en el electorado era debida a determinadas debilidades legales que, en consecuencia, eran aprovechadas por quienes apenas podían cumplir con los requisitos establecidos en la ley electoral⁷⁵¹.

⁷⁴⁹ *Gaceta de Madrid*, número 5.139, 8 de octubre de 1848.

⁷⁵⁰ Documentación correspondiente a la provincia de Córdoba, años 1848 a 1884, en "Juntas y Consejos Provinciales de Agricultura, Asuntos Generales", en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 225.

⁷⁵¹ Romero, Carmelo y Caballero, Margarita, ob. cit., págs. 14, 15 y 16. Tenemos que volver a recordar las severas restricciones que presentaban las leyes electorales de 1837 y 1846 para acceder a la condición de elector. En 1837 eran requisitos previos, entre otros, ser propietario con una renta anual de al menos 1.500 reales; labradores que poseyeran una

De acuerdo lo dicho, no cabe duda que en la praxis propietaria importaban tanto la circunscripción electoral como la propiedad. Cuestiones, ambas, que habían quedado convertidas en la «razón» de ser para todo aquel que aspirara a ser candidato a un cargo público. Una idea, ya de por sí muy manejada en los años treinta del siglo XIX, si nos atenemos a los repertorios que se publicaban en la época. No es una casualidad, por tanto, que en 1837 ya se pudieran leer reflexiones como las siguientes: “Las ventajas, las garantías, la bondad del Gobierno Representativo consisten en que las asambleas políticas que son en último resultado las que elevan ó derriban á los ministros, las compongan los hombres de mas influencia; de mas talento; de mas arraigo; y de mas crédito de la Nacion”. Propiedad y territorio se apuntaban entre los rasgos que debían significarse en un candidato apropiado: “Arraigo en la provincia, fortuna independiente, ó ser una notabilidad nacional”⁷⁵².

Las iniciativas de los grandes propietarios en España, y por extensión sus actividades desarrolladas desde las instituciones centrales y periféricas, respondían al modelo existente en Europa del «gentleman farmer» inglés o del «imprenditori» italiano, patrón que se hizo también extensible a otras regiones del continente⁷⁵³. No es preciso extenderse por ahora en más explicaciones, sobre todo si traemos a la memoria nombres como los recientemente citados Fages de Romá, Reinoso, Federico Martel, o como más tarde veremos, Ignacio Vázquez, «agricultores» con una cierta singularidad, al tiempo que representantes de órganos de la Administración como las

yunta para el cultivo de tierra propia, o dos yuntas para el cultivo propio o ajeno. El artículo 7º también fijaba la condición de electores para aquellos colonos, ya fueran arrendatarios o aparceros, que pagaran una renta anual, dinero o frutos, de al menos 3.000 reales. La Ley de 18 de marzo de 1846 amplió la posibilidad del derecho al voto a quienes obtuviesen unas rentas de más de 4.800 reales, justificasen un sueldo de 8.000 reales, o a aquellas otras personas que pagaran 400 reales de contribución directa (la renta anual exigida en 1837 era de 200 reales). Pons y Umbert, Adolfo, *Organización y funcionamiento de las Cortes según las Constituciones españolas y reglamentación de dicho Cuerpo colegislador: exposición sintetica por Adolfo Pons y Umbert*, Congreso de los Diputados, Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 1906, págs. 315 y siguientes.

⁷⁵² Las citas están extraídas de la publicación de Borrego, Andrés, *Manual electoral, para el uso de los electores de la opinion monárquico-constitucional*, Imprenta de la Compañía Tipográfica, Madrid 1837, págs. 6 y 41.

⁷⁵³ La historia de los grandes emprendedores y propietarios del Norte de Italia han sido estudiados por Fumian, Carlo, “Propietari, imprenditori, agronomi”, en Lanaro, S. (ed.), *Storia d'Italia. Le regione dall'Unità a oggi. Il Veneto*, Turín, 1987, págs. 99 a 162. Un clásico, en relación a la figura del «gentleman farmer», en Home Kames, Henry, *The Gentleman farmen. Being an attempt to improve Agriculture, by subjecting it to the test of Racional Principless*. The fourth edition, with the author's last corrections and additions, Printed for Bell and Bradfute, Edinburgh, 1798.

Juntas de Agricultura. Establecimientos desde donde se jugaría un papel destacado, precisamente liderado por los grandes propietarios, incorporando nuevas perspectivas que se concretarían, aunque con resultados desiguales, en la creación de importantes proyectos asociativos en Cataluña, Valencia, Valladolid y Sevilla.

Precisamente, por los casos citados cabría pensar en la intención suficientemente razonada, por parte de los responsables del ramo del Fomento, de incorporar a la administración a personas que ya habían adquirido una cierta relevancia social y, que al mismo tiempo, habían demostrado una declarada preocupación por las cuestiones relacionadas con el desarrollo en el mundo rural. Dicho de otra forma, con la puesta en escena de las Juntas Provinciales de Agricultura y de los Comisarios regios, era posible pensar en un fortalecimiento de los poderes local y provincial, incorporando para ello a importantes terratenientes y hacendados al juego de la política⁷⁵⁴. Por otra parte, se trataba de aportar a la agricultura un nivel técnico similar al que ya existía en sectores como el de minas, montes o caminos. Entretanto, cabría preguntarse si con las continuas reformas llevadas a la práctica en la Administración agraria hasta 1868, en gran medida reforzadas tras la llegada al Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas de Bravo Murillo, no se conformó finalmente un consistente armazón que, incluso, fue capaz de resistir los conatos de revisión surgidos durante el *Bienio* de O'Donnell y Espartero.

En un país como España, donde el peso de lo agrario y lo rural resultaba de una significación extraordinaria, existen motivos sobrados para creer que las políticas dimanadas desde el Ministerio de Fomento acabaron convirtiéndose en una cuestión tan útil como necesaria. Si bien es verdad que el ritmo fue desigual, no es menos cierto que los trabajos acabaron muchas veces subordinados a las voluntades políticas que se iban sucediendo en los distintos gobiernos regionales y del propio Ejecutivo que controlaba el país. Sea como fuere, tanto las Juntas como los Consejos de Agricultura, afrontaron sus obligaciones con mayor o menor fortuna durante todo el período isabelino, siendo probablemente la etapa de menor actividad la acaecida durante los años cincuenta del siglo XIX. A todo ello se unió la actitud de una burguesía agraria, cada vez más convencida de sus posibilidades, cuyas actividades fueron desarrollándose de forma dispar,

⁷⁵⁴ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 54.

dependiendo de las posibilidades que ofrecían las distintas regiones y los medios sobre los que mejor podían ejercer sus intereses⁷⁵⁵.

Al margen de los desajustes temporales y regionales, las actividades de los órganos consultivos estuvieron, la mayor parte de las veces, dirigidas a tratar aspectos colectivos. Ya fueran cuestiones relacionadas con la policía rural, la política arancelaria y los cereales, el aprovechamiento de las aguas, las enajenaciones de propios y comunes por parte de los municipios, la divulgación de nuevos métodos en los cultivos, la creación de bancos agrícolas, amén de un largo etcétera, la mayoría de las veces eran plenamente consensuadas con los poderes locales y con los gobernadores civiles de la provincia. En lo que concierne a los acuerdos y pactos, en muchos casos el consenso se concretaba entre las distintas fuerzas con intereses territoriales, toda vez que un número importante de municipios españoles carecían aún de ordenanzas municipales⁷⁵⁶.

Desde su aparición en 1848 y hasta finales de los años cincuenta, las Juntas Provinciales hubieron de informar y dictaminar sobre asuntos relacionados con ferias y exposiciones de agricultura, arbitrando, entre otros, en diferentes conflictos surgidos a raíz de las desamortizaciones de tierras, la estructuración de los mercados agrarios, o en la normalización relativa a los caminos vecinales⁷⁵⁷. Consecuencia directa de las reformas que debieron acometer en 1859 y de la obligación impuesta para elaborar memorias anuales con el objeto de dar a conocer las actividades desarrolladas por las Juntas Provinciales, sabemos en la actualidad de la existencia de relaciones con algunas asociaciones agrícolas y Amigos del País, así como del conocimiento de prensa especializada o del interés que despertaba el asociacionismo entre los responsables de los órganos de la Administración consultiva⁷⁵⁸.

⁷⁵⁵ Recordemos el caso de Ignacio Vázquez, persona bien situada entre la gran propiedad sevillana y andaluza, estudiada por François Héran, así como Reinoso, Vicepresidente de la Junta de Agricultura en la provincia de Valladolid. Para este último caso véase Pan-Montojo, Juan (1995), *ob.cit.*, págs. 82 a 83.

⁷⁵⁶ *Ibidem*, pág. 83.

⁷⁵⁷ Así se desprende al consultar la copiosa información del antiguo Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en concreto las carpetas pertenecientes a las Juntas Provinciales de Agricultura, correspondientes a los legajos comprendidos entre los números 218 a 231. En las mismas, ordenadas alfabéticamente, están concretadas una gran parte de las actuaciones que las Juntas de Agricultura llevaron a cabo en todas las provincias españolas.

⁷⁵⁸ Antes de la reforma a la que hemos aludido, se remitían "Memorias" sobre los trabajos realizados por las Juntas a la Dirección de Agricultura del Ministerio que, a pesar de no ser

Desde la Junta Provincial de Toledo, Manuel Maestre y Cardona, Secretario General de la misma, afirmaba, por ejemplo: “El carácter del siglo XIX lleva por lema el espíritu de asociación, que tan satisfactorios efectos produce por todas partes, y á los que indudablemente se debe el engrandecimiento de la agricultura”⁷⁵⁹. Esta inclinación hacia el asociacionismo no tardó en hacerse cada vez más extensible, por lo que no es de extrañar que desde la Junta Provincial de Teruel se apoyaran, verbigracia, dictámenes y propuestas manifestadas por el presidente de la *Sociedad Agrícola Valenciana*, en favor de una reforma sobre las cargas impositivas en los consumos⁷⁶⁰. Igualmente, la Junta de Huelva mantenía relaciones con la *Asociación General de Labradores* e invitaba con cierta frecuencia a sus miembros a participar en las reuniones de esta última⁷⁶¹. Otras veces, las Juntas eran las encargadas de examinar los reglamentos de futuras sociedades comprometidas con la agricultura. La Junta de Sevilla informaba favorablemente sobre “el reglamento formado para constituir una Sociedad agrícola de labradores y ganaderos en Écija”, cuyo objeto era, tal como explicaba la propia *Memoria*, promover “los intereses de estas clases”⁷⁶².

publicadas o estar impresas, resultaban muy significativas. Sirva de ejemplo la elaborada por la Junta Provincial de Ciudad Real en 1853, en cuyas páginas se exponían cuestiones de importancia como el estado de la agricultura en la provincia, diversos ensayos practicados con prados artificiales por parte de destacados propietarios, la solicitud de bancos agrícolas, informes sobre el estado de los cereales, o la creación de una Comisión para “activar las reformas agrícolas”, “Juntas y Consejos Provinciales de Agricultura, Asuntos Generales. Provincia de Ciudad Real”, en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 225.

⁷⁵⁹ Maestre y Cardona, Manuel, *Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Toledo. Memoria y resumen de los trabajos ejecutados por la misma durante los años de 1860 al 66 inclusive*. Imprenta de José de Cea, Toledo, 1867, pág. 11. En este sentido, también la Junta de León publicó en 1864 una carta de José Hidalgo Tablada, en la que se recomendaba la creación de una Asociación general de labradores. Véase el *Extracto de los trabajos de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Leon en el año de 1863*, Establecimiento Tipográfico de Miñon, León, 1864, pág. 4.

⁷⁶⁰ *Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Teruel. Resumen de sus trabajos durante el año de 1863, con arreglo al artículo 32 del Reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859*, Imprenta de S. Pedro Pablo Vicente, Teruel, 1864, pág. 18.

⁷⁶¹ *Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Huelva. Resumen de los trabajos ejecutados por la misma durante el año de 1863, formado con arreglo al art. 32 del Reglamento orgánico del 14 de Diciembre de 1859*, sesión del 25 de enero de 1863, Imprenta de D. J. M. Herrera y Pinzon, Huelva, 1864, pág. 3.

⁷⁶² *Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Sevilla. Resumen de los trabajos en que se ha ocupado durante el año de 1862, con arreglo al artículo 32 del Reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859*, Imp. y lib. De D. A. Álvarez, Sevilla, 1863, pág. 7.

Entre los numerosos ejemplos de consideración hacia las asociaciones de agricultores que hemos podido documentar, destacan los relativos a la maquinaria agrícola e instrumentos de cultivo, muchas veces olvidados por la falta de medios que se precisaba para su divulgación. El *Fomento Agrícola de Jerez*, remitió a la Junta de Sevilla en junio de 1863, varios ejemplares de un informe sobre maquinaria experimental. Informe que sería después publicado en el periódico *La Agricultura*, gracias al interés mostrado por la Junta con el fin de que los propios labradores asistieran a los ensayos⁷⁶³. La Junta sevillana, liderada en esos años por Leoncio García Brabo, e Ignacio Vázquez, mantuvo una actividad muy perseverante en lo concerniente a las asociaciones de labradores y propietarios, elaborando en distintos momentos informes que favorecían los vínculos y el patrocinio de los mismos⁷⁶⁴.

Al mismo tiempo, en los sucesivos *Resúmenes* y *Memorias* que las Juntas estaban obligadas a publicar, fue generalizándose la inclusión de noticias y escritos procedentes de otros órganos de la Administración y de entidades asociativas de distintas provincias⁷⁶⁵. Basándonos en lo anterior, y en la pléyade de sumarios elaborados y remitidos en su día al Ministerio de Fomento por las Juntas Provinciales, muchos de los llamados «prospectos» de agricultura terminaron por generalizarse entre un importante número de propietarios y cultivadores de todo el país⁷⁶⁶.

⁷⁶³ Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Sevilla. *Resumen de los trabajos en que se ha ocupado durante el año de 1863, con arreglo al artículo 32 del Reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859*, Imp. y lib. De D. A. Álvarez, Sevilla, 1864, pág. 4.

⁷⁶⁴ Véase, por ejemplo, el “Acuerdo favorable sobre el informe de solicitud por parte de varios labradores y hacendados de la provincia de Sevilla para establecer un Banco agrícola en la capital”. Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia de Sevilla. *Resumen de sus trabajos durante el año 1861, con arreglo al art. 32 del Reglamento orgánico del 14 de Diciembre de 1859*, Imprenta y Litografía de La Agricultura Española y Revista Mercantil, Sevilla, 1862, pág. 4.

⁷⁶⁵ En el *Resumen* de la Junta provincial de Badajoz se daba cuenta de un oficio de la “Comision directiva del Instituto-agrícola-Catalan de San Isidro remitiendo dos prospectos de las lecciones de Química aplicada á la Agricultura, explicada por D. Luis Justo Villanueva, los cuales se mandaron pasar al librero Orduña, para que se abriese una suscripcion entre los propietarios rurales, y que se contestase á aquella Comision diciendo lo que se practicaba”. *Resumen de los trabajos de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Badajoz, durante el año de 1861*, Imprenta y librería de D. Jerónimo Orduña, Badajoz, 1862, pág. 6.

⁷⁶⁶ Así consta en las resoluciones del día 3 de febrero de 1863, de la Junta Provincial de Logroño, en la que se participaba “al Director de la España Agrícola al acuerdo de la Junta relativo á que se publique en el Boletín oficial el prospecto de la Asociacion gral. de labradores, que acompañaba en su comunicación del 1º de Enero”, en “Resumen de los trabajos de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio durante el año 1863”, AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 227.

En este mismo orden de cosas, la concomitancia entre las Juntas Provinciales de Agricultura y las Sociedades Económicas de Amigos del País se mantuvo poco más o menos constante, especialmente en asuntos relativos a exposiciones agrícolas, solicitudes de bancos para labradores o planes para la enseñanza agrícola⁷⁶⁷. En ocasiones, eran las Juntas quienes comunicaban a las Económicas del País los resultados de ciertos ensayos sobre cultivos para que fueran difundidos entre los labradores de la provincia⁷⁶⁸.

En 1849, todavía con Bravo Murillo en el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, se consideró la posibilidad de reunir a los representantes de las Juntas Provinciales de Agricultura en unas Juntas Generales para poder tratar y deliberar sobre las cuestiones más importantes que afectaban al sector agrario. La iniciativa, como se verá, significó un revés, dejando sus cometidos sin continuidad poco tiempo después de ser convocadas. Aprobado el Real Decreto que las creaba en julio de 1849, se comenzaron los preparativos, a finales del mes siguiente, cursando el Programa y la carta personal de la Reina, y convocando a los trescientos asistentes a la Junta que iba a tener lugar el primer día de octubre de aquel año⁷⁶⁹.

El Programa remitido a los interesados aparecía dividido en dos secciones claramente diferenciadas, lo que dio lugar a la creación de 17 comisiones, una por cada cuestión que debía tratarse. Por un lado se convenía la discusión de una parte «legislativa» en la que debían tratarse, entre otros temas, los campos comunes y fincas rústicas de propios; las mejoras que debían introducirse en el sistema hipotecario; los socorros directos a los labradores, o el establecimiento de colonias agrícolas. Otra parte «científica» estaba dedicada a estudiar las causas del elevado precio de las producciones agrícolas en España; examinar las distintas alternativas de

⁷⁶⁷ Distintas informaciones en este sentido pueden encontrarse, por ejemplo, en los Resúmenes y Extractos de los trabajos realizados por distintas Juntas de Agricultura, Industria y Comercio de la provincias de Alicante (años 1861 y 1864); Badajoz (año 1861), y León (1863).

⁷⁶⁸ En sesión celebrada el 9 de marzo de 1863, la Junta de Toledo acordó "se remitiera á la Sociedad de Amigos del País y á los labradores de la provincia los ejemplares impresos sobre los ventajosos resultados obtenidos con el trigo genealógico de Murany, para que lo ensayasen y dieran cuenta de su resultado", Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Toledo. Maestre y Cardona, Manuel, ob. cit., pág. 23.

⁷⁶⁹ "Juntas Generales de Agricultura. Borradores de Actas. Año 1849-1950", en AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 220.

cosechas en el país, o contemplar las ventajas e inconvenientes que presentaba el sistema de barbechos, considerando el terreno, el clima y las necesidades del consumo⁷⁷⁰.

Si atendemos a lo que nos dice Bráulio Anton Ramirez en su *Diccionario de bibliografía agronómica*, la mayor parte de los puntos se discutieron “con detenimiento y lucidez, sirviendo de base los dictámenes de las respectivas comisiones y los votos particulares de algunos de sus individuos”⁷⁷¹. Los debates referidos a la cuestión de la propiedad y las asociaciones se produjeron de manera continuada, siendo precisamente el primero, motivo de discrepancias; especialmente en lo que estaba referido a las tierras desamortizadas y la administración de los comunes y propios en los municipios. En la sesión del día 6 de noviembre, el barón de Lajoyosa defendía la gran propiedad y el acceso a las tierras desamortizadas expresando lo siguiente:

La desamortizacion civil por otra lado ha multiplicado los dueños de grandes propiedades que antes eran vinculadas, y no conocian sino los primogénitos, habiéndose disminuido por otra parte las buenas salidas y carreras que á sus individuos daban subsistencia y honra, y que tienen que procurarse por los medios que la época presenta. La amortizacion eclesiástica y la de los bienes de las encomiendas ha hecho crecer el número de los grandes propietarios⁷⁷².

De todos los datos que hasta ahora conocemos, el estado de crispación surgido como consecuencia de los debates sobre la propiedad dio lugar a la paralización del resto de temas que debían discutirse en la sesión preparatoria⁷⁷³. Una opinión consecuente si tenemos en cuenta algunas de las respuestas que en la sesión del día 10 de noviembre se presentaron en contra del proceso de reparto de tierras. En la misma se argumentaba:

La desamortizacion no ha producido á la agricultura, á la ganadería, ni á la propiedad las ventajas que se esperaban; haya consistido en la forma de

⁷⁷⁰ "Programa de las cuestiones en cuyo examen se ha de ocupar en el presente año la Junta General de Agricultura", AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 220.

⁷⁷¹ Anton Ramirez, Bráulio, ob. cit., págs. 107 y 108.

⁷⁷² *Diario de las Sesiones de las Juntas Generales de Agricultura*, número 17. Sesión del día 6 de noviembre, Imprenta a cargo de Don Manuel de Rojas, Madrid, 1849, pág. 135.

⁷⁷³ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., pág. 58. También en Anton Ramirez, Bráulio, ob. cit., pág. 108.

hacerlo ó en cualquier otro motivo. Arrojadas al mercado á la vez, y declaradas en venta una inmensa porcion de fincas rústicas, se vendieron las mas cuando ardía una desastrosa guerra civil, que estas mismas ventas contribuian no poco a sostener⁷⁷⁴.

Como quiera que sea, las cuestiones relacionadas con el asociacionismo fueron igualmente abordadas en las sesiones, especialmente por Mariano Miguel Reinoso. En una de sus primeras alusiones al tema Reinoso lo justificaba de la siguiente forma: “En primer lugar, no se ve la causa de que las corporaciones de médicos, abogados etc. puedan organizarse en sociedades de auxilios mutuos, y no puedan hacerlo los labradores”. Sensible a las dificultades que acarreaban la agricultura y el mantenimiento de las propiedades en la vida rural, llegó a solicitar en una amplia exposición un esfuerzo considerable para establecer y organizar asociaciones que dieran cobertura social y económica a los labradores y propietarios repartidos en todas las regiones agrícolas del país. Con unos planteamientos tan sencillos como prácticos, quien representaba en esos momentos a un buen número de agricultores y propietarios castellanos concretaba sus planteamientos en los siguientes términos:

Los labradores tienen cierta clase de necesidades que llenar, menos costosas que una pension vitalicia, tan pequeña como se quiera, si ha de servir de algo al pensionado. El buey que se muere, puede ser comprado por los cultivadores asociados al precio necesario para comprar otro. La mula que se inutiliza; los daños aislados de temporales; las labores del cultivador enfermo; el jornal módico del incapacitado por la vejez ó la enfermedad; el auxilio al castigado de la fortuna, y muchos otros, objetos son que pueden muy bien llenar la asociacion de los cultivadores por pueblos, en donde sean bastantes; por grupos de pueblos, a donde sean pocos⁷⁷⁵.

Con la última sesión celebrada el día 10 de noviembre se ponía fin a mes y medio en el que se habían analizado y discutido meticulosamente

⁷⁷⁴ *Diario de las Sesiones de las Juntas Generales de Agricultura*, Apéndice al número 21. Sesión del día 10 de noviembre, Imprenta a cargo de Don Manuel de Rojas, Madrid, 1849, pág. 1.

⁷⁷⁵ "Voto particular del Señor Don Mariano Miguel de Reinoso sobre las causas que contribuyen á que muchas de nuestras producciones agrícolas sean mas caras que las de otras naciones", *Diario de las Sesiones de las Juntas Generales de Agricultura*, Apéndice al número 25, 17 de octubre de 1849, Imprenta a cargo de Don Manuel de Rojas, Madrid, 1849, pág. 5.

soluciones a cada tema expuesto. La prensa se interesó por los trabajos de las reuniones publicándose amplias noticias en *El Herald*, *La Nación*, *La España*, *La Semana*, o *La Ilustración*, entre otros⁷⁷⁶. Asimismo, sabemos que desde las sesiones celebradas por la Junta General salieron finalmente algunas propuestas que serían aprobadas por la Reina, especialmente las que se referían a la creación de tres Escuelas prácticas de Agricultura. Una iniciativa que había estado apoyada por el ministro Manuel de Seijas Lozano. En cualquier caso, distintos autores han considerado que las propuestas desestimadas en relación a la desamortización significaron una fractura en las deliberaciones de la Junta. Es probable que el temor a una mayor radicalización supusiera finalmente la supresión que, unilateralmente realizó el Gobierno de la nación. Un hecho que daría lugar, meses más tarde, a la disolución de la Junta General, por lo que nunca más volvería a reunirse⁷⁷⁷. Este hecho contrasta sin embargo con la versión oficial que hemos recogido del propio Archivo del antiguo Ministerio de Fomento. Uno de los últimos documentos que aparecen en la carpeta perteneciente a las Juntas Generales de Agricultura es el borrador de comunicación que debía dirigirse a los Gobernadores de todas las provincias, justo un año después, para convocar nuevamente a los participantes de la Junta General. Dicho borrador, fechado el día 16 de septiembre de 1850, comenzaba de la siguiente forma:

Si por el ilustrado celo con que la Junta de Agricultura ha correspondido á las esperanzas de S. M. hubiera de fijarse la época de su convocacion, esta tendría lugar en el presente año. Sus dignos individuos otra vez vendrían á confirmar el justo concepto que han sabido grangearse en su primera reunion. Pero al aceptar el Gobierno sus luces y la espontaneidad con que las consagran á la utilidad pública, no puede perder de vista los miramientos á que son acreedores, ni admitir sin lastimar sus intereses la frecuente reproduccion de los sacrificios que debe ocasionarles el abandono de sus propios negocios para ocuparse exclusivamente en la capital del Reino de promover y mejorar la agricultura. Ya en las anteriores discusiones se habían tocado los inconvenientes de fijar períodos demasiado cortos para la reunion

⁷⁷⁶ Toledano Morales, Carlos, “Junta General de Agricultura de 1849”, *Estudios de Historia Contemporánea*, Vol. 1, Instituto Jerónimo Zurita, CSIC, Madrid 1976, pág. 219.

⁷⁷⁷ Separadas en el tiempo, las opiniones de Antonio Luque y Carlos Toledano, coinciden en las dificultades que fueron adquiriendo las sucesivas sesiones en la Junta General, precisamente a raíz de ser tratados los temas relativos a la propiedad y las repercusiones que habían tenido y mantenían todavía en esos momentos la política desamortizadora de los distintos gobiernos. Además del propio *Diario de Sesiones de las Juntas Generales*, pueden consultarse las obras de ambos autores ya citados con anterioridad.

de la Junta, y la conveniencia de conciliar con sus tareas, el bienestar de los que en ellas toman parte. A tan justa consideración se llega otra no menos atendible, la imposibilidad de que en pocos meses hayan de reunirse nuevos datos y ensayos para dar interés á las discusiones y hacerlas tan útiles como pueden serlo, cuando venga el tiempo á favorecer la propia experiencia, asegurando los resultados de la observacion y del trabajo. Tales son, entre otras, las razones que tiene el Gobierno para suspender la reunion de la Junta de Agricultura que debía verificarse el primero próximo Octubre⁷⁷⁸.

La actividad administrativa, no obstante, continuó su actividad en todo aquello que estaba relacionado con la propiedad rural, estableciéndose en 1859 una serie de Comisiones que debían informar sobre las leyes que afectaban, tanto a la agricultura como a los territorios rurales⁷⁷⁹. Antes de la finalización del período isabelino, ministros como Alonso Martínez o Antonio Aguilar y Correa, intentaron dotar a la enseñanza agrícola de mejores medios, llevando a la práctica un extenso *Interrogatorio acerca del estado de la enseñanza agrícola*, así como numerosas subvenciones a las granjas-modelo que ya funcionaban en distintos lugares del país. Las últimas acciones estuvieron dirigidas a la promulgación de la Ley sobre Fomento de la población rural, en el año 1866, instrumento legal que debía rentabilizarse en el desarrollo de la carrera agrícola⁷⁸⁰. Sin embargo, el encuentro con una crisis política y financiera surgida en esos mismos años, selló el ambicioso programa que se había puesto en marcha, llevándose no solo el proyecto agrario, sino el propio régimen monárquico de Isabel II.

⁷⁷⁸ “Juntas Generales de Agricultura. Borradores de Actas. Año 1849-1850”, AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 220.

⁷⁷⁹ “Nombramientos de Comisiones para que informen sobre las leyes que afectan a la propiedad rural y a la agricultura”, AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 6, expediente 26, año 1859.

⁷⁸⁰ Luque Ballesteros, Antonio, ob. cit., págs. 59 y 60.

4.- EL «EJE» ASOCIATIVO BARCELONA-SEVILLA-VALENCIA. PARTENARIADO AGRÍCOLA Y REPERCUSIONES REGIONALES

- La reforma arancelaria de 1849 y la cuestión triguera de los años cincuenta. Crisis de subsistencias y primeras respuestas del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro

Dieciséis años antes de que la *Société des Agriculteurs de France* comenzara sus actividades, y unas cuantas décadas previas al inicio de las ocupaciones del *Belgische Boerenbond*, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* se ponía en marcha en Barcelona en el año 1851⁷⁸¹. Aunque el desarrollo de las asociaciones agrarias en España se ha querido aprehender a un camino lento, al mismo tiempo que complejo hasta los últimos años del siglo XIX, la realidad quiso, sin embargo, que un grupo de propietarios catalanes afrontara el reto de organizar una asociación rural de ámbito nacional. Esta idea original hubo de ser modificada ante las dificultades surgidas, sobre todo en los primeros años, transformándose muy pronto y dando paso a un proyecto más realista que optara por unos objetivos mucho más prácticos, circunscribiendo entonces su ámbito a las provincias del Principado catalán⁷⁸².

Unido a la finalización de la Segunda Guerra Carlista, un conflicto que afectaría principalmente a los territorios catalanes y que se desenvolvería entre 1846 y mediados de 1849, y a los cambios que estaban produciéndose en la estructura de la propiedad como consecuencia de la persistente legislación liberal, tanto los grupos que representaban las grandes haciendas como la emergente burguesía agraria, no tardaron en reivindicarse con indefectible empeño, movilizándose de inmediato en favor de la modernización del sector agrícola en Cataluña⁷⁸³. Precisamente, el nuevo

⁷⁸¹ Recordemos que la *Société des Agriculteurs de France*, que agruparía a un importante número de propietarios rurales franceses, arrendatarios y asalariados agrícolas, se puso en marcha en el año 1867. Véase, por ejemplo: Molins, José Elías de, *La asociación y cooperación agrícolas: estudio social agrario*, Imprenta barcelonesa, Barcelona, 1912, págs. 173, 174 y 194. Asimismo, en 1890, en Lovaina, vería la luz la principal organización agraria establecida en Bélgica, el *Boerenbond*, que constituido bajo una poderosa masa de propietarios darían lugar a una importante asociación económica y política de intervención agraria en el país. En este sentido puede consultarse de Sanz Lafuente, Gloria, *En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005, págs. 201 y 202.

⁷⁸² Planas, Jordi (2008), ob. cit., pág. 17.

⁷⁸³ Castán Andolz, Ignacio Javier, “La sociología del carlismo durante la guerra de los «matiners», *Hispania Nova: Revista de historia contemporánea*, número 2, años 2001-2002.

modelo de sociedad, tal y como apuntara en su día Monserrat Caminal, iba a condicionar para los diversos sectores productivos la necesidad de buscar necesariamente la asociación con el fin de garantizar su protección en el recién estrenado escenario político, económico y social⁷⁸⁴.

Con el impulso de las políticas liberales a la agricultura comenzaron a producirse algunos avances, sobre todo en los primeros años de reformas, en aquellos aspectos que tenían que ver con el precio de los productos agrícolas, así como en la mejora y modernización de los medios de producción, sin olvidar los proyectos que estaban a punto de ponerse en marcha en relación con la innovación en los transportes⁷⁸⁵. Ligado a todo ello, la idea de practicar una cerrada defensa, gracias al nuevo cúmulo de propietarios agrícolas que se estaba originando en el Principado, surgió rápidamente de la mano de un considerable círculo de personas vinculadas a la gran propiedad. Una colectividad de latifundistas que, por otra parte, iba a demostrar muy pocos reparos a la hora de ejercer una obstinada salvaguardia ante la política resultante del Estado.

Al *Instituto Agrícola Catalán* llegarían terratenientes, pero también un buen número de nuevos propietarios, tal y como estaba sucediendo en el resto del país, procedentes de las leyes desvinculadoras y desamortizadoras. Solo así se entiende que entre los fundadores de la Asociación catalana se encontraran, además de latifundistas ligados a la nobleza, propietarios recién llegados al mundo agrícola, como Safont o Clarós, a los que años después se irían incorporando otros miembros procedentes de sectores industriales que, además, habían decidido invertir una parte de su capital en el sector agrícola⁷⁸⁶. Este hecho quiso verse desde algunos sectores de la sociedad catalana como un aspecto que restaba compromisos ante lo que debía ser una asociación puramente «agraria».

⁷⁸⁴ Caminal i Badia, Monserrat (1989), pág. 118.

⁷⁸⁵ En relación a la situación y a la capacidad del sistema de transportes a mediados del siglo XIX pueden consultarse los trabajos, ya tradicionales, de Ringrose, David R., *Los transportes y el estancamiento económico de España. 1750-1950*, Tecnos, Madrid, 1972, y de Ponsot, Pierre, "En Andalousie Occidentale: systèmes de transports et développement économique (XVI^e-XIX^e siècle)", en *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations*, volumen 31, número 6, año 1976, págs. 1195 a 1212.

⁷⁸⁶ Entre ellos se encontraban, por ejemplo, Ramon Bonaplata i Nadal, Joan Güell i Ferrer, o los hermanos Ignasi i Manuel Girona i Agrañel

En cualquier caso, la defensa de la propiedad no estuvo exenta de una clara ofensiva que se prolongaría en el tiempo contra el Gobierno de Madrid, aplicando para ello una tenaz oposición a los sucesivos proyectos políticos y económicos que podían afectar de una forma directa al territorio y a su entorno productivo. Políticas que, incluso en algunas ocasiones, eran discutidas por los propios miembros del *Instituto Agrícola* que, además, gozaban del cargo de diputados en las Cortes de la capital del país. De esta forma, tal como desarrollaremos a continuación, al interés por los avances, la policía rural, la instrucción agronómica o la propia productividad en el campo, se fueron sumando relevantes desacuerdos en materia arancelaria, especialmente en lo que concernía a los cereales, además de hacerlo en otras cuestiones que fundamentalmente estrechaban la idea de liberar a los propietarios de las fuertes cargas tributarias a las que de forma permanente estaban sometidos. El creciente número de propietarios que de forma continuada acudía a inscribirse en la Institución en el transcurso de los primeros momentos de existencia, así como la idea surgida de establecer una Comisión permanente en Madrid, con el firme propósito de servir de colectivo de presión sobre las actividades legislativas de las Cortes, llevarían pronto al *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* a ser reconocido como el verdadero patrón y modelo de lo que debía ser una asociación agrícola capaz de hacer frente a la «cruzada», que muchos pensaban, se estaba maniobrando contra la agricultura nacional⁷⁸⁷.

No debe extrañar, pues, que mediado el siglo XIX se comenzaran a poner los cimientos de lo que debía ser una asociación de agricultores dispuesta a servir de baluarte a los intereses agrarios de los más destacados propietarios. Además, debía conseguirse un amplio y extenso desarrollo de la economía rural, utilizando para ello la divulgación científica y todos los avances que la agronomía podía prestar en esos momentos a la mejora de los rendimientos en la agricultura, llevando a ésta a un estadio próximo a los planteamientos «capitalistas» que ya se estaban perfeccionando en otros países de Europa. Este despliegue de intereses debía estar de acuerdo con los del resto de sectores económicos, especialmente con la industria y el

⁷⁸⁷ El término «cruzada», aparece impreso expresamente de esta manera, no solamente en la revista del Instituto, sino en otras que con posterioridad verán la luz, y que también estarán relacionadas con el asociacionismo agrario. Es el caso, por ejemplo, de *La Agricultura Española*. El artículo titulado "Cruzada contra la agricultura nacional" fue publicado, tanto en la anterior como en la propia publicación del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*. Véase la *RIACSI*, Tomo VIII, Barcelona, 1858, págs. 37 a 41.

comercio, tal y como esgrimiría José Bertrán y Ros en el discurso pronunciado con motivo de la creación del *Instituto Agrícola*⁷⁸⁸. Ahora bien, en estas circunstancias la pregunta se hace evidente ¿Cuál era entonces la situación económica en Cataluña y España? Y más concretamente ¿Cuáles fueron las actuaciones en la cuestión triguera durante los primeros años de existencia de la Asociación?

Como ya conocemos, la pérdida colonial y el precario estado del régimen absolutista condujeron a una reorientación de la economía en España, marcada, entre otros aspectos, por la prohibición a la introducción de cereales extranjeros en los mercados nacionales a partir de 1820. Sugerido ya hace algún tiempo por Garrabou y Sanz Fernández, en las primeras décadas del siglo XIX, tanto los propietarios de tierras agrícolas, arrendatarios, etc., así como otros colectivos que todavía eran perceptores de rentas feudales, acumulaban ciertas ganancias debido, fundamentalmente, al control que mantenían sobre los mercados. Este hecho no implicaba que los agricultores estuvieran produciendo trigo, además de otros productos, con la intención de ser llevados a las plazas de venta, sino que se trababa, al menos así lo creemos también nosotros, de vender solo en aquellos momentos en los que la producción así lo permitía. De este modo, una gran parte de los agricultores del país se vio ante la imposibilidad de dar salida, con una cierta asiduidad, a los que podrían haber sido los rendimientos de una eventual intensificación de las cosechas. Con todo ello, los precios se estancaron y la remuneración se vio minorada⁷⁸⁹.

Con esta tendencia en la que se adivinaba una clara caída en los precios, los distintos gobiernos optaron por la asunción de medidas que fueran capaces de impulsar las exportaciones, al tiempo que se intentaban

⁷⁸⁸ José Bertrán y Ros ocupaba en 1851 el cargo de Ministro honorario del Supremo Tribunal de Guerra y Marina, siendo el encargado de someter a debate y deliberación el Reglamento que había sido formulado por la Comisión, creada a tales efectos. En este sentido “Expuso, asimismo, con sólidas consideraciones los títulos que bajo todos conceptos llamaban á la Agricultura á una representación igual, cuando menos, á la de los otros ramos que constituyen la riqueza pública”. Véase de Maspons i Camarasa, Jaume, el artículo titulado “Agricultura”, en *Geografía general de Catalunya. Dirigida per Francesch Carreras y Candi*, Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1908, pág. 543. También en la nota necrológica escrita por P. de Barnola bajo el título de “Noticia biográfica del Ilmo. Sr. D. José Bertrán y Ros leída en la Junta General celebrada en 22 de diciembre de 1855”, en *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Volumen IV, años 1855-1856, págs. 253 a 256.

⁷⁸⁹ Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús, “Introducción”, en *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, ob. cit., pág. 15.

frenar las importaciones procedentes de Europa. En realidad, las medidas adoptadas a partir de 1820, basadas en la potenciación de los mercados interiores y en el estímulo a las exportaciones, quedarían convertidas desde esos momentos en el paradigma de la política económica en España durante las décadas inmediatamente posteriores⁷⁹⁰.

La situación relativa al trigo y a otros cereales fue modificándose a medida que el siglo XIX se aproximaba a su mitad. Sabemos que a Cataluña llegaban los excedentes procedentes de regiones de la meseta sur a través de los puertos valencianos. Si tenemos en cuenta los datos recogidos en la *Información Arancelaria de 1847*, algunos de los centros tradicionalmente receptores de granos acabaron transformándose en focos de extracción, llegando a superar en algunos momentos al puerto de Santander. Este hecho se ha querido aplicar a poblaciones como Sevilla. Un hecho, sin embargo, considerado exagerado por Garrabou, lo que no impide suponer que, en efecto, el muelle andaluz se consolidara como un puerto de salida para los excedentes de cereales que se estaban produciendo en las vegas del Guadalquivir⁷⁹¹. A través de las estadísticas de cabotaje correspondientes al año 1859, sabemos que Alicante había pasado a ser el punto más destacado en la extracción de trigo y que las provincias andaluzas ya no dominaban la exportación, tal y como sucedía en 1846, siendo la región más deficitaria en este sentido después de Cataluña⁷⁹².

Si se tienen en cuenta los precios del trigo entre 1815 y 1875 en las principales plazas donde el mismo se comercializaba, resulta evidente que durante las tres primeras décadas del siglo XIX aquél llegó a situarse en algunos mercados hasta tres veces más caro del importe al que se podía adquirir en la ciudad de Valladolid (véase el gráfico 11). Situación que nuevamente venía a justificar el poco estímulo que debía existir a la hora de impulsar la producción en este sector en las comarcas de Castilla la Vieja. El hecho en sí, explica las diferentes condiciones que se daban en la agricultura castellana y catalana hasta 1850. Un fenómeno que si lo ajustamos a dos de las ciudades más representativas, como Valladolid y

⁷⁹⁰ Ibídem, pág. 16.

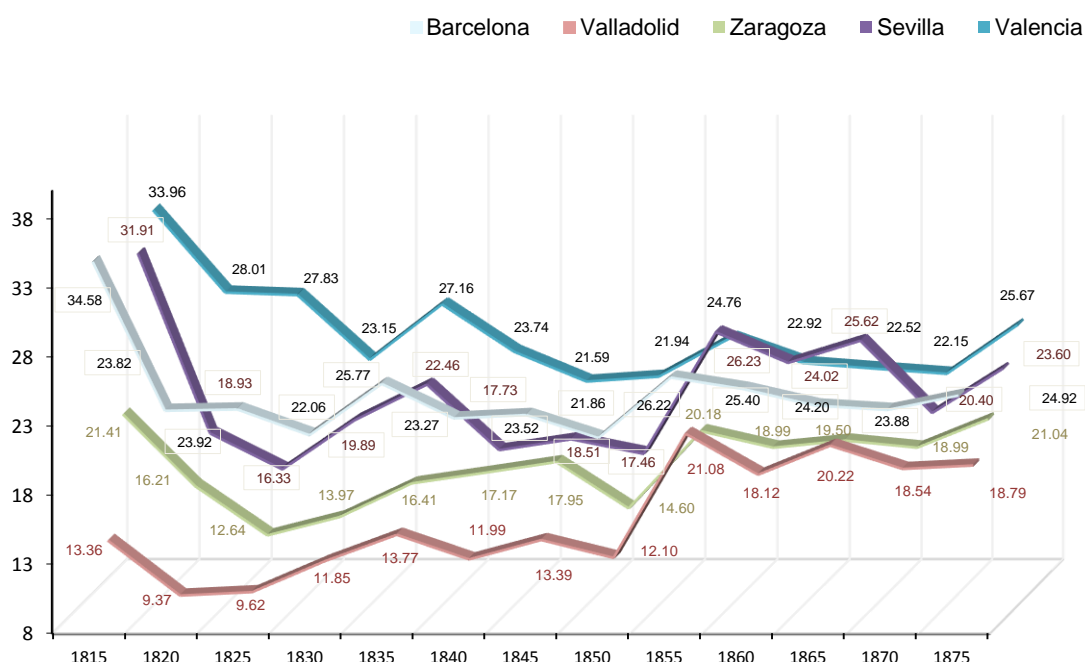
⁷⁹¹ Una excelente exposición del tema se encuentra en el artículo de Garrabou, Ramon, "La información arancelaria sobre el comercio de cereales y de la lana de 1847: datos para la historia de la formación del mercado interior", *Agricultura y Sociedad*, enero-marzo de 1979, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, págs. 329 a 375.

⁷⁹² Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (1985), ob. cit., págs. 27 y 28.

Barcelona, nos revela claramente la tendencia a la baja que se produjo en los precios de esta última. A ello se suma una leve subida en los años setenta, así como un ligero acercamiento entre ambas series durante el período 1855-1859. A primera vista, parece claro que los precios castellanos fueron recuperándose a través de la entrada en los mercados de trigos y harinas de la región, mientras que en Barcelona y otros centros de Cataluña y Aragón, los precios luchaban por mantenerse en un nivel que pudiera ofrecer rendimientos competitivos a sus productores. Un aspecto que queda visible en las diferencias de precios entre las ciudades Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Valencia (véase el gráfico 12).

GRÁFICO 11

Distribución del precio del trigo en los mercados de Barcelona, Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Valencia entre 1815 y 1879 (ptas/hl)



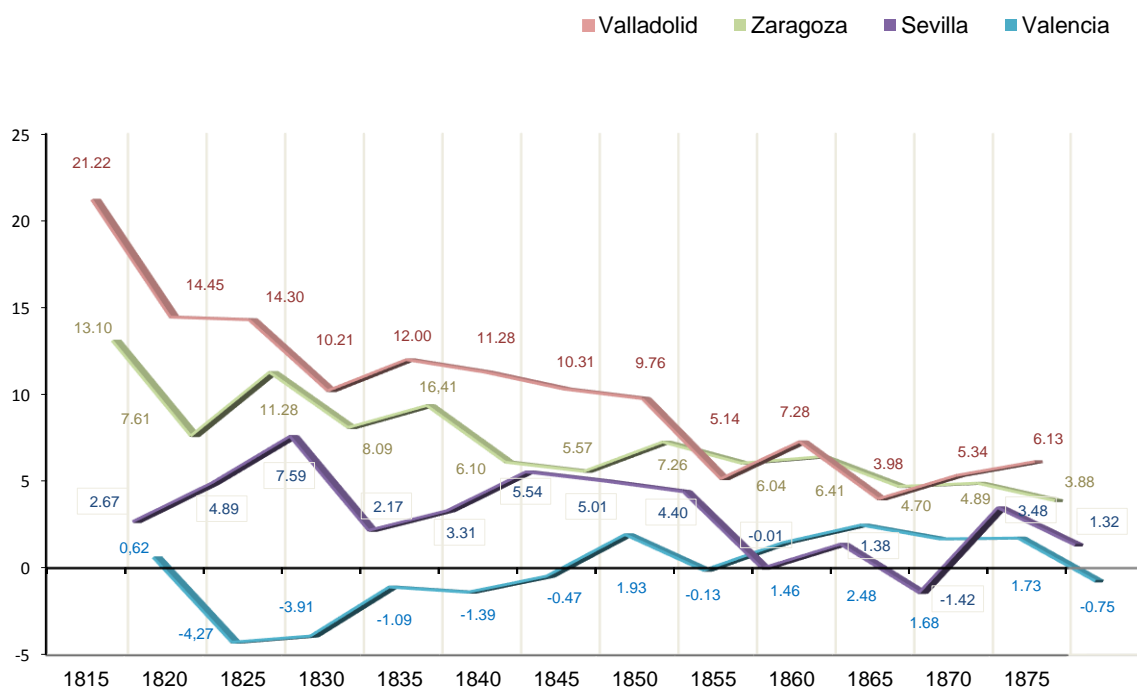
* No se ha incluido el año 1836 ** No se ha incluido el año 1815 *** No se ha incluido el año 1820
 FUENTE: Apéndices 1 y 2, en Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (1985), ob. cit., págs. 188 y 189.

Tal y como han defendido Garrabou y Sanz, durante el período al que nos referimos, el comercio «interregional» de cereales, especialmente el

volumen acarreado desde las zonas productoras del interior peninsular hacia los centros del litoral, demuestra una parte importante de los avances que se sucedieron en lo que se ha querido llamar la “integración del mercado interior”⁷⁹³. Una circunstancia similar se produce al comparar los mercados de Zaragoza y Sevilla con el barcelonés. En efecto, los precios en Zaragoza se llegaron a situar en los primeros años de la década de 1860 un 30 por ciento

GRÁFICO 12

Diferencia del precio del trigo en los mercados de Valladolid, Zaragoza, Sevilla y Valencia respecto al de Barcelona entre 1815 y 1879 (ptas/hl)



FUENTE: Datos extraídos de los Apéndices 1 y 2, en Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (1985), ob. cit., págs. 188 y 189.

⁷⁹³ Ramon Garrabou y Jesús Sanz Fernández, incorporan a estas tesis la integración de Extremadura, una región hasta entonces marginada, a los mercados nacionales de cereales. Ibidem, pág. 62.

por encima de los que se registrarían en la capital catalana. Solo en los años noventa, esta diferencia se reduciría lo que hizo que los granos aragoneses apenas llegaran a Barcelona.

Todo este proceso no tardó en suscitar un amplio cúmulo de tensiones entre los propietarios productores catalanes y el resto del Estado, cimentándose importantes diferencias con las políticas que venían practicándose desde Madrid. Parece poco discutible que el crecimiento y la consolidación del comercio entre las zonas productoras del interior y las consumidoras de la periferia dieran lugar a importantes diferencias entre los distintos mercados y las distintas zonas donde se comercializaba el trigo. A ello sumaremos que este mismo proceso no evitó, en absoluto, que muchas áreas rurales siguieran al margen del progreso material y económico. Es más, la escasez de recursos registrada en buena parte de la población agraria no hizo sino acrecentar las dificultades que ya venían padeciendo en sus niveles de vida de manera persistente, lo que produjo un alejamiento todavía más ostensible respecto a aquellos grupos adheridos a la gran propiedad y a la burguesía cada vez mejor situada⁷⁹⁴.

La situación en Cataluña a mediados de siglo, en lo que se refería a la propiedad rural, mantenía una estructura conformada por fincas no excesivamente grandes, por lo general dedicadas al cultivo del cereal, el olivo o al viñedo, existiendo importantes patrimonios, consecuencia, en muchos casos, de las sucesivas uniones familiares. Como apuntara en su día Ferran Soldevila, las fincas utilizadas como unidades de explotación tendían a ser pequeñas o medianas, comparadas con las que podían encontrarse en el resto de España y en los países de Europa Occidental⁷⁹⁵. El siglo XIX vino a dejar una situación algo alejada de los latifundios procedentes de antiguas jurisdicciones territoriales, en contraposición a lo que sucedía en otras provincias. Además, la división de la propiedad, agudizada en la mayoría de comarcas en Cataluña, fue una consecuencia directa del censo enfitéutico, las desamortizaciones, así como de la retirada de los vínculos o fideicomisos a los que estaban sujetos un número importante de antiguos patrimonios. Habría que sumar a todo ello un elevado absentismo derivado de los conflictos vividos sobre el terreno, amén de unas rentas insuficientes que

⁷⁹⁴ Ibídem págs. 65 a 67.

⁷⁹⁵ Soldevila, Ferran, *Un segle de vida catalana, 1814-1930*, Volumen I, Editorial Alcides, Barcelona, 1961, pág. 532.

proporcionaban las tierras de cultivo a sus propietarios. El propio Soldevila, refiriéndose a este tema, aludía a la merma de los ingresos en la clase propietaria, además de mencionar la carestía que, en concreto, duplicaba las cifras en las ciudades a la producida en las zonas rurales. La precariedad de los grupos asimilados a la propiedad agrícola se hizo todavía más evidente cuando muchos de los antiguos propietarios se vieron obligados a parcelar sus tierras y venderlas, en muchos casos, a antiguos arrendatarios y aparceros⁷⁹⁶.

La antes comentada depreciación de los cereales contribuyó en gran medida a hacer poco rentables las zonas de cultivo dedicadas a los mismos. El aumento en las tasas contributivas territoriales excitó todavía más los ánimos de quienes creían ver una persecución a sus intereses y a su forma de vida, haciendo incluso más profunda la depreciación de los productos agrícolas en Cataluña. De esta forma, no faltaron hacendados y terratenientes que, aprovechando el absentismo de sus haciendas, decidieron ejercer alguna profesión liberal en las capitales de provincia con el fin de incrementar sus ingresos. A ello se sumaría, desde finales de los años sesenta de la centuria, el ataque de la filoxera a los viñedos de todo el país. En consecuencia, parece comprensible que uno de los objetivos más subrayados por el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en 1851, el de proceder a la defensa de los intereses de la clase agricultora, lograra, apenas transcurridos diez años desde su fundación, un número que superaba los setecientos socios⁷⁹⁷.

La situación en Madrid el mismo año en el que se aprobaba el Reglamento del *Instituto Agrícola*, no podía ser muy tranquilizadora para los productores y propietarios que abogaban por la protección del trigo, sobre todo después de que un grupo de diputados con Sánchez Silva a la cabeza presentara, solo un año después haber entrado en vigor la regulación arancelaria de 1849, una proposición de ley para derogar las prohibiciones recogidas en la misma. En la Proposición de ley, encabezada por el marqués de Cáceres, Ignacio M. de Argote, el conde de Ezpeleta, Martínez Pérís, Juan de Cárdenas y Miguel de Zayas, entre otros, y que debía aplicarse a partir

⁷⁹⁶ Ibídem, pág. 533.

⁷⁹⁷ La cifra está sacada de la obra de Camps i Arboix, Joaquim de, *Història de l'agricultura catalana*, Editorial Tàber, Barcelona, 1969, pág. 129. En relación al absentismo de los propietarios catalanes, véase la obra citada de Soldevilla, en particular las líneas que dedica a las "Clases sociales agrarias", págs. 534 y 535.

del día 1 de enero de 1852, se justificaba la revisión arancelaria en tanto que: “ni las contribuciones directas, ni las de consumos son susceptibles de aumento; que las economías presentadas por el Gobierno no son suficientes á restablecer el equilibrio entre los ingresos y los gastos, y que el único medio justo y hacedero para conseguirlo, no solo sin gravámen de los contribuyentes, sino con grande alivio suyo y ventaja de sus intereses es la reforma de los aranceles de aduanas en un sentido más favorable al aumento de los consumos, los ingresos del tesoro, y al desarrollo de la verdadera produccion”⁷⁹⁸. Si bien en el Proyecto quedaban excluidos explícitamente los cereales, el creciente auge de los partidarios del librecambio, tal y como sucediera en legislaturas anteriores, dejaba sobre el horizonte un futuro incierto.

Fue el propio presidente del Consejo de Ministros, en esos momentos Bravo Murillo, y sin que apenas hubieran pasado los cinco años aconsejados para evaluar los resultados de la reforma aprobada en 1849, quien presentó para su aprobación un paquete de medidas arancelarias en el que proponía corregir los aranceles vigentes en materia de algodones. Algo que, en opinión del Presidente, debía complacer a todas las «clases», ya se tratara de consumidores o comerciantes. A la misma se sumó otro proyecto de ley que propugnaba un incremento en los derechos sobre algunos aceros, chapas y hojas de lata, adicionándose al mismo, además, una serie sucesiva de estudios que intentaban detallar con exactitud el comportamiento en las aduanas, una vez aprobadas las directrices en materia de importación y exportación de 1849⁷⁹⁹.

Al margen de dichos proyectos, no cabe duda que la reducción efectuada en los aranceles de algunos productos produjo un incremento en los rendimientos de los mismos, además de un aumento de los ingresos por parte del Estado. Ello era debido, entre otras cosas, a la entrada de artículos para el consumo como la canela, el cacao, la pimienta o el carbón, así como algunas manufacturas, entre las que destacaba el cristal. A pesar de los proyectos, lo cierto es que la legislatura, finalizada en 1852, no había

⁷⁹⁸ "Proposición de ley, del Sr. Marqués de Cáceres y otros, derogando todas las prohibiciones de importar y exportar, contenidas en los aranceles que rigen para las aduanas", *Diario de Sesiones de las Cortes. Congreso de los Diputados, Apéndice segundo al Núm. 78*, 29 de marzo de 1851, Legislatura de 1850 a 1851, Imprenta y Fundición de la viuda e hijos de J. Antonio García, Madrid, 1878, pág. 1609.

⁷⁹⁹ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., págs. 183 a 185.

contemplado siquiera la discusión de los mismos, no volviéndose a abordar durante algunos años como consecuencia de la presión desempeñada por los grupos económicos interesados en la neutralización de las políticas liberalizadoras⁸⁰⁰.

No obstante, hasta 1854 los distintos gobiernos moderados llevaron a cabo ciertas alteraciones a la normativa de aranceles vigente desde 1849, adoptadas por las consideraciones exhibidas por el resto de grupos de presión y por el deseo de aumentar los ingresos aduaneros. Ahora bien, con los cambios surgidos tras los acontecimientos vividos en las cercanías del pueblo madrileño de Vicálvaro, encabezados por O'Donnell, y con los progresistas de nuevo en el poder, las peticiones a la reforma arancelaria no tardaron en aparecer.

La propuesta de reforma hecha pocos meses después por los diputados Sánchez Silva y Corradi no afectaba a los trigos y otros cereales, y estaba más en la línea de denunciar el contrabando que seguía produciendo daños a las exportaciones⁸⁰¹. En noviembre de 1855, el nuevo ministro de Hacienda, Juan Bruil, presentó un proyecto para transformar la legislación arancelaria y adaptarla a las peticiones de la opinión pública, según se venía exigiendo desde 1851. En el nuevo diseño normativo se trataba de dar una respuesta a comerciantes y consumidores, incluyendo a los exportadores de productos agrarios. En todo caso, la opinión de Bruil destacaba la imposibilidad de aplicar reducciones a los alimentos, ya que éstos debían protegerse de la competencia del exterior, al mismo tiempo que proporcionaban interesantes ingresos fiscales. Una actitud que fue ampliamente respaldada por moderados y progresistas.

Por otra parte, puede decirse con razón que en España, más que en otros países, el desarrollo de los intereses materiales ha de ser consecuencia de la energía de acción que asegure al Gobierno el estado próspero de la Hacienda española; y es preciso contribuir á que la Nación obtenga las ventajas que los consumos públicos de efectos coloniales y extranjeros pueden proporcionar

⁸⁰⁰ *Ibíd.*, págs. 189 y 190.

⁸⁰¹ En la “Proposición de ley, de los Sres. Sánchez Silva y Corradi, sobre reforma de aranceles”, se contemplaban modificaciones en artículos que afectaban, sobre todo, a algunos tipos de hilados y tejidos. Además, se solicitaba un aumento de derechos sobre el azúcar y el bacalao. Véase el *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Apéndice cuarto al Núm. 68*, 26 de enero de 1855, Tomo II, Imprenta y Fundición de la viuda é hijos de J. Antonio García, Madrid, 1880, págs. 1655 a 1657.

al Erario, haciendo innecesarios nuevos recargos en lo futuro á las contribuciones que pesan sobre la agricultura y encarecen sus productos⁸⁰².

La ausencia de condicionantes al trigo y al resto de cereales, a pesar del nuevo estatus surgido en los mercados como consecuencia de la guerra en Crimea, provocó una cierta controversia, ya que contravenía una vez más los acuerdos de 1841. A pesar de la decisión del ministro Bruil de no incluirlos en el proyecto de reforma para los aranceles, a finales de 1855 se cuestionó la legislación que permanecía en vigor sobre el trigo, recordando las opiniones de García Barzanallana que, en 1849, durante los debates sobre la reforma arancelaria, aludía a lo innecesario de una política prohibicionista en España. Entre otras cosas, explicaba: “que todos esos argumentos, que todo ese partido que se quiere sacar de esta cuestión, que todo ese miedo que se quiere explotar diciendo á los agricultores que arruinada la industria de Cataluña y faltos de consumidores sus granos, el precio de estos disminuiría, son una ilusión. Por ahora me limito á sostener, y me fundaré en algunos datos, que se pueden admitir á comercio los trigos extranjeros con un derecho fijo, sin que padezca la agricultura española”. Barzanallana había puntualizado todavía más y se mostraba a favor del establecimiento de unos derechos fijos para los granos. En las discusiones correspondientes al año 1849, la idea que hasta entonces había prevalecido en la defensa del trigo era puesta en cuestión por el representante asturiano. En contestación al marcado carácter proteccionista de Madoz, el mismo Barzanallana expresaba lo siguiente: “Yo digo: con un derecho fijo calculado en vista de este precio, y del que se podía temer en nuestros mercados por término medio considerándole suficiente para asegurar una ganancia razonable á los agricultores españoles, ¿qué temor fundado puede haber de que, levantada la prohibición que pesa sobre el trigo extranjero, se ha de arruinar nuestra agricultura?”⁸⁰³.

La realidad terminó por provocar, como ya vimos en los gráficos de páginas anteriores, que los precios del trigo permanecieran bajos hasta

⁸⁰² “Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministro de Hacienda, sobre reforma de los aranceles vigentes de aduanas”, en *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Apéndice Décimonoveno al Núm. 245*, 16 de noviembre de 1855, Tomo X, Imprenta y Fundición de la viuda é hijos de J. Antonio García, Madrid, 1881, pág. 8.293.

⁸⁰³ García Barzanallana será nombrado Ministro de Hacienda, primero en octubre de 1856 y, posteriormente, en septiembre de 1864. En relación a la intervención del mismo en el Congreso de los Diputados puede consultarse el *DSC, Congreso de los Diputados*, sesión del jueves 14 de junio de 1849, número 113, págs. 676 a 684.

finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta, tanto en las zonas de interior como en el litoral peninsular. En Barcelona el promedio era de 44 reales por cada fanega, mientras que en Jerez los precios no superaban los 40 reales. Como nos recordaba Enrique Montañés, precisamente la política prohibicionista se había desarrollado como respuesta a un posible descenso en los precios, evitando que los mismos descendieran por debajo de esas cifras en los mercados costeros. Otra opción diferente a la protección de los cereales probablemente no hubiera supuesto la pérdida total de los mercados en el litoral para los trigos del interior. Sin embargo, la realidad indicaba que el precio fuera de España era inferior, lo que hubiera provocado un mayor descenso en su importe final. Hay que recordar que entre 1849 y 1852, los precios en los mercados de Barcelona eran, por ejemplo, algo más elevados que los que en esos momentos se estaban registrando en Inglaterra⁸⁰⁴.

Con todo, las condiciones se vieron alteradas significativamente a partir de 1853. Con el conflicto de Crimea y la interrupción de los abastecimientos de trigo desde Rusia, comenzó un imparable crecimiento de los precios en Gran Bretaña, pasando ese mismo año a ser un 30 por ciento más elevados, y en 1854 un 36 por ciento más. El alto precio del trigo extranjero produjo consecuencias inmediatas, favoreciendo la exportación y la competitividad de la harina y de los trigos españoles. Entre 1849 y 1853, el incremento de los precios en los granos llegaron al 19 por ciento en los mercados del litoral, mientras que la subida en las zonas productoras del interior alcanzaron una cifra bastante elevada, llegando al 41 por ciento y produciendo algunas tensiones en los mercados. En esa dinámica alcista, las exportaciones españolas se duplicaron en 1855 respecto al año anterior y los precios llegaron a niveles de escasez. Hecho que no implicó cambios en el marco arancelario presentado por el ministro Bruil⁸⁰⁵.

En definitiva, los beneficios obtenidos de la situación provocada por la carestía del trigo, sobre todo entre propietarios y comerciantes de las regiones del interior, contrastaron con una cierta carestía y las dificultades propias de las clases menos favorecidas económicamente. Una situación que se vio agravada ante la imposibilidad de adquirir cereales en el exterior.

⁸⁰⁴ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 203.

⁸⁰⁵ Ibídem, págs. 203 y 204. También en Figuerola, Laureano, *La reforma arancelaria de 1869*, Imprenta y Fundición de M. Tello, Madrid, 1879, págs. 176, 177, 226 y siguientes.

Frente a una situación tan compleja, algunos grupos de propietarios levantaron sus voces contra la intención de elevar los derechos de importación sobre el guano, prevista en el proyecto de Bruil. Este aumento evidenciaba una carga más a la actividad agrícola, lo que no hizo sino multiplicar los reproches que desde hacía tiempo se venían vertiendo sobre el trato desfavorecedor dado a la agricultura en contraposición a las bajas tasas aplicadas a la industria⁸⁰⁶.

En el transcurso del año 1856, los precios del trigo en los puertos andaluces llegaron a alcanzar los 70 reales la fanega, mientras que en el interior rozaban los 50 reales. Unas cantidades que suponían, según prefijaba el Decreto de 1834, la autorización a la importación de trigos extranjeros. Solo se admitieron algunas entradas por las dársenas de Sevilla y Cádiz. Unas medidas con las que el Gobierno creía poder evitar un cambio más significativo en la legislación arancelaria aplicable al trigo. Sin embargo, ello no evitó que se produjeran movilizaciones, haciendo salir del Ejecutivo a los progresistas en julio de 1856 y disolviéndose las Cortes ese mismo año⁸⁰⁷. De todos modos, y apenas un mes antes de producirse estos hechos, se aprobó un Real Decreto permitiéndose la introducción de trigos y harinas durante un tiempo de seis meses⁸⁰⁸. Pese a la escasez, durante el año 1856 se exportaron más de novecientas mil fanegas de trigo, deteniéndose la misma al año siguiente y alcanzándose nuevos máximos en la cotización. Unos precios que, por otra parte, no volverían a caer hasta el verano de 1857⁸⁰⁹.

La situación había provocado una elevada especulación. La tendencia exportadora desde los inicios de la crisis en Crimea y el mantenimiento de la

⁸⁰⁶ En efecto, los agricultores valencianos, junto con los catalanes, principales importadores del guano, alegaron que un aumento en los derechos a la hora de adquirir dicho abono animal perjudicaría el sostenimiento del crecimiento alcanzado en la producción agrícola durante los últimos años. Una síntesis del problema en Honrubia, José, “El proceso de modernización de la agricultura en el contexto de la economía valenciana”, Honrubia López, José, coord., *Globalización y desarrollo local. Una perspectiva valenciana*, Universitat de València, 2004, pág. 261.

⁸⁰⁷ Llanta, Santiago, *Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869*, Tomo I, R. Labajos y Compañía, Editores, Madrid, 1865, pág. 415.

⁸⁰⁸ “Real Decreto, permitiendo durante seis meses la introducción de trigo del extranjero y la de harinas de igual especie”, en *Colección legislativa de España (continuación de la colección de Decretos). Tercer Trimestre de 1856*. Tomo LXIX, Madrid, 1856, págs. 203 y 204.

⁸⁰⁹ Los porcentajes en la fuerte subida de precios del trigo llegaron a estar en un 122 y un 175 por ciento en el litoral e interior peninsular, respectivamente. Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 220.

prohibición en las importaciones habían beneficiado a muchos propietarios y, simultáneamente, hostigado a una parte importante de la sociedad con hambre y carestía en los productos básicos como el pan. A pesar de lo cual, las importaciones de trigo continuaron sucediéndose, todavía en 1858, al mantenerse los precios muy elevados, tanto en los mercados costeros como en las zonas productoras del interior. Precios que seguían próximos al 50 por ciento en las regiones interiores y al 30 en el litoral. Hasta aproximadamente el año 1858 el volumen de importaciones de trigo fue netamente superior a las cantidades exportadas, además de superar también el valor pecuniario de las mismas. Ello acarreó un déficit próximo al 34 por ciento en relación a las cantidades exportadas, creando un efecto negativo en un amplio segmento de la sociedad civil de esos momentos⁸¹⁰.

Las movilizaciones a favor de una vuelta hacia el prohibicionismo, iniciadas por una buena parte de los propietarios y productores agrícolas, comenzaron el mismo año que se aprobaba la última prórroga sobre la libre importación de granos. La idea era obstaculizar el descenso de los precios del trigo y, en consecuencia, mantener los beneficios que venía percibiendo el agricultor. Uno de los primeros intentos fue a través de la Exposición que la Diputación de Sevilla envió al Gobierno solicitando la suspensión en la importación. La realidad era que un precio en las regiones interiores inferiores al 45 por ciento resultaba arriesgado para los propietarios y productores. Algo muy similar sucedía en los mercados del litoral español cuando ese porcentaje llegaba al 19 por ciento⁸¹¹.

Las esporádicas crisis de subsistencias no impidieron, sin embargo, una reacción contraria a la expresada por propietarios y productores de trigo. La Junta de Comercio de Cádiz reaccionó en este sentido solicitando en abril de 1858 la definitiva liberalización del comercio del trigo, ya estuviera referida a la importación como a la exportación. Era un alegato claro contra la prohibición para adquirir trigo extranjero y un aviso a quienes intentaban impedir el libre comercio de cereales. De esa forma, justificaban los problemas de abastecimiento y la escasez sufrida durante las crisis de 1847 y 1856, como una consecuencia más de la mala gestión del comercio que existía en España respecto a los cereales.

⁸¹⁰ Ibídem, págs. 220 y 221.

⁸¹¹ Garrabou, Ramon, "Un testimonio de la crisis de subsistencia de 1856-57: el expediente de la Dirección General de Comercio", *Agricultura y Sociedad*, número 14, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1980, págs. 288 y 289.

La posición de los comerciantes gaditanos se justificaba en la reciente retirada de los aranceles británicos o «Corn Laws», vigentes entre 1815 y 1846, que habían sido promovidos por los terratenientes ingleses para limitar la importación de granos y favorecer de esta forma las exportaciones. Al final, la acción de la conocida *The Anti-Corn Law League*, creada en la ciudad de Manchester en 1839, y tras una larga campaña, la oposición a los aranceles obtuvo un éxito significativo en 1846 dejando abierta la puerta al libre comercio⁸¹². En esta línea, los defensores de la libre entrada de trigo en España aducían la incomprensión de que los trigos nacionales compitieran con éxito en el mercado británico mientras fracasaban en su competencia con los granos del exterior. El resultado para alcanzar un mayor equilibrio, evitar la especulación y reducir las agitaciones sociales, debía ser la eliminación de toda prohibición, regularizando el mercado e incluyendo un «derecho de balanza» en los cereales dentro de la nueva regulación arancelaria⁸¹³.

El ideario promovido desde la Junta de Comercio de Cádiz tuvo un holgado efecto al aparecer publicada una circular del Director General de Aduanas y Aranceles, cargo ocupado en esos momentos por García Barzanallana, solicitando información sobre la oportunidad o no de adoptar medidas en la importación de cereales extranjeros. En el ánimo de Barzanallana había un cierto reconocimiento a la necesidad de protección en la agricultura española, aunque no faltaban los matices a la misma. En este sentido la circular expresaba: “El Gobierno de S. M. reconoce, sin duda alguna, cuán acreedora es la agricultura española á una razonable protección; y comprende asimismo que no es necesario, desde el punto de vista de los intereses de las clases consumidoras, decretar como regla constante la amplia latitud actual, para el comercio de granos extranjeros. Un país eminentemente agrícola, cual es la España, solo en ocasiones dadas necesita el auxilio de otros: y por ello ha contribuido hasta hace dos años á que fuese menos comprometida la situación de aquellas naciones de Europa, donde la pérdida sucesiva de cosechas habia motivado que los precios de los

⁸¹² Schonhardt-Bailey, Cheryl, *From the Corn Laws to Free Trade. Interests, ideas, and institutions in historical perspective*, Massachusetts Institute of Technology, 2009, págs. 94 a 106; 9 y 10, y 332 a 334.

⁸¹³ En concreto el derecho de balanza debía estar próximo al 5 por ciento *ad valorem* para que los precios del trigo no estuvieran sometidos a las fuertes fluctuaciones que, hasta ese momento, venían produciéndose. Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., págs. 224 a 226.

granos llegasen á ser muy elevados”. Más adelante se reconocía, sin embargo, un cierto fracaso en la política seguida años atrás en relación a la traída de cereales desde el exterior. En concreto, el Director de Aduanas reconocía lo siguiente: “La experiencia, sin embargo, ha venido á demostrar, así en el año de 1847 como en el de 1855 y los siguientes hasta el actual, que la legislación dictada en 1834, para facilitar la entrada de los granos extranjeros cuando los nacionales lleguen á alcanzar un precio de hambre, es ineficaz para conseguir el abastecimiento inmediato de los mercados y la nivelación en los precios del trigo y de las demás semillas alimenticias”⁸¹⁴.

Los resultados fueron suficientemente reveladores, ya que una gran mayoría de las consideraciones apoyaron la legislación prohibicionista. Entre quienes se inclinaron por el libre comercio estaban la *Sociedad Económica* de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. En algunas zonas como Almería y Málaga, sus gobiernos sugirieron el mantenimiento temporal de la importación de trigo, lo que no era sino una consecuencia directa del déficit que en esos momentos existían en el abastecimiento de las dos provincias. Pero, sin duda, las grandes capitales de provincia entre las que se encontraban Sevilla, Zaragoza y Barcelona, argumentaron desde un principio la necesidad de restablecer la legislación de 1834. La autorización para seguir permitiendo la entrada de cereales extranjeros en España reduciría los precios, en opinión de la mayoría de productores, lo que arrastraría a una pérdida del trigo nacional, casi de un modo generalizado, en los mercados distribuidos en el litoral peninsular. Todo ello implicaba un daño directo a las rentas agrícolas y la depauperación generalizada⁸¹⁵.

Parece razonable considerar que las zonas productoras de trigo se posicionaran de una forma manifiesta al lado de quienes abogaban por restablecer el prohibicionismo. Era del todo evidente que cualquier cambio o ajuste en el modelo perjudicaba sus propios intereses, en especial la

⁸¹⁴ “Circular á los Gobernadores de provincia, pidiendo datos para la adopción de principios fijos sobre la importación de cereales extranjeros”, en *Colección legislativa de España (continuación de la colección de Decretos). Segundo Trimestre de 1858*. Tomo LXXVI, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1858, págs. 459 a 461.

⁸¹⁵ Ramon Garrabou nos recuerda la protesta realizada por parte de comerciantes y propietarios zamoranos, en febrero de 1859, quienes reclamaban la obtención de los beneficios que de manera extraordinaria se generaban en las temporadas de malas cosechas. Dichos beneficios dejarían de producirse, en opinión de los productores, al establecerse un arancel a la importación, hecho que se pensaba, acabaría estabilizando los mercados. En Garrabou, Ramon (1980), ob. cit., pág. 353. También en Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., págs. 226 y 227.

rentabilidad que tenían los granos del interior en su partida hacia los mercados costeros. En ciudades como Barcelona, contraria al libre comercio, se venía padeciendo un permanente déficit al tratarse de una zona consumidora por excelencia (véase el cuadro 22). Esta situación provocó que, además del propio *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, otras entidades como la Junta Provincial de Agricultura en Barcelona y la Junta de Fábricas de Cataluña, esta última en representación de la mayor parte de industriales catalanes, defendieran una legislación restrictiva, dirigiendo a las Cortes una Exposición “refutando victoriosamente la que á su vez habia presentado la junta de comercio de Cádiz para pedir la libertad permanente en la importacion de cereales”. En la misma, se argumentaba “haber notado una no pequeña série de equivocaciones y falsos raciocinios de la junta de Cádiz”⁸¹⁶.

En los meses siguientes, además de la protección al trigo se exigió el mismo trato para el arroz en muchas localidades de Levante, al ser una de las principales riquezas agrícolas de la región. Varios municipios valencianos remitieron a la Reina Isabel escritos solicitando una defensa directa para este producto agrícola. Así, por ejemplo, el alcalde del Ayuntamiento de Algemesí, atendiendo las demandas de propietarios y cosecheros, pedía que: “el arroz extranjero quede tenido al pago de los derechos que tiene impuestos; y en consideracion a los gaves perjuicios que lo contrario ocasionaría a la provincia”. En concreto, el escrito se sumaba al de otros ayuntamientos que temían pudieran verse afectados por una liberalización generalizada de las importaciones⁸¹⁷.

Para los propietarios agrícolas y trigueros catalanes fue muy importante contar con el apoyo de los industriales, quienes habían mantenido la misma actitud proteccionista desde 1820. Esta afinidad entre propietarios agrícolas e industriales estaba justificada, ya que, incluso en épocas de dificultades en el abastecimiento, los beneficios contribuían a la capitalización de la economía del país. A todo ello se añadía que los

⁸¹⁶ Morquecho Palma, Genaro, *La controversia económica en 1859. Coleccion de artículos publicados en varios periódicos en defensa del sistema proteccionista*, Imprenta de Manuel Minuesa, Madrid, 1860, pág. 294.

⁸¹⁷ AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 12, expediente 12 referido a “Valencia. Los Ayuntamientos de Algemesí, Tabernes de Valldigna y Alcira en solicitud de que no se permita la libre introducción de arroz. Año 1857”.

CUADRO 22

Cantidades de trigo extranjero importado durante 1857 y 1858

Región	Fanegas	Fanegas/habitante	%
<i>Cataluña</i>	▪ 2.921.640	2,1	▪ 35
<i>Andalucía</i>	▪ 1.977.538	1,2	▪ 24
<i>Levante</i>	▪ 1.335.199	0,8	▪ 16

FUENTE: Yoshiyuki Kondo, Agustín, ob. cit. págs. 218 a 231; Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 227.

propios agricultores eran potenciales consumidores del sector industrial en Cataluña⁸¹⁸. Si bien es cierto que podía haberse contemplado la posibilidad de una reducción en los precios del trigo con el fin de reducir los costes salariales y aumentar de esa forma el poder adquisitivo de una parte importante de la población, lo cierto es que los industriales catalanes estaban lejos de los planteamientos defendidos por los comerciantes y exportadores gaditanos, quienes pretendían liberalizar el comercio de cereales. A decir verdad, el modelo defendido por el sector industrial en Cataluña abogaba desde hacía años por la reserva del mercado interior, mientras que el de la exportación en Andalucía era más partícipe de una internacionalización de la economía española permitiendo unas cuotas muy limitadas al proteccionismo⁸¹⁹.

⁸¹⁸ Una buena muestra de lo expuesto en relación a la estrecha unión entre agricultores e industriales puede encontrarse en Güell y Ferrer, Juan, *Cereales. Reflexiones sobre esta y otras cuestiones arancelarias sugeridas por la reunion de ciento y un diputados celebrada en Madrid el 21 de febrero de 1859*, Imprenta del Diario de Barcelona, á cargo de Francisco Gabañach, Barcelona, 1859, págs. 4 a 7. El mismo autor trató el tema de la necesidad en cualquier Estado de una contribución conjunta de la agricultura y de la industria. Véase de Güell y Ferrer, Juan, *Observaciones a la Reforma Arancelaria ejecutada y á la propuesta á las Córtes por el Exmo. Sr. Ministro de Hacienda D. Pedro Salavarría, precedidas de una reseña histórico-económica de los reinados de las tres Isabeles, 1ª y 2ª de España é Isabel de Inglaterra*, Tipografía de Narciso Ramírez y Rialp, Barcelona, 1863, págs. 10, 20, 67, 69 y 73.

⁸¹⁹ En efecto, la idea ya había sido recogido por Vicens i Vives, para quien había existido una estrecha colaboración entre el financiero catalán Gáspar de Remisa, Javier de Burgos y el duque de Sotomayor en los últimos años del reinado de Fernando VII. En esta alianza no

El camino recorrido por la agricultura española durante el período proteccionista era considerado por los industriales catalanes como una etapa provechosa, sobre todo porque la legislación prohibicionista había provocado un crecimiento notable en la producción frente al déficit que predominante de fases anteriores. A pesar de los años de escasez y de los elevados precios en el consumo, el empresariado en Cataluña tenía clara la idea de que la prohibición para importar había facilitado el camino para producir excedentes, motivo por el que merecía la pena seguir aplicando una política restrictiva en este sentido. Existía, además, un temor generalizado a que una eventual reforma en el comercio de los cereales arrastrara a la economía nacional a la aceptación de cambios más acentuados en la política arancelaria, vigente desde 1849⁸²⁰.

Aún cuando hubo intentos por parte de la coalición progresista de volver a poner en marcha una reforma que había quedado aplazada, en cualquier caso, las propuestas liberalizadoras chocaron contra la mayor fuerza política del bloque cerealista e industrial. En esta acción, no cabe duda que el peso de ciudades como Barcelona, deficitarias por excelencia en productos como el trigo, junto con los productores agrícolas, tuvieron una importancia decisiva a la hora de que el Gobierno, formado entonces por una mayoría perteneciente a la Unión Liberal, no presentara modificaciones al Decreto de 1834⁸²¹. En contra estaban quienes defendían la necesidad de proporcionar nuevos ingresos a la Hacienda pública, en cuyo caso se consideraba inevitable acometer ciertas reformas en materia arancelaria. En esta línea se manifestó González de la Vega, antiguo portavoz de la Comisión de aranceles, quien presentó un proyecto de reformas en 1859 en el que se incluía la derogación de los consumos, el desestanco del tabaco, además de una reanudación en la reforma sobre los aranceles presentada tres años atrás, lo que terminaría con el contrabando.

Ya nadie pelea, nadie batalla para hacer el contrabando; hoy se hace por la astucia, burlando la vigilancia del resguardo; pero no se va al campo ó al mar

faltó la Comisión de Fábricas de Cataluña, lo que hacía entender que, tanto industriales y banqueros catalanes, ferreteros vascos y grandes terratenientes cerealistas de Castilla habían ejercido una especial influencia en la política arancelaria de la década de 1820. Vicens Vives, Jaime (1957), ob. cit., pág. 287, también en Comellas, José Luis, *Del antiguo al nuevo régimen: hasta la muerte de Fernando VII*, Rialp, Madrid, 1981, pág. 73.

⁸²⁰ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 229.

⁸²¹ Solo una pequeña parte de harineros, con la intención de adquirir materia prima a mejor precio, se incorporaron a las peticiones de liberalizar las importaciones de trigo. Garrabou, Ramon (1980), ob. cit., pág. 351.

para batirse como se batian los contrabandistas en otro tiempo; y como estas reformas tenian que ir al lado de la reforma arancelaria, muy bien entendida, conciliando los intereses de la industria con los intereses del consumidor, el resguardo estaria esencialmente en los aranceles, y no en los fusiles y bayonetas de esa fuerza⁸²².

A las peticiones reformistas y de librecambio por parte de González Vega se unió el diputado progresista por Barcelona, Laureano Figuerola, firme defensor de la reforma arancelaria, de la que ya había advertido su importancia en el año 1841 en el sentido que: “si entonces se hubiera resuelto la cuestion de cereales y de algodones, estaria ahora despejada la situacion y nadie temeria”⁸²³. Opinión que contrastaba con la de otro importante miembro de las filas progresistas como Pascual Madoz, para quien las enmiendas en este aspecto no representaban la solución a los problemas recaudatorios y de liquidez en la Hacienda del Estado. A cambio, resultaba más conveniente realizar todos aquellos esfuerzos posibles en favor de la industria nacional, lo que permitiría a ésta competir con más garantías en los mercados extranjeros.

Siempre se cree que los algodones salvarán al país, y esta es una cosa que no puede decirse ni tomarse en serio. Por lo demás, yo ofrezco al Sr. Gonzalez de la Vega, á los amantes de la riqueza del país, una apreciacion para mí muy importante. La riqueza industrial ha cundido por todas las provincias. No está solo en Cataluña; se halla tambien en el Norte, en el Mediodía, y por los camino de hierro vendrá al centro. Y esta Nacion, esencialmente agrícola, será con el tiempo considerablemente industrial⁸²⁴.

Desde 1860, dos serían los factores que iban a acentuar las acciones de los grupos proteccionistas. La primera, en enero de ese mismo año, el

⁸²² DSC, *Congreso de los Diputados*, sesión del lunes 4 de abril de 1859, número 89, pág. 2.390.

⁸²³ DSC, *Congreso de los Diputados*, sesión del jueves 7 de abril de 1859, número 92, pág. 2.487.

⁸²⁴ DSC, *Congreso de los Diputados*, sesión del martes 5 de abril de 1859, número 90, pág. 2.431. En opinión de Jordi Nadal: "Con todo, el fracaso de la industrialización ochocentista, considerada como un todo, no debe ocultar la consecución de algunos logros parciales". Entre los resultados positivos habría estado en el censo de ocupación en la industria, sobre todo en la algodonera, o en la paulatina minoración de la dependencia de los manufacturados y similares exteriores a partir de 1850. En palabras del propio autor: "Los catalanes, defensores de la reserva del mercado, contra los intereses del consumidor, se habrían convertido en los más sólidos aliados de los propietarios agrícolas, reacios a la racionalización del sector". Una síntesis está recogida en el capítulo 8 "Conclusión", de Nadal, Jordi (1997), ob. cit., págs. 226 a 245.

tratado Cobden-Chevalier entre Francia y Gran Bretaña. En segundo lugar, la aparición en el mes de noviembre de la *Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas*. De esta forma, los exportadores de vinos comenzaron a sentirse preocupados ante las reducciones arancelarias aplicadas por Gran Bretaña ante los productos franceses, una situación que, en opinión de la *Asociación*, repercutiría en las exportaciones españolas al mercado británico⁸²⁵. Tampoco el trigo se salvaba de los debates que sobre el arancel y su liberalización tenían lugar por toda España. Los valedores del sistema proteccionista comenzaron pronto una movilización en respuesta de lo que parecía iba a ser una nueva reforma arancelaria. Para los reformistas, el asunto de los cereales estaba suficientemente definido desde hacía tiempo.

De poco sirve que un pueblo produzca mucho trigo y barato si no tiene medios de extracción, ni tampoco de importación. En los años buenos se encuentra ahogado por la misma abundancia de las cosechas que no puede consumir ni exportar, y en los de malas cosechas tampoco puede importar los trigos extranjeros que servirían para aliviar su miseria. En este caso se encuentra nuestra Extremadura. En los años buenos no sirve para socorrer con su abundancia á otros pueblos, ni estos tienen medios de favorecerla en los de sequedad y carestía. Aunque no en tanto grado como Extremadura, todas nuestras provincias agrícolas se hallan en el mismo caso. En los años abundantes, cuando los labradores españoles ganarian mucho vendiendo sus trigos á menos de 40 reales fanega, la protección no les sirve de nada, en razón de que por muy baratos que estén los trigos en el Báltico, en el Mar Negro ó en los Estados Unidos, y aunque pudieran venir libres de derechos, costarian puestos en España de 40 á 48 reales⁸²⁶.

Quienes conformaban la *Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas*, la exclusión de los cereales en la reforma que se acercaba era uno de los mayores defectos del proyecto. Sin una profunda modificación en la política y en la legislación existente sobre los cereales en España, parecía difícil abordar un proyecto con garantías que pudiera avanzar sobre la reforma arancelaria. De poder lograr que la cuestión de los aranceles en materia de granos llegaran hasta la mesa de negociaciones, podría afrontarse un cierto éxito en lo que se refería a futuros períodos de escasez y

⁸²⁵ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 232.

⁸²⁶ Bona, Félix de, "El sistema protector perjudica á las industrias que trata de proteger", *Conferencias libre-cambistas. Discursos pronunciados en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, por varios individuos de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, en el curso de 1862 á 1863*, Imprenta de Manuel Galiano, Madrid, 1863, pág. 126.

carestía en años de dificultades en las cosechas, además de servir como referente a la mejora de la producción y la mayor competitividad respecto a los cereales extranjeros⁸²⁷.

Desde la otra perspectiva, labradores y propietarios comenzaron a diseñar una estrategia bien distinta, con el propósito de que el sector agrario se mantuviera al margen de cualquier intento de modificar el vigente régimen arancelario del trigo. En este aspecto, fueron bastantes quienes levantaron su voz y su “pluma”, en contra de cualquier intento por variar el *statu quo* en la política establecida para los cereales en España, cambios que de hacerse efectivos ocasionarían un notable daño a los intereses de la agricultura en todo el país. En este sentido, el agrónomo y propietario José de Hidalgo Tablada presentó a finales del año 1863 en la Sociedad Matritense un importante discurso en el que, a pesar de admitir la competencia de los trigos nacionales en los mercados del litoral, advertía del grave perjuicio que originarían los cereales procedentes de Odessa y Estados Unidos en los agricultores, hecho que llevaría al abandono de muchas tierras de cultivo en nuestro país⁸²⁸.

No cabe duda que la postura adoptada por parte los grupos económicos a los que afectaba la reforma arancelaria, influyó de manera decisiva en la retirada, por parte del ministro Salaverría, del proyecto que había presentado poco antes, a comienzos del año 1863. A ello vino a unirse la retirada del gobierno presidido por O'Donnell en esas mismas fechas y la consecuente disolución de las Cortes en Madrid. En este sentido, y como ya advirtiera el propio ministro de Hacienda, José de Sierra Cárdenas, la posibilidad de un cambio profundo en la política arancelaria bajo las condiciones de inestabilidad que se estaban viviendo resultaban harto complejas. En respuesta al diputado González de la Vega, Cárdenas asumía la responsabilidad de retirar el proyecto: “El Gobierno hasta ahora tiene la convicción de que esta ley no puede discutirse en la presente legislatura. Afecta, por otra parte, intereses muy grandes del país, y necesita un estudio

⁸²⁷ Buena parte de las opiniones e ideas relativas a la aplicación del librecombio en los cereales están recogidas en las 17 páginas que conforman la *Información parlamentaria iniciada por la Comisión del Congreso de los Diputados y consecuencia del proyecto de ley sobre reforma de aranceles, presentado á las Cortes en 5 de Enero de 1863*, Imprenta Nacional, Madrid, 1863.

⁸²⁸ El discurso de Hidalgo Tablada en *La España Agrícola*, número 7, año 1863, págs. 195 a 200.

profundo y detenido. Por consiguiente, el Gobierno no tiene inconveniente en declarar que la retira para estudiarla”⁸²⁹.

A la situación de crisis política vino a unirse una nueva carestía del trigo en varias zonas costeras, lo que obligaba a liberalizar la importación de granos, circunstancia que fue advertida por el diputado González de la Vega en el sentido de que: “La falta de lluvias en algunas provincias de España, la carestía de los cereales en la mayor parte del territorio español, el haber excedido los precios por mas de tres semanas en tres provincias limítrofes del litoral al marcado en una ley sobre cereales, son consideraciones que podrían hacer comprender á cualquiera que el Gobierno se ocupaba en permitir la introduccion de cereales extranjeros”⁸³⁰. A las cuestiones formuladas por el diputado de la Vega respondió el ministro de la Guerra, marqués de la Habana, aludiendo al control y a las noticias que el propio Gobierno tenía de las cosechas en todas las provincias españolas. Algo que no tranquilizó, en absoluto, al diputado gaditano, respondiendo al ministro en los siguientes términos: “Estoy agradecido á la contestacion que se ha servido darme el Sr. Ministro, y no tengo que decir al Gobierno mas, sino que consulte los precios de los mercados de Málaga, Jerez de la Frontera y Sevilla de un mes á esta parte, y los compare con los que determina el decreto de 1834 sobre admision de cereales extranjeros”⁸³¹.

La petición fue finalmente rechazada por «inadecuada». Tal y como había sucedido en 1856, la presión ejercida sobre la política a seguir en el comercio de los cereales se presentó al fin como un obstáculo insalvable para acometer una reforma más ambiciosa y general en materia de aranceles⁸³². Un fracaso también atribuible al gobierno de la Unión Liberal, cuyo proyecto había sido todavía más mesurado al presentado por los progresistas solo unos años atrás, lo que en definitiva anulaba la capacidad del régimen isabelino para llevar más allá un proyecto que liberalizara el comercio exterior en nuestro país. De esta forma, y solo un año antes de comenzar un período de recesión económica, las fuerzas que se habían estado oponiendo a la liberalización en el comercio de los cereales habían

⁸²⁹ DSC, *Congreso de los Diputados*, sesión del viernes 10 de abril de 1863, número 38, pág. 507.

⁸³⁰ DSC, *Congreso de los Diputados*, sesión del martes 28 de abril de 1863, número 53, pág. 782.

⁸³¹ *Ibíd.*, pág. 783.

⁸³² Montañés Primicia, Enrique (2009), *ob. cit.*, pág. 243.

comenzado a plantear una batalla en favor del proteccionismo que se prolongaría más allá de los primeros años del siglo XX. A la misma no iban a faltar los agricultores y propietarios catalanes, quienes desde hacía poco tiempo contaban con un nuevo instrumento de presión a través del cual se iba a constatar el malestar generado por los intentos de liberalizar los mercados agrícolas.

En efecto, el *Instituto Agrícola Catalán* estaba llamado a ser algo más que una asociación de propietarios rurales cuyo objetivo estaba destinado a “fomentar los adelantos del cultivo y economía rural, y disfrutar de los amenos pasatiempos que proporciona la buena sociedad”⁸³³. La apreciable movilización social y política en el mundo rural que iba a dar comienzo a lo largo de los años cincuenta y sesenta en nuestro país, quedaba lejos de un simple conflicto coyuntural frente a las sucesivas crisis de subsistencias. Hemos de entender los nuevos acontecimientos asociativos como un intento reflexivo por organizar los intereses agrícolas, así como la sociabilidad en el contexto del ámbito rural. Cambios que con el tiempo llegarían a transformarse en uno de los ejes vertebradores dentro de la propia actividad rural en la mayoría de las regiones⁸³⁴.

Parece razonable considerar que los propietarios catalanes realizaran un intento sin precedentes por recuperar una posición hegemónica, la misma que habían disfrutado hasta mediado el siglo XIX, insistiendo en el restablecimiento de los apoyos verticales y neutralizando la cumplida legislación que afectaba a las actividades del campo y al mundo rural. Con la aparición algo más generalizada del asociacionismo agrario, promovida por la propiedad agrícola, se ponían las bases para horadar en otros sectores sociales, atrayendo de este modo, en lo relacionado al proyecto iniciado por los propietarios en Cataluña, a otros grupos asociativos y de cooperación. Con ello se pretendía igualmente la integración al colectivo de campesinos, ya en las últimas décadas del siglo XIX, en lo que se ha querido ver la

⁸³³ *Reglamento del Instituto Agrícola Catalán*, Imprenta de Don Agustín Gaspar, Barcelona, 1851, pág. 4.

⁸³⁴ En este sentido debemos considerar las opiniones y el trabajo ya mencionado de Jordi Planas, en particular los relativos al movimiento asociativo y a la entrada del mismo en una nueva dinámica, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en “estrecha relación con el desarrollo del cooperativismo y también con formas nuevas de conflictividad social en el ámbito rural”. Planas, Jordi (2008), ob. cit., pág. 14.

implantación de un modelo «interclasista», tal y como sucediera en otros países europeos a partir de los años sesenta de ese mismo siglo⁸³⁵.

En este contexto, los primeros movimientos registrados en Barcelona con el propósito de constituir una asociación de propietarios rurales están fechados en el mes de junio de 1850. El día 3 de ese mismo mes, los propietarios agrícolas más representativos de la capital catalana eran invitados, mediante una circular del 30 de mayo, a asistir a una reunión en el Palacio de la Diputación con el fin de establecer una asociación que fuera más allá de las competencias y funciones que hasta ese momento tenía la *Sociedad Económica*. Sin el soporte y el apoyo que hasta entonces había prestado la Junta de Comercio, desaparecida en 1847, se trataba, en palabras de Maspons, de crear una entidad de marcado carácter agrarista, que desde Barcelona extendiera sus funciones a través de Subdelegaciones a las principales localidades de Cataluña⁸³⁶.

A la cabeza del movimiento fundador estaban Ramon de Casanova i de Mir, José María Despujol Ferrer de Sant Jordi, conde de Fonollar, y Antoni de Gayolà. En la mencionada reunión del 3 de junio de 1850 fue elegida una comisión encargada de estudiar y elaborar los estatutos de la nueva asociación. A la misma se incorporaron personalidades como José Bertrán y Ros, así como otros entre los que probablemente estaban el barón de Esponellà, el marqués de Sentmenat y el marqués de Castellbell⁸³⁷. De esta forma, casi un año más tarde de ser constituida la comisión, era creada la nueva sociedad el 22 de mayo de 1851 en el salón de agricultura del palacio de la Diputación Provincial de Barcelona. En aquella ocasión, y bajo la presidencia de Bertrán y Ros, un total de ciento siete socios fundadores, propietarios rurales residentes en Barcelona, iban a poner en marcha una de las sociedades más importantes y con mayor recorrido en el tiempo de toda

⁸³⁵ Una de las primeras ideas recogidas en este sentido pertenecen a Antonio Gramsci. En los primeros años del pasado siglo XX, Gramsci mantuvo la teoría acerca de que el mantenimiento de la hegemonía de un determinado sector o grupo social dependía, además de otras circunstancias vinculadas a la economía, de la capacidad que aquél tuviera para acceder y penetrar en otros grupos, ya fuera en las esferas de la cultura o la política. Véase de Mordenti, Raul, "«Quaderni dal carcere» di Antonio Gramsci", en *Letteratura Italiana Einaudi. Le opere. Il Novecento. La ricerca letteraria*, vol. IV.II, a cura di Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino, 1996, pág. 55.

⁸³⁶ En efecto: "*les Societats Econòmiques d'Amichs del País, ab tot y la bondat de sa labor, no s'ajustavan, naturalment, al ideal d'associació ab que somniavan los agricultors*", en Maspons i Camarasa, Jaume, "Agricultura", ob. cit., págs. 543 y 544.

⁸³⁷ Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 119.

Europa. Entre las primeras tareas se acordó el establecimiento de una nueva comisión que debía elaborar un reglamento provisional, disponiéndose, igualmente, un primer presupuesto de gastos. Por último, en el Acta de constitución quedaban expuestos los objetivos más urgentes e indispensables a los que debía estar dedicada la Asociación.

Profundamente convencidos varios propietarios rurales, residentes en esta Capital de Barcelona, de la imperiosa necesidad, que de más a más se hace sentir, de dar un grande y vital impulso á los intereses agrícolas de las provincias catalanas y de reunir los elementos capaces de mejorar las condiciones del cultivo de las tierras, trataron de obtener el logro de estos sus patrióticos deseos, promoviendo la Asociación de estos mismos intereses, á fin de salir del aislamiento en que viven sumidos, por carecer de un centro ó foco común de acción que los escude y defienda⁸³⁸.

En tal caso, y a diferencia de lo sucedido en la campaña contra la política arancelaria de 1849, la burguesía catalana y las clases propietarias estaban llamadas a formar parte de la nueva Asociación, desde la que debía impulsarse la modernización del sector agrícola, siempre a través de posiciones proteccionistas. Algunos de quienes habían defendido dichas actitudes tan solo unos años atrás, iban a ser en un futuro miembros del *Instituto Catalán*, como Francisco Permanyer o Pascual Madoz. En opinión de Monserrat Caminal, dentro del escenario creado alrededor del debate arancelario, la principal idea de los grandes propietarios era proteger sus intereses agrarios individuales, al mismo tiempo que promover una agricultura dotada de un cierto carácter «capitalista»⁸³⁹.

Junto al anterior marco ideológico, la idea que se ha querido dibujar, mediada la centuria y coincidiendo con la fundación del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, de establecer un vínculo entre agrarismo y catalanismo, sorprende considerablemente al comprobar poco tiempo después el semblante español que se intentaba dar desde la propia Institución. Basta ver lo apuntado en un artículo titulado "Á los agricultores españoles", fechado el 20 de diciembre de 1853, y dirigido a cuantos quisieran inscribirse como socios.

⁸³⁸ "Acta de constitución del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro", en Maspons i Camarasa, Jaume, ob. cit., pág. 544.

⁸³⁹ Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 119.

La Comision Directiva del Instituto llama hoy con voz fraternal y amiga á los propietarios nacionales á fin de que uniéndose todos, coadyuven á la regeneracion y fomento de nuestra agricultura. [...] Una asociacion vasta y organizada sobre las bases que propone la Comision Directiva, no solo ha de beneficiar á los agricultores en la parte material, removiendo los obstáculos del aislamiento, generalizando y uniformando las prácticas mas provechosas; sino que difundiendo los principios morales, irá preparando las opiniones y disponiendo los ánimos, para que el Gobierno de S. M. pueda establecer con éxito mas pronto y seguro cuanto convenga á la prosperidad rural del pais.

Más adelante, el artículo finalizaba animando de un modo categórico a la acción colectiva de propietarios y agricultores de toda la nación de la siguiente forma:

Nacido el Instituto en territorio catalan, hubo de adoptar un título que señalara su origen, pero de ningun modo significa que los beneficios de la asociacion que representa, hayan de limitarse á los pueblos del antiguo Principado. Así tiene la satisfaccion de ver que lo han comprendido las demás provincias, pues cada día y de cada punto del reino recibe el mismo Instituto los mas solemnes testimonios de que en España la agricultura toda, espera con ansia la union de sus hijos para levantarse al nivel de la agricultura extranjera. Este unánime deseo es el que intenta satisfacer. Tiempo es ya de que desaparezcan las distinciones de individuo á individuo, de vecindad á vecindad, de provincia a provincia: tiempo es ya, en una palabra, de que nos unamos y trabajemos de consuno para establecer por medio de la perfeccion de nuestras producciones la única rivalidad de que podamos vanagloriarnos; la rivalidad de nacion á nacion⁸⁴⁰.

Junto a la inercia de la llamada a la unidad territorial por parte de la Comisión Directiva del *Instituto*, no pasó mucho tiempo sin que se advirtiera la improcedencia de que se establecieran asociaciones de idéntica naturaleza en las distintas provincias españolas. A cambio, los asociados veían más ventajoso el establecimiento de una comisión permanente en Madrid que representara la voluntad de la mayoría de propietarios provinciales. En una de las “Crónicas Agrícolas” publicadas en la Revista de la Asociación, y fechada en Barcelona el 28 de febrero de 1854, se concretaba esta conducta en los términos siguientes:

⁸⁴⁰ RIACSI, Tomo II, Barcelona 1853, págs. 193 y 194.

Los deseos de fomento que afortunadamente van desarrollándose en nuestro país, pudieran quizás sugerir la idea de crear en otros puntos Institutos análogos al de San Isidro, lo que en concepto nuestro aun cuando fuese un bien, retardaría por mucho tiempo el resultado á que desde luego deben aspirar los propietarios y agricultores españoles. La creación de Institutos parciales haría sin duda desaparecer los inconvenientes del aislamiento de individuo á individuo y de vecindad á vecindad, pero dejaría aun subsistentes los de provincia á provincia, originándose entorpecimientos para la mejor inteligencia y acuerdo de las grandes cuestiones de interés general⁸⁴¹.

El proyecto «españolista» del *Instituto Agrícola Catalán* no tendría finalmente éxito, si exceptuamos las subdelegaciones de Alicante, Murcia y Mahón, así como la Comisión establecida en Madrid. Además, una parte importante de los miembros de la institución agrícola, siempre mantuvo el temor a que “La formación de muchas comisiones semejantes representando á varios Institutos, no presentarían la misma compactibilidad ni la misma energía de acción”⁸⁴². Este intento por abarcar al resto de provincias españolas fue omitido a comienzos del siglo XX por Jaume Maspons en su trabajo relativo a Cataluña, como ya apuntara en su momento Caminal, publicación que coincidió con una coyuntura clave en la política regionalista catalana. En todo caso, la idea permaneció latente prácticamente durante todo el siglo XIX, excepción hecha de los últimos años del mismo, momento en el que algunos miembros del *Instituto Catalán* acabarían por adherirse a los argumentos esgrimidos por la Lliga Regionalista⁸⁴³.

Unidos al que fuera primer presidente, Joaquín Desvalls y Sarriera, marqués de Alfarrás, la Sociedad quedó constituida por un puñado de hacendados y miembros de la nobleza, aproximadamente la mitad del total de socios fundadores, entre los que destacaban dieciséis de los primeros sesenta mayores contribuyentes de la provincia de Barcelona. Aún cuando el

⁸⁴¹ Por alguna circunstancia que ignoramos, la mencionada *Revista de Agricultura Práctica, Economía Rural, Horticultura y Jardinería*, en su volumen segundo, y fechada en 1853, comprende los años de 1853 y 1854, algo que no está advertido en la misma. Así, la Crónica a la que nos referimos ha quedado recogida en la *RIACSI*, Tomo II, Barcelona 1853, pág. 281.

⁸⁴² *Ibidem*.

⁸⁴³ Planas i Maresma, Jordi (2003), ob. cit., pág. 39. También en Caminal i Badia, Monserrat (1979), ob. cit., pág. 333, y (1989), pág. 123. Asimismo, en Planas i Maresma, Jordi, *Catalanisme i agrarisme. Jaume Maspons i Camarasa (1872-1934): escrits polítics*, Eumo Editorial, Barcelona, 1994, págs. 59 a 95.

número de grandes propietarios era muy destacado, al *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* terminaron acudieron comerciantes, empresarios, profesionales liberales y agricultores acomodados, lo que venía a escenificar de una forma muy aproximada la estructura social en Cataluña en esos momentos⁸⁴⁴. Poco tiempo después de su creación, en 1851, la Asociación iba a demostrar una gran capacidad para movilizarse en favor de los intereses agrarios. En este sentido, ya fuera desde las aportaciones puramente agronómicas o desde la capacidad para influir en los asuntos políticos, la actividad del *Instituto Agrícola* se mantendría de manera casi inalterable hasta comienzos de la siguiente centuria.

- El semblante activo del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*

Cumplidos unos meses desde que dieran comienzo sus trabajos, el *Instituto Agrícola Catalán* inició un proceso de generalización a través de las subdelegaciones que, con anterioridad, en algunos casos habían sido sociedades agrícolas locales⁸⁴⁵. Solo en el transcurso de los años cincuenta se crearon alrededor de unas cuarenta subdelegaciones, posibilitando de esta forma que personas de distintos rangos profesionales fueran incorporándose a la Sociedad (véase el cuadro 23). Precisamente, y en cuanto a la vinculación de los socios se refiere, conviene advertir las muy diversas procedencias en los campos de actividades. Algunos de los socios fundadores venían precedidos de ocupaciones vinculadas a sociedades de crédito, inversiones urbanas, así como en participaciones en empresas agrarias. No debe extrañar, por lo tanto, que algunas de las personas asociadas a la *Compañía Agrícola Catalana*, creada en el año 1846, como Isidoro de Angulo, Joaquín Castañer o el marqués de Sentmenat, formaran parte de la primera lista de socios fundadores del *Instituto*⁸⁴⁶. En otras sociedades de carácter privado, como era el *Canal de Riego de Urgel*, se daban cita algunos de los socios más importantes en 1852. Son los casos, citados por Caminal i Badia, de José Carreras, Manuel de Larrain, Jaime Llansó, además de los hermanos Ignacio y Manuel Girona⁸⁴⁷.

⁸⁴⁴ Los datos están extraídos de Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 120.

⁸⁴⁵ Recordemos, por ejemplo, lo acontecido en relación a la *Sociedad Agrícola del Ampurdán*.

⁸⁴⁶ Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 121 y 122.

⁸⁴⁷ Ibídem, pág. 122. Asimismo, las páginas referidas a los "Antecedentes interesantes" en *El Canal de Urgel. Reglamento y régimen de los riegos*, Lérida, 1934, págs. I a IV.

CUADRO 23
*Subdelegaciones del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro
entre los años 1852 y 1866*

Número	Subdelegaciones/Comarca	Año de fundación/Reorganización
1	Avinyó/Bages	1852
2	Igualada/Anoia	1852
3	Palafrugel/Bajo Ampurdán	1852
4	Tarrasa/Vallés Occidental	1852
5	Vic/Osona	1852/1880
6	Villafranca del Panedés/Alto Panedés	1852
7	Artés/Bages	1853/1884 y 1904
8	Badalona/Barcelona	1853
9	Balaguer/Noguera	1853
10	La Bisbal/Bajo Ampurdán	1853
11	Cardona/Bages	1853
12	Esparraguera/Bajo Llobregat	1853
13	Gerona/Gerona	1853/1863
14	Granollers/Vallés Oriental	1853
15	Lérida/Segriá	1853/1878
16	Molins de Rey/Bajo Llobregat	1853
17	Reus/Bajo Campo (Baix Camp)	1854/1868
18	Tarragona/Tarragona	1854/1860, 1861 y 1871
19	Ripoll/Ripollés	1855
20	Seo de Urgel/Alto Urgel	1855
21	Sitges/Garraf	1855/1888
22	Torderá/Maresme	1855
23	Ciudadela/Menorca	1856/1874
24	Hostalric/Selva	1856
25	Llusanés/Osona	1856
26	Manresa/Bages	1856/1859, 1868 y 1871
27	Mahón/Menorca	1856/1874 y 1899
28	Mataró/Maresme	1856
29	Olot/Garrocha	1856/1880
30	Sabadell/Vallés Occidental	1856/1891
31	Santa Coloma de Farners/Selva	1856
32	Arenys de Mar/Maresme	1857
33	Montblanc/Cuenca de Barberá	1857/1888
34	Tárrega/Urgel	1857/1871 y 1876
35	Valls/Alto Campo (Alt Camp)	1857
36	Villanueva y Geltrú (Vilanova i la Geltrú/ Garraf	1857/1871
37	Castelltersol/Vallés Oriental	1858
38	Murcia/Murcia	1858
39	Berga/Berguedá	1859
40	Figueras/Alto Ampurdán	1859/1871 y 1891
41	Cervera/Segarra	1861/1871
42	Alicante/Alicante	1866
43	Tortosa/Bajo Ebro (Baix Ebre)	1866/1888

FUENTES: Planas i Maresma, Jordi (2006), ob. cit., págs. 233 a 235, y RIACSI.

Entre los socios fundadores hubo también accionistas de instituciones crediticias y directores de Cajas de Ahorro. Pelayo de Camps y Matas es un claro ejemplo de todo ello, al ocupar entre 1859 y 1867 la dirección de la Caja de Ahorros y Monte Pío de Barcelona. Anteriormente a la fundación del *Instituto Agrícola*, un número importante de futuros socios pasaron por distintas instituciones culturales como la *Academia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona*, o económicas y políticas como la propia Junta de Comercio, e incluso la *Sociedad Económica de Amigos del País* de Barcelona. Hubo quienes ejercieron una actividad docente. Así, por ejemplo, Bertrán y Ros llegó en 1853 a ser rector de la Universidad de Barcelona, o Miguel de Foxá profesor de derecho natural en Alcalá de Henares. Otros, como Eusebio Olzina y Francisco Permanyer, trabajaron como docentes en las Universidades de Huesca y Barcelona respectivamente. No faltaron tampoco, entre los iniciadores de la institución agrícola catalana, ingenieros y expertos agrónomos entre los que destacaron Isidoro Angulo, profesor de agricultura práctica y director de la revista del propio *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* hasta 1854, Jaime Llansó, catedrático de agricultura, Ramón Casanova y Mir, autor y responsable de la *Cartilla agrícola práctica* en 1856, además de otros nombres como los de Carlos de Campos, Hermenegildo Gorria, Ramón de Manjarrés, el marqués de Monistrol, o el propio Ignacio Girona, todos ellos ingenieros, al tiempo que miembros de la directiva del *Instituto*⁸⁴⁸.

Respecto al escenario político e ideológico de quienes concibieron la formación del *Instituto Agrícola Catalán*, fue el moderantismo y las doctrinas de la Unión Liberal, favorables a los intereses de la oligarquía terrateniente, el conjunto de principios que distinguieron, al menos durante los primeros años, al grupo de asociados. En algunos casos, llegaron a formar parte del Congreso o Senado, comprometiendo, como en otras ocasiones y en otras sociedades agrícolas, el principio tantas veces apuntado de rechazo a las discusiones y actitudes políticas activas⁸⁴⁹. A ello, habría que sumar el carácter monárquico de muchos miembros, una circunstancia que se extendería hasta los momentos de la Restauración durante el último cuarto de siglo.

⁸⁴⁸ Todos los nombres y datos en Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 122.

⁸⁴⁹ En efecto, el punto número 5 del Reglamento de 1851, establecía: “El Instituto no consiente discusiones políticas ni religiosas, y rechaza todo acto contrario á las leyes ó á las reglas de la buena sociedad”, en *Reglamento del Instituto Agrícola Catalan*, Imprenta de Don Agustín Gaspar, Barcelona, 1851, pág. 5.

En el Reglamento se establecían tres tipos de socios dependiendo de su residencia. Así, se contemplaban los socios residentes y los corresponsales, a los que se añadían los socios de mérito, estos últimos siempre mayores de veinticinco años y que estuvieran reconocidos por especiales circunstancias o servicios dentro de la institución agrícola. Ser socio residente implicaba tener dieciséis años cumplidos, ser propietario rural, hijo o nieto de persona que lo fuere, y corresponder con una cantidad de 160 reales en el momento de comprometerse con el *Instituto Agrícola*, además de otra igual a los 20 reales mensuales a partir de ese momento. Al margen de las sucesivas modificaciones que fueron estableciéndose para poder pertenecer a la Asociación, no hay duda que en sus comienzos, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* hizo una fuerte apuesta por quienes eran propietarios en detrimento de aquellos que simplemente se dedicaban a tareas relacionadas con la agricultura. Este atisbo próximo al elitismo agrícola quedaba recogido en el párrafo 4º del punto noveno del Reglamento al mencionar como uno de los requerimientos esenciales: “que prepondere la riqueza agrícola en su posición social”⁸⁵⁰. A pesar de las limitaciones, las inscripciones fueron importantes durante los primeros años, llegando a tener en 1858 un número cercano a los dos mil socios⁸⁵¹. En esta misma línea, apenas un año y medio después de ser constituido y en plena euforia por su expansión, la Revista del *Instituto* se congratulaba del éxito inicial expresándolo en los siguientes términos: “Sin distincion de clases, ni de matices políticos, han acudido los agricultores á inscribir sus nombres en la lista de los que no abrigan mas objeto que el fomento de la riqueza rural y el bienestar de los que tienen su suerte ligada á ella; y bien podemos asegurar con fuerza de conviccion que el Instituto corresponde á las esperanzas que tan justamente a inspirado”⁸⁵².

Entre 1851 y 1860, y bajo la dirección del primer presidente, el marqués de Alfarrás, se produjo un fuerte impulso a la organización, así como a la propagación del espíritu asociativo. Primero, al establecerse relaciones con la *Academia Nacional Agrícola de París*, y posteriormente con la *Sociedad Nacional y Central Agrícola de Francia*. A todo ello se unió el

⁸⁵⁰ *Ibidem*, págs. 5 y 6.

⁸⁵¹ Las admisiones en el *Instituto Agrícola Catalán* alcanzaron una cifra de 470 nuevos corresponsales en 1856. Sin embargo, de los 2.032 socios con los que contaba en 1858, se pasaría a comienzos del siglo XX, en concreto en el año 1904, a contar solamente con 682 inscritos. Las cifras en Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 124.

⁸⁵² *RIACSI*, Tomo I, Barcelona, 1853, pág. 6.

interés y los trabajos llevados a cabo por parte de la Comisión Directiva, con el fin de iniciar una política de relaciones y vínculos con organizaciones como el *Instituto Nacional Agronómico de Versalles* y la *Escuela Regional de Agricultura de Grignon*, entre otros⁸⁵³.

Hasta 1860, la preocupación por los problemas de la agricultura, y en especial por la situación en Cataluña, no dejaron de señalarse a través de la *Revista*. En una memoria elaborada por el socio Ramón de Casanova en el año 1853, se especificaba respecto a esta cuestión lo siguiente: “La crisis que amenaza á la agricultura catalana es el punto que á nuestro entender debe llamar mas la atención de los propietarios rurales del Principado”⁸⁵⁴. En la misma idea se incluían los problemas arancelarios, la cuestión del trigo, o la protección y el fomento de la propiedad territorial, argumento este último que era identificado en numerosas ocasiones con el sostenimiento y la tranquilidad política de los Estados⁸⁵⁵.

Tres eran las causas admitidas en relación al deterioro en la situación económica en el mundo rural. En primer lugar se apuntaba una minoración en los valores que estaban conectados con la propiedad. Desde el *Instituto* se insistía en las responsabilidades acumuladas en otro tiempo por los propietarios, quienes soportaban: “el peso y el decoro de su familia con el rédito de su hacienda”⁸⁵⁶. Un segundo aspecto recordaba el movimiento mercantil y el desarrollo industrial. Tanto el comercio como la industria disponían de un capital «ficticio», a la vez que desmedido, mientras que la propiedad seguía circunscrita a sus propias rentas. De hecho, y en palabras del propio Eusebio Soler, la competencia de la pequeña propiedad con el comercio venía siendo: “la causa mas directa de sus atrasos”⁸⁵⁷. Finalmente, y aunque la *Sociedad* agrícola no participaba de opiniones políticas, el tercer motivo era atribuido a las «vicisitudes» padecidas en este terreno, siendo el tema más manejado y requerido. Soler era lo suficientemente incisivo al afirmar: “Nada diré acerca de este punto ¿quién ignora los sacrificios, los desastres, los quebrantos y las calamidades sin cuento que han ocasionado

⁸⁵³ *Ibidem*, págs. 6 a 8., y *RIACSI*, Cuaderno 5, mayo de 1921, págs. 1 y 2.

⁸⁵⁴ *RIACSI*, Tomo I, Barcelona 1853, pág. 155.

⁸⁵⁵ Incluso, en este mismo sentido, desde el *Instituto Agrícola Catalán* se llegará a afirmar en su momento que: “La propiedad es la sociedad”. Véase la Memoria presentada por Eusebio Soler, leída en la Junta General de Socios el día 19 de mayo de 1853, en *RIACSI*, Tomo II, Barcelona 1853, págs. 148 a 151.

⁸⁵⁶ *Ibidem*, pág. 149.

⁸⁵⁷ *Ibidem*.

á nuestra propiedad las agitaciones y revueltas de estos últimos tiempos?”⁸⁵⁸.

En el curso de esta búsqueda de soluciones, a finales de 1853 la Junta General de Socios celebrada el día 22 de diciembre de ese mismo año decidió el envío de una «sentida» exposición a la Reina, manifestando el estado de urgente necesidad en el que se encontraba la clase agricultora. En la misma, la Comisión Directiva del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* aludía a la protección que aquélla precisaba y a la necesaria rebaja de contribuciones que debía aplicarse como forma de paliar una parte importante del problema⁸⁵⁹. Estas peticiones redoblaron sus esfuerzos, cuando apenas dos años más tarde llegó al Congreso un nuevo proyecto de ley relativo al establecimiento de nuevos impuestos. En concreto, el envío a las Cortes de una nueva Exposición solicitaba la supresión de los derechos de consumos y puertas. Tal y como se argumentaba en el escrito de disconformidad con el proyecto, era el propio preámbulo del mismo el que indicaba y reconocía las dificultades que planteaba un aumento en la recaudación. En este sentido la argumentación de la Exposición era tajante: “En el preámbulo á este proyecto de ley se reconoce que para hacer efectiva dicha contribución con el aumento propuesto se presentan gravísimas dificultades, y se prevé que no serán pocas las reclamaciones á que dará lugar el recargo que se quiere imponer á la propiedad”⁸⁶⁰. El problema en Cataluña, además, se agravaba al ser aun mayor la carga imponible que debía soportar en relación a otras regiones. El *Instituto*, en la misma Exposición y a través de su presidente, se manifestaba de la siguiente forma ante las Cortes respecto a perjuicios que padecía la propiedad rural en el Principado:

Así, por ejemplo, en la provincia de Barcelona las Diputaciones provinciales que se han sucedido desde el planteamiento del actual sistema tributario, y varias otras corporaciones, han manifestado al Gobierno con datos irrecusables, que no puede pagar mas de 11 millones de reales por inmuebles, y aun los empleados de la Administracion han reconocido la exactitud de este aserto. Si embargo, el cupo señalado es de 13 millones y medio; de lo cual resultan continuas y justas reclamaciones de varios pueblos que para ser atendidas han de refluir necesariamente en perjuicio de otros pueblos que á la vez reclaman con justicia; dándose lugar con tales

⁸⁵⁸ *Ibidem*.

⁸⁵⁹ *Ibidem*, págs. 242 y 243.

⁸⁶⁰ *RIACSI*, Tomo IV, Barcelona, 1855, pág. 179.

reclamaciones á que para cubrir el cupo señalado á al provincia se comentan mil arbitrariedades y vejámenes que tal vez no seria difícil remediar⁸⁶¹.

La situación tributaria venía de hacerse más evidente después de las malas cosechas que se habían producido en 1854. Al año siguiente fueron muchos quienes llegaron a criticar la política de impuestos sostenida por el Gobierno de la Nación, a pesar de las duras dificultades por la que atravesaban un buen número de propietarios y agricultores. El *Instituto* reaccionó ante la estrategia prevista por el Ministerio de Hacienda para aumentar la recaudación en unos 34 millones de reales en la contribución territorial de inmuebles, cultivo y ganadería. Para ello, no dudó en apoyar las iniciativas que desde numerosos municipios habían comenzado a elaborarse con el fin de solicitar una sustancial rebaja en las contribuciones. Aunque consecuencia directa de las pérdidas que en la agricultura todavía estaba ocasionando el mal año de 1854, el hecho en sí fue considerado conjuntamente con los inconvenientes que una nueva reforma arancelaria podía originar. A tales efectos se dirigieron dos Exposiciones razonadas a las Cortes en Madrid, manifestándose en ambas la oposición de los propietarios catalanes a las decisiones del Gobierno, tanto en materia impositiva como arancelaria⁸⁶².

En las primeras páginas de la *Revista de Agricultura Práctica*, correspondiente al año 1857, comenzaron a aparecer una serie de artículos y consideraciones sobre el estado de la clase agricultora y la vulnerabilidad de la misma, incidiendo en el escaso respeto que venía infligiéndose a la propiedad. En el primero de la serie de escritos dedicados a esta cuestión, Manuel E. de Casanova esgrimía su opinión, compartida por la mayoría de socios, en el tono siguiente: “El derecho de propiedad, cuyos principios habian sido siempre inviolablemente respetados, y lo son aun por la cuasi totalidad de nuestros agricultores, ha sufrido profundas heridas en algunos puntos con pretensiones desatentadas á injustas, por cuanto se dirigen á

⁸⁶¹ “Á las Córtes”, Exposición fechada el 3 de noviembre de 1855. *Ibidem*.

⁸⁶² Las malas cosechas fueron atribuidas, en principio, a la aparición de una enfermedad en los viñedos. No obstante, la postura del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* fue muy consistente al manifestar que las cargas y tributos impuestos a la riqueza agrícola provocaban en el propietario rural un daño irreparable “por cuanto bástale la pérdida de una sola cosecha, ó la aparición de una de esas plagas que concluyen con uno ó mas productos de la tierra, para que se halle perpleja en la preferencia que debe dispensar á las necesidades del campo”. En relación a las Exposiciones y quejas presentadas por el *Instituto Agrícola Catalán* véase la *RIACSI*, Tomo IV, Barcelona, 1855, págs. 22 y 223.

introducir graves perturbaciones en los derechos de los propietarios y en las estipulaciones acordadas en conformidad á las leyes”⁸⁶³. Junto a la falta de asistencia y de medios en la instrucción primaria en las zonas rurales, el aislamiento observado en la agricultura preocupaba notablemente a la Comisión y a los propietarios del *Instituto Agrícola*. Respecto al aislamiento y los efectos negativos que podía ocasionar a los habitantes del campo, el propio Casanova añadía: “Si nos detenemos en observar el espíritu que domina en la clase agricultora, descubriremos cierta desconfianza de los hombres y de las cosas, efecto no solo de las esperanzas frustradas y de las promesas no cumplidas, sino de una prevención contra todo lo extraño y contra todo lo nuevo, que hasta cierto punto es muy natural en unas personas habituadas á vivir en el aislamiento, y á contemplar la inmovilidad de cuanto les rodea”⁸⁶⁴.

La instrucción y los escasos avances que ésta mostraba entre las personas dedicadas a la agricultura fueron largamente denunciados desde el órgano de prensa que la institución agrícola catalana tenía en Barcelona. El desconocimiento de las reglas «básicas» de los niveles elementales en la enseñanza, implicaba igualmente una indiscutible ignorancia en las tareas del campo⁸⁶⁵. A esta tardanza en alcanzar los niveles mínimos de instrucción se unía la ruina esporádica de las cosechas y la dificultad para acceder a capitales con reducidos gravámenes. Las escasas rentas que producían muchos de los dominios agrícolas se veían en no pocas ocasiones agravadas por la falta de «inteligencia» demostrada en las explotaciones rurales. Todo ello provocaba la necesidad de contraer préstamos, lo que resultaba una tarea compleja. En este sentido, la situación para una parte considerable de la población supeditada a las rentas del campo en Cataluña era vista con un cierto recelo desde la Asociación: “la escasez de capitales en las poblaciones rurales, la desconfianza y nuestra legislación, se oponen á que se obtengan los fondos necesarios con facilidad y sin cuantiosos sacrificios, con grave daño de los intereses particulares, y con detrimento de los progresos de la agricultura”⁸⁶⁶.

⁸⁶³ Manuel E. de Casanova, "Algunas consideraciones sobre el estado moral y material de nuestra clase agricultora", en *RIACSI*, Tomo VI, Barcelona, 1857, pág. 6.

⁸⁶⁴ *Ibidem*, pág. 7.

⁸⁶⁵ “Si la instrucción primaria está poco difundida, podemos decir que hasta es desconocida la que enseña las reglas que deben guiar en el ejercicio de la agricultura”, *Ibidem*.

⁸⁶⁶ *Ibidem*, pág. 9.

Como se ve, y dejando por el momento a un lado la cuestión arancelaria y la relativa a los cereales, durante los primeros años de existencia, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* afrontó los problemas derivados de la falta de instrucción, de crédito, así como la continua elevación de las cargas impositivas, de una forma conjunta y coordinada, debido a lo que entendían era un hecho nocivo que podía derivar hacia un mayor aislamiento de la clase agrícola y rural. En el punto de mira de los problemas no dudaron en situar a los sucesivos gobiernos, responsables de las asignaciones y recursos que debían recibir los encargados de tutelar los conocimientos de la población propietaria y campesina. En un segundo artículo comprometido sobre algunas de las medidas que debían adoptarse, Manuel E. de Casanova se explicaba así: “La instrucción primaria será tan moralizadora, tan completa, tan perfecta como apetece, cuando los encargados de difundirla sean personas capaces para ello; y lo serán solo cuando los maestros reciban competentes dotaciones para que se dediquen á esa tarea”⁸⁶⁷. Más adelante continuaba su exposición en los siguientes términos:

El aislamiento en que viven por lo general los individuos de nuestra clase agricultora, la falta de toda suerte de instrucción, que es por desgracia tan común entre los mismos, el irregular proceder del Gobierno en ciertas ocasiones en las cuales se acarrea el desvío y hasta la antipatía de los pueblos, y algunas de las inclinaciones que caracterizan á los naturales de nuestro país, son otras tantas causas de la apatía, de la indiferencia, del descuido y de los resultados lamentables que observamos muchísimas veces, así en los negocios privados como públicos⁸⁶⁸.

Paralelamente, la asociación por parte de los propietarios y la creación de sociedades como el *Instituto Agrícola*, se apuntaban como posibles soluciones a la maltrecha situación de la agricultura catalana. Debía ser a través de instituciones análogas y afines, la forma en que todos los agricultores podrían acceder a los conocimientos agronómicos, acercando al Gobierno con una mayor credibilidad los constantes desatinos que sufría la agricultura. En opinión de los asociados, a la instrucción primaria debía unírsele otra de carácter agrícola con el fin de establecer una verdadera formación y adquirir la importancia que a la clase propietaria y agricultora

⁸⁶⁷ *Ibidem*, pág. 35.

⁸⁶⁸ *Ibidem*, págs. 37 y 38.

correspondía. Más aún, la mejora de las rentas entre el grupo de propietarios agrícolas debía proporcionar un razonable bienestar a la clase jornalera⁸⁶⁹.

En realidad, ya a finales de 1856 el *Instituto Agrícola Catalán* había alcanzado un número cercano al 70 por ciento de las Subdelegaciones que habrían de crearse hasta el decenio posterior. La circunstancia de poseer un determinado número de representaciones en otras tantas poblaciones facilitó la idea, entre los socios de las distintas provincias de Cataluña, de comenzar la construcción de granjas-escuela con el fin de posibilitar, tal y como se sugería: “la instrucción a la juventud labriega”. Esta tarea fue tratada en la Junta General celebrada el día 22 de diciembre de 1857. En la misma se animaba a la creación de una granja-modelo, similar a la que ya funcionaba en la provincia de Gerona, aunque el citado proyecto no estaba exento de ciertas dificultades que previamente debían resolverse. A este respecto se aducía el siguiente problema:

El Instituto al efecto, ha tratado varias veces de dotar á Cataluña con establecimientos análogos al que tiene ya la provincia de Gerona: mas, como no basten los fondos con que cuenta y se hagan imprescindibles las subvenciones del Gobierno, no ha podido todavía dar mano á ciertas dificultades, si bien, en vista de los deseos manifestados por algunos socios de la provincia de Tarragona, de elegir un punto para granja, quizás no el mas á propósito; alienta ahora las gestiones que puestos de acuerdo con otros de distinta comarca están practicando, á fin de que pueda realizarse un dia un objeto de interés tan preferente⁸⁷⁰.

Con el paso del tiempo, las solicitudes, ya fueran dirigidas a la Reina, al Gobierno o a las Cortes de la Nación, se intensificaron. A decir por lo recogido en la propia *Revista* del *Instituto*, las exposiciones a los distintos órganos y establecimientos del Estado formaban parte de los asuntos que, con una especial predisposición, se discutía en las Juntas por los socios.

⁸⁶⁹ Casanova argüía la idea de la siguiente manera: “En todos los pueblos debieran estar asociados los propietarios para reunirse cuando fuera conveniente al objeto de tratar de los intereses de los mismos y de proporcionar el bien á la clase cultivadora, formándose pequeñas pero escogidas bibliotecas como medio de instrucción y como punto donde reunirse”. Ibidem, pág. 38. Sobre las repercusiones en las clases campesinas y jornalera puede consultarse el tercero de los artículos publicados por Manuel E. de Casanova, correspondiente al día 1 de marzo de 1857. Ibidem, pág. 65.

⁸⁷⁰ *RIACSI*, Tomo VII, Barcelona, 1858, pág. 23, y en Fages de Romá, Narciso, *Exposicion y proyecto de programa para el establecimiento de una granja-escuela, presentados por el Sr. Comisario Régio de Agricultura de la provincia de Gerona y adoptados por acuerdo de la Junta provincial de Agricultura de la misma*, Imprenta de Grasés, Gerona, 1854.

Siguiendo esta misma dinámica, en los primeros meses de 1858 se enviaron diversas Exposiciones a las Cortes y a la Reina con el fin de presentar una realidad que, desde hacía tiempo, pesaba sobre la propiedad rural en relación a los gravámenes que debía soportar⁸⁷¹. En enero de ese mismo año, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* envió a las Cortes un escrito solicitando que en el debate de los presupuestos se redujeran las cantidades asignadas a la contribución de inmuebles a una cantidad próxima a los trescientos millones, cuando el tipo estaba fijado a trescientos cincuenta millones. En la consideración de los socios del *Instituto* residía la idea de que la contribución de inmuebles, unida al resto de gravámenes y tributos, no hacía sino destruir cuantiosos intereses individuales, malográndose, al mismo tiempo, un importante montante de capitales destinados a la agricultura⁸⁷².

Finalmente, en los primeros meses de 1858, el Congreso autorizó un aumento de 50 millones en la contribución territorial, medida que quedaba comprendida en los presupuestos aprobados para ese mismo año. Las respuestas fueron inmediatas, tanto desde el *Instituto* como desde las propias Cortes. En este sentido, fue el diputado y propietario agrícola castellonense José Polo y Borrás, quien mostró su descontento ante la medida. Como él mismo justificaba: “Sabio es, no solo de todos los Sres. Diputados, sino todo el país, no solo de los que conocen las cuestiones financieras, sino de los mas ajenos á ellas, sabido es de todos los propietarios que el impuesto territorial se reparte hoy de una manera desigual. Cuando esto sucede, el Gobierno quiere gravar la propiedad

⁸⁷¹ En efecto, entre los acuerdos adoptados en la Junta celebrada en diciembre de 1857, se propuso remitir en los primeros meses del año siguiente una solicitud a las Cortes, relativa a la necesaria minoración de los tributos y contribuciones que venía soportando la clase propietaria. Asimismo, la Comisión Directiva, a instancia de la Subdelegación de Molins de Rey, resolvió enviar una solicitud a la Reina Isabel, motivada por el impuesto denominado «de puertas» que afectaba a los productores de frutas frescas. A través de los representantes de Granollers, se elaboró una nueva propuesta por parte del *Instituto Agrícola* con el fin de pudieran considerarse los perjuicios que causaba a la industria agrícola “la exaccion del derecho de hipotecas en los traspasos de fincas cedidas en propiedad o en usufruto”. *RIACSI*, Tomo VII, Barcelona, 1858, pág. 25.

⁸⁷² El planteamiento manifestado a las Cortes por parte del *Instituto Agrícola Catalán* se justificaba así: “En el año 1845 se estableció una contribucion de repartimiento sobre el producto líquido de los bienes inmuebles y del cultivo y ganadería, por la cantidad total de 300 millones; en 1846, se rebajó este tributo directo á 250 millones; en 1849, volvió á fijarse en los 300; en 1856 se elevó á 350 millones y se decretó además el uno por ciento de fondo supletorio; y en 1858, se trata de que se paguen 400 millones, con mas tal vez el uno por ciento del fondo supletorio mencionado. De manera que durante el transcurso de doce años la contribucion territorial de inmuebles, cultivo y ganadería, habrá subido algo mas de cien millones”. *RIACSI*, Tomo VII, Barcelona, 1858, págs. 100 y 101.

territorial con 50 millones mas sobre los 350 que hoy paga, sosteniendo y agravando esta desigualdad”. En su propuesta, Borrás planteaba el daño que iba a ocasionar a las clases agrarias menos favorecidas en aumento en las contribuciones y las posibles soluciones al aumento en las contribuciones: “Pero el hecho es que si votamos la autorización como se presenta para pone en planta los presupuestos, los 50 millones se repartirán de la misma manera que los 350. La desigualdad no desaparecerá; antes bien será mucho mayor; es decir, que los que hoy están favorecidos, estos pagarán tambien una cuota mucho menor de este aumento, y los gravados esos serán los que sufran mayor recargo. El contribuyente que paga este año 7 por 100, pagará el próximo el 8 por 100, 1 por 100 mas; el que paga 14, 16 por 100, 2 por 100 mas de lo que hoy paga”. Por último, el representante por Castellón expresaba las posibles soluciones. Remedios que se dirigían a no gravar precisamente las rentas más altas, ya que como él mismo señalaba muy agudamente: “Pues bien: yo propongo que esos 50 millones se satisfagan nivelándose los sacrificios de los contribuyentes, pagando 12 el que paga 7, y no aumentándose la cuota del que paga 14. Estos son los dos sistemas”⁸⁷³.

Desde la prensa liberal se criticó abiertamente la medida, toda vez que alteraba la riqueza y los intereses de los propietarios. Frente a la posición inflexible del ministro de Hacienda, José Sánchez Ocaña, no faltaron quienes le recordaban los artículos 10 y 12 de la Ley del 16 de abril de 1836, en los que se prohibía la imposición de cuotas mayores que la capacidad tributaria y un tope en la misma tributación del 14 por ciento para vecinos y forasteros, respectivamente⁸⁷⁴. Dentro del mismo contexto, y en referencia a algunas de las comarcas agrícolas que presentaban mayores dificultades, no tardaron en sumarse al vasto desacuerdo otras provincias a través de sus representantes en las Cortes. Elocuentes fueron las palabras que, en este sentido, pronunció el diputado Teófilo Rodríguez Vaamonde, citando, una vez más, los problemas a los que habrían de enfrentarse los agricultores gallegos ante el nuevo panorama fiscal:

Pues bien, señores; yo no niego al gobierno el derecho de exigir contribuciones, porque son necesarias para cubrir las cargas del Estado,

⁸⁷³ Todo el debate en *DSC, Congreso de los Diputados*, sesión del viernes 5 de marzo de 1858, número 32, págs. 320 y 321.

⁸⁷⁴ *El Clamor Público*, número 4.153, miércoles 3 de febrero de 1858.

creo también que debe hacerse cargo ese mismo gobierno, de que cuando la propiedad está en tan gran decadencia como en Galicia, no hay razón ni ley ninguna que autorice para en momentos apurados, en momentos críticos, exigir lo que no se puede pagar. Pero hay mas: esas provincias no están en el caso de pagar, porque en la ley de presupuestos se establece que cuando es absoluta la carencia de cosechas, no se exija el pago de la contribucion territorial⁸⁷⁵.

Sabedores de los esfuerzos que se venían realizando desde un buen número de provincias del país, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* contaba ya con una opinión manifiesta en mayo de aquel mismo año de 1858. La *Revista de Agricultura Práctica*, órgano de la Asociación, publicó un artículo a cinco páginas bajo el título “Nuevo impuesto de 50 millones” en el que se trataba del desánimo y las pocas esperanzas que persistían de invertir una situación en la que, finalmente, la agricultura acabaría asumiendo el aciago impuesto⁸⁷⁶. Es verdad que, tal y como se había planteado desde el *Instituto*, eran pocos los municipios que habían hecho llegar al Gobierno sus reclamaciones y quejas. Sin embargo, no era menos cierto lo que desde las páginas de la Revista se planteaba, en relación a la escasa atención que las autoridades habían mostrado por las mismas. Joaquín María de Ferrer, autor del citado artículo, dejaba al respecto unos renglones muy significativos: “Resulta de lo dicho, que son muy pocos los pueblos, que hayan hecho reclamación de agravios, y menos los que hayan sido bastantemente atendidos, teniendo casi todos, que sujetarse al señalamiento, que se les ha hecho de la riqueza imponible, que con mas propiedad debe llamarse impuesta”⁸⁷⁷. En sus reflexiones finales, Ferrer se lamentaba de las cargas que debían afrontar los agricultores de todas las provincias españolas, aún tras los frecuentes periodos de malas cosechas y de una patente falta de ahorros con los que poder paliar, tanto la falta de beneficios como el pago de las deudas. Una circunstancia que dejaba a

⁸⁷⁵ DSC, *Congreso de los Diputados*, sesión del sábado 13 de febrero de 1858, número 22, pág. 183. Entre un considerable y nutrido número de comentarios y opiniones al respecto, pueden consultarse algunas de las mismas en diarios tan dispares como *La Iberia*, número 1.112, domingo 14 de febrero de 1858; *La Época*, número 2.722, sábado 13 de febrero de 1858, o en *La Discusion*, números 783 y 784, correspondientes a los días 11 y 12 de septiembre de 1858.

⁸⁷⁶ En las primeras líneas del mismo podía leerse: “La resolucion no se ha detenido por grandes que hayan sido las razones y esfuerzos hechos á favor de la propiedad inmueble”, *RIACSI*, Tomo VII, Barcelona, 1858, pág. 113.

⁸⁷⁷ *Ibíd*em, pág. 115.

muchos propietarios a merced de la usura, al mismo tiempo que a las puertas de graves conflictos sociales.

Las alteraciones en el impuesto inmueble producen grandes alteraciones en la propiedad y son causa de perturbación social. El aumento, sobre todo cuando es gravoso, desalienta al labrador, aniquila la producción, extingue el trabajo, introduce la miseria en los campos y sumerge por último á innumerables familias en las mayores privaciones. ¿Quién empleará capitales retraídos de sí de la tierra por su escaso interés, para introducir máquinas, mejorar las razas del ganado, extender las irrigaciones, para hacer en una palabra tantas y tan importantes mejoras de que es susceptible nuestro suelo, teniendo en frente una excesiva fiscalización? Los hacendistas de las naciones mas adelantadas, que saben las circunstancias, que afectan el valor de la riqueza inmueble, temen los grandes conflictos, que causa la adición de un céntimo en el presupuesto territorial, y por esto se dirigen á los demás tributos, cuando las necesidades del Estado exigen un aumento en el impuesto⁸⁷⁸.

En los años sucesivos, y hasta la expiración del siglo, las páginas dedicadas a las cargas impositivas en el sector agrícola se prodigarían, prácticamente, sin solución de continuidad. Preocupados por las cargas derivadas de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, diferentes opiniones se alzaron contra el deficiente sistema de catastro que utilizaba el Gobierno para el reparto de impuestos, situación que terminaba repercutiendo en la contribución agrícola entre provincias, además de hacerlo también entre distintos municipios⁸⁷⁹. Fieles a los principios del Reglamento del *Instituto Agrícola Catalán* que atendían la defensa de las propiedades agrícolas, los hacendados determinaron que debía informarse al Ministerio de Hacienda de las posibles soluciones y del pésimo estado de la estadística o amillaramiento de los pueblos. A través de una nueva Exposición dirigida al propio ministro se recordaba el grado de dejadez que, todavía en este sentido, mantenía España respecto a otros países más avanzados. En la misma se reconocía la necesidad de acometer algunas reformas entre las que se citaban la consideración de la calidad de las tierras y la ubicación. Dependiente de ésta última se recordaba la desigualdad de los distintos territorios que conformaban las distintas provincias del país.

⁸⁷⁸ Ibídem, págs. 116 y 117.

⁸⁷⁹ Ibídem, pág. 209.

Para remediar tamaños inconvenientes, Excmo. Sr., para que el Gobierno de S. M. pudiese hallar la riqueza del país lo mas aproximada á la verdad, para que á la sombra de supuestos derechos no se cometieran irreparables injusticias; convendría principalmente, en sentir del Instituto que las tierras se dividieran, cuando menos, en cinco clases, en vez de las tres en que ahora lo están. En territorios tan desiguales y quebrados, como los hay en España no pueden ser equitativa la estadística con solo las tres clases mencionadas, puesto que resalta desde luego y á primera vista que las haciendas, por ejemplo, que se hallan en los llanos y en el fondo de los valles han de ser naturalmente mejores que las situadas en las cimas de los montes. Y además se tiene en cuenta su mayor ó menor proximidad á las vías de comunicacion que faciliten la extraccion de los productos, los medios de transporte de que puedan disponer, y otras mil circunstancias que deben tenerse presentes; aparecerá claramente la conveniencia de la medida propuesta⁸⁸⁰.

El corto período de tiempo desempeñado en la presidencia por el marqués de la Quadra, segundo presidente de la institución catalana, sirvió para avanzar en el terreno de la búsqueda de créditos ante la situación acuciante que en esos momentos detentaban las clases agrícolas, una circunstancia que aumentó las gestiones que venían realizándose para el establecimiento de un Banco Hipotecario. A pesar de no haberse logrado el objetivo, en febrero de 1861 se culminó otro de los proyectos buscados por el *Instituto* como era la creación de una sociedad de seguros mutuos entre labradores que pudiera paliar, en la medida de lo posible, los continuos infortunios en las cosechas. Éste, ideado y redactado por la asociación catalana, fue finalmente aprobado por el Gobierno en los primeros meses de aquel mismo año⁸⁸¹.

A la espera de que se diera luz «verde» a los proyectos interpelados tiempo atrás por el *Instituto Agrícola* sobre la instauración de los Bancos Agrícolas, las sociedades de seguros pretendían paliar los daños sufridos por los labradores, evitando, además, las prácticas especulativas a las que se veían sometidos muchos propietarios rurales. Unos años antes, en 1853, José Bertran y Ros ya había intentado persuadir a los socios del *Instituto* de la importancia de este tipo de instituciones, lo que provocó que la *Sociedad Económica* de Barcelona nombrara una comisión, entre los que se encontraban Laureano Figuerola, Francisco Baxils, Isidoro de Angulo, y el

⁸⁸⁰ RIACSI, Tomo VIII, Barcelona, 1859, pág. 223.

⁸⁸¹ RIACSI, Tomo X, Barcelona, 1861, pág. 33, y RIACSI, Cuaderno 5, mayo de 1921, pág. 3.

propio Bertrán, con el fin de iniciar los trabajos necesarios para poner en marcha los mencionados bancos⁸⁸².

Tanto la ansiada ley hipotecaria como la organización de los bancos agrícolas, eran asuntos que llevaban años tratándose en el seno de la Asociación. Precisamente, la Comisión Directiva *del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* ya había dirigido una Exposición al ministro de Gracia y Justicia, en el transcurso del año 1856, para agradecer la promesa hecha por el propio ministro, en junio de ese mismo año, de presentar una ley de hipotecas para su discusión en las Cortes. Con la presentación del texto legislativo se abría la esperanza, al menos teóricamente, al establecimiento y difusión de los bancos agrícolas⁸⁸³. La petición se sumaba a las que ya se habían llevado a cabo con anterioridad a diputados y miembros del Gobierno en abril de 1854, mayo de 1855, así como en febrero de 1856, con el fin de que pudiera crearse un primer banco de crédito territorial en Barcelona. Sin embargo, el principal problema, reconocido por los propietarios catalanes, era el lento avance que venía sucediéndose desde Madrid en la citada legislación hipotecaria⁸⁸⁴.

Con el marqués de la Quadra al frente del *Instituto Agrícola Catalán*, se comenzó un período de considerables esfuerzos por estimular los conocimientos agronómicos e introducir el uso de instrumentos y maquinaria en las labores agrícolas. En tan breve espacio de tiempo se consiguió la instalación en el *Instituto* de las cátedras de Agronomía, Química aplicada a la Agricultura y la de Zootecnia, siendo las primeras de este género abiertas en Barcelona⁸⁸⁵. Si tenemos en cuenta todo lo referido a este cometido en la *Revista*, existen pocas menciones hasta el año 1860, destacando los ensayos con el “objeto de fomentar la agricultura” realizados en las explotaciones del socio José Oliveres, la mención a la inauguración de una Escuela Central de Agricultura en Aranjuez, o las informaciones

⁸⁸² RIACSI, Tomo I, Barcelona, 1853, pág. 165.

⁸⁸³ RIACSI, Tomo V, Barcelona, 1856, pág. 23.

⁸⁸⁴ RIACSI, Tomo VI, Barcelona, 1857, pág. 126. En relación al crédito territorial, el *Instituto Agrícola Catalán* trató la cuestión en distintos artículos bajo el título de “Asociaciones Agrícolas”, explicando el carácter y funcionamiento que algunas entidades de socorros mutuos y de seguros ya tenían desde hacía tiempo en otros países de Europa. Véase, por ejemplo, los apuntes realizados en relación a la *Asociación agrícola Territorial* fundada en 1770 por Federico II, *Ibíd.*, pág. 162.

⁸⁸⁵ RIACSI, Cuaderno 5, mayo de 1921, págs. 3 y 4.

recogidas informando sobre los ensayos realizados con maquinaria para la siega en el municipio de Jerez de la Frontera en la provincia de Cádiz⁸⁸⁶.

En los primeros años de la década de 1860 habían comenzado a difundirse distintos eventos desarrollados con maquinaria agrícola, muchas veces promovidas por revistas de agricultura, granjas-modelo y exposiciones multitudinarias que, en la mayoría de las veces, estaban secundados por haciendas particulares y explotaciones rurales, con el fin de recabar así una mayor divulgación de los mismos. El *Instituto Agrícola Catalán* había conocido *in situ*, a través de la Exposición Agrícola celebrada en París en 1856, el amplio catálogo formado por más de 1.400 máquinas pertenecientes a los 394 expositores que allí se habían dado cita. Unas cifras que terminarían duplicándose, pocos años después, en los últimos certámenes celebrados también en la capital francesa. Con las informaciones llegadas desde el exterior aludiendo a los éxitos que estaban teniendo lugar con maquinaria agrícola en las labores de cultivo, no es de extrañar que desde la Comisión Directiva terminaran preguntándose qué podía provocar el carácter menos abierto de los agricultores en España hacia el progreso tecnológico:

Cuando tan considerable estension va adquiriendo en las naciones extranjeras el uso de las máquinas agrícolas, ¿podrémos continuar mirándolas con desden y con desconfianza, sin tomarnos la molestia de fijar nuestra atención en la posibilidad, en la conveniencia, ó en la necesidad de adoptarlas? ¿podrémos permanecer indiferentes en un asunto de tanta trascendencia, mientras otros países han tomado ya sobre él una resolución decidida?⁸⁸⁷.

Todavía, y hasta 1868, se mantendrían al frente de la institución agrícola dos presidentes más. Entre los años 1862 y 1866 ocuparía la jefatura José María Despujol de Sant Jordi, marqués de Palmerola y conde de Fonollar, siendo Miguel de Foxá el último de los presidentes antes de la llegada de «La Gloriosa» en 1868. A través del primero, el *Instituto* siguió ampliando la estela de reconocimientos que de manera sucesiva había venido recogiendo desde su instalación en la ciudad de Barcelona. Los cumplidos y parabienes continuaron llegando, tanto desde instituciones

⁸⁸⁶ RIACSI, Tomo IV, Barcelona, 1855, pág. 219, y Tomo V, Barcelona, 1856, págs. 65, 66 y 110.

⁸⁸⁷ RIACSI, Tomo X, Barcelona, 1861, pág. 57.

nacionales como extranjeras, activándose durante estos años el interés por la mejora y construcción de nuevas vías de comunicación con el fin de mejorar la movilidad de los productos de la tierra y el transporte de ganados. José María Depujol se significó como un auténtico adalid para la propiedad agrícola, reactivando la cuestión arancelaria, aspecto que después atenderemos, y actuando con empeño a favor de disposiciones que regularan el crédito hipotecario, toda vez que acaba de ser aprobada la Ley Hipotecaria de febrero de 1861⁸⁸⁸.

Desde un punto de vista jurídico, la ley, y su correspondiente reforma realizada en 1869, venían a culminar una de las mayores actuaciones en la España del XIX, al consolidar el régimen jurídico de la propiedad inmueble, posibilitando al mismo tiempo, tanto la transmisión como su revalorización. El hecho en sí, suponía un giro radical en lo que había sido hasta entonces la base de la oligarquía terrateniente, al desligar de ésta la adhesión perpetua de los bienes a los descendientes de los propietarios⁸⁸⁹. Sin embargo, la puesta en marcha de la ley no tardó en provocar una serie de inconvenientes que tenían que ver con la enajenación y el gravamen aplicado en las haciendas, e incluso con la traducción de documentos, entre otros, circunstancias que imposibilitaban el registro de todas las escrituras en los plazos establecidos. Solo dos años después de su aprobación, el *Instituto Agrícola Catalán* expuso algunas observaciones a la Reina, en vista de la alarma que, según palabras de la propia Exposición, estaba introduciendo “entre los propietarios y poseedores de haciendas de antiguo origen, creyéndose obligados por la ley á trasladar todos sus archivos á la oficina del registro para que principie á tomar razon de los vetustos y quizás ilegibles pergaminos de los siglos XII, XII, XIV y XV”⁸⁹⁰.

Si el propósito de la ley era el de formar una estadística de la propiedad que sirviera de base al registro, reflejando el aumento, disminución o modificación en cada finca, entonces, se preguntaba la

⁸⁸⁸ RIACSI, Cuaderno 5, mayo de 1921, pág. 5.

⁸⁸⁹ En efecto, el tema es lo suficientemente importante, en tanto desbarataba el ideal que durante siglos había prevalecido en la estructura social y política, por parte de quienes ostentaban las grandes fortunas y propiedades territoriales en España. Véase, por ejemplo, de Baró Pazos, Juan, *La Codificación del Derecho civil en España (1808-1889)*, Universidad de Cantabria, Santander, 1993, pág. 176. También de Latour Brotons, José, “Antecedentes de la primitiva Ley Hipotecaria: su génesis, circunstancias y efectos de la misma”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, julio-agosto de 1862, págs. 463.

⁸⁹⁰ RIACSI, Tomo XII, Barcelona, 1863, pág. 26.

institución: “¿Qué se conseguiría con inscribir en el registro un pedazo de tierra que quinientos años atrás era viña y hoy es una huerta de regadío con su noria, que cuatrocientos años ha constaba de seis fanegas y hoy no tiene mas que tres por haberse enagenado las restantes, que hace seis siglos estaba plantado de pinos y en el día se encuentra cubierto de edificios?”⁸⁹¹. Previas a las peticiones catalanas, varios particulares de Galicia habían mostrado ya su rechazo a parte del articulado, solicitando la reforma de los mismos. Este último aspecto no era contemplado por el *Instituto*, ya que consideraba necesarios los inventarios de bienes inmuebles como una garantía para la base estadística de la propiedad territorial⁸⁹².

A las observaciones de los propietarios gallegos y catalanes se unieron la de los vecinos y hacendados de la antigua Corona de Aragón, residentes en la ciudad de Valencia, que en una extensa e interesante Exposición dirigida a la Reina, instaban al Gobierno a remediar los perjuicios que la ley señalaba en razón a las inscripciones de fincas, y de las faltas irreparables contenidas en los títulos y antiguos documentos de propiedad⁸⁹³. Era evidente que la Ley Hipotecaria de 1861 había provocado un rechazo mayoritario entre los propietarios en España. Solo así se explica que dos meses más tarde de haberse presentado la Exposición de Valencia, se diera cumplimiento a otra mucho más extensa por parte de un importante número

⁸⁹¹ *Ibidem*, pág. 27. El artículo primero de la citada ley creaba en todos los pueblos que fueran cabezas de partido judicial, un registro que debía estar al cargo de un nuevo cuerpo de funcionarios denominados «registradores». Pantoja, José M. y Lloret, Antonio M., *Ley hipotecaria, comentada y explicada, concordada con las leyes y códigos extranjeros; comparada con las disposiciones de la legislación española que ha servido de precedente para redactarla; precedida de una introducción histórica y de la exposición de sus motivos y fundamentos*, Tomo I, Librería de D. Leocadio Lopez, Madrid, 1861, pág. 172.

⁸⁹² En efecto, en la Exposición motivada remitida a las Cortes por algunos propietarios gallegos se solicitaba la modificación del párrafo primero del artículo 2 relativo a los distintos títulos, actos y contratos indicadores de los bienes inmuebles. Asimismo, se solicitaba la supresión de los artículos 389, 393, 397 y 409, concernientes a la carencia de títulos sobre los dominios y haciendas, así como a las inscripciones de las mismas. *RIACSI*, Tomo XII, Barcelona, 1863, pág. 26, y en el volumen correspondiente a la *Ley hipotecaria, Reglamento General para su ejecución e instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos a registro*, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1861, págs. 237 a 240, y 242.

⁸⁹³ Entre los problemas que podían aparecer en los antiguos títulos de propiedad se encontraban, por ejemplo, la incapacidad para ser descifrados, las distintas lenguas en las que aparecían escritos, en las lagunas que presentaban muchos de ellos para su correcta interpretación, incluso en la inexistencia de documentos o derechos sobre fincas cuando se trataba de tierras procedentes de los señoríos territoriales. Las distintas trabas documentales y de inscripción están recogidas en la Exposición remitida a la S. M. la Reina, por parte de un grupo de propietarios de fincas y derechos de la antigua Corona de Aragón, vecinos de Valencia, con fecha 15 de enero de 1863. *RIACSI*, Tomo XII, Barcelona, 1863, págs. 31 a 35.

de propietarios de fincas de la provincia de Barcelona. Los más de cien firmantes, encabezados por el marqués de la Quadra, Joaquín de Miró y el barón de Maldá, ahondaban en el problema que suponía aceptar los propósitos que la nueva norma imponía a la propiedad.

Elaborada dicha ley bajo la influencia de un pensamiento económico, deja entrever con claridad la idea constante á que obedecen sus disposiciones y que avasalla á veces otros principios dignos por su gravedad y trascendencia de la mas profunda atención. No son los infrascritos, los que desconocen la protección que debe conceder el legislador á los intereses materiales para fomentar la riqueza del país en todos sus ramos. Pero tampoco desean su exclusivo imperio en detrimento de otros principios salvadores de los intereses morales, de instituciones seculares y de la conservación de la sociedad⁸⁹⁴.

Las dificultades creadas como consecuencia de la rigidez anunciada en la normativa, en materia de reconocimiento y designación de derechos sobre las tierras en propiedad, no dejó satisfechos a los propietarios barceloneses quienes no cejaban en alegar dificultades a la hora de exponer la titulación correspondiente. Como se señalaba en la declaración de principios planteada en la Exposición remitida a la Reina Isabel: “Prohibida en virtud del art. 396 la admisión en juicio y en toda clase de expedientes de los documentos no registrados, no hay posibilidad de registrar un testamento anterior al año 1845, cuando el que haya de reclamar una herencia fundándose en él por haberse purificado á su favor una sustitución fideicomisaria, deba llenar este requisito, careciendo de los títulos y demás noticias y antecedentes que son indispensables para efectuar el registro de una universalidad de bienes”⁸⁹⁵. A estos problemas venían a añadirse otros que tenían que ver con la especificación en las medidas superficiales de las fincas, el levantamiento de planos para realizar las mismas, etc., lo que originaba una suerte de gastos no siempre practicable a todos los propietarios. Con todo ello, terminó por generalizarse un grado de preeminencia hacia los asientos de los registros, ya fueran éstos “ficticios, erróneos ó fraudulentos para prevalecer sobre los actos y contratos verdaderos y legítimos”⁸⁹⁶.

⁸⁹⁴ “Exposicion que los propietarios de fincas y derechos reales en ella suscritos, elevan á S. M. la Reina (Q. D. G.) con motivo de los perjuicios que irroga á la propiedad el cumplimiento de la nueva Ley Hipotecaria”, *Ibíd*em, pág. 49.

⁸⁹⁵ *Ibíd*em, pág. 54.

⁸⁹⁶ *Ibíd*em, pág. 50.

Todo el trabajo asociativo y reivindicativo se vio colmado por el éxito cuando a mediados del mes de marzo de 1863, una Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia modificaba distintos aspectos de la ley, en especial el mencionado artículo 389, reconociéndose en la misma el valor de la Exposición que poco antes había sido cursada a la Reina por el propio *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*. Además de la consideración hecha en favor de que toda documentación antigua escrita en otras lenguas fuera acompañada de una traducción en castellano, con el fin de mejor dilucidar los títulos y escritos que hicieran referencia, tanto a propiedades como a haciendas, la citada Orden se refería también a las puntualizaciones desarrolladas en relación al artículo 389 de la mencionada Ley Hipotecaria en los siguientes términos:

S. M. se ha servido resolver: 1.º Que para cumplir con el artículo 389 de la ley hipotecaria no es necesaria la inscripción de todos los títulos que conserven en sus archivos los actuales poseedores, y si solo el último, el inmediato que acredite su derecho: 2.º Que el que posea como heredero único, no tiene necesidad de presentar mas que el testamento del que derive su derecho, con el inventario de los bienes inmuebles, formalizado de modo que puedan cumplirse las disposiciones de la ley hipotecaria⁸⁹⁷.

La publicación de las distintas Reales Órdenes que enmendaban la Ley Hipotecaria reforzó el carácter corporativo de la Institución de propietarios catalanes, sirviendo como acicate en todo aquello que estaba relacionado con la asociación en el medio agrícola y rural. El mismo presidente, conde de Fonollar, se mostraba exultante al comprobar los efectos que habían tenido las presiones al Gobierno durante los meses desde que viera la luz la citada ley. En este sentido manifestaba su opinión: “Dígase ahora si algo vale el principio de asociación: dígame si las agremiaciones, como la del Instituto Agrícola Catalan, están llamadas á reportar ventajas de gran valor á los intereses que con la mayor constancia viene defendiendo de doce años á esta parte, época de su creación”⁸⁹⁸.

A propósito de las consecuencias inminentes, una vez subsanada la Ley Hipotecaria y aceptada ésta por la clase propietaria, el Consejo de Estado comenzó a esbozar un Reglamento con la intención de que pudiera

⁸⁹⁷ Ibídem, pág. 75.

⁸⁹⁸ Ibídem, pág. 74. Véase también *RIACSI*, Cuaderno 5, mayo de 1921, pág. 5.

regularse el crédito territorial en España a través de sociedades concebidas para tal fin. A esta tarea se unió muy pronto la Comisión Directiva del *Instituto Agrícola*, quien a través de una nueva Exposición dirigida a la Reina, recordaba la necesidad de garantizar y atender mediante asociaciones de propietarios con carácter de mutualidad las necesidades crediticias en condiciones favorables y bajo interés para los asociados⁸⁹⁹.

Igual que sucediera en etapas anteriores, las manifestaciones de solidaridad y proximidad con otras asociaciones de propietarios y agricultores siguieron sucediéndose en los años de presidencia de José María Despujol. El interés por los derechos sobre la propiedad rural prosiguió significándose a través de la correspondencia y de las distintas secciones publicadas en la *Revista del Instituto*, llegándose en algunos casos a promover colaboraciones con diversas Sociedades Económicas de Amigos del País, además de hacerlo con la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, el *Círculo de Labradores y Propietarios* de Sevilla, o la *Asociación General de Labradores* que, como veremos más tarde, hacía poco tiempo formaban parte del moderno mapa asociativo que comenzaba a perfilarse en algunas provincias del país⁹⁰⁰.

En los años 1862 y 1864, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* promovió sendas reuniones de propietarios y labradores en las poblaciones de Reus y Lérida, con el fin de organizar diferentes concursos y exposiciones agrícolas. Esta dinámica que se venía produciendo desde 1861, llegó a generalizarse relativamente pronto en Cataluña, teniendo lugar también en otros municipios como Figueras, Manresa y Tarragona. Las reuniones organizadas por el *Instituto* catalán servían de nexo entre la clase propietaria más organizada y la multitud de agricultores dispersos entre las distintas comarcas que acudían a los locales destinados a las Exposiciones con los productos de sus tierras, maquinaria e instrumentos de labranza. Entretanto, se organizaban los distintos actos por parte de las autoridades, comisionados y expositores, se producían ensayos con arados, prácticas con injertos en árboles, etc., realizados generalmente en fincas que los socios ponían a disposición del *Instituto* para tales fines⁹⁰¹. Los actos finalizaban con algún banquete, música y bailes, después de haber dedicado varios días

⁸⁹⁹ *Ibidem*, págs. 149 a 157.

⁹⁰⁰ *RIACSI*, Tomo XI, Barcelona, 1862, pág. 69, y *RIACSI*, Tomo XII, Barcelona, 1863, págs. 67, 68 y 85.

⁹⁰¹ *RIACSI*, Tomo XI, Barcelona, 1862, págs. 234 y 235.

a celebrar reuniones y entablar discusiones sobre las formas de perfeccionar la agricultura, la conveniencia de sustituir cultivos, o animar a las familias agrícolas a sumarse a la Sociedad a través de las diferentes Subdelegaciones repartidas por la región⁹⁰².

A la Junta presidida por el conde de Fonollar le correspondió el honor de haber participado en la Exposición Universal de París, a la que se enviaron ochocientas muestras de productos de cultivo y de la industria agrícola de Cataluña, concurriendo más de centenar y medio de socios. La difusión de la enseñanza agrícola continuó formando parte del *Instituto*, inaugurándose una nueva cátedra de Geología a la que también concurrirían numerosos agricultores⁹⁰³.

Después de quince años de presencia entre la colectividad de propietarios agrícolas catalanes, en 1866 fue llamado a presidir el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* Miguel de Foxá, tras haber desempeñado distintos cargos en el mismo y haber formado parte de la primera Junta que lo viera nacer. Junto a Mariano Fages de Sabater, Secretario entonces de la Institución, se iniciaron los primeros trabajos para la instalación de un laboratorio químico, imprimiendo, además, un fuerte impulso a la Biblioteca con la adquisición de nuevas obras agronómicas, algunas de un destacado valor técnico y material⁹⁰⁴. En la breve etapa de presidencia, Foxá desempeñó un reconocido papel en la viticultura, promoviendo un largo y minucioso estudio de los vinos catalanes con el fin de que éstos pudieran abrirse paso en los mercados extranjeros, compitiendo con los de otros países europeos. En esta última tarea, y gracias a los esfuerzos llevados a cabo por el entonces recién estrenado laboratorio de química, pudo practicarse una apreciable clasificación y registro de los vinos, organizándolos por comarcas y determinando en cada caso las características de su producción⁹⁰⁵.

En marzo de 1867 la Revista del *Instituto Catalán* se hacía eco de la fundación del *Casino de Labradores* de Lloches a cargo del párroco de la

⁹⁰² Una descripción bastante detallada de lo que significaba una reunión de estas características puede encontrarse en la *RIACSI*, Tomo XIII, Barcelona, 1864, págs. 265 y siguientes.

⁹⁰³ *RIACSI*, Cuaderno 5, mayo de 1921, pág. 5.

⁹⁰⁴ Maspons i Camarasa, Jaume, ob. cit., pág. 549.

⁹⁰⁵ *Ibíd.*, págs. 7 y 8.

localidad, como “un ejemplo de imitarse, pues así se instruyen por la lectura de las obras suscritas en común y las conferencias que se establecen”⁹⁰⁶. Antes de 1868, otro intento para crear una sociedad agrícola en Madrid iba a ser igualmente celebrado por la institución catalana. Se trataba de una asociación en cuyo afán estaba reunir a un importante número de grandes propietarios, cuyo ánimo era de contribuir a difundir los conocimientos agrícolas, popularizando para ello el uso de máquinas en las faenas del campo. Con la idea de prescindir de todo apoyo externo procedente de las instituciones y del Gobierno, la Asociación dejaba claro que “obrará con entera independencia, sus propios recursos le bastarán para llenar su objeto, evitando de esta manera el escollo en que aquí caen generalmente todas las sociedades de emulación y fomento por tener que sujetarse á los trámites de nuestra centralización”⁹⁰⁷. El ambicioso proyecto se justificaba en las páginas de la Revista y, al mismo tiempo, precisaba la forma en que se instruiría a quienes pusieran su empeño en el desarrollo de la agricultura.

Para realizar esta idea, la asociación adquirirá modelos de todas clases y traerá del extranjero inteligentes obreros, prácticos en el uso de todos los instrumentos y encargados á la vez de instruir á nuestros jóvenes en su manejo, conservacion y reparacion, inconvenientes principales que hoy ofrece la introducción de dichas máquinas. Organizada en secciones, cada una de las cuales tendrá un ejemplar de las principales máquinas é instrumentos, recorrerán todas las provincias de España, ensayándolas á presencia de todos los labradores que lo deseen, explicando minuciosamente su mecanismo, sus ventajas, su valor, los medios de adquirirlas, y por último, instruyendo convenientemente á los jóvenes de cada localidad que demuestren buenas condiciones para el objeto⁹⁰⁸.

Hechas todas estas precisiones, podemos suponer que la personalidad y el carácter del *Instituto Agrícola Catalán* ya estaban conformados a finales de la década de 1860. Como en su día afirmara Camarasa, sería interminable mencionar la actividad del mismo si se tienen en cuenta las manifestaciones, exposiciones e informes trasladados a la Administración que tenían que ver entonces con temas tan influyentes como la educación, la divulgación de nuevas prácticas y herramientas en la agricultura, la

⁹⁰⁶ RIACSI, Tomo XVI, Barcelona, 1867, págs. 66 y 67.

⁹⁰⁷ *Ibidem*, pág. 360.

⁹⁰⁸ *Ibidem*.

legislación tributaria, los tratados de comercio, etc. A este mismo empeño, el de redoblar esfuerzos en todo aquello que estuviera relacionado con la producción agrícola y el desarrollo de la propiedad en el mundo rural, se vio avocado el *Instituto* cuando comenzaron a surgir indicios sobre una eventual liberalización del mercado de cereales. Esta situación terminaría por abrir un nuevo escenario reivindicativo, tanto para el *Instituto* como para el resto de grupos participativos, que preludiaban un daño grave en sus vacilantes economías. La pugna surgida entre propietarios y Gobierno a raíz de los intentos por revisar la política de aranceles en España, impulsó la aparición de corporaciones y sociedades de propietarios que, sujetos al mundo rural, no tardaron en comprender, tal y como sucedería con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, la conveniencia de practicar el doble juego consistente en desaprobar desde la asociación y reivindicar en Madrid.

- Trigos y aranceles. Presión y representación. La Comisión Permanente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro en Madrid

La respuesta por parte de la Comisión Directiva al Real Decreto del 12 de mayo de 1853, por el que se dispensaba del pago de derechos de aduana a 456 artículos a su entrada en España, fue inmediata. Publicado el 21 de ese mismo mes, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* preparaba ya en esos días un texto que, presumiblemente debía dirigir a la Corona, con el fin de expresar los grandes perjuicios que su aplicación podía redundar a una parte de la agricultura⁹⁰⁹.

A la vista de las opiniones que comenzaban a significarse en una parte de la opinión pública y del Estado en relación a la reforma arancelaria, las primeras voces reclamando la formación de una comisión permanente en la capital de España no se hicieron esperar, tratándose por primera vez en febrero de 1854⁹¹⁰. Para los propietarios que conformaban el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, tal y como se recogía en la Revista: “El punto de apoyo del Instituto ha de ser una comisión permanente en la Corte, que compuesta de propietarios ilustrados, de arraigo y reconocida moralidad,

⁹⁰⁹ *Gaceta de Madrid*, sábado 21 de mayo de 1853. La exposición de motivos del Instituto Agrícola en RIACSI, Tomo II, Barcelona, 1853, pág. 18.

⁹¹⁰ RIACSI, Tomo II, Barcelona, 1853, pág. 242.

como los que representan al de San Isidro, puedan contar con el asentimiento de todas las provincias, con la opinion general y gestionar con el lleno de fuerza que comunica la influencia de una gran asociacion”⁹¹¹. En el sentir de los socios destacaba la idea de evitar la formación de comisiones idénticas en otras asociaciones de parecidas características, ya que según aquéllos: “La formacion de muchas comisiones semejantes representando á varios Institutos, no presentarian la misma compactibilidad ni la misma energía de accion”⁹¹².

Apenas transcurridos tres años de existencia del *Instituto Agrícola*, la presencia de una delegación cerca del Gobierno, la Monarquía y las Cortes, que pudiera influir en todo lo relacionado con los intereses de los propietarios rurales de la Asociación, quedó evidenciada como uno de los temas que más provecho podría procurar a la Institución. Como muy bien recordaba Caminal, en las circunstancias de aquellos momentos se hacía necesario adquirir los beneficios de una comisión que, organizada de forma permanente en Madrid por personas cuya condición de propietario estuviera ligada al peso y la influencia política necesaria, repercutiera en los intereses que la propia Institución necesitaba⁹¹³.

El deseo de quienes conformaban el *Instituto* se fue haciendo más incuestionable, llegándose a argumentar en la Junta General del 16 de mayo de 1854, y en boca de su Secretario, que la “acción debía penetrar hasta el corazón de España”⁹¹⁴. Formada por personas de alta posición social, al mismo tiempo que de una reconocida trabazón por la agricultura, tal como se había acordado en la Junta, fueron propuestos en primera instancia el duque Veraguas, el marqués de Vallgornera, el también marqués de Vallehermoso, el conde de la Oliva, el diputado a Cortes Ángel de Villalobos, así como el abogado y propietario Pedro de Vedruna. La Comisión permanente establecida en Madrid quedaría establecida oficialmente el 24 de

⁹¹¹ RIACSI, Tomo II, Barcelona, 1853, pág. 281. En este sentido, recuérdese lo apuntado más atrás para el volumen II de la citada Revista, ya que la «Crónica agrícola» a la que nos referimos, y que recoge la necesidad de establecer una comisión del *Instituto* en Madrid está fechada el día 28 de febrero de 1854.

⁹¹² *Ibidem*.

⁹¹³ Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 126. También en Maspons i Camarasa, Jaume, ob. cit., pág. 553.

⁹¹⁴ La frase está recogida de la intervención en la citada Junta General Ordinaria de Andrés de Ferran, Secretario de la Comisión Directiva del *Instituto Agrícola Catalán* en esos momentos. RIACSI, Tomo II, Barcelona, 1853, pág. 370.

febrero de 1855. A lo largo del tiempo, y a la misma, se irían sumando diputados, senadores, miembros de la nobleza, siendo presididos hasta su muerte en 1864 por el marqués de Vallgornera, y posteriormente por el marqués de Monistrol. Casi simultáneamente se creó una agencia formada por personas vinculadas al Derecho, cuyo fin era el asesoramiento de los socios, así como la gestión de los asuntos que debía llevar en Madrid la Comisión⁹¹⁵.

En los primeros días de 1856 se retomó la cuestión sobre los aranceles, publicándose un artículo en la *Revista* en la que se ilustraba sobre las dificultades administrativas que planteaba la aprobación de una ley referida a dicho asunto. En opinión de la Asociación catalana, de producirse la libre entrada en España de trigos extranjeros, los beneficios en todas aquellas clases y personas que estuvieran al margen de la producción del mismo serían evidentes. La bajada del precio del pan daría lugar a la ruina de la agricultura del país “porque vendrían trigos de países que por las condiciones especiales en que se hallan, podrían ponerlos en nuestros puertos, á un precio que á nosotros no nos pagaría los gastos del cultivo”⁹¹⁶.

De acuerdo con esta línea de pensamiento económico, y a diferencia de las posturas librecambistas, la libre importación de materias y productos para la industria y la agricultura, siempre en opinión del *Instituto*, terminarían dañando los diferentes ramos de la riqueza, aunque beneficiando a sectores instalados al margen de la producción en lo concerniente a materias primas y cultivos⁹¹⁷.

Con la llegada al Ministerio de Hacienda del progresista Juan Bruil, se puso en marcha el ya mencionado proyecto de reforma arancelaria, cuyos efectos debían incorporarse a los presupuestos de 1856. Como no podía ser

⁹¹⁵ Ibídem, págs. 281 y 370. Véase también Caminal i Badia, Monserrat (1989), ob. cit., pág. 126.

⁹¹⁶ RIACSI, Tomo IV, Barcelona, 1856, pág. 193.

⁹¹⁷ Firmado bajo las iniciales de R. C., el artículo titulado “Aranceles”, se refería así a los daños que acarrearía una libre disposición en la entrada de productos desde el exterior: “Si las leñas y maderas forasteras pudieran introducirse sin que se les exigiese derecho alguno, se comprarían aquellas á un precio mas módico, pero quedaría perjudicado el valor de nuestros bosques y plantaciones. La libre importación del hierro sería ventajosa para los que elaboran este mineral y podrían dar estos sus artefactos mas baratos, pero sería á costa de los que explotan las minas que lo producen. La de los hilados beneficiaría á los tejedores, pero sería en perjuicio de los que se dedican á aquella industria y á los productos de lino y cáñamo; asi como la de los tejidos, podría ser ventajosa para los pintadores aunque á costa de los que tejen”, Ibídem.

de otra forma, desde la doctrina asociativa adherida al *Instituto Agrícola*, se participó al Gobierno de la Nación a que realizara consultas dentro de las corporaciones provinciales, caso de las *Económicas del País*, Juntas de Agricultura y Comercio, etc., con el fin de recabar todos aquellos datos acerca de la conveniencia o no de alterar los aranceles vigentes. A ellas debían unírseles las opiniones de todos los afectados para así resolver con mayor acierto los intereses de las clases productoras. Sin embargo, estas circunstancias, ya con los presupuestos aprobados a finales de 1855, no llegaron jamás a producirse⁹¹⁸. Así, en enero del año siguiente, a la mayoría de propietarios rurales catalanes solo les restó lamentarse por la falta de sensibilidad mostrada hacia las asociaciones agrícolas, en especial a los intereses que el *Instituto* representaba, y a la escasa voluntad esgrimida por el nuevo ministro, excepción hecha de la Junta recientemente creada por el Gobierno, cuyo propósito había sido asesorar a éste en todo aquello que estuviera referido a la cuestión arancelaria.

Concediendo á los señores que compusieron esta junta, toda la inteligencia y patriotismo que se quiera, es imposible reunieran todos los conocimientos prácticos y tuvieran las noticias de localidad que se necesitan para obrar con acierto en materia tan trascendental y complexa. El resultado ha sido, que no bien el Sr. Ministro de Hacienda ha presentado á las Córtes el proyecto de ley de aranceles, de todos los ángulos de la monarquía se han dirigido esposiciones á aquellas, manifestando los daños que les irrogaria el planteamiento de la espresada ley en los términos en que está concebida⁹¹⁹.

El proyecto de ley presentado a las Cortes en noviembre de 1855 por el ministro Bruil, obligó al *Instituto Agrícola Catalán*, una vez más, a dirigirse a las Cortes para advertir a las mismas y al Gobierno de los serios perjuicios directos que produciría a la agricultura catalana, además de los que afectarían con el tiempo, y de un modo indirecto, tanto a los productos agrícolas como a distintas materias primas utilizadas en la fabricación⁹²⁰. Los elevados precios del trigo, ya comentados más atrás, originados en los mercados británicos a mitad de la década de 1850, determinaron un nivel favorable de exportación de granos hacia el exterior, tranquilizando por momentos los ánimos de productores y propietarios en España. No obstante,

⁹¹⁸ *Ibidem*. Sobre el proyecto de Juan Bruil, una explicación en Montañés, Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 196.

⁹¹⁹ *RIACSI*, Tomo IV, Barcelona, 1856, págs. 193 y 194.

⁹²⁰ *Ibidem*, pág. 245.

la tendencia que desde el año 1853 se había venido produciendo en relación al incremento moderado de los precios del trigo, además de motivar la referida actividad exportadora, produjo fuertes tensiones en algunos mercados interiores, así como asaltos a panaderías y almacenes, bloqueos de los transportes de granos desde el interior peninsular y, consiguientemente, decididos movimientos de protesta de las clases no productoras ante los problemas de abastecimientos y de carestía que comenzaban a provocar las exportaciones⁹²¹.

Se comprende, atendiendo a las circunstancias antes explicadas, que apenas encontremos referencias a las preocupaciones arancelarias en la *Revista del Instituto* hasta la segunda mitad del año 1857. La prórroga decretada aquel mismo año hasta el 31 de diciembre, en relación a la libre importación de granos, provocó la publicación de un extenso artículo titulado “La libre importación de cereales”, desde el que se hacía un claro alegato en defensa de los intereses de los propietarios productores al relegar a un segundo plano las razones que atendían consumidores y partidarios del sistema librecambista. Entre el puñado de argumentos expresados por Manuel de Casanova en relación a los perjuicios del comercio libre de cereales, el mismo se refería a este asunto en los siguientes términos:

Los consumidores, dicen, pagarán el trigo mas barato. Ciertamente: pero esto sucederá á costa de los intereses de la agricultura, y á costa de los mismos consumidores á quienes se trata de favorecer; porque si los labradores deben vender sus granos á tan bajo precio que no queden reembolsados de sus gastos necesarios abandonarán el cultivo de los campos y quedarán sumidos en la ruina⁹²².

Las medidas adoptadas en Madrid provocaron todo un despliegue de respuestas en Barcelona que culminaron en junio de 1858 con una Exposición dirigida a la Reina, a quien hacía escasos meses se había

⁹²¹ En efecto, la situación favorable provocada por los altos precios del trigo, consecuencia del cierre de los puertos de Crimea, dieron lugar a beneficios muy significativos para propietarios, labradores y comerciantes de cereales en el interior, provocando igualmente una carestía considerable y un alza en los precios de los alimentos que repercutiría muy pronto en las clases con menores rentas. Un buen extracto de lo sucedido en Montañés, Primicia, Enrique (2009), ob. cit., págs. 206 a 206.

⁹²² RIACSI, Tomo VII, Barcelona, 1858, pág. 164.

nombrado Socia Protectora de la Institución⁹²³. La realidad era que apenas unos meses antes de dar por finalizada la última prórroga autorizando la importación de trigos, los propietarios agrícolas habían comenzado a movilizarse en distintas regiones del país. De este modo, desde Sevilla, otra Exposición enviada por la Diputación de aquella provincia expresaba el deseo de volver a un régimen prohibicionista, junto con la petición de que se acelerara la suspensión todavía vigente sobre la libertad de importación de granos. De llevarse a la práctica, la anulación debía realizarse antes de que comenzaran las tareas de la última cosecha, evitando de ese modo que los precios del trigo continuaran su descenso y, en consecuencia, impidiendo la pérdida económica que suponía para los agricultores⁹²⁴.

El *Instituto Agrícola* presentó una serie de Exposiciones cargadas de dramatismo, ante las que solo cabía rendirse a la evidencia manifestada por los propietarios. Desde este punto de vista, la primera de las misivas remitida a Isabel II contenía exhortaciones tan objetivas como las siguientes: “Y en su día, clamará, Señora, el quejumbroso lamento del que no pide mas que pan, con el deseo de acallar la voz de los que solo ponen su empeño, en que ahora el pan se abarate, sin calcular los azares á que el porvenir pueda conducirles”⁹²⁵. Con el declive en los precios de cereales y harinas, era evidente que los beneficios de los grandes terratenientes y hacendados de todo el país quedaban sometidos a las decisiones del Gobierno y las Cortes.

Otras de las razones esgrimidas desde Barcelona era el desequilibrio que venía produciéndose entre el precio del grano y los jornales. En su descargo, el *Instituto Agrícola Catalán* aducía un aumento del cincuenta por ciento en tan solo cinco años. Así, mientras los beneficios caían entre las clases propietarias y agricultoras, éstas debían afrontar las subidas, tanto en los gastos directos producidos sobre los cultivos como en las contribuciones territoriales, sin olvidar las cargas que ocasionaba las tasas de consumos. En solo un año, tal y como manifestaba la Comisión Directiva, el precio medio de los granos en la Península habían pasado de algo más de setenta y siete reales la fanega a cuarenta y cuatro. Esta situación, citando una vez más la misma Exposición dirigida a la Reina, debía resolverse

⁹²³ Con fecha 5 de noviembre de 1857, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* concedió a S. M. la Reina Isabel II, el título de Socia Protectora de dicha "asociación filantrópica". Ibidem, págs. 58 y 59.

⁹²⁴ Garrabou, Ramon (1980), pág. 336.

⁹²⁵ RIACSI, Tomo VII, Barcelona, 1858, pág. 169.

consolidando disposiciones anteriores que impedían la importación, en tanto no se alcanzaran unos precios concretos por fanega.

Así que el Instituto, cuyas aspiraciones ni son ni pueden nunca ser las de que la clase menesterosa no coma el pan barato, sino que se concilien los intereses de esta con los de la productora; vería satisfactoriamente la fiel observancia de una legislación que ya á principios del año 1834 recibió cierto carácter de fijeza, declarando libre la venta y compra, negociación y tráfico de todas las semillas alimenticias, pero determinando al propio tiempo que quedase subsistente la prohibición de importarlas del extranjero, mientras no llegara á setenta reales la fanega de trigo, que era el que debía servir como de tipo regulador para los demás granos⁹²⁶.

Con la nueva prórroga que retrasaba hasta el 30 de junio de 1858 la libre entrada de cereales, las movilizaciones del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* se materializaron en forma de circulares a todas y cada una de las subdelegaciones, explicando la manera en la que podía afectar a la formación de los amillaramientos. La libre introducción de trigo, harinas, cebada, maíz y otras semillas alimenticias de países extranjeros afectaba, en efecto, a la relación nominal de los bienes imponibles de los contribuyentes, provocando una depreciación en el valor de los mismos. Así, el *Instituto* recomendaba a las subdelegaciones: “averiguar con exactitud el tipo continuado en los amillaramientos por lo que respecta á las semillas referidas; á fin de que reunidas estas noticias y demás que se crean conducentes, pueda instruirse el oportuno expediente y pedir en consecuencia al Gobierno de S. M. lo que mas interese en beneficio del país”⁹²⁷.

En 1858, la propuesta para liberalizar el comercio de trigo realizada por la Junta de Comercio de Cádiz hizo que aumentara, aún más si cabe, el debate sobre la oportunidad de mantener o retirar la legislación prohibicionista. El *Instituto Agrícola* planteó entonces el asunto desde una perspectiva de oportunidad, cuestionando la política de importaciones, al tiempo que se preguntaba: “¿A que ampliar la importacion de granos antes

⁹²⁶ Como consecuencia de la escasez, el Gobierno acudió a dicha regulación prohibiendo la exportación de cereales en el transcurso del mes de marzo de 1857. *Ibidem*, págs. 169, 176 y 177.

⁹²⁷ *RIACSI*, Tomo VII, Barcelona, 1858, pág. 178.

de saber lo que cosechábamos?”⁹²⁸. Para los socios catalanes, los bajos precios de los cereales no estaban en proporción con los jornales agrícolas, hecho que ponía en peligro muchas explotaciones agrícolas si no se alcanzaba a compensar los gastos de las mismas. Para ello, los valores en los mercados, principalmente los del trigo, no podían seguir cayendo.

No es una casualidad que la moratoria reconociendo la libre importación de granos hasta junio de 1858, fuese igualmente contestada por la *Sociedad Económica* de Barcelona en unos términos muy parecidos a los que había manifestado el propio *Instituto Catalán*. En la Exposición remitida por aquélla a la Reina se advertía la escasa o nula necesidad que existía por parte de las autoridades de comprar trigo en el exterior, argumentando el acopio realizado ese año tras la última cosecha. Los propietarios de los *Amigos del País* en Barcelona presentaban a la Soberana una cuestión que parecía evidente: “¿Pero á caso hay algun motivo fundado para prórogar la importacion de granos? ¿Se teme por ventura escasez y carestía en los mismos?”. Además, esgrimían graves inconvenientes a las normas liberalizadoras en el siguiente sentido:

Y demuestran tambien los peligros que ofrecen y perjuicios que resultan de estas disposiciones cada dia repetidas abrazando un corto término, porque esta inseguridad continua de la ley trae consigo la vacilación de los productos y del comercio. Estudiéase la cuestión, dése otra ley reguladora á estilo de la del año de mil ochocientos treinta y seis que abraza todos los casos y circunstancias y sálgase de una vez de ese estado de cosas, cuya inseguridad es un manantial perenne de sobresaltos y de agios que matan la producción y el comercio⁹²⁹.

A las reivindicaciones de los propietarios catalanes se unieron enseguida otras procedentes de Zaragoza y Sevilla, en demanda de un cambio en la legislación que permitiera avanzar en materia de protección a los trigos nacionales, a lo que se sumaba el deseo de abandonar una

⁹²⁸ *Ibidem*, pág. 185.

⁹²⁹ *Ibidem*, págs. 195 y 196. Las dificultades y alarmas causadas por los precios del trigo quedó recogida en la mayoría de diarios y de la prensa escrita nacional. Véase, por ejemplo, el *Eco de Salamanca*, número 15, domingo 6 de junio de 1858; *El Clamor Público*, números 4.170 y 4.260, correspondientes al martes 25 de febrero y jueves 10 de junio de 1858, respectivamente; *La Discusion*, número 739, jueves 22 de junio de 1858; *La Época*, número 2.846, miércoles 9 de junio de 1858, o *La España*, número 3.773, viernes 13 de agosto de 1858.

reglamentación que había estado rigiendo la política cerealícola durante los últimos 24 años. Conscientes de las dificultades y sin menoscabar el interés de los propietarios por concertar los intereses de éstos con los consumidores, la Junta de Agricultura de Sevilla se había manifestado en este sentido, argumentando que: “el libre cambio en materia de cereales, no puede ser hoy por hoy, mas que un deseo, una aspiracion que al presente no puede convertirse en realidad”⁹³⁰.

Desde las páginas de la *Revista*, publicada por el *Instituto Agrícola* en Barcelona, y de *La Agricultura Española* en Sevilla, se había incitado a una protesta colectiva, publicando el célebre artículo de José Benavides “Cruzada contra la Agricultura Nacional“, ante la que, en opinión de las clases propietarias, el Gobierno no hacía sino contribuir a acrecentarla al permitir la entrada de cereales desde el extranjero⁹³¹. El artículo, con su desabrido lenguaje, consiguió aglutinar a una parte muy importante de la opinión en Cataluña y Andalucía, dando lugar a una Exposición que los labradores sevillanos remitirían en febrero de 1859 a la Reina, en contra de las medidas que, en materia de importaciones de trigo, seguían manteniéndose en el país⁹³².

Tampoco se demoró la reacción de los diputados catalanes en Madrid, acudiendo, tal y como se relataba en la *Revista*: “unánimes y conformes, si se esceptua alguna individualidad, en corresponder á los deseos que les tiene manifestados el Instituto”⁹³³. En conformidad con otros diputados y senadores que ya habían mostrado con anterioridad su interés por el problema del trigo, se aceptó una iniciativa del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* para crear una comisión que sirviera como centro protector en Madrid en todas aquellas cuestiones que afectaran a la defensa de los intereses de propietarios y agricultores. En la primera delegación figuraban los nombres del senador Ignacio Vázquez y del conde de Peñaflor, este último diputado a Cortes, ambos en representación de la provincia de Sevilla; del conde de Ripalda, comisario regio de agricultura y del propietario Juan Bautista Tamari, representantes por Valencia; Carlos Manuel Calderón y

⁹³⁰ RIACSI, Tomo VIII, Barcelona, 1859, pág. 14.

⁹³¹ El artículo titulado "Cruzada contra la Agricultura Nacional" ya fue citado con anterioridad en la nota a pie de página 788

⁹³² RIACSI, Tomo VIII, Barcelona, 1859, págs. 66 a 72.

⁹³³ *Ibidem*, pág. 77.

José Luis Riquelme por la provincia de Granada; del marqués de Castellanos y Cayetano de Zúñiga, senadores por Salamanca; del diputado José Alfaro y del vocal de la Junta de Agricultura, representantes por la provincia de Albacete; Manuel Guillamas y Lorenzo Moratinos, vizconde de Villandrando por Palencia. Por último, cerraban la lista Claudio Moyano y el diputado por Zamora, el marqués de Santa Cruz de Aguirre⁹³⁴.

Desde Barcelona se esperaba que la lista de adheridos a la causa agrícola fuera en aumento. Como muy bien señalaba la *Revista* en 1859: “Confiamos que no serán estos los últimos nombramientos que se reciban: pero de todos modos podemos contar ya que agregándose á ellos los representantes del Instituto, del cual parte la iniciativa, y los de las demás provincias catalanas, se obtendrá el establecimiento de un núcleo protector sumamente respetable, cuya opinión influya con su peso á inclinar la balanza del lado en que se sostienen los verdaderos intereses del país”⁹³⁵. La realidad es que en mayo de aquel mismo año quedó finalmente constituido el denominado *Centro Protector Agrícola*, integrado por representantes de 17 provincias españolas (véase el cuadro 24). Una colectividad que era, al fin y a la postre, el resultado del esfuerzo efectuado por el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*⁹³⁶.

A través del marqués de Vallgornera y Pascual Madoz, socios del *Instituto*, el Centro acogía los razonamientos de los propietarios de Cataluña. Presidido por el primero, las reuniones inaugurales abordaron la cuestión de los cereales, acordando en una extensa memoria las actuaciones que debían ponerse en marcha. El agradecimiento de la Asociación se hizo extensible a todos los delegados que habían decidido prestar su apoyo a la causa proteccionista a través de unas líneas publicadas en la *Revista*. En ella se expresaba el reconocimiento del siguiente modo: “El Instituto felicita á las provincias que han mandado sus comisionados por la eficaz cooperacion que en la presente ocasión le han prestado: y son para él una garantía de buen éxito los esfuerzos reunidos de tantas personas eminentes por su saber, por su posicion y por los muchos títulos que tienen adquiridos á la pública estima”⁹³⁷.

⁹³⁴ *Ibidem*, pág. 78.

⁹³⁵ *Ibidem*.

⁹³⁶ *Ibidem*, pág. 106.

⁹³⁷ *Ibidem*, pág. 107.

CUADRO 24

Representantes del Centro Protector Agrícola

Provincia	Representantes
Albacete	[José Alfaro (Diputado) Ramon Agraz (Vocal de la Junta de Agricultura)
Barcelona	[Marqués de Vallgornera Pascual Madoz
Castellón	[Miguel Alegre (Diputado) José Pol (Diputado)
Córdoba	[Marqués de Guadalcazar (Senador) Marqués de Campo-Alegre (Senador)
Granada	[Carlos Manuel Calderon José Luis Riquelme
Huelva	[Manuel Calonge (Senador) Luis Hernandez Pinzon
Jaén	[Francisco Serrano Dominguez José Ignacio Coello Marqués de Acapulco
Lérida	[Pascual Madoz Andrés Abades
Málaga	[Melchor de Ordoñez José del Rio
Palencia	[Manuel Guillamas Lorenzo Moratinos, vizconde de Villandrando
Salamanca	[Marqués de Castellanos (Senador) Cayetano de Zúñiga (Senador)
Sevilla	[Ignacio Vazquez (Senador) Conde de Peñaflor (Diputado)
Soria	[Baltasar Luengo (Diputado) Joaquin Nuñez de Prado (Diputado)
Valencia	[Conde de Ripalda (Comisario Regio de Agricultura) Juan Bautista Tamarit y Vices (Propietario)
Valladolid	Sus diputados
Zamora	[Claudio Moyano (Diputado) Marqués de Santa Cruz de Aguirre (Diputado)
Zaragoza	[Benito Ferrandez (Diputado) Luis Franco y Lopez (Diputado)

FUENTE: *RIACSI*, Tomo VIII, Barcelona, 1859, pág. 106.

A finales de 1859, los artículos sobre las cuestiones arancelarias o relativas a los cereales fueron incrementándose sensiblemente en la *Revista del Instituto*. De hecho, la práctica totalidad de los números publicados contenían alguna mención o referencia a la cuestión del trigo y a la preocupación por una posible modificación en los aranceles. El problema llegó a adquirir tintes de lo que parecía ser un reclamo gremial, y que en gran medida podía seguirse en las páginas de la prensa nacional. Del mismo modo, el trigo acabó convirtiéndose en el elemento catalizador, tanto de las protestas como de las demandas al Gobierno, a menudo en unos términos que se aproximaban más a una especie de apostolado, empujado en muchos casos por el *Instituto Agrícola* en Cataluña y por algunas de las asociaciones que, a finales de los años sesenta, ya comenzaban a asomar en ciertas regiones de España.

De esta forma, no debe extrañarnos que se realizaran auténticos alegatos a favor del trigo, dentro de lo que éste suponía para la política arancelaria, muchas veces tan expresivos como los que se editaban en la *Revista*. A modo de ejemplo, el socio y articulista Genaro Morquecho y Palma, justificaba así la necesidad de otorgar toda la protección al trigo:

El artículo trigo, por lo mismo que es el primero y el mas necesario para la pública alimentación, no puede mirarse como otro cualquiera del arancel. La prosperidad de la agricultura es la prosperidad del país en general. El trigo es y tiene que ser, con pocas escepciones, su base mas importante; y el abandono ó la disminución de su cultivo, ocasionaría desde luego pérdidas inmensas y un malestar de incalculable duración en las clases agrícolas, cultivadores y propietarios⁹³⁸.

El hecho no es casual si tenemos en cuenta los datos la producción de trigo en España durante la primera mitad del siglo XIX. Ésta pasó de 26,1 a 41,4 millones de hectolitros entre 1803 y 1858. La estadística oficial recogida recientemente por Juan Rivero Corredra nos muestra una producción de trigo superior a los 43 millones de hectolitros hasta los años 1860. La cantidad destinada en estos años al consumo de la población, ya fueran del

⁹³⁸ Ibidem, pág. 82. Sobre la importancia adquirida por el trigo entre los cultivadores españoles pueden consultarse, además, los distintos artículos publicados en *El Avisador Numantino. Revista semanal de intereses morales y materiales de la provincia de Soria*, número 5, domingo 29 de abril de 1860, pág. 3; *El Escla*, número 18, jueves 1 de marzo de 1860, y *El Museo Universal*, número 23, 15 de diciembre de 1857, pág. 197.

ámbito agrario, urbano o del litoral, ascendió a algo más de 34 millones de hectolitros. Si tenemos en cuenta el total de consumidores, aproximadamente unos 14 millones, el consumo calculado por persona y año se aproximaba a una cifra cercana a los 564 gramos diarios. Otra cuestión entonces era el elevado coste de la producción de trigo que, en cualquier caso, dependía de las dos zonas diferenciadas del país. Así, por un lado teníamos las regiones productoras del Centro y Sur, y las del litoral y el Este peninsular que eran predominantemente consumidoras. Esta cuestión complicaba sobremanera los precios finales del trigo como consecuencia del transporte, haciéndolo un producto para la alimentación inequívocamente caro⁹³⁹.

Las provincias ubicadas en el litoral peninsular eran las principales consumidoras de trigo y, por lo tanto, las que accedían de una forma más continuada a los mercados de cereales de las zonas productoras. Precisamente, tal y como se desprende de los trabajos de alguien que vivió muy directamente la situación, Genaro Morquecho y Palma afirmaba en 1860 que desde el Arancel aprobado en 1820, la agricultura dedicada al cereal en el interior español nunca había tenido más asegurado su comercio hacia los mercados costeros. En uno de sus artículos publicados en el periódico *La Unión*, se congratulaba de que “Cataluña, Valencia y Alcoy consuman el trigo de Andalucía y Castilla, para que Sevilla y Valladolid consuman las sedas de Valencia, los paños de Segovia, Béjar y Tarrasa, y los algodones de Barcelona”⁹⁴⁰.

Dentro de este mismo contexto, las zonas productoras en Castilla hacía tiempo que compartían el propósito de bloquear cualquier iniciativa que defendiera la entrada de cereales cuyo origen no fuera nacional. No en vano, y durante los primeros meses de 1859, se comenzaron a publicar en el *Norte de Castilla* una serie de artículos, todos ellos bajo el título de “La importación de cereales en España”, con el propósito de manifestar el malestar de los productores de trigo y, al mismo tiempo, mostrar así su

⁹³⁹ Hemos de tener en cuenta que para la época que estamos tratando, cada hectolitro representaba un peso de 77,5 kg, y cada kilogramo de trigo podía dar lugar, por lo general, a algo más de un kilogramo de pan. Estos datos han llevado a calcular un consumo medio de pan por persona, próximo a los 580 gramos al día. La información está extraída de Rivero Corredera, Juan, *Los cambios técnicos del cultivo de cereal en España (1800-1930)*, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2013, págs. 209 a 218.

⁹⁴⁰ Morquecho y Palma, Genaro (1860), ob. cit., pág. 266.

honda preocupación⁹⁴¹. Esta línea de argumentación expresada por los propietarios vallisoletanos, sirvió al *Instituto* para advertir el sentido «altruista» que envolvía los intereses de una parte importante de los agricultores en Cataluña. La propia *Revista* lo manifestaba así:

Cataluña misma, una de las provincias de España menos agricultoras, en relacion de su poblacion, y de las que tendria con mas ventaja tal vez que ninguna los trigos y harinas estrangeros, admitida la importacion, es la primera, como lo ha sido siempre, en rechazarla, no solo por amor patrio sino por espíritu de propia conservacion, porque admitida la libre entrada, pereceria su agricultura grane ó pequeña, y con ella tambien su industria, pues no hay dos clases de riquezas mas enlazadas mutuamente⁹⁴².

Aunque la *Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas* no llegaría a realizar su primera sesión pública hasta noviembre de 1860, lo cierto es que a mediados del año anterior, el *Instituto Agrícola Catalán* publicó un duro artículo de Manuel E. de Casanova contra el discurso de Luis María Pastor, pronunciado en Madrid, con ocasión de las jornadas celebradas para constituir una sociedad que pudiera defender los principios librecambistas. Los propietarios catalanes consideraban su deber rechazar “en nombre de la justicia y del bienestar general” las aspiraciones de quienes intentaban disminuir de manera progresiva los derechos de importación, suprimiendo las prohibiciones y estableciendo, en todo caso, tarifas fiscales⁹⁴³.

En apoyo de quienes prácticamente ya habían puesto en marcha una Asociación desde la que pudiera exigirse una amplia reforma arancelaria, acudieron una gran parte de quienes conformaban la Junta de Comercio en Cádiz. Durante las sesiones en el Congreso celebradas en el verano de 1859, comenzaron a distribuirse entre los diputados unos panfletos en los que se recogía la Exposición remitida a las Cortes en abril de 1858 por la Junta de Comercio gaditana, y en la que se solicitaba la libertad inalterable en la importación de cereales⁹⁴⁴. Sucesivamente, la *Revista* y el *Instituto* intentaron rebatir los argumentos que desde Cádiz intentaban librar a la

⁹⁴¹ De los artículos a los que se han hecho referencia, incluidos en el periódico vallisoletano, puede leerse una amplia síntesis en la *RIACSI*, Tomo VIII, Barcelona, 1859, págs. 109 a 111.

⁹⁴² *Ibidem*, pág. 110.

⁹⁴³ *Ibidem*, págs. 129 y 130.

⁹⁴⁴ El hecho está recogido por Morquecho y Palma en la *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, *Ibidem*, pág. 132.

producción de cereal del continuado proteccionismo que había mantenido hasta esos momentos. La Exposición fue tachada de «desdichada» y de estar «equivocadamente» redactada, situación que provocó la inmediata reacción del *Centro Protector* en Madrid⁹⁴⁵.

Los trabajos promovidos por el *Instituto* en la capital estaban dirigidos por el marqués de Vallgornera, a quien no tardaron en unírsele un grupo de propietarios con importantes responsabilidades políticas, con el fin de redactar un proyecto de ley sobre cereales que pudiera ser presentado al Gobierno en el menor espacio de tiempo posible. Al *Centro Protector Agrícola* acudieron el diputado barcelonés Pascual Madoz, el senador por Valladolid, Manuel de Guillamas, y Manuel Fuentes Andrés, diputado en esos momentos por la provincia de Burgos. Todos ellos, tal y como describía la *Revista* eran: “propietarios y algunos agricultores y cultivadores que, conociendo las necesidades de sus respectivas provincias y las del Reino en general, procurarán á no dudarle con su ilustrado celo, realzar la agricultura con las medidas protectoras que reclaman en su actual estado”⁹⁴⁶.

Con el inicio de los años sesenta y la firma entre Gran Bretaña y Francia del Tratado Cobden-Chevalier, la cuestión arancelaria volvió a reactivar el pulso entre partidarios y opositores al libre comercio. Las prerrogativas establecidas entre ambos países alteró los recelos en algunos sectores exportadores españoles, llevando incluso al Ejecutivo a plantearse una adaptación a lo que parecía ser un nuevo marco internacional sobre el comercio. Si bien es cierto que no existe un acuerdo unánime en relación a los efectos que produjo el tratado bilateral establecido entre las dos potencias, en España comenzó a crecer la idea acerca de la necesidad de reformar las leyes en materia de aranceles si no quería verse dañado el mercado exportador nacional⁹⁴⁷.

⁹⁴⁵ Los calificativos corresponden a otro de los artículos escrito igualmente por Morquecho y Palma, y publicado en septiembre de 1859. Ibidem, pág. 203.

⁹⁴⁶ Ibidem, págs. 199 y 200.

⁹⁴⁷ En efecto, el tratado franco-británico ha querido verse como un giro hacia una mayor liberalización en la economía internacional a partir de la fecha de su firma el 23 de enero de 1860. Un trabajo muy interesante en este sentido es el realizado por O'Rourke, Kevin H. y Williamson, Jeffrey G., *Globalización e historia. La evolución de una economía atlántica del siglo XIX*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, págs. 62 y siguientes. Por contra, también han insistido quienes han visto el acuerdo entre ambas potencias como un hecho nada concluyente para el resto de economías europeas, llevándolo a un concierto que apenas significarían la aprobación de medidas económicas parciales e independientes en cada país. En este sentido, resulta muy ilustrativo el artículo de los profesores de economía

Las dudas en el sector de la exportación recayeron, de alguna manera, en el Gobierno que, a través del su ministro de Hacienda, Pedro Salaverría, advirtió de la intención de presentar un proyecto de reforma arancelaria que respondiera a las eventualidades que se estaban produciendo en otros países. Unos cambios que, en palabras del propio Salaverría, se debían principalmente a los avances que algunas naciones venían desarrollando, tanto en sus relaciones comerciales como en la legislación aduanera⁹⁴⁸.

Junto a la propuesta incoada por el Ejecutivo, la nueva situación surgida en el exterior llevó a una primera línea reivindicativa a la *Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas*, celebrando una primera sesión pública el 25 de noviembre de 1860. En dicha reunión se acordó la remisión al Congreso de una Exposición conteniendo cuatro puntos, solicitando la reforma en las aduanas que buscara una reciprocidad con el resto de naciones, aboliendo el «monstruoso» derecho deferencial de bandera y eliminando todas las prohibiciones «atentatorias» al derecho de propiedad⁹⁴⁹. El texto incluía un denso informe comparativo entre las distintas legislaciones que en materia de aranceles mantenían vigentes algunos Estados tan diversos como Rusia, Francia, Suiza, Holanda, Grecia, Austria o Portugal, entre otros. Fue Martínez Monroy el más crítico con la legislación arancelaria, ridiculizándola y tachándola de despojo y de majadera, encontrando de esta forma el aplauso y las risas entre los partidarios de la reforma.

Por de contado, señores, que esta es acaso la primera vez que mis labios pronuncian la palabra protección: yo no he llamado nunca al sistema protector mas que despojo, despojo autorizado y garantizado hoy por el arancel que nos rige; ley, como suele decirse, del embudo, conjunto abigarrado de injusticias y de majaderías. (Aplausos y risas) Y, señores: si los

Accominotti, Olivier y Flandreau, Marc, en el que se oponen a la explicación tradicional del Tratado de 1860 como el anuncio de sería un nuevo orden comercial liberal en Europa. Véase "Does bilateraalism promote trade? Nineteenth century liberalization revisited", *Discussion paper series*, nº 5.423, Centre for Economic Policy Rechearch, London, January, 2006, website: <http://www.columbia.edu/cu/alliance/Papers/Paper_Marc-Flandreau-2006.pdf>

⁹⁴⁸ Las necesidades esgrimidas en el Congreso de los Diputados por Pedro Salaverría en *DSC, Congreso de los Diputados*, sesión del día 18 de junio de 1860, Apéndice Primero al número 18, pág. 3.

⁹⁴⁹ "Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas. Primera sesión pública celebrada el día 25 de noviembre de 1860", en *Gaceta Economista. Periódico de Comercio, de Navegación mercantil y de Seguros. Guía de los Caminos de Hierro*, número 33, noviembre de 1860, pág. 1.

absurdos que el arancel contiene tuvieran bulto y se amontonaran unos sobre otros, el tal librote formaría una columna que, teniendo por base el buen sentido aplastado, llegaría hasta sabe Dios dónde, tal vez hasta el planeta Júpiter; y aun los mismos habitantes del tal planeta, si los tiene, que de seguro están muy ajenos de tarifas y de derechos diferenciales [...] aun ellos gritarían ¡absurdo! Al ver ascender estúpidamente la columna arancelaria⁹⁵⁰.

El solícito apoyo encontrado por la Asociación no tardó en evidenciar los incontables deseos, surgidos por la generalidad de sus socios, de significarse como interlocutores en el proceso que debía abrirse para acometer la reforma de los aranceles, haciéndolo, además, al lado de quienes se declaraban consumidores. Las respuestas obtenidas desde el entorno político no tardaron en producirse, siendo el representante para los temas de Hacienda, González de la Vega, el que finalmente presentaría en el Congreso las peticiones propuestas por la Asociación⁹⁵¹. La actitud reivindicativa de la *Asociación para la Reforma de los Aranceles* tuvo su respuesta pocos meses después por parte de los defensores del sistema prohibicionista. El grupo, esta vez liderado por el recién creado *Círculo Económico Español*, solicitó la convocatoria de una nueva información pública para que el Gobierno y las Cortes atendieran a los posibles afectados por la reforma⁹⁵².

En el contexto de estabilidad política lograda por O'Donnell, cabía esperar, sin embargo, un escenario de presiones procedentes de todos los sectores implicados. Estos llegaron en el momento en el que Salaverría presentó el proyecto de reforma arancelaria, justo cuando la Hacienda necesitaba más recursos, debido en parte a las campañas militares de

⁹⁵⁰ Ibídem, pág. 4.

⁹⁵¹ DSC, *Congreso de los Diputados, Legislatura de 1860*. Tomo II, sesión del día 29 de diciembre de 1860, número 61, Madrid, 1884, pág. 1.561.

⁹⁵² Así figura en la Comisión de peticiones del Congreso con el número 163, fechada el 13 de abril de 1861. En concreto, la petición expuesta recogía el siguiente texto: “*Varios individuos del Círculo económico español solicitan que antes de que el Sr. Ministro de Hacienda presente la reforma arancelaria, se digne acordar el Congreso que el Gobierno de Su Majestad, sin perjuicio de consultar á las Juntas provinciales de agricultura, industria y comercio, prepare y abra una informacion para que puedan ser oidos todos los derechos é intereses á que el proyecto de reforma se refiera, invitando con la suficiente antelacion á sus principales representantes para que acudan á ilustrarlos y defenderlos*”. DSC, *Congreso de los Diputados, Legislatura de 1860*. Tomo V, sesión del día 13 de abril de 1861, número 134, Madrid, 1884, pág. 3.729.

Marruecos y al inicio de un período de proyectos ferroviarios repartidos por todo el país⁹⁵³.

Entretanto, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* había recibido en los primeros meses de 1860 una carta del *Círculo Económico Español*, en la que se sumaba a las manifestaciones en favor de los intereses materiales y en la difusión del fomento de la agricultura, la industria y el comercio. Constituido en abril de 1860, sus fundadores abogaban por la protección de todos aquellos sectores generadores de riqueza, entre los que incluía el sector agrícola, cuestionando, al mismo tiempo, la política arancelaria que el Gobierno estaba a punto de introducir. En opinión del *Círculo*, debía ser el Estado el ejecutor material de las mejoras en los diversos ramos de la economía y precisaban que aquélla habría de conseguirse “no precisamente por medio de los aranceles, que son variables por su misma esencia, sino también y sobre todo, con la protección directa y positiva que la conservación y el engrandecimiento de los intereses generales exijan”⁹⁵⁴.

Así las cosas, junto al *Instituto Agrícola* y al *Círculo Económico*, otras instituciones y asociaciones iban evidenciando su adhesión a la causa proteccionista. Una de las últimas en hacerlo había sido, en octubre de 1859, el *Círculo de Labradores de Sevilla* que, desde la correspondencia impresa en la *Revista*, venía coincidiendo en las tesis que se referían a la negativa sobre entrada de granos en España⁹⁵⁵. A las demostraciones de apoyo dirigidas al *Instituto* se sumó también la de S. M. Francisco de Asís de Borbón, esposo de la Reina Isabel II, quien a través de un Real Despacho de 15 de junio de 1860, donó la cantidad de “diez mil reales vellón, en prueba del interés que le merecen los benéficos fines que este se ha propuesto”⁹⁵⁶.

⁹⁵³ Una parte de todo el problema en Serrano Sanz, José M^a, “Pedro Salaverria. Cara y cruz de la Hacienda”, en Comín, Francisco; Martín Aceña, Pablo, y Vallejo, Rafael (editores), *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2006, págs. 229 a 261. También en Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 234.

⁹⁵⁴ *RIACSI*, Tomo IX, Barcelona, 1860, pág. 126.

⁹⁵⁵ *RIACSI*, Tomo VIII, Barcelona, 1859, pág. 225.

⁹⁵⁶ La donación económica, aunque pudiera parecer anecdótica, tuvo su reflejo en la *Revista*, dedicándole una alusión especial y en la que, entre otras cosas, se podía leer lo siguiente: “No hay para que dudar, que ese generoso estímulo de los Monarcas ha de verse eficazmente secundado por el celo de los socios todos en la humilde esfera en que cada uno pueda obrar, con respecto al elevado punto de donde procede el buen ejemplo; abrigando como abrigamos plena confianza en la fácil obtención de los prósperos resultados que se apetecen, con tal que se tenga siempre presente que las asociaciones viven, tanto de la

El hecho es que durante el siguiente período de sesiones, es decir, entre noviembre de 1861 y octubre de 1862, el ministro Salaverría no presentó proyecto alguno para reformar los aranceles. Cabe preguntarse si fue decisiva la presión desempeñada por quienes eran propietarios y, al mismo tiempo, formaban parte de las Cortes, el Gobierno, o si finalmente el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* y su prolongación en Madrid, el *Centro Protector Agrícola*, terminaron por inclinar la balanza en favor de la no intervención por parte del Ejecutivo y el mantenimiento del *statu quo* en materia arancelaria. El Ministerio sí acometió entonces algunas medidas liberalizadoras que afectaban al algodón, producto que estaba siendo afectado por la guerra civil en Estados Unidos. Salaverría propuso entonces una rebaja en los derechos de aduana que alcanzaría el 77 por ciento, en todos aquellos algodones extranjeros que fueran transportados bajo bandera española. La decisión había sido adoptada ante el riesgo de cierre que parecía cernirse en una parte importante de la industria textil, y ante el miedo al desempleo⁹⁵⁷.

La decisión, celebrada por la industria algodonera, no culminaba, sin embargo, la promesa hecha meses antes por Salaverría, referida a una reforma general en materia arancelaria. El hecho en sí, produjo una cierta división interna, originando contradicciones entre los diferentes sectores productivos del país. Desde el Congreso, el diputado Montesino, proclive al libre cambio, reclamó la urgencia que tenía la puesta en marcha de una nueva ley que regulara las tasas aduaneras, advirtiendo de las represalias comerciales que ya se estaban aplicando en algunos países a las mercancías españolas⁹⁵⁸. Ante las continuas conminaciones a retomar el proyecto, el ministro de Hacienda no tuvo más remedio que responder que se trataría en un plazo próximo. Las insistencias de Montesino, fueron igualmente respondidas por el diputado por Barcelona Pascual Madoz, quien no tuvo más remedio que esquivar la situación, tratando con evasivas la cuestión de los aranceles. En su respuesta se refirió al proyecto en los siguientes

bondad del pensamiento que las creó, como de la vida que sepan comunicarles las individualidades de que se componen”. Ibídem, pág. 157.

⁹⁵⁷ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 235.

⁹⁵⁸ En palabras de Montesino: “Sucede que en unas partes han tomado ya represalias, y en las que no, nos han amenazado con llevarlas á efecto. Así en Rusia, por ejemplo, nos cargan el 50 por 100; en Austria hace pagar á nuestra bandera diez tantos que á las demás extranjeras; en otros países nos han impuesto e 25 ó 30 por 100”. *DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1861 á 1862*. Tomo IV, sesión del día 26 de marzo de 1862, número 86, Madrid, 1862, pág. 1.626.

términos: “No crea el Sr. Montesino que voy á tratar la cuestión del libre cambio. La cuestión de reforma de los aranceles, como ha dicho muy bien el Sr. Ministro de Hacienda, no se puede tratar incidentalmente. Llegará su día y se tratará con toda amplitud, y no temo yo que pueda adoptarse en este punto una medida que pueda perjudicar los intereses industriales del país”⁹⁵⁹. Finalmente, terminado el período de sesiones en el mes de octubre, el proyecto no se presentó⁹⁶⁰.

A pesar de todo ello, Salaverría aprovechó que las Cortes estaban cerradas para sacar a la luz un Real Decreto con cambios en la legislación arancelaria. Supuestamente se trataba de «arreglar» los aranceles de aduanas vigentes al sistema métrico decimal, tal y como se especificaba en el artículo 1º del Decreto. Éste reconocía, además, la revisión de los valores de las mercancías, rectificadas “dentro de los límites establecidos por la ley de 17 de julio de 1849”. El artículo 2º contemplaba la exacción de una serie de derechos fijados a partir del día 1 de enero de 1863. Con esta misma fecha cesarían en las poblaciones del interior “la cobranza de los derechos que á título de contribucion de Consumos y recargos provinciales y municipales gravan á su entrada en aquellas el azúcar, bacalao, cacao, café, té, clavo de especia y las canelas”. A cambio se exigirían unos derechos de importación en las Aduanas que recogía el artículo 3º (véase el cuadro 25). En cualquier caso, el Decreto matizaba lo siguiente: “El azúcar que produzcan las fábricas de refino de la Península e islas Baleares para el consumo del reino pagará 17 rs. Por 100 kilogramos, que se exigirán á la salida de las fábricas por los medios establecidos por la instrucción para la cobranza de la contribución de Consumos”⁹⁶¹.

El Real Decreto de noviembre de 1862 establecía, además, nuevas valoraciones en muy diversas mercancías, tanto en artículos de alimentación como para la industria, lo que provocó una reacción por parte de los industriales del hierro de inmediato para presionar al Gobierno. Obviamente, su postura era que la alteración en los valores y derechos sobre los metales representaban un perjuicio a la industria nacional. Así, fue de nuevo la

⁹⁵⁹ *Ibidem*, pág. 1627.

⁹⁶⁰ Montañés Primicia, Enrique (2009), *ob. cit.*, pág. 236.

⁹⁶¹ Las citas están extraídas del Real Decreto aprobando el “Arancel para la exacción de los derechos de entrada en la Península é islas Baleares á las mercancías extranjeras y de las posesiones españolas de Ultramar”, en *Gaceta de Madrid*, número 333, sábado 29 de noviembre de 1862.

Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, quien a través de una Exposición presentada a la Reina, trató de influir para que se rectificaran los derechos o, que en su caso, se detuviera la aplicación del Real Decreto⁹⁶².

CUADRO 25

Derechos de Aduanas (Real Decreto de 27 de noviembre de 1862)

Artículo	Derechos
Azúcar	[17 rs. por 100 kilogramos
Azúcar refinada	[26 rs. por 100 “
Bacalao	[8 rs. “
Cacao	[21 rs. “
Café	[65 rs. “
Té	[2,15 rs. por kilogramo
Clavo (especia)	[0,54 rs. “
Canela de Ceilán	[2,15 rs. “
Canela de China	[0,54 rs. “

FUENTE: *Gaceta de Madrid*, número 333, sábado 29 de noviembre de 1862.

La resolución tomada por Salaverría era, en opinión del conjunto de librecambistas, y a pesar de corregir algunos «abusos» que el arancel mantenía desde hacía tiempo, una medida que nada tenía que ver con las peticiones realizadas con anterioridad en el Congreso. En cualquier caso, las protestas de los fabricantes de hierro, *así como la presión ejercida por la*

⁹⁶² Toda la argumentación de los afectados está recogida en las 15 páginas de las que constan las *Observaciones que varios fabricantes de hierro hacen sobre la exposición presentada á S. M., con fecha 15 de diciembre de 1862, por la Asociación para la Reforma de Aranceles*, Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1862.

Asociación para la Reforma de los Aranceles, contribuyó finalmente a que el ministro presentara una rectificación solo unas semanas después de haber sido publicado el anterior Decreto. Mediante una Real Orden, el Ministerio ratificaba los derechos aprobados en el Real Decreto, aunque esta vez concedía un año de retraso para su aplicación en dos tipos de hierros, además de hacerlo con el azúcar de refino⁹⁶³.

Sea como fuere, y como ya conocemos, en el proyecto presentado nuevamente a comienzos de 1863 los cereales quedaron fuera de ser recogidos en el mismo, lo que implicaba para los puristas librecambistas la aceptación de un proyecto incompleto y defectuoso. En el contexto de las amplias influencias representadas por los distintos grupos de presión, tanto en el Gobierno como en las Cortes, seguía resultando difícil la alteración de cualquier estampa económica sin el consenso del «conjunto» afectado. No cabe duda que, al menos hasta mediados de los años sesenta del siglo XIX, propietarios agrícolas e industriales de las zonas de Castilla y Cataluña, actuaron de acuerdo a sus propios intereses, gestándose, de esta suerte, un proteccionismo representativo, o si se prefiere «nominal», dominado ampliamente por estructuras asociativas agrícolas, y más concretamente por terratenientes productores de trigo.

Aunque apartada de la dinámica reformadora en materia de aranceles, España mantuvo un nivel favorable de exportaciones si nos atentemos a las investigaciones realizadas sobre esta materia. El valor de las exportaciones mediada la década de los sesenta, había superado ya los niveles logrados durante el bienio 1854-1855. Todo ello, sin que las exportaciones de trigo y harina alcanzaran el considerable protagonismo de la década anterior. La desarticulación arancelaria producida en Francia y el Reino Unido, junto al crecimiento de la demanda internacional originaron un crecimiento en las ventas de productos que ya tenían una larga trayectoria exportadora. Así, Enrique Montañés al referirse al comercio exterior en nuestro país, ha comprobado el aumento en las exportaciones de productos como el vino común, la fruta, la lana, la seda o el corcho, produciéndose también una

⁹⁶³ “Real Órden fijando el plazo de 1º de Marzo de 1864, para que rija la reforma acordada respecto del azúcar refinado de la partida 63, y á las clases de hierro de las 318 y 319”, *Gaceta de Madrid*, número 362, domingo 28 de diciembre de 1862. Posteriormente la aplicación a los hierros sería definitiva en la “Real Órden mandando que continúen subsistentes los derechos fijados en 27 de Diciembre de 1862 al hierro colado en lingotes y al estirado en barra de todas clases”, *Gaceta de Madrid*, número 191, viernes 10 de julio de 1863.

importante demanda en productos minerales y en vinos procedentes de Jerez de la Frontera⁹⁶⁴. En definitiva, el Tratado Cobden-Chevalier impulsó un moderado crecimiento en la exportación de productos que disfrutaban de una gran demanda en los mercados internacionales, sin la participación, tal y como ya se ha advertido anteriormente, de los cereales, y lejos de cualquier tesitura que implicara una situación de escasez alimenticia a nivel internacional⁹⁶⁵.

La relajación del *Instituto Agrícola* ante el mantenimiento de un régimen arancelario muy proteccionista se hizo rápidamente visible en la *Revista*, sobre todo después de la caída, en marzo de 1863, del gobierno que hasta entonces había presidido O'Donnell. A lo largo del año y medio siguiente, los escasos apoyos obtenidos por los sucesivos Gabinetes tuvieron su reflejo en una exigua actividad legislativa y, aún menos, en la ejecución de proyectos que tuvieran que ver con la política arancelaria. Con el moderado Narváez a la cabeza de un Ejecutivo más estable, la Unión Liberal tuvo que conformarse con asumir la oposición en un momento en el que se estaba perfilando una nueva recesión en Europa. Precisamente, en una extensa alusión referida a la marcha de los intereses agrícolas en España coincidiendo con el cambio de Gobierno, y anterior a la llegada de Narváez a la presidencia del Gobierno, la *Revista del Instituto* expresaba lo siguiente:

No podemos sin embargo prescindir de decir algo acerca de la marcha, ya indudablemente progresiva, de los intereses agrícolas de España, á favor de los cuales hemos creído siempre que debia aparecer en primera línea la proteccion del Gobierno, si es que hayan de llegar al grado de prosperidad á que están llamados. Y si hemos de manifestar con franqueza lo que sentimos, diremos que esa saludable tutela venida de arriba porque tanto anelamos, la creíamos enérgicamente robustecida con el nombramiento para Ministro de Fomento del Excelentísimo Señor Don Francisco Lujan, de quien tan buenos recuerdos han de conservar los agricultores que, como nosotros, no tengan la desgracia de ver en los Consejeros de la Corona hombres de partido, sino hombres cuya misión debe cifrarse en procurar el bien del país en el mayor grado posible⁹⁶⁶.

⁹⁶⁴ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 250.

⁹⁶⁵ *Ibidem*.

⁹⁶⁶ *RIACSI*, Tomo XII, Barcelona, 1863, pág. 66.

De la situación de calma en los precios del grano, tanto en España como en el exterior, daba igualmente buen testimonio la *Revista* en su número correspondiente al mes de mayo de 1863 al referirse a la misma en el siguiente sentido: “Los precios en España se han mantenido en alza. En el extranjero no han tenido alteracion notable, gracias á que la situacion agrícola continua al parecer altamente satisfactoria así en Francia como en la Argelia y poco menos en Inglaterra”⁹⁶⁷.

A partir de 1864 comenzó a contraerse la demanda internacional de forma paulatina, originando una caída de las exportaciones en España y aumentando la salida de reservas hacia el exterior. Con ello, tanto la demanda interna como la deflación monetaria, provocaron que algunos sectores de la economía española se resintieran. En esas circunstancias, los grupos con intereses afectados reiniciaron las peticiones sobre un cambio en la legislación arancelaria con la intención de paliar los efectos adversos que la crisis comenzaba a tener en sus actividades⁹⁶⁸.

La tímida reacción del Gobierno se produjo con la aprobación de un primer Real Decreto en marzo de 1865 que regulaba favorablemente la entrada de algodones extranjeros, además de otro en el que se introducían algunas modificaciones para la importación de harinas en las Antillas españolas⁹⁶⁹. A la defensa de los propietarios castellanos acudió el diputado Claudio Moyano con un discurso en el Congreso que advertía de los posibles menoscabos que podía originar el trato preferencial dado a las colonias. En este sentido, el diputado castellano ironizaba: “si una vez el Consejo de Ministros se pone de acuerdo para alterar de alguna manera este derecho diferencial, y dejo a parte eso de compensar á las provincias de Ultramar á costa de las de Castilla y de beneficiar á las de Cataluña á costa de las de Castilla la Vieja, que eso lo meditará el Consejo de Ministros y acordará lo que estime mas conveniente después de un sério exámen”⁹⁷⁰. Debido a la

⁹⁶⁷ *Ibídem*, pág. 118.

⁹⁶⁸ Son varios los autores que han estudiado esta circunstancia hacia la primera mitad de la década de 1860. Entre algunos destacamos el trabajo de Carreras i Odriozola, Albert, “La industrialización: una perspectiva a largo plazo”, en *Papeles de economía española*, número 73, Ejemplar dedicado a los nuevos historiadores ante el desarrollo contemporáneo de España, Fundación de las Cajas de Ahorros, 1997, págs. 35 a 60. También en Sardà, Joan, *ob. cit.*

⁹⁶⁹ *Gaceta de Madrid*, número 92, domingo 2 de abril de 1865.

⁹⁷⁰ *DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1864 á 1865*. Tomo II, sesión del día 7 de marzo de 1865, número 44, Madrid, 1865, pág. 797.

trascendencia que podía tener cualquier variación en la comercialización del trigo y la harina entre Cuba y las posesiones españolas en las Antillas, y la propia Península, especialmente en las provincias castellanas, Moyano reclamó al ministro de Hacienda, Seijas Lozano, legislar abiertamente sin trabas ni contratiempos. En este sentido no podía ser más explícito al requerirle:

Y á fin de evitar esto, me atrevo á suplicar al Sr. Ministro de Hacienda y al Ministerio entero, que en el caso de decidir el consejo de Ministros que está en sus atribuciones resolver eso, se sirviera indicarlo aquí antes de que lo viéramos en la Gaceta, porque si cree que no puede comprometerse á eso y á hacernos esta promesa que necesitamos, y la primera noticia que tengamos sea por la Gaceta, y cuando la tenga al mismo tiempo la Italia, los Estados-Unidos, la Rusia y en todas partes que traen trigo á Cuba, entonces ya no podremos remediarlo, porque habrán hecho tales cargamentos y se habrá introducido tal alteracion en el comercio, que no podremos poner remedio á este mal⁹⁷¹.

Tanto los diputados que representaban los intereses agrícolas de Castilla como los harineros y comerciantes que tenían vinculaciones con el comercio de harina a las colonias americanas, eran conscientes de las dificultades que existían para que el Ejecutivo pudiera aprobar una ley específica para tales efectos. Debido a la importancia que tenían para España las exportaciones de trigo y harina hacia las Antillas, sensiblemente mayores que las de géneros de algodón, los representantes políticos de los productores y comerciantes de trigo, siguiendo los planteamientos expuestos por Montañés, advirtieron la necesidad de lograr una negociación, siempre fuera del contexto parlamentario, que pudiera frenar los posibles daños a sus intereses particulares⁹⁷².

⁹⁷¹ Ibídem.

⁹⁷² En efecto, la legislación arancelaria en materia de exportación hacia el mercado colonial, tal y como mencionaba Enrique Montañés Primicia, mantenía un trato preferencial sobre las harinas nacionales. Cualquier alteración legal podía dañar los rendimientos de la clase productora de trigo, así como la de los empresarios harineros en Castilla. Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 259. Además de los representantes trigueros, el comercio cántabro se vio representado en la figura del diputado Casimiro Polanco, quien, en marzo de 1865, consideraba que la cuestión harinera afectaba “no solo á la isla de Cuba, sino tambien á la nación española”. Véase DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1864 á 1865. Tomo II, sesión del día 23 de marzo de 1865, número 58, Madrid, 1865, pág. 1.206.

En otro orden de cosas, a mediados de 1864 se habían producido algunas peticiones con la intención de proteger la introducción de distintos arados y máquinas para la agricultura que, debido a las repetidas pruebas y ensayos promovidos por grandes propietarios y asociaciones agrícolas, habían comenzado a adquirir una cierta importancia en diversas zonas del país. El propio *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* no dudó en incorporarse a las quejas ante los elevados gastos que acababa de asumir por la introducción y el transporte de dos arados, por los que habría pagado en la Aduana unos 174 reales, además de otros 202 reales por una aventadora⁹⁷³. Fue la propia *Revista* la encargada de recordar las solicitudes al Gobierno que se estaban preparando para instar a una rebaja en los aranceles a la entrada de maquinaria e instrumentos agrícolas. Entre ellas figuraban las de la Junta de Agricultura de Sevilla, así como la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante⁹⁷⁴.

Mientras tanto, y con la irrupción de los grupos de agricultores castellanos en el modelo prohibicionista que venía reclamándose en las Cortes para Cuba y Puerto Rico, se produjo un vuelco importante tras la llegada al Ejecutivo de O'Donnell en junio de 1865. El nuevo ministro de Ultramar, Cánovas del Castillo, no tardó en anunciar la aprobación de un Real Decreto recogiendo las peticiones de agricultores, industriales y comerciantes de Castilla, exonerando algunos derechos sobre las harinas españolas en las Antillas⁹⁷⁵. Con la medida, el Gobierno suprimía las tasas para las harinas nacionales, reduciendo también las extranjeras en la misma proporción. De esta forma, aunque el Real Decreto establecía que las harinas nacionales no debían satisfacer derechos, no se alteraban los aranceles para las harinas extranjeras que fueran transportadas bajo bandera nacional⁹⁷⁶. El resultado, a pesar de recoger una reducción en las harinas procedentes

⁹⁷³ RIACSI, Tomo XIV, Barcelona, 1865, pág. 57.

⁹⁷⁴ *Ibidem*.

⁹⁷⁵ “Real Decreto eximiendo del pago de derechos las harinas nacionales que se importen en las islas de Cuba y Puerto-Rico, y señalando los que han de satisfacer las harinas de otras procedencias”, *Gaceta de Madrid*, número 179, miércoles 28 de junio de 1865.

⁹⁷⁶ El Real Decreto reconocía unos derechos para cada barril de 92 kilogramos de unos 2 escudos para la harina española procedentes de puertos españoles en bandera extranjera; 8 escudos para la harina extranjera en bandera extranjera, y 8 escudos para la harina extranjera que fuera transportada en bandera española procedente de Estados Unidos. *Ibidem*.

de los Estados Unidos, mejoraba la oferta y el abastecimiento, además de mantener una notable protección de la producción nacional⁹⁷⁷.

Como ya había venido sucediendo en ocasiones anteriores, los grupos interesados en la prohibición apenas habían tenido problemas en bloquear los proyectos de revisión arancelaria que afectaban a los territorios de Ultramar, cuestionando incluso las reformas trazadas por el partido moderado. Aunque la salida de Narváez del Ejecutivo y la llegada al mismo de su sucesor, Leopoldo O'Donnell, no puede achacarse a los problemas harineros con las colonias americanas, sí podemos decir que la fragilidad demostrada por el propio Gobierno, sin duda, favoreció el éxito de las estrategias presentadas por parte de los grupos interesados en no alterar el sistema arancelario que se mantenía vigente.

Con el nuevo Gobierno de índole progresista, el ministro de Hacienda, Manuel Alonso Martínez, se mostró partidario de acometer, dentro del Proyecto de Ley relativo a los presupuestos correspondientes al año económico 1866-1867, un artículo que autorizaba la importación de granos alterando uno de los principios del sistema arancelario que había permanecido prácticamente inamovible desde 1820. En concreto, y según se especificaba en su artículo 8º, sería permitida la importación en la Península é islas Baleares, tanto de granos, harinas, galletas y pasta para sopa, con el pago de una serie de derechos de Aduanas según correspondiese (véase el cuadro 26).

Esta medida, además de contribuir a la reducción del déficit, intentaba avanzar en la cuestión del abastecimiento interno y evitar los vaivenes en los precios ante situaciones precarias o de escasez. Enseguida, diputados, asociaciones de agricultores, instituciones políticas y económicas comenzaron a manifestar su oposición. En una de las sesiones correspondientes al mes de marzo de 1866, el diputado en el Congreso por Jerez de la Frontera, Pérez Molina, manifestaba su rechazo al artículo 8º del citado Real Decreto. En su intervención se refería a la cuestión en los siguientes términos: “He pedido la palabra para presentar al Congreso una exposicion de varios propietarios y labradores de Jerez de la Frontera, por

⁹⁷⁷ En realidad, la medida satisfacía a los productores de trigo y harina castellanos. Tal y como explica Montañés: “El derecho diferencial de 80 reales suponía una protección del 64 por ciento sobre el precio de la harina en el mercado cubano, que el decreto de 1 de abril situaba en 125 reales por barril”, Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 265.

donde tengo la honra de ser Diputado en la cual piden a las Córtes se sirvan no aprobar el art. 8º del proyecto de ley de presupuestos, que alevosamente mataría la agricultura española”⁹⁷⁸.

CUADRO 26

Derechos de Aduanas (Proyecto de ley de presupuestos generales 1866-1867)

Artículo	Derechos (en escudos)
Avena	[0,50 por 100 kilogramos
Cebada	[1,30 “ “ “
Centeno	[1,20 “ “ “
Maíz	[2 “ “ “
Trigo	[2,30 “ “ “
Harina, galleta y pasta	[3,50 “ “ “
Salvado	[0,50 “ “ “

FUENTE: DSC, *Congreso de los Diputados, Legislatura de 1865 á 1866*. Tomo I, sesión del día 10 de febrero de 1866, Apéndice Primero al número 25, Madrid, 1866, pág. 9.

⁹⁷⁸ DSC, *Congreso de los Diputados, Legislatura de 1865 á 1866*. Tomo II, sesión del día 24 de marzo de 1866, número 56, Madrid, 1866, pág. 777. Además de los propietarios jerezanos, existe información sobre las Exposiciones remitidas por parte de la Junta de Agricultura, Comercio e Industria de Barcelona, de la Diputación Provincial de Barcelona, del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Junta Provincial de Sevilla, de la Diputación Provincial de Sevilla, así como de las Diputaciones de Baleares y Granada. Puede consultarse el DSC, *Congreso de los Diputados, Legislatura de 1865 á 1866*. Tomo III, sesión del día 24 de abril de 1866, número 73, Madrid, 1866, pág. 1.104; DSC, *Congreso de los Diputados, Legislatura de 1865 á 1866*. Tomo III, sesión del día 1 de mayo de 1866, número 79, Madrid, 1866, pág. 1.200, y el volumen correspondiente a la *Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante. Resumen de sus trabajos durante el año 1866, con arreglo al artículo 32 del reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859*, Imprenta y litografía de la V. de Juan J. Carratalá, Alicante, 1867, pág. 10. En este sentido resulta interesante también el trabajo de Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 272, en concreto la nota a pie de página número 56.

Desde las posiciones contrarias al proteccionismo apenas se recibieron protestas a las pretensiones de Alonso Martínez al considerarse elevados los derechos a aplicar a los cereales. A pesar de la limitada movilización promovida por los seguidores del libre cambio y de la supresión de derechos de Aduanas, la realidad es que los grupos agrarios lograron reunir a un importante número de opositores en el Congreso. Si a todo ello añadimos el intento por llevar a la *Gaceta* un nuevo proyecto sobre contribuciones, podemos entender que en mayo de aquel mismo año de 1866, Alonso Martínez presentara su dimisión al presidente O'Donnell. Su sustituto, Cánovas, no dudó entonces en aceptar la retirada del artículo 8º de inmediato⁹⁷⁹. Estas situaciones evidentes de incapacidad demostradas por parte de los distintos ministros del Gobierno, y de la excesiva influencia ante los mismos por parte de grupos perfectamente coordinados, además de la Corona, ya había sido denunciada en su día por el diputado Laureano Figuerola que, en marzo de 1866, dejaba entrever el número tan exagerado de ministros de Hacienda nombrados en España desde 1863. El propio diputado expresaba así su malestar: “El partido moderado, que podía ser gastado por la revolución, ha sido disuelto por el ácido régio, ó aguja régia de esos cortesanos que ejercen una influencia extralegal entre el alto poder irresponsable y el responsable”. Más adelante matizaba su opinión con una exposición lo suficientemente explícita sobre la falta de independencia en el Ejecutivo:

¿Cómo es posible que haya Hacienda en España con esa continua variación de Ministros, cuando el trabajo de la Hacienda española exige siete Ministros de primer calibre que trabajen todos ellos constantemente en la misma dirección por espacio de muchos años para curar los males que han traído consigo las administraciones pasadas? Ved pues la segunda consecuencia que trataba de exponer: no hay posibilidad de hacer nada en este sentido, merced á esa debilidad gubernamental que ha resultado de la existencia de un poder extralegal colocado entre el poder irresponsable y el responsable⁹⁸⁰.

⁹⁷⁹ En una comunicación de la Presidencia del Consejo de Ministros leída en el Congreso de los Diputados del día 29 de mayo de 1866, se justificaba la dimisión del ministro Alonso Martínez en razón al "mal estado de su salud". *DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1865 á 1866*. Tomo IV, sesión del día 29 de mayo de 1866, número 97, Madrid, 1866, pág. 1.627.

⁹⁸⁰ *DSC, Congreso de los Diputados, Legislatura de 1865 á 1866*. Tomo I, sesión del día 23 de febrero de 1866, número 32, Madrid, 1866, págs. 279 y 280.

Con el nuevo Gobierno presidido por Narváez, las sucesivas injerencias por parte de la Corona y de los grupos de presión prohibicionistas mantuvieron su actitud de bloqueo a todas las iniciativas liberalizadoras, negándose incluso a participar en proyectos parciales, evitando de esta forma cualquier tipo de flexibilización en la política arancelaria. Esta oposición absoluta defendida por propietarios, labradores e industriales demostraba que el modelo proteccionista en España no necesitaba de sociedades *ad hoc* a nivel nacional que pudieran intervenir en la política económica con acciones coordinadas. Bastaban grupos individuales organizados y bien situados, muchas veces concomitantes con sectores agrícolas de Castilla, Andalucía o Levante, como así sucedía con las asociaciones catalanas o valencianas.

En este mismo sentido, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* seguía manteniendo por esos años en Madrid a personas que directamente estaban vinculadas a la institución. Los trabajos ligados a cualquier variación en los derechos arancelarios podían contar con la intervención en el Congreso de los Diputados de simpatizantes y miembros de la Directiva del *Instituto Catalán* como José Santa María o José María de Fivaller, además de integrantes destacados en la Junta Consultiva de Aranceles como el diputado y socio Joaquín María de Paz, elegido ponente en una de las comisiones para estudiar los derechos satisfechos por el cáñamo extranjero⁹⁸¹.

Otro de los resultados debidos a la presión que sobre el Gobierno habían ejercido asociaciones como el *Instituto Agrícola Catalán* se produjo a finales de 1867, cuando el ministro de Hacienda, en aquellos instantes, Manuel García Barzanallana, aprobaba un sucinto Real Decreto con un único artículo, referido a la entrada en nuestro país de máquinas y otras herramientas dirigidas a la agricultura. En dicho Decreto se establecía que: “Las máquinas-herramientas, aparatos y mecanismos extranjeros destinados á la agricultura, y los que sirvan para distribuir los abonos y beneficiar los productos agrícolas, satisfarán el 1 por 100 sobre avalúo en bandera

⁹⁸¹ Tanto desde las Cortes como desde la Junta Consultiva de Aranceles, los socios y simpatizantes con la causa del *Instituto Agrícola* venían aportando, desde hacía ya tiempo, una actividad decisiva para inclinar con sus intervenciones, tal y como se explicaba en la *Revista*, la balanza a favor de los intereses de propietarios y agricultores en Cataluña. Algunos de estos casos estuvieron relacionados, por ejemplo, con los derechos arancelarios del aguardiente o los cáñamos en rama y rastrillados. *RIACSI*, Tomo XVI, Barcelona, 1867, págs. 29 y 30.

nacional y un quinto mas en extranjera”⁹⁸². La decisión, tal y como publicaba la Exposición dirigida a la Reina por el propio ministro, había sido tomada al margen de la Comisión especial, creada por Real Decreto de 10 de noviembre de 1865, cuyo cometido era el de informar sobre la forma de contener los derechos diferenciales de bandera y atender a otras trabas arancelarias. Barzanallana explicaba así a la Reina su decisión: “No juzga conveniente el Ministro que suscribe formular reforma alguna de importancia sin que la comisión haya presentado el resultado de sus trabajos que no se harán esperar, si, como es de creer, procede con la actividad que se le tiene recomendado; pero hay en el arancel vigente una partida cuyos derechos deben reducirse sin esperar la reforma general, y esta partida es la que comprende las máquinas destinadas á beneficiar los productos agrícolas”⁹⁸³.

Para quienes hemos venido sosteniendo en todo el curso de este período, agotado en 1868, el mantenimiento a ultranza de un proteccionismo alimentado por una parte muy influyente de los sectores económicos y políticos de nuestro país, el hecho que se mantuvieran las políticas arancelarias tras las crisis de subsistencias vividas entre 1856 y 1858, demuestra la incapacidad que los distintos gobiernos mostraron ante sus adversarios con vocación proteccionista. Los intentos por modificar la normativa de 1834 respecto al trigo extranjero resultaron estériles, ya se tratara de correcciones mínimas, como la reducción de los precios del trigo extranjero, o el establecimiento de aranceles elevados a cambio de eliminar el rígido proteccionismo, tal y como había pretendido Alonso Martínez.

En todo caso, ni a través de las Cortes, ni tampoco a través del propio Gobierno se consiguieron acuerdos lo suficientemente firmes para romper el cordón proteccionista. De este modo, los altos precios del trigo siguieron manteniéndose en un contexto de continuas protestas y peticiones para que pudiera alterarse la legislación arancelaria. Al lado de todo ello, las exportaciones se redujeron de forma notable no pudiéndose alcanzar los niveles del período 1853-1856. Además, durante los primeros años de la década de los sesenta, los precios del trigo en los mercados interiores y del litoral peninsular llegaron a superar los existentes antes de producirse el conflicto de Crimea. Parece obvio suponer que el precio elevado de los

⁹⁸² *Gaceta de Madrid*, número 292, sábado 19 de octubre de 1867.

⁹⁸³ *Ibidem*. Asimismo en *RIACSI*, Tomo XVI, Barcelona, 1867, pág. 43.

mercados españoles no era una consecuencia de la situación internacional, sino del estrecho margen que permitía el proteccionismo. Así, tal y como nos recordaba Enrique Montañés Primicia: “Mientras que Gran Bretaña importaba varios millones de fanegas y mantenía unos precios más reducidos, en España se prohibía la importación y se alcanzaban precios más elevados”⁹⁸⁴.

Controlados de esta forma los mercados nacionales de cereales a costa de situaciones de carestía y de dificultades para las clases menos acomodadas, esta situación reprochable los grandes hacendados y productores de trigo, tuvo al mismo tiempo y hasta 1868, un reflejo de tranquilidad en asociaciones como el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, más preocupados desde entonces por obtener un descenso continuo y moderado de impuestos y tasas que podían seguir dañando los rendimientos de grandes propietarios y hacendados catalanes. No debe, pues, extrañarnos, que desde la *Revista* se siguieran insistiendo, poco antes de la llegada de 1868, en cuestiones concernientes a la Ley Hipotecaria o al estado de la agricultura en general. A este estado de relativa «tranquilidad», sin duda, iban a contribuir también otras asociaciones de agricultores que, como en el caso del *Instituto Agrícola Catalán*, mostrarían muy pronto su posición ante la protección a los cereales y al bloqueo de cualquier intento por reformar la rígida política arancelaria.

- El carácter asociativo agrícola valenciano. La Sociedad Valenciana de Agricultura y la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia

Cuando a comienzos de 1859 preludiaba su andadura la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, hacía ya algo más de ocho décadas que la *Sociedad Económica de Amigos del País* trabajaba por la agricultura, su desarrollo y la participación de los propietarios agrícolas para mejorar los distintos sectores de la producción a través de la «razón» y la «modernidad»⁹⁸⁵. Una institución, la de los *Amigos del País* de Valencia, que

⁹⁸⁴ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 275,

⁹⁸⁵ Martínez Ruiz, Enrique, *La Casa de Borbón: ciencia y técnica en la España Ilustrada* (catálogo de la exposición celebrada en el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat [MUVIM], enero-marzo de 2006), Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006, pág. 130.

desde sus inicios había ambicionado ejercer una actividad más allá de la propia capital valenciana, situación que fue discutida y finalmente rechazada por el Consejo de Castilla⁹⁸⁶.

A pesar de la importante transferencia de tierras y de los cambios de propiedad propiciados por la abolición de los señoríos, así como por los distintos procesos de desamortización, tanto civil como eclesiástico, la expansión de la agricultura en las zonas del Levante español continuó su trayectoria ascendente en un proceso que ya se había iniciado a finales del siglo XVIII. Después de las dificultades sobrevenidas entre 1833 y 1843, la región valenciana iba a acomodarse en una etapa de avances económicos basados en una agricultura intensiva y comercial, al mismo tiempo que retrocedía la agricultura de subsistencia, sumándose, de este modo, a un profundo e inequívoco cambio social. En consecuencia, las propiedades liberadas de las limitaciones fijadas por el Antiguo Régimen no tardaron en convertirse en un centro de atención para nuevos inversores, iniciándose así un proceso de roturaciones y puesta en regadío de tierras, dando lugar a una significativa reconversión y transformando en rentables un importante acervo de productos agrarios⁹⁸⁷.

La expansión agrícola y comercial valenciana durante los años centrales del siglo XIX, enmarcada en la creciente demanda europea y en la revolución de los transportes, se fundamentará en gran medida en la especialización, el comercio y la exportación de productos que, de forma sucesiva, irán adquiriendo una fuerte demanda en el mercado exterior. En consecuencia, alimentos como la naranja, el vino y el arroz, llegarán hasta países como Gran Bretaña y Francia, a los que se sumarán con el tiempo otros como Alemania, Bélgica y Holanda⁹⁸⁸.

⁹⁸⁶ Oltra Climent, Francisco, "La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2008) Una apuesta permanente por el conocimiento", en Bas Martín, Nicolás y Portolés Sanz, Manuel (coordinadores), *Ilustración y Progreso. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2009)*, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 2010, págs. 15 y 16.

⁹⁸⁷ Martínez Roda, Federico, *Valencia y las Valencias: su historia contemporánea (1800-1975)*, Fundación Universitaria San Pablo C.E.U., Valencia, 1998, págs. 70 y 71.

⁹⁸⁸ En el presente estudio no se tratarán las distintas particularidades del desarrollo de la agricultura valenciana a lo largo del siglo XIX. En cualquier caso, hemos acudido a las conclusiones detalladas en el excelente trabajo de Garrabou, Ramon, *Un fals dilema. Modernitat o endarreriment de l'agricultura valenciana (1850-1900)*, Institució Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'estudis i investigació, Valencia, 1985, págs. 119 a158. Asimismo, resulta muy interesante el artículo de Piqueras Haba, Juan, "Exportación agraria y transporte en Valencia: 1850-1930", en Morilla, J.; Gómez-Pntoja, J., y Cressier, P. (eds),

Desde 1820, momento en el que se iniciara en España la legislación proteccionista, la agricultura valenciana soportó una etapa de precios bajos, de la misma forma que había venido sucediéndose en todo el país, comenzando un período de cierto auge agrícola mediado el siglo XIX. Este hecho se confirma al verificarse un aumento de los cultivos intensivos, fruto de la extensión del regadío, así como por la utilización de fertilizantes como el guano del Perú que, a comienzos de la década de 1840, ya era adquirido, tanto en la «Huerta» como en la «Ribera» valenciana⁹⁸⁹.

Fue gracias a la labor del Director del Boletín Enciclopédico de la *Económica Valenciana*, Francisco de Llano Vargue, como finalmente se pudo introducir el guano en España a partir de 1844. La propia *Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia había motivado de manera sucesiva su utilización, consiguiendo que finalmente fuese generalizado su uso por una parte importante de los más destacados propietarios valencianos. La comercialización del guano peruano llegó incluso a convertirse en un negocio lucrativo para la familia Trénor, encontrándose algunos de sus miembros en la lista de socios de la *Sociedad* valenciana durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta circunstancia, junto con la propia necesidad de importar el guano, permitieron durante años el mantenimiento de contactos comerciales con el comercio británico⁹⁹⁰.

Unido a las mejoras en las técnicas de cultivo y a la utilización del abono, los avances acometidos en materia de infraestructuras, especialmente en los transportes, posibilitaron, asimismo, el desarrollo de una serie de productos agrícolas introducidos un siglo atrás. De esta forma,

Impactos exteriores sobre el mundo rural mediterráneo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1997, págs. 495 a 522.

⁹⁸⁹ Este hecho se produjo tan solo cuatro años después de que comenzara a importarse por Gran Bretaña. Como ejemplo, baste señalar que en el año 1859 la provincia de Valencia importó alrededor de 360.000 quintales métricos de este abono. Uno de los más destacados artífices de la importación de guano, un abono orgánico procedente de Perú, fue Tomás Trénor Keating, marqués del Turia, quien desde Valencia, lugar de residencia, y a través de sus relaciones con la casa Anthony Gibbs & Sons, de Londres, comenzó en 1847 a importarlo de manera masiva. Martínez Roda, Federico, ob. cit., pág. 71. Véase también de Muñoz-Peirats, María José, *Nobleza valenciana. Un paseo por la Historia*, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Valencia, 2006, págs. 587 a 597.

⁹⁹⁰ Durante la segunda mitad del siglo XIX será Inglaterra quien controle el comercio del guano a nivel internacional. García Álvarez Coque, José María, “Los proyectos de la *Económica*. Prestigio, poder y modernidad en el desarrollo capitalista valenciano”, en Bas Martín, Nicolás, y Portolés, Manuel (coordinadores), *Ilustración y progreso. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2009)*, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, año 2010, págs. 436 y 437.

mediada la centuria, cultivos como la naranja y la patata, además del pan, pasaron a formar parte de la alimentación básica valenciana. A ellos se sumó un marcado desarrollo de las zonas arroceras, manteniéndose estable su cultivo en las áreas más húmedas de la provincia de Valencia, lo que la convertiría, a partir de 1861, en la principal productora de este cereal en España⁹⁹¹.

En este mismo orden de cosas, al tiempo que se sucedía la epidemia de pebrina en 1852, afectando a producción de seda en muchas zonas de Levante, comenzó un gradual ascenso del precio del vino como consecuencia de la demanda francesa tras la irrupción de la filoxera en aquel país. Con el proceso industrializador puesto en marcha en Europa, no tardaron en producirse graduales demandas de alimentos como frutas y verduras, circunstancia que se vio igualmente favorecida por la introducción del vapor en el transporte marítimo. Esta circunstancia facilitó activamente el abaratamiento en los precios y la mejora en los tiempos de traslado. Con el afianzamiento a nivel internacional del nuevo sistema de intercambios, las áreas de producción agrícola valencianas se vieron en la necesidad de flexibilizar su agricultura, dándose un fuerte retroceso en aquellos productos agrícolas que eran menos rentables e implantándose el cultivo de otros artículos todavía más competitivos como el azafrán, el aguardiente, las pasas o la barrilla, este último utilizado para la obtención de la sosa. En algunos casos, como así sucedía con las plantaciones de almendros, las dificultades para su sustitución propiciaron su mantenimiento, ofreciendo altas rentabilidades a los propietarios, gracias a la comercialización y a la exportación de la almendra⁹⁹².

Como ya se ha dicho más arriba, la explotación de los cítricos, en concreto de la naranja valenciana, llevó a que las exportaciones de este producto casi se triplicaran, pasándose de un total de algo más de 10.000 tm comercializadas hacia el exterior durante el año 1831, a una cantidad

⁹⁹¹ Martínez Roda, Federico, ob. cit., pág. 74.

⁹⁹² Salom Carrasco, Julia, "La introducción de la agricultura comercial en el País Valenciano y la teoría de la difusión de las innovaciones", *Cuadernos de Geografía*, número 49, Valencia, 1991, pág. 96. En relación a la exportación de almendras puede consultarse de Bono, Emèrit, *Naranja y desarrollo. La base agrícola exportadora de la economía del País Valenciano y el modelo de crecimiento hacia afuera*, Universitat de València, 2010, págs. 118 y 184.

próxima a las 28.000 tm en 1860⁹⁹³. Las condiciones físicas de este cultivo, acotadas a las tierras de regadío, fueron paulatinamente reemplazando otros plantíos que difícilmente resultaban rentables. Como sucediera con el vino y los aguardientes, la demanda exógena y la evolución de los transportes terrestres, además de la posibilidad de acceder más fácilmente a los puertos marítimos, produjo en muchos casos la adopción de otros tipos cultivo de riego, en detrimento del secano que dificultaba, tanto su acarreo como su rentabilidad (véase el cuadro 27)⁹⁹⁴.

Dentro de esta perspectiva de cambios en los tipos de cultivo consumados en las provincias valencianas durante la segunda mitad del siglo XIX, fue muy destacable la sustitución del olivo por el naranjo y, en general, de la mayoría de frutos de secano por la vid. En concreto, las heladas padecidas en el levante español durante el año de 1861, dieron como resultado la destrucción de un importante número de hectáreas dedicadas al olivar, hecho que provocó un considerable y prolongado aumento de los suelos destinados a la vid⁹⁹⁵.

Al lado de todo lo referido anteriormente, no debemos olvidar el importante retroceso experimentado por el cereal en el conjunto de las regiones valencianas hasta el último cuarto de siglo, excepción hecha de la provincia de Castellón, tal y como ha quedado reflejado en el cuadro mencionado, en favor de un cierto número de cultivos arbolados como el melocotonero, el ciruelo o el albaricoquero que representaban un interesante desafío desde el punto de vista productivo⁹⁹⁶. Unido a este repliegue cerealícola, es evidente que en el desarrollo económico y agrícola valenciano, la evolución iniciada por otros cultivos como la vid, se vio estimulada por la fuerte demanda internacional y la posibilidad de realizar exportaciones masivas de productos vitícolas como el aguardiente, las pasas o el vino. En resumidas cuentas, y en lo que respecta a la agricultura valenciana en el último tercio del siglo XIX, el viñedo quedó convertido en el gran cultivo de

⁹⁹³ Torres, Manuel de, y París Eguilaz, Higinio, *La naranja en la economía española*, Sindicato Nacional de Frutos y Productos Agrícolas, Madrid, 1950, pág. 221.

⁹⁹⁴ Salom Carrasco, Julia, ob. cit., págs. 104 y 105.

⁹⁹⁵ A lo largo de todo el siglo XIX, existen motivos fundados que explican el traslado del olivar hacia las tierras del interior de las comarcas valencianas. Piqueras, Juan, *La agricultura valenciana de exportación y su formación histórica*, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 1985, págs. 193 a 195.

⁹⁹⁶ *Ibidem*, págs. 189 y 190.

CUADRO 27

Evolución de la superficie de cultivo en las tres provincias valencianas durante el periodo 1860 - 1890 (en hectáreas)

	Alicante		Castellón		Valencia	
	1860	1886-1890	1860	1886-1890	1860	1886-1890
Secano *						
Barbecho	54.061,5	?	14.521	21.881	33.870	39.595
Tierras sin cultivar (erm temporer)	-	?	8.089	12.189	923	7.800
Sembrado	54.061,5	14.514	30.275	45.625	49.531	44.947
Total cereales	108.123	14.514	52.885	79.695	84.324	92.342
Viñedo	28.535	51.620	25.438	46.413	60.292	106.459
Olivo	14.226	19.785	11.697	22.815	36.353	31.134
Frutas ***	20.437	6.656	26.050	32.188	60.762	60.000
Total	171.357	92.575	116.070	190.251 **	241.731	289.935
Regadío						
Cereales y leguminosas	25.449	25.801	5.796	14.267	76.482	65.559
Viñedo	3.868	34.715	2.005	913	4.491	7.300
Olivo	4.022	-	1.357	185	1.315	669
Hortalizas	904	554	1.140	1.000	2.494	3.500
Frutas ***	892	892	704	2.730	545	7.150
Plantas industriales	2.500	1.000	2.800	800	1.000	600
Tubérculos, raíces y bulbos	600	1.550	800	1.000	1.500	5.282
Plantas forrajeras	600	1.500	700	1.011	3.500	11.500
Total	38.835	66.012	15.302	21.906	91.327	101.560
Total cultivado	210.192	158.587	131.372	212.157	333.058	391.495

FUENTE: Garrabou, Ramon (1985), ob. cit., págs. 168 a 178.

* Dentro del secano están incluidos los cereales y leguminosas (ya sea en barbecho, sembrado, etc.)

** Se han incorporado las superficies dedicadas a los tubérculos.

*** Están contabilizados los cultivos arbolados de melocotoneros, ciruelos y albaricoqueros.

secano, sin que pudiera sentirse afectado por la competencia de otras regiones de España o del resto de países europeos⁹⁹⁷.

De acuerdo con las anteriores circunstancias de mantenimiento y renovación en la agricultura, el camino hacia la modernización de las estructuras económicas en las provincias valencianas se fue fraguando a partir de la década de 1830, una vez concretados los decretos desamortizadores, la supresión del diezmo y la ya mencionada abolición de los señoríos. Como muy bien describiera en su día Álvarez Coque, una buena parte de la incipiente burguesía mercantil comprendió las posibilidades que se presentaban para ascender en la esfera social, a través de la adquisición de importantes lotes de tierras y la posterior puesta en cultivo de las mismas, mediante productos que tuvieran una buena aceptación en los mercados extranjeros. Se trataba, pues, en opinión del propio autor, de un claro proceso de expansión «capitalista» que se había iniciado en las provincias de Valencia en contraposición con las estructuras más tradicionales que todavía prevalecían en el conjunto de España. Desde esa perspectiva, la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* comenzó a promover proyectos empresariales con el propósito de favorecer la activación y la modernización económica de la región⁹⁹⁸.

Se comprende así, que durante las primeras décadas del siglo XIX los esfuerzos más sobresalientes de la *Económica* en Valencia estuvieran dirigidos a las cuestiones agrícolas, dada la importancia del sector en la economía de la región y el destacado interés que tenía para las clases terratenientes. Una situación que comenzaría a cambiar a mediados de los años cuarenta con la incorporación a la *Sociedad* de personalidades como

⁹⁹⁷ Entre los años 1850 y 1900 se producirían en Europa dos períodos de crisis en la producción vitícola. En el primero de ellos la enfermedad del *oidium* afectó a una parte considerable de los viñedos en Gran Bretaña, Prusia y la cornisa cantábrica española. Este infortunio terminaría por disminuir la producción de caldos en Alemania, Italia, Francia, así como en destacadas comarcas productoras de Cataluña y La Rioja. En este caso, los viñedos valencianos apenas sufrieron los efectos de la enfermedad. Una segunda etapa de dificultades se produjo como consecuencia de la *filoxera* detectada en Charentes, en Francia, alrededor de 1868 y hasta los primeros años del siglo XX, siendo los viñedos valencianos los últimos en ser afectados. Ibidem, págs. 201 y 202.

⁹⁹⁸ García Álvarez Coque, José María, ob. cit., págs. 430 a 432. Otra perspectiva más podemos encontrarla en la Tesis Doctoral elaborada por Pedro Díaz Marín, en la que refleja la posición de la burguesía ante la comercialización de la agricultura en Alicante. De esta forma, los principales propietarios agrarios de la provincia eran los encargados de impulsar distintas iniciativas desde la Junta de Agricultura. Véase de Díaz Marín, Pedro, *Las estructuras de poder durante la década moderada: Alicante, 1844-1854*, Tesis Doctoral dirigida por Emilio La Parra López, ob. cit., págs. 377 a 380.

Juan Antonio Castejón, Pedro Vicente Galabert o José Campo Pérez, muy vinculados a la primera Caja de Ahorros en Valencia, así como a la *Sociedad Valenciana de Fomento*, y que pondrían en marcha desde el seno de los *Amigos del País* con el propósito de atender las demandas de crédito, tanto de agricultores como de industriales y comerciantes de la región⁹⁹⁹.

Con la presencia en el panorama económico de señalados empresarios y comerciantes, la *Sociedad Económica de Amigos del País* no tardó en nutrirse de profesionales procedentes de la clase media acomodada, la mayor de las veces con vinculaciones políticas y de ideología marcadamente liberal, como Juan Navarro Reverter o Eduardo Pérez Pujol. La nueva burguesía culta y funcional, adquiriría pronto la capacidad para iniciar proyectos de aceleración económica y de transformaciones en las infraestructuras, llevando a cabo los primeros estudios de viabilidad del ferrocarril entre Valencia y Madrid¹⁰⁰⁰.

La heterogeneidad mostrada en la procedencia de los socios de los *Amigos del País*, ya estuviera referida a las zonas urbanas y comerciales, o a las áreas rurales y agrícolas, provocó una amalgama de convicciones y sucesivas controversias, como veremos más adelante, entre socios con afinidades librecambistas y aquéllos que seguían aferrándose al proteccionismo impuesto desde Madrid¹⁰⁰¹. En cualquier caso, en el grueso del ideario de la *Sociedad* siempre tuvieron cabida los proyectos agrícolas que propugnaban la expansión de la vid y del naranjo, atendiendo así a las iniciativas empresariales que animaban a sostener la exportación. Precisamente, el amplio grupo de personas que directamente intentaban vincular el desarrollo económico a la agricultura, junto con el dedicado a las

⁹⁹⁹ La primera Caja de Ahorros en Valencia data del año 1852. Su gestión fue traspasada a la *Sociedad Valenciana de Fomento*, transformándose esta última al poco tiempo en la *Sociedad Valenciana de Crédito y Fomento*. García Álvarez Coque, José María, ob. cit., págs. 433 y 434.

¹⁰⁰⁰ A través de las gestiones del importante socio José Campo, marqués de Campo, comerciante naviero, alcalde de la ciudad de Valencia en 1842 y fundador de la *Sociedad Valenciana de Crédito y Comercio*, se puso en marcha, en 1852, el tramo de ferrocarril entre Valencia y el Grao. Dos años más tarde la vía llegaría hasta Játiva. La unión con Madrid se finalizaría en 1859, estando siempre presente la gestión de la *Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia. Ibidem, pág. 435.

¹⁰⁰¹ La situación en la provincia de Valencia no difería mucho de la que podía existir en Alicante. En correspondencia con las actividades comerciales imperantes en aquellos momentos en la región, una parte considerable de la burguesía mercantil alicantina se había posicionado a favor de la adopción de medidas de carácter librecambista, además de una contención en el intervencionismo que venía practicando el Estado en todo el país. Díaz Marín, Pedro, ob. cit., págs. 428 a 434.

actividades industriales impulsadas por el propio desarrollo agrícola, serían, a la postre los sectores más proclives al proteccionismo arancelario en las provincias del este y sureste peninsular¹⁰⁰².

A esto último contribuyó, entre otras causas, la elección en la Dirección de la *Económica* de Vicente Lassala Palomares en 1866. Vinculado a la agricultura y procedente una familia francesa afincada en Valencia desde mediados del siglo XVIII, Lassala era el paradigma de propietario y empresario al que la cuestión agrícola le preocupaba de manera capital. Comisario Regio de Agricultura, ya en el año 1860 había tenido que renunciar por circunstancias «especiales» e independientes a su voluntad al cargo de Vicedirector de la *Sociedad*¹⁰⁰³. Con la agricultura como uno de los elementos más destacados, en 1867 impulsó la primera exposición regional de productos artísticos, agrícolas e industriales, obteniendo un éxito general y logrando la participación, así como el apoyo, de los Gobiernos civiles de las provincias de Valencia, Alicante, Castellón y Murcia, además de las Diputaciones, las Sociedades Económicas de Alicante, Murcia y Cartagena, y del *Círculo de Labradores de Castellón* y la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, entre otras entidades de la región¹⁰⁰⁴.

La Exposición de Productos Artísticos, Agrícolas e Industriales de 1867, tal y como quedó finalmente denominada, fue considerada la primera Feria Regional de Valencia y un auténtico escaparate para la producción de las provincias que entonces conformaban las tres provincias valencianas y las correspondientes a la Región de Murcia. De las cinco secciones en las que quedó dividida, la primera estaba dedicada precisamente a los “productos agrícolas” y, a tenor de las noticias que se publicaron, constituyó un gran éxito comercial y de público, resultando una novedad para la mayoría de los asistentes¹⁰⁰⁵.

¹⁰⁰² Esta opinión es compartida por Álvarez Coque. *Ibidem*, pág. 438. Asimismo, en relación a las estrategias de explotación de los cítricos se ha consultado el interesante trabajo de Roncalés Soriano, Vicente, “Propiedad y riesgo en los inicios de la expansión citrícola valenciana durante el último tercio del siglo XIX”, en *Historia Agraria*, número 16, 1998, págs. 183 a 208.

¹⁰⁰³ ARSEAPV, C-146, legajo VII, Socios, signature número 1, año 1860.

¹⁰⁰⁴ ARSEAPV, C-172, legajo IX, Exposición Regional, signature número 2, año 1867.

¹⁰⁰⁵ En la División Territorial vigente desde 1833, propuesta por Javier de Burgos, la región de Murcia constaba de dos provincias: Albacete y Murcia. En relación a la Exposición Regional celebrada en Valencia en el año 1867, existe una explicación detallada en el trabajo de Zaragoza Adriaenssens, Salvador, “De las exposiciones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País a la Feria Internacional de Valencia”, en Bas Martín, Nicolás y Portolés Sanz, Manuel (coordinadores), *ob. cit.*, págs. 383 y 384. También en Roig

Vicente Lassala abogó desde sus inicios en los *Amigos del País* de Valencia por la supresión del derecho de portazgos y pontazgos, realizando distintas manifestaciones en las que mostraba su disconformidad y las enormes diferencias que existían en España en comparación a otros países europeos. En un escrito fechado el 18 de noviembre de 1868, lo definía de la siguiente manera: “Este vetusto impuesto es injusto en su origen, desigual en el reparto, vejatorio al tráfico y contrario al fomento de la riqueza”¹⁰⁰⁶. Casi al mismo tiempo, a la petición anterior se sumó otra que estaba referida a la reforma que, en opinión de Lassala, debía abordarse en el sistema de imposición de la contribución territorial¹⁰⁰⁷.

En cierto sentido, una respuesta más a las continuas demandas de los propietarios y terratenientes agrícolas valencianos fue la creación, en febrero de 1859, de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*. Las dificultades que acarreaba la política de precios en los productos agrícolas, la escasa revalorización de los mismos, además de la política impositiva ejercida desde Madrid y el indudable desbordamiento en los quehaceres de la *Sociedad Económica*, llevaron a un significativo colectivo de agricultores y hacendados de reconocido prestigio, pertenecientes entonces a la Junta Provincial de Agricultura, a considerar la posibilidad de crear una corporación que sirviera como órgano de defensa al campo valenciano¹⁰⁰⁸.

El 19 de junio de 1858 quedaron aprobados los Estatutos por el Gobierno Civil, presidido en aquellos momentos por José María Ferrándis Estruch, quien sería, además, uno de los primeros socios fundadores de la nueva Asociación, teniendo lugar el Acta fundacional el 24 de febrero de 1859 (véase el cuadro 28). Con poco más de ciento sesenta mil habitantes, un entramado de calles aún sin pavimento y el agua potable recién llegada a

Condomina, Vicente M^a, “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia como promotora de las Bellas Artes: el ejemplo de las exposiciones del siglo XIX”, en *Real Sociedad Económica de Amigos del País. Anales 1999-2000*, vol. II, Valencia, 2001, págs. 928 a 931.

¹⁰⁰⁶ ARSEAPV, C-177, legajo IV, Comercio, signatura número 1, año 1868.

¹⁰⁰⁷ ARSEAPV, C-177, legajo VII, Varios, signatura número 3, año 1868.

¹⁰⁰⁸ En la actualidad la Asociación continúa sus actividades bajo el nombre de *Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes*. La *Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia, iría perdiendo importancia gradualmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Parte de sus funciones irían pasando al Ateneo Mercantil, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, y a la propia *Sociedad Valenciana de Agricultura*. Véase a este respecto la obra de Úbeda Balaguer, Vicent A., ob. cit., pág. 21.

la ciudad, Valencia se incorporaba así a las localidades poseedoras de representación legítima de las clases propietarias y agrícolas del país¹⁰⁰⁹.

CUADRO 28

Socios fundadores de la Sociedad Valenciana de Agricultura en 1859

Nombre	Profesión y rasgos personales
Joaquin Carrascosa Hernández	[Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia. Primer Presidente de la <i>Sociedad</i>
Vicente Prosper Blanchard	[Abogado y propietario. Miembro de la Junta de la Acequia Real del Júcar
José M ^a Ferrándis Estruch	[Gobernador Civil, diputado a Cortes por Játiva. Presidente entre 1863 y 1868
Augusto Belda Alfonso	[Secretario de la Sociedad entre 1863 y 1868. Propietario y alumno de la Escuela de Agricultura de Versalles
Alejandro Buchaca Freire	[Agricultor, Director de Caminos Vecinales y colaborador en la revista de la Asociación
José Salvador Nebot	[Propietario y socio de la <i>Económica del País</i>
Francisco de Paula Faus y Escrivá	[Conde de Rótova. Propietario. Uno de los fundadores de la <i>Revista La Agricultura Valenciana</i>
Juan Bautista Berenguer y Ronda	[Agricultor. Miembro de la <i>Sociedad Económica</i>
José Juanes y Navarro	[Agricultor y abogado.
Peregrín Caruana Martín	[Propietario

FUENTE: Úbeda Balaguer, Vicent A., ob. cit., págs. 30 y 31.

Hasta mediados del siglo XIX, la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia habían venido realizando un notorio esfuerzo en distintos campos, destacando el de la agricultura por encima del resto. No en vano, era la sección encargada del agro la que había empezado a acumular un excesivo volumen de trabajo, dejando entrever ciertas dificultades a la

¹⁰⁰⁹ Ibidem, págs. 22 a 24.

hora de delimitar las actividades asignadas en los Estatutos. Algunos socios de la *Económica* comenzaron a considerar la posibilidad de constituir otras sociedades que, de forma independiente, pudieran igualmente desarrollar una labor práctica, abarcando los intereses de colonos y propietarios, sin que ninguno de ellos tuviera que anteponerse necesariamente¹⁰¹⁰. En todo caso, las oportunidades de ascenso económico propiciadas también en otras partes de la geografía valenciana, habían dado ya lugar a un notable incremento en el número de propietarios locales, sin que ello significara el abandono del papel de relativa marginalidad que habían venido ejerciendo hasta entonces en las cuestiones relacionadas con los problemas y los intereses de las élites agrícolas¹⁰¹¹.

La idea no era nueva, ya que en 1849 el conde de Ripalda había solicitado el apoyo de la *Sociedad* valenciana para crear una serie de comisiones o sucursales en las ciudades más importantes. En un escrito fechado en enero de 1849, dirigido al Director de la *Económica* de Valencia y firmado por el propio Ripalda, éste se refería así a la citada cuestión:

Convencido de la utilidad de dar ensanche á los beneficos trabajos de esa Sociedad propuse hace algunos años que se establecieran comisiones sucursales en las ciudades y grandes villas, que manejandose los fondos que reunieran solo dependan de V. E. en cuanto a su institución y orden exterior. La experiencia ha fortificado mi convencimiento por lo que escito el celo de V. E. para que, si lo tiene a bien me ayude á fundar estas comisiones que aumentarán la prosperidad del pais y la gloria de esa benemérita corporación¹⁰¹².

De acuerdo con el propósito planteado y toda vez que en 1855 era conocido el Reglamento del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, la Comisión de Agricultura de la *Sociedad Económica* en Valencia propuso ese mismo año reorganizar sus trabajos, aunque oponiéndose a la creación de una sociedad distinta a la que representaban. La idea, en principio bien acogida, no contó con el acuerdo de todos los socios. Tal y como queda recogido en el propio Archivo de los *Amigos del País*, Vicente Ferrer y

¹⁰¹⁰ Ibidem, pág. 25.

¹⁰¹¹ Millán García-Varela, Jesús, *El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-1890*, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante, 1999, págs. 91 a 110.

¹⁰¹² ARSEAPV, C-123, legajo VIII, Socios: nombramientos y correspondencia, signatura número 1, año 1849.

Fuertes, socio de la misma, remitió una carta a la Comisión el 18 de abril de ese mismo año explicando su opinión favorable a la creación de una “Sociedad especial de Agricultura” que fuera independiente, a pesar de ser contraria a la opinión generalizada de los miembros de dicha Comisión.

A través de una extensa comunicación de catorce páginas, la misma razonaba su negativa, entre otras razones, con los siguientes pretextos: “El objeto del Instituto agrícola Catalan es, como se espresa en el artículo 1º del Reglamento suyo, fomentar los adelantos del cultivo y economía rural, y disfrutar de los amenos pasatiempos que proporciona la Buena Sociedad. En este segundo objeto no cree la Comision que deba ocuparse la Sociedad económica, ni que sea necesario ni conveniente hacer mas que lo que se ha hecho en Valencia”. Más adelante explicaba: “La sociedad económica en su estado actual n o puede satisfacer cumplidamente á esa necesidad privada de la funcion que se la habia concedido sobre las rentas decimales del Arzobispado, no tiene mas recursos para cubrir sus muchas atenciones que la contribucion que pagan sus individuos. Y el producto de esa contribucion se invierte principalmente en las atenciones generales de la Sociedad y en las particulares distintas de la agricultura y originadas por la naturaleza misma de los ramos objeto de ellas”. Tras argumentar las dificultades para adquirir publicaciones útiles a la agricultura y conocer las necesidades de ésta en la provincia, debido a la escasez de recursos, la Comisión finalmente justificaba la decisión de su oposición a crear una nueva sociedad y costear su establecimiento.

¿Deberá establecerse una Sociedad espacial Valenciana de agricultura ó acordarse en la Sociedad economica lo necesario para que pueda llenar el objeto de aquella? La comision que cree muy posible y sencillo el corregir lo ultimo; lo prefiere a lo primero en que por otra parte encuentra no pocos inconvenientes para á exponerlos. Una Sociedad especial valenciana de agricultura sería una sociedad nueva que tendría que formar sus estatutos, obtener la aprobacion de ellos por el gobierno; adquirir un local para sus juntas y costear su entretenimiento; hacer gastos de secretaria, Biblioteca, Archivo y los demas generales á una corporación de su clase; reunir suficiente número de individuos con cuya contribucion pudiera mantenerse atendiendo al objeto de su instituto, y con cuyos trabajos pudiera cooperar á él y adquirir en el Pais el crédito necesario¹⁰¹³.

¹⁰¹³ ARSEAPV, C-135, legajo I, Agricultura, signatura número 6, año 1855.

Vistas las dificultades que representaban para la *Económica* la organización y el establecimiento de una nueva asociación de propietarios y agricultores en Valencia, fue la Junta Provincial de Agricultura quien finalmente aceptó la posibilidad de llevar a cabo la creación de una institución que actuara al margen y con independencia de la primera, iniciando las formalidades de lo que sería la *Sociedad Valenciana de Agricultura*. En cualquier caso, algunas de las personas más destacadas de la Junta lo eran también en la *Sociedad Económica*, hecho que no dejaba de sorprender y que finalmente se resolvería varios años más tarde, al aprobarse una resolución por parte de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* en la que consideraba miembros de esta última a todos los socios de la *Económica* pertenecientes a la sección de agricultura. Aunque la decisión terminara adoptándose en 1876, la realidad era, tal y como se recogía el escrito de aprobación, que los *Amigos del País* en Valencia siempre serían considerados como “la mas antigua y distinguida de las instituciones protectoras, de los intereses y adelantos de la Provincia”¹⁰¹⁴.

A la primera reunión convocada con el fin de dar forma a la nueva entidad agrícola acudieron 43 personas que representaban a una gran parte de la vida económica, social y política de Valencia. Tras la aprobación de los Estatutos, la primera directiva eligió como presidente a Joaquín Carrascosa Hernández, cargo que ocuparía hasta el mes de enero de 1864. Según se recogía en los mismos, la *Sociedad Valenciana de Agricultura* estaría compuesta por nueve secciones, figurando al frente de cada una de ellas un presidente, un secretario y un vicesecretario (véase el cuadro 29). Además de señalar el marcado carácter agrícola y la defensa de los intereses de propietarios y labradores, la nueva asociación eludía cualquier tentación en materia política o religiosa. En concreto, su artículo 20 establecía: “En las Juntas de la Sociedad, no se consiente ninguna discusion ni conversación siquiera sobre materias religiosas ni políticas”¹⁰¹⁵.

¹⁰¹⁴ Con la reforma estatutaria que llevaría a cabo la *Sociedad Valenciana de Agricultura* en 1876, se acordaba incluir a todos los miembros de la Sección de Agricultura de la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia en la lista de socios de aquélla. ARSEAPV, C-198, legajo I, Agricultura, signatura número 5, año 1876.

¹⁰¹⁵ *Estatutos de la Sociedad Valenciana de Agricultura*, Imprenta de El Valenciano, antes de B. Monfort, Valencia, 1859. Por otro lado, y en su artículo primero, dejaba marcado el objetivo primordial de la nueva asociación. A este respecto se constataba lo siguiente: “La Sociedad Valenciana de Agricultura tiene por objetos el fomento de la agricultura del pais en todos sus ramos, y la proteccion y defensa de los intereses de propietarios y labradores”.

La primera sede se situó en un local cedido por la Escuela Industrial, ubicación que mantendría hasta la concesión, por parte del Ayuntamiento de la ciudad, de un espacio habilitado en los entresuelos de la antigua Casa de la Ciudad, una situación en la que permanecería hasta el verano de 1860. Alterando sucesivamente su emplazamiento, no por ello dejó de mostrar holgadas ambiciones en sus cometidos. Con una cuota por socio de 60 reales, existía la posibilidad de ser considerado miembro o socio «protector», lo que implicaba el pago de una cuota mensual cinco veces mayor a la habitual. De este modo, el primer asiento registrado en el libro de contabilidad de la *Sociedad* fue de 5.420 reales de vellón¹⁰¹⁶.

CUADRO 29

Secciones de la Sociedad Valenciana de Agricultura

Nombre

- Ciencias Auxiliares
- Legislación económica y administración rural
- Cultivos especiales
- Artes agrícolas
- Cría y aprovechamiento de animales
- Ciencias naturales
- Horticultura y floricultura
- Montes
- Industrias rurales y de Zootecnia

FUENTE: *Estatutos de la Sociedad Valencia de Agricultura*, ob. cit.

La actitud de los socios desde el primer momento fue enteramente práctica y efectiva, por cuanto una de las primeras tareas fue la de abordar el estudio de la composición química de las tierras de labor, así como las variantes climatológicas, con el fin de poder determinar la mayor eficacia de la producción hortícola y arbórea. Se desarrollaron trabajos dirigidos a la mejora en la producción serícola y se importaron semillas desde Japón para

¹⁰¹⁶ Entre los primeros socios protectores figuraban, por ejemplo, Joaquín Carrascosa, primero de sus presidentes y Vicente Lassala Palomares. *La Agricultura Valenciana*, número 6, 24 abril de 1864.

el cultivo del «bombix cynthia», insecto lepidóptero que mejoraba dicha industria. Solo cuatro años después de su fundación, en febrero de 1863, con el apoyo de la Diputación Provincial de Valencia y de los talleres de José Doménech, la Sociedad comenzó a editar la revista *La Agricultura Valenciana*, difundiéndose muy rápidamente y alcanzando un extraordinario prestigio, tanto en España como en Europa. La calidad de la publicación determinó una gran aceptación en el ramo de la agricultura al reflejar de una forma acertada las preocupaciones de los labradores, además de tratar los medios y las formas en las que debían hacerse frente los trabajos diarios en el campo¹⁰¹⁷.

A lo largo de los primeros años de presencia en la actividad agrícola valenciana, la *Sociedad* se manifestó de una manera significativa, impulsando medidas para la ampliación de cultivos como la remolacha, el maíz de Cuzco, el arroz del Perú o el algodón, introduciendo nuevos aperos de labranza y creando, además, una comisión con la idea de establecer un campo experimental agrícola. Las actividades se extendieron al desarrollo urbanístico de la ciudad, a través de quien era en aquellos años Gobernador Civil y miembro de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, Cirilo Amorós, iniciándose entonces el derribo de las murallas medievales en la capital¹⁰¹⁸. En este período, y hasta 1868, la *Sociedad*, muchas veces de la mano de los *Amigos del País*, iniciaron una enconada defensa de la propiedad y de la producción agrícola que, aunque no siempre de forma unánime, supuso una importante forma de presión ante problemas como los aranceles, la contribución de consumos, las acequias de regantes o los acotamientos en las plantaciones de arroz, por poner solo algunos ejemplos. Durante las sucesivas etapas de coexistencia entre ambas sociedades y hasta el advenimiento de la llamada «Septembrina», llegarían en ocasiones a disputarse la iniciativa por tutelar los derechos de los labradores, dando lugar a una etapa muy fructífera en el conocimiento y desarrollo del asociacionismo español del siglo XIX.

¹⁰¹⁷ Ibídem, págs. 55, 57 y 58. *La Agricultura Valenciana*, número 3, 8 de marzo de 1865, pág. 46.

¹⁰¹⁸ Úbeda Balaguer, Vicent A., ob. cit., págs. 59 a 61.

- La singularidad reivindicativa del asociacionismo agrícola valenciano. Acción conjunta y disidencia

La estrecha relación que venía manteniendo la economía valenciana con los mercados exteriores produjo notables disimilitudes respecto al conjunto de la economía española, hecho que se mantendría también durante la segunda mitad del siglo XIX. Esta singularidad era debida, en gran medida, al crecimiento logrado durante la centuria anterior, sin haber alterado significativamente las técnicas productivas en el campo de la agricultura e intensificando los cultivos a través de nuevas parcelas de regadío, muchas veces ampliando el laboreo a tierras de inferior calidad. A todo ello se sumó un aumento en la comercialización de excedentes alimentarios, surgido a partir de los años sesenta del siglo XIX, resultado del considerable incremento en los precios de los mismos y de la demanda surgida por parte de algunos países europeos. En consecuencia, la capacidad del sector comercial se vio encaminada hacia un aumento sostenido, al tiempo que mermaba la agricultura dedicada al autoconsumo¹⁰¹⁹. Mirándolo de esa forma, el nuevo período abierto, caracterizado por la innovación en los cultivos, la generalización del guano, así como por la utilización de maquinaria moderna en las labores del campo, conformaría un carácter propio al agro valenciano, sumamente diferenciado del que habría de predominar en el resto de España¹⁰²⁰.

Las distancias establecidas entre la economía regional valenciana y la del resto del país, determinarían, asimismo, diferencias en el comportamiento asociativo, sobre todo en lo relativo a la política arancelaria. Tras los sucesivos intentos y fracasos en los proyectos de reforma surgidos desde 1857, no fue hasta la firma del Tratado Cobden-Chevalier y, sobre todo, hasta la llegada del ministro Salaverría, cuando definitivamente se retomaría un amplio proyecto de reforma arancelaria que respondiera a las que se estaban llevando a cabo en otros países europeos.

A la *Sociedad Económica de Amigos del País* habían llegado a comienzos de la segunda mitad del siglo XIX, solicitudes para proteger la

¹⁰¹⁹ Palafox Gamir, Jordi, “La economía valenciana en los siglos XIX y XX”, *Papeles de economía española*, número 20, Fundación Fondo para la Investigación Económica y social, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1984, pág. 298.

¹⁰²⁰ Giralt i Raventós, Emili, *Empresaris, nobles i vinyaters. 50 anys de recerca històrica*, Universitat de València, 2002, págs. 165 a 180.

industria manufacturera de paja con el fin de no entorpecer la fabricación de sombreros fabricados con dicho material en la región¹⁰²¹. La menor importancia adquirida por el cultivo del trigo y la producción de harina en los campos valencianos, permitió que fueran otros productos como el arroz y las naranjas, los que presentasen un mayor interés desde el punto de vista de los derechos aduaneros. A ellos no tardó en sumarse la preocupación por las elevadas tasas que la maquinaria agrícola extranjera adquiriría en los mercados tras aplicárseles los correspondientes recargos arancelarios.

A finales de los años cincuenta se comenzó a insistir, por parte de los propietarios de tierras arrozales de Valencia, para que se limitara la entrada de arroces foráneos, toda vez que se habían comenzado a publicar Reales Órdenes y Decretos permitiendo la libre importación a toda clase de semillas alimenticias¹⁰²². En su escrito dirigido a la Reina, a través de los *Amigos del País*, los propietarios solicitaban que se mantuviera vigente la legislación aprobada en los años 1847 y 1856, a fin de que el arroz importado desde el exterior pudiera seguir soportando el pago de los derechos establecidos¹⁰²³. A ellos se unieron el propio Gobernador Civil, además de los miembros del Canal de Riego del río Turia, quienes aseguraban que la libre introducción de arroz “si llegara a realizarse producirá el mayor trastorno, y la absoluta decadencia de la agricultura”¹⁰²⁴.

La cuestión del arroz, discutida especialmente en la *Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia, tuvo su prolongación en los años sesenta, vislumbrándose las primeras disidencias entre los socios de la misma. En octubre de 1862, al tiempo que la Comisión de Agricultura informaba desfavorablemente a la libre importación de arroz extranjero, se producía el voto particular del socio Francisco Danvila, quien admitía su desavenencia y solicitaba que fuera la propia *Sociedad Económica* la que a través de su Dirección apoyara “con toda su influencia la libre introducción del arroz filipino en nuestra Península”¹⁰²⁵.

¹⁰²¹ La petición fue hecha, en efecto, por el fabricante de sombreros de paja Baltasar Settler en 1851. ARSEAPV, C-127, legajo II, Industria y Artes, signature número 5, año 1851.

¹⁰²² En concreto, las Reales Órdenes de 26 de enero y 18 de febrero de 1857, además de los Reales Decretos de 13 de mayo y 30 de junio de ese mismo año, establecían la importación libre de derechos para las semillas alimenticias extranjeras. *Guía Legislativa*, Imprenta de D. Alejandro Gómez Fuentenebro, Madrid, 1859, págs. 300 y 301.

¹⁰²³ ARSEAPV, C-137, legajo I, Agricultura, signature número 8, año 1856.

¹⁰²⁴ ARSEAPV, C-139, legajo I, Agricultura, signature número 1, año 1857.

¹⁰²⁵ ARSEAPV, C-152, legajo I, Agricultura, signature número 19, año 1862.

El hecho es que pocos meses después, la situación creada por la posibilidad de importar arroz desde las colonias, en concreto desde Filipinas, se agravó al incorporarse a las tesis de Francisco Danvila, una serie de escritos que estaban firmados por los socios José Royo y Salvador, José Valor, así como por alguien que se identificaba como A. Fuentes. Éstos, argumentaban la incoherencia de la legislación arancelaria al considerar los productos de aquellas tierras extranjeros, ya que sus ciudadanos eran, en todo caso “tan españoles legalmente como los peninsulares”. En su escrito, fechado el 22 de abril de 1863, Fuentes lo manifestaba de la siguiente forma: “Con sentimiento he disentido de mis dignos compañeros de Comision sobre el derecho arancelario que en concepto de la misma haya de fijarse á la introduccion en España del arroz estranero obligandome a que presente voto particular. En su consecuencia tengo el honor de proponer á esta ilustrada y celosa Sociedad pida al Gobierno de S. M. que el arroz estranero se comprenda en la base 4^a de la reforma arancelaria estudiada, imponiendole el derecho de 20% que á los seis años de establecido ha de reducirse á 12% gradualmente”. Más adelante, finalizaba sus argumentos recordando las ventajas del libre cambio y destacaba que: “Con este derecho desaparece la proteccion perjudicial á la misma industria arrocera y á las que potentes se desarrollan en el país, facilitando la transición del sistema proteccionista al del libre cambio que tan provechosos resultados ha de producir en esta rica Provincia cuyo suelo tiene grandes condiciones naturales de existencia”¹⁰²⁶.

Las corrientes librecambistas dentro de la *Sociedad Económica*, aunque menos compactas que las proteccionistas, habían sido enjuiciadas a través de distintos socios, sirviendo como fondo las propuestas planteadas por el *Círculo Económico Español*. Aprobadas las directrices de este último en abril de 1860, Juan Bautista de Tamarit remitió a la Comisión de Agricultura, como socio de la *Económica*, una fuerte crítica, además de los inconvenientes que producía el libre cambio en España. En este sentido, Tamarit animaba a los socios a no caer en el error, a pesar de la fuerte influencia que la nueva doctrina económica estaba generando por todo el país. Refiriéndose al problema, se podía leer lo siguiente: “La ilustración de

¹⁰²⁶ El escrito, tal y como se desprende del propio Archivo de la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia, correspondería a Anselmo Fuentes. Véase ARSEAPV, C-158, legajo IV, Comercio, signatura número 9, año 1863. También de la caja C-158, y legajo IV, la signatura número 5.

sus individuos que mucho aprecio, les convencera que así como en cualquier negocio de la vida hay momentos críticos que deciden la suerte de las cosas, el negocio que nos ocupa para en estos instantes por tal situación, y de la energía empeño y perseverancia depende contrarrestar un mal que más tarde sea ya tal vez inevitable”¹⁰²⁷.

Mediados los años sesenta, las cuestiones relativas al resto de la producción cerealícola, como era el caso del trigo, apenas sí creaban conflictos de importancia, dado que no estaba considerado como un artículo prioritario a tener en cuenta en los cultivos de las comarcas valencianas. Valga un ejemplo muy significativo, apuntado por *La Agricultura Valenciana*, en el que se comparaba la rentabilidad y la capacidad para producirlo respecto a otros países extranjeros, desestimándolo como un artículo para la «cosecha» industrial. Uno de sus articulistas escribía: “Compárense además los gastos de la producción del trigo en esos países, donde no se hace más que confiarlo á la tierra y recoger á su tiempo la mies, con lo que sucede en el nuestro, donde ha de preceder el abono y se ha de ayudar á la vida de la planta con escardas repetidas y riegos periódicos, y se tendrá la convicción de que si en nuestros campos se cultiva aun el trigo, es más por asegurar un depósito de paja, elemento casi indispensable en la casa del labrador, que con la mira de obtener ganancias”¹⁰²⁸.

Un aspecto que sí preocupó a los propietarios valencianos fue la producción de cítricos, a la que se vio en la necesidad de proteger a través de todos los órganos e instituciones por sus considerables rendimientos. Tanto desde la *Sociedad Valenciana de Agricultura* como desde la *Sociedad Económica de Amigos del País*, se solicitó la intervención del Gobierno de Madrid para mediar con las autoridades francesas y facilitar una modificación efectiva sobre los derechos que gravaban las naranjas españolas en este país. El celo puesto por los socios de esta última se constataba en un escrito dirigido a la Dirección, por parte de Vicente Wenceslao Querol y Teodoro Llorente, en el que se justificaba cualquier medida que pudiera beneficiar la entrada de naranjas españolas en el mercado francés.

¹⁰²⁷ ARSEAPV, C-146, legajo IV, Comercio, signatura número 3, año 1860.

¹⁰²⁸ *La Agricultura Valenciana*, número 13, 8 agosto de 1865.

El cultivo de la naranja, uno de los mas productivos en este país, va alcanzando tan intenso desarrollo, que obliga á pensar en los medios de ir ensanchando el mercado de tan precioso fruto. En Valencia donde en la actualidad se consume gran parte de la naranja española, y especialmente de la valenciana, está aquella gravada con un derecho de importacion superior al que se ha fijado para la de otras procedencias. Obtener del gobierno imperial la desaparicion de esta desigualdad gravosa para nuestra agricultura y comercio, sería una mejora utilísima para el país. Los señores Diputados á Córtes por esta provincia comenzaron á gestionar hace algunos meses para que nuestro gobierno entablase negociaciones con el francés, con objeto de lograr este resultado, que parecía probable en vista de algunas reformas que en el Arancel español se preparan, de las que ha de redundar beneficios el vecino imperio. Y como nada mas propio de la Sociedad de Amigos del País que contribuir á que las indicadas gestiones de los dignos representantes de Valencia, se vean coronadas por el apetecido éxito, tenemos el honor de proponer que esta distinguida corporación eleve una esposicion al gobierno de V. M. encareciendo la importancia de la rebaja de derechos de introduccion de la naranja española en Francia, y la conveniencia de que se intente conseguirla del gobierno imperial¹⁰²⁹.

Pese a todas estas consideraciones, el intento por conseguir un acuerdo ventajoso en la exportación de cítricos se mantuvo vigente algunos años más, incluso se reavivó en 1864, al unirse a la campaña algunos municipios de la isla de Mallorca, así como la *Sociedad Valenciana de Agricultura*. Esta última, a través de su presidente José María Ferrándis y Estruch, elaboró una solicitud formal al Gobierno para que se realizaran todas las mejoras que pudieran realizarse en este sentido¹⁰³⁰. Lo cierto es que las cifras de las exportaciones de naranjas alcanzarían pronto un más que significativo crecimiento, extendiéndose en el tiempo hasta los primeros años de la centuria ulterior. La consecuencia de todo ello fue un aumento en la cuota de mercado, pasándose de un valor próximo a los 2,7 millones de pesetas durante el período 1855-1959, hasta los 57,7 millones de pesetas alcanzados en los primeros años del siglo XX¹⁰³¹.

Una de las mayores contribuciones al éxito exportador de los cítricos valencianos hay que buscarla en la red de caminos y ferrocarriles, hecho que

¹⁰²⁹ El escrito está fechado en Valencia, el 29 de octubre de 1862. ARSEAPV, C-152, legajo I, Agricultura, signatura número 14, año 1862.

¹⁰³⁰ ARSEAPV, C-160, legajo I, Agricultura, signatura número 6, año 1864, y *La Agricultura Valenciana*, número 13, 8 agosto de 1864,

¹⁰³¹ El dato está recogido de Shubert, Adrian, ob. cit., pág. 26

permitió el acarreo de mercancías agrícolas desde las comarcas productoras del interior hasta los puertos de embarque. Durante los años cincuenta y sesenta se produjeron distintas solicitudes al Gobierno y a las Cortes, desde las asociaciones de productores y agricultores, con el fin de dar validez a los múltiples proyectos que sobre la red ferroviaria se iban sucediendo. El interés despertado por unir el Grao de Valencia o el puerto de Alicante con localidades como Játiva, Almansa, Cuenca, Tarragona o Madrid, se había iniciado ya en la década de 1840 por medio de la Junta de Comercio, apoyada constantemente por la *Sociedad Económica de Amigos del País*¹⁰³². Es difícil conocer hasta qué punto influyó la presión de los propietarios y comerciantes valencianos por dar validez a la construcción de un eje mediterráneo, especialmente cuando en el «mapa» ferroviario diseñado desde Madrid prevalecía la unión de la capital del país con aquellos puertos y fronteras de mayor provecho estratégico. Solo así puede entenderse la construcción en 1858 de un trazado como el de Madrid a Alicante, con la aportación de capital extranjero y explotado por la compañía MZA. Por último, restaba la mejora en los puertos y muelles marítimos para poder atender la demanda exportadora, motivo por el que dársenas como la del Grao en Valencia pasaron a ser consideradas prioritarias en su adecuación y modernización¹⁰³³.

En otro orden de cosas, entre los meses de diciembre de 1863 y noviembre de 1867, la *Sociedad Valenciana de Agricultura* elaboró varios informes en los que se advertía de la necesidad de obtener una rebaja en los derechos que gravaban la maquinaria y los instrumentos de agricultura. Esta petición se sumaba a las de otras entidades agrícolas y de propietarios, como las del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, quienes venían

¹⁰³² Existe una amplia documentación en el Archivo de la *Real Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia, relativa al interés por el establecimiento de una amplia red de vías férreas en las provincias que fuera eficaz en el transporte de los productos agrícolas desde el interior hacia los mercados peninsulares, así como a los muelles con proyección internacional, como era el caso del Grao en la capital levantina. Véanse, por ejemplo, ARSEAPV, C-115, legajo IV, Comercio, signatura número 3, año 1845; ARSEAPV, C-127, legajo VI, Varios, signatura número 4, año 1851; ARSEAPV, C-135, legajo VI, Varios, signaturas números 6 y 9, años 1854 y 1855, respectivamente. También en *La Agricultura Valenciana*, número 6, 24 abril de 1864.

¹⁰³³ Entre los años 1850 y las primeras décadas del siglo XX se procedió, en efecto, a dar un importante impulso a las infraestructuras de puertos, caminos, además de hacerlo con la red ferroviaria. En relación al transporte marítimo, hay que tener en cuenta que hasta 1850, el único puerto capaz de soportar buques de gran calado era el de Alicante, en detrimento de la dársena de Valencia. De esta forma se emprendieron obras en Vinaròs, Dénia o la propia capital valenciana. Una explicación en Piqueras Haba, Juan (1997), ob. cit., págs. 508 a 520.

demandando la intervención desde Madrid para facilitar el acceso de los agricultores a nuevas herramientas desarrolladas ex profeso para las tareas agrícolas. Como ya se indicó más arriba, el Gobierno, a través de un Real Decreto del mes de noviembre de 1867, corrigió los aranceles, reduciéndolos desde el 6 por ciento al 1 por ciento¹⁰³⁴.

Por las mismas fechas, la *Sociedad Económica* dedicaba parte de su atención a la Comisión mixta de agricultura y comercio, que debía informar al Ministerio de Ultramar sobre la rebaja de los derechos arancelarios a las harinas extranjeras introducidas en Cuba y Puerto Rico. La petición, hecha a partir de las opiniones vertidas en la sección de agricultura, llegó a solicitar que se rebajaran a un 12 por ciento los derechos de las harinas que arribaran hasta los puertos antillanos¹⁰³⁵.

A comienzos del año 1863, coincidiendo una vez más con el proyecto presentado a las Cortes por el ministro Salaverría, varios socios de la *Económica* en Valencia comenzaron a disentir de lo que hasta ese momento había sido la actitud oficial, manifestando su apoyo para que fuera atendida la reforma arancelaria que se acababa presentar. Las desavenencias creadas por parte de quienes avalaban las tesis del libre cambio, venían a evidenciar una estructura más fraccionada de lo que en un principio podía pensarse dentro de la Institución. Esta actitud se reflejaba en los escritos dirigidos al Director de los *Amigos del País*, en los que, entre otras cosas, podía leerse lo siguiente: “Entre las trabas que nuestras leyes administrativas oponen al desarrollo del comercio, dificultando las relaciones internacionales, segura garantía de paz y prosperidad mutua, las mas opresoras son sin disputa las que tienen su origen en las Ordenanzas de Aduanas”¹⁰³⁶. El cambio de

¹⁰³⁴ En efecto, La Juntas de Agricultura en Soria, Huesca y Sevilla se sumaron en estos años a la demanda de rebajas en los aranceles de importación en maquinaria agrícola. La idea era que, una vez introducidas podían ser adaptadas, incluso confeccionadas y construidas por fabricantes españoles. Con ello se pretendía abaratar los precios y hacerlas llegar al mediano y pequeño agricultor. Puede consultarse de Moral Ruiz, Joaquín del (1979), ob. cit., págs. 38 a 49. Además de las fuentes ya mencionadas, puede verse también *La Agricultura Valenciana*, número 19, 8 noviembre de 1867, págs. 378 a 381.

¹⁰³⁵ ARSEAPV, C-156, legajo I, Agricultura, signatura números 11 y 14, año 1863.

¹⁰³⁶ El primero de los escritos relacionado con el tema aparece firmado por cuatro de los socios más destacados de la Sociedad. En concreto las firmas corresponden a Eduardo Atard, Teodoro Llorente, Anselmo Fuentes y Antonio Polo. Cabe recordar, además, y de acuerdo con el Decreto de las Cortes Españolas de 8 de junio de 1813, en concreto su artículo 5º, el carácter consultivo y de asesoramiento a los poderes públicos que tenían las Sociedades Económicas en España. ARSEAPV, C-158, legajo IV, Comercio, signatura número 6, año 1863.

mentalidad y de actitud requería la colaboración, además del sostén ideológico del resto de Sociedades Económicas, situación que era sobradamente conocida por los socios. No es extraño, por consiguiente, que al referirse a este asunto se hiciera con absoluta sinceridad: “La reforma de las Ordenanzas de Aduanas son por lo tanto una necesidad imperiosa y urgente y las Sociedades Económicas pueden contribuir poderosamente á su realizacion, si despues de un detenido estudio del asunto, esponen al Gobierno la conveniencia y el modo mas adecuado de llevarla á cabo”¹⁰³⁷.

Debatido este aspecto, la *Sociedad Económica* remitió un escrito al ministro de Hacienda en el que se recordaban los beneficios producidos a las manufacturas tras la reforma arancelaria de 1849, una vez rebajados los derechos arancelarios de las mismas y siguiendo actuaciones similares a la de otros países europeos en los que habían prevalecido las medidas librecambistas. En el mencionado documento se razonaba de la siguiente manera: “El mismo fenómeno, que nada tiene de anormal, ni de sorprendente, se repetiría ahora, si, dando un nuevo paso en la liberalizacion de los aranceles, se realizase esa reforma tantas veces prometida desde las altas regiones oficiales; de este modo los intereses de los consumidores se verían favorecidos y al mismo tiempo se desarrollaría la industria fabril con gran ventaja en especial de las provincias agricultoras, sacrificadas al industrialismo que presidió á la formacion de nuestros aranceles”¹⁰³⁸.

Con la *Sociedad Económica* inmersa en el entorno del libre cambio, en el otro escenario más destacado del asociacionismo agrícola valenciano iba a iniciarse una etapa de fuerte acoso a la política fiscal que, desde hacía años, venía afectando estrechamente, tanto a agricultores como a propietarios del campo. En poco menos de seis años, las protestas contra los consumos, el subsidio industrial, así como la contribución territorial, iban a llenar un número considerable de páginas en la prensa, además de provocar un sinfín de exposiciones y quejas al Gobierno, la Monarquía y las Cortes.

¹⁰³⁷ *Ibidem*.

¹⁰³⁸ *Ibidem*. En los primeros meses del año 1866, la *Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia nombró una Comisión especial, con el ánimo de estudiar y discutir una posible reforma arancelaria. ARSEAPV, C-167, legajo IV, Comercio, signatura número 1, año 1866.

Como se recordará, desde 1812 España había asumido un sistema impositivo a nivel nacional adquiriendo un destacado protagonismo, tanto la llamada Hacienda Central como las conocidas Haciendas Locales, estas últimas a través de los ayuntamientos y diputaciones, situación que suponía la incorporación definitiva del Estado a unos principios básicos en materia fiscal¹⁰³⁹.

El hecho de que la Constitución de 1812 recogiera la obligatoriedad de contribuir a todos los españoles, sin distinción alguna, y “en proporción de sus haberes para los gastos del Estado”, provocó necesariamente las vinculaciones entre las distintas Haciendas del Estado¹⁰⁴⁰. No obstante, la menor importancia adquirida por los bienes inmuebles en las Corporaciones Locales, en particular como consecuencia de los bienes propios, obligó antes de 1855 a modificar la naturaleza y la percepción de los ingresos, y a intensificar la carga fiscal sobre los ciudadanos. En consecuencia, las continuas dificultades mostradas por la Hacienda Central no habían hecho sino contribuir a las necesidades, en cuanto a lo que a liquidez y a recursos de los municipios españoles se refería. Esta circunstancia obligó finalmente al gobierno moderado de Narváez, en el año 1845, a reformar la fiscalidad en España, convirtiendo así las contribuciones municipales y provinciales en un recargo o «gravamen» de los propios impuestos generales. Esto es, lo que era conocido entonces como las contribuciones de inmuebles, cultivo y ganadería, de industrial y de comercio, así como los consumos. De esta forma, y a través de los impuestos municipales, se consiguió gravar artículos de primera necesidad como carnes, aceites, frutas u hortalizas¹⁰⁴¹.

Por otro lado, las cuotas fijadas mediante la contribución directa que gravaba los bienes inmuebles rústicos o urbanos, debían repartirse entre las provincias en una proporción que estuviera ligada a su riqueza; cuestión que

¹⁰³⁹ La legislación específica sobre régimen local comenzaría su desarrollo en España a través de las leyes de 1823 y 1845, configurándose desde ese momento una serie de corporaciones civiles, políticamente elegidas por un grupo privilegiado de ciudadanos, con funciones y atribuciones que se prolongaban a la gestión económica, en todo caso, controladas en última instancia por el poder central. Moral Ruiz, Joaquín del, *Hacienda Central y Haciendas Locales en España, 1845-1905*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1984, pág. 87.

¹⁰⁴⁰ Desde 1812, quedaron fijadas las facultades de las Cortes en materia fiscal, así como la de los ciudadanos en materia contributiva, recogidas en los Capítulos VII, artículo 131, y el Capítulo II, artículo 8, respectivamente. *Constitucion Politica de la Monarquia Española. Promulgada en Cadiz á 19 de Marzo de 1812*, reimpresión en la Imprenta Nacional de Madrid, 1820, págs. 6, y 39 a 42.

¹⁰⁴¹ Moral Ruiz, Joaquín del, ob. cit., págs. 87 y 88.

era determinada previamente. En efecto, la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, e incluso la propia contribución territorial, estaban ideadas para cargar tributariamente el producto líquido de los cultivos, la propiedad inmueble, además de la ganadería. Un impuesto de «cupos» que pretendía la solidaridad colectiva y que era fijado en su cuantía por el Gobierno en Madrid. La recaudación de los municipios debía ser ingresada en la Tesorería de cada provincia, una entidad gestora que estaba estrechamente relacionada con la Tesorería General. Ésta contaba con una Intervención, sometida a la denominada Contaduría de valores, encargada de la distribución de las rentas públicas¹⁰⁴².

Otro de los aspectos que alentó la disconformidad y crítica de los propietarios y agricultores hacia la política impositiva fue la forma en la que se determinaba la riqueza imponible, ya estuviera dirigida ésta a los municipios o a los propios contribuyentes. Sin la existencia de un catastro, en el amplio sentido de su definición, durante el siglo XIX en nuestro país se decidió asegurar el régimen tributario a una estadística análoga, elaborada por unas Juntas repartidoras que, basada en la declaración personal de cada contribuyente y bajo el nombre de «amillaramientos», comenzó a funcionar a partir de 1850¹⁰⁴³.

Aunque no nos corresponde aquí tratar el estudio y la evolución de la política fiscal durante la segunda mitad del siglo XIX en nuestro país, sí conviene recordar, sin embargo, que con la publicación de la circular de 7 de mayo de 1850 quedaron obligados todos los municipios a elaborar una «cartilla evaluatoria» en la que debían recogerse los rendimientos líquidos por superficie para cada uno de los distintos tipos de cultivos, clases de tierras, ganados y viviendas. De ese modo, se pretendía calcular la riqueza imponible, evitando las diferencias en los rendimientos aplicados a cultivos parejos emplazados en otros municipios. La misma circular apremiaba a las Juntas periciales dispuestas en cada municipio a elaborar el amillaramiento en el que se debía registrar el nombre de cada contribuyente, los bienes y propiedades que estaban sometidos a la Contribución de inmuebles,

¹⁰⁴² Ibidem, pág. 89.

¹⁰⁴³ La Junta estaba formada por igual número de concejales del municipio y de mayores contribuyentes. Sus declaraciones, en principio, debían ser comprobadas por la Administración Tributaria, aunque los trabajos de investigación realizados en este sentido han demostrado una mínima o inexistente intervención de técnicos de la Hacienda del Estado. Vallejo Pousada, Rafael, «La Estadística territorial española desde 1845 a 1900 ¿Por qué no se hizo un Catastro en el siglo XIX?», *Catastro*, Abril, 2010, pág. 85.

indicándose la superficie y la calidad de los mismos. La Dirección General de Contribuciones propuso aquel mismo año que todos los ayuntamientos presentaran los «repartimientos» de la Contribución territorial y dispusieran de los amillaramientos y cartillas evaluatorias¹⁰⁴⁴.

El sistema no gustó en general a la clase propietaria y, desde un cierto número de instituciones nada susceptibles en lo tocante a la adhesión y lealtad hacia el Estado, como lo era, por ejemplo, la *Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia, algunos socios comenzaron a reclamar la implantación de una verdadera estadística que condujera a un sistema más justo de contribución territorial¹⁰⁴⁵. A estas peticiones se había incorporado en 1861 la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, en una solicitud remitida a los *Amigos del País* para que procediera a solicitar del Gobierno y de la Reina una reforma de la estadística territorial y de los amillaramientos al afectar directamente a la propiedad rural. A tal extremo se procedió a la creación en la *Económica* de una Comisión especial que evaluara el estado de los censos y de las repercusiones sobre la riqueza agrícola. En uno de los escritos de la citada Comisión, fechado el 15 de mayo de 1861, la misma se refería así a la falta de equidad en la estadística territorial:

Esta Comision enterada de la comunicacion de esa Sociedad de 11 del actual y de la que incluia de la agrícola valenciana, ha celebrado varias conferencias con la comision que esta tiene nombrada, de la que ha resultado perfecta conformidad entre ambas relativamente á la esencia del asunto, esto es á que se debe representarse al Gobierno contra el sistema injusto que preside á la formacion de los amillaramientos¹⁰⁴⁶.

Cierto es que desde 1860 la propiedad valenciana había venido sufriendo una presión fiscal, en relación a la contribución territorial, muy criticada por amplios sectores de la producción. Tal y como quedó expresado en las quejas remitidas por la *Sociedad Económica* a la Diputación Provincial, la provincia de Valencia había contribuido en el año 1851 con una cantidad próxima a los 11.736.000 millones de reales, cuando el «cupo» nacional era de unos 300 millones, llegando dicha contribución territorial en

¹⁰⁴⁴ *Ibidem*, pág. 93.

¹⁰⁴⁵ Entre los socios de la *Económica Valenciana* estaban, por ejemplo, Francisco de P. Rachano, José Marco. ARSEAPV, C-152, legajo I, Agricultura, signatura número 5, año 1862 y C-156, legajo I, Agricultura, signatura número 20, año 1863.

¹⁰⁴⁶ ARSEAPV, C-148, legajo I, Agricultura, signatura número 17, año 1861.

1855 hasta los 12.248.000 reales. En 1856, con el aumento aprobado por el Gobierno de 350 millones de reales en el cupo para todo el Estado, Valencia había tributado por una cuantía próxima a los 14.500.000 de reales. Cantidades que mantendrían un aumento gradual, constatándose durante el período 1851 a 1860 una subida de unos 6.612.930 reales, lo que suponía un 46 por ciento más de la tributación total a comienzos de la década¹⁰⁴⁷.

Esta situación no mejoraría sustancialmente con el paso del tiempo, sobre todo después de la presentación por parte del Gobierno a las Cortes de los presupuestos para el año económico 1866 a 1867, circunstancia que produjo una nueva alteración en la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería¹⁰⁴⁸. La *Sociedad Valenciana de Agricultura* remitió en el mes de mayo de 1866 una solicitud al Congreso de los Diputados para que desestimara las nuevas bases para exigir la Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, en lo que entendía era una nueva alteración en los intereses legítimos de la propiedad rural. En este sentido, la Exposición manifestaba:

La Sociedad desea en gran manera que se forme una estadística completamente exacta de la riqueza inmueble, que sirva de base para la equitativa repartición del impuesto territorial; pero no son los medios que se proponen en dicho proyecto los que han de conducir á tan importante resultado. Desgraciadamente una dolorosa experiencia ha dado á conocer que los medios puestos en práctica hasta hoy para establecer la indispensable nivelación en la percepción el impuesto, y conocer la verdadera riqueza territorial, han dado resultados muy desventajosos para esa misma riqueza¹⁰⁴⁹.

¹⁰⁴⁷ En 1860 la *Sociedad Económica de Amigos del País* de Valencia, remitió a la Diputación Provincial de esa provincia una comunicación en la que expresaba su malestar por los daños que estaba ocasionando a la propiedad y a la agricultura valenciana la forma en que se distribuía la contribución territorial. ARSEAPV, C-146, legajo VI, Varios, signatura número 11, año 1860.

¹⁰⁴⁸ Las señaladas «alteraciones» fueron recogidas, entre otros medios, por la revista de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*. En ella se podía leer: “Consisten principalmente estas alteraciones, en declarar tipo permanente de la espresada contribucion el 14,10 por 100 del producto líquido con que en la actualidad resulta gravada la riqueza imponible y en establecer la investigación de dicha riqueza, dando facultad al gobierno para ofrecer participación en las multas en que incurren los ocultadores, á todas las personas que ausilien, faciliten ó dirijan las gestiones en la administración al investigar la riqueza imponible”. La *Agricultura Valenciana*, número 9, 8 junio de 1866, pág. 195.

¹⁰⁴⁹ *Ibidem*, pág. 197.

Los socios, en la mencionada Exposición, entendían que en los procesos de recuento realizados por parte de la Administración, los propietarios estaban expuestos a equívocos que apenas podían corregir. Así, la solicitud finalizaba expresando el profundo malestar que había provocado el proyecto remitido a las Cortes.

La ilustración del Congreso dispensa á la Sociedad de la tarea de demostrar el grave peligro á que se verán espuestos los propietarios honrados, quienes indudablemente se encontrarán á merced de tales investigadores por efecto de tan deplorable medida. Contra todos estos males hay un recurso legal: la reclamación de agravios ante la Dirección general de contribuciones. El recurso existe, es verdad; pero el país no lo utiliza porque la tirantéz de las instrucciones vigentes y el celo de la Administración oponen tales obstáculos á estas reclamaciones, que es preciso desistir de ellas por mas justas que sean. Así lo demuestra el hecho de haber pueblos en esta provincia donde se paga el 20 y 25 por 100, mientras en los repartos figura solamente el 14. Y no se diga que esto es debido á que hay riqueza oculta, y que por ello resulta cargada la manifiesta, no. Hay pueblos donde esto sucede después de una medición escrupulosa de todo su término, después de un justiprecio concienzudo de cada una de sus fincas¹⁰⁵⁰.

La Contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, tal y como ha recogido Vallejo Pousada, sirvió para recaudar, entre los años 1850 y 1900, el 20 por ciento de los ingresos ordinarios y el 30 por ciento de los impuestos totales, lo que acabaría convirtiéndola en una carga decisiva para la Hacienda durante toda la segunda mitad de siglo, llegándose a incrementar en los periodos de mayores dificultades financieras¹⁰⁵¹. Además, la fuerte reacción emprendida por la mayoría de los sectores productivos vinculados a la tierra, tenía su justificación al haberse aplicado directamente, tanto a propietarios como a campesinos, lo que afectaba a todos aquellos que trabajaban tierras arrendadas o cedidas. En este último caso, los agricultores tributaban por la parte del producto líquido que percibían. En todo caso, y como veremos más adelante, a la inquietud provocada por la

¹⁰⁵⁰ Ibídem, págs. 187 y 198. Véase también a este respecto *La Agricultura Valenciana*, número 11, 8 julio de 1866, pág. 237.

¹⁰⁵¹ En efecto, el retroceso de otros impuestos provocaba el aumento de la contribución territorial, situación que se daría en España durante el Sexenio de 1868 a 1875; en la segunda mitad de la década de 1880, o en los primeros años del decenio de 1890. A diferencia de otras tasas impositivas aplicadas sobre el territorio, en Francia, sin ir más lejos, supuso algo más de un 14 por ciento de los ingresos totales en el mismo periodo señalado de 1850 a 1900. En Portugal, el porcentaje fue del 8,8 por ciento de los ingresos ordinarios. Vallejo Pousada, Rafael (2010), ob. cit., pág. 84.

contribución atribuida a inmuebles, cultivo y ganadería, vino a sumarse el descontento por la práctica de otras cargas tributarias como los portazgos y pontazgos, el impuesto del subsidio industrial, o la tasa de consumos. Una medida, esta última, que terminaría provocando una de las mayores desaprobaciones por parte de los propietarios agrícolas valencianos durante la década de 1860.

A finales de 1868, y solo cuatro días después de haber sido reelegido como máximo responsables de los *Amigos del País* de Valencia, Vicente Lassala y Palomares solicitaba, en una dilatada Exposición, la eliminación de los portazgos y pontazgos, tal y como ya sucedía en otros países europeos¹⁰⁵². Un hecho, si se quiere puntual, pero que venía a recordar los episodios constantes de resistencia ante la política fiscal del Gobierno por parte de los grupos de propietarios agrícolas en Valencia. En esta sucesión de desmanes y exasperaciones, la *Sociedad Valenciana de Agricultura* también recriminó la falta de coherencia al aplicar el impuesto sobre contribución industrial y de comercio a los cosecheros de aceite de la provincia, ocasión que fue reprobada al Congreso de los Diputados.

El hecho indignó a los socios de la *Sociedad*, presidida en esos momentos por José María Ferrándis Estruch, ya que tal gravamen no se había aplicado ni en mayo de 1845, momento en el que se había iniciado la reforma del sistema tributario, ni en julio de 1850, ni aun en la revisión efectuada en octubre de 1852. En ningún caso, tal y como se explicaba en la queja dirigida al Congreso: “se había exigido de los referidos cosecheros manifiesto, relacion ni pago de cuota alguna por las prensas destinadas única y exclusivamente á extraer el aceite de sus respectivas cosechas”. Se trataba en definitiva, de eliminar la consideración dada por el Gobierno a agricultores y cosecheros como fabricantes o molineros de aceite, ya que:

Ni podía ser de otra manera cuando salta á la vista del menos conocedor de esta materia, la notabilísima diferencia que existe entre un mero labrador ó cosechero y un industrial y fabricante. Según todas las ideas recibidas por la

¹⁰⁵² El 14 de noviembre de 1868 se renovaron los cargos de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, siendo reelegido en la Presidencia el propietario Vicente Lassala y Palomares, ocupando la Secretaría Felicísimo Llorente y Olivares. Véase Monlleó Peris, Rosa, ob. cit., pág. 203. Asimismo, la Exposición de Lassala solicitando la supresión de los portazgos y pontazgos aparece fechada el día 18 de noviembre de ese mismo año. ARSEAPV, C-177, legajo IV, Comercio, signatura número 1, año 1868.

experiencia y el comun sentido, el labrador necesita para decir técnica y aun vulgarmente que ha recogido sus cosechas, hacer para su recolección y envases prolijas operaciones inherentes al cultivo, y sin las cuales no sería agricultor¹⁰⁵³.

El descontento se argumentaba igualmente en lo dispuesto para la formación de la estadística en el reparto de la contribución de inmuebles, ya que al labrador se le contabilizaba el valor de la vivienda, las almazaras, en su caso, así como el capital destinado a los artefactos para la extracción del aceite. Como bien quedaba expresado en el escrito de desaprobación: “asi es que al pagar la contribucion de inmuebles satisfacen ya una parte del impuesto por las prensas con sus accesorios, y claro es, que en tal caso es injusto y antieconómico exigirles segunda vez otro tributo bajo el nombre de subsidio industrial por aquel mismo concepto”¹⁰⁵⁴. Se entiende este reproche a la Administración, dado que en ningún momento se había contemplado el paso de la clase agricultora a la clase industrial, tal y como se desprendía de la reforma efectuada a través del Real Decreto de 20 de octubre de 1852, relativo a las exenciones en la contribución industrial y de comercio.

A todo ello se añadía que en la exención 4ª de dicho Real Decreto estaban incluidos los cosecheros de vino y de aceite y, en consecuencia quedaban liberados de cargas impositivas por las ventas que realizaran al por mayor y por menor, lo que implicaba el reconocimiento a los labradores como tales “hasta el momento de tener recogido el vino y el aceite en disposicion de venderlos y aun despues al tiempo de la venta”. Como muy bien explicaba la *Sociedad Valenciana de Agricultura*: “Asi sucede respecto de los cultivadores á quienes la Sociedad se refiere, los cuales no muelen por retribucion, ni gratis, otras aceitunas que las de sus cosechas respectivas”¹⁰⁵⁵. En todo caso, y teniendo en cuenta el malestar arrastrado por la política recaudatoria durante toda la segunda mitad del siglo XIX, a ésta le restaba todavía un obstáculo más por recorrer. De este modo, el llamado impuesto de consumos terminaría afectando a la economía valenciana en general, haciendo que sus efectos se trasladaran rápidamente a toda la esfera del asociacionismo en la región.

¹⁰⁵³ *La Agricultura Valenciana*, número 8, 24 mayo de 1866, págs. 184 y 185.

¹⁰⁵⁴ *Ibidem*, pág. 186.

¹⁰⁵⁵ *Gaceta de Madrid*, número 6.699, lunes 25 de octubre de 1852, pág. 9. Las citas en *La Agricultura Valenciana*, número 8, 24 mayo de 1866, págs. 187 y 188.

- La contribución de consumos

No cabe duda que los debates sobre la aplicación específica del impuesto sobre consumos adquirieron una mayor intensidad, al quedar convertido en una de las figuras clave en la reforma fiscal y uno de los impuestos más complejos a la hora de buscar su modificación dentro la política hacendística del siglo XIX. Pero fue su aplicación lo que generó un amplio consenso, al mismo tiempo que una fuerte resistencia, tanto en las clases productoras como en los sectores menos favorecidos de la sociedad.¹⁰⁵⁶

La oportunidad, desde el punto de vista financiero para la implantación de este gravamen, había estado justificada para los legisladores en 1845, al resultar inviable la acomodación de una contribución dirigida a la mayoría de la ciudadanía que, al mismo tiempo, fuera proporcional a sus rentas. Dicha dificultad, en lo que estaba referido a los impuestos directos, era ya conocida en el siglo XVIII en Europa, del mismo modo que formaba parte del saber de los reformadores españoles a mediados del XIX. Todo ello, unido al inconveniente de mantener los antiguos impuestos, obligó a llevar más lejos la recaudación, haciéndose preciso cargar impositivamente el consumo y aprovechando, al mismo tiempo, el gasto como indicador en la capacidad de pago. Sobre esta cuestión en particular, Adam Smith había escrito:

La imposibilidad de hacer pagar una capitacion, según la renta de cada uno, parece que fué el origen de los impuestos sobre las mercancías de consumo. El estado no sabiendo como hacer pagar á sus vasallos con proporcion á sus facultades, procura colocar el impuesto en sus gastos, que por lo regular son proporcionados á sus rentas: de aquí nacen los derechos sobre las mercancías de consumo las quales son ó de necesidad, ó de luxô¹⁰⁵⁷.

¹⁰⁵⁶ Al menos así se desprende de algunos de los titulares de la prensa valenciana a la vista de las actitudes y acciones promovidas en contra de la cuestión de los «consumos». *Las Provincias*, 6 de marzo de 1866.

¹⁰⁵⁷ *Compendio de la obra inglesa intitulada Riqueza de las Naciones, hecho por el Marques de Condorcet, y traducido al castellano con varias adiciones del original, por Don Cárlos Martínez de Irujo, Oficial de la Primera Secretaria de Estado*, Imprenta Real, Madrid, 1792, pág. 280. Sobre esta misma cuestión puede consultarse de Santillán, Ramón, *Memoria histórica de las reformas hechas en el sistema general de impuestos de España y de su Administracion desde 1845 hasta 1854, añadida con notas de sus ampliaciones y efectos hasta 1863*, Imprenta de A. Pérez Dubrull, Madrid, 1888, pág. 183. A partir de mediados del siglo XIX se hizo preciso contar con cargas tributarias que no obstaculizaran la producción y el tráfico de las mercancías. Esta situación imposibilitaba el empleo de las antiguas tasas

Al margen de los productos indispensables o de primera necesidad, los considerados no necesarios para la subsistencia se abrían a la posibilidad de ser gravados, entrando a formar parte de las modificaciones incorporadas a la ley de presupuestos de 1845. Aunque suprimido momentáneamente en 1854, y confirmada la interrupción por la ley de 9 de febrero de 1855, un Real Decreto de diciembre de 1856 volvió a restablecerlo, refundiéndose en éste los derechos de «puertas»¹⁰⁵⁸.

Al comenzar los años cuarenta del siglo XIX, España tenía algo más de once mil quinientos ayuntamientos, siendo el 80 por ciento núcleos rurales. En 1863 la cifra había disminuido a 9.353, percibiéndose de esta forma la concentración municipal y la emigración rural hacia las ciudades como consecuencia de los cambios operados en la economía en esos años¹⁰⁵⁹. En todo caso, la presión tributaria por consumos y puertas fluctuaba, siendo diferentes los porcentajes recaudatorios en pueblos y ciudades de una misma provincia. La aleatoriedad en dichas tasas y los mecanismos administrativos, incluidos algunos privilegios políticos y económicos, despertaron inevitablemente muchos recelos y desconfianzas en la recaudación por parte de la población. No obstante, y a pesar de la impopularidad de los consumos, la sustitución de éstos hubiera requerido recargar aun más los impuestos directos, lo que hubiera provocado un mayor perjuicio a la burguesía y a los grandes propietarios de las zonas rurales y urbanas.

El hecho es que en 1853, los consumos produjeron unos ingresos de 90 millones de reales a la Hacienda y otros 32 millones en las cuentas de los municipios de toda España. Por su parte, la recaudación practicada en esas mismas fechas por la aplicación de los derechos de puertas alcanzó una cifra de 76 millones de reales destinadas al Tesoro y unos 43 millones que terminaron en las arcas de los ayuntamientos repartidos por todo el país¹⁰⁶⁰. Algunas personalidades destacadas de la época en el mundo de la política y de la estadística, como el propio Madoz, llegaron a reflejar, mediada la

como las alcabalas. Sobre este argumento en particular resulta muy aclaratorio el artículo de Vallejo Pousada, Rafael, “Actores y Naturaleza de la Reforma Tributaria de 1845”, *Revista de Economía Aplicada*, número 21, volumen VII, año 1999, págs. 18 a 21.

¹⁰⁵⁸ Martínez Alcubilla, Marcelo, *Diccionario de la Administración Española, compilación ilustrada de la novísima legislación de España en todos los ramos de la Administración Pública*. Tomo IV, Segunda Edición, Imprenta de A. Peñuelas, Madrid, 1871, pág. 807.

¹⁰⁵⁹ Moral Ruiz, Joaquín del (1984), ob., cit., pág. 97.

¹⁰⁶⁰ *Ibidem*, pág. 99.

centuria, la situación de muchos pueblos que se veían en la necesidad de urgir el cobro de las contribuciones generales. El mismo Pascual Madoz, haciendo referencia al problema, los describiría en su célebre *Diccionario* de la siguiente manera:

Y si de estas contribuciones pasamos á las que satisfacen los pueblos para gastos provinciales y municipales, auméntase estraordinariamente la cantidad desembolsada por ellos. Por largos años ha estado abandonado este trabajo; la cantidad que por propios y arbitrios municipales recaudaban las oficinas del Gobierno, no daba ni podia dar un dato exacto que mereciese los sacrificios de los contribuyentes: en este punto nosotros somos partidarios como el que mas de la fiscalización que debe ejercer el Gobierno sobre la inversion de los fondos que administren las corporaciones populares, bien se llamen diputaciones provinciales, bien se denominen ayuntamientos¹⁰⁶¹.

Con todo, el debate presupuestario celebrado en las Cortes durante el mes de mayo de 1845 estuvo principalmente dirigido a establecer las especies y sectores gravados, quedando relegada la discusión sobre la reforma arancelaria, consecuencia de los desencuentros existentes entre librecambistas y proteccionistas¹⁰⁶². De esta suerte, los primeros afectados y movilizados fueron aquellos diputados que guardaban alguna relación o mantenían intereses en dicha cuestión. A ellos acabarían incorporándose los productores y propietarios vinícolas de Aragón y Levante, especialmente los de la provincia de Valencia, desde donde se cursaron un buen número de exposiciones al Gobierno y a las Cortes, remitidas por distintos ayuntamientos, la Diputación Provincial de Valencia, además de la propia *Sociedad Económica de Amigos del País*, un hecho que, ocasionalmente, la convertiría en un acreditado grupo de presión¹⁰⁶³. En aquella conexión de intereses tampoco faltaron los propietarios rentistas, comerciantes y productores de aguardientes, quienes se sentían afectados por pertenecer a los sectores productivos más directamente vinculados a la exportación¹⁰⁶⁴.

¹⁰⁶¹ Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo IX, Imprenta del Diccionario Geográfico, Madrid, 1850, pág. 342.

¹⁰⁶² Vallejo Pousada, Rafael (1999), ob. cit., pág. 19.

¹⁰⁶³ Laguna Platero, Antonio y Martínez Gallego, Francesc A., “Moderados, progresistas y unionistas (1844-1868)”, en Chust, Manuel (Dir.), *Historia de la Diputación de Valencia*, Diputació de València, Valencia, 1995, págs. 135 y 136.

¹⁰⁶⁴ Vallejo Pousada, Rafael (1999), ob. cit., pág. 20.

Después del paréntesis producido en 1854 en lo que concierne a la recaudación del impuesto de consumos, tras su restablecimiento, en febrero de 1855, muchos propietarios agrícolas se sintieron molestos al considerar que una cosa era quiénes debían pagar nominalmente los impuestos de consumos y puertas, y otra distinta, sobre quiénes recaerían finalmente sus efectos. Expliquemos brevemente la cuestión.

Sabemos que en un sector agrícola mercantilizado y con un alto predominio de los intereses lucrativos, una demanda dirigida hacia los productos de primera necesidad con cierta tendencia a la inelasticidad provocaría un gravamen que, esencialmente recaería en el consumidor. Ahora bien, en el caso de una oferta rígida en relación a la demanda, el impuesto terminaría recayendo en el productor¹⁰⁶⁵. Dicho de otro modo, sabemos que la incidencia de un impuesto indirecto dependerá, en todo caso, de la elasticidad en la oferta y en la demanda. Si la elasticidad en los precios de la demanda es mayor que la producida sobre la oferta, lo habitual sería hacer recaer el peso impositivo sobre la producción. Por el contrario, si la elasticidad en los precios de la oferta resultase ser más alta que en la elasticidad de la demanda, dicha carga impositiva afectaría mayoritariamente a los consumidores¹⁰⁶⁶.

En cualquier caso, el sentido a todo este juego de palabras ya fue contemplado por Claudio González Zúñiga, a mediados del siglo XIX en nuestro país, y rescatado por Rafael Vallejo Pousada en su trabajo relativo al impuesto de consumos, dejándolo sintetizado de la siguiente forma:

¹⁰⁶⁵ Vallejo Pousada, Rafael, "El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda mitad del siglo XIX: un impuesto no exclusivamente urbano", *Revista de Historia Económica*, año XIV, número 2, primavera-verano 1996, pág. 351.

¹⁰⁶⁶ Parece evidente que al tratar con productos perecederos, como pueden ser las frutas y hortalizas, éstas tienen que ser vendidas en un plazo corto de tiempo. El hecho de no proceder así, implicaría que los artículos se estropearían o, en el peor de los casos, tendrían que ser vendidos a un precio más bajo. De la misma forma, a menudo sucede que un incremento en los precios de determinados productos no va acompañado de un aumento en la cantidad de dicho producto ofrecido. En ambos casos estaríamos hablando de una oferta rígida o inelástica. Ahora bien ¿qué sucede en los supuestos de una demanda relativamente inelástica? Conocemos que para determinados productos básicos, como el agua, el pan, etc., a pesar de sufrir aumentos en su precio, la demanda permanecerá prácticamente constante. Por esta misma razón, con frecuencia, al variar los precios de un determinado artículo de primera necesidad, la demanda apenas terminará resintiéndose. Algunos apuntes sobre el tema en Krugman, Paul R. y Vells, Robin, *Introducción a la economía. Microeconomía*, traducción de Sonia Benito Muela y Jesús Ruiz Andújar, Editorial Reverté S. A., Barcelona, 2006, págs. 131 y 132.

Los financieros dicen en sus teorías, e impugnan la práctica, que la contribución de consumos es de la clase de las indirectas, y el que la paga es el consumidor, mas no así el productor. Esta distinción no es más que un sofisma, que para mayor claridad con hechos vamos a demostrarlo. El productor que lleva al mercado sus cereales, caldos y granos para beneficiarlos, y por los que tiene ya satisfechos los derechos en la contribución territorial, bajo este concepto, es bien claro que los productores, o más bien dicho, sus productos agrícolas deben quedar libres de pagar otro cualquiera impuesto; pero como esto se dice y no se hace, pues que por ellos se les exige cuando los va a beneficiar los derechos de puestas y consumo ¡quien duda que por este medio en último resultado se le impone a sus productos otra segunda contribución, que quizá le afecta más que la primera! A este resultado, que puede decirse por lo fácil de su demostración, que es un axioma en economía política, contestan los financieros no ser exacto, manifestando que esta contribución la paga el consumidor, mas no así el productor, pues que cuando este vende en los mercados sus productos agrícolas, tiene muy buen cuidado de exigir con su valor intrínseco la cantidad que por el impuesto debe pagar el consumidor¹⁰⁶⁷.

Con la recuperación y la reorganización contributiva de diciembre de 1856 y, sobre todo, tras los ajustes y las nuevas tarifas presentadas en la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864, la carga tributada por los consumos y puertas terminó afectando a los propietarios valencianos, generando consecuencias en la agricultura de la región y en la actividad asociativa. Algunas de las derivaciones estuvieron enfocadas a la acción reivindicativa de políticas sectoriales y fiscales que, lógicamente, buscaban incidir necesariamente en la mejora de la competencia exterior y en la comercialización de los productos procedentes de la región. Las perspectivas, una vez visto el panorama fiscal aplicado en la agricultura, tampoco mejoraron el contexto de las clases agrarias más debilitadas, incluidos los pequeños propietarios, forzando en muchos casos el trasvase de población a los núcleos urbanos con el fin de evitar el desempleo y poder mantener unos niveles de renta soportables¹⁰⁶⁸.

¹⁰⁶⁷ La referencia corresponde a la obra de González Zúñiga, Claudio, Memoria sobre la industria agrícola, pecuaria, pesca, fabril y comercial de Galicia, publicada en Pontevedra en 1854, y que está recogida en el artículo de Vallejo Pousada, Rafael (1996), ob. cit., págs. 351 y 352, nota 21.

¹⁰⁶⁸ Vallejo Pousada, Rafael (1996), ob. cit., pág. 355.

Las primeras reacciones contra la política contributiva de consumos, surgidas a mediados del XIX, comenzaron a percibirse a través de algunas Sociedades Económicas de Amigos del País que veían la necesidad de corregir una situación que, en mayor o menor medida, no hacía sino perjudicar “las costumbres de los pueblos”¹⁰⁶⁹. A través, primero de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* y, posteriormente de la *Sociedad Económica de Amigos del País*, José Mompó y Vidal solicitó formalmente que se evaluara el impacto que podía tener la reforma del impuesto de consumos¹⁰⁷⁰. En una carta fechada el 14 de enero de 1863, Mompó declaraba: “El proyecto de ley presentado últimamente á las Cortes es digno de aplauso en cuanto ha iniciado la reforma de esta contribucion; pero deja subsistentes los mas graves males, que deben su origen á la naturaleza é importancia que tiene la produccion de algunas especies sujetas al impuesto, á la exageracion de las tarifas que está en abierta oposicion con las reformas de aduanas, al vicioso y desacreditado sistema de arriendos, y á los medios fiscales que se emplean para hacer efectiva la recaudación”¹⁰⁷¹. A ésta siguieron otras de adhesión a la causa tributaria contra los consumos, lo que finalmente provocó la creación de distintas Comisiones con el fin de que fueran examinadas todas las propuestas y quejas remitidas en este sentido¹⁰⁷².

En efecto, tanto los *Amigos del País* en Valencia, como la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, así como el propio Ayuntamiento de la capital, este último por circunstancias bien diferentes, se apresuraron a constituir sendas Comisiones dirigidas a meditar sobre el problema originado con la

¹⁰⁶⁹ *Dictámen acerca de la conveniencia y necesidad de revisar y modificar la ley y los reglamentos que establecen la contribucion de consumos, á causa de los perjuicios que ocasionan á la agricultura, á la industria y á los consumidores, las bases actualmente vigentes*, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos el País, Imprenta de Miguel Blanxart, Barcelona, 1854. Asimismo, en ARSEAPV, C-134, legajo VII, Correspondencia de Sociedades, signatura número 5, año 1854.

¹⁰⁷⁰ La primera noticia que hemos encontrado en relación a este asunto está fechada el 17 de julio de 1861, fecha en la que José Mompó, miembro de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, presentó a la Junta de Fomento de dicha Sociedad, una primera proposición para que una Comisión especial se encargara de estudiar los medios para proponer reformas a la contribución de consumos y hacerla extensa a las Cortes y al Gobierno. *La Agricultura Valenciana*, número 13, 8 agosto de 1864, págs. 216 a 222.

¹⁰⁷¹ ARSEAPV, C-158, legajo IV, Comercio, signatura número 3, año 1863.

¹⁰⁷² Entre las peticiones figuraban las de los socios Antonio Polo de Bernabé y Eduardo Atard. ARSEAPV, C-158, legajo IV, Comercio, signatura número 2, año 1863. De la misma manera la *Económica Valenciana* recibió durante aquel mismo año de 1863, distintos oficios remitidos por el Ayuntamiento de la ciudad referidos al proyecto de reforma sobre el sistema de recaudación en la contribución de consumos. ARSEAPV, C-158, legajo VI, Varios, signatura número 11, año 1863.

contribución de consumos¹⁰⁷³. Este hecho, por sí solo, demuestra la importancia que terminaría adquiriendo la resistencia mostrada ante la política recaudatoria, reforzada aún más tras la aprobación de la ley de presupuestos de 25 de junio de 1864.

Sin duda, las prerrogativas concedidas a los ayuntamientos en relación a las tareas recaudatorias, comprometieron en muchos casos la adhesión a los mismos de la mayoría de los ciudadanos, en especial de los propietarios vinculados con el medio rural y las explotaciones agrícolas. No es extraño, pues, que de manera insistente se lanzaran un sinfín de protestas desde las asociaciones de agricultores formalmente instituidas, en contra de ciertas actitudes que tenían que ver con la alteración de las tasas e impuestos que afectaban a artículos como las frutas. A ello contribuyó también que determinados productos agrícolas estuvieran sin venderse. Esta situación de almacenamiento en algunos alimentos provocaba que las tasas por consumos aumentaran los precios, haciendo disminuir la demanda de los mismos¹⁰⁷⁴.

La posición de hostilidad hacia la gestión municipal tuvo una de sus primeras manifestaciones con la remisión de una Exposición de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* al Ayuntamiento de Valencia en el verano de 1864. Refrendada por su presidente, José M^a Ferrándis, y el Vicesecretario General, Felicísimo Lorente, la Exposición recogía el amplio desasosiego que la clase propietaria conservaba en esos momentos, después de ver aprobado el recargo municipal por consumos impuesto a las frutas y forrajes. En concreto, y en relación a dicho encarecimiento, el documento de la *Sociedad* se mostraba así de contundente: “La Corporacion Municipal conoce sin duda la situacion desventajosa de nuestros agricultores; pero á la Sociedad recurrente, compuesta en su mayor parte de cultivadores, y en contacto inmediato con el resto de la clase, le es todavía mas patente su profundo malestar”. Unos párrafos más adelante continuaba:

Comprende la Sociedad que no está en las atribuciones ni en la índole de la corporacion á quien recurre el procurar un remedio que haga desaparecer los

¹⁰⁷³ La constitución por parte de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* de una Comisión sobre consumos puede verse en ARSEAPV, C-156, legajo I, Agricultura, signatura número 16, año 1863. Sobre la Comisión nombrada por el Ayuntamiento de Valencia puede consultarse *La Agricultura Valenciana*, número 17, 8 octubre de 1864, págs. 322 a 325.

¹⁰⁷⁴ Monlleó Peris, Rosa, ob. cit., pág. 148.

males que deplora; espera, sin embargo, un lenitivo que los alivie. Potestativo es en los ayuntamientos recargar en mas ó menos los artículos de consumos; el de Valencia, pues, haria un bien á sus administrados y á los labradores de su huerta imponiendo á las frutas y forrages el minimum del recargo ó suprimiéndolo por completo¹⁰⁷⁵.

Simultáneamente a la queja remitida al Gobierno valenciano, se cursó otra en parecidos términos al ministro de Hacienda, que sería atendida y posteriormente corroborada al hacer público el Gobierno, solo un mes más tarde, una Real Orden por la que quedaba reducido a 50 céntimos en «arroba» el derecho que por razón de consumo debía satisfacer la fruta verde al ser introducida en la capital valenciana. Asimismo, se establecía una tasa de 42 céntimos, en las mismas circunstancias que la anterior, a los granos, legumbres secas o en grano, y a las harinas por derechos de Tesoro, sin perjuicio de los recargos municipales que pudieran sucederse¹⁰⁷⁶.

A pesar de las rectificaciones, generalmente puntuales y obligadas por la oportunidad del momento, en noviembre de 1865 un numeroso grupo de propietarios y contribuyentes valencianos remitieron un manifiesto al ministro de Hacienda, solicitando la supresión de los consumos para el proyecto de presupuestos que debía ser aprobado y aplicado al año siguiente. Quienes se habían adherido a la causa mantenían el convencimiento que la tributación en los consumos añadía más daño y atraso a la producción y a las cosechas, en tanto: “subsista con todos sus odiosos y odiados vejámenes un impuesto que asedia y merma la produccion, paraliza y sofoca la industria, embaraza y oprime al comercio”¹⁰⁷⁷.

La situación generada por los consumos fue considerada una cuestión grave y de suma importancia para la economía valenciana lo que produjo que, tanto la *Sociedad Valenciana de Agricultura* como la *Sociedad Económica de Amigos del País*, acudieran a buscar el apoyo de los diputados valencianos y catalanes en el verano de 1865. De la reunión sabemos que se acordó la imposibilidad de suprimir el impuesto, al no encontrarse la forma de perfilar otro aporte que concediera los mismos recursos económicos al

¹⁰⁷⁵ *La Agricultura Valenciana*, número 13, 8 agosto de 1864, págs. 220 a 221.

¹⁰⁷⁶ *Ibidem*, pág. 222.

¹⁰⁷⁷ *La Opinion*, Valencia, 9 de noviembre de 1865.

Tesoro. No obstante, se llegó al acuerdo de solicitar una rebaja en las tarifas que se estaban aplicando a productos como el vino, los aguardientes y el arroz, además de otros géneros considerados de primera necesidad¹⁰⁷⁸.

En cualquier caso, las desavenencias entre las dos asociaciones valencianas y la política que venía patrocinando en la contribución de consumos el Gobierno de Madrid volvieron a reproducirse apenas unos pocos meses después. Una vez más, la primera en reaccionar fue la *Económica Valenciana*, quien a través de una petición dirigida al Congreso de los Diputados instaba encarecidamente a la supresión de la «onerosa» tasa de consumos en los presupuestos que debían aprobarse para el año económico de 1866 a 1867. Después de recordar el daño ocasionado a la agricultura, la *Sociedad* advertía de los inconvenientes de seguir manteniendo una carga semejante en un país provisto de un gobierno constitucional.

Principio de abusos, fuente de inmoralidades, ocasion de crímenes, enjendra un espíritu de confiscacion, que si es funesto aun en manos de empleados rectos y prudentes, degenera en espoliacion vergonzosa cuando se convierte por el arriendo en arma pública para satisfacer la codicia privada. Incompatible con la libertad civil, con la independencia y dignidad de carácter que en sentir de todos los partidos conviene al grado de libertad política, propio de los gobiernos constitucionales, debe ser, bajo el punto de vista social prontamente abolido, si se quiere contribuir á hacer mas fácil y barata la vida de las clases productoras¹⁰⁷⁹.

En el «discurso» argumentado por la *Económica* de Valencia, no faltaban las alternativas para que pudiera llevarse a la práctica el reemplazo de los gravámenes aplicados en los consumos, y que cargaban tributariamente a un buen número de artículos esenciales. Entre el pliego de peticiones se planteaba la siguiente pregunta: “Aun asi queda en pié un parte; y no la mas leve, de la dificultad: si los recargos en el impuesto directo no bastan al presupuesto de las provincias y de los concejos, ¿de dónde saldrán los recursos que hoy les produce la contribucion de consumos?”.

¹⁰⁷⁸ *La Opinion*, Valencia, 12 de julio de 1865.

¹⁰⁷⁹ *La Agricultura Valenciana*, número 2, 24 febrero de 1866, pág. 37. Los diputados valencianos y catalanes acordaron, esta vez, solicitar expresamente la abolición de la contribución de consumos, además de oponerse al proyecto que en aquellos momentos se tramitaba en relación a la contribución territorial e industrial. Véanse, por ejemplo, los números correspondientes a *Las Provincias*, de los días 14 de febrero y 28 de abril de 1866.

Algunas de las alternativas gravitaban alrededor de una reducción del ejército “en grande escala como lo consiente el modesto papel de potencia de segundo orden que por mucho tiempo acaso debemos seguir desempeñando”. La revisión del presupuesto de las clases pasivas y la supresión de empleos en la Administración eran otras propuestas que se barajaban, a lo que se añadía la no inclusión de los granos y las verduras entre los artículos de primera necesidad. A ello debía sumarse, según los *Amigos del País*, la siguiente propuesta: “Bastarian probablemente á este propósito algunos moderados arbitrios, que á ejemplo de otros países, no pasasen del 10 por 100 del valor de los objetos gravados, y que se impusiesen sobre las ventas al pormenor de los artículos de consumo, pero afectando siempre la forma directa, organizados como reparto sobre las tabernas, abacerías y otro establecimientos análogos. Solo podría dispensarse de esta forma, imponiéndose como carga indirecta algun arbitrio que por sus especiales circunstancias, no hubiera de embarazar la circulacion, ni oponerse al ámbito egercido de la libertad individual. Entre estos cree la Sociedad oportuno señalar el impuesto sobre las carnes percibido en los mataderos”. Finalmente, en el documento de súplica se concluía:

Verdad es que estos arbitrios dejarían subsistir una parte del mal que se deplora en la contribucion de consumos, pero atenuados en el fondo reducidos á la exaccion de sumas insignificantes comparadas con las enormes que hoy se recaudan, despojadas de las irritantes formas de que ahora se revisten, libres de trabas mas odiosas que el mismo impuesto, serian recibidos como un gran beneficio, y llenarían con oportunidad el papel de espedientes, de medios de transicion, único que debe asignárseles. La reforma apremia, la ocasion es propicia, el mal es grave, el remedio urge y es tiempo de concluir con el célebre Búrgos, ahora ó nunca¹⁰⁸⁰.

Dos años después de las reticencias mostradas por el Ayuntamiento de Valencia en relación al impuesto de consumos, éste junto con la Diputación Provincial presentaron un proyecto al Congreso de los Diputados en el que se aducía la posibilidad de sustituir la citada contribución por una recaudación basada en las denominadas «licencias de venta», además de la

¹⁰⁸⁰ En la Exposición remitida al Congreso de los Diputados, se utilizaban expresiones como: “Por eso la Sociedad Económica de Valencia se atreve á Suplicar encarecidamente al congreso”. El documento está recogido en *La Agricultura Valenciana*, número 2, 24 febrero de 1866, págs. 37 a 41.

aplicación de suplementos graduales y sucesivos a ciertas cuotas de la contribución territorial y otras contribuciones directas¹⁰⁸¹. La *Sociedad Valencia de Agricultura*, desde su órgano de prensa, publicó en el mes de abril de 1866 una nota de agradecimiento y de felicitación a los señores diputados y a los compañeros que habían formado parte de la Comisión ocupada en solicitar la supresión de la contribución de consumos¹⁰⁸².

El debate iniciado en el Congreso contó con la presencia del presidente de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* y diputado por Játiva, José María Ferrándis, quien en un discurso extenso aportó significativos datos estadísticos de la recaudación producida por el impuesto desde 1846. Entre estas cifras se especificaba el formidable aumento registrado entre 1846 y 1859, pasándose de los 147.688.107 a los 242.025.682 de reales, respectivamente. Añadía el diputado Ferrándis la inmoralidad alcanzada en la Administración municipal, muchas veces convirtiendo a sus funcionarios en «simulados» arrendatarios, provocando la división en los pueblos y alteraciones en las fiscalizaciones no sujetas al Derecho. Denunciaba, asimismo, el alto volumen de fraudes y los defectos del sistema tributario, achacando al ministro Alonso Martínez su falta de sensibilidad y de atención hacia el problema. Por esta razón, en los últimos párrafos de su intervención, José María Ferrándis apuntaba lo siguiente: “Resumiendo, sin embargo, diré que la contribucion hoy vigente de consumos es injusta, vejatoria é inmoral; y si cada uno de estos defectos es bastante para que se pida la invalidacion de la ley, todos juntos serán doble razon para ello”¹⁰⁸³.

La propuesta de modificación fue finalmente rechazada por 66 votos contra los 43 que apoyaban la misma, lo que no impidió que por parte de la *Económica Valencia* y de la *Sociedad Valenciana de Agricultura* se recordase la tarea de algunos diputados en su constancia por defender los intereses agrícolas y sus esfuerzos por abolir el impuesto de consumos¹⁰⁸⁴. Entre ellos destacaron el diputado Ballester y José Ferrando. El primero, en una

¹⁰⁸¹ *La Agricultura Valenciana*, número 4, 21 marzo de 1866, págs. 75 a 85.

¹⁰⁸² Las muestras de agradecimiento están recogidas en el extracto de las Actas de la sesión celebrada por la *Sociedad Valenciana de Agricultura* correspondientes al día 5 de febrero de 1864. Véase *La Agricultura Valenciana*, número 5, 8 abril de 1866, págs. 97 y 98.

¹⁰⁸³ *La Agricultura Valenciana*, número 8, 24 mayo de 1866, págs. 170 a 179.

¹⁰⁸⁴ *Ibidem*, págs. 179 y 180. La Sociedad Valenciana de Agricultura acordó, en mayo de 1864, agradecer por escrito e individualmente a todos los diputados el interés mostrado en la defensa de la subrogación del impuesto de consumos. *La Agricultura Valenciana*, número 12, 24 julio de 1866, págs. 261 y 262.

excelente intervención en defensa del diputado Ferrándis ante Alonso Martínez, llegó a manifestar el malestar por las consecuencias que en muchos casos tenía sobre la población la tasa de consumos. En el discurso, y en relación a los argumentos presentados por el Ministro, Ballester apuntaba las siguientes palabras: “Dijo S. S. que la contribucion de consumos es voluntaria. ¡Voluntaria una contribucion que recae sobre los artículos de necesidad! ¡Voluntaria una contribucion que por virtud de esos famosos repartos vecinales saca cada día los muebles de los contribuyentes á pública subasta!”¹⁰⁸⁵. Por su parte, la Sociedad Económica reconocía en la persona del diputado José Ferrando: “los nobles y desinteresados esfuerzos de S. S. a favor de tan útil reforma”¹⁰⁸⁶.

Todavía en el año de 1866, la *Sociedad de Agricultura* enviaría una demanda más a los diputados en Madrid exigiendo la desestimación de las bases que sobre la contribución de inmuebles figuraba en el proyecto de presupuestos de ingresos para el año económico 1866 a 1867. Las peticiones fueron remitidas al presidente de la Sociedad en Madrid, acompañadas de otra que desaprobaba la contribución industrial aplicada a las almazaras en la fabricación de aceites para uso de sus dueños¹⁰⁸⁷.

En su afán por demostrar la validez de sus propuestas, la *Sociedad de Agricultura* se hizo eco de la supresión del impuesto en algunos Estados europeos, publicando varios ejemplos que estimulaban los esfuerzos dirigidos en este sentido¹⁰⁸⁸. Sin embargo, a finales de ese año tras el visto bueno de las Cortes, el Gobierno aprobó la concesión a los ayuntamientos de la ordenación y administración del impuesto de consumos, dejando al margen a la Hacienda Pública y sin concederle papel alguno en la gestión. En la nueva ley de presupuestos se asignaba una recaudación «obligada» para Valencia de unos 4.600.000 reales anuales, lo que provocó que el

¹⁰⁸⁵ *La Agricultura Valenciana*, número 10, 24 junio de 1866, pág. 215, y número 11, 8 julio de 1866, págs. 238 a 243.

¹⁰⁸⁶ ARSEAPV, C-168, legajo VII, Varios, signatura número 3, año 1866.

¹⁰⁸⁷ *La Agricultura Valenciana*, número 11, 8 julio de 1866, págs. 237 y 238,

¹⁰⁸⁸ Bajo el título de «Consumos», se publicó un extenso artículo en el que se daba conocimiento del comportamiento de este gravamen en Bélgica y su supresión en 1860, así como el modelo de recaudación municipal en Inglaterra. Véase *La Agricultura Valenciana*, número 18, 24 octubre de 1866, págs. 401 a 404.

Ayuntamiento convocara de inmediato a los mayores contribuyentes, a fin de tratar aquellas cuestiones que más afectaban a la propiedad¹⁰⁸⁹.

Junto a toda la Corporación municipal, contribuyentes y propietarios de reconocida reputación, asistió también el presidente de la *Sociedad de Agricultura*, invitado por aquélla a tomar parte en las discusiones. Tras las deliberaciones, tal y como nos lo describe en su trabajo Rosa Monlleó, se acordó desestimar el tipo de recaudación basado en el reparto vecinal por considerarlo inadecuado, resolviendo, ante la eventualidad y la obligación de proceder a la recaudación del impuesto a partir del 1 de octubre, el mantenimiento del sistema de «puertas» y la rebaja notable de aquellos artículos calificados como indispensables. Con las medidas puestas en marcha, el vino pasó entonces de 10 a 5 reales; el aceite de 10 a 7 reales; la harina a 50 céntimos la arroba, y el arroz a 2 reales. Acogidas satisfactoriamente por la población valenciana, se resolvió no aplicar tasas más elevadas a la carne y conceder reducciones a las leguminosas, los frutos secos, las verduras y los huevos¹⁰⁹⁰.

Antes del advenimiento de la Revolución de septiembre de 1868, muchos municipios se vieron en la tesitura de gestionar durante algunos meses la recaudación del impuesto de consumos, manteniéndose en vigor en 1867 las peticiones para su derogación definitiva, algo que solo acontecería, y de forma coyuntural tras «La Gloriosa» y el Decreto de Figuerola de 12 de octubre de 1868. Aunque adoptada su supresión, en realidad se trató de una sustitución incómoda para los contribuyentes, al establecerse un nuevo impuesto de «capitación» por el que quedaban obligados a pagar todas las personas mayores de catorce años¹⁰⁹¹.

La reacción mostrada por los propietarios agrícolas valencianos entre los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX y el año 1868, frente a lo que representaba la presión fiscal en la producción, demuestra, una vez más, tal y como apuntara Monlleó, el destacado interés que existía por desarrollar la demanda y la comercialización en los mercados, tanto

¹⁰⁸⁹ El dato está recogido de Monlleó Peris, Rosa, ob. cit., pág. 150. La mención a dicha convocatoria también en *La Agricultura Valenciana*, número 19, 8 noviembre de 1866, pág. 409.

¹⁰⁹⁰ Monlleó Peris, Rosa, ob. cit., págs. 150 y 151.

¹⁰⁹¹ López-Cordón, María Victoria, *La revolución de 1868 y la I República*, Siglo XXI, Madrid, 1976, págs. 30 y 31.

interiores como exteriores, en un momento marcado por las tensiones librecambistas¹⁰⁹². Es evidente que la contribución por consumos no afectó de manera unánime a las áreas urbanas, haciéndolo también en amplias demarcaciones rurales, lo que coadyuvó a gravar significativamente la producción agraria en las comarcas valencianas, activando así todos los recursos y mecanismos que el asociacionismo disponía en aquellos momentos. Con ello, la responsabilidad de los pequeños y medianos productores pasó a ser compartida necesariamente con aquellos otros sectores que disputaban el protagonismo a las clases dirigentes, formando parte de las élites y organizadas a través de la *Sociedad Económica de Amigos del País* y de la *Sociedad Valenciana de Agricultura*. Ambas, junto con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en Barcelona, formaban ya parte destacada, mediado el siglo, de los referentes más señalados dentro del ámbito agrícola y asociativo de todo el país, extendiendo rápidamente su campo de influencia a regiones del interior y horadando la frontera de lo que hasta esos momentos se había circunscrito a demarcaciones rayanas al litoral.

- La acción desempeñada desde *La Agricultura Española* y la aparición del *Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla*. La articulación del recreo, el desarrollo agrícola y el protagonismo territorial en Andalucía

Como ya se comentó al inicio de estas páginas, en 1975, Jacques Lacroix y Antonio Miguel Bernal detallaron en un trabajo dedicado a la sociabilidad sevillana, la importancia adquirida por el *Círculo de Labradores*, destacando el importante papel ejercido dentro de la sociabilidad andaluza a partir de 1859. Promovido en un principio como casino de recreo y asociación cultural para una buena parte de la aristocracia sevillana, el *Círculo* terminaría siendo junto a la revista *La Agricultura Española* y la Junta de Agricultura de Sevilla, uno de los verdaderos artífices de la transformación participativa, además de una excelente plataforma, tanto conceptual como eficaz orientada hacia las reivindicaciones de los grandes propietarios sevillanos¹⁰⁹³.

¹⁰⁹² Monlleó Peris, Rosa, ob. cit., pág. 150.

¹⁰⁹³ Bernal, A. Miguel y Lacroix, Jacques, ob. cit., pág. 482. Héran, François, ob. cit., pág. 187.

Andalucía, en general, y Sevilla, en particular, vivirán a partir de la segunda mitad del siglo XIX, como ya ocurriera en otras provincias españolas y como era conocido en otras zonas del continente europeo, un proceso de modernización de la agricultura destinado a aumentar la productividad, sustentado en la propiedad privada de la tierra y vinculado a una gestión basada en criterios de eficacia. Ésta, a su vez, debía poner en marcha mecanismos que facilitaran la conversión de labradores y hacendados en personas con un marcado perfil empresarial, con la suficiente capacidad para afrontar los cambios que exigían los nuevos sistemas de explotación y ejecución aplicados a las tierras de cultivo¹⁰⁹⁴.

Alrededor de 1860, casi las tres cuartas partes de la población activa sevillana eran personas asalariadas y artesanas. Un 15 por ciento estaba conformado por una compleja y dispar clase media que aglutinaba a funcionarios, comerciantes, abogados, médicos, miembros del ejército y resto de profesiones liberales, entre las que estaban incluidas distintas ocupaciones como las de boticario, veterinaria y titulados en agronomía. En este estado de cosas, solamente un 3 por ciento correspondía al cupo de propietarios y arrendatarios, lo que nos hace pensar en el alto grado de elitismo que suponía saberse miembro de una asociación como era el *Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla*¹⁰⁹⁵. No cabe duda, pues, que, desde un punto de vista puramente historiográfico, la evolución de la propiedad de la tierra y de los regímenes de tenencia debieron constituir un aspecto relevante en la formación de grupos de opinión, así como en la constitución de un tejido asociativo comprometido con los problemas de la élite terrateniente latifundista, más aún si se tienen presentes los rasgos dominantes en la estructura de la propiedad, dentro de lo que fue la Andalucía decimonónica. Desde esa misma perspectiva, hemos de considerar algunos detalles importantes.

Los trabajos realizados en este sentido, coinciden en señalar la efectiva polarización en la estructura de la propiedad de la tierra en Andalucía, situación que ya venía produciéndose a lo largo de todo el siglo XVIII. Una estructura latifundista que, para un buen número de historiadores, la

¹⁰⁹⁴ Bernal, A. M.; Florencio Puntas, A., y Martínez Ruiz, J. I., *El Empresariado Andaluz, en Perspectiva Histórica*, Escuela Andaluza de Economía, Sevilla, 2010, pág. 81.

¹⁰⁹⁵ Los datos están extraídos de González Turmo, Isabel, *Sevilla, banquetes, tapas, cartas y menús, 1863-1995. "Antropología de la alimentación"*, Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1996, pág. 22.

«revolución liberal» no haría sino afianzarla y reforzarla todavía más. Desde esta óptica, tendríamos que aceptar el hecho de que la propiedad de la tierra se mantuvo concentrada en manos de un reducido número de propietarios, dentro de una sociedad en donde los distintos grupos sociales se vieron limitados a permanecer prácticamente constantes¹⁰⁹⁶.

En consecuencia, e independientemente de los diversos avatares legales producidos durante la aplicación de la política desamortizadora de tierras, un importante grupo de holgados terratenientes sevillanos acapararon una destacada fracción de las instituciones locales, ya fueran políticas o económicas, actuando en muchos casos como un instrumento de arbitraje en determinados litigios y siendo parte esencial de un «capital» político que terminaría determinando la capacidad de elegir y ser elegido en función del tamaño y del rendimiento de las propiedades territoriales. Un hecho que, al fin y a la postre, determinaría un claro valimiento y protección de los intereses agrícolas sobre el resto de inclinaciones económicas¹⁰⁹⁷.

Dentro de este mismo contexto en el que era perfectamente visible la estrecha relación entre la agricultura y la propiedad, el precio del trigo determinó, en mayor medida que cualquier otro producto, las conexiones que por entonces existían entre los mercados y las poblaciones andaluzas,

¹⁰⁹⁶ No existe un criterio lo suficientemente esclarecedor en este sentido. Así, en un reciente trabajo elaborado por el Grupo de Estudios Agrarios podemos leer: “Cada día parece más claro que la Desamortización no sirvió exclusivamente para incrementar el patrimonio de los pudientes o convertir en grandes terratenientes a destacados miembros de la burguesía agraria que ya eran grandes arrendatarios de los patrimonios de manos muertas o de la nobleza. En este sentido, no resulta correcto mantener tampoco que los repartos y roturaciones beneficiaron a los campesinos y las subastas a los grandes propietarios. Los últimos trabajos, muchos de ellos de índole local, menos agregados, en los que es posible conocer prácticamente a todos los compradores, ofrecen una imagen más compleja y diversa, de la que también participaron los campesinos. Por lo pronto, si comparamos con el número de instituciones que poseían la titularidad jurídica de la tierra antes de su enajenación con el posterior, no cabe duda que las subastas significaron un aumento neto de propietarios de fincas rústicas bastante considerable”. Grupo de Estudios Agrarios, “Propiedad y explotación en la Historia Agraria de Andalucía. Una visión de conjunto”, en González de Molina, Manuel (Editor), *La Historia de Andalucía a debate. II. El campo andaluz*, Diputación Provincial de Granada, Anthropos Editorial, Barcelona, 2002, págs. 62, 63, 69 y 70.

¹⁰⁹⁷ Una amplia exposición sobre esta cuestión puede verse en las actividades de las familias sevillanas de Ignacio Vázquez, José y Teodoro Gutiérrez, Fernando Blesa, Antonio Ruíz, Pedro Ruipérez, Juan Quintanilla o José Martínez de Azcoitia, entre otros, que están recogidas en la obra de François Héran, ya citada, sobre la oligarquía en el campo sevillano durante el siglo XIX. Asimismo, los efectos que produjeron en determinadas comarcas de Andalucía las transformaciones agrarias en Grupo de Estudios Agrarios, “Transformaciones agrarias y cambios en la funcionalidad de los poderes locales en la Alta Andalucía, 1750-1950”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 10, SEHA, año 1995, págs. 35 a 66.

afectando sobremanera al mapa reivindicativo trazado durante los años cincuenta y sesenta de la centuria. Además de ser el principal artículo agrícola en muchas zonas de cultivo, a mediados del siglo XIX el trigo ya había adquirido en muchas de ellas la condición de monocultivo, al tiempo que había comenzado a ser objeto de discusiones al constituirse en un producto muchas veces importado y adquirido en los principales puertos de Andalucía. Finalmente, la articulación económica y social en torno a los cereales, como uno de elementos esenciales destinado al consumo interior, asumió un destacado protagonismo formando parte de las aspiraciones exportadoras durante ciertos estadios de tiempo, ya expuestos en esta investigación¹⁰⁹⁸.

Ni qué decir tiene que los silogismos surgidos como consecuencia de las dificultades sobrevenidas en los mercados de cereales en Andalucía, se significaron como los aspectos que mayor participación acaparaban entre los asuntos atendidos por agricultores y propietarios, ya fuera en las reuniones del *Círculo de Labradores*, en la propia Junta de Agricultura, e incluso en las distintas publicaciones que sobre la cuestión agrícola comenzaban a aparecer en la Región. A priori, argumentos como la privatización del uso de la tierra, las mejoras en la red de transportes, las condiciones variantes en los mercados internacionales de granos, la política arancelaria o el régimen contributivo, acabaron influyendo, como más tarde veremos, en el proceso de perfeccionamiento dirigido hacia la protección de la propiedad y de los mercados en Andalucía.

Desde 1845, Sevilla había entrado en una etapa consistente y fructífera de la mano de una burguesía estable en lo político, sin retraimientos frente a una clase aristocrática que venía integrándose en las pautas marcadas por la “década moderada”, y aprovechando, en todo caso, las oportunidades que ofrecía el curso de los nuevos tiempos para descoser sus pretensiones sociales y económicas¹⁰⁹⁹. Precisamente, las distintas identidades aparecidas en este sentido no tardaron en organizarse de forma sucesiva en grupos participativos, sobre todo culturales y económicos, que terminarían influenciando a toda la provincia. Entre las primeras sociedades

¹⁰⁹⁸ Grupo de Historia de los Precios en Andalucía, *Estudio de los precios agrarios y de la formación del mercado regional en Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX*, Universidad de Jaén, 2005, pág. 62.

¹⁰⁹⁹ Braojos, Alfonso, “La Sevilla Romántica (Aproximación histórica a sus rasgos sociales y políticos)”, *El Gnomo: Boletín de estudios becquerianos*, número 2, año 1993, pág. 130.

citadas por Bernal y Lacroix se encontraban el *Liceo Sevillano*, la *Sociedad Económica de Amigos del País* y, sobre todo, la *Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento*, fundada en 1844 por Pablo Francisco Laverrerie¹¹⁰⁰.

Fue la de *Emulación y Fomento* una asociación comprometida con la educación y la promoción de los adelantos en las ciencias y la protección a la agricultura. Citada y elogiada por Madoz, por los grandes servicios prestados a los «conciudadanos» sevillanos, apareció durante mucho tiempo en la mayoría de Guías con menciones y reseñas a la capital y su provincia¹¹⁰¹. Una entidad que, en connivencia con la *Sociedad Económica* hispalense, reavivó sus actividades en 1846, publicando sus primeros estatutos en enero del año siguiente y en los que expresaba su intención de presentarse como: “una reunión ilimitada de ciudadanos decididos a promover por puro patriotismo el desarrollo de todas las mejoras materiales, la ilustración en general de las ciencias, agricultura, y principalmente artes y comercio”¹¹⁰².

A tal fin se había constituido y organizado en seis secciones o «clases» de marcado carácter técnico, estando una de ellas dedicada a la agricultura, promoviendo la publicación de memorias y trabajos agrícolas, y dando a conocer las mejoras que en este sentido venían produciéndose en dicho ramo. La contribución al sector se completaba con la distribución de semillas y plantas entre los agricultores, así como la instrucción gratuita entre los mismos, desempeñada por los propios socios con el fin de auspiciar al estamento agrícola¹¹⁰³. Paralelamente, durante los años cincuenta y primeros de la década de los sesenta del siglo XIX, destacaría Antonio M. Cisneros y Lanuza como profesor de agricultura, período en el que la Junta

¹¹⁰⁰ Bernal, A. Miguel y Lacroix, Jacques, ob. cit., pág. 482. El nombre completo de la asociación era el de *Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento de la Ilustración, Agricultura, Artes y Comercio*. Véase de Cano Pavón, José Manuel, “La Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento: aproximación a su historia”, en *Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística*, Tomo LXXXIII, número 254, Sevilla, año 2000, pág. 12.

¹¹⁰¹ Madoz, Pascual, ob. cit., Tomo XIV, Imprenta del Diccionario Geográfico, Madrid, 1849, págs. 355, 356, 361 y 363; Montoto y Vigil, Pedro, *Guía General de Sevilla. Ó sea manual histórico-topográfico, estadístico y administrativo*, Imprenta, librería y litografía de D. Carlos Santigosa, Sevilla, 1851, págs. 128, 129 y 140; Morillas y Alonso, Victoriano, *Guía General de Sevilla y su provincia*, Imprenta y Litografía de la Revista Mercantil, Sevilla, 1860, págs. 177 y 178, y Gomez Zarzuela, Manuel, *Guía de Sevilla. Su provincia, Arzobispado, Capitanía General, Tercio Naval, Audiencia Territorial y Distrito Universitario. Para 1866*, La Andalucía, Sevilla, 1866, págs. 176 y 177.

¹¹⁰² Cano Pavón, José Manuel, ob. cit., págs. 13 y 14.

¹¹⁰³ Cano Pavón, José Manuel, *La Escuela Industrial Sevillana (1850-1866). Historia de una experiencia frustrada*, Universidad de Sevilla, 1996, pág. 31.

Directiva de la Sociedad estuvo presidida por Pedro Ibáñez¹¹⁰⁴. En otros casos, la buena disposición y saber hacer de la misma provocó la remisión de escritos en los que se detallaba la organización de eventos agrícolas, dirigidos a otras asociaciones y Sociedades Económicas repartidas por el país¹¹⁰⁵.

Junto a la *Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento*, durante el período que habría de transcurrir entre los años 1845 y 1868, la capital andaluza vio incrementado su «patrimonio» asociativo, tanto en los aspectos políticos como en lo tocante a la actividad económica y social, con la aparición del *Casino Sevillano*, de señalado talante monárquico y conservador, del *Casino Andalúz*, manejado por la burguesía financiera y comercial de la ciudad, y muy especialmente por el establecimiento del *Círculo de Labradores y Propietarios*, organizado en torno a un importante grupo de propietarios agrícolas, ya en el año 1859¹¹⁰⁶. La irrupción de este último en el mapa asociativo sevillano, venía a alterar el circunspecto papel que hasta ese momento había venido realizando el *Círculo Mercantil* de Sevilla, compuesto en su mayoría por propietarios y comerciantes, y cuyos primeros Estatutos habían sido aprobados en marzo de 1853¹¹⁰⁷.

En el curso de los primeros diez años de existencia del *Círculo de Labradores*, el cambio de actitud de sus socios, así como la denominación del mismo fueron extraordinariamente significativos. A través de sus Reglamentos aprobados en 1859 y modificados nueve años después, el propio *Círculo de Labradores de Sevilla* pasó a denominarse *Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla*. En la primera de las bases establecidas en 1859 se podía leer: “El establecimiento del *Círculo de Labradores de Sevilla*, tiene por objeto facilitar la frecuente reunión de los labradores,

¹¹⁰⁴ Morillas y Alonso, Victoriano, ob. cit., pág. 178.

¹¹⁰⁵ Nos han quedado algunas referencias recogidas por la *Sociedad Económica* de Valencia, relativa a la remisión de Programas y otras informaciones sobre la mejor forma de organizar eventos relacionados con la agricultura. Véase, por ejemplo, ARSEAPV, caja C-123, legajo VII, Correspondencia de sociedades, signatura número 5, año 1849, así como la caja C-129, signatura número 4, correspondiente al año 1852.

¹¹⁰⁶ Bernal y Lacroix citan al último de ellos como *Casino de Labradores y Propietarios*, debido a su interés por presentarlo como un establecimiento corporativo, en principio de carácter recreativo, aunque con intereses económicos directamente vinculados al colectivo de propietarios agrícolas en Sevilla. Bernal, A. Miguel y Lacroix, Jacques, ob. cit., págs. 4823 y 484.

¹¹⁰⁷ Gómez Zarzuela, Manuel, ob. cit., pág. 83. *Círculo Mercantil de Sevilla*, reglamento aprobado en Junta General de 13 de marzo de 1853, y reformado en diciembre de 1855, en abril de 1859, y en enero de 1864, Imprenta y Litografía de las Novedades, Sevilla, 1864.

ganaderos y propietarios, á fin de comunicarse conocimientos y ausiliarse mutuamente para el adelanto de sus respectivos caudales, disfrutando al mismo tiempo el solaz de tan buena sociedad”¹¹⁰⁸. Más escuetos aparecían sus propósitos en los Reglamentos modificados y aprobados en 1868. En el artículo 1º referido a las finalidades y competencias de la asociación, éstas quedaban reflejadas de la siguiente forma: “La sociedad denominada Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, tiene por objeto proporcionar á los individuos que la componen un centro de reunión y de recreo”¹¹⁰⁹. Los cambios reflejados en las funciones no afectaban, sin embargo, ni a las formas de acceso a la asociación, ni a las atribuciones de las Juntas.

Todavía, a finales de los años sesenta del siglo XIX, las «Guías» y otras publicaciones de carácter geográfico y estadístico engarzaban al *Círculo de Labradores* sevillano entre los casinos y sociedades de recreo más vistosos de la capital¹¹¹⁰. La institución, que había comenzado su andadura respaldada por un grupo de agricultores acomodados y de terratenientes con grandes propiedades, y cuyo objetivo era crear un casino siguiendo el ejemplo de los establecimientos británicos, asumió la tarea, entre otras, de dar cabida a una serie de intereses económicos y culturales, agrupando a agricultores y propietarios en un proyecto que se consideraba viable en la Sevilla decimonónica de Federico de Castro, Ángela de la Cruz, Federico Rubio y Galí o el mismo Gustavo Adolfo Bécquer. Entre aquéllos se encontraban algunos «labradores» noveles que, junto a los ya existentes, tomaron la decisión de afrontar una nueva andadura que fuera capaz de acercar los progresos técnicos, acrecentando, al mismo tiempo, los intereses financieros y económicos de sus haciendas. Sevilla y el *Círculo*, quedaban de esa forma unidos para convertirse en los años venideros en punto de encuentro para un singular número de eventos que habrían de prolongarse hasta la actualidad¹¹¹¹.

¹¹⁰⁸ *Círculo de Labradores de Sevilla. Reglamento aprobado en Junta General celebrada el 16 de enero de 1859*, Imprenta del Porvenir, Sevilla, 1859, pág. 5.

¹¹⁰⁹ *Reglamento del Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla aprobado en Junta General celebrada el día 5 de Marzo de 1868*, Imprenta y Librería de D. José M^a Geofrin, Sevilla, 1868, pág. 3.

¹¹¹⁰ Gómez Zarzuela, Manuel, ob. cit., pág. 83. Asimismo, en Bisso, José, *Crónica de la provincia de Sevilla*, Editores Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid, 1869, pág. 53. Al respecto, uno de los diarios más importante de la capital había anunciado la creación de un Círculo de Recreo en la capital a finales del verano de 1859. Véase *El Porvenir*, martes 6 de septiembre de 1859.

¹¹¹¹ En efecto, a través del *Círculo de Labradores* se llegarían a realizar colectas benéficas para atender los distintos contratiempos ocasionados por inundaciones, terremotos o

Ya a finales de 1858, *El Porvenir* se había hecho eco de la intención, así como del espíritu de asociación, que recorría todas las provincias con el ánimo de establecer una serie de establecimientos o casinos en los que se vieran “representadas todas las clases de la sociedad”¹¹¹². Una idea que comenzaba a perfilarse y que bajo el nombre de *Círculo Agrícola* iba a tener lugar finalmente en el domicilio particular del propietario Joaquín Auñón. Procedente de una familia establecida en Morón de la Frontera y arrendataria del ducado de Osuna, Auñón ostentaría distintos cargos en la provincia que irían desde la alcaldía en la propia localidad de Morón hasta gobernador la provincia de Sevilla en 1857. Antes, había sido diputado y uno de los mayores contribuyentes de la ciudad con una cuota anual de 8.000 reales hasta los años sesenta¹¹¹³.

Si aceptamos lo anotado por la prensa sevillana, a la reunión asistieron más de cien «labradores» de la provincia y en la misma se llegó a discutir la necesidad de establecer un banco agrícola que pudiera proporcionar recursos a los propietarios del campo más menesterosos¹¹¹⁴. La primera Junta presidida por Joaquín Auñón estuvo acompañada en la vicepresidencia por Ramón González Pérez, quedando organizada formalmente la asociación el domingo, día 4 de septiembre de 1859. Al proyecto inicial se habían sumado ciento once socios y entre las noticias publicadas en los primeros meses de vida de la Sociedad podían entreverse las congratulaciones y parabienes dedicados a la misma¹¹¹⁵.

En aquella primera comisión de fundadores se encontraban, además de los ya nombrados Joaquín Auñón y Ramón González, personalidades

epidemias, sin olvidar el impulso conferido a la cultura y a las ciencias que hasta nuestros días ha podido disfrutar la capital andaluza. Fuertes, Jaime, *Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, 150 años al servicio de la sociedad sevillana*, Almuzara, Sevilla, 2009, págs. 26 a 28.

¹¹¹² *El Porvenir*, sábado 18 de diciembre de 1858.

¹¹¹³ Caro Cancela, Diego (Dir.), *Diccionario biográfico de Parlamentarios de Andalucía, 1810-1869 A/G*, Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010, págs. 182 y 183.

¹¹¹⁴ La nota está recogida de la obra de Plaza Orellana, Rocío, *Real Círculo de Labradores. Ciento cincuenta años de historia*, Almuzara, Sevilla, 2009, pág. 38.

¹¹¹⁵ *El Porvenir*, jueves 7 de julio de 1859. De la futura existencia, así como del importante número de socios que iban adhiriéndose al proyecto del *Círculo de Labradores de Sevilla* existen noticias, por ejemplo, en el *Diario de Córdoba*, número 2.672, miércoles 20 de julio de 1859. Desde el diario madrileño *La Correspondencia de España*, se noticiaba la amplia difusión del evento en Sevilla, anunciando una organización de similares características en otras ciudades españolas. En concreto en *La Correspondencia de España*, número 507, domingo 22 de enero de 1860.

destacadas de la comunidad sevillana como Jerónimo Herrera, antiguo colono perteneciente a la nobleza y destacado propietario, o los hermanos Antonio y Manuel León de Villalón, igualmente propietarios de tierras y emparentados con Auñón. A ellos se unían otros señalados terratenientes como Francisco Javier de Torres, uno de los propietarios más importantes de la época, el conde de Miraflores y, finalmente, Agustín Armero¹¹¹⁶. En lo sucesivo, el *Círculo* estaría dirigido por personas vinculadas muy directamente con la propiedad agrícola, siendo los sucesores inmediatos en la cabeza del mismo, Ignacio Vázquez, durante el año 1861; el duque de Medina de las Torres, hasta 1864; Miguel Ángel Desmaissieres y Fernández de Santillán, marqués de la Motilla, presidente durante 1864, 1865 y 1867, y Juan Antonio de Estrada y González de Sepúlveda, cuya presidencia se prolongaría hasta finales de 1867¹¹¹⁷.

La aparición, solo un año antes de quedar constituido el *Círculo de Labradores*, del semanario sevillano *La Agricultura Española*, había dado lugar a una apreciable intensificación y consolidación de las aspiraciones latifundistas, en clara consonancia con los problemas arancelarios que, especialmente relacionados con el trigo, venían arrastrándose desde hacía unos años atrás. La publicación, directamente ligada a los intereses de los grandes propietarios sevillanos, no tardó en convertirse en el soporte perfecto de las reivindicaciones que durante algún tiempo se habían realizado, con escaso o relativo éxito en las provincias andaluzas, a través de las cabeceras de otros títulos de la prensa escrita. Existen pocas dudas acerca de la relevancia alcanzada por las revistas de agricultura, ya en la segunda mitad de la centuria, al tratarse de un medio irremplazable y a través del cual se daban a conocer y podían difundirse, tanto los avances técnicos como las carencias que venía soportando el sector agrario en nuestro país. Con la presencia a partir del 8 de julio de 1858 de *La Agricultura Española*, la propiedad agrícola y rural sevillana podía contar con un mecanismo que, libre de posiciones políticas y en palabras de la propia publicación, iba a emprender la difícil tarea: “de defender los intereses de la primera de las industrias, de aquella que en nuestra patria constituye la base de la riqueza pública”¹¹¹⁸.

¹¹¹⁶ Domínguez León, José, *La sociedad sevillana en la época isabelina. Una visión a través de la religiosidad (1833-1868)*, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1999, pág. 167, Bernal, A. Miguel y Lacroix, Jacques, ob. cit, pág. 488.

¹¹¹⁷ *Ibidem*, págs. 488, 494 y 499.

¹¹¹⁸ *La Agricultura Española*, número 1, jueves 8 de julio de 1858, pág. 3.

Incorporada a la causa proteccionista, la Junta de Agricultura de la provincia de Sevilla se sumó muy pronto a los convencimientos significados por *La Agricultura Española*, publicando ésta un suplemento en el primero de sus números, en la que se recogía una Exposición dirigida a la Reina expresando el enorme perjuicio que, en opinión de los representantes de la Junta, iba a deparar a los labradores la nueva prórroga permitiendo la libre entrada de cereales extranjeros en nuestro país. Con sucinta determinación, los propietarios próximos a la Junta se habían mostrado contundentes respecto al libre cambio y a las consecuencias aportadas por el mismo al campo andaluz. En alusión directa a las peticiones para que se produjera una apertura de las fronteras al trigo foráneo, la Exposición, entre otras cuestiones, se manifestaba en los siguientes términos: “Esta es una ilusión, y una ilusión pueril, puesto que para concebirla es indispensable ignorar ú olvidar la historia, desconocer las leyes económicas, apreciar erróneamente los hechos, y aun renunciar á la lógica”.

En dicho asunto, la élite propietaria sevillana venía manifestando su temor ante una posible dependencia, tanto de capitales como de géneros y productos provenientes del exterior, lo que implicaba un considerable deterioro en sus haciendas y una más que probable merma en las rentas que venían manteniéndose bajo el signo del proteccionismo oficial. Más aún cuando el cerrojo obligado a los cereales no nacionales quedaba justificado ante la imposibilidad de competir con granos procedentes de tierras con climas más benignos, mano de obra más barata, medios de transporte adaptados y una relevante diferencia en la carga impositiva.

La deserción del capital nacional, la decadencia de la industria y la ruina del país son males inevitables para los pueblos que entren en el sistema del libre cambio antes de elevar las industrias indígenas á la altura conveniente para que sus productos no desmerezcan de los similares ni por su calidad ni por su costo. De otro modo, cuando por la escasez del numerario y por la anulación de los artefactos y aun de los inmuebles, haya de venir el capital extranjero á fomentar y dar vida á las explotaciones antiguas mejorandolas con nuevos procedimientos ó reemplazándolas con otras mas adecuadas y convenientes á su situacion, el pueblo favorecido será su tributario ó se convertirá en su colono¹¹¹⁹.

¹¹¹⁹ En el texto se hacía referencia, además, a la imposibilidad de competir con trigos americanos, debido al bajo precio como consecuencia de participar en las explotaciones agrarias mano esclava. “Exposicion que eleva á S. M. la Junta de Agricultura de la provincia

La Agricultura Española mantuvo su publicación a lo largo de todos los jueves del año hasta su desaparición definitiva en 1868, siendo su primer editor, Antonio María Otal y teniendo como redactores a Cayetano Casas, José Benavides y el influyente propietario sevillano José Hidalgo Tablada, quien había adquirido una amplia red de relaciones que se repartía por todo el país¹¹²⁰. A lo largo de su actividad periodística y en especial durante los números iniciales de su publicación, se dedicaron excelsos ensayos y comentarios en contra del libre cambio y de la importación de cereales extranjeros, consiguiendo acaparar el interés de propietarios y comerciantes. La enconada pugna por controlar las decisiones arancelarias en lo concerniente a los mercados en el asunto de los cereales se planteó, desde las páginas del semanario sevillano, como una cuestión nacional que debía atender a preguntas como: “¿Quiénes son los productores en España?”. O también: “¿Quiénes son los consumidores?”. Las respuestas a este tipo de cuestiones eran, para la mayoría de quienes frecuentaban las páginas de *La Agricultura Española*, tan evidentes como incuestionables¹¹²¹.

Desde hacía tiempo se venía acatando el Decreto de 1834 que fijaba la entrada de trigo procedente del exterior en casos de escasez, mientras no se sobrepasaran los setenta reales la fanega, así como el de 14 de marzo de 1847 por el que se concedía la compra de granos como consecuencia de la escasez extendida por toda la Península. A pesar de ello, y de la misma forma que en Cataluña se seguía buscando el camino hacia un proteccionismo estable, en Sevilla se recordaba el enconado esfuerzo que se venía realizando en aquellas provincias. Una circunstancia que, a pesar de la aparente buena acogida tributada por la sociedad agrícola sevillana, la prensa intentaba soslayar no cayendo en triunfalismos. No es extraño, pues, que se insistiera en la unidad, por parte de agricultores y propietarios agrícolas, al declarar desde las páginas de la «gaceta» sevillana que: “La

de Sevilla, sobre la libre importacion de cereales”, *Suplemento a La Agricultura Española*, del jueves 8 de julio de 1858.

¹¹²⁰ El semanario completaría su cabecera saliendo a la calle definitivamente bajo el nombre de *La Agricultura Española, periódico andaluz de intereses materiales*. Una pequeña, y al mismo tiempo interesante referencia a la prensa decimonónica sevillana del siglo XIX, en *ABC Sevilla*, 5 de junio de 1981, pág. 87. Sobre la carrera y trayectoria de Hidalgo Tablada en el mundo de la propiedad, la investigación y el asociacionismo agrario, puede consultarse la obra citada de François Héran, relativa a la agricultura en el campo sevillano.

¹¹²¹ En un artículo de Santiago Alonso Valdespino, escrito en julio de 1858, se argumentaba que únicamente a los consumidores españoles podía convenir la apertura de las fronteras a los productos extranjeros ya que entre éstos, no era posible el comercio o el cambio. *La Agricultura Española*, número 5, jueves, 5 de agosto de 1858, pág. 69.

causa es idéntica, pero no será seguro su triunfo en la opinion, si no se acierta á plantearla con desinterés y patriotismo generalizándola á todas las clases productoras y contribuyentes”¹¹²².

En los últimos meses de 1858 se comenzó a plantear la posibilidad de encontrar un modelo que articulara la política y la agricultura, sin que por ello se vieran afectadas el resto de cuestiones administrativas y económicas que concernían a la sociedad. Si la idea era que la cuestión política había desvirtuado considerablemente la realidad económica y social del país, se precisaba la necesidad de encontrar para la agricultura una protección decidida que partiera desde los poderes públicos y que dejara de lado las luchas egoístas verificadas en tiempos de elecciones¹¹²³. Desde la propia redacción de *La Agricultura Española* se inició una extensa solicitud de opiniones a agricultores, propietarios y fabricantes de harinas, con el propósito de retornar a un régimen enteramente proteccionista y manifestar las posibles soluciones al problema del trigo¹¹²⁴. La idea, oponiéndose a la prórroga que autorizaba la importación de granos extranjeros, recaló inmediatamente entre los propietarios mejor situados de la provincia de Sevilla, anunciándose de inmediato varios proyectos y propuestas para ser dirigidos al Congreso de los Diputados¹¹²⁵.

Las manifestaciones llegadas desde otras entidades asociativas en apoyo a las demandas realizadas por *La Agricultura Española* fueron inmediatamente publicadas y justificadas, dado lo racional de la cuestión al ser España un país netamente agrícola. En este sentido, *La Real Sociedad Aragonesa* había hecho llegar un escrito de apoyo hasta Sevilla expresando, entre otras cosas: “lo acreedora que es la Agricultura española á una

¹¹²² Ibidem, págs. 69 y 70.

¹¹²³ A este respecto, Hidalgo Tablada se refería así: “Los electores están habituados á enviar un representante al Parlamento para procurar el triunfo de esta ó la otra bandería política; y apenas piensan en otras reformas que en las que tienen exclusivamente ese carácter. Las verdaderas y fecundas reformas; los intereses de la agricultura, de la industria, del comercio; todo esto entra en muy poco ó en nada en el programa gubernamental del candidato”, *La Agricultura Española*, número 14, jueves, 7 de octubre de 1858, pág. 216.

¹¹²⁴ “Conocidos los principios que defiende nuestra publicacion, es llegado el momento de dirigirse á los que tienen un inmediato interés en que triunfen, á fin de que uniéndose todos, y poniendo de su parte cuanto posible sea, se ilustre la cuestion de que depende el desarrollo de la agricultura”, en *La Agricultura Española*, número 17, jueves 28 de octubre de 1858, págs. 257.

¹¹²⁵ En este sentido tuvo bastante repercusión el primero de los proyectos remitido por Francisco P. Candau, al que se le dedicaron diferentes páginas del semanario. *La Agricultura Española*, número 24, jueves 16 de diciembre de 1858, págs. 341 y 342.

razonable proteccion, que solo en ocasiones dadas puede un pais agrícola como el nuestro necesitar auxilio de los otros, y que no es necesario desde el punto de vista de los intereses de las clases consumidoras decretar como regla constante la ámplia latitud actual para el comercio de granos extranjeros”¹¹²⁶. En la misma línea se mostró *el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, quien hacía tiempo ya había requerido al Gobierno y a la Reina la no renovación de la prórroga a la libre importación de cereales¹¹²⁷.

Otras peticiones en este mismo sentido fueron sucediéndose, casi ininterrumpidamente, por un importante número de municipios, grupos de propietarios, sectores de la prensa, etc., que veían en el libre cambio la mayor de las amenazas con las que podían topar sus intereses (véase el cuadro 30). Labradores de poblaciones como Utrera, Tocina, Fuentes de Andalucía, Los Palacios, Villafranca, Puebla de los Infantes o el propio Ayuntamiento de Sevilla, este último en representación de un gran número de contribuyentes, hicieron públicas sus desaprobaciones apareciendo en distintos números del semanario sevillano¹¹²⁸.

Pocos meses antes de que el *Círculo de Labradores* se constituyera como asociación de agricultores y propietarios, desde la sección «doctrinal» de *La Agricultura Española* se comenzó a contemplar la posibilidad de establecer una entidad asociativa de cierta envergadura que aunara los intereses colectivos de la agricultura, tal y como sucedía en las provincias de Cataluña. Con el título de “La unión hace la fuerza”, el articulista José Benavides dejaba entrever la necesidad existente en Andalucía de reunir a sus provincias bajo una misma bandera, con el firme propósito de completar la voluntad que desde hacía algún tiempo venía requiriéndose, en relación a los intereses agrícolas, de los más adelantados propietarios. En su artículo, Benavides apremiaba a la unidad y recordaba las ventajas que la misma produciría en el futuro.

¡Cuántas serian las ventajas de la union de todas las provincias de Andalucía! Dada nuestra unidad nacional bajo el sistema de gobierno que

¹¹²⁶ *La Agricultura Española*, número 25, jueves 23 de diciembre de 1858, pág. 357.

¹¹²⁷ *Ibidem*, pág. 361.

¹¹²⁸ La amplia lista de agrupaciones de labradores y agricultores fueron publicándose de manera sucesiva. Véanse, por ejemplo, y a este respecto los números 28, 29, 31 y 32 de *La Agricultura Española*, correspondientes a los meses de enero y febrero de 1859.

CUADRO 30¹¹²⁹

Entidades y prensa contra la prórroga autorizando la libertad de importación en 1858, y recogidas por La Agricultura Española

Entidades civiles y grupos de agricultores y propietarios

- Junta de Agricultura de Sevilla
- Diputación Provincial de Sevilla
- Junta de Fábricas de Cataluña
- Instituto Agrícola Catalán de San Isidro
- Junta de Agricultura de Barcelona
- La «clase» agrícola de Sevilla
- Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País
- Varios labradores de Valencia

Prensa y Revistas

- *El Eco de la Ganadería* (periódico de Madrid)
- *La Industria* “ “ “
- *El Lunes* “ “ “
- *El Leon Español* “ “ “
- *Diario de Barcelona*
- *Revista de Agricultura Práctica* (publicación de Barcelona)
- *Revista Industrial* “ “ “
- *Diario de Tarragona*
- *Diario Mercantil* (periódico de Valencia)
- *El Mallorquín* (periódico de Palma)
- *La Andalucía* (periódico de Sevilla)
- *Revista Mercantil* “ “ “

FUENTE: *La Agricultura Española*, número 31, jueves 1 de febrero de 1858, pág. 426.

¹¹²⁹ Al intentar corroborar la fecha de la fuente escrita utilizada para este caso, se ha advertido, sin embargo, un posible error en la misma al verificarse que el primer jueves de febrero de 1859 correspondió al día 3, y no al día 1, tal y como figura en el propio semanario sevillano, cuestión que hemos creído oportuno hacerlo notar en esta anotación.

nos rige, esa union no puede ser establecida por la ley en cuanto produjera la mas mínima separación de las demás provincias españolas. En una palabra, la federacion no es hoy posible. Pero es posible y fácil la union de las ideas, de los esfuerzos, de los trabajos, de las reclamaciones, de las defensas, de todos los hechos en fin con importancia social y que estan dentro del círculo de accion de los ciudadanos de un país civilizado y libre. Para realizar esa union, bastan la ilustracion y la voluntad de cierto número de personas de influencia¹¹³⁰.

Esta misma conducta quedó reflejada también para la organización de las clases propietarias en Andalucía. El ejemplo más perceptible, como ya se ha apuntado, era el *Instituto Agrícola Catalán* y la ligazón que se advertía por parte de las cuatro provincias catalanas. A este respecto, y desde las páginas que difundía el semanario sevillano, comenzaron a extenderse algunas argumentaciones lo suficientemente significativas, que tenía que ver con el hecho de la falta de asociación y de una institución que aglutinara los intereses agrícolas. Así, el propio Benavides se preguntaba: “¿Y por qué Andalucía no ha de imitar el ejemplo de Cataluña? ¿Por qué nuestras ricas y feraces provincias no han de unir sus fuerzas y trabajar de consuno en pró de nuestros vastos y comunes intereses?” Más adelante reiteraba: “Buscaremos otra vez el ejemplo en la ilustrada Cataluña. Allí se ha comprendido perfectamente que la union de las fuerzas particulares produce una fuerza infinitamente mayor; esto es, se han comprendido las maravillas de la asociación, y todas las clases se han lanzado en ese camino. Entre esas clases, como no podía dejar de suceder, figura la agrícola, que asociada con el nombre de Instituto catalan de S. Isidro, tantos bienes produce a la agricultura de aquel país”. Próximos a finalizar su propuesta, era evidente que desde la prensa sevillana y desde los foros de opinión cercanos a la propiedad agraria se estaban recogiendo los deseos de muchos hacendados y personas que veían en el asociacionismo un recurso nuevo y adelantado con capacidad para hacerse oír en las esferas más destacadas del Estado. Con todo, la cuestión más importante no tardó en hacerse suficientemente perceptible, expresándolo así *La Agricultura Española*: “¿Por qué, pues, los labradores andaluces no imitan el ejemplo de los catalanes? ¿Por qué no se establece en Sevilla una asociación parecida á la del Instituto de S. Isidro?”¹¹³¹.

¹¹³⁰ *La Agricultura Española*, número 43, jueves 28 de abril de 1859, pág. 569.

¹¹³¹ *Ibidem*, págs. 570 y 571.

Resulta obvio imaginar las dificultades que se sucedían desde la propia redacción y desde el grupo de personas encargadas de elaborar los trabajos en el semanario, para encauzar todas las acciones a favor de las pretensiones de labradores y propietarios. La defensa desde *La Agricultura Española* de las clases productoras, si bien eran lógicas y comprensibles, no suponía una acción similar a la que podía desplegar una asociación lo suficientemente organizada y con una capacidad de convocatoria colectiva y generalizada. Esta reflexión, muchas veces expuesta entre las propias páginas doctrinales de la prensa sevillana, se hizo más evidente coincidiendo con el inicio del segundo año de publicación del *periódico andaluz de intereses materiales*¹¹³².

Como muy bien se apuntaba en el semanario, ciertamente los propietarios y labradores no habían sido llamados a tomar parte directa en la cuestión social que, según se apuntaba, “es de la mas profunda filosofía y de la mas alta política”. En todo caso, se esperaba una respuesta que permitiera recuperar solícitamente el tono reivindicativo y las exigencias proteccionistas. La situación era observada así por Genaro Morquecho y Palma: “Pero unos y otros tienen el mas vivo interés, el mas legítimo derecho, un deber sacrosanto, en ilustrar y tomar un partido, respecto la cuestion económica en la parte que les concierne”¹¹³³.

A vueltas con el librecambio, los trabajos en este sentido se prodigaron, máxime después del discurso pronunciado por José María Orense en la Bolsa de Madrid, el 5 de junio de aquel mismo año de 1859, en el que se aconsejaba a las clases productoras del país confiar sus esfuerzos a la apertura de las fronteras, declarando la libertad para el comercio de

¹¹³² Con la publicación del número 53 de *La Agricultura Española* se publicó un artículo, bajo el título de “Nuestro plan y nuestras tendencias”, con el que se hacía balance de la gestión durante un año y en el que se podían leer, entre otras cosas: “Quizás no se han visto secundados, como era necesario, por las clases y personas, cuyos intereses se propusieron defender é ilustrar; quizás ha dado lugar tal circunstancia á infundir cierto desaliento ó á escitar la impaciencia en alguno de esos mismos fundadores”. En otra de las acotaciones realizadas, a modo de reproche, se apuntaba lo siguiente: “La Agricultura Española proseguirá, pues, realizando su pensamiento creador; proseguirá, sí, aunque no se vea auxiliada por todas aquellas personas que por su ilustracion y estado social debieran comprender mejor, que existe, no ya un interés grande y legítimo, sino un verdadero deber, de conseguir al triunfo de todo pensamiento noble y generoso, de toda idea favorable al progreso de la patria agricultora, de esta industria que es origen y fundamento de la vida material de nuestros pueblos”. *La Agricultura Española*, número 53, jueves 7 de julio de 1859, pág. 1.

¹¹³³ *Ibidem*, pág. 2.

cereales¹¹³⁴. En aquellos mismos días, y desde *La Agricultura Española*, se daba cuenta del establecimiento en la ciudad de Sevilla del *Círculo de Labradores*. Una información que precedía el anuncio de la constitución en Valencia de distintas sucursales de la *Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas*, entre cuyas pretensiones figuraba igualmente el desbloqueo de los mercados nacionales a los granos extranjeros¹¹³⁵.

La invocación de una serie de medidas a favor de los labradores y en contra de las actitudes librecambistas, una vez concretado el *Círculo* y desde la línea editorial de *La Agricultura Española*, fue inmediata. A través de nueve puntos, proteccionistas y labradores comenzaron a hacerse presentes a través de la prensa, así como en distintas reuniones y foros de opinión de la capital sevillana, expresando sus razonamientos y derechos entre los que estaban comprendidas, entre otras cuestiones: la difusión de la instrucción profesional, la reforma del sistema hipotecario, la mejora en la viabilidad del transporte, la extensión de los seguros rurales o la ecuanimidad en las cargas públicas. Asimismo, desde los medios políticos y económicos más correligionarios con los intereses agrícolas, se felicitaba y elogiaba la acertada elección de las personas integradas en la Junta Directiva del *Círculo de Labradores* y se anunciaban las primeras medidas tomadas por los mismos¹¹³⁶.

El protagonismo logrado en las primeras semanas por la nueva asociación, demostraba las necesidades que hasta entonces habían venido padeciendo las clases propietarias, al no disponer de un espacio reservado para la discusión de sus problemas. Era evidente que con la dispersión vivida hasta entonces por las clases propietarias, las posibilidades de reunión habían resultado, salvo en determinadas circunstancias, poco

¹¹³⁴ En la sección doctrinal del semanario sevillano se insertó un artículo en su primera página con el título de "Errores y peligro del libre cambio", en el que se criticaba abiertamente, una vez más, los aspectos negativos expuestos por quienes intentaban llevar la economía del país a los modelos librecambistas. *La Agricultura Española*, número 54, jueves 14 de julio de 1859, pág. 13, 14 y 15.

¹¹³⁵ En este sentido *La Agricultura Española*, anunciaba el establecimiento en la capital andaluza de un "nuevo casino titulado *Círculo de labradores*". Al respecto puede consultarse el número 55, correspondiente al jueves 21 de julio de 1859, págs. 25 y 26.

¹¹³⁶ Ibidem, pág. 25, y *La Agricultura Española*, número 56, jueves 28 de julio de 1859, págs. 37, 38 y 39. Entre las primeras tentativas de carácter reivindicativo del *Círculo de Propietarios y Labradores de Sevilla* figura una Exposición dirigida a la Reina para la creación de un banco de préstamos que llevaría por nombre *Banco agrícola de la provincia de Sevilla*. *La Correspondencia de España*, número 870, martes 29 de enero de 1861; *Adelante*, número 82, 3 de febrero de 1861, y *La Alborada*, número 367, viernes 1 de febrero de 1861.

menos que inusuales. Dada la reciprocidad de intereses era lógico suponer que, acudiendo a un espacio común, los sectores más activos que controlaban la producción se terminarían entregando a las discusiones y a los acuerdos necesarios para el bien común. Así, al menos, se podía deducir de las páginas de los diarios sevillanos, sin menospreciar el interés que igualmente podía proporcionar el esparcimiento y la diversión a las clases mejor consideradas de la capital.

Si á esto se agrega el placer que siempre reportan las personas bien educadas, de juntarse con otras de su misma clase, en lugar proporcionado á su cultura, donde se lee y donde se habla, ya de negocios ya de cosas indiferentes, donde se piensa y donde se goza, donde hasta el recreo redundaba en beneficio de los que lo disfrutaban, que el nuevo Círculo contribuirá á realizar el gran fin de conciliar lo útil con lo agradable¹¹³⁷.

Pronto se hicieron visibles las diferencias del *Círculo* en relación a otras asociaciones establecidas en distintas zonas y provincias del país. Ello no era motivo para que se resaltara el mejor de los «espíritus» que acompañaba a los individuos de la corporación agrícola y del celo utilizado en beneficio de la clase a la que pertenecían sus miembros¹¹³⁸. Llegados a este punto, la realidad iba a demostrar el amplio recorrido político, económico y social, por el que la clase propietaria había transitado en Sevilla antes aun de 1868. Un hecho que justificaba las ambiciones de la sociedad liberal a mediados del siglo XIX y fácilmente comprobable si reparamos en quienes constituían el cuerpo de personalidades de la Junta Provincial, del Ayuntamiento de la capital, sin olvidar el conformado por los diputados que venían «ocupándose» de los intereses agrícolas en Madrid.

Era igualmente evidente que las personas que habían constituido el *Círculo* lo habían hecho conscientes de los nombres que tomaban como parte integrante de una sociedad que dignificaba a la agricultura. Así, erigidos como «labradores» y «propietarios», unían a la vocación el resultado de los procesos avivados por el liberalismo, además de las aspiraciones de figurar ante la sociedad sevillana como un grupo heterogéneo y suficientemente

¹¹³⁷ *La Agricultura Española*, número 61, jueves 1 de septiembre de 1859, pág. 98.

¹¹³⁸ Así, al menos se desprende de los comentarios que al respecto se realizaban, en relación a los socios del *Círculo de Labradores*, quienes habían manifestado "desde su primera reunion, todo el interés que les anima en favor de nuestra agricultura provincial, y han dado pruebas inequívocas de la actividad con que procurarán contribuir á su progreso". *La Agricultura Española*, número 62, jueves 8 de septiembre de 1859.

capaz de transformar las parcelas diarias de lo cotidiano. Por si quedaba alguna duda, el *Círculo* venía a contener y a dar forma a unos derechos considerados inalienables por sus propietarios, depositarios de unos privilegios adquiridos a través de la tradición y la «sangre», defensores de unos valores en los que se incluía la libertad, pero que no tardaría en mostrar un ávido interés por instalarse en la jerarquía política¹¹³⁹. En definitiva, tal y como lo expresara el articulista y Doctor en Ciencias, Genaro Morquecho y Palma, el *Círculo de Labradores de Sevilla* se había convertido de pronto en “el Benjamin de una gran familia, la primitiva espresion de una poderosa unidad agrícola, el órgano posible de la vida especial que se desenvuelve bajo un clima y en la superficie de una tierra, que atesoran los dones sin cuento, prodigados por la naturaleza”¹¹⁴⁰.

Bajo el prisma de la defensa de la propiedad y del mejoramiento de la agricultura, el semanario *La Agricultura Española* publicó a finales de septiembre de 1859, un amplio artículo de cinco páginas en el que se hacía balance de la gestión del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* y se exhortaba al *Círculo de Labradores* a proseguir en la consecución de unos intereses, considerados entonces análogos y comunes a ambas asociaciones¹¹⁴¹. En esta secuencia de hechos, no era fortuito que cada vez con mayor asiduidad se publicaran trabajos y artículos refiriéndose a la creación de otras sociedades y grupos de agricultores en diferentes ciudades españolas. A finales del año 1859, se habían dado a conocer a la opinión pública entidades asociativas como la *Asociación de Agricultura* en Zaragoza o la *Asociación para el Fomento de la Agricultura y la Ganadería* de Valladolid, ésta última en fase de creación¹¹⁴².

¹¹³⁹ Algunos apuntes en este sentido en Plaza Orellana, Rocio, ob. cit., pág. 44.

¹¹⁴⁰ *La Agricultura Española*, número 65, jueves 29 de septiembre de 1859, pág. 148.

¹¹⁴¹ En efecto, dentro de la sección doctrinal se recogía un artículo titulado “El Círculo de labradores de Sevilla, y el Instituto Agrícola Catalan de San Isidro”, en el que las últimas líneas resultaban muy significativas: “¡Fundadores del Círculo, hombres ilustres y generosos, patricios insignes! [...] Tened perseverancia en vuestra empresa! Los pueblos os bendecirán, y la posteridad recordará con orgullo vuestros nombres y vuestras virtudes” *Ibidem*, págs. 148 a 152.

¹¹⁴² *La Agricultura Española*, número 66, jueves 6 de octubre de 1859, págs. 162, 163 y 164, y número 67, jueves 13 de octubre de 1859, págs. 174 y 175. A comienzos de 1860 apareció igualmente la noticia de la fundación del *Círculo Económico Español*, asociación que fue muy bien recibida por los ambientes económicos proteccionista. Véase *La Agricultura Española*, número 83, jueves 2 de febrero de 1860, pág. 372 y 373, y sobre todo el número 95 correspondiente al jueves 26 de abril de 1860, págs. 513 y 514.

La presencia, cada vez mayor de sociedades de agricultura, no implicaba el abandono de las campañas contra las voces librecambistas, sobre todo teniendo presente las constantes subidas de tono que de manera reiterada se hacían por parte de los círculos más proclives a la liberación del comercio, especialmente de los cereales. Las campañas emprendidas por la *Asociación para la Reforma de los Aranceles* eran suficientemente explicadas por la prensa adicta a la protección, especialmente cuando aquéllas hacían alusiones deliberadas a la entrada de granos en nuestro país. Con dicha actitud, y en opinión de los seguidores de *La Agricultura Española*, se arremetía, una vez más, contra las tres cuartas partes de una población, cuyos intereses estaban supeditados a la propiedad y al cultivo del cereal. Por si fuera poco, la acción librecambista era vista desde Sevilla con tal recelo y vehemencia que, a decir por lo que se publicaba, resultaba difícil de contener.

La Asociación libre-cambista cuenta en su seno con escritores y oradores distinguidos; dispone de las columnas de muchos periódicos, así en Madrid como en las capitales de provincia; la cuota mensual, que en algunos puntos se han impuesto los asociados, debe proporcionar recursos para la publicación ó reimpresión de folletos, memorias y discursos: la multitud los aprende y facilitará su lectura en ciudades populosas; y todo esto es no mas que el primer resultado de unos cuantos meses de trabajo¹¹⁴³.

En la mente de la mayoría de quienes buscaban refugio en el proteccionismo se había instalado una consigna basada en la «resistencia», algo que se transcribía mediante continuas disertaciones, otras veces en forma de Exposiciones dirigidas a la Administración y a las Cortes, terminando en vastas peticiones que acababan siendo remitidas al Palacio, donde la Reina Isabel ultimaba tomando partido en algunas ocasiones. En esas lides se vio S. M. a comienzos del año 1860, cuando a través de la Junta de Agricultura de Sevilla se cursó una protesta, solicitando algunas modificaciones en el impuesto de consumos¹¹⁴⁴.

Por las mismas fechas, empezaron a surgir también una serie de trabajos en contra de la política tributaria, tal y como había sucedido en otras provincias de Cataluña y Valencia, en los que se apuntaban las

¹¹⁴³ *La Agricultura Española*, número 69, jueves 27 de octubre de 1859, pág. 198.

¹¹⁴⁴ *La Agricultura Española*, número 83, jueves 2 de febrero de 1860, págs. 369 y 370.

desigualdades y consecuencias que podía suponer para la agricultura, pasar de los 300 a los 460 millones de reales en la contribución directa. Tanto la contribución de consumos como la de puertas ya habían sido duramente criticadas y juzgadas por los obstáculos que ofrecían, tanto a las capas sociales más menesterosas como a la libre circulación de los productos de la tierra, lo que era considerado, en ocasiones, una humillación para la clase productora¹¹⁴⁵.

Desde la propia Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Sevilla se entendió que debía rechazarse la forma en la que se venía ejecutando la recaudación territorial, así como la Comisión que debía encargarse de su evaluación y repartimiento. Con la aprobación del Real Decreto del 23 de mayo de 1845, el Ayuntamiento de Sevilla debía nombrar a cuatro concejales, junto a otros cuatro contribuyentes elegidos entre cuarenta de los más importantes del municipio, para formar la denominada Comisión de Evaluación y Repartimiento, encargada de gestionar la significada contribución territorial. El problema afectaba sobremanera a muchos propietarios, quienes, además, eran destacados contribuyentes del municipio y miembros de la Junta de Agricultura. En opinión de la misma, el aumento en la contribución era debida, entre otros factores, a la práctica recaudatoria realizada con excesos injustificados, muchas veces como consecuencia de duplicaciones inexistentes en los recargos, omisiones en las rebajas y deducciones legales, etc., achacables, en todo caso, a unas comisiones a cuya sombra se sucedían de manera inalterable.

Porque ellas no pueden remediarlos. Las condiciones propias de este trabajo, la extensión de los amillaramientos, y hasta su volumen en las grandes poblaciones donde se halla muy dividida la riqueza, no permiten el exámen minucioso que debiera preceder á su aprobación, dándola siempre las comisiones apremiadas por el tiempo y sin antes revisarlos. Por consiguiente, urge se adopten medidas radicales, si han de desaparecer los abusos, medida que en concepto de esta Junta, bastará se concreten á establecer en las capitales de provincia, donde hay comisiones especiales, el mismo sistema

¹¹⁴⁵ Así aparece reflejado en un artículo dedicado a la problemática originada por las tasas impositivas entre los grupos de propietarios y productores en Andalucía. *La Agricultura Española*, número 93, jueves 12 de abril de 1860, págs. 489 y 490. La fuerte censura a las cargas por consumos, también en *La Agricultura Española*, número 11, jueves 14 de marzo de 1861, págs. 161 a 163.

que en los demás pueblos de la Monarquía: sustituir al método excepcional, que en ellas se emplea, el método general y el régimen comun¹¹⁴⁶.

En un contexto en el que la agricultura ejercía un dominio casi absoluto, tanto en las urbes como en las poblaciones rurales, las ferias eran aprovechadas al máximo, como punto de reunión, de una escogida sociedad a la que gustaba de conocer las novedades en asuntos agrícolas y ganaderos. La «tienda» que el *Círculo de Labradores* solía instalar en Sevilla, en el transcurso de la feria de primavera durante los meses de abril, servía de aliciente para presentar distintas exposiciones de maquinaria agrícola traída del extranjero, muchas veces arreglada y «mejorada» por avezados emprendedores que tenían sus talleres en España. El trabajo conjunto llevado a la práctica durante esos días, tanto por parte de las asociaciones agrícolas como por la Junta Provincial, permitían, por ejemplo, que distintos tipos de ingenios pudieran recorrer los pueblos, para deleite de hacendados y labradores de la provincia, poniéndose en funcionamiento y familiarizando a muchos de ellos con los instrumentos y máquinas exhibidos unas semanas antes en la capital¹¹⁴⁷. Servían también las ferias, además de entretenimiento, para atraer en torno a las mismas a las distintas entidades formalmente constituidas y establecer vínculos con las más variopintas personalidades políticas, sociales y económicas del momento¹¹⁴⁸.

¹¹⁴⁶ *Suplemento á La Agricultura Española, del jueves 13 de diciembre de 1860.*

¹¹⁴⁷ En el transcurso de la Feria celebrada en abril del año 1861, la tienda del *Círculo* ofreció una importante exposición de las mejores máquinas para los trabajos agrícolas. Entre ellas algunas segadoras de Burgess y Key, consideradas las máquinas agrícolas más destacadas de Europa, así como distinta maquinaria modificada por los constructores Aspe, Crespo y C^a, que disponían de una fábrica y fundición en la propia ciudad hispalense. Terminada la misma, era habitual realizar un recorrido por algunos pueblos y municipios mayores para «probar» la maquinaria expuesta. *La Agricultura Española*, número 16, jueves 18 de abril de 1861 pág. 243. Además, y como también detalla François Héran, en la feria de primavera de 1861 el *Círculo de Labradores*, presidido en esos momentos por el propietario Ignacio Vázquez, presentó una serie de arados modernos que ya eran conocidos en otras provincias, así como rastrillos, trituradores y cortapajas. Héran François, ob. cit., pág. 179.

¹¹⁴⁸ Así se desprende de algunos recortes de la prensa en Madrid, correspondientes al año 1865. De las noticias consultadas se deduce que las tiendas colocadas por el *Círculo de Labradores* y el *Mercantil*, adquirieron un notable éxito al hacer acto de presencia en las mismas diversas personalidades de destacada importancia social. En este sentido, se podía leer lo siguiente: “SS. AA. RR. Los Serms. Señores infantes duques de Montpensier, invitados al efecto por una comision compuesta del señor marqués de la Montilla, D. Antonio Valdecañas y D. Luis Carlos Tirado, visitaron en la tarde del segundo dia la elegante y estensa casilla del *Círculo de Labradores*, donde se presentaron á las dos de la tarde, siendo recibidos por la junta directiva”. *La Correspondencia de España*, número 2535, martes 25 de abril de 1865. Sobre las actividades desarrolladas por el *Círculo de Labradores de Sevilla* en las distintas Ferias celebradas durante la segunda mitad del siglo XIX pueden consultarse igualmente las obras ya citadas de Jaime Fuertes y Rocío Plaza Orellana.

La actividad emprendida por el *Círculo* sevillano comenzó pronto a ser tenida en cuenta y a generar repercusiones ostensibles, no solamente en los ambientes económicos y sociales sevillanos, sino también en medios nacionales que mantenían aspiraciones y propósitos parejos. A finales de 1861, un diario de Madrid reseñaba, en relación a la Sociedad establecida en Sevilla, el interés en la misma por emular a otras asociaciones de índole agrícola en Europa. Una agrupación de propietarios agrícolas que, estableciéndose como soporte para la agrupación y representación de los intereses de los agricultores en Andalucía, mostraba su intención de extenderse al resto de provincias españolas¹¹⁴⁹.

A lo largo de su trayectoria histórica, durante la segunda mitad del siglo XIX, caben pocas dudas acerca de la ascendencia del *Círculo de Labradores* en la aparición posterior de asociaciones más pequeñas, organizadas en derredor de otras ciudades con cierta proclividad a la agricultura en Andalucía¹¹⁵⁰. Uno de los principios fundamentales que prevaleció en este esfuerzo por divulgar el asociacionismo agrario, estuvo muy directamente relacionado con la incorporación gradual de los propietarios andaluces a la mentalidad que ya existía en relación al nuevo empresariado agrícola. En todo ello influyó también la necesidad de estimular la enseñanza agrícola. Circunstancia, esta última, que suponía el acceso a una mano de obra más cualificada y preparada en el mundo rural¹¹⁵¹.

En un país indiscutiblemente agrícola, como era España en el período que aquí se trata, las asociaciones de agricultores estaban siendo instituidas y organizadas, principalmente por propietarios agrícolas urbanos. No hay que recordar los casos de Barcelona o Valencia para explicar el que ahora nos ocupa. En Sevilla, al igual que sucedería después con las ciudades mencionadas, Madrid o Valladolid, iban a surgir durante la última década del XIX los embriones de lo que después sería la «patronal» agraria en nuestro país. De ahí la importancia de estos años, en los que la presencia de la propiedad agrícola en las instituciones políticas y económicas instaladas

¹¹⁴⁹ Algunos versados en la materia intentaban ver en el *Círculo de Labradores de Sevilla* una sociedad próxima a la *Real Sociedad de Agricultura de Inglaterra*. Véase, por ejemplo, *La Correspondencia de España*, número 1.246, jueves 14 de noviembre de 1861, y número 1.247, viernes 15 de noviembre de 1861.

¹¹⁵⁰ Al respecto, puede consultarse Bernal, A. Miguel y Lacroix, Jacques, ob. cit., pág. 487.

¹¹⁵¹ Héran, François, ob. cit., pág. 194.

en las urbes, terminaría siendo decisiva en cuanto al afianzamiento del carácter corporativo, tanto en las comunidades semiurbanas como en aquellas que inexorablemente estaban llamadas a mantener un estado de absoluta ruralización. Esto se hacía todavía más evidente si tenemos en cuenta que la tierra podía servir como una inversión inequívoca frente a cualquier episodio de inseguridad económica.

Desde la aparición del *Círculo de Labradores* y hasta el año 1868, la situación en Andalucía y, particularmente en Sevilla, apenas iba a mostrar modificaciones considerables con respecto a las políticas suscitadas contra el *corpus* legislativo imperante en materia arancelaria y de impuestos. La proximidad mostrada hacia los miembros de la Junta Provincial de Agricultura y especialmente la labor desarrollada desde las páginas de *La Agricultura Española*, concluida tras su desaparición en 1867, darían como resultado un continuo proceso reivindicativo e instructivo, demostrándose, una vez más, la concatenación entre la propiedad de la tierra y la prensa. De todo ello, así como de las innovaciones técnicas presentadas en diarios, revistas y otras publicaciones, dependió, en gran medida, que los modos de explotación utilizados por muchos propietarios sevillanos comenzaran a evidenciar mejoras parciales en algunos cultivos.

Los grandes poseedores de vastos latifundios, los hacendados, junto con aquellos agricultores y pequeños labradores que habían adquirido porciones de tierra, gracias a las políticas liberales y a los libramientos de fincas rústicas, podían compartir por primera vez espacios comunes de recreo bajo un mismo interés económico. Para un grupo considerable de ellos, el protagonismo político acabaría adquiriendo un cariz decisivo, en un sistema marcado por leyes fiscales permisivas y en el que, además, evidenciados por los censos, terminarían accediendo al control de las designaciones políticas gracias al sufragio censitario, vigente hasta la última década del siglo XIX.

Más allá del establecimiento de criterios de clasificación, por el *Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla* habrían de pasar, además de Ignacio Vázquez o Joaquín Auñón, hombres como Eduardo de Ybarra y Tomás de Ybarra, presidentes durante las décadas posteriores, algunos destacados miembros de la nobleza como Manuel de Gaviria, Andrés Tamayo, José Luis Fajardo y Zambrano o Ignacio Romero Cepeda, todos ellos procedentes de

estamentos privilegiados y adecuados a las profundas transformaciones surgidas tras el liberalismo en España. Propietarios tutelados por sus rentas que, necesariamente compartirían protagonismo en las nuevas asociaciones agrícolas con diferentes grupos sociales prósperos, muchas veces acomodados a la vida rural y agraria. Serían precisamente estos últimos, parte de una burguesía sevillana y andaluza en alza, los más empeñados en destacar y representar al *Círculo* que, por derecho, estaban llamados a manifestar de una manera explícita, la utilidad del asociacionismo y su papel primordial ante el proceso modernizador de la agricultura y de la política en Andalucía.

- La reorganización y extensión del movimiento asociativo agrícola. El Fomento Agrícola

La influencia provocada por la nueva dinámica vivida por el asociacionismo agrario sevillano no tardó en hacerse visible en otras provincias andaluzas, además de sucederse en distintas ciudades del resto del país. La fórmula utilizada por el *Círculo de Labradores* en Sevilla, conforme a lo que nos presentan las fuentes de la época, demuestran que la agregación de la cultura y el ocio a los asuntos económicos fue asumida por los hacendados y propietarios agrícolas en varias ciudades con una incuestionable tradición agrícola.

En octubre de 1859, *La Agricultura Española* daba la noticia de la creación en Zaragoza de una asociación de agricultores, constituida por hacendados y labradores propietarios como “centro de defensa de los intereses de esta clase”. El artículo, entre otras cuestiones, añadía lo siguiente: “Con el título de Asociacion de Agricultura acaba de establecerse en esta capital un nuevo Casino, que no dudamos contribuirá poderosamente al fomento y desarrollo de nuestra decaída industria agrícola, siempre que sus sócios no pierdan de vista un solo instante el principal objeto para que están asociados”¹¹⁵². La recién estrenada *Asociación de Agricultura* de Zaragoza era destacada en las Crónicas y Guías descriptivas de aquellos días como un lugar recreativo, con juegos

¹¹⁵² *La Agricultura Española*, número 66, jueves 6 de octubre de 1859, págs. 162 y 163.

permitidos por la ley, gabinete de lectura y encaminado a “reunir los medios de procurar el desarrollo y fomento de la industria agrícola”¹¹⁵³.

El carácter asociativo de los labradores de la provincia de Zaragoza era notorio, habiendo existido a finales del siglo XVIII un Banco de labradores con el objeto de proporcionar a los mismos, caballerías o dinero para adquirirlas¹¹⁵⁴. Hasta la aparición de la *Asociación de Agricultura*, el *Casino de Zaragoza*, creado en el año 1843, había servido como lugar de reunión a la aristocracia terrateniente, en tanto que el *Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza*, venía siendo utilizado como centro neurálgico para la burguesía pujante y un espacio de encuentro para financieros y políticos¹¹⁵⁵.

No es mucha la información que hemos encontrado en relación a la *Asociación zaragozana*, si bien a lo largo de los últimos años de la década de los cincuenta y comienzos del decenio siguiente, las noticias sobre la creación de sociedades similares sí se hicieron notar en la prensa, en general. Así, y al mismo tiempo que se daba a conocer el inicio de la *Asociación de Agricultura* de Zaragoza, se hacía lo propio con una análoga en Granada¹¹⁵⁶. El diario de Madrid, *La Correspondencia de España*, recogía en enero de 1860 la constitución de un nuevo *Círculo de Labradores* en Castellón, en la misma línea que las anteriores, que tendría por objeto “la reunión de las personas que pertenezcan á tan benemérita clase, tanto para tratar de los importantes asuntos agrícolas, como para entretenimiento y solaz en las horas de descanso”¹¹⁵⁷. Asimismo, el Ayuntamiento de la localidad alicantina de Almoradí, solicitaba en octubre de 1863 la autorización para establecer una sociedad denominada *Círculo Agrícola*, cuyo

¹¹⁵³ *Guía de Zaragoza, ó sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos oficinas y edificios que contiene. Precedida de una ligera reseña histórica de la misma*, Imprenta y librería de Vicente Andres, editor, Zaragoza, 1860, pág. 60.

¹¹⁵⁴ *Crónica General de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la Península y Ultramar*. Zaragoza, Editores Rubio y Compañía, Madrid, 1867, pág. 23.

¹¹⁵⁵ Blanco García, Julio, *Historia de las actividades financieras en Zaragoza. De la conquista de Zaragoza (1118) a la aparición del Banco de Aragón (1909)*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, págs. 112 y 113.

¹¹⁵⁶ La noticia está referida a la aparición de una asociación denominada *Círculo de Labradores de Granada*, de la que poco más sabemos. Véase *La Agricultura Española*, número 66, jueves 6 de octubre de 1859, págs. 162 y 163.

¹¹⁵⁷ *La Correspondencia de España*, número 507, domingo 22 de enero de 1860.

objeto estaba dirigido a reunir a la clase agricultora “*á fin de impulsar todos los elementos necesarios para el mejoramiento de sus condiciones*”¹¹⁵⁸.

A los anteriores cabría añadir el *Círculo Granadino*, iniciado en 1862 y en cuyo artículo 1º de sus Reglamentos podíamos leer: “Se crea una Sociedad denominada *Círculo Granadino*, con el fin de disfrutar de las distracciones que ofrece el trato social, y que, estrechando las relaciones amistosas entre la ilustradas personas que deben formarle, constituya un activo y poderoso centro en que se inicien, discutan y protejan las ideas ó proyectos útiles que tiendan al fomento de la Agricultura, Artes ó Industria”¹¹⁵⁹.

En 1861 un grupo de personas de la provincia de Huelva, interesadas en sumarse a la corriente asociativa, decidió presentar su proyecto de Sociedad con la intención de que la misma estuviera destinada a prestar su atención al comercio, la agricultura y a la cultura onubenses. Hacia el mes de octubre de aquel año, algunos nombres destacados como los de José Jáuregui, Gregorio Jiménez, Víctor Jiménez, Manuel Peláez, Evaristo de la Paliza, o Bernardino Maldoqui, entre otros, bajo la presidencia interina de Francisco de Paula García, decidieron poner en marcha el *Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva*. Reunidos la mayoría de sus socios en el domicilio particular de Gregorio Jiménez, aquel mismo mes de octubre, la Junta formada para organizar las actividades del *Círculo* acordó que fuera Evaristo de la Paliza el encargado de pronunciar un discurso de inauguración, en el que estuvieran recogidos el alcance y la proyección de la Sociedad. En aquella primera disertación, la importancia de la agricultura quedaba patente al considerarse uno de los ejes sustanciales por los que debía transitar la nueva asociación. En este sentido, de la Paliza advertía: “Pero lleva más alto el fin de esta asociación al considerar que vamos a formar un cuerpo respetable, que vamos a despertar el espíritu mercantil y que por consiguiente la agricultura y la industria se van a desarrollar a su sombra”¹¹⁶⁰.

¹¹⁵⁸ *La Correspondencia de España*, número 1.946, viernes 2 de octubre de 1863.

¹¹⁵⁹ En el mismo artículo quedaba expresado su interdicción a toda cuestión política que pudiera afectar al buen desarrollo de la institución. *Reglamento del *Círculo Granadino**, Imprenta de El Mensajero, Granada, 1862, pág. 3.

¹¹⁶⁰ Las ideas, así como las frases del discurso inaugural están recogidas de la obra de Segovia Azcárate, José María, *Cien años en la vida del *Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva*, 18863-1963*, Tip. Girón, Huelva, 1964.

Tras un año y medio de discusiones y proyectos, el 28 de enero de 1863 quedó constituido el *Círculo Mercantil y Agrícola*, siendo su primer presidente Juan Manuel Adalid, al que seguirían en años sucesivos hombres como Francisco de Paula García, Gerónimo Marín, Juan José Dalavat, Manuel de Ruifernández, o Guillermo Sundheim, todos ellos pertenecientes al mundo de las finanzas y los negocios. Aprobados los Estatutos y Reglamentos de la asociación, ésta se estableció definitivamente en un inmueble de la calle Rascón para lo que fue necesario emitir una serie de acciones por un valor de 24.000 reales vellón, cantidad que fue sufragada por los socios constituyentes. En los salones de la Biblioteca de *Círculo Mercantil y Agrícola*, así como en el resto de sus dependencias acabarían por darse cita los apellidos más ilustres de Huelva, unas veces para celebrar actos puramente mercantiles y otras para acoger, tal y como sucedía en otros locales de la región, sesiones culturales, galerías artísticas o fiestas de sociedad¹¹⁶¹.

Por esas mismas fechas, en Córdoba se establecía el *Casino Industrial, Agrícola y Comercial*, cuyo propósito no difería en mucho de los anteriores. Su trayectoria, al menos durante los primeros años, quedó recogida en la prensa cordobesa, especialmente en el *Diario de Córdoba* que, de manera sucesiva, fue recogiendo las actividades emprendidas por dicha Sociedad. En 1867, debió alcanzar una gran popularidad al aparecer en el *Indicador Cordobés*, especificándose que: “El Casino industrial, agrícola y comercial se instaló el 18 de Junio de 1862 con el objeto de proporcionar honesto recreo á sus sócios y unir á los individuos de las clases que espresa su titulo con los lazos de la amistad. Cuenta unos quinientos sócios, y se halla en estado muy floreciente, y á la altura de los mejores casinos de su clase”¹¹⁶².

En sus Reglamentos, aprobados en mayo de 1865, se reafirmaba el objeto de la asociación y se matizaba el acceso a la misma por parte de cualquier persona, incluyendo a todas las clases, siempre que aquéllas

¹¹⁶¹ Ibidem. Asimismo, parte de la información está recogida del diario onubense Odiel, que en 1963, con motivo del centenario del *Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva*, publicó un amplio artículo de su trayectoria histórica. *Odiel*, número 7.543, viernes, 6 de diciembre de 1963, pág. 7.

¹¹⁶² Ramírez y de las Casas-Deza, Luis María, *Indicador Cordobés, ó sea Manual Histórico-Topográfico de la ciudad de Córdoba*, Imprenta, librería y litografía del Diario de Córdoba, 1867, pág. 81. En relación a su constitución, véanse, por ejemplo, el *Diario de Córdoba*, número 3.544, miércoles 4 de junio de 1862, y el número 3.546, viernes 6 de junio de 1862. La noticia de la definitiva instalación e inauguración en el *Diario de Córdoba*, número 3.862, lunes 25 de junio de 1862.

estuvieran suficientemente «estimadas» por su moralidad. Se asignaba a la Junta Directiva la fijación de unas bases para determinar la elección de personas, así como de las actividades de recreo y de todas aquellas destinadas al ámbito de la instrucción¹¹⁶³.

Con los nombramientos en 1864 de Nicolás Laborde y Miguel José Ruíz, presidente y vicepresidente, respectivamente, el *Casino* cordobés pareció entrar en un período próspero para la formación, estableciéndose un serio proyecto para desarrollar distintas cátedras, entre ellas una de agricultura¹¹⁶⁴. Sabemos del interés despertado por las reuniones del *Casino* por las continuas referencias hechas en las páginas de la prensa cordobesa, situación que se mantuvo, al menos hasta 1868, adquiriendo cierta notoriedad las exposiciones agrícolas organizadas con el fin de dar a conocer a labradores y propietarios las realidades de la provincia en materia de agricultura¹¹⁶⁵.

En la misma línea y citadas en su relevante trabajo sobre el inicio del asociacionismo agrario en España, Pan-Montojo mencionaba a la *Sociedad de Reforma Agrícola* de Sevilla, así como a la *Sociedad de Fomento Agrícola* de Jerez, en la provincia de Huelva¹¹⁶⁶. A comienzos de los años sesenta del siglo XIX, de la misma forma que ya venía sucediendo en otros países europeos, empezaron a surgir algunas iniciativas, esbozadas por grupos de grandes propietarios y terratenientes, para acentuar el proceso de difusión de las nuevas tecnologías a través de sociedades de reforma y de fomento agrario que, salvo algunas excepciones, terminaron adquiriendo una

¹¹⁶³ En los Reglamentos aprobados el 13 de mayo de 1865 se recogía, en efecto, la facultad por parte de la Junta Directiva del *Casino* para establecer cátedras de Matemáticas, Agricultura, Historia e Instrucción Primaria, entre otras, además de incrementar el catálogo de la biblioteca mediante una suma mensual destinada a la adquisición de obras. *Reglamento General del Casino Industrial, Agrícola y Comercial de Córdoba*, Imprenta, librería y litografía de D. Rafael Arroyo, Córdoba, 1865, págs. 11y 12. Al respecto de la biblioteca y su importancia como medio de ilustración y recreo puede consultarse el *Diario de Córdoba*, número 4.009, miércoles 15 de diciembre de 1863.

¹¹⁶⁴ *Diario de Córdoba*, número 4.191, jueves 21 de julio de 1864; número 4.254, miércoles 5 de octubre de 1864, y número 4.281, domingo 6 de noviembre de 1864.

¹¹⁶⁵ A este respecto, véanse, por ejemplo, las páginas correspondientes al *Diario de Córdoba*, número 4.465, del sábado 17 de junio de 1865; el número 4.468, del miércoles 21 de junio de 1865, así como el número 5.211, correspondiente al martes 3 de diciembre de 1867. Durante el mes de junio de 1868, la Junta Directiva del *Casino Industrial, Agrícola y Comercial* de Córdoba acordó el nombramiento de una comisión, compuesta por veintiuna personas, con el fin de promover y organizar una exposición agrícola, industrial y artística que pudiera servir como referencia para los avances y la mejora de la producción en la provincia. *La Correspondencia de España*, número 3.871, jueves 25 de junio de 1868.

¹¹⁶⁶ Pan-Montojo, Juan (1997), ob. cit., pág. 174.

importante repercusión en Andalucía. Sabemos que existieron intentos por organizar y regularizar una *Sociedad Española de Agricultura, Industria y Comercio* en Madrid, en el transcurso de 1852. Un proyecto ideado por Fernando Boullosa, que pretendía, a través de la asociación de propietarios de fincas y acaudalados financieros, impulsar la explotación agrícola, así como la cría y aprovechamiento de la cochinilla, facilitando los primeros sus tierras y aportando los segundos una considerable cantidad de capital. La idea no debió concretarse finalmente, si nos atenemos a lo manifestado por Anton Ramirez en su *Diccionario de Bibliografía Agronómica*, pocos años más tarde¹¹⁶⁷.

A decir verdad, la mención, por parte de Pan-Montojo, de sociedades para la reforma agrícola, se materializó en el asociacionismo sevillano a través de la *Asociación Andaluza de Reforma Agrícola de Casas Reales* y de la *Sociedad de Reforma Agrícola del Copero*¹¹⁶⁸. Fue en noviembre de 1863 cuando se publicó un amplio artículo en *La Agricultura Española*, anunciando la existencia de una Sociedad con un capital de 170.000 reales que, promovido por Manuel Ceferino Rincón, trataba de introducir sistemas de labrado competitivos en el Cortijo de Casas Reales. La idea de la *Asociación Andaluza de Reforma Agrícola de Casas Reales* era la realización de ensayos, en similar medida que los que se practicaban en la agricultura británica y alemana, que pudieran proporcionar un día beneficios de cierta envergadura al país. En el discurso pronunciado en Sevilla por José María Ibarra, el 25 de octubre de 1862, se hizo ostensible la intención de aumentar la *Asociación*, a través de subvenciones de corporaciones y particulares, con el fin de que la misma no se viera imposibilitada de llevar a la práctica los ensayos y experimentos que tan buenos resultados podían aportar a la agricultura. A este respecto, Ibarra lo resumía con las siguientes palabras: “Que además de admitirse asociados capitalistas, admita la Asociación Sócios subvencionistas, los cuales mediante una cuota anual de 200 reales,

¹¹⁶⁷ *Programa y Reglamento de la Sociedad Española de Agricultura, Industria y Comercio*, Imprenta de Antonio Martínez, Madrid, 1852. Al respecto, y concretamente sobre el posible éxito o fracaso de la Asociación, Anton Ramirez se refería a la misma en el sentido de que: “Ignoramos completamente el éxito de esta tentativa”. Véase Anton Ramirez, Bráulio, ob. cit. pág. 352.

¹¹⁶⁸ En diciembre de 1863, en un artículo titulado “Fomento Agrícola en Sevilla”, se valoraba la actuación en Casas Reales y posteriormente en El Copero por parte de una Sociedad de Reforma Agrícola establecida en la capital sevillana. *La Agricultura Española*, número 50, jueves 10 de diciembre de 1863, págs. 1.096 y 1097.

adquieran el derecho de estudiar las labores de la Asociación en el campo y en su contabilidad”¹¹⁶⁹.

Lo ocasional y esporádico en todo lo concerniente a la *Asociación Andaluza de Casas Reales*, se puso también de manifiesto en el nacimiento y las realizaciones de la *Sociedad de Reforma Agrícola del Copero*, sobre todo al no haberse traducido en unos resultados prácticos en el corto período de su presencia en la agricultura andaluza. En 1905 se recordaba y explicaba esta circunstancia, aduciendo a las dificultades del proyecto por su amplia extensión y por no haber calculado suficientemente sus aspiraciones. En este sentido y en un trabajo referido a la crisis agraria en Andalucía se razonaba, entre otras cuestiones: “Pocos son ya los vivientes que nos seguirán en la fracasada sociedad de la Reforma agrícola que iniciamos en Sevilla en 1862 y que fracasó por haber querido labrar contra nuestra opinión una finca demasiado importante, como fue el cortijo del Copero, excesivamente grande en todo caso para cultivo intensivo, y más con la insuficiencia administrativa del inteligente agricultor técnico que la tuvo á su cargo”¹¹⁷⁰.

A diferencia de las anteriores, la aparición en el horizonte asociativo de la *Sociedad de Fomento Agrícola* de Jerez, fundada en 1863, supuso un punto y aparte en todo aquello que estaba relacionado con el desarrollo de la maquinaria agrícola en España y su introducción inmediata en los cultivos. La *Sociedad*, que mantuvo hasta su finalización una estrecha relación con los propietarios agricultores de la provincia de Sevilla, había iniciado su andadura con el asesoramiento de Gumersindo Fernández de la Rosa y los hermanos Rafael y Ramón Guerrero y Castro, ingenieros agrónomos, destacados por ser pioneros en la introducción de este tipo de maquinaria en la agricultura. Con un capital inicial de 500.000 reales, una cantidad entonces considerable, las primeras segadoras y trilladoras a vapor, reformadas para el aprovechamiento de la paja, comenzaron a introducirse

¹¹⁶⁹ *La Agricultura Española*, número 45, jueves 5 de noviembre de 1863, págs. 995 a 997. Héran, François, “Tierra y parentesco en el campo sevillano. La revolución agrícola del siglo XIX: los comienzos de una agricultura capitalista, en Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (1985), ob. cit., pág. 472.

¹¹⁷⁰ *Revista minera metalúrgica y de ingeniería*, Tomo LVI de su publicación y XXIII de la Serie C, Establecimiento topográfico de Enrique Teodoro, Madrid, 1905, pág. 359. También en Parias Sainz de Rozas, María, *El mercado de la tierra sevillana en el siglo XIX*, Universidad de Sevilla, 1989, pág. 217.

gracias a la iniciativa de quienes habían conformado la *Sociedad de Fomento jerezana*¹¹⁷¹.

Su permanente trabazón con los agricultores sevillanos está demostrada a través de los ensayos que paulatinamente se realizaban en fincas de destacados propietarios, como en el cortijo Gambogaz, propiedad de Ignacio Vázquez, las haciendas sevillanas del marqués de Perales, o en los campos de Coronil pertenecientes a Francisco de Paula Candau, propietario, además, de varias trilladoras traídas desde Inglaterra. La situación de colaboración produjo ciertos recelos en Jerez al entender algunos de sus mayores propietarios que debía ser esta última ciudad la primera en la carrera innovadora de maquinaria agrícola a nivel nacional. En todo caso, parece un hecho suficientemente contrastado que fue en dicha ciudad, entre 1863 y 1864, el lugar donde primeramente se llevaron a cabo las pruebas con trilladoras a vapor, produciéndose esta misma circunstancia solo un año después en las propiedades sevillanas de Ignacio Vázquez, siempre con el apoyo de la *Sociedad de Fomento Agrícola de Jerez*¹¹⁷².

Las primeras noticias referidas a la creación de una asociación para el fomento de la agricultura en Jerez comenzaron a publicarse en *El Guadalete*, concretamente a finales de diciembre de 1862 y durante los primeros días de 1863. Una reunión de labradores y propietarios celebrada en la Caja Agrícola de Jerez motivó que se organizara un Comisión con el fin de presentar un proyecto de asociación, con capital propio, destinada a plantear medidas de mejora para los cultivos y la propiedad rural¹¹⁷³. En aquellos primeros días del mes de enero comenzó a abrirse una suscripción para aumentar en

¹¹⁷¹ Pulgar Arroyo, Jaime, *Máquinas para la siega y trilla de cereales: segadoras, trilladoras, cosechadoras*, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1958, pág. XI. Asimismo, en Héran, François (1985), ob. cit., pág. 472. Las primeras noticias que se conocen en relación a ensayos con máquinas para la recolección corresponden a los años 1851 y 1852. Asimismo, las primeras pruebas que llegaron a realizarse con segadoras mecánicas y distintos tipos de trillas están registradas en Albacete y Valladolid en los años cincuenta del siglo XIX, extendiéndose más tarde a otras provincias de Andalucía, Aragón y Navarra. Para el caso concreto puede consultarse AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 77, expediente 14.

¹¹⁷² Sobrino, Julián, *Arquitectura de la industria en Andalucía*, Instituto de Fomento de Andalucía, Sevilla, 1998, págs. 97 y 98, y Martínez Ruiz, José Ignacio, *Trilladoras y tractores. Energía, tecnología e industria en la mecanización de la agricultura española (1862-1967)*, Universidad de Sevilla y Universitat de Barcelona, Sevilla, 2000, pág. 30. Algunas referencias al respecto también en la obra de Héran, François (1985), ob. cit., pág. 472.

¹¹⁷³ *El Guadalete*, número 3.136, martes 30 de diciembre de 1862 y número 3.140, sábado 3 de enero de 1863.

número de socios de la futura asociación, iniciando sus actividades aquel mismo verano de 1863.

En efecto, en junio de aquel año y bajo supervisión del *Fomento Agrícola*, se pusieron en funcionamiento algunas segadoras Mac Cormick en el Cortijo del Almocadén, conocido por «Romanitos», propiedad de José Guerrero, además de una trilladora Ruston Proctor en el Cortijo Santo Domingo, hacienda perteneciente a Francisco García Pina, presidente del *Fomento*. Si bien las primeras supusieron un rotundo éxito, no sucedió lo mismo con la Ruston Proctor, devuelta poco tiempo después de su puesta en marcha para su adaptación a las condiciones de trabajo en las fincas jerezanas. Por lo general, los trabajos y ensayos con las diferentes maquinarias eran divulgados mediante anuncios insertados en la prensa, bajo una cabecera llamativa, y advertían de la preparación y del funcionamiento de aquéllas con varios días de antelación. Durante las primeras tentativas, la supervisión estuvo a cargo de los ingenieros Ramón y Rafael Guerrero, además de Gumersindo Fernández, contándose en ocasiones con algún operario que era requerido en el extranjero¹¹⁷⁴.

La amplia difusión propiciada por el *Fomento Agrícola* de Jerez a las firmas británicas del sector técnico para la agricultura, suscitó un interés considerable por establecer sucursales en España, hecho que solo pudo materializarse entre aquellas sociedades e individuos que presentaban un interés relativo, tanto en el mantenimiento como en el aprovechamiento de la maquinaria del campo¹¹⁷⁵. De esta forma, desde el *Fomento* en Jerez, con el apoyo de algunos propietarios y socios, como los sevillanos Manuel Romero Balmaseda, los hermanos Guerrero, o el propio Ignacio Vázquez, quedaron

¹¹⁷⁴ Normalmente figuraba un título de “Importante”, o “Sociedad de Fomento Agrícola”, con el fin de llamar la atención de propietarios y agricultores, y lograr así la asistencia de un número elevado de ellos a los trabajos realizados por la maquinaria en los campos de cultivo. De este modo, por ejemplo, era habitual leer anuncios como el siguiente: “Se espera del interés bien entendido de todos los señores sócios del Fomento Agrícola, que asistirán al ensayo, para el cual se les ha invitado. Cuantos se interesen en los progresos de la agricultura, pueden también concurrir”. *El Guadalete*, número 3.599, martes 28 de junio de 1864. También en *El Guadalete*, números 3.266, 3.267 y 3.268, correspondientes a los días martes 2 de junio, miércoles 3 de junio y jueves 4 de junio de 1863. Al respecto, también puede consultarse Pulgar Arroyo, Jaime, ob. cit., pág. XI.

¹¹⁷⁵ Como muy bien apunta José Ignacio Martínez Ruiz, la organización de una auténtica red comercial de maquinaria agrícola no quedaría establecida hasta los años posteriores a 1880, cuando comenzaron a realizarse pedidos de forma directa y particular a los fabricantes. Martínez Ruiz, José Ignacio, ob. cit., pág. 36.

convertidos necesariamente en la punta de lanza de una actividad que hasta ese momento apenas sí había destacado en España¹¹⁷⁶.

Resueltos los primeros problemas surgidos en 1863, fueron las empresas Ransomes y Ruston las que buscaron un mayor grado de penetración en el mercado de nuestro país, apoyados por el *Fomento Agrícola* de Jerez, hecho que posibilitó las relaciones comerciales de destacados ingenieros y constructores de maquinaria agrícola moderna, como José Alcover y Amador Pfeiffer, con las citadas Compañías a finales de 1860¹¹⁷⁷. En consecuencia, debe apuntarse que el impulso y promoción de la mecanización por parte de los agricultores jerezanos a través de la *Sociedad de Fomento*, dispuso en todo momento del apoyo de las grandes explotaciones, únicas que podían rentabilizar el alto coste de las operaciones. Sin embargo, tal y como figura en varios números de *El Guadalete*, el reclamo hecho desde la misma *Sociedad*, atrajo a numerosos curiosos, entre los que se encontraban propietarios con un número inferior de tierras y recursos¹¹⁷⁸.

Durante los primeros meses de 1864, los ingenieros Fernández de la Rosa y Guerrero presentaron al *Fomento Agrícola* de Jerez una memoria en la que se advertían los gastos por aranzada, una vez estudiados los ensayos practicados por las máquinas segadoras¹¹⁷⁹. Las conclusiones advertían del considerable ahorro respecto a la siega manual. En este sentido podíamos leer:

El ensayo de Jerez, por consiguiente, ha sido un ensayo caro, y sin embargo, si el gasto de 33 rs. por aranzada que resulta equivalente á 69 rs. 32 céntimos por hectárea, se compara con el desembolso producido, no por la

¹¹⁷⁶ Ibidem, págs. 34 y 36.

¹¹⁷⁷ Fruto de la consolidación de aquellas relaciones fueron los continuos viajes a Inglaterra para conocer a los directivos de las firmas Ransomes y Ruston, así como las publicaciones que Alcover iniciaría sobre maquinaria agrícola, alcanzando su cénit en los años setenta del siglo XIX. Ibidem, págs. 38 y 39.

¹¹⁷⁸ Desde *El Guadalete* se celebraba la “grande concurrencia” a los ensayos desplegados por la Dirección del *Fomento Agrícola*, a la vez que se congratulaba de la importancia que suponían estas actividades para “las clases labradores y cuantos se interesan en la prosperidad de esta industria”. *El Guadalete*, número 3.270, sábado 6 de junio de 1863; número 3.287, viernes 26 de junio de 1863, y número 3.292, jueves 2 de julio de 1863.

¹¹⁷⁹ La aranzada normalizada equivalía a una superficie agrícola de 4.474 metros cuadrados. No obstante, la medida podía variar dependiendo de las regiones o de las comarcas, incluso dentro de una misma provincia. González Jiménez, Manuel, *Repartimiento de El Puerto de Santa María*, Universidad de Sevilla, 2002, pág. XCVIII.

siega bien hecha que según la memoria ha salido á algunos hasta por 60 rs. la aranzada, sino con el que término medio, nos dicen, ha costado este año pasado en Jerez la siega, que ha sido el de 44 rs. aranzada, ó 98 rs. 38 céntimos por hectárea, se vé que en cada una de esas ha habido el ahorro, á favor de las máquinas, de 29 rs. 6 céntimos¹¹⁸⁰.

Tras el visible éxito alcanzado por las Sociedades de Fomento en Andalucía, comenzaron a aparecer anuncios de Compañías con análogas propuestas referidas a préstamos de fondos a labradores para la compra de máquinas agrícolas, aperos de labor, así como todo aquello que estuviera relacionado con el cultivo de fincas. No sorprende, por tanto, encontrar reclamos y mensajes de establecimientos como *La Fomentadora Agrícola*, inaugurada en Madrid por Isidoro López, o el *Banco de Propietarios*, establecido en Jerez, con una sección dedicada a la venta de maquinaria agrícola¹¹⁸¹.

Con todo, el estímulo de modernización se estancó súbitamente hacia la primera mitad del año 1866. Todavía, durante la primavera y el verano del año anterior, el *Fomento Agrícola* anunciaba la llegada de maquinaria adquirida por la asociación para trabajar inmediatamente en los campos de importantes propietarios como Andrés Hidalgo, Francisco García y, una vez más, del diligente Ignacio Vázquez¹¹⁸². Lo cierto es que, tanto las *Sociedades de Reforma Agrícola* en Sevilla como el *Fomento Agrícola* jerezano, comenzaron a poner a la venta sus aperos modernos a precios rebajados, iniciándose la liquidación en el mes de noviembre de 1865. En aquellos días podía leerse, en relación a este tema, y desde la Dirección del *Fomento* lo siguiente: “La Sociedad pone todo esto en venta, para facilitar su uso, y oye por medio de su presidente, que habita en la calle Larga número 25, toda proposicion para adquirirlos. Lo mismo oirá por el dicho conducto toda peticion para ensayar estos instrumentos y máquinas”¹¹⁸³.

¹¹⁸⁰ *El Guadalete*, número 3.524, viernes 1 de abril de 1864.

¹¹⁸¹ *El Guadalete*, número 3.770, sábado 14 de enero de 1865 y número 3.899, miércoles 14 de junio de 1865.

¹¹⁸² Véase, por ejemplo, la *Crónica de Badajoz*, número 96, 18 de mayo de 1865 y *El Guadalete*, número 3.905, martes, 20 de junio de 1865.

¹¹⁸³ El *Fomento Agrícola* de Jerez anunciaba instrumentos y máquinas de la Sociedad a precio de costo. La noticia estaba avalada por Juan Fontán, Vocal Secretario Accidental. *El Guadalete*, número 3.429, domingo 12 de noviembre de 1865. Sobre el tema puede consultarse igualmente de López Estudillo, Antonio, “Crisis finisecular, transformaciones agrarias y atraso económico. Andalucía 1870-1930”, en González de Molina, Manuel (Editor) (2002), ob. cit., pág. 148.

A principios del verano de 1866, la liquidación acordada por la Junta del *Fomento Agrícola* ponía a subasta instrumentos y máquinas al 50 por ciento del precio de costo y acordaba celebrar un «remate» la tarde del día 22 de junio de aquel mismo año¹¹⁸⁴. Un final anunciado que se intensificaba incluso con la puesta a la venta de segadoras de la casa Burgess and Key por 3.200 reales. Precio que, a decir por los reclamos hechos en la prensa, debía ser ciertamente sustancioso¹¹⁸⁵. Realizadas las correspondientes transacciones y traspasos de la mayor parte de la maquinaria agrícola perteneciente a la *Sociedad*, el día 3 de julio de ese mismo año se hizo público un último listado “para la definitiva enagenacion” de aquellos enseres que todavía figuraban en poder de la misma¹¹⁸⁶.

La corta experiencia de asociaciones como el *Fomento Agrícola* en Jerez motivó, empero, desde su creación, un movimiento que iría extendiéndose en otras provincias, siempre con la promoción y la adopción de instrumentos perfeccionados como expresión de adelanto en el mundo agrícola¹¹⁸⁷. En 1863 sabemos que ya se realizaban pruebas con trilladoras Clayton en Albacete, o que incluso en Toledo, la Junta Provincial, junto a propietarios y labradores promovía el manejo de arados modernos celebrando concursos. Asimismo, se ha podido comprobar que desde algunas provincias se remitían a Madrid informes sobre el comportamiento de un cierto número de maquinaria agrícola moderna. En este sentido, por ejemplo, la Diputación Provincial de Logroño remitió al Director General de Agricultura, Industria y Comercio en 1864, un informe con los resultados de varias pruebas realizadas con segadoras, trilladoras, agramadoras, así como: “otras que puedan contribuir al desarrollo de la Agricultura; con el fin, de que conociendolas esta Corporacion puedan acordar su adquisicion si las cree

¹¹⁸⁴ *El Guadalete*, número 4.205, martes 19 de junio de 1866.

¹¹⁸⁵ Juan Fontán y Crespo firmaba una vez más la nota escrita en la prensa destacando las ventajas de la propuesta: “Y siendo tan notable la baja hecha, y tan útiles estas segadoras, se le dá publicidad á este aviso para que los que quieran proveerse de ellas con este beneficio” *El Guadalete*, número 4.207, jueves 21 de junio de 1866.

¹¹⁸⁶ El inventario aparece en *El Guadalete*, número 4.220, del jueves 5 de julio de 1866.

¹¹⁸⁷ No podemos olvidar el hecho de que gracias a propietarios como Ignacio Vázquez y las acciones de apoyo prestadas por el *Fomento Agrícola* de Jerez, se realizaron importantes encargos de trilladoras en un período de tan solo dos años, lo que motivó que la empresa Ransomes estableciera finalmente un depósito de maquinaria en Sevilla. Martínez Ruiz, José Ignacio, “La mecanización de la agricultura española: de la dependencia exterior a la producción nacional de maquinaria (1862-1932), en *Revista de Historia Industrial*, número 8, año 1995, pág. 47.

beneficiosas para los intereses agrícolas de la provincia que representan”¹¹⁸⁸. Ensayos que, como se comprenderá, no diferían en mucho de los que en aquellos mismos días se celebraban en Madrid¹¹⁸⁹.

Precisamente la prensa se hizo eco de las actividades de una sociedad de agricultores y propietarios denominada *Asociación General de Labradores* que, desde la capital de España, venía interviniendo en algunos certámenes y concursos con el fin de presentar herramientas y maquinaria para uso en la agricultura¹¹⁹⁰. Una asociación que no llegaría a tener un gran recorrido en el tiempo, pero que mostraría una actividad significativa por favorecer el uso de máquinas agrícolas y adaptarla a las características propias del suelo en cada región.

Fue a través del propietario sevillano, José Hidalgo de Tablada, quien, después de fundar la revista *La España Agrícola*, en agosto de 1862, puso todo su empeño en organizar una Comisión Central y Depósito de Máquinas Agrícolas y Abonos Fosfatados, cuyo fin no era otro que el de agilizar la importación desde el extranjero de maquinaria y simientes, sirviendo, al mismo tiempo, como una entidad intermediaria en la compra y venta de tierras. Los trabajos de la Comisión terminaron promoviendo una iniciativa para la creación, durante el mes de febrero de 1863, de una *Asociación General de Labradores* en la que tuvieran cabida todos aquellos propietarios, sin importar su origen geográfico, y cuya razón principal estuviera en la gradual mecanización del mundo rural¹¹⁹¹.

Tablada, propietario «cultivador», tal y como a él mismo le gustaba definirse, había ideado unos años antes algunas máquinas y había recibido algunos premios por dicha labor en las Exposiciones de Sevilla y Jerez, en 1858¹¹⁹². Su afán por mostrar la utilidad de los avances en la agricultura le

¹¹⁸⁸ Existen distintos informes en el Archivo del Ministerio de Agricultura, advirtiendo de pruebas y ensayos realizados en diversas provincias españolas. Al respecto, puede verse, por ejemplo, AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 10, expediente 38 referido a “Informes sobre maquinaria agrícola”, 1864.

¹¹⁸⁹ *La Agricultura Española*, número 53, jueves 31 de diciembre de 1863, pág. 1.153

¹¹⁹⁰ *Ibidem*, págs. 1.153 y 1.154.

¹¹⁹¹ Héran, François (1980), *ob. cit.*, págs. 187 y 188.

¹¹⁹² Hidalgo Tablada, José de, *Curso de Economía Rural Española*. Tomo I, Imprenta y Librería de la Sra. Viuda é Hijos de D. José Cuesta, Madrid, 1864, y Gil Soto, José Luis, “La agricultura en el siglo XIX”, en Espiga Hidalgo, Sara (coordinadora), *Dioses, mitos y demonios: la agricultura extremeña en el siglo XIX*, Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Badajoz, 2009, pág. 63.

llevó a utilizar *La España Agrícola*, como medio en el que se pudieran constatar los aciertos y fracasos de todo tipo de maquinaria, en especial de segadoras, trilladoras, aventadoras y arados, además de aquellas otras aplicaciones que mejor se adaptaran a la clase labradora. El propio Hidalgo Tablada a comienzos del mes de julio de 1863 explicaba: “Siendo nuestras doctrinas en el orden económico como en el práctico de la labranza, de aplicaciones progresivas según las necesidades y condiciones de nuestro país, se comprende que deseamos una protección para la agricultura, que permita su fomento, sin que en ninguna manera propenda al monopolio”¹¹⁹³.

Si nos ajustamos a los Estatutos aprobados aquel mismo año de 1863, la *Asociación General de Labradores* no se fijaba una duración concreta de sus funciones, “porque siendo su fin el fomento de la agricultura tiene un objeto especial y permanente”. Además, establecía en la capital de España un centro de reunión en el que, tanto los socios como los hijos de éstos, encontraran acceso a máquinas, conferencias y colecciones de productos, siempre relacionados con la agricultura. Se animaba a concurrir a la biblioteca rural, gestionada por la propia *Asociación* y se anunciaba formas de estimular la producción y calidad agrícola mediante premios y concursos¹¹⁹⁴.

En el articulado de los Estatutos no faltaban las alusiones a los ensayos de máquinas y cultivos, haciéndose necesaria la verificación de todos los resultados y de todo cuanto pudiera ser susceptible para su posterior propagación. De hecho, dentro del entorno asociativo se pensaba que nada faltaba en España para lograr el perfeccionamiento agrícola observado en otros países¹¹⁹⁵. Lo ambicioso del proyecto se comprobaba en los últimos cuatro puntos del artículo 3º. En el primero de ellos se establecía como reto: “Procurar que las sociedades de labradores que hoy existen en España se unan al centro comun que hoy se plantea en la corte”. Asimismo, y en el apartado siguiente se solicitaba: “Entablar correspondencia con todas las sociedades análogas, con el fin de conocer la marcha que siguen en otras naciones, para cooperar al objeto de la asociación”. El acometimiento de

¹¹⁹³ *La España Agrícola*, periódico oficial de la Asociación general de Labradores, y del Depósito de máquinas para la agricultura y la industria rural, en adelante *La España Agrícola*, número 1, tomo II, año II, 15 de julio de 1863, pág. 4.

¹¹⁹⁴ *Estatutos de la Asociación General de Labradores*, Imprenta y Librería de la Señora Viuda é Hijos de Don José Cuesta, Madrid, 1863, pág. 3.

¹¹⁹⁵ *La España Agrícola*, número 12, 30 de junio de 1864, pág. 169.

relaciones se concretaba en el deseo de entablar correspondencia con sociedades análogas, con el fin de lograr cooperaciones en materia de mercados, ensayos y calidades de productos agrícolas. Con el propósito de patrocinar dicho desarrollo, se incitaba igualmente a observar las relaciones entre «capitalistas» y agricultores¹¹⁹⁶.

En otro orden de cosas, estaban llamados a ser coparticipes de la *Asociación*, todos aquellos que ostentaran la condición de ser propietarios y capitalistas, siempre dentro de la clase agrícola. Quienes finalmente accedieran a inscribirse durante el año 1863, debían pagar una cantidad no inferior a doscientos reales anuales por semestres adelantados, realizándose los pagos, en este caso, durante los meses de enero y junio de cada año. Finalmente, quienes adquirirían la condición de socio, debían suscribirse obligatoriamente a la publicación *La España Agrícola*, órgano oficial de la Sociedad¹¹⁹⁷.

Regida por un Consejo y una Dirección, sabemos que en la sesión celebrada a mediados del mes de junio de 1863 fue elegido Presidente el marqués de Remisa, y que Juan Caballero y Dusmet, además de Miguel Areilza, asumieron los cargos de Vicepresidentes Primero y Segundo, respectivamente. A la lista se añadieron como Vocales los señores Guis Guilhou, Fernando Ruano, el marqués de Molins, Manuel Guerrero y Felipe del Negro Salamanca. Por último, el propio José Hidalgo Tablada, junto a José de Córdoba y Ramos, asumieron los puestos de Secretarios¹¹⁹⁸.

De las actividades de la *Asociación General de Labradores* ha resultado posible un amplio conocimiento gracias a *La España Agrícola*, así como por algunos periódicos, cuyas publicaciones no siempre tenían lugar en Madrid. Sabemos así que de los tanteos y ensayos practicados con utensilios de madera en tierras de labor en nuestro país, resultaron ser menos resistentes que en otras regiones europeas. Más conocedor de nuestro clima y de las

¹¹⁹⁶ En concreto y en referencia a esta misma cuestión, el apartado 9º del artículo 3º de los Estatutos reconocía expresamente: "Relacionar á los capitalistas con los agricultores á fin de favorecer el progreso de la agricultura". *Ibidem*.

¹¹⁹⁷ *Ibidem*, pág. 4.

¹¹⁹⁸ *La Correspondencia de España*, número 1.824, martes 23 de junio de 1863. Existe un error en la impresión, ya que en el diario figura la fecha 25 de junio, siendo en realidad la del martes 23. Al respecto, José Hidalgo Tablada figura como Director de la Asociación en el mes de abril de 1864, cargo que debía ocupar desde unos meses antes. Véase a este respecto *La España Agrícola*, número 8, 30 de abril de 1864, pág. 130.

necesidades propias de la agricultura en España, Tablada advertía de lo rentable que resultaban las pruebas. A este respecto comentaba: “Hemos visto que las construcciones de madera, si resisten en otros países, en el nuestro se inutilizan al momento y no sirven más que un año. Toda nuestra aventadora es de hierro, sin que eso la haga más cara ni pesada, pero sí durable y fuerte, pues nuestra propia experiencia nos demuestra que el labrador no puede hacer constantes y repetidos desembolsos y se cuida mucho de comprar lo útil y duradero”. Indudablemente, Hidalgo Tablada no se estaba refiriendo a los grandes propietarios¹¹⁹⁹.

Siguiendo la misma estela que otras asociaciones de reforma y fomento en la agricultura, están documentados trabajos de experimentación y mejora de maquinaria agrícola en diversas provincias, tanto de las dos Castillas, Extremadura y Andalucía. Trabajos que en ocasiones eran solicitados por las Juntas de Agricultura de las respectivas provincias. Los ensayos no siempre se acompañaban de individuos proclives a su utilización, algo que la *Asociación* conocía cumplidamente. Esta circunstancia se justificaba muchas veces, bien por la falta de manejo y comprensión, bien por la contratación de «maquinistas» a los que debía pagar generosamente¹²⁰⁰.

El uso de máquinas en la agricultura produjo igualmente rechazos por parte de muchos «braceros», junto a otros agricultores con menos arbitrios, lo que llevó a la *Asociación de Labradores* a tener que trabajar en detrimento de esta idea. Un planteamiento del que participaban también grandes terratenientes y que hacía poco tiempo había llegado hasta *La España Agrícola*. Desde la publicación se miraba el problema de la siguiente forma:

¹¹⁹⁹ *La España Agrícola*, número 1, 13 de julio de 1863, pág. 16.

¹²⁰⁰ *La España Agrícola*, número 2, 31 de julio de 1863, pág. 63. Sobre ensayos en otras provincias con participación de la *Asociación General de Labradores*, existe información de la utilización de segadoras en Carrión de los Condes, en la provincia de Palencia, así como en la provincia de Toledo. *La España Agrícola*, número 6, 30 de septiembre de 1863, págs. 188 a 191. *La Correspondencia de España*, número 2.029, jueves 24 de diciembre de 1863. Asimismo, conocemos el interés mostrado por la Junta de Agricultura de la provincia de Toledo, solicitando un concurso de arados y el nombramiento de socio honorario para Manuel de Ojeda, Jefe de Fomento en dicha provincia. Véase *La España Agrícola*, número 1, 15 de enero de 1864, págs. 2 a 5. Los ensayos y pruebas de una máquina sembradora, construida por Martínez López en la provincia de Burgos, están recogidos en *La España Agrícola*, número 4, 28 de febrero de 1866, págs. 62 a 64, y número 5, 15 de marzo de 1866, págs. 79 y 80.

No es solo la clase jornalera la que vive imbuida en rancias y extravagantes preocupaciones; hay muchos propietarios y grandes propietarios que participan de los mismos errores, que están dominados por ese espíritu de rutina y de vanidad pueril é injustificable que les hace seguir apegados á sus usos antiguos y mirar con desconfianza y burla á los que ansiosos de progreso y bienestar siguen atentos el impulso dado á la agricultura por los descubrimientos científicos¹²⁰¹.

Para la *Asociación de Labradores* establecida en Madrid, el problema solo era aparente. En un país en el que todavía la mayoría de las cuestiones agrícolas se fiaban a la bondad del clima y la fertilidad del suelo, cuestiones como la siega o el aventado solo suponían una pequeña parte de todo el trabajo requerido. Trabajos que, en efecto, se podían mecanizar, lo que implicaba la necesidad de seguir contando con el empleo de brazos en otras tareas de relativa importancia en la agricultura. De esta manera, la realidad exigía una mano de obra constante para el desarrollo de la vid, así como para la roturación de nuevas tierras a base de arados. Todo ello sin mencionar el abonado con estiércoles o el descuajado de raíces y yerbas¹²⁰².

Lo cierto es que la cuestión y los problemas surgidos a raíz de la propagación de nuevos métodos y nuevas herramientas en las tareas agrícolas se intensificaron. Algunos propietarios comenzaron a remitir quejas a la *Asociación* y a su órgano de prensa, aduciendo la rémora que implicaba para el progreso en la agricultura la oposición mostrada por parte de la clase trabajadora a dichas reformas. Una responsabilidad que, en algunos casos, se pensaba debía ser compartida. No es extraño, pues, que importantes propietarios expresaran su malestar ante la situación y se manifestaran dispuestos a vencer dichas dificultades.

la clase trabajadora no es la culpable por completo, de que no se reformen las máquinas y cuanto al cultivo de la tierra concierne; los propietarios tienen una gran parte, porque desean que esas gentes tengan mas fé que ellos en las reformas. Cuando un propietario emprende las mejoras con el convencimiento de la utilidad, no titubea y transmite su acción á los que manda; pero como lo general es la duda y temor de salir mal, de aquí el que

¹²⁰¹ *La España Agrícola*, número 15, 15 de agosto de 1864, págs. 231 y 232.

¹²⁰² *Ibidem*, pág. 232. Otra de las afirmaciones comunes de la época era la disponibilidad importante que existía de mano de obra entre los grandes propietarios, hecho que habría provocado la inconveniencia de acentuar las técnicas de producción. Héran, François (1980), pág. 188.

la mayor parte de lo que se ha emprendido no haya dado todos los resultados que eran de esperar, y que se achaque á la resistencia que oponen las clases que ejecutan. Nosotros llevamos veinte años de continuos experimentos, hemos hecho mil veces algunos bien dudosos, y nunca hemos encontrado obstáculos en la clase que trabaja; lo que nos ha ocurrido, no una sola vez, ha sido el no haber encontrado quien nos sustituyese con toda la actividad que requería el fin propuesto, y de aquí el poco suceso¹²⁰³.

Más allá de los problemas generados por la maquinaria agrícola, en los primeros compases de enero de 1864, desde la *Asociación General de Labradores* comenzaron a escucharse voces en contra de las contribuciones territoriales y consumos, actitud que se había echado en falta tanto en el *Fomento* de Jerez como en el de Sevilla. Para el grueso de la *Asociación*, no había motivos sobre los que fundamentar los incrementos impositivos, especialmente después de comprobar la disminución producida en la riqueza. Tablada lo exponía así: “Comparando la total riqueza evaluada en 1855 con la que resulta en 1859, aparece una disminucion de 10.435.232 rs.; en la rústica un aumento de 84.836.403 rs.; en la urbana una baja de 68.512.987 rs., y en la ganadería 6.938.695 rs.; y diremos si en 1855 se pagaban 300.000.000 de reales de contribucion con menos riqueza imponible que en 1859, que se habia elevado á 400.000.000, ¿cómo se justifica que la propiedad produce mas y que ha tomado un desarrollo fabuloso? Lo que prueba que eso es una ilusion independiente de lo que llevamos espuesto, es que en 1857 habia en España 632.070 colonos, y ese número viene bajando sin interrupción, hasta que en 1861 existian 542.782”. Todavía, y en relación al gravamen que debían soportar los propietarios en España, Tablada explicaba lo siguiente: “El termino medio general á que sale gravada la riqueza es 13 rs. 86 cént. por 100, pues provincias hay, y no una sola, que pagan el 12, 73, cuando otras lo verifican del 14 y del 14, 40, como sucede á Málaga, Murcia, Huelva, etc. ¿Y esto es equidad?”¹²⁰⁴.

No se dejó de insistir en esta cuestión, continuándose la campaña en contra de lo que se consideraba una «tiranía» generadora de abusos que afectaba muy directamente la propiedad. Durante los primeros meses de

¹²⁰³ Las palabras corresponden a un tal M. Maldonado, descrito como un labrador entendido, propietario acomodado y entusiasta de la divulgación de las reformas en la agricultura. *La España Agrícola*, número 16, 31 de agosto de 1864, págs. 242 y 243.

¹²⁰⁴ *La España Agrícola*, número 1, 15 de enero de 1864, pág. 7.

abril de 1866 se comenzó una intensa campaña para reiterar lo inoportuno de los consumos y de la contribución territorial, al mismo tiempo que se aportaban soluciones para no gravar la producción agrícola en nuestro país. Una situación que seguía disgustando a los propietarios del campo y para lo que solicitaban de la Administración la supresión de los arriendos, además de promover los medios para evitar los profusos gastos que los derechos de puertas seguían originando. A todo ello se sumaba la exigencia de un reparto equitativo en la política tributaria, tal y como ya se venía haciendo desde otras asociaciones, solicitándose desde la *Asociación General de Labradores* la discusión para reemplazar la contribución de consumos¹²⁰⁵. Tampoco se libró de las críticas durante estos años la contribución territorial y, en consecuencia, el escaso trabajo realizado en este sentido desde la Administración y el poco interés mostrado a la hora de actualizar censos y estadísticas. Desde *La España Agrícola*, esta actitud se dejaba clara al razonarlo de la forma siguiente: “En fin, si la riqueza territorial, urbana y pecuaria paga hoy un 20 por 100 anual del producto líquido. ¿Qué mas puede exigirse? Si cada cinco años el Estado recibe íntegro el producto de esa riqueza, ¿qué mas puede pretenderse? Se dirá que no existe después de 22 años que se planteó el sistema tributario, la Administración no cree aún tener los datos suficientes para aplicar los impuestos; pero esto solo puede justificar la necesidad del catastro”¹²⁰⁶.

Otra de las aportaciones realizadas desde Madrid y desde la *Asociación* fue la exaltación de los ingenieros agrónomos, de los que se pensaba formaban parte del progreso en otros países como Francia, Alemania, Bélgica o el Reino Unido. A pesar de reconocerse lo acertado del Gobierno de establecer una Escuela Superior de Agricultura, en septiembre de 1855, la realidad mostraba que ésta se alejaba del número óptimo de alumnos necesarios. La situación era achacable al desolador sistema de enseñanza y a una falta en la demanda a dichas ocupaciones. Desde *La España Agrícola* se pensaba que: “Tenemos una escuela de Ingenieros agrónomos que está casi desierta; tenemos unas escuelas de agricultura que no dan los resultados que debieran esperarse; y ¿diremos por esto que el gobierno ha cumplido con su deber, y que la culpa es de los particulares que no se aprovechan de los entendidos discípulos que salen de ellas? No; porque esas

¹²⁰⁵ En relación a las peticiones para sustituir la contribución de consumos, véase, por ejemplo, *La España Agrícola*, número 8, 30 de abril de 1866, págs. 121 a 125.

¹²⁰⁶ *La España Agrícola*, número 9, 15 de mayo de 1866, pág. 151.

escuelas, ni en su número, ni en su organización ó método de enseñanza están de acuerdo con las necesidades y exigencias del país”. Evidentemente, la solución debía pasar por una mejor ubicación de este tipo de instituciones y en el aumento sustancial del número de Escuelas, hecho que en buena medida dependía de la voluntad y del convencimiento de los gobiernos, evitando caer de esta forma en lo que, desde la propia *Asociación General de Labradores* se creía podía llegar a ser fruto de una ignorancia «indisculpable»¹²⁰⁷.

Poco más de un año desde que quedara fundada la *Asociación de Labradores de Madrid*, así llamada también en algún diario de la capital, y aprovechando un concurso público de máquinas agrícolas celebrado el 30 de abril en la dehesa de Galiana, en la provincia de Ciudad Real, se decidió fijar una comisión permanente en la misma, nombrando Presidente a José Maldonado, además de una terna de Vocales y un Secretario¹²⁰⁸. Todas estas reuniones y exposiciones solían contar con el beneplácito de las Juntas Provinciales de Agricultura, Industria y Comercio que, además de prestar su apoyo explícito, servía para acentuar y realzar el interés institucional por los éxitos de la agricultura en general.

Tampoco faltaron desde la *Asociación* las recomendaciones sobre el enfoque que debía darse a los trigos castellanos y a los derechos de importación en Cuba. Hidalgo Tablada, a este respecto, se sentía satisfecho al comprobar que las razones expuestas en este sentido habían sido escuchadas por el Gobierno. Así, un Decreto de junio de 1865, promovido por el ministro de Ultramar, en esos días Manuel Seijas Lozano, posibilitaba que las harinas nacionales con salida desde los puertos españoles no tuvieran desventajas respecto las harinas norteamericanas. Una tarea que contó con la ayuda de varios diputados «amigos», lográndose un resultado que, en palabras de Tablada: “ha sido que el decreto de 26 de Junio próximo pasado, casi está conteste con nuestras apreciaciones”¹²⁰⁹.

¹²⁰⁷ *La España Agrícola*, número 8, 30 de abril de 1864, pág. 117.

¹²⁰⁸ Ibidem, págs. 130 a 133. Asimismo en *La Correspondencia de España*, número 2.178, domingo, 22 de mayo de 1864.

¹²⁰⁹ No es una idea nueva que todas las sociedades y asociaciones contaran con «prolongaciones» en el Congreso, e incluso entre personas del Gobierno de la Nación, continuándose de esa manera la presión que sobre las cuestiones económicas, en especial todo lo relacionado con el proteccionismo arancelario pudieran seguir favoreciendo la producción en España de trigo, harinas y otros cereales. Precisamente, el asunto del trigo en Cuba aparece argumentado en *La España Agrícola*, número 9, 15 de mayo de 1865, pág.

Quienes estaban encargados de aportar ideas a la *Asociación de Labradores* en Madrid, confiaban en la capacidad de reunión y en una evolución de las formas asociativas en España que permitiera una acción separada de la influencia política. Una autosuficiencia que precisaba la clase agricultora para variar el aspecto dependiente que hasta esos momentos tenían algunas instituciones vinculadas a la agricultura. Esta percepción quedó expuesta también en diversos artículos con la pretensión de iniciar un debate sobre las formas y compromisos de asociacionismo, en un momento en el que se perfilaba la necesidad de adquirir una considerable independencia, dejando definitivamente al margen una neutralidad, a menudo consentida.

Aunque en el Ministerio de Fomento y juntas de agricultura tengan los labradores un auxiliar activo que impulse las mejoras que su industria reclama, ligado el primero á la cuestion política y las juntas sujetas á mendigar hasta el último maravedí, natural es que su representacion tenga un carácter poco independiente, que permita una gestion activa y necesaria. Una asociacion que sus votos estén representados separadamente de la política y que con independencia pueda hacer presente lo que necesita la clase agricultura para marchar sin obstáculos, haria bien pronto que se llegara al gran fin que demanda la sociedad¹²¹⁰.

Con capital en Madrid, el proyecto de asociación expuesto por José Hidalgo Tablada habría de tener en cada capital y en cada cabeza de partido una representación y un centro de asociados, espacios en los que poder tratar las preocupaciones e intereses comunes. Como muy bien se recordaba, y como venía sucediendo en otros países, las asociaciones de labradores con sus distintas denominaciones estaban impulsando las mejoras en la agricultura¹²¹¹. Sin embargo, la entidad asociativa puesta en marcha en la capital, con el fin de premiar las iniciativas en la innovación agrícola, carecía de la personalidad y del carácter de otras grandes

130. El texto está recogido de *La España Agrícola*, número 13, 15 de julio de 1865, pág. 194. En relación al vocablo «conteste», hemos de entenderlo como un adjetivo cuya definición sería “Conforme con lo que otro ha dicho”. Véase para este último caso de Masip y Mollá, Félix, *Diccionario analítico de todas la palabras castellanas que pueden tener en la oración diferente significado*, Imprenta de José María Ayoldi, Valencia, 1866, pág. 79.

¹²¹⁰ José Hidalgo Tablada comenzó a publicar a finales de 1865, una serie de artículos en los que advertía de la influencia considerable que podía lograrse a través de las asociaciones de agricultores y propietarios. *La España Agrícola*, número 19, 15 de octubre de 1865, pág. 299.

¹²¹¹ *Ibidem*. Asimismo, en *La España Agrícola*, número 20, 31 de octubre de 1865, págs. 307 a 309.

sociedades a nivel nacional, al modo, verbigracia, de la *Asociación General de Ganaderos del Reino* que venía ejerciendo desde noviembre de 1836. Establecer una institución propiamente agrícola de similares características, era al menos el deseo de cuantos formaban parte de la *Asociación General de Labradores*, una vez remitidos sus estatutos y acuerdos al Ministerio de Fomento y de nombrar a su titular, Manuel Moreno López, así como al Director General de Agricultura, Manuel María Azofra, socios honorarios de la asociación matritense de labradores. Circunstancia que fracasaría finalmente.

Triste es decirlo, pero forzoso que se sepa, ni el Ministro ni la Dirección de agricultura, atendió la petición hecha por la Asociación de labradores, reducida sencillamente á que se la reconociera su instalación en la forma que la tiene la de ganaderos; con palabras muy corteses se negó á la comisión presidida por el Marqués de Remisa, cuanto solicitó y lo que es mas extraño, ni contestación de haber recibido el oficio en que se comunicó el acuerdo de socios honorarios se dignaron dar, los Sres. Moreno Lopez, entonces Ministro, y el Sr. Azofra, Director general de agricultura¹²¹².

Las repetidas conversaciones de su Presidente con Moreno López, primero, y con su sucesor en el cargo, Alonso Martínez, después, de nada sirvieron. Algo que extrañaba al no comprenderse la «alta» misión a la que estaba llamada la Sociedad. El Consejo llegó a considerar que había adquirido motivos sobrados para ganar la confianza del Gobierno y de cuantos habían depositado sus esperanzas en aumentar el celo para llevar hasta el final la idea de formar una gran asociación a nivel nacional. La tibieza manifestada por la Administración produjo la marcha de algunos socios, mientras que otros vieron en esta misma actitud un principio en el declive de la *Asociación*. En todo caso, las causas de este desmembramiento quedaron advertidas en palabras de Hidalgo Tablada cuando al referirse a este tema explicaba lo siguiente:

algunos han creído ver en la indiferencia con que el gobierno nos ha mirado, el motivo para la disolución de la Sociedad, y dando principio á su desconfianza se han despedido. Sentimos que su poca constancia nos prive de su reconocida inteligencia, lamentamos que se suponga erradamente, que

¹²¹² El texto se refiere a Manuel Moreno López, ministro entre marzo y agosto de 1863, y Manuel María Azofra, *La España Agrícola*, número 22, 30 de noviembre de 1865, pág. 341. También en Urquijo Goitia, José Ramón, *Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea*, CSIC, Madrid, 2008, pág. 59.

son necesarias las atenciones del gobierno, para llevar á su fin un pensamiento que es útil á la clase mas numerosa de la sociedad española, y que unida seria capaz de imponer en lugar de suplicar¹²¹³.

A mediados del mes de abril de 1865, desde las páginas de *La España Agrícola* se venía a recordar al Gobierno el incumplimiento de un Real Decreto de julio de 1849, aprobado a instancias del entonces ministro Juan Bravo Murillo, por el que todos los años habría de celebrarse en Madrid una Junta General de Agricultura. Un recordatorio que insistía en la mayor atención mostrada en esos momentos al libre comercio en detrimento de los productores agrícolas y de los intereses de la agricultura nacional¹²¹⁴.

No podemos determinar con exactitud el final de las ocupaciones y de los trabajos de la *Asociación General de Labradores*, toda vez que, consultados los números de su órgano de prensa a través de los fondos conservados en la Biblioteca Nacional y en la Hemeroteca Municipal de Madrid, correspondientes al período 1862-1866, no figura el momento exacto en el que las actividades de la misma quedaron en suspenso. Tampoco hemos encontrado muchas más referencias en otros medios impresos de la época, aunque sabemos que las oficinas de *La España Agrícola* terminaron trasladándose a finales de junio de 1866, así como que desde el Ministerio de Fomento, por aquellas mismas fechas, terminaron reconociéndose los méritos de José Hidalgo Tablada, concediéndosele la cruz de Caballero Real de la Orden de Carlos III por sus publicaciones y obras agronómicas¹²¹⁵. De cualquier forma, todavía aquel mismo año de 1866 era posible leer diversas crónicas relativas a la autorización para la creación y el establecimiento de algunas secciones de la *Asociación*, como así sucedió, por ejemplo, en la provincia de Alicante, nombrando el propio Tablada, Director en esos momentos en Madrid, a Francisco Rovira y Aguilar máximo responsable de la misma en aquella provincia¹²¹⁶.

¹²¹³ *La España Agrícola*, número 22, 30 de noviembre de 1865, pág. 345.

¹²¹⁴ El Real Decreto del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, en efecto, no había sido derogado. A este respecto se refería la mencionada publicación en un artículo titulado "Congreso de Labradores". *La España Agrícola*, número 7, 15 de abril de 1866, pág. 106 y 107.

¹²¹⁵ Tanto la Real Orden como el traslado del domicilio están recogidos en *La España Agrícola*, número 12, 30 de junio de 1866.

¹²¹⁶ *El Tajo. Crónica decimal de la Provincia de Toledo*. Año Primero. Imprenta de Fando e Hijo, Toledo, 1866, pág. 14.

- Regionalismo y fomento agrícola castellano-leonés. La construcción reivindicativa triguera y harinera a través de la Sociedad Castellana de Emulación y Fomento

No es necesario insistir acerca de los aspectos más significativos que sobre la personalidad histórica de Castilla se han realizado en los últimos tiempos. Valdría decir, que a mediados del siglo XIX, algunos hechos dieron lugar a que hoy podamos hablar de un reforzamiento de la conciencia en las provincias castellanas¹²¹⁷. Castilla en general, y muy especialmente Valladolid y su provincia en particular, experimentarían a partir de dicho período un desarrollo social y económico que terminaría reflejándose igualmente en la proliferación de sociedades y asociaciones vinculadas a la agricultura. Con anterioridad a este período, sobre todo desde 1783, tanto la *Real Sociedad Patriótica de Amigos del País de León* como la *Sociedad Económica de Amigos del País de Valladolid*, habían venido procurando, de acuerdo con sus reglamentos fundacionales, dar difusión a las innovaciones agrarias y desarrollar, en la medida de sus posibilidades, la industria relacionada con el mundo agrícola¹²¹⁸.

Fue en el entorno agrario donde, precisamente la *Económica de Valladolid*, impulsó nuevos cultivos, como la rubia y el azafrán, mejorando también el utillaje y las herramientas para las labores del campo, e iniciándose, a partir de los años cuarenta, la implantación de cátedras de agricultura gracias al interés mostrado por Mariano Miguel Reinoso, culminándose con la creación de distintas Escuelas de Comercio¹²¹⁹.

¹²¹⁷ Al referirnos a las provincias castellanas hemos seguido considerando la división territorial que, desde 1833, reconocía las regiones de Castilla la Vieja, con ocho provincias, así como las tres provincias del Reino de León.

¹²¹⁸ Almuiña Fernández, Celso, “Empresarios y empresariales. La «burguesía harinera» castellana: un «nuevo» tipo de empresario”, en *Anales de estudios económicos y empresariales*, número 4, 1989, pág. 87. La bibliografía referida a las cuestiones agrícolas en Castilla y León a lo largo de todo el siglo XIX es prolífica en este sentido, por lo que solo mencionaremos aquellas obras y trabajos utilizados para nuestra investigación, y que tengan que ver también con el ámbito asociativo.

¹²¹⁹ Como ya vimos en su momento, Reinoso fue una persona vinculada a la agricultura, llegando a ocupar la cartera de Fomento en 1851. Entre 1858 y 1868 llegarán a instalarse en Valladolid la *Escuela de Aplicación al Comercio*, así como la *Sociedad Filantrópica Mercantil* y la *Escuela de Comercio de Valladolid*. Ibidem, págs. 89 a 91. En relación a las actividades de la *Sociedad Económica de Amigos del País en Valladolid*, puede consultarse de Helguera, Juan, “La Ilustración: una recuperación incompleta (siglo XVIII)”, en *Historia de Castilla y León*, Editorial Ámbito, Tomo 8, Valladolid, 1986, págs. 93 a 96.

Cabría así mencionar, desde una perspectiva puramente cronológica, un nuevo dinamismo «regionalista» en las provincias castellano-leonesas a partir de 1859, momento en el que se incorporarían al movimiento catalizador catalán y a la corriente castellana que desde hacía unos años venía acentuándose a favor de una identidad propia¹²²⁰. Este elemento configurador quedaría evidenciado mediante la pugna exhibida a favor de los verdaderos intereses de Castilla, concretados una vez más en el mantenimiento de una política a favor del arancel y del proteccionismo triguero. Unos argumentos que se verían favorecidos por el auge de la prensa vallisoletana¹²²¹.

Al lado de las reivindicaciones políticas y económicas, el progreso harinero supuso para la región un empuje sin precedentes que llevaría a algunas de las provincias castellanas a figurar entre las primeras en la molturación industrial de trigos a lo largo de todo el siglo XIX¹²²². En efecto, será la burguesía harinera por un lado, junto a la gran propiedad en Castilla por otro, quienes a través de las primeras asociaciones castellanas de propietarios y de las Diputaciones, consigan reunir en distintas ocasiones a la clase propietaria y comercial con el fin de llegar hasta el Gobierno y poder defender así sus intereses¹²²³.

¹²²⁰ La idea del motor de «arrastre» catalán, en Almuiña Fernández, Celso, “El regionalismo castellano-leonés: orígenes y primeras reivindicaciones político-económicas (1859-1923)”, *El pasado histórico de Castilla y León. Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León celebrado en Valladolid, del 1 al 4 de diciembre de 1982*, Tomo III, Junta de Castilla y León, Burgos, 1984, págs. 343 a 377.

¹²²¹ El tema fue tratado por el propio Almuiña en un excelente trabajo pormenorizado sobre la toma de conciencia castellano-leonesa y la influencia de la prensa en las actividades agrícolas y comerciales de la región. Almuiña, Celso, *La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894)*, Institución Cultural de Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, Tomos I y II, 1977.

¹²²² Por poner unos cuantos ejemplos, y en relación al proyecto harinero castellano en la segunda mitad del siglo XIX, los primeros trabajos arrancaron con Nadal, Jordi, “La industria fabril española en 1900, una aproximación”, en Nadal, Jordi; Sudrià, Carles, y Carreras, Albert (compiladores), *La economía española en el siglo XX*, Ariel, Barcelona, 1987, págs. 23 a 61. Al mismo, le siguieron otros como los de Moreno Lázaro, Javier, *La industria harinera en Castilla y León, 1841-1864*, Asociación Empresarial de Fabricantes de Harinas de Castilla y León, Valladolid, 1990, además de “La fiebre harinera castellana: la historia de un sueño industrial (1841-1864)”, en Yun Casalilla, Bartolomé (coord.), *Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla: (siglos XIX y XX)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991, págs. 161 a 202, o “La harinería castellana y el capitalismo agrario en el tránsito a la industrialización, 1778-1868”, en *Historia Agraria*, número 27, SEHA, agosto de 2002, págs. 165 a 189.

¹²²³ Almuiña Fernández, Celso (1984), ob. cit., pág. 353.

En ese contexto expansivo, reforzado por la cercana finalización del ferrocarril del Norte, comenzó a considerarse la posibilidad de estructurar y consensuar los vínculos comerciales y agrícolas, utilizando como medio la *Exposición Castellana*, celebrada durante los últimos días del mes de septiembre de 1859 en la ciudad de Valladolid. Al certamen fueron invitadas todas las provincias de Castilla la Vieja, además de las de León, reforzando de esta forma el concepto que definía entonces a lo comúnmente conocido como «castellanoviejo»¹²²⁴. Los asistentes, animados a iniciar un proyecto que consolidara la unión de Castilla, pensaron en la posibilidad de crear un instrumento que acelerara el crecimiento y el progreso económico. Un mecanismo que, además, debía dar continuidad a la unión lograda momentáneamente entre las provincias concurrentes y que finalmente se vería avocado al fracaso, antes siquiera de principiar su andadura. Aquella aspiración con la pretensión de dar lugar a una nueva asociación entre las clases más notables y relevantes castellanas debiera haberse significado como la *Sociedad Castellana de Emulación y Fomento*.

Al reconocimiento de los intereses comunes a través de la nueva *Sociedad* se añadía un medio de prensa que debía acrecentar la idea de solidaridad. Ese cometido debía cubrirse mediante la publicación de *La Unión Castellana*, un periódico que venía a competir con *El Norte de Castilla*, auténtico valedor de los intereses agrícolas de la región, que había sido nacido en el año 1856. El recelo provocado en el *Norte* a raíz de la Exposición de Valladolid era evidente, toda vez que había tomado parte muy activa en la propaganda y estímulo del proyecto. Así, Sabino Herrero, Secretario y colaborador del Gobernador, en aquellos días Cástor Ibáñez de Aldecoa, ayudados por el alcalde de Valladolid, Nemesio López, comenzaron a urdir la idea de concretar un símbolo que fuese la expresión de las provincias castellanas. Un periódico que a nivel regional estuviese controlado por la representación surgida en la Exposición y a cuya cabeza estuviese el propio Aldecoa¹²²⁵.

¹²²⁴ Las provincias referidas a Castilla la Vieja eran las de Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. Respecto a las de la región de León formaban parte de la misma, siguiendo la distribución de Javier de Burgos, las de León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia. En este sentido puede consultarse de Serrano García, Rafael, "La exposición castellana de 1859", en *Alcores*, número 1, año 2006, pág. 151.

¹²²⁵ Almuiña Fernández, Celso (1977), ob. cit., Tomo I, págs. 522 y 523, y Ortega Rubio, Juan, *Los pueblos de la provincia de Valladolid*, Imprenta y Encuadernación del Hospicio Provincial, Valladolid, 1895, pág. 133.

Con la aparición de *La Unión Castellana*, desde *El Norte de Castilla* comenzó a verse en aquél un rival comprometedor, tanto por los objetivos expuestos como por el beneplácito mostrado por los representantes provinciales hacia el nuevo formato de rotativo. Una situación que terminaría saldándose, en opinión de Almuiña, con una guerra abierta y declarada entre ambos bandos¹²²⁶. A pesar de todo ello, el primer número vería la calle a finales de 1859, justo después de finalizada la *Exposición Castellana*, prolongándose solo hasta el 15 de agosto de 1860, momento en el que terminaría fusionándose con el *Norte*, siendo dirigida hasta sus últimos días por Luis Polanco Labandero, por aquellos días oficial del Consejo Provincial de Valladolid¹²²⁷.

Para ser sinceros, hacía poco tiempo que venía sintiéndose el empuje de la bonanza económica en ciudades como León, Santander o la propia Valladolid, hecho que se confirmaba con las sucesivas exposiciones que allí se celebraban¹²²⁸. Gracias a la Diputación y a la iniciativa adoptada en las sesiones del 9 y 10 del mes de abril de 1859, en el sentido de celebrar en la capital vallisoletana una Exposición de agricultura y mercantil que reuniera a todas las provincias castellanas, el recién nombrado Gobernador de la provincia, Ibáñez de Aldecoa, reunió a un importante grupo de vecinos con el fin de adelantar la preparación del mencionado proyecto. Solo once días más tarde, el 20 de abril, se realizó la convocatoria, publicándose poco después

¹²²⁶ Las dificultades en *El Norte de Castilla* llegaron hasta el extremo de suspender la publicación y verse afectados por la censura algunos de sus artículos a partir del domingo 3 de octubre de 1859, al considerarse inaceptables desde el punto de vista político. Algo, que sin embargo, sí se permitió a *La Unión Castellana*. Almuiña Fernández, Celso (1977), ob. cit., Tomo I, págs. 524 a 532.

¹²²⁷ *Ibidem*, págs. 706 y 707, y *El Norte de Castilla*, número 1.094, sábado 16 de junio de 1860.

¹²²⁸ Un hecho que se había reforzado después de la Gran Exposición, celebrada en Londres en 1851, o la primera Exposición General Agrícola celebrada en Madrid entre el 24 de septiembre y el 4 de octubre de 1857. A partir de esos momentos la fiebre por este tipo de actos se extendió, teniendo lugar así otras de similares características en 1858 (Santiago de Compostela); en 1859 (Zamora, Palencia y Ciudad Real), además de la ya mencionada en Valladolid, o las de 1860 (Alicante y Valencia). En el año 1850 habían acudido a Valladolid, bajo el auspicio de la Diputación Provincial, 71 expositores procedentes de Ávila, Burgos, León, Logroño, Palencia, Salamanca, Santander, Segovia, Soria, Zamora y de la propia provincia de Valladolid, en lo que se llamó la Primera Exposición Pública de Valladolid. Así, también durante los primeros días de 1857, León celebró una exposición similar. Véase Blanco, Alda, *Cultura y conciencia imperial en la España del siglo XIX*, Universitat de València, 2012, págs. 49 y siguientes; *Memoria de la Junta de calificación de los productos de la Agricultura, industria y artes, presentados á la primera exposicion pública de Valladolid en el año de 1850. Seguida del catálogo de los expositores y de los premios, recompensas, y menciones que han obtenido*, Imprenta de M. Aparicio, Valladolid, 1850. También en *Boletín Oficial de la Provincia de León*, correspondientes a las fechas 29 de junio y de noviembre del año 1857.

junto a un extenso catálogo de productos que debían ser examinados para su posterior admisión. La misma Diputación presentaba los motivos, con cierta complacencia, que la habían llevado a su emplazamiento y citación.

Uno de los medios mas eficaces que emplean las naciones civilizadas para dar á conocer los grados de su ilustracion y de su riqueza, es promover y realizar periódicamente Exposiciones públicas, donde se exhiban los productos naturales ó industriales debidos á la fertilidad de la tierra, ó al estudio y laboriosidad de sus habitantes, ó al concurso de ambas causas reunidas. La utilidad de esas Exposiciones y los beneficiosos resultados que producen, asi en el orden natural como en el de las ideas, se hallan prácticamente reconocidos. Cree por tanto esta Corporacion, que no ha menester detenerse á discutir la inmensa y provechosa enseñanza, que como fructifica semilla, se propaga y estiende en los paises donde se verifican esos concursos á que acuden solícitos é impulsados por una noble emulación sus hijos mas instruidos y laboriosos¹²²⁹.

Por medio de las relaciones económicas y contactos entre la clase propietaria y la burguesía local, esta última vinculada especialmente al comercio, se demostraba la importancia de la «regionalización» en Castilla. A esta corriente hubo que sumar el enjundioso núcleo de hombres dedicados a la fabricación de harinas, cuyo empuje era debido, en gran medida, a los efectos ocasionados por Canal y al todavía inconcluso ferrocarril que vería finalizada sus obras en 1864¹²³⁰. No caben muchas dudas sobre la afirmación de que el mercado triguero terminó afectando a los fabricantes de harinas, negocio que no tardó en hacerse extensible a toda la región, a pesar de tener muchas de ellas sus correspondientes sedes en Valladolid. En este caso estuvieron Compañías tan sobresalientes como las de *Núñez y Salcedo*, *Matesanz y Cía*, o *De la Riba hermanos*, ésta última con sede en Paredes de Nava, dentro de la comarca conocida como Tierra de Campos, en la provincia de Palencia¹²³¹.

¹²²⁹ *Exposicion General de Castilla La Vieja. Convocatoria, Catálogo, Circular, é Instrucciones de la Junta directiva*, Imprenta y Librería de los Hijos de Rodríguez, Valladolid, 1859, págs. 1 y 2.

¹²³⁰ El proyecto original pensado para unir las localidades de Alar del Rey y Santander fue modificado para hacerlo llegar hasta otras ciudades importantes como Palencia, Burgos y Valladolid, adquiriendo el Ayuntamiento de esta última ciudad un número importante de acciones con el fin de alargar el tendido original y hacerlo llegar hasta la capital castellana. Serrano García, Rafael (2006), ob. cit., pág. 154. Asimismo, en Rodríguez Lázaro, Francisco Javier, *Los primeros ferrocarriles españoles*, Akal, Madrid, 2000, págs. 31 y 32, y Martínez Vara, Tomás (1983), ob. cit., págs. 249 y 250.

¹²³¹ Moreno Lázaro, Javier (1991), ob. cit., pág. 181.

La realidad fue que en la Exposición, la sección correspondiente a los productos agrícolas fue la más concurrida, presentándose diferentes tipos de trigos, cebadas y centenos, legumbres, etc. Fueron premiados, además, en el capítulo dedicado a sustancias alimenticias, los fabricantes harineros Miguel Peláez, Mariano Solís, marqués de Villalcázar y J. Arias Girón, todos ellos de Salamanca¹²³². Asimismo, fueron laureados también algunos vinos riojanos, entonces en fase de experimentación en la aplicación de nuevos métodos en la vinificación. No sucedió lo mismo con la sección que estaba destinada exhibir y premiar los instrumentos de labranza, abonos y las memorias sobre cultivos, denotándose el grado inicial que vivía aún el sector de la innovación en el sector agrario, lo que no significaba que existiera una actitud hostil o de desinterés por parte de los propietarios y labradores ante las novedades tecnológicas con aplicaciones a la agricultura. Si acaso, tal y como indicara en su día Ramon Garrabou, lo más destacado en este sentido de la muestra fue el reconocimiento y el galardón otorgado a los talleres vallisoletanos de *Félix Aldea y Cía*, y al de *Antonio Mialhe*, fabricantes desde hacía años de arados de vertedera¹²³³.

La idea de formar una asociación que significara la unión entre las provincias castellanas surgió de uno de los comisionados asistentes a la Exposición. Eduardo Augusto de Bessón, representante por la provincia de Burgos, imaginó la posibilidad de establecer una sociedad que fuera capaz de impulsar el desarrollo técnico de la agricultura en la región. La idea, acogida de manera favorable por propietarios y asistentes a la muestra, obtuvo el favor inmediato de la Junta de Agricultura y del Ayuntamiento de Valladolid, celebrándose el 23 de octubre de aquel mismo año una reunión, aprobándose las bases para la creación de una sociedad que habría de llamarse *Sociedad Castellana de Emulación y Fomento*. Asociación que, de alguna forma, estaba llamada a aunar el movimiento surgido en todas las provincias de Castilla la Vieja y León, dirigiéndolo hacia un plano político a través de *La Unión Castellana*¹²³⁴.

¹²³² Parece que se pretendió estimular la expansión de la fabricación de harinas en otras provincias, distintas a las que en esos momentos ostentaban poco más o menos un monopolio. Serrano García, Rafael (2006), ob. cit., pág. 163.

¹²³³ Ibídem, págs. 163 y 164. También en Garrabou, Ramon, “Sobre el atraso de la mecanización agraria en España (1850-1933), en *Agricultura y Sociedad*, número 57, octubre-diciembre de 1990, pág. 44.

¹²³⁴ Es de destacar el papel jugado en la redacción de los Estatutos del propietario e ingeniero de caminos, Francisco Antonio Echánove y Echánove, que, desde la Junta de Agricultura se sumó a la propuesta de una Sociedad Castellana, y en cuya redacción utilizó la frase “Todos y cada uno...” Véase “Apuntes biográficos”, en Silva Suarez, Manuel (ed.),

La «Empresa», coetánea, además, de la librecambista *Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas*, y que no llegaría nunca a establecerse oficialmente, sí llegó a publicar en 1860 unos Estatutos, obra de una Comisión interina creada al efecto, a instancias del mismo Eduardo Augusto Bessón y de Miguel Zorrilla, representante por Zamora, además de Sabino Herrero, Secretario de aquella¹²³⁵. En las Bases de la Asociación, se confirmaba el deseo de crear: “una Sociedad libre con objeto de procurar en las provincias de Castilla la Vieja el fomento de la agricultura é industrias con ella relacionadas”. Además, la misma se comprometía a promover la creación de escuelas y granjas-modelos, aumentar la divulgación y la celebración de concursos especiales de máquinas, útiles de labranza, así como promover la celebración anual de Exposiciones locales donde se pudiera verificar el fomento y la instrucción de maquinaria y cultivos nuevos¹²³⁶.

En resumidas cuentas, el proyecto de asociación entendía que la principal herramienta para modernizar la economía a nivel regional debía realizarse a través de las ya citadas exposiciones y certámenes, la realización de ensayos, etc. A la idea se añadían otras que contemplaban la fundación de bancos territoriales, además de la publicación de periódicos y obras originales y traducidas en la que poder explicar las materias necesarias para contribuir a la expansión y mejoramiento de la agricultura. Para tales fines se organizaría una Junta Central, compuesta por 22 miembros, con la obligatoriedad de reunirse dos veces al año, existiendo en todas las provincias unas Juntas Locales. La contribución de los socios «activos» sería de 48 reales vellón, a los que se unían también los llamados socios

Técnica e ingeniería. El ochocientos, profesiones e instituciones civiles. Tomo V, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007, pág. 645. De igual modo en Redero San Román, Manuel y Blanco Rodríguez, Juan Andrés, “Castilla y España en la élites castellanas durante la implantación del Estado liberal (1808-1868)”, en Esteban de Vega, Mariano y de la Calle Velasco, M^a Dolores (Eds.), *Procesos de nacionalización en la España Contemporánea*, Ediciones Universitarias de Salamanca, 2010, pág. 65.

¹²³⁵ Existen cartas en el A

¹²³⁶ La Comisión estaba formada por Millán Alonso, Juan Manuel Fernández Vitores, Tomás Villanueva, Eduardo Pineda y el propio Sabino Herrero. *Estatutos de la Sociedad Castellana de Emulación y Fomento. Proyecto presentado por la Comisión interina*, Imprenta, Librería Nacional y Extranjera de los Hijos de Rodríguez, Libreros de la Universidad, Valladolid, 1860, págs. 3, 4 y 5. Véase también de Martín Jiménez, Ignacio, *El sistema educativo de la Restauración: primaria y secundaria en el distrito universitario de Valladolid, (1875-1900)*, Consejería de Cultura y Turismo, Valladolid, 1994, pág. 198, así como de Palomares Ibáñez, Jesús María, *La Comisión de Reformas Sociales y la condición obrera en Valladolid*, Universidad, Secretariado de Publicaciones, Valladolid, 1985, pág. 196. Calvo Caballero, María del Pilar (1999), ob. cit., pág. 55.

honorarios y los corresponsales. Los dos primeros, con voz y voto, estarían obligados a pagar en el momento de su inscripción 60 reales, no mencionándose en los Estatutos la contribución de los socios corresponsales¹²³⁷.

Uno de los requisitos más ambiciosos era la cifra de socios que se había establecido como «indispensable» para constituir la asociación. Esta cifra no podía ser inferior a los 1.000 miembros. Algo que unido a la rigidez en su estructura, donde prevalecían los 22 componentes de la Junta Central y los cinco de la Comisión Permanente, comenzó a hacer tambalear lo que aún no era sino el proyecto de una sociedad formal. Así, por ejemplo, al Ministerio de Fomento habían llegado quejas desde la Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Zamora que apuntaban el malestar en algunos propietarios e interesados en la organización vallisoletana. En la sesión celebrada el día 2 de septiembre de 1860 en la sede del Ministerio, en Madrid, a este respecto se anotaba lo siguiente:

Se acordó contestar á la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Valladolid, que la de Zamora se adhería colectivamente al principio, base de la sociedad castellana de Emulación y Fomento, pero no estando conforme con algunos artículos del reglamento interior de dicha sociedad, se reservaba el derecho de adherirse individualmente, para cuando aprobado en Junta general pudiera apreciarse mejor la utilidad que su instalación había de reportar al país¹²³⁸.

Incluso en los primeros días de la primavera de aquel mismo año, algunos diarios seguían parafraseando la importancia y las esperanzas que estaban puestas en la futura *Sociedad*¹²³⁹. Más llamativa parece todavía la nota leída en *La Correspondencia de España*, en su edición del día 15 de diciembre de 1861, intentando reavivar el proyecto. La misma se refería a este asunto de la siguiente forma: “En Valladolid se verificó noches pasadas una gran reunion convocada por el Sr. D. Sabino Herrero y presidida por el

¹²³⁷ Ibidem, págs. 5 a 11.

¹²³⁸ *Boletín Oficial del Ministerio de Fomento*. Tomo XLI, Imprenta Nacional, Madrid, 1862, pág. 204.

¹²³⁹ En un diario salmantino se podía leer: “La fê dicta, que la proyectada Sociedad de emulación y fomento, dejará sentir sus saludables efectos, así en las altas regiones, como en las mas apartadas y oscuras comarcas de Castilla: los lazos de su union darán nombre y lema á nuestros Diputados, como le tienen los Catalanes, los Gallegos y otros”, *Adelante*, número 10, domingo 1 de abril de 1860.

Sr. Millan y Alonso. Tenia por objeto obviar las dificultades para la creacion de una sociedad de emulación y Fomento. Este pensamiento quedó aprobado, y se nombró una comision para redactar el reglamento de la futura sociedad”¹²⁴⁰. En efecto, a finales de 1861 se intentó reducir el ámbito de su actuación exclusivamente a la provincia de Valladolid. Una actitud que finalmente tampoco fructificaría¹²⁴¹.

Se ha querido ver en la escasa influencia de las exposiciones una de las razones fundamentales del fracaso, incapaces de servir en esos momentos como motor de la modernización en la agricultura, en un escenario dominado por el monocultivo del trigo y por un obstinado proteccionismo. En cualquier caso, hemos de considerar correcto el hecho de que la *Exposición Castellana* de 1859 contribuyera a hacer crecer el sentimiento regionalista, más aún si tenemos en cuenta la actividad asociativa que, en este sentido, se desarrollaría pocos años después.

En consecuencia, parte de los principios recogidos en el proyecto para crear la *Sociedad Castellana de Emulación y Fomento*, volverían a reproducirse en la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, fundada en Valladolid poco tiempo después, y de la que volverían a destacar nombres como el de Sabino Herrero que ya habían formado parte del malogrado intento anterior por reunir a un nutrido grupo de hacendados y propietarios agrícolas bajo un mismo ideario. Empeño que se vería recompensado en Salamanca con la creación del *Círculo Agrícola Salmantino* entre finales de 1872 y comienzos de 1873. Un proceso que quedará abierto en la siguiente etapa y que culminará en los últimos años del siglo XIX con la aparición de la *Liga Agraria* de Gamazo. Ambas habrían de comprobar la persistencia de otras asociaciones ya consolidadas como el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, o el *Círculo de Labradores de Sevilla*, al que no faltarían las adhesiones puntuales, todavía de algunas Sociedades Económicas, como las de Valencia, la Aragonesa, así como de algunas ciudades de Andalucía, y que verían culminadas sus aspiraciones de agrupar a los grandes propietarios agrícolas a nivel nacional con la puesta en marcha de la que sería la *Asociación General de Agricultores de España*. Una trayectoria que, como se comprenderá, ya había iniciado su andadura sin solución de continuidad y que vería, tras los cambios políticos

¹²⁴⁰ *La Correspondencia de España*, número 1.282, domingo 15 de diciembre de 1861.

¹²⁴¹ *El Norte de Castilla*, viernes 13 de diciembre de 1861.

y sociales de 1868, el afianzamiento de nuevas formas y conceptos asociativos dirigidos a reforzar la propiedad agrícola en nuestro país.

Génesis y desarrollo de las asociaciones agrícolas y de propietarios territoriales en España

Miguel Martín-Albo Lucas

VOLUMEN II

ÍNDICE

VOLUMEN I

INTRODUCCIÓN

1. OBJETO Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	9
2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN	11
• <i>Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el tejido asociativo</i>	<i>25</i>
• <i>Las asociaciones agrícolas y de propietarios</i>	<i>29</i>
• <i>Élites, trigueros y grupos de presión</i>	<i>42</i>
3. HIPÓTESIS DE PARTIDA Y ACOTACIÓN TEMPORAL	48
4. LA IMPORTANCIA DE LAS FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XIX	52
5. UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LAS ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS EN LA ESPAÑA DECIMONÓNICA	58

CAPÍTULO I

LIBERALES Y MODERADOS. ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA Y PROPIEDAD DE LA TIERRA EN LA ESPAÑA DE FERNANDO VII	67
---	-----------

1. ANTECEDENTES Y PRIMEROS INTENTOS DE LEGISLACIÓN ASOCIATIVA	67
• <i>La asociación, manifestación y reunión en Europa. Un precedente para los liberales en España</i>	<i>67</i>
• <i>El derecho de asociación y de reunión en el primer período del liberalismo español</i>	<i>74</i>

2. LA AGRICULTURA Y LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS. LAS CONSECUENCIAS DE LA ILUSTRACIÓN Y LOS PRIMEROS ENSAYOS DE SOCIEDADES DE PROPIETARIOS Y LABRADORES	80
• <i>Las Sociedades Económicas en el siglo XIX. La persistencia de la memoria ilustrada</i>	<i>80</i>
• <i>Instrucción, capacitación y desarrollo tecnológico en el primer tercio del siglo XIX</i>	<i>88</i>
• <i>Los primeros intentos de asociacionismo agrícola en España. Las Sociedades de Agricultura y el asociacionismo voluntario</i>	<i>99</i>
3. DE LA PROPIEDAD INMOVILIZADA AL ACCESO A LA TIERRA	113
• <i>Propiedad e inmovilismo</i>	<i>113</i>
• <i>La abolición de los señoríos</i>	<i>120</i>
• <i>La liquidación del mayorazgo como vinculación jurídica</i>	<i>126</i>
• <i>La desamortización de tierras en España hasta 1830</i>	<i>131</i>
4. LA CONCIENCIA DE UNA CLASE PRODUCTORA. LOS INICIOS DE LA POLÍTICA PROTECCIONISTA EN LOS CEREALES	148
• <i>La transformación de la sociedad agraria. Los propietarios agrícolas en los comienzos de la España liberal</i>	<i>148</i>
• <i>Algunas notas sobre la propiedad y el poder local</i>	<i>158</i>
• <i>La importancia del trigo y los trigueros en la agricultura española. El mercado de los cereales hasta 1830</i>	<i>165</i>
• <i>La prohibición sobre el trigo extranjero. El peso de la clase propietaria terrateniente</i>	<i>186</i>
• <i>El problema del trigo en Cataluña</i>	<i>208</i>
• <i>El Arancel General de 1820 y la reacción absolutista a partir de 1823</i>	<i>211</i>

CAPÍTULO II

EL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN EL REINADO DE ISABEL II

1. DESAMORTIZACIÓN Y EFECTOS SOBRE LA PROPIEDAD	229
• <i>La desamortización de Mendizábal. Una síntesis</i>	<i>229</i>
• <i>La desamortización de Madoz. Tierras, propietarios y trigo</i>	<i>240</i>

2. LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS HASTA 1850. DE LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS TERRITORIALES DE ESPAÑA A LAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS COMARCALES DEL AMPURDÁN	256
<ul style="list-style-type: none"> <i>La Asociación de Propietarios Territoriales de España</i>256 <i>La Sociedad de Agricultura del Ampurdán. Agricultura comarcal y de Estado</i>270 <i>La percepción del asociacionismo agrario en el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz</i>294 	
3. UNA PLATAFORMA ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO AGRÍCOLA ASOCIATIVO. LA ADMINISTRACIÓN AGRARIA EN ESPAÑA DURANTE EL REINADO DE ISABEL II.	308
<ul style="list-style-type: none"> <i>Del Comercio y las Obras Públicas al Fomento y la Agricultura</i>308 <i>El Consejo de Agricultura y Comercio. Un «espacio» colectivo para la propiedad rural y agrícola</i>325 <i>Propiedad y representatividad. Las Juntas Provinciales de Agricultura</i>339 	
4. EL «EJE» ASOCIATIVO BARCELONA-SEVILLA-VALENCIA. PARTENARIADO AGRÍCOLA Y REPERCUSIONES REGIONALES	358
<ul style="list-style-type: none"> <i>La reforma arancelaria de 1849 y la cuestión triguera de los años cincuenta. Crisis de subsistencias y primeras respuestas del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro</i>358 <i>El semblante activo del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro</i>387 <i>Trigos y aranceles. Presión y representación. La Comisión Permanente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro en Madrid</i>411 <i>El carácter asociativo agrícola valenciano. La Sociedad Valenciana de Agricultura y la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia</i>442 <i>La singularidad reivindicativa del asociacionismo agrícola valenciano. Acción conjunta y disidencia</i>458 <i>La contribución de consumos</i>473 <i>La acción desempeñada desde La Agricultura Española y la aparición del Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla. La articulación del recreo, el desarrollo agrícola y el protagonismo territorial en Andalucía</i>486 	

- *La reorganización y extensión del movimiento asociativo agrícola. El Fomento Agrícola*510
- *Regionalismo y fomento agrícola castellano-leonés. La construcción reivindicativa triguera y harinera a través de la Sociedad Castellana de Emulación y Fomento*533

VOLUMEN II

CAPÍTULO III

REVOLUCIÓN Y CRISIS. TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN EL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN ESPAÑA, 1868-1887543

1. LA PROYECCIÓN DE CASTILLA A TRAVÉS DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)543

- *La Revolución de 1868. Reforma arancelaria y resistencia participativa*543
- *La Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*560
- *Ocaso y decepción. De la inestabilidad económica a la participación política*588
- *Necesidades y respuestas. El Círculo Agrícola Salmantino y su tránsito hacia la Liga de Contribuyentes*602

2. PROPIETARIOS Y CONTRIBUYENTES. EL «TURNO» DE LAS LIGAS624

- *Las Ligas de Propietarios*624
- *Política y comportamientos patronales*641
- *Las Ligas de Contribuyentes. Un primer intento de asociacionismo «global» para la propiedad y la agricultura*668
- *Protección y movilización política. Obstáculos y limitaciones a la actividad liguera*683
- *La pluralidad tipológica en el asociacionismo agrícola español. Escrutinios y balances a lo largo del último cuarto del siglo XIX*701

CAPÍTULO IV

LA ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES Y LA LIGA AGRARIA. UN INTENTO FRUSTRADO POR CONSTITUIR EL PRIMER LOBBY AGRARIO EN ESPAÑA	739
1. INGENIEROS, PROPIETARIOS Y LABRADORES. LA ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES AGRARIOS	739
• <i>Algunos rasgos del afianzamiento en el nuevo asociacionismo finisecular</i>	739
• <i>Auge y crisis. La vuelta a la estrategia del «todo» en el asociacionismo agrario</i>	750
2. UN LOBBY AGRARIO EN MARCHA. LOS AGRICULTORES Y LA LIGA AGRARIA	770
• <i>Primeras Asambleas y primeras directrices</i>	770
• <i>La Exposición a las Cortes. Del manifiesto de la Liga al «meeting» de Borjas Blancas</i>	783
• <i>La Unión económico-electoral y el «meeting» de Barbastro</i>	798
• <i>La tercera Asamblea y la reforma de los Estatutos. El manifiesto de Adolfo Bayo</i>	810
• <i>Las Cámaras Agrícolas y el final de la Liga Agraria</i>	826
3. LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA LIGA AGRARIA	837
• <i>Las tendencias proteccionistas y el «tercer» partido</i>	837
• <i>Los conservadores al encuentro de la Liga Agraria. La dictadura de Gamazo y la alternancia en el poder</i>	857
• <i>Ruptura y disidencia. La consumación de la legislatura del partido liberal</i>	875
CONCLUSIONES	887
ABSTRACT	895
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA	901

CAPÍTULO III

REVOLUCIÓN Y CRISIS. TRANSFORMACIONES Y AVANCES EN EL ASOCIACIONISMO AGRÍCOLA EN ESPAÑA, 1868-1887

1.- LA PROYECCIÓN DE CASTILLA A TRAVÉS DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874)

- La Revolución de 1868. Reforma arancelaria y resistencia participativa

Tras los intentos fallidos en el verano de 1866 por deponer el régimen monárquico de Isabel II, en septiembre de 1868 se iba a producir el advenimiento de un nuevo régimen político. Dos años atrás, los acuerdos adquiridos entre progresistas y demócratas en la ciudad de Ostende habían dado como resultado la planificación para instaurar un gobierno liberal de mayor «altura», con capacidad para incorporar al Estado el derecho de sufragio universal, además de la conformación de unas nuevas Cortes Constituyentes. Al programa de reformas no tardaría en unírsele el impulso de una nueva doctrina arancelaria que tendría su desarrollo y aplicación durante los años del Sexenio. Esta actitud reformadora, acaparadora de resistencias, desencadenaría una vez más un extraordinario desencuentro entre librecambistas y proteccionistas. A costas con lo que suponía un nuevo guión político y económico en las estructuras fundamentales del país, el impulso del proteccionismo triguero castellano y su representatividad en Madrid, iban a tener, prácticamente hasta la conclusión del siglo XIX, el mayor de los impulsos que hasta esos momentos había vivido el sector agrario en España. Un capítulo de la historiografía española que terminaría afectando y aglutinando a muy distintas formas de asociacionismo agrícola, la mayoría posicionada a favor de un arancel estanco y «protector».

El establecimiento de un nuevo *status* político vino acompañado de ciertas «concesiones» en la enseñanza, en la asociación y en las formas de manifestación, a las que se terminaron sumando un considerable acervo de libertades, tanto en el comercio como en la industria, sin olvidar aquellas que estaban referidas a la defensa de la propiedad¹. La estrategia concebida era la síntesis de las aspiraciones de los sectores próximos a la burguesía comercial e industrial que, desde algunas juntas urbanas, se venía reclamando para regularizar una base social más amplia que la habida en época isabelina. En consecuencia, los representantes políticos, luego de ver colmadas sus aspiraciones revolucionarias, pensaron en consolidar el nuevo régimen político usando aquellas mismas medidas económicas como un instrumento infalible que darían al país la estabilidad y el equilibrio tantas veces deseado².

Entre las medidas patrocinadas por la Junta de Cádiz, constituida el 19 de septiembre bajo la presidencia de Topete, destacaban la abolición de los derechos de puertos y consumos, la minoración en los derechos sobre productos estancados como el tabaco y la sal, además de una rebaja general del 33 por ciento en los derechos de aduanas. Estas actuaciones se irían adoptando paulatinamente en otras Juntas, con lo que se buscaba un argumento de afinidad con quienes hasta entonces habían aspirado a una dilatada reforma arancelaria, y en el que se intentaba incluir a todos aquellos sectores menos protegidos ante los consumos, amén de una burguesía comercial que hacía algún tiempo clamaba la necesaria adecuación del comercio a los nuevos tiempos que se sucedían en Europa³.

Ciertamente, las reducciones aplicables a la fiscalidad fueron un elemento suficientemente atrayente que, aunque promovido por las propias Juntas, no sirvieron para unificar los criterios respecto a la propiedad de la tierra y los repartos de las mismas. Fue la Junta gaditana la que detuvo, por ejemplo, el reparto de terrenos y haciendas que ya había dado comienzo en algunas comarcas del interior de la provincia, lo que da una idea del concepto que se tenía de la propiedad, así como de la escasa atención que se

¹ Bozal Fernández, Valeriano, *Juntas revolucionarias: manifiestos y proclamas de 1868*, Cuadernos para el diálogo, número 7, Edicusa, Madrid, 1968, págs. 37 y 21.

² Una idea más desarrollada en Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., pág. 292.

³ Moliner i Prada, Antoni, *Revolución burguesa y movimiento juntero en España: la acción de las juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868*, Milenio, Lleida, 1997, págs. 307 a 329.

pretendía de aquellas propuestas que fueran dirigidas a reformar aspectos del proceso desamortizador o de la propia tenencia de la tierra⁴.

Resueltos los primeros instantes de incertidumbre, el Gobierno provisional, integrado por unionistas y progresistas, se vio en la obligación de promulgar decretos en los que unas veces se legalizaba y otras se moderaban y minoraban las decisiones practicadas por las Juntas. Desde el Ministerio de Hacienda, Figuerola aceptó la supresión del impuesto de consumos, mostrándose partidario de que las reformas a aplicar no acrecentaran la delicada situación de las cuentas públicas. Éstas, próximas a la banca rota, no hacían viable una disminución del gasto público y, mucho menos, un aumento en los ingresos después que se vieran reducidas las cargas fiscales por las Juntas de 1868. Laureano Figuerola admitió su determinación de reformar el arancel. Sin embargo, el reajuste debía efectuarse después de un holgado debate en las Cortes y siempre dentro de lo que debía ser un proyecto razonable y creíble⁵.

A las Cortes Constituyentes llegó un primer esbozo de Reforma apoyado en gran medida en los documentos e intervenciones de la *Asociación para la Reforma de los Aranceles*, y en las ideas que ya conocía el propio Ministro en los años sesenta. Proyecto que tuvo que ser revisado al verse afectado por algunas presiones evidenciadas por grupos de interés y por las exigencias de estabilidad social que requería la nueva situación política creada. En la *Memoria relativa al estado general de la Hacienda*, presentada a las Cortes Constituyentes por Figuerola en mayo de 1870, éste se refería en los siguientes términos a las dificultades sobrellevadas en relación al Arancel.

Y ésta es la ocasión de recordar que á este aumento ha precedido una reforma en los aranceles, reforma no tan liberal acaso como hubiera deseado el Ministro que suscribe, y como sin duda la reclamaban las necesidades de la Hacienda, el ejemplo de todas las naciones cultas en la época contemporánea, y aun los mismos intereses de las industrias que se creían amenazadas, y que por ningun medio mejor que la competencia podian ir realizando progresos de consideracion. Pero razones bien conocidas de todos impidieron que la reforma pasára de ciertos limites relativamente estrechos; hubo que aceptar una solucion más bien política que económica y rentística

⁴ Ibidem, pág. 311.

⁵ Montañés Primicia, Enrique (2009), ob. cit., págs. 294 y 295.

y encerrar la reforma dentro de algunos plazos de más ó menos larga duracion que permitiesen apreciar los resultados de la libertad aplicada al cambio de productos, y con ello fortalecer los ánimos todavía inseguros en cuanto á los beneficios que de la reforma arancelaria podrian obtenerse⁶.

Así y todo, el proyecto presentado por el Ministro, apoyado por una influyente mayoría que le avalaba, fue interpretado como un diseño coherente en el que se reducían de forma discreta los derechos arancelarios. La Comisión encargada de estudiar los presupuestos para el período 1869 a 1870 aceptó el propósito de secundar las peticiones de los consumidores, mientras no quedara dañada la producción del país. Los resultados, entre otros, fueron la aprobación de unos impuestos indirectos para el mencionado plazo de tiempo de unos 21.823.000 escudos, cantidad sensiblemente inferior al ejercicio 1868-1869, donde se habían aprobado unos ingresos de 47.884.707 escudos correspondientes a los mismos conceptos. Todo ello, como se puede comprobar, suponía en principio un recorte sustancial en la presión fiscal. Por el contrario, la cifra relativa a las contribuciones directas suponía un montante de 86.422.600 de escudos, suma que superaba lo presupuestado un año antes. En concreto, y durante el presupuesto correspondiente a 1868-1869, la cantidad calculada en esta sección había sido de 70.645.000 escudos. La explicación a dicho incremento estaba recogida en el propio Dictamen: “Se ha comprendido en esta seccion una suma de 15 millones de escudos, producto del impuesto personal llamado á sustituir el de consumos abolido por la revolucion. Se aumenta tambien la contribucion industrial y de comercio para compensar los pontazgos, portazgos y barcajes y el impuesto sobre caballerías y carruajes de lujo que se suprimen”⁷.

Sobre lo proyectado en materia de aranceles se concibieron un número considerable de enmiendas, unas instando a un mayor grado de apertura comercial y otras reiterando el refuerzo a la protección. Esta protección se posicionó alrededor de las actividades industriales y sobre la necesidad de

⁶ *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes*. Tomo XII, Apéndice Segundo al número 289, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 9. Asimismo en *Textos Olvidados. Presentación y selección de Fabián Estapé y Rodríguez*, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1973, pág. 533.

⁷ “Dictámen y votos particulares de la comision general de Presupuestos relativos al de ingresos para el año económico de 1869 á 1870”, Sesión del día 19 de junio de 1869, en *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes*. Tomo IV, Apéndice Primero al número 104, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 2.

proteger todas aquellas manufacturas que no pudieran competir con las extranjeras. Así, el diputado por Vich, Eduardo Maluquer, presentó algunas propuestas con el fin de hacer posible una protección que estuviera más enfocada a las industrias «menores», entre las que destacaban las del lino, el cáñamo o la lana, sectores que, en opinión del propio Maluquer, de no actuar de un modo diligente terminarían “muriendo poco a poco”⁸.

Los intereses agrícolas no tardaron en hacerse evidentes materializándose en distintas propuestas que solicitaban una mayor atención en la protección a los cereales. Un bloque que, una vez más, estaba representado por propietarios y productores, principalmente de trigo, a los que se unían ahora los fabricantes de harinas de Castilla. La enmienda presentada al Congreso por el diputado Diego García, portavoz por Guadalajara, estaba en la misma línea que las peticiones hechas décadas atrás, formuladas sobre las escasas posibilidades de los trigos y harinas del interior por competir en los puertos españoles con los granos procedentes del Este europeo o del Norte de África⁹.

Muchas fueron las Exposiciones y peticiones llegadas a las Cortes para solicitar un mayor amparo y protección. Desde Valladolid, una serie de invocaciones realizadas por agricultores, industriales y comerciantes se unieron a las de otras comarcas y ciudades aragonesas, con el fin de forzar un mayor gravamen al trigo extranjero, facilitando así una superior competitividad a los cereales españoles¹⁰. No faltó la comparecencia del diputado Gaspar Núñez de Arce, instando al Ministro a cumplir su palabra en relación a la oferta apuntada sobre la protección del trigo nacional.

El Sr. Figuerola, sosteniendo con profunda convicción sus doctrinas, pero deseoso al mismo tiempo de calmar la alarma que se había despertado en los centros agrícolas, mostróse favorable á una transaccion indicando que para desvanecer los en su concepto, infundados recelos de los 12 rs. por 100 kilos de trigo y 15 por la misma cantidad de harina, á 14 y 20 como derechos de introduccion. Yo deseo saber si el Sr. Ministro de Hacienda está dispuesto á realizar las promesas que hizo entonces á los comisionados de Aragon y Castilla, para devolver algun tanto la tranquilidad á aquellas desgraciadas

⁸ *Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes*. Tomo V, Sesión del día 27 de junio de 1869, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 3.212.

⁹ *Ibidem*, págs. 3.229 a 3.239.

¹⁰ *Ibidem*, pág. 3.188. Asimismo en *Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes*. Tomo V, Sesión del día 26 de junio de 1869, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 3.173.

provincias, que, como los Sres. Diputados saben, tan grandes calamidades han sufrido bajo el duro azote del hambre y de la peste¹¹.

En un esfuerzo más por defender las tesis proteccionistas del sector agrícola frente al del grupo de industriales, el diputado castellano Carlos Godínez de Paz, próximo a las filas demócratas y representante por la provincia de Palencia, acudió al Congreso con una enmienda que intentaba regularizar las tasas aduaneras con un derecho fiscal del 10 por ciento. En opinión de Godínez, las provincias con mayor dedicación hacia la agricultura serían lesionadas como consecuencia de los derechos establecidos en la Reforma para los productos industriales. Esta situación suponía mantener la misma coyuntura habida desde los años cuarenta. En ese sentido, Godínez de Paz evidenciaba su malestar por el rumbo adquirido en las reuniones y manifestaba con una ponderada aspereza las siguientes palabras: “La mayor parte de los Diputados que han formado nuestras Asambleas han sido representantes de las provincias agrícolas, y sin embargo nunca hemos podido destruir esos privilegios. ¿Saben los Sres. Diputados por qué? Por esas maniobras clandestinas que se han empleado siempre que se ha tratado de tocar esos privilegios, á esos que se llaman derechos protectores”. Sus quejas continuaban, haciendo un claro alegato hacia los favores consentidos y dirigidos hacia los sectores de la industria.

Hoy mismo, al tratar de esta reforma arancelaria que tanto afecta á los intereses del país, que tanto podrá afectar á la agricultura, es decir, á los intereses de cuarenta y tantas provincias de España, ¿qué es lo que se ha hecho? Llamar á los representantes de la industria catalana por conducto del telégrafo para consultarles y oírles. ¿Se ha llamado á los representantes de las industrias agrícola y pecuaria para aconsejarse de ellos, para ilustrar al señor Ministro de Hacienda y para oír la opinion de la mayoría de intereses del país? ¿Cómo se ha pretendido hacer la reforma? Oyendo única y exclusivamente á los representantes de la industria manufacturera, á los representantes de la riqueza de cuatro provincias, desatendiéndose completamente los intereses de las 45 restantes, los intereses de la riqueza agrícola, sobre la cual pesan hoy tanto todas las cargas del Estado¹².

¹¹ La intervención del representante por Valladolid, Núñez de Arce, en *Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes*. Tomo V, Sesión del día 28 de junio de 1869, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 3.260.

¹² *Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes*. Tomo V, Sesión del día 27 de junio de 1869, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 3.194.

Como en situaciones pasadas, las clases acomodadas de las provincias castellanas y leonesas que giraban alrededor de la producción y comercialización de los cereales, habían adoptado una posición perfectamente definida. Como explica Rafael Serrano, no deja de ser cierto que los alegatos en este sentido se practicaran siempre desde una perspectiva «victimista», generalmente a través de la prensa vallisoletana y, muy especialmente, desde *El Norte de Castilla*, portavoz de los intereses agrícolas y mentor de grandes propietarios y terratenientes¹³. Nada debe extrañarnos, pues, que durante el período isabelino la burguesía castellana participara de una forma directa en lo tocante al diseño y a la gestión de la política económica. Sin ir más lejos, la presencia significativa de propietarios en los sucesivos gobiernos, procedentes de las provincias castellanas, y ocupando destacadas carteras ministeriales, se había venido produciendo desde hacía tiempo en Fomento, en la Administración de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, o en el propio Ministerio de Hacienda. Hasta 1868 un dilatado cortejo de nombres como los del palentino Saturnino Calderón Collantes, ministro de Fomento con Narváez y de Estado con O'Donnell, el vallisoletano Mariano Miguel de Reinoso, responsable también de Fomento durante el mandato de Bravo Murillo, o el zamorano Claudio Moyano, en la misma situación que los anteriores, formaron parte de la destacada representación de la gran burguesía terrateniente de la región. A ellos hay que unir otros como los de Manuel Alonso Martínez o Pedro Salaverría, políticos que no dudaron en profesar toda su influencia en beneficio de las comarcas castellanas¹⁴.

Sin embargo, la clara conexión entre la política practicada en Madrid y los intereses agrarios procurados por los propietarios y fabricantes en Castilla, pareció comenzar a diluirse momentos antes de la Revolución de septiembre de 1868. Basta recordar la intensidad con la que había sido destacada la *Exposición* en Valladolid el año 1859 y su profusión en el *Norte* a favor de la misma y de la reivindicación regionalista. Esta apreciación debemos matizarla suficientemente, ya que en ningún momento dejaron de faltar «ayudas» desde los mejores bancos del poder, aun en los peores momentos de oposición.

¹³ Serrano García, Rafael, *La Revolución de 1868 en Castilla y León*, Universidad de Valladolid, 1992, pág. 309.

¹⁴ *Ibidem*, págs. 312 y 313.

De acuerdo con lo anterior, alguno de los nombres más relevantes como Manuel Ruiz Zorrilla ocuparía las carteras de Fomento, además de la de Gracia y Justicia durante el gobierno provisional surgido tras la Revolución. Zorrilla era el mayor contribuyente territorial en la provincia de Palencia¹⁵. Tampoco debe olvidarse a Sabino Herrero, diputado y Director General de Estadística, Agricultura, Industria y Comercio en los primeros años del Sexenio. Herrero era harinero, además de un destacado propietario en Palencia y Valladolid¹⁶.

Aunque es un hecho constatado en la historiografía que ha analizado el Sexenio Democrático, la singular reacción de los propietarios agrícolas durante el mismo no tuvo la misma intensidad que la que había experimentado años atrás. Como lo anotara en su día Montañés Primicia, las circunstancias políticas eran muy diferentes en 1868 y 1869, una eventualidad que produjo una reacción algo más tímida en los diputados que representaban a la comunidad agrícola, no solicitando la vuelta a una prohibición absoluta, sino un somero incremento de la protección anunciada por Figuerola¹⁷.

En cualquier caso, la vieja idea tantas veces traída a colación en los estudios concernientes a la segunda mitad del siglo XIX, y al asociacionismo en España durante dicho periodo, debe ser interpretada, una vez más, con cierta prudencia. El constante examen llevado a cabo en las cuestiones sobre la propiedad rural y a las sociedades agrícolas, la aparición relativamente tardía de estas últimas en comparación con otros países de nuestro entorno, etc., son cuestiones que deben ser examinadas desde perspectivas que, en algunos casos, se nos antojan bien distintas a los estudios llevados a cabo en este sentido durante los años ochenta y noventa de la pasada centuria¹⁸.

¹⁵ Canal, Jordi, "Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895). De hombre de Estado a conspirador compulsivo", en Burdiel, Isabel y Pérez Ledesma, Manuel (eds.), *Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX*, Espasa Calpe, Madrid, 2000, págs. 267 a 300.

¹⁶ Altabella, José, «El Norte de Castilla» en su marco periodístico (1854-1965), Editora Nacional, Madrid, 1966, pág. 65. Sobre las actuaciones políticas de Sabino Herrero pueden consultarse, por ejemplo, las intervenciones en los *Diarios de Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados*, correspondientes a la Legislatura de 1871.

¹⁷ Montañés Primicia, Enrique (2009), págs. 305 y 306.

¹⁸ En efecto, Rafael Serrano García apunta en distintos trabajos la precariedad del asociacionismo agrícola en España en los años posteriores al Sexenio, argumentando, por ejemplo, la situación en Francia e Inglaterra, donde este tipo de sociedades ya habían surgido en el siglo XVIII. En el Reino Unido se había pasado de unas cien asociaciones en 1835 a un número próximo a las setecientas en 1855, destacando la *Bath and West of*

Los intereses castellanos habían comenzado a asomar, ya desde los primeros instantes de gobierno revolucionario en Madrid, en una situación precedida tiempo atrás de las propuestas surgidas en *El Norte de Castilla* y en la Diputación Provincial de Valladolid, solicitando una gran demostración pública en contra de la introducción de cereales y harinas extranjeras y a favor de la agricultura del país¹⁹. Durante los meses próximos al verano de 1869, especialmente durante mayo y junio, se hicieron críticas muy severas al librecurso desde distintos medios vallisoletanos, en las que se pretendía presionar al Ministerio de Hacienda y retornar a una situación de proteccionismo legal. El diputado Sabino Herrero intentó convencer al propio Laureano Figuerola en una entrevista privada, sin éxito, pero en la que consiguió finalmente hacer una campaña a favor de los sectores agrícolas castellanos²⁰.

Desde luego, en el proyecto del Gobierno no se significaba derecho alguno al trigo, ya que Figuerola se había mostrado partidario de establecer una contribución reducida que estuviera próxima a los 5 reales por fanega. Una cantidad que representaba un 8 por ciento del promedio del precio del trigo en Barcelona, existente durante los diez años anteriores, y un 9 por ciento en los mercados de Jerez. En estas condiciones, la enmienda del diputado García no distaba mucho de la propuesta surgida del Ministerio. En todo caso, parecía tener más importancia la unidad mostrada por un Gobierno, cuyo objetivo era prevalecer en los momentos de incertidumbre

England Society. La idea del propio Serrano es que en Francia adquirieron también una importante difusión en la primera mitad del siglo XIX. Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 7 y 8. Algunos estudios de referencia en este sentido y para dicho período son: Hudson, K., *The Bath and West: A Bicentenary History*, Bradford o Avon, Monraker Press, 1976; M. D. Hall, Vance, *A history of the Yorkshire Agricultural Society 1837-1987: in celebration of the 150th anniversary of the Society*, Batsford, 1987; Goddard, N. "Agricultural Societies", en Mingay, G. (ed.), *The Victorian Countryside*, Volume I, Routledge and Kegan Paul, London, 1981, págs. 245-259; Gavignaud-Fontaine, Geneviève, *Les campagnes en France au XIX^e siècle (1780-1914)*, Tome I, Ophrys, Paris, 1990, págs. 57 et 58, y Vigreux, Marcel, *La Société d'agriculture d'Autun (1833-1914)*, Editions Universitaires de Dijon, Publications de l'Université de Bourgogne, 1990.

¹⁹ La noticia está recogida en *El Norte de Castilla*, martes, 6 de abril de 1865. La más multitudinaria de las manifestaciones tuvo lugar en la ciudad de Barcelona, convocada por el *Fomento de la Producción Nacional*, celebrada el día 21 de marzo de 1869. La manifestación finalizó en la plaza del Ayuntamiento barcelonés tras sendos discursos en contra de la Reforma arancelaria, pronunciados por Pascual Madoz, Valentín Almirall, Lostau y Eduardo Vidal y Valenciano. Véase de Román Collado, Rocío, *La Escuela Economista Española*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Sevilla, 2003, pág. 276.

²⁰ Además de *El Norte*, otros periódicos como *La Abeja Montañesa*, de Santander, o *El Popular* de Madrid, consiguieron atraer las preocupaciones de los proteccionistas aumentando la presión hacia el Gobierno. Serrano García, Rafael (1992), ob. cit., pág. 314.

política, evitándose así una posible fracturación. Un hecho, este último, que habría sido peor considerado. De esta forma, Figuerola, además de creer que con el derecho aprobado no se produciría una entrada masiva de cereales en el país, buscó el apoyo del grupo mayoritario, negándose a transigir una protección aún mayor²¹.

Cierto es, sin embargo, que en el plebiscito sobre la enmienda relativa a la protección al trigo los resultados estuvieron muy ajustados. De esta forma, la propuesta del diputado Diego García que había obtenido 48 votos a favor, fue finalmente rechazada por 69 votos en contra. La mayoría de los diputados de las provincias agrícolas de Castilla y Aragón, además del bloque proteccionista catalán, habían votado a favor de la protección. Sin embargo, el apoyo de la minoría republicana, junto a los miembros de la *Asociación para la Reforma de los Aranceles*, bastó para que no pudiera aprobarse la propuesta en cuestión²².

De poco había servido la búsqueda de alianzas con los sectores proteccionistas catalanes, a través del *Fomento de la Producción Nacional*, una entidad que había surgido a finales de 1868 para poner de relieve los inconvenientes que redundaban de la reforma arancelaria. Se había intentado reunir a todos aquellos sectores de relevancia frente a la apertura de fronteras comerciales, siendo instalada una sede de aquélla en la ciudad de Valladolid para continuar con los planteamientos que advertían sobre una necesaria protección a la agricultura castellana²³. Tras el rechazo a los votos particulares y a las enmiendas que intentaban elevar el grado de protección, las críticas arreciaron, ya que la Reforma «lastimaba» intereses que estaban directamente relacionados con la propiedad. Estériles resultaron también las conversaciones de los comisionados vallisoletanos, Pimentel, Pardo y Mora, llegados hasta la capital de España, así como otras

²¹ Montañés Primicia, Enrique (2009), págs. 306 y 307.

²² *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes*. Tomo V, Sesión del día 27 de junio de 1869, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 3.239.

²³ Una comisión, presidida por José Roca Galés, sería la responsable de la puesta en marcha de una «sucursal» del *Fomento* en la capital vallisoletana. Posteriormente se extenderían a otras ciudades españolas como Madrid, Zaragoza, etc., Román Collado, Rocío, ob. cit., pág. 276. En opinión de Rafael Serrano García, la reunión el centro de Valladolid no se constituyó como una mera correspondencia de la de Barcelona y sí a iniciativa de José Roca Galés y de la propia Junta de Agricultura, Comercio e Industria de dicha ciudad. Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 29.

enviadas desde Salamanca o Zaragoza, en representación de destacados propietarios y harineros de las distintas regiones²⁴.

Una vez más, Herrero volvió a tener una de las actuaciones más destacables en el transcurso de los debates que debían aprobar los presupuestos para el ejercicio 1869-1870. En la Comisión que precisamente debía discutir las cuentas del Estado, el diputado por Valladolid intentó convencer a sus correligionarios de la necesidad que había de imponer unos derechos a los cereales de al menos 17 reales por quintal. Este hecho no pudo lograrse, lo que llevó a Herrero a firmar, en unión de otros diputados, un voto particular a la Base 4ª de la reforma arancelaria, instando a que se elevaran los anteriores derechos a 18 reales por quintal sobre el trigo, y 20 reales en las harinas. El alcance de la petición se justificaba, por parte del grupo de diputados, en tanto que: “Nuestros trigos no pueden sostener la competencia con los extranjeros y especialmente con los que arriban á los puertos del Mediterráneo. Colocados nuestros centros productores en el interior del país, y careciendo muchas comarcas de medios de comunicacion, no pueden llegar á los puntos de consumo sin un recargo considerable, ocasionado por los portes”. En último término, la exposición concluía: “Por eso consideramos indispensable establecer un derecho protector que ampare y defienda nuestra agricultura de estas desventajas, que la coloquen en situacion adecuada para dar salida á sus productos”²⁵.

La actitud de Herrero, a la sazón miembro del grupo progresista que sustentaba al Gobierno en esos instantes, fue considerada por la prensa vallisoletana como un hecho realizado en apoyo de las regiones que discrepaban con la Reforma. En los cálculos del diputado castellano estaba la posibilidad de suspender y, consecuentemente, depurar al ministro Figuerola. La estrategia pasaba por un intercambio de apoyos entre diputados catalanes y castellanos. Sin embargo, consideraciones no solo de rentabilidad política, provocaron finalmente que algunos diputados de

²⁴ *El Norte de Castilla*, martes, 6 de julio de 1869. Asimismo, en Izard, Miquel, *Manufactureros, industriales y revolucionarios*, Editorial Crítica, Barcelona, 1979, pág. 239.

²⁵ *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes*. Tomo V, Sesión del día 19 de junio de 1869, Apéndice Primero al número 104, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 15.

Cataluña no entraran en la disputa, situación que permitió la continuidad del ministro al frente de su cargo²⁶.

La «aparente» ausencia de éxitos en las Cortes, así como el déficit político, suponemos que debió acrecentar la canalización de los esfuerzos y protestas, con el fin de corregir las decisiones que podían truncar las esperanzas de muchos hacendados y harineros en Castilla a lo largo de lo que restaba de centuria. En esta misma línea, se iba a poner en marcha en Valladolid la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, formada por numerosos «labradores» propietarios, dando forma y estructura a un importante grupo de presión castellano, al que seguirían, durante toda la década de los setenta, numerosas asociaciones que, llevadas por el desencanto generado por la citada reforma arancelaria, no tardarían en acudir con diferentes formas y denominaciones en apoyo de la propiedad y de la agricultura en general. Al finalizar la década, el resultado iba a ser la presencia de un holgado contingente de asociaciones, dando lugar a un balance positivo en las distintas gestiones, y con una influencia que haría de ellas objeto de publicación y de catalogación²⁷. Al lado de la *Asociación Agrícola* vallisoletana destacaría el *Círculo Agrícola Salmantino*, creado en 1873, descansando en ambas entidades una parte esencial de lo que sería más tarde la patronal agraria castellana, ya en los primeros años del siglo XX. Su acción conjunta, como también veremos, determinaría, en definitiva, un nuevo vuelco en la situación arancelaria.

Sin embargo cabe preguntarse si finalmente los derechos impuestos por el Gobierno, de 12 reales para el trigo y de 18 para la harina, provocaron indefensión y quiebra a los cerealistas y propietarios castellanos. En 1870, y

²⁶ Existen referencias en este sentido en el número de *El Norte de Castilla*, correspondiente al miércoles, 7 de julio de 1869. La opinión acerca de la estrategia ideada por Sabino Herrero puede verse en Serrano García, Rafael (1992), ob. cit., págs. 318 y 319.

²⁷ Como después veremos, a partir del año 1879 comenzaría a publicarse el *Anuario-almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración ó Almanaque de las 400.000 señas de Madrid, de las provincias, de Ultramar y de los Estados Hispano-americanos*, publicación de la casa Bailly-Bailliere, en la que se incluían numerosas asociaciones y sociedades agrícolas repartidas por todo el país. A ello se sumó el interés del Ministerio de la Gobernación y otras entidades de la Administración, a través de recuentos materializados en el *Resumen de las Sociedades de todas las clases existentes en España en 1 de enero de 1887*, Archivo Histórico Nacional, Gobernación, legajo número 575, además del propio Ministerio de Fomento, a través de la *Orden circular a los Ingenieros Agrónomos para que remitan una relación de Sociedades Agrícolas que existan en sus respectivas provincias*, AMA, legajo número 8, expediente número 2, año 1890, todo ello en un intento por controlar el número de estas sociedades y grupos que ya habían comenzado a elevar el horizonte asociativo en nuestro país.

después de un período bastante prolongado de 50 años, dominado por los debates y luchas políticas resueltas entre prohibicionistas y grupos liberalizadores, se mantenía todavía la presión surgida desde distintos grupos de interés que intentaban «desnaturalizar» todas aquellas alternativas adversas a sus intereses. A diferencia de lo que se pueda pensar, los datos sobre importaciones y exportaciones de trigo y harinas, correspondientes al período comprendido entre 1870 y 1880, dejan claro que la situación no fue angustiosa, si se exceptúa 1879 (véase el cuadro 31). Un hecho que afianzaba, aún más si cabe, los beneficios en la producción agrícola de cereales.

Por lo que al trigo y a la harina se refiere, hay que tener en cuenta también que en 1872, la Ley de Presupuestos para dicho ejercicio, impuso una tasa adicional transitoria de 1,50 y 2,25 pesetas, respectivamente. Una situación que, como se puede comprobar, resultaba mejor a la solicitada por Diego García tres años atrás. Convendría matizar, por lo tanto, que la reforma iniciada en 1869 no fue, tal y como podría creerse, un tránsito hacia el libre cambio. Aun cuando pueda pensarse que el Sexenio Democrático incitó a olvidar las políticas proteccionistas que habían germinado en 1820, hemos de considerar dicho espacio de tiempo como un proceso de sustitución en el que se aplicaron políticas protectoras moderadas, amén de un número concreto de disposiciones restrictivas con el comercio²⁸.

Por otro lado, los años inmediatamente posteriores a la reforma arancelaria de 1869 resultaron difíciles y complejos, especialmente en todo aquello que afectaba a la economía y a la política, consecuencia directa de los movimientos revolucionarios, las intermitentes refriegas carlistas, así como por los constantes levantamientos en Cuba. Un estadio caracterizado por varios años críticos en los que, sin embargo, no cesó el empeño proteccionista instalado en las zonas rurales y trigueras del país. Quizás por todo ello, se hace todavía preciso constatar la efectividad de la reforma

²⁸ A este respecto es igualmente interesante el trabajo de: Gwinner, Arturo, “La política comercial de España en los últimos decenios”, en *Textos Olvidados. Presentación y selección de Fabián Estapé y Rodríguez*, ob. cit., págs. 268 y 269.

CUADRO 31

*Cantidades importadas y exportadas de trigo y harina en España (1870-1880)**

Años	Trigo importado	Harina importada	Trigo exportado	Harina exportada
1870	62.501.870	13.750.262	8.443.610	42.334.118
1871	64.600.528	9.875.645	8.768.260	36.844.929
1872	28.559.177	7.468.638	54.421.294	51.752.461
1873	70.156	130.114	198.264.752	96.337.257
1874	15.698.754	6.014.064	78.828.198	48.126.593
1875	22.380.322	7.927.357	16.978.637	39.972.031
1876	39.518.013	9.397.439	12.337.063	50.198.487
1877	9.203.179	4.159.697	43.679.001	89.466.376
1878	60.192.836	4.046.404	15.693.669	40.969.153
1879	120.531.985	18.126.497	2.063.306	36.113.739
1880	29.911.163	4.040.445	2.968.735	37.256.214
Promedios anuales	44.833.462	7.630.596	41.131.501	50.851.935

* Todas las cantidades están expresadas en kilogramos (kg)

FUENTES: "Resúmenes elaborados por la Dirección General de Aduanas del comercio exterior y de cabotaje". 2 cuadernos, Madrid, 1896, en Serrano García, Rafael (1992), ob. cit., pág. 321.

de Figuerola y, sobre todo, si éstas se correspondieron con las verdaderas intenciones consideradas en su momento por las Cortes Constituyentes. En suma, corresponde clarificar si realmente se produjo la tan discutida liberalización del comercio exterior, y si todo ello se tradujo en una notable diferencia con la situación que venía arrastrándose desde la Administración anterior.

Hemos de ser conscientes del peso desempeñado por los distintos grupos de presión en la dimisión del ministro Laureano Figuerola. Aprobado el Decreto sobre los Aranceles de Aduanas, en julio de 1869, Figuerola presentó su renuncia tan solo un día después. Como muy bien mencionara en su momento Montañés Primicia, el ministro había acometido el proyecto

acordado con Prim. En todo caso, habría sido imposible admitir todas las adiciones al proyecto original, motivo suficiente por el que adquirió una posición un tanto incómoda dentro el Ejecutivo. Su máxima aspiración en el Gobierno había sido, al fin y a la postre, eliminar las prohibiciones y limitar los altos derechos que venían aplicándose a determinados artículos, circunstancia que finalmente se consiguió durante los años 1870 y 1875, al disminuirse las cargas arancelarias en algunas materias primas, como el carbón o algodón en rama, entre otros. A estos últimos se agregaron alimentos como el bacalao, el azúcar y el cacao, además de productos manufacturados y semifabricados, tales como hierros y aceros, hilos de algodón, productos químicos o maquinaria²⁹.

Para todo el período del Sexenio Democrático se advirtió un cambio en la tendencia importadora de alimentos, como así sucedería con el trigo, al disminuir considerable su importación, consecuencia del menor número de crisis de subsistencias registrado, aumentando la presión fiscal en el trigo o el azúcar. Este sesgo hacia la minoración en los derechos arancelarios sobre algunas materias primas sirvió para que las importaciones aumentaran significativamente, lo que, en opinión de Albert Carreras, implicaba una mayor actividad industrial³⁰.

Una atención más prolija merece lo sucedido en los derechos arancelarios que finalmente fueron aplicados al trigo. Obviamente, la situación tuvo distintos tratamientos, dependiendo de las zonas y regiones, afectadas o no por la citada Reforma. La objetividad mostrada ante la misma en las provincias trigueras de Castilla estuvo dominada por la amenaza que suponía para los productores y propietarios, así como por las repercusiones negativas que rápidamente se pusieron de manifiesto en la prensa vallisoletana, quedando en entredicho cualquier cambio o alteración que afectara a la situación que se había venido manteniendo desde 1820.

Hasta esos momentos, la presión orquestada desde los grupos de interés había sido determinante en el sostenimiento del sistema proteccionista. Caber pensar, en cambio, que desde la crisis de subsistencias vivida en el período 1866-1868, la doctrina prohibicionista se

²⁹ Montañés Primicia, Enrique (2009), págs. 310 y 329.

³⁰ Carreras, Albert, "La industrialización: una perspectiva a largo plazo", *Papeles de Economía Española*, número 73, año 1997, págs. 35 a 60.

hizo difícil de prolongar. Ello no quitó que desde 1869 los sectores agrícolas solicitaran un derecho excepcional que siguiera manteniendo una elevada protección sobre el trigo. La «Gloriosa», en efecto, era sumamente criticada desde *El Norte de Castilla*, de manera reiterada y en concomitancia con los grandes propietarios y harineros de la región. A todas luces, la revolución de septiembre no era sino una decepción más para los labradores a los que ahora correspondía llevar a un primer plano las cuestiones económicas, en detrimento de las políticas³¹.

De acuerdo con los datos extraídos de los debates en el Congreso de los Diputados, los tipos efectivos que terminaron aplicándose al trigo no declinaron mucho de lo recomendado por Figuerola, al quedar establecido un derecho fiscal que no impedía, en modo alguno, la importación en caso de necesidad. A pesar de todo ello, se aprobó un derecho de 5 reales por fanega, aplicable a todas las importaciones de trigo, lo que representaba un 10 por ciento sobre los precios que en esos momentos existían en los mercados del litoral. En todo caso, los augurios catastrofistas finalmente no tuvieron lugar y tampoco se produjeron importaciones masivas de cereales, dándose la circunstancia todavía de algunas exportaciones de grano, en algunos casos de cierta consideración, como ya quedó claro en el cuadro anteriormente descrito.

En realidad, tampoco los precios fluctuaron considerablemente, lo que permitió un abaratamiento en las subsistencias. Todavía resulta más significativo que los precios en el interior peninsular alcanzaran los niveles medios que habían tenido lugar durante el período correspondiente a los años 1860-1866, estando incluso vigente el sistema de protección. En la sesión celebrada en el Congreso de los diputados, el domingo 27 de junio de 1869, era el propio ministro quien recordaba al diputado Diego García las exiguas modificaciones que se habían realizado en este sentido y las exportaciones de granos que todavía seguían realizándose con destino a países del exterior. A este respecto, el ministro de Hacienda explicaba: “Hay un hecho que el Sr. García no podrá negar y es que hasta ahora, por regla general, ha sido prohibida la importación de cereales en España, excepto en los casos de carestía. Pues bien, á pesar de la prohibición de introducir cereales extranjero, España ha tenido posibilidad de alimentarse con sus

³¹ Serrano García, Rafael (1992), ob. cit., pág. 323.

cereales, exportándolos además para otros países, puesto que los ha extraído para América y para Inglaterra; y aquí tengo los datos oficiales de este último país”. En su respuesta a Figuerola, y en lo que estaba referido al precio por fanega, García admitía las escasas modificaciones y apuntaba lo siguiente: “De 5 rs. que propone el Sr. Ministro de Hacienda á 7 que proponemos los firmantes de la enmienda no van más que 2 rs. por fanega, lo cual no llega á un maravedí en cada libra de pan”³².

A pesar de los resentimientos manifestados desde Castilla hacia Cataluña, por la mayor protección alcanzada en sus productos textiles, lo cierto es que en la evolución de los mercados de trigo, las importaciones anuales durante el Sexenio no representaron una cuota muy significativa, máxime si tenemos en cuenta el volumen total de cereales que se comercializaba en todo el territorio español. En este caso, y teniendo en cuenta el único año en el que se produjo una escasez mayor, como así sucedió en 1868, las importaciones durante el mismo representaron apenas un 11 por ciento del consumo total de trigo. Una cifra que demostraba que el arancel fiscal, aprobado en 1869, no era motivo suficiente para pensar en un efecto devastador para la agricultura. Muy distinto fue el comportamiento de los precios, produciéndose una clara tendencia al descenso en los mismos, lo que dio lugar a una inevitable pérdida en la rentabilidad de las explotaciones. Bajo estas circunstancias, se entiende que la clase propietaria agrícola iniciara un proceso de búsqueda de métodos en la mejora de la producción, con los que contrarrestar el aumento competitivo y el debilitamiento en los costes de los mercados³³.

En este contexto de aparente discriminación surgido a raíz del movimiento revolucionario y de la Reforma en los aranceles de 1869, se planteó en Valladolid una solución para paliar la frustración y el desencanto por medio de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*. Para muchos, era el resultado directo del rechazo a las políticas económicas del Sexenio, en sintonía con la larga tradición de la propiedad rural en su crítica a las políticas no proteccionistas. Todo ello suponía un nuevo comportamiento de los poderes públicos respecto a décadas anteriores, y una ruptura con la tradición propietaria que tanto habían logrado a través de la política

³² *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes*. Tomo V, Sesión del día 27 de junio de 1869, número 111, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, págs. 3.235 a 3.237.

³³ Montañés Primicia, Enrique (2009), pág. 313.

bosquejada desde Madrid. Si bien, hasta el momento los resultados habían sido lo suficientemente aceptables, la asociación, tal y como llegara a afirmar en su día Celso Almuiña, debía ser ahora “la vía para regenerar a la agricultura y de ese modo a la propia Nación”³⁴.

- La Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada

Mediados los años setenta del siglo XIX, el proceso desamortizador estaba adquiriendo su ritmo más álgido desde que vieran la luz las últimas leyes y decretos de secularización de tierras y de disolución de las órdenes religiosas en nuestro país. El tratamiento dado a la venta de las haciendas, junto al sistema de herencias en las provincias de Castilla la Nueva y León, había propiciado una fragmentación de los dominios rústicos, provocando la aprobación de una legislación específica con el ánimo de reavivar el fomento de la actividad rural de ambas regiones³⁵.

En la línea de lo anteriormente expuesto, el Sexenio concretó, aun más si cabe, la conexión entre una burguesía ascendente y la propiedad rural, a lo que se sumó un riguroso cuestionamiento al exclusivismo cerealista predominante en Castilla. Este énfasis estaba justificado en los bajos rendimientos que empezaban a experimentar los cereales y en las esperanzas depositadas en cultivos como la vid. Un giro que coincidiría también con los deseos manifestados por un importante colectivo de labradores y propietarios para poner en pie lo que sería un influyente grupo de presión, constituyendo de esta forma, tal y como ya se apuntó, los primeros esbozos de lo que años después alcanzaría a ser la gran patronal agraria castellana³⁶.

La idea de formar una asociación agrícola castellana encontró en la obra de Fermín Caballero un excelente soporte en el que basar el proyecto. Hacía poco tiempo que Caballero había escrito: “Con el concurso de tantas voluntades y de tantos elementos bien concertados, debería coincidir la

³⁴ Almuiña, Celso (1977), ob. cit., Tomo II, pág. 60.

³⁵ Serrano García nos recuerda, especialmente, la Ley de 11 de julio de 1866 para el fomento de la población rural, además de la del 3 de junio de 1869. En Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 9.

³⁶ Ibídem, págs. 8 y 9.

creación de una asociación de terratenientes y labradores por pueblos, por distritos y por provincias: nada hay que soporte peor la centralización exagerada que la agricultura. Por estos medios se irían rectificando las ideas de la clase agrícola, se modificarían sus costumbres, variarían sus necesidades, y no ambicionaría tanto los grandes centros”³⁷. De hecho, la *Asociación Agrícola* no dudó en reconocer su mérito, nombrándole presidente honorario una vez iniciadas sus actividades³⁸.

Los cambios efectuados respecto a los criterios prohibicionistas y, en cierto modo, la idea de una posible minoración en los beneficios, ofrecía a los propietarios de tierras unas circunstancias un tanto desfavorables al cesar las ventajas que les había proporcionado precisamente la aplicación de políticas proteccionistas. Desde finales de 1860, la filoxera en Francia había hecho que algunos poseedores de tierras vieran en el viñedo una clara alternativa al cereal, sobre todo después de las propuestas de Figuerola para ampliar el acuerdo que existía con el país vecino y de ser aprobada la reforma arancelaria iniciada en 1869³⁹. En todo caso, la tendencia a dar prioridad al sector industrial produjo una menor atención a la agricultura, contradiciendo así las últimas décadas vividas en España⁴⁰.

El 1 de abril de 1869, antes que comenzara su andadura definitiva la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, aparecía en Valladolid el primer número de la *Revista de Agricultura* que, bajo el mismo nombre, iba a ser el punto de referencia de propietarios y agricultores en los primeros años del Sexenio. Constituida provisionalmente, la Junta presidida por Francisco Cabeza de Vaca, contaba con la participación de algunos propietarios y

³⁷ Caballero, Fermín (1863), ob. cit., págs. 113 y 114. Para la ocasión hemos utilizado también la tercera edición publicada en junio de 1864, bajo el título de *Fomento de la población rural*, Imprenta Nacional, Madrid, 1864, pág. 177.

³⁸ Serrano García, Rafael, “Coyuntura económica y cambio político en Castilla la Vieja y León, 1867-1969,” en Serrano García, Rafael (coord.), *España, 1868-1874: nuevos enfoques sobre el sexenio democrático*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 2002, pág. 325.

³⁹ En efecto, en 1865 se había firmado un primer tratado de comercio con Francia que debía regular las relaciones entre ambos países los doce años siguientes. En el mismo se adquiría una cierta ventaja para España en todo lo relativo a la exportación de licores y aguardientes. Sin embargo, dicho acuerdo fue criticado en su día por las amplias concesiones recogidas a favor de Francia en detrimento de los intereses de los productores y comerciantes españoles. Carnero i Arbat, Teresa, *Expansión vinícola y atraso agrario (1870-1900)*, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980, págs. 86 y 87.

⁴⁰ Solo con Ruiz Zorrilla se comenzó a considerar, a partir de 1871, la posibilidad de corregir la situación de cierto «arrinconamiento» de la agricultura. A este respecto, véase de Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 11.

labradores entre los que destacaban José Guzmán, Leandro de Blas Rodríguez, Agustín Cañas, Cayetano Guzmán y Jacinto Cabeza de Vaca⁴¹. En las primeras páginas se preludiaba ya el propósito de la *Asociación*, así como las causas de la grave situación agrícola en la que se encontraba inmersa una gran parte de las provincias de la región. Entre las propuestas para atemperar la crisis se contaba, entre otras cosas, con la necesidad de “buscar la fuerza en el mayor número ó sea en la Asociación”. Una percepción que Cabeza de Vaca quería llevar más lejos, y que justificaba de la siguiente forma:

Nadie mejor que los hombres de los Campos pueden saber por esperiencia las contras de vivir en completo aislamiento y desunion; que recuerden por si propios las ventajas que los ha reportado su vida aislada; que vuelvan la vista á las demás artes é industrias, y verán que las que han progresado han sido aquellas que unidas y hermanadas han marchado á la par de los adelantos modernos. La causa de que nuestra agricultura se halle en el estado actual, no tiene otro origen que el no haberse unido los agricultores constituyendo un Cuerpo, por medio del cual hubieran podido defender sus intereses con unidad y acción⁴².

Los efectos de la crisis de subsistencias de 1868 habían revalorizado el cereal almacenado, provocando beneficios a rentistas y especuladores, al mismo tiempo que frustraba las esperanzas de campesinos y pequeños propietarios, conduciéndoles al impago de rentas y al abandono, en algunos casos, de las explotaciones agrícolas. El hecho en sí tuvo también repercusiones en la gran propiedad, debiendo asumir ésta unas cargas evidentes e inmediatas y sin apenas apoyo institucional que hiciera posible retomar la viabilidad de las tierras puestas en cultivo. Tanto el Gobierno provisional instaurado en Madrid como las Diputaciones, dieron a entender que sus promesas de auxilio a Castilla nunca llegarían, enojando a propietarios y ampliando la sensación de soledad a aquellos labradores y agricultores con menos recursos⁴³.

⁴¹ La *Revista* fue considerada la sucesora de *El Eco de los Campos*, publicada bajo la supervisión de Sabino Herrero, y que mantendría un estrecho vínculo con *La Crónica Mercantil*. Véase Almuiña, Celso (1977), Tomo I, ob. cit., pág. 819 y 820.

⁴² *La Asociacion Agrícola por la Iniciativa Privada. Revista de Agricultura*, en adelante *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 1, 1 de abril de 1869, págs. 2 a 4.

⁴³ Sobre el tratamiento dado por las autoridades económicas, tras la Revolución de 1868, a las peticiones de terratenientes y harineros castellanos, puede consultarse el trabajo de Pascual Gete, Hilarión, *El sexenio revolucionario en Toro y su comarca, 1868-1874. Crisis de subsistencias y comportamientos políticos*. Tesis Doctoral, Valladolid, Universidad de

El desinterés percibido por la élite agrícola castellana ante los problemas generados en 1868 no fue el único motivo por el que terminaría movilizándose a una gran parte de la sociedad en Castilla la Vieja y León. Los tiempos en los que nombres del partido moderado como los de Moyano, Reinoso o Alonso del Barrio, ligaban sus labores políticas a la protección agrícola estaban, por el momento, lejos de volver⁴⁴. La convicción de que la clase propietaria y labradora debía unir sus esfuerzos frente a los desastres políticos de Madrid se vieron reforzados ante los problemas generados por la sequía de aquel año y la crisis financiera que, en la provincia de Valladolid venía produciéndose desde mediados de los años sesenta. Este último capítulo había paralizado también una buena parte del sector industrial, además de afectar profundamente a la minería y el ferrocarril. Como explica una vez más Serrano García, ante el cúmulo de dificultades la burguesía no tuvo más remedio que acudir a reconsiderar los intereses agrarios, teniendo como epicentro en aquellos momentos, y como modelo de crecimiento y expansión, la producción cerealícola⁴⁵.

El interés por los detalles de la innovación en la agricultura, la mayor atención a otros cultivos, el impulso de explotaciones viables a través de una mejor concentración en las parcelas de cultivo y, en definitiva, la búsqueda de aprovechamientos útiles a la producción del campo, parecieron incitar a la eliminación de los obstáculos y controles, animando a propietarios y agricultores a constituir una «patronal» autosuficiente, al margen de los partidos políticos, con capacidad para responder al Gobierno y exigir al mismo la atención a las líneas generales propuestas por el sector agrario castellano.

Unámonos, Propietarios ricos y pobres; Labradores en pequeña y grande escala; Hombres científicos é industriales; Legistas, Economistas, Veterinarios, Ganaderos, etc., formemos todos un Cuerpo unido; contribuyan los ricos propietarios á que se ilustren sus colonos poniendo a su alcance los adelantos modernos; contribuyan los labradores prácticos á hacer las experiencias que los teóricos los aconsejen; estudien los legistas y economistas las leyes agrarias vigentes, para que teniendo en cuenta los

Valladolid, 1994. También en Serrano García, Rafael, “Aproximación al Sexenio Democrático y sus elites políticas en Castilla la Vieja y León”, en Rededero San Román, Manuel y de la Calle Velasco, M^a Dolores (Eds.), *Castilla y León en la Historia Contemporánea*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, febrero 2009, pág. 267.

⁴⁴ Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 15.

⁴⁵ Ibídem, págs. 13 y 14.

adelantos modernos, propongan las reformas indispensables, ó la creacion de otras nuevas; [...] Es necesario si queremos ser algo y abandonar el sistema que hasta ahora hemos seguido, que los amantes del progreso agrícola y prosperidad de la Nacion, ayuden á los hombres de los campos para que la agricultura española se emancipe; es necesario convencerlos que si bien quieren hacer ver están decaídos por su desunion, tienen aún vida propia para organizarse, aprovechando su fuerza numérica para hacer valer su fuerza moral⁴⁶.

Sin mostrarse totalmente contrarios a la Revolución, el grupo de propietarios provisionalmente constituidos el 1º de abril de 1869, había puesto en marcha un mes antes un «prospecto» dando a conocer los propósitos de la *Asociación*, encontrando una rápida respuesta al inscribirse más de doscientas personas, aumentando su número en las semanas siguientes⁴⁷. El éxito produjo una cierta confianza para formalizar de manera definitiva el proyecto de asociación, tal y como había figurado en el prospecto de divulgación, mostrando una vez más la incredulidad en el favor del Gobierno, e invitando a los propios labradores a iniciar una regeneración agrícola que estuviera basada en la capacidad propia, así como en la enseñanza agrícola, teórica y práctica. A diferencia de otras asociaciones agrícolas ya constituidas, la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* siempre se mostró partidaria de acoger entre sus socios, no solo a los propietarios, sino también a aquellos labradores y colonos que así lo decidiesen, dejando a un lado cualquier carácter «clasista».

Algunos dirán que los asociados serán las gentes de las grandes poblaciones, precisamente la mayor parte son de los campos, y no solo labradores ricos, sino los medianos y algunos colonos; y á el lado de estos se vé al industrial, al ingeniero, al legisla, al farmacéutico, al veterinario y al comerciante que nuestro bienestar, se apoya en lo mas desprestigiado y olvidado que hoy día

⁴⁶ Las líneas están tomadas del artículo de Francisco Cabeza de Vaca titulado “La Asociación Agrícola”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 1, 1 de abril de 1869, pág. 4. Manuel A. del Valle, abogado y propietario de la provincia de León, recordaba la alta disgregación de la propiedad en regiones como Asturias, León o Galicia, hecho que dificultaba cualquier mejora o adelanto. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 5, 1 de junio de 1869, pág. 73.

⁴⁷ En efecto, a mediados de mayo de ese mismo año de 1869, se publicaba en la *Revista* una “Cuarta lista de Señores Asociados”, con 34 nombres más, entre los que se encontraban, a modo de curiosidad, el de una mujer, Clara Andrés de Liaño, además de dos nombres extranjeros, Mr. Noël, y Mr. A. Eyries. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 4, 16 de mayo de 1869, págs. 56 y 57. Por otra parte, si bien al comienzo las relaciones con el régimen surgido de la Revolución no fueron incorrectas, con el tiempo se volverían conflictivas. Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 22 y 23.

hay en España, en la agricultura. ¿Qué resta hacer á los que comprenden lo útil, y ventajoso que es dar vida á esa clase? Trabajar en ilustrar á los colonos y gañanes, despertar en ellos el deseo de saber, lo útil de la union, lo conveniente de ir paulatinamente abandonando las rutinas que sin causa justificada se vienen sucediendo de generación en generación, y explicarles en su lenguaje las que deben conservar⁴⁸.

Precisamente, el regeneracionismo en la agricultura había sido una de las propuestas más repetidas por la *Asociación*, además de un hecho esencial a la hora de «enganchar» a los distintos sectores del campo, y en el llamamiento a la movilización de los propietarios castellanos. Una idea que valía para expresar la larga decadencia experimentada por la agricultura en España desde hacía algunas centurias más atrás⁴⁹. La propia regeneración implicaba la negativa a ser manipulados, trabajando conjuntamente para lograr una dignidad equiparable, en esos momentos, a lo que significaba la clase industrial. A su vez, el trabajo debía ser un indicador de los avances en una agricultura cerealista que precisaba en Castilla de unos medios todavía no alcanzados en la región. En el diagnóstico de quienes consideraban la unidad un elemento esencial para extirpar dicho atraso, figuraban la dispersión y el aislamiento, amén del acatamiento tanto tiempo consentido a la tutela oficial, como causas que debían repararse irrevocablemente entre los labradores castellanos. De esta suerte, no era extraño encontrar entre las publicaciones de la época, distintos análisis sobre la falta absoluta de respeto que hacia la propiedad se estaba produciendo en las diferentes provincias, sin olvidar el «irritante» daño que se hacía a los campos⁵⁰.

La unidad solícita entre labradores y propietarios rentistas había servido en su momento, gracias al prospecto, como reclamo para atajar los atrasos en la agricultura, estando aquéllos llamados a realizar una nueva tentativa por implicarse en las responsabilidades de la tierra, postergando definitivamente, por parte de los más acomodados, la indiferencia y el absentismo tantas veces evidenciada. En todo caso, un buen número de

⁴⁸ *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, n° 4, 16 de mayo de 1869, pág. 55.

⁴⁹ En este sentido se manifestaba, por ejemplo, Juan García de Ortega en un artículo titulado “Introducción al estudio de la agronomía castellana”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, n° 3, 1 de mayo de 1869, págs. 43.

⁵⁰ Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 120 a 122. Igualmente, resulta muy interesante comprobar la opinión que en este sentido mostraba Domingo J. Francos en un artículo titulado “Una amarga verdad”, *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, n° 4, 16 de mayo de 1869, págs. 62 y 63.

propietarios habían comenzado, desde el primer momento, a autodenominarse «labradores» o «vicultores», dando a entender así su forma de gestionar las haciendas. A través de la *Revista*, la *Asociación* iba a cumplir el propósito de invitar a la unidad, sirviendo igualmente de instrumento pedagógico, muchas veces utilizando consignas como “*querer es poder*”, conforme a los propósitos que iban a ser aprobados por los firmantes de la nueva Sociedad Agrícola⁵¹.

Entre los meses de junio y septiembre, antes de ser constituida definitivamente la *Asociación*, y de la misma forma que otras sociedades agrícolas habían puesto de manifiesto, se sucedieron una serie de artículos enjuiciando las trabas que suponían para la agricultura las contribuciones directas, además del agravio que representaba la escasa protección concedida al trigo respecto a la considerada para la industria en Cataluña. Desde las páginas de la *Revista*, una vez más se censuraba la contribución rural, esto es, las cargas que debían abonarse en concepto de inmuebles, cultivo y ganadería, que suponían un esfuerzo tributario ostensible para agricultores y propietarios. No en vano, se llegó a considerar que las administraciones no veían en la agricultura sino una forma más de buscar cargas tributarias que alimentaran la Hacienda del Estado⁵². En palabras del articulista Pernia Barba, las contribuciones no eran sino “un formidable obstáculo, la gran rémora al progreso agrícola, el chupon que desangra y extenua al agricultor”⁵³. Por otra parte, teniendo en cuenta lo estimado por la Comisión de Hacienda, es decir, la protección dada a trigos y harinas del 15 por ciento, en otro de los apartado correspondiente a la “Crónica Agrícola”, la pregunta era evidente: “¿Porqué Sr. Figuerola protege V. á parte de los Catalanes con un 35 por 100 y al resto de España, en general agrícola, con solo el 15?”. En este sentido y desde la propia *Asociación Agrícola* se agradecía la acción desarrollada por el diputado Herrero, manifestándolo de la siguiente forma: “¿Qué hubiera sido de nosotros á no haber tenido la suerte de poseer un representante en las Constituyentes

⁵¹ *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 4, 16 de mayo de 1869, págs. 64 y 65.

⁵² La idea ya fue propuesta por Manuel A. del Valle, en un artículo titulado “¡Fuera trabas!”. En el mismo se podía leer: “Las administraciones del país no ven en la agricultura mas que materia imponible”. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 9, 1 de agosto de 1869, págs. 145 a 147.

⁵³ N. Pernia Barba figuraba como abogado, propietario y labrador, así como autor de un artículo referido a los perjuicios de las contribuciones directas y los problemas ocasionados tras la subida de las mismas a 473 millones de reales. Véase *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 6, 16 de junio de 1869, págs. 96 y 97.

cuyos intereses son agrícolas, como nuestro amigo D. Sabino Herrero? Que después de perdida la cosecha el año anterior é imponiendo el Sr. Figuerola como queria 4 reales en fanega á los trigos de importacion, en lo sucesivo tendríamos nuestros granos cuando mas á 20 reales fanega”⁵⁴.

La importancia otorgada al trigo y el temor que estaban originando los debates sobre el libre cambio, defendido en las Cortes por algunos diputados y por miembros del Gobierno, había producido ya distintas reacciones desde Valladolid, exigiendo una protección concreta a la agricultura castellana. Los 4 reales por fanega aplicados a los trigos extranjeros impedían la competencia en cualquier mercado exterior del grano castellano. En todo caso, tampoco se pedía un proteccionismo similar al que había existido hasta esos momentos, conscientes del daño que en muchos casos había ocasionado a la agricultura en términos generales. Al menos así lo dejaba entrever la *Asociación* cuando advertía que: “escasísimos han sido los adelantos introducidos en agricultura confiados en la proteccion, seguros de que ninguno otro podia presentar sus granos en competencia á los nuestros, no habia estímulo á la mayor produccion entregándonos en brazos de la confianza que habia en la naturaleza y en la fê de que los santos harian regar nuestro suelo cuando lo necesitásemos”⁵⁵.

Convencidos de la necesidad de transformar el nivel de protección mantenido hasta entonces, se comenzó a estudiar la posibilidad de modificar el mismo a través de distintas peticiones publicadas en la *Revista Agrícola* y que, en definitiva, pretendían conseguir, entre otras cuestiones, un impuesto sobre la importación de 18,5 reales por cada 100 kilogramos. A ello se sumó la demanda de unos medios «auxiliares» que afectaran de manera positiva a la agricultura, así como a las industrias derivadas de la misma. Entre estas medidas estaban la supresión de los gravámenes en caso de traspasos y permutas de tierras, incluyendo la compra o venta de las mismas. Por último, se solicitaba la nivelación de los impuestos, es decir: “que todo capital pague contribución sea cualquiera su forma, pues nada tiene de equitativo que pague la agricultura el 14 por 100 mientras que las clases activas y pasivas paga el 5 y nada las rentas del Estado, así como tambien algunas industrias”. De esta forma, se creía sería viable la compensación del

⁵⁴ *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 6, 16 de junio de 1869, págs. 102 y 103.

⁵⁵ Ceinos, Manuel, “Proteccion que se pide”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 7, 1 de julio de 1869, pág. 110.

déficit resultante del sistema proteccionista anterior, además de proporcionar recursos al Tesoro y sostenimiento a la agricultura⁵⁶.

En su camino hacia el establecimiento definitivo, la *Asociación* presentó en las reuniones previas la necesidad de constituir una serie de comités que debían servir como «brazos» y «piernas» al gran cuerpo que suponía la misma. Para ello se habían observado los planteamientos recogidos en el *Fomento de la Producción Nacional*, cuyo propósito era el de fundar centros análogos en distintos puntos del país. Institución que, por otra parte, contaba con el apoyo de la que apunto estaba de constituirse en Valladolid⁵⁷. En efecto, el propósito mostrado desde la *Iniciativa Privada* por reclamar una protección moderada y temporal para la agricultura castellana debía dar lugar a la creación de comités, constituidos con completa autonomía y organizados sobre las bases de una entera descentralización, lo que aseguraba la ausencia de intervención oficial alguna.

La asociacion agrícola no seria una obra acabada y sólida si no la cimentáramos y aseguráramos con la formacion de los comités. La asociacion por sí sola por mas que estuviera sólidamente constituida y compuesta de una gran parte de agricultores, no podria poner en accion y unir los grandes intereses agrícolas; sea entre ellos; sea con los intereses generales de la nacion; seria un centro de accion compuesto de muchas fuerzas diseminadas, y de consiguiente perdidas, cuyo trabajo útil seria la mayor parte de las veces cero, ó negativo⁵⁸.

El interés recogido desde la *Revista* por extender el proyecto a otras provincias distintas a las de Valladolid, obligó, en palabras de su Presidente, Cabeza de Vaca, a «precipitar» los trabajos e informes que se habían previsto desarrollar más adelante. Éste, recomendaba que dichos comités no se limitaran a ser constituidos únicamente en las cabezas de partido, tal y como sucedía, por ejemplo, con el *Instituto Agrícola Catalán*, debiendo llevarlos a todos aquellos pueblos donde la cuota de asociados fuera importante, incluso entre los pueblos limítrofes en los que no existiera un elevado número de afiliados⁵⁹.

⁵⁶ Ibídem, págs. 110 y 111. Asimismo, otros planteamientos similares en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 8, 16 de julio de 1869, págs. 130 y 131.

⁵⁷ *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 7, 1 de julio de 1869, págs. 120 y 123.

⁵⁸ Cabeza de Vaca, Francisco, “Los comités agrícolas”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 10, 16 de agosto de 1869, pág. 163.

⁵⁹ Ibídem, pág. 173.

La llamada a la pertenencia de estos comités estaba dirigida a los labradores profesionales, por lo que en las Bases, definidas por Alfonso Martínez de Pinillos, se requería la presencia de los mismos en tanto estaban capacitados y podían prestar los conocimientos necesarios para mejorar los cultivos. Estas consideraciones figuraban en la Base 1ª, quedando recogidas de la forma siguiente: “Se elejirá en cada pueblo una junta local compuesta de labradores, ganaderos, y hombres de conocimientos útiles á la agricultura, y deseosos de la prosperidad de esta, entre cuyos individuos se nombrará el presidente y secretario”. Entre las directrices destacaban la junta nombrada para la contabilidad y administración de los fondos; las cuotas establecidas para cada labrador, o la instancia al Gobierno para que fueran autorizadas cuantas roturaciones fueran susceptibles de cultivo, siendo en este caso el Director de la *Asociación Agrícola* establecida en Valladolid el encargado de tramitar las solicitudes⁶⁰.

Coincidiendo con la celebración de un congreso agrícola en Valladolid, a finales del mes de septiembre de 1869, la junta provisional encargada de constituir definitivamente la *Asociación* pensó en aprovechar la circunstancia para, de esta forma, tanto agricultores como propietarios, debatieran sobre asuntos relacionados con el impulso a la agricultura. La idea, expuesta por el propio Cabeza de Vaca, constataba el interés para los futuros asociados: “seria muy útil y ventajoso, aprovecharse de la estancia en esta de muchos agricultores; se propondrá, la conveniencia, de tener un Congreso agrícola que dure tres días por lo menos, en el que se discutan por los asociados, cuestiones de agricultura, de aquellas que se consideren de mas utilidad á el modo de ser actual de nuestros cultivos”. El punto primero a tratar era precisamente la conveniencia de acometer la formación definitiva de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, al que seguían otros relativos a la introducción de maquinaria agrícola, aspectos sobre la enseñanza agrícola o la introducción del cultivo de la vid⁶¹.

A mediados del mes de septiembre, y si tenemos en cuenta las palabras de su Presidente, los asociados superaban ya el número de cuatrocientos, una situación que realzaba todavía más la puesta de largo de la *Asociación*⁶². Era precisamente este aspecto el que parecía destacar más

⁶⁰ Ibídem, pág. 174.

⁶¹ *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 11, 1 de septiembre de 1869, págs. 181 y 182.

⁶² *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 12, 16 de septiembre de 1869, pág. 197.

en la *Revista*, refiriéndose la misma a las ventajas que podía redundar la institución a la agricultura. En un artículo, coincidiendo con la inminente consolidación de la *Iniciativa Privada*, se alentaba a la ciudadanía a practicar el asociacionismo agrícola. En este mismo sentido, otro de los colaboradores como Cándido María Costilla consideraba: “Con la Asociación, llegaremos á tener comisionados en los principales mercados del extranjero y en nuestros puertos y venderemos nuestros granos á los comerciantes de harinas, y no como los vendemos hoy á los comisionados de sus comisionados”⁶³.

Acordada la reunión, ésta dio comienzo el día 27 de septiembre en uno de los salones preparados al efecto de la Casa de las Aldabas, propiedad en aquellos días del *Ateneo Mercantil* de Valladolid. La junta provisional e iniciadora de la *Asociación* iba a poner en marcha un proyecto muy ambicioso, probablemente no conocido hasta esos momentos, que el mismo Cabeza de Vaca trataba de explicar en la primera lectura efectuada en la Asamblea constituyente. El Presidente no podía ser más claro al expresarlo de este modo: “Creo que sea la primera vez que en España se haya tratado y conseguido formar una asociacion agrícola por la iniciativa privada, es decir, por el principio á el que deben recurrir todas nuestras industrias, para poder conseguir su máximo desarrollo”. En referencia a Castilla, matizaba: “Los castellanos podemos tener la satisfaccion de haber sido los primeros iniciadores en este asunto, habiendo conseguido, quede constituída una asociacion de este género en la Capital de Castilla la Vieja”⁶⁴.

Esta nueva formación asociativa no era, en todo caso, casual ni se debía a una mera imitación de otras establecidas en el Estado. A decir verdad, ni siquiera el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, paradigma en muchos casos del asociacionismo en España, había llegado a tener un programa tan extenso y, al mismo tiempo, tan dilatado en cuanto al número de proyectos. Para ello basta con observar las Secciones que se habían establecido en la Asamblea y que debían ser punto de referencia y de actuación de la Sociedad (véase el cuadro 32).

⁶³ Costilla, Cándido María, “Necesidad de la asociación agrícola”, en *La Asociación Agrícola...*, Ibídem, pág. 207.

⁶⁴ *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, n° 13, 16 de octubre de 1869, pág. 214.

CUADRO 32

Secciones de la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada

Número de Sección	Atribuciones y cometidos
Primera Sección	[Agricultura propiamente dicha y enseñanza agrícola
Segunda Sección	[Horticultura. Arboricultura. Floricultura
Tercera Sección	[Selvicultura. Sericultura e Insectología
Cuarta Sección	[Industrias Agrícolas
Quinta Sección	[Ganadería. Veterinaria
Sexta Sección	[Mecánica agrícola y construcciones rurales
Séptima Sección	[Viticultura y Vinicultura
Octava Sección	[Ciencias aplicada a la Agricultura y análisis químico
Novena Sección	[Legislación y Administración Rural
Décima Sección	[Economía Política y Rural

FUENTE: *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 13, 16 de octubre de 1869, págs. 221 a 223.

Se comprende, visto el cuadro anterior, que las expectativas eran elevadas. Precisamente, el acto de inauguración del día 27 de septiembre se había iniciado exponiendo los objetivos alcanzados en el corto espacio de tiempo que llevaba constituida la *Asociación*. A los mismos se sumó un borrador con los Estatutos que fueron aprobados de manera inmediata, quedando instituida y conformada la entidad sobre una Junta directiva, una Asamblea General y las diez Secciones con sus correspondientes especializaciones. Entre las cuestiones más sobresalientes quedaba subrayado el carácter ajeno a toda discusión política dentro de la Sociedad agrícola, el libre acceso a la misma por parte de propietarios, colonos, labradores e industriales, o la periodicidad anual de la Asamblea. En esta última se presentarían las memorias detalladas de todas las actividades y decisiones tomadas durante dicho período. Asimismo, se detallaba los cargos

y el nombre de las personas que los ocupaban, ya fueran pertenecientes a la Junta o a las Secciones (véanse los cuadros 33 y 34)⁶⁵.

Aunque elegidos nominalmente, los miembros representaban una configuración muy amplia compuesta por cerca de treinta personas, en una asociación que rondaba el medio millar de socios. También llama la atención el escaso tiempo empleado en la organización y aceptación de los reglamentos y directrices internas, especialmente si tenemos en cuenta que inmediatamente después de la aprobación de los Estatutos dio comienzo el Congreso Agrícola en el que se trataron ocho puntos previamente establecidos⁶⁶.

Del Congreso, del que desconocemos su número exacto de asistentes, nos ha quedado la idea del perfil buscado como base de la *Asociación*. Una persona con capacidad en las finanzas, con propiedades, además de cierta intuición para la agricultura. Las particularidades eran redactadas así por Jacinto Cabeza de Vaca: “El propietario cultivador es el primer eslabon de la cadena asociacion, el que vive ó sobre su propiedad, sí esta es coto, ó en pequeña poblacion que constituyen el pueblo ó localidad”. A esta idea se venía a añadir lo siguiente: “en la asociacion agrícola entran los siguientes componentes: cultivador propietario y no propietario, propietario poseedor del capital tierra, agrónomo poseyendo el capital ciencia, bracero poseyendo el capital trabajo manual; el tipo mas perfecto es el cultivador propietario, pues reúne en sí ó debe reunir capital tierra, capital inteligencia y capital dinero, motores esenciales para que la máquina produccion produzca el mayor efecto útil”⁶⁷. Pocas cosas pasaban inadvertidas para quienes debatían en el Congreso. Si las formas de cultivo o los modos de producción tuvieron su cabida, no menos tiempo se terminó dedicando a los quehaceres familiares dentro de la vida rural, en especial el tipo de educación que debía apreciarse en la mujer. Esta cuestión que hoy nos parecería «obsoleta», fue tratada por varios asociados para que se favoreciera la instrucción de esposas e hijas.

⁶⁵ “Estatutos para la Asociacion Agrícola por la Iniciativa Privada, aprobados en la Asamblea General de 27 de setiembre de 1869” en *La Asociacion Agrícola...*, Tomo I, n° 13, 16 de octubre de 1869, págs. 221 a 223.

⁶⁶ De los trabajos del Congreso dio buena cuenta Jacinto Cabeza de Vaca, hermano del Presidente de la *Asociación*. *Ibidem*, págs. 224 a 231.

⁶⁷ *Ibidem*, pág. 225.

CUADRO 33

Junta de la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada en el 1859

Nombre	Cargo y profesión
Fermín Caballero	[Presidente honorario. Propietario, agricultor y agrónomo
Francisco Cabeza de Vaca	[Presidente. Propietario y ganadero
Agustín Cañas	[Secretario General Honorario. Propietario y agrónomo
Manuel Ceinos	[Secretario General y Presidente de la sección cuarta. Ingeniero industrial
Domingo Respaldiza	[Secretario Tesorero. Propietario
Cayetano Guzmán	[Secretario, Archivero y Bibliotecario. Propietario y labrador
Juan García de Ortega	[Secretario y Redactor. Actividad desconocida
Augusto Lecanda	[Vicepresidente y Presidente de la sección primera. Ingeniero agrónomo
Francisco Arranz	[Vicepresidente y Presidente de la sección segunda. Ingeniero agrónomo
Javier Ocea	[Vicepresidente y Presidente de la sección tercera. Ingeniero de Montes
Leandro Rodríguez de Blas	[Vicepresidente y Presidente de la sección quinta. Veterinario de primera clase, labrador y ganadero
Carlos Campuzano	[Vicepresidente y Presidente de la sección sexta. Ingeniero de Caminos, canales y puertos
Teodosio Lecanda	[Vicepresidente y Presidente de la sección séptima. Ingeniero industrial, viticultor y vinicultor
José Salvador Ruiz	[Vicepresidente y Presidente de la sección octava. Propietario y doctor en farmacia
Demetrio Gutiérrez Cañas	[Vicepresidente y Presidente de la sección novena. Propietario y abogado
Jacinto Cabeza de Vaca	[Vicepresidente y Presidente de la sección décima. Propietario, labrador y abogado

FUENTE: *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 13, 16 de octubre de 1869, págs. 222 y 223.

CUADRO 34

Consejeros de la Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada en Valladolid

Nombre	Profesión
José Guzmán	Propietario
Cándido González	Propietario y labrador
Tiburcio Cocho	Propietario y labrador
Marqués de Caballero	Propietario y labrador
Manuel Sotillo	Propietario y labrador
León Padierna y Villapadierna	Propietario y viticultor
Francisco Alonso	Propietario y viticultor
Mariano Vázquez	Propietario y viticultor
Luciano Manzano	Propietario y labrador
Rafael Reinoso	Propietario y labrador
Agustín Olea	Propietario
Juan Herrero	Propietario y labrador

FUENTE: *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 13, 16 de octubre de 1869, pág. 223.

Aunque bajo la idea predominante de que las mujeres debían ser educadas en primer término para ser madres de familia, no faltaron quienes criticaron dicha actitud por corresponder a criterios que no iban más allá de una enseñanza que solo pretendía un «adorno exterior». A través de la enseñanza agrícola, se advertía que las mujeres, madres e hijas: “llegarían á saber, sinó grandes teorías científicas, por lo menos las nociones mas precisas para practicar la economía doméstica rural, sin descuidar por esto la enseñanza de breves nociones de horticultura, jardinería y algo de

Zoothécnica; así por medio de estos estudios se estimularía en ellas la afición á las cosas del campo”⁶⁸.

Fue el de la enseñanza agrícola uno de los primeros temas enunciados en la *Revista* una vez constituida la *Asociación Agrícola*, si bien la idea de crear una escuela agrícola en Valladolid ya se había tratado anteriormente al triunfo de «La Gloriosa». Los conocimientos que habitualmente eran impartidos en la enseñanza primaria apenas abarcaban breves nociones, en muchos casos obtenidos de la lectura de artículos sobre el cultivo, llevando al alumnado a la monotonía y la rutina, y sin que ello supusiera un desarrollo de las facultades intelectuales⁶⁹. Desde el Gobierno surgido de la Revolución se había propuesto un sistema mixto en el que integrara a propietarios y labradores, aunque bajo la tutela del Estado, idea que no fue bien aceptada entre los socios⁷⁰. En todo caso, desde Madrid el ministro Ruiz Zorrilla publicó una circular por la que se alentaba la implantación de estudios prácticos de agricultura a través de los Ayuntamientos y las Diputaciones provinciales. El hecho es que poco después, la Junta constituida por la *Asociación* se reunió con el Ayuntamiento vallisoletano y las Diputaciones provinciales para tratar la posibilidad de establecer una Escuela de agricultura que diera cobertura a la enseñanza agrícola en las provincias castellanas. Las bases del proyecto fueron leídas finalmente por Teodosio Lecanda, aunque su lectura en nada corregía el problema debido a la reciente supresión de la *Escuela Central de Agricultura de Aranjuez*, en noviembre de 1868, y a las diferencias notables que existían entre los asistentes y los planteamientos propuestos por la Administración⁷¹. En palabras del propio Ruiz Zorrilla, las causas de la supresión eran lógicas debido a su escaso rendimiento.

⁶⁸ *Ibidem*, pág. 230.

⁶⁹ En este sentido se expresaba Aureliano García Barrasa, articulista y Director de *La Crónica Mercantil* en una reseña dedicada a la enseñanza agrícola. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 15, 16 de noviembre de 1869, pág. 253.

⁷⁰ Efectivamente, la intención expuesta desde el Ministerio manejado por Zorrilla era la creación de escuelas que, bajo un sistema compartido, es decir, supervisado por la Administración a la par que libre, pudiera ser impulsado por la Diputación y por particulares en cada municipio. Serrano García, Rafael (1997), *ob. cit.*, pág. 41.

⁷¹ Conviene aclarar que a los pocos meses de ser suprimida la de Aranjuez se emprendió el proyecto definitivo de lo que después sería la *Escuela General de Agricultura*, ubicada en una finca de La Florida, en Madrid. Véase el Decreto estableciendo una Escuela General de Agricultura en la posesión denominada La Florida. *Gaceta de Madrid*, número 30, sábado 30 de enero de 1869.

Existen, es verdad, algunos Ingenieros agrónomos salidos de la Escuela Central de Agricultura que se hallan á la altura de su mision, habiendo probado su suficiencia en los certámenes de oposición á que se han sujetado y en las comisiones que dentro y fuera de España han desempeñado; pero son desgraciadamente una honrosa excepción, debida, más que á la Escuela, á los estudios privados que hicieron en sus viajes por las provincias y el extranjero. Era, pues, de absoluta necesidad la supresion de una Escuela que la experiencia habia acreditado no respondia á lo que el país tenia derecho á exigir; y por esta razon se ha suprimido la Central de Agricultura de Aranjuez⁷².

La memoria aprobada meses más tarde por la Comisión encargada de estudiar el proyecto dictaminó que la Escuela debía ubicarse en Valladolid, siendo su ámbito de influencia provincial y con el objetivo de formar ingenieros agrícolas con un plan de estudios cuya duración no fuese inferior a tres años. Los gastos calculados para su puesta en marcha y durante ese primer período ascendían a 613.000 reales, desembolso que debía correr a cargo de la Diputación y del Ayuntamiento. A pesar del montante, tanto la corporación municipal presidida por Tomás Díez Franco, como por parte del gobernador Gómez Díez, se mostraron dispuestas a facilitar terrenos, instalaciones y recursos económicos para facilitar la instalación del centro educativo. Sin embargo, estas aspiraciones quedaron truncadas tras la insurrección federal surgida a comienzos del otoño de 1869 y los cambios provocados por la misma en el Ayuntamiento de la capital. El repentino fracaso llevó al responsable de la sección de enseñanza de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, Augusto Lecanda, a declarar la evidente falta de clase política, además de la incuestionable ignorancia y desidia mostrada por todos⁷³.

Abandonado el proyecto a finales de 1869, la realidad era que la *Asociación* había alcanzado ya una aceptable repercusión, habiéndose constituido por esas fechas algunos comités en la provincia de Valladolid,

⁷² “Circular relativa á la organizacion de la enseñanza de la Agricultura en la provincia”, en *Gaceta de Madrid*, número 325, viernes 20 de noviembre de 1868, pág. 3.

⁷³ La decepción de Lecanda está recogida en el artículo “Remitido”, publicado en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 15, 16 de noviembre de 1869, pág. 261. Sobre las dificultades para establecer una Escuela de Agricultura puede consultarse, una vez más, a Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 43 a 45. Asimismo, la conflictividad surgida a raíz de la insurrección federal en Valladolid y sus consecuencias en Serrano García, Rafael, *El sexenio revolucionario en Valladolid: cuestiones sociales (1868-1274)*, Consejería de Educación y Cultura, Junta de Castilla y León, 1986, págs. 31 y siguientes, y 168.

Salamanca y Ávila⁷⁴. Las dificultades económicas y la morosidad observada en la *Asociación*, casi desde el momento de su creación, impidieron igualmente que se llevara a la práctica la creación de una granja-modelo en Valladolid en 1870, que tenía el objeto de instruir y orientar a jornaleros y capataces. Este fracaso no impidió, sin embargo, que se promovieran acciones menos llamativas a favor de la enseñanza agrícola⁷⁵.

Si bien es cierto que no existía un acuerdo para poner en marcha los resortes necesarios que dieran lugar a notables mejoras en la agricultura en Castilla, la *Revista* se esforzó en mostrar la necesaria utilidad de la ciencia y de los avances técnicos para superar la llamada agricultura tradicional. En este sentido, y dependiendo de la persona encargada de la redacción de los artículos, unas veces se proponían alternativas de cultivo reduciendo el barbecho y aportando nuevos abonos, otras se demandaba la falta de capital para la puesta en marcha de importantes explotaciones agrarias, etcétera⁷⁶. En cualquier caso, y a pesar de no haber dedicado en esta investigación un apartado específico al desarrollo e innovación de la agricultura, resulta comprensible la excelente contribución que la mayor parte de las asociaciones agrarias realizaron en este sentido. Aspecto, este último, que hemos venido resaltando desde el comienzo del trabajo. A este respecto puede contribuir la opinión, una vez más, de José Guzmán, al referirse a los

⁷⁴ Sabemos que a finales de 1869 existían comités en las localidades vallisoletanas de Rueda, Mayorga, Aguilar de Campos y Villavicencio de los Caballeros. También hay noticias de los constituidos en Cantalapiedra y San Cristóbal de la Cuesta, ya la provincia de Salamanca. Existieron intentos de organizar uno más en la ciudad de Ávila, pero esta iniciativa no está confirmada. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 11, 1 de noviembre de 1869, pág. 184, y en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 34.

⁷⁵ La Diputación en Palencia accedió a crear una plaza de ingeniero agrónomo por partido judicial en 1870. *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 3, 1 de mayo de 1870, pág. 45. A propuesta del consejero José Guzmán se pudo habilitar el antiguo convento de San Zoilo, en Carrión de los Condes, para ser utilizado como centro educativo. Garzón, Dionisio, *Desde el brocal del pozo. De la universidad de Salamanca al Muro de Berlín. Las teorías y la práctica en política*, AGABA Ediciones, Madrid, 2007, pág. 41, y Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 44.

⁷⁶ Las propuestas sobre alternativas para reducir el barbecho y mejorar los cultivos correspondían, sobre todo, a Jacinto Cabeza de Vaca. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 14, 3 de noviembre de 1869, págs. 241 y 242. También en el nº 16, 1 de diciembre de 1869, págs. 271 y 272. Las dificultades para poner en práctica recursos como abonos o riegos están detalladas por Cayetano Guzmán. Véase *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 15, 16 de noviembre de 1869, págs. 264 y 265. Las diferencias también resultaron evidentes en las entregas que la *Revista* realizaba en materia de viticultura. Al respecto pueden consultarse las distintas opiniones entre Teodosio Lecanda y Pablo Martín Cachurro, este último viticultor de Dueñas, en “Fabricación de vinos”, *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 17, 15 de diciembre de 1869, pág. 291.

avances experimentados en la agricultura castellana, tan solo un año y medio después de iniciar sus actividades la *Asociación Agrícola*.

Algunos niegan las ventajas de estas reuniones fundados en los pocos adelantos que llevamos hechos, pero este es un error grande. Hoy se conocen en nuestro país la mayor parte de los arados extranjeros: en la elaboración de los vinos, sin citar otros varios ejemplos, puede verse la bodega de Lecanda que es un notable progreso: en Villanubia tenemos un extranjero entendido, que ha plantado dilatados terrenos de viñedo que antes eran improductivos, mientras hoy le produce millares de cántaras, gracias á los adelantos de su explotación. Se cultivan muchísimas plantas forrageras cuyo nombre desconocíamos hasta aquí⁷⁷.

Enlazando de nuevo con esta cuestión, y a tenor de lo expuesto, podría pensarse en el escaso calado alcanzado en Castilla en materia educativa, especialmente en lo concerniente a materia agrícola durante este período. Si bien es cierto que durante décadas ha existido en nuestra historiografía un afán por relativizar la situación vivida en España respecto a otros países europeos, dicha costumbre no siempre hemos de interpretarla en un sentido adverso. Ciertamente, la generalización de las enseñanzas agronómicas se había comenzado a poner en práctica en algunos países de nuestro entorno, siendo desigual su aplicación, tanto en sus estructuras como en el tiempo. Si bien es verdad que Francia disponía desde 1850 de unos planes de estudio en los que estaban incorporados los estudios agronómicos a la formación del profesorado y magisterio, en otros Estados europeos como Alemania, Reino Unido y Bélgica, hubo de abordarse esta misma cuestión unos años más tarde y de forma esporádica, culminando su desarrollo en los primeros años del siglo XX⁷⁸.

Más aún, la enseñanza agrícola en las escuelas francesas había tenido su inicio a finales de los años setenta, coincidiendo con Duruy en el Ministerio de Instrucción Pública, creándose cátedras departamentales de Agricultura en las escuelas Normales en 1879. Bien es cierto que hacia 1890, el país galo contaba ya con los llamados «campos de demostración» en más de 1.500 escuelas primarias, creándose en 1876 el *Instituto Agronómico*

⁷⁷ “Esposicion y Certámen Agrícola”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 6, 15 de junio de 1870, pág. 81.

⁷⁸ Melcón Beltrán, Julia, *La formación del profesorado en España (1837-1914)*, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1992, págs. 182 y 183.

de Versailles, así como un número no determinado de Escuelas Regionales. Por otra parte, la enseñanza agrícola tuvo su reorganización en el Reino Unido en el transcurso de los últimos años del siglo XIX, estableciéndose poco después una sección de Agricultura en la Escuela de Ciencias. En Alemania, mediada la misma centuria, se habían comenzado a instituir las Winterschulen, escuelas de invierno a las que se podía acceder una vez completados los estudios primarios, además de las Höhere landwirtschaftliche Schulen, las Realschulen, o las Hochschulen, estas últimas dirigidas a profesores y a responsables de grandes explotaciones agrícolas, y en las que se podían adquirir conocimientos que iban desde la jardinería hasta los más complejos trabajos de campo⁷⁹.

Pese a que en España había dado comienzo un nuevo período de reivindicaciones en este sentido, a finales de los años sesenta, coincidiendo con la Revolución de 1868, se retomaron las peticiones al Gobierno demandando la creación de instituciones que tuvieran plena dedicación a la instrucción de las ciencias agronómicas. Conviene recordar que ya funcionaba una Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos desde 1855, y que a partir de 1857, con el establecimiento de la Ley Moyano, la enseñanza primaria iba a quedar abierta a la incorporación de este tipo de estudios en nuestro país. Nombres como los de Agustín Pascual, inspirador de la *Escuela Central de Aranjuez*, Narciso Fages, vinculado a la creación de granjas-escuelas en Cataluña, o Miguel Reinoso, Comisionado Real para la inspección de la Agricultura y autor del proyecto de Escuela Normal de Agricultura en Madrid, además de otros tantos hombres y proyectos para la formación de agricultores, capataces y obreros rurales, dejan claro que a partir de la segunda mitad del siglo XIX la cuestión no era si debía fijarse una enseñanza agronómica en nuestro país, sino cómo había que articular la misma en los distintos niveles que ya venían funcionando⁸⁰.

Parece también demostrado que con la entrada del liberalismo en las instituciones del país, sobre todo en las relacionadas con el sector agrícola, los grupos vinculados a las actividades privadas del mismo comenzaron a estimar conveniente la conformación de un conjunto de asociaciones e instituciones que tuvieran por finalidad la divulgación de los nuevos avances

⁷⁹ *Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. Tomo Primero*, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1869, págs. 483 y 484, y Fernández Clemente, Eloy, ob. cit., pág. 119.

⁸⁰ Fernández Clemente, Eloy, ob. cit., págs. 120 y 121.

en agronomía, química, botánica, hidrología, etc., procurando que las mismas aportaran un efecto «real» y empírico sobre el terreno, dejando definitivamente al margen las aportaciones que hasta esos momentos no habían pasado de meras consideraciones teóricas. Sobre la cuestión, existen igualmente trabajos que han demostrado el denodado empeño de algunos sectores elitistas en otros países por hacer de la agricultura una práctica que respondiese a los valores de modernidad e innovación científica, a fin de no perder el tren de los tiempos modernos, dentro del contexto que ya venía funcionando en la Europa decimonónica⁸¹.

Sabemos por las prácticas acontecidas en otras asociaciones, la importancia que finalmente adquirieron los ensayos realizados en algunas propiedades particulares, la mayoría de las veces pertenecientes a socios vinculados a los avances y conocimientos agrarios. De la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* destacaron nombres como los de Fermín Caballero, el marqués de Perales, Luis Díez y Díez, este último dueño de un depósito de maquinaria agrícola, Benito Fernández Maquieria, o Francisco Antonio de Echanove, poseedor igualmente de un instrumental de vanguardia. A la lista cabría añadir al industrial harinero Juan Fernández Rico, inventor de algunas herramientas presentadas en la Exposición Agrícola celebrada en Madrid en 1857. La presencia de redes de parentesco en los grupos directivos de la *Asociación vallisoletana*, tal y como ya había sucedido en el *Círculo de Labradores y Propietarios* de Sevilla, o en *El Fomento Agrícola* de Jerez, debió de tener una importancia considerable sirviendo como elemento de transmisión en la modernización de las estructuras agrarias a través de la innovación y la mecanización⁸².

⁸¹ En efecto, parece que algunos países, creyéndose conscientes de haber adquirido una cierta demora en la carrera hacia el progreso en la agricultura, llegaron a vivir una auténtica «obsesión» por desarrollarse y no caer en un estancamiento todavía más expuesto. En este grupo podríamos incluir a España o Italia, países que intentaban seguir la estela de Francia o Gran Bretaña. Cecilia Zuleta, María, "La prensa agrícola del porfiriato como Fuente para la historia económica. (Ensayo de fuentes), *Revista Semestral Signos Históricos*. Volumen 1, número 2, julio-diciembre 1999, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, págs. 60 a 62.

⁸² Rafael Serrano García se ha referido a este asunto para explicar cómo se transmitían ciertas responsabilidades relacionadas con la modernización de la agricultura. En su trabajo destaca la labor, dentro y fuera de la *Asociación Agrícola*, de los hermanos Francisco y Jacinto Cabeza de Vaca, así como de la familia Reinoso, tanto de Rafael y de Mariano, ambos sobrinos del político moderado y Ministro de Fomento Mariano Miguel de Reinoso. No hay que olvidar a los hermanos Augusto y Teodosio Lecanda; los hermanos Guzmán, ya fuera a través de Victoriano, José y Cayetano, además del grupo familiar de Miguel Herrero López, directivo en 1871. Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 26 a 28.

Con frecuencia, aspectos como una adusta capacidad receptiva en la agricultura española frente a determinados aspectos en la mejora y perfeccionamiento tecnológicos, ya apuntada incluso por la propia *Asociación*, han sido utilizados para remarcar el carácter de atraso y de incapacidad para adaptar dichos avances a la producción agrícola nacional. Ciertamente, a finales del pasado siglo comenzaron a elaborarse algunos trabajos y artículos en los que se acentuaba la escasa utilización de trilladoras a vapor en España y Portugal hasta finales del siglo XIX, excepción hecha de las grandes explotaciones que, como en su momento anotaran Gabriel Tortella y Jaime Reis, partían con la ventaja de hallarse inmersas en las llamadas economías de escala y a la seguridad sobrevenida como consecuencia de la alta protección arancelaria⁸³. Asumiendo conclusiones que, en muchos casos procedían de informes realizados en los primeros años del siglo XX, la reflexión sobre una agricultura aferrada todavía al arado romano y al trillo de madera, ha seguido asomándose a nuestra historiografía hasta prácticamente nuestros días. Afirmaciones que, en todo caso, necesitan ser matizadas⁸⁴.

En primer lugar, no seremos nosotros quienes volvamos a advertir que la aplicación del vapor en las tareas del campo agrícola, estuvieron ciertamente limitadas, incluso en países que figuraban a la vanguardia del progreso técnico como el Reino Unido, no haciéndose generalizado su uso hasta bien entrado en el siglo XX. En efecto, los trabajos basados en la fuerza humana y animal predominarían durante décadas, a excepción de labores como la trilla, adquiriendo una importancia más considerable la transformación de arados y la sustitución de hoces por guadañas⁸⁵. El

⁸³ Tortella, Gabriel, *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Alianza Universidad, Segunda edición, Madrid, 1995, págs. 61 y siguientes. También en Reis, Jaime, “Latifundio e progresso técnico: a difusão da debulha mecânica no Alentejo, 1860-1930”, en *Análise Social*, vol. XVIII (7), año 1982-2, págs. 371 a 433.

⁸⁴ “Algo sobre el problema agrícola en España y sobre el atraso y la rutina de que frecuentemente se acusa á nuestros agricultores”, en la *Comisión para el estudio de la producción y consumo del trigo. Su nombramiento. Actas de sus sesiones. Dictamen y Apéndices*, Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1909, págs. 70 a 72.

⁸⁵ Resulta muy interesante comprobar cómo a través de las encuestas que se realizaban desde la Administración, se llegó a la conclusión de que la simple sustitución de una herramienta por otra podía incrementar el rendimiento en la recogida del cereal. Existe sobre el tema un informe fechado en 1849 sobre algunas comarcas en Cataluña recogido en el AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 123, expediente 4 referido a “Encuesta sobre el crédito agrícola realizada entre 1849 y 1852”. En cualquier caso, siempre es recomendable el excelente trabajo que al respecto de la mecanización agraria en España, elaboró Ramon Garrabou, obra ya citada y publicada por el antiguo Ministerio de

propio Garrabou ha contrastado esta realidad, demostrando la importancia que adquirió en nuestro país el proceso de revisión y adaptación de muchas máquinas y herramientas a nuestros suelos. Por otra parte, eran precisamente los propietarios mejor situados, amén de las asociaciones de agricultores, quienes tenían la oportunidad de servir como centros de divulgación y transmisión de las nuevas tecnologías. No hay que recordar lo ya comentado en relación a colectivos como la *Sociedad de Reforma Agrícola* en Sevilla, o la de *Fomento Agrícola* en Jerez, para reconocer el extraordinario esfuerzo que, a través de ensayos óptimamente planificados, acrecentaron la incorporación de máquinas y aperos a las tareas del campo. Incluso, y entre la documentación archivada en el antiguo Ministerio de Fomento, hemos podido consultar los resultados de diferentes ensayos realizados con segadoras mecánicas sobre cereal en las provincias de Albacete y Valladolid a comienzos de la década de 1850, lo que da una idea también del seguimiento e interés que despertaban dichas «actividades» en Madrid⁸⁶.

A pesar de la prudencia que merece el debate historiográfico, y sin entrar de lleno el mismo, todavía se podrían seguir añadiendo consideraciones a los argumentos esgrimidos en relación al «retraso» español. Utilizando los trabajos de Collins y Desert, para los casos británicos y francés, respectivamente, conocemos que en 1871 la siega mecánica apenas cubría al 28 por ciento de la superficie cultivada de maíz en el Reino Unido. Cifra que en 1882 llegaba al 6,8 por ciento en Francia y al 3,6 por ciento en Alemania. Veinte años atrás, en concreto en 1862, solo algunas comarcas de Lorena, Ródano, Borgoña y el Norte de Calais, superaban o se aproximaban al centenar de *batteuses* a vapeur. Si nos atenemos a las investigaciones de Gabriel Désert, los trabajos con vapor no siempre estaba considerado por los expertos como la mejor opción, ya que, en opinión del autor: “ne sont pas toujours d’un usage économique”. Incluso, en clara pugna con lo manifestado por Tortella más arriba, muchos agricultores franceses eran reacios a la utilización de máquinas «modernas», por lo que se comprende que los precios de las trilladoras apenas experimentaran incrementos importantes entre los años de 1860 y 1880. Por último, el hecho de que todavía en 1892 solo se recolectara mediante maquinaria algo más de

Agricultura, Pesca y Alimentación, en la Revista *Agricultura y Sociedad*, número 57, correspondiente al año 1990.

⁸⁶ En concreto AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 77, expediente 14 “Maquinaria y material agrícola. Segadoras”, años 1853-1862.

un 11 por ciento en Francia, y un 6 por ciento en Alemania, en el año 1895, creemos deja suficientemente aclarada esta cuestión⁸⁷.

Así las cosas, son muchos los ejemplos sobre actividades desplegadas por la *Asociación Agrícola* en Valladolid para promover el uso de herramientas y maquinaria agrícola modernas. Durante los años de existencia de la *Revista*, la sección dedicada a “Máquinas agrícolas”, mostraba con un apreciable cuidado los detalles necesarios para su aplicación, incluso los datos pormenorizados practicados sobre el terreno⁸⁸. Gracias a dicha publicación, contamos con una amplia documentación y referencias que no solo afectaban a las particularidades del terreno y arados en relación al cultivo de cereales, leguminosas o vid, sino que en algunos casos llegaba hasta la recolección del piñón, comprendiendo los procesos de monda y limpia del citado producto⁸⁹. El interés generado por las labores de arado abrió la puerta para que la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* propusiera en el otoño de 1870 un certamen de estas herramientas y proceder a distintos exámenes comparativos, tanto en terrenos para laboreo como en viñedos⁹⁰. En el transcurso de los años siguientes, conjuntamente con las celebraciones de las Asambleas de los socios, tendrían lugar dos certámenes más, destacando la de 1871, circunstancia que serviría para que Tomás Queipo de Llano cediera algunas haciendas para la práctica de pruebas con arados y utillaje agrícola⁹¹.

⁸⁷ Collins, E. J. T., “Labour supply and demand in European agricultura 1800-1880”, in Jones, E. L. y Woolf, S. J. (edited by), *Agrarian Change and economic development. The historical problems*, First published in 1969. Reprinted in 2006 by Routledge, Abingdon, Oxon, pág. 75, y Désert, Gabriel, “Machinisme et agricultura dans la France du XIX^e siècle”, *Historical Papers, Communications historiques*, vol. 19, número 1, 1984, págs. 198, 200, 205 y 2011. Los datos porcentuales de final de siglo están tomados de Garrabou Ramon (1990), ob. cit., pág. 55.

⁸⁸ En las tablas correspondientes a los ensayos dinamométricos realizados con arados mecánicos y practicados por la *Asociación*, quedaban registrados, tanto la procedencia de los mismos como el esfuerzo y peso de los instrumentos, precio de los arados, etc., sin olvidar la situación geográfica de las tierras y el nombre del propietario que las ponía a disposición de la Corporación. *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, n° 14, 15 de octubre de 1870, págs. 201 a 204.

⁸⁹ Entre los innumerables ejemplos extraemos aquí el del socio Mariano Moro, residente en Fuentes de Nava, quien a través de la *Revista* se refería a la peculiar condición arcillosa del terreno, preguntando cuál debía ser el mejor modelo de arado para las labores agrícolas. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, n° 16, 1 de diciembre de 1869, págs. 278 a 280. Asimismo, es de destacar la consulta formulada por otro propietario en relación a la recolección del piñón, y la explicación dada desde la *Asociación*. *Ibidem*, págs. 280 y 281.

⁹⁰ *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, n° 12, 15 de septiembre de 1870, págs. 177 y 178.

⁹¹ A las muestras y ensayos acudían fabricantes desde distintos puntos de España y desde el extranjero como así sucedió con las casas Díez y Díez, Filiberto Chanú, Howards, Parsons, etc., resultando de interés las adaptaciones que de la maquinaria traída desde el

Las celebración de estos eventos agrícolas y de maquinaria moderna eran aprovechados por Ayuntamientos y Diputaciones para ofrecer su desinteresado apoyo, sin desmerecer tampoco la labor que se realizaba, principalmente desde *El Norte de Castilla* y *La Crónica Mercantil*, siendo el director de esta última publicación, Aureliano García Barrasa, una persona bien relacionada con la *Asociación Agrícola*. Con todo, tampoco faltaron los reproches desde dentro, unas veces para explicar el marcado desinterés mostrado por algunos socios, otras por el temor a que finalmente terminara malográndose la implicación y connivencia del interés privado⁹².

El propósito de contar con la iniciativa y los recursos privados condujo en muchos casos a la *Asociación Agrícola* a entrar en absurdas contradicciones, algo que terminaría afectando directamente a las estructuras de la misma, llevándola primero a una agonía innecesaria y a su posterior defunción poco tiempo después. Un ejemplo suficientemente explicativo tuvo lugar con motivo de las celebraciones y actos previstos para 1871. El Gobierno, interesado en realizar una aportación pecuniaria, ofreció una cantidad de 14.000 reales destinados a la Exposición, cantidad que podría haberse superado de haberlo solicitado la Junta de la *Asociación*. Ello habría supuesto, efectivamente, transformar el sentido que representaba la iniciativa y el interés privado para la Sociedad vallisoletana. No obstante, lo que sí hizo la entidad agrícola fue requerir, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, una suma cercana a los 40.000 reales, montante que finalmente se redujo a 3.000 pesetas, es decir, unos 12.000 reales, que fueron anotados al capítulo de imprevistos⁹³.

La relativización de los resultados de la Exposición vallisoletana de 1871, tal y como sugiere Serrano García, se habría puesto de manifiesto al

exterior debían realizarse para alcanzar rendimientos aceptables en suelos castellanos. Esto sucedía, generalmente, con sembradoras, aventadoras, prensadoras o trituradoras. La noticia del certamen de 1871 fue recogida en distintos medios de prensa, con descripciones de las galerías agrícola y mecánica preparadas para la exposición. Véase, por ejemplo, *La Ilustración Española y Americana*, año XV, número 30, 25 de octubre de 1871. También en la *Exposición pública en Valladolid para el mes de setiembre de 1871. Programa Reglamentado*, Imprenta y Librería Nacional y Estranjera de Hijos de Rodríguez, Libreros de la Universidad y del Instituto, Valladolid, 1871, págs. 15 a 24. Finalmente resulta de interés la descripción hecha en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 54 y 55.

⁹² Resulta muy ilustrativo el artículo de Juan García de Ortega enjuiciando estas actitudes, especialmente cuando la *Asociación* había cumplido ya más de dos años. *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 10, 16 de agosto de 1871, págs. 127 y 128.

⁹³ El apunte está recogido de la nota a pie de página número 77, en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 60.

plantearse algunas dudas con respecto al calado final de las propuestas para introducir nuevos cultivos y rotaciones, lo que, según el autor, hubiera generado una producción más intensiva. A ello cabría sumar lo limitado de la muestra ganadera. No obstante, el éxito, tanto de concurrencia como de difusión de productos y maquinaria, fue muy destacado en la prensa de prácticamente todas las provincias españolas. Desde la capital cordobesa, por ejemplo, se informaba de la llegada de una gran máquina traída desde los Estados Unidos, destinada a la agricultura⁹⁴. Las cuatro secciones de la Muestra fueron ampliamente divulgadas, incluso por las compañías de los ferrocarriles del *Norte* y *Nor-Oeste* que llegaron a ofrecer descuentos del 50 por ciento en sus tarifas “para toda clase de objetos que por aquellos se conduzcan con destino á la exposición que ha de celebrarse en Valladolid á mediados de setiembre”⁹⁵.

Los éxitos y decepciones de la Exposición de 1871 culminaban un período breve pero efectivo en el que se habían puesto en marcha acciones contra el exceso tributario o la división de los predios rústicos, remarcando un estado de crisis que parecía afectar de manera directa a la agricultura⁹⁶. Esta situación, descrita en la *Revista* por José Guzmán, quedaba reflejada de la forma siguiente: “las provincias de Castilla la Vieja y particularmente la tierra de Campos, ó sea el territorio comprendido entre el Pisuegra, Duero, Esla y Carrion, atraviesan una época funesta, no hay para qué negarlo. Que el desconsuelo es grande, la ruina visible y la miseria extraordinaria, cualquiera lo conoce”⁹⁷.

⁹⁴ *Diario de Córdoba*, número 6.309, viernes, 25 de agosto de 1871.

⁹⁵ Curiosamente, el anuncio está recogido de un diario alicantino. En concreto, en el *Eco de Alicante*, número 1.023, jueves, 24 de agosto de 1871. Existen numerosas noticias relacionadas con la Exposición de Valladolid del año 1871. Algunos de los numerosos ejemplos en el diario pacense *La Crónica*, Badajoz, número 554, 28 de septiembre de 1871, o en el *Boletín Oficial de la Provincia de Soria*, número 96, viernes, 11 de agosto de 1871, pág. 3, donde se publicaba íntegro el Programa reglamentado para la Exposición Pública de Valladolid.

⁹⁶ En relación a las contribuciones directas y a la necesidad de proceder urgentemente a una concentración parcelaria que beneficiara a los grandes terratenientes castellanos, la Junta Directiva remitió una Exposición a las Cortes Constituyentes a comienzos de 1870, en la que manifestaba su disconformidad con ambas situaciones. “A las Cortes Constituyentes”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 21, 15 de febrero de 1870, págs. 397 y 399. En relación a la presión fiscal es muy significativo el extenso artículo de Cayetano Guzmán titulado “La contribucion directa, mata a la Agricultura”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 7, 1 de julio de 1870, págs. 104 y 107.

⁹⁷ Guzmán, José, “Crisis Agrícola de Castilla”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 23, 15 de marzo de 1870, pág. 393.

Junto a los esfuerzos y logros manifestados por los propietarios y agricultores en las distintas Asambleas, los únicos ejemplos de independencia asociativa citados eran el *Instituto Agrícola Catalán* en Barcelona, además de la propia *Asociación Agrícola para la Iniciativa Privada* en Valladolid. Aunque obviando a otras instituciones que en aquellos momentos mantenían objetivos comunes, en la Memoria presentada a comienzos del otoño de 1870, ambas entidades aparecían como los únicos modelos que debían de emularse, tanto en el ámbito doméstico como en el horizonte nacional. Un escaso bagaje que, sin embargo, era llevado a los «altares» del asociacionismo sin reparar en el ánimo y trabajo realizado por otras instituciones anteriores.

Cataluña con su Instituto Agrícola, Valladolid con su Asociación, han demostrado al mundo lo mucho que debe esperarse de la agricultura pátria, cuando como al presente, responde á las escitaciones de la ciencia, y se coloca en el terreno de los hechos prácticos, con fé, con autonomía, con desinterés, con entusiasmo, constituyendo una sola familia emancipada de la tutela oficial, y obrando dentro del círculo de sus propias é imprescriptibles atribuciones⁹⁸.

La maniobra entusiasta vivida por la Asamblea de 1870 se entiende mejor al comprobar algunos hechos que tendrían lugar poco tiempo después. Es evidente que desde la *Asociación* se venía teniendo constancia del limitado éxito que hasta esos momentos habían logrado las tesis sobre la indisoluble relación entre la propiedad y la productividad agrícolas en la región. De ahí que el corolario a toda la secuencia de arengas y exaltaciones realizadas en año y medio, mostrara la frustración de una parte destacada de quienes todavía formaban la *alma mater* de la *Iniciativa Privada*. Un ejemplo de lo que acabamos de exponer fue la significativa amonestación hecha desde la propia redacción de la *Revista* en noviembre de 1870. Del análisis sucinto de las palabras publicadas se evidencia sobre quienes recaía la responsabilidad del posible «revés» recibido.

Los agricultores que por sí elaboran los terrenos ya en propiedad ya en colonia, no han hecho nada para salir del ostracismo en que se hallan sumidos, prontos á sostener enemigos entre sí, no han comprendido que la union constituye la fuerza, y que en tiempo de gobiernos representativos

⁹⁸ Memoria leída por la Junta Directiva de la Asociación agrícola por la iniciativa privada, en la Asamblea general de 26 de setiembre de 1870, pág. 3.

tienen medios legales de hacerse oír en los centros gubernamentales por la voz de sus representantes, y en los ámbitos del mundo civilizado por la boca de mil lenguas. La imprenta libre, comprenda que un pequeño grupo aislado, poco puede emprender. Que se cuenten y verán que son los mas, y si se asocian bajo el lema moral de recompensa para el productor, para el obediente á la ley y para el pacífico, nadie les podrá negar el triunfo porque será el de todo el pais, será la fuera viva radical, y la honra inmaculada de la nacion⁹⁹.

Tampoco el Gobierno era objeto de adulaciones al considerar la *Asociación* que desde aquél solo se atendía a la población rural en casos de reclutamiento y por las sumas con las que estaba obligado a contribuir al Tesoro¹⁰⁰. En este último aspecto, un sector destacado de diputados castellanos, en conformidad con miembros de la *Iniciativa Privada*, habían logrado una moratoria en las contribuciones y rentas anteriores al ejercicio 1869-1870 que no tardó en ser «pregonado» desde las páginas de la *Revista*¹⁰¹. Ciertamente es también que hasta los primeros meses de 1871, nuevos comités se habían inscrito como parte activa, destacando los de Frechilla y Cisneros en Palencia, y el de Olmedo en Valladolid¹⁰².

El balance, en todo caso, antes de emprender el camino de la crisis y de la desaparición, hemos de interpretarlo positivo, en tanto fue capaz de formular un llamamiento efectivo hacia la regeneración agrícola y llegar con su mensaje a todas las provincias de Castilla la Vieja y León. En poco menos de dos años, la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* ya había conseguido ser conocida en distintos foros agrarios, tan alejados entre sí como Andalucía, Extremadura o Cataluña. Con ello, una buena dosis del carácter y de la voluntad, propios de la agricultura cerealista castellana, iban a entrar de lleno en las Cortes Constituyentes de 1869, manteniéndose apenas inalterable durante las décadas posteriores. Su influencia y resultados, lejos de pensar en claves de fracaso, supuso la culminación

⁹⁹ *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 16, 15 de noviembre de 1870, pág. 234.

¹⁰⁰ "Porvenir de la agricultura", en *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 17, 1 de diciembre de 1870, pág. 252.

¹⁰¹ La Ley de 1 de enero de 1871 que modificaba los términos expresados en la Deuda flotante del Tesoro, en su artículo 3º autorizaba al Ministro de Hacienda a conceder moratorias o «quitas» a aquellos deudores que pudieran justificar su precaria situación. *Gaceta de Madrid*, número 1, 1 de enero de 1871, y *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 20, 15 de enero de 1871, pág. 296.

¹⁰² *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 23, 15 de marzo de 1870, pág. 396; Tomo II, nº 11, 1 de septiembre de 1870, págs. 178 a 179, y Tomo II, nº 22, 15 de febrero de 1871, pág. 331.

hasta esos momentos de la visión tantos años sustentada en Castilla por las cuestiones rurales.

Con la élite agraria reunida en Valladolid se había iniciado lo que en otras regiones era ya un hecho tangible. La búsqueda de medios para reivindicar una política proteccionista en el cereal, la defensa de la industria harinera, la inclusión de nuevos cultivos como la vid, el progresivo acceso a las nuevas tecnologías agronómicas, o la mejora general de las condiciones de los propietarios y agricultores, serían las señas de identidad sostenidas hasta los años de la *Liga Agraria* de Gamazo, y que se verían reforzadas en el camino por otras asociaciones como el *Círculo Agrícola Salmantino*. Ahora bien, las dificultades económicas, así como la falta de aptitud para asumir la variabilidad de opiniones entre los diferentes grupos de socios, precipitarían la división y posterior desaparición de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, dejando ocasionalmente estancado el papel activo que la misma había ejercido en los procesos de transformación del sector agrario castellano.

• Ocaso y decepción. De la inestabilidad económica a la participación política

La presencia de José Puig Llagostera en el *Ateneo Mercantil* de Valladolid, en los primeros días del mes de abril de 1870, alteró sustancialmente la vida y la actividad de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, iniciándose una entrecortada etapa de conflictos inesperados. Puig, miembro a «regañadientes» del *Fomento de la Producción* en Barcelona y destacado militante contra el librecurso, había acudido a la capital castellana con el fin de animar a propietarios e industriales a constituir una delegación del *Círculo del País Productor Independiente*¹⁰³. El resultado fue la creación de una comisión gestora a la que finalmente se

¹⁰³ El primer número de la Revista del *Círculo* aparecería con el mismo nombre el sábado 21 de mayo de 1870, estando al frente de su Redacción Gregorio Martínez y siendo el deseo de sus socios que saliera a la venta quincenalmente. Sin embargo, el segundo número vería la luz el 14 de junio de ese mismo año. En este sentido, Eduardo Ruiz Merino había puesto en marcha una comisión gestora para constituir un círculo local que agrupara a las clases contribuyentes con el fin de poder hacer frente así a la crisis en el sector agrícola. Véase Almuiña Fernández, Celso (1977), ob. cit., Tomo II, págs. 112 y 113.

incorporaron comerciantes, algunos industriales y el consejero de la *Asociación Agrícola*, Tiburcio Cocho¹⁰⁴.

La respuesta dada por los labradores a Llagosteras no pudo estar mejor encauzada al organizarse formalmente el *Círculo* y presidirlo el conocido propietario Miguel Herrero López, lográndose una adhesión de 500 socios. Su número puede parecernos elevado, a pesar de la buena aceptación cosechada en otros pueblos de la provincia, por todo lo que se precisaba para pertenecer a la nueva Sociedad. Entre las condiciones exigidas en las Bases para ser miembro del *Círculo* vallisoletano, además de contribuyente, se especificaba la necesidad de: “No ser hombre importante, ó eminencia de ningún partido político. Los considerados solamente como gefes de partido en la localidad, podrán también á juicio de la Junta calificadora pertenecer al *Círculo* pero no a la Junta”. A las mismas se añadía el compromiso formal, bajo juramento y firma, de no aceptar empleo, destino o cargo público retribuido, condecoraciones, etc., circunstancia que condicionaba la pertenencia a dicha agrupación¹⁰⁵.

El grupo de iniciadores de la *Asociación Agrícola* más próximo a Francisco Cabeza de Vaca, junto a destacados miembros de la Diputación vallisoletana no tardaron en mostrar su desconfianza ante los propósitos de Puig y Llagostera, sobre todo una vez demostrado su sectarismo y la intención de formar un nuevo partido con el que dar la batalla en Madrid. En efecto, previa a la celebración de una Asamblea en Valladolid que pudiera validar la intención de formar el Partido Económico que Puig preconizaba, Manuel Ceinos, desde la *Revista*, criticó abiertamente la actitud del industrial catalán y advirtiendo que las Bases de *Círculo* no podían ser aceptadas por la *Asociación Agrícola*, en tanto aquéllas permanecieran siendo excluyentes.

Abrigo sin embargo el convencimiento que los Sres. que constituyen la junta directiva del *Círculo*, conocedor de sus buenos deseos en pró de nuestros intereses, irán modificando las bases establecidas por el Sr. Puig para ser sócio del *Círculo* del País, y que despojando á este de todo ensañamiento

¹⁰⁴ Aunque miembro del Fomento de Barcelona, Puig y Llagostera terminó enfrentándose a dicha institución, comenzando de esta forma su particular peregrinación y poniendo en marcha en distintas ciudades, algunas dependencias del *Círculo del País Productor Independiente*. Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 62.

¹⁰⁵ *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 6, 15 de junio de 1870, págs. 82 y 83.

personal de una clase determinada, colocarán al Círculo en condiciones que el país reclama, sin ser tal vez instrumento de aspiraciones particulares. Cuando esto suceda y solo en este caso, la Asociación Agrícola formará parte del Círculo, presentándole todo el apoyo que sus fuerzas le permitan, porque su objeto será idéntico al de esta¹⁰⁶.

Las misivas y avisos promovidos desde la *Iniciativa Privada* se unieron a las reticencias de algunos miembros de los *Círculos* de Valladolid y Palencia, hecho que provocó el acelerado desvanecimiento del proyecto de Puig y la desaparición del colectivo que éste había «colocado» en la capital vallisoletana. Ya sin *Círculo*, los problemas en la *Asociación Agrícola* parecieron despertar, al saberse que algunos de sus miembros más destacados habían apoyado y pertenecido, tanto a la Comisión Gestora como a la Junta Directiva del *País Productor Independiente* de Valladolid. Nombres como los de Tiburcio Cocho, Teodosio Lecanda o Aureliano García Barrasa, formaban parte del grupo de socios que hubiera visto con buenos ojos una defensa más beligerante de los intereses de los propietarios castellanos¹⁰⁷.

El objetivo de la Asamblea del 24 de junio había sido precisamente la creación de un partido desde el que se pudieran retratar los auténticos intereses de los contribuyentes en Castilla. Una circunstancia que era bien vista por muchos labradores, decepcionados por aquellos partidos políticos tradicionales que habían contribuido a los hechos de septiembre de 1868 y a su posterior apuntalamiento en 1869. La demagogia empleada por Puig Llagostera era evidente al querer erigir un partido que recabara el descontento originado por la gestión del Gobierno, exigiendo, por otra parte, la inmaculada pertenencia a partido alguno en sus Bases. Este comportamiento realmente difería muy poco del que mantenía la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*. Si bien es verdad que en sus planteamientos formales había mostrado su rechazo a un intervencionismo político, no cabe duda que la práctica exigía la capacidad de todos sus simpatizantes y allegados a intervenir en cualquier foro político, actuando como un verdadero grupo de presión. Situación que conviene no olvidar y que venía produciéndose por parte de los propietarios y agricultores desde 1820. Esta ambigüedad se hizo todavía más evidente con la decisión, por

¹⁰⁶ *Ibidem*, pág. 85.

¹⁰⁷ Las apreciaciones sobre el tema en Serrano García, Rafael (1997), *ob. cit.*, pág. 66.

parte del comité de Alcazarén, de no sufragar con sus votos a diputados provinciales que no se caracterizaran por su condición de agricultores¹⁰⁸.

Las elecciones celebradas los primeros días de febrero de 1871 arrojaron unos buenos resultados para la *Iniciativa Privada*, a tenor de lo publicado en la *Revista*. Nueve de sus miembros accedieron a la corporación provincial, destacando la figura de Cayetano Guzmán por ser el autor de la proposición de ley que solicitaba la dispensa tributaria entre 1868 y 1870¹⁰⁹. El propio Guzmán, desde el comité de Cisneros, junto a Núñez de Velasco, diputado del distrito de Carrión de los Condes, fueron los mayores acaparadores de las felicitaciones por sus gestiones realizadas en las Cortes, especialmente por la reducción lograda en el pago de las contribuciones¹¹⁰.

La actividad desde los comités no pasó desapercibida. A los primeros, creados inmediatamente después de haberse constituido la *Asociación*, siguieron agregándose otros como los de Logroño, Iscar y Olmedo, este último como ya advertimos, creado seguramente a comienzos de 1871, además de los de Matapozuelos, Zamora y Fuentes de Nava¹¹¹. En algunos casos, como así sucedería con el comité de Mojados, en la provincia de Valladolid, se crearon primero asociaciones autónomas que más tarde se incorporaban a la estructura asociativa de la *Iniciativa Privada*. En todo caso, desde Valladolid nunca se cuestionaron las particularidades establecidas para cada comité. Así, Mojados llegó a disponer un número próximo a los cuarenta socios, entre los que había cuatro mujeres, amén de un jurado que organizado para sortear los posibles conflictos y desacuerdos entre los socios, generalmente surgidos como consecuencia de linderos y cotos deficientemente delimitados¹¹². En consecuencia, en septiembre de

¹⁰⁸ Ibidem, págs. 66 y 67. Además en *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, n° 15, 1 de noviembre de 1870, pág. 230, y Tomo II, n° 16, 15 de noviembre de 1870, pág. 236.

¹⁰⁹ El listado de los miembros de la *Asociación Agrícola* se encuentra en *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, n° 23, 1 de marzo de 1871, pág. 342. Al respecto de la actuación de Cayetano Guzmán, véase *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, n° 11, 1 de noviembre de 1871, págs. 142 a 144.

¹¹⁰ Finalmente la rebaja supuso un 40 por ciento de la contribución correspondiente a 1868, a lo que se agregaría un fraccionamiento del 60 por ciento en años sucesivos. Resultado moderado que, sin embargo, no tardó en presentarse como una conquista más de la capacidad mostrada por los propietarios castellanos a través de sus «representantes» en Madrid. *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, n° 11, 1 de noviembre de 1871, pág. 143.

¹¹¹ *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, n° 20, 16 de enero de 1872, pág. 243; Tomo III, n° 4, 16 de mayo de 1871, págs. 43 y 44, y Tomo IV, n° 12, 16 de septiembre de 1872, págs. 155 y 156. Además, en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 75.

¹¹² Véase el "Comité agrícola de Mojados", en *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, n° 15, 1 de noviembre de 1871, págs. 174 a 176.

1871, momento en el que la *Asociación* estaba a punto de convocar su Asamblea General, los nueve comités habían alcanzado un número cercano a los 600 socios. Cifra que, a la postre, apenas ya sí se superaría¹¹³.

Coincidiendo con la fase de mayor auge de la *Asociación*, y el nuevo esquema directivo aprobado aquel mismo año de 1871, las relaciones con Madrid se tornaron más cercanas, probablemente como consecuencia del trabajo realizado desde la cartera de Fomento por Ruiz Zorrilla y de la Dirección de Agricultura por Sabino Herrero. Dicha afirmación se deduce de la Memoria presentada a finales del mes de septiembre, en la que Juan García de Ortega expresaba su satisfacción por haberse alcanzado el cometido propuesto “haciendo oír nuestra voz en las regiones oficiales en la cuestión de presupuestos generales del Estado, que tan hondamente afectaban a la agricultura”¹¹⁴. El éxito no era sino el resultado de la Exposición remitida a las Cortes en junio de ese año, documento que había sido elaborado por el Centro Provincial de Contribuyentes, y de la que formaban parte Manuel Ceinos, Aureliano García Barrasa y Miguel Alonso Pesquera¹¹⁵. Las buenas relaciones por las que atravesaban la *Iniciativa Privada* y la Administración en materia agraria, supuso, por ejemplo, que pudieran presentarse propuestas dirigidas a canalizar la enseñanza a través de escuelas regionales. Este, sin embargo, no sería el logro más destacado de la *Asociación Agrícola*, ya que, como después veremos y en unión con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, se consiguió de las Cortes el compromiso de gravar a los cereales y harinas procedentes de países extranjeros, además de insistir en la reducción de las tarifas ferroviarias.

¹¹³ *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 10, 16 de agosto de 1871, pág. 127. En un número posterior de la *Revista* se citan 12 comités, sin conocer exactamente la localización de los últimos. *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 22, 16 de febrero de 1872, pág. 271. Asimismo, y en referencia a una localidad de la provincia de Palencia, hemos comprobado en *El Imparcial* la siguiente indicación: “En Ampudia se va á constituir un comité local agrícola afecto á la Asociacion de Valladolid. Con aquel son 12 las secciones con que este cuenta”, *El Imparcial*, número 1.696, martes, 6 de febrero de 1872, pág. 3. Sin embargo, a comienzos del año 1873, era su Presidente, Francisco Cabeza de Vaca, quien mencionaba solamente ocho comités. En cualquier caso, sirvan como ejemplo las cifras ya expuestas con anterioridad de 152 socios que, por ejemplo, en 1850 contaba la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*. Rafael Serrano García, en relación al *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* aporta el dato de 2.032 asociados y 30 subdelegaciones en 1858. Información que contrasta con lo aportado por Joaquim Camps i Arboix y Jordi Planas, ambos citados en esta investigación, al dejar dichas cifras en algo más de 700 socios y 40 subdelegaciones en 1861.

¹¹⁴ *Memoria presentada por la Junta Directiva de la Asociacion agrícola por la iniciativa privada en la Asamblea general de 27 de setiembre de 1871*, pág. 5

¹¹⁵ *Ibidem*, pág. 6. También en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 85.

A pesar de los resultados alcanzados durante los dos ejercicios correspondientes a los años 1870 y 1871, quizás uno de los aspectos que más influyó negativamente en su parca trayectoria fue la mala gestión de las cuentas, circunstancia esta última que terminaría precipitando a la *Asociación Agrícola* hacia un auténtico abismo económico. Desde 1869, fecha en la que se habían fijado las cuotas para la *Sociedad*, no fueron pocos quienes promovieron una revisión para restablecer el equilibrio de las cuentas, en previsión de que éstas no llegasen a financiar los proyectos tan significativos que debía emprender¹¹⁶. Las cuotas finalmente aprobadas fueron de 20 reales al año, siendo esta cantidad de 60 reales a quienes se suscribían a la *Revista* de la *Asociación*. Incluso hubo quienes se opusieron a cualquier tipo de contribución económica, lo que da una idea del grupo tan heterogéneo que existía en el núcleo fundador de la organización¹¹⁷. La cantidad fijada fue considerada insuficiente por un sector importante de socios, claro que no faltaron quienes vieron en la medida la oportunidad de atraer a agricultores con menos medios de los esperados¹¹⁸.

A finales de 1869 sabemos que el número de suscriptores a la *Revista* estaba muy próximo a los 500. Era precisamente la publicación el mayor gasto de la *Asociación*, además de ser el principal medio para conseguir ingresos. Sin embargo, ya desde su inicio la falta de pago de las cuotas se convirtió en un problema, lo que motivó la necesidad de reclamar las cantidades impagadas a través de la propia publicación. Éstas comenzaron a insertarse en los primeros números editados a partir del mes de mayo de 1870. Advertencias que se hacían al comienzo de cada número y llegaban a ocupar una página completa¹¹⁹.

¹¹⁶ En relación a este asunto, Francisco Cabeza de Vaca escribiría: “Si mucho hubieran fijado, mucho debían esperar, si poco, poco, y si nada lo que es consiguiente. Quiere decir que lo que se podría hacer en 4 años se hará en 8, porque el capital tiene que ser sustituido por el tiempo”. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 12, 16 de septiembre de 1869, pág. 217.

¹¹⁷ *Ibidem*.

¹¹⁸ La opinión fue planteada igualmente por el Presidente Cabeza de Vaca, quien volvería a decir al respecto lo siguiente: “trabajad con fé en la propaganda, abonar esa pequeña cuota, y no retrocedáis hasta conseguir no quede ni un labrador castellano, que no se os una”. *Ibidem*, págs. 223 y 224.

¹¹⁹ En efecto, la falta de pagos supuso una considerable preocupación expresada en las líneas de la *Revista*: “y es que de mas de 500 asociados que se nos han adherido, haya muchísimos, que ya por sus ocupaciones naturales del verano y otoño, ó ya por distracion involuntaria no hayan aun abonado el importe de los dos trimestres que han pasado desde que se inició la Asociacion”. *Ibidem*, pág. 219. Las llamadas de atención a quienes todavía debían cuotas se realizaban bajo un amplio titular de “Advertencia Importante”. Véase, por ejemplo, *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 3, 1 de junio de 1870, pág. 32, y sucesivos.

La negación casi permanente de acudir a subvenciones oficiales supuso un escollo insalvable, sobre todo a la hora de sufragar los desembolsos producidos por los proyectos que estaban referidos a exposiciones y certámenes agrícolas, premios, asambleas, etc. La situación llegó a ser apremiante en 1870. De la Memoria publicada a finales de 1870 sabemos que existía un activo total de 6.307,79 pesetas. Del mismo, algo más de 4.400 correspondía a la deuda, consecuencia de las suscripciones vencidas. Con un pasivo de apenas 1.200 pesetas, la realidad era que el capital de la *Asociación* se reducía a poco más de 5.000 pesetas¹²⁰. Con ello, fue necesario recabar en nombre la Junta la necesaria asistencia a las reuniones y exposiciones convocadas por la *Iniciativa Agrícola* con el fin de saldar las deudas. El enfado de García de Ortega, expresado en las páginas de la *Revista*, evidenciaba el distanciamiento de una buena parte de los socios y, lo que todavía era peor, la fractura en la ligazón de éstos con la entidad agrícola. Fragmentación que en 1871 podía corroborarse al constatar que los deudores apenas habían disminuido¹²¹.

En febrero de 1871 se publicó que la *Revista* mantenía todavía a 348 labradores suscriptores, algo que también evidenciaba la difusión que había alcanzado en el mundo agrario castellano¹²². Probablemente por esta misma circunstancia, la divulgación de las ideas sobre la identidad de la propiedad en Castilla, suponemos que la Junta no actuó desde el inicio de las actividades contra la demora en los pagos, sabedora de que un número importante de sus miembros lo era solo representativamente. La falta de pagos, así como la privación del número total de socios, vinieron a dar la razón a Cabeza de Vaca, al observarse un balance de actividades menor del deseado¹²³.

Los llamamientos hechos para la ocasión, por parte de García de Ortega, sugerían unas expectativas realmente complejas y difíciles, llegando incluso a poner en cuestión la propia supervivencia de la *Asociación*¹²⁴. Ello no alteró la actitud de quienes se sentían alejados de las responsabilidades contraídas con el resto de la corporación, lo que obligó a buscar alternativas

¹²⁰ Datos de los cuadros insertados al final de la *Memoria...* correspondiente al año 1870.

¹²¹ Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 91.

¹²² *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 21, 1 de febrero de 1871, pág. 305.

¹²³ *Memoria presentada por la Junta Directiva... de 1871*, págs. 5 a 7.

¹²⁴ En la propia *Memoria* presentada el año 1871 se advertía de la posible «muerte» de la *Asociación* como consecuencia de la indiferencia, la inmovilidad, así como por la falta de «elementos». *Ibidem*, pág. 9.

con las que poder costear los proyectos que se suponían necesarios para su continuidad. Entre estos últimos estaban una granja-escuela, el Museo agrícola y, lógicamente, la continuidad de la publicación de la *Revista agrícola*. Para afrontar la situación se constituyó una comisión con la finalidad de negociar, tanto con el Ayuntamiento como con la Diputación, una posible subvención que permitiera seguir adelante con los trabajos¹²⁵.

La falta de liquidez impedía asegurar la continuidad de la *Revista*, cuya elaboración y publicación suponían el mayor gasto en la Asociación. Aquella pudo sostenerse gracias a la transigencia de su presidente, Francisco Cabeza de Vaca, para que pasara a ser el órgano oficial de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio a partir de febrero de 1872, circunstancia que prolongaría la publicación hasta su desaparición definitiva el 1 de abril de 1874¹²⁶. Con todo, las demoras en el pago de los suscriptores provocaron que durante los meses sucesivos se publicaran las listas de insolventes y bajas en la Asociación¹²⁷.

Con el cambio de formato y calidades de los artículos publicados, muchos fueron los que comenzaron a interesarse por otro tipo de prensa que mostraba una mayor consonancia con la realidad política y económica del momento. No hay que olvidar que en Valladolid se editaban diarios tan influyentes como *El Norte de Castilla* y la *Crónica Mercantil*, un hecho que, como apuntara en su día Serrano García, posibilitaba a propietarios y agricultores la realidad y el conocimiento de otros mercados, además de un importante número de noticias que directamente aludían al sector agrario. El último intento por salvar la publicación se debió a la iniciativa de la propia imprenta, Hijos de Rodríguez, para lo cual proyectaron añadir litografías, folletos de maquinaria, una cubierta a color, etc., pretendiendo hacer que sus ediciones fueran semanales. Todos los esfuerzos, empero, no evitaron que su impresión finalizara como consecuencia de la falta de recursos y la obstinada morosidad en el pago de las cuotas de los socios¹²⁸.

¹²⁵ *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 19, 1 de enero de 1872, págs. 229 y 230.

¹²⁶ *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 22, 16 de febrero de 1872, pág. 272. Con la nueva situación, la *Revista* pasaría a denominarse, prácticamente ya en sus últimos números, *La Asociación Agrícola, órgano oficial de los trabajos de la misma así como de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de esta provincia, bajo la dirección de don Francisco Cabeza de Vaca, su fundador*.

¹²⁷ Sobre todo en el Tomo IV, donde eran publicados los nombres junto a las cantidades adeudadas.

¹²⁸ *La Asociación Agrícola...*, Tomo V, nº 1, 1 de abril de 1873, págs. 1 y 2. Asimismo, en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 96 y 97.

Con el protagonismo asumido por parte de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio, las noticias de la *Asociación Agrícola* pasaron a estar en un segundo plano, al menos en lo que se refiere a los dos últimos años de actividades. En la Asamblea celebrada en septiembre de 1871 se eligió un comité central formado por quince personas a las que se integraron las ocho de la Dirección General. Esta reestructuración implicó una reducción sensible en el número de cargos, situación algo anormal, que eludía los acuerdos y estatutos de la propia *Asociación*¹²⁹. A la nueva estructura organizativa se incorporaban, propuestas por el Presidente, personas directamente relacionadas con la política y pertenecientes al círculo más «exclusivo» de la sociedad vallisoletana. Además del responsable local de la Compañía que gestionaba el Canal de Castilla, Diego Fernández Segura, formaban parte del nuevo organigrama personas como el senador Miguel Herrero López, Camilo San Román y Cándido González, todos ellos incluidos entre los mayores contribuyentes de la provincia, además de Aureliano García Barrasa que en esos instantes dirigía *La Crónica Mercantil*. La evidente politización de la *Asociación* se había hecho más evidente al incluir en su cúpula directiva a antiguos miembros del partido moderado como Mariano L. de Reinoso y José Moyano Sánchez, o diputados provinciales como Laureano Álvarez y Miguel Alonso Pesquera¹³⁰.

El cambio de estrategia ya había sido previsto por Cabeza de Vaca, en cuyas nuevas propuestas pretendía dar cabida a importantes hacendados y personas bien relacionadas políticamente, con el objetivo puesto en revitalizar la institución que él mismo presidía¹³¹. Era evidente que de esa forma se reforzaban las tesis, siempre activas, de trigueros y harineros, aumentando las iniciativas, tanto como las influencias en los ambientes oficiales y administrativos contra las diatribas del librecambio. Además, la ligazón con la Junta de Agricultura facilitó el acceso de algunos miembros de la *Iniciativa Agrícola* a puestos de responsabilidad en la Comisión Provincial, una situación similar a la que se produciría en la Diputación. No es preciso decir que se realizaron propuestas para que pudieran crearse juntas auxiliares, granjas-escuelas y se incrementara el número de concursos y

¹²⁹ Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 98.

¹³⁰ *Ibidem*, pág. 99.

¹³¹ *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 22, 16 de febrero de 1872, pág. 274.

exposiciones, siempre en consonancia con la nueva situación que implicaba una declarada dependencia del auxilio «oficial»¹³².

Junto al apoyo de la Junta Provincial y de la Diputación vallisoletanas, se pensó en solicitar al rey, Amadeo de Saboya, su compromiso y patrocinio para mantener los proyectos de la *Asociación*, solicitando, además, su presencia en el certamen de maquinaria agrícola que debía tener lugar durante el verano de 1872¹³³. El hecho en sí no tuvo resultados concretos, ya fuera por la propia negativa del monarca o por la inmediata renuncia a su mandato regio, producida en febrero de 1873, lo que no impidió que todavía persistieran algunos proyectos.

El éxito de la Exposición que había tenido lugar en 1871 condujo a los asociados a solicitar la continuidad de este tipo de eventos, además de la realización de una granja-escuela, junto a un casino agrícola y mercantil. Todavía en 1873 y con la ayuda económica del Cuerpo de Caballería, se planteó la celebración de un certamen para fomentar la cría caballar¹³⁴. Se hicieron, además, todo tipo de gestiones y esfuerzos por establecer en Valladolid un Banco agrícola dependiente de la *Compañía Continental*, una empresa londinense que estaba dispuesta a financiar parte del proyecto en la capital castellana¹³⁵.

A todo lo anterior se sumó la pretensión de erigir centros dispuestos a ser utilizados para la formación y capacitación agraria, además de once escuelas regionales pensadas en la formación de peritos agrícolas, establecimientos que estarían financiados por las Diputaciones y por el

¹³² *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 23, 1 de marzo de 1872, págs. 285 y 286, y nº 24, 16 de marzo de 1872, pág. 297. Rafael Serrano García hace un análisis en este sentido, manifestando la intención de algunos socios, como así sucedió con Jacinto Cabeza de Vaca, de delegar parte de las funciones y tareas de la *Asociación Agrícola* a centros oficiales de la Administración, lo que no dejaba de ser un reconocimiento del fracaso de aquella en detrimento de la Junta Provincial. Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 103 y 104.

¹³³ AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 12, expediente 19 referido a “Valladolid. La Asociación Agrícola solicita la protección de S.M. el Rey anunciando el acuerdo de celebrar su cuarto certamen sobre maquinaria agrícola”, año 1872. También en “Preparativos para el mes de setiembre”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo IV, nº 10, 15 de agosto de 1872, págs. 127 y 128.

¹³⁴ *La Asociación Agrícola...*, Tomo IV, nº 22, 16 de febrero de 1873, pág. 297.

¹³⁵ *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 19, 1 de enero de 1872, pág. 229. La pista del Banco agrícola se pierde, conservándose algunas de sus últimas noticias en el nº 22, correspondiente al día 16 de febrero de 1872, págs. 277 y 278. Se desconoce, no obstante, a quién hubiera correspondido la verdadera gestión del mismo, si a la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* o a la británica *Compañía Continental*.

Gobierno de Madrid. Sin embargo, este último proyecto, ideado por Sabino Herrero, no tendría desarrollo legal hasta 1876, circunstancia que se unió a la imposibilidad de ver consumado el deseo de apertura de una granja-escuela en Valladolid¹³⁶.

De la trayectoria última de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* hay que destacar el quehacer desempeñado ante la Junta de revisión de aranceles en los primeros meses de 1872. El intento de los grandes propietarios de Castilla y de la burguesía harinera por ganarse un puesto influente en los centros administrativos y de decisión de Madrid, no tardó en movilizar a una gran parte de la *Asociación Agrícola*, esta vez en conformidad con la patronal catalana representada por el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*¹³⁷. El organigrama surgido de la Asamblea celebrada en septiembre de 1871 ya había reforzado la posición de trigueros y harineros dentro de la *Iniciativa Privada* a pesar del oficio recibido desde la institución catalana, en marzo de 1872, en el que exhortaba a la asociación castellana a ejercer una mayor conminación ante la Junta que debía revisar los aranceles¹³⁸.

Una vez más, la simbiosis entre enjundiosos terratenientes y destacados dirigentes políticos se encaminaba a racionalizar esfuerzos e intereses por partes iguales, en una forma de articular participación y beneficio. La ajustada correspondencia de las élites en las Cortes no pretendía sino, una vez más, mejorar las gestiones que la Junta de Agricultura vallisoletana tenía respecto a granos y harinas. Prueba de ello fueron las gestiones llevadas a cabo con Juan Francisco Camacho de Alcorta, ministro de Hacienda entre febrero y mayo de 1872, y la presentación ante la Junta de revisión de aranceles, en abril de aquel mismo

¹³⁶ Ninguno de los deseos en materia de enseñanza agrícola pudieron ser puestos en marcha, excepción hecha de la aprobación para impartir un curso de agronomía general que se le comunicó al entonces Secretario de la Junta de Agricultura, Francisco Arranz. *La Asociación Agrícola...*, Tomo V, nº 4, 16 de mayo de 1873, págs. 43 a 48, nº 6, y 16 de junio de 1873, pág. 71. También en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 111.

¹³⁷ La consideración de burguesía «harinera», es decir, las clases contribuyentes de Castilla, como la unión entre grandes propietarios de tierras de cereal, harineros y comerciantes de grano y harinas, aparece ya, por ejemplo, en Almuíña, Celso (1977), ob. cit. Tomo I, pág. 339.

¹³⁸ Serrano García advierte que la sugerencia recibida desde el *Instituto Agrícola Catalán* no fuese la única razón por la que la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada* iniciara su acercamiento a la Junta de revisión de los aranceles. En nuestra opinión, dicha afirmación parece adquirir todo su sentido, merced a la fecha del oficio, 1 de marzo de 1872, posterior al momento en el que tuvo lugar la Asamblea, celebrada en el mes de septiembre de 1871. Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., págs. 112 y 113.

año, de las reivindicaciones que la Comisión había preparado. De las solicitudes destacaba la prohibición de importar trigo a la Península mientras no se alcanzaran en los mercados del litoral un precio de 72 reales por fanega, además de la estabilización de los precios en la *Compañía del Norte* en cuanto al transporte de cereales y harinas¹³⁹.

Como resultado de las diligencias y presiones hubo de modificarse el derecho para el trigo que el Arancel de 1869 había establecido en 3 pesetas por cada 100 kilogramos. A este propósito, la ley de presupuestos de 1872 impuso sobre la importación de trigo y otros comestibles una tasa adicional de 1,50 pesetas por cada 100 kilogramos, acrecentando el derecho a 4,50 pesetas¹⁴⁰. Un logro escaso que, no obstante, fue considerado y presentado como parte del éxito reivindicativo de la *Asociación Agrícola*, a pesar de la debilidad mostrada en las gestiones con la Junta de Agricultura de Valladolid. Una fragilidad todavía acrecentada más por los inconvenientes planteados a la hora de utilizar la política en las demandas surgidas en el sector agrícola¹⁴¹. La falta de temperamento político, además de la aparición en la escena asociativa de entidades de ámbito geográfico más amplio, llevó muy pronto a la *Iniciativa Privada* a un declive de muy difícil solución. La falta de socios provocó la indecisión y la toma de acuerdos en firme a comienzos del año 1873, tal y como quedó evidenciado en la *Revista*, circunstancia que más tarde quedaría reflejada en un artículo del publicista agrario Braulio Mañueco en *El Norte de Castilla*.

Sea que la Junta directiva y los colaboradores se cansaron de trabajar gratis, sea que el derecho de escribir á todos los asociados produjera por resultado la falta de unidad; la difusa repeticion de unas mismas doctrinas en el

¹³⁹ Ibídem, pág. 115, y *La Asociación Agrícola...*, Tomo IV, nº 3, 1 de mayo de 1872, págs. 29 a 32. En 1874 se volvió a insistir en todo lo relativo a las tarifas en el transporte por ferrocarril de granos. Al respecto véase, por ejemplo, *La Asociación Agrícola...*, Tomo V, nº 19, 16 de febrero de 1873, págs. 253 y 254.

¹⁴⁰ Muñoz, Juan; Roldán, Santiago, y Serrano, Ángel, “La involución nacionalista y la vertebración del capitalismo español”, en *Cuadernos económicos de I.C.E.*, número 5, año 1978, pág. 45.

¹⁴¹ A las peticiones de protección se sumaron también los arroceros valencianos y azucareros andaluces, además de la minería asturiana y la textil de Béjar. A pesar de las peticiones a las Cortes, los intentos fracasaron al considerar que los compromisos políticos de facción eran más importantes que los intereses económicos de los distritos afectados. En este sentido, véase Varela Ortega, José, “El proteccionismo de los trigueros castellanos y la naturaleza del Poder político en la Restauración”, en *Cuadernos económicos de I.C.E.*, número 6, año 1978, págs. 25 y 26. Recordemos, además, que en los Estatutos se establecía de modo expreso que: “se hará abstracción completa de toda disposición política”. *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 13, 16 de octubre de 1869, pág. 221.

periódico y el poco interés de otras; sea que los labradores se cansaran de palabras y les pareciese poco económico el dar tres duros por una publicación que no valía la mitad; sea por cualesquiera otras causas, lo cierto es que el último número del periódico, ya impreso, no pudo repartirse, según se me ha dicho, por falta de recursos para poner sellos¹⁴².

Las actividades de la *Asociación* debieron finalizar en 1874, permaneciendo algunos de sus socios en la Junta de Agricultura, como los Ceinos, Alonso Pesquera, Arranz, y el mismo Cabeza de Vaca, dando así más carácter a la propia Junta y fortaleciendo la asistencia a certámenes agrícolas y exposiciones a las que seguían acudiendo maquinaria y productos llegados desde distintos puntos de la región¹⁴³. A principios de 1875 un proyecto segoviano promovido por una sociedad de recreo, *La Unión*, propuso la creación de una *Asociación de Agricultura, Industria y Comercio por la Iniciativa Privada*, teniendo por presidente a Francisco Catáneo. La empresa, con muchas líneas comunes al esquema puesto en marcha unos años antes en Valladolid, decayó finalmente en beneficio de la *Sociedad Económica* de la ciudad¹⁴⁴.

A pesar de su agotamiento, la *Asociación Agrícola* vallisoletana había conseguido fijar toda la atención en las cuestiones materiales de la agricultura castellana, en un momento en el que la política, tras la Revolución de 1868, había adquirido un peso destacado en la sociedad española. Los intentos por liquidar las contradicciones entre la actividad política y las realidades del campo castellano se vertieron impulsando a los asociados a solicitar, desde las zonas rurales, la elección de personas de su propio ámbito que pudieran representarlos en las Cortes, tal y como había sucedido en Alcazarén. Esta actitud iniciada en Valladolid por la *Iniciativa Privada* culminaría a partir de 1880 con el llamado regeneracionismo castellano, materializándose con la *Liga Agraria*, en un intento por evidenciar las particularidades que podía ofrecer la política en beneficio de los intereses de las clases propietarias.

¹⁴² Las líneas corresponden a *El Norte de Castilla*, de la nota a pie de página número 193, en Serrano García, Rafael (1997), ob. cit., pág. 117.

¹⁴³ Entre los constructores de utillaje y maquinaria agrícola destacaban las trilladoras de Manso y Gante de Valladolid. Asimismo, fue destacada la gestión y administración de la Junta de Agricultura en la Exposición Vinícola Nacional celebrada en Madrid, en abril de 1877, a la que se presentó una muestra destacada de máquinas y útiles para la agricultura. *Estudio sobre la Exposición Vinícola Nacional de 1877*, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid, 1878, pág. 26.

¹⁴⁴ Calvo Caballero, María del Pilar (1999), ob. cit., pág. 60.

Equiparar la agricultura a la industria habría sido otro de los retos propuestos por los asociados de Valladolid, para lo cual no dudaron en destacar la importancia que debía adquirir la instrucción agrícola. A la propuesta se sumaron otras que sugerían el cultivo intensivo, anejo al exclusivismo cerealista, a lo que se opuso la falta de mercados, tal y como nos explicaba Cayetano Guzmán al escribir: “Los esfuerzos de la producción tienen necesidad y aun deben ceñirse á los límites que marca el consumo: en vano fuera ofrecer productos variados cuando falta el mercado, este es, como un medio absorbente beneficioso al productor, ó mejor dicho indispensable, porque cuando el mercado no demanda, en vano fuera pedir nuevos productos al impulso creador de la tierra, ó sea al capital como agrícola”¹⁴⁵. La falta considerable de recursos, además de la anunciada ausencia de mercados, se unió a la fragmentación de las propiedades puestas en cultivo que dieron como resultado campañas de mejora en la agricultura regional a través del fomento de los regadíos y los fertilizantes¹⁴⁶.

Con independencia de su anunciada desaparición, debe ponerse en consideración la labor «ilustrada», al tiempo que participativa de la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, entreviendo el conjunto de sus actividades, sin olvidar las dificultades añadidas luego de los movimientos políticos y sociales surgidos en 1868. A su favor habría que anotar la buena acogida por parte de labradores y colonos, además de los grandes propietarios rurales, al haber conseguido minorar el antagonismo tradicional proponiendo arrendamientos más largos que debían abonarse en metálico¹⁴⁷. Para entender todavía mejor su corolario, hemos de destacar, tanto el temperamento avanzado de sus propuestas como de sus «guiños» a la

¹⁴⁵ *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 18, 1 de enero de 1870, pág. 314.

¹⁴⁶ *La Asociación Agrícola...*, Tomo III, nº 7, 1 de julio de 1871, pág. 86. Incluso en la *Memoria* de 1869 ya se apuntaba la necesidad de realizar aprovechamientos de las aguas de los ríos castellanos en los meses de primavera. En un artículo escrito por Máximo de Perea no se podía ser más elocuente al explicar que: “Al hacer un cálculo análogo para el Esla, se ve que ha arrastrado hasta su desembocadura en el Duero, y sin regar tan poco una sola hectárea, la enorme cantidad de 410.862,816 metros cúbicos, con los que se hubiera podido dar un riego de metros cúbicos 0,3 de altura á 1,359,553 hectáreas”. A este respecto puede consultarse *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 14, 15 de octubre de 1870, pág. 208.

¹⁴⁷ Las relaciones entre pequeños, medianos y grandes propietarios de tierras, también fue una cuestión tratada desde los comienzos de la *Asociación*, lo que posibilitó, además de la lógica distensión, la ausencia de confrontaciones, permitiendo que haciendas en manos terceras pudieran ser trabajadas por los descendientes de éstos. “Colonos y propietarios”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 6, 16 de junio de 1869, págs. 99 y 100, *La Asociación Agrícola...*, Tomo I, nº 2, 16 de abril de 1869, págs. 32 y 33, y “Lamentos de agricultura”, en *La Asociación Agrícola...*, Tomo II, nº 2, 15 de abril de 1870, págs. 23 a 26.

política activa, lo que significó el esbozo de un regeneracionismo precipitado que no supo interpretarse adecuadamente.

Todo lo dicho hasta ahora explicaría, entre otras cosas, el núcleo de propuestas y planteamientos que, dirigidos a los labradores castellanos en general y a la gran propiedad en particular, no se agotó, a pesar de lo que pudiera pensarse, con la extinción de la asociación vallisoletana. Fueron los años del último cuarto de siglo un tiempo para conformar nuevas sociedades heterogéneas, con vínculos evidentes hacia el desarrollo agrario y su protección, destacando por su rápido proceso de perfeccionamiento y madurez entidades tan significativas en el mundo rural como los casinos agrícolas y de labradores o los círculos agrarios. Nuevas fórmulas asociativas que comenzaban a perfilarse junto a las recién instauradas Ligas de Contribuyentes y de Propietarios, permitiendo un más amplio campo de actuaciones y aprovechando las movilizaciones que ya habían comenzado a desplegarse en importantes sectores económicos dentro del país. No obstante, como preámbulo a la gran expansión del asociacionismo de fin de siglo, y como sucesor inmediato en todo el área castellano y leonés, el *Círculo Agrícola Salmantino*, cuya fundación tendría lugar en 1872, dirimiría su suerte transformándose diez años después en Liga de Contribuyentes, dando continuidad de esta forma al sentir iniciado por la *Iniciativa Privada* en la libre asociación de la gran propiedad territorial de la región.

- Necesidades y respuestas. El *Círculo Agrícola Salmantino* y su tránsito hacia la Liga de Contribuyentes

Meses antes de la agitación cantonalista y del levantamiento de barricadas en Salamanca se iba a producir la fundación, en 1872, del *Círculo Agrícola Salmantino*, coincidiendo igualmente con la inquietud manifestada por las burguesías frente a la crisis política y económica, y ante el temor de un recrudecimiento de las revueltas carlistas en España¹⁴⁸. Durante los primeros compases de los años setenta, además de la propia *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, solo algunas Sociedades Económicas mantenían activos algunos concursos y conferencias con el que poder

¹⁴⁸ Araujo, Fernando, *La Reina del Tormes. Guía histórico-descriptiva de la ciudad de Salamanca*, Imp. y lit. de Jacinto Hidalgo. Antes de Cerezo, Salamanca, 1884, pág. 195.

argumentar la continuidad de los trabajos iniciados por las Cátedras de Agricultura en Valladolid y Salamanca. Actividades que muy pronto se verían reforzadas por el interés de la *Revista de la Asociación Agrícola*, *El Norte de Castilla* y *La Crónica Mercantil*, principalmente.

Casi al mismo tiempo que surgía el *Círculo Agrícola* en Salamanca, iniciaban su andadura las Ligas de Contribuyentes y Propietarios con el propósito de atender los intereses de quienes eran, en opinión de las propias Ligas, los encargados de soportar el mayor peso productor del país. Bajo dicho ideario se aprobaron los Estatutos de la *Liga de Contribuyentes de Valladolid*, en diciembre de 1873, proceso que continuaría pocos años más tarde en otras ciudades de España y de Castilla, como Ávila, siempre con el apoyo del *Círculo* y tras las sugerencias llegadas desde la Liga de Cádiz, impulsora del movimiento «liguero»¹⁴⁹.

En la actualidad tenemos un conocimiento menor de los primeros años del *Círculo Agrícola*, si lo comparamos con el período correspondiente al final de su ciclo y antes de transformarse en Liga de Contribuyentes, lo que no significa que sus trabajos y actividades no fueran conocidos y divulgados en muchas otras regiones a través de periódicos y revistas. Así, en un Prospecto de junio de 1873, publicado en *El Arte*, se indicaba la reciente aparición del *Círculo*, obteniendo una gran trascendencia debido a su marcado interés en “la defensa y fomento de los intereses del agricultor y ganadero”¹⁵⁰. En el mismo sentido se expresaba el artículo 1º de sus Estatutos al considerar que: “El Circulo Agrícola es una reunion que tiene por objeto el conocimiento y reciproco auxilio de los asociados con el desarrollo á la vez de la industria agrícola y pecuaria de la provincia”¹⁵¹. No extraña, pues, que se viera una correlación muy significativa entre el *Círculo* y el nutrido contingente de Ligas instituidas en España, toda vez que aquél había surgido, en opinión del gobernador civil de Salamanca, con un carácter económico y administrativo, lo que convertían a la asociación

¹⁴⁹ La *Liga de Contribuyentes de Valladolid* se organizó en torno a su Presidente, Mariano Lino de Reynoso, siendo la de Ávila presidida en sus inicios por Ildefonso Bernaldo de Quirós. Véase de Calvo Caballero, María del Pilar (1999), ob. cit. págs. 64 y 65.

¹⁵⁰ “Prospecto”, *El Arte*, órgano especial de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, junio de 1873, pág. 1.

¹⁵¹ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 290, sábado 1 de marzo de 1879, pág. 651.

castellana en un instrumento más de carácter reivindicativo y político¹⁵². Una idea que, como después repasaremos, llevaba implícito el ideario de las Ligas de Contribuyentes a las que no tardaron en sumarse amplios sectores vinculados a la gran propiedad, así como de las clases más acomodadas, incluyendo a la industria y el comercio.

El nuevo colectivo agrícola no tardó mucho tiempo en alcanzar la centena de socios, lo que propició, como en otras ocasiones, que el propio *Círculo* comenzara a editar en los primeros meses de 1873 una revista de periodicidad semanal, bajo el mismo nombre y dirigida por Ciriaco Rodríguez Martín, actuando como órgano para la difusión de los pensamientos y actuaciones de la asociación agrícola¹⁵³. La importancia de la publicación se hizo evidente al comprobar que algunos de sus contenidos eran editados por otras revistas y periódicos en distintas ciudades y provincias españolas. De esta forma, encontramos ya en 1874 informaciones que hacían referencia a la elaboración, por parte del *Círculo Agrícola*, de unas bases referidas a la creación de un pósito o Banco Agrícola que se intentaba establecer en Salamanca¹⁵⁴. En aquellos primeros años de existencia de la asociación agrícola salmantina tuvieron lugar interesantes aportaciones, tanto a nivel experimental como de solicitud a las Administraciones, para potenciar las ayudas directas a través de seguros mutuos frente a plagas como la de la langosta o de la lagarta, el pedrisco, además de otros desastres naturales¹⁵⁵. Tareas que se mantuvieron hasta bien entrados los años setenta del siglo XIX, dando lugar incluso a la intervención del Gobierno¹⁵⁶.

¹⁵² AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 68, expediente 12 referido a “Cultivos. Vino. Sociedades vinícolas y Centros agronómicos”, años 1879 a 1892.

¹⁵³ Moreiro Prieto, Julián, *Julián Sánchez Ruano. Un personaje, una época (1840-1871)*, Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1897, pág. 150. Asimismo, en García García, Jesús María, *Prensa y vida cotidiana en Salamanca (siglo XIX). Aproximación a la historia del periodismo salmantino*, Acta Salmanticensia, Estudios Históricos y Geográficos, número 70, Universidad de Salamanca, año 1990, págs. 169 y 170. *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 292, sábado 15 de marzo de 1879, pág. 666.

¹⁵⁴ Son distintos los medios que se hacían eco de dicha información. Por ejemplo en *La Correspondencia de España*, número 6.020, martes 26 de mayo de 1874. También en *La Crónica Meridional*, número 4.260, sábado 30 de mayo de 1874. Sabemos que finalmente debió establecerse el citado pósito de granos, con destino exclusivo para los socios del *Círculo*, entre los últimos meses de 1875 y primeros de 1876. *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 292, sábado 15 de marzo de 1879, pág. 666.

¹⁵⁵ *El Porvenir*, número 49, 21 de junio de 1874, y *El Imparcial*, número 2.550, martes 26 de junio de 1874.

¹⁵⁶ En efecto, a finales de los años setenta y comienzos de la década de los ochenta del siglo XIX, la gravedad de algunas plagas como la de la lagarta *Lymantria dispar*, ocasionó que desde el *Círculo Agrícola* se trabajara con verdadero apremio para contener su propagación. Dicha celeridad dio lugar, dentro de la asociación, a la creación de una Subcomisión de

A vueltas con las manifestaciones que intentaban movilizar al colectivo agrario e industrial castellano, muy pronto se pusieron en marcha certámenes y exposiciones que, a través del *Círculo Agrícola Salmantino* y de su presidente, Jacinto Orellana, no tardaban en excitar el interés de autoridades, empresarios y propietarios de la región. Con este fin se dispuso la celebración en el mes de septiembre de 1874 de una gran Exposición agrícola, pecuaria e industrial en Salamanca, a la que no faltaron el gobernador civil de la provincia, distintos representantes de corporaciones agrícolas, así como miembros de la Administración regional, siendo destacada la presencia del Secretario de la *Revista del Círculo Agrícola*, Ciriaco Rodríguez Martín¹⁵⁷. Durante los días de celebración fueron muy bien acogidas las propuestas que se referían a la creación de un pósito o Banco agrícola, el establecimiento de seguros contra plagas y pedriscos, además del impulso de construcción de una granja-modelo con la que reanimar la enseñanza en la agricultura¹⁵⁸.

Formando parte de las movilizaciones ligueras en Castilla, el *Círculo Agrícola* no dudó en posicionarse, junto al *Círculo Productor de Palencia*, en la Asamblea de Ligas de Contribuyentes que habría de tener lugar en la ciudad de Córdoba a partir del 15 de abril de 1875. La noticia del evento fue ampliamente difundida por la prensa de todo el país, celebrándose sus sesiones en el gran salón del *Casino Industrial* de la ciudad cordobesa. A ella asistieron representantes, entre otros, de las Ligas de Contribuyentes de Zaragoza, Valladolid, Badajoz, Cartagena, Jaén, Córdoba, Cádiz, Málaga, Granada, Girona, Jerez, Algeciras, Puerto-Real, Puerto de Santa María,

ensayos para la extinción de la Lagarta, además de un considerable número de informes. En 1881, dicha plaga dio lugar a que el Gobierno aprobara un Real Decreto en el que se solicitaba a los ingenieros de montes de todas las provincias su estudio y formas de combatirla. Un año después, se creó la Comisión entomológica en Salamanca y Zamora. *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 282, sábado 4 de enero de 1879, págs. 591 a 593, y número 283, sábado 11 de enero de 1879, págs. 599 a 601. Véase también Azcárate Luxán, Isabel, *Plagas agrícolas y forestales en España (siglos XVIII y XIX)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1997, págs. 27 y 28, además de la *Revista de Montes*, número 1.103, 1 de enero de 1925, págs. 189 y 190.

¹⁵⁷ *El Porvenir*, número 59, 30 de agosto de 1874 y *El Escolar. Revista de Intereses Materiales de Salamanca*, número 1, jueves 10 de septiembre de 1874.

¹⁵⁸ *El Imparcial*, número 2.639, domingo, 20 de septiembre de 1874. También en *La Época*, número 8.009, domingo, 20 de septiembre de 1874. Los informes manteniendo la conveniencia de crear una granja-modelo en Salamanca todavía se prolongaron hasta bien entrada la década. Algunos ejemplos en *La Mañana*, número 269, lunes 8 de enero de 1877, y número 281, sábado 20 de enero de 1877. Sin embargo, y debido a la falta de interés mostrado por las autoridades oficiales, sería finalmente el *Círculo Agrícola*, con sus propios medios, el encargado de poner en marcha el proyecto. *El Imparcial*, número 3.672, miércoles 15 de agosto de 1877.

Jimena de Jaén, Velez-Málaga, además de otros delegados pertenecientes a centros como *El Fomento de la Producción Nacional* de Barcelona, de la Junta de Comerciantes e Industriales de Málaga, así como de la *Liga del Comercio y la Industria*, de la *Liga de Propietarios de Valencia*, sin olvidar al propio *Círculo Agrícola Salmantino*¹⁵⁹.

Era la primera vez que se movilizaba a un gran número de asociaciones sujetas a un fin económico con una estructura que distaba poco de ser una corporación a nivel «nacional», situación que provocó un fuerte impacto entre los propios concurrentes. Con dichas premisas no fue difícil llegar a acuerdos en lo relativo a proteccionismo, rebajas contributivas, etc., llegando incluso a lanzar peticiones en favor de la organización de partidos que a nivel estatal pudieran influir en las decisiones económicas que más interesaban a los «ligueros»¹⁶⁰. Ello no impidió que a finales de aquel mismo verano y a iniciativa del *Círculo Agrícola*, siguieran organizándose más Exposiciones en las que presentar nueva maquinaria y productos procedentes de los campos castellanos. Aquélla iba a ser la tercera de las Exposiciones dedicada a la agricultura y a la ganadería de las celebradas en Salamanca, dividiéndose en siete secciones, estando la última dedicada al fomento de los abonos, nuevos aperos y demás maquinaria para el campo¹⁶¹.

En poco tiempo, el *Círculo Salmantino* había conseguido tanta o más celebridad que su predecesora castellana *por la Iniciativa Privada*. Un ejemplo de lo que aquí se expone fue la publicación de un Real Decreto nombrando Vocal nato del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio a Jacinto Orellana¹⁶². Con ello, tal y como explicaba en su inicio la

¹⁵⁹ *El Imparcial*, número 2.839, lunes 12 de abril de 1875; *La Iberia*, número 5.674, martes 13 de abril de 1875; *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.108, miércoles 14 de abril de 1875, y especialmente el artículo sobre la “Asamblea de las Ligas de Contribuyentes”, en *La Iberia*, número 5.689, viernes 30 de abril de 1875.

¹⁶⁰ Una buena síntesis en Calvo Caballero, María del Pilar (1999), ob. cit. págs. 71 y 72.

¹⁶¹ La Exposición agrícola y pecuaria iniciada durante el mes de septiembre de 1875 en Salamanca, alcanzó un importante eco a nivel nacional, incluso antes de su celebración definitiva. Véanse, por ejemplo, *La Iberia*, número 5.766, jueves 29 de julio de 1875; *El Imparcial*, número 2.967, martes 31 de agosto de 1875, así como *La Correspondencia de la Mañana*, número 120, miércoles 1 de septiembre de 1875.

¹⁶² *Gaceta de Madrid*, número 296, sábado 23 de octubre de 1875; *La Correspondencia de España*, número 6.532, sábado 23 de octubre de 1875; *El Pueblo Español*, número 31, sábado 23 de octubre de 1875; *El Imparcial*, número 3.019, sábado 23 de octubre de 1875; *La Crónica Meridional*, número 4.829, miércoles 27 de octubre de 1875. La composición completa del Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio puede verse en la *Guía Oficial de España*, 1877, Imprenta Nacional, Madrid, 1877, págs. 689 a 691.

motivación a dicho Decreto, se intentaba dar muestras del aprecio que desde el Ministerio de Fomento, y en particular desde la persona al cargo del mismo, Cristóbal Martín de Herrera, se profesaba a la asociación agrícola en Salamanca y a su Presidente.

Próximo a expirar el año 1875, el *Círculo* se sumó a la participación española en la Exposición Universal de Filadelfia, celebrada entre mayo y noviembre del año siguiente, a la que acudió con 130 expositores y una destacada muestra de la producción agrícola y de elaboración de la provincia. La significación del evento fue ampliamente difundida, dejando en muchos casos rubricada la evidencia del esfuerzo y del patriotismo que en esos momentos se vivía en las provincias castellanas. No es extraño, por tanto, que en un diario leonés se pudiera leer, en referencia a los artículos y objetos enviados a la Exposición norteamericana, las particularidades y el interés que inspiraban los mismos.

son expresión fiel de nuestra situación agrícola. Por su exámen, el jurado internacional calculará la fuerza natural de producción de esta provincia, y lo que se debe al trabajo constante del labrador y del industrial. Nada nuevo enviamos, porque aquí, en este de Castilla apartado rincón, si algo se inventa, es sencillamente el modo de pagar pronto y bien. En cambio los americanos y los europeos y cuantos visiten la universal exposición, podrán convencerse de que la vida económica de este país no se concibe sin convenir en que los granos de trigo que Salamanca remite, son preciosas gotas de sudor condensado bajo la impresión de un ímprobo y jamás interrumpido trabajo¹⁶³.

En su intención de aumentar el alcance reivindicativo de la gran propiedad en las comarcas de Castilla, hacia el mes de mayo de 1876 se produjo en las Cortes la intervención del diputado por Vitiguidino, Adolfo Galante Rupérez, representante de las clases contribuyentes de la provincia y persona cercana al *Círculo Agrícola*, presentando una exposición elaborada por la asociación salmantina en la que se demostraba que, según los nuevos presupuestos, la propiedad territorial quedaba gravada con un 51 por ciento¹⁶⁴. Abordar el debate contributivo iba a ser una constante, a lo que se

¹⁶³ *La Crónica de Leon*, número 40, domingo 28 de noviembre de 1875. La noticia incluso fue publicada en Baleares. Véase, al respecto, *El Bien Público*, número 827, Mahón, jueves 2 de diciembre de 1875.

¹⁶⁴ *El Globo*, número 410, lunes 15 de mayo de 1876, y número 414, viernes 19 de mayo de 1876; DSC, *Congreso de los Diputados. Legislatura de 1876 á 1877*, sesión del martes 16 de

añadía la convicción, por parte de quienes conformaban la Asociación, de la escasa o nula presteza que en este sentido podían prestar los partidos políticos.

¡A qué tristes consideraciones se presta semejante espectáculo! Se trata de la cuestión de Hacienda, la mas vital para el país, y apenas se ve interés ni deseo de contribuir á la resolucion de los problemas que afectan á la vida de los pueblos; pero se trata de una discusion política que se convierte en recriminaciones personales y en discursos que enardecen las pasiones sobre actos de los Ministerios pasados y presentes, y el local del Congreso se llena, asistiendo durante quince horas consecutivas todos los diputados bajo una atmósfera de fuego¹⁶⁵.

La huída de la práctica política habitual se hizo todavía más aparente al anunciarse desde algunos medios de prensa la necesaria convocatoria de una reunión a nivel nacional de todas las entidades con responsabilidades materiales y económicas. Desde *La Época* se argüía, por ejemplo, que: “algunas personas respetables piensan acudir á la Sociedad Económica Matritense, á fin de que tome la iniciativa y convoque á las demás Sociedades económicas de España ú otras equivalentes, como el Fomento de la produccion de Barcelona, Círculo agrícola salmantio, Liga de contribuyentes, gremios de las diferentes industrias, navieros, comerciantes, etc., á un Congreso general para ocuparse de las reformas relativas á los intereses materiales que reclama el estado del país y el porvenir de sus industrias, comercio y produccion”¹⁶⁶. En todo caso, junto a la prensa local, el *Círculo Agrícola* intentó buscar el patronato del Ayuntamiento, así como el de la Diputación, con el ánimo poder confeccionar un programa que mantuviera activos los proyectos agrícolas de la provincia.

Cierto es que no siempre aquella relación fue fructífera. Así, y aprovechando la materialización y puesta en funcionamiento del tramo ferroviario entre Medina del Campo y Salamanca, el *Círculo* pretendió, con el

mayo de 1876, Imprenta y Fundición de la viuda é hijos de J. Antonio García, Madrid, 1877, pág. 1456. También en Varela Ortega, José (Director), “Apéndice: Diputados a Cortes 1876-1923”, en *El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001, pág. 710.

¹⁶⁵ El comentario pertenece a la propia *Revista* publicada por el *Círculo Agrícola Salmantino*, aunque en este caso es citado textualmente por el diario balear *El Bien Público*, número 1.026, sábado 5 de agosto de 1876.

¹⁶⁶ La noticia, recogida en amplios artículos también aparece en *El Popular*. Nosotros hemos acudido a la publicada por *La Época*, número 8.696, domingo 27 de agosto de 1876.

apoyo de las instituciones municipales y provinciales, organizar una Exposición agrícola que coincidiera con la inauguración de la línea férrea y de la visita de Alfonso XII a la ciudad que debía tener lugar el primer día de septiembre de 1877. El intento por acrecentar el logro significativo que suponía la entrada en la escena triguera y comercial de la *Compañía de Medina del Campo a Salamanca*, no tuvo finalmente el efecto buscado y terminó minorando los deseos del *Círculo Agrícola Salmantino*, reduciendo la Exposición a una pequeña exhibición de productos de la provincia. Ésta, tal y como reflejaba la prensa de aquellos días, se había conseguido organizar “con gran premura en el colegio de Nobles Irlandeses”, contando finalmente con una breve presencia del Rey¹⁶⁷.

Entre 1877 y 1880, el *Círculo Agrícola Salmantino* transitó entre el devenir de la agricultura castellana y el impulso de las prácticas asociativas en la región, llevándolas en algunos casos al ámbito nacional. En el primero de los casos favoreció la introducción del gusano de seda y su industria a través de algunos propietarios próximos a la Asociación, con resultados satisfactorios¹⁶⁸. La enseñanza agrícola y el crédito dirigido a los labradores fue otro de los pilares desarrollados hasta el final de los años setenta, propiciando continuas solicitudes para la instalación de distintos centros de capacitación y agronómicos, así como de exposiciones concitando a la creación de bancos agrícolas¹⁶⁹. La ampliación de la red ferroviaria en la

¹⁶⁷ Desde algunos meses antes de que tuviera lugar la inauguración del tramo ferroviario entre Medina del Campo y Salamanca, la prensa había dedicado un seguimiento muy preciso al mismo, así como a la intención que existía por parte del *Círculo Agrícola* de celebrar la Exposición provincial con ayuda del Ayuntamiento y otras entidades oficiales de la Provincia. A este respecto pueden consultarse, por ejemplo, *El Imparcial*, número 3.520, martes 13 de marzo de 1877; *Diario de Córdoba*, número 7.952, 15 de marzo de 1877; *El Pueblo Español*, número 471, viernes 27 de abril de 1877. *El Turolense*, número 122, domingo 29 de abril de 1877. La noticia del abandono del proyecto era recogido de esta singular manera en el diario *La Época*: “Parece que se desiste de celebrar en Salamanca la Exposición agrícola e industrial que se proyectaba con motivo de la próxima inauguración del ferro carril, á la que asistirá S. M. el rey. El *Círculo agrícola salmantino* desiste de prestar al proyecto su valioso concurso, en vista de la apatía de los demás”, en *La Época*, número 8.977, 12 de junio de 1877. En relación a la *Compañía de Medina del Campo a Salamanca* y su inauguración en la capital castellana, puede consultarse de Pedrosa Sanz, Rosario, *Capital extranjero en la industria de Castilla y León*, Universidad de Valladolid, 1986, pág. 68; *La Época*, número 9.065, lunes 10 de septiembre de 1877, y *La Correspondencia de España*, número 7.219, lunes 10 de septiembre de 1877.

¹⁶⁸ *La Correspondencia de España*, número 7.253, viernes 2 de noviembre de 1877; *La Época*, número 9.119, domingo 4 de noviembre de 1877, y *El Campo*, número 24, 16 de noviembre de 1877.

¹⁶⁹ *El Liberal*, número 220, martes 6 de enero de 1880; número 323, lunes 19 de abril de 1880, y número 351, lunes 17 de mayo de 1880. Asimismo en *Adelante*, número 793, domingo 8 de febrero de 1880. En relación al discurso del Presidente del *Círculo Agrícola* en

provincia también estuvo entre los argumentos más esgrimidos por el *Círculo*, al proponer la construcción de una nueva vía que, partiendo de Béjar, enlazara en la localidad de Sepulcro Hilario con la de Salamanca a Ciudad Rodrigo¹⁷⁰.

Junto a todo lo anterior, el *Círculo Agrícola* contribuyó en gran medida a impulsar el establecimiento de una *Sociedad Económica de Amigos del País* en Béjar, lo que no evitó que la actividad ampliamente difundida de aquél truncara toda esperanza para que pudiera constituirse otra en la capital salmantina. Esta impresión, referida en su momento por el semanario *Adelante*, estaba directamente relacionada con el peso que venía ejerciendo el *Círculo* en toda la provincia, y, en consecuencia, también en la ciudad.

¿Por qué no se reconstituye la que por algun tiempo funcionó en esta Capital? Creemos que fácilmente podría corregirse, bien iniciando su reconstitucion los individuos que á ella pertenecían, ya iniciándola las autoridades; verdad es que el *Círculo Agrícola Salmantino*, cuyos trabajos son superiores á todo encarecimiento, viene llenando un vacío que sin él seria muy sensible, y haciendo por la agricultura de esta provincia todo lo que de la asociacion puede esperarse; pero dicha institución, que ha merecido y merece el aplauso de cuantos se interesan por el bien del país, tiene que moverse dentro de límites más estrechos que los que circunscriben la esfera de accion de las sociedades económicas. Por eso ésta vendría á cumplimentar aquella, y presidiendo los mismos propósitos á ambas, seria el resultado el desenvolvimiento de los intereses materiales y morales¹⁷¹.

las Cortes con motivo de la solicitud para el establecimiento de un banco agrícola, véase *El Liberal*, número 367, miércoles 2 de junio de 1880. En febrero de aquel mismo año el *Círculo Agrícola* había defendido una propuesta de conversión en Banco Agrícola del pósito instalado tiempo atrás. Parte de la información en el semanario salmantino *Adelante*, número 793, domingo 8 de febrero de 1880, y especialmente en la *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 343, sábado 6 de marzo de 1880, págs. 1089 y 1090; número 345, sábado 20 de marzo de 1880, págs. 1104 y 1105, y número 346, sábado 27 de marzo de 1880, págs. 113 y 114.

¹⁷⁰ Un ejemplo de lo que se expone en la revista bejarana, *La Union*, número 13, de 27 de julio de 1879.

¹⁷¹ *Adelante*, número 764, domingo 20 de julio de 1879. Junto a la creación de la *Económica* en Béjar, otras Sociedades Económicas comenzaron a adquirir un mayor protagonismo, restaurándose, incluso, algunas como la de Segovia en 1875. Además de las mencionadas anteriormente, las más activas y las que propiciaron las mayores movilizaciones en las provincias castellano-leonesas fueron de León, Palencia y Zamora. Calvo Caballero, María del Pilar (1999), ob. cit. pág. 372. Por otro lado, algunas Sociedades Económicas, como la segoviana, ejercieron una acción de rechazo hacia los portazgos, cuestión que en su momento fue considerada el resultado de “un funesto error económico”, actuando en consecuencia a través de Exposiciones dirigidas a las Cortes. Véase, en relación a este

El entusiasmo del *Círculo* por el fomento del asociacionismo se vio reflejado en el intento compartido, bajo los auspicios de un numeroso grupo de terratenientes, de crear una sociedad general protectora de la agricultura española, acordada en el mes de marzo de 1878. A la reunión organizada en el palacio de la duquesa, viuda de Medinaceli, acudieron cerca de cien personas dispuestas a dar forma a una *Asociación General de Agricultura*, proyecto que sería extractado por el ingeniero y diputado a Cortes, Lino Peñuelas, y para el que se proponían, entre otros aspectos, la introducción de métodos de cultivo más ventajosos, la aplicación de maquinaria agrícola, la creación de múltiples granjas-modelos y Cajas para agricultores, así como seguros en las cosechas, favoreciendo, además, la creación de asociaciones y sociedades a nivel local capaces de acrecentar el movimiento asociativo en los sectores rurales¹⁷². Entre los convocados en la residencia de la duquesa se habían dado cita nombres importantes de la nobleza, las finanzas y los negocios, además de ingenieros, políticos, personalidades académicas, de la prensa y de los círculos culturales del país. En representación de la gran propiedad agrícola estaban presentes los duques de Medinaceli, de Uceda, los condes de Trígona y Adanero, los marqueses de Monistrol, Torrecilla, Remisa, Cabra, Cervera, de las Torres de la Presa, y de la Vega de Armijo. Como asistentes y propietarios estaban también los señores Francisco de Paula Candau, Martín Larios, Carlos Calderón y Antonio Zambrana. No obstante, el éxito en dicha empresa, y en palabras de Peñuelas, solo podría concretarse si se lograba una participación multitudinaria y se sentaban las bases para adquirir el necesario progreso de los intereses agrícolas.

Para remover los obstáculos que al desenvolvimiento de la agricultura se oponen, no basta la voluntad de un solo individuo, por firme que sea y por grandes los medios de que pueda disponer. Para tan grande obra es necesario el concurso de muchas voluntades, de muchas inteligencias y de muchas fortunas; que nunca pueden resolverse los problemas sociales sin el

asunto, la *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 324, sábado 25 de octubre de 1879, págs. 930 y 931.

¹⁷² Sobre el proyecto de *Asociación General de Agricultura* puede consultarse *El Globo*, número 894, lunes 25 de marzo de 1878; *La Iberia*, número 6.561, martes 26 de marzo de 1878, y *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 3.003, domingo 7 de abril de 1878. Un perfecto extracto de creación, proyecto y adhesiones a la asociación puede verse en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo VI, enero a marzo de 1878, págs. 729 a 738

auxilio de todos los ciudadanos, libremente *asociados, contribuyendo en proporcion con sus medios y su fortuna respectivos*¹⁷³.

La felicitación expresa del *Círculo* a través de su presidente, Jacinto Orellana, al propósito de constituir una Sociedad agrícola de ámbito nacional con el nombre de *Sociedad General Protectora de la Agricultura Española*, no tardó en producirse, reuniéndose para tal fin en Junta General solo unos días más tarde¹⁷⁴. En una prolongada carta dirigida por un considerable número de entusiastas al Director de la *Económica* de Murcia, Agustín Escribano, se manifestaba la intención de: “Primero. Recoger, como medio de esta circular lo procuramos, la adhesion en provincias de cuatas personas acepten en principio la creación de una Asociacion libre, protectora de todos los intereses agrarios y promovedora de su desarrollo. Segundo. Organizar, en todos los pueblos en que esto sea posible, Comités ejecutivos que representen á los asociados de cada localidad por libre eleccion de dichos asociados”¹⁷⁵. De aquella voluntad surgió una Comisión nominadora que debía poner en práctica los buenos juicios aprobados en la reunión¹⁷⁶. Sin embargo, sabemos que el proyecto no llegó muy lejos, hecho que no

¹⁷³ Entre las personas que asistieron a la reunión, celebrada el domingo 24 de marzo de 1878, en el ya desaparecido palacio del duque de Medinaceli, ubicado en la madrileña Carrera de San Jerónimo, estaban el marqués de Salamanca, el duque de Almenara, José de Echegaray y Eizaguirre, el marqués de Perales, el duque de Bailén, etc., amén de un puñado de personalidades vinculadas a la prensa como los directores de *El Imparcial*, *El Campo*, *El Labriego*, *La Correspondencia*, *La Iberia*, o de la *Gaceta Agrícola*. Junto a todos ellos figuraban, entre la numerosa representación, otros como el marqués de Montoliu, en representación del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Francisco Danvila, de la *Asociación Valenciana de Agricultura*, Casildo de Azcárate, presidente de la *Asociación de Ingenieros Agrónomos*, y el Director de la *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*. Véase *El Campo*, número 9, 1 de abril de 1878, y *El Bien Público*, número 1.524, lunes 8 de abril de 1878.

¹⁷⁴ La Junta felicitaba a la duquesa de Medinaceli y a los asistentes al acto celebrado en Madrid. *La Iberia*, número 6561, martes 26 de marzo de 1878. Asimismo, en *El Bien Público*, número 1.524, lunes 8 de abril de 1878.

¹⁷⁵ “Informe sobre la creación de una Sociedad general protectora de la agricultura española”, Fondos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, 28 de marzo de 1878. La carta, firmada entre otros por la propia duquesa Viuda de Medinaceli, representantes del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, la *Asociación Valenciana de Agricultura*, así como de distintos responsables del Ministerio de Fomento y prensa diversa, manifestaba igualmente la intención de establecer unos Estatutos Generales y Reglamentos debidamente conformados y aprobados por una Junta General que debía crearse a tales efectos.

¹⁷⁶ Presidida por la misma duquesa de Medinaceli, la Comisión estaba formada por los marqueses de Orovio, Monistrol, Perales, Cabra, Casa Remisa, Montoliu y Salamanca. Asimismo eran miembros de la misma los duques de Almenara y Veragua, el conde de Adanero, Ignacio Escobar, Francisco García Martino, Francisco Candau, Mariano Araus, Máximo Laguna, Lino Peñuelas, José Luis Albareda, Miguel López Martínez, José Echegaray, Manuel Danvila, Francisco Candau y Emilio Castelar. *El Campo*, número 9, Madrid 1 de abril de 1878

impidió que la Comisión siguiera reuniéndose en el palacio madrileño durante algunas semanas más, contando con la presencia, entre otros, de Sagasta, Echegaray, además de algunas personas de renombre entre la nobleza y la propiedad agrícola. De los acuerdos tomados se concibieron algunas ideas para dar publicidad al intento de organizar una Sociedad General de Agricultura. A este respecto se produjeron algunas repercusiones en provincias como Córdoba, gracias al interés mostrado por el conde de Torres Cabrera, emplazamiento en el que se daba por sentado la inmediata creación de una Asociación siguiendo el modelo resuelto en Madrid¹⁷⁷. En cualquier caso, a comienzos del año 1879, *La Correspondencia de España* anunciaba el interés de la duquesa de Medinaceli por unir la Sociedad a la *Liga de Propietarios* en Madrid, dirigida en aquellos momentos por el conde de Puñonrostro. El hecho significó la inmediata adhesión, así como el nombramiento por unanimidad de la duquesa como presidenta honoraria de la Liga matritense¹⁷⁸.

En enero de 1879 se comenzó a discutir el proyecto de Reglamento para la Administración del *Círculo Agrícola Salmantino*, proceso que debía completar los Estatutos de la Sociedad, concretándose poco después con el nombramiento de los cargos de la Junta Directiva en todas sus secciones (véase el cuadro 35). Con la aprobación del Reglamento, además de reforzar la gestión de la *Revista*, se afianzaba el control de las cuentas corrientes de ingresos y gastos, al tiempo que se dotaba de sentido a los documentos contables para la entrada y salida de fondos de la Tesorería¹⁷⁹. Este «apuntalamiento» de la Asociación coincidió con un acercamiento de las autoridades de la provincia hacia la misma, iniciándose, simultáneamente, un proceso contra los amillaramientos, las contribuciones y los aranceles,

¹⁷⁷ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo X, Imprenta de Manuel G. Hernández, Madrid, 1879, págs. 358 y 359. En los primeros días de 1881 se organizó en Las Palmas el *Círculo Agrícola e Industrial*, en gran parte siguiendo el rastro de la asociación castellana en todo lo concerniente al progreso agrícola y a los requerimientos surgidos en el entorno del mundo rural. *La Iberia*, número 7.452, miércoles 16 de febrero de 1881.

¹⁷⁸ La reunión de la Junta Directiva de la *Liga de Propietarios de Madrid* tuvo lugar en el domicilio particular de su Presidente, con una asistencia de 32 individuos, en la que se leyó un comunicado de la duquesa de Medinaceli participando su deseo de ingresar en la asociación madrileña y comunicando el interés por unir ambas asociaciones. *La Correspondencia de España*, número 7.692, martes 14 de enero de 1879.

¹⁷⁹ La discusión sobre el Proyecto, así como la redacción del mismo pueden verse en la *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 284, 18 de enero de 1879, págs. 603 y 604, y número 286, sábado 1 de febrero de 1879, págs. 612 a 614.

CUADRO 35

Composición de la Junta Directiva del Círculo Agrícola Salmantino

Marzo de 1879	Marzo de 1880
<p>Presidente: Jacinto Orellana Secretario: Francisco González de la Riva (marqués de Villa Alcázar)</p> <p>Sección de Propiedad y Contribuciones</p> <p>Presidente: Manuel García Samaniego Secretario: Prudencio Escribano Vocal: Marcial Soto</p> <p>Sección de Agricultura y Ganadería</p> <p>Presidente: Santiago Cobaleda Secretario: Manuel García Vocales: Antonio Pérez, Gerardo Vázquez de Parga, Mariano García</p> <p>Sección de Industria</p> <p>Presidente: Saturnino Charro Secretario: Juan Casimiro Mirat Vocal: Vicente Maculet</p> <p>Sección del Pósito</p> <p>Vicepresidente: Ignacio Hortal Vocales: Manuel Somoza, Daniel Sánchez Tabernero, Federico Calama, Manuel García Serrano, José Fuentes, Mauricio Rodríguez, Francisco Polo Méndez</p> <p>Sección de Comercio</p> <p>Presidente: Fernando Íscar Secretario: Prudencio Muñoz Domínguez Vocal: Juan Mendivil</p> <p>Sección de Propaganda de Seguros</p> <p>Presidente: Ciriaco Rodríguez Martín Secretario: Luciano López Moral Vocal: Santiago Juanes</p> <p>Sección Revista</p> <p>Presidente: Ricardo Torroja Secretario: Ciriaco Rodríguez Martín Vocales: Ramón Losada, Joaquín María Pastor, Manuel Gil Maestre, José Urquiza, José Villar y Macías; Agustín Bullón, Cecilio González Domingo, Ramón Gil, Claudio Alba</p>	<p>Presidente: Jacinto Orellana Vicepresidente: Ricardo Torroja Secretario: marqués de Villa Alcázar</p> <p>Sección de Propiedad y Contribuciones</p> <p>Presidente: marqués de la Granja Secretario: Prudencio Escribano Vocales: Marcial Soto, Fernando I. Pérez, Gerardo Vázquez de Parga</p> <p>Sección de Agricultura y Ganadería</p> <p>Presidente: Antonio Pérez Secretario: Daniel Sánchez Tabernero Vocales: Mariano García Cenizo, Ramón Gil Gómez, Mauricio Rodríguez</p> <p>Sección de Industria</p> <p>Presidente: Saturnino Charro Secretario: Juan Casimiro Mirat Vocales: Vicente Maculet, Bernardo Jarrin, Felipe Peramato</p> <p>Sección del Banco</p> <p>Vicepresidente: Claudio Alba Vocales: Manuel Somoza, Daniel Sánchez Tabernero, Federico Calama, Manuel García Serrano, José Fuentes, Mauricio Rodríguez, Francisco Polo Méndez</p> <p>Sección de Comercio</p> <p>Presidente: Fernando Íscar Vocales: Ramón Carranza, José Fuentes, Agustín Pérez Ágreda, Antonio Martín Toribio, Manuel Somoza, Cayetano Fabrés</p> <p>Sección de Propaganda</p> <p>Presidente: Ignacio Hortal Secretario: Ciriaco Rodríguez Martín Vocales: Santiago Juanes, Luciano López, Petronilo Orea</p> <p>Sección Revista</p> <p>Presidente: Ricardo Torroja Secretario: Ciriaco Rodríguez Martín Vocales: Ramón Losada, Joaquín María Pastor, Manuel Gil Maestre, José Urquiza, José Villar y Macías; Agustín Bullón, Luciano Navarro, Miguel Gago Lorenzo, Isidoro Barrado, Pablo Morás</p>

FUENTE: *Revista del Círculo Salmantino*, número 290, sábado 1 de marzo de 1879, pág. 650, y número 344, sábado 13 de marzo de 1880, pág. 1096.

convirtiéndose en el auténtico eje reivindicativo hasta el vuelco definitivo de la Asociación en Liga de Contribuyentes¹⁸⁰.

Desde que fuera presentado en diciembre de 1846 el Decreto aprobando el Reglamento para el establecimiento y conservación de la estadística de la riqueza territorial, la clase propietaria había permanecido un tanto solícita ante las posibles modificaciones que podían derivarse del mismo. El precepto determinaba, por vez primera en nuestro país, la realización de un exhaustivo registro de las fincas rústicas y urbanas repartidas por todos los pueblos y ciudades del Reino. Además, se incorporaban las características del ganado, la clase y denominación de las fincas, su situación, linderos, producción total de granos y otros frutos, etc., deducidos los gastos de explotación y con especificación de los nombres de los propietarios o arrendadores de cada hacienda agrícola¹⁸¹. Junto a los registros, debía realizarse un catastro en cada localidad, lo que suponía acceder a la información de la riqueza territorial y pecuaria, las especies y cultivos, así como las clases de edificios rústicos y urbanos, debiendo realizarse por una Junta pericial.

En distintos estadios, sucesivas Órdenes y Reales Decretos fueron modificando las reglas para la formalización del repartimiento en las contribuciones, las posibles moratorias, así como la forma, condiciones y capacidad tributaria de cada localidad y de los contribuyentes¹⁸². Esta situación de continuos cambios se mantuvo con el paso del tiempo, publicándose dos rectificaciones de los amillaramientos en septiembre de 1876 y diciembre de 1878 cuyo propósito no era otro que el de «descubrir» la riqueza como base del amillaramiento y el líquido imponible. Precisamente esta última reforma fue rápidamente divulgada en la *Revista del Círculo Agrícola* solo unos meses después, produciéndose las primeras reacciones en marzo de 1879 a través de una Exposición dirigida al Ministerio de

¹⁸⁰ Desde el Gobierno Civil se ofreció la posibilidad de que el Gobernador pudiera asistir a la Junta General del *Círculo*, ayudando en todo aquello que estuviera a su alcance. *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 288, sábado 15 de febrero de 1879, pág. 623.

¹⁸¹ García Ruipérez, Mariano, *Manual de Hacienda para archiveros municipales*, Archivo General de la Región de Murcia, Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, 2008, pág. 44.

¹⁸² De esa forma, por ejemplo, una Real Orden de 9 de junio de 1853 evidenciaba que los llamados padrones de riqueza no justificaban por sí mismos los repartimientos del cupo municipal, entretanto que los amillaramientos sí presentaban la capacidad tributaria de los contribuyentes. *Ibidem*, pág. 45.

Hacienda, y en la que se dejaba perfilado el grado de equivocación y la falta de atención en las deducciones.

si en todo cálculo económico encaminada á averiguar el producto neto deben comprenderse como gastos que han de deducirse del producto bruto, todos los necesarios para la obtencion de este; si contra la realidad de las cosas no cabe suposicion, ni prejuicio que la contradiga y anule: si los intereses del Estado y del particular han de ser solidarios y no contrapuestos: si en fin, todo hecho penable debe de llevar implícito como causa necesaria el elemento moral ó la intencion, no puede ser de modo alguno justificable que nada se tolere por error, antes bien, se pene con inusitado rigor toda equivocacion, sea la que quiera su cuantía: que no se compute en las deducciones, para obtener el producto neto, gastos que son absolutamente necesarios, si la produccion ha de existir; ni que á priori se suponga un predio de calidad determinada; ni que se parta del supuesto de oposicion entre el interés comun y particular; ni en fin, que al error se le atribuya el supuesto de ocultación, obligando á su agente á justificar no haber obrado con intención fraudulenta¹⁸³.

En la opinión de la mayoría de propietarios de tierras de cultivo en Castilla, las estadísticas que hasta esos momentos estaban siendo manejadas carecían de un valor científico. En algunos casos el volumen de cédulas sobre las declaraciones de riqueza acumuladas no dejaban de ser “un recuento abigarrado, un conjunto sin orden real, ni mucho menos sistemático y útil”, condiciones que se consideraban esenciales en cualquier registro, especialmente al tener que valorar la variedad de tipos, las innumerables apreciaciones y los criterios individuales de cada propiedad¹⁸⁴. Además, el escaso tiempo concedido en la Reforma de 1878 para la formación de los amillaramientos llevó al *Círculo* a reprobar al Gobierno la imposibilidad que dicho plazo producía para que los propietarios pudieran conocer la división de sus fincas, las rentas que de ellas percibían, o la superficie de las mismas, al estar distribuidas en numerosas ocasiones en diferentes términos municipales¹⁸⁵. La postura en este sentido de quienes eran dueños de la propiedad era evidente. Por un lado debía erradicarse del

¹⁸³ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 290, sábado 1 de marzo de 1879, pág. 653.

¹⁸⁴ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 291, sábado 8 de marzo de 1879, pág. 660.

¹⁸⁵ “Exposición al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros”, en *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 299, sábado 2 de mayo de 1879, págs. 727 y 728.

Reglamento toda esencia de dureza y desconfianza. Por otro, debían eliminarse aquellos apartados que solicitaban la aplicación de penas, empleándose éstas tan solo en los casos de rebeldía justificada y siempre una vez que hubieran sido aplicados los medios de persuasión correspondientes.

A pesar de la prórroga concedida por la Real Orden de 27 de mayo de 1879 para la presentación de las cédulas de amillaramiento, la *Revista* del mes de septiembre advertía de la falta de aportación que todavía en dichas fechas existía en relación a dichas cédulas¹⁸⁶. En 1881, la misma publicación tachaba de «receptáculo» de las inmoralidades a los amillaramientos, toda vez que los tipos impositivos habían llegado al 21 por ciento. Las bases fiscales afectaban básicamente al producto de la tierra y a las propiedades inmuebles de manera directa, obligando a realizar grandes esfuerzos a la pequeña propiedad que era gravada con pagos excesivos. Un desequilibrio que se veía aumentado además por las continuas ocultaciones existentes entre los grandes propietarios¹⁸⁷. Esta situación suponía un verdadero quebradero de cabeza para la propiedad agrícola en Castilla, que debía someterse a los registros de fincas, cartillas, listas y amillaramientos realizados por las corporaciones locales y las administraciones económicas.

Desde el *Círculo Agrícola* se procedió a elaborar una serie de argumentaciones en las que se invitaba al Gobierno a proceder con mayor interés a seleccionar registradores rigurosos e inflexibles, capaces de profesar su cometido. Entre los nueve puntos planteados por la *Revista* se expresaba la voluntad de no otorgar escritura alguna, por parte de los notarios, sin antes tener los planos de las fincas junto a la calidad de los terrenos, cultivos, etc. Se invitaba al Gobierno a crear una sección facultativa encargada de efectuar la revisión de la documentación, cargando, en cualquier caso, los gastos originados por las inexactitudes cometidas al mismo propietario. En consecuencia, una vez demostrado el silencio u ocultación, el perito firmante asumiría toda la responsabilidad de las irregularidades ante los tribunales de justicia. Empero, y dadas las dificultades que entrañaba la realización del recuento, a comienzos de los años ochenta se calculaba que todo el proceso llevaría al menos veinte años

¹⁸⁶ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 320, sábado 27 de septiembre de 1879, pág. 896.

¹⁸⁷ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 386, sábado 8 de enero de 1881, pág. 1429. Véase también Vallejo Pousada, Rafael (2010), ob. cit., pág. 107.

para tener un conocimiento muy aproximado de los distintos patrimonios, instante en el que todos los propietarios habrían de estar obligados a registrar aquellas fincas aún no inscritas¹⁸⁸.

En opinión de quienes conformaban la asociación agrícola en Salamanca, era un hecho indiscutible que el reparto de las contribuciones no obedecía a un conocimiento exhaustivo del estado y desarrollo de la riqueza. De ahí el innumerable número de denuncias y reclamaciones que se venían produciendo, demostrándose fehacientemente que el contribuyente con menos recursos era el más perjudicado al exigírsele una sobrecarga impositiva difícilmente soportable. Durante los años de la década de 1880 se intentaron algunas soluciones y reformas, suprimiéndose el impuesto de consumo y fabricación de sal con la Ley de 18 de junio de 1885, al tiempo que se elevaban los tipos de tributación en la contribución territorial. En ese mismo año se aprobaría en septiembre un Decreto aprobando el Reglamento provisional para el repartimiento y administración de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, completándose las correcciones con el Reglamento para la rectificación de los amillaramientos en fechas análogas¹⁸⁹. Las constantes alteraciones se prolongarán hasta 1914 y 1915, y verían sus últimas consecuencias ya entre los años 1945 y 1953, gracias a la llamada reforma de Larraz.

A la resistencia llevada a cabo contra la política de amillaramientos se fueron sumando un catálogo de trabas impositivas que seguían dificultando la circulación de la producción agrícola, lo que provocó que desde el *Círculo Agrícola* se multiplicaran las peticiones de protección hacia el núcleo de propietarios e industriales más afectados de la región. Desde la *Revista* se advertía, por ejemplo, que: “Una de las trabas más funestas, muy acertadamente suprimida hace algun tiempo, y restablecida poco ha, sin la meditacion suficiente á nuestro juicio, son los Portazgos y Pontazgos, centinelas avanzados que en todas las encrucijadas acechan y detienen á los productores, recordando los tiempos feudales en que se estendieron”¹⁹⁰.

¹⁸⁸ Martí y Thomas, J., “Amillaramientos. Medio seguro de llevarlos a cabo”, en *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 386, sábado 8 de enero de 1881, págs. 1429 y 1430.

¹⁸⁹ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 411, sábado 23 de julio de 1981, pág. 1535, y García Ruipérez, Mariano (2008), ob. cit., pág. 48.

¹⁹⁰ En efecto, a través de un Real Decreto de 23 de septiembre de 1877, se venían a restablecer todos los portazgos suprimidos con anterioridad. Además, se creaban otros sobre tramos de 20 kilómetros. En consecuencia, los productos llegados por ferrocarril desde la mayor parte de las cabeceras de Partido se veían obligados a pagar diferentes

En el transcurso de 1879 se vio impulsado, aún más si cabe, el debate tributario entre las clases contributivas y propietarias, siendo el *Círculo* la única esperanza solvente que cabía para todas ellas ante las continuas actitudes contrarias hacia el aumento en las cargas impositivas. La visión, un tanto desconcertante de la propiedad ante la Hacienda del Estado, ya había sido descrita por Eduardo Nó García en la *Memoria* presentada en febrero de aquel mismo año, al precisar el «parapeto» que suponía la Asociación, y los efectos producidos por la suma de las fuerzas que a ésta concurrían.

El Círculo Agrícola, pues, nació, no para ser una de esas tantas Asociaciones que afectando un carácter peligroso que necesariamente había de motivar su completo desprestigio, fuera el medio perturbador, el origen de aspiraciones egoístas escandalosamente explotado por el positivismo ó las pasiones, no; el Círculo Agrícola se engendró al calor que irradian aquellos dos principios eternos de las acciones humanas, en el deber y en el interés personal armonizados, combinados, equilibrados tuvo principio nuestra Asociación. Tomó cuerpo, creció al comprender las clases productoras y contribuyentes que de ellas es la culpa de cuantos quebrantos, padecimientos y menoscabos sufren, puesto que ni hacen uso de sus derechos, ni conciertan su acción, ni tienen idea común y fija, ni se ayudan colectivamente en defensa de sus personas y haciendas¹⁹¹.

La relativa «fragilidad» de las clases productoras frente a las acometidas de los poderes públicos venía saldándose desde hacía décadas con explícitas memorias y exposiciones, surgidas desde la desconfianza y siempre tratando de censurar la costumbre política de incrementar la presión fiscal en la producción agrícola. Fue el vicepresidente del *Círculo*, Ricardo Torroja, quien en una nueva advertencia al Ejecutivo, haciendo valer la prerrogativa de los agricultores, manifestaba: “Los derechos arancelarios deben acomodarse á las necesidades económicas del país, el pan debe ponerse al alcance de todas las bocas, debe evitarse hasta la sombra remota de que surja una crisis, y una crisis por hambre que es la peor de las crisis: pero de otra parte, es preciso que la agricultura viva, y que viva con

derechos, sufriendo importantes inconvenientes. *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 297, sábado 19 de abril de 1879, págs. 705 y 706.

¹⁹¹ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 290, sábado 1 de marzo de 1879, pág. 652.

holgura”¹⁹². Un ejemplo muy censurado fue el establecimiento de cinco portazgos entre las localidades de Béjar y Salamanca, lo que significaba que en poco más de setenta kilómetros un carromatero debía abonar por las mercancías “un precio de real y cuartillo arroba”, a lo que debía sumar una cantidad de veinte pesetas por cada caballería en concepto de contribución industrial. Situación que se acentuaba en la época de intercambios de trigos para la siembra entre ambas localidades¹⁹³.

Las cantidades abonadas como consecuencia de las tributaciones a la Hacienda nacional dieron lugar a una sucesión de estudios comparativos respecto a otros países en los que se destacaba el mayor tipo de gravamen registrado en España. La *Revista*, en un artículo titulado “Los tributos”, ponía énfasis en la mayor recaudación producida gracias a los impuestos directos que en nuestro país se aproximaba a una tercera parte de los ingresos; cantidad que se veía disminuida a la quinta parte en otros países. Respecto a las cargas indirectas, éstas se presentaban como una auténtica zozobra para el contribuyente, en especial para el agricultor. Para darnos una idea, entre las amplias diferencias expresadas a través de las páginas de la *Revista del Círculo*, se apuntaba lo siguiente: “Aquí, al revés de otras naciones, se viene legislando de tal manera respecto de las contribuciones indirectas, que la de consumos se ha convertido en directa en todos los pueblos que no son capitales de provincia. Los repartimientos con infracción de la Ley se hallan basados en la producción agrícola haciéndose insoportables á los labradores”. En opinión del *Círculo*, las propias Juntas repartidoras, estaban al frente de tales desmanes, lo que producía que los municipios afectados a menudo apenas sí podían preparar los expedientes y repartos de manera eficaz. En definitiva, era el campo el último y más serio damnificado, debido al «capricho» de la Administración al no prodigarse en estudios solventes sobre los medios efectivamente existentes en los pueblos y ciudades.

¹⁹² *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 302, sábado 24 de mayo de 1879, pág. 752.

¹⁹³ “Los Portazgos”, en *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 322, sábado 11 de octubre de 1879, pág. 913. A la desaprobación promovida desde el *Círculo* salmantino se unió la *Económica* en Segovia a través de una Exposición dirigida a las Cortes en octubre de 1879. *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 324, sábado 25 de octubre de 1879, págs. 930 y 931, así como el número 325, 1 de noviembre de 1879, pág. 939 y 940.

Venimos á ser, pues, en materia de tributos, la excepcion de Europa; pagamos directamente en una proporcion tan exorbitante, que la materia imponible dá al Estado anualmente tres quintas partes, y en cambio escapan á la tributacion otros elementos de riqueza movil que en las demás naciones sin gasto ni disgusto, producen cuantiosos rendimientos. Y no se nos objete que aquí hay grandes ocultaciones, y que por consiguiente el tipo de la contribucion territorial es aparente; las hay, pero aprovechan solamente á unos cuantos grandes hacendados á los cuales jamás alcanzará la investigación del Fisco; la mayoría de los contribuyentes de clases medias y bajas, pagan el tipo fijado por que poco ó nada pueden ocultar estando como esta su riqueza á al vista de todo el mundo¹⁹⁴.

En efecto, y en medio de un contexto de corrupción política derivado del caciquismo local, en diciembre de 1881 se aprobó una ley que venía a someter a revisión los amillaramientos, con el fin de poder atender las necesidades, una vez más, de la Hacienda del Reino. En esta ocasión, la nueva consideración impositiva debía realizarse a través de las declaraciones personales de los propietarios de cada municipio, resultando de todo ello la promulgación de dos nuevos tipos de exacciones máximas sobre la riqueza imponible. Unas cargas que se situaban en un 16 y un 21 por ciento, según se hubieran realizado o no las mencionadas revisiones. La medida comenzó muy pronto a provocar daños, dado que en muchos casos, los propietarios que cumpliendo con lo establecido habían hecho correctamente sus declaraciones, debían tributar por el tipo superior del 21 por ciento en aquellas localidades y municipios en los que aún no se había aprobado la revisión¹⁹⁵.

Lo cierto es que el porvenir de la agricultura en España no parecía que fuera a perfilarse dentro de lo que pudiera llamarse un horizonte pleno de éxitos. Ni siquiera como la culminación de un largo proceso de reformas. La opinión más generalizada entre los miembros del *Círculo Agrícola Salmantino* caminaba, a finales de 1881, en la línea del desánimo. Un país en el que el ferrocarril y la minería dependían cada día más del capital extranjero, donde varias rentas públicas estaban hipotecadas, y en el que los fosfatos para uso

¹⁹⁴ “Los tributos”, en *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 416, sábado 27 de agosto de 1881, pág. 1555.

¹⁹⁵ Fernández Navarrete, Donato, “La evolución histórica de la Contribución Territorial Rústica”, en *Agricultura y Sociedad*, número 8, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1978, págs. 186 y 187.

agrícola estaban siendo exportados a Estados Unidos y Gran Bretaña¹⁹⁶. Esta marcha de los recursos propios hacia otros lugares del mundo era duramente criticada por vez primera desde una asociación con intereses hacia la agricultura. Una humillación que, en opinión de sus miembros, era debida a la desidia e ignorancia de la población, así como a las carencias demostradas en el conocimiento agrícola.

Además, por otra parte cabía considerar el escaso esfuerzo realizado desde los años treinta a pesar de los impuestos exigidos y de la liberalización de la propiedad. Un camino que para muchos propietarios rurales se antojaba complejo, sobre todo teniendo en cuenta el extenso espectro de contribuciones que en bienes muebles e inmuebles seguían existiendo en el país¹⁹⁷. La visión general del estado de la agricultura española procurada desde el *Círculo Agrícola*, en consonancia con lo que venía suscitándose en el seno de las recién creadas Ligas de Contribuyentes, suponía una novedad en el plano de las demandas y requerimientos agrarios. Una visión de conjunto que atisbaba una nueva vocación asociativa a nivel nacional y de larga duración, pero que seguía insistiendo, tal y como otras habían hecho en el pasado, en la necesidad de atildar la educación agrícola e industrial a través de cátedras y granjas-modelo, recabando de este modo una mayor participación de hacendados y agricultores en todas las provincias¹⁹⁸.

¹⁹⁶ Las exportaciones de fosfatos habían alcanzado en los últimos diez años unas cifras próximas a las 300.000 toneladas. En este sentido, así se refería la *Revista* al revelar lo que suponía para los campos en España la no utilización del ácido fosfórico: “¿Y sabéis á lo que equivalen en cereales esas 300.000 toneladas? Pues representan un valor de 6.000 millones de reales en granos. ¿Y cuanto dan por eso? Doce millones; dos duros por tonelada. ¡Y nosotros, pobres, que necesitamos reconstruir nuestro suelo, vemos impávidos que se lo llevan para fertilizar sus campos, para que los Estados-Unidos con su cultivo intensivo, aumenten sus cosechas, y en épocas de escasez en nuestro país, abramos los puertos y vengán estos mismos fosfatos, bajo la forma de trigo, á hacer que paguemos esos miles de millones para nuestra alimentación”, extraído del artículo titulado “Porvenir de la Agricultura española”, en la *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 420, sábado 24 de septiembre de 1881, pág. 1571.

¹⁹⁷ “La agricultura Española y los impuestos nacionales”, *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 421, sábado 1 de octubre de 1881, pág. 1575.

¹⁹⁸ En referencia a este parecer, la *Revista* publicó a finales del mes de octubre de 1881, en primera página, el Decreto por el que se creaban las granjas-modelo de las provincias de Sevilla, Granada, Zaragoza y Valladolid. En dicho Decreto se advertía la importancia del mundo rural y local, así como de las intenciones de las mismas, teniendo por objeto, entre otras cuestiones: “Propagar los conocimientos agronómicos, presentando modelos de cultivo, ganadería é industrias rurales en armonía con las condiciones de la localidad, y el ensayo y análisis de abonos para garantía de los agricultores”, en *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 425, sábado 29 de octubre de 1881, pág. 1591. Por otra parte, conviene recordar que la idea de instalar granjas-modelo estaba muy extendida por una gran parte de las provincias españolas Véanse, por ejemplo, los casos de Toledo, Cáceres, etc., en Cartaña i Pinén, Jordi, “Las estaciones agronómicas y las granjas experimentales como factor de

Uno de los pilares esenciales para contribuir al desarrollo agrario pasaba necesariamente por hacer extensible el perfil proteccionista de las Ligas a las que el *Círculo* se había sentido muy vinculado desde sus inicios. Propietarios, ganaderos y labradores habían visto en las tesis de la asociación salmantina la posibilidad de pertenecer a un grupo suficientemente representativo que, además, mostraba todas las maneras en problemas tan significativos como el debate contributivo, los transportes, la instrucción agronómica, amén del derivado de la protección y los derechos sobre los cereales castellanos.

Consciente de los nuevos tiempos impulsados por la constitución reformista de Cánovas, de 1876, la nueva oligarquía castellana no tardaría en incorporarse al sistema «caciquil», acatando en muchos casos las nuevas reglas municipales que permitían acariciar el poder. Incluso, hasta finales de 1882 había resultado un tanto paradójico que el *Círculo* hubiera sobrevivido como una asociación singularmente agrícola, tal y como se desprendía, por ejemplo, de la propia denominación de su órgano de prensa. Ciertamente es que en el proceso de madurez del propio *Círculo Agrícola* habían cabido siempre las cercanías y afinidades con las Ligas, algo que acabó resolviéndose en enero de 1883, transformándose definitivamente aquél en la *Liga de Contribuyentes de Salamanca*, y uniéndose de esta forma al bloque liguero.

Constituida como Liga de Contribuyentes, la publicación del *Círculo* quedó igualmente transformada en *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, con un formato que apenas difería del anterior, publicándose también con una periodicidad semanal. Casi al mismo tiempo se pusieron en marcha otros proyectos con el fin de constituir asociaciones similares en las cabezas de partido de Alba, Béjar, Ledesma, Ciudad-Rodrigo, Peñaranda, Sequeros y Vitigudino¹⁹⁹. El respaldo dado en estos primeros años del Sexenio a la acción colectiva y a la participación política, inmadura hasta esos instantes en lo referido a las estrategias de hostigamiento por parte de los grupos de

innovación en la agricultura española contemporánea (1875-1920)”, *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, número 69, 1 de agosto de 2000.

¹⁹⁹ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 2, 10 de enero de 1883, págs. 5 y 6. A partir de enero de 1884, la publicación pasó a denominarse *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, con el subtítulo de: *Asociación de los Contribuyentes de esta provincia para la mutua defensa de los mismos en sus relaciones con el Estado, y obtención de los fines de la Liga Nacional de Contribuyentes de España, Ó sea, Paz, Justicia, Buena Administración, Trabajo y Economías*.

latifundistas, no tardó en poner sobre la mesa de las reivindicaciones agrarias una nueva manera de enfrentar los problemas, iniciándose una más que palpable politización en los cimientos de las sociedades de propietarios en nuestro país. En ese contexto se empezaron a desarrollar las ligas de propietarios y, sobre todo de contribuyentes, mostrando un nítido contrapunto en las actitudes y capacidades exhibidas hasta entonces en el ámbito rural y de las demandas agrícolas.

2.- PROPIETARIOS Y CONTRIBUYENTES. EL «TURNO» DE LAS LIGAS

- Las Ligas de Propietarios

El concepto y evolución de las ligas de propietarios y agricultores en Europa podríamos situarlo, casi simultáneamente en el tiempo, con el momento de su comienzo y acrecentamiento en nuestro país, teniendo como referentes más cercanos los de Inglaterra, Irlanda o Alemania, por citar solo algunos ejemplos. De la misma forma que finalmente ocurriría con las Ligas en España, uno de los rasgos más definitorios en sus análogas europeas iba a ser, además del papel reivindicativo en la agricultura, su implicación en la política y en la contribución a la reestructuración y perfeccionamiento de los Estados. No es de extrañar, pues, que la *Irish National Land League*, esto es, la Liga Irlandesa Nacional de la Tierra, destacara, entre otras cuestiones, como una de las ramas más importantes del nacionalismo irlandés, sirviendo, al mismo tiempo, como instrumento para evitar las elevadas rentas aplicadas a los arrendatarios, organizando un amplio cuerpo de terratenientes y un más equitativo reparto la tierra. Las acciones de masas terminaron originando la llamada «Guerra Agraria» de Irlanda, alcanzando su mayor intensidad entre los años 1879 y 1882²⁰⁰.

²⁰⁰ Reconocida legalmente, la *Liga de la Tierra* sostuvo una dura lucha contra el gobierno conservador de Disraeli, en lo que se querido ver como el movimiento social más importante de la historia reciente irlandesa. El propio Gladstone tuvo igualmente que sofocar las acometidas provocadas por la *Liga*. Sierra, Luis Antonio, *Irlanda del Norte. Historia del conflicto*, Sílex, Madrid, 1999, págs. 48 y 49. Asimismo, en Alonso Pascual, Rogelio, *Irlanda del Norte. Una historia de guerra y la búsqueda de la paz*, Editorial Complutense, Madrid, 2001, págs. 93 y 94. La prensa española de la época también recogió algunos de los detalles más sobresalientes del conflicto entre la *Liga* y el Gobierno de Irlanda. Algunos ejemplos en *El Áncora*, número 216, lunes 15 de noviembre de 1880; *El Amigo*, número 156, 13 de febrero de 1881; *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 3.854, viernes 25 de

Unas décadas antes, la llamada «cuestión de los cereales» en Inglaterra había llevado a un grupo considerable de propietarios a influir de manera decisiva en la abolición sin condiciones de todos los monopolios y derechos de protección a la agricultura, a través de la conocida *Anti-corn-law league* británica²⁰¹. Por último, algunas de las Ligas de campesinos y propietarios estructuradas en torno a la propiedad agraria en Alemania, las conocidas *Der Bund der Landwirte*, *Der Rheinische Bauernverein* y la *Baviera con Der Bayerische Bauernbund*, ejercieron desde sus inicios un decidido intervencionismo corporativo contra el Estado, entre los años ochenta y noventa del siglo XIX, influyendo decisivamente en algunas de las decisiones de las organizaciones políticas y en la propia Administración alemana²⁰².

En nuestro país, la aparición de la primera Liga de Propietarios coincidirá con la llegada al trono de Amadeo I de Saboya, en enero de 1871. Durante el Sexenio y hasta 1887, momento en el que quedaría constituida la *Liga Agraria*, España habría de transitar por un período de serios conflictos caracterizados por la inestabilidad en los sucesivos gobiernos, el malestar en la cúpula militar, el remarcado ascenso carlista o la impregnación de la Internacional entre los jornaleros del campo. El tránsito hacia la recuperación de la dinastía borbónica de Alfonso XII, culminada en diciembre de 1874, dejaría por el camino varias sublevaciones militares, la finalización del reinado de Isabel II, el inicio de unas Cortes Constituyentes, el corto interregno de Amadeo I, la proclamación de la República en febrero de 1873, levantamientos cantonales en distintas provincias, además de otro pronunciamiento más, en esta ocasión del general Pavía, en enero de 1874. Con este último episodio se ponía fin a unos años inciertos que tendría su punto más álgido con la proclamación, por parte de Martínez Campos, de un nuevo período concretado por el reinado de un joven monarca y por el Manifiesto de Sandhursts, documento pensado y elaborado por Cánovas del Castillo, y en el que se explicitaban los puntos básicos de la Restauración.

febrero de 1881; *La Opinion*, Palma de Mallorca, número 787, viernes 12 de mayo de 1882, y *El Constitucional. Periódico liberal de Gerona*, número 199, viernes 7 de julio de 1882.

²⁰¹ En efecto, la *Anti-corn-law league*, o Liga contra la ley de cereales, ideada por Cobden, abogó por la libertad absoluta de comercio presionando al Gobierno, logrando sus propósitos en 1843. Abad de Aparicio, Hilario y Coronel y Ortiz, Rafael, *Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa y América, precedidas de una reseña histórica de los mismos. Tomo II. Europa*, Imprenta de J. Antonio García, Madrid, 1863, págs. 160 y 161.

²⁰² Algunos detalles en Sanz Lafuente, Gloria (2005), ob. cit., págs. 24 y 25.

Entre 1868 y 1874, coincidiendo con el avance en España de la I Internacional, un modelo de conflictividad específicamente «obrero» había comenzado a extenderse por prácticamente todo el país, adquiriendo mayor entidad merced a las huelgas. Asentadas principalmente en Cataluña, las ideas no tardaron en penetrar en los núcleos más destacados de Andalucía haciéndose extensibles a muchos sectores rurales y a los jornaleros del campo, dando lugar, en muchos casos, al aumento de ocupaciones de tierras. En ocasiones, era la prensa la que hacía difundir visiones apocalípticas en materia de orden público, lo que llevó a Sagasta, en mayo de 1871, a enviar una circular a los gobernadores civiles concediéndoles amplias facultades para reprimir las actividades de la Internacional²⁰³.

A las dificultades vino a sumarse un rebrote sin precedentes del carlismo, consecuencia directa de la salida de Isabel II del Trono y de la aceptación de la monarquía en la figura de Amadeo de Saboya. La guerra carlista con Carlos VII al frente, mantendría así su hostigamiento a muchos de los sectores productivos en zonas septentrionales y del noreste peninsular, además de hacerlo con los sucesivos gobiernos hasta 1876.

No es menos cierto que en los años anteriores a 1868 se había ido formando un puñado de intelectuales, críticos con el «sistema» que en los años posteriores abogarían por ideales renovadores como la democracia, el krausismo o el librecambio. A través de los Ateneos, las cátedras universitarias y la prensa, nombres como los de Figuerola, Castelar, Giner de los Ríos o Canalejas, lograrían una importante repercusión y movilización en determinados sectores sociales durante el último cuarto de siglo. Si bien es verdad que una parte de la sociedad se mostraría condescendiente con los cambios surgidos en 1868, las elites tradicionales se vieron apartadas del poder emprendiendo súbitamente una campaña intensa en contra de la aceptación del nuevo sistema, incluido el breve reinado de Amadeo I. La nobleza hostil quiso legitimarse a través de unos supuestos valores que ponían en defensa el derecho a la propiedad en detrimento del ideario socialista. De esta forma, familias de renombre como las representadas por los apellidos Alba, Alcañices, Torrecilla o Montijo dejaron sin efectos

²⁰³ Algunas reflexiones sobre el tema en Bahamonde, Ángel, *España en democracia. El Sexenio, 1868-1874*, Historia 16, Madrid, 1996, págs. 50 a 56. También en Peset, Mariano, y Palao, Javier, "Escenas de la vida universitaria" en Piqueras Sánchez, Norberto (coordinador), *Sapientia Aedificavit. Una biografía de l'Estudi General de la Universitat de València*, Universitat de València, 1999, pág. 77.

cualquier posible apoyo a la monarquía representada por Amadeo, optando por la causa Alfonsina.

Inmerso en este comprometido marco político y social, y apoyándose en el principio de solidaridad, quedó constituida en enero de 1871 la *Liga de Propietarios de Valencia y su provincia*, con intención de estrechar todo el ámbito provincial, suscitando el propósito de “proteger y fomentar sus legítimos intereses”²⁰⁴. De su participación y temperamento político dan prueba las maniobras y presiones conspiradoras durante la monarquía amadeísta, entre 1871 y 1872, así como en las proclamaciones cantonalistas en las provincias valencianas durante el verano de 1873. Precisamente en el mes de julio de aquel año, la Junta Revolucionaria del Cantón de Valencia, presidida en esos momentos por Pedro Barrientos, se había formado con Vicente Boix, en Hacienda y Gobernación; Eduardo Pérez Pujos, responsable de Fomento; Pérez Guillem y Virgilio Cabalote, en Guerra, además del marqués de Cáceres que había asumido las competencias de Beneficencia. Gracias precisamente al último de ellos, el marqués de Cáceres, presidente de la *Liga de Propietarios de Valencia y su provincia*, la primera Junta pudo adquirir un cierto grado de respetabilidad que, tal y como apunta Martínez Roda, condujo a ésta a recibir la adhesión de 177 municipios de la provincia²⁰⁵.

Como ya se ha subrayado con anterioridad, en la Europa finisecular del XIX las Ligas vinculadas a la propiedad, al comercio y a la agricultura contribuyeron al “afianzamiento” de los cimientos del Estado. En nuestro país, superadas las idas y venidas en los primeros compases del liberalismo, asociaciones como las Ligas de contribuyentes y propietarios fueron decisivas en el fortalecimiento del Estado y de sus estructuras participativas. Así, por ejemplo, la burguesía propietaria perteneciente a la *Liga de Propietarios de Valencia*, liderada por nombres como Teodoro Llorente, el conde de Niculant, Federico Trenor, el marqués de Casa-Ramos y el propio

²⁰⁴ *Reglamento de la Liga de Propietarios de Valencia y su provincia*, Imprenta de José Rius, Valencia, 1871, pág. 3.

²⁰⁵ Martínez Roda, Federico, ob. cit., pág. 329. Además, parece evidente que la *Liga de Propietarios* actuó a comienzos de los años setenta del siglo XIX en contra de los postulados que intentaban instaurar un sistema democrático en España, primero a través de la figura de Amadeo de Saboya y posteriormente bajo la bandera de la República. Alvar Ezquerra, Jaime (coord.), *Diccionario de historia de España*, Istmo, Madrid, 2003, pág. 39.

presidente, el marqués de Cáceres, resultaron determinantes en los primeros instantes de la Restauración en Valencia (véase el cuadro 36)²⁰⁶.

En ese mismo setido debe considerarse la actitud de reproche, frente al «desalojo» sufrido por los grupos más acomodadas tras la Revolución de 1868, como un elemento más por articular la sociedad y las estructuras del Estado. En efecto, los otrora privilegios exhibidos por la clase propietaria en tiempos de Isabel II, se encontraron a comienzos de 1870 cuestionados por un poder político consustancial a un programa de reformas pactado por la burguesía revolucionaria y democrática. Ante la demostración de fuerza efectuada por parte de un gobierno provisional y frente a unas Cortes donde la propiedad había quedado en minoría, fueron los propietarios agrarios los primeros en alzar sus protestas²⁰⁷. De todo ello se deduce la proliferación durante los años del Sexenio de ligas de propietarios en Madrid, Valencia o Barcelona, alcanzándose un número muy próximo a los dos mil miembros en la capital de España en 1879²⁰⁸.

Durante 1871 y 1885, cinco serán las asociaciones de propietarios más significativas que, además, participarán de forma habitual en las reuniones de representantes de las Ligas de Contribuyentes y Asociaciones Análogas, celebradas desde 1879. Junto a la propia *Liga de Propietarios de Valencia*, cuya actividad venía desarrollándose precisamente desde 1871, a los referidos encuentros concurrían las asociaciones establecidas en Madrid y Barcelona, la *Asociación de Propietarios Rurales del Vallés de Granollers*, o la *Liga de Propietarios de Tembleque*²⁰⁹. Sucesivamente, el proyecto «liguero» se multiplicaría con varias asociaciones más, refundiéndose en algunos casos con otros grupos de contribuyentes y propietarios de la provincia²¹⁰. Las más destacadas hasta 1887, y de las que sí hemos encontrado sobrada

²⁰⁶ Monlleó Peris, Rosa, ob. cit., pág. 237

²⁰⁷ Bahamonde Magro, Ángel y Mérida Toro, Julián, *Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX*, Siglo XXI, Madrid, 1978, pág. 61.

²⁰⁸ *Diario de Córdoba*, número 8.533, miércoles 26 de febrero de 1879.

²⁰⁹ "Actas de la reunión de representantes de las Ligas de Contribuyentes y Asociaciones Análogas celebrada en Madrid el mes de Octubre de 1879", en *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 339, sábado 7 de febrero de 1880. Asimismo en el número 348, correspondiente al sábado 10 de abril de 1880; *La Mañana*, número 1.150, viernes 5 de marzo de 1880, y *Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 91, 26 de abril de 1885.

²¹⁰ Sabemos que la *Sociedad de Propietarios de Málaga*, creada en 1872, quedó unida formalmente a la Liga de Contribuyentes de esa provincia en 1874. Véase *La Correspondencia de España*, número 5.925, jueves, 19 de febrero de 1874.

CUADRO 36

Junta de la Liga de Propietarios de Valencia (1871)

Nombre	Título/Cargo
Vicente Noguera	[Marqués de Cáceres. Presidente
José Antonio Berruezo	[Vicepresidente
Fráncisco Dánvila y Collado	[Secretario
Federico Trénor y Bucelli	[Socio
Adolfo Yangüas	[Marqués de Casa-Ramos. Socio
Manuel Calvo y Pelarda	[Socio
José de Llano	[Socio
Arcadio Tudela y Martínez	[Socio
José Soriano Plasent	[Socio
Miguel Domingo y Roncal	[Socio
José Colomina y Arquer	[Socio
Francisco de Paula Jaldero	[Socio
Gerardo Estellés	[Socio
Joaquín Pardo de la Casta	[Socio
Juan Gutierrez Revuelta	[Socio
Juan Reig y García	[Socio
José María Settier y Gimeno	[Socio
Miguel Vicente y Almazán	[Socio
Eduardo Maestre	[Socio

FUENTE: Piqueras Arenas, José Antonio, ob. cit., pág. 534.

documentación, se establecieron en las ciudades de Córdoba, Zaragoza, Tarragona, Onteniente, Tortosa, Puigcerdá, Fraga y Orihuela²¹¹.

Fue, sin embargo, la de Valencia la que mostró desde su aparición un comportamiento más cercano a los principios desarrollados por los colectivos de *lobbies*, alcanzando en la década de 1880 una conducta más propia de lo que después serían las patronales agrarias. De la mano e iniciativa de la *Liga de Propietarios de Valencia*, un buen puñado de sociedades afines acometieron durante los años setenta y hasta 1887, una serie de actividad dirigidas a optimizar las capacidades malogradas desde 1868 por la élite económica y política, especialmente después de verse fracturada la alianza entre unionistas, progresistas y demócratas²¹². Desprovista del monopolio adquirido durante años en diferentes sectores de la Administración, la burguesía se vio abocada a ceder su confianza a las Ligas, toda vez que resultaba imposible mantener el mismo nivel de certidumbre depositado hasta esos momentos en los partidos.

Aunque, en efecto, las ligas de propietarios habían nacido exentas de cualquier empeño y carácter político, lo cierto es que, tanto sus asociados como la cúpula de dirigentes podían ocupar puestos de cierto relieve en las filas de los partidos en activo, lo que, en el fondo, facilitaba cualquier maniobra dirigida a mantener los puntos de vista de la entidad²¹³. Este aparente desinterés frente a la política, por otra parte nada nuevo entre las sociedades de propietarios y agricultores surgidas durante todo el siglo XIX,

²¹¹ *Diario de Córdoba*, número 7.054, jueves 26 de febrero de 1874, y número 7.061, correspondiente al viernes 6 de marzo de 1874. Asimismo en *El Pueblo Español*, número 6, 2 de febrero de 1878; *El Serpis*, número 858, 17 de marzo de 1881 y número 1.596, correspondiente al jueves 7 de junio de 1883; *La Lucha. Órgano de Partido Liberal de la provincia de Gerona*, número 2.922, viernes 25 de junio de 1886; *La Correspondencia de España*, número 10.498, domingo 19 de diciembre de 1886, y *La Crónica*, Orihuela, número 164, 20 de enero de 1887.

²¹² Piqueras Arenas. J. A., ob. cit., págs. 519 y 520. El propio autor considera a la *Liga Valenciana* como el primer grupo de presión español, puntualizando dicha afirmación dentro de lo que él determina como “la acepción moderna del término”.

²¹³ Nada se expresaba en este sentido entre los preceptos aprobados por la *Liga de Propietarios de Valencia*. No sucedía lo mismo con otras asociaciones similares en las que la mención a las restricciones, en cuanto a las prácticas políticas se refería, quedaban reflejadas de un modo significativo. Así, por ejemplo, en la normativa recogida para la *Liga de Propietarios de Tembleque*, en el primero de sus artículos se especificaba lo siguiente: “Esta Asociación, destituida de todo carácter político, tiene por objeto: 1º Consagrarse á la defensa mútua de los intereses generales de los propietarios. 2º Prestar á corto plazo en las épocas de recoleccion y sementera á los asociados que lo necesiten”. Véase el *Reglamento de la Liga de Propietarios de Tembleque, aprobado en Junta General celebrada el 12 de setiembre de 1875*, Imprenta de Cea, Toledo, 1876, pág. 3.

se mostraría aún más desfigurado, sobre todo a partir de las elecciones municipales y a Cortes celebradas la década de los ochenta. Precisamente, y como veremos después, el «apoliticismo» liguero propalado a la opinión pública iba a evidenciarse como la mejor herramienta para contragolpear a los poderes públicos, facilitando así la consecución de sus objetivos.

Con la aparición en nuestro país de las ligas de propietarios es indudable que se terminaría produciendo un saltó, mayor todavía si cabe, al dado por el resto de asociaciones agrarias hasta entonces en España. Las actividades llevadas en contra de los presupuestos del Estado, de control y denuncia en las huelgas de colonos y trabajadores del campo, de rechazo a los amillaramientos, así como de la política adversa derivada de las cargas contributivas y de los tratados de comercio celebrados con otros países, no vienen sino a demostrar, una vez más, el verdadero carácter de lo que era un auténtico grupo presión en todas sus formas.

Las primeras noticias que hemos encontrado, al respecto de este tipo de organizaciones en España, aparecen recogidas en un diario de Madrid en forma de mera «intención» para, según se explicaba en la nota publicada, promover las futuras Bases de lo que debía denominarse *Liga de Propietarios de Valencia*²¹⁴. Sin embargo, es la *Memoria* publicada en 1883, realizada con el pretexto de dar a conocer los trabajos efectuados desde su fundación y hasta el mes de diciembre de 1882, el documento más valioso que se puede consultar en este sentido. Como queda reflejado en el mismo, la idea ya se había intuido en las postrimerías de 1870, consecuencia del precario estado de la propiedad territorial en aquellos momentos.

A fines del año 1870, llegó á verse tan amenazada la propiedad territorial, que apenas se podía contar con la renta, al mismo tiempo que las predicaciones públicas, y las insinuaciones y excitaciones privadas, ponían en peligro hasta el derecho al capital y el dominio de las cosas. El aumento

²¹⁴ Caben exceptuar la *Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas* que funcionaba ya en 1869 en Madrid para conseguir el sostenimiento y la rebaja de las cargas fiscales, además del mejoramiento en la Hacienda del municipio, así como la *Asociación de Fincas Urbanas de Barcelona y su Zona de Ensanche*, creada en 1873 con fines similares. Ambas sociedades, no obstante, mantendrían continuos contactos con las recién creadas Ligas de Propietarios y Contribuyentes de todo el país. Algunos datos en Monlleó Peris, Rosa, ob. cit, pág. 238, y en *Cafè i quilombo. Els diaris de viatge de Joaquim Miret i Sans (1900-1918), Edició crítica i estudi a cura de Philip D. Rasico*, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2005, pág. 20. La mención a la *Liga de Propietarios de Valencia* aparece citada en *La Correspondencia de España*, número 4.826, viernes 10 de febrero de 1871.

de las contribuciones general de Estado, la arbitrariedad y abusos de los Municipios, el desconcierto administrativo, la impunidad en los delitos, la falta de seguridad en las personas y en los objetos, la anarquía enseñoreada por las plazas y la guerra civil por los campos, tenían, por otra parte, exhaustas las cajas, sin esperanza en el porvenir, y temerosas las gentes de un cataclismo²¹⁵.

De la reunión constitutiva del día 8 de enero de 1871, en los salones de la casa social de *Amigos del País* de Valencia, se pasó a la aprobación de los Estatutos y a la autorización administrativa de la provincia el 8 de febrero de ese año. Para el mes de mayo, la Liga había recibido ya comunicaciones de las Asociaciones de Propietarios de Madrid, Barcelona y Granada, solicitando las bases de la nueva institución y proponiendo estrechar las relaciones, una vez vistas las similitudes en cuanto a las aspiraciones y objetivos se refería²¹⁶. Fue necesario poco tiempo para acordar, por medio de la Junta Directiva, el nombramiento de una Comisión permanente en Madrid compuesta por “personas interesadas, celosas é ilustradas”, que sería constituida finalmente entre febrero y marzo de 1872.

En todo caso, nada más organizada la *Liga de Propietarios*, hubo de iniciarse una campaña firme en contra de las cargas contributivas y exacciones que en muchos pueblos seguían menoscabando a la clase contribuyente. Como muy bien se reconocía en la *Memoria* de 1883, fue la presión practicada desde los Ayuntamientos a la propiedad uno de los motivos que habían impulsado a crear la Liga en Valencia²¹⁷. En efecto, el vacío creado después de la supresión del impuesto de consumos por Figuerola fue inmediatamente compensado con la aparición de una nueva figura tributaria como era el «impuesto personal», concebido por el mismo Decreto de 12 de octubre de 1868 que anulaba el anterior. En su artículo 12 se podía leer: “Los Ayuntamientos podrán aumentar las cuotas otro tanto del importe de la suma para el Tesoro, á fin de atender á las obligaciones

²¹⁵ *Memoria de los trabajos y asuntos de que se ha ocupado la Liga de Propietarios de Valencia y su provincia, desde su fundacion en 8 de enero de 1871 hasta 31 de diciembre de 1882*, en adelante *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, Imprenta de Domenech, 1883, pág. 3.

²¹⁶ *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, pág. 5. *Diario de Córdoba*, número 6.222, domingo 7 de mayo de 1871.

²¹⁷ Tal y como se recoge en una de las notas finales de la *Memoria*, el primer acuerdo de los propietarios reunidos bajo la presidencia interina de José Antonio Berruezo, fue el nombramiento de una Comisión que gestionara de manera urgente la defensa de los propietarios apremiados por las recaudaciones municipales. *Ibidem*, págs. 47 y 48.

municipales. El gobierno fijará, oyendo á las Diputaciones, la parte proporcional que podrán añadir a las anteriores cuotas para completar el presupuesto provincial”²¹⁸. A pesar de todo ello, abolido igualmente por el Gobierno el impuesto personal, después de una Circular transmitida por el Ministerio de Hacienda en septiembre de 1870, y por la que se intentaba regular la buena y equitativa práctica en la exacción de los arbitrios municipales, muchas Administraciones burlaron tal disposición reclamando a los propietarios el impuesto ya suprimido.

Esta circunstancia provocó una reacción apresurada de la *Liga de Propietarios de Valencia*, tan solo un día después de quedar constituida la misma, elevando una exposición al Gobernador de la provincia y marchando una Comisión a Madrid, encabezada entonces por José Antonio Berruezo y José Soriano Plasent, que finalmente hubo de ser costeada por ellos mismos²¹⁹. También en enero, la *Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia*, en connivencia con la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, dirigió una exposición al ministro de Hacienda solicitando que se pusiera freno al empeño impositivo de los municipios, insistiendo en la necesidad que existía de reformar la Ley de arbitrios. Todavía, aquel año de 1871, el Gobierno abordó la posibilidad de aplicar un impuesto especial a los vinos y aceites, circunstancia que afectaba directamente a las provincias del levante valenciano. El hecho redobló el descontento en las Cortes e hizo que distintas instituciones se unieran a las protestas, destacando la Diputación de Alicante, la *Asociación para la Defensa de la Producción Nacional de Valencia*, la *Sociedad Valenciana de Agricultura* y la *Liga de Propietarios* de aquella provincia, sumándose poco después los municipios de Requena y Utiel, afectados por las repercusiones que podía tener la medida en el sector vinícola²²⁰.

²¹⁸ *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Apéndice cuarto al Núm. 12*, 24 de febrero de 1869, Tomo I, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870, pág. 41. Ha de tenerse en cuenta que la cuota impositiva para el Tesoro había pasado del 14 por ciento de la riqueza entre los años 1856 y 1869, al 14,5 por ciento en los presupuestos para 1869-1870. La presión sobre la tierra se vio fuertemente incrementada en el ejercicio presupuestario siguiente llegando al 18 por ciento. Los propios municipios y posteriormente el Estado, una vez asumidas las competencias sobre la cuota impositiva, podía aumentar la contribución hasta un 20 por ciento. Con la autorización hecha a los Ayuntamientos para hacer lo propio hasta un 25 por ciento, con el fin de cubrir sus propios déficits, la sobrecarga podía llegar en algunos casos hasta el 45 por ciento, lo que hacía de la tierra un objetivo fiscal incuestionable. Piqueras Arenas. J. A., ob. cit., pág. 527.

²¹⁹ *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, págs. 49 y 50

²²⁰ Monlleó Peris, Rosa, ob. cit., pág. 173. También en Piqueras Arenas. J. A., ob. cit., págs. 527 y 528.

El diputado por Requena, Vicente Bru y Martínez, presentó en julio de ese mismo año en la Cámara algunas argumentaciones en relación con los graves trastornos que podían producirse entre los cosecheros si éstos abandonaban sus propiedades por falta de rentabilidad, ya que las tierras destinadas a la vid difícilmente podían ser empleadas para la producción de otros frutos. A su vez, las exposiciones elaboradas por los concejos de Requena y Utiel exigían un aumento del arancel aplicado a los aguardientes extranjeros. Las reparaciones referidas al impuesto personal pudieron solventarse gracias la campaña ejercida sobre el ministro de Hacienda, obteniendo así la Liga de Propietarios uno de sus primeros triunfos, éxito que, sin embargo, no sería secundado por todos los Ayuntamientos. Reunida nuevamente con carácter extraordinario en Valencia el 17 de agosto de 1871, junto a diputados y senadores de la provincia, los propietarios solicitaron la ayuda y contribución de los representantes en las Cortes para alcanzar con su prestigio y su influencia los objetivos fijados meses atrás²²¹.

Con la presentación de los presupuestos para el período de 1872 a 1873, el Gobierno intentaba un aumento de la contribución territorial, al tiempo que facultaba a los Ayuntamientos para imponer un incremento de hasta un 30 por ciento de la cuota contributiva. Además, con la aprobación de una exacción adicional de 700 millones de reales, con el fin de cubrir el déficit del Tesoro contraído por la República, los propietarios se vieron en la necesidad de acudir al Presidente del país como último recurso para evitar una carga excesiva en sus patrimonios. Precisamente, en la exposición se recordaba el daño irreversible que se estaba procurando a la agricultura y los escasos medios que tenía para su modernización.

Nadie puede poner en duda que en los presupuestos ordinarios, no solo se ha llegado á toda la altura del límite posible de tributacion de la propiedad, tributacion por cierto que ha de parecer fabulosa á las naciones civilizadas, cuyas cuotas pueden consultarse, sino que es de todos sabido que ese límite, aunque se tenga por posible en apurados casos, no deja de ser funesto cuando se hace un tipo de progresiva ascension. Buena prueba de esto es el

²²¹ *Ibidem*, pág. 174. A la Junta extraordinaria acudieron, además de los socios de la Liga, los diputados José Soriano Plasent, Trinitario Ruiz Capdepón, Pascual Fandos y Fandos, José Antonio Guerrero y Ludeña, D. F. Musoles; los señadores Cristóbal Pascual y Genís, Manuel Pascual y Silvestre y Manuel Benedito. Asistió igualmente el diputado por Castellón, Juan Domingo Ocon, ofreciéndose a la Liga de Propietarios para el logro de sus aspiraciones. Véase la *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, pág. 50.

estado de languidez de la agricultura, que privada de hacer gastos reproductivos y de mejora del cultivo que aumenten la producción, tiene que contraerse á los trabajos mas indispensables y económicos, únicos que le permiten su abatida y precaria situación²²².

Para la campaña presupuestaria de 1873 a 1874, el Ministerio de Hacienda adicionó un proyecto que, entre otras cosas, incluía el sostenimiento del culto, así como del clero a cargo de cada provincia. Las protestas de la Liga llegaron hasta las Cortes, consiguiendo su eliminación; gastos que continuarían a cargo del Estado. No obstante, pronto se vio aumentada la contribución territorial al 20 por ciento, más un 4 por ciento adicional para los Ayuntamientos. La medida apenas tuvo vigencia tras la abdicación de Amadeo de Saboya y la elección de un nuevo Gobierno que terminaría situando la tasa contributiva en un 18 por ciento, cuota que en gran medida satisfacía las aspiraciones de la Liga²²³.

Entre las acciones encaminadas a moderar la presión contributiva se fijó la posibilidad de reunir a la Comisión de la Liga valenciana en Madrid con Francisco Serrano, duque de la Torre y presidente del Ejecutivo de la República, además de hacerlo con varios ministros y el Director General de Contribuciones²²⁴. En ocasiones eran los propios diputados, simpatizantes o pertenecientes a las Ligas de varias provincias, quienes actuaban al unísono contra los recargos anunciados por la Administración y el Gobierno, aludiendo que la propiedad no necesitaba más aumentos²²⁵. El mayor peso impositivo sobre las clases productoras venía coincidiendo con un cierto período de bonanza económica, contrastando con la depresión que se había

²²² En efecto, una Ley de 25 de agosto de 1873, autorizaba al Gobierno de la República a llevar a la práctica una serie de cobros con el fin de extinguir el déficit del Tesoro. *Gaceta de Madrid*, número 240, jueves 28 de agosto de 1873, pág. 1517. *Exposicion que la Liga de Propietarios de Valencia y su provincia eleva al Excmo. Sr. Presidente del Poder Ejecutivo de España sobre la ruina inevitable que ha de causar en la propiedad la exaccion del empréstito forzoso*, Imprenta de José Domenech, Valencia, 1873, pág. 2, y *La Agricultura Valenciana*, número 10, 24 junio de 1873, págs. 127 a 136. Asimismo, en *La Lucha. Órgano del Partido Liberal de la provincia de Gerona*, número 717, miércoles 19 de noviembre de 1873, y *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 1.684, domingo 9 de noviembre de 1873. A través de la prensa la *Liga de Propietarios de Valencia* dirigió un comunicado de agradecimiento a los diputados valencianos Sorni y Barberá por su labor y votación contra los presupuestos. *La Correspondencia de España*, número 5.517, domingo 5 de enero de 1873.

²²³ *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, págs. 12 y 13.

²²⁴ Las mencionadas reuniones tuvieron lugar en los primeros días de febrero de 1874. *La Correspondencia de España*, número 5.911, jueves 5 de febrero de 1874.

²²⁵ *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.415, viernes 21 de abril de 1876, y *Diario de Córdoba*, número 7.687, sábado 22 de abril de 1876.

iniciado en Europa en los primeros años de la década de los años setenta. Una recuperación motivada por el final de la guerra carlista, la estabilidad política sobrevenida con el período Alfonsino y, especialmente, por la fuerte demanda exterior de vinos, alcoholes, así como de productos derivados de la minería española. Un equilibrio que se fracturaría hacia la mitad de los años ochenta del XIX.

En esos años, el sector primario de la economía seguía aportando más de la mitad de la renta a nivel nacional, ocupando dos tercios de la población activa. Sector que mantenía todavía una estructura con importantes preferencias hacia el cultivo de los cereales, la vid y el olivo. En 1876, la clase propietaria volvió a verse sacudida por los planes financieros que la Hacienda pública manejaba y que debían quedar incorporados al proyecto de presupuestos generales correspondientes a 1876-1877. Además de la subida del 2 por ciento sobre la contribución territorial, entre los objetivos presupuestarios se facultaba al Banco de España a recaudar, por espacio de doce años, las cantidades correspondientes a las contribuciones, recayendo en el Banco Hipotecario el ingreso de los derechos de Aduanas, amén de una cantidad igual a 30 millones de pesetas, en concepto de abono y amortización de la deuda flotante. Una suma que en aquel momento implicaba la aceptación de unas obligaciones considerables, a las que había que agregar los correspondientes intereses. En cualquier caso, y en cuanto al cobro de las contribuciones se refiere, a ambas entidades se las dotaba para recaudar 280 millones de reales, lo que suponía un total de 100 millones de pesetas. El proyecto presupuestario encaramó a propietarios, comerciantes e industriales valencianos, estando a la cabeza la *Liga de Propietarios* de la provincia, al no considerar adecuado que se elevara el tipo de tributación. La exposición dirigida a las Cortes censuraba la inutilidad de tales apremios y explicaba: “Y si esto es tan esencial para la justa apreciación y proporcional distribución de los impuestos, ¿qué ha realizado ningún presupuesto, en su sección de gastos, para concretar estos á la suma real de los ingresos y evitar los déficit ruinosos? ¿Se han atendido jamás las exigencias de la opinión pública que, de tan larga fecha, viene reclamando reformas y economías radicales?”²²⁶.

²²⁶ “Exposición que la liga de propietarios, comerciantes é industriales de Valencia eleva á las Cortes con motivo del proyecto de presupuestos generales del Estado para el año económico 1876-77 para que no se eleve el tipo de tributación á la contribucion directa”, en *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.442, domingo 21 de mayo de 1876, y número 2.443, martes 23 de mayo de 1876.

Si la situación ya venía siendo mala para las expectativas territoriales y para todo lo relacionado con la agrícola, el anuncio realizado, justo un año después del aumento del 20 por ciento sobre lo que anualmente venía contribuyendo la capital valenciana por el impuesto de consumos, atrajo todas las iras de terratenientes y agricultores. En una temporada marcada por la sequía en los campos, la *Liga de Propietarios de Valencia* no tardó en dirigir sus críticas al ministro de Hacienda, al mismo tiempo que justificaba la imposibilidad de asumir la nueva acometida tributaria.

viendo los campos secos y calcinados, sin esperanza de salvación: el comercio arruinado y la industria paralizada, viviendo una vida económicamente prestada, á merced de la usura, ¿como puede Valencia aceptar el aumento del 20 por 100 en la tributación por consumos? La Liga que conoce el verdadero estado de Valencia, no quisiera ocultar nada; pues que si algo calla, es por la repugnancia de esponer ante V. E. un cuadro mas triste y desconsolador. No mida V. E. la fuerza contributiva de esta capital por la calculada ostentacion y quizás vano esplendor de alguna individualidad; la inmensidad de los habitantes está devorando en silencio la amargura de muchos desastres y de grandes aflicciones, á las cuales no halla pronto remedio²²⁷.

Es de sobra conocido que la práctica recaudatoria adolecía de medios para verificar las realidades sobre la riqueza rústica y territorial, lo que daba lugar en numerosos casos a ocultaciones en los bienes, en la calidad de los mismos, incluso en la extensión de las tierras cultivadas, problemas que la Administración no lograba solucionar, obligándose por ello a tener que aumentar cada cierto tiempo las cuotas de los contribuyentes. Algunos sectores recelosos e indiferentes con las gestiones aportadas desde el asociacionismo privado habían comenzado a censurar parte del comportamiento del mismo argumentando que poco o nada se había conseguido. En este sentido, la propia *Gaceta Valenciana* subrayaba en 1877: “¿De qué nos han servido tantas ligas de propietarios y sociedades económicas? ¿De qué tantas lamentaciones jeremiacas? Hoy estamos peor que ayer; ayer peor que en tiempos pasados, y poco á poco vamos

²²⁷ *La Crónica Meridional*, número 5.160, miércoles 18 de abril de 1877. La presión fiscal aplicada a la agricultura llegó ser discutida, incluso, por la *Asociación de Ingenieros Agrónomos* que, en un artículo titulado “La Agricultura y los impuestos”, llegaba a plantear el problema vivido por muchos propietarios-agricultores que pagaban hasta el 50 por 100, alcanzando en algunos casos la cifra del 100 por 100 de sus rentas en cargas tributarias. *Anales de Agricultura*, Tomo II, enero de 1878, págs. 435 a 437.

marchando hacia la ruina de la propiedad”. No es una casualidad el hecho de que algunas argumentaciones esgrimidas valorasen la posibilidad de asumir el desempeño de prácticas políticas, lo que implicaba la formación de colectivos de propietarios distintos a los establecidos formalmente hasta esos momentos. La *Gaceta* justificaba su creación y afirmaba al respecto: “La defensa, pues, de la propiedad sin el arte político es una quimera. Y por esto nosotros que somos propietarios, y proudhonianos, somos políticos y no pertenecemos á ninguna liga”²²⁸.

Con las excepciones marcadas por las incertidumbres que podían surgir como consecuencia de los agentes naturales y de los rigores del clima, la actividad de las ligas de propietarios en España tuvo dos momentos importantes, hasta 1887, en lo que a las manifestaciones contra los impuestos y la política presupuestaria se refiere²²⁹. Desde Madrid, los contribuyentes de la capital habían iniciado a comienzos de 1881 varias reuniones organizadas por la *Asociación de Propietarios*, el *Círculo Mercantil* y la *Económica del País*, con el propósito de estudiar el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno. Entre los nombres designados por los propietarios figuraban los de Villanova, Barroeta, y el de Rodó y Casanova, que debían unirse a las personas designadas por el resto de asociaciones²³⁰. Hacia el mes de mayo quedó constituida la Junta que debía formular un proyecto de presupuestos alternativo, reunión que siempre estuvo presidida por el senador Fernando Corradi, máximo responsable de la *Asociación de Propietarios de Madrid*²³¹. Los trabajos quedaron ultimados a finales de ese mismo año. Sin embargo, en los primeros meses de 1882 varios de los propietarios más acaudalados, convocados en la redacción de *El Día*, tomaron la decisión de negarse a pagar la contribución territorial.

²²⁸ “La propiedad y la política”, artículo publicado originalmente en la *Gaceta Valenciana*, y reproducido por *El Turolense*, número 149, martes 12 de junio de 1877.

²²⁹ Efectivamente, la *Liga de Propietarios de Valencia* acordó a comienzos del verano de 1877, elevar a las Cortes dos exposiciones solicitando la exención de la contribución para los pueblos que habían sido afectados por la sequía y el pedrisco. *La Mañana*, número 437, sábado 30 de junio de 1877.

²³⁰ En la prensa madrileña la noticia era destacada por el interés que habían despertado entre los ciudadanos los presupuestos previstos para el ejercicio económico siguiente. En un principio se indicaba: “La Liga de contribuyentes de Madrid ha empezado ayer sus trabajos acerca de las economías y reformas que puedan realizarse en los presupuestos generales del Estado”. Véase *La Mañana*, número 1.572, jueves 31 de marzo de 1881.

²³¹ La Junta tenía en encargo de realizar un plan general de presupuestos del Estado que fuera capaz de satisfacer las necesidades públicas, minorando en la medida de lo posible las altas contribuciones que venían efectuándose. *La Correspondencia de España*, número 8.392, lunes 14 de marzo de 1881, y número 8.453, viernes, 20 de mayo de 1881.

Una actitud que sería secundada por el marqués de Riscal, presidente de la *Liga de Contribuyentes de Madrid*²³². Con todo, la gravedad de los hechos, aunque destacados por la prensa, apenas llegaron a alcanzar la suficiente repercusión y seguimiento.

Casi al mismo tiempo, *La Liga de Propietarios* en Valencia, junto a varios ayuntamientos de la provincia, intentaron con poco éxito alcanzar una rebaja que colocara en un 16 por ciento las tasas contributivas, después de conocerse las nuevas cuotas por consumos y el considerable aumento que se producía sobre las anteriores. La Liga veía en la Real Orden aclaratoria sobre el pago de la contribución de la sal, de 31 de diciembre de 1881, un abuso al tenerse que abonar en los lugares donde residían los bienes. La medida, desaprobada y criticada en una exposición dirigida a las Cortes por los propietarios valencianos, pedía que el impuesto fuera pagadero allí dónde tuviera su residencia cada individuo. Lo contrario implicaba una fuerte adición al gravamen aplicado a la contribución territorial, existiendo quienes debían satisfacer por un mismo concepto una contribución en cada localidad²³³.

No cambiaron mucho las cosas hasta la Reforma sobre la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, presentada en las Cortes en 1885, introducida en los presupuestos de 1885-1886. En una réplica del diputado Morte, desde las filas del partido liberal fusionista, al entonces ministro de Hacienda, Fernando Cos-Gayón Pons, se hacía sentir que dicha reforma no contemplaba la retirada de los amillaramientos como forma para evaluar la riqueza. Un sistema que en el fondo venía a ser el mismo. En palabras de Moret, la cuestión quedaba resumida de la siguiente forma: “El Sr. Ministro de Hacienda ha comprendido que la base de la contribucion territorial, que los actuales amillaramientos y catastros no responden á la realidad de las cosas, y propone la reforma de los amillaramientos sobre la base que contiene el proyecto que discutimos; es decir, que los amillaramientos van á

²³² *El Serpis*, número 1.216, viernes 17 de febrero de 1882, y *El Eco de la Provincia de Gerona*, número 66, sábado 18 de febrero de 1882. La afirmación de la negativa del marqués de Riscal fue publicada con detalle en el diario alicantino *El Eco de la Provincia*, número 727, martes 21 de febrero de 1882. Incluso llegaron a extenderse algunos comentarios que apuntaban a que se trataba solo de rumores que estaban siendo difundidos por la prensa conservadora. A este respecto puede consultarse *La Correspondencia de España*, número 8.733, sábado 18 de febrero de 1882.

²³³ *La Crónica Meridional*, número 6.680, viernes 2 de junio de 1882, y *El Liberal. Diario Democrático de Menorca*, número 278, viernes 2 de junio de 1882.

continuar siendo base de la estimación de la riqueza y van á modificarse, como van á modificarse las cartillas evaluatorias, reduciéndose á un tipo único. Pero el sistema continúa siendo el mismo”²³⁴.

En este mismo sentido se había manifestado la *Liga de Propietarios de Valencia y su provincia*, en su exposición a las Cortes de abril de 1885, al incorporar una vía para paliar las dificultades ocasionadas por los amillaramientos. Una opción que finalmente supondría un éxito más para los socios valencianos y para su asociación. En la amplia exposición remitida a la Cámara, solicitando la reforma del proyecto de ley sobre la contribución territorial, la Liga justificaba de esta manera su «reparación»:

Se ha hablado de las ocultaciones, y para descubrirlas propone el Sr. Cos-Gayón un reto que en la rectificación de los amillaramientos (arts. 5º y 6º del proyecto de ley sobre contribución territorial). Trabajo inútil: los amillaramientos no se han rectificado en más de cinco años que hace que se recogieron las cédulas; no se rectificarán, ó se rectificarán mal, á pesar de las penas y las recompensas que se decreten para las juntas de evaluación, porque, ante el espíritu confiscador de la Hacienda y la presión administrativa, el contribuyente aislado, débil, de dobla y quebranta; pero no se dá por vencido, y emplea el arma de una resistencia pasiva, que embota la actividad más enérgica. Las ocultaciones, que indudablemente no tantas como se cree, porque somos una nación pobre), no se descubrirán por el Estado mientras pretenda aprovecharse él solo del descubrimiento, mientras el contribuyente de buena fé, que paga por impuesto directo el 26/58 por 100 de su renta, sepa que, sin beneficio alguno, trae á participar de su injusta y excesiva tributación al que convenza de defraudador. Un medio existe para concertarlo todo, y aún para aceptar el empeño fundamental del Ministro, por oneroso que sea el de convertir en tipo fijo el impuesto territorial. Ese medio lo propuso, hace poco tiempo, esta Liga, y consiste en el encabezamiento²³⁵.

A fin de proponer los medios más adecuados para actualizar y hacer más eficaz el catastro y, en consecuencia, la apreciación de la riqueza sobre la que se debían calcularse las actividades contributivas, la Liga ya había organizado una Comisión en 1879. A ella habían acudido miembros de la

²³⁴ *El Guadalete*, número 8.944, jueves 21 de mayo de 1885.

²³⁵ “Documentación relativa a la exposición redactada por la Liga de Propietarios de Valencia y su Provincia informando a las Cortes de los perjuicios que ocasionarían a la propiedad los proyectos de Presupuestos del Estado”, ARSEAPV, caja C-233, legajo XI, signatura número 3, año 1885.

Sociedad Económica, así como de la *Valenciana de Agricultura*, empero, los resultados nunca fueron completamente atendidos²³⁶. En diciembre de 1885 y tras la reunión celebrada entre Moret, Ruiz Capdepón y García Monfort con el ministro de Hacienda sobre la contribución territorial e industrial, se llegó a un principio de acuerdo en el que se aceptaba el sistema de encabezamiento. Por último, se acordó constituir una Junta compuesta por miembros de la *Liga de Propietarios*, además de la *Sociedad Económica de Amigos del País* y del *Ateneo Mercantil* de Valencia para promover un proyecto de bases que debía estudiarse en el Ministerio de Hacienda²³⁷.

- Política y comportamientos patronales

Si las demandas surgidas al amparo del asociacionismo agrícola y latifundista habían tenido una lectura positiva, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la paulatina y creciente incorporación a la actividad política del mismo dio lugar a actitudes todavía no experimentadas hasta ese momento. La incuestionable “politización” de las sociedades agrícolas no hizo sino incorporar, más allá de lo que hasta entonces se había producido, un elemento nuevo en el proceso de modernización política surgido tras la Restauración de 1875, añadiendo nuevos datos a nuestro

²³⁶ ARSEAPV, caja C-211, legajo XXI, signatura número 9, año 1879. De igual forma, puede consultarse la *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, págs. 17 y 18. De la misma manera, en febrero de ese año se había dirigido una exposición al Gobierno por parte de la *Liga de Valencia* y otras asociaciones, con el fin de advertir de los daños que ocasionaría a la propiedad el “Reglamento para la rectificación de los amillaramientos de la riqueza territorial y sus agregadas”. *El Serpis*, número 245, sábado 22 de febrero de 1879, y en la *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 291, sábado 8 de marzo de 1879.

²³⁷ *El Liberal*, número 1.342, martes 15 de diciembre de 1885. Entre las sugerencias expuestas por la *Liga de Propietarios de Valencia* al Gobierno, y en relación a los encabezados, la misma advertía lo siguiente: “Aun cuando se sume á los 166 millones de pesetas de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, el aumento del 2 por 100 sobre la riqueza imponible, no llega el total á los 180 millones que presupone el Sr. Cos-Gayón, pero es de creer que los propietarios cultivadores y ganaderos se resignarían á aceptar tan alta cifra, con arreglo á la distribución del año último, si no se restableciese el impuesto de la sal y se les concedieran encabezamientos locales sobre unas bases parecidas á las propuestas por esta Liga, con sus dos condiciones fundamentales: 1ª, que entregándose á los encabezados la rectificación de los amillaramientos, sólo á ellos, no á la Hacienda, ha de aprovechar, durante los cinco años del contrato, el descubrimiento de la riqueza oculta; y 2ª, que aun transcurrido este plazo, el Estado no podrá aumentar el cupo mientras el impuesto no quede reducido al 16 por 100 al Tesoro, y que si todavía descende de este tipo, la Hacienda solo utilizará la mitad del importe de las ocultaciones descubiertas, hasta que el tipo baje al 12 por 100, que comprenda la cuota del Tesoro y el recargo del municipio”, ARSEAPV, caja C-233, legajo XI, signatura número 3, año 1885.

registro acerca del carácter y funcionamiento del sistema liberal y democrático que permanecería ya vigente durante el resto de la centuria. Después de los ensayos políticos vividos desde 1868, la Constitución de 1876 estableció algunas restricciones formales al principio de representatividad, destacando la soberanía compartida por las Cortes con la Corona, el establecimiento de un Senado formado por nobles y otras personalidades de derecho propio del mundo civil y eclesiásticas, o las prerrogativas concedidas al Rey.

En todo caso, las limitaciones impuestas en España no diferían mucho de las acordadas por otros Estados europeos, lo que hacía que la Cámara Baja fuese esencial para providencia y estabilidad de los distintos gobiernos. Si bien es cierto que la vida legal de senadores y diputados debía renovarse cada cinco años, la realidad conllevó que a lo largo de todo el período de Restauración borbónica se celebraran veintiuna elecciones. Es decir, un proceso plebiscitario cada dos años y medio, desde la primera legislatura iniciada en enero de 1876 hasta la última en abril de 1923. Esta circunstancia provocó que el país se viera inmerso en sucesivas convocatorias electorales durante los años 1876, 1879, 1881, 1884, 1886 y 1891, por lo que respecta al período que aquí se estudia, siendo el intervalo de tiempo más amplio el surgido tras las elecciones de 1886²³⁸.

Las ligas de propietarios y contribuyentes habían convenido en declarar su «choque» frontal al exagerado fervor surgido con la política. Un ejemplo de lo que aquí exponemos se produjo en la reunión celebrada por las ligas de contribuyentes y otras sociedades, en la ciudad de Córdoba en abril de 1875. En ella se reiteró la necesaria unión y concordia que debía tomar la clase propietaria²³⁹. Celebradas en 1876 las primeras elecciones tras el restablecimiento monárquico de Alfonso XII, la Ley electoral de 1878 restituyó el sufragio restringido, limitando la votación al 5 por ciento de la población, al tiempo que modificaba la «geografía» electoral, combinando distritos rurales en los que solamente debía elegirse un representante, con otros cuyo derecho les permitía elegir a varios diputados, conformados estos últimos por las principales capitales de provincia y ciudades importantes con

²³⁸ Dardé, Carlos, “El comportamiento electoral en España, 1875-1923”, en *Documentos de Trabajo del Seminario de Historia Contemporánea*, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Documentos de Trabajo del Seminario de Historia Contemporánea, volumen I, 1996, pág. 87.

²³⁹ *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.114, miércoles 21 de abril de 1875.

algunas áreas de su entorno rural. El proceso electoral culminaba con la potestad otorgada a los alcaldes para presidir el mismo.

Iba a ser la Universidad de Valencia el primero de los escenarios en el que debían dilucidarse quiénes representarían en las elecciones de 1879 a propietarios, agricultores y contribuyentes. Durante algunos días del mes de abril de aquel mismo año, la prensa difundió la noticia en la que miembros de la *Sociedad Económica*, de *Agricultura* y de la *Liga de Propietarios de Valencia* estaban reunidos para designar a aquellas personas que mejor pudieran representar los intereses de las tres asociaciones²⁴⁰. Entre los intervinientes, nombres como los de Roig, Amorós, Cepeda, Navarro Reverter, Villalobos y Olías, se mostraron contrarios al sistema de designación en el que la participación se reservaba a aquellos candidatos con capacidad para manejar los comicios. Aunque la idea de la reunión había surgido de las filas moderadas, la nueva propuesta incluía romper el procedimiento con el fin de poder escuchar las voces de quienes sostenían la producción, la riqueza y la propiedad, lo que inevitablemente obligaba, en opinión de los participantes, a promover unas prácticas políticas más abiertas y sinceras. Se acordó nombrar una comisión compuesta por Villalobos, Cepeda, Olías, Pérez Pujol, Gras, Capdepón, Navarro Reverter y Llorente, cuya misión debía ser la redacción de un manifiesto donde quedara registrado el sentir de todos los sectores representados en las asociaciones²⁴¹.

La respuesta de los propietarios y contribuyentes de la capital de España se produjo a finales del mes de abril, con el intento de visitar al ministro Silvela y participarle los deseos de la *Liga de Contribuyentes*, del *Círculo de la Unión Mercantil* y de la *Asociación de Propietarios de Madrid*, para que propietarios, comerciantes e industriales tuvieran representación en el Ayuntamiento de la capital²⁴². Esta circunstancia suponía la presentación a las elecciones municipales de personas integradas en el asociacionismo madrileño, hecho que iba a ser anunciado por la prensa el

²⁴⁰ La reunión del Paraninfo se consideró una respuesta contra los «encasillados». Castillo García, José Vicente, *La política de los camaleones. Los conservadores valencianos durante la Restauración (1875-1923)*, Universitat de València, 2002, págs. 34 a 36. Véase también *La Correspondencia de España*, número 7.771, jueves 3 de abril de 1879, y *El Turolense*, número 913, viernes 11 de abril de 1879.

²⁴¹ *La Correspondencia de España*, número 7.772, viernes 4 de abril de 1879.

²⁴² Francisco Silvela ocupaba la cartera de Gobernación. *La Correspondencia de España*, número 7.793, viernes 25 de abril de 1879.

día 1 de mayo de manera oficial con una nota escueta, pero bastante significativa: "La liga de Contribuyentes y la asociación de Propietarios presentarán en las futuras elecciones municipales, candidatos de su seno que representen genuinamente los intereses de dichas asociaciones, con abstracción completa de la política"²⁴³.

La intención de las ligas de pasar a una acción más eficaz a través de la participación política en las instituciones del Estado era simultánea con los sucesivos agradecimientos a diputados y senadores, consecuencia de las constantes diligencias y de la actividad realizada en las Cortes por simpatizantes hacia la causa propietaria. Una «ayuda» que, en muchos casos, era menoscabada y no siempre bien entendida al tratarse de personas con diferentes ideologías. En este mismo orden de cosas, la *Liga de Propietarios de Valencia* reunida en julio de 1879, en el local de la *Económica* de la ciudad, preparó varias cartas de reconocimiento a los diputados Luis Mayans, Cristino Martos y Ruiz Capdepon, como una muestra más del agradecimiento por los esfuerzos realizados en defensa de los pueblos afectados por la sequía. En el acuerdo no se habían tenido en cuenta las distintas filiaciones políticas, ya que entre los nombres propuestos, Mayans pertenecía a las filas moderadas, Martos militaba en las del partido demócrata, y Capdepón hacia lo propio en las gradas constitucionales. Tampoco había encontrado el suficiente respaldo, entre el resto de representantes en el Congreso, la proposición de ley que pretendía condonar el pago de las contribuciones a quienes se habían visto afectados por los daños en la agricultura²⁴⁴.

En este punto, las divisiones presentes en las filas del conservadurismo valenciano eran evidentes, en un momento en el que los planteamientos de las Ligas para acceder a las tareas políticas se iban haciendo más evidentes. Entre la incertidumbre y la esperanza de lograr algunos cambios, el antiguo Gobernador Civil y diputado a Cortes, Cirilo

²⁴³ *La Correspondencia de España*, número 7.799, jueves 1 de mayo de 1879, *El Bien Público*, número 1.844, miércoles 7 de mayo de 1879.

²⁴⁴ En uno de los artículos publicados aquellos días se matizaba la postura del resto de representantes valencianos en el siguiente sentido: "No ha producido buen efecto en Valencia (y de ello se ha hecho eco la Liga) que todos los diputados de la provincia no apoyaran cual debieran la citada proposición. Laméntanse de que alguno abandonara la defensa de los intereses del país después de ofrecerla y de que otros hayan obrado con calculada tibieza", en *La Correspondencia de España*, número 7.887, lunes 28 de julio de 1879.

Amorós, describía así en una carta a Luis Mayans los retos que debían afrontarse en un futuro: “Las sociedades de Amigos del País, Valencia de Agricultura y Liga de Propietarios se reunirán y presentarán candidatos que sin miras políticas y sin oposición al gobierno, representen los intereses permanentes de la provincia. Se citan ya los nombres de Juan Reig García, Juan Navarro Reverter y algún otro. Esto que es una gran aspiración no sé qué resultado tendrá. Es por de pronto una gran protesta, y puede ser más adelante el principio de una regeneración”²⁴⁵. El problema era el acceso a los poderes locales y provinciales desde los que, una vez ocupados, pudieran servir de acicate para la defensa de los intereses de propietarios, agricultores y comerciantes. Una decisión que exigía la obtención de unas elevadas cuotas de poder dentro de una Administración, subyugada a la idea «canovista» y dominada por un firme propósito bipartidista, a la vez que recelosa de cualquier capacidad que pudiera surgir del «pueblo» para gobernarse.

En último término, los obstáculos no fueron motivo para que se organizara un manifiesto electoral aquel mismo año, abogando claramente por una representatividad de los intereses corporativos valencianos en las instituciones políticas²⁴⁶. Además, la dotación de contenido político a las acciones ligueras, no exceptuaba que se mantuviera la exhortación a combatir con la organización y con la creación de nuevas asociaciones las reiteradas dificultades que la agricultura venía manifestando en otros puntos del país.

En esto están conformes también algunos de los principales propietarios de viñedos y fincas rurales, los cuales me manifiestan que están dispuestos a arrendar sus tierras, con el fin de estimular a los que persuadidos de que su bienestar depende del trabajo, se procuren con él una posición relativamente independiente que satisfaga sus modestas necesidades y las permita algún ahorro. Este, este es el medio más eficaz para combatir el mal que Andalucía deplora. Unáanse los propietarios, tomen sus acuerdos y formen su Liga, marchando unidos en cuanto tienda a conjurar la presente situación²⁴⁷.

²⁴⁵ El fragmento de la carta enviada por Cirilio Amorós a Luis Mayans, el 29 de marzo de 1879 está recogida en Castillo García, José Vicente, ob. cit., págs. 34 a 36.

²⁴⁶ El manifiesto estaba firmado por Ángel Villalobos, Antonio Rodríguez de Cepeda, Vicente Oliag, Cirilo Amorós, Eduardo Pérez Pujol, Juan Reig García, Teodoro Llorente y Juan Navarro Reverter. *Ibidem*, pág. 36.

²⁴⁷ *El Bien Público*, número 3.031, sábado 17 de marzo de 1883.

El lento desarrollo experimentado en los primeros años ochenta del siglo XIX por el asociacionismo agrícola y por la propiedad, en lo que a su implicación política se refiere, adquirió un nuevo impulso a partir del mes de mayo de 1885, con la designación, por parte de contribuyentes y propietarios, de nuevos candidatos a los comicios municipales, independientemente de los partidos que venían singularizando la vida política a nivel nacional²⁴⁸. En lo que a este punto se refiere, los llamados partidos de notables o parlamentarios instalados durante la Restauración, mantenían desde hacía algún tiempo el control del sistema bipartidista, a excepción del gobierno breve protagonizado por la Izquierda Dinástica en 1883. A este propósito contribuían, tanto el partido conservador como el liberal, formados ideológicamente entre las clases propietarias, y a los que se unían asiduamente elementos de las clases medias que hacían de la política un medio para no quedar estancados socialmente.

En los inicios de la primavera de 1885 se convino la necesidad de organizar en el Congreso de los Diputados una reunión en la que, además de Sagasta y Martos, pudiera contarse con los responsables de la *Liga de Contribuyentes*, la *Liga de Propietarios*, así como de la *Unión Mercantil*. Tanto Martos como el propio Sagasta, habían mostrado su interés por atraer a un buen número de independientes, dando por buena una coalición entre el partido liberal y el grupo de propietarios interesados en acceder a la pugna política. Como se intentó dar a entender entonces, por parte de los «aspirantes» los propósitos no iban más allá de la simple obtención en las urnas del mayor número de representantes independientes que tuvieran reconocido un alto grado de moralidad²⁴⁹. Terminadas las conversaciones, la *Liga de Contribuyentes* asumió el compromiso formal de proponer como candidatos a su presidente, el marqués de Riscal, además de los señores San Millán y Tutau. Al acuerdo se sumó la *Asociación de Propietarios*, nombrándose para la ocasión una comisión que pudiera designar a los candidatos que habrían de unirse al partido liberal²⁵⁰. Únicamente el *Círculo*

²⁴⁸ Los primeros acuerdos se habían llevado a la práctica a través de la *Liga de Contribuyentes de Madrid*, la *Sociedad de Propietarios* y el *Círculo de la Unión Mercantil*. El hecho, como ya sucediera unos años antes, además de ser destacado, fue muy comentado como un ejemplo a imitar. *El Guadalete*, número 8.903, miércoles, 1 de abril de 1885.

²⁴⁹ Así se recogía en un artículo publicado en el periódico pamplonés *Lau-Buru*, número 965, martes 21 de abril de 1885.

²⁵⁰ En efecto, la comisión ejecutiva hubo de reunirse para tal fin con Sagasta a finales del mes de abril de 1885. *La Correspondencia de España*, número 9.891, martes 21 de abril de 1885, y *El Liberal. Diario Democrático de Menorca*, número 1.144, martes 21 de abril de 1885.

Mercantil, a través de su vicepresidente, el señor Torras, expuso las dificultades de entrar en la coalición al no permitir el reglamento del mismo la participación en los comicios políticos²⁵¹.

Aun sin acuerdos definitivos, en los días siguientes siguieron celebrándose distintas reuniones en Madrid. Descartado el *Círculo*, tanto los posibilistas como Castelar, veían buenos ojos una coalición con las Ligas y otras asociaciones de contribuyentes para, según distintas opiniones: “combatir con éxito la política conservadora”²⁵². Así, a los nombres de Riscal o San Millán, se añadieron otros como los de Maltrana y Ruiz de Castañeda. En distintos ámbitos de la política y la prensa se daba por constituida la coalición entre los grupos monárquico-liberales y democráticos, y los de propietarios y contribuyentes. Unos acuerdos que, en cierto modo, no convencían a todos, dada la rigidez impuesta en las urnas.

Lo que falta es decision para romper la esclavitud política en que existimos; y perfecto convencimiento de que el plan de coalición electoral acordado en Madrid, es el que siempre han dictado las buenas doctrinas de gobierno, pues que nada tiene tanta importancia para el bien del estado, como alentar la vida de los municipios, entregando la direccion de sus intereses á hombres de mérito reconocido, y arrancándola de manos del caciquismo ó de los agraciados en los amañes electorales, que por doquiera gozan la más popular de las magistraturas²⁵³.

A pesar del reducido número de electores, esto es, las cuatro vigésimas partes en Madrid, la coalición liberal comenzó a adquirir una cierta notoriedad, llegando a ser conocida como la *coalición de la honradez*. Con ello, se pretendía atraer a la mayoría de independientes y escépticos que todavía quedaban en la capital. Si bien es cierto que la *Asociación de Propietarios* no presentó finalmente candidatos, ello no impidió que se mantuvieran entre los designados los nombres de Pérez San Millán y Tutau, junto al de dos republicanos más. En la idea meditada por la Liga estaba la de atraer a la coalición a aquellos conservadores «desengañados», debilitando

²⁵¹ *El Serpis*, número 2.162, miércoles 22 de abril de 1885, y *Lau-Buru*, número 966, miércoles 22 de abril de 1885.

²⁵² Las referencias a la coalición en *El Serpis*, número 2.163, 23 de abril de 1885.

²⁵³ “La coalición electoral”, en *El Guadalete*, número 8.921, es 23 de abril de 1885.

de este modo las filas lideradas en aquellos momentos por un comprometido Francisco Romero Robledo²⁵⁴.

Al mismo tiempo, la coalición extrañaba considerablemente. Para no pocos entendidos en la materia, la unión entre Sagasta, Martos, López Domínguez, Moret, Castelar y Salmerón, llegaba a los límites del absurdo una vez conocidas las distintas tendencias que todos ellos representaban. Además, en un principio no parecían convencer los escasos entendimientos demostrados por el cuerpo electoral. Éste abogaba por hacer de los Ayuntamientos unas corporaciones esencialmente administrativas, eliminando los componentes políticos y el manejo electoral²⁵⁵.

Como resultado de los acuerdos, en la lista final de candidatos, aprobada a finales del mes de abril, aparecían nombres tan conocidos como los de Emilio Castelar y Mateo Sagasta por el distrito Centro; Segismundo Moret por el de Buenavista; Laureano Figuerola en Latina, y Manuel Becerra por el distrito de Audiencia. Una relación que estaba compuesta por nueve exministros, tres expresidentes del Congreso y dos expresidentes del Consejo. Vinculados al comercio habían quedado inscritos hombres tan destacados como Ruiz de Velasco, Muniesa, Venancio Vázquez y Maltraña. Entre los propietarios destacaban Anglada, Angulo y San Millán, así como el duque de Alba. Por parte de la *Liga de Contribuyentes* finalmente había accedido a la designación Rafael Prieto i Caules, declinando su participación el marqués de Riscal, y haciendo inútiles todos los intentos realizados por Sagasta y López Domínguez por contar con su presencia en la coalición²⁵⁶.

Similares condiciones se habían puesto en marcha en la práctica totalidad de las principales ciudades españolas. El comité de la coalición electoral en Valencia reaccionó rápidamente invitando a la *Liga de Propietarios* de aquella provincia y al *Ateneo Mercantil* a que presentaran candidatos para concurrir a las municipales de aquella ciudad²⁵⁷. Para

²⁵⁴ Entre los comentarios que en aquellos días se referían a las maniobras del partido conservador se apuntaba lo siguiente: “Romero Robledo trata de echar el resto, pero aunque le conocemos como fullero electoral, esta vez no han de valerle sus mala mañas”, *El Liberal. Diario Democrático de Menorca*, número 1.146, jueves 23 de abril de 1885.

²⁵⁵ Algunas opiniones al respecto en *El Guadalete*, número 8.922, viernes 24 de abril de 1885.

²⁵⁶ *El Guadalete*, número 8.924, domingo 26 de abril de 1885; *El Balear*, número 979, lunes 27 de abril de 1885, y *La Crónica Meridional*, número 7.530, martes, 28 de abril de 1885.

²⁵⁷ *La Crónica Meridional*, número 7.530, martes 28 de abril de 1885.

muchos, estos movimientos carecían de verdaderas estrategias políticas. La coalición contaba con entidades y sociedades «formales», tanto en lo social como en lo económico, a la que se habían ido adhiriendo algunas ligas y asociaciones de propietarios y de contribuyentes, amén de otras sociedades mercantiles. Esta situación destacaba por mantener un cierto carácter moderador, aunque no por ello se renunciaba al intento de situar al Gobierno en contra de las clases productoras del país²⁵⁸.

Los resultados conseguidos en los primeros días del mes de mayo de 1885 dieron a la coalición unos resultados muy favorables. En ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Murcia, Castellón, Salamanca o Valladolid habían dominado los comicios. Entre las capitales en las que había fracasado destacaban Alicante o Sevilla²⁵⁹. El hecho demostraba, en cualquier caso, un éxito muy importante de los liberales y republicanos en las principales ciudades, además de consolidar el avance liberal. A dicho ascenso habían contribuido, sin ninguna duda, los colectivos ligeros de propietarios y contribuyentes de base conservadora. Algo que los propios López Domínguez, Martos y Moret reconocerían, una vez concluidas las elecciones, en un documento que la coalición hizo publicar a través de la propia Comisión encargada de dirigir el bloque electoral. En concreto, y en referencia a este asunto, el escrito terminaba aduciendo la siguiente reflexión:

Así, el fin y término de la coalicion actual no puede implicar el fin y término de aquellas inteligencias necesarias a la defensa de los intereses comunes, que sean compatibles con los compromisos y los ideales diversos. La Comision que ha obtenido el concurso de clases conservadoras permanentemente interesada en el progreso pacífico y en el ordenado concierto de todas las fuerzas sociales, no encuentra palabras para expresar fielmente su gratitud á los servicios prestados por esas corporaciones importantísimas, y que, ajenas á la política militante, enseñan que tan grande obra electoral quedará siempre como una obra de pacificacion y de armonia. Estas clases, así como todos los elementos políticos que en la coalicion entraran, saben ya, sin duda, el valor de la union sincera entre

²⁵⁸ *Algunas opiniones en El Balear*, número 980, martes 28 de abril de 1885, y *El Bien Público*, número 3.686, sábado 9 de mayo de 1885.

²⁵⁹ Los resultados en *La Vanguardia*, Barcelona, número 218, martes 12 de mayo de 1885.

cuantos aman el ejercicio de sus derechos, para acudir de nuevo, si fuera necesario, á defender la libertad electoral y asegurar la paz pública²⁶⁰.

En días sucesivos siguieron publicándose interpretaciones en el mismo sentido, acentuando la importancia que había tenido para el triunfo electoral la unión de las clases propietarias y contribuyentes, consideradas un núcleo conservador en las estructuras económicas y sociales del país, lo que era interpretado como un «guiño» a la defensa del régimen representativo de la Nación²⁶¹. En un discurso pronunciado por Martos al efecto, éste llegaba a referirse así al éxito logrado por la coalición: “¿No es un organismo esencialmente conservador el comercio y la industria? ¿No lo es la liga de contribuyentes? ¿No lo es la asociación de propietarios? Pues á todos los hemos llamado como fuerzas vivas del país”. Más adelante, Martos continuaba diciendo: “En la coalición, en suma, entraron los partidos liberales para defender, contra vosotros, el sistema representativo, y esto es un bien para la causa de la legalidad, porque se prefieren las luchas de la paz á otros procedimientos. Porque vosotros todo lo combatís con la fuerza”²⁶².

En cierta medida, eran políticos como Martos, Moret y Domínguez, quienes venían a reconocer el papel de las asociaciones en el mejoramiento del sistema plebiscitario y, por extensión, en el del sistema político en general en la España del último cuarto del siglo XIX. La victoria liberal en las elecciones municipales había servido como adelanto a las elecciones legislativas de 1886. En efecto, el 15 de enero de ese año, siguiendo una vez más el llamado proceso de «normalización», pactado entre las principales fuerzas políticas, se procedió a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de nuevos comicios que habrían de celebrarse el 4 de abril. Algo más de ochocientos mil votantes concurrían a las urnas, un 4,5 por ciento de la población total, para elegir a 392 diputados. Los liberales dinásticos asumían el Gobierno de la Nación con 278 diputados, mientras que la oposición conservadora se quedaba en 56.

²⁶⁰ *El Constitucional. Órgano del partido de la Izquierda liberal dinástica de la Provincia de Gerona*, número 645, domingo 17 de mayo de 1885.

²⁶¹ En esta línea, véase *El Demócrata*, Gerona, número 281, 17 de mayo de 1885, *El Balear*, número 998, miércoles 20 de mayo de 1885, *El Serpis*, número 2.215, miércoles 24 de junio de 1885, y sobre todo *El Liberal. Diario Democrático de Menorca*, número 1.206, martes 7 de julio de 1885.

²⁶² *El Constitucional Dinástico*, número 6.038, viernes 10 de julio de 1885.

Con la nueva dinámica electoral estrenada dos años atrás, en 1887 volvían a abrirse las listas a unos nuevos comicios municipales en nuestro país. Sagasta, como ya hiciera en su día, volvía a reunirse con Mariano Sabas Muniesa, el marqués de Retortillo, el marqués de Riscal y Francisco Prieto, presidentes respectivamente del *Círculo de la Unión Mercantil*, de la *Asociación de Propietarios*, de la *Liga de Contribuyentes* y de la *Sociedad de Fabricantes*. La intención del propio Sagasta, a tenor de lo percibido en las diferentes entrevistas celebradas aquel mismo año, era la de elegir a algunos candidatos del comercio y de la industria, de forma similar a lo que ya había acontecido en 1885²⁶³. Una actitud que volvería a repetirse en otras ciudades y que iba a contar, una vez más, con la participación de propietarios y contribuyentes²⁶⁴.

A pesar de la renuncia en última instancia de los propietarios Felipe Tutau y Alejandro de la Torre, candidatos en un primer momento por Madrid, la idea de mantener sucesivamente a representantes del comercio, la industria y la propiedad en las listas para acceder a cargos políticos se iba a consolidar a comienzos de los años noventa con la aparición de otras asociaciones de agricultores y propietarios más desarrolladas y perfeccionadas²⁶⁵. En este proceso de cambios promovidos por algunas asociaciones supeditadas a la producción y a la propiedad, la *Liga de Propietarios de Valencia* se vio inmersa en un comportamiento más consustancial con el de una patronal incipiente que, además, comenzaba a enfrentarse a los nuevos problemas generados por el repunte y el desequilibrio en los precios, así como por la aparición en el panorama social de grupos organizados de trabajadores en el campo.

Las persistentes sequías y los eventuales períodos de heladas acentuaron la complejidad de los años ochenta en lo económico, momento

²⁶³ *La Correspondencia de España*, número 10.603, domingo 3 de abril de 1887, y número 10.606, miércoles 6 de abril de 1887.

²⁶⁴ Sabemos que en Gerona estaba constituida a finales de abril una coalición de personas pertenecientes a las Ligas y otras sociedades afines. Candidatura que era muy bien vista por la prensa de la ciudad. La noticia fue presentada como una representación genuina de las clases contribuyentes. Se trataba de la unión entre la *Liga de Contribuyentes*, la *Asociación de Propietarios* y otras sociedades vinculadas a los sectores de la producción de la región. En palabras de uno de los articulistas gerundenses, la candidatura había despertado muchas simpatías. En este sentido, tal y como se advertía, de triunfar habría "de influir muy marcadamente en la marcha, hoy día no muy próspera de nuestro municipio". *La Nueva Lucha*, número 99, jueves 28 de abril de 1887.

²⁶⁵ Tutau y de la Torre eran miembros de la *Asociación de Propietarios de Madrid*. Véase *El Guadalete*, número 1.753, martes 3 de mayo de 1887.

que se vio agravado por la depreciación de un buen número de productos agrícolas como el arroz, las naranjas, las pasas, las alubias y los cacahuetes, hechos que terminarían afectando considerablemente a las zonas productoras de Valencia²⁶⁶. Esta situación se tradujo rápidamente en el inicio de revueltas propiciadas por los colonos de la Huerta entre 1878 y 1882, y agudizadas por la realidad que suponía la ruina de muchos arrendatarios y pequeños propietarios que debían mantener unos créditos superiores al 20 por ciento. Si bien una caída en los precios beneficiaba a un amplio sector de la población, la realidad mostraba que para los productores y propietarios esta situación implicaba la incapacidad para hacer frente a sus deudas²⁶⁷. En consecuencia, el descenso de la productividad acabó afectando más a los pequeños propietarios que, profundamente endeudados, solo disponían de la producción para evitar la quiebra.

A este propósito, en la base de las revueltas persistía una situación más propia de unos colonos enfiteutas y de una estructura social secular, cuyos intentos de ruptura habrían de verse excitados con los movimientos de protesta iniciados en 1878. El grave conflicto surgido entre propietarios de la tierra y arrendatarios terminaría prolongándose durante algo más de un año, principalmente entre los meses de marzo y junio de 1878, y los de agosto-septiembre de 1879, materializándose en la negativa por parte de los colonos a pagar el «rento» correspondiente a las tierras arrendadas.

Pero donde se vió más amenazadora la anarquía que habian sembrado las predicciones insensatas, fue en la pasiva resistencia que á principios de 1878 empezaron á manifestar los colonos de la huerta de Valencia. Dióse en llamar Huelga de los labradores á esta resistencia; pero ninguno de ellos holgaba, sino que continuando el trabajo, siempre y sin cesar, de los campos que tenían concedidos en arrendamiento, y viviendo gratis las alquerías á ellos adyacentes, propias de los dueños de las heredades, trataban de hacer suyos, no pagando, los frutos que pertenecían parte al capital del propietario y parte á la industria del labrador²⁶⁸.

²⁶⁶ *Las Provincias*, número 4.180, miércoles 16 de enero de 1878; número 4.216, miércoles 20 de febrero de 1878, y número 4.292, martes 7 de mayo de 1878.

²⁶⁷ Esta tendencia a la disminución en los precios llegó a afectar de manera muy significativa al arroz, descendiendo hasta un 35 por ciento. Tendencia que acabaría afectando a otros productos. Martínez Roda, Federico, ob. cit., pág. 344.

²⁶⁸ *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, pág. 30.

Antes de que se produjeran las negativas al pago de rentas por parte de los colonos, a finales del mes de febrero de 1878 comenzaron a percibirse los primeros síntomas de enfrentamientos, como consecuencia de la negativa de un considerable número de labradores de la huerta que debía acudir a los mercados de Valencia a vender sus productos. Éstos, llevados por el ánimo de no contribuir con algunas obligaciones impuestas a las caballerías utilizadas para el laboreo, crearon rápidamente lo que en opinión de la prensa era un inequívoco estado de alarma para el resto de la ciudadanía²⁶⁹. Junto a los hortelanos, a la protesta habían acudido también los llamados *fematers* o estercoleros, encargados de recoger las basuras de la ciudad, quienes las utilizaban como abono para los campos y a los que el Ayuntamiento obligaba al uso de una caballería asistida por dos personas. De este modo, mientras una cuidaba a los animales, la otra debía entrar en las casas en busca de los restos y barreduras. Contrariados por quedar desligados de una antigua costumbre, y alegando que no tenían personal suficiente para prestar el servicio que la autoridad municipal les exigía, comenzaron a desistir de su cometido²⁷⁰. Las divergencias entre los pequeños labradores y los propietarios más acomodados no tardaron en materializarse en una falta de productos del campo en los mercados, peligrando en algunos casos el sustento de la población²⁷¹. Consecuentemente, los acontecimientos se agudizaron cuando varios alcaldes de la región se manifestaron a favor de la negativa emprendida por parte de los labradores, lo que impulsó a que se tomaran de inmediato medidas por parte del gobernador de la provincia, Leandro Pérez Cossío²⁷².

La «huelga», así denominada en aquellos momentos, se recrudeció con las detenciones de los alcaldes de Alborai y Almàssera y el incendio de varias barracas, terminando por acrecentar el boicot a la entrada de

²⁶⁹ Un ejemplo, en *Las Provincias*, número 4.226, sábado 2 de marzo de 1878; *El Imparcial*, número 3.876, viernes 8 de marzo de 1878, y *El Graduador*, número 1.192, viernes 15 de marzo de 1878.

²⁷⁰ *El Imparcial*, número 3.870, sábado 2 de marzo de 1878; *El Graduador*, número 1.190, miércoles 13 de marzo de 1878, y *La Ilustración Española y Americana*, 15 de marzo de 1878.

²⁷¹ La actitud apenas provocó la repercusión esperada en los primeros momentos. Así se desprende de las manifestaciones hechas por el ministro de la Gobernación ante las preguntas de los diputados valencianos. *La Época*, número 9.242, lunes 11 de marzo de 1878.

²⁷² A través de un escrito fechado el día 1 de marzo de 1878, y dirigido a los labradores de la Huerta, el gobernador, Pérez Cossío, conminaba a los representantes municipales de dichos municipios a cumplir con sus deberes, advirtiéndoles que les serían exigidas las responsabilidades en las que pudieran incurrir. *Las Provincias*, número 4.226, sábado 2 de marzo de 1878.

productos en la capital valenciana²⁷³. A todo ello se añadieron coacciones que obligaban a regresar a quienes pretendían entrar en la ciudad con sus mercancías, produciéndose en algunos casos talas de campos y destrozos en las huertas²⁷⁴. Hechos que dieron lugar a la rápida reunión de algunos de los alcaldes de la provincia con diputados valencianos, además de la intervención en el Congreso del representante por Castellón, Gaspar Núñez de Arce, para preguntar al Gobierno si se iban a tomar medidas ante los graves acontecimientos que estaban ocurriendo²⁷⁵. Antes de que finalizara el mes de marzo, las reuniones celebradas entre los alcaldes de los municipios afectados y un elevado número de labradores de la Huerta, daban lugar a un acuerdo que iba a poner fin al conflicto, proponiendo al gobernador de la provincia que se retirasen las medidas presentadas por el Ayuntamiento de Valencia, entre las que se incluía la retirada del impuesto que gravaba las caballerías dedicadas a la labranza²⁷⁶.

Atenuado el conflicto de los labradores, durante el verano de 1878 se comenzó a barajar la posibilidad de que algunos colonos no liquidaran con los propietarios de las tierras el importe de sus arrendamientos. En su anuncio, los deudores alegaban la prolongada sequía y la carencia de recursos, algo que no tardó en ser rechazado en las sucesivas conferencias celebradas por los representantes de la propiedad²⁷⁷. Corroborada la negativa al pago, la *Liga de Propietarios* no intervino hasta el mes de agosto, una vez vencido el plazo legal de San Juan²⁷⁸. La primera de las medidas fue

²⁷³ *Las Provincias*, número 4.230, miércoles 6 de marzo de 1878.

²⁷⁴ En algunos diarios se citaban noticias referidas a que en los mercados de El Grao y Cabañal no entraba “ni una mala lechuga”, lo que estaba provocando la subida de los precios en los escasos productos frescos que podían comprarse. *El Globo*, número 883, jueves 14 de marzo de 1878. En relación a las coacciones, éstas se sucedieron mediante pasquines y amenazas, algunas dirigidas al ferrocarril y a la posible voladura de puentes, lo que no dejaba de preocupar ante la pasividad mostrada por las autoridades en Valencia. *El Imparcial*, número 3.876, viernes 8 de marzo de 1878; *La Iberia*, número 6.549, martes 12 de marzo de 1878, y *El Graduador*, número 1.192, viernes 15 de marzo de 1878.

²⁷⁵ *El Imparcial*, número 3.880, martes 12 de marzo de 1878, y *La Época*, número 9.242, lunes 11 de marzo de 1878.

²⁷⁶ *La Época*, número 9.246, viernes 15 de marzo de 1878, y número 9.247, sábado 16 de marzo de 1878. Asimismo, en *La Iberia*, número 6.559, sábado 23 de marzo de 1878.

²⁷⁷ La prensa dedicó algún comentario en previsión de futuros conflictos. Así, desde Madrid se informaba, refiriéndose a las sucesivas reuniones mantenidas por los colonos, lo siguiente: “Los propietarios han celebrado otra reunion para prevenir los efectos de aquella, y las autoridades se preparen, temiendo un nuevo y grave conflicto”. *El Globo*, número 1.032, domingo 11 de agosto de 1878.

²⁷⁸ Los vencimientos, por lo general, estaban establecidos en dos fechas concretas del año. El primero se producía en el día de San Juan, en el mes de junio, siendo el segundo en Navidad. Véase de Cucó, Alfons, “Las agitaciones campesinas de la Huerta de Valencia

una solicitud formulada al Gobierno en la que se exigía el aumento de la Guardia Civil en toda la provincia para defender las propiedades amenazadas, así como para vencer la resistencia de los colonos al pago de los arrendamientos²⁷⁹. Esta decisión se vio reforzada con la exposición que la propia Liga remitiría el 27 de diciembre al presidente del Consejo de Ministros, en la que se instaba al Ejecutivo a “fijar su atención sobre el amenazador incremento que, en su fondo y en sus accidentes, ha tomado la resistencia de los colonos de la hermosa huerta de Valencia al pago de sus rentas”²⁸⁰. En cualquier caso, hacia los primeros días del mes de enero de 1879 la Guardia Civil ya había comenzado a efectuar detenciones, reforzando y aumentando su número un mes más tarde como consecuencia de la marcha que tomaban los acontecimientos²⁸¹.

También los labradores, en vista de las tensiones agrarias y del recrudecimiento de la situación, iniciaron sus protestas remitiendo al Gobierno Civil sucesivas llamadas de atención en las que se instaba a abordar el problema existente. Unas desavenencias que tenía mucho que ver con la estructura de la propiedad y la importancia histórica que habían adquirido los arrendamientos en la región valenciana²⁸². A decir verdad, en no pocos casos se trataba de una propiedad rural en la que una buena parte de sus hacendados tenía su residencia en la ciudad de Valencia. Un absentismo que, lógicamente, venía siendo evidenciado por la prensa de la región.

por una costumbre antiquísima, el amo cobra su tanto, y deja que el colono subarriende sus tierras y las reparta en testamento entre sus hijos y edifique en ellas una alquería, ó casa de campo, ó barracas, en fin, que ejerza actos positivos de dominio, lo cual dá lugar á la resistencia de un desahucio, á que el labrador crea que no se le puede echar del predio y á que el propietario no encuentre quien reemplace al colono, por creer ó aparentar creer los de la

(1878-1879). Sus orígenes históricos”, en *Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història*, Universitat de València, número 24, año 1974, pág. 117.

²⁷⁹ *El Serpis*, número 117, viernes 20 de septiembre de 1878. Asimismo en la *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, pág. 31.

²⁸⁰ *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 284, sábado 18 de enero de 1879.

²⁸¹ Las primeras detenciones eran anunciadas en enero de 1879. Véase, por ejemplo, *El Globo*, número 1.185, domingo 12 de enero de 1879. Además, en los primeros días del mes de febrero el Gobernador Civil de la provincia de Valencia ordenó un aumento sustancial de 50 guardias civiles para, según se comentaba, ayudar al Gobernador a limpiar la Huerta “de la gente de mal vivir”. *La Iberia*, número 6.826, jueves 13 de febrero de 1879.

²⁸² “La Huelga de Valencia”, en *La Época*, número 9.572, jueves 13 de febrero de 1879.

vega que aquello era un atropello y que no hay motivo para lanzar a uno de donde nació y donde por testamento de su padre cultiva aquel campo²⁸³.

Sin embargo, esa no era la opinión que la *Liga de Propietarios de Valencia y su provincia* llevaba sugiriendo desde el inicio del conflicto. Términos como los de avaricia, inercia, ignorancia, unidos a los de una vehemente atención referida a la debilidad mostrada por los propietarios, obligados a «negociar», ayudaron a desdibujar una realidad que con el paso del tiempo se hacía más evidente. Utilizando la excusa del orden, la consideración de que aquel conflicto solo podía derivar de gentes de muy baja «calaña», no hizo sino posicionar a la Liga a favor de las autoridades y de todos cuantos podían ejercer la fuerza. Unos colectivos y entidades para quienes la asociación solo tenía palabras de agradecimiento y de exaltación.

Difícil es la narración de todo lo ocurrido en este asunto, quizá el más grave, el más imponente y de más trascendencia que desde su fundación ha ocupado a la Liga de propietarios; pero no debe callar, que sin la concurrencia del Sr. Gobernador civil, del excelentísimo Sr. Capitán general y del Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia territorial, que en sus respectivas atribuciones coadyuvaron celosamente y con verdadero interés, buscando unos los autores y cómplices, acelerando otros los procedimientos contra los vagos, gentes de mal vivir y perturbadores del orden social, y aplicando todos con energía y valor la Ley de secuestradores de 8 de Enero de 1877, no se hubiera calmado tan pronto una perturbación, cuyas raíces se hallaban muy profundas, como idea que era halagada por las pasiones más aviesas del desenfrenado egoísmo y de la inicua conveniencia²⁸⁴.

La actitud defensiva de la *Liga de Propietarios en Valencia* era evidente, máxime cuando su opinión y sus arengas, en relación a las rentas, intentaban contradecir las consideraciones de labradores y arrendatarios. Para cualquier asociado a la Liga, los «rentos» apenas habían subido su cuantía desde hacía 50 años. Esta afirmación aseveraba una vez más que no existía avaricia por parte de los propietarios, ya que la tierra en la huerta de Valencia se adquiría a un tipo del 4 o 5 por ciento en el mejor de los casos. Una depreciación debida a la falta de compradores como consecuencia de las perturbaciones y del desconcierto reinante desde el inicio del enfrentamiento. Detrás de todo este componente intimidatorio, la realidad

²⁸³ *Las Provincias*, número 4.578, sábado 15 de febrero de 1879.

²⁸⁴ *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, págs. 31 y 32.

apuntaba a que eran los pactos celebrados entre propietarios y agricultores los que impedían, en consecuencia, elevar los precios de los arrendamientos. Circunstancia que, por otra parte, estaba regulada y penalizada si no se respetaba. Por contra, los precios de algunos productos sí venían duplicando, incluso triplicando su valor. Situación que, en opinión de la Liga, no era responsabilidad de la gran propiedad, sino debida en gran medida a problemas consustanciales a la propia institución del arrendamiento en las comarcas valencianas²⁸⁵.

Aparte de las justificaciones anteriores, aún restaba el progreso agrícola que la Liga evidenciaba como parte de la labor que había desarrollado en la propiedad en los últimos 40 años. Algo que, añadían los propios ligeros, estaba permitiendo a la provincia soportar las dificultades que el campo presentaba y que, en consecuencia, justificaba la subordinación del colono hacia el propietario²⁸⁶. En cierta medida, los propietarios a través de la Liga no hacían sino aludir a los cambios que se habían producido en las últimas décadas, al pasarse de unos estamentos obsoletos a una propiedad que mayoritariamente estaba en manos de la burguesía terrateniente. Todo ello significaba la aceptación de una concepción económica más rígida y, por ende, una mayor pretensión de rentabilizar la propiedad. No nos debe extrañar, por tanto, que la negativa al pago de las rentas supusiera un hecho tan criminal como reprochable²⁸⁷.

Por otra parte, hoy parece incuestionable que a comienzos de los años ochenta del siglo XIX, la agricultura mostraba transformaciones sensiblemente más profundas en relación a las primeras décadas del siglo. Cambios que afectaban de manera muy significativa a las explotaciones agrícolas, tanto en lo referente a los materiales para la labranza como a la mano de obra, que ahora resultaba ser más conocedora del terreno y de las necesidades de sembrado y abonado del mismo. Transformaciones técnicas que no siempre eran bien aceptadas pero que necesariamente habían comenzado a transformar las mentalidades de los terratenientes y labradores

²⁸⁵ Para una mayor puntualización sobre el tema en Cucó, Alfons, ob. cit., págs. 126 y 127.

²⁸⁶ La idea está recogida de *El Mercantil Valenciano*, número 3.539, martes 18 de febrero de 1879.

²⁸⁷ Así puede interpretarse después de leer un artículo en el que se explicaba, en referencia a la postura adoptada por los colonos sobre el impago de rentas, lo siguiente: “Verdaderamente hay pocos actos tan criminales como excitar á la confabulación para resistir al pago de las rentas de las propiedades explotadas”. *La Época*, número 9.540, domingo 12 de enero de 1879.

en el último cuarto de siglo. Por último, cualquier problema surgido con los colonos y arrendatarios se debía a una clara abdicación de derechos, consentida y aceptada desde hacía tiempo por los propietarios²⁸⁸.

Las continuas menciones realizadas por la Liga, alusivas a las desaprobaciones y a las protestas llevadas a cabo por los colonos en la Huerta, solían ser lo suficientemente mordaces hasta el punto de considerar las actividades de aquéllos como actos delictivos y penables²⁸⁹. En algunos casos tenían su justificación en el temor creado por algunas secciones y federaciones que, desde hacía unos años, venía ordenando la *Asociación Internacional de los Trabajadores* en España entre los agricultores y jornaleros del campo. Un apunte de lo que aquí se expone puede entreverse en la mencionada *Memoria* que la *Liga de Propietarios de Valencia* había hecho publicar en 1883. En la misma se podía leer: “La Junta directiva de la Liga, que conoce cuán buenos, sóbrios, laboriosos y sufridos son en general los labradores de la huerta de Valencia, comprendió desde luego que la organizacion de la resistencia no era originaria de ellos, sino de gente extraña y mal avenida con la paz, que explotando esta vena, podría llegar á otro punto calculado de antemano, quedando siempre víctimas los infelices colonos que habían sido su instrumento”²⁹⁰. En este sentido, bastaría apuntar lo manifestado en la ciudad de Alcoy, el 15 de junio de 1873, en la reunión del Comité Federal de la *Asociación Internacional de los Trabajadores* que, refiriéndose a este mismo asunto planteaba: “La ignorancia y las preocupaciones pesan aun sobre la clase obrera en general y muy particularmente sobre nosotros los trabajadores de los campos. Nuestra clase es la que sufriendo mas las terribles consecuencias de la inicua esplotacion burguesa, se conserva mas pura en sus intenciones”²⁹¹.

En todo caso, las medidas adoptadas desde Madrid en el asunto de la huelga no parecían satisfacer las expectativas de la Liga valenciana, una postura que la propia asociación puso pronto en evidencia a través de la prensa, manifestando la debilidad en los procedimientos empleados para

²⁸⁸ Como muy bien puntualizara en su día Alfons Cucó, en lo tocante a los «rentos», la mayoría de las «complacencias» o acuerdos que mencionaba la *Liga de Propietarios* estaban referidas a ordenamientos y preceptos consuetudinarios que, en muchos casos, procedían de la Edad Media. Cucó, Alfons, ob. cit., págs. 129 y 130.

²⁸⁹ *La Época*, número 9.567, sábado 8 de febrero de 1879.

²⁹⁰ *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, pág. 31.

²⁹¹ Martínez de Sas, María Teresa, *Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española*, Ediciones de la Universitat de Barcelona, 1987, pág. 306.

poner fin al conflicto iniciado por los colonos²⁹². La actitud mostrada por el Gobierno y el desacuerdo de los propietarios llevaron a la Liga a los tribunales para exigir que se practicaran las detenciones oportunas²⁹³. Reacción que daría como resultado la detención y posterior deportación de 76 personas, trabajadores de la Huerta, acusadas de ser las causantes de la inactividad en el campo²⁹⁴.

Para el mes de julio de 1879, una reunión entre los diputados Aranaz, y el vizconde de Bétera, junto con el ministro de la Gobernación, dejaba en el aire una posible dispensa en la condena de destierro que meses atrás había sido aplicada a los colonos. En dicha petición, obviamente había participado la *Liga de Propietarios*, aunque en ningún caso había mostrado interés frente a las reprobaciones hechas a los colonos durante su destierro.

La Liga, despues de haberse mostrado viril y fuerte hasta lo sumo, viendo apaciguada la huerta, y ya en calma y en vias legales á sus colonos, intercedió por los que, como autores ó cómplices, habian sido deportados á Ultramar, ya que mostráronse arrepentidos y hacian falta en el seno de sus familias, lo cual demostró á todos que, no á las personas habia perseguido, sino á la perversidad y las malas ideas, que pudieran haber engendrado la total perdicion de nuestra hermosa cuanto envidiada huerta de Valencia, en perjuicio, á la vez, de los mismos labradores y de los propietarios, cuya armonía es tan conveniente á todos, por lo cual jamás se habia alterado²⁹⁵.

²⁹² Un ejemplo en *La Correspondencia de España*, número 7.693, 15 de enero de 1879.

²⁹³ Además de las correspondientes denuncias de «morosos» que personalmente presentaban los propietarios afectados ante los tribunales, sabemos que los primeros detenidos respondían a los nombres de Bou y Naumoles. Éstos eran supuestamente los principales instigadores de la huelga. *La Correspondencia de España*, número 7.718, domingo 9 de febrero de 1879; *La Época*, número 9.569, lunes 10 de febrero de 1879, y número 9.573, viernes 14 de febrero de 1879, y *Diario de Córdoba*, número 8.522, jueves 13 de febrero de 1879. También en Cucó Giner, Alfons, *Republicans i camperols revoltats*, Eliseu Climent Editor, Valencia, 1975, pág. 113.

²⁹⁴ Conviene recordar que los detenidos, hasta el momento de embarcar hacia la isla de Mahón, fueron privados de libertad permaneciendo en la cárcel de Serranos. *El Globo*, número 1.192, domingo 19 de enero de 1879; *La Iberia*, número 6.812, martes 28 de enero de 1879, y *La Mañana*, número 925, martes 11 de febrero de 1879. Por lo que respecta al trato dado a los mismos, hay datos que confirman que fueron alojados finalmente en el poblado de Villacarlos, arrabal de Mahón, recibiendo un jornal de 8 a 10 reales por el trabajo que debían desarrollar. La medida fue duramente criticada en algunos medios no conformes con la medida: "¡A que todavía va á resultar que á esos individuos el gobierno les ha hecho un gran favor al deportarlos!", *El Globo*, número 1.236, martes 4 de marzo de 1879, y *La Iberia*, número 6.842, martes 4 de marzo de 1879.

²⁹⁵ El texto está recogido de la *Memoria de la Liga de Propietarios de Valencia*, pág. 32. Los detalles de la noticia pueden leerse, por ejemplo, en *La Correspondencia de España*, número 7.877, viernes 18 de julio de 1879; *El Globo*, número 1.872, sábado 19 de julio de 1879, y *La Iberia*, número 6.977, domingo 10 de agosto de 1879.

A comienzos de julio de 1882, una subida en la tarifa de los puestos ocupados por vendedores de verduras y labradores en los mercados de Valencia volvió a provocar desórdenes en las zonas rurales de la provincia y en las lonjas y plazas de la capital²⁹⁶. La huelga promovida una vez más por los hortelanos valencianos tenía su origen en la negativa a pagar los cuatro céntimos de recargo, sobre los seis que ya se venían abonando, y que había fijado el propio Ayuntamiento de la ciudad. La nueva pugna no tardó en mostrar a una clase propietaria en actitudes visiblemente paternalistas, especialmente en aquellos aspectos referidos al orden social. Un esquema ideado desde los sectores más conservadores de la propiedad que venía a justificar el viejo principio de autoridad. El conflicto retomado por los labradores devolvía la preocupación mostrada tiempo atrás por el conjunto de la sociedad valenciana, justificando la amplia dependencia que la propiedad y las clases más acomodadas tenían en relación a la Huerta, de acuerdo con la estructura y el trabajo que venían realizando las familias horticultoras²⁹⁷. Este protagonismo alcanzado por las clases más «bajas», permitió que alcanzaran un valioso reconocimiento como interlocutores directos en las negociaciones que días después iban a sellar los enfrentamientos, aunque sin resoluciones favorables. Acuerdos en los que, no obstante, iba a lograrse el reconocimiento y el respeto, además del mantenimiento de las prácticas tradicionales. Junto a todo ellos, quedaban contemplados pequeños privilegios fiscales logrados con el paso del tiempo.

Tanto la Liga como el grupo más conspicuo de propietarios valencianos no evitaron, sin embargo, que se solicitaran actuaciones de fuerza con el propósito de contener la formación de nuevos mercados clandestinos y forzar el acceso de los estercoleros a la ciudad, tal y como ya se había producido unos años antes. Casi al mismo tiempo hubieron de convocarse distintas

²⁹⁶ *La Iberia*, número 7.938, jueves 6 de julio de 1882; *La Época*, número 10.774, viernes 7 de julio de 1882; *El Graduador*, número 3.103, 7 de julio de 1882, y *El Globo*, número 2.454, martes 11 de julio de 1882.

²⁹⁷ El mercado derivado de la Huerta exigía el trabajo permanente de las mujeres, maridos e hijos, además de los ya mencionados fematers, encargados de la recogida de abonos y basuras en la ciudad para llevarlas extramuros, en los campos de cultivo. Véase a este respecto el estudio de Burguera, Mónica, “La política de los paisajes campesinos en la ciudad: mujeres, niños y resistencia familiar en la Valencia de la segunda mitad del siglo XIX”, en Burguera, Mónica, y Schmidt-Novara, Christopher (eds.), *Historias de España Contemporánea. Cambio social y giro cultural*, Universitat de València, 2008, págs. 109 y 110.

reuniones con el propósito de considerar las posibles soluciones a los problemas que la huelga podía ocasionar²⁹⁸.

Entre las soluciones aportadas, las contribuciones realizadas por la *Liga de Propietarios de Valencia* resultaron determinantes. Algunos de sus nombres más destacados como Pérez Pujol, Berruezo, Salazar, o el conde de Buñol, acordaron reunirse con los gremios afectados a través de una Comisión a la que no faltaron destacados miembros de la Liga, como Arcadio Tudela, Alejandro Manglano, Vicente Galiana, Domingo Capafons, y el propio conde de Buñol. Los acuerdos remitidos al Ayuntamiento de la ciudad no tardaron en movilizar a otros sectores de la población, celebrándose en días sucesivos distintas reuniones y conferencias bastante concurridas²⁹⁹.

Mientras, la fuerte vigilancia no impedía que los puestos de venta pudieran instalarse en las afueras, lo que añadía más motivos para buscar una solución al conflicto. Más aún, desde algún diario en Madrid ya se habían comenzado a censurar las medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valencia, al establecer un aumento en los precios de los puestos en unos momentos en los que las dificultades, como consecuencia de la elevada carga impositiva, estaba produciendo un profundo rechazo en la población. Una idea que también parecía compartir el Gobernador de la provincia y que, en opinión de algunos sectores de la población, no hacía sino alentar a los hortelanos³⁰⁰. Así, en el huerto conocido como del Patriarca, un numeroso grupo de labradores, junto a varios alcaldes de poblaciones rurales, volvieron a solicitar la bajada de las tasas, manifestando su propósito de cesar en sus protestas y retomar las actividades en los puestos de venta siempre que se atendieran sus peticiones³⁰¹.

²⁹⁸ *El Eco de la Provincia*, número 896, jueves 20 de julio de 1882. En algunos casos llegaron a anunciarse medidas extremas contra los huelguistas. *El Día*, número 782, miércoles 19 de julio de 1882. Uno de los efectos de la huelga fue, precisamente, el intento de establecer mercados alternativos en los extrarradios y arrabales de la ciudad de Valencia. El caso más señalado fue el intento frustrado por la Guardia Civil en Orriols. *El Globo*, número 2.455, miércoles 12 de julio de 1882; *La Época*, número 10.783, domingo 16 de julio de 1882; *La Discusion*, número 1.037, lunes 17 de julio de 1882.

²⁹⁹ *El Eco de la Provincia*, número 897, viernes 21 de julio de 1882.

³⁰⁰ Véase *La Época*, número 10.781, viernes 14 de julio de 1882. Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia asumía que una cesión o modificación de las medidas tomadas sobre las tarifas en los puestos supondría un desprestigio frente a la coacción y el desorden público. *La Época*, número 10.782, sábado 15 de julio de 1882, y número 10.785, martes 15 de julio de 1882.

³⁰¹ *El Globo*, número 2.465, sábado 22 de julio de 1882, y número 2.467, lunes 24 de julio de 1882.

Tras dieciocho días de huelga, el día 20 de julio de 1882 el Gobernador de la provincia de Valencia anunciaba el final de la misma al ministro de la Gobernación³⁰². Una vez más, a través de la coerción y la conminación al abandono de actitudes «desobedientes», la nueva «patronal» agraria volvía a ganar la batalla a los agricultores más modestos, tal y como ya había sucedido en 1879. Con la publicación de las noticias que daban cuenta de la carga producida sobre unas mujeres labradoras por parte de la Guardia Civil en el mercado de Alboraya, una parte de los propietarios mostraban su satisfacción por la efectividad, toda vez que se habían alcanzado el final al conflicto. No obstante, casi de manera simultánea habían comenzado a aparecer, dentro del mundo agrícola, algunas voces contrarias que, unidas a sectores más contemporizadores de la prensa y de la sociedad, no dudaban en manifestar abiertamente sus dudas. En suma, junto al nuevo formato de asociación se incoaba igualmente una nueva forma de actuación. Conductas que ya habían sido censuradas al contrariar los intereses agrícolas de los menos favorecidos.

Mucho se ha hablado todos estos días de coacciones, y si hasta hoy la prudencia nos ha impedido ocuparnos de esas coacciones, tanto se abusará, que al fin tendremos que decirlo todo: porque no son los labradores los que cohiben, sino los cohibidos, y es muy impropio de autoridades, que se precian de liberales, osar de ciertos medios más propios del autócrata de todas las Rusias que de adoradores entusiastas de todas las libertades³⁰³.

La conducta restrictiva y autoritaria demostrada por la *Liga de Propietarios de Valencia* frente a los planteamientos reivindicativos de los labradores valencianos, sin dejar de ser original, no fueron las únicas de las Ligas en relación a la agricultura en España. De lo reseñado en la *Memoria* de la Liga en Valencia, uno de los rasgos más destacados fue la protección a los arrozales y una considerable reticencia ante cualquier acuerdo internacional que pudiera refrendarse. En este sentido, desde que la *Asociación de Propietarios de Madrid* nombrara una comisión en febrero de 1874 para constituir una Liga de contribuyentes a nivel nacional con el propósito de defender los intereses de la propiedad, la industria, el comercio y la agricultura, la mayoría de colectivos agrarios análogos no dudaron en

³⁰² *El Diario de Córdoba*, número 9.643, domingo 23 de julio de 1882.

³⁰³ *El Eco de la Provincia*, número 900, martes 25 de julio de 1882.

asumir todos aquellos planteamientos que limitaran los efectos de los tratados firmados con terceros países³⁰⁴.

La preocupación arroceras en Valencia y su actitud contraria a la permisividad en la admisión de granos extranjeros se puso de manifiesto a principios de 1882, precisamente por medio de la *Liga de Propietarios*, alarmada por las sucesivas demandas que desde Santander se venían sucediendo con el fin de permitir la libre importación de arroces asiáticos para su blanqueo y posterior reexportación³⁰⁵. La situación en Castilla no era muy diferente. En diciembre de 1884 quedó constituido en Valladolid el *Centro Directivo Castellano*, presidido por Luis Alonso Martín, que tenía como vicepresidentes a los propietarios José de la Cuesta y Juan Herrero. Era la respuesta para contrarrestar los efectos que podía producir en el comercio triguero el tratado de comercio firmado en el mes de noviembre con los Estados Unidos³⁰⁶.

Con la pretensión del gobierno de Cánovas de abrir los mercados cubanos y puertorriqueños al país norteamericano, los representantes de este último en las negociaciones con España exigieron que las ventajas comerciales con las colonias no se extendieran a otras potencias, especialmente a los productos británicos. Circunstancia a la finalmente accedió el gobierno español³⁰⁷. La idea no sentó nada bien a los propietarios y agricultores de Castilla, reaccionando inmediatamente mediante una protesta formal ante las Cortes que solicitaba la rápida intervención de las autoridades españolas para que pudiera procederse a una revisión. De no conseguirse, los propietarios solicitaban la aprobación de un aumento en los derechos de introducción sobre los trigos extranjeros, procedentes del resto de naciones con los que España no hubiera firmado todavía convenios o acuerdos sobre el comercio. Además, en la exposición dirigida a los representantes en Madrid, se instaba a la aprobación de una prima de exportación a los trigos y harinas nacionales, a una rebaja en las tarifas ferroviarias para los cereales y el vino, la supresión de los derechos de consumo que gravaban al cereal, así como una reforma en las

³⁰⁴ *La Correspondencia de España*, número 5.909, martes 3 de febrero de 1874.

³⁰⁵ *La Correspondencia de España*, número 8.741, domingo 26 de febrero de 1882.

³⁰⁶ *La Correspondencia de España*, número 9.768, viernes, 19 de diciembre de 1884.

³⁰⁷ Sobre esta cuestión, puede consultarse de Serrano Sanz, José María, *El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española, 1875-1895*, Siglo XXI, Madrid, 1987, págs. 46 a 57.

contribuciones y cartillas evaluatorias, rebajando los tipos que servían de base y afectaban a los granos³⁰⁸. A las protestas no faltaron vinicultores, industriales, miembros de la *Liga de Contribuyentes de Valladolid*, diputados provinciales, concejales, miembros de la Junta de Agricultura y del Centro Mercantil, a los que terminarían uniéndose representantes de la prensa vallisoletana.

Mientras, en las zonas arroceras del Mediterráneo los productores continuaban en su empeño por llegar hasta las últimas consecuencias y evitar, en la medida de lo posible, una ruina sin precedentes en sus haciendas. La *Liga de Propietarios de Valencia* no tardó en posicionarse, solicitando una protección y un apoyo efectivos sobre el arroz, creando para ello una Comisión con la que poder combatir las decisiones del Gobierno que pudieran sucederse en este sentido³⁰⁹. Por otra parte, aquel mismo año de 1886, más de 200 propietarios de la rivera del Júcar decidieron organizar diferentes reuniones en Valencia para protestar contra el *modus vivendi* establecido con Inglaterra. El preacuerdo también había recibido importantes críticas en Cataluña, en concreto de 73 asociaciones que representaban a casi sesenta mil trabajadores de las industrias agrícolas, artesanas, manufactureras, etc., quienes, a través de varios escritos expedidos al Congreso y al Senado, condenaban el tratado comercial con Inglaterra, al tiempo que lo consideraban humillante, acusando a Moret de las consecuencias que podría acarrear para España³¹⁰.

³⁰⁸ *La Correspondencia de España*, número 9.778, lunes 29 de diciembre de 1884, y *El Bien Público*, número 3.583, lunes 5 de enero de 1885. Desde Salamanca se aplaudía la actitud mostrada por los propietarios y productores de trigo de Valladolid, criticando al mismo tiempo la pasividad mostrada por los representantes políticos y agricultores salmantinos. En este sentido la prensa salmantina advertía: “En cambio nuestros Diputados provinciales, ni nuestros concejales, ni nuestra Liga de contribuyentes, por sí ó por su órgano en la prensa, ni nuestros agricultores, ni nuestros comerciantes, ni nadie, que nosotros sepamos, en esta provincia han levantado su voz contra el tratado á pesar de ser la de Salamanca una region esencialmente agrícola y salir muy perjudicada con el indicado tratado de comercio”. *El Progreso*, número 73, miércoles 31 de diciembre de 1884.

³⁰⁹ La Comisión tuvo una de sus primeras acciones en la reunión celebrada con el Gobernador Civil a finales de febrero de 1886. *La Correspondencia de España*, número 10.197, domingo 21 de febrero de 1886, y *La Crónica*, Huesca, número 223, lunes 22 de febrero de 1886. Sabemos por lo publicado en la prensa de la época, que la *Liga de Propietarios de Valencia* remitió a mediados de 1886 una exposición instando al Gobierno de Madrid a que diera la suficiente protección a la industria arroceras. *El Áncora*, número 1.956, viernes 4 de junio de 1886.

³¹⁰ *La Correspondencia de España*, número 10.302, domingo 6 de junio de 1886. Asimismo, en Casterás, Ramón, *Actitudes de los sectores catalanes en la coyuntura de los años 1880*, Anthropos Editorial del Hombre, Barcelona, 1985, págs. 96 y 97.

El *modus vivendi* afectaba plenamente a los arroceros valencianos, beneficiando al cereal cultivado en las colonias inglesas al estimar Madrid que debía concederse a Inglaterra un trato de nación favorecida. Ni qué decir tiene que la nueva situación derivada de los acuerdos entre ambos países, abría la puerta a una libre introducción de arroz y otros productos agrícolas extranjeros en las Antillas. El compromiso adquirido con aquel país tampoco concedía prerrogativas al vino en España, lo que no tardó en poner a los agricultores de distintas regiones frente al Gobierno y al nuevo Tratado que pretendía aprobar³¹¹. En el paraninfo de la Universidad de Valencia, fue la *Liga de Propietarios*, una vez más, quien tuvo a bien organizar diversas reuniones entre representantes de varios pueblos de la provincia y propietarios residentes, para promover la resistencia a la aprobación del convenio por todos los medios legales. A todo ello se sumó la formación de una comisión que, formada principalmente por propietarios, debía desplazarse a la capital del Estado para sumar a la causa a los diputados de todas las provincias y regiones afectadas por el *modus vivendi*.

Entre las recomendaciones expresadas en la Universidad se había estudiado la posibilidad de que se formasen Ligas de agricultores a lo largo de todo el país, dando prioridad al estudio y revisión de los tratados de comercio que en esos momentos mantenía España con Alemania y Rusia, acuerdos que, por otra parte, expiraban en 1887. De todo lo tratado tuvo mucha importancia la protesta firmada por el *Instituto de Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona*, el gremio de fabricantes de Sabadell, el *Instituto Industrial de Tarrasa*, la *Asociación Industrial Fabril Manufacturera de España*, cuya sede estaba en Madrid, la Junta Directiva de los fabricantes de paños de Alcoy, además de varios ayuntamientos y de la propia *Liga de Propietarios de Valencia*, lo que evidenciaba una unión efectiva de intereses entre Cataluña y Valencia³¹². En todo caso, el fracaso cosechado por la *Liga de Propietarios* en las negociaciones iba a hacerse evidente pocos días después, según se desprende de lo publicado en la prensa de Madrid. En

³¹¹ Entre las regiones afectaban estaban, por ejemplo, Cataluña, Castilla o Extremadura. *La Palma de Cádiz*, número 17.410, jueves 10 de junio de 1886.

³¹² *La Correspondencia de España*, número 10.311, martes 15 de junio de 1886, y *El Serpis*, número 2.594, jueves 17 de junio de 1886. Esta coincidencia de intereses puede comprobarse en sucesivos momentos recogidos por la prensa, en particular en lo que se refiere a las relaciones entre el *Instituto de Fomento del Trabajo Nacional* y la *Liga de Propietarios de Valencia*. En este sentido, puede consultarse, por ejemplo: *La Correspondencia de España*, número 10.335, viernes 9 de julio de 1888 y número 10.336, sábado 10 de julio de 1886.

este sentido, y en referencia al documento entregado por la Comisión en la capital, se podía leer lo siguiente: “Es este un documento en el que se expone la gravedad de la crisis que atraviesa la producción arroceras; se da cuenta del fracaso de las gestiones hechas cerca del gobierno por la Liga, y declina esta corporación toda responsabilidad en quien deba tenerla, advirtiéndole a los pueblos interesados que a ellos corresponde ahora adoptar la actitud que crean conveniente”³¹³.

Con el descalabro causado por las negociaciones, la Liga intentó contrarrestar sus efectos con una nueva solicitud, esta vez referida a la aplicación de un impuesto transitorio que pudiera aplicarse a los arroces procedentes de la India. La petición, leída en el Congreso por el diputado Ruiz Capdepón, consiguió atraer la atención de los diputados valencianos y de los ministros de Ultramar y Hacienda que tomaron en consideración el documento. Durante algunos días se fue conformando lo que sería una nueva comisión integrada por miembros de la *Sociedad Económica de Amigos del País*, de la *Liga de Propietarios de Valencia*, representantes de los labradores y de los ministerios de Fomento y de Hacienda que debía trabajar en el asunto del impuesto transitorio³¹⁴. Sin embargo, a finales del mes de julio de 1886 el Gobierno rechazó cualquier acuerdo sobre las peticiones ligueras. A este respecto, las manifestaciones recogidas por un diario de Menorca subrayaban: “La Liga de propietarios por una parte y los centros arroceros por otro — y mañana probablemente confirmará esta apreciación nuestra el meeting de Alcira — dejan claramente planteada la cuestión en los siguientes términos: ó el impuesto transitorio ó nada. Y como el gobierno ha denegado categóricamente el impuesto transitorio, solo queda en pie el segundo término de la proposición: ¡nada!”³¹⁵.

Los últimos intentos realizados para paliar, en la medida de lo posible, los efectos negativos que sobre la agricultura podían provocar los acuerdos con distintos países se produjeron en diciembre de 1887. Para la ocasión se había constituido una representación de la *Liga de Propietarios de Valencia y su provincia* formada por los socios Danvila, Jimeno y Mencheta, quienes

³¹³ *La Correspondencia de España*, número 10.332, martes 6 de julio de 1886.

³¹⁴ *La Correspondencia de España*, número 10.340, miércoles 14 de julio de 1886; *El Serpis*, número 2.620, sábado 17 de julio de 1886; *La Lucha. Órgano de Partido Liberal de la provincia de Gerona*, número 2.942, domingo 18 de julio de 1886, así como en el diario alicantino *El Liberal*, número 159, 18 de julio de 1886.

³¹⁵ *El Liberal. Diario Democrático de Menorca*, número 1.520, jueves 22 de julio de 1886.

entregaron personalmente al ministro de Estado una exposición que solicitaba la supresión de la prórroga del tratado comercial que España tenía establecido con Italia. A pesar del interés mostrado hacia los representantes de la Liga, lo cierto es que los intercambios comerciales con el país transalpino siguieron siendo desfavorables hasta los primeros años noventa del siglo XIX³¹⁶.

De todos modos, los trabajos de las Ligas, en especial de la *Liga de Propietarios de Valencia*, evidenciaron entre 1871 y 1887 un balance tan reformador como positivo, advirtiéndose en esta última unos cambios en el carácter y en el comportamiento corporativo y esbozando, como se ha tenido ocasión de comprobar, conductas patronales que habrían de consolidarse varias décadas después en nuestro país. En la práctica, las aspiraciones políticas e ideológicas que siguieron ensayándose a través de la ligas de propietarios, además de la inspección y el control de la conflictividad social y laboral en el entorno rural, fueron el resultado de la búsqueda de medidas más coercitivas para contrarrestar los nuevos desafíos que sobre la propiedad territorial comenzaban a constituirse a comienzos de los años setenta de la centuria. Una participación política y un afán de supervisión y ajuste social que constituyen todavía un tema clave, y poco investigado en su conjunto, dentro de la historiografía relativa a las asociaciones agrícolas y agrarias en nuestro país. Con todo, las ligas de propietarios no faltaron al encuentro con las reiteradas desaprobaciones dirigidas al encarecimiento de las contribuciones, la arbitrariedad municipal o el desconcierto administrativo de la época. Todo ello en un marco de conflictividad civil que comenzaba a castigar el *statu quo* de una propiedad distinguida y notable, surgida a raíz de las políticas liberales y aprobadas unos años atrás. En este mismo escenario iban a coincidir las ligas de contribuyentes en España, confirmándose una vez más la evidente fragilidad de adaptación de la propiedad agrícola a un entorno que estaba siendo sometido al temor de una liquidación social *ex profeso*, tal y como reconocería en 1883 la *Liga de Propietarios de Valencia* en su citada y propagada *Memoria*.

³¹⁶ *La Correspondencia de España*, número 10.863, lunes 19 de diciembre de 1887. Las particularidades de los acuerdos entre España e Italia entre 1887 y 1893 en García Sanz, Fernando, *Historia de las relaciones entre España e Italia. Imágenes, Comercio y Política Exterior (1890-1914)*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1993, págs. 54 a 56.

- Las Ligas de Contribuyentes. Un primer intento de asociacionismo «global» para la propiedad y la agricultura

A comienzos de los años setenta del siglo XIX, la mentalidad asociativa y los comportamientos corporativos en nuestro país habían cambiado definitivamente, motivados inevitablemente por una mayor atención dirigida a la Administración y al interés derivado de las cuestiones políticas y de los conflictos sociales. La cuantiosa información existente en relación a las ligas de contribuyentes, ya sea a través de la prensa publicada en aquellos momentos, o por el cúmulo de memorias y reglamentos llegados hasta nuestros días, nos ha permitido disponer de un importante caudal de reseñas y circunstancias, situando a estas asociaciones en la cúspide de las aspiraciones asociativas, en lo que a la propiedad agrícola y rural se refiere. En este sentido, si Valencia había sido la cuna de las ligas de propietarios, estableciéndose en aquélla la primera asociación en 1871, Cádiz iba a significarse solo un año después a la vanguardia del holgado contingente de contribuyentes asociados en España.

Conforme a lo recogido en la prensa en los primeros meses de 1872, y con el fin de “crear hábitos de moralidad y respeto a las leyes, estudiar, proponer y gestionar las reformas administrativas y económicas que faciliten el nacimiento de nuevas fuentes de riqueza”, iba a quedar constituida en Junta General del 25 de febrero de 1872 la *Liga de los Contribuyentes* en la ciudad de Cádiz, presidida en primera instancia por Bernardino de Sobrino³¹⁷. En realidad, y si nos ceñimos a las primeras Bases aprobadas ese mismo año, la Asociación asumía “el único y exclusivo objeto de consagrarse a la defensa mutua de los intereses generales de los Contribuyentes y de las clases productoras del país”. Ello posibilitaba el derecho a ingresar en ella, además de los tenedores de la Deuda Nacional, a propietarios, banqueros, comerciantes, navieros, vendedores, almacenistas e industriales, fijándose una propaganda activa que debía gestar otras asociaciones de la misma índole en todas las capitales, poblaciones importantes y aldeas del país³¹⁸.

³¹⁷ *La Lucha. Órgano de Partido Liberal de la provincia de Gerona*, número 236, miércoles 17 de abril de 1872, y *El Constitucional*, número 329, viernes 19 de abril de 1872.

³¹⁸ Bases 1ª y 3ª, recogidas en “A los Contribuyentes de España”, *Reglamento de la Asociación ó Liga de Contribuyentes de Cadiz. Aprobado en Junta General celebrada el 17 de marzo de 1872*, Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly y Velasco, Cádiz, 1872,

Aunque incluidos en el grupo de propietarios y de las clases productoras, lo cierto es que en el texto reformado del Reglamento de la Liga de Cádiz, publicado a principios de 1875, se especificaba el derecho de labradores y ganaderos a pertenecer a la asociación gaditana. Una situación que volvería a repetirse en otros preceptos normativos de distintas Ligas en España³¹⁹. Para llevar a la práctica los propósitos ligueros, tanto la de Cádiz como las del resto del país, argumentaban la necesidad de abordar un examen crítico de los presupuestos del Estado, así como de las leyes, decretos y demás disposiciones derivadas de los centros administrativos, empleando todos aquellos medios legales al alcance de los socios e insistiendo en la innecesaria utilización de los partidos políticos, contrarios a los fines y al carácter puramente económico de la Sociedad³²⁰.

Los modelos, primero de Valencia a través de la *Liga de Propietarios*, y en segundo lugar de Cádiz con la recién creada *Liga de Contribuyentes*, propiciaron rápidamente la aparición de otras asociaciones idénticas en Córdoba, Granada y Vigo, antes de que finalizara 1872³²¹. De esa forma, en los primeros meses de 1873, la asociación cordobesa, por ejemplo, contaba ya con más de doscientos socios, la de Cádiz mil cuatrocientos en 1875, y otras ciudades como Sevilla, Barcelona, Almería, La Coruña o Jerez de la Frontera, estaban en disposición de crear sus respectivas ligas de contribuyentes³²². Las Ligas constituidas en 1876 llegaban a 21 capitales de

ARSEAPV, caja C-188, legajo IX, signatura número 04, año 1872. También en el *Diario de Córdoba*, número 6.502, viernes 19 de abril de 1872.

³¹⁹ *Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Cadiz. Aprobado en Junta General celebrada el 17 de marzo de 1872 y reformado con arreglo a las modificaciones aprobadas en las Juntas Generales de 18 de enero de 1874 y 10 de enero de 1875*, Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly, Cádiz, 1875, pág. 3. En este sentido, véase también, por ejemplo, el *Reglamento de la Asociacion ó Liga de Contribuyentes de Cáceres*, Imp. de Santiago Fernandez, Cáceres, 1877, pág. 6.

³²⁰ Además de la *Liga de Cádiz*, la medida fue adoptada por la totalidad de las asociaciones que sucesivamente se irían formando entre los años setenta y ochenta del siglo XIX. Sirvan como ejemplo, otros preceptos recogidos en el *Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Huesca*, aprobado en Junta General de la misma, en sesión del 22 de octubre de 1876, Imprenta y librería de Jacobo M. Pérez, Huesca, 1876, pág. 3; *Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Murcia*, Estab. Tipográfico de La Paz, Murcia, 1876, pág. 3; *Reglamento General de la Liga de Contribuyentes de Tarragona*, Imprenta de José Antonio Nel-lo, Tarragona, 1879, págs. 3 y 4, y el *Reglamento de la Asociacion ó Liga de Contribuyentes de Segovia*, Imprenta de Segundo Rueda, Segovia, 1882, pág. 4.

³²¹ *La Correspondencia de España*, número 5.350, domingo 21 de julio de 1872; *Diario de Córdoba*, número 6.609, viernes 30 de agosto de 1872, número 6.639, sábado 28 de septiembre de 1872, y número 6.698, sábado 14 de diciembre de 1872.

³²² *El Municipio. Órgano del Partido Republicano Federal de la Provincia de Alicante*, número 343, jueves 9 de enero de 1873; *Diario de Córdoba*, número 6.721, martes 14 de enero de 1873, y *El Constitucional*, número 2.061, miércoles 17 de febrero de 1875.

provincia y 17 poblaciones de cierta importancia, siendo un año más tarde 28 capitales y 22 localidades de consideración las que habían conseguido agrupar y reunir a los contribuyentes en torno a una misma asociación³²³. Este crecimiento llegaría a situarse, en años sucesivos, en cifras verdaderamente significativas alcanzando su cenit entre 1880 y 1885 (véanse los cuadros 37 y 38), siendo Níjar la última ciudad de la que tenemos noticias de su interés por establecer una asociación de contribuyentes a mediados del año de 1887³²⁴.

La tentativa de la Liga en Cádiz por adherir a su carácter y forma de pensamiento a otras poblaciones terminó superando las expectativas previstas³²⁵. Solo un año después de instituida se habían expedido más de 1.100 cartas, cerca de 800 circulares de propaganda y casi 1.600 Reglamentos, todo con el propósito de derogar un sistema económico considerado funesto e introducir la moralidad a través de una estadística de la propiedad más justa que pusiera de relieve las ocultaciones. Nivelar los presupuestos en esos momentos equivalía a librar al país de una tutela ejercida por la Administración, dueña en cierto modo de la fortuna pública que, en opinión de muchos contribuyentes, no era utilizada en beneficio de la masa común de los españoles³²⁶. De esta forma, y hasta prácticamente 1887, el alcance en relación al número de asociaciones y ligas instituidas en nuestro país iba a poner de manifiesto las singularidades de cada una de ellas, unas veces en demanda de una mayor participación política, otras articulando procedimientos más útiles dirigidos a la economía y fundamentados en apoyos más específicos al comercio, la industria y la agricultura.

³²³ *El Turolense*, número 85, viernes 16 de marzo de 1877, *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo III, abril a junio de 1877, págs. 740 y 741, y *La Crónica*, Badajoz, número 968, 13 de junio de 1877. En la Memoria hecha pública por la *Liga de Contribuyentes de Burgos*, correspondiente a los trabajos llevados a cabo durante ese mismo año de 1877, se apuntaba la existencia de un número cercano a las setenta ligas y otras asociaciones análogas, pertenecientes a treinta y siete provincias distintas. Véase la “Memoria de los trabajos hechos por la junta directiva de la Liga de Contribuyentes de Burgos, durante el año de 1877, segundo de su creación, leída en junta general por el Secretario de dicha asociación D. Federico Martínez del Campo”, en *Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de Córdoba*. Tomo 2º, Imprenta, librería y litografía del Diario de Córdoba, año 1878, pág. 9.

³²⁴ Así se recoge en *La Crónica Meridional*, número 8.133, jueves 16 de junio de 1887.

³²⁵ Los intentos por establecer ligas de contribuyentes en el mayor número de localidades posibles llegó incluso a solicitarse desde la recién creada *Liga de Contribuyentes de Córdoba*. Véase en *La Correspondencia de España*, número 5.405, sábado 14 de septiembre de 1872.

³²⁶ *Memoria leída por el Presidente de la Liga de Contribuyentes de Cádiz, en la Junta General ordinaria celebrada el día 12 de enero de 1872 en cumplimiento de lo que previene el artículo 21 del Reglamento*, Imprenta de la Revista Médica, Cádiz, 1872, págs. 3 a 7.

CUADRO 37

Ligas de Contribuyentes (hacia 1880)

- **Albacete**
- Aguilar (Málaga)
- Aguilar de la Frontera (Córdoba)
- Algeciras (Cádiz)
- **Alicante**
- Alora (Málaga)
- **Almería**
- **Ávila**
- **Badajoz**
- Balaguer (Lérida)
- Beznar (Granada)
- **Burgos**
- **Cáceres**
- **Cádiz**
- Campillos (Málaga)
- Cartagena (Murcia)
- Carratraca (Málaga)
- **Castellón de la Plana**
- Cazalla de la Sierra (Sevilla)
- **Ciudad Real**
- **Córdoba**
- **Coruña**
- **Cuenca**
- Gavia la Grande (Granada)
- **Gerona**
- Gijón (Oviedo)
- Gracia (Barcelona)
- **Granada**
- **Guadalajara**
- **Huelva**
- **Huesca**
- **Jaén**
- Jerez de la Frontera (Cádiz)
- Jerez de los Caballeros (Badajoz)
- Jimena (Jaén)
- Linares (Jaén)
- Línea de la Concepción (Cádiz)
- Lora del Río (Sevilla)
- **Madrid**
- **Málaga**
- Medina Sidonia (Cádiz)
- Miranda de Ebro (Burgos)
- **Murcia**
- Olesa (Barcelona)
- **Oviedo**
- Orotova (Canarias)
- **Palma de M.**
- **Pontevedra**
- Prado del Rey (Cádiz)
- Pruna (Sevilla)
- Puebla de los Infantes (Sevilla)
- P. de Sta. María (Cádiz)
- Puerto Real (Cádiz)
- Reus (Tarragona)
- Sanlúcar de B. (Cádiz)
- Santiago (Coruña)
- **Segovia**
- **Sevilla**
- **Soria**
- Tariego (Palencia)
- Tárrega (Lérida)
- **Tarragona**
- **Toledo**
- Urgel y la Segarra (Lérida)
- **Valencia**
- **Valladolid**
- Vélez-Málaga (Málaga)
- Vigo (Pontevedra)
- Villanueva de la Serena (Badajoz)
- **Zamora**
- **Zaragoza**

FUENTE: *Revista del Círculo Salmantino*, número 348, sábado 10 de abril de 1880, pág. 1.132, y *La Mañana*, número 1.250, viernes 5 de marzo de 1880.

CUADRO 38

Nuevas Ligas de Contribuyentes establecidas entre 1880 y 1885

- Alburquerque (Badajoz)
- Alcalá la Real (Jaén)
- Alía (Cáceres)
- Andújar (Jaén)
- Arrecife (Canarias)
- Badalona (Barcelona)
- Baños de Cerrato (Palencia)
- Baquerín (Palencia)
- **Barcelona**
- Batres (Madrid)
- Benalúa de las Villas (Granada)
- Bornos (Cádiz)
- Caldas de Montbuy (Barcelona)
- Caniles (Granada)
- Cantillana (Sevilla)
- Carpio, El (Córdoba)
- Castro Urdiales (Santander)
- Castromocho (Palencia)
- Cullar de Baza (Granada)
- Don Benito (Badajoz)
- Écija (Sevilla)
- Esparraguera (Barcelona)
- Ferrol (Coruña)
- Frechilla (Palencia)
- Fregenal de la Sierra (Badajoz)
- Fuentes de Valpero (Palencia)
- Fuerteventura (Canarias)
- Guadix (Granada)
- Husillos (Palencia)
- Inca (Mallorca)
- Iznalloz (Granada)
- **León**
- **Logroño**
- Loja (Granada)
- Lomas (Palencia)
- Lugo
- Mazarrón (Murcia)
- Medina de Rioseco (Valladolid)
- Miguelturra (Ciudad Real)
- Motril (Granada)
- Onteniente (Valencia)
- Orgiva (Granada)
- Os de Balaguer (Lérida)
- **Palencia**
- **Palma de Mallorca**
- Peñaranda (Salamanca)
- Perales (Palencia)
- Potes (Santander)
- Priego (Cuenca)
- Riels de Tay (Barcelona)
- Rivas (Palencia)
- San Fernando (Cádiz)
- San Roque (Cádiz)
- **Salamanca**
- **Santander**
- Sigüenza (Cuenca)
- Socuéllamos (Ciudad Real)
- Solsona (Lérida)
- Tamara (Palencia)
- Tebar (Cuenca)
- Torrelavega (Santander)
- Úbeda (Jaén)
- Ugijar (Granada)
- Valle de la Serrana (Badajoz)
- Vergaño (Palencia)
- Villamartín (Cádiz)
- Villamuriel (Palencia)
- Villarrobledo (Albacete)

FUENTE: *Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 91, 26 de abril de 1885.

Desde la Liga de Córdoba no tardaron en aparecer avisos que requerían la participación activa de propietarios, labradores y agricultores con el fin de participar y hacerse representar en las distintas sesiones y Juntas en provecho de sus propios intereses³²⁷. Otras agrupaciones ligueras actuaron muy pronto a favor de la agricultura, ya fuera a través de peticiones dirigidas al Gobierno de la Nación solicitando una adecuación de los derechos arancelarios del trigo, e incluso evidenciando la necesidad de implantar un sistema aprovechable de cátedras y escuelas de agricultura, así como de granjas-escuela gestionadas cerca de las corporaciones locales y provinciales. Prueba de lo expuesto fue la actitud de la Liga de Jerez preocupada por difundir la enseñanza y gestionar las mejoras de producción y el fomento de la riqueza, sin olvidar la opinión que desde el propio Ministerio de Fomento se había venido formando de estas asociaciones. Sobre esto último en particular, y en relación a las ligas de contribuyentes, a mediados del año 1887 podíamos leer lo siguiente: “Por lo que se refiere á la agricultura, seguimos creyendo que estas asociaciones están llamadas á influir poderosamente en la prosperidad agrícola, si la organizacion responde al lema de la bandera que enarbolan; pero es imprescindible que haya unidad de pensamiento y que se trace la órbita en que han de funcionar”³²⁸.

También, y entre los aspectos relacionados directamente con la agricultura, desde Valladolid la Junta de la Liga en aquella localidad llevaba algún tiempo solicitando una rebaja en el precio del transporte del trigo por ferrocarril, una circunstancia que estaba motivada por los altos costes que representaba el acarreo del trigo castellano a otras ciudades españolas, lo

³²⁷ *Diario de Córdoba*, número 6.677, miércoles 20 de noviembre de 1872, y *El Album. Revista Semanal de Literatura, Artes, Teatros, Salones y Modas*, número 16, domingo 9 de marzo de 1873, pág. 5.

³²⁸ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo IV, julio a septiembre de 1877, pág. 246. En efecto, los primeros apoyos recogidos en apoyo a la formación de una granja-escuela en la Cartuja de Jerez fueron solicitados por la Liga de dicha localidad. Véase *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.038, sábado 13 de febrero de 1875. Sobre este mismo propósito puede consultarse *El Comercio*, número 11.596, miércoles 29 de septiembre de 1875, la *Crónica Meridional*, número 4.973, jueves 27 de abril de 1876, y *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo II, octubre a diciembre de 1876, pág. 626. Asimismo, la *Liga de Contribuyentes de Granada*, años más tarde, solicitaría al Ministro de Fomento la instalación de una Granja de similares características en aquella provincia. Véase la *Memoria leída por el Presidente de la misma, Excmo. Señor D. Pablo Díaz y Ximénez, en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de 1883*, Imprenta de El Defensor, 1883, pág. 6. La *Liga de Contribuyentes de Jerez* solicitaría meses más tarde el establecimiento de cátedras de Agricultura, Idiomas y Dibujo. En relación al trigo, la Junta Directiva de la *Liga de Contribuyentes de Málaga* remitió al Rey una exposición en la que se instaba a una rebaja del derecho arancelario en los trigos de importación. *El Comercio*, número 11. 307, viernes 11 de julio de 1875.

que acrecentaba la necesidad de revisar varios de los artículos relacionados con las obligaciones impuestas en las concesiones relativas al transporte ferroviario, recogidos en la conocida Ley General de Caminos de Hierro, y que venía aplicándose desde su aprobación en el mes de junio de 1855³²⁹.

La agricultura y su vinculación con la mejora en las vías de comunicación estuvieron siempre presentes en las reivindicaciones de las sociedades ligueras hasta 1887, alcanzando su punto más álgido en 1885, después de un artículo publicado en la Revista de la *Liga de Contribuyentes de de Salamanca*, en el que se apuntaba el escaso interés demostrado por paliar el aislamiento al que todavía se veían sometidos innumerables centros agrícolas del país. En concreto se especificaba: “Entre aquellos obstáculos existe uno, tan general, tan poderoso, que contribuye, acaso más que ningún otro, á la gravedad del mal que lamentamos, y es causa, tal vez la más principal y directa, de las consecuencias funestísimas que engendra: la escasez y mal estado de nuestras vías de comunicación”. Si las carreteras ya mantenían de por sí un pésimo nivel en su estado de conservación, los ferrocarriles suponían en muchos casos una rémora para el traslado de mercaderías y géneros.

La mayor parte de nuestros ferro-carriles tienen un trazado absurdo. No siempre van en busca de los centros productores: no tienen muchas veces, como fin principal, facilitar el movimiento mercantil del país que recorren; no se cuidan, en primer término, de trasportar pronto, segura y económicamente las mercancías: en casi todas las concesiones se descubren rasgos de una especulación para las empresas constructoras que, interesadas en la mayor longitud de las líneas, han accedido fácilmente á exigencias torpes de la política, y no se han opuesto á los caprichos de influyentes personajes, siquiera, para obrar así, hayan tenido que sacrificar los intereses de una region agrícola³³⁰.

³²⁹ En efecto, la *Liga de Valladolid* había pedido reiteradamente una rebaja que situara a 0,30 reales por tonelada y kilómetro, un precio que suponía todavía casi el doble del que venía pagándose en Francia por el mismo artículo y las mismas condiciones. A este respecto puede consultarse, por ejemplo, *El Constitucional*, número 2.641, domingo 14 de enero de 1877. También la *Liga de Contribuyentes de Huelva* hacía tiempo que venía quejándose en este mismo sentido, aludiendo a que las elevadas tarifas ferroviarias solo servían a los intereses de las empresas particulares. *Diario de Córdoba*, número 7.828, viernes 13 de octubre de 1876.

³³⁰ “La Agricultura y las vías de comunicación”, en *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 89, 12 de abril de 1885. Muchas más observaciones se recogen en algunas de las Memorias e Informes presentados por diferentes Ligas de Contribuyentes. Véase, por ejemplo, lo que al respecto puntualiza la *Liga de Contribuyentes del Ferrol* en su *Informe*

Siguiendo con las consideraciones relativas a la agricultura, tampoco faltaron quienes solicitaron que las tierras de la Huerta, en las regiones del Levante, fueran consideradas de secano a efectos de tributación para la Hacienda pública. La *Liga de Contribuyentes de Alicante* comenzó a valorar la posibilidad de disminuir parte de los recargos exigidos a la agricultura mediante una acción conjunta que debía partir de propietarios y contribuyentes con influencias políticas “sean cuales fuere sus opiniones”, y que debía estar apoyada en todo momento por ayuntamientos y personalidades de prestigio³³¹.

Una prueba más de la proximidad de los grupos de contribuyentes con el impulso y el avance agrario podemos advertirla en el intento de gestión, por parte de la Liga de Cádiz, para establecer en esta ciudad una delegación de la *Asociación Protectora de la Agricultura Española*, fundada por la duquesa de Medinaceli. En la misma línea se situaría la vinculación y posterior unión de la *Protectora* con la Liga de Contribuyentes en Madrid a comienzos del año 1879³³².

Las menciones al estancamiento de la agricultura, además de la difícil situación económica, fueron temas suficientemente tratados en las reuniones de representantes de las Ligas de Contribuyentes y Asociaciones Análogas que, desde 1879, habían comenzado a celebrarse de forma

presentado á la Junta de gobierno por la Comision nombrada para estudiar el estado actual del proyecto de ferro-carril del Ferrol á Betanzos y proponer los medios de conseguir su pronta construcción, Imp. de El Correo Gallego, Ferrol, 1883, así como la *Liga de Contribuyentes de Málaga* su *Memoria de los trabajos y gestiones realizados por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de Málaga, durante el año de 1886, leída por el Señor Presidente en la Junta General ordinaria celebrada el día 26 de enero de 1887*, Imprenta del Diario Mercantil, Málaga, 1887, pág. 4.

³³¹ *El Pueblo Español*, número 514, martes 19 de junio de 1877; *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.817, martes 21 de agosto de 1877, y número 2.835, miércoles 12 de septiembre de 1877. Son muchas las menciones que podemos encontrar en la prensa de la época en relación a la trascendencia del ferrocarril y su utilidad a la agricultura, especialmente en todo lo relativo a las peticiones para que se conformaran distintos ejes transversales desde Medina a Salamanca, o desde Plasencia a Astorga, así como desde Cáceres a esta última localidad, este último conocido habitualmente como el *camino de Extremadura*, lo que suponía la conexión de las zonas productoras entre Castilla y dicha región. Al respecto, véase, *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 6, correspondiente al día 20 de febrero de 1883; número 30, correspondiente al día 30 de octubre de 1883, así como los número 35 y 66, de los días 20 de diciembre de 1883 y 30 de octubre de 1884, respectivamente.

³³² *El Amigo*, número 34, 13 de octubre de 1878, y número 48, 20 de enero de 1879. Asimismo, en *La Lucha. Órgano de Partido Liberal de la provincia de Gerona*, número 1.503, miércoles 22 de enero de 1879.

continuada en nuestro país³³³. En todo caso, desde las distintas asociaciones ligueras, bien fuera a través de la publicación de memorias o mediante artículos insertados en la prensa, no se ocultaba el profundo malestar por el estado «miserable» y pobre que venía arrastrando la clase agrícola española, aspecto que, como prueba el caso, la Liga de Balaguer había hecho notar en una exposición dirigida al Ministerio de Estado en el verano de 1880 y en la que se destacaba la disminución del número de propietarios agrícolas.

Si alguna duda se abrigase sobre la deplorable condición en que se encuentra el agricultor español, la desvanecería completamente el hecho de haberse embargado por falta de pago de contribución en estos años, el exorbitante número de ciento setenta y tres mil fincas, el hecho de haberse reducido el número de propietarios de cuatrocientos setenta y seis mil que había en 1868 á trescientos mil que hay actualmente, el hecho de pagar el contribuyente español el 25 por 100, cuando el que paga mayor tipo de los varios Estados de Europa no llega á satisfacer el 14 por 100 de su renta líquida³³⁴.

La filoxera, las medidas a adoptar contra la misma, o el uso de la maquinaria en beneficio de la agricultura fueron otros de los aspectos que las ligas de contribuyentes tuvieron presentes en sus programas a lo largo de los años de presencia de éstas en el mundo rural, actividades a las que se fueron incorporando un buen número de conferencias agrícolas en numerosas ciudades y poblaciones³³⁵. Las trabas impuestas por los

³³³ *La Mañana*, número 1.254, miércoles 10 de mayo de 1880.

³³⁴ *La Mañana*, número 1.376, martes 3 de agosto de 1880. En la Junta General celebrada por la *Liga de Contribuyentes de Málaga* en 1883, todavía se seguía insistiendo en los «desastres» provocados por la política fiscal en España y la ruina que la misma provocaba en la agricultura al seguir “cobrando los tributos allí donde no había productos, donde la riqueza imponible había desaparecido, y para cobrar se valía de los apremios, de los embargos, de la subasta de las tierras, y hasta de la ocupación de los enseres del hogar”. Al respecto puede consultarse parte del trabajo recogido en la *Junta General celebrada por la Liga de Contribuyentes de Málaga el día 25 de junio de 1883*, Imprenta de El Reformista Andaluz, Málaga, 1883, pág.13. El atraso en la agricultura quedó recogido igualmente por la *Liga de Contribuyentes de Granada* en su *Memoria...*, ob. cit., pág. 5.

³³⁵ Algunos ejemplos los encontramos en Málaga, donde la Liga de Contribuyentes de aquella ciudad inició una serie de actividades dirigidas a combatir la filoxera. En este sentido puede consultarse *La Correspondencia de España*, número 8.584, jueves 22 de septiembre de 1881. Asimismo, en *Junta General celebrada por la Liga de Contribuyentes de Málaga...*, ob. cit., pág. 12. Al mismo tiempo, la prensa de la época se hizo eco igualmente del interés mostrado por la *Liga de Contribuyentes de Salamanca* en relación a los adelantos y el empleo de máquinas agrícolas, así como de las ventajas que podían derivarse de la celebración de conferencias agrícolas en todas las capitales y ciudades más importantes de

acuerdos y tratados comerciales, además de las dificultades que éstos representaban para la producción del campo y el desarrollo de la agricultura en general, hacía tiempo que venían despertando serias críticas en las provincias cerealícolas de Castilla la Vieja, especialmente en Salamanca. El librecambio y las consecuencias derivadas de los compromisos internacionales eran todavía en 1886 una vía inherente para el reclamo asociativo entre propietarios y agricultores, además de un argumento rutinario para la reprobación al Gobierno en todas aquellas cuestiones relacionadas con la economía doméstica. Esta cuestión no podía ser más evidente, llegándose a justificar desde la *Liga de Contribuyentes de Salamanca* de la siguiente forma:

Porque mientras en España, entre directas é indirectas, provinciales, municipales, consumos, sal, recaudaciones, etc., la riqueza rústica y urbana resulta gravada (en algunas partes) hasta con un 32 por 100, en los Estados Unidos, Buenos Aires y otros puntos, no llega á un 10 por 100, en ninguna parte. Total, que entre arrastres, tributos y otras zarandajas por el estilo, los productos españoles á los 300 kilómetros de recorrido, están ya por más precio que cuestan en el Norte de América entre produccion y arrastre³³⁶.

En otro orden de cosas, desde las ligas se venían haciendo intentos puntuales por mejorar la situación de los productos españoles respecto a todos aquellos que podían competir directamente en los mercados internacionales. Las peticiones que sobre este asunto en particular recibían las autoridades responsables de las negociaciones con otras potencias económicas, recogían el interés por mantener unos criterios de reciprocidad, haciéndose necesaria en ocasiones una intensificación efectiva de los aranceles en la misma proporción que la hacían el resto de naciones³³⁷. No es de extrañar, por tanto, que algunos propietarios manifestaran su intención de establecer acuerdos y conciertos con terceros países, especialmente en aquellas decisiones que afectaban al vino, así como a los artículos derivados del alcohol. Este último aspecto se explica por las exportaciones de vinos de calidad, en particular por los vinos de Jerez, que

España. En este sentido pueden consultarse: *El Fomento. Revista de Intereses Sociales*, número 129, 22 de junio de 1883, y número 751, lunes 27 de septiembre de 1886.

³³⁶ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 162, 5 de septiembre de 1886.

³³⁷ Así se recoge, por ejemplo, en una de las publicaciones de la *Liga de Contribuyentes de Málaga*, en su petición al Ministro de Estado para que en el transcurso de las negociaciones con Alemania sobre el tratado de Comercio previsto a establecer con dicho Estado, se mantuviera una estricta reciprocidad arancelaria. *Junta General celebrada por la Liga de Contribuyentes de Málaga el día 25 de junio de 1883*, ob. cit., pág. 8.

habían adquirido una señalada consolidación en los mercados británicos desde el siglo XVIII, manteniendo una tendencia alcista en la primera mitad del XIX. A esta circunstancia se sumó también la *Liga de Contribuyentes de Cádiz*, al reprobar la conducta que la Administración venía manteniendo respecto a otros países con vocación vinícola, en una exposición dirigida al rey en octubre de 1875.

Los vinos de España y especialmente los de esta provincia que en épocas no lejanas obtenían la preferencia en los mercados extranjeros, han decaído en estos últimos tiempos, de un modo notable, porque la administración pública no se ha cuidado de alcanzar para ellos las ventajas necesarias que ofrezcan mayores facilidades á su entrada ó concurrencia en dichos centros, de igual manera que las más celosas administraciones de otros países lo han conseguido. Los exorbitantes y desproporcionados derechos que se exigen á los vinos de España á su introducción en los puntos extranjeros, especialmente en los puertos de Inglaterra, los ponen fuera de las condiciones convenientes para competir con los de otros países que están infinitamente mas favorecidos, y esta causa es el origen del retraimiento que se observa en la demanda de los nuestros, lo cual viene á lastimar sensiblemente los intereses agrícolas no solo de estas zonas meridionales sino tambien de las de todas las comarcas vinícolas de la nación³³⁸.

En esta misma línea, la *Liga de Contribuyentes de Málaga* propuso a finales de aquel mismo año la celebración de un tratado comercial con Gran Bretaña que fuera capaz de nivelar en las aduanas inglesas los vinos franceses y españoles, favoreciendo de esta manera las exportaciones durante la década de los años setenta³³⁹. A ello se sumaba la circunstancia de que los vinos nacionales de hasta 14 grados, venían abonando por su introducción en Francia unas cantidades que distaban mucho de los «caldos» italianos. Esta situación tan desfavorable dio lugar a que la *Liga de Contribuyentes de Burgos* buscara a través de una exposición dirigida al ministro de Hacienda, unos acuerdos con el país vecino que impidieran la ruina del sector vinícola en muchas regiones castellanas³⁴⁰. Con los

³³⁸ *El Comercio*, número 11.604, jueves 7 de octubre de 1875.

³³⁹ Hacia el mes de noviembre de 1875, sabemos que los vinos franceses devengaban en el mercado británico un chelín por galón imperial, mientras que los españoles eran gravados con dos chelines y medio, lo que suponía una diferencia de un 150 por ciento. Dicha circunstancia fue tratada, por ejemplo, en algunos artículos de la prensa extremeña. Véase *La Crónica*, Badajoz, número 855, 28 de noviembre de 1875.

³⁴⁰ *Memoria de los trabajos hechos por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de Burgos, durante el año de 1877, segundo de su creacion, leída en Junta General por el*

primeros indicios de la filoxera en diferentes áreas del Ródano y en algunos territorios de la región francesa de Languedoc-Rosellón, a finales de los años sesenta, y después de la firma del Tratado Comercial de 1882 entre España y Francia, las dificultades comenzaron a atenuarse, reduciéndose considerablemente los aranceles satisfechos por los vinos españoles en los mercados de aquel país.

Mientras, la situación triguera en Castilla mantenía sus diferencias con la situación alcoholera lograda por ligeros y productores a comienzos de los años ochenta, máxime después de firmado el Tratado con los Estados Unidos en 1882, y aún más tras su entrada en vigor en 1884. Este hecho supuso de inmediato la movilización de los propietarios castellanos, toda vez que las Antillas constituían un importante mercado para las harinas y trigos de la región. Junto a aquéllos, la mayoría de políticos de las provincias de Castilla la Vieja consideraron el hecho como un elemento que debía servir de presión contra el Gobierno de Madrid, entendiendo que los acuerdos, al permitir una rebaja en los aranceles a la importación de harinas en Cuba durante los siguientes diez años, iban en detrimento de los intereses de los agricultores, así como de los fabricantes de harinas distribuidos por todos los territorios castellanos³⁴¹. Desde esta perspectiva, un ejemplo suficientemente explicativo se produjo con motivo de las discusiones que se llevaban a cabo para admitir a trámite las autorizaciones económicas que afectaban a las colonias americanas de Cuba y Puerto Rico, en la sesión del Congreso de los Diputados celebrada el día 17 de julio de 1884. En dicho debate, José Muro López, diputado por Valladolid, refiriéndose a los propósitos de las provincias afectadas advertía lo siguiente:

La única concesion real para nosotros es la supresion del derecho arancelario que pesa hoy sobre el trigo y sobre las harinas y sobre los vinos ordinarios; pero inmediatamente despues de ella viene la amenaza de los tratados de comercio, en virtud de los cuales esta concesion puede resultar estéril. Preciso es que esto no suceda, y yo al efecto pido al Gobierno que al

Secretario de dicha Asociacion, D. Federico Martinez del Campo, Imprenta de D. Timoteo Arnaiz, Burgos, 1878, págs. 18 y 19.

³⁴¹ Calzada del Amo, Esther, *Germán Gamazo. Poder político y redes sociales en la Restauración (1840-1901)*, Marcial Pons, Madrid, 2011, pág. 225. Sobre las expectativas que despertaba una supuesta acción de los diputados castellanos puede consultarse un interesante artículo publicado en la prensa de Burgo de Osma. Véase *La Propaganda*, número 116, 23 de enero de 1885.

hacer los tratados no se olviden de los intereses de Castilla, tan respetables como los de Cuba³⁴².

A las posiciones defendidas por diputados y senadores castellanos se sumaron los miembros de la *Liga de Contribuyentes de Santander*, quienes a través de un escrito dirigido a Claudio Moyano, en aquellos momentos senador por Madrid, manifestaban su apoyo en todas aquellas gestiones dirigidas a dificultar la aplicación del Tratado de comercio con los Estados Unidos³⁴³. Unos meses antes, incluso la *Liga de Contribuyentes de Salamanca* había dejando constancia de las consecuencias que el acuerdo entre los dos países acarrearía a la agricultura salmantina, lo que produjo algunas llamadas de atención invitando a la Junta de Agricultura y a la Diputación de la provincia a cooperar conjuntamente para salvaguardar los intereses agrícolas de la región³⁴⁴.

Fueron en este sentido las ligas castellanas, en especial las de Salamanca y Valladolid, quienes mostraron un mayor empeño por hacer públicos los perjuicios que el Tratado con los Estados Unidos conllevaba para la agricultura del país, especialmente en todo lo relativo al trigo. En los primeros días de enero de 1886, una reunión celebrada en la capital vallisoletana logró aglutinar a distintos miembros pertenecientes a centros agrícolas y ligas comarcales con el fin de analizar las desventajas que cabían en el Tratado. Entre los asistentes pudo contabilizarse una comisión formada al efecto por socios de la *Liga de Contribuyentes de Salamanca*³⁴⁵. Esta circunstancia vino a unirse a los continuos llamamientos que, desde hacía algún tiempo, la Liga de Valladolid venía haciendo en toda Castilla la Vieja, pidiendo la colaboración en contra de los postulados que habían llevado al Gobierno a tramitar dicho Acuerdo, y que acabarían encontrando

³⁴² Muro, José, *Fragmentos de una Campaña Parlamentaria, 1884-1885*, Establecimiento tipográfico de H. de J. Pastor, Valladolid, 1886, págs. 9 y 10.

³⁴³ *Memoria leída por el Señor Presidente accidental de la Liga de Contribuyentes de Santander en la Junta General Ordinaria celebrada el día 29 de enero de 1885*, Imprenta d J. M. Martínez, Santander, 1885, págs. 8 a 12.

³⁴⁴ Para la Liga constituida en Salamanca, el propósito más inmediato era la defensa a ultranza de la agricultura salmantina, al tiempo que impugnar los acuerdos establecidos entre España y los Estados Unidos. Unos acuerdos comerciales que, en opinión de la propia Liga: "esterilizaría la producción de nuestros fértiles campos". *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 44, 20 de marzo de 1884.

³⁴⁵ Al respecto puede consultarse en diario salmantino *El Fomento. Revista de Intereses Sociales*, número 535, viernes 8 de enero de 1886.

una destacada acogida entre las ligas de Palencia, Valdenebro, Baños, Castromocho, y la ya citada de Salamanca³⁴⁶.

Del mismo modo, y con el título “Empieza la preocupación”, desde la revista de la *Liga de Contribuyentes de Salamanca* se puso en marcha una campaña para concienciar a propietarios y labradores de los efectos que el Tratado habilitado con los Estados Unidos podía originar a una agricultura, ya de por sí castigada con los gastos ordinarios del cultivo y de las cargas contributivas impuestas por la Hacienda del Estado. A este respecto, y en relación a las consecuencias derivadas del nuevo *statu quo* originado por el Tratado en 1884, desde la asociación salmantina se aducía:

en el año agrícola que vamos recorriendo, han subido á tres veces el importe de lo que costaba la recoleccion y el cultivo general en el año de 1880. Pues ahora bien, si con estos gastos la depreciacion es tal que por consecuencia de la imposibilidad de sacar nuestros trigos para Cuba y Puerto-Rico, único mercado que tenemos, la cosecha se estanca entre nosotros y falta de comprador baja su tipo, y baja hasta cotizarse á 20 reales la fanega; ¿cómo pagará el colono las rentas á metálico y las contribuciones y atenderá á los gastos de su consumo y de su cultivo?³⁴⁷.

La magnitud del problema creado en el entorno triguero y harinero castellano forzó el cierre, al menos en Valladolid, de nueve fábricas de harinas, estando próximas a su liquidación otras nueve en los primeros cuatro meses de 1884, tal y como relataba la prensa de Salamanca³⁴⁸. En todo caso, la cuestión de las harinas nacionales junto con la falta de salida hacia el exterior del trigo castellano explicaba abiertamente la intención de ampliar la libertad de comercio por parte de las autoridades económicas, lo que favorecía la economía de las Antillas en detrimento de la producción de las comarcas agrícolas del interior del país, al mismo tiempo que abría a los Estados Unidos los mercados cubanos y puertorriqueños. Desde las páginas de los diarios de Salamanca y desde el *Norte de Castilla* en Valladolid todo el «affaire» quedaba suficientemente explicado con una pregunta que, a todas luces, se hacía evidente: “¿Pero cómo no ha de perjudicar este tratado á nuestra riqueza agrícola cuando sólo al anuncio del mismo los precios de los

³⁴⁶ *La Estafeta del Noroeste (Crónica de Leon)*, número 6, domingo 16 de enero de 1886.

³⁴⁷ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 47, 20 de abril de 1884.

³⁴⁸ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 48, 30 de abril de 1884.

granos y harinas van en progresivo descenso?”³⁴⁹. En realidad, y hasta 1886, las manifestaciones contra los acuerdos bilaterales entre el país Norteamericano y España se fueron haciendo mucho más evidentes, no sin que se recordaran algunos casos y situaciones semejantes que ya habían sido reprobadas tiempo atrás.

Recuérdese lo que decían los castellanos cuando á propósito del tratado de comercio con Francia, Cataluña se quejaba de los perjuicios que experimentaría, pues decían y con razón que no era justo que para proteger la industria catalana, los demás españoles vistiéramos caro y no pudiéramos dar salida á nuestros vinos, razonamiento que ahora puede reproducir Cuba con respecto á la metrópoli. En suma, el tratado con los Estados-Unidos es perjudicial momentáneamente, no para la península, sino para los labradores y fabricantes de harinas; pero en cambio es altamente beneficioso para la nación entera, que comerá el pan más barato que en la actualidad³⁵⁰.

En los inicios del año 1885, la comisión ejecutiva creada para analizar los efectos del tratado con los Estados Unidos pudo reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, Cánovas del Castillo, conferencia que había sido impulsada por el diputado por Ciudad Rodrigo y Secretario de la Comisión de Diputados de las provincias harineras, Sánchez Arjona. En la reunión, Cánovas se comprometió compensar a los productores de trigo y harinas, barajando la posibilidad de aumentar los derechos de importación de los trigos extranjeros, dentro de los límites permitidos, además de conseguir una rebaja en los transportes de granos, indemnizando si ello fuera necesario a las compañías de ferrocarriles³⁵¹. A pesar de las negociaciones, la proximidad a la fecha en que debía ser ratificado el Tratado produjo la adhesión de las provincias de Santander, Burgos, Logroño, Valladolid, Palencia, Zamora y Salamanca. Unidad que se hizo más patente

³⁴⁹ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 75, 4 de enero de 1885. En relación a los efectos producidos por el convenio hispano-americano y las críticas vertidas en el *Norte de Castilla* pueden consultarse *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 76, 11 de enero de 1885, y número 77, de 18 de enero de 1885.

³⁵⁰ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 80, 8 de febrero de 1885.

³⁵¹ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 82, 22 de febrero de 1885. Ya en el verano de 1884, el diputado Sánchez Arjona se había dirigido a la *Liga de Contribuyentes de Salamanca* para solicitar informes en relación a la cuestión de las harinas en la provincia. *El Defensor de los Secretarios de Ayuntamiento y demás funcionarios de la Administración Local*, número 47, 1 de julio de 1884, y en el diario salmantino *El Progreso*, número 21, miércoles 2 de julio de 1884.

desde la *Liga de Contribuyentes de Valladolid* y desde la práctica totalidad de la prensa castellana³⁵².

La realidad era que el acuerdo alcanzado no regulaba la reciprocidad comercial entre Estados Unidos y la Península, reduciéndose a una mera relación entre aquél y las colonias antillanas españolas, lo que venía a modificar la política de convenios establecida en época isabelina, más proclive a evitar cualquier vinculación de las colonias en los acuerdos internacionales. Los efectos de la política canovista, una vez renegociado el *modus vivendi* de enero de 1884, ahondó más las diferencias que ya existían entre agricultores y Gobierno, impulsándose aún más las viejas aspiraciones de establecer sociedades políticas independientes al devenir dictado por los partidos políticos arraigados en Madrid³⁵³. Junto a estos deseos, se iban a ver reiteradas, una vez más, las pautas proteccionistas gestadas en 1820, tal y como correspondía a asociaciones agrícolas formadas en el concepto de la propiedad como fundamento de un «todo» esencial y genérico, característico de las colectividades latifundistas y rurales decimonónicas del país.

- Protección y movilización política. Obstáculos y limitaciones a la actividad liguera

Dentro de aquella compleja situación, marcada por la “implacable ruina de la agricultura cerealística de la meseta”, algunas ligas de contribuyentes pudieron mantener activos sus intentos y esfuerzos, gracias a una parte importante de los sectores económicos y sociales que, a través

³⁵² *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 126, 27 de diciembre de 1885. Asimismo, en enero de 1886 sería una Asamblea de las ligas castellanas las encargadas de discutir y manifestar su desacuerdo con la entrada en vigor del Tratado con Estados Unidos. Véase *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 131, 31 de enero de 1886.

³⁵³ Cánovas, en efecto, al acogerse al articulado vigente del *modus vivendi* del 2 de enero de 1884, evitaba la ratificación parlamentaria, en esos momentos con una mayoría contraria, precisamente antes de que las Cámaras fueran disueltas. A ello hubo que añadir las presiones que Estados Unidos por temor a que Cuba y Puerto Rico pudieran negociar con otras potencias, especialmente con Gran Bretaña. Para este último caso, puede consultarse de Sánchez Padilla, Andrés, “La apertura del mercado cubano a los productos estadounidenses: las relaciones comerciales hispano-norteamericanas, entre distintos *modus vivendi* y tratados fallidos (1884-1894)”, coord. por Barrio Alonso, Ángeles, Hoyos Puente, Jorge de, y Saavedra Arias, Rebeca, *Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación. Actas del X Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea* (edición en CD-Rom), Ediciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2011.

de la prensa, practicaban un seguimiento de las sociedades de propietarios e industriales que venían constituyéndose en el último cuarto del siglo XIX³⁵⁴. De acuerdo con estas consideraciones, la fiebre asociativa que recorría Europa desde hacía unos años, tenía ya su reflejo en la España de los setenta y ochenta, en clara sintonía con otras naciones de nuestro entorno. Como ejemplo de esta realidad, un determinado número de asociaciones ligueras contaban por aquellos mismos años con boletines y gacetas, órganos de prensa que, al fin y a la postre, representaban abiertamente los intereses de aquéllas y servían simultáneamente como medio sostenedor y propagador de sus ideas³⁵⁵.

Naturalmente, una de las tareas más destacadas dentro de la praxis y del carácter asociativo de las ligas, fue la denuncia, casi permanente, de las políticas presupuestarias y de las cargas contributivas que se venían proyectando para enjugar el déficit presupuestario del Estado. Esta reacción frente a las limitaciones que tanto afectaban a contribuyentes como a municipios, era la consecuencia lógica de años de protestas, además de formar parte de las obligaciones intrínsecas que estas mismas asociaciones habían logrado promover para atender a propietarios y productores agrícolas desde comienzos de los años setenta, exigiendo la nivelación de los presupuestos y la liberación a aquéllos de la tutela de una Administración, dueña hasta esos momentos del peculio público³⁵⁶.

Prácticamente, desde 1872 y hasta 1887, las declaraciones y documentos, generalmente expresados en forma de Exposiciones a la Corona

³⁵⁴ La cita en: Fontana, Josep, *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Ariel, Barcelona, 1973, pág. 193.

³⁵⁵ En la actualidad conocemos al menos, además de la ya mencionada *Liga de Contribuyentes de Salamanca*, la existencia de otras publicaciones similares en Burgos y Oviedo, sin olvidar la editada por la *Liga Nacional de Contribuyentes de España* que vería la luz en el año 1880 con el propósito de servir de órgano de propaganda a todas las ligas constituidas. Algunos datos pueden encontrarse en *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.057, viernes 12 de febrero de 1875, y número 2.840, martes 18 de septiembre de 1877. Asimismo, en *La Mañana*, número 852, 15 de noviembre de 1878, y *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 340, sábado 14 de febrero de 1880. Respecto al Boletín difundido por la *Liga Nacional*, véase también de Ramos Santana, Alberto, "Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincia", en *Historia de Cádiz*, Sílex ediciones S.L., Madrid, 2005, pág. 632.

³⁵⁶ *Memoria leída por el Presidente de la Liga de Contribuyentes de Cádiz, en la Junta General ordinaria celebrada el día 12 de enero de 1872...*, ob. cit., págs. 1 a 3. Asimismo en la *Memoria de los trabajos hechos por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de Burgos, durante el año de 1877...*, ob. cit., págs. 9, 10 y 21.

y al Gobierno, se produjeron sin solución de continuidad³⁵⁷. La importancia dada a este propósito queda demostrada en la propuesta hecha por las ligas de contribuyentes, en la reunión que habría de celebrarse en los primeros meses de 1876, para que los diputados afines a los contenidos económicos formaran parte activa en las discusiones relativas a los presupuestos³⁵⁸. Resultado de todo ello fue la conferencia que a finales de marzo celebraron diputados y senadores, junto a miembros de la *Liga de Contribuyentes* en Madrid, para discutir sobre todas aquellas cuestiones que podían ser de interés para la asociación. Desde luego, no iba a ser la única acción que habría de producirse en este sentido. Solo dos meses después, el diputado Enrique Almech y Falcón, en representación de la *Liga de Contribuyentes de Zaragoza*, presentó a la mesa del Congreso de los Diputados una Exposición en contra de los presupuestos. Otra Exposición a las Cortes, esta vez de la Liga en Burgos, alertaba de los sacrificios efectuados por los contribuyentes de esa localidad³⁵⁹. Antes de que finalizara la década de los años setenta, todavía se iban a remitir algunas peticiones más solicitando una profunda reforma presupuestaria por parte de algunas ligas de contribuyentes³⁶⁰.

Aun cuando el período anterior había sido fructífero en demandas y solicitudes en materia de presupuestos, durante los años ochenta las ligas de contribuyentes, además de otras sociedades análogas, consiguieron

³⁵⁷ Las primeras protestas que hemos podido documentar están fechadas en noviembre de 1872 y febrero de 1875. Ambas se refieren a la Exposición dirigida al Congreso por parte de la *Liga de Contribuyentes de Córdoba*, en contra del proyecto de presupuestos presentado por el Ministro de Hacienda en el mes de septiembre de ese mismo año, así como a la Memoria presentada por la *Liga de Contribuyentes de Cádiz*, en la que se hace mención a la necesaria nivelación de los presupuestos de una manera definitiva. Véase el *Diario de Córdoba*, número 6.675, domingo 17 de noviembre de 1872, y número 6.682 del domingo 24 de noviembre de 1872. Asimismo, en *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.056, jueves 11 de febrero de 1875.

³⁵⁸ *La Correspondencia de España*, número 6.667, martes 7 de marzo de 1876, *Diario de las Familias de Avisos y Noticias de Madrid*, número 6.668, miércoles 8 de marzo de 1876, y *Diario de Córdoba*, número 7.654, viernes 10 de marzo de 1876.

³⁵⁹ *La Correspondencia de España*, número 6.691, viernes 31 de marzo de 1876, y número 6.743, lunes 22 de mayo de 1876. También en *El Comercio*, número 11.782, lunes 3 de abril de 1876. La cuestión de Burgos en la *Memoria de los trabajos hechos por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de Burgos...*, ob. cit., pág. 21.

³⁶⁰ Los casos que hemos podido constatar son los de las Ligas de Granada, Valladolid y Burgos en 1877. El primero estuvo dirigido al Rey, siendo en el segundo caso el encargado de presentar la Exposición al Congreso, el diputado y miembro de la Liga de Valladolid, Mariano Lino de Reynoso. *El Pueblo Español*, número 469, miércoles 25 de abril de 1877, *La Mañana*, número 374, miércoles 25 de abril de 1877, y número 429, correspondiente al viernes, 22 de junio de 1877. También puede consultarse la “Memoria de los trabajos hechos por la junta directiva de la Liga de Contribuyentes de Búrgos, durante el año de 1877”, en el *Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de Córdoba*, número 48, 30 de marzo de 1878.

reunirse personalmente con Sagasta, entonces presidente del Consejo de Ministros, para llamar su atención sobre los problemas más acuciantes que venían padeciendo los contribuyentes y las clases productoras. En las reseñas publicadas entonces por la prensa se podían leer algunos comentarios, entre los que se mencionaba la preocupación “acerca del pavoroso problema del déficit constante y creciente de todos nuestros presupuestos, que no bastan á contener enormes tributos, que no agobian, sinó que aniquilan nuestras fuentes de riqueza pública”³⁶¹.

Coincidiendo con los constantes hostigamientos a las tareas presupuestarias del Gobierno, la preocupación por acometer un proyecto que pudiera servir de base para la reforma de un sistema tributario más ponderado en todo el país siguió formando parte esencial del cometido de los grupos organizados de contribuyentes³⁶². Distintas asociaciones ligueras comenzaron entonces a solicitar moratorias y retrasos en la recaudación de las contribuciones con la intención de que se regularizaran aquéllas, limitándolas a tributar en relación a la producción efectiva³⁶³.

La falta de pagos, como ya se apuntó en su momento, llegó a provocar el embargo de fincas, interpretándose desde determinados círculos sociales y

³⁶¹ *La Mañana*, número 1607, jueves 12 de mayo de 1881.

³⁶² En este sentido pueden verse, por ejemplo, los trabajos e iniciativas tomadas por la Junta Directiva de *Liga de Contribuyentes de Sevilla*. *La Crónica*, Badajoz, número 834, 13 de agosto de 1875. También, y en este mismo sentido, las reclamaciones de la *Liga de Contribuyentes de Cádiz* ante el repartimiento por provincias del empréstito nacional de 175 millones de pesetas, aprobados por la Ley de 25 de agosto de 1873. La finalidad de dicho empréstito era corregir el déficit de la Hacienda pública. Un gravamen que, como ya vimos en su momento, estaba dirigido principalmente a la propiedad y a la industria, generando numerosas protestas. *El Comercio*, número 11.876, jueves 6 de julio de 1876.

³⁶³ El argumento había sido muchas veces esgrimido por propietarios, agricultores y contribuyentes con la intención de mostrar el aparente estado de escasez que manifestaban tener. Incluso, la Junta Provincial de Agricultura de Valencia llegó a solicitar mediante una Exposición al Gobierno de la Nación la condonación de las contribuciones pendientes, como única solución a las pérdidas ocasionadas en las cosechas a labradores y propietarios. *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo III, abril a junio de 1877, págs. 732 y 733. Asimismo, la *Liga de Contribuyentes de Alicante* reunida el 13 de junio de 1877, acordó solicitar al Ayuntamiento la condonación de la tributación territorial, nombrándose una comisión que gestionara los medios para modificar los amillaramientos en las tierras de labranza. *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.767, domingo 17 de junio de 1877. En esta misma línea está documentada igualmente la negativa, acordada por Real Orden, negando a la *Liga de Contribuyentes de Huesca* la moratoria solicitada para el pago de las contribuciones de la provincia. *El Turolense*, número 255, jueves 8 de noviembre de 1877, y número 59, miércoles 20 de marzo de 1878. Finalmente, existe documentación sobre la petición para la eliminación de portazgos por parte de las ligas de Málaga y Córdoba, junto a la *Sociedad Económica de Béjar*. Véase *El Bien Público*, número 2.023, viernes 12 de diciembre de 1879.

económicos como un ataque directo al carácter singular de la clase propietaria. Esta circunstancia motivó que la Liga de Albacete hiciera público, en los primeros meses de 1882, su malestar por las más de treinta mil fincas adjudicadas a la Hacienda en toda la provincia, al tiempo que elevaba una Exposición a las Cortes contra las reformas contributivas. En opinión de sus socios, la política presupuestaria impuesta al país podía llegar a generar que el Gobierno se hiciera cargo de la mayor parte de las propiedades particulares³⁶⁴.

No es una casualidad el hecho de que en la Asamblea general de las Ligas de Contribuyentes, celebrada en Madrid durante el mes de noviembre de 1882, una de las cuestiones más discutidas fuese el «ahogo» a los propietarios que, según apuntaba el representante de la liga vallisoletana, Victoriano Guzmán, habían pasado a contribuir territorialmente bajo un procedimiento de «cuota» a otro, bien diferente, de «cupo». En palabras del presidente de las ligas, Bernardino Sobrino, la propiedad había sido gravada en más de 5.000 millones, siendo tan solo 3.000 millones los realmente presupuestados, hechos que venían a confirmar una vez más a las ligas de contribuyentes como auténticos centros reivindicativos de la renta y el capital agrícola en España³⁶⁵. Conscientes de la importancia que iban adquiriendo estos foros de opinión, las peticiones ligueras para que se reformara la ley de presupuestos presentaban cada vez un mayor consenso, al convenir muchos de sus miembros que la reforma debía paliar los problemas que ocasionaban los impuestos indirectos a las haciendas, así como a la riqueza comercial y agrícola³⁶⁶. Dichas cargas seguían originando un mayor perjuicio a quienes mantenían sus propiedades más dispersas y separadas que aquellos otros cuyos dominios y tierras habían permanecido más concentrados.

³⁶⁴ *El Liberal*. *Diario Democrático de Menorca*, número 241, martes 18 de abril de 1882. Un caso similar en *Junta General celebrada por la Liga de Contribuyentes de Málaga el día 25 de junio de 1883*, Imp. de el Reformista Andaluz, Málaga, 1883, págs. 13 y 14.

³⁶⁵ La Asamblea tuvo lugar los días 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 1882 en la Casa de los Lujanes de Madrid. *El Día*, número 900, miércoles 15 de noviembre de 1882, *La Correspondencia de España*, número 9.005, viernes 17 de noviembre de 1882, y *El Serpis*, número 1.437, Sábado 18 de noviembre de 1882. Con respecto al aumento en las cargas contributivas, entre los cinco puntos exigidos en la Exposición final dirigida a las Cortes por la Asamblea de la Liga Nacional de Contribuyentes se especificaba, concretamente en el primero de ellos: “Que declaren ilegal el cobro de toda suma que exceda de la consignada en las leyes de 31 de Diciembre de 1881 en concepto de contribucion territorial é industrial”. *El Eco de la Provincia de Gerona*, número 297, sábado 25 de noviembre de 1882.

³⁶⁶ Resulta muy significativa en este sentido la *Protesta ante el nuevo plan de impuestos y contribuciones*, presentada por la Liga de Contribuyentes de Lora del Río, Imprenta Ibérica, Cádiz, 1882.

Con la creación, a finales de 1879, de una *Liga Nacional de Contribuyentes*, quedaba asegurada la gestión de los intereses generales y locales, al mismo tiempo que se garantizaba un «lazo» de unión y de contacto con los altos poderes del Estado³⁶⁷. En su *Programa* presentado en octubre de aquel mismo año, la Liga expresaba sus dudas acerca de si podría el país soportar un presupuesto anual de gastos de 753 millones de pesetas. A ello se sumaba la duda acerca de si podría España contribuir anualmente a la formación de un presupuesto de ingresos próximo a los 750 millones de pesetas. El punto número 6 del proyecto trazado por la propia asociación era claro respecto a qué reformas podrían iniciarse en los diversos impuestos vigentes para que fueran más equitativos y justos, siempre en consonancia con lo expresado en el precepto constitucional relativo a que: “cada español contribuya á los gastos del Estado en proporcion á sus haberes”³⁶⁸.

Fue la Asamblea de 1882 la que terminaría resolviendo el establecimiento de un Directorio en Madrid, bajo la presidencia del marqués de Riscal, lo que otorgaba un mayor relieve a las clases productoras y, en consecuencia, también a los agricultores del país³⁶⁹. Prueba de ello fue el anuncio a comienzos de 1883, del ministro de Gracia y Justicia, Vicente Romero Girón, de una convocatoria de reunión para el mes de septiembre de ese mismo año con propietarios y representantes de distintos sectores económicos, para solventar los obstáculos que venían produciéndose y que no habían hecho sino ir en aumento. La noticia redactada por un diario de Jerez era presentaba en los siguientes términos:

El señor ministro de Gracia y Justicia cree conveniente reunir para Setiembre próximo un Congreso al que acudan todos los interesados fabricantes y sus operarios, propietarios y sus braceros, y se ventilen todas las cuestiones que á esas diversas clases afectan, de manera á llegar á una inteligencia en vez de extremar la hostilidad que empieza á dejarse sentir. En breve será sometida la idea al Directorio y al Consejo de la Liga Nacional de Contribuyentes, y es de esperar tomen la iniciativa de convocar dicho

³⁶⁷ En relación a la constitución y formación de la *Liga Nacional* puede consultarse la *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 322, sábado 11 de octubre de 1879, y el *Suplemento al número 326 de la Revista del Círculo Agrícola Salmantino*. Asimismo, *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 3.476, sábado 8 de noviembre de 1879.

³⁶⁸ Los principales puntos del *Programa* acordado por la *Liga Nacional de Contribuyentes* puede consultarse en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XIII, octubre a diciembre de 1879, págs. 485 y 486.

³⁶⁹ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 3, 20 de enero de 1883.

Congreso. El Gobierno, dice el señor Ministro, está dispuesto á hacer lo que le corresponde³⁷⁰.

Fue también la *Liga Nacional de Contribuyentes* la encargada de someter a férreas críticas los presupuestos generales para el ejercicio 1883-1884, al considerar que el aumento en los gastos de un 135 por 100 en los siguientes treinta años implicaba volver a los tiempos de las reformas de Martín de Garay. Una reorganización de la Hacienda pública que, conviene recordarlo, fue muy protestada por los grupos más privilegiados y acomodados, que ponía fin a la exención fiscal que los mismos detentaban. Con las nuevas cargas aprobadas por el Gobierno y un impuesto de consumos todavía más excesivo, la solución aportada por las ligas, basada en una moderación de las contribuciones y en una más efectiva visión de las inversiones en nuestro país, se diluía nuevamente volviéndose a situaciones de conflictividad ya vividas con anterioridad³⁷¹.

No solo la *Liga Nacional* mostró su rechazo a las líneas esenciales del Tesoro planteadas por el Ejecutivo. También las ligas provinciales mantuvieron su particular batalla por la cuestión contributiva. Es el caso de Alonso Pesquera y la *Liga de Contribuyentes de Valladolid* que, en el transcurso del mes de junio de 1883, instaron a las Cortes a que rebajara la contribución territorial del 21 al 16 por 100 mediante una nueva Exposición. Algo similar sucedería con la Liga de Salamanca, responsable de una solicitud en la que se instaba a que se contribuyera al 16 por ciento sobre la riqueza líquida imponible³⁷². En esa misma línea se habrían de manifestar también las de Palencia, Salamanca, Valencia y Málaga en años sucesivos,

³⁷⁰ *El Guadalete*, número 8.285, miércoles 28 de marzo de 1883.

³⁷¹ *La Union Democrática*, número 1.379, viernes 20 de abril de 1883. En efecto, el incremento de gastos era evidente, por ejemplo, en el gasto de personal del Cuerpo Administrativo del Ejército que, pasaba de 898.998 pesetas, con 95 céntimos en 1856, a un total de 3.788.283 pesetas para el periodo 1883-1884. Otro tanto sucedía en la Administración del Tribunal de Cuentas o en los gastos con destino al material de oficinas. Para la *Liga Nacional* existía un numeroso «ejército» de empleados de contabilidad. Véanse «Los Presupuestos Generales del Estado», en *La Crónica Meridional*, número 6.938, sábado 21 de abril de 1883. También en *El Eco de la Provincia de Gerona*, número 370, martes 24 de abril de 1883, así como «Los presupuestos y la liga nacional de contribuyentes», en *El Bien Público*, número 3.063, miércoles 25 de abril de 1883, y *El Constitucional*, número 324, miércoles 25 de abril de 1883. Asimismo, puede consultarse la *Junta General celebrada por la Liga de Contribuyentes de Málaga el día 25 de junio de 1883*, ob. cit., págs. 9 y 10. La crítica a los gastos superfluos todavía seguían produciéndose en 1887. Puede consultarse *El Fomento. Revista de Intereses Sociales*, número 863, lunes 14 de febrero de 1887.

³⁷² *La Correspondencia de España*, número 9.208, viernes 8 de junio de 1883, *Diario de Córdoba*, número 9.958, martes 12 de junio de 1883, y *El Fomento. Revista de Intereses Sociales*, número 137, 22 de julio de 1883.

casi siempre a través de argumentadas Exposiciones dirigidas a las Cortes, muchas veces con marcadas referencias a la agricultura³⁷³. Esto es al menos lo que sugería la propia *Liga de Contribuyentes de Málaga* en 1885, en referencia al proyecto de presupuestos para el período de 1885-1886, aludiendo a que la tributación en ningún caso debía ser una carga «caprichosa» de los gobernantes frente a los gobernados.

Otra disposicion contiene el proyecto de ley de que nos venimos ocupando, cuya influencia en la agricultura ha de ser desastrosa. Quiere el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda que las nuevas plantaciones de viñas disfruten solamente una excension por cinco años y las de olivos o de arbolado de construccion por quince, con lo cual se reduce en diez años el plazo que los viñeros disfrutan hoy para las plantaciones novales, y en quince la que ampara la repoblacion de los bosques y arbolado frutal. ¿Y cuando se propone el gobierno privar á la agricultura de esas ventajas tan añejas como convenientes?³⁷⁴.

El tema sobre las divergencias a las que inducían constantemente los sucesivos proyectos de presupuestos tuvo momentos de máxima exasperación, llegándose a tachar de draconianas las leyes que en este sentido venían aprobándose en Madrid. Para la clase productora y propietaria se trataba de unos preceptos más propios de una «servidumbre», que de un estamento de ciudadanos libres. En 1885, la *Liga de Contribuyentes de Salamanca*, refiriéndose a una de tantas impresiones provocadas por los presupuestos, se manifestaba en el siguiente sentido: “Es preciso que vayamos á Madrid, no en comision, sino por millares, y hagamos presente al Jefe de la Nacion nuestras quejas, acercándonos á las gradas del Trono, republicanos, carlistas, liberales y conservadores y digamos: Señor, sois el Jefe de una Nacion muy pobre; vuestros ministros pretenden satisfacer su política convirtiendo al país en feudo”³⁷⁵. Con todo, la

³⁷³ *Diario de Córdoba*, número 10.332, miércoles 9 de julio de 1884, *La Correspondencia de España*, número 9.889, domingo 19 de abril de 1885, y *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 53, 20 de junio de 1884, y número 201, 5 de junio de 1887.

³⁷⁴ *La Crónica Meridional*, número 7.525, miércoles 22 de abril de 1885.

³⁷⁵ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 86, 22 de marzo de 1885. Entre los proyectos de ley incluidos en la Ley General de Presupuestos para los años 1885-1886, se encontraba uno relativo a las contribuciones de consumos, cuyo primer artículo establecía la administración directa o arrendamiento por parte del Estado de dicho impuesto, a partir del 1º de julio de 1885. *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 88, 5 de abril de 1885. A este respecto la Liga salmantina publicó un artículo titulado “Una lesión á los Municipios”, en el que se afirmaba que desde el Ministerio de Hacienda, la nueva política de

propiedad quedaba en una situación más próxima a ser una carga que parte de la riqueza detentada por los grandes terratenientes, además de menoscabar a los municipios.

Dentro de la situación de descontento motivada, tanto por las leyes de presupuestos en general como por los arrendamientos de los consumos en particular, algunos ayuntamientos como los de las ciudades de Burgos y de Palencia mostraron sus desavenencias presentando la dimisión total de sus cargos. La medida, argumentada en los perjuicios morales y materiales, demostraba igualmente la escasez de recursos y la perentoria situación de los fondos públicos de muchas localidades³⁷⁶. Esta situación crítica generada en algunas zonas no tardaría en ser descrita en muchos casos con un cierto recelo, esencialmente por el daño vertido sobre la producción más modesta de las comarcas agrícolas.

¿Y qué ocurre ahora? Que al llegar á los fieltos los vendedores con los productos de sus escasas fincas, de su inmenso trabajo, y de sus constantes desvelos, se encuentran con unos impuestos tan formidables y una intransigencia en el dependiente, que les hacen volver á sus hogares, cargados con la mercancía, destruido todo su trabajo, aniquilada su manera de ser, y muerta hasta la esperanza de desenvolver sus destinos individuales y comerciales, en el actual órden de cosas. Detrás de este perjuicio incalculable para los pueblos rurales que no pueden traer sus productos á nuestro consumo, está el perjuicio del consumidor, que encuentra el mercado desierto, ó gravados sus artículos con un alza insuperable á las fuerzas económicas de cada contribuyentes³⁷⁷.

Hacia el mes de julio de ese mismo año de 1885, se publicaba en la Revista de la *Liga de Contribuyentes de Salamanca* un artículo titulado “Los verdaderos culpables”, en el que se retrataban los efectos que estaban por suceder con motivo de la nueva ley de presupuestos, y en particular por todo lo referido a la ulterior administración de las exacciones por consumos. En el mismo se señalaba a diputados y senadores como los responsables del «cataclismo» económico próximo a cernirse sobre las clases productoras, a la vez que se lamentaba de los sufragios dados a la ineptitud y a la ignorancia

arrendamientos a los consumos ocasionaría unos perjuicios incalculables y funestos en los municipios. *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 97, 7 de junio de 1885.

³⁷⁶ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 98, 14 de junio de 1885.

³⁷⁷ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 101, 5 de julio de 1885.

de aquéllos a quienes cabía la responsabilidad de la representación del país. En este punto en particular, la publicación se justificaba recalcando la incapacidad del Gobierno para rectificar sus desaciertos y disculpaba la inocencia del cuerpo electoral. En concreto, el artículo explicaba: “debemos señalar á los que en realidad tienen la culpa, y que no son otros que nuestros diputados y senadores que han votado á ciencia y paciencia de los pueblos, la tiránica ley que hoy los amenaza como nueva esfinge”³⁷⁸.

A finales de los años ochenta apenas podían recordarse los primeros momentos de formación de las ligas, en las que se evidenciaba el concurso a las mismas de cualquier ideal político, siempre de personas vinculadas al ámbito de la producción y la propiedad³⁷⁹. El interés demostrado para que se fraguaran formaciones de relieve en el ámbito de la política, incluso el acercamiento a los representantes en las Cortes en circunstancias de relativa dificultad, siempre habían surgido de forma meditada, aun tratándose de los periodos de consolidación y de ajuste del colectivo de contribuyentes en las sociedades rurales. Sin embargo, los ensayos de las ligas de contribuyentes con la política no dejaron indiferentes a las autoridades, lo que se tradujo en un mayor control, siendo necesaria en casos muy limitados la suspensión momentánea de sus actividades.

Antes incluso de que pudiera establecerse la *Liga Nacional* en 1879, desde el Gobierno, y muy particularmente desde el Ministerio de Fomento, ya se había puesto de manifiesto el peligro que suponía unificar las ligas de contribuyentes en una idea que las proyectara a nivel nacional. En esta línea de argumentación, cabría exponer el apoyo que en materia presupuestaria se produjo por parte de la Sección económica del Congreso de los Diputados a los seguidores de las ligas en 1877. Este recelo a una posible «escapada» hacia terreno político no tardaría en ser expuesto desde la propia Administración Agropecuaria en los siguientes términos:

Las Ligas de Granada, Cádiz, Málaga, Valladolid y otras varias son las primeras que se han pronunciado contra la idea expresada en la Sección

³⁷⁸ *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, número 104, 27 de julio de 1885.

³⁷⁹ *Diario de Córdoba*, número 6.604, sábado 24 de agosto de 1872. La carencia de todo carácter político en las ligas de contribuyentes en *El Constitucional*, número 2.056, jueves 11 de febrero de 1875. Todavía en 1878 se abrigaba el deseo de atraer bajo las filas ligueras a individuos de todos los «colores» políticos. Puede consultarse a este respecto la *Memoria de los trabajos hechos por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de Burgos, durante el año de 1877...*, ob. cit., págs. 9 y 10.

económica del Congreso, relativa á intervenir en la convocatoria para la nacional de contribuyentes, que se ha de reunir en plazo muy breve, y esta aptitud digna y resuelta ha llevado al ánimo de las demás el convencimiento de que no es prudente contraer compromisos, que de aceptarlos, podrian empujar al terreno político á los agricultores, industriales y comerciantes y matar en sus primeros albores una institucion que puede ser fecunda en resultados, si se concreta á defender sus intereses con comedimiento y prudencia, á ilustrar al gobierno en todo lo que se refiere al impuesto y su equitativa distribucion, y á iniciar y promover las grandes mejoras en la agricultura, industria y comercio, que tanto pueden contribuir á hacer ménos pesadas las cargas públicas³⁸⁰.

Sobre ese mismo propósito en particular se podrían citar las disoluciones efectuadas de las ligas de contribuyentes de Sevilla y Granada, en julio de 1874 y octubre de 1877, respectivamente, la primera pocos días después de su constitución y restablecida tan solo unas semanas más tarde por el Gobernador de aquella provincia³⁸¹. El sobrado celo impuesto por la Administración y el Gobierno al derecho de asociación condujo a que se difundieran ciertas especulaciones sobre las limitaciones que cabía imponer a las ligas de contribuyentes. En este orden de cosas, fue muy comentada la prohibición, por parte del Gobernador de Málaga, de todos los actos de la Liga de Contribuyentes en aquella provincia. Una decisión que no parecía arbitraria si tenemos en cuenta la opinión, un tanto generalizada en la época, y que describía así un diario en Madrid:

³⁸⁰ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo IV, julio a septiembre de 1877, págs. 623 y 624.

³⁸¹ Las prohibiciones de las asociaciones con cierto contenido político no era una novedad. En concreto, tal y como se especificaba en las notas de la prensa de la época, la disolución de la Liga en Sevilla cabía por la aplicación del Decreto publicado el 18 de julio de 1874, en el que se disponía la potestad de los Gobernadores para proceder a la disolución inmediata de aquellas sociedades no constituidas con la autorización expresa del Gobierno. En el Decreto se exceptuaban las asociaciones de crédito, de obras públicas, además de las recogidas en el Decreto-ley de 1869. Otros Decretos del 10 y 15 de enero de ese año se referían igualmente a las limitaciones que debían ser impuestas a aquellas otras sociedades que pudieran poner en peligro la seguridad y el orden público. Véase *La Correspondencia de España*, número 6.085, jueves 30 de julio de 1874, y número 6.101 del sábado 15 de agosto de 1874. También en *Solidarités et sociabilités en Espagne (XVI^e-XX^e siècles)*, Etudes réunies et présentées par Raphaël Carrasco..., ob. cit., págs. 341 y 342, así como en Buqueras y Bach, Ignacio, *Más sociedad, menos y mejor Estado. Pasado, presente y futuro de la sociedad civil*, Editorial Complutense, Madrid, 2002, págs. 44 y 45. Para el caso concreto de la *Liga de Contribuyentes de Granada* en *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.865, miércoles 17 de octubre de 1877, y *La Lucha. Órgano del Partido Liberal de la provincia de Gerona*, número 1.307, domingo 21 de octubre de 1877.

Dicen que el gobierno piensa dictar alguna medida referente á las Ligas de contribuyentes, con objeto de limitar su accion ó intervenir sus actos. Es natural que las Ligas de contribuyentes preocupen la atención del gobierno, ya que media íntima relacion entre las cuestiones políticas y las cuestiones económicas, y el gobierno, que de todo desconfía, podrá desconfiar tambien de la actitud de estas asociaciones³⁸².

Tampoco el Ejecutivo se mostró favorable a autorizar la reunión que todas las ligas de contribuyentes debían celebrar en el transcurso del mes de octubre de 1878 en Madrid. Situación que ya venía precedida por la conferencia revocada en Toledo un año antes y las advertencias a la propuesta en Madrid por el diputado Gaviña³⁸³. Similar actitud se produciría con el *Boletín* publicado por la Liga en Oviedo, suprimido, según explicaciones del momento, por «meterse» en política³⁸⁴. El problema llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde en sesión celebrada el 12 de julio de 1879, el representante por Granada, José Martos, advirtió de los excesos y abusos cometidos en contra del derecho de libertad de imprenta y de asociación. Un discurso en el que el propio Martos recordó que las asociaciones fundadas en la legalidad, como así sucedía con las ligas de contribuyentes, poco o nada podían incomodar al Gobierno, y aún menos al ministro de la Gobernación, cargo que en esos momentos desempeñaba Francisco Romero Robledo³⁸⁵.

Con toda seguridad, el deseo expresado por las ligas de propietarios, reunidas en Córdoba a lo largo del mes de abril de 1875, y referido al poder que podía otorgar la labor asociativa a todo el colectivo de contribuyentes,

³⁸² *El Pueblo Español*, número 575, lunes 1 de octubre de 1877, y *La Correspondencia de España*, número 7.239, domingo 30 de septiembre de 1877. Sobre los temores a una posible ilegalización de las ligas de contribuyentes en *El Pueblo Español*, número 68, martes 16 de abril de 1878.

³⁸³ Reunión que finalmente tendría lugar a mediados del mes de octubre del año siguiente. *La Lucha. Órgano del Partido Liberal de la provincia de Gerona*, número 1.441, viernes 30 de agosto de 1878, y *Diario de Córdoba*, número 8.714, martes 7 de octubre de 1879. La obligatoriedad de tramitación legal a que estaban sometidos este tipo de actos ya había impedido, en efecto, la celebración de otra asamblea similar de las ligas de contribuyentes en Toledo, reunión que estaba prevista para el mes octubre de 1877. *El Constitucional*, número 2.874, sábado 27 de octubre de 1877. La reunión de ligas prevista en Madrid por el diputado Gaviña en *La Mañana*, número 751, martes 16 de julio de 1878.

³⁸⁴ Tampoco la prensa estaba exenta del control gubernamental. Así quedaba recogido en uno de los diarios de Madrid, en el que se hacía mención a la prohibición para que pudiera ser publicado el *Boletín de la Liga de Contribuyentes de Oviedo*. Véase *La Mañana*, número 852, viernes 15 de noviembre de 1878.

³⁸⁵ Un extracto de la Sesión puede consultarse en el diario madrileño *La Mañana*, número 1.050, sábado 12 de julio de 1879.

tomaron un singular avance en la conferencia de Madrid, mantenida entre diputados y senadores en marzo de 1876. Entre las aspiraciones ligueras se dejaba entrever la intención de que una amplia representación de las mismas tuviera su prolongación en el establecimiento que ya venía operando en la capital de España³⁸⁶. Junto a las posibles consecuencias que suponía dicha representatividad ante las Cortes y el Gobierno, no tardaron en surgir otras iniciativas que abogaban por la elección de candidatos y representantes políticos, propuestos directamente por los grupos de contribuyentes y propietarios que ya venían funcionando por todas las provincias del país³⁸⁷. En este sentido, también desde la Administración encargada de la gestión de la agricultura se habían lanzado advertencias hacia ciertos convencionalismos políticos, observados a través de distintos informes y conferencias, que apuntaban claramente a un resentimiento cada vez más excelso entre productores y contribuyentes, y cuyo destino no era otro que la clase política. Con tales consideraciones, en la propia *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, correspondiente al año 1878, se podía leer:

Todos los partidos políticos van por muy mal camino al considerar el problema agrícola como secundario é independiente del problema social. En vano buscamos afanosos la fórmula política que ha de poner remido á todos estos males. Los contribuyentes están ya cansados de ver que los partidos conservadores y los avanzados se achacan mutuamente la culpa de los males de la situación, prometiéndonos felicidades sin cuento para el día que lleguen al poder: hasta hoy el país no ha recibido de ellos sino amargos desengaños³⁸⁸.

En esa misma línea, tanto la liga de propietarios como la de contribuyentes, anunciaron en los primeros compases del mes de mayo de

³⁸⁶ *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.125, martes 4 de mayo de 1875. Ya se hizo mención, más arriba, a la reunión celebrada en el mes de marzo de 1876 entre miembros de la *Liga Agraria* constituida en Madrid y varios representantes del Congreso y del Senado. En relación al interés por estar representados en el Directorio establecido en dicha ciudad puede consultarse *El Comercio*, número 12.275, viernes 10 de agosto de 1877.

³⁸⁷ Esta idea es fácilmente deducible de las conversaciones verificadas en Murcia, entre contribuyentes y electores influyentes de aquella provincia, para proponer a las listas del Senado al marqués de San Eduardo. *La Correspondencia de España*, número 7.508, sábado 13 de julio de 1878.

³⁸⁸ La cita está recogida de la Conferencia agrícola pronunciada por Luis Casabona, Ingeniero agrónomo y catedrático de la Escuela General de Agricultura, el día 28 de abril de 1878, publicada en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo VII, abril a junio de 1878, pág. 579.

1879 su intención de presentar candidatos a los comicios municipales en Madrid. Una pretensión política que, como se recordará, pretendía representar exclusivamente los intereses de ambas asociaciones. Mucho más meditada fue la decisión, dos años más tarde, de participar activamente en la lucha electoral a las Cortes, lo que unido al proyecto anunciado por parte de la *Liga de Contribuyentes de Cádiz* de presentar candidatos independientes aquel mismo año, puso de manifiesto, una vez más, la pretensión que existía en algunas ligas por presentar a personas influyentes al margen de cualquier antigua ambición partidista³⁸⁹.

En unión con la *Liga de Contribuyentes de San Fernando*, la liga de Cádiz había iniciado un debate que reafirmaba el interés de estas asociaciones por todo lo concerniente a las cuestiones electorales. Estos primeros pasos dados de forma colectiva, tanto en las dos capitales andaluzas como en Madrid, venían a demostrar el escepticismo y la desconfianza que ya habían adquirido entre los ligeros los partidos tradicionales, asunto que para muchos era sinónimo de intrigas y caciquismos inmorales. Con toda probabilidad, una forma más de acoplar los deseos de participación política a los ideales de las ligas estuvo en la iniciativa promovida por los contribuyentes de la provincia de León, al incorporar en su artículo 2º del Reglamento la conveniencia de reconocer como socios honorarios a los diputados y senadores de la provincia que así lo aceptasen³⁹⁰. Todas estas tentativas e iniciativas no tardaron en provocar diferencias en la Asamblea de Contribuyentes celebrada en noviembre de 1882, en la que todavía se recordó el verdadero objeto de las ligas, propósito que debía estar, tal y como llegaría a reconocerse en la misma, en un contexto alejado e independiente de la política³⁹¹.

³⁸⁹ *El Graduador*, número 2.066, viernes 25 de marzo de 1881. Además, en *El Comercio*, número 13.596, jueves 21 de abril de 1881, número 13.599, domingo 24 de abril de 1881, *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 414, sábado 13 de agosto de 1881, y *Diario de Córdoba*, número 9.325, sábado 20 de agosto de 1881.

³⁹⁰ *La Crónica de León*, número 592, sábado 24 de diciembre de 1881.

³⁹¹ Así quedaba reconocido en la 2ª sesión de la Asamblea de Contribuyentes, presidida por Bernardino de Sobrino, y celebrada durante el mes de noviembre de 1882. *El Serpis*, número 1.437, sábado 18 de noviembre de 1882. A este respecto, la prensa anotaba la siguiente consideración: “La asociación, dice el Sr. Sobrino, no viene a combatir gobiernos, sino a ayudarles con sus conocimientos prácticos, y prueba de que en las Ligas no se hace política es que entre sus socios están mezclados los procedentes de muchas y diversas agrupaciones, y combate la impaciencia. Las Ligas no son contrarias como se ha dicho, a los empleados del Gobierno, pues en vez de eso, los quiere mejor pagados y que tengan un tacto especial en las ocultaciones de riqueza”, *El Día*, número 900, miércoles 15 de noviembre de 1882.

Aunque la perspectiva a corto plazo transcurría en la idea de prescindir, en la medida de lo posible, de cualquier quehacer político en las actividades de las ligas, la realidad era que, tanto el desbarajuste producido por el falseamiento del sufragio como el caciquismo, no habían dejando en ningún momento de ser duramente criticado por la *Liga Nacional* en sus Asambleas³⁹². De hecho, se daba por supuesto que entre la mayoría de los ciudadanos los conocimientos relacionados con la política, los partidos, así como con las generalidades parlamentarias, eran superiores a cualesquiera otros supeditados a la Hacienda Pública³⁹³. Apenas un año después de expresar sus intenciones en este sentido, la proximidad de las elecciones municipales del mes de mayo de 1883 volvieron a poner de relieve la necesidad que existía, por parte de numerosos socios, de incluir la participación política entre las medidas que debían adoptarse para frenar el deterioro municipal, consecuencia de las constantes manipulaciones de partidos y caciques. Esta preocupación por los intereses municipales condujo a la *Liga Nacional de Contribuyentes* a alertar de las consecuencias de una posible indiferencia en las elecciones y del efecto que ésta podría traer sobre la producción y el patrimonio.

Ahora es tiempo de que los electores todos, y los contribuyentes con especialidad, mediten sobre las graves consecuencias de las elecciones municipales, teniendo en cuenta que de ellas depende en no pequeña parte la vida, la salud, la moralidad pública y el bienestar y desarrollo de la riqueza de los vecinos. Cuando el patriotismo y el deber no exigieran que se subordinasen los intereses de parcialidad política á las condiciones de actividad, aptitud y honradez de los candidatos, lo aconsejaría ciertamente la conveniencia de los mismos electores. Tiempo es ya de que nos inspiremos en tan evidentes y provechosas verdades, si ha de salir la Administración local del estado tristísimo y vergonzoso en que se halla en la mayor parte de los pueblos³⁹⁴.

En cualquier caso, la decisión adoptada tampoco tardó en ser discutida, produciéndose un repliegue en algunas ligas de propietarios y contribuyentes, lo que no impidió que de forma mayoritaria se comenzaran a

³⁹² “La Liga y los Revolucionarios”, en *La Opinion*, Palma de Mallorca, número 922, viernes 22 de diciembre de 1882.

³⁹³ Así se ponía de manifiesto en uno de los artículos publicados por Modesto Fernández y González en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XII, julio a septiembre de 1879, pág. 387.

³⁹⁴ *El Guadalete*, número 8.303, miércoles 18 de abril de 1883.

proyectar programas y candidaturas lo suficientemente atractivas para acceder a los Ayuntamientos de las principales ciudades del país³⁹⁵. El propio Comité de coalición electoral, constituido en Madrid con el fin de establecer acuerdos con los partidos liberales con representación en el Congreso y Senado, urgió en llamar a los representantes de la liga de contribuyentes y otras asociaciones vinculadas a la propiedad y la producción, bajo el propósito de solicitar su adhesión a los próximos comicios³⁹⁶. Una maniobra, además, que había estado alentada desde sus inicios, tal como pudimos explicar en su momento, por los diputados Sagasta y Martos, y secundada por el también diputado Emilio Castelar.

La idea de Sagasta, expuesta en la reunión previa al nombramiento de candidatos, era la de llevar hasta el Ayuntamiento madrileño a representantes del comercio, la industria y la propiedad, excitando así a todas las clases prolíficas de la ciudad a participar en los comicios³⁹⁷. Un planteamiento que no tardó en ser adoptado en Sevilla al constituirse una coalición electoral formada por constitucionales, izquierdistas, martistas, posibilistas, demócratas, progresistas, federales, amén de los grupos que podían representar mejor al comercio y la industria, como eran la *Liga de Contribuyentes de Sevilla*, el *Centro Mercantil* y la *Unión Mercantil*³⁹⁸. Una situación, como ya se apuntó en su momento, que había provocado la concurrencia de sectores conservadores, vinculados principalmente a la propiedad y al comercio, con círculos y ámbitos vinculados a la política

³⁹⁵ *La Correspondencia de España*, número 9.497, domingo 23 de marzo de 1884. En relación a la designación de los candidatos de la *Liga de Contribuyentes* de Madrid al Ayuntamiento de la capital, véase *El Bien Público*, número 3.670, martes 21 de abril de 1885, y *La Correspondencia de España*, número 9.891, martes 21 de abril de 1885.

³⁹⁶ A la propuesta ofrecida por el Comité acudieron el marqués de Riscal y el marqués de Retortillo, en representación de la Liga de Contribuyentes y de Propietarios, respectivamente, renunciando a presentar una candidatura propia el *Círculo de la Unión Mercantil*, en tanto este último mantenía su prohibición de establecer relación alguna con la política. *El Liberal*, número 1.144, martes 21 de abril de 1885, *El Guadalete*, número 8.919, martes 21 de abril de 1885, y *Lau-Buru*, número 965, martes 21 de abril de 1885, y número 966, coorespondiente al miércoles 22 de abril de 1885. A menudo, la falta de confianza política o bien la debilidad mostrada ante el partido que detentaba el poder, llevaba a crear formaciones y coaliciones entre varios partidos y diversas asoaciones. En este sentido puede consultarse el *Anuario de historia contemporánea*, volumen 14, años 1887-1991, Universidad de Granada, 1991, págs. 67 a 86.

³⁹⁷ Existen una dilatada información en relación a las discusiones y acuerdos surgidos entre los distintos sectores políticos y económicos de la Coalición. Véase, por ejemplo, *La Crónica Meridional*, número 7.527, viernes 24 de abril de 1885, y número 7.528, sábado 25 de abril de 1885. Asimismo, en *El Serpis*, número 2.164, sábado 25 de abril de 1885, *El Aragonés*, número 42, 25 de abril de 1885, y *La Correspondencia de España*, número 9.895, sábado 25 de abril de 1885.

³⁹⁸ *La Correspondencia de España*, número 9.901, viernes 1 de mayo de 1885.

liberal. Un hecho, no obstante, que venía a explicar el interés y la perspectiva que sobre la defensa del sistema representativo mantenían los grupos de propietarios, entre ellos los agricultores, hasta entonces apartados de la Administración y de la política oficial.

En 1887, poco antes de que tuvieran lugar las consultas municipales correspondientes a ese año, los mismos mecanismos que habían servido para los plebiscitos anteriores volvieron a ponerse en marcha en diversas capitales de provincia, verificándose en algunos casos la renovación de los cargos ya electos, al tiempo que se proclamaban nuevos candidatos³⁹⁹. No sucedería así en Salamanca, donde, por ejemplo, el proyecto resuelto por Sagasta con las ligas en Madrid había sido visto con un cierto anhelo y disgusto. A este respecto, el periódico local *El Fomento*, días antes de celebrarse los comicios sostenía: “Y decimos nosotros, ¿no podía intentarse en Salamanca una obra semejante por las corporaciones análogas que aquí están domiciliadas?”⁴⁰⁰.

Por otra parte, los problemas originados en algunas provincias castellanas como consecuencia de la crisis finisecular y de la interrupción del ritmo alcista de la renta de la tierra entre los propietarios agrícolas de la región, condujeron a una señalada movilización de los contribuyentes salmantinos, lo que se tradujo en la celebración de un Congreso Agrícola que se celebraría en Salamanca aquel mismo año de 1887. Ciertamente, las repercusiones de esta crisis terminarían comprometiendo a otros sectores y categorías sociales de la agricultura salmantina, implicando además a los jornaleros del campo, lo que llevó inevitablemente a un estancamiento en los precios y, en general, a una protesta generalizada a favor del proteccionismo por parte de los grandes terratenientes del sector agrícola⁴⁰¹.

³⁹⁹ Las prolongadas reuniones y conferencias relacionadas con los comicios, mantenidas con miembros de las Cortes y del Gobierno, siguieron celebrándose, tal y como ya sucediera dos años atrás. En los primeros días del mes de abril tuvo lugar una velada entre Sagasta, Mariano Sabas Muniesa, el marqués de Retortillo, el marqués de Riscal y Francisco Prieto, presidentes respectivamente de la *Unión Mercantil*, de la *Asociación de Propietarios*, de la *Liga de Contribuyentes* y de la *Sociedad de Fabricantes*, en la que el propio Sagasta, en esos momentos Presidente del Consejo de Ministros, llegó a asegurar estar dispuesto a influir lo necesario para promover el voto en las elecciones á algunos de los candidatos próximos al comercio y la industria. *La Correspondencia de España*, número 10.603, domingo 3 de abril de 1887, y número 10.605, martes 5 de abril de 1887.

⁴⁰⁰ Las elecciones tendrían lugar enter los días 1, 2 y 3 de mayo de 1887. Véase, al respecto, *El Fomento. Revista de Intereses Sociales*, número 925, miércoles 20 de abril de 1887.

⁴⁰¹ López Santamaría, Jesús, y Esteban de Vega, Mariano, “El Congreso Agrícola de Salamanca de 1887. Un episodio de la movilización proteccionista castellana”, en *Studia*

La más que incontestable politización del evento estuvo justificada por la subvención de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento salmantino, recayendo los puestos de la Presidencia y Vicepresidencia en el Presidente de la propia Diputación y en el alcalde de la capital, respectivamente. A ellos se sumaron, además, dos diputados y otros tantos senadores encargados de la Comisión Ejecutiva, junto a innumerables cargos de la Administración y de las Cortes. Por el Congreso Agrícola desfilaban miembros del partido conservador como Casimiro Baz o Cecilio González Domingo, lo que explica, entre otras cuestiones, el oportunismo político despertado por la manifestación agrarista de 1887⁴⁰².

Evidentemente, en el nuevo contexto abierto en España y en Europa a lo largo de los años ochenta, dominado principalmente por la crisis agraria que se extendería hasta finales del siglo XIX, comenzaron a sentirse los primeros indicios de la deflación agraria, en una gran parte debida a la internacionalización de los mercados en dicho sector. Este argumento iba a generar una importante transformación en la agricultura del continente europeo, produciendo una sustancial brecha en el mundo de las sociedades agrarias en nuestro país y facilitando la movilización proteccionista ante el final de una larga fase expansiva iniciada hacia 1840. La implantación de las ideas «capitalistas» en la agricultura a escala mundial, además de la aceptación de un mercado unificado en el sector agrario, terminaron ineludiblemente por constatar un cambio ostensible en los precios agrícolas a escala internacional.

Para entonces, en España existía ya un amplio acervo de asociaciones y grupos de defensa agraria, formadas desde comienzos de los años setenta y perfeccionadas con posterioridad, además de un consenso suficientemente preciso de hacia dónde debían enfocarse las reivindicaciones de los agricultores y propietarios ante la crisis que comenzaba a padecer el mundo rural. Concluido el tiempo de las ligas, tanto terratenientes como contribuyentes terminarían fusionándose con las Cámaras Agrícolas, la Liga gamacista o con la también naciente *Asociación General de Agricultores*, prueba de la nueva idea patronal que ya descollaba en España⁴⁰³.

histórica. Historia contemporánea, número 4, Universidad de Salamanca, año 1986, págs. 71 a 73.

⁴⁰² *Ibidem*, págs. 85 y 86.

⁴⁰³ Las Cámaras conformarían un nuevo marco asociativo a partir del Real Decreto de 14 de noviembre de 1890, dando así cabida al conjunto de hacendados y propietarios de tierras de

Hechas estas precisiones, los principios ligueros estaban lejos de ser las únicas asociaciones capaces de ahondar en el mejoramiento de la producción y en el deseo por acudir a vías más rápidas de acceso al predio de las decisiones políticas. Junto a ellos, una extensa tipología de asociados, vinculados al mundo rural y a las explotaciones agrarias, ya ejercía desde hacía algún tiempo una importante presión sobre las estructuras sociales, políticas y económicas, influencia que aún se vería incrementada con la modificación y ampliación de la legislación asociativa aprobada en los años ochenta en nuestro país. Si en la práctica, las ligas de contribuyentes habían significado hasta ese momento un «todo» en la esfera de las demandas, dentro de los sectores productivos de la agricultura española, otros foros, en apariencia más reducidos, habían comenzado a buscar vías igualmente plausibles para afianzar la unidad en la propiedad. El resultado de todo aquel proceso se tradujo en la formación de movimientos agrarios con una vocación declarada de «clase» que, paulatinamente, habrían de traducirse en asociaciones de ámbito nacional con capacidad para llegar hasta los partidos que venían ejerciendo el «turno». Cuestiones, todas ellas, que a continuación pasaremos a abordar.

- La pluralidad tipológica en el asociacionismo agrícola español. Escrutinios y balances a lo largo del último cuarto del siglo XIX

Desde que se iniciara el período isabelino y durante una buena parte de los años posteriores a su reinado, el grueso del asociacionismo «voluntario» estuvo dominado por los círculos y casinos, estampa a la que se irían sumando una pléyade dispar de denominaciones y perfiles, dando como resultado una mayor riqueza en los modelos participativos de nuestro país. De los datos recogidos en las fuentes disponibles para las tres últimas décadas del siglo XIX, se deduce un apreciable despliegue asociativo, subrayándose un aumento en las tipologías, circunstancia observada también en el mundo de la propiedad rural y de la agricultura.

cultivo e imitando a las Cámaras de Comercio e Industria que ya funcionaban en España desde abril de 1886. Julve Benedicto, Antonio, “Las Cámaras Agrarias”, en *Revista de Estudios Agrosociales*, número 112, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1980, págs. 57 a 99.

Estas asociaciones, cuyo común denominador estará marcado por el recreo y la protección entre «todos», evidenciarán, sin embargo, una carencia de apoyo legislativo dentro de la sociedad liberal puesta en marcha en los primeros decenios de la centuria. Vacío que solo se vería aliviado durante la Revolución de 1868, momento en el que se formalizará por vez primera la protección constitucional del derecho a asociarse, quedando plasmado en el artículo 17 de la Constitución de 1869. Esta última circunstancia se vería sometida a una severa revisión, recogida en el Código Penal, al establecerse el carácter ilícito para todas aquellas sociedades cuyo objetivo fuera contrario a la moral pública o pudiera deducirse de sus intenciones alguna actividad delictiva⁴⁰⁴.

Disueltas las Cortes republicanas, habría que esperar a la nueva promulgación de la Constitución de 1876, donde se contemplase, una vez más, el reconocimiento al derecho de asociación «vigilada», en tanto este último quedaba fuertemente limitado por los poderes públicos y su sometimiento a los derechos fundamentales de la Nación⁴⁰⁵. Los reconocimientos constitucionales forzarían finalmente, ya en el año 1887, a la aprobación de la primera ley en España sobre asociaciones, todo ello después del intento malogrado en 1881. La Ley, debatida profundamente bajo el gobierno del partido liberal de Sagasta, quedaría aprobada definitivamente en junio de 1887, normalizándose así el derecho a todo tipo de asociacionismo, ya fuera de índole político, religioso, económico, científico, de recreo, etc.

La ausencia hasta esos momentos de una normativa específica en este sentido, había dado lugar a un vacío en cuanto al registro y cuantificación de las asociaciones existentes en nuestro país. No obstante, con la aprobación de la Ley de 1887 se iniciaba un período de consolidación administrativa en el control de todos los grupos organizados, permitiendo la

⁴⁰⁴ En efecto, la Constitución de 1869 consagraba la libertad de pensamiento, algo que hasta esos momentos no se había realizado en España, y eliminaba cualquier medida preventiva, reconociéndose los derechos de reunión y asociación, circunscribiéndose a ambos un aspecto individual y no colectivo. No obstante, el artículo 19 dispensaba un fuerte control del Estado, previendo la posibilidad de disolver aquellas asociaciones cuyos fines pudieran comprometer la seguridad del propio Estado. En este sentido véase de Velloso Jiménez, Luisa, “Los orígenes constitucionales del derecho de asociación en España (1868-1923)”, ob. cit. págs. 15 y 16.

⁴⁰⁵ Pelayo Olmedo, José Daniel, “El derecho de asociación en la historia constitucional española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964”, en Revista Electrónica de Historia Constitucional, número 8, año 2007 (<http://hc.rediris.es/08/index.html>).

mención e inspección de los mismos en todas las provincias. En concreto, en el artículo 7º se advertía que: “En cada gobierno de provincia se llevará un registro especial, en el cual se tomará razón de las Asociaciones que tengan domicilio o establecimiento en su territorio, a medida que se presenten las actas de constitución”⁴⁰⁶. Este aspecto será decisivo a la hora de establecer las primeras clasificaciones y recuentos de sociedades y demás colectivos constituidos en España, una circunstancia que más tarde analizaremos.

En cualquier caso, hemos de constatar que el derecho de asociación había sido igualmente un argumento de especial significación en el resto de países europeos «cercanos», siendo su regulación en muchos casos tan tardía como la acontecida en nuestro país. De este modo, y si a legislación comparada nos referimos, después de la Revolución de 1879 y del breve paréntesis de libertades surgido en 1848, muchas de las cuestiones relacionadas con la asociación y la reunión en Francia quedaron resueltas con el reconocimiento a la organización de 1864 y, sobre todo, con la Ley de 30 de junio de 1881, poniéndose de este modo fin a un largo proceso histórico iniciado un siglo antes en aquel país⁴⁰⁷.

En esta misma línea, el derecho a asociarse y reunirse se había iniciado en Gran Bretaña hacia 1824, con la aprobación por parte del Parlamento de las prerrogativas sobre asociación y coalición. Por su parte, los derechos básicos en este sentido, en algunos estados de Alemania, no serían reconocidos hasta los años 1860 a 1870. Un hecho que coincidiría en esta misma etapa en los Países Bajos, siendo una excepción la reglamentación aceptada en Bélgica, al permitir la Constitución aprobada en 1831, tanto el derecho de reunión pacífica como el de asociación⁴⁰⁸.

⁴⁰⁶ *Gaceta de Madrid*, número 193, martes 12 de julio de 1887, págs. 105 y 106. Al respecto de la Ley de 30 de junio sobre el derecho de asociación véase también Flaquer Montequi, Rafael, ob. cit., págs. 169 a 175.

⁴⁰⁷ De hecho, los controles gubernativos eran tan rigurosos como en España al verificarse en el artículo 6º de dicha Ley la prohibición de cualquier celebración de actos y reuniones en la vía pública. Una explicación en *El derecho de reunión*, Subdirección General de Estudios y Documentación, Ministerio del Interior, Madrid, 1984, págs. 17 y 18.

⁴⁰⁸ *Ibidem*, págs. 23 y 24. También en Martín Artiles, Antonio, “Teoría sociológica de las relaciones laborales”, en Blanch Ribas, Josep Maria (coordinador), *Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos*, Editorial VOC, Barcelona, 2003, pág. 158. El artículo 20 de la Constitución Belga de 1831 especificaba que: “Los belgas tienen el derecho de asociarse, sin que pueda someterse este derecho á ninguna medida preventiva”. Arrazola, Lorenzo, *Enciclopedia Española de Derecho y Administración, ó Nuevo Teatro Universal de la legislación en España e Indias*, Imprenta de los Señores Andres y Diaz, Madrid, 1851, pág. 271.

Con este panorama, solo a través de algunos Estatutos y Reglamentos aprobados por algunas asociaciones, amén de los Anuarios Estadísticos en lo referido a las Sociedades Económicas, prensa diversa, así como revistas especializadas promovidas y editadas por la *Asociación de Ingenieros Agrónomos* o por el Ministerio de Fomento, nos han proporcionado una idea aproximada del ambiente participativo y asociativo en España durante la segunda mitad del siglo XIX. Entre estas últimas fuentes destacan la revista *Anales de Agricultura*, sin olvidar *La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, ambas inauguradas a mediados de los años setenta⁴⁰⁹.

En cierto modo, no fue hasta la aparición en 1879 del Anuario de la editorial Bailly-Baillière, cuando se tuvo el primer trabajo recopilatorio de las asociaciones existentes en España, incluidas las de carácter agrícola y relacionadas con la propiedad. Si exceptuamos los tiempos de Madoz y de su *Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico*, el mencionado *Anuario* iba a proporcionar, a pesar de sus lagunas y carencias, una perspectiva mucho más realista y concreta de lo que hasta esos instantes era el mapa cuantitativo de la sociabilidad en todo el país. Obra que, no debemos olvidar, se mantendría vigente ininterrumpidamente hasta 1970, lo que iba a suponer prácticamente un siglo de vida.

Llevados por el interés de las inversiones francesas en España, la librería parisina J. B. Baillière e Hijos, envió a Madrid a Charles François Jean Baptiste Bailly, con el fin de poder establecer en la capital una sucursal de aquélla, y desde la que se pudiera editar obras científicas y literarias en español. El resultado de todo aquel proyecto condujo a la publicación en 1879 de la edición del primer número del *Anuario-almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración ó almanaque de las 400.000 señas de Madrid, de las provincias, de Ultramar y*

⁴⁰⁹ La Dirección General de Agricultura del Ministerio de Fomento, a través de lo concertado en la Ley de Enseñanza Agrícola de 1876, comenzó a publicar una revista quincenal con el título de *La Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, apareciendo su primer número el día 3 de octubre de aquel mismo año y manteniendo su publicación durante 18 años. Por su parte, *Anales de Agricultura* se comenzó a imprimir en abril de 1877, siendo igualmente una revista quincenal, cuyo objetivo era aportar todo tipo de información que pudiera paliar la situación de crisis en la agricultura vivida en aquellos momentos. *Anales de Agricultura*, fundada por la *Asociación de Ingenieros Agrónomos*, se mantendría activa hasta su último número en agosto de 1882.

de los estados hispano-americanos, teniendo una rápida difusión y aceptación a partir de ese instante⁴¹⁰.

Organizado por provincias, los datos del *Anuario* aportaban reseñas y referencias sobre el número de ayuntamientos, de los principales centros administrativos y oficiales, la población, superficie, además de aspectos relativos a la riqueza económica de los distintos municipios, entre otras muchas cuestiones. En el terreno que nos ocupa, esto es, el del asociacionismo agrícola, la obra de Bailly-Baillièrè revelaba la amplitud alcanzada en esos años en el conjunto tipológico, dejando entrever un evidente proceso en la evolución y significación de los grupos y sociedades, destacando el relieve alcanzado por casinos y círculos en el terreno de la propiedad agrícola (véase el cuadro 39). A pesar de todo ello, el conocimiento de otras fuentes de la época nos ha revelado la omisión de algunos datos que no fueron recogidos por la red de corresponsales del *Anuario*, en particular la ausencia del casi medio centenar de ligas de contribuyentes, exceptuando la de Cádiz, así como alguna de las asociaciones más relevantes en esos momentos como así sucede con la *Sociedad Valenciana de Agricultura*⁴¹¹.

Precisamente, durante los años setenta y ochenta de la centuria, las escasas sociedades agrícolas y de propietarios que habían logrado consolidarse, además de las ya mencionadas secciones de Agricultura incluidas en el holgado entramado de Sociedades Económicas de Amigos del País, mantenían sus actividades y seguían siendo reconocidas por la Administración debido a los resultados que aportaban a la iniciativa privada en el terreno de la agricultura. La propia *Gaceta Agrícola*, publicada por el Ministerio de Fomento, se refería así al quehacer de la *Sociedad*

⁴¹⁰ Una amplia aproximación a la temática del *Anuario* en el trabajo del Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad, *España en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX*, ob. cit., págs. 21 a 28.

⁴¹¹ En este aspecto de las «ausencias», llama poderosamente la atención que una institución, ejemplar durante toda la segunda mitad del siglo XIX, como lo era el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, solo aparezca como referencia a la revista que la propia asociación editaba, además de hacerlo al mencionar al Consejo Superior de Agricultura, Industria y Comercio del Ministerio de Fomento, entre cuyos vocales se encontraba el Presidente del *Instituto*. Si se observa el primer número del *Anuario*, se comprueba, en efecto, la ausencia de dicho establecimiento en el apartado correspondiente a «Sociedades». Además, se echa en falta la referencia a entidades de cierta relevancia como la *Liga de Propietarios de Valencia y su Provincia*, además de otras asociaciones creadas poco tiempo atrás como eran la *Unión Agrícola Orcelinada*, o la *Asociación de Labradores de Málaga*. A estas últimas podrían añadirse otras de menor importancia por su distribución geográfica como eran, por ejemplo, la *Asociación de Cosecheros de Vinos de Valladolid* y el *Casino Agrícola* en la localidad navarra de Dicastillo.

Valencianade Agricultura a comienzos de 1878: “La actividad agrícola de una de las primeras regiones de España, en que se tocan con pasmosa frecuencia resultados trascendentales de la iniciativa particular y de las asociaciones locales, necesita una válvula poderosa que dé salida y comunique á todas partes el espíritu de progreso que se desarrolla y expansiona en estos centros de elaboracion intelectual, en que se reunen el saber y la experiencia de la comarca”⁴¹².

La *Gaceta Agrícola*, era uno de los pocos medios que de forma continuada informaba de los esfuerzos y cometidos de las sociedades agrícolas, como así sucedía con el *Instituto Agrícola Catalán*, del cual se daban cumplidas y puntuales reseñas de sus trabajos, entre los que se encontraban los éxitos logrados por los establecimientos y las estaciones de agronomía, el apoyo prestado a la aclimatación de nuevas plantas y cultivos, la instrucción y participación en comisiones científicas, etc., sin olvidar los relativos a las gestiones en materia de impuestos y aranceles. En este último caso se anotaban las reclamaciones mediante informes y exposiciones llevadas a cabo ante la Diputación de Barcelona, las Cortes y el Gobierno de la Nación⁴¹³. Otras asociaciones que ya había destacado en los años centrales del siglo XIX, como era la *Sociedad de Labradores de Arjona*, en los primeros años ochenta elevabaría a las Cortes una Exposición con el fin de proteger el aceite del proyecto de ley que sobre introducción de primeras materias estaba elaborando el Gobierno en Madrid⁴¹⁴.

⁴¹² *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo VI, enero a marzo de 1878, págs. 7 a 9.

⁴¹³ Véanse, por ejemplo, los apartados titulados “Actos oficiales del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro”, “Nuevos trabajos del Instituto Agrícola...”, o “Memoria Anual...”, en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XI, abril a junio de 1879, págs. 67 a 69; Tomo XVI, julio a setiembre de 1880, págs. 365 a 367, y Tomo XVIII, enero a marzo de 1881, págs. 485 a 488.

⁴¹⁴ A este respecto puede consultarse *La Correspondencia de España*, número 9.108, miércoles 28 de febrero de 1883.

CUADRO 39

Asociaciones relacionadas con la actividad agrícola recogidas en el primer volumen del Anuario de Bailly-Baillièrè (1879)

Provincia/municipio/ Nº de sociedades/habitantes	Nombre	Provincia/municipio/ Nº de sociedades/habitantes	Nombre
BARCELONA (39 sociedades)	<ul style="list-style-type: none"> - Instituto Agrícola Catalán de San Isidro - Liga de Contribuyentes - Círculo de Artesanos y Labradores - Casino Agrícola - Círculo Agrícola Mercantil Recreativo - Casino de Artesanos y Labradores - Círculo Vinatero - Casino de Labradores Industriales - Tertulia Agrícola - Círculo de Labradores - Círculo Agrícola Comercial - Círculo Agrícola-Artístico - Casino Agrícola - “ 	HUELVA (6 sociedades)	<ul style="list-style-type: none"> - Casino de Propietarios y Labradores - “ de Labradores y Artesanos - Casino Agrícola - Sociedad Agrícola y de Instrucción - Círculo de Labradores - Sociedad de Labradores - Círculo Agrícola - Escuela de Agricultura - Círculo de Labradores - Asociación de Labradores para el Fomento Agrícola
BARCELONA (726.267)		TRIGUEROS (4.363)	
CÁDIZ (49 sociedades)		HUESCA (18 sociedades)	
CÁDIZ (71.521)		BINÉFAR (1.583)	
ARCOS DE LA FRONTERA (15.203)		JAÉN (33 sociedades)	
LOS BARRIOS (5.098)		ANDÚJAR (13.901)	
MEDINA-SIDONIA (12.858)		ARJONA (5.630)	
PATERNA DE LA RIBERA (3.004)		CAZORLA (6.067)	
PUERTO DE SANTA MARÍA (21.714)		MADRID (28 sociedades)	
VEJER DE LA FRONTERA (9.590)		ARANJUEZ (9.293)	
CASTELLÓN (15 sociedades)	<ul style="list-style-type: none"> - Círculo Agrícola Comercial - Círculo Agrícola-Artístico - Casino Agrícola - “ 	MÁLAGA (12 sociedades)	<ul style="list-style-type: none"> - Escuela de Agricultura - Círculo de Labradores - Asociación de Labradores para el Fomento Agrícola
VINAROZ (9.641)		ARCHIDONA (7.401)	
CIUDAD REAL (25 sociedades)		MURCIA (28 sociedades)	
VALDEPEÑAS (11.090)		MURCIA (87.895)	
CÓRDOBA (25 sociedades)			
BUJALANCE (8.395)			
PUENTE GENIL (110.462)			

Provincia/municipio/ Nº de sociedades/habitantes	Nombre	Provincia/municipio/ Nº de sociedades/habitantes	Nombre
PALENCIA (8 sociedades)	- Círculo Agrícola	TARRAGONA (29 sociedades)	- Sociedad Agrícola de Amigos - Círculo Agrícola
TORQUEMADA (2.876)		CONSTANTI (2.328) VIMODÍ (1.588)	
SALAMANCA (8 sociedades)		VALENCIA (22 sociedades)	
SALAMANCA (15.906)	- Círculo Agrícola Salmantino	SUECA (11.422)	- Casino Agrícola
SEVILLA (31 sociedades)	- Círculo de Labradores y Propietarios - Centro Mercantil Agrícola - Círculo Agrícola - “ de Labradores y de Recreo - “ Agrícola Mercantil - “ Industrial Agrícola	ZARAGOZA (31 sociedades)	- Centro Mercantil, Industrial y Agrícola - Círculo Agrícola
SEVILLA (473.920)		ZARAGOZA (67.428) CADRETE (599)	
LA CAMPANA (3.791)			
EL CORONIL (4.268)			
ÉCJJA (27.216)			
FUENTES DE ANDALUCÍA (6.900)			

FUENTE: Anuario-almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración ó almanaque de las 400.000 señas de Madrid, de las provincias, de Ultramar y de los Estados hispano-americanos, Carlos Bailly-Baillière, Madrid, 1879.

En todo caso, del análisis efectuado, tanto a la *Gaceta Agrícola* como a la revista *Anales de Agricultura*, esta última fundada por la *Asociación de Ingenieros Agrónomos* en 1877, se deduce un claro auge en la evolución asociativa, especialmente en aquellas referidas a la actividad vinícola, con la creación de sociedades y comunidades dedicadas al cultivo y explotación de la vid (véase el cuadro 40). A este respecto, ya existía un Reglamento que regulaba en 1877 la actividad de la *Asociación de Viñeros* en la población turolense de Monreal del Campo. Diez años más tarde tendría lugar la formación de la *Asociación General de Agricultura de Navarra*, producto de la unión de la *Asociación Vinícola de Navarra* y de la *Asociación Pecuaria y Forestal de Navarra*⁴¹⁵.

El peso logrado por instituciones como el *Instituto Agrícola Catalán* seguía haciéndose visible, todavía a finales de los años setenta, con el establecimiento de corporaciones similares a las que se acudía como alternativa para la defensa y la protección de los intereses agrícolas. Es evidente que las dificultades planteadas por la crisis económica de finales de siglo, iban a empujar todavía más a productores y propietarios a buscar cauces en el asociacionismo para así defender mejor sus intereses, paliando en la medida de lo posible el constante desasosiego provocando por la pérdida de los mercados y por la necesidad de mantener la modernización del campo español. Las aspiraciones de protección quedaban unidas, además, a la preocupación por contrapesar la aparición de sindicatos y agrupaciones agrarias de clase, que a lo largo del último cuarto de siglo habían comenzado a asomar en muchas regiones y municipios del país. En este sentido, asociaciones como el *Centro Agrícola del Panadés* o el *Instituto Agrícola Andaluz*, ambos creados en los municipios de Villafranca y Sevilla, respectivamente, en el transcurso del año 1876, no tardaron en asumir las tareas que ya venía desarrollando su homóloga en Barcelona, responsabilizándose de la difusión de los conocimientos agronómicos más recientes, al tiempo que aseguraba la instalación de nuevos cultivos y

⁴¹⁵ Aldecoa Calvo, José Serafin, “La restauración: propietarios y jornaleros (1874-1923)”, en Benedicto Gimeno Emilio (coordinador), *Historia de Monreal del Campo*, Centro de Estudios del Jiloca, Ayuntamiento de Monreal del Campo, 2006, pág. 205. Véase también de Layana Ilundain, César, *Elecciones generales en Navarra (1876-1890)*, Universidad Pública de Navarra, 2011, pág. 43.

CUADRO 40

Asociaciones extraídas de la Gaceta Agrícola y de Anales de Agricultura entre los años 1876 y 1882

Provincia/municipio	Nombre/año de fundación	Provincia/municipio	Nombre/año de fundación
ALICANTE		HUESCA	
ORIHUELA	- Unión Agrícola Orecelitana (1878)	HUESCA	- Sociedad de Agricultura de Huesca (1879)
YBI	- Círculo Agrícola de Orihuela (1878)	LOGROÑO	
BARCELONA	- Sociedad de Agricultura de Ybi (1878)	NAVARRETE	- Asociación Agrícola de Navarrete (1881)
BARCELONA	- Sociedad Vitícola de la Corona de Aragón (1881)	MADRID	
VILLAFRANCA DEL PANADÉS	- Centro Agrícola del Panadés (1876)	MADRID	- Asociación de Peritos Agrícolas (1877)
BILBAO			- Asociación Vinícola (1877) (proyecto)
BILBAO	- Sociedad Vinícola (1883) (proyecto)	MÁLAGA	- Asociación General de Agricultores de España (1881)
BURGOS		MÁLAGA	- Asociación de Labradores de Málaga (1878)
BURGOS	- “ “ (1881)	MURCIA	- Sociedad de Agricultura (1879)
CIUDAD REAL		MURCIA	- Sociedad Vinícola (1881)
CIUDAD REAL	- Asociación de Agricultores (1881)	NAVARRA	- Centro Agronómico Murciano (1879)
DAIMIEL	- Asociación de Viticultores (1881) (proyecto)	PAMPLONA	- Asociación Vinícola de Navarra (1879)
	- Sociedad Vitivinícola (1882)	SANTISTEBAN	- Asociación para el Fomento de la Riqueza Pecuaria y Forestal de Navarra (1880)

Provincia/municipio	Nombre/año de fundación	Provincia/municipio	Nombre/año de fundación
PALENCIA		VALENCIA	
PALENCIA	- Asociación Agrícola de Palencia (1881) (proyecto)	VALENCIA SAGUNTO	- Sociedad de Horticultura (1877) - Sociedad Vitivinícola de Sagunto (1879)
SANTANDER		VALLADOLID	
SANTANDER	- Asociación para el Fomento de los Intereses Agrícolas, Artísticos y Comerciales (1879)	VALLADOLID	- Asociación de Vitivinícola Castellana (1881) - Asociación Agrícola de Valladolid (1881) (proyecto) - Sociedad para la Exportación Vinícola (1882)
SEVILLA			
SEVILLA	- Instituto Agrícola Andaluz (1876)		

FUENTE: *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, años 1876 a 1882, y *Anales de Agricultura*, años 1877 a 1882.

su aclimatación en el campo de la agricultura⁴¹⁶.

Señalada fue también la actividad desarrollada en algunas zonas del Segura por organizaciones como la *Unión Agrícola Orcelitana*, fundada bajo la salvaguardia del Santo Isidro Labrador en 1878, y destinada a cubrir la falta de iniciativas y protección oficial observadas en la economía agrícola alicantina, así como para tutelar y modernizar la agricultura y a los agricultores de Orihuela. Dicha sociedad, nacida como asociación de labradores y propietarios, mantuvo entre los años 1883 y 1885 la publicación de un semanario de intereses generales y agrarios, llegando su actividad a rivalizar con otros establecimientos por el acondicionamiento de calles y plazas con el fin de facilitar la movilidad y el acceso a la estación de ferrocarril de aquella ciudad. Una inversión, a todas luces, beneficiosa para propietarios y agricultores próximos a la población⁴¹⁷. A ella también debemos atribuirle la fundación, en la misma ciudad, de una *Caja de socorros y de ahorros* que debía servir de auxilio a la clase labradora frente a las prácticas habituales de la época relacionadas con la especulación y la usura. Por último, cabría destacar la creación de una escuela nocturna de adultos en 1880, quedándose en un simple proyecto la puesta en marcha en dicho municipio de una granja-escuela⁴¹⁸.

⁴¹⁶ La entidad instaurada en Sevilla había nacido al amparo y de la mano de la *Económica Sevillana*, ofreciendo esta última sus salones para celebrar el evento de la fundación. *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo I, octubre a diciembre de 1876, págs. 232 y 233. En relación al Centro creado en Villafranca, en la provincia de Barcelona, véase la *Gaceta Agrícola...* Tomo IV, julio a setiembre de 1877.

⁴¹⁷ De hecho, tal y como se ha comprobado en el Archivo Municipal de Orihuela, la localidad llegó a tener una calle con el nombre de la Asociación. La *Unión Agrícola* ganó la subasta que permitía iniciar las obras para unir la estación y la ciudad a través de un paseo. *Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento de Orihuela* (1887-1888), signatura A 274, folios 168 a 170. Algunas reseñas relativas a la asociación en Albert Berenguer, Isidro, *La Imprenta en la provincia de Alicante (1602-1925)*, Instituto de Estudios Alicantinos, 1971, pág. 115; Barcala Muñoz, Andrés, "Tierra, familia y política. Los inicios del caciquismo en la Vega Baja del Segura", en Roura i Aulinas, Lluís y Fuentes Aragonés, Juan Francisco (coordinadores.), *Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX: homenaje al profesor Alberto Gil Novales*, Editorial Milenio. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Lleida, 2001, pág. 179, y Millán García-Varela, Jesús (1999), ob. cit., pág. 119. Las Bases de la asociación pueden consultarse en *El Constitucional. Diario Liberal de Alicante*, número 2.954, jueves 7 de febrero de 1878.

⁴¹⁸ *Guía práctica de Alicante y su provincia*, Imprenta de Antonio Marzo, Madrid, 1908, pág. 351. Asimismo en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XI, abril a junio de 1879, págs. 609 y 610, y Tomo XVIII, octubre a diciembre de 1880. En la misma publicación se constatan las relaciones que la *Unión Agrícola Orcelitana* tuvo con otras asociaciones y proyectos, en especial con la *Asociación General de Agricultura*, auspiciada por la duquesa de Medinaceli. Véase el Tomo VI, correspondiente a los meses de enero a marzo de 1878, pág. 737.

Esta proliferación de grupos asociados estuvo muchas veces acompañada de manifestaciones y encuentros, según convenía, por parte de propietarios y agricultores en distintas regiones de España que, en algunos casos finalizaban con la creación de pequeñas sociedades establecidas para fines concretos⁴¹⁹. De esta forma, nada deberían extrañarnos las reuniones celebradas por hacendados y labradores en la ciudad de Sevilla, a mediados de 1878, organizadas para “remediar en lo posible la angustiosa crisis de la agricultura andaluza”, y de la que formaron parte importantes terratenientes y diputados provinciales como Ignacio Vázquez, Pedro Ibáñez, el marqués de Gaviria, y Luis Ricardo Fors, este último en representación de la *Gaceta Comercial, Fabril y Agrícola*⁴²⁰.

Siguiendo este mismo argumento, los intentos por mejorar los intereses vitícolas en Castilla dieron lugar a comienzos de 1881 de una convocatoria de productores y propietarios de viñas, con el fin de promover lo que más tarde sería la *Sociedad Vitivinícola Castellana*. Una aspiración conforme a otras ya constituidas en algunas provincias como Navarra, Ciudad Real, Valencia o Málaga⁴²¹. Proyectos que seguirían repitiéndose con pautas similares, relacionados, la mayoría de las veces, con un amplio acervo de intereses y plasmados por una colectividad perfectamente consciente de los efectos que debían producir la corporación y los esfuerzos mancomunados.

Por otra parte, y al igual que sucediera unas décadas antes, la unidad ocasional y concreta podía significar la solicitud de mejoras en las cuotas arancelarias o la corrección en los cupos de consumos. Esto es lo que debieron pensar los cosecheros de naranjas, pasas e higos en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón, una vez vistas las solicitudes que se

⁴¹⁹ Esta actitud, al margen de los congresos tan habituales en las últimas décadas del XIX, fue un hecho al que recurrieron distintos colectivos de productores y propietarios agrícolas a finales de dicha centuria. Así se desprende, por ejemplo, del proyecto expresado por un grupo de viticultores de la provincia de Ciudad Real para formar una asociación en las comarcas manchegas, con el fin de mejorar las exportaciones de vinos a países extranjeros. En la misma línea, varios propietarios de la propia capital ciudadrealeña dejaron constancia del interés por organizar una sociedad de agricultores, con el objetivo de reunir fondos suficientes para la adquisición de instrumentos y maquinaria agrícola, que pudieran mejorar el rendimiento en los campos de cultivo. *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XVIII, enero a marzo de 1881, y Tomo XX, julio a setiembre de 1881.

⁴²⁰ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo VII, abril a junio de 1878, págs. 491 a 493.

⁴²¹ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XVIII, enero a marzo de 1881, pág. 243, y 482 a 484.

presentaron al Gobierno relativas a la elaboración de una reforma que «suavizara» los aranceles concernientes a dicho ramo de la riqueza en la región. Similares planteamientos debieron de establecerse por parte de los labradores de Valladolid y Palencia que, en representación de varios ayuntamientos y vecinos, acudieron al Gobierno elevando una Exposición razonada para que pudiera aprobarse una escala descendente en el cálculo de las asignaciones correspondientes a los consumos, en aquellos pueblos cuya población resultase inferior a los 5.000 habitantes⁴²².

Las inquietudes demostradas en los distintos sectores agrícolas podían dar lugar a iniciativas eventuales o definitivas, siendo los periódicos los encargados, en la mayoría de las ocasiones, de dar cuenta de las reuniones y de las tomas de decisiones que finalmente eran adoptadas⁴²³. No nos parece casual, por tanto, que la prensa vallisoletana informara de la iniciativa del diputado Miguel Alonso Pesquera por reunir a los productores de la provincia para informarles de los obstáculos de la agricultura en España, los tributos con los que se mermaba su producción, así como del bajo precio al que cotizaban los artículos castellanos en los mercados nacionales, en especial el trigo. A la cita terminaron sumándose nombres destacados como los de Cayetano Guzmán, los directores de *La Crónica* y de *El Norte de Castilla*, además de otros apellidos significativos de la región como Jalón, Hornedo y Lara, acordándose la remisión de una «reverente» protesta como medio para paliar la posible ruina de la agricultura en Castilla⁴²⁴.

En los países próximos, la situación respecto al desarrollo y extensión del asociacionismo entre las clases productoras no era muy diferente al que venía sucediéndose en España en las dos últimas décadas de la centuria. En Lisboa, mediado el año de 1879, se había comenzado a debatir el proyecto para constituir una asociación con el fin de fomentar el comercio y la

⁴²² Ibídem, pág. 633, y Tomo XX, julio a setiembre de 1881.

⁴²³ Así, por ejemplo, con el objeto de adoptar medidas de protección en la industria aceitunera andaluza, productores, principalmente de las provincias de Sevilla, Granada y Huelva, acordaron en las sucesivas reuniones celebradas durante el verano de 1876, organizarse en torno a una *Liga Olivarera* que paliara los efectos producidos por los exiguos derechos de importación pagados por los aceites extranjeros. Véase el *Diario de Córdoba*, número 7.787, viernes, 25 de agosto de 1876.

⁴²⁴ La noticia está suficientemente recogida y motivada en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Segunda Época, Tomo VIII, octubre a diciembre de 1883, págs. 396 a 398.

agricultura en aquel país⁴²⁵. Casi al mismo tiempo se ponía en marcha en Francia otra institución de características y denominación similares. La *Sociedad Nacional Francesa para el Fomento de la Agricultura*, inaugurada en 1880 con el objetivo de velar por el desarrollo de la riqueza rústica del país, tenía entre sus mayores propósitos, tal y como recogía el artículo 2º de sus Estatutos: “Fomentar la Agricultura nacional, y principalmente el mediano y pequeño cultivo”. De la misma forma que en España se intentaba la proximidad de los problemas de la propiedad rural a la Administración y a los poderes del Estado, la *Sociedad Nacional* mantenía la convicción de secundar los deseos de los propietarios y productores franceses, defendiendo sus intereses frente a las posturas fraguadas desde el Gobierno⁴²⁶.

En la misma línea de argumentación, conviene anotar el hecho de que en 1881 la *Sociedad Real de Agricultura de Inglaterra* hizo público un informe en el que daba a conocer el número de miembros asociados en ese mismo año. Asociados que estaban referidos a todo el territorio nacional. Recordemos que en España, asociaciones mucho más acotadas geográficamente habían alcanzado un número nada despreciable de socios. El propio *Instituto Agrícola Catalán* contaba en 1861 con algo más de 700 miembros. Incluso la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, circunscrita al ámbito de una ciudad como Valladolid, había alcanzado los 500 socios, y la *Sociedad Valenciana de Agricultura* los 800 afiliados en el año 1880. En la Memoria presentada por la asociación británica se aceptaba como positivo el hecho de que su número se hubiera incrementado en 40 personas en un solo año. Un apunte que no podemos pasar inadvertidamente y que puede darnos una idea de la verdadera situación en nuestro país, escasamente alejada de la sustantividad por la que transitaban otros Estados europeos a finales del siglo XIX⁴²⁷

Además, en otros países concurrentes geográficamente, el empeño de los sectores agrícolas por hacerse un sitio en la política oficial, tampoco advertía diferencias significativas con respecto a los pasos dados por las

⁴²⁵ Algunos apuntes de la *Compañía Fomentadora del Comercio y de la Agricultura Portuguesa* en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XII, julio a setiembre de 1879, págs. 620 y 621.

⁴²⁶ Existe una amplia información, así como la publicación de los Estatutos de dicha asociación en la revista *Anales de Agricultura*, año IV, Segunda Época, Tomo I, Imprenta de la Sociedad Tipográfica, Madrid, 1880, págs. 463 y 464.

⁴²⁷ Los datos relativos a la *Sociedad Real de Agricultura de Inglaterra* en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Segunda Época, Tomo I, enero a marzo de 1882, pág. 77.

asociaciones de propietarios y agricultores instaladas en España. El caso de las ligas de contribuyentes, verbigracia, agitadas en los últimos períodos electorales vividos en varias provincias españolas, tenía en la *Asociación Electoral Agrícola*, formada en Milán en mayo de 1881, un inequívoco parecido en la búsqueda de réditos plebiscitarios para la propiedad rural y agrícola del país. Entre los principios más señalados de aquélla figuraba la contribución activa en el nombramiento de diputados, siempre que recayese en personas que pudieran representar dignamente a la propiedad agrícola, aspecto que era esgrimido así por los terratenientes italianos:

La agricultura no ha tenido la menor representación en el Parlamento. Para nuestra instruccion, conviene repetirlo, se gasta ménos que apra el arte, ménos que para el bosque del Demanio, ménos que para caballos sementales, y ménos, bastante ménos, que los más pequeños Estados de Europa, tales como Wurtemberg, Holanda, Sajonia y Bélgica; ¡y los señores diputados no se abochornan del tal proceder! El distinguido ingeniero Sr. Chizzolini, que fundó los estatutos de la nueva Asociacion, dice acerca de este particular: “En todo recargo de los tributos existentes, en la creacion de nuevos impuestos, en el estudio de toda ley, reformas de tarifas y tratados de comercio, como en la formación de nuevos reglamentos, en los cuales se lamenta con bastante frecuencia la poca circunspección de los cuerpos deliberantes, se ve la condicion y la necesidad de la industria agrícola; pero, en tanto, ningun esfuerzo eficaz se ha hecho hasta ahora para cortar de raíz el mal que todos lamentamos”⁴²⁸.

Finalmente, los años setenta y ochenta verían proliferar diferentes sociedades de «labradores», unas veces concebidas con la finalidad de aunar esfuerzos entre acreditados propietarios y cultivadores de tierras, mientras en otras ocasiones se fraguaban para aglutinar a las clases menos excelsas dentro del campo agrícola. Entre las primeras cabe destacar a la *Asociación de Labradores de Córdoba*, de la que ya se tienen noticias en 1871⁴²⁹. Otra similar, establecida en Málaga a iniciativa de la *Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales* de esa ciudad, y proyectada por su presidente Manuel Casado Sánchez, parece más que probable que iniciara sus actividades en los

⁴²⁸ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XX, julio a setiembre de 1881, pág. 149. Asimismo, existe también información sobre un *Partido de Labradores*, constituido en Suiza en el transcurso del mes de mayo de 1891. *La España Regional*, año VI, Tomo X, año 1891, pág. 380.

⁴²⁹ *Diario de Córdoba*, número 6.241, 1 de junio de 1871.

primeros meses de 1879⁴³⁰. Además de las anteriores, conocemos la existencia de otros colectivos de labradores en Logroño, Jerez, Ávila y Salamanca, surgidos ya en los años ochenta⁴³¹. Si nos referimos al segundo de los casos, gracias a la documentación encontrada en el Archivo Municipal de Córdoba, sabemos que se constituyó una asociación en 1871, bajo el nombre de *Sociedad Agrícola “La Ceres”*, cuyos socios debían contribuir con una cuota de diez reales desde el momento de su inscripción. En el artículo primero de sus Reglamentos se especificaba lo siguiente: “Con este titulo se establece una sociedad cooperativa que se dedicará a trabajos agrícolas cuyos asociados deveran ser jornaleros inteligentes en las labores de campo, y caso de no haver numero suficiente, se concederá el ingreso á los otros oficios e industrias”⁴³².

Como ya apuntamos más arriba, y a tenor de los últimos cuadros expuestos, todos estos patrones corporativos, con sus diferentes estrategias aplicadas a la iniciativa agrícola, estaban llamados a compartir protagonismo con otros grupos, en apariencia de menor entidad y de un inferior dominio participativo, entre los que iban a destacar extraordinariamente los círculos y casinos; muchos de ellos entroncados con los sectores próximos a la propiedad y a la agricultura. Eran los casinos modelos experimentados de sociabilidad que ya habían asumido un papel destacado en la vida de pueblos y ciudades, incluso antes de iniciarse la segunda mitad del siglo XIX. En este sentido, sabemos, por ejemplo, que habían surgido los primeros casinos en ciudades como Alicante, Cádiz, Madrid, Bilbao y Zaragoza, en los años treinta de dicha centuria⁴³³.

⁴³⁰ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo VII, abril a junio de 1878, págs. 229 y 230, y Tomo X, enero a marzo de 1879, págs. 357 y 358. También en *El Guadalete*, número 8.219, domingo 7 de enero de 1883.

⁴³¹ Al respecto de la *Asociación de Labradores de Logroño* puede consultarse el *Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid*, año VIII, Tomo XIV, número 6, junio de 1883, pág. 472. Algunos aspectos relativos a la *Asociación de Labradores de Ávila* en la revista *La Liga de Contribuyentes de Salamanca*, año IV, número 91, 26 de abril de 1885. Además, y en lo que se refiere a esta última asociación, hay que destacar la actividad que desempeñó a mediados de los años ochenta, en relación a las protestas practicadas contra el Convenio comercial establecido entre España y Estados Unidos. Véase *La Propaganda*, número 112, 26 de diciembre de 1884. La mayor parte de las actividades y trabajos del colectivo de labradores en Jerez pueden encontrarse en la publicación periódica de *El Guadalete*. Algunos ejemplos en el número 9.492, miércoles 2 de marzo de 1887, o en el número 9.498, miércoles 9 de marzo de 1887. En lo tocante a la asociación organizada en Salamanca, son pocos los datos encontrados. Una mención expresa a la *Asociación de Labradores de Salamanca* en *La Correspondencia de España*, número 11.536, sábado 2 de noviembre de 1889.

⁴³² Archivo Municipal de Córdoba, Sección 17, Serie 9, Legajo 11.

⁴³³ Cabe el honor a dichas ciudades de haber establecido los primeros casinos en nuestro país. Almansa Moreno, José Manuel, “Arquitectura del ocio en la Úbeda decimonónica”,

Además de ser los modelos más habituales, dentro de la generalidad asociativa en nuestro país, durante todo el período isabelino y hasta la finalización del siglo XIX, círculos y casinos aparecerán también como una forma de sociabilidad entre labradores y agricultores. Parece poco discutible que la primera labor de aquéllos fue la de procurar recreo y ocio a una determinada élite residente en numerosos municipios, aunque detrás de los estatutos y reglamentos se atendían otras inquietudes y actitudes sociales. A estos locales acudían personas de diferentes filiaciones políticas y grupos económicos, profesionales de diversos sectores, etc., si bien todo ello no imposibilitaba que se discutiera y se hablara de distintos temas, llegándose a acuerdos, incluso en cuestiones directamente relacionadas con el quehacer político⁴³⁴.

En lo que respecta al mundo agrario y de la propiedad rural, en las escasas estadísticas y recuentos llevados a cabo hasta 1890 son numerosas las menciones a casinos y círculos agrícolas, así como de labradores, comprendiendo también algunos centros de agricultores, ganaderos y propietarios. Ya en el propio *Anuario* de Bailly-Bailliére podemos encontrar algunas instalaciones bajo el calificativo de *propietarios y labradores*, además de *labradores y recreo*, o *industrial agrícola*, etc. Una circunstancia que no siempre quedaba recogida en la denominación o mención del colectivo asociado. Un ejemplo suficientemente significativo de lo que se expone, lo encontramos en las bases reguladoras *del Círculo Granadino*, institución creada a finales de 1862. En su artículo 1º podemos leer:

Se crea una Sociedad denominada Círculo Granadino, con el fin de disfrutar de las distracciones que ofrece el trato social, y que, estrechando las

Iberian, Revista digital de Historia, número 5, septiembre a diciembre de 2012, págs. 45. (http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LGTrFIUdi_wJ:dialnet.unirioja.es/download/articulo/4119943.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es)

⁴³⁴ Así se desprende de la lectura de algunos de los reglamentos y estatutos de casinos y círculos constituidos en distintas regiones del país. Es un hecho contrastado que el *Casino Leonés*, fundado en el año 1851, no disponía de ninguna formulación reglamentaria que impidiera discutir o hablar de asuntos y materias relacionadas con la política del momento. Algo que, desde luego, no era muy habitual en la mayoría de estos establecimientos, al menos en lo que a la regulación y al ordenamiento interno se refiere. Hay que recordar que hasta la aprobación de la Ley de asociaciones de 1887, las discusiones políticas estaban expresamente prohibidas, lo que provocaba la constatación expresa en las normas internas de casinos, círculos y otras sociedades similares. Botrel, Jean-François y Pastrana, Luis, *La fundación del Casino de León en 1851*, F.M. Nueva Comuniación, S.L., León, 2002, pág. 25. También en Villena Espinosa, Rafael y López Villaverde, Ángel, "Espacio privado, dimensión pública: hacia una caracterización del casino en la España contemporánea", *Hispania*, LXIII/2, número 214, año 2003, pág. 458.

relaciones amistosas entre las ilustradas personas que deben formarle, constituya una activo y poderoso centro en que se inicien, discutan y protejan las ideas ó proyectos útiles que tiendan al fomento de la Agricultura, Artes ó Industria, y cuanto pueda contribuir al desarrollo del bien público, excluyendo toda cuestion política, como agena de este instituto⁴³⁵.

Con ello, la dimensión «lúdica» de casinos, círculos y otros centros de recreo, quedaba vinculada a las inquietudes de una burguesía comercial y propietaria, muchas veces acompañada de las clases más notables y excelsas del lugar. Una sociabilidad formal que, al margen de otras instituciones mucho más concretas, justificaba la creación de múltiples redes sociales entre las élites, dejando el camino expedito a las innumerables inquietudes económicas y políticas del momento. Todo ello, sin olvidarnos del papel esencial que podían ejercer en la mediación entre la sociedad cotidiana y la esfera de lo público y las influencias del poder.

Precisamente, la imposibilidad de discutir en las Juntas Generales sobre política y religión determinaba la eventualidad de hacerlo en otras cuestiones relacionadas con la economía, un hecho del que nada se decía o advertía en los reglamentos. Además, en las bibliotecas o gabinetes de lectura de muchos edificios destinados a acoger a estos grupos sociales, era bastante habitual el acceso a publicaciones especializadas, así como a la prensa que era traída desde distintos puntos del país y del extranjero. Esto suponía un aliciente más a la hora de adquirir un mayor conocimiento en las técnicas de cultivo y de la producción agrícola, si al ámbito de las relaciones entre la propiedad rural nos referimos, lo que daba también una mayor cohesión y funcionalidad a los individuos que integraban estas sociedades declaradamente recreativas⁴³⁶.

⁴³⁵ *Reglamento del Círculo Granadino*, Imprenta de El Mensajero, Granada, 1862, pág. 3.

⁴³⁶ Es numerosa la bibliografía relativa a la «instrucción» de la población en casinos y círculos de recreo, gracias a los gabinetes de lectura que muchos terminaban por adquirir y fomentar. Valgan los ejemplos del *Casino Mercantil e Industrial* de Zaragoza; el *Casino de la Unión* en Valencia de Alcántara; la *Sociedad del Casino de Numancia*, sin olvidar los establecidos en las grandes ciudades y capitales españolas como Sevilla, Valencia, Córdoba o Valladolid, en lo que se refiere a la actividad agrícola y ganadera. En cuanto a la bibliografía y fuentes relacionadas con lo que se ha expuesto, véase, por ejemplo: *Reglamento del Nuevo Casino de Pamplona*, Imprenta y Librería de Regino Bescansa, 1869, pág. 11; Hoyo Simón, Josxé Félix del, *Casino de Tolosa, 1885-1985*, Zarautz, 1986, pág. 7; Martín de Marco, José Antonio, *El Casino y el Círculo de la Amistad-Numancia 1848-1992*, Diputación Provincial de Soria, 1992, págs. 39 a 41; Pérez-Rioja, José Antonio, *Cien años de Casino de Numancia (1848-1948)*, Imp. Casa de Observación, Soria, 1948, pág. 9, y Melara Silva, Ángel, *Historia del Casino de la Unión 1850-2005*, Badajoz, 2005, págs. 13 y 14. Una

En algunos locales era habitual la celebración de conferencias sobre temas de divulgación en la agricultura, la industria o el comercio, existiendo una clara determinación por separar las actividades puramente formativas y de interés del esparcimiento o recreo. A este respecto puede servirnos el ejemplo del *Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva*, asociación que, como ya tuvimos oportunidad de constatar, desde sus primeros trabajos entendió la importancia que este tipo de corporación tenía respecto a la contribución en aspectos materiales, en especial con la agricultura⁴³⁷. El proporcionar todas las clases de recreo y una enseñanza «moralizadora» era uno de los propósitos, también del *Casino Industrial, Agrícola y Comercial de Córdoba*, que en su artículo 5º expresaba su intención de que las enseñanzas se desarrollaran a través de la biblioteca, además de las cátedras y tertulias científicas y literarias que aprobara la Junta Directiva. Unas cátedras que como muy bien especificaba el Reglamento, debían incluir nociones de agricultura⁴³⁸. Sabemos que la propia Junta organizó en años sucesivos distintos eventos y exposiciones en los que labradores, artistas e industriales tenían la ocasión de mostrar sus progresos y habilidades⁴³⁹.

Enlazando con lo anterior, tanto círculos y casinos, como el resto de centros comparables con nexos diferenciadores hacia la agricultura, habían surgido con una clara intención de llevar a la práctica otras actividades, situándose algunos de ellos en las grandes capitales de provincia, dando lugar unos años más tarde a importantes asociaciones de labradores y agricultores, tal y como sucedería en ciudades como Sevilla y Valencia⁴⁴⁰. El esparcimiento y la protección quedaban imbricados directamente con las relaciones rurales, llegando así hasta los sectores agrarios a través de alcaldes, concejales, diputados provinciales, labradores y demás profesiones, en una especie de pasillo invisible entre Ayuntamientos y centros de reunión

explicación sustancial de este asunto puede encontrarse también en Villena Espinosa, Rafael y López Villaverde, Ángel (2003), ob. cit., págs. 454 y 455.

⁴³⁷ Segovia Azcárate, José María (1964), ob. cit.

⁴³⁸ *Reglamento General del Casino Industrial, Agrícola y Comercial de Córdoba*, Imprenta, lib. Y litog. De D. Rafael Arroyo, Córdoba, 1865, pág. 12, y *Diario de Córdoba*, número 4.281, domingo 6 de noviembre de 1864. El Casino quedó constituido el 18 de junio de 1862 y contaba cinco años después con más de 500 socios. Ramírez y de las Casas-Deza, Luis María, *Indicador cordobés, ó sea manual histórico-topográfico de la ciudad de Córdoba*, Imprenta, librería y litografía del Diario de Córdoba, 1867, pág. 81; *Diario de Córdoba*, número 3.544, miércoles 4 de junio de 1862, y *La Correspondencia de España*, número 1.467, lunes 25 de junio de 1862.

⁴³⁹ *La Correspondencia de España*, número 3.871, jueves 25 de junio de 1868, y *El Museo Universal*, número 27, Madrid 4 de julio de 1868.

⁴⁴⁰ Conviene recordar lo sucedido con el *Círculo de Labradores y Propietarios* de Sevilla, además del *Casino de Valencia*, integrado en 1879 en la *Sociedad Valenciana de Agricultura*.

que, en definitiva, no eran sino una forma más de soporte a la acción colectiva. No hay que olvidar, siguiendo los razonamientos de Jordi Canal, que círculos y casinos iban a servir como readecuación a muchos de los anteriores modelos asociativos, al tratarse de entidades basadas en “unas estructuras socioeconómicas de carácter esencialmente agrario”⁴⁴¹. En todo caso, se trataba de un paso más en la conformación y ajuste de las relaciones entre terratenientes y agricultores, dentro de las corrientes liberales y democráticas correspondiente al Sexenio y a la Restauración, haciéndolas más dinámicas, a la vez que complejas, y llevándolas a posiciones que más tarde darían lugar a los sistemas patronales basados en fórmulas de dominio y subordinación.

Estos reajustes también afectaron a grupos y sectores de la población peor situados social y económicamente, organizándose estos últimos en torno a bloques de colectivos igualmente homogéneos. Superados los años sesenta y setenta de la centuria, un número elevado de municipios mantenía el tradicional casino, asociado en la mayoría de los casos a los grandes terratenientes. En el caso de campesinos y labradores, amén de otros grupos sociales de procedencia dispar, la sociabilidad de finales de siglo produjo el establecimiento de espacios de esparcimiento y recreo para la masa de jornaleros, a través de gremios y centros de obreros repartidos por los distintos pueblos y lugares, aunque siempre bajo la tutela de un caciquismo «determinista» obligado a desempeñar el ejercicio de la política municipal⁴⁴².

Sobre este último aspecto, el ejemplo de uno de los casinos más representativos de la provincia de Ciudad Real puede servirnos como explicación al control que los grandes hacendados de tierras ejercían en los centros de recreo. Unos entramados participativos a los que acudían importantes personajes con una clara significación económica y social dentro del ramo de la agricultura, sin que por ello figurara en su denominación referencia alguna a dicha condición.

En efecto, el *Casino Principal* de Alcázar de San Juan, nacido en febrero de 1850 por la voluntad de la clase dirigente de aquella ciudad,

⁴⁴¹ Canal i Morell, Jordi (1992), ob. cit., pág. 190.

⁴⁴² Un ejemplo muy ilustrativo en Gómez Fernández, Juan, *Formar hombres de bien. La enseñanza en el Puerto de Santa María en el siglo XIX*, Universidad de Cádiz, 2006, págs. 32 a 35.

supone un claro paradigma de lo que debió producirse en un profuso número de establecimientos similares en otros tantos municipios españoles, a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX⁴⁴³. Dentro de un contexto de cambio vivido en la provincia, asentado en una fuerte presencia de tierras de viñedo, otrora trigueras, el *Casino Principal* personificaba de un modo impecable el centro gestor del poder tutelado por los grupos políticos dirigentes de Alcázar de San Juan. Por sus filas pasaría un buen puñado de nombres que accederían a la alcaldía de la ciudad, diputados a Cortes, incluso un presidente de la Diputación, como así sucedería con Joaquín Álvarez Navarro. Todo ello deja claro la dedicación con la que eran tratadas las relaciones con las instituciones, existiendo, como se comprenderá, una notable complicidad entre el Ayuntamiento y el casino de la localidad⁴⁴⁴.

De cuanto se ha dicho en esta última cuestión, basta señalar la invitación cursada a los políticos provinciales y nacionales con motivo de la llegada del ferrocarril a Alcázar en junio de 1854, para que fuese oficiada una recepción en el Casino alcaceño. Al acto asistirían finalmente miembros del Gobierno en Madrid, además de otras personalidades como José de Salamanca y Mayol, político y constructor acreditado en aquellos momentos. Es significativa la descripción que en todo momento se hace del evento en el *Libro de Actas* del Ayuntamiento, reflejándose la solemnidad empleada en el recibimiento a los ministros, incluido el titular de la cartera de Gobernación y Presidente del Consejo de Ministros, Luis José Sartorius, o el banquete ofrecido por el propio Salamanca⁴⁴⁵.

Más aún, el paso del tiempo no haría sino aumentar la influencia de quienes frecuentaban las estancias del Casino, llegando en algunos casos a

⁴⁴³ En la primera Junta Directiva presidida por Francisco Romero del Valle, se encontraban además los señores Luis Prudencio Álvarez, José Antonio Guerrero, Manuel Chocano, Manuel Mantilla, Moisés Álvarez, y Manuel Guerrero, todos ellos grandes propietarios que, además, en algunos casos llegarían a ejercer la alcaldía de la localidad manchega. A ellos se irían sumando con el paso del tiempo otros importantes terratenientes como Ramimundo Álvarez, presidente en 1851, Enrique Manzaneque Tapia, que llegaría a la presidencia de la institución en 1881, Juan Castellanos Arias, o Juan Castellanos Arias. Gallego Palomares, José Ángel, "El asociacionismo en la reproducción del poder. El Casino de Alcázar", en *Notas históricas sobre Alcázar de San Juan y su Casino*, Patronato Municipal de Cultura, Alcázar de San Juan, 2010, pág. 121.

⁴⁴⁴ Cabe recordar, como así sucediera en otros muchos establecimientos similares, que en el artículo 1º de los Reglamentos aprobados en 1857 se imposibilitaba la discusión de cualquier tema que pudiera estar relacionado con la política en los salones del Casino. *Ibidem*, págs. 124 y 125.

⁴⁴⁵ Archivo Municipal de Alcázar de San Juan, Libro de Actas, Sig. 8/2, Reg. 42, folios 22 a 27, correspondientes al día 22 de junio de 1844.

ejercer un destacado peso en las decisiones municipales. Con la llegada al municipio manchego de Francisco de las Rivas y Ubieta, marqués de Mudela, y la apertura de distintas bodegas en diferentes comarcas de la región a partir de 1867, las señas de identidad del *Principal*, en lo que se refería al capítulo económico, comenzaron a adquirir todavía un mayor relieve en el sistema social y político. Junto al marqués de Mudela, otros hombres como Juan Álvarez Guerra, los conocidos García Vaquero o Peñuela, llegarán a despuntar en el ámbito de la actividad agraria vitícola de Alcázar y en el desarrollo de la red del ferrocarril a su paso por las provincias manchegas, dotando igualmente al Casino de un considerable prestigio⁴⁴⁶. Entre 1872 y 1876, Francisco de las Ribas volvería a demostrar su capacidad de influencia al solicitar un apartadero de ferrocarril en la línea M.Z.A., ubicación que terminaría realizándose junto a la estación de ferrocarril y que dotaba de entrada propia a las bodegas que el empresario y propietario tenía en Alcázar⁴⁴⁷.

Estas circunstancias alientan la idea acerca de que la proliferación de círculos y casinos, principalmente, a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, materializaron una sustancial modificación en el catálogo de libertades «vigiladas» que, desde junio de 1864, se había venido manteniendo hasta la aprobación de la ley de 1887 y que regularía finalmente el derecho de asociación en nuestro país. El mantenimiento del orden público, además del temor a las revueltas políticas, explican que desde el Ministerio de Gobernación, González Bravo lanzara una limitación relativa a las reuniones públicas a través de una Real Orden emitida a los gobernadores en junio de 1865⁴⁴⁸. En ella se incluían establecimientos como los casinos y otras

⁴⁴⁶ Gallego Palomares, José Ángel, "Nuevas y viejas elites manchegas en un entorno económico renovado (1850-1936)", en *Notas históricas sobre el Alcázar de San Juan y su Casino*, ob. cit., págs. 191 a 193.

⁴⁴⁷ En los oficios de solicitud se especificaba que, a petición del marqués de Mudela, debía construirse "una pequeña vía ferrea que enlace en la estación con la del ferro-carril de Madrid á Alicante, para que por aquella puedan pasar los vagones desde la referida estación hasta las bodegas de una fábrica de aguardientes y vice-versa". Archivo Municipal de Alcázar de San Juan, Libro de Actas, Sig. 9/2, Reg. 44, folios 16 a 19, correspondientes al día 25 de febrero de 1872. Una segunda solicitud de Francisco de las Ribas está recogida en el mismo Libro de Actas, Sig. 10/1, Reg. 45, folios 17 a 19, correspondientes al día 8 de junio de 1876.

⁴⁴⁸ El 22 de junio de 1864, siendo Cánovas el titular de la cartera de Gobernación, se publicó una ley sobre reuniones, normativa que sería calificada de muy restrictiva. Un año después, el nuevo titular de Gobernación, basándose en el artículo 5º de la citada ley, volvería a ratificar la suspensión de las reuniones y sociedades que trataran asuntos políticos. Flaquer Montequí, Rafael, ob. cit., págs. 160 y 161.

sociedades similares, en los que pudieran llevaran a cabo prácticas o reuniones de marcado carácter político. En este sentido, aunque desde la Administración y el Gobierno se redoblaron los esfuerzos por detener el debate en las Cortes sobre asociaciones y el derecho de las mismas a significarse socialmente, lo cierto es que apenas causó efectos en muchos locales y establecimientos de recreo donde siguieron desarrollándose, como comprobamos más arriba, reuniones y actividades con un marcado contenido político.

Los intentos por controlar los derechos de asociación se reavivaron durante el año 1867, con la publicación en el mes de marzo de la Ley de Orden Público, quedando al arbitrio del Gobierno la posibilidad de permitir cualquier actividad o manifestación. Una situación que mejoraría tras los movimientos revolucionarios de 1868, durante el gobierno provisional del general Francisco Serrano y Domínguez, con el reconocimiento de la libertad de asociación propuesto en los Decretos del 1 y 20 de noviembre de 1868, alcanzando el rango de ley en junio de 1869 e incluyéndose en los artículos 17 a 19 del texto constitucional de ese mismo año.

Con las dudas surgidas acerca de la práctica de los derechos individuales y la prohibición de la *Asociación Internacional de Trabajadores* en el breve reinado de Amadeo de Saboya en el trono español, no será hasta la llegada de Venancio González a Gobernación, en noviembre de 1881, cuando se envíe al Congreso un proyecto de ley sobre asociaciones. Una intención que no prosperará, como tampoco lo hará durante la legislatura siguiente, entre 1882 y 1883, debiendo consolidarse definitivamente con la aprobación de la ley de junio de 1887, precepto que se mantendría en vigor hasta septiembre de 1923⁴⁴⁹. En aquel proyecto de ley, entre otras cosas se podía leer:

⁴⁴⁹ En efecto, si nos atenemos al período de la Restauración comenzado en 1874, el primer intento del partido fusionista por legislar el derecho de asociación se produjo en noviembre de 1881. El proyecto de ley presentado por el ministro Venancio González estaba inspirado en los mismos del Decreto Ley de 20 de noviembre de 1868, es decir, en la continuación de un sistema represivo sin legislación ni jurisdicción especiales, y en el que quedaban prohibidas las asociaciones extranjeras, a excepción de las religiosas o mercantiles. Tran un paréntesis de gobiernos conservadores, en 1886, nuevamente González volvió a presentar otro proyecto que conservaba las características esenciales del anterior. Además, añadía los artículos 199 al 201, y 230 al 232 del Código Penal como preceptos referentes a los asociados y a las facultades de los poderes públicos. La aprobación definitiva se demoraría todavía para pasar por períodos de perfeccionamiento en su redacción, tanto en el Congreso como en el Senado, pero siempre manteniendo ya sus principios fundamentales. Véase de

Las asociaciones pueden crearse libremente sin necesidad de permiso o autorización previa; como los individuos están sujetas a un registro o empadronamiento, sin más deber que el de poner su existencia y su modo de actuar en conocimiento de la autoridad gubernativa. [...] son lícitos, en cuanto se refieren a sus relaciones con el Estado, todos los fines y todos los actos que no están definidos en el Código Penal, y sólo por sentencia los tribunales ordinarios y por causa de delito podrán se disueltas las asociaciones y privados los españoles del ejercicio de aquel derecho⁴⁵⁰.

Se comprende, visto el panorama anterior, que hasta 1887 solo sobrevivieran algunas instituciones, la mayoría de carácter recreativo o social, carentes en su mayor parte de atribuciones funcionales o de criterios concretos, mucho menos si estaban referidos al entorno político o religioso. Excepcionalmente, a partir de 1847 sí habían podido materializarse grupos de asociaciones muy específicas, entre los que habría que subrayar el *Instituto Industrial de Cataluña*, cuyos propósitos estuvieron siempre unidos al de los industriales textiles algodoneros, o del propio *Instituto Agrícola Catalán*, en el año 1851, integrándose en el mismo un importante número de propietarios agrícolas catalanes. En cualquier caso, el proyecto de ley sobre asociaciones sería sancionado finalmente por la Regente, como una norma con rango de ley, y publicado tras su discusión en el Congreso el día 17 de junio de 1887, ya bajo la firma del ministro de Gracia y Justicia, Manuel Alonso Martínez. En su redacción definitiva habían participado, entre otros, José Canalejas Méndez, a la sazón el Presidente de la Comisión formada al efecto, Vicente Romero Girón, Jiménez Cuenca, Sánchez Pastur, Andrés Mellado, Alfonso Gonzáles o Gregorio Alcalá Zamora⁴⁵¹.

El nuevo horizonte abierto en 1887 animaba a mantener un mejor control y registro de cuantas asociaciones se constituyeran, en tanto era de obligado cumplimiento la presentación al gobernador de la provincia de las bases y estatutos que las definían y desarrollaban⁴⁵². Precisamente, este hecho supuso que desde el Ministerio de la Gobernación se solicitara a todas las provincias un resumen de cuantas asociaciones venían funcionando en

Dardé Morales, Carlos, *El partido liberal de la Restauración: 1875-1890*, Tesis inédita, Madrid, 1973, pág. 244.

⁴⁵⁰ Sáinz de Varanda, Ramón; Laguna Aranda, Federico, y Sánchez Casajús, Tomás, *Colección de leyes fundamentales*, Acribia, Zaragoza, 1957, pág. 417.

⁴⁵¹ Dardé Morales, Carlos, ob. cit. pág. 254.

⁴⁵² Véase el artículo 4º de la Ley reglamentando el derecho de asociación, rubricada por la Reina Regente y el Ministro de la Gobernación, Fernando de León y Castillo, con fecha 30 de junio de 1887, en la *Gaceta de Madrid*, número 193, martes 12 de julio de 1887, pág. 105.

España hasta esos momentos. A través de distintos despachos telegráficos y circulares remitidas a los gobernadores de todas las provincias se requería el envío urgente “á la mayor brevedad posible la relacion de sociedades existentes en esa provincia”. El resultado fue la recopilación entre 1886 y 1990 de un total de más de tres mil sociedades de muy diversa índole, incluidas aquellas que estaban relacionadas con las actividades agrarias (véase el cuadro 41, así como el mapa 1).

Hay que constatar que desde el propio ministerio se llevaron a cabo dos series de peticiones a los gobernadores civiles de las provincias. La primera, antes de la aprobación de la Ley de 1887, en la que se requería la relación de sociedades que existían en cada una de las provincias del Reino hasta diciembre de 1886. Una segunda petición se realizaría en 1890, ya con la legislación en marcha, insistiéndose en este último caso en el número de centros de recreo y de obreros, así como aquellas sociedades valedoras de estos últimos. En una circular recuperada del Archivo Histórico Nacional, fechada el 21 de febrero de 1890 y dirigida a todos los gobernadores civiles de las provincias se solicitaba lo siguiente: “De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de la Gobernación se servirá V. S. remitir á este Centro, á la mayor brevedad posible, un estado de las Sociedades literarias y los Círculos de recreo y de obreros ó protectores de estos, que existan en esa provincia, con sujeción al adjunto modelo”⁴⁵³.

De las primeras solicitudes, la Dirección General de Seguridad elaboró varios listados en los que se recogía sucintamente el número de asociaciones, además del objeto de las mismas, hasta enero de 1887. En ellos se podían contabilizar las sociedades literarias, de intereses materiales, conservadoras, católicas, así como otras de distinta naturaleza, mencionándose, como no podía ser de otro modo, aquellas con alguna vinculación directa hacia la agricultura⁴⁵⁴. Cabe señalar igualmente la falta de datos suministrados por algunas provincias para el inventario realizado

⁴⁵³ “Circular a los Gobernadores civiles de las provincias”, AHN, Gobernación, legajo número 575.

⁴⁵⁴ En concreto se han localizado dos tablas de datos, correspondientes a diferentes Negociados y Secciones en la Dirección General de Seguridad, con diferentes escrutinios, fluctuando dichos resultados entre las 2.879 y 3.108 sociedades de todo tipo. Véase el “Resumen de las Sociedades de todas clases existentes en España en el día 1º de Enero de 1887, con expresion de su objeto según los datos oficiales facilitados á esta Direccion General”, AHN, Gobernación, legajo número 575.

CUADRO 41

Asociaciones registradas por la Dirección General de Seguridad del Ministerio de la Gobernación entre 1886 y 1890

Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación	Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación
BADAJOS (54 sociedades)					
BADAJOS	- Liga Agraria	14/abril/1888	FALCES	- Sociedad Agrícola	23/noviembre/1878
ACEUCHAL	- Sociedad Agrícola	28/mayo/1888	RIBAFORADA	- Círculo Económico Agrícola	20/febrero/1887
ALBURQUERQUE	- Liga de Contribuyentes	11/octubre/1884	SESMA	- Casino Agrícola	20/octubre/1888
AZUAGA	- Sociedad de Labradores	7/febrero/1887	TAFALLA	- Sociedad "La Agrícola"	10/enero/1886
DON BENITO	- " Agrícola	13/noviembre/1884	TUDELA	- Centro de Agricultores, Ganaderos y Propietarios	1/julio/1886
OLIVA DE JEREZ	- Casino Industrial Agrícola	1/diciembre/1889	PALENCIA (24 sociedades)		
SANTA MARTA	- Sociedad Agrícola	12/abril/1888	PALENCIA	- Liga Agraria	8/junio/1888
ZAFRA	- Liga Agraria	6/abril/1888	TARIEGO	- " de Contribuyentes	6/enero/1880
MÁLAGA (29 sociedades)			SALAMANCA (48 sociedades)		
MÁLAGA	- Sociedad Vinícola	1/septiembre/1886	SALAMANCA	- Liga de Contribuyentes	10/febrero/1888
ARCHIDONA	- Círculo de Labradores	5/febrero/1882	MARTIAGO	- Pósito de San José	18/noviembre/1886
MURCIA (81 sociedades)			SANTANDER (44 sociedades)		
ALBERCA	- Círculo Agrícola	14/febrero/1890	POTES	- Liga de Contribuyentes	?
CALASPARRA	- Liga Agraria	6/abril/1888	SEVILLA (72 sociedades)		
CARTAGENA	- Asociación de Labradores para el Fomento Agrícola	24/abril/1888	SEVILLA	- Círculo de Labradores	enero/1858
MORATALLA	- Liga Agraria	30/abril/1888	ARAHAL	- " "	2/marzo/1886
TOTANA	- Círculo Agrícola	6/febrero/1890	CAMPANA (LA)	- Sociedad de Agricultura	8/abril/1886
NAVARRA (122 sociedades)			CONSTANTINA	- Círculo de Labradores	1/marzo/1888
CORELLA	- Círculo Agrícola	7/octubre/1883		- Casino de Labradores, Artesanos y Comerciantes	?
DICASTILLO	- Casino Agrícola	2/mayo/1870			

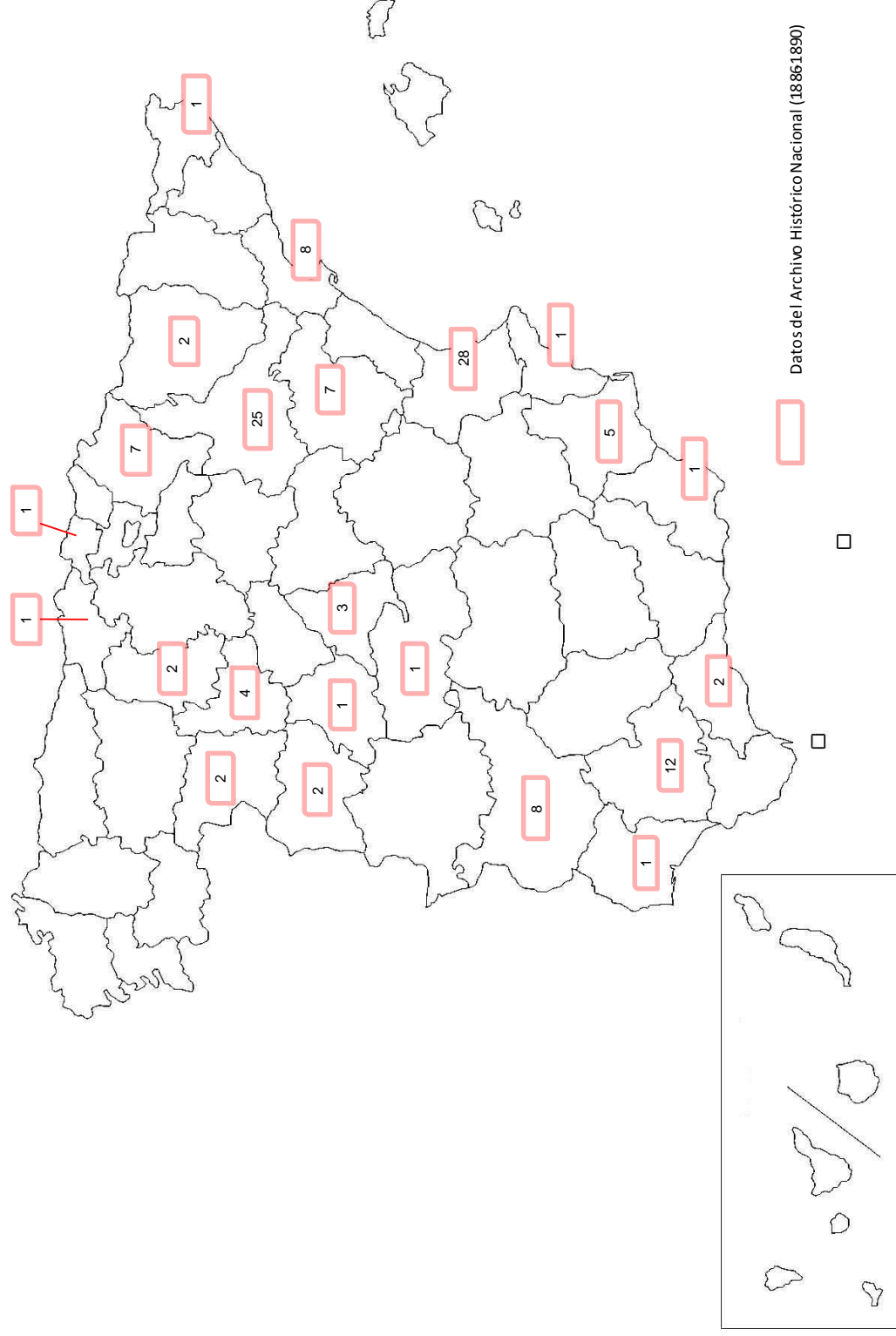
Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación	Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación
ÉCija	- Círculo de Agricultores	15/octubre/1860	TOLEDO (32 sociedades)	- Sociedad Artística Agrícola	1/marzo/1885
ESTEPa	- Centro Agrícola	17/febrero/1888	VILLAFRANCA		
MARCHENa	- Casino Agrícola	11/octubre/1888	VALENCIA (133 sociedades)		
OLIVARES	- Círculo de Labradores	29/octubre/1885			
OSUNA	- Casino de Labradores	?			
SANTIPONCE	- Círculo “ “	31/diciembre/1884			
VILLAMANRIQUE	- “ “ “	noviembre/1888			
TARRAGONA (287 sociedades)					
ALFORJA	- Centro Agrícola e Industrial	14/noviembre/1886	ALBAL	- Sociedad de Agricultura	28/febrero/1859
ARBÓS	- Casino Agrícola	4/junio/1883	ALBALAT DE LA RIBERA	- El Amparo de la Agricultura	1/marzo/1881
CANONJA	- Sociedad Agrícola de San Isidro	16/julio/1880	ALBORAYA	- Asociación General de Productores de Naranjas	24/octubre/1889
MILÁ	- La Instrucción Agrícola	25/octubre/1878		- Liga de Propietarios	14/enero/1890
MONTERÍO DE	- Centro Agrícola	20/febrero/1884		- Casino Agrícola Recreativo	5/febrero/1888
TARRAGONA		1/febrero/1886	ALGIMIA DE ALFARA	- Círculo Agrícola	22/mayo/1888
PILAS (LAS)	- “ Agrícola	1 noviembre/1872	ALGINET	- Sociedad Agrícola e Industrial	2/julio/1886
TAMARIT	- Instituto Agrícola San Isidro	22/marzo/1878	ANTELLA	- Sociedad Agrícola	12/mayo/1883
VILLANOVA DE PRADES	- Casino de Labradores		BELLREGUART	- Unión Agrícola Industrial	21/enero/1888
			BENICALAP	- Casino Agrícola	2/marzo/1888
TERUEL (43 sociedades)			BENIFAYÓ	- Unión Agrícola Industrial	4/enero/1890
TERUEL	- Asociación de Vinateros	10/marzo/1888		- Sociedad “La Agrícola”	19/marzo/1889
	- “ “ de Propietarios de Viñas	18/marzo/1888		- “ Agrícola	11/junio/1889
				- Asociación de Agricultura, Industria y Comercio	29/julio/1880
ALCANÍZ	- Liga Agraria	22/octubre/1888	BUÑOL	- Industria y Comercio	5/junio/1889
ARENS DE LLEDÓ	- “ “	5/julio/1889		- Casino Agrícola	11/marzo/1890
CALACEITE	- “ “	27/setiembre/1888	CATARROJA	- Sociedad Agrícola de Viticultores	25/febrero/1888
MONREAL	- Asociación de Viñeros	1/setiembre/1888	CUART DE POBLET	- Sociedad Agrícola	21/agosto/1887
RAFALES	- Liga Agraria	12/diciembre/1888	CULLERA	- Sociedad Agrícola	12/abril/1882
			MONTSERRAT	- Casino Agrícola	10/julio/1889
			PICANA	- Sociedad de Socorros Agrícola	6/abril/1889
			PICASENT	- Casino Agrícola del Progreso	20/julio/1886

Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación	Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación
PUEBLA DE RUGAT (VALENCIA)	- Círculo Agrícola	1/marzo/1885	ALMOLDA (LA)	- Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola	13/diciembre/1883
REAL DE MONTROY SAGUNTO	- “ - Sociedad Vitivinícola Saguntina - Sociedad de Agricultura y Artesana	21/marzo/1887 21/noviembre/1879 11/julio/1883	ALMONACID DE LA SIERRA CADRETE CALATAYUD	- Casino Agrícola - Círculo de Labradores - Casino de Labradores - Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola	29/setiembre/1889 5/diciembre/1873 10/enero/1885 12/mayo/1882
SUECA VILLANUEVA DE CASTELLÓN	- Casino Agrícola - Unión Agrícola	14/agosto/1876 10/julio/1889	CERVERA DE LA CAÑADA DAROCA	- Círculo Agrícola - Junta de Cosecheros	29/abril/1889 12/mayo/1886
VALLADOLID (107 sociedades)			EGEA DE LOS CABALLEROS FUENDETTODOS	- Ateneo Agrícola - Círculo Agrícola - Casino Agrícola	4/febrero/1890 15/febrero/1889 13/diciembre/1884
VALLADOLID CASTRONUÑO PIÑA DE ESGUEVA	- Liga de Contribuyentes - Sociedad de Labradores - Socorro Mutuo de Labradores	14/diciembre/1883 19/mayo/1888 26/febrero/1889	LONGARES (ZARAGOZA) MARÍA (DE HUERVA) MALLÉN	- “ - Círculo Agrícola - Reunión de Labradores	30/marzo/1889 4/diciembre/1884 24/junio/1868
VILLAFRANCA DE DUERO	- Asociación de Labradores	28/diciembre/1886	MORATA DE JALÓN MOZOTA NOVALLAS POZUELO (EL)	- Casino Agrícola e Industrial - Sociedad Agrícola - Casino Agrícola - Asociación Industrial Agrícola	18/agosto/1878 15/diciembre/1888 27/enero/1889 15/febrero/1885
VIZCAYA (84 sociedades)			SÁDABA VILLANUEVA DE JILOCA	- Casino Agrícola - Asociación de Viticultores	14/abril/1886 9/noviembre/1888
BILBAO	- Sociedad “El Labrador”	24/enero/1884	VILLARROYA DE LA SIERRA ZUERA	- Casino Agrícola - “ Industria	15/febrero/1889 8/octubre/1880 18/octubre/1883
ZAMORA (25 sociedades)					
BENAVENTE VEZDEMARBÁN	- Gremio de Labradores - Asociación de Labradores	20/mayo/1888 14/noviembre/1887			
ZARAGOZA (131 sociedades)					
ZARAGOZA AINZÓN	- La Fraternal Agrícola - Liga Agraria	10/abril/1888 28/abril/1888			

FUENTE: AHN, *Resumen de las Sociedades de todas las clases existentes en España en 1 de enero de 1887*, Gobernación, legajo número 575.

MAPA 1

Distribución por provincias del número de asociaciones contabilizadas por la Dirección General de Seguridad entre 1886 y 1890



FUENTE: AHN, Gobernación, legajo número 575.

en 1887, lo que ha supuesto que para nuestro trabajo solamente figuren un número de 114 asociaciones con mención a la propiedad, la producción y el fomento agrario. A pesar de todo ello, es significativa la heterogeneidad de sociedades que van desde las distintas sucursales de la *Liga Agraria*, a la que más tarde dedicaremos un estudio concreto, hasta los distintos centros y establecimientos dedicados al recreo y protección de propietarios, agricultores y labradores.

De alguna manera, hasta 1890 no había sido posible establecer todavía una estadística exhaustiva que indicara el número concreto de asociaciones agrícolas en España. Después de la aprobación en 1887 de la legislación que permitía la creación de asociaciones de muy distintas clases, no sería hasta el año 1915 cuando se culminaría la elaboración, por parte del Ministerio de Fomento, de una Memoria completa, tanto descriptiva como estadística, de todas aquellas entidades agrícolas y pecuarias que venían actuando en el país⁴⁵⁵.

No obstante, veinticinco años antes iba a ser el propio Ministerio de Fomento, desde la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, y a través de una Orden cursada el 9 de diciembre de 1890, el encargado de elaborar un primer inventario de todas las asociaciones y sociedades de carácter agrícola que hubieran permanecido en activo hasta ese año⁴⁵⁶. La diferencia en esta ocasión, en relación a anteriores recuentos, radicaba en la especificidad referida a aquellos grupos engarzados con las tareas agrícolas, pecuarias y forestales, lo suponía una novedad en los estudios estadísticos realizados hasta esos momentos (véase el cuadro 42).

El hecho de disponer de personal especializado en materia agronómica era una garantía de éxito en la preocupación y el conocimiento de las organizaciones que operaban en todo el Estado. Desde la creación en 1855 de la Escuela Central de Agricultura en Aranjuez y su posterior traslado a Madrid en 1869, ya con los nombre de Escuela General de Agricultura e

⁴⁵⁵ Nos referimos a la *Memoria descriptiva-estadística de las entidades agrícolas y pecuarias: (cámaras agrícolas, comunidades de labradores, federaciones agrarias, sociedades, sindicatos agrícolas...)*, Ministerio de Fomento, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, Madrid, 1915.

⁴⁵⁶ El documento está registrado como “Orden circular a los Ingenieros Agrónomos para que reúnan una relación de las Sociedades Agrícolas que existan en sus respectivas provincias y de publicaciones agrícolas”, AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 8-A.

CUADRO 42

Asociaciones agrícolas registradas por el Ministerio de Fomento en 1890

Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación	Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación
ÁLAVA					
ÁLAVA	- Asociación para el Fomento de la Agricultura en Álava	14/mayo/1890	BADALONA (BARCELONA) BRUCH	- Fomento de la Agricultura - Asociación de Contribuyentes Viticultores del Partido de Igualada	15/diciembre/1888 18/setiembre/1888
ALBACETE			GRANOLLERS	- Sociedad de Propietarios Rurales del Vallés	julio/1876
ALBACETE	- Liga Agraria - Sociedad "La Exploradora"	15/mayo/1890	IGUALADA	- Centro Agrícola de la Comarca de Igualada	11/marzo/1888
HELLÍN	- Cámara Agrícola	" "	MANRESA	- Asociación de Agricultores de Manresa	1883
ALMERÍA			MARTORELL	- Sociedad Unión Agrícola de Martorell	30/mayo/1888
ALMERÍA	- Centro Agrícola	6/diciembre/1889	SABADELL	- Gremio de Agricultores de Sabadell y su Comarca	21/octubre/1890
BADAJOS			SAN JUSTO DESVERN	- Sindicato Agrícola de San Justo Desvern	1883
MEDINA DE LAS TORRES	- Sociedad agrícola San Isidro Labrador	27/noviembre/1890	TARRASA VILLAFRANCA VILLANUEVA	- Centro Agrícola de Tarrasa - " Agrícola del Panadés - Sindicato de Propietarios Rurales de Villanueva y Geltrú	" 14/agosto/1876 10/junio/1883
BARCELONA			CASTELLÓN		
BARCELONA	- Instituto Agrícola Catalán de San Isidro - Sociedad Catalana de Horticultura	22/mayo/1851 1873	ALCALÁ DE CHIVERT	- Asociación de Agricultores	1/agosto/1890

Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación	Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación
CÓRDOBA			MÁLAGA		
CÓRDOBA	- Hermandad de Labradores de Córdoba	9/mayo/1656	MÁLAGA	- Asociación General de Agricultores de Málaga	20/diciembre/1882
CORUÑA (LA)			MURCIA		
CEDEIRA	- Liga de Contribuyentes	?	MURCIA	- Sociedad Española Vitícola y Enológica	18/junio/1887
FERROL	- “ “	?	CALASPARRA	- Liga Agraria	18/enero/1888
SANTIAGO DE C.	- Sociedad Económica de Amigos del País	23/setiembre/1784	NAVARRA		
GERONA			PAMPLONA	- Asociación Pecuaria y Forestal de Navarra	1881
OLOT	- Centro Catalanista de Olot	18/agosto/1889		- Asociación Vinícola de Navarra	2/enero/1879
GRANADA				- “ General de Agricultores de Navarra	?
GRANADA	- Circulo de Labradores	7/setiembre/1890	SANTESTÉBAN	- Asociación Pecuaria y Forestal	11/octubre/1880
	- Liga Agraria	7/noviembre/1887	TUDELA	- Sociedad Económica de Amigos del País	4/noviembre/1842
LEÓN			OVIEDO		
LEÓN	- Banco Territorial Agrícola	?	OVIEDO	- Centro de Agricultores, Ganaderos y Propietarios	30/mayo1886
LOGROÑO				- Sindicato Regenerador de Vinos	?
LOGROÑO	- Asociación de la Propiedad Rústica	7/mayo/1874			
CALAHORRA	- Asociación de Labradores	24/mayo/1882		- Banco Agrícola	1857
	- “ de Propietarios para el Riego	?			

Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación	Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación
PALENCIA			SEVILLA		
PALENCIA	- Liga Agraria - Asociación de Labradores	? ?	SEVILLA	- Liga Agraria - Sociedad Económica de Amigos del País (sección de agricultura) - Ateneo (sección de "Aplicación de las Ciencias a la Agricultura, la Industria y el Comercio)	1888 ? ?
PALMAS (LAS)			SORIA		
LAS PALMAS	- Liga de Propietarios de Fincas Rústicas y Urbanas	11/octubre/1885	SORIA	- Sociedad de Labradores y Ganaderos	1/abril/1881
PONTEVEDRA			TARRAGONA		
PONTEVEDRA	- Banco Agrícola	1857	TARRAGONA	- Liga de Propietarios del Partido - Asociación de Riego de la Huerta de la Pedrera - Asociación Agrícola de la provincia de Tarragona - Unión Agrícola - Sociedad de Agricultores - Cabaña Española - Unión de Propietarios del Partido - Sociedad Agrícola - Liga de Propietarios - Asociación de Agricultores - Liga Unión de Propietarios - Sociedad "La Aldeana" - Desagüe de los Prados de la Aldea	11/octubre/1887 27/mayo/1889 17/agosto/1889 2/mayo/1890 13/diciembre/1890 24/octubre/1887 17/agosto/1889 24/diciembre/1889 19/mayo/1890 11/marzo/1890 29/diciembre/1887 4/abril/1888 17/julio/1888
SANTANDER					
SANTANDER	- Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos del País - Sociedad Económica de Amigos del País de Liébana	1791 1791			
VEGA DE LIÉBANA					
SEGOVIA					
SEGOVIA	- Cámara Agrícola - Económica Segoviana de Amigos del País	1890 1890	CHERTA GANDESA GARIDELLS PINELL REUS TORTOSA		

Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación	Provincia/municipio	Nombre	Fecha de la fundación
VENDRELL (TARRAGONA)	- Sociedad Fomento Vendrellense - Centro Agrícola - Sociedad del Progreso Agrícola	16/diciembre/1887 24/febrero/1888 10/enero/1890	SAGUNTO (VALENCIA) TABERNES DE VALLDIGNA	- Sociedad Vitivinícola Saguntina - Sociedad "La Protectora"	1879 1878
TERUEL			VALLADOLID		
TERUEL	- Liga Agraria, Industrial y Mercantil de Teruel	20/noviembre/1887	VALLADOLID	- Liga de Contribuyentes - Asociación de Cosecheros de Vinos de Valladolid	14/diciembre/1873 30/abril/1876
ALCAÑIZ	- Monte Pío de San Isidro Labrador	12/noviembre/1881	CIGALES LA SECA	- Asociación de Propietarios - Sociedad de Terratenientes de La Seca	7/febrero/1890 20/junio/1890
VALENCIA			MEDINA DEL CAMPO	- Cámara Agrícola	27/noviembre/1890
VALENCIA	- Sociedad Económica de Amigos del País - La Edetana - Sociedad Valenciana de Agricultura - Sociedad Flora - Liga de Propietarios de Valencia y su provincia	1776 1851 1859 1871 1871	ZARAGOZA		
BUÑOL	- Sociedad de Viticultores	26/febrero/1890	ZARAGOZA	- Asociación de Labradores de Zaragoza	1890
GANDÍA	- Sindicato Agrícola de la Huerta de Gandía	20/enero/1890			
REQUENA	- Sociedad "La Agrícola Requense"	4/febrero/1890			

FUENTE: "Orden circular a los Ingenieros Agrónomos para que reúnan una relación de las Sociedades Agrícolas que existan en sus respectivas provincias y de publicaciones agrícolas", AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 8-A.

Instituto Agrícola de Alfonso XII, la Administración comenzó a nutrirse de un considerable número de ingenieros agrónomos, un colectivo que había sido creado para modernizar la agricultura en España. Como sabemos, una vez concluidos los estudios, los ingenieros eran destinados a las distintas provincias, bien como catedráticos en los Institutos o como Secretarios de las respectivas Juntas Provinciales de Agricultura⁴⁵⁷.

La falta, una vez más, de referencias y noticias constatadas para la totalidad de las provincias existentes en España, deja una fuente tan importante como la realizada por el cuerpo de ingenieros agrónomos, incompleta a efectos prácticos, corroborando un registro de ochenta y ocho asociaciones agrícolas. Este número, inferior al escrutado por el Ministerio de la Gobernación entre 1887 y 1890, es, no obstante, sensiblemente más significativo que el aportado por el Anuario elaborado por la casa Bailly-Baillière en 1879, de manera que nos muestra las asociaciones constituidas en los últimos años de la década de los ochenta, así como una prolífica tipología participativa organizada en torno a sociedades, asociaciones, centros de labradores y agrícolas, no figurando organizaciones o agrupaciones de recreo (véase el mapa 2).

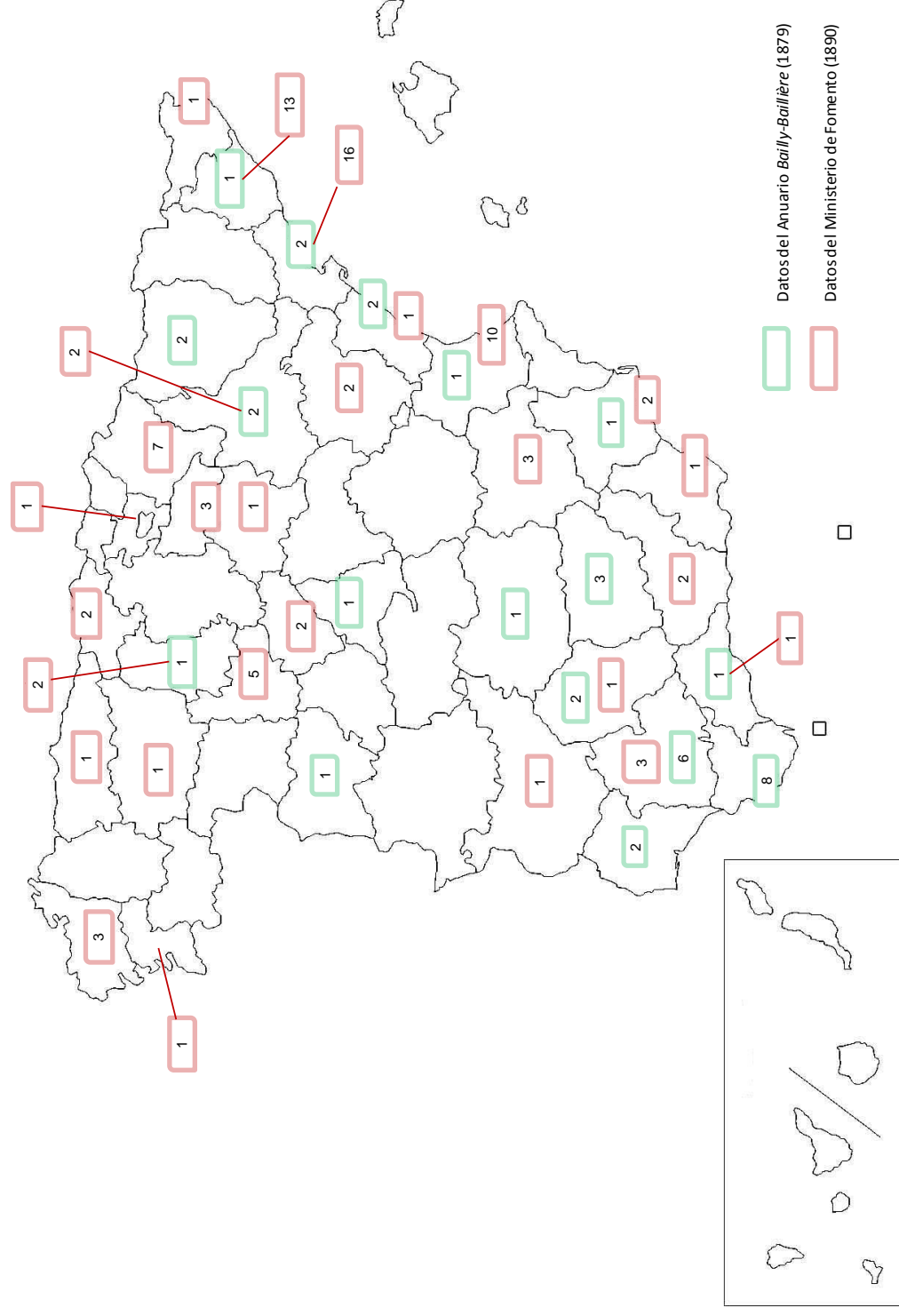
Atendiendo al grado de dispersión por regiones, todos los cálculos realizados desde 1879 coinciden en mostrar una mayor concentración asociativa en las provincias de Cataluña, además de algunas comarcas valencianas, destacando en la mitad sur peninsular provincias como Sevilla y Córdoba. En menor medida aparecen las regiones del Norte como Navarra y algunas áreas de Aragón, sin olvidar la provincia castellana de Palencia. Consecuentemente, esta visión «general» presenta una forma muy heterogénea, logrando una visión más próxima a la realidad asociativa desplegada en la España de finales del siglo XIX.

Todas las referencias y datos aportados, sugieren la importancia de las asociaciones de propietarios y agricultores al sector agrario, actuando como auténticos «motores» y como un estímulo añadido al progreso y la modernización del país. Un comportamiento que también venía produciéndose, como ya tuvimos ocasión de comprobar, en otras naciones

⁴⁵⁷ Un amplio estudio detallado de las acciones llevadas a cabo en el siglo XIX en España por los ingenieros agrónomos en Cartañà i Pinén, Jordi, *Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo XIX*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2005.

MAPA 2

Distribución comparativa por provincias del número de asociaciones contabilizadas en 1879 y 1890



FUENTE: *Anuario-almanaque...*, ob. cit., Carlos Bailly-Baillière, Madrid, 1879, y AMA, Sección Fondos del siglo XIX, legajo número 8-A

destacadas, próximas a nuestro entorno, donde la proliferación de asociaciones agrícolas se sucedía a un ritmo similar al vivido en España.

En suma, durante la Restauración iniciada en 1874, la articulación corporativa pareció haber encontrado un marco legal propicio para el desarrollo de las aspiraciones de la clase propietaria en España. Con la Ley de Asociaciones de 1887 y la Ley reguladora de las Comunidades de Labradores de 1898, se pondrían los cimientos para posteriores reglamentaciones entre las que terminarían destacando la Ley de Sindicatos Agrícolas de 1906 y la Ley de reorganización de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 1911, entre otras. Estos hechos nos dan una idea de la importancia de las primeras medidas legisladoras a este respecto y de la voluntad surgida desde el propio Estado, por integrar los impulsos asociativos que de forma espontánea ya no cesarían en aparecer.

Será a partir de este entramado asociativo, surgido durante el último cuarto de siglo, y en particular de algunos antecedentes más alejados en el tiempo como el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, la *Sociedad de Agricultura de Valencia*, o la *Asociación General de Ganaderos*, esta última refundada en 1854, cuando se produzcan los intentos más ambiciosos por llevar a la práctica entidades mucho más próximas a las élites propietarias y productoras en el ámbito agrícola y nacional, conformando de esta manera grupos de presión capaces de subordinar a las clases rurales mediante un fuerte aparato de convocatoria y una propaganda selectiva. De acuerdo con estos planteamientos, dos habrían de ser las asociaciones más importantes que emergerían en el transcurso de los últimos años del siglo XIX. En primer lugar la *Asociación General de Agricultores de España*, nacida al amparo de la *Asociación de Ingenieros Agrónomos* en 1881, y la *Liga Agraria*, constituida en 1887, lo que suponía el primero de los intentos en nuestro país por constituir un auténtico *lobby* agrario.

CAPÍTULO IV

LA ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES DE ESPAÑA Y LA LIGA AGRARIA. UN INTENTO FRUSTRADO POR CONSTITUIR EL PRIMER LOBBY AGRARIO EN ESPAÑA

1.- INGENIEROS, PROPIETARIOS Y LABRADORES. LA ASOCIACIÓN GENERAL DE AGRICULTORES EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES AGRARIOS

- Algunos rasgos del afianzamiento en el nuevo asociacionismo finisecular

La movilización de las clases agrícolas en España, antes de 1880, no había resultado una tarea fácil. Sumido desde 1808 en un largo y complejo período de guerras, revoluciones y cambios de régimen, el país había soportado las vicisitudes de forma desigual, afectando todavía más si cabe a aquellos sectores que estaban comprometidos con las transformaciones agrícolas y con la representatividad de los mismos ante las instituciones del Estado. En todo caso, no fue hasta los últimos decenios del siglo XIX, cuando se comenzaron a evaluar las verdaderas posibilidades de un asociacionismo agrario que, aunque de manera incipiente, principiaba a ser señaladamente de «masas» y a tomar posiciones en determinados contextos de la actividad económica y política de España.

Aunque entre los nuevos requerimientos para asociarse estaba el de poseer un cierto grado de profesionalización, además de una relevante significación hacia la política, el hecho es que la mayoría de las asociaciones de agricultores de la época, especialmente las ligas y otras asociaciones de ámbito local, siguieron bajo el precepto de los grandes terratenientes, defensores a ultranza de un orden sobradamente jerarquizado en el dominio

agrícola y rural⁴⁵⁸. Ello no impidió, sin embargo, que estos mismos grupos agrarios de finales de siglo hicieran esfuerzos por integrar a los distintos sectores rurales, al tiempo que aspiraban a ser aceptadas como las voces representativas de toda la agricultura, relegando viejas actitudes que durante años habían conllevado la representación, únicamente de las élites del campo⁴⁵⁹.

En este clima de intentos graduales por acercar los intereses agrarios corporativos a la esfera política, surgió en 1880 la idea de constituir una *Asociación General de Agricultores*, propósito que ya había sido acordado en el Congreso celebrado durante los meses de mayo y junio de aquel mismo año en Madrid. En aquella reunión de agricultores y ganaderos, urdida y puesta en funcionamiento por la *Asociación de Ingenieros Agrónomos*, quedaría definido el proyecto para organizar sucesivos congresos, así como una asociación de ámbito general que, en opinión de sus promotores, se precisaba: “á fin de que las clases productoras rurales expusiesen sus necesidades y apreciaran el espíritu de asociación, gérmen fecundo de todos los progresos presentes y futuros”⁴⁶⁰.

En el transcurso de las distintas sesiones habidas en el paraninfo de la Universidad Central con motivo del mencionado Congreso, se puso de manifiesto el entusiasmo de la clase agricultora por constituir una asociación que, a nivel nacional, pudiera dar protagonismo al amplio espectro de personas comprometidas con el desarrollo y la protección al mundo agrario en España. Esta actitud provocó que la Comisión organizadora del siguiente Congreso, a celebrar en 1881, anunciara tras la sesión de clausura a los más de ochenta concurrentes la voluntad de dar forma definitiva al proyecto de asociación acordado. Tal y como queda reflejado en el propio *Boletín* de la Asociación, fue Pedro María de Acuña, Director General de Agricultura, el encargado de dar inicio al proyecto, cediendo la palabra al Presidente de la Comisión organizadora del Congreso de 1881, José de Cárdenas Uriarte, quien habría de recordar a los asistentes

⁴⁵⁸ Solo así se comprende que la clase propietaria ocupase todavía un lugar preferencial en el primer Consejo de la *Asociación de Agricultores de España* en 1881.

⁴⁵⁹ Pan-Montojo, Juan, ob. cit, *XI Congreso de Historia Agraria*, Sociedad Española de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, 2005.

⁴⁶⁰ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 1, enero de 1882, págs. 1 y 2.

la existencia de un proyecto de bases que ya tenía elaborado la *Asociación de Ingenieros Agrónomos*⁴⁶¹.

Leídas las mismas, quedó resuelta la convocatoria de una Junta general en la que pudieran discutirse y aprobarse los Estatutos, hecho que culminaría con la aprobación definitiva en junio de 1881. Hasta esos momentos, la Comisión organizadora había actuado como Consejo interino de la *Asociación de Agricultores*, consiguiendo aglutinar a propietarios agricultores, varios «títulos» de Castilla, así como a un buen número de ingenieros agrónomos y otras personas surgidas de estratos sociales relacionados con la agricultura. Muchos de los socios fundadores procedían de las filas de la *Sociedad Económica Matritense* que, en aquellos instantes, estaba dirigida por el ingeniero de montes Agustín Pascual, y en la que figuraban un puñado de reconocidos ingenieros agrónomos y de colaboradores como Zoilo Espejo, Eduardo Abela, José Arce y Fernando Ortiz-Cañavate, además de importantes propietarios relacionados con la política como Manuel Becerra, Julián Benito de Chávarri, Diego García, José Alonso de Beraza, José Emilio de Santos, el ingeniero de caminos Eduardo Saavedra, o ilustres nombres de la nobleza como el marqués de Monistrol y el de Perales. Otras personalidades destacadas entre los promotores de la Asociación eran Miguel López Martínez, propietario de Ciudad Real, y los propietarios y políticos alcarreños Diego García Martínez, Julián Benito de Chávarri y José Domingo Udaeta⁴⁶².

Constituida con el nombre de *Asociación de Agricultores de España*, los Estatutos aprobados en 1881 acentuaban las tesis y los razonamientos ya esgrimidos en su momento en el Congreso de 1880, referidos a la búsqueda de apoyos para la defensa de los derechos e intereses de las clases agricultoras y ganaderas. Los mismos ahondaban en el impulso y desarrollo de todas las industrias agrícolas, lo que obligaba a redoblar los esfuerzos en materia de concursos, exposiciones, conferencias y publicaciones, debiendo redundar en un mayor empleo de la mecanización en el campo, abonos, etc., siempre con el denuedo de asegurar un indiscutible crecimiento en las exportaciones⁴⁶³.

⁴⁶¹ *Ibidem*, pág. 2.

⁴⁶² Todos los nombres están extraídos del trabajo de Pan-Montojo, Juan, “La Asociación de Agricultores de España y la clase política, 1881-1942”, *ob. cit.*, pág. 89.

⁴⁶³ Esta última circunstancia será el denominador común en todos los números del *Boletín*, publicado por la *Asociación de Agricultores*, especialmente en todas aquellas cuestiones que

Era el Consejo de Administración, nombrado en Junta General y compuesto por un presidente, seis vicepresidentes y veintitrés vocales, además de un bibliotecario-archivero y un contador, quien tenía el cometido de dirigir la *Asociación de Agricultores* y difundirla por el resto de provincias en España. En este orden de cosas, entre los primeros trabajos del Consejo habría que citar el establecimiento de relaciones con los principales centros agrícolas nacionales y del extranjero, así como la compra e intercambio de publicaciones y revistas científicas. A ello habría que sumar la autorización precisa a los ingenieros agrónomos, como sabemos secretarios de las Juntas Provinciales de Agricultura en aquellos momentos, para las actividades de propaganda y recaudación de cuotas que fueran precisas, amén de la constitución de delegaciones de la propia Asociación⁴⁶⁴.

Si bien el papel jugado por los ingenieros agrónomos llegó a constituir una parte esencial dentro de la nueva organización de agricultores gestada a comienzos de los años ochenta, la realidad reflejada en los Estatutos determinaba una serie de limitaciones para acceder a aquélla, situándola en un nuevo grupo elitista. Según se recogía en el capítulo concerniente a los socios, para ser admitido, ya fuera como miembro fundador u ordinario, debía ser condición indispensable pertenecer a alguna de las categorías siguientes: “Propietario rural, Agricultor, Industrial agrícola, Ingeniero agrónomo ó de Montes, Veterinario, Topógrafo, Perito agrónomo. También podrán ser Socios los que hayan sido Ministros de Fomento ó Directores generales del ramo, los Consejeros de Agricultura, los delegados de sociedades ó corporaciones agrícolas, los periodistas y publicistas, los que tengan un título profesional y demás personas entendidas en agricultura, así como los extranjeros notables en este ramo de conocimientos”⁴⁶⁵. De lo expuesto se desprende la importancia que había adquirido ser poseedor de una elevada instrucción, lo que se traducía en un formidable prestigio para quienes habían alcanzado una titulación superior, condición que, no

estaban relacionadas con la producción vinícola y con la de aceites de oliva en nuestro país. Asimismo, el librecambio aparecerá, como más tarde veremos, dentro de las opciones más efectivas frente a los problemas derivados de la política de protección a los cereales que venía aplicándose en España. Acerca de los propósitos fijados por la *Asociación*, pueden consultarse los primeros artículos recogidos en los Estatutos referidos al “Objeto de la Asociación” en el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 1, enero de 1882, pág. 3.

⁴⁶⁴ “Principales trabajos del Consejo”, en *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, 1882, págs. 11 y 12.

⁴⁶⁵ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 1, enero de 1882, pág. 5.

olvidemos, era equiparada a la de propietario rural, agricultor, incluso a la de cualquier industrial que tuviera vinculaciones en algún sector de la agricultura⁴⁶⁶.

Los trabajos realizados por Pan-Montojo demuestran que durante los primeros seis meses de 1882, solamente 20 de los catalogados como mayores contribuyentes provinciales estaban presentes entre los 160 miembros inscritos en la *Asociación de Agricultores*. Un hecho que viene a confirmar la cabida tan heterogénea que presentaba en sus inicios la entidad agrícola, no figurando mayoritariamente entre sus inspiradores el grupo de grandes terratenientes. Continuando en esta dinámica, el mismo autor ha podido determinar la residencia en la capital española de un conjunto destacado de involucrados en el proyecto que, además, disfrutaban de otras explotaciones agrícolas en territorios de las dos Castillas, Extremadura, Andalucía o Valencia, siendo el marqués de Monistrol el único con propiedades en Cataluña⁴⁶⁷. Como dato llamativo, a lo largo de los dos primeros años de andadura de la Asociación serían presentadas y admitidas por aclamación dos mujeres. La primera, Isabel López y López, acaudalada propietaria, junto a Antonia Aranzave de Terceño, directora de granja, terminarían accediendo en 1883 al entramado más privilegiado de la sociedad agrícola constituida en Madrid⁴⁶⁸

En cierta forma, el surgimiento de la *Asociación de Agricultores de España* se debía a la concurrencia de propietarios, ingenieros y otros sectores profesionales, cuya procedencia principal era la Dirección General de Agricultura. Esta singularidad terminaría motivando un manifiesto «apego» hacia los órganos más destacados de la Administración, además de dotarla de un marcado interés de intervención en la política agraria. Un modelo organizativo y de actuación que, como ya explicara en su día Sanz

⁴⁶⁶ Un razonamiento análogo en Pan-Montojo, Juan, ob. cit., *XI Congreso de Historia Agraria*, Sociedad Española de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, 2005.

⁴⁶⁷ *Ibidem*, pág. 7.

⁴⁶⁸ La propia sociedad agraria, en relación a la adhesión de Isabel López, atendía la noticia expresando lo siguiente: “De esperar es que el ejemplo de la nueva socia sea seguido por otras damas que presten con su concurso mayor lustre y vida á la Asociación”. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 9, 15 de mayo de 1883, pág. 142, y número 10, 30 de mayo de 1883, pág. 147. Sobre la presencia de Antonia Aranzave, véase el número 11, 15 de junio de 1883, pág. 171.

Lafuente, sería practicado por la *Società degli Agricoltori Italiani*, a partir de 1895⁴⁶⁹.

Por las páginas del *Boletín* habrían de difundirse noticias referidas a asociaciones tan diversas como la *Sociedad Rural Argentina*, la *Asociación Rural de Uruguay*, la *Real Asociación de Agricultura Portuguesa* o la *Société Académique Indo-Chinoise*, siendo la más nombrada la *Société des Agriculteurs de France*, de la que periódicamente eran publicadas las actas de sus reuniones, además de los resúmenes de los congresos llevados a cabo en el país vecino⁴⁷⁰. Ésta, asimismo, no tardó en convertirse el paradigma de asociación más estimado por el Consejo directivo de la *Asociación de Agricultores de España*, cuestión que motivó una notable semejanza en la forma de conectar la sede de Madrid con las élites agrarias repartidas en el resto provincias.

En concreto, las pautas análogas surgidas a raíz del conocimiento de la asociación francesa, generaron la celebración de sucesivos congresos de agricultores en diferentes ciudades, al margen de las que ya venían teniendo lugar en la capital del Reino. Una conducta que concedía un holgado protagonismo a los comités locales, previamente designados por la Asociación, pero que en ningún caso alcanzaría el protagonismo de otras sociedades en Europa, como la *Sociedad Real de Agricultura de Inglaterra* o la propia *Société des Agriculteurs* en Francia. Un ejemplo de todo ello es el número de socios acumulados en torno a la *Asociación de Agricultores de España*. Así, en 1883, esta última tenía un total de 384 personas inscritas, siendo en 1886 y 1888 de 442 y 517 socios, respectivamente. Sería precisamente este mismo año de 1888 cuando habría de alcanzar su mayor cuota de asociados hasta 1899. Una cifra, no obstante, lejana de los más de nueve mil seiscientos que la *Royal Agricultural Society* ya había logrado reunir en 1885⁴⁷¹.

⁴⁶⁹ La asociación italiana habría de estar dirigida por grandes hacendados a los que les movía un interés especial por participar en la vida política nacional. Véase de Sanz Lafuente, Gloria (2005), ob. cit., págs. 61 y 62.

⁴⁷⁰ Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit., págs. 7 y 8. Asimismo, algunos ejemplos en el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 4, 28 de febrero de 1883, págs. 58 y 59; número 12, 30 de junio de 1883, pág. 187; números 16, 17 y 18, 30 de septiembre de 1883, pág. 282, y en la “Memoria de los trabajos realizados por el Consejo de la Asociación General de Agricultores de España durante el año social de 1887-88, Tomo VII, año 1888, pág. 236.

⁴⁷¹ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 11, 15 de junio de 1883, pág. 179; Tomo IV, número 12, 30 de junio de 1885, pág. 173, y Tomo VII, enero a diciembre de 1888, pág. 204. Asimismo, en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo VII, Tercer Trimestre de 1886, pág. 607.

Otra forma bastante ávida de promover y fomentar la *Asociación de Agricultores* era el establecimiento de Delegaciones, reguladas en el Capítulo IV del Reglamento, mediante las cuales debía impulsarse la formación de gabinetes y museos agronómicos, auxiliando a las asociaciones y corporaciones análogas. Además, debían servir de estímulo para el establecimiento de Círculos de labradores, en los que debían formarse bibliotecas y salas de lectura para favorecer el acceso a agricultores y labradores a todos aquellos avances habidos en relación a los conocimientos agronómicos. Estas Delegaciones, ubicadas en distintas localidades, dependían directamente del Consejo y tenían igualmente la misión de cobrar las cuotas de ingreso y las mensualidades de los socios en sus respectivos distritos⁴⁷². De acuerdo con el *Boletín* difundido por la *Asociación de Agricultores de España*, sabemos que durante los primeros años habían aprobado sus actas de constitución, al menos las Delegaciones de Albacete, Almería, Badajoz, Brozas, Cáceres, Huelva, Logroño, Trujillo, Valladolid y Yecla⁴⁷³. Sin embargo, a juzgar por los datos recogidos en los extractos de las Actas celebradas en los primeros días de 1888, estas «sucursales» presentaban serias dificultades para sostener sus actividades, incluso para la constitución de otras nuevas. El mismo presidente José Cárdenas llegó a advertir al Consejo el problema que supondría no contar con las Delegaciones en otras localidades. La respuesta dada a dicho asunto estaba en el gravamen que suponía la cuota de entrada para los socios, tal y como estaba recogido en los Estatutos y Reglamentos, tanto para aquellos que residían en Madrid, como en el resto de las provincias.

pues aparte de esta carga y las que por razón del título y de cuota mensual tienen que abonar los socios que constituyen las Delegaciones, para el sostenimiento de éstas en cada punto, necesitan un gasto extraordinario de instalación, y aun otro gato ordinario y constante para acudir á las necesidades convenientes de las mismas, que en junto suman cantidades de

⁴⁷² “Reglamento de la Asociación de Agricultores de España”, en *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 2, febrero de 1882, págs. 21 y 22. Igualmente, los socios fundadores debían pagar una cuota de entrada de 25 pesetas y una mensualidad de “una y media peseta”. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 1, enero de 1882, pág. 5.

⁴⁷³ En relación a la constitución de las distintas delegaciones hasta 1891, pueden consultarse, entre otros, los ejemplares del *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 4, 28 de febrero de 1883, pág. 55; número 10, 30 de mayo de 1883, pág. 147; número 11, 15 de junio de 1883, pág. 170, y número 12, 30 de junio de 1883, pág. 179. También de Zoilo, Espejo, “Historia de la Asociación General de Agricultores de España”, en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XXVI, Segundo Trimestre de 1891, pág. 694.

cierta importancia. Y como quiera que el interés general que con la creación de las Delegaciones se han propuesto nuestras disposiciones reglamentarias, de extender y propagar por toda España los fines y la organización adecuados para ello de nuestra Asociación, de este hecho resultaría postergado á motivos, en cierto modo de orden secundario, propuso al Consejo, como medio de fomentar las Delegaciones y no contradecir las disposiciones reglamentarias en este punto, que una vez formada una Delegación, donde se agrupen los socios fundadores y ordinarios que la constituyan, la Asociación acuerde otorgarle, desde luego, un auxilio permanente para la instalación y gastos más indispensables de sostenimiento, consistente en una suma igual á la que resulte del importe de las cuotas de entrada de tales socios⁴⁷⁴.

Tanto las Delegaciones como la sede establecida en Madrid, contaban con la posibilidad de constituir una serie de Secciones con el fin de facilitar de este modo al Consejo la puesta en práctica y materialización de sus objetivos. Aquéllas podían reunirse al menos una vez al mes, y siempre que lo solicitara el Consejo o un número no inferior a cinco socios. Las Secciones abarcaban un amplio espectro de áreas y conocimientos, habiéndose propuesto en el momento de creación de la *Asociación de Agricultores* un número de nueve apartados, siendo finalmente un total de diez el número acordado en 1883 (véase el cuadro 43).

Como nadie ignora, los algo más de diez años transcurridos desde el momento de la creación de la Asociación y el final de nuestra investigación en 1991, se sucedieron en un momento de auge y diversificación del movimiento asociativo agrícola, legitimando frente al Estado, aún más si cabe, el papel iniciado por otras asociaciones, cuya significación había estado más próxima al ámbito local o comarcal. Como tuvimos oportunidad de comprobar, los años setenta y ochenta evidenciaron el principio de una organización colectiva que muy pronto se tradujo en la formación de centros de sociabilidad dispares, sirviendo como plataforma de cohesión en distintas

⁴⁷⁴ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VII, enero a diciembre de 1888, pág. 5. En todo caso, el problema de las Delegaciones como de las entidades colaboradoras, quedaría resuelto entrado ya el siglo XX, toda vez que hacia 1923 la *Asociación de Agricultores de España* afirmaba tener bajo su entorno a un total de 256 corporaciones asociadas, al tiempo que aseguraba haber sobrepasado los trescientos mil socios; en concreto 311.642, lo que la convertían en un auténtico entramado de sociedades. “Entidades adheridas a esta Asociación en concepto de socios colectivos”, en el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, número 167, correspondiente al mes de diciembre de 1923.

materias que afectaban al ámbito de la agricultura y de la economía campesina del mundo rural. Hasta esos momentos, solo algunas asociaciones «veteranas», como el *Instituto Agrícola Catalán*, la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, junto con las llamadas Ligas, habían sido capaces de servir como catalizadoras de la clase propietaria a nivel nacional en cuestiones como la tributación, el comercio exterior, la divulgación técnica o el despliegue de actividades políticas.

CUADRO 43

Secciones de la Asociación General de Agricultores de España en 1883

Nombre de de Sección	Presidentes y Secretarios
Agricultura propiamente dicha	[Enrique Maroto/ Miguel Ortiz Cañavate
Viticultura	[Juan Maisonnave/ Manuel Rodríguez Ayuso
Horitucultura y jardinería	[Pedro M. de Acuña/ Juan Pou
Ganadería	[Marqués de la Conquista/ Antonio Botija
Industrias rurales	[José Genaro Villanova/ Diego Pequeño
Economía y legislación	[Diego García Martínez/ Eduardo Robles
Concursos y exposiciones	[Agustín Alfaro/ Luis García Vela
Enseñanza agronómica	[Miguel López Martínez/ José de Arce
Propaganda y organización	[Braulio Antón Ramírez/ José Blázquez Prieto
Arboricultura y montes	[Eduardo Abela/ Celedonio Rodríguez

FUENTE: *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 2, febrero de 1882, pág. 18, y Tomo II, números 19 y 20, 30 de octubre de 1883, pág. 297.

Dicho entramado asociativo no fue ajeno al interés mostrado por la *Asociación de Agricultores* que encontró algunas trabas para encajar en los principios que ya habían forjado algunas organizaciones y entidades

orientadas al desarrollo agrícola en España. Es conocida la colaboración con la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, la *Liga de Propietarios* y la *Sociedad Vitícola de Sagunto*, especialmente en lo concerniente a la preparación del Congreso de agricultores de 1882 y la Exposición de horticultura de 1885, o la mantenida con el *Fomento de la Producción Nacional de Zaragoza* en materia de valoración y revisión de las tarifas en los cereales⁴⁷⁵. No sucedería lo mismo con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, el cual, a pesar de la campaña conjunta realizada con la *Asociación de Agricultores* y la *Liga de Contribuyentes de Cádiz*, a favor de la elaboración de un programa económico y administrativo que fuera favorable a los intereses rurales, mantendría durante años una posición de tirantez. Estas diferencias estuvieron motivadas por las pretensiones que desde Cataluña intentaban compatibilizar la defensa agraria con la protección demandada desde las organizaciones industriales desplegadas en aquella región⁴⁷⁶.

Dentro de estas mismas consideraciones, desde la *Asociación de Agricultores*, y a pesar de las diferencias, siempre se pretendió el refrendo de una parte de las élites locales y regionales. Un propósito que, en opinión de Pan-Montojo, recaía en un pequeño grupo de ingenieros agrónomos, cuya misión era la de preparar los contactos personales con los propietarios de las distintas provincias. A esta tarea se añadía otra bien distinta que, desde Madrid, se ejercía a través del cuerpo de políticos, miembros de la Asociación, quienes a cambio del consentimiento ofrecían favores

⁴⁷⁵ La *Asociación de Agricultores*, una vez oídas las explicaciones del ingeniero Eduardo Abela, decidió no apoyar en la sesión celebrada el 24 de noviembre de 1882 la instancia realizada desde el *Fomento del Trabajo Nacional de Zaragoza*, en la que se solicitaba una revisión de los aranceles, en concreto el incremento de la valoración de los cereales, al entender que podía dañar otros sectores de la economía rural. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 4, abril de 1882, pág. 51; número 6, junio de 1882, págs. 86 y 87; número 8, agosto de 1882, págs 113 a 121; número 9, setiembre de 1882, págs. 129 a 140, y número 12, diciembre de 1882, pág. 188. Asimismo, en el Tomo II, número 11, 15 de junio de 1883, págs. 165 y 166.

⁴⁷⁶ Tanto la *Asociación de Agricultores de España* como el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* y la *Liga de Contribuyentes de Cádiz*, mantuvieron, en efecto, durante los meses de septiembre y octubre de 1888, una interesante correspondencia a través de misivas y circulares, con la intención de hacerse oír por las comunidades de agricultores y corporaciones agrarias de todo el país, dándoles a conocer su intención de trabajar a favor de los intereses agrícolas. Además, se solicitaba al Gobierno un programa económico que mostrara su eficacia frente a los intereses rurales. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VII, enero a diciembre de 1888, pág. 235. Las dificultades entre la Asociación de Agricultores y el Instituto Agrícola en Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit, pág. 20.

administrativos, subvenciones y otras atenciones de señalada procedencia institucional⁴⁷⁷.

La actitud mostrada por la *Asociación de Agricultores* dejaba la puerta abierta a un considerable entramado de cuestiones que, por lo general, terminaban en las distintas Secciones, estando referidas a los innumerables desacomodos que afectaban a muchos de los socios y particulares distribuidos en las distintas Delegaciones y provincias⁴⁷⁸. La profusión en el ideario societario sobre la protección a los socios, engarzaba directamente con lo enunciado en los Estatutos, en particular en lo que se refería a la ayuda que la propia *Asociación de Agricultores* debía prestar a todos sus afiliados. De esta forma, era el artículo 19 de los mencionados preceptos normativos el que establecía lo siguiente: “Los Socios serán apoyados por la Asociacion en todas aquellas reclamaciones que tengan pendientes ante la Administracion central, provincial ó municipal, siempre que las considere justas y relacionadas con los intereses generales de la clase agricultora”⁴⁷⁹. En todo caso, tan solo dos años después de su alumbramiento y de manifestar la intención de defender los intereses particulares de todos sus miembros, la *Asociación de Agricultores* no tuvo más remedio que reconocer la imposibilidad de asumir este tipo de requerimientos, resolviéndose, en consecuencia, que: “en lo sucesivo no se gestionaran más que asuntos de interés general agrícola, con arreglo al espíritu y letra de los Estatutos y Reglamentos”⁴⁸⁰.

Por otra parte, la presencia de la *Asociación de Agricultores de España* en el ámbito de la representatividad agrícola en la España de finales del XIX, ha querido interpretarse en algunos escenarios historiográficos como un desafío a los hábitos clientelistas arraigados en la Restauración surgida a finales de 1874. Si bien, la Asociación siempre estuvo apoyada por el Ministerio de Fomento, sobre todo a la hora de conformar las Delegaciones,

⁴⁷⁷ A este respecto, Pan-Montojo precisa que los dirigentes de la *Asociación de Agricultores de España* apenas podían garantizar la concesión de favores individuales, en tanto solo podían contar con un pequeño grupo de parlamentarios, entre los que no se encontraban los «jefes» más destacados. Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit., pág. 21.

⁴⁷⁸ Las gestiones podían estar referidas al sistema injusto de amillaramiento en las fincas, a las dificultades legales en el acotamiento de campos, abusos en la ganadería, etc. Algunos ejemplos en Sanz Lafuente, Gloria (2005), ob. cit., págs. 62 y 63.

⁴⁷⁹ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 1, enero de 1882, pág. 6.

⁴⁸⁰ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 4, abril de 1882, pág. 50.

lo cierto es que mantuvo los rasgos más característicos de la época en lo que a la consecución de objetivos se refiere. Es decir, desarrollando una política de favores individuales y colectivos basados en el «acuerdo» con los cargos públicos⁴⁸¹. Esta actitud, como tendremos tiempo de comprobar, no siempre llevó implícito el éxito de las tesis agraristas. Sin embargo, sí terminarían convirtiendo a la *Asociación de Agricultores de España*, antes de la finalización del siglo XIX, en un referente, ya fuera en cuanto al formato asociativo o en lo referido a sus juicios sobre la necesidad de promover la modernización de las estructuras agrarias, aunando a quienes eran los responsables de las mismas⁴⁸². Junto a la consabida costumbre basada en los «favores», no tardaría en imponerse una forma de actuación cimentada en la organización de congresos y reuniones que, al tiempo de servir como vínculo con los poderes públicos, terminaría consolidándose en una vía insustituible de expresión para el mundo rural.

- Auge y crisis. La vuelta a la estrategia del «todo» en el asociacionismo agrario

Desde que en 1880 se proyectara la *Asociación de Agricultores de España*, entre sus objetivos se hizo perceptible el deseo de actuar en una progresión muy amplia de actividades dirigidas a defender, por encima de cualquier otro aspecto, a la clase agricultora y ganadera afincada en el país. Esta aspiración, recogida ya en los Estatutos y publicados en 1882, debía realizarse a través de un programa de actuaciones muy diverso que tenía en los congresos y conferencias uno de los mejores soportes para adecuar los nuevos tiempos a la propiedad agrícola. De todo ello se deduce la participación y el interés constante en el fomento de nueva maquinaria y abonos en el mundo rural, en la promoción y el desarrollo de los estudios agronómicos, además de una tenaz implicación en asuntos políticos y acuerdos comerciales con terceros países. Un «todo» que, decididamente, iba a dar lugar durante los primeros años de existencia de la Asociación a bastantes luces, además de algunas sombras.

⁴⁸¹ Pan-Montojo, Juan (2007), ob. cit., págs. 108 y 109.

⁴⁸² Efectivamente, en muchos casos llegaba a crearse una corriente de opinión que más tarde era asumida también por los distintos gobiernos. Véase, por ejemplo, lo sucedido en el Congreso de Agricultores de 1902. *El Progreso Agrícola y Pecuario*, número 291, 7 de junio de 1902.

Los años ochenta habían comenzado con un declive en los precios de los granos en Europa, efectos que se comenzarían a percibir mediada ya la década en España⁴⁸³. Precisamente, en los mercados agrícolas nacionales contrastaba la ligera caída de los precios en el sector olivarero con la mejora sensible en el sector vinícola, especialmente después de los acuerdos con Francia. La evaluación realizada en este sector, tanto por parte de los ingenieros agrónomos como de los propietarios, dentro de la *Asociación de Agricultores*, motivó la necesidad de desarrollar una política a favor de aquellos cultivos que estuvieran en condiciones de competir en los mercados internacionales. Naturalmente, para lograrlo se precisaba una mejora sustancial en materia de tratados de comercio, además de una decidida apuesta en la mejora y renovación técnica de la agricultura.

Nada más iniciarse el año 1882, los miembros de la Asociación pusieron de manifiesto la intención de mejorar y fortalecer los “productos de nuestro suelo”, lo que invitaba a realizar una vasta transformación en la capacidad productiva con el fin de ver aumentada la utilidad y el aprovechamiento de artículos tan significativos como el vino, los aguardientes, licores, aceites, etc., llegando incluso a proponer la modificación de algunos cultivos, siempre que la misma condujese a cuotas incuestionables de riqueza y bienestar⁴⁸⁴. En gran medida, ello era posible gracias a la diversidad de intereses que evidenciaban los asociados, lo que convertía a la *Asociación de Agricultores* en un foro de opinión y de actuación un tanto alejado de la exclusividad cerealista. De hecho, y a lo largo de toda la década, los propietarios llegarían a manifestar sus preocupaciones respecto a la producción vitícola, ganadera, triguera u olivarera, llevando en algunos casos el trabajo reivindicativo y colectivo a un terreno bastante complejo.

Para lograr el aumento en los rendimientos agrarios, la Asociación dedicó una gran parte de sus esfuerzos a promocionar el uso de prácticas y mecanismos más avanzados, advirtiendo que el coste de muchas

⁴⁸³ En 1882, la *Asociación de Agricultores de España* expresaba ya su preocupación por la competencia que podían suponer los cereales procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá, así como los arroces procedentes de la India y el trigo de Rusia. “Nueva competencia para la agricultura europea”, en el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 5, mayo de 1882, págs. 78 y 79. Véase también el Tomo I, número 8, agosto de 1882, págs. 123 y 124.

⁴⁸⁴ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 7, julio de 1882, págs. 109 a 111, y número 9, setiembre de 1882, págs. 141 y 142.

herramientas debía disminuir para hacer posible su uso por aquellos agricultores con recursos más escasos⁴⁸⁵. Esas mismas premisas eran expuestas un año más tarde, esta vez con una mayor determinación en los estiércoles, basuras y abonos minerales dedicados al laboreo del suelo, una actividad que se alternaba con el sometimiento a estudio, por parte de algunos asociados, de distintos aparatos agrícolas para la trilla y aventado⁴⁸⁶. Como ya venía sucediendo desde hacía tiempo en otras entidades asociativas de agricultores y propietarios en España, el apoyo a la instrucción y a la capacitación a través de las granjas-escuelas, tuvo un refuerzo sustancial con la puesta en práctica, por parte de la *Asociación de Agricultores*, de las llamadas conferencias «nómadas» y el fomento de reuniones y congresos de carácter didáctico⁴⁸⁷. A las mismas solían asistir como ponentes ingenieros agrónomos, acompañados en ocasiones de senadores y otros cargos de la Administración⁴⁸⁸.

En 1886 comenzó a plantearse en el seno del Consejo un proyecto de conferencias itinerantes que debían recorrer distintas poblaciones de

⁴⁸⁵ Así se desprende de la Sesión celebrada el 1 de diciembre de 1882, en el que el socio Eusebio Poveda manifestó su consideración por los esfuerzos que realizaban los agricultores a la hora de mejorar las labores en el campo. En su opinión, el empleo de maquinaria moderna, así como de otros útiles como los arados de vertedera, precisaba la generalización de unos precios más bajos con el fin de que pudieran ser utilizados por aquellas fortunas más modestas. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 12, diciembre de 1882, pág. 190.

⁴⁸⁶ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, números 16, 17 y 18, 30 de septiembre de 1883, pág. 260. Generalmente, era la Sección de industrias rurales la encargada de verificar la utilidad y manejo de los distintos utensilios y herramientas que eran presentados a la Asociación. Está documentado el estudio de un modelo para la trilla y otro para aventar, presentados por los señores Drumón y Saco, sometidos a estudio por parte del Consejo. En algunos casos, eran igualmente sometidos a prueba distintos tipos de abonado, así como insectidas que luego eran de aplicación a la arboricultura y la viticultura. Algunos aspectos se encuentran en la “Memoria resumen de los trabajos del Consejo de la Asociación General de Agricultores durante el año 1884-85”, en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tercera Época, Tomo III, Tercer Trimestre de 1885, pág. 286.

⁴⁸⁷ El apoyo constante mostrado por parte de la Asociación a las granjas-escuelas, así como a otras entidades como las estaciones agronómicas, se hizo patente en los sucesivos números del *Boletín*. En concreto, en uno de los artículos dedicados a la formación mediante las Escuelas prácticas de Agricultura, se apuntaba lo siguiente: “Aquí, estas escuelas debieran dejarse enteramente a cargo de las Diputaciones provinciales, estimulándolas con subvenciones proporcionadas, y en libertad completa de nombrar dichas Corporaciones sus empleados facultativos, dentro de las condiciones que favorecieran al personal oficial de agrónomos, sin perjuicio de ejercer el Estado la inspección correspondiente”, en *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VII, enero a diciembre de 1888, pág. 19.

⁴⁸⁸ En mayo de 1882 tuvieron lugar seis conferencias agrícolas en el Jardín Botánico de Madrid a la que asistieron como conferenciantes los senadores Diego García y Mariano de la Paz Graells, junto a los ingenieros Antonio Botija y Diego Pequeño, además del Director de la Escuela de Veterinaria, Juan Téllez Vincent. En ocasiones las inauguraciones las realizaba el ministro de Fomento. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, números 5, mayo de 1882, pág. 76.

provincia, con el mismo fin de extender prácticas más adecuadas de cultivo, además de proporcionar ensayos en el mayor número de ciudades y municipios, aspiración que sería ampliamente secundada por el cuerpo de ingenieros agrónomos⁴⁸⁹. De esta forma, en 1887 se había extendido ya la idea de celebrar conferencias didácticas, junto a las llamadas misiones agronómicas. Un proyecto, tan ambicioso como complejo, que llegaría a precisar la formalización de unas Bases para su organización. Mientras las conferencias pretendían divulgar las enseñanzas teóricas y prácticas en materia agrícola en todo el territorio nacional, las misiones agronómicas estaban dirigidas a comprobar el estado y las condiciones productivas en dicho sector. En las primeras líneas de las Bases se expresaba con claridad la intencionalidad de las nuevas «recetas» para la agricultura. En ambos casos, los objetivos se concretaban en aspiraciones que, en lo que concernía a la enseñanza directa, eran sobradamente conocidas. Entre los primeros se contaban, por ejemplo: “Promover el estímulo entre los propietarios y agricultores para que se ocupen con asiduidad de las cuestiones ligadas con sus intereses y para que emprendan las mejoras más adecuadas en sus explotaciones agrícolas. Difundir extensamente las aplicaciones prácticas de los principios agronómicos sancionados universalmente por la ciencia, á fin de que los ensayos que se efectúen obtengan feliz éxito”⁴⁹⁰.

Entre los aspectos más sobresalientes de la defensa a la producción agrícola, por parte de la Asociación, estaba igualmente el refuerzo a la misma con vistas a la exportación. Si las producciones vitivinícola y olivarera habían sido, casi desde el comienzo, los artículos que habían disfrutado de una atención preferente en este sentido, no muy lejos se iba a situar la hortofruticultura, el tabaco, la remolacha o el algodón, todos ellos con una considerable proyección hacia el comercio exterior. A cambio, durante los primeros años de actividades apenas pudo prestarse el respaldo requerido a la protección triguera, petición que desde muchas comarcas de Castilla se venía solicitando desde hacía tiempo⁴⁹¹. En este sentido, la importancia adquirida por los acuerdos y tratados con otros países llegó a alcanzar una

⁴⁸⁹ *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tercera Época, Tomo VII, Tercer Trimestre de 1886, pág.602.

⁴⁹⁰ “Bases para la organización de conferencias didácticas y misiones agronómicas”, en *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VI, número 4, 1 de mayo de 1887, pág. 4.

⁴⁹¹ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VI, número 12, 30 de junio de 1885.

CUADRO 44

*Acuerdos comerciales de España celebrados entre 1881 y 1888**

Fecha de la firma	País/países	Clase de acuerdo	Objeto
27 octubre 1881	Francia	Convenio	Prórroga Convenio 1877 (3 meses)
6 febrero 1881	Francia	Convenio	Idem (hasta Tratado)
11 mayo 1882	Francia	Tratado	Tarifas especiales, NMF*
12 julio 1882	Venezuela	Tratado	NMF
10 octubre 1882	Alemania, Dinamarca, Grecia, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía	Convenio	Prórroga Tratados
1 julio 1883	Suecia-Noruega	Tratado	Tarifas especiales, NMF
19 julio 1883	Suiza	Tratado	Tarifas especiales, NMF
8 agosto 1883	Alemania	Tratado	Tarifas especiales, NMF
21 julio 1884	Italia	Tratado	Tarifas especiales, NMF
10 mayo 1885	Alemania	Convenio	Modificación Tratado 1883
21 junio 1885	Rusia-Finlandia	Tratado	NMF
14 septiembre 1885	Portugal	Tratado	Tarifas especiales, NMF
8 marzo 1886	Siam	Convenio	Modificación Tratado 1870
2 agosto 1886	-	Prórroga	Prorrogar los tratados en vigor hasta 1892
2 agosto 1886	Inglaterra	Convenio	NMF
2 noviembre 1886	Alemania	Convenio	Prórroga del Tratado de 1883
18 enero 1887	Suecia-Noruega	Convenio	“ “ “ “ “
21 noviembre 1887	Bélgica	Convenio	“ “ “ “ 1878
27 diciembre 1887	Austria-Hungría	Convenio	“ “ “ “ 1880
22 abril 1888	Italia	Tratado	Tarifas especiales, NMF
12 mayo 1888	Países Bajos	Tratado	NMF
12 mayo 1888	Rusia-Finlandia	Tratado	Tarifas especiales, NMF

* No se ha anotado el Tratado celebrado con EE.UU. en 1882, debido a que su entrada en vigor se produjo en 1884.

FUENTE: Serrano Sanz, José María (1987), ob. cit., pág. 49.

importancia trascendental, lográndose un importante número de compromisos con otros Estados europeos y del resto del mundo, entre los años 1881 y 1888 (véase el cuadro 44).

Precisamente, ya en la primera reunión del Consejo celebrada en 1881 se puso de manifiesto el interés que existía en relación a los pactos comerciales con Inglaterra y Francia, acordándose elevar al Gobierno una instancia solicitando la resolución de un tratado de comercio con el Reino Unido que sirviera como puerta a la exportación de vinos y frutas españolas en aquel país. De igual manera, en 1885 fue motivo de estudio el *modus vivendi* establecido con este último, produciéndose numerosas reclamaciones y constituyendo uno de los cometidos más destacados del Consejo de la *Asociación de Agricultores* hasta 1886. Las controversias originadas, dieron lugar a la intervención del presidente José Cárdenas en el Congreso de los Diputados para reclamar una sustancial rebaja de los derechos en la importación aplicada a los vinos españoles en los mercados británicos.⁴⁹²

En cierto sentido, la apuesta por la vitivinicultura había sido el «escudo» protector utilizado para reanimar la economía agrícola, sobre todo desde los primeros instantes de actividad exhibidos por la Asociación. Un propósito que ambicionaba movilizar la política comercial, al tiempo que acataba aquellos acuerdos en los que se garantizase la salida hacia otros países del alcohol español. La vid se convertía de esta manera en una de las partes esenciales del discurso, dentro del nuevo colectivo de agricultores creado en Madrid, al que se sumaría enseguida la producción de aceites de oliva⁴⁹³.

La política comercial era junto a la renovación técnica y el fortalecimiento de los cultivos con capacidad para competir en el exterior, las principales señas de identidad de una Asociación, pensada por propietarios e ingenieros agrónomos, con el fin de perfilar un horizonte más prometedor a

⁴⁹² El *modus vivendi* se convertiría en uno de los argumentos principales del Congreso vitícola que se celebraría ese mismo año de 1886, bajo los auspicios del Ministerio de Fomento. *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tercera Época, Tomo III, Tercer Trimestre de 1885, pág. 279, y Tomo XXVI, Segundo Trimestre de 1891, pág. 687.

⁴⁹³ En este sentido, basta observar la Memoria de los trabajos llevados a cabo por la Asociación durante los primeros años de presencia en el asociacionismo agrícola en España. Puede consultarse, por ejemplo, el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, año IV, número 13, 15 de julio de 1885, pág. 197.

la producción agrícola en España. Las posiciones cercanas al librecurso y, en consecuencia, contrarias a la protección triguera, advertidas en un primer momento por quienes iban a constituir la cabecera de la *Asociación de Agricultores*, comenzaron a vislumbrarse relativamente pronto a raíz del primer Congreso General de Agricultores y Ganaderos, celebrado en la capital de España en 1880 por la *Asociación de Ingenieros Agrónomos*⁴⁹⁴.

La apuesta librecambista se acentuó en agosto de 1882, con la celebración del Congreso Nacional de Agricultores en Valencia, reunión que tuvo como organizadores a la propia *Asociación General de Agricultores de España*, conjuntamente con la *Liga de Propietarios* y la *Sociedad de Agricultura* de aquella ciudad. En la misma se trataron cuestiones relacionadas con la producción vinícola y olivarera, constatándose la importancia que suponía la asociación y colaboración para los cosecheros en dichos sectores, imprescindibles para actuar como «palanca» en la transformación agrícola del país⁴⁹⁵.

Fue en la sesión del día 28 cuando comenzaron las deliberaciones sobre la cuestión de los cereales, siendo uno de los temas más singulares y significativos de la reunión. Concedida la palabra al socio Bonisana, se comenzó por precisar que el cultivo de los cereales estaba llamado a desaparecer en los suelos españoles, debido a la alta competencia de los granos y harinas que llegaban desde el exterior. Una producción que resultaba ser poco beneficiosa para el agricultor y que el propio Bonisana justificaba así:

esta clase de cultivo, examinando separadamente el de regadío y el de secano, usado principalmente el primero en las costas de Levante, mientras que el segundo es propio de la parte central de España, y fijándose en el hecho de que en nuestro país no se obtiene un rendimiento mayor de un 7 ú

⁴⁹⁴ En aquel primer Congreso se defendió la modernización técnica, tanto en la agricultura como en la ganadería, rechazándose el proteccionismo que había venido imperando desde hacía décadas y apostando claramente por una especialización en la producción. Precisamente de aquel Congreso, como ya sabemos, saldrían las ideas para la posterior organización de la *Asociación de Agricultores de España*. Pueden consultarse algunos sumarios del mismo en la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tomo XIX, abril a junio de 1881, págs. 404 a 412.

⁴⁹⁵ El hecho de que el Congreso tuviera lugar en Valencia, produjo que muchos de los debates de las sesiones estuvieran referidos a la producción hortícola, además del cultivo de frutales como la naranja. Las primeras sesiones celebradas en el mes agosto de 1882, en el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 8, agosto de 1882, págs. 113 a 128.

8 por 1, ó sea 7 ú 8 fanegas por cada una que se siembran, censura el procedimiento de nuestros agricultores, cuya mayor parte dedican la tierra sólo un año al cultivo de los cereales, dejándola dos en barbecho, á la vez que se lamenta de la falta ó escasez de capital que á la producción se destina; pues mientras aquí el capital de explotación no pasa de 300 ó 400 pesetas por hectárea, en el extranjero hay regiones en que se emplean hasta 1.000 pesetas; falta de capital que se traduce en escasez de ganados, no empleo de la maquinaria indispensable, etc., y que hace que las labores sean poco profundas⁴⁹⁶.

Examinadas las condiciones de la competencia de los granos extranjeros, en relación a la producción de cereales en nuestro país, cuatro fueron las propuestas de Bonisana al Congreso de 1882. En primer lugar, el cultivo de cereal debía interpretarse como un hecho transitorio en España, toda vez que estaba llamado a desaparecer desde el momento en el que fuera planteado el librecurso. En segundo lugar, la producción cerealícola podía entenderse en aquellas haciendas cuyo capital de explotación estuviera próximo a las 1.000 pesetas por hectárea. Se detallaba también que la competencia podría ser sostenida, siempre que el sembrado se llevara a cabo en tierras pobres donde la exigencia de gastos fuera igualmente reducida. Por último, debía ser una aspiración de la Asociación que el cultivo de granos fuera sustituido paulatinamente por otros como la vid, así como por plantas arbustivas más apropiadas a cada región⁴⁹⁷.

Aunque en ocasiones se han dado por supuestas las tesis que defendían los posicionamientos librecambistas por parte de la *Asociación de Agricultores*, lo cierto es que esas propuestas encontraron muy pronto contestación en favor del continuismo proteccionista. Siguiendo el argumento de Pan-Montojo, hasta 1882 el modelo librecambista se supuso más probable al conocerse los apoyos con los que contaba por parte de conocidos nombre como los de Miguel López Martínez, director de la *Gaceta Agrícola* y secretario de la *Asociación de Ganaderos del Reino*, o de Eduardo Abela, influyente articulista en el *Boletín* de la *Asociación*. Estos últimos, además de un considerable número de afiliados, habían situado a los

⁴⁹⁶ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 9, setiembre de 1882, págs. 129 a 130.

⁴⁹⁷ *Ibíd.*, pág. 130.

Agricultores de España, en opinión de los círculos cerealícolas y proteccionistas, en una actitud muy próxima al librecurso⁴⁹⁸.

Esta corriente, no obstante, contrasta con el sentir de algunas de las exposiciones manifestadas en el Congreso de Valencia, referidas a la oportunidad de continuar con la producción de cereales en España. En concreto, no eran pocos los que creían que el cultivo del cereal estaba íntimamente ligado a la población española, debiéndose respetar su sembrado, siendo una obligación su mejora y su difusión en aquellos territorios donde ello fuera posible. Basándose en las buenas condiciones de nuestros suelos, algunas voces insistieron en que la competencia de los granos nacionales con los del exterior aumentaría con el tiempo, llegando a los niveles de Estados Unidos y de algunas regiones de Rusia. Otros asistentes, como los señores Frías, Santomá y Museros, aun reconociendo la calidad del trigo cultivado en España, recordaban el elevado precio del mismo y la escasa rentabilidad. En este aspecto concreto, recomendaban a los agricultores de Castilla que siguieran cultivándolo, al tiempo que invitaban a iniciar una transición dirigida hacia otros cultivos con superiores rendimientos. Frente a estas manifestaciones, más o menos justificadas, Zoilo Espejo abogaba abiertamente por un rápido proceso de sustitución del trigo por plantas arbustivas. Una apreciación que sería abiertamente apoyada por Fuster y Vilanova⁴⁹⁹.

Ahora bien, si al Congreso de 1882 habían acudido un nutrido número de personas que habían abogado por la reducción de los derechos arancelarios, apostando, además, por unas tesis económicas claramente librecurbistas, este criterio se vería alterado solo un año más tarde con ocasión de la celebración de un nuevo Congreso de agricultores, esta vez en la ciudad de Valladolid. En cierta medida, cabía esperar que se despertaran dudas con tanta prontitud en una «plaza» que estaba considerada la capital del proteccionismo triguero. Junto a las primeras intervenciones a favor de promover mayores áreas de riego, de la alternancia en los cultivos y de la rebaja de las contribuciones en la agricultura, uno de los intervinientes

⁴⁹⁸ Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit., págs. 10.

⁴⁹⁹ De los resúmenes publicados de las sesiones celebradas en el Congreso de Valencia, se desprende la intensidad en algunos debates ocasionados con motivo de la conveniencia o no de mantener la producción de cereales en España. Véase, por ejemplo, el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 9, setiembre de 1882, págs. 130 a 131.

informó de la suficiencia de agua en Castilla, especificando que lo que la región necesitaba eran abonos y el mantenimiento del trigo⁵⁰⁰.

Las intervenciones atendidas en la sesión del día 29 de septiembre de 1883, pusieron de manifiesto, una vez más, las necesidades que precisaba la viticultura, el establecimiento de escuelas y la atención que debía prestarse a la calidad de nuestros vinos con vistas a la exportación. Entre las voces más aplaudidas destacó la de Eduardo Abela, autor de un elocuente discurso en defensa de la viticultura en Castilla, al que se sumarían otros oradores como Pimentel, Arranz y José Sacristán Estival, este último en calidad de alcalde de Valladolid⁵⁰¹. En la sesión, no faltaron las menciones a las demandas para la elevación de los aranceles, la minoración en la contribución territorial, o la puesta en cultivo de plantas industriales y forrajeras⁵⁰².

En este mismo orden de cosas, mediado el Congreso, el discurso no parecía haber asumido grandes transformaciones respecto a lo resuelto un año atrás en Valencia. Sin embargo, el viraje proteccionista iba a surgir en la sesión del día 30 de septiembre, dejando, al mismo tiempo, algunas opiniones en contra. Una alteración que iba a ser expuesta por el ingeniero agrónomo Galo de Benito y López Escribano, en un turno de palabra que debía argumentar los cultivos más convenientes para la región castellana. Con unos planteamientos tan sólidos como evidentes, López Escribano pronunció un discurso en el que, bajo su opinión, únicamente los cereales y la vid debían ser considerados los cultivos más apropiados para las comarcas castellanas. Matizaba, que ambas producciones proporcionarían una verdadera recompensa a los labradores, y aconsejaba una cierta alternancia con el sembrado de las leguminosas. En tales circunstancias, solo una producción eficaz podría contrarrestar la competencia en el comercio de cereales con Estados Unidos y con otros países productores⁵⁰³.

Las tesis de Escribano venían a sugerir abiertamente la necesidad y conveniencia de ejercer un cierto proteccionismo sobre Castilla y sobre la

⁵⁰⁰ Con estos argumentos esgrimió la necesidad de mantener los cultivos de cereales castellanos uno de los disertadores apellidado Fernández. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, números 16, 17 y 18, 30 de setiembre de 1883, págs. 247 y 249.

⁵⁰¹ *Ibíd.*, pág. 253.

⁵⁰² *Ibíd.*, págs. 246 y 250.

⁵⁰³ *Ibíd.*, pág. 256.

producción de granos de la región. Esta idea no era nueva, incluso en el seno de la *Asociación de Agricultores*, donde ya se había producido un episodio similar solo unos meses antes, al apoyar el Consejo directivo una iniciativa de López Martínez en la que se solicitaba el mantenimiento de los aranceles aplicados a las lanas. La Exposición de este último, presentada al Congreso de los Diputados, había estado dirigida contra el proyecto de ley sobre primeras materias, en la que se exigía no rebajar los derechos arancelarios vigentes que afectaban a la introducción de lanas en nuestro país⁵⁰⁴. A este cambio en el sentir económico de la Asociación se irían sumando distintas iniciativas con el paso de los años, la mayoría de las veces para reivindicar la exclusividad del mercado colonial, a la que se terminarían incorporando algunas correcciones tributarias o el incremento en las tarifas arancelarias.

En realidad, el objetivo en los años ochenta de quienes se consideraban partidarios del librecurso había sido la recuperación y posterior aplicación de la conocida Base Quinta, incluida en la reforma llevada a la práctica por Figuerola en 1869. Una modificación que establecía la progresiva descomposición de los derechos de aduanas, tanto en la importación como en la exportación, lo que implicaba necesariamente una reducción gradual hasta 1881. Las peticiones proteccionistas comenzaron entonces a exigir que cualquier reforma en ese sentido solo se llevara a la práctica después de que se elaborara una amplia consulta a las fuerzas sociales y económicas, siempre bajo la aprobación de las Cortes⁵⁰⁵.

Fueron las entidades productoras catalanas las primeras en reaccionar, en junio de 1881, respondiendo con distintas movilizaciones frente a las negociaciones que el Gobierno mantenía respecto al acuerdo de comercio con Inglaterra. Los librecurambistas, a través del ministro Camacho, presentaron entonces un proyecto de reforma estableciendo un régimen de cabotaje entre la Península, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, junto a una

⁵⁰⁴ Toda la cuestión relativa a este hecho se encuentra en el extracto de la sesión celebrada el 19 de febrero de 1883. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 4, 28 de febrero de 1883, págs. 50 y 51. Esta aparente ruptura con el ideario de la Asociación ha sugerido a Pan-Montojo la posibilidad de que el Congreso de Agricultores, celebrado en Valladolid en 1883, hubiera estado condicionado por algunos dirigentes desde un primer momento. A este respecto, puede consultarse Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit., págs. 11.

⁵⁰⁵ La mencionada Base Quinta había quedado en suspenso por el Real Decreto de 17 de junio de 1875. Lasso Gaité, Juan Francisco, *Crónica de la codificación española*, vol. 6. *Codificación mercantil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1999, págs. 154 y 155.

progresiva reducción de los aranceles, tal y como ya recogiera en su día la citada Base Quinta. Hay que recordar que entre el amplio repertorio de presiones favorables al proteccionismo, algunas ya habían tenido lugar por parte de distintas comisiones de representantes de la oligarquía triguera castellana, desplazadas a Madrid en 1875, con el fin de hacerse oír por parte del Gobierno y de las Cortes⁵⁰⁶. Pese a la negativa anunciada por el Consejo de Estado a iniciar estas reformas, la igualdad producida en la votación fue finalmente rota por Víctor Balaguer, presidente de la institución. Como resultado de todo ello, y casi de manera inmediata, se produjo la firma en 1882 del tratado con Francia, lo que provocaría importantes ventajas a los caldos españoles en aquel país⁵⁰⁷.

Así las cosas, la propia *Asociación de Agricultores de España*, a través de su Consejo de Administración, publicó en marzo de 1882 un informe sobre un proyecto de exposición a las Cortes, interpuesto por el *Instituto del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona*, en el que se solicitaba el apoyo de aquélla para el restablecimiento de la Base Quinta. Ante dicha demanda, la Asociación decidió abrir una amplia información acerca de la conveniencia o perjuicio de la medida y los efectos que podría ocasionar en la agricultura, la industria y el comercio. Las conclusiones del informe dejaban pocas dudas, sobre todo después de reconocer que cualquier extensión del comercio exterior sería favorable a los intereses de la agricultura española. Se solicitaba abiertamente la reforma del Arancel de Aduanas vigente, entendiendo que dicho cambio sería favorable a los intereses de la clase labradora, así como la negociación con otros países, especialmente con Inglaterra y Francia. Este último aspecto se entendía prioritario a fin de facilitar las transacciones de productos agrícolas, proporcionando una salida segura al vino en los mercados extranjeros⁵⁰⁸.

En todo caso, la explicación al proceso de transformación iniciado por algunos dirigentes de los *Agricultores de España* hacia el proteccionismo, deben buscarse también en la crisis agrícola y ganadera, y en el temor que

⁵⁰⁶ Almuíña, Celso (1977), ob. cit., Tomo II, pág. 566.

⁵⁰⁷ Sobre este tema puede consultarse el excelente artículo de Palomas i Montserrat Bravo, Joan, "Víctor Balaguer, la diputació catalana i la lluita pel proteccionisme (1881-1890)", en *Recerques*, número 25, 1992, págs. 31 a 52.

⁵⁰⁸ "Informe del Consejo de Administración sobre una solicitud del Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona relativa á la Base 5ª de la Ley Arancelaria de 1869", en *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 3, marzo de 1882, págs. 45 a 47.

productores y agricultores habían comenzado a manifestar ante un posible descalabro de los beneficios en la agricultura. Esta situación se tornaría más ostensible a partir del período 1880-1884, y de manera especial en todas aquellas áreas de Castilla la Vieja con una dedicación muy significativa al cultivo de cereal y vinculadas al comercio interregional⁵⁰⁹. A pesar de todo ello, existen sobradas razones para creer que dicha crisis tuvo sus matices, especialmente en todo lo que estaba referido a la producción de cereales en España. En este sentido, algunos estudios se han referido al acompasamiento que, a lo largo de todo el siglo XIX, se puede observar en la producción cerealícola y en el desarrollo demográfico. El hecho concreto de que entre 1860 y 1888 la tasa de crecimiento poblacional fuese de un 0,42 por 100, y la del conjunto del rendimiento en la producción de cereales un 0,43 por 100, parecen asegurar dichas tesis, lo que no nos impide afirmar, igualmente, que otros cultivos como el viñedo y el olivar terminaran alzándose como protagonistas al superar el ritmo de cultivo del trigo, la cebada y otros cereales⁵¹⁰.

Es igualmente revelador que las balanzas en el comercio de trigo y harina comenzasen a ser negativas en España desde 1882. Con la drástica reducción de las exportaciones españolas de trigo y la entrada en los puertos nacionales de importantes cantidades de cereal extranjero, los latifundistas agrícolas y la propia *Asociación de Agricultores de España* se encontraron con un intrincado problema desde el que se precisaba una solución que, al mismo tiempo, pudiera compatibilizar el deseo de potenciar una economía agrícola de exportación con el apoyo de la gran propiedad agraria distribuida por todo el país. En este punto convendría destacar las posibles «exageraciones» cometidas hasta hace relativamente poco tiempo, en relación a la gravedad de las crisis triguera originada en las provincias de Castilla la Vieja y León durante el final del siglo XIX. Las cifras aportadas por Garrabou y Sanz Fernández, mediados los años ochenta de la pasada centuria, arrojan conclusiones que advierten de unas dificultades mucho más atenuadas a las

⁵⁰⁹ No es nuestra intención abordar en profundidad el tema de la llamada crisis finisecular en España, aunque la misma tendrá un destacado protagonismo en los sectores más proteccionistas de la propiedad agrícola. En este sentido, un importante número de autores han aportado a lo largo de las últimas décadas sus estudios al respecto entre los que podemos apuntar a Jesús Sanz, A. M. Bernal, F. Herán, Ramon Garrabou, Juan Francisco Zambrano, o el Grupo de Estudios de Historia Rural, entre otros.

⁵¹⁰ Garrabou, Ramon y Sanz Fernández, Jesús, “Introducción. La agricultura española durante el siglo XIX: ¿inmovilismo o cambio?”, en Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985, págs. 122, 123 y 134.

que pudiéramos imaginar. Por poner algún ejemplo, en 1887 los precios del trigo en los mercados castellanos y leones solo eran un 10 por 100 inferiores a los registrados en la década anterior, y muy similares a los habidos durante los últimos 25 años. Es más, durante la peor etapa de la crisis en el cereal español, es decir, entre 1884 y 1895, solo se registró una pérdida en el precio del trigo de un 8 por 100, siempre dentro del mismo período de tiempo estimado. Cifras que perfectamente podrían ser aplicadas a la producción de cebada en gran parte del territorio nacional⁵¹¹.

Ciertamente, en la Asociación preocupaba la situación que afloraba en las grandes propiedades, en particular las reivindicaciones que tenían su punto de mira en el futuro de los cereales en Castilla. No obstante, la subida de los precios del grano, los elevados precios de los aperos, o los conflictos en los mercados, también afectaban a las explotaciones de la pequeña y mediana propiedad, incluidos aquellos propietarios acostumbrados a ceder sus tierras a cambio de rentas. Unas comunidades rurales que no pasaban inadvertidas frente al colectivo de los *Agricultores de España*⁵¹². Bien es verdad, que durante los años ochenta se hicieron importantes esfuerzos por conseguir una colectividad lo suficientemente estable de socios agricultores, procedentes de diversas condiciones y provincias, mediando entre la propiedad latifundista y los niveles más modestos de la hacienda agrícola. Un hecho que finalmente produciría importantes consecuencias en la Asociación⁵¹³.

Junto con la gestión de todas aquellas medidas que podían resultar más eficaces para el impulso y perfeccionamiento de la agricultura, la organización, casi constante, de congresos y conferencias sobre diversos temas agrarios, facilitaba el encuentro puntual de agricultores y expertos, a los que se unían señalados funcionarios, amén de un número indeterminado de parlamentarios que en ocasiones se hacían acompañar de algún ministro relacionado con la materia. Se trataba, en suma, de acercar voluntades y

⁵¹¹ Ibidem, pág. 177. Además, puede consultarse el artículo del Grupo de Estudios de Historia Rural, “Los precios del trigo y de la cebada, 1874-1906”, en Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (eds.) (1985), ob. cit., págs 324 y 325.

⁵¹² Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit., págs. 14.

⁵¹³ Al respecto de la Uno de los argumentos esgrimidos por Pan-Montojo en este sentido fue la exigua presencia de socios catalanes y valencianos entre las filas de la Asociación. Una situación que queda explicada por la existencia de asociaciones tan destacadas como el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en Barcelona, o la *Sociedad Valenciana de Agricultura* en las comarcas del Levante. Ibidem, págs. 17 y 18.

coligar opiniones en un escenario que, por lo general, se desarrollaba a caballo entre el interés de los grandes hacendados, la clase política y la Administración. Una actitud que restringía inevitablemente el margen de maniobra a quienes formaban parte de los sectores agrícolas menos favorecidos.

Los congresos regionales de Valencia y Valladolid tuvieron su continuidad en el organizado en Zaragoza durante 1885, siendo los celebrados en Madrid, en los años 1884 y 1886, verdaderos escenarios para las iniciativas vitivinícolas en nuestro país⁵¹⁴. A pesar del esfuerzo efectuado desde la Asociación por lograr un entramado asociativo regional, lo cierto es que los resultados en los primeros años no fueron los esperados. Un hecho constatable en este sentido es la escasa colaboración alcanzada con el *Instituto Agrícola Catalán*, debido a las discrepancias que existían por unir los intereses agrarios con las pretensiones planteadas desde la industria en Cataluña. Esta situación de desacuerdos se reprodujo también en el sector del vino al existir asociaciones específicas que ya ejercían un papel reivindicativo frente a las Administraciones del Estado⁵¹⁵.

La convocatoria de un «meeting» en Madrid, el 5 de diciembre de 1887, unido a las manifestaciones que habían dado comienzo un año antes como consecuencia de la crisis vinícola y de la caída de los precios en otros sectores de la producción, vinieron a precipitar aún más las divisiones en el seno de la *Asociación de Agricultores de España*, dando lugar a movilizaciones de agricultores y ganaderos en respuesta a lo que suponía una mayor inquietud por la protección de los mercados nacionales. Como es natural, tras el descenso de las cotizaciones vinícolas de 1887 y el cierre de las fronteras francesas a los vinos españoles, se produjo en toda España un rechazo a las intenciones librecambistas, abogando desde esos momentos por una limitación en las importaciones agroalimentarias. El viraje proteccionista emprendido así por un importante número de empresarios y

⁵¹⁴ Durante la reunión celebrada en Madrid en 1884 se fijaron aspectos que tenían que ver con la mejora en la elaboración de vinos y las políticas de consolidación de los mercados. Por su parte, el organizado en 1886 tuvo la particularidad de ser considerado expresamente un «encuentro» vitícola. Zoilo, Espejo, “Historia de la Asociación General de Agricultores de España”, ob. cit., págs. 684 y 685.

⁵¹⁵ Hay que recordar la existencia en una gran parte de la geografía española de asociaciones de propietarios y viticultores. Algunas de ellas ya fueron citadas anteriormente como eran los casos de la *Sociedad Vitivinícola Saguntina*, la de *Cosecheros de Vinos de Valladolid*, o la *Sociedad Española Vitícola y Enológica* en Murcia, solo por citar algunos ejemplos.

productores en los distintos sectores económicos en nuestro país, llegaría a originar, entre otras cosas, notables modificaciones en los derechos de importación del trigo, traduciéndose en aumentos graduales en las tasas arancelarias durante los años 1872, 1881 y 1890. Unas subidas que se completarían con la aprobación de un nuevo arancel en 1891⁵¹⁶.

A la inquietud y el desacomodo originados por la situación de crisis en la agricultura y la ganadería se sumó la voluntad del Gobierno con el fin de estudiar las dificultades en dichos sectores, constituyendo una comisión, a través de un Real Decreto fechado el 7 de julio de 1887, cuyos resultados verían la luz dos años más tarde⁵¹⁷. En todo este desarrollo tendría un papel destacado el socio y senador Diego García, movilizándolo a un buen número de diputados y senadores, y solicitando la elevación de los derechos de importación a los cereales, así como a ganados e hidrocarburos⁵¹⁸. También se movilizaron miles de agricultores con motivo del mencionado «meeting» en el Teatro de la Alhambra de Madrid, los primeros días del mes de diciembre de 1887. En el mismo se aprobaron 14 bases, consensuadas con otros centros agrícolas y pecuarios de todo el país, principios que serían entregados al Jefe del Gobierno, Práxedes Mateo Sagasta, y en los que se planteaban algunos remedios para atenuar las dificultades de la agricultura en muchas regiones del país⁵¹⁹.

Mediada la década de los años ochenta en España, los productores castellanos ya habían advertido su preocupación frente a las primeras señales de crisis en la agricultura y la ganadería. Una situación que, en ningún caso, iba a ser ajena a la *Asociación de Agricultores de España*, y mucho menos al impulso de otras asociaciones «patronales» que, como las Ligas de Contribuyentes de Salamanca o Valladolid, llevaban tiempo confiando sus demandas proteccionistas a los representantes provinciales «instalados» en las Cortes de Madrid. Tanto en una como en otra provincia, las ligas contaban desde hacía tiempo con el apoyo de las Diputaciones,

⁵¹⁶ Pan-Montojo (2007), ob. cit., págs. 99 y 100.

⁵¹⁷ Dichas conclusiones fueron publicadas en siete volúmenes en los que se recogían las actas y dictámenes de las distintas sesiones de la Comisión, toda la información escrita y oral útil para estudiar la crisis, así como los datos estadísticos y las contestaciones a los interrogatorios.

⁵¹⁸ Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit., págs. 22. Un extracto de sus gestiones se encuentra en el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VI, número 6, correspondiente al mes de junio de 1887.

⁵¹⁹ Zoilo, Espejo, ob. cit., págs. 685.

integradas como sabemos por propietarios vinculados al trigo y a la harina. Las presiones promovidas desde las regiones castellanas llevaron en 1884 a varias Diputaciones a unirse, solicitando así una puntual revisión del Tratado con Estados Unidos, la supresión de los derechos de consumos en los cereales, los ganados de labor, además, entre otras cuestiones, de un aumento en los aranceles sobre el trigo. En consecuencia, Madrid y, especialmente la *Asociación de Agricultores*, difícilmente pudieron eludir un eje comercial tan amplio que, en 1886, había alcanzado ya el respaldado de otras Diputaciones provinciales como las de Ávila, Burgos, León, Palencia, Santander, Segovia y Zamora⁵²⁰.

Con el encargo «proteccionista» hecho a los parlamentarios desde las filas dirigidas por Claudio Moyano, el propio Cánovas tuvo que confirmar en 1885, su deseo de proteger los trigos españoles. Algo que finalmente no se producirá en dicha campaña, y que alzaría un elevado tono en las protestas, un año más tarde, para volver a reivindicar la supresión de derechos de entrada de harinas y vinos españoles en Cuba. Una posición que se comprende, después de comprobar la competencia que debían soportar los propietarios en Castilla por parte de los granos y ganados norteamericanos. Estas últimas presiones darían lugar a un importante triunfo de los productores castellanos que vieron, a comienzos de 1886, como se aprobaba un Real Decreto que rebajaba un 15 por 100 los derechos de los trigos y harinas peninsulares con destino a los mercados cubanos⁵²¹.

El malestar creado en los seguidores librecambistas tuvo su contrapartida en la presentación de un nuevo proyecto de ley en 1887, por parte del ministro Puigcerver, en el que se contemplaban las admisiones temporales de materias primas, lo que terminó provocando la abstención y el malestar de la mayoría de diputados castellanos. La ley sería finalmente aprobada, ampliando de este modo la tensa situación que ya existía entre la burguesía harinera del interior peninsular y los comerciantes del litoral, especialmente en el área de Cataluña⁵²². Todo el malestar derivado de la

⁵²⁰ Calvo Caballero, María del Pilar (1999), ob. cit. págs. 499 y 500.

⁵²¹ El éxito fue atribuido al grupo de parlamentarios presididos por Moyano, quien llegó a convencer de la necesidad de dichas medidas al entonces ministro de Fomento, Germán Gamazo. *Ibidem*, pág. 501.

⁵²² *Ibidem*, pág. 502. También en Roldán de Montaud, Inés, "Joaquín López Puigcerver: un hacendista liberal en épocas de crisis (1841-1906)", en Comín, Francisco; Martín Aceña, Pablo, y Vallejo, Rafael (editores), *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006, págs. 452 y 453.

crisis, de las continuas demandas promovidas por proteccionistas y librecambistas y, en definitiva, por lógica pugna de intereses, cristalizaron en 1887 en un despliegue de realizaciones, entre las que destacaron la promovida por el Gobierno relativa al «cuestionario» que debía escrutar las verdaderas causas de la recesión en la agricultura.

En todo este tiempo, la *Asociación de Agricultores* difícilmente pudo conjugar las distintas corrientes entre sus asociados. A la preocupación de cerealistas y vinateros apenas podía responder con la incorporación de conocidos propietarios y agricultores, utilizando otras veces el desarrollo de congresos y reuniones con el fin de dar impulso a la producción⁵²³. En cualquier caso, tampoco se pudieron alcanzar las expectativas que, por poner solo un ejemplo, había llegado a adquirir el Congreso Agrícola de Salamanca en 1887. Certamen que había conseguido ensalzar todavía más los ánimos proteccionistas. La constante cascada de opiniones defendidas por los asociados y la aparente desmovilización de una parte importante de los mismos, no tardó en originar la escisión de hombres destacados que buscaban formas más convincentes de ponderar el descontento, extendiendo la capacidad de llamamiento contra cualquier resquicio librecambista. Así, en el verano de aquel mismo año, el diputado conservador y banquero Adolfo Bayo ponía en marcha la *Liga Agraria* con el apoyo de algunos terratenientes, varios de ellos miembros de la *Asociación de Agricultores de España*⁵²⁴.

La reacción de la Asociación fue la convocatoria, un año más tarde, de una gran asamblea que finalmente se celebraría en el mes de junio, logrando un apoyo multitudinario, y con un programa de marcado contenido proteccionista. Entre las propuestas se consideró necesario incluir un proyecto de exposición desestimando la jurisprudencia relativa a las admisiones temporales. Asimismo, se recordaron las necesidades relativas a la práctica de los buenos principios agronómicos, la rebaja en los consumos

⁵²³ No es de extrañar que en ocasiones se publicaran los nombres de personas adheridas a la Asociación. Son los casos, por ejemplo, del propietario alcarreño e ingeniero agrónomo Antonio Botija y Fajardo, o del diputado por el distrito de Cervera, Vicente Alonso Martínez. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 7, 15 de abril de 1883, págs. 108 a 109.

⁵²⁴ Adolfo Bayo lograría en 1888 alzarse con la vicepresidencia de la *Asociación de Agricultores de España*, cargo al que llegaba después de haber ocupado otros inferiores, siendo, de esta forma, la cabeza más visible a partir de ese año, después de su presidente José de Cárdenas. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VII, enero a diciembre de 1888, pág. 2.

aplicados al vino, las conferencias especiales dirigidas a la agricultura, o la continuidad en la renovación técnica y en la vigilancia a los cultivos más rentables como el aceite de oliva. Sin embargo, esta combinación tan ambiciosa de objetivos venía a evidenciar, una vez más, la ambigüedad del proyecto asociativo de los *Agricultores de España* en los últimos años del siglo XIX⁵²⁵.

La relativa incapacidad reivindicativa quiso unirse, además, a las dificultades económicas, consecuencia de la dependencia que desde un primer momento había demostrado tener de la Administración. Ya en las Bases aprobadas en 1882, había quedado clara la intención del Consejo de solicitar siempre la cooperación del Gobierno en aquellos casos que pudieran ser de interés para los grandes asuntos agrarios del país⁵²⁶. Precisamente, el precario estado económico de la Asociación, apenas iniciada su actividad, hizo depender en ocasiones una parte considerable de sus actividades de las donaciones procedentes del Ministerio de Fomento. Estas ayudas eran recibidas generalmente en forma de subvenciones desde la Dirección General de Agricultura. Otras veces, directamente se solicitaban a través de comisiones nombradas para tales fines⁵²⁷.

⁵²⁵ En las sesiones celebradas el mes de junio fueron expuestas por igual aquellas cuestiones que tenían que ver con la libertad de comercio y el proteccionismo. Un ejemplo de lo que aquí se expone puede observarse en la sesiones de los días 1, 8 y 15 de dicho mes de 1888. Véase el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VII, enero a diciembre de 1888, págs. 206 a 208.

⁵²⁶ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo I, número 1, enero de 1882, págs. 59.

⁵²⁷ “Estado económico de la Asociación”, *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 11, 15 de junio de 1883, págs. 173 y 174. En las discusiones relativas a los presupuestos de la Asociación de Agricultores de España para el periodo 1882-1883, las cuentas arrojaron un resultado de un total de 1.656 pesetas de ingresos, y un débito de 1.035,85 pesetas. Ello arrojaba un balance positivo de solo 620 pesetas. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 12, 30 de junio de 1882, págs. 180 a 182. Para la celebración del Congreso de Agricultores de Valladolid de 1883, el Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Germán Gamazo, contribuyó con una cantidad de 5.000 pesetas. En la sesión del día 13 de julio de aquel mismo año se leyó una carta del Director General de Agricultura, manifestando que la aportación máxima que podía hacer dicho organismo, como contribución a la representación de la Asociación en la Exposición de Amsterdam, era únicamente de 3.000 pesetas. *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo II, número 13, 15 de julio de 1883, págs. 195 y 196. También en los números 16, 17 y 18, correspondientes al 30 de septiembre de 1883, pág. 282, y números 21 y 22, 30 de noviembre de 1883, pág. 322. La Dirección General de Agricultura sufragaría igualmente una parte importante de los gastos ocasionados por el Congreso celebrado en Madrid a mediados de 1884. En aquellos momentos el Director de la Unidad, perteneciente a Fomento, era Mariano Catalina, a quien se deben las gestiones de la donación de 5.000 pesetas recibidas por la *Asociación de Agricultores*. *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tercera Época, Tomo VII, Tercer Trimestre de 1886, págs. 606 y 607.

No es casual, tal y como se dijo en su momento, que el sostenimiento de las Delegaciones resultara costoso, provocando la minoración de otros cometidos igualmente significativos en la Asociación. De la precariedad de esta última da una idea la explicación que sobre el estado económico se facilitó a los asociados en 1888, momento en el que se habían alcanzado el mayor número de filiaciones. Para dicho período, lo recaudado, unas 5.116,25 pesetas no alcanzaba a cubrir los gastos evaluados en 6.374,95 pesetas. Dicho déficit fue enjugado con la concesión de varias subvenciones por parte del Ministerio de Fomento, mediante Reales Órdenes de 10 noviembre de 1887 y de 24 de diciembre de ese mismo año, por las que se concedían las cantidades de 1.000 y 2.500 pesetas, respectivamente, para el sostenimiento de la Asociación. Estos «auxilios» permitieron durante algún tiempo el acomodamiento de los presupuestos, posibilitando los continuos anuncios de superávit en las cuentas de los *Agricultores de España*⁵²⁸.

Sin entrar en otras consideraciones, los altibajos económicos llevaron a suspender la publicación del *Boletín* en 1899, haciendo aún mayor, si cabe, el declive de los primeros años de la Asociación. Un devenir que vería descender el número de asociados, llevándolo por esas mismas fechas al mínimo de toda su andadura histórica, siendo las dos Castillas, Madrid y Andalucía, las regiones con mayor aportación de filiaciones a la corporación agraria. La concomitancia durante algún tiempo con la *Liga Agraria* y, especialmente con las Cámaras Agrícolas, fue suficiente para agravar un declive que solamente vería una salida efectiva a comienzos del siglo XX, gracias a las iniciativas del vizconde de Eza, y a su proyecto de convertirla en una amalgama de asociaciones⁵²⁹.

En definitiva, la deriva originada por el librecambio y el proteccionismo, la falta de una base propietaria y terrateniente propiamente

⁵²⁸ *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VII, enero á diciembre de 1888, pág. 205. Sobre el estado sobrante en el presupuesto de la Asociación de Agricultores de España, puede verse también la *Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento*, Tercera Época, Tomo III, Tercer Trimestre de 1885, págs. 291 y 292.

⁵²⁹ Como explica Pan-Montojo, el propósito de Eza condujo a la Asociación de Agricultores de España a contar en 1914 con más de cuarenta mil socios indirectos, filiaciones que correspondían a las más de noventa asociaciones integradas en aquélla. Con el nuevo «formato» asociativo, la Asociación pasaría a formar parte de las Comisiones y Consejos de Agricultura, transformándose en una de las más representativas en el sector de la propiedad y producción agraria, junto con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, la *Confederación Nacional Católica Agraria* y la *Asociación de Ganaderos del Reino*. Pan-Montojo, Juan (2005), ob. cit, pág. 24.

dicha, así como la escasa capacidad para movilizar a una gran parte de la sociedad agrícola en su conjunto, determinó un «impasse» transitorio en las perspectivas de colectivización en el mundo agrario durante el primer decenio de existencia de la *Asociación de Agricultores de España*. En todo caso, esa ralentización no supuso un total descalabro, al verse revalorizados sus trabajos el discurso asociativo que ya venía produciéndose desde 1869. Lejos de haber alcanzado estructurar un gran armazón de grandes propietarios cerealistas y de amparar sus intereses privados, la acción y la puesta en marcha de instrumentos colectivos en favor de otros sectores, como el olivarero y los derivados del vino, vinieron a respaldar la búsqueda de mercados que podían resultar más beneficiosos al conjunto de la agricultura en España. En todo este conjunto de intenciones fue decisiva la modernización de las estructuras agrarias a través de conferencias, ensayos de nuevos modelos de maquinaria agrícola y de abonos, además de la introducción de nuevos cultivos que, en definitiva, distaban de la concepción que Gamazo y Bayo iban a dar a la *Liga Agraria* y a los trigueros de las provincias castellanas, llevándolos a participar en un entramado político totalmente en sintonía con la causa proteccionista. Con la vista puesta en una agricultura de claro semblante capitalista, técnicamente avanzada y conformada por propietarios, técnicos y políticos ligados a la Administración de Fomento, los *Agricultores de España* obviaron la agenda política agraria, dejándola en manos de quienes ya habían comenzado a manifestar explícitamente tales intereses. Esta última perspectiva no la imposibilitaría para prolongar su existencia hasta 1942, convirtiéndola así en una de las principales organizaciones agrarias constituidas en nuestro país.

2.- UN LOBBY AGRARIO EN MARCHA. LOS AGRICULTORES Y LA LIGA AGRARIA⁵³⁰

• Primeras Asambleas y primeras directrices

Con las primeras dificultades surgidas en los años setenta, como consecuencia de la competencia del trigo extranjero procedente de Estados

⁵³⁰ Una gran parte de lo expuesto en este capítulo está recogido en la Memoria de Licenciatura: *Un lobby agrario frustrado. Los agricultores y la Liga Agraria 1887-1891*, de la que ya hicimos referencia en apartados anteriores.

Unidos, Rusia y la India, el viejo modelo cerealista se vio rápidamente forzado a modificar su ámbito de reivindicaciones, convirtiendo a los propietarios y agricultores castellanos en protagonistas de un movimiento proteccionista, uniéndose, de este modo, a una realidad que ya vivían los industriales en las provincias vascas y en Cataluña.

A mediados del mes de octubre de ese mismo año, el propietario y banquero, además de diputado conservador por Madrid, Adolfo Bayo, pronunció un discurso en nombre de la *Asociación de Agricultores de España*, señalando las causas de la crisis en la agricultura española y los mecanismos que debían aplicarse para atenuarla. Las manifestaciones de Bayo, expresadas entonces frente a la Comisión de la Asociación, tuvieron enseguida la aprobación de un buen número de terratenientes y hacendados, encontrando muy pronto el apoyo de quienes deseaban establecer una organización que agrupara al mayor número de agricultores de todo el país. La idea, asumida por el propio Bayo y secundada por algunos aristócratas como el marqués de Monistrol, dejaba abierta la puerta a lo que, en un breve espacio de tiempo, iba a ser la *Liga Agraria*.

Precisamente, a finales de 1887 comenzaron a conocerse los primeros datos de la *Información*, acerca de la crisis agrícola y pecuaria que, como se recordará, se había iniciado con la aprobación por parte de las Cortes en julio de aquel mismo año. No faltaron entonces y ante el pesimismo de las primeras noticias, quienes presentaron ya a la *Liga Agraria* como el primer «germen» del movimiento agrario, y el único «fruto» que de aquella documentación cabía esperar⁵³¹.

Fue en la reunión celebrada el 4 de noviembre, en el domicilio madrileño del banquero Bayo, donde se dio lectura a una circular que los iniciadores del pensamiento de la *Liga* se proponían dirigir a todos los agricultores, industriales y propietarios de España. Entre los asistentes se contaban los nombres del marqués de la Coquilla, el conde de Esteban, el conde de Guaqui, don Diego García Rato, don Anselmo Rivas, Llera, Beruete, y un largo etcétera, al que más tarde se incorporarían el general Salamanca,

⁵³¹ Según manifestará el conde de Toreno, en el mes de noviembre de 1887, no habían sido contestadas más que 16 de las 10.000 consultas que se habían dirigido a diferentes sociedades y corporaciones. Véase *El Correo*, 18 de noviembre de 1887. Asimismo, en Alba, Santiago, "La Liga Agraria", en *Nuestro Tiempo*, Madrid, 1902, págs. 38 y 39, y Alba, Santiago, *Problemas de España*, Madrid, 1916, pág. 16.

el conde Villapaterna, el duque de Abrantes, así como otros acaudalados y conocidos personajes de la escena social, política y económica de Madrid. Una vez expuestos los objetivos de la reunión, el propio Adolfo Bayo hizo algunas indicaciones respecto al estado pésimo de la agricultura, una circunstancia que, en su opinión, estaba motivada principalmente por los tratados de comercio y por los efectos que los elevados tributos producían sobre ella⁵³².

Terminada su intervención, el conde de Esteban inició la lectura de otra circular que debía enviarse a todas las provincias, con el fin de que en cada una de ellas pudieran formarse comisiones de representantes y asistir, de este modo, a la Asamblea de agricultores que la *Liga* tenía prevista celebrar unas semanas más tarde en el Paraninfo de la Universidad Central, en Madrid. En ella, de una forma concisa, se solicitaba la rebaja en la contribución territorial aplicada al cultivo y a la ganadería, la minoración del impuesto de consumos, una eficaz protección a todas las industrias, el fomento de los intereses materiales del país, la igualdad de tributación para todas las clases del Estado, así como la reducción de los gastos públicos a unos límites más justos y precisos. Tras un pequeño debate suscitado entre algunos asistentes al acto, como el conde de las Almenas, el senador Diego García y el ingeniero Miguel López Martínez, se sugirió, además de la aprobación de la propia misiva, el establecimiento de los primeros cimientos que debían organizar una asociación de agricultores en España. De acuerdo con las decisiones aprobadas, y con el proyecto urgido por unos cuantos propietarios y acomodados hombres de negocios, la *Liga Agraria* se preparaba para iniciar una escueta andadura, comenzando sus actividades unas semanas más tarde⁵³³.

⁵³² Ya en octubre de aquel año, Adolfo Bayo había pronunciado un importante y decisivo discurso ante una Comisión informadora, promovida por la *Asociación de Agricultores de España*, en la que apuntaba la gravedad en la agricultura española, señalando el desaliento de las clases agrícolas del país. Apoyado por el marqués de Monistrol, Bayo asumió entonces la idea de promover y organizar una asociación de agricultores, distinta a la que por entonces él mismo militaba. Alba, Santiago "La Liga Agraria", art. cit. págs. 39-40.

⁵³³ *El Imparcial*, 5 de noviembre de 1887. Sólo dos días después en una reunión de republicanos progresistas celebrada en Valladolid, José Muro, diputado a Cortes por el partido republicano y haciendo uso de la palabra, llamará la atención sobre el estado decadente de la agricultura. Su discurso resultó ser un claro planteamiento en el que se solicitaba al Gobierno una rebaja en las partidas de gastos de los presupuestos, además de abogar por la concesión de unas mayores facilidades a los transportes vinculados con el comercio interior. Su «solución» proteccionista rechazaba los principios del librecambio y las medidas que pudieran surgir de la mencionada *Información agrícola* abierta en Madrid meses atrás. Muro convencido de la existencia de una indiferencia en los partidos monárquicos respecto a la crisis, criticaba la impotencia y la incapacidad para frenar el

Previamente al establecimiento de la *Liga*, Bayo había organizado en Madrid, solo unos días antes, una *Asociación de Propietarios, Ganaderos y Agricultores*, cuyo fin no era otro que propiciar los acuerdos necesarios para la constitución de la *Liga Agraria*⁵³⁴. Con el establecimiento de aquélla, quedaban sentadas las premisas fundamentales para la formación de asociaciones de propietarios y labradores que, en forma de sucursales de la *Liga*, debían nombrar delegados para cada pueblo o distrito. Con ello, además, se habilitaba la representatividad en la Asamblea general que debía celebrarse en Madrid el día 6 de diciembre de 1887. Publicados los acuerdos y el programa de la *Liga*, se nombró de inmediato presidente de la misma a Adolfo Bayo, constituyéndose una Junta de Gobierno compuesta por más de quince personas. En la larga pléyade de personalidades destacaban los nombres de Apolinar de Rato, J. Maluquer, el conde de Esteban, el conde de Cassal, Álvarez Mariño, el marqués de Perales, José Cárdenas, el conde de Almenas, o el general Salamanca, entre otros⁵³⁵.

Muy directamente relacionado con todo lo anterior, desde la *Asociación de Agricultores de España* se acababa de dirigir por aquellos mismos días al Gobierno un prospecto con catorce peticiones concretas, algunas de ellas de dominio público, que ya circulaban por la prensa como reivindicaciones de la todavía no constituida *Liga Agraria*⁵³⁶. El hecho en sí llegó a provocar las primeras adhesiones públicas de diputados, senadores y políticos a las

déficit creciente en los últimos años de gobierno. En definitiva, desde las filas republicanas, Muro aspiraba a cuantos sacrificios fueran indispensables para acortar las diferencias que condujeran a una unión sólida en una sola agrupación. *El Imparcial*, 7 de noviembre de 1887.

⁵³⁴ Conviene recordar que muchas de las personalidades comprendidas en los distintos sectores de la vida pública de aquellos años, pertenecían, en no pocos casos, a diferentes asociaciones, sin que ello fuera motivo de críticas o censuras por parte de compañeros y particulares. Así, no es extraño, por ejemplo, que nombres como los de Adolfo Bayo, José Cárdenas, Apolinar de Rato, el conde de las Almenas, etc., apareciesen como firmantes de los escritos de la *Liga Agraria* o de la *Asociación de Agricultores de España*. Véase el *Boletín de la Asociación General de Agricultores de España*, Tomo VII, enero á diciembre de 1888, págs. 1 y 2.

⁵³⁵ *El Imparcial*, 7 de noviembre de 1887, y *El Norte de Castilla*, 2 de diciembre de 1887.

⁵³⁶ En efecto, como se recordará, la *Asociación de Agricultores* solicitaba el cumplimiento de una serie de catorce bases o puntos esenciales, entre las que se mencionaban: "que se reduzca la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería a tes quintos de la cifra total con que hoy figura en los presupuestos del Estado; que se supriman los recargos sobre las contribuciones directas, cuya percepción se destina a los servicios municipales; que se suprima el impuesto de derechos reales sobre las herencias directas; que se denuncien los tratados de comercio para reformar las tarifas en favor de la agricultura; que se dicte con urgencia un reglamento de cartillas evaluatorias que esté en armonía con el valor actual de los productos agrícolas; que el gobierno proteja eficazmente el establecimiento de toda clase de productos agrícolas, etc.". *El Imparcial*, 8 de noviembre de 1887.

manifestaciones multitudinarias y agraristas que se venían sucediendo, así como de un importante contingente de labradores y contribuyentes procedentes de las provincias castellanas. De esta forma, se comprende que a la reunión convocada en Valladolid para el mes de noviembre, viajaran algunos diputados como José Muro, Santiago Alba, Pimentel y Nieto Álvarez, además de otras personalidades como Germán y Trifino Gamazo, Torres Villanueva, todo ellos vinculados, tanto a la vida política como al mundo de la producción y de la propiedad de la región⁵³⁷.

En los primeros días del mes de diciembre de 1887 comenzaron a llegar a Madrid un considerable número de representantes procedentes de Castilla y de otras provincias españolas, con la intención de asistir a las sesiones que, como se recordará, la *Liga Agraria* había convocado en la capital de España. En ésta, y casi al mismo tiempo, debía tener lugar el «meeting» en el teatro de la Alhambra, organizado por la *Asociación de Agricultores de España*. Sabemos que la Junta Directiva de la *Liga* había invitado a las personas que, sintiéndose adheridas a las ideas de la misma, quisieran sumarse públicamente a los actos de constitución de la nueva Sociedad. Además, se habían proferido distintos llamamientos a los representantes elegidos en las provincias, cuyos intereses estuvieran vinculados de una u otra forma a la defensa de la agricultura.

Las sesiones que debían iniciarse el día 6 de aquel mismo mes en el Paraninfo de la Universidad Central, estuvieron precedidas dos días antes por una reunión preparatoria celebrada en el domicilio particular de Adolfo Bayo. Con la asistencia de los señores Maluquer, el conde de Esteban, Fernández Soria, Eduardo Ibarra, Álvarez Mariño, el duque de Nájera, los condes de Guaqui, Monte Negrón, Almenas y Cassal, marqueses de Dilar, Zafra y Figueroa, y otros nombres destacados como los de Rato, Orellana, Faustino y Santiago Udaeta, López Martínez, Sánchez de Toca, o Urdiales, entre los más de cincuenta que ya figuraban adheridos a la *Liga*, se dio

⁵³⁷ En los últimos días del mes de noviembre, con la intención de conocer la opinión de los labradores de la provincia y antes de contestar definitivamente al interrogatorio solicitado por el Gobierno sobre la crisis agrícola, se decidió convocar una reunión extraordinaria de agricultores en la ciudad de Valladolid. Las conclusiones aprobadas fueron similares a las que ya se habían producido en esas mismas fechas en otras zonas de Castilla la Vieja y León. Esto es, la creación de Bancos agrícolas, denuncia de los tratados de comercio vigentes, reducción de la contribución territorial de cultivos y ganadería a los tres quintos de la cifra total señalada en los presupuestos del Estado, rebaja en las tarifas de transporte de ferrocarriles, etc. *El Imparcial*, 22 de noviembre de 1887; *El Liberal*, 23 de noviembre de 1887, y *El Correo*, 22 de noviembre de 1887.

conocimiento del proyecto de Estatuto y de Reglamento de la nueva asociación, siendo tomados en consideración para su sometimiento y aprobación en la Asamblea que debía celebrarse en los días siguientes⁵³⁸.

A las reuniones convocadas por la *Asociación de Agricultores de España* en el teatro de la Alhambra, habían acudido representantes de casi todas las provincias españolas en demanda de soluciones a sus problemas. En la sesión del día 5 de diciembre, la el diputado Ibarra, representante por Sevilla, destacó el mal trato que venía recibido la clase productora al consentirse la entrada en el país de aceites, petróleos y otras grasas procedentes del extranjero. Advertía el diputado la decadencia de la agricultura y el aciago reparto de los impuestos⁵³⁹. En la misma reunión, Rivas Moreno, delegado de varios pueblos de la provincia de Ciudad Real, presentó una proposición instando al Consejo de la *Asociación de Agricultores*, las Juntas directivas de la *Liga Agraria*, así como de las *Ligas de Contribuyentes* y de la *Asociación de Productores*, para que se reunieran en Asamblea permanente mientras estuvieran abiertas las Cortes. La lectura de la proposición del señor Moreno fue recibida con grande aplausos, motivando que el presidente Cárdenas anunciara su examen, comprometiéndose a dar cuenta de tales circunstancias a las Juntas directivas de aquellas corporaciones. Con las intervenciones de los señores López Martínez, García Flores y Calvo y Muñoz, entre otros, siempre referidas al proteccionismo, la sesión se dio por finalizada, resolviéndose de forma unánime la presentación de las conclusiones al Gobierno⁵⁴⁰.

En 1902, y en relación a la coincidencia de convocatorias realizadas por parte de la *Asociación de Agricultores* y de la *Liga Agraria*, Santiago Alba, uno de los más destacados integrantes de esta última, llegaría a afirmar que aquel acto, el celebrado en el teatro de la Alhambra de Madrid, debía interpretarse como un prólogo incuestionable a la actividad liguera. La convocatoria de los *Agricultores de España* estaba justificada, en opinión de

⁵³⁸ *El Liberal*, 5 de diciembre de 1887.

⁵³⁹ En este sentido, es interesante puntualizar que algunos textos monográficos de la época que se han manejado en este trabajo de investigación, referidos a la *Liga Agraria*, advierten de una primera reunión en el teatro de la Alhambra el día 6 de diciembre de 1887. Es el caso, por ejemplo, de las obras ya citadas de Santiago Alba. Esta fecha, como se ha comprobado por cruces de distintas páginas de prensa de aquellos mismos días, corresponde, sin embargo, al día 5 de diciembre de 1887. Alba, Santiado (1902), ob. cit. pág. 40 y Alba, Santiado (1916), ob. cit., pág. 19. Además, en *La Regencia*, 6 de diciembre de 1887; *El Liberal*, 4 de diciembre de 1887, y *El Correo*, 5 de diciembre de 1887.

⁵⁴⁰ *La Regencia*, 6 de diciembre de 1887, y *El Liberal*, 6 de diciembre de 1887.

Alba, entendiéndose como una señal de debilidad frente a otra asociación que acababa de surgir con un discurso mucho más profundo que la anterior⁵⁴¹. Con la Asociación todavía en escena, presidida por José de Cárdenas, ésta no había sido capaz de manejar los posicionamientos y actitudes reivindicativas de un buen puñado de productores y propietarios agrícolas. Conocedores de la incómoda situación por la que atravesaba la comunidad propietaria desde los primeros años ochenta, la idea de configurar un nuevo bloque rural, solo siete años después de ver iniciada sus actividades la *General de Agricultores*, venía a desvanecer los esfuerzos de esta última en detrimento de la *Liga*.

En consecuencia, el día 6 de diciembre dieron comienzo las sesiones de la Asamblea de la *Liga Agraria* en Madrid⁵⁴². En un Paraninfo plenamente colmado de representantes y labradores de todas las provincias españolas, a las dos menos cuarto de la tarde se dio por abierta la primera de las conferencias por parte del presidente interino, Adolfo Bayo, siendo uno de los secretarios, Álvarez Mariño, el encargado de dar lectura a la lista de asistentes. Entre los presentes había nombres tan destacados como los de Moyano, Ibarra, Villamejor, Rato Álvarez, Abril, Montilla y Sabater; los condes de las Almenas, Castillejo, la Encina y Miraflores; los duques de Medinaceli y de la Laguna, el marqués de Dela, etc., llegando la cifra hasta los 946 representantes y algo más de 450 corporaciones. Adhesiones que irían incrementándose a lo largo de los días sucesivos.

Constituida la Asamblea General, los primeros esfuerzos se dirigieron a trazar las líneas generales sobre las que debía basarse el programa de la *Liga*. En su discurso de apertura, Bayo manifestó su intención de mantener a la Asociación al margen de cualquier ideología política, centrando toda su actividad en la búsqueda de medios que pudieran salvaguardar a la agricultura y a sus industrias. En su disertación, llegaría a afirmar: “Si alguna vez nuestros labios pronuncian la palabra Gobierno, entiéndase que

⁵⁴¹ Alba, Santiago (1902) ob. cit., pág. 40.

⁵⁴² A este respecto, Santiago Alba señala el día 7 de diciembre como la fecha de inicio de las actividades de la *Liga Agraria* en Madrid. Sin embargo, puede comprobarse en diversos diarios de la época que fue el día 6 de diciembre de 1887, la fecha de inicio de las Sesiones en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid. Véase, además, del citado artículo de Alba, “La Liga Agraria”, en *Nuestro Tiempo...*, art. cit., pág. 40, *La Liga Agraria*, 7 de marzo de 1888, revista editada por la propia Asociación, en la que se recogen, a partir del mismo, las actuaciones de las diversas sesiones de la *Liga Agraria* durante el mes de diciembre de 1887. También en Ortega Rubio, Juan (1905), Tomo I, ob. cit., pág. 335.

la usamos como concepto de entidad ó de Estado, pero sin aludir á determinadas tendencias políticas”. Más adelante, puntualizaría lo siguiente: “La Liga Agraria no representa la cuestión técnica de la agricultura, sino la cuestión económica. No pienso hacer recriminaciones á ningún gobierno, pues aquí hay que hacer abdicación de la parte política”⁵⁴³.

Con las primeras advertencias hechas en este sentido, el siguiente punto de atención expuesto fue el aumento progresivo en la tributación territorial en la agricultura desde 1854. Este incremento suponía el paso de los 300 millones de reales recaudados ese año, a los 708 millones alcanzados en 1887. Además de las tributaciones, Bayo anunciaba que la reducción en el capítulo de gastos debía estar entre las prioridades a debatir por los gobiernos de la Nación. La agricultura soportaba un tributo exagerado que, en definitiva, debía atender unas partidas presupuestarias muy elevadas, especialmente en lo concerniente a los gastos originados por los sueldos de diputados y senadores. Honorarios que, al fin y a la postre, se debían en su mayoría, en palabras del Presidente, al sudor de los agricultores⁵⁴⁴.

Para poder atender los verdaderos intereses locales, Bayo propuso la elección prolija y solícita de los representantes en Madrid. Personas que debían ser elegidas, tanto por su conocimiento del país como por su competencia para acometer los problemas en la agricultura⁵⁴⁵. La falta de protección a las clases productoras, la reforma en las cartillas evaluatorias de la riqueza rústica y pecuaria, o el incremento tributario, fueron cuestiones abordadas también por los representantes de Andalucía, Castilla la Vieja y Aragón en diferentes sesiones, siendo la supresión del impuesto de consumos una de las propuestas más aplaudidas. Defendida esta última en un primer momento por el marqués de Santaella y apoyada, entre otros, por Apolinar de Rato, Vicente Oliva, Rafael Tovar, el conde de Castillejos y Jerónimo Cuenca, la iniciativa, discutida y aprobada finalmente en la tercera sesión, fue remitida días después al Gobierno en forma de petición. En ella, entre otras cuestiones, se apuntaba lo siguiente:

⁵⁴³ *El Imparcial*, 7 de diciembre de 1887; *La Regencia*, 7 de diciembre de 1887; *La Liga Agraria*, 7 de marzo de 1888. Asimismo, Ortega Rubio, ob. cit., pág. 335.

⁵⁴⁴ *La Liga Agraria*, 7 de marzo de 1888.

⁵⁴⁵ *El Imparcial*, 7 de diciembre de 1887, y *La Regencia*, 7 de diciembre de 1887

La Liga Agraria declara necesaria para la existencia de la producción agrícola y pecuaria, la supresión del impuesto de consumos para el Tesoro y el Municipio, sustituyéndolo con otros recursos más racionales y equitativos, y entre tanto, estima necesario se lleve á cabo su reforma, rebajándose en un cincuenta por ciento los derechos establecidos en las tarifas vigentes, para mejorar su administración y elevar sus rendimientos; que se exceptúen en absoluto de este impuesto las carnes en vivo y muertas, los trigos, el centeno y el maíz y sus harinas, el pan, el aceite de oliva no refinado, por ser artículos de primera necesidad para las clases trabajadoras; elevar los derechos todo lo posible a los alcoholes industriales y a los aceites que no sean de oliva; supresión de los encabezamientos generales en concepto de obligatorios, sujetándolos á reglas fijas sin que pueda exigirse por repartimiento; que cuando haya hecho uso los Municipios del ciento por ciento con que pueden recargar, se entiende derogada la facultad de excederse de estos límites⁵⁴⁶.

A las sesiones, que debían finalizar el día 12, se presentaron un nutrido y variopinto grupo de ponencias e intervenciones, en un vaivén de temáticas que, por su interés y extensión hubo que limitar a solo diez minutos por cada orador⁵⁴⁷. Muchas fueron las cuestiones a tratar, prevaleciendo aquellas que proponían un cambio hacia el proteccionismo. La amplitud de los asuntos tratados diariamente podía transitar entre las peticiones para realizar un Código rural que diera seguridad a los campos, las reformas en el derecho civil y en la legislación hipotecaria, la determinación exacta de la extensión superficial de los cultivos en España, o la unificación de las tarifas y las rebajas en las tasas ferroviarias, etc. Uno de los temas que, sin embargo, iba a dar lugar a la formación de una Comisión y posterior dictamen, estuvo referido a las cartillas evaluatorias y a la tributación exacta que debía exigirse por los productos cultivados. Esta solicitud, motivada por la intervención de uno de los oradores, Luque de la Torre, tuvo como resultado, además, la redacción de un texto en el que se especificaba las infracciones y daños que ocasionaban el exceso de tributación en la riqueza agrícola y pecuaria, la petición de su necesaria corrección en el proyecto presupuestario para el año siguiente. En el mencionado escrito se recogía, entre otras cosas, la subsiguiente protesta:

⁵⁴⁶ Previa a su aprobación, la propuesta había contado con la oposición de Pando y Valle, hecho que levantaría muchas protestas y que sería zanjada por el propio Bayo. *El Liberal*, 9 de diciembre de 1887, y *El Imparcial*, 9 de diciembre de 1887.

⁵⁴⁷ La medida fue adoptada el día 9 de diciembre, en el transcurso de la cuarta de las sesiones previstas en la Asamblea General. Véase *El Imparcial*, 10 de diciembre de 1887.

La Liga Agraria declara que constituye una infracción del art. 3º de la Constitución, con daño probado de la producción agrícola y pecuaria, el hecho de no someter á tributación la que obtienen los demás ciudadanos españoles en otra distinta manifestación de la riqueza, como los poseedores de valores públicos, profesionales, artes ó industrias exceptuadas, contratos de prenda, hipoteca, traslación y pignoración de valores públicos y particulares, equiparándolos á lo establecido para la traslación de la propiedad, cuya importancia se descubre en la suma de comodidades, goces y lujo que proporciona; que disfrutando de los mismos derechos no contribuya á sostener las cargas del Estado en la justa proporción, al gravamen que por este concepto soportan la agricultura, el comercio y la parte de la industria que hoy se encuentra sometida, y estima como un remedio a la triste necesidad que la ha congregado, que en el próximo presupuesto de ingresos figure la partida correspondiente, que con las que han de resultar de las economías solicitadas en los servicios, sirva de base á la rebaja pedida para el cupo fijado á la riqueza rústica y pecuaria⁵⁴⁸.

Lo cierto es que la presencia de agricultores entre los oradores, llevó en muchos momentos de la Asamblea a insistir en las ocultaciones de riqueza y en la necesidad que existía de remediar dicha situación. Uno de los ponentes, Anselmo Rivas, llegó a exponer como causas de la crisis en la agricultura, la falta de compradores y el bajo precio en la venta de los productos. Una situación que, a todas luces, impedía compensar los gastos de cultivo. El propio Rivas argumentaba que los Tratados celebrados con otros países no venían sino a perjudicar a productores y agricultores. De esta forma y mientras las cosechas permanecían sin vender en las bodegas, se producía la introducción por las fronteras españolas de artículos similares procedentes del exterior. En su discurso dejaba a la vista la creciente duda y la desconfía apuntada desde el Gobierno, criticando la *Información*, y advirtiendo del elevado precio del transporte ferroviario. Una situación que protegía más la producción extranjera que la propia⁵⁴⁹.

Entre los últimos puntos debatidos estuvo el relativo al fomento y la protección para el establecimiento de asociaciones agrarias. Hablaron sobre este tema los señores Bonilla, Artiga y Oliva. El primero abogando por el

⁵⁴⁸ *La Liga Agraria*, 21 de mayo de 1888; *El Imparcial*, 10 de diciembre de 1887, y *El Correo*, 9 de diciembre de 1887.

⁵⁴⁹ *El Norte de Castilla*, 14 de diciembre de 1887; *La Liga Agraria*, 28 de mayo de 1888; *El Imparcial*, 11 de diciembre de 1887, y *El Liberal*, 11 de diciembre de 1887.

establecimiento de mercados de cereales y alhóndigas en las principales capitales de provincias, aspecto que debía aliviar las transacciones entre productores y comerciantes. Después de hacer ver la importancia de la repoblación de los montes y su conservación, el señor Artiga propuso que sería preciso la organización y creación de sociedades forestales a las que también debía considerárselas «asociaciones agrarias». Finalmente, el señor Oliva se mostró partidario de la necesidad de constituir asociaciones de agricultores en los pueblos que pudieran permitir la protección mutua entre ellos. En su opinión, solo el llamado «espíritu» de asociación podría suplir el abandono al que el Gobierno y la Administración sometían a labradores y ganaderos. Palabras, estas últimas, que fueron acogidas muy favorablemente por los asistentes⁵⁵⁰.

En la última de las sesiones celebrada el 12 de diciembre, Claudio Moyano responsabilizó a la desamortización de los bienes corporativos y al aumento de la deuda, como las causas directas del malestar económico en España. La solución más óptima, en opinión de Moyano, debía estar en el ahorro y la nivelación presupuestaria, relegando la práctica permanente que permitía la aprobación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Su discurso cuestionaba la existencia de un ejército de cien mil hombres y una escuadra costosa. ¿Podemos pagarla? llegaría a preguntarse. Entre los remedios para atajar los males de la agricultura se debía incluir la corrección, en primer lugar de todos los déficits, con leyes que impidieran un gasto mayor de lo estrictamente necesario. Concluida su intervención y aprobado el Reglamento, Moyano fue propuesto por Adolfo Bayo para ocupar la Presidencia honoraria de la *Liga*. Hecho que se uniría a las últimas decisiones de la Asamblea, quedando conformada la Comisión permanente y la Junta Directiva (véase el cuadro 45).

Tras una larga semana de propuestas, discusiones y debates, el resultado final de la Asamblea quedó reducido a un puñado de acuerdos, agrupados en una veintena de temas que constituían la base y los instrumentos necesarios para articular la defensa de los intereses de la clase agrícola y ganadera. Se intentaba dar cabida así, tanto a terratenientes, labradores, empresarios agrícolas, ingenieros agrónomos y de montes,

⁵⁵⁰ Véase, por ejemplo, *La Regencia*, 13 de diciembre de 1887; *El Imparcial*, 12 de diciembre de 1887; *El Norte de Castilla*, 15 de diciembre de 1887, y *El Liberal*, 12 de diciembre de 1887.

CUADRO 45

Junta Directiva de la Liga Agraria (1887)

Cargo	Nombre
Presidente honorario	[Claudio Moyano
Presidente efectivo	[Adolfo Bayo
Vicepresidente	[Germán Gamazo
"	[José Muro
"	[José Maluquer
"	[Conde de Guaqui
"	[Apolinar de Rato
"	[Conde de Esteban
Secretarios	[Conde de Cassal/ conde de Vía Manuel/ Francisco Carrasco/ Francisco Sánchez de Toca
Vocales	Marqués de Perales/ conde de la Patilla/ conde de las Almenas/ Diego García/ marqués de Claramonte/ Rafael Fernández Soria/ Pío Pérez Aloe/ José Álvarez Mariño/ vizconde de Aliatar/ Julián Benito Chávarri/ marqués de Moriana/ duque de la Roca/ marqués de la Laguna/ Jacinto Orellana/ Faustino Udaeta/ conde de Argillo/ Tomás Beruete/ marqués de Orgelitas/ Lorenzo Fernández Villarrubia

FUENTE: *La Liga Agraria*, 14 de agosto de 1888.

veterinarios, topógrafos y peritos. A todo ello se unía el difícil propósito de dejar a la Asociación al margen las cuestiones políticas. Sin embargo, y a pesar de que en el proceso de formación de la *Liga* se tuvo muy presente esta premisa de no actuar de acuerdo con ningún fundamento político, lo cierto

fue que desde el primer momento muchos contribuyentes y propietarios castellanos comenzaron a dudar, en algunos casos de la propia organización, siendo otras veces la desconfianza una consecuencia inmediata de quienes dirigían la Asociación.

Solo unos días después de concluidas las sesiones de la *Liga*, aparecieron publicados varios artículos en la prensa vallisoletana haciéndose eco de la abultada desproporción que se advertía entre los afiliados y la Dirección de la organización agrícola. Eran bastantes los que advertían las notables diferencias entre quienes se dedicaban a la agricultura propiamente dicha, y aquellos otros que vivían a expensas de la política con el mayor de los empeños. Motivo por el cual, muchos comenzaron a dudar, tanto de las intenciones como del éxito final de la misma. Por otra parte, resultaba evidente que con la entrada en la *Liga* de personas como Gamazo, Moyano y Muro, la aparente heterogeneidad que se intentaba representar quedaba en entredicho, sobre todo al situarse en el control de la organización un buen puñado de representantes de la política caciquil. Y todo ello, además, cuando el propio Gamazo había advertido en la Asamblea su intención de permanecer en la *Liga Agraria*, en tanto se mantuviera en el terreno de lo económico y no interfiriera en la lucha de partidos. En este sentido, un artículo titulado "La agonía de la Liga Agraria", publicado el 15 de diciembre en el diario *El Norte de Castilla*, dejaba constancia del pensamiento de una gran mayoría de contribuyentes castellanos y de los escasos resultados que cabía esperar.

Un nuevo desengaño y una nueva invasión de la política ha venido a demostrar que nada, ni aun los oradores que en los últimos días tronaron contra la política y los políticos, dejan de envenenarse con el virus ponzoñoso contra el cual clamaban con tan entusiasta aplauso de los oyentes. Así como en las sesiones anteriores solo la voz de los contribuyentes doloridos se escuchaba, ayer solo la voz de hombres políticos resonó [...] y aunque tres ilustres castellanos llenaban mi corazón de un satisfactorio orgullo [...] tuve el dolor como compensación fatal que no fuese unánime la opinión de mis paisanos, ni uniformes sus juicios, ni iguales sus propósitos sobre las necesidades de la clase agrícola, dejándose dominar, acaso, por un interés de

partido cuyo exclusivismo paladinamente rechazaban y todos declararon extraño y aun opuesto al espíritu y fin de la Liga Agraria⁵⁵¹.

Con todo, las actuaciones, una vez puesta en marcha la *Liga Agraria*, alcanzarían importantes repercusiones hasta bien entrados los años noventa del siglo XIX, siendo decisiva en muchos ámbitos de la economía, la política y la sociedad española de la época. Si hemos de seguir los criterios de Varela Ortega, la *Liga* llegaría a configurarse como “la organización que hizo más ruido en defensa de los intereses agrícolas”, erigiéndose, además, como el único punto de encuentro para las esperanzas regeneracionistas en aquellos días⁵⁵².

- La Exposición a las Cortes. Del manifiesto de la Liga al «meeting» de Borjas Blancas

Sin duda, fueron la creación del órgano de difusión de la Asociación, la constitución y organización de manera inmediata y generalizada de sucursales, así como la Exposición a las Cortes en febrero de 1888, las acciones que más destacarían durante los primeros meses de actividad de la *Liga Agraria*. El 21 de febrero del año 1888 aparecía el primer número de *La Liga Agraria*, órgano de difusión de la misma Asociación que, con sede en Madrid, iba a publicarse ininterrumpidamente los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes. Con un formato amplio y compuesto por dieciocho páginas, la publicación quedaba convertida en un elemento eficaz, destinado principalmente, además de difundir los quehaceres y marcha de la propia *Liga Agraria*, a poner en constante comunicación a los asociados de todas las provincias y de la capital del modo más rápido y económico. La única cuota impuesta a sus miembros era el importe de la suscripción con la que se debían sufragar los gastos del periódico, así como los que se consideraban indispensables para facilitar las actividades de la propia Asociación⁵⁵³.

⁵⁵¹ *El Norte de Castilla*, 15 de diciembre de 1887. En relación a las influencias de la política en la *Liga Agraria* desde sus primeros momentos de existencia puede verse también Pirala, Antonio (1905), Libro II, ob. cit., pág. 27.

⁵⁵² Varela Ortega, José (2001), ob. cit., pág. 320.

⁵⁵³ *La Liga Agraria*, 16 de enero de 1889.

La idea de la revista había surgido de la Junta Directiva, sólo dos meses después de que fuera organizada propia *Liga Agraria*, en vista de los deseos unánimes que se habían puesto de manifiesto en la Asamblea General y en la mayoría de las provincias, donde las cuestiones agrarias condicionaban el deseo de información relativa a los problemas de la agricultura y la organización frente a los mismos. Las bases de la publicación, recogidas en el primer número del periódico, expresaban las líneas de actuación que impulsarían la misma. Entre éstas figuraban las siguientes: “1ª El periódico será órgano y propiedad exclusiva de la Asociación. 2ª Se publicará bajo la inmediata inspiración de la Junta directiva, que al efecto designará entre sus Vocales la Comisión que haya de constituir su Consejo de Redacción. 3ª La Liga Agraria no tendrá carácter político ni defenderá intereses de ningún partido ni escuela [...] 8ª Cuando la Asociación y el periódico recauden se invertirá en la defensa común, ya publicando libros, folletos, etc., ya convocando a Asambleas extraordinarias, ó ya aumentando el número de los días de publicación del mismo”⁵⁵⁴.

La disolución formal de la Asociación, en mayo de 1891, provocó la momentánea interrupción de la publicación, que se reeditaría más tarde, aunque ya con un formato más pequeño y con menor número de ejemplares. De esta forma, de las dieciocho páginas con las que llegaría a contar en sus comienzos, se pasaría a ocho en 1890, quedando reducidas a tan sólo cuatro páginas en 1891, fecha en la que iniciaría una segunda época de publicación. No obstante, *La Liga Agraria*, continuó como «prospecto» emblemático de carácter eminentemente agrícola hasta los primeros años de la década de los treinta, ya en pleno siglo XX.

Otro de los aspectos más destacados en las informaciones recogidas en los primeros números de *La Liga Agraria* fue la organización, de forma constante, de sucursales a lo largo de varias provincias. En el segundo número de la publicación se recogía una Circular del Ministerio de la Gobernación, publicada en la *Gaceta* del 24 de febrero, en la que se señalaban los aspectos más destacados acerca del cumplimiento de la Ley de asociaciones⁵⁵⁵. En este sentido, las distintas delegaciones fueron tomando

⁵⁵⁴ *La Liga Agraria*, 21 de febrero de 1888.

⁵⁵⁵ A este respecto, la publicación, en relación a la Ley, recogía, entre otros puntos los siguientes: “1º. Se concede un plazo de cuarenta días desde el 28 del corriente para que las Asociaciones ya creadas se inscriban en el Registro del Gobierno de la provincia, en la forma que dispone el art. 3º de la ley de 30 de junio último; 2º. Terminado este plazo, podrán

forma, unas veces a iniciativa de las propias Juntas Directivas, siendo en otras ocasiones a petición de los propietarios y agricultores de los lugares donde se instaba su ubicación. Era habitual la previa organización de algún «*meeting*» como escenario idóneo donde darse a conocer, exponiéndose a continuación las medidas que debían tomarse ante la difícil situación en la agricultura. Solo así se entiende que en poco tiempo, un elevado número de pueblos de las provincias castellanas contaran con alguna delegación de la *Liga Agraria*.

Al mismo tiempo que comenzaba la organización gradual de sucursales de la *Liga* en toda España, era presentado a las Cortes un extenso folleto de más de ochenta páginas en una *Exposición* que desaprobaba la actitud económica del Gobierno, dirigido en esos momentos por el partido liberal de Sagasta. En el ámbito de las discusiones referidas al proyecto de presupuestos presentado por el ministro López Puigcerver para el año económico 1888-1889, una excepción, dentro de los remitidos por Hacienda, había sido la relativa a la contribución rústica y pecuaria, así como a los cupos de consumos que continuaban en estudio por una Comisión encargada de pronunciarse al respecto. Durante algunos meses, esta Comisión soportó la oposición de un número importante de diputados, representantes en su mayoría de comarcas y regiones productoras, partidarios de la aprobación de un impuesto sobre la renta que ya habían manifestado su deseo de aumentar los aranceles, así como de suprimir el impuesto de consumos en los artículos de primera necesidad⁵⁵⁶.

Una parte de la prensa en todo el país publicó a principios del mes de febrero de 1888, el resumen de los acuerdos tomados por la Asamblea General de la *Liga Agraria* como conclusiones de la *Exposición* destinada a las Cortes⁵⁵⁷. Sin embargo, aquellos acuerdos nunca llegaron a su destino al entenderse que debían ser otras las resoluciones que habrían de remitirse a las Cámaras del Congreso y del Senado⁵⁵⁸. De esta forma, los acuerdos del

inscribirse en otro igual, las nuevas asociaciones en el 1º creadas; 3º. En los sucesivos no se hará inscripción alguna que se solicite fuera de las condiciones marcadas en la dicha ley". *La Liga Agraria*, 28 de febrero de 1888.

⁵⁵⁶ Pirala, Antonio, *España y la Regencia...*, Libro II, ob. cit., pág. 27.

⁵⁵⁷ Véase como ejemplo: *El Norte de Castilla*, 10, 11, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de febrero de 1888; *El Correo*, 2 de febrero de 1888, y *La Regencia*, 3 de febrero de 1888.

⁵⁵⁸ En efecto, la confusión fue debida a la creencia extendida de que se remitiría a las Cortes una redacción basada en las conclusiones y acuerdos aprobados durante la primera Asamblea General. *La Liga Agraria*, 14 de agosto de 1888; *El Imparcial*, 13 de diciembre de

mes de diciembre fueron considerados por la Junta Directiva de la *Liga Agraria*, simplemente como una tendencia dominante entre los agricultores, en los que se indicaban los males que impedían el desarrollo de la riqueza agrícola en nuestro país. Suponían, en definitiva, el reflejo más evidente de unas aspiraciones que necesariamente debían ser concretadas en la primera Asamblea que celebrara la Asociación⁵⁵⁹. Las conclusiones de la Junta Directiva, dos meses después de celebradas las sesiones, no solo se admitieron como las más oportunas, sino que, según la propia Junta Directiva, debían ser consideradas como unas fórmulas «gacetales»⁵⁶⁰.

De manera sucinta, entre los puntos aprobados por la Asamblea destacaban la reducción a un tipo moderado en la contribución directa soportada por la agricultura y la ganadería; la contribución por parte de los ciudadanos a las cargas del Estado en proporción a sus haberes; la sustitución del impuesto de consumos por otro que no condujera a contraer hábitos peligros para el orden y las buenas costumbres; la modificación del sistema recaudatorio en las contribuciones directas, tanto en la forma como en la ejecución; la denuncia de los tratados vigentes, así como la celebración de otros nuevos que hicieran más sensible el beneficio de la reciprocidad para España; la búsqueda por parte de la Administración de unos precios medios más adecuados para el agricultor, además de la rebaja en los derechos de consumo que pudieran gravar la producción; la regulación de la riqueza forestal, conservando la propiedad el Estado y procurando que las ventas no sirvieran para una mayor devastación; la unificación de las tarifas en el transporte ferroviario; el fomento de la apertura de canales y la construcción de pantanos; la creación de Bancos agrícolas en los puntos donde lo permitiesen los fondos de pósitos; la atención al establecimiento de campos agronómicos de experimentación; la reforma de los reglamentos municipales en materia de mataderos y venta de carnes, evitando en la medida de lo posible que los mayores beneficiarios fueran siempre los intermediarios; la atención a la seguridad en los campos, a las personas y propiedades que fueran objeto de ataques; el estudio de las posibilidades que pudiera ofrecer el tabaco y su plantación a la agricultura española; la petición de un recargo a la introducción de cereales y carnes vivas o muertas

1887 *La Regencia*, 13 de diciembre de 1887; *El Correo*, 12 de diciembre de 1887; *El Norte de Castilla*, 15 de diciembre de 1887 y *El Liberal*, 13 de diciembre de 1887;

⁵⁵⁹ *La Regencia*, 3 de febrero de 1888.

⁵⁶⁰ Santiago, "La Liga Agraria", art. cit., pág. 42. Asimismo en *La Regencia*, 3 de febrero de 1888.

procedentes del extranjero, y la revisión de los aranceles teniendo en cuenta el actual estado económico, así como la mejora de la enseñanza⁵⁶¹.

No obstante, el documento definitivo presentado a las Cortes en febrero de 1888, estaba bien estructurado y argumentaba con abundantes datos y estadísticas todo aquello que había servido durante la celebración de la Asamblea como hilo conductor o como justificación de los aspectos más relevantes que la crisis había puesto de relieve en el país. Presentado en un primer momento al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda, finalmente y de manos de Germán Gamazo, la *Exposición* llegó a las Cortes acompañada de un emotivo discurso en el que se significaba lo siguiente: “Presento una exposición de la Liga Agraria en la que los agricultores españoles, por el órgano de la Junta directiva que ellos nombraron, someten a las Cortes los recursos que consideran de más urgente aplicación para poner alivio, ya que no remedio radical, a los males que sufre la agricultura”⁵⁶².

Al margen de los detalles que rodearon su presentación, la *Exposición* quedó estructurada en dos partes bien definidas a la que se incorporó un Apéndice que intentaban ser una síntesis de los acuerdos, efectivamente tomados por la Asamblea de la *Liga* en encuentros anteriores. En la primera parte se señalaba el carácter especial de la crisis. Ésta, se afirmaba, no guardaba ninguna relación con otras que anteriormente se habían producido en España. En el propio texto se argumentaba: “No es propiamente una crisis, sino una situación nueva”. Por otra parte, se insistía en que las realizaciones habrían de desarrollarse al margen de toda escuela o vinculación política, siendo una de las cuestiones más importante el abaratamiento de la producción. A este respecto se recordaba que las cargas ocasionadas por el gravamen fiscal suponían el único factor del coste de la producción agrícola⁵⁶³.

⁵⁶¹ *La Liga Agraria*, 7 de marzo; 7 de abril; 21 de mayo; 28 de mayo, y 14 de agosto de 1888. Véase también en *El Norte de Castilla*, 10 de febrero de 1888.

⁵⁶² La Junta Directiva había decidido, en efecto, presentar con su Presidente a la cabeza, la *Exposición* al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Hacienda, en aquellos instantes Práxedes Mateo Sagasta y don Joaquín López Puigcerver, respectivamente, como acto de cortesía y buena voluntad. Asimismo, se autorizó que fuera el propio Germán Gamazo, el encargado último de hacer la presentación en las Cortes del citado documento. *La Liga Agraria*, 21 de febrero de 1888.

⁵⁶³ Alba, Santiago (1902), ob. cit., págs. 43 y 44. Asimismo en Pirala, Antonio, *España y la Regencia...*, Libro II, ob. cit., págs. 27 a 29.

Una segunda parte la componían siete *Proposiciones* que, en última instancia, venían a significar las aspiraciones de la *Liga*. La primera de ellas estaba referida a las “Economías en los departamentos ministeriales”, que debían alcanzar una nivelación entre los gastos ordinarios y extraordinarios, y aquellos otros ingresos que resultasen líquidos en el presupuesto de 1888. La segunda de las proposiciones hacía referencia a la “Percepción por el Estado en las aduanas de los derechos de consumos sobre los artículos de comer, beber y arder que procedan del exterior”. Además, se solicitaba que los municipios, mediante la autorización y aprobación del Ejecutivo, pudieran regular para sí la percepción de los consumos en la forma y con las tarifas que considerasen más convenientes a sus intereses, con lo que podrían nivelarse muchos presupuestos deficitarios. La tercera proposición consideraba necesario el “Establecimiento de un impuesto general sobre todas las rentas”. Las razones que se argumentaban para la aprobación del nuevo impuesto estaban en razón a que por el mismo, y sin que ello supusiera un recargo en las rentas que ya contribuían al sostenimiento de los servicios públicos, vendrían a tributar aquellas otras que disfrutasen de una completa exención. La siguiente proposición exigía la inmediata reforma de la contribución industrial y de comercio; especialmente lo referido al reglamento y a su aplicación. Se argumentaba en quinto lugar, la necesidad de sustituir el impuesto sobre la sal que percibía el Estado “con arreglo a las tarifas de consumos”. La penúltima proposición solicitaba la “Rebaja de 77 millones en la contribución por cultivo y ganadería”, lo que representaba por aquellos días un 43,50 por ciento de los 177 que constituían el impuesto. Tal como en su momento señalaría Santiago Alba, solo unos años más tarde, Germán Gamazo llevaría al llamado presupuesto de la «paz», entre 1893 y 1894, la rebaja por transformación de la contribución territorial. Por último, la *Liga Agraria* requería al Gobierno un recargo de los derechos arancelarios sobre aquellos artículos extranjeros que no estuvieran comprometidos mediante acuerdos o tratados internacionales⁵⁶⁴.

Ciertamente, y a pesar del trabajo y el esfuerzo que habían sido necesarios para elaborar las propuestas, éstas apenas sirvieron para organizar algunas manifestaciones públicas y proporcionar un buen número de páginas de protesta en la prensa diaria. A pesar de todo ello, las

⁵⁶⁴ Ibídem, págs. 29 y 30; Alba, Santiago (1902), ob. cit., págs. 44 a 52; *El Norte de Castilla*, 25 de febrero de 1888, y *El Imparcial*, 10 de febrero de 1888.

reacciones no se asumieron de igual manera en el seno del partido liberal. Como se estudiará más adelante, efectivamente una gran parte de la *Exposición* sería utilizada más tarde como una plataforma del grupo gamacista para exigir la puesta en marcha de una política económica que, curiosamente, iba a rivalizar con la practicada por el partido encargado del Gobierno. Es decir, el propio partido liberal.

En consecuencia, los proyectos del ministro Puigcerver, así como los de sus sucesores durante el llamado «Parlamento Largo» de Sagasta, llevaron durante casi un lustro al Ejecutivo a situaciones de continuas crispaciones y disidencias. Una dinámica que no se normalizaría a pesar de las sucesivas crisis internas, dando lugar a situaciones de evidente «riesgo» en el sistema político surgido de la Restauración canovista.

No se detuvieron por ello, ni mucho menos, las actividades de la *Liga Agraria* en los meses sucesivos⁵⁶⁵. Después de la Exposición a las Cortes, se procedió contra el Proyecto de Ley sobre Alcoholes que por esas mismas fechas se preparaba en el Ministerio de Puigcerver, y cuya iniciativa ya había sido planteada por el marqués de Cussano durante las sesiones de la primera Asamblea. A este fin, la Junta Directiva nombró inmediatamente una Comisión encargada de elaborar una ponencia de la que formaron parte activa Apolinar de Rato, Toca, Agustín Alfaro y el propio marqués de Cussano. Dicha actividad se tradujo finalmente en otra Exposición de la *Liga Agraria* dirigida a las Cortes, presentada de forma definitiva en abril de 1888⁵⁶⁶.

⁵⁶⁵ Incluso, no faltaron las supuestas asociaciones que, sirviéndose del nombre de la *Liga Agraria*, intentaron aprovechar la situación para obtener algún tipo de beneficio. De esta forma, y haciéndose eco de una noticia recogida en el *Diario de Barcelona*, podíamos leer en *El Liberal* una noticia referida a *La Liga Agraria Española de Barcelona*. En la misma se advertía: "Se nos ha dicho que a los agricultores que, en virtud del llamamiento público, acudieron á firmar una representación que la Liga Agraria española elevaba á la Reina, pidiendo protección para la agricultura, ahora se les exige el pago de cincuenta pesetas, suponiendo que en el mero hecho de firmar se inscribieron en la Liga y deben abonar la cuenta de un año. Creemos que a la Liga Agraria española le toca esclarecer un hecho que no nos atrevemos a calificar, y que redunde en descrédito de aquella asociación". Sólo unos días más tarde aparecía en el órgano de la *Liga Agraria* el siguiente recorte: "No teniendo conocimiento la Junta Directiva de la Liga Agraria de Madrid de la existencia de la Liga Agraria española establecida en Barcelona, llamamos la tención de nuestros asociados para que tengan entendido que esta nueva asociación nada tiene que ver con la nuestra". *La Liga Agraria*, 7 de julio de 1888.

⁵⁶⁶ Véase, la *Exposición de la Liga Agraria a las Cortes sobre el Proyecto de Ley de Alcoholes*, Tipografía de Manuel G. Hernández, Madrid, 1888; *La Liga Agraria*, 14 de marzo, 14 de abril y 21 de abril de 1888, y Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 52.

Tampoco las manifestaciones y reuniones multitudinarias dejaron de producirse en nombre de la *Liga*, siendo la ciudad de Borjas Blancas, como luego se explicará, el lugar donde la Asociación lograría alcanzar uno de los mayores reconocimientos. En este sentido, fue en ulteriores convocatorias cuando comenzaron a evidenciarse comparecencias reiteradas de personalidades dedicadas a la política, siendo los encuentros de Valladolid y Palencia un claro ejemplo de lo que aquí se expone. Esta circunstancia, empero, sirvió para que muchos de los asistentes fueran proclamados como los auténticos representantes de la *Liga* en Madrid. Entre los invitados a Valladolid fue muy aclamada la presencia de los diputados Muro, Pimentel y Nieto, además de representantes de todas las provincias de Castilla la Vieja y de León. La ausencia finalmente confirmada de Germán Gamazo a los eventos organizados en la capital castellana, llegaron a provocar un considerable enfado, expresado en muchos caso a través de gritos y protestas en contra de dicha actitud⁵⁶⁷.

Muy similar al de Valladolid, fue el «meeting» celebrado en Palencia a iniciativa de la *Liga Agraria* establecida en aquella ciudad. Abierta la sesión por el señor de la Riva, y una vez expuestos los trabajos presentados con el fin de contener la crisis económica, tomó la palabra don Joaquín Monedero, propietario y vicepresidente de la *Liga* en dicha provincia, quien propuso un voto de gratitud a la mesa, así como la autorización a la misma para requerir cuanto fuera necesario del Gobierno. Puso punto final a su intervención, solicitando que se hiciera extensible el agradecimiento de los agricultores a los senadores y diputados que mantenían su oposición frente a los proyectos económicos del Ejecutivo en Madrid. A este respecto, se produjo un leve incidente cuando se recriminó al duque de Frías, diputado por Cervera, su disposición a colaborar con Puigcerver. La reunión concluyó con la aprobación de una Exposición que posteriormente sería remitida a la Reina⁵⁶⁸.

Por aquellas fechas, todavía se publicaron algunos artículos en los que se hacían alusiones a nuevas reuniones ligeras, destacando por su profusa asistencia la celebrada en Teruel, donde se puso de manifiesto, una vez más, el problema de la agricultura en nuestro país. En la misma, y después de expresada su conformidad con las conclusiones adoptadas por la *Liga*

⁵⁶⁷ *La Época*, 26 de marzo de 1888, y *El Norte de Castilla*, 27 de marzo de 1888.

⁵⁶⁸ *La Regencia*, 28 de marzo de 1888.

Agraria, el Presidente, así como la mesa, acordaron por unanimidad adherirse a las propuestas presentadas en Valladolid, elevando, igualmente, otra Exposición a la Reina para hacer “palpable el aflictivo estado de la provincia”⁵⁶⁹.

Tomando como pretexto este tipo de reuniones, comenzaron a desvelarse ciertas insinuaciones en las que se especulaba acerca del auténtico significado de las mismas. La presencia, cada vez más habitual de políticos entre los oradores y miembros de la *Liga*, evidenciaba la trascendencia que éstos podían llegar a tener en un posible desplazamiento hacia posiciones proteccionistas. En consecuencia, la *Liga Agraria* hubo de publicar una declaración, en la que “ajena a todo interés de parcialidad política”, volvía a poner nuevamente de manifiesto su apartada connivencia con los partidos políticos y con aquellas ideas que fueran contrarias a la legalidad vigente⁵⁷⁰.

Coincidiendo con la clausura de las Cortes y el final de la campaña económica, la Junta Directiva, en una sesión celebrada el día 5 de julio de 1888, hizo público el denominado *Manifiesto de la Liga Agraria*. En el documento, suscrito por su presidente Adolfo Bayo, muchos quisieron ver la evidencia de la apuesta para incorporarse, como parte activa y de forma definitiva, a las actividades e instituciones políticas⁵⁷¹. Era evidente que ante la proximidad de las elecciones que debían celebrarse en el mes de septiembre para renovar las Diputaciones provinciales, se imponía la necesidad de que la clase agrícola tomara de una vez por todas, parte en dicha contienda. Adolfo Bayo, muy preciso en este sentido, quiso reflejarlo en el *Manifiesto* que merece la pena reflejar casi en su totalidad.

Las esperanzas de la Junta de gobierno de la Liga no han sido defraudadas totalmente. La regeneración económica de una Nación no puede ser obra del momento, pues, como se ha dicho y sabido es; necesita espacio y tiempo. La atención pública y la de los Poderes del Estado ha convergido rápidamente hacia nuestro campo, y esto constituye de por sí una gran etapa recorrida en breve término, á pesar de las dificultades y de los obstáculos que debían vencerse y parecían insuperables. Se han echado los primeros jalones que

⁵⁶⁹ *La Liga Agraria*, 14 de mayo de 1888, y *La Regencia*, 7 de abril de 1888.

⁵⁷⁰ *La Liga Agraria*, 7 de abril de 1888; *La Época*, 18 de febrero, 26 y 27 de marzo de 1888. Además, véase *La Regencia*, 27, 28 y 29 de marzo de 1888.

⁵⁷¹ Pirala, Antonio (1905), Libro II, ob.cit., pág. 66.

señalan el camino directo para obtener la reparación de nuestros agravios, y para poder divisar horizontes más amplios y diáfanos; se ha dado, pues, principio á nuestra patriótica obra, y sólo depende de nosotros que esta avance y el éxito más completo corone los esfuerzos de todos. Pero para que éstos no resulten estériles y no se pierda el fruto conseguido, es necesario la unión más estrecha y fraternal entre nuestros asociados, y que no escaseemos sacrificio ninguno por la causa que nos es común. Hemos de levantar nuestro espíritu y el de cuantos tienen la misma solidaridad de intereses, pues nos va en ello el porvenir de nuestros hijos. Tenemos que desplegar todas las energías de nuestra voluntad para hacernos respetar y lograr nuestros fines. Hay que desechar las vacilaciones que embargan y empequeñecen, porque la órbita en que nos movemos es la de la ley y la del derecho, y esto presta resolución y fuerza poderosa [...] Para que nuestros justos deseos se conviertan en realidad consoladora, me atreveré á señalaros ante todo y sobre todo que fijeis vuestra atención preferente en el modo y forma con que se elaboran las grandes influencias de la política, las cuales dan norma y medida de lo que puede esperarse de los Gobiernos. Nuestro organismo político, que empieza por los Municipios y acaba en las Cortes, llevan, por la representación que tienen del país, una influencia irresistible en la gobernación del mismo de manera tal, que, si aquella es beneficiosa para los intereses materiales, éstos alcanzarán resultados fructuosos; pero sí, por el contrario, no se inspira en el bien de los que representan o posponen aquéllos á sus compromisos o ventajas de medro personal, se verán siempre postergados y dormirán en el silencio del olvido. Deber nuestro es que esto último no suceda, como fatalmente viene notándose, por la incuria y abandono con que miramos y ejercemos una de las primeras y más trascendentales funciones que la ley nos otorga. Por lo mismo, tenemos la necesidad y el deber de sacudir la indiferencia que nos domina, y practicar el derecho de nombrar las Corporaciones populares, para que á las mismas llevemos hombres que, identificados con nuestros intereses, patrocinen y apoyen en la medida de sus fuerzas nuestros derechos postergados. Nuestra fuerza es grande, y puede ser incontrastable si acudimos solícitos á elegir en las próximas elecciones provinciales personas, á ser posible, de entre nuestros asociados, ó cuando menos de los que ofrezcan y prometan cumplir como buenos en la defensa de la cuestión económica. Realizado esto, y lo mismo para la elección de los Ayuntamientos y Diputados á Cortes en su día, tened por seguro que habremos adquirido el predominio vinculado en otras manos, merced á nuestras propias flaquezas y al abandono en que dejamos una de las máspreciadas garantías que nos concede la Constitución del Estado⁵⁷².

⁵⁷² "El Manifiesto de la Liga Agraria", publicado en *La Regencia*, 14 y 15 de julio de 1888; *El*

En este mismo orden de cosas, la culminación del proceso de consolidación de la *Liga Agraria* iba a desarrollarse en la pequeña localidad ilerdense de Borjas Blancas. Ésta ya había sido protagonista meses atrás de una importante reunión de agricultores convocados, tanto por la *Liga Agraria* como por el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*⁵⁷³. Durante el mes de septiembre de 1888, el «meeting» de Borjas Blancas iba a significarse como el punto de inflexión dentro de la identidad de una Asociación que había carecido de un ideal político preciso y concreto. Para un sobrado número de personas vinculadas a la *Liga*, el hecho de que al acto público asistieran representantes de todos los partidos políticos y de todas las clases sociales, significaba, sencillamente, que “la Liga Agraria no sería ya arma de ningún partido político”. Desde las páginas del órgano de difusión de la misma se advertía:

la Liga Agraria tiene ya vida propia y cuenta ya con la suficiente robustez para resistir cualquier influencia extraña que en ella intentara ingerirse. Una prueba de este aserto ha sido el meeting de Borjas Blancas [...] La Liga Agraria, que no pretende otra cosa que la protección del poder civil, ha comprendido que en España todo está supeditado á la política [...] Por eso la Liga Agraria, sin descender al terreno escabrosos de la política menuda y de bandería, dirige sus esfuerzos al seno del cuerpo electoral, con objeto de hacer ver a los electores el poder que pueden constituir tan pronto como unan sus voluntades y las traduzcan en hechos, llevando á aquellos altos Cuerpos legisladores los representantes de la agricultura, en lugar de los representantes de una política infecunda y rutinaria⁵⁷⁴.

A este fin, con objeto de propagar sus ideas y de infundir en los ánimos de los agricultores la conveniencia de su autonomía electoral, el

Norte de Castilla, 18, 19 y 29 de julio de 1888; *El Imparcial*, 14 de julio de 1888, y *La Liga Agraria*, 21 de julio de 1888. Asimismo, en Piralá Antonio (1905), Libro II, ob. cit., págs. 66 y 67, y Ortega Rubio, Juan (1905), Tomo I, ob. cit., págs. 391 y 392. Por aquellos días, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* puso también en circulación otro manifiesto, donde se criticaba el “espectáculo y las fatales consecuencias” que los representantes del país estaban provocando en la economía del país. “El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro a los Agricultores del País”, *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Barcelona, 1888, págs. 229 a 331, y *La Regencia*, 25 de julio de 1888.

⁵⁷³ Este primer acto de la *Liga Agraria* en Borjas Blancas no sería muy difundido por la prensa en general, a excepción del órgano propiedad de la *Liga*. En efecto, el 1 de mayo de 1888, la localidad acogió una multitudinaria manifestación para reivindicar, una vez más, las propuestas que venía haciendo la Asociación. La reunión, además, sirvió como inicio de una relación con el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, nexo que no concluiría hasta la definitiva extinción de la *Liga Agraria*. Véase, *La Liga Agraria*, 14 de mayo de 1888.

⁵⁷⁴ *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1888.

ensayo de Borjas Blancas significaba la esperanza para invertir unos resultados que, hasta esos momentos, resultaban inalcanzables y un tanto utópicos. Dentro de este mismo contexto, existía la creencia de que los agricultores castellanos no poseían la suficiente independencia ni la espontaneidad para llevar a los candidatos ligueros hasta las Cortes. El mensaje agrarista, promovido desde la propia *Liga*, debía moverse en un contexto claramente a favor de la injerencia y la intervención en los órganos de poder, dentro, como es natural, de las instituciones que ofrecía el Estado. Por otra parte, el mensaje proteccionista no bastaba por sí mismo para modificar el difícil panorama económico nacional, especialmente si a aquél no se le dotaba de una suficiente y precisa instrumentalización política.

En consecuencia, la idea de constituir un partido agrario suponía alterar el equilibrio entre los intereses agrarios y los del resto de partidos políticos, añadiendo, si cabe, más confusión a la vida política en España. Tampoco faltaron quienes «predicaron» que las clases agrícolas eran, por su propia naturaleza, grupos inertes y pacientes que jamás podrían adquirir los medios de acción necesarios para resistir e imponerse a las trampas y juegos de los partidos políticos, mucho más ávidos en el manejo del poder y de la Administración del Estado⁵⁷⁵. En este sentido, aun suponiendo que un partido agrario pudiera organizarse con aspiraciones para lograr el poder, para muchos electores la idea suponía que el advenimiento de un gobierno de corte agrarista, en poco o nada se diferenciaría de aquellos que hasta el momento habían venido ejerciendo su dominio ante el cuerpo electoral⁵⁷⁶.

Así las cosas, lo más fácil fue asumir una posición intermedia. No en vano, si la cuestión agraria era insuficiente para aportar elementos significativos con los que constituir un partido político con aspiraciones de gobierno, las clases agrícolas podrían recurrir, en cualquier caso, al amparo y patronato de alguna formación política ya en marcha. Más tarde o más temprano, el instinto de conservación, dentro de lo que ya era un mecanismo de relojería dentro del «turnismo» político, suscitaría que la cuestión agraria quedase convertida en el elemento esencial de lucha hacia el poder.

⁵⁷⁵ D'ayot, Manuel Lorenzo, "Los intereses agrícolas y los partidos políticos", en *Revista Contemporánea*, 30 de agosto de 1887, págs. 22 y 23.

⁵⁷⁶ *Ibidem*, págs. 24 y 25.

Los días previos a la cita en Borjas Blancas ya era perceptible la agitación en la pequeña localidad. La esperada presencia de hombres como el ex-ministro Romero Girón, o el propio Presidente de la *Liga Agraria*, Adolfo Bayo, daban una idea ante la prensa y la sociedad de la importancia del acto. Los periódicos de Madrid, así como el de otras provincias, comenzaban a recabar la opinión de muchas de las personalidades que debían desplazarse a Borjas Blancas. El propio Bayo, había manifestado su particular interés de “*excitar a la unión de los elementos agrícolas*”, para acudir a las próximas elecciones⁵⁷⁷.

De madrugada habían comenzado a llegar comisiones procedentes de los pueblos de Cataluña y Aragón. Se esperaba la presencia de los representantes de los Institutos Agrícolas de Barcelona, Reus, Tarragona y otros lugares, entre los que se encontraban los marqueses de Aguilar, Puig, Galox, Reus, todos ellos representantes del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, junto a Roig, Catalá, Cadella, Camps, Montoliú, el senador Maluquer, y los conocidos proteccionistas Rius Badía, Bosch, Diamenge, además de representantes de *El Imparcial* y de la práctica totalidad de los periódicos de Barcelona, Tarragona y Madrid.

A las cuatro de la tarde dio comienzo en la plaza pública el «meeting», único lugar donde se podía dar cabida a las cerca de las 4.000 personas que habían concurrido al acto⁵⁷⁸. Una multitud diversa que estaba representada por todos los partidos y todas las clases sociales, y en la que se podían ver a miembros del partido republicano, hombres de la *Unión Católica*, aristócratas, así como a obreros humildes y jornaleros del campo. Abierta la sesión por el presidente de la *Liga Agraria*, se dieron lectura a algunos de los telegramas y cartas de adhesión, donde estaban recogidas representaciones de más de 300 centros agrícolas, sucursales de la Asociación y de otras corporaciones⁵⁷⁹.

Tras la intervención del conde de Torregrosa, fue Bonet, conocido infatigable propagandista y entusiasta de la defensa de los intereses

⁵⁷⁷ De igual forma, Bayo había advertido con anterioridad que siempre se respetarían las organizaciones de los partidos ya constituidos *La Regencia*, 1 de septiembre de 1888.

⁵⁷⁸ Borjas Blancas representaba a una población repartida entre las actividades primarias y secundarias, que no sobrepasaba de los 3.800 habitantes. *La Regencia*, 3 de septiembre de 1888, y *La Liga Agraria*, 7 de septiembre de 1888.

⁵⁷⁹ *La Liga Agraria*, 7 de septiembre de 1888; *La Regencia*, 3 de septiembre de 1888, y *El Norte de Castilla*, 5 de septiembre de 1888.

agrícolas, el encargado de elogiar el programa de la *Liga* y la conducta de su presidente. En su opinión, los políticos vivían “chupando el sudor y la sangre de los trabajadores”. Recordó, asimismo, la necesidad de seguir luchando para lograr los propósitos ligueros. Poco antes de finalizar su intervención y de manifestar su apoyo al presidente de la *Liga*, Bonet aseguró: “La Liga hace temblar á los que viven del trabajo del pueblo porque ha puesto al descubierto las llagas de la Administración; ahora toca cauterizarlas”⁵⁸⁰.

Tras unas breves palabras de saludo al pueblo catalán de Adolfo Bayo, fue muy celebrado el discurso de Ramón María Catá de la Torre, advirtiendo que los distintos Gobiernos habían procurado ocultar las quejas al país. Recordó la *Exposición* elevada por el *Instituto Agrícola*, suscrita por más de 22.000 firmas, señalando que la impotencia de los agricultores era debida a su falta de unidad. En consecuencia, parte de las opciones agraristas pasaban por la imposición de candidatos y el abandono de las actuaciones librecambistas⁵⁸¹.

Las cuestiones políticas tuvieron su prolongación en la intervención del marqués de Aguilar, diputado a Cortes por Gerona, al indicar que sus electores no le habían preguntado nunca sus ideas políticas. También Maluquer dejó claros sus planteamientos, explicando que Cataluña agradecía el apoyo de los representantes que habían votado en la última legislatura las reformas propuestas por la *Liga Agraria*. En este sentido declaraba: “Yo voté también, porque cuando se trata del interés de los agricultores, procedo lo mismo contra Sagasta que contra Cánovas; lo digo aquí y frente al banco azul [...] Cuando se abran las Cortes, demostraré que no me importa no resultar ministerial. Estoy en la Liga, porque entre la patria y el gobierno, para mí lo primero es la patria”. No quiso el señor Maluquer retirarse de su intervención, sin dejar constancia de que era preciso exigir a los partidarios de la *Liga*, una lucha, tanto en la elecciones como en las Cortes, contra los enemigos de aquélla⁵⁸².

⁵⁸⁰ *La Liga Agraria*, 7 de septiembre de 1888. También en *El Norte de Castilla*, 5 de septiembre de 1888.

⁵⁸¹ *La Liga Agraria*, 7 de septiembre de 1888.

⁵⁸² *Ibíd.*; *La Regencia*, 3 de septiembre de 1888, y *El Norte de Castilla*, 5 de septiembre de 1888.

Oídas las palabras de algunos de los oradores, como Tobella, Rius Badía y Corbella, comenzó su intervención el Presidente, aludiendo a los 300 millones de reales que habían sido pagados por la agricultura como contribución territorial en 1854, cantidad que ya había superado los 800 millones en el último ejercicio. Atribuyó los males económicos del país, entre otras razones, a las condiciones en las que se habían firmado los tratados de comercio y recordó que en su programa, la *Liga Agraria* ya había puesto de manifiesto esta situación. A continuación invitó a los ministros libremercantilistas a dejar paso a las nuevas ideas proteccionistas. Insistió en la importancia que habrían de tener en el futuro la lucha electoral y la elección de candidatos vinculados a las tesis ligueras, señalando que si volvía en alguna ocasión a ser diputado en Madrid y debía elegir entre su partido y el país, siempre permanecería al lado de este último, hecho que ratificó haciendo un solemne juramento en este sentido⁵⁸³.

Antes de finalizar, lanzó un elogio al señor Gamazo, manifestando que las gestiones del mismo habían contribuido a rebajar las contribuciones, aunque no lo suficiente, así como a conseguir ciertas ventajas relativas a los consumos. Solicitó del Gobierno que meditara en todo aquello que proporcionara tranquilidad al país, prometiendo dar a conocer en proyecto ligero en toda España. Declaró también que la *Liga Agraria* no se conformaría con las cortas reducciones en los gastos que habían realizado hasta ese momento los ministros del Gobierno, siendo preciso que se adoptaran las conclusiones que la Asociación ya había aprobado con anterioridad. Con las palabras del Presidente se dieron por finalizadas las intervenciones del «meeting», siendo el encargado de cerrar la reunión el marqués de Olivar⁵⁸⁴.

En honor a la verdad, tras los actos públicos en Borjas Blancas, muchos proteccionistas, no sólo de Cataluña, creyeron alcanzado su objetivo⁵⁸⁵. El hecho en sí mismo había supuesto una clara proclamación del proteccionismo y del deseo de participación de la sociedad agrícola en la vida política. Una circunstancia que pocas veces se había vivido en España. Lo

⁵⁸³ *La Liga Agraria*, 7 de septiembre de 1888.

⁵⁸⁴ En la clausura, el propio marqués de Olivar afirmaría que "había llegado la hora de obrar y no hablar", *La Liga Agraria*, 7 de septiembre de 1888; *La Regencia*, 3 de septiembre de 1888, y *El Norte de Castilla*, 5 de septiembre de 1888.

⁵⁸⁵ Pirala, Antonio (1905), Libro II, ob. cit., págs. 68 y 69. Véase también en *Revista Contemporánea*, 15 de septiembre de 1888.

cierto es, que aunque con una participación «modesta», una parte importante de la sociedad agrícola y propietaria del país había sido representada para clamar en contra de la política oficial y sus consecuencias⁵⁸⁶. Más allá de las intenciones de la *Liga Agraria*, superado el episodio de Borjas Blancas fueron muchos los que se apresuraron a aventurar el declive del gobierno fusionista, liderado por un Sagasta cada vez más comprometido con el «turno» y la Regencia⁵⁸⁷.

En este estado de cosas, las esperanzas de éxito del bloque agrarista solo podrían garantizarse si se mantenía el respeto a las afiliaciones personales de cuantos acudieran con su apoyo a la *Liga*. Se habían aceptado los partidos políticos ya constituidos, a sus hombres, y se habían confirmado todas las consignas vertidas en el famoso *Manifiesto* proclamado a los cuatro vientos por Adolfo Bayo. La lucha electoral, en definitiva, debía plantearse desde dentro de algún partido que proporcionara todos los resortes necesarios para alcanzar el éxito. Un propósito que parte del partido liberal estaba dispuesto a proporcionar.

- La Unión económico-electoral y el «meeting» de Barbastro

A comienzos de 1889, la nueva campaña que debía emprender la *Liga Agraria* se presentaba más difícil y comprometida si cabe, pese a los buenos recuerdos todavía recientes de Valladolid, Palencia y Borjas Blancas. Al anunciarse la reunión de la segunda Asamblea para los primeros días del mes de enero de aquel mismo año, la Junta Directiva, mediante una circular dirigida a sus asociados, alentaba a todos sus militantes a que mostraran el mismo y decidido empeño que habían exhibido unos meses antes⁵⁸⁸. La Asociación, resentida más por los fracasos que por sus triunfos económicos, se presentaba ahora con pocos logros en su haber y con la sensación de incertidumbre entre sus asociados. Todo ello, pese al escaso tiempo

⁵⁸⁶ *La Correspondencia de España*, 3 de septiembre de 1888; *El Correo*, 2 y 3 de septiembre de 1888, y *La Izquierda Dinástica*, 3 de septiembre de 1888;

⁵⁸⁷ Véase, por ejemplo, *La Unión Católica*, 3 de septiembre de 1888; *La Regencia*, 3 de septiembre de 1888, y *La Época*, 3 de septiembre de 1888.

⁵⁸⁸ *La Liga Agraria*, 7 de enero de 1889.

transcurrido desde los últimos éxitos obtenidos en convocatorias anteriores⁵⁸⁹.

Con una asistencia cercana a los cuatrocientos representantes, la segunda de las Asambleas, celebrada también en el Paraninfo de la Universidad Central, sirvió para advertir de las vicisitudes y de la marcha de la Asociación, a pesar de los proyectos y enmiendas que, desde su creación, se venían defendiendo y presentado en favor de la agricultura. Bayo fue el encargado de agradecer los esfuerzos llevados a cabo por quienes secundaban el proyecto ligero y mantenían su perenne trabazón con los sillones de las Cortes. En este sentido, su postura a favor de personas como el vicepresidente Germán Gamazo, considerado un «héroe» en la *Liga*, era ya en aquellos momentos suficientemente conocida. En todo caso, y consciente del relativo fracaso alcanzado hasta esos momentos, Adolfo Bayo confirmaba:

Si los éxitos no han correspondido á los deseos de esos señores que han defendido con tanto tesón en el Parlamento y fuera de él, por ser diputados o senadores, nuestras ideas para conseguir nuestros propósitos, no ha sido suya la culpa ni tampoco de la Junta directiva, que ha tratado por todos los medios posibles tener un puesto digno donde pudieran ser oídos y ayudar a los amigos políticos y no políticos pero [...] desgraciadamente, como he dicho, no hemos conseguido todo aquello que nosotros deseábamos y podíamos esperar⁵⁹⁰.

Las posiciones del Presidente referidas a la participación de la *Liga* en la vida pública fue otra de las cuestiones que quedaron corroboradas en la Asamblea. En su opinión, debía caminarse sin dilaciones hacia una evolución política que fuera capaz de llevar a los verdaderos representantes de la *Liga* a las Cortes, eliminando vicios electorales para combatir el caciquismo y la corrupción. Solamente, de esta forma, podrían mantenerse intactas las aspiraciones de los agricultores. Molesto con el Gobierno, Adolfo Bayo recordó que la Comisión informadora creada hacía dos años para

⁵⁸⁹ Santiago Alba, advertía que durante el primer año de campaña de la *Liga Agraria* se habían logrado escasos frutos, aunque reconocía la aceptación y el éxito entre una parte importante de la opinión pública. Según el propio Alba, por aquellos días faltaba todavía un líder claro, aunque muchos señalaban ya a Germán Gamazo como el principal candidato a dicho puesto. Alba, Santiago (1902), ob. cit. págs. 52 y 53.

⁵⁹⁰ *La Liga Agraria*, 16 de enero de 1889. En relación a las opiniones sobre Gamazo, véase también *El Correo*, 15 de enero de 1889.

estudiar la situación agrícola en España, no había contado con la debida participación y representación de la *Liga*, representante, al fin y al cabo, de las aspiraciones del país en materia agraria, y sí con destacados miembros de reconocida tendencia librecambista. Antes de finalizar, recalcó la gratitud que la Asociación debía a Germán Gamazo y a José Muro, al haber puesto de manifiesto su empeño en la defensa de los agricultores y obtener del Gobierno una rebaja, todavía pequeña, en la contribución territorial y en la de consumos. Sin apartarse del carácter sombrío de su discurso, Bayo quiso poner fin a su intervención despidiéndose de los asistentes al acto con las siguientes palabras:

es preciso que todos os organicéis en vuestras localidades de tal manera que estéis preparados para cuando llegue una elección, y que sólo votéis aquellos candidatos que vuestros intereses designen [...] porque tened entendido, y entiéndanlo todos bien, que jamás la Junta directiva de la Liga Agraria os dirá que votéis en favor de uno u otro candidato, sino que dispongáis de vuestra completa autonomía para dar vuestros votos a aquel en quien tengáis confianza [...] Todos los agricultores deben prestar su cooperación á la Liga Agraria y á aquél que con más entusiasmo os represente, y el que no de su apoyo será responsable de las desgracias de la patria. He dicho⁵⁹¹.

Durante las sesiones, los argumentos proteccionistas, acentuados en la necesidad de recargar los derechos arancelarios sobre los cereales, y los relativos a la eliminación de los consumos, fueron abordados sin descanso por un cuantioso número de intervinientes⁵⁹². Después de que Eduardo Ibarra expusiera una breve opinión, relativa a la indispensable aprobación de una reforma arancelaria, un contratiempo que había carecido en principio de importancia vino a animar de forma considerable la última de las sesiones de la Asamblea. Habíase aludido durante la exposición del propio Ibarra a la persona de Francisco Romero Robledo, representante del partido liberal-reformista y presente en la sesión, refiriéndose a un discurso pronunciado por éste en Barcelona, originando la inmediata intervención del mismo y provocando la protesta de numerosas personas en la sala. Concedida la palabra por el Presidente a Romero Robledo, abrió su intervención con las siguientes palabras: “Si alguno cree que no tengo

⁵⁹¹ *La Liga Agraria*, 16 de enero de 1889.

⁵⁹² En este sentido fueron muy celebradas las intervenciones de Sánchez de Toca, Maluquer y Rivas Moreno. *La Liga Agraria*, 16 de enero de 1889; *El Correo*, 15 de enero de 1889, y la *Revista del Insituto Agrícola Catalán de San Isidro*, año 1889, págs. 75 y 76.

derecho á hablar, me retiraré. No pertenezco á la Liga, pero tengo la representación de tres Ligas municipales, la de Aranda, la de Roa y la de Villorrios, que me han honrado con su confianza y si esto, unido á la consideración y al respeto que todos nos debemos, no fuera título suficiente para hablar, no haría uso de la palabra”⁵⁹³.

Restablecido el orden y continuando con su intervención, entre otras cosas advirtió que tenía la obligación de hablar para responder a las alusiones hechas sobre su persona. En relación a la interpretación errónea que de su presencia en la Asamblea podía crearse, al respecto manifestó lo siguiente: “He oído con sentimiento lo que se ha dicho de los hombres políticos, pero aunque yo pertenezco á esa clase, no he podido tomarlo como agravio personal, porque vuestra junta directiva está compuesta de hombres políticos y ninguno ha protestado. He de añadir que en eso hacéis mal, porque en cuento á mí se refiere, no tengo nada que esperar de la Liga, y la Liga en cambio, puede esperar mucho de mí”. Dejando claro ante los congregados que era hijo de labradores, reiteró que siempre estaría al lado de la *Liga* en todo aquello que fuera justo, añadiendo su disposición para defender la rebaja de gastos, la nivelación de los presupuestos y el amparo a la riqueza agrícola. Aun sin pertenecer a la *Liga*, Romero Robledo mostraba de esta forma su inclinación proteccionista⁵⁹⁴.

Pero fue el discurso de Gamazo el que mayores interpretaciones suscitaría en el último tramo de la Asamblea en Madrid, al mostrarse menos evidente a la hora de defender las soluciones de la *Liga*. Más inclinado a no cambiar su actitud y mucho menos a romper con su partido para llevar a las Cortes criterios conformes a los ideales de la *Liga Agraria*, Gamazo había hecho patentes sus propósitos antes, incluso, de la clausura. En uno de los momentos del discurso advertiría: “No me comprometí, que nadie se engañe sobre esto, a seguir intriga política de ninguna clase; al venir aquí y aceptar este puesto, no he renunciado al ideal político que acaricié toda mi vida y en

⁵⁹³ *La Regencia*, 19 de enero de 1889.

⁵⁹⁴ *La Regencia*, 19 de enero de 1889; *La Liga Agraria*, 21 de enero de 1889; *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Barcelona, 1889, págs. 79-80; *El Liberal*, 19 de enero de 1889, y *El Correo*, 18 de enero de 1889. Asimismo, puede consultarse de Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 54, y Ortega Rubio, Juan (1905), Tomo I, ob. cit., pág. 416.

el cual pienso perseverar. Tampoco acepté una por una todas las proposiciones aquí votadas”⁵⁹⁵.

En su opinión, entre los males que podían afligir a la *Liga* se encontraba la injerencia política entre los miembros de la misma. Sobre este punto no dejó claro si el camino inverso sería igualmente perjudicial, y si el daño producido sería equivalente cuando los políticos decidieran hacer uso de la *Liga* en el Parlamento. Otro de los aspectos que preocupaban a Gamazo era que los pueblos terminaran asumiendo las responsabilidades y las aspiraciones del dominio local, entendido desde la perspectiva que proporcionaba el caciquismo y el control de la propiedad de la tierra. En cualquier caso, las coincidencias del político castellano con la mayoría de políticos involucrados en la *Liga*, estaban referidas al peligro que podía suponer para la misma que se consolidara la indiferencia en la acción política, especialmente en lo tocante a cuestiones electorales⁵⁹⁶

Con la falta evidente de unanimidad y criterios en el seno de la Asociación, la segunda Asamblea produjo, sin embargo, algunos efectos que sí mostraron estar en una mayor «sintonía» con sus aspiraciones. Y todo ello a pesar de la escasa envergadura y del mesurado eco provocado entre la prensa. La primera, en importancia, se produjo hacia el mes de mayo de aquel año de 1889, iniciándose de nuevo en el Congreso las discusiones relativas al recargo arancelario para los cereales extranjeros, proposición que había sido llevada a debate por Fernández Villaverde⁵⁹⁷. En segundo lugar, y en virtud a los acuerdos adoptados en la última Asamblea, la Junta Directiva de la *Liga Agraria* envió al Congreso de los Diputados otra *Exposición*, más breve que la presentada en el año 1888, en donde se solicitaba a los poderes públicos la aplicación de las soluciones económicas promovidas por la *Liga*. Con los mencionados logros, puede decirse que se llegó hasta las puertas de la que sería la tercera Asamblea de 1890⁵⁹⁸.

⁵⁹⁵ *La Liga Agraria*, 21 de enero de 1889, y *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, año 1889, pág. 80. Una actitud similar ya la había manifestado durante la Asamblea de 1887, cuando reivindicó su derecho a juzgar oportuno o no, llevar al Parlamento las soluciones de la *Liga*. *La Regencia*, 19 de enero de 1889.

⁵⁹⁶ Al respecto, puede consultarse parte de su discurso en *La Regencia*, 19 de marzo de 1889.

⁵⁹⁷ Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 55.

⁵⁹⁸ *La Liga Agraria*, 14 de marzo de 1889; Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 55, y *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Barcelona, 1889, págs. 98 a 104.

La actividad desarrollada por las ligas de contribuyentes y por las asociaciones de propietarios y labradores en el transcurso de los años ochenta del siglo XIX, habían dado como resultado el interés por los estudios que trataban de resolver la situación económica. A este mismo fin no tardó en sumarse la Junta Directiva de la *Liga Agraria* tomando una decisión que sería, a la postre, un punto de referencia que señalaría la transformación de aquéllas en sociedades más sencillas, dando lugar con el tiempo a las Cámaras Agrícolas⁵⁹⁹.

En una sesión celebrada el 4 de junio de 1889, la propia Junta acordó dirigirse a otras asociaciones análogas con el fin de conseguir resultados más prácticos y eficaces en la gestión, así como en las reivindicaciones de los productores a nivel nacional. En virtud de aquella iniciativa fue nombrada una Comisión compuesta por Gamazo, Rato, Orellana y el conde de Esteban para que se pudiera llegar a algún entendimiento con las demás asociaciones y sociedades. De esta forma, se convocaba a las ligas de propietarios y contribuyentes, al *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, a las sociedades de ganaderos, agricultores, labradores y viticultores, y al resto de sociedades similares que estuvieran constituidas con idénticos fines, para que enviaran sus representantes a la reunión del día 22 de aquel mismo mes con el propósito de ser tratados los temas siguientes:

1º. Refundir en uno, con el carácter de provisional, los diversos programas de las necesidades generales de más importancia que afectan a la propiedad, a la agricultura y a su producción, sin que esto se entienda que constituye la fusión definitiva de las Sociedades que concurren; 2º. Establecer reglas de unión e inteligencia para obrar de acuerdo en los casos de elecciones municipales, provinciales y a Cortes; 3º. Discutir y acordar la conveniencia de que los esfuerzos de las Sociedades coligadas se dirijan a prestarse mutuo auxilio, eligiendo y patrocinando candidatos que puedan, a pesar de sus compromisos políticos, permanecer independientes para la defensa de lo que se acuerde respecto a las cuestiones económicas y de moralidad administrativa⁶⁰⁰.

⁵⁹⁹ Los trabajos llevados a cabo hasta esos momentos por la Asociación se habían considerado de constitución y propaganda. Esta idea que se había repetido en mítines y Asambleas, había sido utilizada como justificación ante los miembros de la *Liga* de la escasa efectividad y de la falta de resultados, así como a los propietarios que exigían las soluciones que durante dos años la propia Junta había venido poniendo de manifiesto en las conclusiones de sus actividades. *La Liga Agraria*, 7 de junio de 1889.

⁶⁰⁰ *Ibidem*.

La circular, repartida profusamente entre las provincias españolas, tuvo una notable respuesta, siendo finalmente celebrada la reunión el día 22 de junio en el local de la *Asociación de Agricultores de España*, lugar que había sido cedido para la ocasión por la Presidencia de la misma. En el convencimiento de Adolfo Bayo se hacía presente que los esfuerzos aislados de los pueblos, de las sociedades y de no pocos diputados y senadores en las Cámaras, no habían dado hasta ese momento los resultados satisfactorios que muchos habían aguardado. Era imprescindible poner en marcha la búsqueda de representación en los municipios, en las Diputaciones provinciales, así como en las Cortes, reuniendo esta vez a aquellas asociaciones y gentes que mantuvieran un mismo criterio, a través de una nueva asociación comprometida con los intereses de la agricultura y de la industria de forma conjunta. Para este fin y a propuesta del propio Bayo, se convino en la necesidad de nombrar una Comisión que redactase las bases, bajo las cuales se habría de constituir la unión de las sociedades coligadas y poder llevar a efecto las propuestas para acudir a los diferentes procesos electorales que habrían de celebrarse en fechas próximas⁶⁰¹.

El día 23, tal como se había fijado, se abrió la sesión con 92 representantes de todas las asociaciones convocadas, poniéndose de inmediato a discusión el dictamen presentado por la Comisión y tomando la palabra a tal fin, los señores Muro, Cárdenas, Maluquer y Gamazo, entre otros. Las discusiones de las distintas bases del programa a debatir fueron largas, tensas, pero llenas de entusiasmo. Puestas las bases a votación con las enmiendas introducidas tras los debates, se aprobaron hasta un número de cuatro, siendo la última una de las más debatidas y presentada por Muro. A petición de los concurrentes al acto, Nicolau y Maluquer, se acordó igualmente hacer extensivos los beneficios de la unión a todas las clases productoras, siendo este último aspecto muy aplaudido y aceptado⁶⁰².

La primera de las bases hacía mención a la necesidad y objeto de llevar hasta los municipios, Diputaciones provinciales y las Cortes de la Nación, a aquellos representantes que estuvieran identificados plenamente

⁶⁰¹ En este sentido, eran las elecciones municipales las primeras que esperaban celebrarse en el mes de diciembre. A tal fin, y tras deliberar entre los representantes, fueron designados los señores Cárdenas, Rato, Ibarra, marqués de Aguilar, Iglesias, Orellana, marqués Villa-Alcázar, conde de la Encina, Gamazo y Zaitigue, suspendiendo la sesión el señor Bayo hasta el siguiente día a las dos de la tarde. *La Liga Agraria*, 25 y 30 de junio de 1889, y *La Regencia*, 22 de junio de 1889.

⁶⁰² *La Liga Agraria*, 25 de junio de 1889.

con las aspiraciones de la producción nacional, para lo cual, la Asamblea quedaba organizada bajo el nombre de *Unión económico-electoral*. En dicha base primera quedaba recogida, de forma implícita, la posibilidad de que a dicha «unión» de asociaciones pudieran acogerse todas aquellas sociedades que, en adelante, aceptaran las normas aprobadas para la organización y funcionamiento en mencionada Asamblea. En segundo lugar, la *Unión económico-electoral* quedaba obligada a dar protección a los candidatos comprometidos en el sostenimiento íntegro el programa de aquella, permaneciendo independientes y desligados de sus compromisos políticos respecto de las cuestiones económicas, cualquiera que fuera el aspecto con que se presentasen o fueran planteados. En la base tercera se especificaba que las asociaciones reunidas en la Asamblea, además de las que con posterioridad vinieran a unirse, quedaban en absoluta libertad de acción para aplicar los procedimientos reglamentarios que en apoyo de los candidatos fueran precisos. Finalmente, la base cuarta detallaba textualmente:

Una Junta central, compuesta de dos representantes de cada una de las Asociaciones aquí reunidas, o que en adelante se adhieran, será la encargada de refundir en uno, con carácter provisional, los diversos programas de las necesidades generales de más importancia, que afecten a la propiedad, a la agricultura, a la industria y a toda manifestación fabril del trabajo nacional; propagar y dar a conocer el fin de la Unión; resolver cualquier duda o dificultad [...] y estimular la acción de las respectivas Asociaciones para que por los medios legales que estuvieran a su alcance procuren fuera del Parlamento la defensa de estos intereses⁶⁰³.

Considerada la lectura final de las bases aprobadas por los asistentes se produjo una breve discusión entre los señores Portillo y Germán Gamazo. El primero, adhiriéndose a las manifestaciones hechas en la reunión y a los acuerdos tomados en la Asamblea, dijo que agradecería una aclaración sobre algunas de las frases pronunciadas por Gamazo, ya que según creía, podrían suscitar algunas dudas respecto a si entre los fines que de la Sociedad se iban a exigir, pudiera estar el auxilio a determinados ideales políticos. Ante este hecho, tomando acto seguido la palabra el propio Gamazo, matizó que sus palabras habían sido referidas a auxiliar, exclusivamente, los intereses públicos y principalmente a consolidar la paz pública, sin la cual “no habría

⁶⁰³ *La Liga Agraria*, 25 y 30 de junio de 1889.

propiedad posible”. Hubo en ese sentido una matización hecha por Muro, para constatar, una vez más, que en cuanto a lo que se refería al ideario político, todos seguirían conservando su completa independencia, tras lo cual, y no habiendo más oradores que desearan hacer uso de la palabra, el Presidente dio por finalizada la segunda y última sesión⁶⁰⁴.

Con la puesta en marcha de la *Unión económico-electoral*, la Junta Directiva de la *Liga Agraria* se atribuía un nuevo éxito en su particular contienda en las cuestiones relacionadas con la economía agraria, anunciadas desde el inicio de su existencia. No obstante, esta misma circunstancia volvía a levantar ciertas sospechas, incluso en la propia Asamblea, respecto al interés político que parecía tener todo el complejo asunto de la «unión». Partidos, prensa y personalidades del mundo político y financiero, principalmente, creyeron ver en la nueva Asociación un modo de patrocinio en la sombra, para asumir un papel político muy diferente al sugerido en los momentos iniciales de su constitución. En realidad, como trataremos más adelante, la *Unión* hubo de transformarse muy pronto en unidades más sencillas y menos complejas, con mejores opciones para lograr los objetivos que determinados en un primer momento en la Sociedad. El interés existente por normalizar su presencia dentro de los poderes públicos no tardó, consecuentemente, en conducir, tanto a miembros de las ligas como de otras asociaciones, a simplificar las mismas con el ánimo de convertirlas en una herramienta más práctica para asegurar la lucha por el poder. De esa manera quedaban convertidas en un elemento más inmediato para la obtención de resultados, dentro del amplio abanico de propuestas reivindicativas. Fue, como se verá después, el punto de partida que habría de servir de transformación para la *Liga Agraria* en las ya citadas Cámaras Agrícolas.

En agosto de 1889, *La Liga Agraria* publicó un artículo insinuando que los verdaderos sentimientos hacia la Asociación debían garantizarse mediante la ruptura personal con el Gobierno⁶⁰⁵, detalle que no cayó muy

⁶⁰⁴ Ibídem, y *La Regencia*, 22 de junio de 1889.

⁶⁰⁵ Véase, por ejemplo, *La Regencia*, 30 de agosto de 1889. También el artículo escrito en *La Liga Agraria* por uno de sus representantes de la provincia de Burgos, dirigida al Presidente de la Asociación titulada "Nos hacemos cómplices". En el mismo se decía lo siguiente: "El que esté en la Liga, o quiera estar con ella, si no rompe con el Gobierno abiertamente, siempre que éste vacile en pro de los productores españoles, no cumple con sus deberes, ni los representantes de provincias le tomaremos como verdadero liguero. O lo uno o lo otro. Y dentro de la Liga no hay categorías, ni en Madrid ni en provincias [...] No venga el

bien en hombres como Gamazo y en el seno del partido liberal. El propio presidente de la *Liga* tuvo que reconocer más tarde que, efectivamente, coexistían dos claras tendencias tan diferentes entre sí, que necesariamente iban a poner en peligro el destino de la misma⁶⁰⁶.

Semejante panorama vino a ponerse una vez más de manifiesto, justo en vísperas de la celebración de un nuevo «meeting» en la localidad oscense de Barbastro, hecho que sería calificado como un triunfo más de la *Liga Agraria*⁶⁰⁷. A pesar de todo, tampoco faltaron quienes creyeron ver en la reunión la antesala de lo que meses más tarde sería la tercera Asamblea. A juzgar por las noticias de la prensa de aquellos días, la ciudad había recibido un número importante de visitantes de diversas provincias españolas. Además, se esperaba la presencia de algunas de las personalidades más destacadas de la *Liga Agraria* en Madrid, siendo su Presidente uno de los hombres que más interés despertaba, y una de las personas más respetadas y queridas en las provincias de Aragón⁶⁰⁸. No es menos cierto, a tenor de las mismas informaciones, que destacaba un marcado carácter conservador entre los asistentes.

Precisamente, el domingo 8 de septiembre comenzaron a reunirse en la mencionada localidad la plana mayor del partido conservador de la provincia, además de un buen puñado de simpatizantes invadidos por el anhelo y la impaciencia de contemplar algún cambio en la situación política⁶⁰⁹. Ante una concurrencia importante, cercana a las dos mil personas, los discursos fueron abiertos por el presidente de la sucursal de la *Liga Agraria* de Alcolea y presidente interino de la reunión, Jacinto Pitarque, quien en su intervención expuso la triste situación que, a su parecer, soportaba la agricultura española. Expresó que la razón y la justicia estaban con los agricultores que debían defender sus derechos, sosteniendo, igualmente, que la *Liga* habría de moverse con independencia absoluta de los partidos políticos. Para terminar atribuyó como causa principal de la

centralismo liguero que sirva para que unos cuantos políticos hipotéticos se aprovechen de las fuerzas vivas del país en favor de Cánovas ó Sagasta. La Liga es la Liga y nada más; y si no se deshará como la sal en el agua". *La Liga Agraria*, 28 de agosto de 1889.

⁶⁰⁶ *La Regencia*, 3 de septiembre de 1889.

⁶⁰⁷ *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1889.

⁶⁰⁸ *El Correo*, 8 de septiembre de 1889, y *La Época*, 7 de septiembre de 1889. Asimismo, en Pirala, Antonio, ob. cit., págs. 169-170.

⁶⁰⁹ *El Correo*, 8 de septiembre de 1889, y *El Diario de Huesca*, 7 y 8 de septiembre de 1889. También en *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1889; *El Correo*, 9 de septiembre de 1889, y *La Época*, 9 de septiembre de 1889.

crisis agrícola la depreciación de los productos desde las reformas arancelarias de 1869, e hizo hincapié en la necesidad de combatir el caciquismo que, según reveló, debía ser eliminado con la sólida unión del patriotismo de los agricultores aragoneses⁶¹⁰.

Fue con la intervención del ex-diputado por Barbastro, el señor Escudero, lo que llevó a retomar el tema de las influencias políticas y de la elección de representantes. Escudero señaló que eran falsas las noticias que habían publicado algunos periódicos relativas al carácter político del «meeting», tras lo cual, exhortó a todos los miembros y socios de la *Liga* a que eligieran, ante la llegada de las elecciones, solamente a aquellos candidatos que firmemente se comprometieran a defender los intereses de la Asociación. En este mismo tono pronunció su discurso el señor Gros, acaudalado propietario de Aragón y orador de fogosa elocuencia, quien añadió que era preciso modificar las cartillas evaluatorias por lo injusto que resultaban los tributos derivados de las mismas. La petición, explicada por el propio Gros, había sido hecha ya en varias ocasiones por la *Liga* en sus diversas manifestaciones. Con la reforma de las citadas cartillas, podían solicitarse rebajas en los tipos de evaluación de los productos para que, de esta forma, quedaran rebajadas también las contribuciones. Lógicamente, la medida solicitada fue muy aplaudida por todas las personas asistentes a la reunión⁶¹¹.

Después de algunas breves intervenciones, tomó la palabra Adolfo Bayo para asegurar, entre otras muchas cosas, que él era también agricultor⁶¹². Quiso ocuparse igualmente de los rumores difundidos por la prensa acerca del carácter político de la reunión para desvanecerlos, repitiendo lo que había dicho a las comisiones en el momento de su llegada: “Tengo telegrafados que en el Congreso existen diputados pertenecientes a distintos partidos políticos, que se han puesto al lado de la Liga, lo cual demuestra que ningún fin político inspira la asociación”. Pasó después a elogiar la conducta de Germán Gamazo, persona muy importante en su

⁶¹⁰ *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1889, y *El Correo*, 9 de septiembre de 1889.

⁶¹¹ *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1889; *El Correo*, 9 de septiembre de 1889, y *La Época*, 9 de septiembre de 1889.

⁶¹² En su discurso, sus primeras palabras fueron: "Aragoneses: aunque resido en la Corte, soy labrador como vosotros, y voy con frecuencia al campo para ocuparme de las faenas agrícolas; así es que he podido apreciar la precaria situación por que atravesáis, como vuestras privaciones de todas clases". Véase el discurso de Adolfo Bayo en el «meeting» de Barbastro. *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1889.

partido e influyente en la política, que se había puesto al lado de la *Liga* antes que seguir las directrices de su propio partido. Para terminar, recordó lo expresado por algún orador, en relación a la necesidad que existía de elegir a personas para las instituciones con un marcado conocimiento de los problemas de la agricultura.

Vosotros estáis destinados á dar otra batalla no menos importante para la Nación y para vuestros hijos, la de reconquistar vuestra independencia y sacudir el yugo de la esclavitud al que os tiene amarrado al caciquismo, y lo conseguiréis peleando en los colegios electorales unidos y juramentados y dando vuestro voto a las personas que creáis que corresponderán mejor a vuestra confianza, pues aunque la Liga Agraria no es esencialmente política y en ella forman hombres de todos los partidos, vuestros elegidos podrán influir en las Cortes, con sus votos, a mejorar vuestra suerte⁶¹³.

Finalizada la intervención de Adolfo Bayo, se pasó a someter a aprobación las conclusiones, referidas en su mayoría a solicitar al Gobierno una reforma inmediata de algunas partidas del Arancel, la denuncia oportuna de los tratados comerciales, así como la elevación de los derechos de importación. Para terminar, se solicitó el cumplimiento del artículo 3º de la Constitución para igualar las contribuciones en proporción a los haberes, e insistiendo en la importancia de la distribución de forma ecuaníme de todas las cargas surgidas de la contribución de inmuebles, cultivo y ganado. Así concluyó la sesión, con gritos entusiastas y vivas por la *Liga Agraria*, sin que en aquélla, finalmente, se hubiera levantado una sola voz pidiendo que se gestionara por todos los medios posibles la construcción de un canal en Tamarite. Un aspecto este último que hubiera resultado oportuno a todos los pueblos de la Comarca, y que desde un principio se pensó sería tratado en la reunión. Este hecho, remarcado por la prensa, cuyos resultados se estimaban más positivos para la agricultura de la región que la propia subida de los aranceles en los cereales, venía a producirse, precisamente en un momento en el que se apreciaba una sensible bajada en las importaciones de trigos y harinas⁶¹⁴.

⁶¹³ *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1889.

⁶¹⁴ *Ibidem*. También en *El Correo*, 8 de septiembre de 1889, y *La Época*, 9 de septiembre de 1889. En algunas páginas de la prensa de aquellos días se indicaba que, en efecto, la importación de trigos y harinas había sufrido un considerable descenso en cifras totales, constituyendo más del 50 por 100 en los últimos siete meses. *El Correo*, 9 de septiembre de 1889.

Como quiera que sea, el «meeting» de Barbastro dejó una sensación de desconfianza respecto a los resultados que se podían esperar del mismo. Las noticias de aquella reunión presentadas por una parte destacada de la prensa, llevaron a muchas personas próximas a la *Liga* a pensar, en efecto, que el acto en sí había servido como pretexto para generar un reclamo en el contexto político, utilizando la idea de la defensa de los intereses agrícolas. Una circunstancia que habría estado motivada, además, tal y como podría deducirse de algunas noticias cercanas al partido conservador, por el afán de ostentar una clara influencia dentro de la Asamblea y de asegurar, en adelante, la presencia de sus comités regionales en cualquier evento que pudiera ser convocado por la *Liga Agraria* en el país⁶¹⁵.

- La tercera Asamblea y la reforma de los Estatutos. El manifiesto de Adolfo Bayo

Desde un principio, la tercera Asamblea General de la *Liga Agraria* estuvo dominada por dos aspectos que, en lo sucesivo, habrían de modificar la propia concepción de la Asociación. En primer lugar, por un nuevo afán simplificador y selectivo de representación que se distinguió por el proceso de reducción establecido por la Junta Directiva entre los convocados a la Asamblea. Y, en segundo lugar, por la propia definición y propuestas respecto a los temas que desde ese momento habrían de tratarse en las discusiones y debates de la misma.

En efecto, tal y como se reconocía en la convocatoria publicada por *La Liga Agraria*, la forma en la que hasta esos momentos se habían venido celebrando las reuniones, originaba algunas dificultades que se referían, principalmente, al elevado número de personas asistentes, lo que provocaba, según explicaba la Junta, que en pocos días resultara difícil llegar a acuerdos prácticos y beneficiosos. Esto condujo a que se solicitaran, en lo concerniente a las condiciones de asistencia a la misma, modificaciones muy precisas para la tercera Asamblea. Del mismo modo, se consideró la posibilidad de no dar más agilidad a las pretensiones, tal y como había

⁶¹⁵ *La Liga Agraria*, 14 de septiembre de 1889; *El Norte de Aragón*, 10 de septiembre de 1889; *Revista Vinícola y de Agricultura* de Zaragoza, septiembre de 1889, y *El Diario Mercantil de Zaragoza*, 9 de septiembre de 1889.

venido sucediendo en anteriores Asambleas y reuniones, dejando de lado, casi de forma definitiva, la observación de los males que afligían a la producción en España y de inquirir sus causas y remedios. El cambio de actitud en estas materias, quiso la *Liga* que vinieran dados finalmente por dos realidades muy precisas. Por un lado, con el acuerdo de una nueva convocatoria donde fueran recogidas las ya mencionadas limitaciones de participación y por otro, con la discusión, reforma y aprobación de unos nuevos Estatutos donde, además, se contemplara la reelección de cargos en la Junta Directiva⁶¹⁶.

Se pretendía, de esta manera, trazar en un breve espacio de tiempo las nuevas pautas de conducta práctica que mejor pudieran salvaguardar la personalidad de la *Liga*, preparando los medios más eficaces y adecuados para la ejecución de los planes que se adoptaran en las Asambleas. De ahí que se pensara, una vez resueltos los pactos formales de unión entre todos los productores y contribuyentes, convenir la simple reunión de un corto número de representantes con los correspondientes poderes de quienes no pudieran asistir a los actos, asumiendo de esta manera las decisiones finales que surgieran con el consentimiento de los primeros⁶¹⁷.

Respecto a la determinación de quiénes debían concurrir a la Asamblea General con el carácter de socios, la Junta Directiva estableció como requisito esencial para ser considerado titular de la Asociación, la prestación y concurso mediante la contribución al sostenimiento de la misma con la suscripción al periódico *La Liga Agraria*. Asimismo, se disponía la necesidad de presentar una *Carta de apoderamiento*, redactada en los términos que la propia Junta había decidido considerar, por parte de aquéllos cuya imposibilidad de asistencia a la Asamblea fuera a tener lugar⁶¹⁸.

⁶¹⁶ *La Liga Agraria*, 14 de noviembre y 7 de diciembre de 1889.

⁶¹⁷ De este modo, tal y como se indicaba en la convocatoria a la tercera Asamblea, los acuerdos podrían tomarse por todos los contribuyentes y productores de España, sin que fuera preciso "moverse de su casa más que aquellos que voluntariamente quisieran imponerse las molestias y gastos de viaje". *La Liga Agraria*, 14 de noviembre de 1889.

⁶¹⁸ Entre los acuerdos tomados por la Junta Directiva estaban, entre otros, los siguientes: "1º. Para tener voz y voto en dicha Asamblea general, será preciso justificar previamente ante la Mesa constituida por la Junta directiva el carácter de socio, según disponen los estatutos y reglamento, mediante el pago del trimestre corriente de suscripción al periódico *La Liga Agraria*, órgano oficial de nuestra Asociación. Las suscripciones cuyos recibos no se hubieran presentado al cobro ó no hayan sido satisfechas, podrán pagarse en la administración de Madrid antes de la reunión de la Asamblea; 2º. Los socios que no puedan concurrir personalmente á las sesiones de la Asamblea general, tienen derecho á delegar su

En último término, también quedaron redactados los temas que habrían de discutirse en la Asamblea, donde, además de solicitarse la discusión de las bases para la defensa de la producción nacional en los tratados internacionales, los medios para la creación y fomento del crédito agrícola, y la forma de modificar o sustituir el impuesto de consumos, se hacía un llamamiento para proceder a la discusión para la reforma de los Estatutos y a la reelección de los cargos de la *Liga*⁶¹⁹.

Comenzó la tercera Asamblea el día 15 de diciembre de 1889, bajo la presidencia de Adolfo Bayo y con la menor concurrencia que hasta ese momento se recordaba. Fue el primer acto estipulado dar lectura, por parte del señor conde de Cassal, a la *Memoria* en la que se recogían los trabajos realizados por la Junta Directiva durante el año transcurrido, y en la que se hacían varias apreciaciones relativas al estado de la Asociación. Concluida la lectura, el Presidente empezó por manifestar algo tan evidente como era la falta de concurrencia que se advertía en la Asamblea. Justificó las ausencias como la consecuencia de las restricciones que se habían acordado por la Junta Directiva y que constaban en las bases de la convocatoria. De igual manera, por la penuria de los agricultores para quienes la suscripción al periódico y la realización del viaje hasta Madrid suponía un gran sacrificio⁶²⁰. Nadie recordó, sin embargo, que solo hacía dos años la asistencia había desbordado el lugar de celebraciones y la capital había sido un hervidero de gentes llegadas de todos los rincones de España.

Pese a todo, continuó Bayo haciendo las oportunas consideraciones sobre el estado precario de la producción nacional, especialmente de la agricultura, cuyas necesidades continuaban desatendidas. Refiriéndose a las gestiones de la Junta Directiva y al sentimiento con que veía el escaso éxito de aquéllas, preguntó a la Asamblea si merecían su aprobación, hecho este último que produjo entre los representantes el acuerdo unánime de

representación ante la misma Asamblea en algún otro socio á quien confieran debidamente á este efecto su especial autorización; 3º. Para que esta delegación quede oficial y reglamentariamente acreditada ante la Presidencia, los que estuvieran investidos de alguna representación presentarán en la Secretaría de la Junta directiva la carta de especial apoderamiento, firmada por sus respectivos comitentes [...]; 5º. En las votaciones de la Asamblea el cómputo de los votos se hará recogiendo el personal de los socios allí presentes. El voto de los socios ausentes se recogerá asimismo por conducto de las respectivas representaciones, oficialmente reconocidas por la Asamblea, y cuyos apoderados concurren personalmente a dicha votación [...]" *La Liga Agraria*, 14 de noviembre de 1889.

⁶¹⁹ *La Liga Agraria*, 7 de diciembre de 1889.

⁶²⁰ *La Liga Agraria*, 21 de diciembre de 1889.

agradecimiento a los trabajos de la *Liga*, así como a los senadores y diputados que habían defendido los intereses de ésta⁶²¹.

Se pasó de esta forma a dar lectura al primero de los temas que tenían que ser discutidos, el relativo a la defensa de la producción nacional en los tratados de comercio, siendo la primera de las intervenciones y de las más interesantes la presentada por Mateo Conde. En la misma, se citaban los tratados llevados a cabo por el Gobierno con Francia, Alemania, etc., declarando las dificultades que habían supuesto en España para la producción de caldos, cereales y aguardientes la firma de dichos acuerdos. Antes de poner fin a su intervención, Conde quiso extender un ruego a los políticos concurrentes a preocuparse menos de sus intrigas y conjeturas partidistas, aumentando su interés por el estado de la agricultura. Finalmente, quiso poner de manifiesto entre los reunidos la importante labor realizada por Germán Gamazo, del que añadió, era lástima que no adoptara otra actitud, circunstancia que, en su parecer, le hubiera servido para tener a su lado a todos los agricultores⁶²².

Transcurridos los sucesivos turnos de intervenciones durante los tres días de sesiones y debatidos el resto de los principales temas previstos en la Asamblea, esto es, la creación y fomento del crédito agrícola y la modificación o sustitución del impuesto de consumos, fueron redactándose y aprobándose las conclusiones, tal y como había venido sucediendo desde los comienzos de la *Liga*. Durante el desarrollo de las diferentes intervenciones, los asistentes fueron en todo momento conscientes del escaso apoyo que tales propuestas tendrían por parte del Gobierno, asumiendo las mínimas perspectivas de éxito, tal y como había sucedido en ocasiones anteriores⁶²³.

⁶²¹ *Ibidem*.

⁶²² *Ibidem*.

⁶²³ En las conclusiones adoptadas se solicitaba, respecto al primero de los temas, que se propusiera un régimen aduanero, en cuyos aranceles se fijaran los tipos de tarifas indispensables para el amparo de las fuerzas productoras de España. Lo más destacado respecto al crédito agrícola, segundo de los temas discutidos, fue la solicitud de creación de las Cajas rurales que, a modo de cooperativas de préstamo mutuo y a imitación de los pósitos, pudieran asociarse los pequeños cultivadores de cada localidad, obligándose a responder los unos por los otros con el objeto de asegurar para todos el crédito personal. Estas Sociedades no tendrían ni manejarían capital, ya que su misión sería la de servir de intermediarias entre los labradores que pidieran préstamos y los tenedores del capital, que facilitarían los fondos. Respecto al tercero de los temas tratados, se advertía textualmente, entre otras cosas, los siguientes puntos: "1º El impuesto de consumos, por la odiosidad que lleva su forma de exacción y las injusticias que se cometen á la sombra del mismo, es aspiración general el que debía abolirse, sustituyéndose por otra forma de tributación indirecta; 2º En el caso de que este medio no pueda tener lugar, la comisión opina que el

El último día de sesiones se produjo lo más destacado de la tercera Asamblea, poniéndose de manifiesto la inevitable división de opiniones que existía entre los miembros de la *Liga Agraria*. En el transcurso de la primera de las sesiones de la Asamblea celebrada el 15 de diciembre se había presentado a la Mesa una propuesta defendida por José Strauch, representante de la *Liga* por Madrid y colaborador en la Revista, en la que se solicitaba que la Asociación llegase a constituirse en partido militante. La propuesta, tomada en consideración, hubo de debatirse finalmente en el la última de las sesiones. Leída por el Secretario, conde de Cassal, en los planteamientos de Strauch se justificaba el decaimiento de la Asociación en los siguientes términos:

Al no ejercerse una propaganda ardiente y activa que multiplique las fuerzas sociales, no sólo se produce desfallecimiento, porque los prosélitos en vez de aumentar disminuyen, sino que envalentonados los enemigos de la Asociación, la dan por muerta en sus resultados [...] Al llamarnos con cierta arrogancia independientes de los partidos políticos, nos hemos puesto á merced de todos ellos [...] Los esfuerzos hechos por eminentes consocios nuestros en el Parlamento, el constante quejido de la prensa ofreciendo diariamente el más horripilante cuadro de inmoralidad ó falta de justicia, las sentidas manifestaciones de mil maneras expresadas, todo se estrella ante una glacial indiferencia ó un egoísmo repugnante [...] De esta manera quedarán desechados toda clase de temores y de controversias: la Liga, ayudada o no, por otras Asociaciones trabajará con éxito en las cuestiones electorales para tener representantes en el parlamento exclusivamente suyos, y será un partido poderoso sin ninguna afinidad ni compromiso con los que hoy se disputan el poder como únicos e indispensables. El primer paso de la resolución que necesitamos está dando, y en el fondo admitido por la sociedad, y aun en práctica, lo que es función de un partido; pero sólo para ser oscuro auxiliar y perpetuo pedigüeño, cuando podemos y debemos resolver por nosotros mismos cuanto inútilmente estamos pretendiendo⁶²⁴.

Consecuentemente, y en opinión de Strauch, era preciso, por el bien de las clases productoras y contribuyentes, con el fin de poder solventar la falta de representación y apoyos políticos, declarar a la *Liga* un partido de tendencias exclusivamente económicas y financieras, haciéndose preciso la modificación de los Estatutos y la aprobación de los mismos una vez puestos

impuesto de consumos debería limitarse a la hacienda municipal, siendo éste el recurso de la misma para sostener sus cargas". *La Liga Agraria*, 28 de diciembre de 1889.

⁶²⁴ *La Liga Agraria*, 28 de diciembre de 1889.

a consideración por la Junta Directiva. No le faltaban razones al alegar que lo hecho hasta ese momento había resultado ineficaz. La continuidad en esas condiciones suponía el mantenimiento de una Sociedad que, en su ánimo por ejercer la defensa e ilustración de las clases agricultoras, no era sino un reflejo de lo que venía ejerciendo la *Asociación General de Agricultores de España*. Suponía, en suma, un estancamiento en el absurdo frente a un Estado remiso a las peticiones de unos diputados comprometidos, al fin y a la postre, con las directrices de los partidos a los que debían obediencia. Con las últimas palabras de Strauch, las muestras de aprobación sonaron en la sala, sucediéndose a continuación un debate muy intenso entre los asistentes a la sesión⁶²⁵.

El primero en levantarse a combatir las ideas expuestas por Strauch fue el señor Preciado, quien aseguró que con las propuestas presentadas para organizarse en partido político, la *Liga Agraria* vendría a ser un partido más y no otra cosa. Propuso que la *Liga* debía imponer su influencia pero de distinta forma sin indicar el mismo cómo habría de llevarse a la práctica. Con la misma pobreza de argumentos intervinieron Rivas Moreno y Forcada, representantes de la *Liga* en Ciudad Real y Palencia, respectivamente, quienes coincidieron en señalar la necesidad de organizarse, si bien no en un partido político, ya que, según palabras de Forcada, las ideas y proyectos de la *Liga* todavía no se habían difundido suficientemente⁶²⁶.

Más prudente se mostró el señor Orellana al declarar que aunque se habían conseguido algunos objetivos en materia económica, todavía se estaba lejos de lo instado en los últimos años. Haciendo nuevamente uso de la palabra el propio Strauch para señalar algunas matizaciones y precisiones, el vicepresidente Muro quiso intervenir después para advertir al mismo: “se mece en las regiones de la idealidad, pero no está en lo práctico”. En su intervención, Muro aseguró, además, que todo partido político tenía la necesidad de servir como instrumento de gobierno. De esta forma no habría ninguno que no se creyera apto para cumplir con todo cuanto impusiera el gobierno de un país. En este sentido señaló: “Si mañana la Liga Agraria pudiese llegar a ser partido en esas condiciones sería menester que tuviese soluciones para todo; tendría, pues, que estar preparada para resolver la cuestión religiosa, la militar, etc., y entonces o sería un partido más, como

⁶²⁵ *Ibidem*.

⁶²⁶ *Ibidem*.

cualquiera de los actuales, o si no, tendría que ser simplemente una aspiración, como lo es actualmente”⁶²⁷.

Convencido de que debía seguir siendo un elemento esencial en el pensamiento y en la trascendencia del movimiento agrario, la *Liga* había demostrado, desde la propia perspectiva personal del vicepresidente de la misma, que podía trascender a las esferas del Gobierno, lo que en cualquier caso motivaba a pensar que existían razones para mantener una actitud positiva ante los trabajos que en un futuro inmediato se presentasen a la sociedad española. Muro concluyó su intervención animando a que todos se agruparan y organizaran para establecer una peculiar contienda, capaz de fortalecer a la *Liga*, al tiempo que lograra hacerla respetable y creíble⁶²⁸.

Muy sucinta fue la intervención de Maluquer, para indicar que sus ideas económicas habían estado siempre al lado del proteccionismo y de la agricultura, motivo por el cual, se le había puesto en contra de su facción política, el partido liberal, primero como disidente y después como un contestatario. De todos modos, la propuesta de Strauch no encontró finalmente la aprobación de la Junta, siendo retirada y pasándose a discutir de inmediato la nueva composición de esta última⁶²⁹.

De esta forma se procedió al nombramiento de una Comisión que debía elegir y nombrar a la nueva Junta Directiva, cuyo objetivo principal debía ser la elaboración de unos nuevos Estatutos. De las deliberaciones resultó una distribución en la que permanecían como presidente honorario y presidente efectivo, Claudio Moyano y Adolfo Bayo, respectivamente. Los seis vicepresidentes elegidos resultaron ser Germán Gamazo, José Muro, José Maluquer, el conde de Guaqui, Apolinar de Rato y Jacinto de Orellana. Se nombraron igualmente cuatro secretarios: el conde de Cassal, Joaquín Sánchez Toca, el marqués de Villalcázar y don Santiago Liniers. Por último, fueron elegidos un número de vocales, hasta veinte, entre los que destacaban los condes de Vía-Manuel, de Esteban y de la Encina, José Álvarez Mariño, Julián Chavarri, el duque de la Roca, los marqueses de la Laguna y de Cussano, Tomás Ignacio Beruete, Lorenzo Fernández Villarrubia, y José Fabián López. A petición de Germán Gamazo se solicitó

⁶²⁷ *Ibidem*.

⁶²⁸ *Ibidem*.

⁶²⁹ *Ibidem*.

un voto de confianza para la nueva Junta, a fin de que ésta procediera a ultimar los nuevos Estatutos. Hecho que fue ratificado por unanimidad de los reunidos en la Asamblea⁶³⁰.

Antes de que se dieran por finalizados los trabajos correspondientes a las sesiones de la *Liga*, Gamazo, convencido de la eficacia de la *Liga*, dijo que nadie podía pensar en 1887 que los presupuestos, en lugar de ir en aumento, habrían de caminar hacia el descenso. En este sentido señaló: “La rebaja en la contribución puede ser pequeña y lo es indudablemente, pero al fin no se debió á nadie más que á la suma de opiniones que con tesón se manifestaron”. Aseguró, que en vista de tal situación, no tenían derecho los impacientes a tomar la actitud de la urgencia y el cambio, y sí a esperar mejores resultados de la prudencia y perseverancia de los asociados. Para esto no hacía falta renunciar a los ideales políticos, sino seguir “en todas las esferas de acción”⁶³¹.

Las últimas palabras pronunciadas por el presidente de la *Liga*, estuvieron motivadas en la insistencia de los logros conseguidos por la Asociación. El propio Bayo, explicaría: “No ha habido, á mi modo ver Asociación importante que haya alcanzado tanto éxito en tan poco tiempo [...] Es verdad que tiene nuestra Asociación grandísimos elementos que la hacen la guerra, y á mi me extraña que se diga que no ha progresado, cuando, lejos de eso, ha progresado de una manera tan rápida que no diré como impulsada por el vapor, sino como por la electricidad”. Quiso recordar también a los asistentes que la *Liga* había comenzado con sólo once individuos. Reiteró que todo lo que era objeto de sus aspiraciones, incluida la unión electoral para obtener sus fines, era una consecuencia de las bases esenciales que se habían confirmado y ratificado en la primera Asamblea, donde habían sido compartidas por más de mil delegados. Respecto a la efectividad de la propaganda que había rodeado a las actuaciones de la *Liga Agraria*, hizo una advertencia indicando el éxito que habían tenido las convocatorias en diversas ciudades de España, lo que en su opinión, significaba que necesariamente se había ganado crédito y reputación. Se habían conseguido igualmente un importante número de puestos

⁶³⁰ De esta forma se materializaba lo que solo unos meses más tarde sería el comienzo del desmembramiento de la *Liga Agraria*. Además, los nuevos Estatutos, tan polémicos como solicitados por las distintas facciones de la Asociación, no tardarían en ver la luz. *Ibidem*.

⁶³¹ *Ibidem*.

representativos en los municipios, obteniéndose la totalidad de los concejales en algunos de ellos; algo que corroboraba y venía a reforzar las palabras de su compañero Gamazo. Con ello, Bayo mantenía su idea referida al freno impuesto al despilfarro y a la limitación en el presupuesto de gastos del Estado⁶³².

Puso fin a su discurso subrayando los trabajos que se estaban realizando en nombre de la *Unión económico-electoral* y arremetiendo contra los que, sin conocer los distritos en los comicios, pretendían ser la representación y protección de los contribuyentes y de los mantenedores de las cargas del Estado. Por esta razón, indicó la necesidad de recabar la unidad de todos para conseguir una representación oportuna, mediante diputados en Cortes que, al mismo tiempo, participaran de las iniciativas de la *Liga Agraria*. Agradeciendo a todos la presencia, dio por terminada su intervención. Con ello, finalizaba también la tercera y última de las sesiones previstas en la Asamblea⁶³³.

La polarización provocada en el seno de la *Liga Agraria* como consecuencia de los debates y exposiciones de la tercera Asamblea, había sido un hecho constatable durante el desarrollo de las propias sesiones. Para algunos de los representantes, había quedado patente la obiedad de los malos resultados en los dos años de existencia de la Asociación, lo que ponía en una situación de clara decadencia a la misma⁶³⁴. En consecuencia, entre muchos de los delegados y seguidores comenzó una lucha más abierta, dirigida a conseguir una mayor presencia en las tareas electorales y en las acciones políticas.

Desde algunas posiciones más pragmáticas se había aconsejado en más de una ocasión un cambio en las propuestas reivindicativas, instando a sus miembros a que dirigieran sus esfuerzos a conseguir de los poderes públicos una serie de logros entre los que se citaban, por ejemplo, un buen

⁶³² *Ibidem*.

⁶³³ Fueron muy directas las palabras del presidente Bayo, especialmente las que hicieron referencia al caciquismo y sus nefastas consecuencias. En este sentido se expresó de la siguiente forma: "Porque es preciso que tengáis presente que hemos querido destruir una roca de granito dándole golpes con un mazo de corcho, cuando lo que se necesitaba para destruirla eran cartuchos de dinamita. Pues bien, dada la fuerza que tiene en nuestro país el caciquismo, hay que pensar en destruir esa roca, luchando con el caciquismo político y aplicando para destruirla las grandes fuerzas dinámicas de la voluntad y unión de los agricultores". *La Liga Agraria*, 28 de diciembre de 1889.

⁶³⁴ *Ibidem*. Asimismo, en *El Globo*, 18 de diciembre de 1889.

sistema de riegos, la puesta en marcha y el fortalecimiento de bancos agrícolas, la transformación de los cultivos en progresivo abandono por otros más productivos, la petición de construcción de caminos, ferrocarriles, así como la mejora de las vías de comunicación, ya fueran terrestres, fluviales, etc., en vez de solicitar rebajas en los impuestos, protección para la producción nacional o el aumento de los aranceles⁶³⁵.

Señalada la reforma de los Estatutos como uno de los puntos capitales en que habrían de fijarse las deliberaciones y acuerdos ligueros, aquéllos quedaron aprobados en mayo de 1890. Precedidos por un amplio preámbulo donde se repartían los contenidos en seis capítulos, las nuevas normas que habrían de regular las acciones de la *Liga Agraria* quedaron finalmente recogidos en 43 artículos y una disposición transitoria, dejando muestras, una vez más, del dualismo existente en la dirección de la Asociación⁶³⁶.

Era precisamente el preámbulo una declaración densa de intenciones, pensada para justificar entre los asociados la necesidad de reformar los Estatutos. El primero de los capítulos contenía una exposición dirigida a convocar a un mayor número de fuerzas con el fin de poder desplegar con una mayor eficacia la acción social de la *Liga*⁶³⁷. El carácter político de la misma, recogido en el capítulo segundo, había sido el asunto más conflictivo debatido por los asociados y representantes en la última Asamblea, en donde se había solicitado por primera vez, de una forma manifiesta y somera, que la *Liga Agraria* se declarara partido «militante». Dicha visión estaba apoyada en la idea de que las soluciones económicas sustentadas por aquélla, no conseguirían ser tenidas en cuenta por los partidos si se mantenía la dejación que respecto a los «asuntos» políticos habían presentado hasta esos momentos un destacado grupo de seguidores. A todo ello se sumaba la necesidad de conseguir apoyos y medios de acción que fueran capaces de impulsar las reformas solicitadas en materia económica, referidas principalmente a la política arancelaria, al régimen impositivo y a la

⁶³⁵ *El Globo*, 18 de diciembre de 1889.

⁶³⁶ Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 56, y Alba, Santiago (1916), ob. cit., págs. 49-50.

⁶³⁷ En el preámbulo de los Estatutos se recogían los siguientes capítulos: "I. Necesidad de la reforma de los Estatutos para vigorizar nuestra Asociación; II.Cuál es el carácter político del programa económico de la Liga Agraria y de sus medios de acción social; III. De las tres bases fundamentales en que se informan estos Estatutos; IV. De la Asamblea general; V. De la Junta directiva; VI. De las Juntas locales y regionales de la Liga Agraria". *La Liga Agraria*, 28 de marzo de 1890.

reducción de gastos. Unos aspectos, estos últimos, que afectaban directamente a la base del Estado⁶³⁸.

Con todo, las intenciones reflejadas por la Junta Directiva en los Estatutos eran bien claras en este sentido. En lo relativo al derecho público, consideraba la Junta que el mantenimiento de la estabilidad y la calma debían conformarse como las primeras y fundamentales de todas las soluciones económicas. En este sentido, era el capítulo segundo el que señalaba:

Dentro de este régimen parlamentario aquellos partidos que intenten presentarse como hueste militante en la arena de los comicios y del Parlamento, sin mostrarse, á la par que como milicia de combate, como instrumento de gobierno capaz de tomar en su mano las riendas del poder, no sólo poco o nada valen ni significan, sino que además, por la propia impotencia que llevan ingénita, están condenados á verse uncidos como miserables esclavos al carro de los triunfadores⁶³⁹.

El hecho de constituir a la *Liga Agraria* como un instrumento de gobierno, alterando la esencia de sus Estatutos originales, además de dirigirlo de forma directa hacia los bancos del poder, implicaba igualmente la formulación de un programa más amplio que aportara soluciones concretas a todos los problemas concernientes a la gobernabilidad del propio Estado. Claro está, que al tener que concertar las voluntades de los asociados sobre materias políticas, la Junta creía que muy pronto se encenderían las discordias entre ellos, produciéndose la dispersión y la desaparición de la Sociedad. Otra cuestión de difícil término lo conformaba el mantenimiento, una vez organizada la *Liga* en partido, de un programa político basado exclusivamente en las soluciones económicas. No sin razón, algunos miembros consideraron que serían insuficientes los planteamientos económicos si no se adherían a los mismos, convicciones e intereses más amplios que pudieran competir con los programas de los demás partidos y proyectos políticos ya existentes⁶⁴⁰.

En realidad, todos estos problemas habían sido motivo de un cierto recelo en la primera de las Asambleas celebrada por la *Liga*, al proclamar

⁶³⁸ *Ibidem*.

⁶³⁹ *Ibidem*.

⁶⁴⁰ *Ibidem*.

como base principal de sus Estatutos el no hacerse solidaria de ningún partido. Resulta por todo ello evidente que la conformación de la primera de sus Juntas se realizara con personas adheridas a diferentes intereses y campos de la política. Además, y una vez iniciada la actividad económico-electoral de la Asociación, los nuevos Estatutos obligaban a mantener una firme apuesta por la definitiva vigorización y robustecimiento de la organización agraria. Todo ello sin olvidar las reivindicaciones que, desde un comienzo, habían puesto hincapié en la producción nacional y en la necesidad de que aquéllas fueran atendidas desde todas las esferas del poder. Por añadidura, la nueva situación creada en la *Liga Agraria*, obligaba a reconocer los comicios electorales como uno de los mayores objetivos para hacer valer su influencia en los órganos de decisión del Estado⁶⁴¹.

Completaban el preámbulo de los Estatutos los capítulos dedicados a la Asamblea General, así como a destacar la importancia de la Junta Directiva y de las Juntas locales y regionales. Precisamente, estas últimas debían ser los elementos destinados a asegurar la unidad de la Asociación, el primer baluarte de la defensa económica y los órganos encargados de transmitir a todos los rincones de la geografía española las acciones de la *Liga*. En este aspecto se especificaba lo siguiente:

Ningún beneficio mayor pueden hoy recibir las poblaciones diseminadas por los campos que el que en medio de ellas se constituya una Junta de la Liga Agraria acertadamente organizada conforme á las peculiares condiciones y exigencias de cada localidad, para procurar por medio de la asociación mutua los beneficios del crédito agrícola, y por medio de una cooperación que suprima intermediarios parásitos, los beneficios de la venta directa de la producción agrícola en sus naturales mercados, así como también la compra directa, y por tanto a los precios más ventajosos, de aquellas primeras materias, como semillas, abonos, útiles de labor, etc., que necesitan las industrias agrícolas⁶⁴².

No obstante, iban a ser en último término las reformas introducidas en los Estatutos, referidas a la composición de la Junta Directiva, las que terminarían dando lugar a una ruptura declarada entre varios de los miembros de la *Liga Agraria*. De este modo, algunos de los vocales

⁶⁴¹ *Ibidem*.

⁶⁴² *Ibidem*.

decidieron que tuvieran entrada en la Junta todos aquellos diputados y senadores que hicieran gestos en favor del programa liguero, hecho que significaba la entrega del control de la Asociación al vicepresidente Germán Gamazo⁶⁴³. Con esta decisión se ponía en marcha lo manifestado en los artículos 5º y 6º de los nuevos Estatutos. En ellos se determinaba:

Art. 5º. La Junta directiva de la Liga Agraria se compondrá de un Presidente, seis Vicepresidentes, de los que uno será Tesorero, cuatro Secretarios, veinte Vocales elegidos por la Asamblea general, y de los Diputados a Cortes y Senadores que acepten el programa económico de la Liga Agraria y se comprometan a apoyar en las Cortes los acuerdos que prevalezcan en la Junta directiva. Art. 6º. Los Diputados y Senadores que formen parte de la Junta directiva en las condiciones que determina el artículo anterior tendrán en la misma el carácter de Vocales natos, que conservarán todo el tiempo que dure su investidura para la representación en Cortes⁶⁴⁴.

La situación se tornó aún más difícil al ser el propio presidente, Adolfo Bayo, quien se manifestara en contra de tal decisión, no reconociendo más fuente de poder que el que pudiera surgir de las Asambleas generales. Dicha actitud estaba justificada, tanto por parte del Presidente como de otros delegados, al alegar que el número de personas en la Junta con cargos parlamentarios no debía de exceder de aquellos otros individuos que no ostentaran cometidos similares⁶⁴⁵. De esta forma, y en un artículo publicado en *La Liga Agraria* el 21 de junio de 1890, se informaba de las dimisiones de Bayo y Maluquer, dejando a Gamazo, prácticamente al frente de los trigueros y como la cabeza más visible de la causa proteccionista sostenida por propietarios y agricultores castellanos. En efecto, tras una de las sesiones celebrada por la Junta el día 16 de aquel mismo mes, y al no haberse llegado a un acuerdo respecto a los Estatutos, las dimisiones se hicieron efectivas, confiando la Asociación que con la llegada de la próxima Asamblea, prevista para finales de ese año, el conflicto remitiera y ambos socios retomaran los asuntos de la *Liga*⁶⁴⁶.

⁶⁴³ Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 56.

⁶⁴⁴ *La Liga Agraria*, 7 de abril de 1890.

⁶⁴⁵ Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 56.

⁶⁴⁶ Con las siguientes líneas, se recogían los deseos de conciliación en la *Liga* en el citado artículo: "La Junta directiva nunca se hubiera resignado á dar el adiós de despedida á ninguno de los dos patricios, cuyo leal concurso le es tan necesario; y después de proveer por los medios reglamentarios á que no quede desatendido el despacho ordinario durante el verano, aguarda confiada la Asamblea general para ver desvanecida la pequeña nube en el cielo de sus esperanzas. Allí verán los señores Bayo y Maluquer confirmada la confianza que

Sin embargo, asumiendo una postura aún más distante de la mayoría de los miembros de la Junta, Bayo publicó el 1 de septiembre una circular titulada "A los asociados a la Liga Agraria", en la que expresaba de forma contundente el descontento y la decepción sufrida. Dejando constancia de su paso por la *Liga* y de su condición de «acólito» del partido conservador, aseguró que nunca pidió permiso a su líder para formar la *Liga Agraria*, ya que por encima de la política siempre habían prevalecido los cumplimientos de los juramentos, así como su elevada lealtad al servicio de los intereses de la Nación. Después de explicar que los nuevos Estatutos no hacían sino introducir restricciones «dictatoriales», limitando el derecho de asociación y el de la asistencia a las Asambleas, Bayo señalaba:

No sería prudente guardar silencio cuando tanto se habla, escribe y trabaja, trayendo y llevando el nombre de la Liga Agraria y de su fundador y Presidente, si bien hoy dimisionario de la Junta Directiva cuando se ha hecho publicar [...] que al fundar la Liga Agraria, no tuve más propósito que hacer política conservadora [...] Milito, es cierto, en el partido acaudillado por el Sr. Cánovas del Castillo, como militan en el fusionismo los señores Maluquer y Gamazo, y en el republicano templado el Sr. Muro; pero debo asegurar, que si alguien con insidia ha querido y quiere sembrar política y preparar las disposiciones y hechos de la Liga para esos fines, no será su iniciador quien de para cebo, a tan venenosa serpiente, la honradez y el sudor del labrador⁶⁴⁷.

Aconsejaba Bayo que siguiendo las directrices marcadas por las Juntas locales y provinciales, entidades que se suponían autónomas para tomar acuerdos, votaran a favor de quienes estuviesen dispuestos a defender los intereses agrícolas. Pero sobre todo, la circular contemplaba de manera clara, tanto los antecedentes como el conflicto surgido a raíz de la aprobación de los Estatutos y el peligro que los mismos entrañaban para la

siempre merecieron; y allí verá también el país productor, con el instinto certero de la propia conveniencia, fundida en una sola aspiración, y armónica y perfecta, la idea salvadora de la unión de todas las voluntades, nuevo punto de apoyo para dar un paso de gigante en el camino de nuestra regeneración económica". *La Liga Agraria*, 21 de junio de 1890. Algunas semanas más tarde, varios periódicos se apresuraron a manifestar que, como consecuencia de la dimisión de Adolfo Bayo y la aceptación accidental de la Presidencia por parte de Germán Gamazo, éste se disponía a dejar de forma definitiva las filas del partido fusionista; suceso que no se produjo en la realidad. *El Clamor*, 2 de septiembre de 1890. También en *La Liga Agraria*, 21 de julio de 1890.

⁶⁴⁷ La circular fue publicada en su integridad por *La Liga Agraria*. Véase el número correspondiente al 7 de septiembre de 1890. También en *El Clamor*, 2 de septiembre de 1890.

propia *Liga*. En este sentido, Adolfo Bayo había dejado clara su posición, manifestando su sentir y su desengaño respecto a la Junta Directiva en los siguientes términos:

Las catástrofes suelen acaecer de repente cuando las dificultades se quieren orillar con la mano del tiempo. Un acontecimiento inesperado produjo, hace próximamente un año, cierta alarma entre los ligueros. Yo mismo lo confieso, me hallé envuelto en las densas sombras de la sorpresa. Abandonando mis intereses y comodidades, sin haberme correspondido á mí el tomar parte en aquel acto, creí, como Presidente, salir á la defensa de la estrecha unión de la Junta Directiva; en la prensa, en el meeting de Barbastro y en cartas particulares y hasta rebajándome, si en la manifestación noble y sincera cabe humillación, puso todo mi cuidado en tan noble empeño. Mas los acontecimientos han seguido su rumbo y atesoran mucha elocuencia. Habiéndose reformado los Estatutos, por iniciativa de dos individuos de la Junta Directiva, muy caracterizados en política, aquéllos han sufrido una reforma radical. Por ella se trataba de dar entrada en la Junta Directiva de la misma, con voz y voto, cuando la Junta Directiva es elegida por la Asamblea general, á todos los Senadores y Diputados que hicieran declaraciones favorables al programa de la Liga. Se han introducido también en los Estatutos restricciones dictatoriales limitando el derecho de asociación y el de asistencia á las Asambleas generales, con lo que se empequeñecía su importancia haciendo ilusorios sus trabajos y matando el natural entusiasmo de las numerosas huestes que concurrieron á las dos primeras Asambleas formando extraordinario contraste con la raquítica y diminuta verificada á principios de este año⁶⁴⁸.

Él mismo, con el apoyo del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* y de otras colectividades del sector agrícola, se vio en la necesidad de censurar algunos hechos sucedidos en el seno de la *Liga Agraria*, especialmente en lo que hacía referencia a los Estatutos y al hecho de que éstos hubieran sido votados por las siete octavas partes de la Junta Directiva. Un hecho que Bayo quiso matizar, aludiendo a que en las discusiones previas al proyecto habían existido ciertas diferencias y oposiciones, lo que suponía un hecho de graves consecuencias para el porvenir de la *Liga*. Asimismo, se había solicitado que al menos asistieran para la aprobación de los mismos la mitad más uno del número de individuos que componían formalmente la Junta Directiva, individuos que contabilizaban un total de treinta y una personas.

⁶⁴⁸ *La Liga Agraria*, 7 de septiembre de 1890, y en Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 56.

Realizadas varias citaciones y no consiguiéndose una cifra de asistentes deseada, se decidió, siempre siguiendo la propuesta planteada por uno de los miembros de la Junta, que se convocara una nueva reunión, conviniendo que en la misma se procediera a la discusión y votación de los Estatutos sin tener en cuenta el número de asistentes al acto. Bayo, muy elocuentemente, describía así esta situación:

El día 19 de mayo verificóse la reunión, contándose once vocales asistentes y entre ellos los iniciadores y autores de la reforma, señores Sánchez Toca y Gamazo; ocho votaron en favor y tres votamos en contra. En aquel mismo día consigné mi protesta á dicho acto, pues la reforma radical de la constitución de la Liga que iba unida á la bandera que yo levanté y á cuya sombra y á cuyo programa de ancha base de reunión, excluida toda ingerencia política, se debió el gran movimiento de la opinión en todo el país, favorable a la misma. Declaré al mismo tiempo que si como Presidente tenía que sancionar los acuerdos de aquella mayoría de cinco votos, que sólo componía la sexta parte de la Junta, me reservaba para el porvenir mi libertad de acción⁶⁴⁹.

Corregida la idea que sobre la Asociación había prevalecido hasta entonces y cuestionados los razonamientos de quien hasta esos momentos había sido su Presidente, toda vez que los Estatutos habían sido finalmente aprobados, Bayo esperó el momento más oportuno para hacer realidad su dimisión. En el acta de la reunión, llevada a cabo por la Junta Directiva el día 16 de junio, se hacía constar de forma expresa y a petición propia, la separación de la misma de la persona del Presidente de la *Liga Agraria*, dejando abierta una crisis que no tendría fin hasta el desvanecimiento de aquélla solo un año después. Un elemento añadido a la crisis, surgida como consecuencia de las diferencias en los Estatutos, iba a poner un cerco insalvable a la continuidad de la *Liga*.

A todo ello vino a sumarse un nuevo marco legislativo con la discusión de una nueva ley de sufragio. Un acontecimiento que se unía al acostumbrado interés por acceder a los cargos representativos en los principales órganos de la Administración y a la conformación, poco tiempo después, de las Cámaras Agrícolas. Con estas últimas, enmarcadas dentro de los elementos asociativos inherentes a la productividad en el sector agrario, quedaba abierto un puente entre las nuevas reivindicaciones de la

⁶⁴⁹ *La Liga Agraria*, 14 de agosto y 7 de septiembre de 1890.

clase productora, y lo que aún restaba de una actividad más que lacerada de la *Liga Agraria*.

- Las Cámaras Agrícolas y el final de la *Liga Agraria*

Acabado el *Gobierno Largo* de Práxedes Mateo Sagasta, y tras una holgada etapa de sucesivas crisis de gobiernos y disidencias no resueltas en el seno del partido liberal, en julio de 1890 la Reina Regente nombraba al nuevo gobierno conservador presidido por Cánovas del Castillo. Solo unos días antes y coincidiendo con los últimos momentos de Sagasta en el Ejecutivo, la *Gaceta de Madrid* se apresuraba a hacer pública la nueva ley de sufragio en la que se reconocía el derecho a elegir un diputado por cada cinco mil electores, siempre y cuando se perteneciera a la clase agrícola y se constituyeran en centros regionales, lo que implicaba una organización semejante a la ya existente para las Cámaras de Comercio⁶⁵⁰. El espíritu de la nueva ley y sus taxativas disposiciones ponían a merced de los labradores, un medio eficaz para la elección de sus propios representantes. El éxito fue atribuido por gran parte de la prensa a las iniciativas que habían surgido conjuntamente de la *Liga Agraria* y la *Unión económico-electoral*, apoyadas decididamente por hombres como Gamazo, Rato, el conde de Esteban, Orellana y algunos miembros más de la Junta Directiva de la propia Asociación⁶⁵¹.

En el mes de junio de aquel mismo año, fue precisamente la propia *Unión económico-electoral* la que dirigió una petición formal al ministro de Fomento para que en breve se articulara la constitución de las Cámaras Agrícolas. Desde distintos foros, especialmente desde aquellas instituciones relacionadas con la agricultura, las solicitudes a este respecto remitidas al Gobierno comenzaron a ser considerables, siendo una de las más señaladas,

⁶⁵⁰ En efecto, en el Título III, el artículo 24 expresaba lo siguiente: "Constituirán colegios especiales, y tendrán derecho a elegir un Diputado a Cortes por cada 5.000 electores de que se compongan, las Universidades literarias, las Sociedades económicas de Amigos del País y las Cámaras de Comercio, industriales y agrícolas organizadas oficialmente". Además, y una vez que a la Junta Central Electoral comenzaron a llegar solicitudes aclaratorias en este sentido, aquélla publicó unos acuerdos con mención especial a la forma en que habrían de acudir al Censo las citadas organizaciones e instituciones. *Gaceta de Madrid*, 29 de junio y 7 de noviembre de 1890.

⁶⁵¹ *La Liga Agraria*, 21 de junio de 1890.

además de la promovida por la misma *Liga*, la gestada por el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*⁶⁵². El establecimiento paulatino de Cámaras Agrícolas, conocidas las posibilidades que para la asociación podían ofrecer en este sentido, comenzaron a hacerse tan prolíficas como lo habían sido en su momento las sucursales de la *Liga Agraria*. En algunos casos, era la visita de algún destacado miembro de la Asociación lo que llevaba a poner en marcha un destacado contingente, tanto de medios como de personas, para emprender la organización y puesta en marcha de una nueva entidad agrícola en cuestión⁶⁵³.

De esta manera, en noviembre de 1890 la *Gaceta de Madrid* publicaba el Real Decreto, propuesto por el ministro Santos de Isasa, que articulaba la formación y constitución de las Cámaras Agrícolas, dando así validez y confirmando las organizaciones que en este sentido ya venían configurándose y funcionando en varios puntos de la geografía española. En la Exposición de motivos contenida en dicho Real Decreto, el Ministro aludía a las Cámaras de Comercio e Industria, así como a la necesidad de que muchos de los intereses en este sector pudieran organizarse en sentido similar, al representar estos últimos en la economía española una fuerza todavía más importante y vital que la desarrollada por la industria o el comercio. La carencia de instituciones en nuestro país de análogo carácter en la agricultura, además de la necesidad que existía de obtener amparo oficial para las mismas, motivaron al Gobierno a solicitar a la Reina Regente la aprobación del mencionado precepto, en el que en su artículo primero y de un modo expreso especificaba lo siguiente:

Las asociaciones de carácter permanente que usando de su libertad constitucional, y conforme a la ley de 30 de junio de 1887, funden los ciudadanos españoles con el objeto de defender y fomentar los intereses de la agricultura, de la propiedad rústica, de los cultivos y de las industrias rurales, cualesquiera que sean los procedimientos o métodos que dentro de la ley hayan adoptado o adopten para la realización de estos fines, tendrán el carácter de Cámaras agrícolas oficialmente organizadas, siempre que,

⁶⁵² *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Barcelona, 1890, págs. 359-361.

⁶⁵³ Es el caso, por ejemplo, de la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo, donde para dar más notoriedad al acto de formación de la Cámara Agrícola, asistió uno de los vicepresidentes de la *Liga Agraria*, en concreto don Jacinto Orellana. *La Liga Agraria*, 14 de octubre de 1890.

además de la condición expresada anteriormente, reúnan las que marcan en los artículos 2º y 3º de este decreto⁶⁵⁴.

Más adelante, en su artículo 5º, se reconocían las facultades, entendidas también como limitaciones, que dichas Cámaras podían ejercer. Entre las más importantes estaban las propuestas al Gobierno y las solicitudes a los Cuerpos Colegisladores de cuantas resoluciones se estimaran convenientes para el desarrollo y mejora de la agricultura, ganadería y demás industrias que con ellas estuvieran relacionadas. Podrían, además, fomentar directa o indirectamente la enseñanza agrícola, promover y dirigir exposiciones locales, regionales o generales de los productos de la agricultura y ganadería, fundar en provecho de los asociados Montepíos y Cajas de Ahorros y de Seguros, contratar empréstitos, etc., todo ello dentro un estricto marco de maniobras dirigidas al mejoramiento material de la producción agraria, evitando cualquier manifestación de índole política⁶⁵⁵.

Las dificultades surgidas, empero, respecto a la aplicación del Real Decreto en cuanto a lo referido a la tutela de las Cámaras por parte del Estado, no tardaron en asomar entre algunos partidarios y simpatizantes que seguían manteniendo su particular visión de no alterar la independencia de las organizaciones de agricultores y de productores agrícolas. La ley electoral vigente otorgaba a las Cámaras Agrícolas idénticos derechos que a las Sociedades Económicas y a las Universidades. No obstante, el *Instituto Agrícola Catalán*, con buen criterio, había realizado algunas observaciones en el sentido de que la constitución de centros y sociedades de carácter no agrícola resultaba más fácil que la establecida para aquellos otros que estaban destinados expresamente a la agricultura. Esto era debido, en gran medida, a que el radio de acción de las primeras se situaba principalmente en las grandes capitales, una circunstancia que no se producía con las Cámaras Agrícolas. El ejercicio del mismo derecho en estas últimas se complicaba aún más, cuando se intentaba la agrupación de diversos pueblos de escaso vecindario, no pudiéndose llegar a equilibrar las capacidades que otras sociedades e instituciones podían tener respecto a aquellas vinculadas directamente con el sector agrícola.

⁶⁵⁴ *Gaceta de Madrid*, 15 de noviembre de 1890.

⁶⁵⁵ *Ibidem*. También en *La Liga Agraria*, 21 de noviembre de 1890.

Por otra parte, no es menos cierto que desde algunos posicionamientos difundidos desde *La Liga Agraria* se había venido insistiendo de forma reiterada en la posibilidad de constituir sindicatos agrícolas, aunque en ningún caso estuvieran desarrollados como entidades oficiales. De esta forma, desde el Ministerio de Fomento se entendió que las Cámaras debían adquirir para su constitución y régimen interno la articulación de un Real Decreto. El mismo planteamiento se hizo extensible para las pautas relativas a las Juntas Directivas, así como para las asambleas generales. Este aspecto contrastaba necesariamente con el espíritu que la *Liga Agraria* había mostrado en sus inicios, dañado inevitablemente la iniciativa individual que debía prevalecer en la libre asociación⁶⁵⁶.

De inmediato se alzaron voces proclamando que las funciones señaladas en el Decreto podían ser desempeñadas por sindicatos, o en su defecto por Cámaras no «intervenidas» por la acción del Estado. Las peticiones a los Cuerpos Colegisladores hechas a través de distintas Exposiciones locales y regionales, desde Montepíos y Cajas de ahorro, además de las realizadas desde otros centros de participación agrícola, advertían de la innecesaria intervención pretendida desde el Gobierno. Con todo ello, llegaron a establecerse opiniones advirtiendo que las Cámaras Agrícolas, entendidas como organismos oficiales, no darían el resultado esperado⁶⁵⁷.

Fue por este motivo por lo que la Cámara Agrícola de Cataluña, creyendo interpretar las aspiraciones de todas las demás existentes, y con el beneplácito del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, dispuso en nombre de todos sus asociados solicitar al Ministerio de Fomento el envío a las Cortes de un proyecto de ley que permitiera a las Cámaras Agrícolas constituidas oficialmente, elegir con sus sufragios los diputados que pudieran representarlas mejor, sin que fuera preciso que sus asociados causaran baja en el censo general, ni renunciar, por tanto, al derecho de votar al candidato político de su respectiva circunscripción que estimaran más oportuno⁶⁵⁸.

⁶⁵⁶ *La Liga Agraria*, 21 de noviembre de 1890.

⁶⁵⁷ *Ibidem*.

⁶⁵⁸ *Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, Barcelona, 1891, págs. 159-160.

Con los efectos todavía visibles de las dimisiones producidas en la *Liga Agraria*, sumados a las opiniones que sobre las Cámaras Agrícolas venían sucediéndose en el seno de su Junta Directiva, presidida en esos momentos por Gamazo, se decidió convocar la cuarta Asamblea General, prevista para los días 15, 16 y 17 del mes de diciembre de aquel mismo año. Ya en la primera reunión preparatoria del 20 de noviembre, se acordó que, careciendo dicha Junta de facultades para admitir las dimisiones producidas meses atrás de los señores Bayo y Maluquer, se daría cuenta de las mismas en la Asamblea General, con la esperanza de que sus firmantes desistieran finalmente de su resolución para, de esta forma, seguir contando con la presencia y el concurso de aquéllos en la Asociación⁶⁵⁹.

En lo tocante al orden del día, quedó acordado por unanimidad que en la mencionada Asamblea habría de discutirse la posible solicitud ante el Ministerio de Fomento de la declaración, como centro especial, es decir como Cámara Agrícola, para la *Liga Agraria* con vistas a los posibles efectos que pudieran obtenerse de la aplicación de la nueva ley electoral. Asimismo, se dispuso que una ponencia estudiase y propusiera a la Junta, la manera y forma de adaptar las disposiciones del Gobierno sobre dichos centros a los Estatutos y Reglamentos de la *Liga*, convocándose una nueva reunión para el día 25 de noviembre⁶⁶⁰.

La importancia y transcendencia de los problemas que se habían venido planteando desde la última Asamblea, y que estaban llamados a resolverse de forma precisa, motivaron que la convocatoria a la cuarta Asamblea de la *Liga* se realizara, tal y como se recogía en los Estatutos de 1888, con la previa citación a todos los socios de la misma sin excepción alguna, así como a todas las colectividades agrícolas que hasta ese momentos estuvieran comprometidas con aquélla⁶⁶¹. Este hecho vino a alterar significativamente el «normal» funcionamiento de la Asociación, ya que el regreso de Adolfo Bayo a la presidencia suponía un obstáculo para todas aquellas reformas que habían sido aprobadas recientemente,

⁶⁵⁹ *La Liga Agraria*, 21 de noviembre de 1890.

⁶⁶⁰ *Ibidem*.

⁶⁶¹ Incluso en esta ocasión, y con objeto de hacer menos gravoso el viaje a aquellos socios que lejos de Madrid quisieran asistir a la Asamblea, el presidente de la *Liga* y en su nombre la Junta Directiva, solicitaron del Comité Central Ejecutivo de Ferrocarriles una bonificación en los billetes de ida y vuelta. Finalmente la Comisión Ejecutiva de las Compañías de ferrocarriles accedió que para tal ocasión, los billetes pudieran ser adquiridos por la mitad de su precio. Véase *La Liga Agraria*, 7 y 14 de diciembre de 1890.

especialmente las relativas a los Estatutos de la Asociación. Un detalle que, por sí solo, iba a elevar las consabidas tensiones que ya arrastraba la Asamblea y que, en cierto modo, iba a ser decisivo para el futuro ligero.

En consecuencia, y a tal fin, el día 15 de diciembre en el aula número 1 del Instituto del Cardenal Cisneros en Madrid, con poco público entre los asistentes y bajo la presidencia de Adolfo Bayo, dio comienzo la primera de las sesiones correspondientes a la cuarta Asamblea General de la *Liga Agraria*. Acompañando al Presidente en la mesa, se situaron Gamazo, Muro y Maluquer, este último incorporado otra vez a la disciplina ligero. Oídas las nuevas disposiciones legales aprobadas, relativas a las Cámaras Agrícolas, se pasó a discutir si éstas garantizaban los intereses de la clase agrícola, instando a los presentes a convenir si con el nuevo marco legal debía o no desaparecer la *Liga Agraria*⁶⁶².

Con un escaso interés mostrado por la prensa, durante los tres días de sesiones, éstas fueron desarrollándose de una forma más moderada y sucinta que en anteriores Asambleas⁶⁶³. La decisión adoptada para que la *Liga* continuara al frente de los nuevos organismos que se fueran constituyendo con la nueva ley, suponía mantener su pulso político, además de su continuidad como plataforma de apoyo a los intereses agrícolas en sus más variadas manifestaciones⁶⁶⁴. Algunas de las propuestas estuvieron

⁶⁶² La convocatoria manifestaba con total claridad las cuestiones que a este respecto tenían que ser debatidas en la Asamblea. Así, habrían de plantearse y resolverse con preferencia, entre otras, las siguientes cuestiones: "¿Se considera bastante la virtualidad de la Ley electoral y del Real decreto sobre creación de Cámaras agrícolas para confiar que éstas se organizarán convenientemente y en la debida proporción, sin otro estímulo que el interés aislado de cada comarca, debiendo desaparecer, ó por el contrario, se estima conveniente la subsistencia de esta Asociación como centro director de este impulso, adaptando su organización á las nuevas relaciones económico-políticas que han venido á crear las citadas leyes? Y en este último caso, ¿habrá de constituirse ella misma en una de tantas Cámaras agrícolas, para llevar en su día á las Cortes exclusiva representación, ó deberá ofrecer á la de todos los intereses agrarios un lazo de unión y un punto de apoyo sólido y cercano á los Poderes públicos? ¿Cuál será la fórmula que armonice la exigencia del interés de todos con la vida propia de cada Centro, y cuáles los elementos materiales que garanticen el desenvolvimiento regular de la acción común?". *La Liga Agraria*, 7 de diciembre de 1890.

⁶⁶³ *La Liga Agraria*, 21 de diciembre de 1890; *El País*, 16 de diciembre de 1890, y *El Correo*, 16 y 17 de diciembre de 1890.

⁶⁶⁴ En una de las conclusiones surgidas como respuesta a una propuesta del representante de la *Liga* de Ciudad Real, leída en la sesión celebrada el 17 de diciembre de 1890 se recogía textualmente lo siguiente: "1ª. La Liga Agraria debe continuar con su actual organización, para que con sus poderosos medios de propaganda procure por todas partes la formación de Cámaras agrícolas. Conservando esta vida independiente, debe servir de lazo de unión entre todas las Cámaras agrícolas, entrando á formar parte de su Junta directiva los Diputados que elijan las Cámaras agrícolas, como Vocales natos". *La Liga Agraria*, 21 de diciembre de 1890.

encaminadas a solicitar de los asociados las modificaciones necesarias para que, en todo momento, la *Liga* estuviese conectada con las posiciones de las diversas Cámaras Agrícolas que fueran surgiendo.

En este sentido, vinieron a ponerse sobre la mesa algunas dudas referidas a la posible compatibilidad entre ambos modelos asociativos, siendo en este sentido la intervención de Giraldo la más clara, al manifestar que, con toda probabilidad, los medios de acción de la *Liga* en ningún caso estarían en «armonía» con los fines pretendidos por las Cámaras Agrícolas. Para paliar en la medida de lo posible esta insuficiencia, debía procurarse que la *Liga* adoptara los medios para quedar convertida en Cámara, constituyéndose así en un nexo de unión entre todas las demás que en adelante quisieran organizarse. Algo similar sucedió con la exposición de Rivas Moreno, quien, además de exponer las razones por las que en su opinión se hacía precisa la reforma del Real Decreto, propuso limitar la creación a una sola Cámara por cada partido judicial. Con ello, se forzaba a los presidentes de cada una de las mismas a asociarse ineludiblemente y, en consecuencia, a limitar su autogestión, haciéndola depender de la Cámara de Madrid que actuaría como una Cámara Central⁶⁶⁵.

La división provocada por la intervención de Rivas Moreno se hizo evidente, mostrándose muy disconformes una gran mayoría de los concurrentes⁶⁶⁶. Sin embargo, las propuestas relativas al aplazamiento del plazo para cumplir con los requisitos que la nueva ley electoral exigía a los interesados que quisieran constituirse en Cámara Agrícola, sí tuvieron una mayor y mejor acogida. A este respecto estuvo referida, casi por completo, la segunda de las sesiones celebrada el día 16 de diciembre. Considerando que la nueva ley concedía el derecho a constituir colegios especiales y teniendo en cuenta, además, que el plazo para la formación de los mismos había concluido para esas fechas, era evidente que resultaba imposible en la práctica hacer uso de un ejercicio que se otorgaba a una clase como la agraria. En consecuencia, se propuso a la Junta Directiva de la *Liga* que acordara el nombramiento de una Comisión, cuyo objeto fuera la preparación y presentación al Gobierno de una solicitud para que se incorporaran a los plazos establecidos la correspondiente prórroga de los mismos, en concreto hasta el 15 de enero de 1891, en el que pudieran los

⁶⁶⁵ *Ibidem*. También en *El País*, 16 de diciembre de 1890.

⁶⁶⁶ *El País*, 16 de diciembre de 1890.

electores asociados a las Cámaras Agrícolas obtener la baja en el Censo General⁶⁶⁷.

La necesidad de resumir los debates y aunar los sentimientos de la Asamblea, proporcionó al presidente Adolfo Bayo la ocasión para pronunciar un templado, a la vez que elocuente discurso, en el que a grandes rasgos y con aparente nostalgia, marcó las diversas etapas recorridas por la *Liga Agraria*. Este a su vez, quiso señalar las conquistas alcanzadas, anunciando, entre sinceros y repetidos aplausos, la reforma arancelaria que proyectaba el Gobierno conservador de Cánovas para proteger de la competencia extranjera los trigos, harinas y carnes del país. Concluida la intervención, la Asamblea dio por finalizadas sus sesiones⁶⁶⁸.

Parece evidente que lo tratado en la cuarta Asamblea indicaba que la *Liga* estaba llegando a su término. La apuesta por la continuidad de esta última, al tiempo que se autorizaba la creación y el desarrollo de las Cámaras Agrícolas, suponía, en efecto, un reforzamiento de las mismas en detrimento de las tesis ligueras. Adicionalmente, los sucesivos «escarceos» en la política por parte de destacados miembros de la *Liga* y la permanente referencia a la formación de un partido que fuese capaz de suceder a los todopoderosos protagonistas del turnismo, no habían hecho sino acotar todavía más, muchas de las posibilidades reales con las contaba la Asociación desde su inicio. Por último, estaba la creación de las Cámaras Agrícolas que, erigidas como la gran solución a los problemas de la asociación en el sector agrario, podían ser utilizadas como excusa para retomar el control, por parte del Estado, del entramado asociativo agrícola recién creado en los últimos años del siglo XIX en todo el país.

En definitiva, si la necesaria politización de una asociación como la *Liga Agraria* había visto disminuir su entusiasmo después que el partido conservador gobernara con el aplauso mayoritario de los asociados ligueros, quizá lo más plausible era liquidar una cuestión a la que poco o ningún sentido le quedaba por argumentar. En este sentido, la Asamblea de 1890,

⁶⁶⁷ El Real Decreto reconocía el interés y la conveniencia de que en las primeras Cortes elegidas por el nuevo censo se encontrara una nutrida representación de los intereses agrarios. Véase, por ejemplo, *La Liga Agraria*, 14 y 21 de diciembre de 1890; *El Correo*, 17 de diciembre de 1890, y *El País*, 16 y 18 de diciembre de 1890.

⁶⁶⁸ *La Liga Agraria*, 21 de diciembre de 1890; *El Correo*, 17 de diciembre de 1890, y *El País*, 18 de diciembre de 1890.

tal y como apuntara en su momento Santiago Alba, fue considerada como la última de las reuniones vinculada al movimiento agrarista surgido de las Asambleas anteriores y de las reuniones celebradas en las localidades de Borjas Blancas, Barbastro, Valladolid y Medina del Campo⁶⁶⁹.

Fue, en efecto, en el transcurso del mes de mayo de 1891, cuando formalmente la Junta Directiva de la *Liga Agraria* puso en marcha la última de las Asambleas, con el fin de finiquitar sus actuaciones públicas y dar paso, con otras formas y procedimientos, a las actividades de las Cámaras Agrícolas. Con escasísima concurrencia en los bancos y con un limitado interés, tal y como se argumentaba en un breve artículo de prensa, y bajo la presidencia, una vez más, de Adolfo Bayo, se abrió el 18 de mayo en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Central en Madrid la primera de las sesiones de la última Asamblea General celebrada por la *Liga Agraria* en nuestro país⁶⁷⁰.

Las noticias relativas a las mismas, celebradas los días 18, 19 y 20 de aquel mes de mayo, apenas contaron con el seguimiento de ocasiones precedentes. Solo unas líneas en algunos periódicos y escasas referencias en aquellos medios donde la *Liga* había sido bien acogida. El órgano oficial *La Liga Agraria*, discurría ya por su segunda época con una pequeña tirada de ejemplares y pocas páginas en su haber, de tal manera que la noticia quedó finalmente recogida en algo más de media página, aglutinando las distintas sesiones que la propia Asamblea daba lugar. Ello contrastaba, desde luego, con el seguimiento que la misma publicación había realizado en anteriores citas, donde se habían llegado a elaborar números monográficos con más de quince páginas dedicadas a dichos eventos⁶⁷¹.

Además de lo ya mencionado en relación a la disolución de la Asociación, debido al exiguo interés manifestado desde la primera sesión,

⁶⁶⁹ Santiago Alba, probablemente sin ser consciente de que aquel año no concluían oficialmente las tareas de la *Liga Agraria*, establece, sin embargo, esta fecha de 1890, sin especificaciones concretas a mes alguno, como la última de las reuniones llevadas a cabo por la Asociación. Ciertamente, el autor solo nos habla de tres Asambleas Generales, obviando, al parecer, la celebrada a comienzos de 1890 y la llevada a cabo en mayo de 1891, donde verdaderamente se iba a poner un punto y final a la andadura de la *Liga*. Véase Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 56, así como Alba, Santiago (1916), ob. cit., págs. 50 y 51.

⁶⁷⁰ *El País*, 19 de mayo de 1890.

⁶⁷¹ Véase para la última Asamblea el número correspondiente de *La Liga Agraria* del 20 de mayo de 1891.

solo tres temas fueron puestos a debate⁶⁷². Entre éstos figuraba, en primer término, una cuestión que estaba referida al fomento de la producción vinícola; tema que apenas tuvo seguimiento y que estuvo impulsada en todo momento por el marqués de Cussano⁶⁷³. “La conveniencia y proporción del impuesto sobre la renta”, tema que había sido propuesto a continuación, hubo de ser modificado por el correspondiente al que hacía mención a los “Medios pertinentes para convertir en un hecho social, o sea en leyes, las siete proposiciones fundamentales de la Liga Agraria”. Esta última cuestión no impidió que los debates, breves en su mayoría, fueran dando paso a lo que iba a ser la despedida de la *Liga*.

La ocasión se produjo en la segunda y última de las sesiones que tendría lugar el día 20 de mayo. Tras las escasas intervenciones, en donde se había puesto de relieve, tanto el espíritu que habían inspirado los principios de la *Liga Agraria* como el agradecimiento a todas aquellas personas, especialmente a diputados y senadores, que habían apoyado y defendido las propuestas de la Asociación, era aprobada por unanimidad una propuesta en la que textualmente se justificaba lo siguiente:

La campaña de la Liga Agraria dio por resultado el reconocimiento oficial de que era una solución práctica y patriótica la creación de las Cámaras agrícolas; y como estos centros están hoy llamados á dirigir la opinión de las provincias, las Asambleas en lo sucesivo deben celebrarse a propuesta de dichas Cámaras. La Junta puede esperar á que dichas Cámaras nombren su representación en Madrid, en vez de ser esta Asamblea la que proceda á nombrar la Junta directiva. La Asamblea debe conceder un voto de gracias á los ilustres patricios que han formado la Junta directiva, por su celo y patriotismo⁶⁷⁴.

Sin apenas discusiones, quedaba aprobada así una proposición que venía a solicitar de las Cámaras el mantenimiento de la defensa de las

⁶⁷² El propio Presidente, en vista del escaso número de asistentes en la primera sesión, consideró oportuno dejar para el siguiente día la misma, con lo que el número total de sesiones quedaban convertidas a dos, así como los asuntos pendientes de discusión. Al mismo tiempo se aprovechaba la oportunidad para que, a través de la prensa, se pusieran los temas a debate en conocimiento del público en general. *Ibidem*.

⁶⁷³ *El País*, 19 de mayo de 1891; *El Clamor*, 21 de mayo de 1891; *El Liberal*, 20 de mayo de 1891; *El Correo*, 19 de mayo de 1891; *La Liga Agraria*, 20 de mayo de 1891; *El Imparcial*, 20 de mayo de 1891, y *La Época*, 19 y 20 de mayo de 1891.

⁶⁷⁴ *El Clamor*, 21 de mayo de 1891; *El Imparcial*, 21 de mayo de 1891; *El Correo*, 20 de mayo de 1891.

aspiraciones agrarias, nombrando los representantes para las Asambleas que pudieran celebrarse a partir de ese instante. Con el «deslucimiento» del que se había hecho gala durante todos los actos y con la decisión de llevar a la práctica el último de los acuerdos, se deducía el fenecimiento de la *Liga Agraria*, a la vez que se aceptaba la disolución perenne de la Asamblea.

En todo caso, los intentos por realzar las particularidades de las distintas Cámaras Agrícolas no lograron aunar el mismo entusiasmo que la *Liga Agraria* había conseguido en las diferentes convocatorias celebradas entre 1887 y 1891. Hasta cierto punto, esta circunstancia era comprensible observando el comportamiento que la política económica mantenía en nuestro país, sobre todo al abrigo de los Aranceles celebrados en aquellos días y que culminarían en 1906. En este sentido, el Real Decreto de 24 de diciembre de 1890 ya había elevado los derechos arancelarios sobre los productos agrícolas y ganaderos, dándose de esta forma una importante respuesta protectora a la crisis agraria conforme a la nueva estrategia esgrimida por el Gobierno de Cánovas. Otra circunstancia similar fue el Arancel de 1891, lo que permitió la renegociación de algunos tratados de comercio, especialmente el que afectaba a Francia y estaba referido a la exportación de vinos españoles⁶⁷⁵.

El Arancel quedaba convertido así en la pieza clave del proceso negociador con Francia, encaminado, además, a la búsqueda de la protección interior. Tal como ha apuntado el profesor Sánchez Jiménez, solo en el primer bienio de la década habían disminuido las desavenencias entre los partidos mayoritarios por el problema de los aranceles, observándose una situación muy similar en los debates parlamentarios, originando menores divergencias y disidencias internas⁶⁷⁶.

Estaba claro que el panorama económico y político iba a modificar los mecanismos de sociabilidad entre la clase propietaria agrícola, desarrollados hasta esos momentos en España. No obstante, todavía durante algunos años más se mantuvieron algunas «extensiones» de las reivindicaciones ligueras. La más destacada de todas ellas tendría lugar en octubre de 1894, con ocasión de la celebración de la Asamblea de las Diputaciones en la ciudad de

⁶⁷⁵ Véase, por ejemplo, Sánchez Jiménez, José, *La España Contemporánea. De 1875 a 1931*, Istmo, Madrid, 1991, pág. 168.

⁶⁷⁶ *Ibidem*, págs. 159-160.

Palencia, en la que se volvieron a resucitar gran parte de las medidas del programa de la *Liga Agraria* concebido ocho años atrás. En aquella ocasión, las mayores reivindicaciones estuvieron referidas a la elevación de los derechos arancelarios, la rebaja de tarifas de ferrocarriles, la modificación de las cartillas evaluatorias, así como la creación de bancos agrícolas⁶⁷⁷.

Con el final anunciado de la *Liga Agraria*, terminaba un tiempo marcado por el pulso singular dirigido a la política y a la dimensión social lograda hasta esos momentos por la propiedad agrícola. Disminuía también, de manera momentánea, la actividad asociativa dentro del mundo de la producción y de la propiedad agraria en gran parte de las provincias españolas. A pesar de todo ello, la *Liga* significó, en efecto, un punto de referencia en las estrategias políticas planeadas dentro del largo y difícil período de la Restauración. Su conclusión en el panorama asociativo resultó ser la consecuencia directa de su desarrollo como sociedad de agricultores, patrocinando la no alineación política junto con la demanda de un mayor número de representantes en los foros de poder y contradiciendo, de este modo, las reglas más elementales del juego de la Restauración y del «turnismo» político. Si bien es verdad, tal y como se ha apuntado, que por un lado el mensaje liguero resultó a veces un tanto confuso e incierto, por otro, sin embargo, sirvió para alentar los posicionamientos políticos dentro del mundo agrícola que serían sustentados hasta los primeros decenios del siglo XX. Una etapa, el correspondiente al período de vida de la *Liga*, que resultaría muy definitoria para entender las estrategias que llevaría, unos años más tarde, a la ruptura definitiva y al enfrentamiento de las clases sociales en nuestro país.

3.- LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA LIGA AGRARIA

- Las tendencias proteccionistas y el «tercer» partido

La vocación proteccionista surgida en plena Restauración canovista, vino a alterar considerablemente el panorama de las relaciones económicas y

⁶⁷⁷ *El Correo*, 17 y 24 de octubre de 1894, y *El Imparcial*, 16 de octubre de 1894.

políticas en nuestro país, del mismo modo que ya sucedía en otros países europeos. En efecto, con la presentación del proyecto desfavorable al librecurso por parte de Germán Gamazo, en connivencia con los deseos de la *Liga Agraria*, se ponía en marcha un paquete de desacuerdos que afectaban directamente a la gestión de Sagasta, demostrando, una vez más, las escasas diferencias respecto a los planteamientos económicos que se estaban produciendo en otros Estados próximos.

Con su particular idiosincrasia, el sistema de «turnos», presente en los dos últimos decenios del XIX, fue testigo de los enfrentamientos ocasionados entre las dos visiones antagónicas surgidas en el campo económico, aun a riesgo de alterar la estabilidad en los bancos de los dos grupos políticos más en activo. Fueron estas mismas divergencias las causantes de una compleja encrucijada, llena de disidencias y escisiones, que terminaron aportando, también a la vida social y económica española, un nuevo componente dinamizador capaz por sí mismo de poner a prueba los resortes democráticos y liberalizadores del sistema representativo.

En este mismo sentido, desde las bases de la *Liga Agraria* comenzaron muy pronto a ponderarse las posibilidades que podía tener la misma como elemento adyacente a cualquiera de las formaciones políticas. Como si de un elemento esencial e imprescindible se tratase, la Asociación permaneció próxima a las cuestiones y decisiones, ya fueran de índole político o económico, que debían de decidir una buena parte de las actividades más significativas del país.

Con el inicio de los primeros años ochenta en Europa, el movimiento proteccionista se había generalizado, gracias a la elevación de los aranceles en la mayoría de los países, siendo Inglaterra, desde mediados del siglo XIX, la única región desarrollada que por esas fechas seguía manteniendo su opción por el librecurso. Con ello, la incuestionable desventaja comparativa de nuestro país con el resto de Estados poseedores de una producción agrícola próspera, forzaba necesariamente a los distintos gobiernos a buscar planteamientos y estrategias políticas dirigidas a lograr una mayor instrumentalización de la protección en la agricultura.

En España, este sector de la producción había conocido un importante período expansionista, precisamente desde mediados de siglo, como

resultado de las sucesivas roturaciones de tierras de cultivo que había continuado a las desamortizaciones liberales. En definitiva, la capacidad agrícola no pareció verse afectada del mismo modo que en otros países. Esta idea sugiere, coincidiendo con Garrabou o Serrano Sanz, que la crisis cerealista afectó algo más tarde a nuestro país que a otras áreas del continente europeo⁶⁷⁸.

De los estudios realizados hasta la fecha, pueden deducirse varias consecuencias. En primer lugar, y para el período establecido, no se observa un aumento especialmente significativo de las importaciones hasta los años ochenta; en este sentido hay que tener en cuenta los años de malas cosechas de 1882 y 1887. En segundo lugar, los precios descendieron lentamente, aunque no de manera excesiva, manteniéndose siempre muy por encima de los europeos (véase el cuadro 46). Por último, los derechos arancelarios no parecen, a tenor de los datos aportados, que pudieran evitar el aumento de las importaciones. Tal y como advierte José María Serrano Sanz, éstas contribuyeron más a sostener los precios que a contener el aumento de las mismas, siempre que exceptuemos los años 1893 y 1894, momentos en los que las importaciones llegaron al máximo registrado⁶⁷⁹.

Fue, por tanto, mediados los años ochenta, los instantes en los que comenzaron a aparecer los primeros síntomas claros de la crisis cerealícola en España, provocando considerables agitaciones y discusiones sobre las alternativas posibles. Entre estas últimas no faltaron quienes apoyaron una actitud proteccionista como la forma más factible para lograr resultados positivos. Así las cosas, la aparición de la *Liga Agraria* significó un baluarte fundamental, especialmente en los primeros años de su constitución, apoyando las propuestas proteccionistas y llevando hasta el Parlamento mociones consensuadas con el sector de la propiedad agrícola.

Entretanto, fue el partido liberal, en el Gobierno desde noviembre de 1885, el primero en asumir las responsabilidades acerca de respaldar o no las tesis protectoras, lo que equivalía, en el primero de los casos, a tener que

⁶⁷⁸ En este sentido ya se han realizado algunas referencias a la obra de Garrabou, en concreto en su "Introducción", en Garrabou, Ramon, y Sanz, Jesús (eds.), *Historia agraria de la España Contemporánea, vol. II. Expansión y crisis* (1850-1900), Crítica, Barcelona, 1985. Igualmente se ha citado la referida al profesor Serrano Sanz, *El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española, 1875-1895*, Siglo Veintiuno, Madrid, 1987.

⁶⁷⁹ Serrano Sanz, José María (1987), ob. cit., págs. 97 a 99.

CUADRO 46

Importaciones, precios y derechos aduaneros sobre el trigo en España

Fecha	Precio en España	Importaciones	Derechos sobre el trigo
1875	22,05	223.803	Trigo: 5,82 (4,32+recargo de 1,50) Harina: 6,57 (4,32+recargo de 2,25) (establecidas desde 1872)
1876	20,97	395.180	ídem
1877	20,39	92.031	ídem
1878	22,40	601.928	ídem
1879	24,01	1.205.319	ídem
1880	26,67	299.111	ídem
1881	21,40	199.766	ídem
1882	24,46	2.757.238	Trigo: 2ª columna, 5,70 (4,20+1,50) Harina: 1ª columna 8,73 (6,48+2,25); 2ª columna 8,25 (6+2,25)
1883	26,81	2.384.679	ídem
1884	21,60	986.615	ídem
1885	19,22	1.120.886	ídem
1886	20,44	1.498.517	ídem
1887	20,74	3.140.906	ídem (Proyecto no aprobado de Cánovas: Trigo: 7,53 y 7,41 Harina: 11,20 y 10,72)
1888	19,82	2.432.739	ídem
1889	19,08	1.453.123	ídem (Proyecto no aprobado de V. González Harina: 9,30 y 9,12)
1890	18,57	1.603.877	Trigo: 8 Harina: 13,20 (Real Decreto 24/12/1890)
1891	19,02	1.551.023	ídem

FUENTE: Serrano Sanz, José María (1987), ob. cit., pág. 98.

transformar su actitud librecambista defendida hasta esos momentos. Esta conducta significaba para el partido, el inicio de contactos entre los grupos de propietarios electores y los representantes políticos «afincados» en Madrid.

Por otra parte, Sagasta había encontrado un relativo «respiro» al encontrarse con unos aranceles aplicados al trigo que en aquellos momentos eran los más elevados de Europa (véase el cuadro 47). A ello se sumaba, si tenemos en cuenta el relativo retraso de la llegada a nuestro país de la crisis, el momento de prosperidad por el que atravesaba el sector vinícola y el propio auge de la *Liga*. Circunstancias que permitieron algunas pruebas y ensayos alternativos durante 1887 y 1888, precisamente en un momento en el que los ministros Puigcerver, Canalejas y Navarro Rodrigo intentaban situar a la economía española en una clara orientación librecambista⁶⁸⁰.

CUADRO 47

*Tarifas arancelarias de cereales y harinas en Europa**

	Trigo	Harina de trigo	Centeno	Harina de centeno	Maíz	Harina de maíz	Cebada	Harina de cebada
España	5,70	8,25	3,10	4,50	3,10	4,50	3,10	4,50
Francia	5,00	8,00	1,50	libre	libre	libre	1,50	libre
Alemania	3,75	9,38	3,75	3,75	0,62	3,75	0,62	3,75
Austria	1,25	3,75	0,62	3,75	0,62	3,75	0,62	3,75
Grecia	2,15	3,55	2,15	3,55	1,12	2,12	1,12	2,12
Italia	1,40	2,77	1,40	2,77	1,15	2,77	1,15	2,77
Noruega	0,31	0,70	0,31	0,70	0,31	0,70	0,31	0,70
Portugal	5,60	8,96	5,04	6,16	5,04	6,16	4,48	5,04
Rusia	2,45	1,71	2,45	0,98	2,45	0,98	2,45	0,98
Suiza	0,30	1,00	0,30	1,00	0,30	1,00	0,30	1,00

* En el cuadro figuran las cantidades correspondientes en pesetas por 100 kilogramos.

FUENTE: Rodríguez, Gabriel, *La crisis agrícola y el Arancel*, Madrid, 1888, pág. 31.

⁶⁸⁰ Ibídem, pág. 99.

De todos modos, esta actitud favorable a los movimientos de protección en la economía española, ya venía observándose desde hacía bastante tiempo. En los años setenta, una parte importante de labradores, propietarios y comerciantes, así como fabricantes de harinas, habían mostrado su claro rechazo a la importación de trigos. Aquella situación, que nada tenía que ver con la crisis agrícola de finales de siglo, había estado más vinculada con las elevadas cargas y tributos, lo que determinó necesariamente la imposibilidad de rebajar la fanega de trigo en los mercados nacionales. Como se recordará, esta realidad obligó a la importación de trigo durante todo el período comprendido entre 1869 y 1885⁶⁸¹. Asimismo, durante los primeros años de la década de los ochenta las permanentes referencias al librecambio, así como al proteccionismo, se hicieron habituales en mítines y demás reuniones, más o menos concurridas por la propiedad agrícola, generalizándose a comienzos de 1890⁶⁸².

Una de las cuestiones más sustanciales, sólo unos meses antes de ser constituida la *Liga Agraria*, fue precisamente conocer con cuántos efectivos podrían contar los partidarios del proteccionismo y si, en efecto, existían posibilidades de éxito entre los que abogaban por un mayor incremento de las tarifas arancelarias. Algunos detalles comenzaron a vislumbrarse en este sentido, sobre todo hacia el mes febrero de 1887, cuando la prensa se hizo eco de una enmienda presentada en el Congreso por el diputado Botija, desde la que se pretendía modificar el proyecto de ley referido a la admisión temporal de mercancías, aplicando derechos restrictivos a cualquier introducción de cereales y harinas en nuestro país.

Este aspecto, muy aplaudido en los círculos castellanos vinculados a la producción triguera, hizo pensar que la mayoría de diputados castellanos,

⁶⁸¹ En efecto, durante el año 1875 se elaboraron varias *Exposiciones* por parte de un número importante de propietarios de Castilla, en las que se ponían de manifiesto los problemas ocasionados por la importación de trigos y los aranceles en vigor desde 1869. Véase, por ejemplo, la información contenida en el Archivo del Ministerio de Agricultura, Fondos del siglo XIX, legajos números 7 y 91.

⁶⁸² Dentro del amplio sumario de fuentes bibliográficas que a este respecto podemos encontrar, algunas manifestaciones librecambistas de aquellos años aparecen recogidas en *El Globo*, 14 de marzo, 27 de junio y 2 de agosto de 1881. También en *El Liberal*, 9 de abril de 1882, *El Imparcial*, 8 de marzo de 1885, pero especialmente en el Archivo Histórico Nacional, Sección Diversos, leg. 105, dedicado principalmente a los mítines librecambistas celebrados en Madrid en junio de 1883. Con respecto a algunos de los actos y argumentos proteccionistas resulta muy útil lo publicado en *La Crónica Mercantil*, 23, 25 y 26 de abril de 1879; *El Globo*, 14 de marzo, 6 y 27 de junio de 1881; *El Liberal*, 6 de abril de 1882, *El Norte de Castilla*, 13, 15, 17 y 18 de marzo de 1885, y especialmente la obra de Cánovas del Castillo, A., *De como he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista*, Madrid, 1891.

interesados en la salvación de la agricultura, impulsarían una visible campaña de opinión a favor de la restricción. Sin embargo, el balance fue un tanto descorazonador al comprobarse que de los 62 diputados representantes de las provincias castellanas, sólo 12 se mostraron favorables a la moción (véase el cuadro 48). Entre estos últimos se encontraban, los señores Germán Gamazo, Muro, Pimentel, además del propio Botija. Tal y como publicaría días después un diario de Valladolid, la realidad del abandono mostrado por el Gobierno en aquellas provincias no era sino una muestra más de la consabida «orfandad» de Castilla⁶⁸³.

CUADRO 48

Resultados de la votación a la enmienda presentada por el diputado Botija

Provincias	Nº de diputados	Votaron en contra de la libre introducción de trigos	Votaron a favor de la libre introducción de trigos
Ávila	4	-	-
Burgos	8	1	2
León	9	1	3
Logroño	4	-	1
Palencia	5	1	-
Salamanca	7	3	-
Santander	5	1	4
Segovia	4	-	-
Soria	4	-	-
Valladolid	6	3	-
Zamora	6	2	-
TOTAL	62	12	10

FUENTE: *El Norte de Castilla*, 4 de febrero de 1887.

⁶⁸³ *El Norte de Castilla*, 4 y 6 de febrero de 1887.

A tenor de lo expuesto, la carencia de representación por parte de las provincias castellanas parecía evidente. Diputados de prestigio como Trifino y Germán Gamazo, Pimentel, Muro o Latorre, poco o nada representaban en el Congreso. Una situación, por otra parte, muy similar a la que se producía en el Senado con Cuesta, Semprun, Torre Villanueva y Pisa Pajares, entre otros destacados políticos. Los trabajos realizados por todos ellos en beneficio de aquéllas, incluida la proposición del señor Botija, no significan, a decir verdad, ningún signo evidente para satisfacer los deseos de las élites proteccionistas acreditadas en Castilla⁶⁸⁴.

En los primeros meses de 1887, muchos hacendados y ricos propietarios coligados al negocio del trigo parecieron entender que poco o nada podía esperarse de las «gentes» de Madrid⁶⁸⁵. Muchas opiniones se centraron entonces en reafirmar las sospechas acerca de la inoperancia que las asociaciones habían constatado hasta esos momentos⁶⁸⁶. Mientras, el ministro López Puigcerver se reafirmaba en los principios que apuntaban al rechazo de tener que acudir a soluciones arancelarias. Una solución que cabía esperar de quien acudía habitualmente a las reuniones de la *Asociación para la Reforma de Aranceles de Aduanas*, lo que le convertía en un librecambista convencido⁶⁸⁷.

El propio Puigcerver, puso en marcha en julio de aquel mismo año una proposición consistente en la apertura de una información que posibilitara el esclarecimiento de las dificultades agrícolas por las que atravesaba el país. El fusionismo, a cuya bandera política no habían acudido tan abiertamente los principios librecambistas, había decepcionado cumplidamente las

⁶⁸⁴ *El Norte de Castilla*, 6 de febrero de 1887. De todos modos, la falta de fuerza social en Castilla ya había sido advertida algún tiempo atrás. Así, uno de los artículos recogidos por la *Revista Contemporánea* expresaba lo siguiente: "La energía de Castilla ha disminuido grandemente [...] Abundan los individuos de valer, ciertamente; pero salta á la vista, en los menores hechos, la falta de fuerza social, y presto se nota que los pueblos que no midieron nunca la magnitud de los obstáculos que debían allanar, se paran hoy ante las más pequeñas dificultades, vencidos por los pobres razonamientos de algunos políticos de alma más pobre todavía". *Revista Contemporánea*, 30 de abril de 1886.

⁶⁸⁵ *El Norte de Castilla*, 6 de febrero, 4 de marzo de 1887, 2 de abril, 24 de julio, 7 de octubre y 11 de noviembre de 1887.

⁶⁸⁶ Con sendos artículos titulados: "¡Labradores, a defenderse!" y "A la lucha", el diario *El Norte de Castilla* intentaba llamar la atención de la sociedad agrícola en las provincias castellanas. Véase *El Norte de Castilla*, 4 de marzo y 2 de abril de 1887.

⁶⁸⁷ Para Puigcerver cabían ciertos márgenes respecto a las demandas presentadas por la *Liga Agraria* como, por ejemplo, el establecimiento de un impuesto sobre la renta o la reforma en los consumos. Sin embargo, en ningún caso contemplaba una subida en los aranceles. Calzada del Amo, Esther, ob. cit., pág. 223.

perspectivas proteccionistas al finalizar 1887. Tal como se había interpretado en algunas provincias castellanas, era evidente “que el partido fusionista había decidido la muerte de la Agricultura”⁶⁸⁸.

Por su parte, los conservadores de Cánovas, ortodoxos proteccionistas, recordaban una y otra vez que ya habían defendido y desplegado en más de una ocasión los colores del proteccionismo, riñendo sus campañas políticas contra los liberales de Sagasta⁶⁸⁹. Todavía, antes de finalizar aquel año, y casi coincidiendo con la primera de las Asambleas Generales promovida por la *Liga Agraria*, Cánovas presentó en la Congreso de los Diputados una proposición encaminada a elevar los derechos arancelarios sobre el trigo. Para el jefe de la oposición, la situación de la agricultura pasaba por la adopción de medidas que contemplaran una reducción en los gastos públicos, así como por la imposición de un recargo transitorio con carácter compensador que debía ser fijado en un 30 por ciento. La protección, de haberse aprobado la mencionada proposición de ley, habría quedado garantizada. Sin embargo, la idea no tardó en ser rechazada⁶⁹⁰.

Así y todo, el margen arancelario que España mantenía respecto a otros países europeos, como ya pudimos advertir en su momento, permitía al gobierno liberal aplicar políticas económicas alejadas sensiblemente de la exigida subida de los aranceles. En consecuencia, López Puigcerver pudo rebajar en los presupuestos de 1887 a 1888, así como en los del período 1888 a 1889, el tipo impositivo sobre la riqueza rústica y pecuaria en la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, pasando de 17,50 a 15,50 y reduciendo la recaudación en 14 millones de pesetas para dichos años. Como ha comentado en este sentido el profesor Serrano Sanz: “Trataba con todo ello de aumentar el margen de rendimiento de los agricultores al reducir sus cargas fiscales, pero dada la estrechez del presupuesto español esta vía era muy limitada”⁶⁹¹. De este modo, lo único que pudo conseguirse

⁶⁸⁸ Respecto a la cuestión, nada clara en el partido fusionista de Sagasta, de la adopción de medidas librecambista puede verse el artículo que a este particular publicó *La Regencia*, 4 de julio de 1887. Sobre la muerte a la agricultura, véase “La amenaza a Castilla”, en *El Norte de Castilla*, 30 de agosto de 1887.

⁶⁸⁹ Véase Fernández Almagro, Melchor, *Cánovas, su vida y su política*, segunda edición, Madrid, 1972, págs. 441 a 444.

⁶⁹⁰ *El Norte de Castilla*, 6 de diciembre de 1887. Asimismo en Alba, Santiago (1902), ob. cit., pág. 40.

⁶⁹¹ Serrano Sanz, José María (1987), ob. cit., pág. 100.

fue una mayor presión en el déficit público, lo que implicaba una mala solución para las demandas del campo.

Otra de las actitudes del gobierno liberal fue la puesta en práctica de mejoras técnicas con la idea de seguir aumentando los rendimientos en la agricultura española. Entre 1887 y 1888, un buen número de leyes, decretos y órdenes intentaron poner los cimientos de nuevas escuelas, estaciones de cultivo, granjas-escuela, etc., lo que demostraba un cierto interés y preocupación por la difusión de los conocimientos en los sectores de la agricultura y la ganadería.

Ese mismo margen arancelario, tuvo que ver también con la aplicación de algunas medidas referidas al abaratamiento del transporte en el interior de la Península, además, de una serie de acuerdos que pretendían modificar la ya famosa Base Quinta. De esta forma, en 1888 se presentó un proyecto de ley cuyo propósito no era otro que el de completar la red de ferrocarriles secundarios, de tal forma que el cereal del interior pudiera llegar más barato al litoral. Sucedió de nuevo, que las dificultades de la Hacienda española impidieron llevar a cabo tales intentos⁶⁹². Asimismo, una vía alternativa fue considerar si convendría a los intereses generales del país la rebaja o el aplazamiento, hasta 1892, de la segunda de las reducciones de los aranceles prevista en la citada Base Quinta, y que correspondía aplicar después de los aplazamientos llevados a cabo por el gobierno conservador en 1886.

A tales efectos, hacía varios años que se había nombrado una Comisión con el fin de que pudiera informar en este sentido. No obstante, se pensó que la mejor de las opciones sería la apertura de un período de renegociaciones con muchos de los países con los que se tenían acuerdos comerciales. Una vez alcanzados los acuerdos necesarios, las reducciones habrían de realizarse, ya que las mismas vendrían a compensar las concesiones otorgadas en las negociaciones. Sea como fuere, lo cierto es que el gobierno de Sagasta no tuvo la suficiente agudeza para, mediados los ochenta, firmar los acuerdos necesarios que hubieran permitido proceder a dicha rebaja. Esto mismo provocó un nuevo aplazamiento, esta vez por parte de los liberales, de la rebaja en la citada Base Quinta. En agosto de 1886, el Gobierno dio por prorrogados los acuerdos comerciales, emplazando a un

⁶⁹² *Ibíd.*, pág. 102.

nuevo debate acerca de la reducción de las cuotas arancelarias para un nuevo período de cinco años.

Aquella «batería» de medidas no lograron sino un pequeño alivio, imperceptible en las clases productoras más exigentes, lo que motivó una inevitable ruptura dentro del partido liberal por la presencia de algunos elementos proteccionistas en su política económica. Este cambio de rumbo facilitó, al mismo tiempo, la consideración de los gamacistas, quienes venían manteniendo fuertes vínculos con las tesis defendidas por la *Liga Agraria*. Pasado el tiempo, el grupo partidario del librecambio dentro del fusionismo comenzó a quedarse relegado, resultando poco tiempo después una corriente prácticamente obsoleta.

En las primeras semanas del año de 1888, el propio Gamazo fue cuestionado después de abstenerse en la votación del proyecto presentado por Cánovas, referido a la protección sobre los cereales y harinas, situación que había sido motivada por Moyano y Muro⁶⁹³. Aquél, como se recordará, había presentado al Congreso una proposición para que se recargaran un treinta por ciento los derechos de introducción sobre cereales y harinas extranjeros. En los círculos conservadores, tal actitud fue interpretada, más como una muestra de fidelidad al partido que a los propios intereses de la agricultura⁶⁹⁴.

Las votaciones fueron suficientemente significativas (véase el cuadro 49). En cambio, la disposición de Gamazo nada parecía indicar que fuera a ser mantenida en un futuro relativamente próximo, lo que venía a reflejar un punto indudable de fricción y la posible disidencia dentro del partido. Durante la intervención en el debate, el propio Gamazo había querido dejar claro que respecto a las proposiciones de Cánovas del Castillo, todavía no consideraba llegado el momento de su aplicación: “Pero yo tengo que declarar, y no enseño nada nuevo, porque el señor Ministro de Hacienda ha hecho alusión á los que dentro del partido liberal tenemos opiniones económicas distintas de las que profesan otros dignos individuos del mismo

⁶⁹³ *El Norte de Castilla*, 25 de diciembre de 1887. También en Ortega Rubio, J., *Historia de la Regencia*, Tomo I, ob. cit., pág. 335.

⁶⁹⁴ *El Norte de Castilla*, 4, 8, 15, 27 y 29 de enero de 1888. Además, en *La Época*, 12 y 14 de enero de 1888. El discurso pronunciado por Antonio Cánovas del Castillo puede leerse íntegramente en *La Época*, 10 de enero de 1888. Sobre este mismo tema en Pirala, Antonio, *España y la Regencia*, Libro II, ob. cit., pág. 26-27.

partido [...] Tengo que declarar, digo, que me encuentro en doctrinas económicas más cerca del señor Cánovas del Castillo que de mi digno y querido amigo y correligionario el Sr. Puigcerver: pero con esto y con todo, yo no puedo prestar mi voto á la proposición del señor Cánovas del Castillo [...] por una razón [...] la de que, votada esta proposición por la Cámara, surgiría en el acto un conflicto que sería de embarazo poderosísimo”. En las mismas deliberaciones, terminaría puntualizando lo siguiente: “Debo decir francamente mi opinión. Yo creo que será inevitable llegar al recargo de los derechos arancelarios; creo que será inevitable”⁶⁹⁵.

CUADRO 49

Representantes castellanos y resultados de la votación al proyecto de Cánovas

Provincias	Nº de diputados	A favor de los derechos sobre los cereales	En contra de los derechos sobre los cereales	No votaron
Ávila	4	1	-	3
Burgos	8	2	4	2
León	9	3	2	4
Logroño	4	-	3	1
Palencia	5	1	-	4
Salamanca	7	-	3	4
Santander	5	1	2	2
Segovia	4	2	1	1
Soria	4	-	-	4
Valladolid	6	1	-	5
Zamora	6	1	-	5
TOTAL	62	12	15	35

FUENTE: *El Norte de Castilla*, 13 de enero de 1888.

⁶⁹⁵ *El Norte de Castilla*, 14 de enero de 1888.

Con esta actitud, se adivinaba, no sin razón, que la disidencia de Germán Gamazo en las filas fusionistas podía tener lugar en los primeros meses de 1888. En bastantes «recortes» de la prensa de Madrid y Valladolid comenzaron a advertirse las intenciones del líder castellano de presentar un nuevo proyecto de ley sobre cereales, sosteniendo teorías y doctrinas idénticas a las defendidas por el propio Cánovas y refutando, por tanto, las expuestas por el ministro Puigcerver⁶⁹⁶. Por otra parte, y aprovechando la presentación al Gobierno y a las Cortes de las propuestas solicitadas por la *Liga Agraria*, se hablaba ya abiertamente de una ruptura completa de Gamazo con su partido⁶⁹⁷.

Al mismo tiempo que los problemas en el partido liberal de Sagasta afloraban, se iba haciendo más evidente en los sectores económicos y políticos, tal y como ya había advertido Cánovas, algunas contradicciones importantes entre los principios del librecambio, defendidos por el Gobierno, y las indicaciones de una parte del entorno productivo, más acordes con la protección a la agricultura y a la industria⁶⁹⁸. Estas consideraciones explicarían que, pasados unos meses desde que empezara la pugna dentro del partido liberal, el dualismo económico pasara a observarse como una incapacidad fehaciente por parte del Ejecutivo de Sagasta, para poner orden en las cuestiones internas del país. A ello se añadían las dificultades surgidas de la ponderación de fuerzas dentro del propio partido, lo que complicaba aún más la atención a los problemas económicos que la *Liga Agraria* demandaba⁶⁹⁹.

Las esperanzas que habían despertado los diputados más comprometidos con los productores castellanos, además de las repercusiones que desde un primer momento habían tenido las reuniones de agricultores y propietarios en muchas provincias, hizo pensar, una vez

⁶⁹⁶ *La Época*, 12 y 14 de enero de 1888.

⁶⁹⁷ Conviene recordar que la *Exposición* remitida por la *Liga Agraria* a las Cortes tenía lugar en los primeros días del mes de febrero. Respecto a los primeros síntomas de disidencia véase: *La Época*, 18 de febrero de 1888; *La Regencia*, 3, 17 y 24 de febrero de 1888, y *El Norte de Castilla*, 7 de febrero de 1888.

⁶⁹⁸ *La Época*, 24 de febrero de 1888.

⁶⁹⁹ *La Época*, 27 de marzo de 1888, y *La Liga Agraria*, 28 de abril y 7 de mayo de 1888. Desde algunos medios y círculos económicos y políticos se llegó a argumentar durante algunos meses que el Gobierno, de una manera oportunista y mientras aplazaba las medidas económicas, intentaba remediar la miseria pública y los apuros en la agricultura y la industria mediante la presentación a debate de la institución del Jurado y el Sufragio Universal. Véase la *Revista Contemporánea*, 15 de enero de 1888, págs. 93-34; *La Época*, 19 de abril de 1888; *El Imparcial*, 19 de octubre de 1888, y *La Regencia*, 3 de julio de 1888.

iniciados los trabajos de la *Liga Agraria*, que comenzaría una regeneración beneficiosa y útil, cuyos resultados serían la aplicación de programas y remedios muy próximos al proteccionismo y al auxilio de los productores agrícolas. Sin embargo, muchas de las cuestiones habrían de quedar pendientes de solución hasta 1890, momento en el que los conservadores pondrían en marcha con su Gobierno una actitud más proclive al proteccionismo, iniciado con el Arancel de 1891⁷⁰⁰.

El anuncio de Gamazo en los primeros días de junio de 1888, oponiéndose frontalmente a la política económica del Gobierno y la presentación, solo unas semanas más tarde, de una proposición para reformar los aranceles apoyada por una treintena de diputados liberales, tuvo consecuencias evidentes al forzar a Sagasta a la reorganización de su Ejecutivo por tercera ocasión desde 1885. En el cambio serían «apartados» Montero Ríos, Moret y Alonso Martínez, acentuándose aún más el distanciamiento entre el Presidente y Gamazo⁷⁰¹.

Se daba la circunstancia de que ninguna de las asociaciones o partidos conocidos habían adoptado una actitud unánime de frente común contra el librecurso del partido liberal, sustentado por los sucesivos ministros fusionistas en Hacienda, Joaquín López Puigcerver, Venancio González y Manuel Eguilior. Por su parte, los conservadores, poco o nada podían hacer ante las sucesivas crisis de Gobierno que Sagasta acostumbraba a resolver a través de la Regente María Cristina, situación que se mantendría hasta 1890⁷⁰².

⁷⁰⁰ Para comprobar la decepción de los trigueros castellanos véase el artículo "No hay disculpa" en *El Norte de Castilla*, 23 de junio de 1888. También en Serrano Sanz, José María (1987), ob. cit., pág. 110.

⁷⁰¹ En la lista definitiva de disidentes estaban, además, nombres como los de Maura, Martínez Campos, el duque de Tetuán, Martos, Sardoal, Camacho y el propio Gamazo, dando lugar a lo que se llamó la «conjura contra el Gobierno». Nido y Segalerva, Juan del, *Historia política y parlamentaria del Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta*, Imp. de R. Velasco, Viuda de Prudencia Pérez, Madrid, 1915, pág. 786.

⁷⁰² En este sentido conviene ver lo comentado en Varela Ortega, José (2001), ob. cit., págs. 283 a 292. Igualmente, respecto al apoyo prestado por la Reina Regente a Sagasta, es muy notoria la obra de Ortega Rubio, Juan, Tomo I, ob. cit., págs. 373 a 434, en particular los capítulos IX al XII. En efecto, resulta muy significativo que en la última crisis gubernamental, sucedida a principios de los años 90, el gabinete de Sagasta todavía se viese «amparado» por la Regente, encargando un nuevo Gobierno al Presidente Práxedes Mateo Sagasta, hecho que inmediatamente aceptó según justificaría más tarde: "con la ilusión de que no sólo iba a reconstruir y a restablecer el partido liberal en los mismos términos en que se encontraba a su advenimiento al poder cuando la infausta muerte de don Alfonso XII, sino que podría reforzarle con elementos que, procediendo de otros campos, quisieran

Motivos, como el limitado «peso» de la *Asociación de Agricultores de España*, o el sucinto campo de actuación del *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro*, fueron igualmente determinantes a la hora de promover con mayores garantías una revisión proteccionista en la economía nacional. Otras asociaciones, dotadas con una menor capacidad por su localización geográfica, a pesar de su difusión en relación a las actividades agrarias, apenas llegaron a tener, salvo excepciones, repercusiones destacadas en lo referido al ámbito económico en los gobiernos de Madrid. En este caso, por ejemplo, estuvieron las Ligas de Contribuyentes, además de la Junta Provincial Protectora de la Agricultura de Valladolid, cuyas críticas y posicionamientos hacia la gestión de los ministros de Sagasta tuvo una destacada difusión en todas las provincias castellanas⁷⁰³.

Cabría señalar que la idea de conformar un grupo político con la suficiente capacidad para desbancar a las dos formaciones «turnantes» en el poder no era nueva. A este propósito, los esfuerzos por constituir un nuevo adversario político durante los tres últimos lustros del siglo XIX, con un claro «apéndice» en el mundo de la agricultura, parecieron adquirir un señalado desarrollo, toda vez que la situación en los bancos del partido liberal y del partido conservador en este sentido, era, la mayor de las veces, insuficiente. Todo ello no hizo sino conceder aún más posibilidades a la conformación de lo que vino a denominarse el «tercer» partido.

De acuerdo con esto último, la primera de las opciones estaba fundamentada en constituir una nueva fuerza con aquellos elementos de grupos y formaciones ya existentes. El mayor ejemplo de lo que aquí exponemos estuvo precisamente en el llamado partido «reformista», producto de la disidencia política de Romero Robledo en las filas del partido conservador. El mismo Robledo trató de conformar un partido apartado de las debilidades del poder fusionista y de la infranqueable puerta que suponía la presencia de un hombre como Cánovas en el partido conservador. No

venir de buena fe a ayudarnos en nuestra importante tarea". Véase Pirala, Antonio (1905), Libro II, ob. cit., págs. 191 a 202.

⁷⁰³ *La Época*, 13 de mayo de 1888, y *El Norte de Castilla*, 27 de mayo, 9 de junio de 1888. En particular es de destacar el artículo titulado "No desmayen los pueblos", en donde entre otras cosas se decía lo siguiente: "Adelante, pues, las contrariedades no deben abatirnos; los obstáculos no han de detener nuestra marcha [...] reunámonos; celebremos meetings y conferencias; firmemos exposiciones; agotemos, en una palabra, todos los recursos legales, que si así lo Hacemos, la victoria , no hay que dudarlo, la victoria será nuestra". *El Norte de Castilla*, 8 de julio de 1888.

obstante, el intento quedó pronto diluido. Fue tras la disidencia del general López Domínguez, procedente de los bancos del partido liberal, cuando ambos líderes adoptaron el acuerdo conjunto de iniciar una nueva andadura en el terreno político. Un intento que se mantendría solo unos meses, desbaratándose enseguida por las incompatibilidades surgidas entre ambos líderes. La actitud, en gran parte de intransigencia, hizo entonces poco viable la idea de un triunfo del partido reformista, optando el propio Robledo por reincorporarse en 1890 al partido conservador.

Pese a todo, este intento formal, dentro del programa reformista, vino a sumarse a la demanda de otros asuntos tan destacados como eran la creación del Jurado, el sufragio universal, así como la reforma de la Constitución, entre otras cuestiones menos llamativas. Asimismo, desde algunos medios próximos a Germán Gamazo y al grupo liderado por él mismo dentro del partido liberal, no dejaron de producirse ciertas especulaciones acerca de la posible intervención de éste dentro de las filas «reformistas». Unos sucesos que venían a recordar lo acontecido unos años antes con el general Martínez Campos y su «marcha» al partido de Sagasta⁷⁰⁴.

En cuanto a la *Liga Agraria*, desde los primeros momentos de su fundación como asociación agrícola, asumió la posibilidad de que fuera entendida ocasionalmente como una corporación con capacidad política⁷⁰⁵. Unos aspectos que, en todo caso, hacían de la *Liga* una asociación con unas

⁷⁰⁴ Dentro de la amplia bibliografía que existe sobre la cuestión de las disidencias de Romero Robledo y López Domínguez, en general, y sobre el tema del reformismo en particular, puede consultarse de el Capítulo XXVII de Pirala, Antonio, en concreto su Libro II, págs. 37 a 40, así como el trabajo de Ortega Rubio, J., Tomo I, ob. cit., págs. 373 a 387. Es de destacar también el artículo publicado en *La Regencia*, titulado "El tercer partido", en el que se glosaba lo siguiente: "Los que lo alientan se agitan mucho en estos últimos días. El general Martínez Campos, que estuvo dos veces en casa del general López Domínguez, logró conferenciar con él la segunda vez [...] Según todos los indicios, por consecuencia de aquella entrevista, el general López Domínguez se decidió a visitar al señor duque de Tetuán, a quien parece dijo que estaba dispuesto a apoyar toda solución liberal, sin distinción de izquierda ni de derecha que no estuviese dirigida ni personificada por el señor Sagasta. Esta declaración [...] del general López Domínguez, ha dad tales alientos a los patrocinadores del tercer partido, que consideran segura su formación teniendo por base a los señores duque de Tetuán, Martínez Campos y López Domínguez, e indudable si logran contactar con la cooperación del señor Gamazo. Respecto a éste parece que se han hecho ya algunas tentativas, pero no sabemos que hayan tenido resultado definitivo". *La Regencia*, 29 de octubre de 1888.

⁷⁰⁵ Debemos entender a este respecto que, desde un primer momento, la *Liga Agraria* quiso dejar claro que no daría lugar a una tercera formación política. Tal afirmación, sin embargo, no fue compartida por todos sus simpatizantes y miembros a lo largo de los años de existencia. Véase, por ejemplo, *La Liga Agraria*, 14 de junio y 14 de septiembre de 1888.

determinadas particularidades y connotaciones, un tanto complejas de entender en la práctica. Así, y durante algún tiempo, se intentó explicar en las páginas de *La Liga Agraria* algunas de las singularidades que la hacían necesariamente distinta a los demás partidos políticos en disputa por el poder. Apenas transcurrido un año desde su puesta de largo en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid, un artículo publicado en su órgano de prensa y titulado "El Poder de la Liga", evidenciaba lo siguiente:

Ese sentimiento, originado por las desdichas que nos son comunes, como por el cansancio que en los espíritus ha producido un cúmulo de decepciones de todo color político, en que la intriga ha sobrepujado á la sutileza y el egoísmo ha predominado en sus más repugnantes aspectos [...] Bastante patriotismo hemos tenido, no echando mano de nuestros poderosos medios de acción, dentro de no causar la más mínima perturbación del orden público, que ayudaremos á sostener á todo trance. Pero desgraciadamente observamos que á un partido tan poderoso como es la Liga Agraria, aunque no sea político [...] decimos que observamos, con dolor, que á esta fuerza social, de influencia decisiva en el porvenir, no se la presta la debida atención por unos, y por otros se pretende desconocer cómo el criterio personal de algún gobernante, cómo la flexible sagacidad de algunas eminencias pueden producir un cataclismo⁷⁰⁶.

Durante el corto período de actividades desarrolladas por la Asociación, las posiciones en lo relativo a su participación política terminaron por confundir a muchos de los asociados, situándose, en bastantes ocasiones, a ambos lados del reducido «abanico» electoral. En consecuencia, muchas de las opiniones vertidas en ese sentido contrastaban en ocasiones, resultando compleja la tarea de desgranar los verdaderos deseos ligueros. Con ello, no era extraño leer: "Y si los partidos existen y son necesarios, y existirán mientras haya barreras entre provincias y naciones [...] ¿quién puede dudar un momento de que la Liga Agraria respeta los partidos y les da el preferente lugar que se merecen? [...] no hay que confundir el egoísmo de los hombres con la eficacia de los partidos; ni tampoco hay que mezclar los desaciertos financieros con la acción política". En el mismo orden de cosas, pero en un sentido contrario, *La Liga Agraria* observaba: "Detestamos la política, en cualquiera de sus formas, porque en la práctica no es ni ha sido seria ni patriótica, como lo prueba la situación

⁷⁰⁶ *La Liga Agraria*, 16 de enero de 1889.

creada por todas; porque es y ha sido demoledora de todos los intereses; porque se ha hecho política de bandería, á cuya sombra ha nacido la inmoralidad que corroe el cuerpo social, y el caciquismo que le supedita y aniquila”⁷⁰⁷.

En este mismo contexto, hacia el verano de 1888 el manifiesto publicado por la *Liga Agraria* advertía la importancia que tendría para la Asociación, la obtención de representantes en todas y cada una de las circunscripciones y consultas electorales que en adelante se pudieran realizar. La Junta Directiva, con su presidente don Adolfo Bayo a la cabeza, daba a entender a sus afiliados que la política habría de tener, necesariamente, diversas lecturas en el seno de la Organización, dependiendo de los intereses que se trataran de establecer. Ello supuso la aceptación, como más tarde se reconocería abiertamente, que en España todo estaba de alguna forma supeditado a las acciones políticas. Consiguientemente, desde la prensa próxima a la *Liga*, no se tardó en destacar en la importancia que podía tener cualquier asunto que estuviera relacionado con la «cuestión electoral»⁷⁰⁸. Tampoco hizo falta mucho tiempo para que se empezara a cuestionar el «turno» con sólo dos partidos en liza, instando a la creación de un tercero cuyo programa político tuviera presente los problemas económicos a nivel nacional⁷⁰⁹.

Por otra parte, algunos nombres como los de Trifino y Germán Gamazo, Muro, Bayo o Maluquer, entroncados con la *Liga*, eran representantes en las Cortes, antes incluso de su incorporación a Asociación. Fue probablemente este uno de los motivos por los que la *Liga Agraria* no pudo desenvolverse de un modo más exacto en todo aquello que

⁷⁰⁷ *La Liga Agraria*, 28 de enero de 1889.

⁷⁰⁸ *La Liga Agraria*, 7 de agosto y 14 de septiembre de 1888.

⁷⁰⁹ Uno de los incontables artículos referidos a este tema, recogidos en las páginas de *La Liga Agraria* y titulado "Nuestra salvación", comentaba, entre otras, las siguiente cuestiones: "El concepto de turno de los partidos, siendo sólo dos, vemos que no prueba aquí, en esta tierra de explotadores y explotados [...] La constitución de un gran partido económico o nacional será el principio de una nueva vida de fructífero trabajo [...]". *La Liga Agraria*, 14 de junio de 1889. En este mismo sentido, la Liga celebró algunos éxitos logrados por sus representantes en las elecciones a las Cortes, especialmente los del conde de Castillejos, labrador y propietario en el distrito de Loja, en abril de 1888 y Torres Almunia en el distrito de Cervera del Río, en agosto de aquel mismo año. Tal fue la expectación provocada que fue preciso añadir un suplemento en el mes de agosto, dedicado íntegramente a contar los pormenores del triunfo electoral. *La Liga Agraria*, 28 de mayo de 1888; *Suplemento* al núm. 23 del 7 de agosto de 1888, y *La Liga Agraria*, 14 de agosto de 1888. También en *La Regencia*, 17 de septiembre de 1888.

concernía a la participación en un partido agrario, a la manera de los que ya venían actuando en algunos países europeos y en zonas de los Estados Unidos de Norteamérica⁷¹⁰. Las permanentes contradicciones de una asociación en cuyas aspiraciones, además de las puramente económicas, figuraba la renuncia a todo ideal político, al mismo tiempo que solicitaba a los contribuyentes su apoyo electoral, apenas podía encontrar un sitio concluyente en el engranaje bipartidista posibilitado por Cánovas desde 1876. En este sentido, dentro de la *Liga* no faltaron los reproches para quienes de modo exclusivo representaban los intereses de sus respectivos grupos políticos, en vez confiar en el reclamo de aquellos sectores más comprometidos con las actividades agrícolas del país.

En efecto, conformada principalmente por miembros destacados del partido liberal y del partido conservador, la Asociación procuró, antes incluso de consolidar su acción reivindicativa, neutralizar parte de la actividad política que ambas formaciones mantenían dentro de la misma. Pese a ello, los debates parlamentarios entre miembros de la *Liga* y representantes del Gobierno se sucedían con bastante frecuencia. Uno de los más memorables tuvo lugar a mediados de 1889, entre el ministro Venancio González y el propio Germán Gamazo, acrecentado todavía más las dudas entre muchos agricultores y propietarios abocados a tener que transigir con la práctica política⁷¹¹.

Más aún, la *Unión económico-electoral*, proyectada como se recordará a instancias de la propia *Liga Agraria*, no dudó en solicitar el voto para todos aquellos candidatos que se presentasen con la bandera de la Asociación, al margen de cualquier ideario o partido político al que pertenecieran. En todo caso, la afiliación a la nueva corporación exigía el compromiso con la defensa del proteccionismo, anteponiendo de esta forma las soluciones arancelarias a cualquier otro argumento político.

La *Liga*, casi desde un primer momento, intentó representar una fuerza social amplia, aún siendo sus socios conscientes de que podía ser

⁷¹⁰ Las acciones de asociaciones similares en Irlanda y Estados Unidos ya eran conocidas en España desde los primeros años ochenta y noventa. *El Liberal*, 24 de octubre de 1881, y *El Correo*, 10 de enero de 1891.

⁷¹¹ En el verano de 1889, fueron, en efecto, varios los artículos publicados respecto a las reprobaciones permanentes que estaban siendo dirigidas a los partidos mayoritarios, consecuencia directa de la actitud de muchos de los miembros de la *Liga Agraria*. Véase, por ejemplo, *El Correo*, 1 de septiembre de 1889.

utilizada como arma política y propiciatoria para imponer candidatos dentro de las formaciones políticas en disputa. Acciones que contrastaban con el trabajo vinculado a los movimientos reivindicativos de la producción y la comercialización agrarias. De esta forma, entraba dentro de lo posible que la autoridad ejercida por los jefes de partido, hicieran parecer a los ideales ligueros una herramienta utilizada, en el peor de los casos, como elemento de coacción si las circunstancias así lo exigían.

En definitiva, la idea de adecuar un tercer partido en el sistema de elecciones, dirigido a conseguir una parte del poder del Estado no iba desencaminada, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos colaboradores destacados del partido liberal simultaneaban su pertenencia al mismo, tanto como su adhesión a la *Liga*. La génesis de un nuevo partido político podía significar, incluso, una excelente plataforma para poner fin a actitudes discrepantes dentro de aquellas colectividades con ciertos riesgos de disidencias. De hecho, el partido de Cánovas no era sino una evidencia más de la trabazón de diferentes ideas surgidas en el tiempo⁷¹².

Lo que no cabe duda, es que la *Liga Agraria* destacó, por encima de partidos de incuestionable significación como el carlista y el republicano, aportando más recursos al contexto político que los intentos reformistas de Romero Robledo, sin olvidar los posibilistas de Emilio Castelar. Tanto la prensa como los movimientos sociales que demandaban una mayor protección a la producción en España, dedicaron esfuerzos considerables por mantener viva la dinámica de la Asociación, en tanto ésta pudiera servir como un aglutinante capaz de provocar una alternativa viable en el control del Estado. Así, al menos, fue entendido por una parte considerable e importante de la *Liga* al pronunciarse sucesivamente en favor de un tercer partido, donde coexistían personalidades de altura política como Germán

⁷¹² Al respecto puede consultarse de Fernández Almagro, Melchor, *Historia política de la España contemporánea*, vol. I, Tercera edición, Madrid, 1972, págs. 368 a 372. También en Artola, M., “El sistema político de la Restauración”, en *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Siglo XXI, Segunda edición, Madrid, 1990, págs. 11 a 20; Dardé, Carlos, “El conservadurismo canovista”, en Tusell, J., Montero, J., y Marín, J. M. (Eds.), *Las derechas en la España contemporánea*, Madrid, 1997, pág. 29 a 44.; Dardé, Carlos, *Historia de España. La Restauración, 1875-1902. Alfonso XII y la regencia de María Cristina*, Historia 16, vol. 24, Madrid, 1996, pág. 22; Varela Ortega, José (2001), ob. cit., págs. 135 a 203, así como en Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., págs. 591 a 610. Véase también la *Revista Contemporánea*, 15 de diciembre de 1882, págs. 360 a 363, y 15 de enero de 1888, págs. 93 y 94.

Gamazo, Adolfo Bayo o Claudio Moyano. A este respecto no se equivocaron quienes advirtieron que la *Liga Agraria* o se politizaba o dejaría de existir⁷¹³.

- Los conservadores al encuentro de la *Liga Agraria*. La dictadura de Gamazo y la alternancia en el poder

Desde que la *Liga Agraria* quedara constituida en 1887, fue el partido conservador, liderado por Cánovas, el que terminaría ofreciendo una menor resistencia a las propuestas económicas de aquélla, merced a su mayor proximidad a las tesis proteccionistas. En este sentido, tanto los agricultores cerealistas como los industriales del sector textil catalán y los grupos productores de la siderurgia vasca, fueron finalmente quienes terminarían comprometiéndose más directamente con el grupo conservador, en una actitud de clara deferencia hacia el proteccionismo en España⁷¹⁴.

A nivel político, no fue casual que dentro de las filas conservadoras se dieran menos motivos para la disidencia interna y la escisión, debido, entre otras cosas, a que una de la premisas esenciales para apoyar a *Liga Agraria* era la de declararse firme defensor de los razonamientos proteccionistas⁷¹⁵. En este sentido, las mayores preocupaciones recayeron del lado del partido liberal, quien hubo de soportar el peso de las tareas de gobierno durante los años de actividades de la *Liga*, así como la particularidad de que muchos de sus miembros compartían los ideales ligueros.

⁷¹³ No debemos olvidar, que incluso en junio 1899, cuando restaba apenas un año de gobierno liberal, todavía la prensa aludía de forma constante a una formación inminente de un tercer partido, donde Germán Gamazo habría de ser necesariamente la cabeza visible del mismo. En este mismo sentido, el artículo titulado “El tercer partido”, advertía: “Dentro de un año, plazo improrrogable, no solamente habrá tercer partido, sino que estará en el poder [...] El señor Gamazo y sus amigos, que son los elementos á quienes aludimos, muéstranse retraídos, precisamente porque observan con serenidad los hechos”. *El Imparcial*, 13 de junio de 1889 y 9 de febrero de 1890, así como *La Regencia*, 31 de agosto, de 1888. Al respecto de la politización de la *Liga Agraria*, en *La Regencia*, 27 de enero de 1889.

⁷¹⁴ Serrano Sanz, J. M. (1987), ob. cit., pág. 129. También en Tuñón de Lara, M., “La burguesía y la formación del bloque d poder oligárquico (1875-1914)” en *Estudios sobre el siglo XIX español*, Siglo XXI, Madrid, 1982, págs. 155 a 238.

⁷¹⁵ La disidencia, por ejemplo, de Romero Robledo y la posterior formación del partido reformista, nada tenía que ver con la existencia de la *Liga Agraria* y de condicionamientos económicos de tipo proteccionista. No sucederá igual con el caso de Germán Gamazo en el partido liberal.

Una de las consecuencias más claras de lo que se apunta fue la presentación, por parte de Antonio Cánovas del Castillo y coincidiendo con la formación de la *Liga Agraria*, de una proposición relativa a la defensa de los cereales y harinas españolas en detrimento de las importaciones, mediante una considerable subida de las tasas arancelarias. La propuesta, en principio, no encontró el apoyo de la totalidad de los miembros del partido liberal, entre los que se encontraba el diputado y vicepresidente de la *Liga*, Germán Gamazo, lo que terminó generando fuertes críticas por parte de amplios colectivos de productores y comerciantes trigueros, principalmente de las provincias castellanas y leonesas. Gamazo contravenía así uno de los preceptos de la *Liga*, en el sentido de que todo aquel que quisiera estar con ella, o rompía con el Gobierno de manera clara o no podría seguir cumpliendo con las atribuciones y con los deberes de la misma.

la Liga Agraria no puede ni debe favorecer ni ayudar á ningún político que no se comprometa de su parte á poner antes los intereses de la producción nacional que los asuntos políticos suyos. El que esté en la Liga, ó quiera estar en ella, si no rompe con el Gobierno biertamente, siempre que éste vacile en pro de los productos españoles, no cumple con sus deberes, no los representantes de provincias les tomaremos como verdadero ligero. O lo uno ó lo otro. Y dentro de la Liga no hay categorías, ni en Madrid ni en provincias, y los que vivimos en Madrid tenemos que atenernos rigurosamente á lo que se nos encarga en bien de las provincias y de la Nación entera. El centralismo político es la fuente de nuestra decadencia. No venga el centralismo ligero que sirva para que unos cuantos políticos hipotéticos se aprovechen de las fuerzas vivas del país en favor de Cánovas ó Sagasta. La Liga es la Liga y nada más; y sino se deshará como al sal en el agua. Dentro de ella, lo mismo el Sr. Gamazo que el representante de Castrillo de Mata Judíos. Sólo que el último ha renunciado á su sueldo por favorecer las economías y el primero no lo ha hecho, y éste es rico y el segundo pobre⁷¹⁶.

Más aún, y con anterioridad, el órgano de difusión de la Asociación, llegó a publicar en el mes de abril de 1889 una serie de rumores en los que se atribuía la idea de crear la *Liga Agraria* al partido conservador. En este sentido se podía leer: "La Liga Agraria es una Asociación puesta en juego por

⁷¹⁶ Véase el artículo "El capital nacional y la política", en *La Liga Agraria*, 28 de agosto de 1889.

el partido conservador para sus fines políticos”⁷¹⁷. Bien es verdad que los recelos y temores procedentes de sectores conservadores, respecto a la *Liga*, habían comenzado desde las primeras Asambleas celebradas en Madrid en diciembre de 1887. Ciertamente, que aparecieran en los primeros cargos ligueros nombres como los de Moyano, Gamazo y Muro, ninguno militante en las filas del partido conservador, hizo creer a muchos propietarios castellanos que se trataba de un intento por acercar los criterios económicos de la *Liga* a los propugnados por los seguidores de Cánovas. Todo ello, además, cuando al frente de aquélla se hallaba un hombre como Adolfo Bayo, cuyo temperamento político y personal eran sobradamente conocidos en los círculos políticos conservadores⁷¹⁸.

La *Liga Agraria*, lejos de ser entendida como una miscelánea política y económica, optaba por compartir el protagonismo de la defensa de la producción agrícola nacional con todos aquellos que quisieran sentirse identificados con la misma. No es de extrañar, por tanto, que destacados nombres dentro del partido conservador tuvieran sus escaños con la Asociación agraria. Solo así pueden explicarse actitudes tan dispares como las propiciadas por el propio Bayo o el conde de Esteban, miembros activos de la *Liga*, o la de Romero Robledo, seguidor de las actividades de la misma⁷¹⁹.

En todo caso, el sentir de los conservadores respecto a la *Liga* resultaba fácilmente comprensible, ya que Cánovas nunca negó su apoyo a la misma, lo que fue rápidamente advertido desde las filas liberales. A pesar de la preocupación mostrada desde la formación liberal, el programa de Sagasta continuó resistiéndose a las reformas, favoreciendo de esta forma los proyectos que estaban en marcha de Puigcerver y González⁷²⁰. Al mismo tiempo, no resultó difícil intuir desde las filas conservadoras los inconvenientes que podían presentarse, dentro del partido liberal, si el Gobierno mantenía su resistencia a dejar los principios librecambistas y no

⁷¹⁷ Al respecto, pueden consultarse los recortes de prensa que cita *La Liga Agraria*, en su número 58, correspondiente al 28 de abril de 1889. Con anterioridad, también se había presentado a Gamazo como defensor del partido conservador. Véase *La Época*, 4 de julio de 1888.

⁷¹⁸ Respecto a las impresiones de los conservadores, una vez conocidos los resultados de la primera Asamblea de la *Liga Agraria* en Madrid, puede consultarse *La Regencia*, 13 de diciembre de 1887.

⁷¹⁹ En efecto, Romero Robledo llegó a advertir a los miembros de la *Liga* que él no pertenecía a la Asociación, aunque se declaraba proteccionista. *La Regencia*, 19 de enero de 1889.

⁷²⁰ *La Regencia*, 15 de abril de 1888.

suavizaba su abierto rechazo a los razonamientos defendidos por la *Liga Agraria*⁷²¹.

Entre los conservadores catalanes, y especialmente entre los círculos de opinión de Barcelona, fue muy comentada la llegada a la ciudad del propio Cánovas con motivo de la Exposición que allí debía celebrarse. Un hecho que venía a acrecentar las implicaciones proteccionistas de los productores e industriales instalados en la zona. En este sentido, el diario *La Regencia*, proclive a las acciones de la *Liga* y a las de Gamazo, refiriéndose a la visita del líder de la oposición, llegó a comentar lo siguiente: “Dicen que en las reuniones que habrán de celebrarse en obsequio de su jefe, se hablará muy poco de política y mucho de las cuestiones económicas; que el señor Cánovas, sin declararse un soldado más de la Liga Agraria, la apoyará con frases de simpatía, y que hará algo así como un programa de política económica, prometiendo realizar las economías, denunciar los tratados de comercio y proteger eficazmente a la protección nacional”⁷²².

Solo un mes después, en la misma ciudad, Cánovas volvería a arremeter contra la gestión de Sagasta al no haberse abordado por el Ejecutivo una subida de aranceles, tal y como demandaban los seguidores de la *Liga*. A Barcelona, le sucedieron Zaragoza y Sevilla, amén de otras ciudades de Extremadura, siempre con el mismo espíritu de propaganda e instando a la unidad nacional contra la Administración librecambista del partido liberal. La actitud promovida por el jefe de las filas conservadoras, liquidaba las «simpatías» económicas que hasta esos momentos se habían mantenido con los incondicionales de Sagasta⁷²³. Decidido el cambio de estrategia, quedaban establecidos, pues, dos modelos suficientemente diferenciados. El primero, manejado por una *Liga Agraria* supeditada a Bayo, Gamazo y Muro, y destinada a promover los derechos de propietarios y agricultores, frente a otro, liderado por un partido liberal, más preocupado por la movilización social y el sufragio universal⁷²⁴.

⁷²¹ El partido liberal estaba dispuesto a no ceder ante las peticiones de Gamazo y sus seguidores. *La Regencia*, 17 de septiembre de 1888.

⁷²² *La Regencia*, 17 y 19 de septiembre de 1888. También en Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 88 a 96; Ortega Rubio, J., Tomo I, ob. cit., págs. 397 a 398; Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., pág. 764; Fernández Almagro, Melchor, *Cánovas, su vida y su política*, ob. cit., pág. 443 a 445.

⁷²³ Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., pág. 90.

⁷²⁴ No cabe ninguna duda de que la *Liga Agraria* se vio enseguida amparada por el beneplácito de las filas canovistas, lo que llevaría muchas veces a criticar abiertamente,

No extraña, vistas las distintas prioridades de la política económica en los últimos años del XIX en España, que *La Liga Agraria* hiciera público un artículo en el que reflejaba el júbilo causado por la vuelta al poder del partido conservador. En este sentido se detallaba lo siguiente: “Con alegría se ha visto en este país haber nombrado la Reina Regente otro Ministerio que rija los destinos de esta nación [...] Todos en general deseábamos un cambio de Gobierno, para ver si nuestra situación variaba”⁷²⁵. Esta opinión revelaba claramente los vínculos entre la *Liga Agraria* y el partido conservador, confirmando, en efecto, los intentos por debilitar los sectores del partido liberal en manos de Gamazo. Hubo quien, además, creyó en la posibilidad de situar a la *Liga* como el mejor estandarte de su política electoral. Dirigida principalmente a proteger los sectores más castigados de la sociedad agraria, particularmente de la producción de cereal, la acción liguera se vio forzada a situarse en un plano de relativa proximidad al partido conservador. Con el tiempo, quedarían demostrados los intentos desde las filas canovistas por poner en práctica las mismas estrategias propuestas por la *Liga*. No obstante, la corta existencia de la misma, además de las limitaciones que en muchos casos se imprimía a su actividad, terminaron moderando cualquier atisbo por alcanzar un espacio efectivo en la «riña» electoral.

A comienzos de 1888, solo los posicionamientos de Alonso Martínez y Montero Ríos preocupaban a un Sagasta acosado por los reformistas, lo que hacía presagiar la posibilidad de algún abandono en el ala izquierda del partido⁷²⁶. La delicada situación en la agricultura del país hacía tiempo que venía provocando algunas reacciones en los grupos opositores al Gobierno, especialmente en el partido conservador, desde el que se pretendía obtener una sensible subida en las tarifas arancelaria. El propio Sagasta era consciente de que cualquier intento de alterar la política económica adoptada por el partido podía suponer la ruptura con acólitos tan importantes como Albareda, Moret y Puigcerver. Nombres que, en cualquiera de los casos, podían ser reemplazados por los de Gamazo, Maura y Vega Armijo, quienes ya habían mostrado su apoyo a las acciones propuestas por

desde los bancos conservadores, la falta de idoneidad del sufragio frente a una necesidad apremiante como era el proteccionismo. En relación a las propuestas liberales, el propio Cánovas llegaría a ironizar diciendo: “*He aquí el secreto de dar al obrero recursos para vivir: facilitarle los medios de votar*”. *Ibidem*, pág. 90.

⁷²⁵ *La Liga Agraria*, 28 de julio de 1890.

⁷²⁶ Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., págs. 747 a 749.

la *Liga Agraria*. A pesar de todo ello, dentro de esta dinámica se decidió finalmente renunciar a las tesis proteccionistas, circunstancia que comprometía la estabilidad del Gobierno del partido liberal⁷²⁷.

En de febrero de aquel mismo año, y simultáneamente a la presentación por parte del ministro López Puigcerver de cuatro proyectos de ley al Congreso, la *Liga Agraria* anunció por medio de Germán Gamazo su *Exposición a las Cortes*, con un programa de propuestas dirigidas a «salvar» la agricultura. La crisis agrícola y pecuaria había movido a López Puigcerver a solicitar a las Cortes una rebaja en los tipos que servían para la tributación relacionada con aquellos sectores. Ya con anterioridad, en los presupuestos de 1887-1888, se habían rebajado “50 céntimos por 100” a los pueblos que satisfacían el 17,50 por ciento, y 80 céntimos a los que contribuían con el 23 por ciento, con lo que el resultado definitivo quedaba en un 17 y un 22,20, respectivamente, obteniéndose una rebaja de más de 17 millones de pesetas. Consciente de las dificultades, Puigcerver lamentaba que las exigencias presupuestarias y la necesidad de recursos finalmente hubieran provocado que las rebajas no se hubieran situado más allá de las exigidas por los grupos afectados. Por otra parte, recordaba la necesaria rectificación de las cartillas evaluatorias, sin la cual, resultaba difícil aplicar una mayor amplitud a las reformas. El mencionado proyecto disponía que los recargos sobre las contribuciones que los Ayuntamientos estaban autorizados a imponer, se rehiciesen en una sola cuota, conjuntamente con las del Tesoro, compensando de esta manera a muchos pueblos y contribuyendo, en suma, a eliminar una de las formas de abuso que más favorecían el “pernicioso influjo del caciquismo”⁷²⁸.

Las reformas no fueron recibidas con unanimidad por las Cámaras. Tampoco la petición de modificar los aranceles en las partidas referidas a los cereales. La propuesta del Gobierno de rebajar las cantidades tributadas por la riqueza rústica y pecuaria apenas contó con el beneplácito de los conservadores, como no lo hizo entre destacados miembros de la mayoría gobernante. Esta última actitud, justificada por Gamazo y su grupo,

⁷²⁷ Véase, por ejemplo, *Revista Contemporánea*, 15 de enero de 1888, pág. 94.

⁷²⁸ También se aumentaba un 100 por 100 el recargo que pesaba sobre las cédulas personales, creándose un impuesto especial de consumo sobre los aguardientes, alcoholes y licores que se importaran del extranjero. Tanto del trigo, así como del resto de cereales, los mencionados proyectos nada citaban al respecto. Pirala, Antonio., Libro II, ob. cit., págs. 18 y 19.

afectaba a los municipios, disminuyendo los ingresos y obligando a los mismos a acudir a otros recargos para atender las necesidades municipales. Las soluciones, en opinión de Gamazo, no eran mejores que la reiterada solicitud de evitar la entrada de productos desde el exterior⁷²⁹.

La reacción del líder castellano frente a la política económica de su partido comenzó a originar, de esta forma, problemas internos de cierta consideración. La fuerte protesta protagonizada en el Congreso había llevado a Sagasta a fracasar en su intento por hacer que Gamazo cediese en su actitud de no apoyar los proyectos de Puigcerver. Convencido de que la posición de su partido no estaba inspirada en conductas políticas, sino en la necesidad de ajustar sus decisiones a compromisos contraídos con otras fuerzas sociales, Gamazo presentó una dura batalla al Gobierno al exigirle que creara una Comisión en la que pudieran estudiarse y entenderse las necesidades de los mencionados proyectos. Ésta se llevó a tal fin, pero sin la participación de los conservadores ni la de los amigos de Gamazo, lo que produjo una clara victoria por parte del ministro Puigcerver y sus allegados de partido, dejando sin opciones a los gamacistas y a los conservadores. Solo un día después de tomada esta actitud por parte de Gamazo, la prensa comenzó a difundir las posibles consecuencias que podían acarrear dichas desavenencias en el partido liberal, especialmente en Gamazo y en su más que probable disidencia⁷³⁰.

Los desacuerdos entre el político castellano y el Gobierno comenzaban después de que aquél accediera a encabezar, a partir de 1886, el grupo más importante dentro de la coalición liberal.⁷³¹ Nacido en Boecillo, un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid, y doctorado en Derecho, su traslado a Madrid supuso que fuera reconocido como uno de los mejores abogados de

⁷²⁹ Ibídem, págs. 20-21. Asimismo, en *La Época*, 18 de febrero de 1888; *La Liga Agraria*, 28 de febrero de 1888, y *La Regencia* 24 de febrero de 1888.

⁷³⁰ Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 21 y 22. Respecto a la disidencia de Germán Gamazo, un diario conservador de Madrid publicó, en efecto, un artículo titulado «Nueva disidencia», en el que entre otras cosas se decía lo siguiente: “La disidencia, pues, no puede ser más honda ni de más alcance, ni el conflicto del Gobierno de solución más difícil”. *La Época*, 18 de febrero de 1888. El mismo diario, días después proponía algunos nombres que debían ser llamados al Gobierno para paliar la crisis. Entre ellos, se citaban a algunos de marcado y arraigado carácter conservador como el conde de Xiquena, o ex-ministros como Gamazo, Montero Ríos, Groizard, etc. *La Época*, 24 de febrero de 1888.

⁷³¹ Varela Ortega, ob. cit., pág. 371; Llanos y Torriglia, Félix de, *Germán Gamazo, el sobrio castellano*, Espasa, Madrid, 1942, págs. 130 a 136; Martín Martín, José María, *Ensayo histórico sobre Boecillo*, Valladolid, 1995, págs. 103 y 104; Corrales y Sánchez, Enrique, *Apuntes biográficos de D. Germán Gamazo*, Madrid, 1902, págs. 13 y 14, y Ortega Rubio, Juan, *Vallisoletanos ilustres*, Valladolid, 1893, págs. 101 y 102.

la capital. De la mano de Manuel Silvela su acceso a la política se produjo, primeramente como *unionista* y luego como *constitucional*. En las elecciones de 1871 y 1872, Gamazo consiguió el acta de diputado por Peñafiel, siendo más tarde reelegido diputado por Medina del Campo, situación que ya no abandonaría durante los siguientes treinta años. Reconocido su prestigio como abogado, incluso por el rey Alfonso XII, Gamazo pasó a las filas canovistas en 1875, apartándose de este modo del partido constitucional. Un hecho sucinto, ya que pronto volvería a la formación de Sagasta organizando, junto a Navarro Rodrigo, el llamado «ala derecha» del partido, siendo nombrado en 1881 máximo responsable del grupo liberal en Valladolid y en 1883 Ministro de Ultramar. Su trayectoria, así como su vida, quedaban vinculadas, sin tener en cuenta el orden de preferencias, a dos principios esenciales en su dilatado quehacer. Esto es, a Castilla y al partido liberal fusionista de Sagasta⁷³².

No fue casual, una vez conocidas las exigencias del líder liberal, que desde los sectores más influyentes castellanos se le instara decidida y resueltamente a ser el nuevo «mesías» de Castilla, a la vez que se le reconocía como la mejor de las bazas posibles entre los grupos proteccionistas y defensores de los intereses agrarios del país⁷³³. Ayudado por la *Liga Agraria*, Gamazo encontró muy pronto en ésta un formidable elemento de acción política que le llevarían a iniciar una «dictadura» particular, junto a una larga cadena de vaivenes y altibajos originados en el partido liberal. Esta inestabilidad pondría al partido bajo una de las mayores crisis llevadas a la práctica durante el Parlamento Largo de Sagasta, y una de las más trascendentales y significativas del período de la Restauración en España⁷³⁴.

⁷³² Pueden consultarse las amplias biografías y obras dedicadas a Germán Gamazo ya comentadas con anterioridad. Asimismo en Carasa Soto, Pedro, *Élites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico de Parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923)*, Vol. I, Salamanca, 1997, págs. 275 y 276. Al respecto de las consideraciones económicas que Gamazo defenderá como proteccionista, conviene recordar lo apuntado por Esther Calzada del Amo, al situar al líder castellano como un claro adversario de la llamada escuela «manchesteriana». Entendía Germán Gamazo, entre otras cuestiones, que debía estimularse el ahorro, emprender la creación de un mercado nacional sólido, así como rebajar las tarifas ferroviarias para fortalecer los mercados interiores y hacer frente a los precios competitivos presentes en otros países. Calzada del Amo, Esther, ob. cit., págs. 2219 a 221.

⁷³³ *El Norte de Castilla*, 27 de marzo de 1888. En algún caso se llegó a reconocer abiertamente que: «El señor Gamazo es, sin que el Gobierno pueda evitarlo, el verdadero *leader* de la mayoría en el Congreso». *La Época*, 20 de abril de 1888.

⁷³⁴ Las discrepancias entre gamacistas y ministeriales, estos últimos denominados así por ser seguidores a ultranza de la política de Sagasta, llevaron a solicitar, por parte de la opinión pública conservadora y de la de los partidarios de Gamazo, una inmediata retirada

En este sentido, durante los años de vigencia de la *Liga*, el Gobierno consiguió con sus políticas de ajuste un ejercicio de verdadero pundonor, remarcando una incuestionable disciplina hacia su «jefe» de filas. Por otra parte, la defensa a ultranza de su programa político terminó frustrando a una gran parte de los sectores económicos del país y de su propio partido. De acuerdo con esta interpretación, los votos arrancados por Gamazo en el Congreso, aunque inicialmente no molestaran a los ministeriales, acabaron obteniendo un importante peso en la opinión pública⁷³⁵.

Entretanto, las dudas despertadas frente a los agricultores, una vez confirmada la renuncia, en marzo de 1888, a asistir a la reunión de agricultores en Valladolid, quedaron resueltas después de que, tanto Germán como su hermano Trifino Gamazo, remitieran una carta participando de las aspiraciones de los miembros de la *Liga*, y en la que acentuaban la necesidad de que se adoptaran medidas para sustituir los proyectos económicos del Gobierno. La lectura de aquel documento llegó a provocar algunas controversias, siendo recibida entre aplausos por unos y con ciertas murmuraciones por otros⁷³⁶.

El acto celebrado en Valladolid supuso una prueba más a favor de los razonamientos ligueros y del grupo gamacista, reforzando igualmente el oportunismo conservador de los hombres de Cánovas. Las consecuencias de aquella Asamblea recalaron en el Senado, donde Polo Bernabé advirtió a Sagasta de los posibles efectos que tendría no prestar la atención debida al estado de la agricultura en Castilla y en todo el país, lo que podría alterar el orden público como ya sucediera en Badajoz y Madrid, durante 1883 y 1886, respectivamente. Ante tal actitud, el Presidente del Consejo de Ministros, refiriéndose a los agricultores, tuvo que declarar que mejor hubiera sido no dejarse llevar por determinadas personas, cuya única pretensión era la de “barrer para adentro en cuestiones políticas”. El propio Puigcerver, reafirmando lo dicho por su jefe de partido, llegó a poner de manifiesto en más de una ocasión, y en referencia a Germán Gamazo y sus seguidores, la

del propio Puigcerver. Se trataba de abrir una puerta a su intransigencia en los proyectos presentados a las Cortes, o una retirada en favor de otros elementos del partido. Esta situación, sin embargo, no se dio. *La Regencia*, 11 de marzo de 1888.

⁷³⁵ Véase el artículo “Después de la lucha”, en *El Imparcial*, 21 de febrero de 1888.

⁷³⁶ *La Época*, 26 de marzo de 1888, y *La Regencia*, 27 de marzo de 1888. También en Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 32 y 33.

vergonzosa lucha de intereses que solo atendían a la conveniencia particular de algunas personas dentro del partido liberal⁷³⁷.

No fue únicamente la disidencia de Gamazo la que terminaría alterando la disciplina dentro del partido liberal. Al mismo tiempo que en el Senado se discutían las intenciones económicas del Gobierno, el Congreso iniciaba los debates relacionados con el proyecto militar del ministro Manuel Cassola. El carácter cambiante de Sagasta lo demuestra el hecho de que en abril, éste hubiera manifestado que las reformas militares formarían parte esencial en la política del partido liberal. No obstante, y solo un mes después, la idea que más dominaba era la de que aquellas reformas nunca llegarían a estamparse en una ley. Con el apoyo del general Martínez Campos, además de otros militares y políticos, Cassola y el propio Sagasta comprendieron la necesidad de provocar una crisis de gobierno. En junio de aquel año el Presidente informaba de los reajustes ministeriales a la Reina, quedando constituido un nuevo gabinete con Tomás O’Ryan en la cartera de Defensa⁷³⁸.

Naturalmente, y al mismo tiempo que Sagasta decidía resolver la crisis «militar», quedaba por dilucidar qué sucedería con la situación económica y los desajustes en el seno del partido. A este respecto, un hecho vino a poner en ventaja las posiciones de Sagasta en correspondencia con las de Gamazo. A mediados de mayo la Regente doña María Cristina, acompañada del Presidente del Consejo de Ministros y un importante número de miembros del gobierno de su partido, se dirigieron a Barcelona con objeto de la inauguración de la Exposición Universal que organizaba la misma ciudad. En el acto, resultaron muy elocuentes las palabras, así como las demostraciones de apoyo y adhesión al Gobierno por parte de la reina María Cristina⁷³⁹.

La satisfacción de los ministeriales por el resultado de la expedición conjunta con la Reina a Barcelona, sirvió de aldabonazo a los mismos adversarios del Gobierno que hubieron de reconocer la importancia que

⁷³⁷ Al respecto, puede consultarse Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., pág. 33.

⁷³⁸ Nido y Segalerva Juan del, ob. cit., págs. 761 y 762; Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 22 a 25 y 50 a 65, y Ortega Rubio, J., Tomo I, ob. cit., págs. 367 a 369, y 395 y 396. Véase también *La Regencia*, 22, 25 y 26 de abril de 1888; *La Época*, 8 y 9 de mayo de 1888, y *El Imparcial*, 15 de junio de 1888.

⁷³⁹ Ortega Rubio, J., Tomo I, ob. cit., págs. 373 a 385, y Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 41 a 49. También en *El Imparcial*, 23 de mayo de 1888.

dicho viaje había tenido para la situación política del partido liberal. Tal como se dijo, se había tratado de “un verdadero viaje de salud”, una vez visto el apoyo y afecto que la Reina había demostrado a Sagasta⁷⁴⁰. Como se llegó a explicar en algunos medios: “Si la nación española y la augusta persona que se halla á su frente merecen toda suerte de simpatía y consideraciones a las potencias europeas y todo género de demostraciones de cariño y adhesión á los catalanes, será muy difícil que el gobierno de esa nación y consejero de esa reina no saque también su parte [...] en tamañas ventajas”⁷⁴¹.

Un corolario más de la actitud regia fueron las dificultades añadidas al posicionamiento de Gamazo, favoreciendo de este modo la conducta que en materia económica venía defendiendo la corriente oficial de los llamados «ministeriales». En cualquier caso, las intenciones de Gamazo habían quedado claras al declarar éste que en cualquier momento podría volver a retomar su particular guerra contra los planes económicos de su partido⁷⁴². Dicha conducta se vio plasmada enseguida en uno de los discursos pronunciado en el Congreso el 5 de junio, referido a las discusiones económicas y presupuestarias que en esos mismos días se iniciaban en las Cámaras. Aquellos movimientos inspirados, tanto por Gamazo como por algunos disidentes más del partido liberal, fueron reconocidos en los círculos políticos como la «conjura»⁷⁴³.

⁷⁴⁰ *El Imparcial*, 23 de mayo de 1888.

⁷⁴¹ Véase el artículo titulado: “En la confianza está el peligro”, recogido en *El Imparcial*, 23 de mayo de 1888.

⁷⁴² Las menciones en la prensa respecto a la actitud de Gamazo y a las esperanzas que una parte de la sociedad agraria había depositado en él, habían sido unánimes en coincidir que aquél esperaba el mejor momento para actuar. *La Regencia*, 6, 22 y 25 de abril de 1888, y *La Época*, 26 de marzo y 20 de abril de 1888. También en *El Imparcial*, 21 de febrero de 1888. En este mismo diario se llegaría a manifestar: “El señor Gamazo [...] no quiere combatir cuando su perspicacia le advierte lo desventajoso del momento para entablar la batalla. Se retira ante la promesa de mayores economías; pero al retirarse deja tras sí abierto el camino para volver cuando le convenga. Esa misma promesa, quedando incumplida, le servirá de motivo ó de pretexto para el retorno”. Estas últimas opiniones habían sido recogidas, después de haber tenido lugar los acontecimientos relativos al viaje de la Reina y el Gobierno a Barcelona. *El Imparcial*, 23 de mayo de 1888. Respecto al cese momentáneo de las acometidas de Germán Gamazo en contra de su partido, el diario *La Época* se hacía eco de unas líneas publicadas en el diario *El Imparcial*, en donde se decía lo siguiente: “Los amigos íntimos del señor Ministro de Hacienda ponen gran empeño en hacer público que el señor Gamazo, en su última entrevista con el señor Sagasta, no dijo una palabra siquiera sobre sus antiguas pretensiones de gravar con un crecido impuesto a los tenedores de deuda pública y de introducir rebajas en los aranceles”. *La Época*, 2 de mayo de 1888.

⁷⁴³ Tal como describiera Antonio Pirala en su trabajo, gran parte de las propuestas de los «conjurados» estaban encaminadas a reafirmar, dentro del partido liberal, la necesidad de

Su discurso largo, tenso y cargado de reproches a los que, en definitiva, seguían siendo sus compañeros de partido, no llegaba a romper necesariamente todas las amarras políticas, a pesar de mantener su censura en las cuestiones que estaban relacionadas necesariamente con la economía. Sus primeras palabras comenzaban apuntando:

Señores diputados me propongo ejercer un acto de reivindicación, que considero de día en día más necesario para el régimen parlamentario, el cual no está tan sobrado de prestigio [...] Debo decir que hoy mi tarea es más sencilla y fácil que lo hubiera sido hace ocho días, porque la demostración que yo intentaba nos la ha dado hecha nuestro digno y respetable amigo el señor Ministro de Hacienda cuando en la sesión del sábado se levantó á [...] hacer alardes, en mi concepto innecesarios, de opiniones librecambistas que no es, al menos no entiendo yo que sea, la política del partido liberal⁷⁴⁴.

Recordó igualmente a los diputados los antecedentes que se le habían reprochado, en relación con sus iniciativas en la *Liga* y en el campo proteccionista. A este respecto, el propio Gamazo advertía:

la situación en que me encuentro, la historia que la cuestión tiene, y mis antecedentes y compromisos, exige que todavía platee un problema importante, y es á saber el de si dentro de los más estrechos principios de la disciplina podía y aun debía yo hacer lo que vengo haciendo en la cuestión económica en el seno de mi partido. Todos recordáis cuándo y con qué ocasión se suscitó la primera alarma que en algunos de buena fe, en otros con más ó menos ligereza [...] trató de esparcir la opinión de que yo venía á ahondar excisiones en el partido. Esa ocasión fue aquella en que mi digno amigo el señor Ministro de Hacienda, cumpliendo las reiteradas promesas del partido y del Gobierno, presentaba aquí el programa completo [...] de las

asumir los principios económicos más solicitados por el país, entre los que se contaban las subidas de los Aranceles. Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 134 a 147. Asimismo, Germán Gamazo creyó tener entonces una posible salida a su disyuntiva, siempre que sus diferencias internas no provocar, en ningún caso, «heridas» de difícil curación. En algunos medios de opinión se escribió acerca de esta cuestión, en el sentido de que: “Lo que quiere el señor Gamazo es tener enfrente un Gobierno fuerte y vigoroso, porque entonces podría lanzarse sin temor á luchar por las reformas económicas que anhela el país, y considera más probable obtener de él las concesiones apetecibles”. *La Época*, 24 de mayo de 1888.

⁷⁴⁴ “Discurso del señor Gamazo, pronunciado en el Congreso en la sesión del martes 5 de junio” en *El Norte de Castilla*, 9 de junio de 1888.

soluciones para remediar la crisis agrícola. Dije entonces que aquellas soluciones no me parecían satisfactorias para mi país⁷⁴⁵.

Para terminar, reiteró sus opiniones próximas a las proposiciones hechas meses atrás por la *Liga Agraria* en su Exposición remitida a las Cortes. En este sentido Gamazo quiso explicar lo siguiente:

Yo deseo hablar con completa claridad á mi país y á mi partido. Me propongo que mi partido, convencido de que las economías son necesarias y posibles, las lleve á la práctica. Me propongo más adelante [...] que por la intervención del Gobierno no se oprima á nadie, sino que se alivie á los que están en una situación triste y difícil; si no se llega á obtener, por ejemplo, el precio remunerador de los productos del suelo, espero de mi partido que admita una autorización que hoy pediré á las Cortes para obtener, por el aumento de los aranceles el precio remunerador de los productos del suelo. Yo espero que mi partido no se negará á eso [...] que no declarará que es dogma del partido liberal el mantener los aranceles respecto de los cereales en 5,70 y de las harinas en 8. Yo entiendo que era necesario que el país se acostumbrase á ver [...] que es lícito y posible que se levante la protesta contra lo que se considere malo, que se recoja la opinión, y que sin temor [...] se diga que ciertas cosas están de moda; que la moda, señores diputados, en cuestiones económicas y políticas es una dictadura á la cual menos que nadie se pueden sustraer los gobiernos representativos [...] Si yo llegase á ser Gobierno [...] pediría á todos mis correligionarios y amigos que por este mismo medio, discutiendo conmigo, amonestándome, tratando de convencerme, me presentaran aquellas soluciones que entendiesen en conciencia que eran las soluciones convenientes al país y, por tanto, útiles para el porvenir del partido⁷⁴⁶.

En este estado de cosas, Gamazo, en un último intento por alcanzar un acuerdo con Sagasta y en una reunión celebrada en el Congreso de los Diputados el 21 de junio de ese mismo año, insistió en la necesidad de establecer mayores recortes presupuestarios. Sagasta, a pesar de estar dispuesto a realizar algunas rebajas, demandaba a cambio unos topes que Gamazo consideraba insuficientes. El tema más delicado fue, no obstante, la imperiosa subida de los aranceles que, en opinión de aquél, necesitaba la

⁷⁴⁵ “Discurso del señor Gamazo... continuación”, en *El Norte de Castilla*, 14 de junio de 1888. Existen varias opiniones al respecto en *La Época*, 6, 22 y 27 de junio y 4 de julio de 1888.

⁷⁴⁶ “Discurso del señor Gamazo... conclusión”, en *El Norte de Castilla*, 15 de junio de 1888.

agricultura. Sobre este punto, el presidente del Gobierno propuso un aplazamiento hasta que dicho asunto fuese discutido con el ministro Puigcerver⁷⁴⁷.

Concluidos los debates económicos en el Congreso, la crisis desencadenada en el Ejecutivo condujo al nombramiento de nuevos ministros en Fomento y Ultramar, además de los ya mencionados cambios en Defensa, trance que se completaría con la continuidad de López Puigcerver en Hacienda y el paso de Segismundo Moret a la cartera de Gobernación. La nueva situación, además, colocaba a Gamazo a la espera de que se pudiera producirse una tregua en el denominado «interregno» parlamentario⁷⁴⁸.

Hacia el verano de 1888, la disidencia gamacista había comenzado a ser ampliamente «aplaudida», dejando ciertas dudas acerca de si rompería definitivamente los lazos con el partido liberal⁷⁴⁹. La conducta desencadenó en la prensa un cúmulo de rumores acerca de las posibles alternativas, toda vez que el comienzo del nuevo curso político estaba próximo. Un ejemplo de lo que aquí se expone se produjo en la estación de Hernani, en una reunión celebrada entre Navarro Rodrigo y Gamazo, situación por la que se llegó a sugerir la posible creación de un tercer partido, incluso la ocasional entrada de los gamacistas en el partido conservador de la mano de Silvela⁷⁵⁰.

Si bien resultaba difícil saber qué decisión ultimaría el líder liberal y de la *Liga Agraria*, mucho comenzó a especularse acerca de la posibilidad de volver a las filas del partido si Puigcerver abandonaba la formación política o dimitía. Por otra parte, Gamazo, dolido por el escaso éxito obtenido en el Congreso, no podía exponerse a un nuevo fracaso. Antes de iniciar una campaña más áspera y contundente, las opciones gamacistas pasaban por un acercamiento a Martínez Campos, lo que podía significar un aumento de

⁷⁴⁷ *La Época*, 22 de junio de 1888.

⁷⁴⁸ A este respecto, en *El Liberal*, se podía leer lo siguiente: “Parece que el señor Gamazo está muy incómodo con el Gobierno por recientes contratiempos. Su estado de ánimo revela que á vuelta del verano acentuará de una manera bien clara su oposición al Gabinete”. *El Liberal*, 28 de julio de 1888. Algunas cuestiones en este sentido también pueden advertirse en *La Regencia*, 29 de julio de 1888.

⁷⁴⁹ *Revista Contemporánea*, 15 de julio de 1888.

⁷⁵⁰ El encuentro fue consecuencia del viaje de Gamazo a Alemania. Véase “La actitud del señor Gamazo”, en *El Liberal*, 30 de agosto de 1888. También en *La Regencia*, 31 de agosto de 1888, y en *La Época*, 30 de agosto de 1888.

credibilidad entre las filas liberales, al mismo tiempo que una marcha definitiva del fusionismo⁷⁵¹.

Hacia el mes de septiembre, pocos dudaban que el partido liberal atravesaba una crisis cuya gravedad, tal y como se llegó a decir en su momento, podría verla un ciego. Reanudadas las sesiones en las Cortes, la acentuación de la misma llevó al «retocado» Gobierno de Sagasta a tener que gestionar la importante disidencia económica, encabezada en esos momentos por Gamazo, a la vez que aumentaba el descontento en el general Cassola. Una posición que lo situaba también a las puertas de una ocasional ruptura con el fusionismo⁷⁵².

Independientemente de los desacuerdos manejados por Gamazo y Cassola, otros nombres de conspicuos senadores y diputados como los de Camacho, el duque de Tetuán, Salamanca y Romero Girón, venían reclamando la conveniencia de iniciar una transformación orgánica en el partido, así como la urgente necesidad que existía en atender las demandas materiales del país⁷⁵³. En este sentido, y refiriéndose a la situación política, el general Cassola había dejado claro que Sagasta no quería dar a Martínez Campos un motivo ostensible para una más que probable disidencia, aunque el deseo de aquél era que terminara dejando las filas del partido conservador cuanto antes. Cassola veía claro que ni Gamazo, ni Maura, ni tampoco Romero Robledo, pretendían formar nuevos partidos, sino simplemente que se reformasen las bases de los mismos, eliminando políticamente a Sagasta y asumiendo, de esta manera, la dirección del partido ellos mismos⁷⁵⁴.

⁷⁵¹ *La Regencia*, 31 de agosto de 1888.

⁷⁵² Véase *La Regencia*, 1 de septiembre de 1888.

⁷⁵³ En este estado de cosas, la unidad se vio aún más amenazada al conocerse el descontento del general Martínez Campos, persona dada a tomar soluciones más drásticas. Dolido, como se aseguraba con Sagasta y con el Gobierno, al mismo tiempo que disconforme en muchos puntos, entre los que destacaban el económico y la gobernación del Estado, Martínez Campos había declarado no estar dispuesto en lo sucesivo a reconocer otras jefaturas ni directores del partido que no mereciesen su confianza. *La Regencia*, 1 de septiembre de 1888. Asimismo, en Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 77 a 80.

⁷⁵⁴ Refiriéndose a la situación política, el general Cassola escribía desde Biarritz el 3 de septiembre de aquel año 1888, unas líneas que están recogidas, casi en su integridad, por Antonio Pirala en su obra. Así, podemos leer entre otras cosas lo siguiente: “Tendrá, pues, que resignarse a sufrir Martínez Campos dentro de su partido y a tener enfrente o al lado a López Domínguez, acechando el momento de matarlo cuando pueda”. Refiriéndose a Gamazo, Tetuán, Romero Robledo, Martos, Montero Ríos, etc., comentará lo siguiente: “Permanecerán dentro de casa para debilitar y hostilizar al Gobierno, a la vez que proclamarán muy alto que la gestión gubernamental no debe pasar a manos de

Cánovas, conocedor de la situación en el partido liberal, intentó, no en vano, aprovechar su posición de privilegio respecto al proteccionismo, que era reivindicado desde los sectores gamacistas más proclives a las consideraciones planteadas por la *Liga Agraria*. Pese a ello, los liberales no creyeron estar en una posición inferior al partido conservador, al controlar aquéllos un mayor número de efectivos de la Asociación, lo que suponía una ventaja importante a la hora de llevar a la práctica el programa ligüero⁷⁵⁵. Ante la imposibilidad de realizar movimientos hacia un lado u otro debido a la miscelánea de grupos que convivían dentro del partido, Sagasta hubo de asumir que el triunfo de cualquier tendencia, tanto en lo político como en lo económico, significaría el fracaso, no sólo del partido liberal, sino de la jefatura y de los vínculos que él mismo representaba⁷⁵⁶.

Los gamacistas, ante la apremiante crisis, trataron de presionar al Presidente del Consejo de Ministros haciendo extensas las noticias de las reuniones que estaban siendo promovidas por la *Liga Agraria*⁷⁵⁷. De todo ello parecía deducirse que si el ministro Puigcerver no cambiaba sus posicionamientos económicos, las fuerzas de Gamazo actuarían con toda su energía. Paralelamente, y entre los ambientes liberales, comenzó a circular la idea de que la mejor de las soluciones pasaba por una dimisión de Sagasta, dejando de este modo la jefatura en manos de los sectores de la derecha del partido. En uno de los artículos publicados aquellos mismos días se podía leer lo siguiente: “La derecha del partido liberal cree llegado el momento de hacer predominar resueltamente sus tendencias en la dirección del gobierno

conservadores hasta que los liberales hayan planteado y desarrollado todo su programa”. En Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 78 y 79.

⁷⁵⁵ Véase a este respecto lo recogido en el artículo titulado «La única solución», publicado en *La Regencia* en el mes de septiembre de aquel año. En el mismo se anotaba: “Mas el partido liberal tiene hoy una gran ventaja sobre el partido conservador [...] El partido liberal cuenta hoy en su seno con una gran tendencia, cada día más poderosa, por lo mismo que cada día se compenetra más con las necesidades de los pueblos, que aspiran a realizar el programa de la Liga Agraria”. *La Regencia*, 19 de septiembre de 1888.

⁷⁵⁶ Como cabría esperar, uno de los mayores reproches vertidos contra el propio Sagasta estuvo referido a la insuficiencia demostrada para evitar que las diferentes opiniones llevaran al partido a una crisis tan delicada. *La Regencia*, 1 de octubre de 1888. Además, en Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., pág. 105.

⁷⁵⁷ Respecto a este tema, fue muy difundido el banquete que en honor del propio Gamazo se llevó a cabo en Santander el 21 de octubre de 1888. El discurso pronunciado estuvo referido en gran parte a ensalzar la producción nacional, así como las libertades que brindaba el régimen político. Al banquete de Santander le siguió otro, ofrecido esta vez por la *Liga Agraria* de Palencia, cuyo hecho más destacable fue la presencia del presidente Adolfo Bayo. Hecho que dio un mayor relieve a lo tratado respecto a la protección y a los aranceles. *La Regencia*, 1 y 25 de octubre de 1888; *La Liga Agraria*, 28 de octubre de 1888, y *El Imparcial*, 22 de octubre de 1888.

[...] hasta prescindir del señor Sagasta si no se muestra propicio a sus proyectos”⁷⁵⁸.

Esta actitud molestó indefectiblemente al mismo Sagasta y a los que como él habían intentado mantener la unidad de los ministeriales, produciéndose a lo largo del mes de octubre algunas quejas motivadas por el hostigamiento iniciado contra la *Liga Agraria*. En efecto, en algunas provincias, los gobernadores habían remitido una comunicación a los presidentes de las sucursales de la *Liga*, ordenándoseles que en el término de quince días remitiesen al Gobierno cuantos documentos se exigían en la ley de Asociaciones de julio de 1887. Además, a dichos miembros se les apercibía que de no verificarse tal hecho, se aplicarían las correspondientes sanciones que en dicha ley estuvieran referidas en caso de negligencias e incumplimientos de las autoridades administrativas. La cuestión como se dijo, parecía orientada a molestar a una Asociación que, como en el caso de la sucursal de Cervera del Río en Palencia, había obtenido alguna representación en las pasadas elecciones. Lo cierto fue que la noticia recorrió las páginas de las redacciones con bastante rapidez, dando lugar a la suspensión de dicha actitud⁷⁵⁹.

Los últimos esfuerzos de Sagasta para atajar la crisis, precisamente cuando se esperaba una ofensiva entre las dos tendencias existentes en el partido liberal, dieron como resultado un ligero avance en de los sectores de la derecha, al reconocerse que en las futuras reformas se procedería a su realización, no por el sistema del *decreto*, sino previo sometimiento a una solución parlamentaria. La medida, percibida más como una expresión ambigua en los procedimientos, en absoluto supuso una solución definitiva a los problemas del partido. De hecho, y tras los nuevos nombramientos ministeriales, la disidencia de Gamazo se mantuvo imperante⁷⁶⁰.

Con la dimisión de todo el Gabinete y el posterior mandato de la Reina Regente para que se formara un nuevo Gobierno, el Presidente volvía a dejar desatendidas muchas de las demandas solicitadas en un año de constantes remodelaciones y acosos internos. Con el comienzo de la cuarta legislatura, abierta el 30 de noviembre, Sagasta mantenía un programa similar al de

⁷⁵⁸ *El Imparcial*, 21 de octubre de 1888. Asimismo, en *La Regencia*, 22 de octubre de 1888.

⁷⁵⁹ Véase, por ejemplo, *La Regencia*, 8 de octubre de 1888.

⁷⁶⁰ *El Imparcial*, 23 de octubre de 1888. También en *La Época*, 15 de diciembre de 1888.

períodos anteriores. La crisis dejaba así un balance en el que la única novedad había estribado, sencillamente, en el cambio de personas. Respecto a las cuestiones económicas, el Presidente dejaba claro el objetivo continuista de los proyectos emprendidos por ministros anteriores. Al mismo tiempo, la intención de nivelar las cargas públicas, además de proceder al mayor ahorro posible castigando el presupuesto de gastos, nada hacía prever que se tuvieran en cuenta las aspiraciones relacionadas con las modificaciones arancelarias⁷⁶¹.

Las explicaciones dadas en las Cámaras sobre la crisis de Gobierno produjeron, sin embargo, nuevos enfrentamientos entre Gamazo y Sagasta. En la sesión celebrada el 14 de diciembre, el reelegido Presidente del Consejo atacó duramente la actitud exhibida por Gamazo ante su partido, declarando, entre otras cosas y en este sentido: “Ya ve el señor cómo, á pesar suyo, ha creado una perturbación en la mayoría, porque los Ministros se han creído molestados, y han hecho una crisis, que, como todas, es dañosa para el partido, pues las crisis quitan siempre fuerza á los partidos, y eso es trabajar contra el Presidente del Consejo, y eso no lo deben hacer sus amigos”⁷⁶².

La actitud mostrada por Sagasta respecto a la crisis revelaba un problema que iba más allá del cambio de personas efectuado en la cúpula del Ejecutivo, evidenciando, una vez más, el resultado de una incesante resistencia surgida en las mismas entrañas del partido liberal. Convencido de la solución dada a la crisis militar, no sucedió igual con el gamacismo y sus maniobras políticas, produciéndose en poco tiempo un incremento de los problemas y reforzando las presiones internas. Llamado al orden y acusado de perturbador, Germán Gamazo, en su réplica a Sagasta, había dejado claro que dentro del partido liberal seguiría manteniendo la misma actitud respecto a las cuestiones económicas, evidenciando así el excelente margen de actuación que suponía el auxilio de la *Liga Agraria*.

⁷⁶¹ El nuevo Gabinete contemplaba la continuación de proyectos económicos, aunque, esta vez la cartera de Hacienda había recaído en Venancio González. Véase Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 105 a 107.

⁷⁶² Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., pág. 768.

- Ruptura y disidencia. La consumación de la legislatura del partido liberal

En enero de 1889, los comentarios e interpretaciones concernientes a la crisis en el partido del Gobierno continuaban sucediéndose, prácticamente sin solución de continuidad. Los «asuntos» relativos a Gamazo o Cassola proseguían, y las discusiones y escolios relativos a la *Liga Agraria* tampoco habían conseguido reducir su intensidad⁷⁶³. Por añadidura, la sensación de que esta última podía terminar siendo un obstáculo a las posiciones del gobierno liberal, se había convertido en una cuestión más que plausible para conservadores y republicanos. Por otra parte, las dudas que la Asociación despertaba acerca de su capacidad y efectividad comenzaban a estar motivadas, principalmente, por la falta de compromisos políticos concretos, llegándose a afirmar que cualquier divergencia de la *Liga* con los partidos políticos podía constituir una preocupación entre las clases productoras del país. En consecuencia, para muchos propietarios y labradores ligueros, la necesidad de supeditarse a cualquiera de las formaciones políticas que aceptaran y defendieran su programa económico se había convertido, a finales de los años ochenta, en un hecho sobradamente generalizado⁷⁶⁴.

Los argumentos económicos eran, junto al difícil panorama agrario, una de las mayores preocupaciones entre propietarios y terratenientes, al tiempo que el nuevo gobierno no satisfacía los programas proteccionistas de la *Liga* y del partido conservador. Por si fuera poco, los presupuestos correspondientes al período de 1887 y 1888 habían cerrado con enormes déficits. La vigente ley sobre alcoholes había ocasionando importantes conflictos en Valencia durante los meses enero y febrero, mientras los vinicultores castellanos y andaluces seguían instando al Ejecutivo en Madrid a que se adoptaran reformas urgentes en todo lo concerniente al vino. Durante las sesiones celebradas en el Senado en el mes de febrero, se propuso, una vez más, la subida de las tarifas arancelarias a la importación de trigos, aceites y ganados. La propuesta, presentada por los senadores Cuesta y Santiago, y rechazada finalmente por un escaso margen de 66 votos contra 53, daba una idea de la situación de incertidumbre que se respiraba en las Cámaras. A todo ello se sumaba la circular del ministro

⁷⁶³ *La Regencia*, 19 de enero de 1889.

⁷⁶⁴ Las actuaciones de la *Liga* en ningún caso eran observadas con indiferencia. De un modo significativo eran analizados sus movimientos en todos aquellos aspectos que estaban relacionados con el partido liberal. *El Correo*, 20 y 21 de enero de 1889.

Venancio González dirigida a sus compañeros de Gabinete en Hacienda, en la que se insistía en la necesidad de reducir los créditos de cada departamento a lo puramente necesario. Aún así, los últimos esfuerzos presupuestarios presentados al Congreso se referían a la autorización para reformar la contribución industrial y de comercio, no especificándose nada acerca de la tan esperada reforma arancelaria⁷⁶⁵.

Con las nuevas medidas, las dificultades políticas se mantenían en la misma tesitura que hacía solo unos meses. Nada más conocerse el proyecto del ministro González, Adolfo Bayo publicó un artículo en el que criticaba abiertamente las intenciones del Ejecutivo en materia económica. El artículo advertía:

No podemos menos de lamentar que en estos presupuestos no figure ningún proyecto para rebajar la contribución territorial y rectificar en sentido nacional las tarifas sobre cereales y carnes, reformas que asegurarían mayores ingresos al Tesoro. La síntesis del nuevo presupuesto es favorecer á los tenedores de papel, clase privilegiada, por continuar desde la conversión de la Deuda de 1882 sin contribuir á las cargas del Estado. Pero ¡ah! No confíen en el porvenir los rentistas, pues al arruinarse la propiedad rústica, la agricultura y la industria, el papel vivirá al día, amenazado de una muerte repentina e inesperada⁷⁶⁶.

Las palabras del presidente de la *Liga Agraria*, venían a poner sobre la mesa de nuevo la cuestión relativa a los posicionamientos políticos que él mismo pretendía reclamar frente al partido y a las Cámaras. Más aún, una parte de la prensa que había seguido su trayectoria liguera formulaba algunas dudas en relación al otro líder agrario en la Asociación. En concreto, y en este asunto, el artículo se manifestaba de la siguiente forma: “¿Está en esa misma actitud el señor Gamazo? ¿Sostendrá esto en el próximo debate económico, con el mismo calor y con el mismo entusiasmo que lo hace el señor Bayo, las conclusiones de la Liga Agraria? ¿Prescindirá de los intereses de partido para pensar únicamente en los intereses del país? Esta es la cuestión”⁷⁶⁷.

⁷⁶⁵ Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 131 y 132; Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., págs. 773 a 775, y Ortega Rubio, J., Tomo I, ob. cit., págs. 435 a 437.

⁷⁶⁶ *La Época*, 3 de mayo de 1889; *La Regencia*, 4 de mayo de 1889, y *El Liberal* 9 de mayo de 1889. También en Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., págs. 775 y 776.

⁷⁶⁷ Véase *La Regencia* de 3 de mayo de 1889. También y de manera particular, el artículo dedicado a la *Liga Agraria* en *La Regencia*, 4 de mayo de 1889.

Las dudas comenzaron a disiparse en la sesión del Congreso del 3 de julio. Gamazo, pronunció entonces un alegato combativo y crítico a la vez, contra algunas decisiones toleradas por Sagasta. En su opinión, la importancia de los problemas económicos eclipsaba a los políticos y advertía: “y el partido que no de satisfacción á estos problemas, ¿con qué derecho pretenderá continuar en el poder?”. En cualquier caso, la respuesta de Sagasta resultó ser igualmente contundente, llegando a sugerir que si algo deseaba era ver al diputado Gamazo castigado con el ostracismo⁷⁶⁸.

Desde las filas liberales todavía se confiaba en la capacidad para persuadir a Gamazo y provocar en éste un cambio de actitud. De hecho, antes de abrirse el período de sesiones, Sagasta había decidido conferenciar con todos los jefes de grupo para suavizar las tensiones en el partido. En junio, en efecto, pareció vislumbrarse alguna posibilidad en este sentido, siendo el general Cassola el primero en admitir su lealtad, atenuando de esta forma la situación que había originado su actitud ante la reforma militar. Convencido de que en pocos días podría orillar las dificultades de conciliación con los elementos gamacistas, Sagasta decretó el 2 de junio el término de la cuarta legislatura, convocando el inicio de la siguiente para el día 14 del mismo mes⁷⁶⁹.

A pesar de los mencionados intentos, Gamazo no alteró considerablemente su actitud frente a Sagasta. La *Liga Agraria*, como se recordará, había nombrado por aquellas mismas fechas una Comisión con el fin de que se entendiera con asociaciones análogas, reuniendo todos los esfuerzos posibles para lograr resultados más satisfactorios en beneficio de los productores nacionales. En dicha Comisión, figuraban el propio Gamazo, el conde de Esteban, Rato y Orellana. Éstos finalmente redactaron e hicieron publicar una circular en la que, entre otras cosas, se observaba lo siguiente: “de manera que los elegidos se consideran desligados de la disciplina de partido [...] pues no es posible que se obtenga el triunfo á que aspiramos sin que esa separación se realice, como lo demuestran con evidencia los

⁷⁶⁸ Ortega Rubio, Juan del, ob. cit., Tomo I, pág. 446.

⁷⁶⁹ Entre los principales líderes figuraban los nombres de Romero Robledo, el duque de Tetuán, Martos, Maura y Cassola, además del propio Gamazo. Véase respecto a la confianza de Sagasta *La Regencia*, 2 de junio de 1889. En relación a la actitud de Cassola, *El Imparcial*, 29 de junio de 1889. También en Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., págs. 775 a 781 y Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 134 a 147.

recientes sucesos que dieron lugar á la terminación de la cuarta legislatura de las actuales Cortes”⁷⁷⁰.

Que el nombre del propio Gamazo figurase entre los firmantes de la circular y en los términos ya subrayados, indicaba a todas luces su empeño en permanecer alejado de la disciplina del partido, en cuanto a las decisiones económicas se refería. Una reticencia que venía a coincidir con lo publicado en la prensa y que hacía mención a la fragmentación vivida por los diversos grupos en los bancos del Congreso (véase el cuadro 50). De la situación comentada, tal y como estaba establecido el sistema electoral, resultaba evidente que la victoria en cualquier votación favorecería a Sagasta, a pesar de los gamacistas y del «ala» de Cristino Martos. La distribución de grupos y coaliciones dejaba a las claras una más que persistente disputa del poder interno en cada uno de ellos, siendo el partido liberal el más perjudicado al tener que resolver su unidad con un mayor número de «familias» disidentes.

Una de las consecuencias más tangibles de tales divisiones fueron las disputas políticas entre Gamazo y Sagasta que se incrementaron a partir de septiembre de aquel año. Gamazo tuvo las mayores dudas entonces acerca de cuál era la opción más adecuada. La *Liga Agraria* le había sugerido la disyuntiva de estar con ésta o con su partido, hecho que le había obligado a renunciar al *meeting* de Barbastro⁷⁷¹.

Con la idea puesta en que jamás cedería en la cuestión económica, el presidente del Gobierno confiaba en que Gamazo cumpliera su promesa de no desintegrar el partido liberal por tales motivos⁷⁷². Por otra parte, este último no podía dejar a un lado la defensa de los intereses que de forma mayoritaria representaban sus «compañeros» en la *Liga Agraria*, de la misma manera que no podía escindir la mayoría liberal, símbolo, junto con el partido conservador, de la validez del sistema político en España. En tales circunstancias, tanto su compromiso con el banco liberal como la

⁷⁷⁰ La mencionada circular apareció en el artículo titulado «La actitud de Gamazo», en *La Regencia*, 9 de junio de 1889. Dicha circular también se encuentra en *La Liga Agraria*, 7 de junio de 1889. Asimismo, en relación al tema puede verse lo publicado en *La Liga Agraria*, 30 de junio y 7 de julio de 1889.

⁷⁷¹ Recuérdese lo dicho en este sentido en capítulos anteriores. De todos modos véase, por ejemplo, *El Correo*, 30 y 31 de agosto de 1889, así como *La Regencia*, 30 de agosto de 1889. Esta actitud de la *Liga* fue recogida en la práctica totalidad de la prensa escrita de Madrid y Valladolid.

⁷⁷² Llanos y Torriglia, Félix, *Germán Gamazo...*, ob. cit., pág. 136.

continuidad pacífica en la vida nacional, obligaban a Germán Gamazo a plantear una reorganización dentro del propio partido liberal⁷⁷³.

CUADRO 50

División de los grupos más influyentes en el Congreso de los Diputados

Ministeriales	[240
“ dudosos ...	[5
Gamacistas	[31
Leales a Martos	[9
“ a Cassola	[5
Romeristas	[12
(De) López Domínguez .	[4
Conservadores	[75
Posibilistas (Castelar) ..	[9
Autonomistas	[9
Republicanos	[10
Carlistas	[1
Total	[410

FUENTE: *La Regencia*, 13 de junio de 1889.

El propósito, por parte de algunos sectores políticos, así como de un segmento importante de la prensa nacional, de presentar al partido conservador como el mejor exponente del cambio y de la regeneración económica, produjo entre las filas liberales el cuestionamiento de Sagasta como único hombre «fuerte» en el partido y en el Gobierno. El grupo

⁷⁷³ Ibídem, págs. 138 y 139. También en *La Regencia*, 5 de julio de 1889.

disidente era consciente de la opción de no aceptar la jefatura del Presidente, lo que abría una nueva posibilidad a que se iniciara otra crisis⁷⁷⁴. La misma había sido planteada por el propio Gamazo como uno de los cauces más viables, situación que él mismo explicaría en una entrevista publicada en *El Imparcial* en los primeros días del mes de septiembre⁷⁷⁵. Esta solución entraba dentro lo posible, toda vez que el Presidente del Consejo de Ministros, dilatada la aprobación del proyecto de sufragio y con la reforma electoral no ultimada, parecía tener asegurada la vuelta al poder, lo que le permitía organizar el cuerpo de liberales y demócratas conforme a las directrices que él mismo deseaba⁷⁷⁶.

Respecto a la disidencia gamacista, Sagasta había dejado clara su intención de no inclinar la política económica del Gobierno a los argumentos esgrimidos por el grupo de ligueros inmersos en el partido. En su opinión, Gamazo había entrado en un callejón sin salida al prometer a la *Liga Agraria* propósitos que nunca podría cumplir. A este respecto, no faltaron los comentarios en el sentido de que la Asociación estaba vigilando expeditivamente la actitud de Gamazo, a pesar de su declarada disidencia, por temor a una posible reconciliación con la dirección del partido⁷⁷⁷. Con la nueva crisis dibujada en el horizonte político, el 21 de diciembre se suspendieron las sesiones en las Cámaras con la intención de que fueran reanudadas el 10 de enero de 1890. Con ello, la disolución iba a dar paso a los últimos cambios en el Ejecutivo, antes de entregar el poder a los conservadores de Cánovas⁷⁷⁸.

Los intentos de la Regente por suavizar la situación provocada en el partido liberal, volvieron a transformar el Ejecutivo y las Cortes, dando lugar, en este último caso, a la sustitución de Martos por Alonso Martínez en la presidencia del Congreso⁷⁷⁹. En un último esfuerzo por conciliar a Gamazo con el Gobierno, Sagasta estimó conveniente ofrecer la cartera de Hacienda

⁷⁷⁴ *La Regencia*, 5 de julio y 11 de octubre de 1889.

⁷⁷⁵ *El Imparcial*, 2 de septiembre de 1889. La entrevista también en *La Regencia* del día 3 de septiembre de 1889.

⁷⁷⁶ *El Imparcial*, 22 de octubre de 1889.

⁷⁷⁷ El diario *La Regencia* se hacía eco de una entrevista realizada a Sagasta y publicada en *El Imparcial*, en la que, además de declarar su poca confianza en los proyectos de Gamazo y de no dejarse llevar por las ideas políticas de éste, creía que finalmente Gamazo comprendería la importancia de la lealtad al partido liberal. *La Regencia*, 3 de septiembre de 1889.

⁷⁷⁸ Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., pág. 799.

⁷⁷⁹ Por ejemplo, en *El Liberal*, 19 de enero de 1890; *La Regencia*, 18 de enero de 1890, y *El Correo*, 20 de enero de 1890;. También en Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 191 a 202.

al diputado Alberto Bosch, al tiempo que pedía a éste que entrara en acuerdos con el líder castellano. Bosch, finalmente declinó tal actitud, al requerir que se le concedieran facultades absolutas para reformar los aranceles, así como para poner en marcha el impuesto de utilidades y suprimir el de consumos por otro diferente. En suma, unas demandas que suponían aplicar gran parte del programa de la *Liga Agraria*. Próximo a las posiciones de Cassola, el diputado en cuestión exigió finalmente la restitución de aquél a la cartera de Guerra. Sagasta, entendiendo la imposibilidad del «programa» y su entrega a tales pretensiones, nombró en última instancia a Manuel Eguilior como el hombre que habría de asumir las tareas de Hacienda⁷⁸⁰.

En los últimos meses de 1889 y los primeros de 1890, el movimiento agrario pareció arraigar definitivamente en las Cortes y en el Gobierno. Las relaciones entre Sagasta y Gamazo simulaban una relativa mejoría, sobre todo después de verificarse la asistencia del primero a un *meeting* del político vallisoletano. El proteccionismo parecía así querer abrirse paso entre las doctrinas librecambistas, sostenidas por la llamada facción «izquierda» del partido, muy en consonancia con lo postulado desde los bancos conservadores de Cánovas. La idea del Arancel, además del programa económico presentado por la *Liga Agraria* y Gamazo, elevaban las aspiraciones de este último, a corto y medio plazo, por hacerse con la jefatura del partido. En todo caso, las derivaciones al proteccionismo auspiciado por la *Liga*, tuvieron su punto más álgido al incluir la ley de presupuestos de 1890, unos artículos adicionales en los que se autorizaba al Gobierno la modificación de los aranceles, siempre que así lo aconsejaran los intereses nacionales⁷⁸¹.

En este mismo contexto, tampoco se echaron en falta los intentos precipitados, por parte de Germán Gamazo, para sortear la vertebración del partido, lo dio motivo a una repulsa inmediata de la *Liga Agraria* y de su Junta Directiva. En el transcurso de las negociaciones habidas entre el jefe de las filas liberales y el dirigente de la *Liga*, llegó a filtrarse la noticia de que este último meditaba desistir finalmente de todo aquello que estuviese relacionado con las cuestiones ligueras y la agricultura. Una realidad que

⁷⁸⁰ Véase *El Correo*, 6 de enero de 1890 y *El Liberal*, 20 de enero de 1890. También en Pirala, Antonio, ob. cit., pág. 200.

⁷⁸¹ Serrano Sanz, José María (1987), ob. cit., págs. 109 a 111.

podía significar, por parte del diputado castellano, la ruptura con la Asociación si finalmente aceptaba un destino en el Ejecutivo de Sagasta⁷⁸².

Por si fuera poco, las dificultades para formar un Gobierno estable eran máximas al existir todavía distintos grupos que conformaban el antiguo partido fusionista. Para ilustrar esta situación, baste recordar lo sucedido con Bosch, persona próxima a los círculos de Cassola, o con Antonio Maura, al que Sagasta llegaría a ofrecer una cartera, rechazada finalmente por las diferencias existentes con Puigcerver. Todo este estado de cosas acabó por imposibilitar la presencia de Gamazo en el Gobierno de la Nación, lo que no evitó que se siguiera trabajando por acercar a Gamazo, además de otros colaboradores como Maura, a la disciplina del partido⁷⁸³.

Con el inicio de los debates parlamentarios no tardaron en constatarse el cúmulo de incompatibilidades existentes entre las distintas facciones políticas, resultando todavía más significativa la oposición de Gamazo, aun mayor que en ocasiones anteriores. En su discurso del 3 de febrero había confirmado que negaría su voto “á todo el que no hiciese economías, extendiera el impuesto y elevase los Aranceles”. Para muchos, esta conducta no solo implicaba que los gamacistas eran un grupo disidente dentro del partido liberal, sino que la correlación de fuerzas entre unos y otros era irreconciliable. Gamazo, en franca oposición al Gobierno, evidenciaba el intento por someter a Sagasta a los planteamientos del primero, dando a entender, además, las posibilidades reales que existían de establecer un nuevo partido, incluso una huida a las bancas conservadores⁷⁸⁴.

Como cabía esperar, los ministeriales no tardaron en mostrar su irritación, al interpretar que el «gesto» gamacista no era la mejor forma de

⁷⁸² De los 80 millones que se habían solicitado en concepto de reducción de gastos, Gamazo había llegado a aceptar sólo 50. La transigencia, así como las facilidades ofrecidas por éste, llegaron a tener una cierta influencia en las previsiones que sobre los derechos arancelarios proyectaba el Gobierno. Esta actitud fue muy contestada por la *Liga Agraria*. En cualquier caso, la reconciliación no se produjo y las medidas finalmente no fueron aceptadas por Gamazo. Véase *El Liberal*, 27 de enero de 1890. Asimismo, en *La Regencia*, 16 de enero de 1890.

⁷⁸³ *La Regencia*, 21 de enero de 1890; *El Correo*, 6 de enero de 1890, y *La Regencia*, 2 de febrero de 1890.

⁷⁸⁴ En opinión de una parte destacada de la prensa madrileña, el nuevo partido estaría presidido por Martínez Campos. *El Correo*, 4 de febrero de 1890; *El Imparcial*, 4 de febrero de 1890; *La Regencia*, 4 de febrero de 1890; *El Liberal*, 4 de febrero de 1890; *El Globo*, 4 de febrero de 1890, y *La Época*, 4 de febrero de 1890. También en Nido y Segalerva, Juan del, ob. cit., pág. 802; Ortega Rubio, Juan, ob. cit., Tomo I, pág. 480, y Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 203 a 228.

plantear una reconciliación. Un «arreglo» que, en opinión de Gamazo, tampoco era deseado por Sagasta. En su descargo, el vicepresidente de la *Liga* no era contrario a la entrada en Hacienda de un ministro «neutral», siempre que fuera capaz de ajustar las tendencias proteccionistas y librecambistas, lo que implicaba la aceptación a la cabeza de las responsabilidades económicas, tanto de Bosch como de Montero Ríos. Precisamente, sobre este asunto se publicaron en aquellos días algunas reseñas referidas a la conversación entre Gamazo y Moret, de las que se deducían la aceptación en un primer momento, por parte de Puigcerver, de las fórmulas propuestas por la *Liga Agraria* sobre la cuestión arancelaria. Este hecho venía a sumarse a la advertencia realizada algún tiempo atrás a Sagasta, en el sentido de que fueran acometidas dichas reformas, antes de resolver los tratados de comercio que el Gobierno venía negociando⁷⁸⁵.

La trascendencia alcanzada por el discurso de Gamazo terminó confundiendo al Gobierno y a la mayoría liberal, forzando la configuración de un nuevo Ejecutivo y unas nuevas cámaras legislativas. Asimismo, con la aprobación de los presupuestos y del proyecto de sufragio se ponía punto y final, no sólo a una etapa llena de remodelaciones y disidencias, sino también a una crisis que había dividido al partido y desacreditado a su jefe de filas. En esas circunstancias, Sagasta, tal y como se llegó a escribir, quedaba “imposibilitado moralmente para continuar al frente del Gobierno”⁷⁸⁶.

En el transcurso del mes de junio de 1890, pocos días antes de abandonar las tareas de gobierno, el partido conservador presentaba un proyecto de artículo adicional al presupuesto de ingresos, encaminado a provocar la derogación de la Base Quinta y la revisión del Arancel con efectos proteccionistas. Por otra parte, los rumores de «arreglo» entre Gamazo y Sagasta comenzaban a percibirse como una realidad más aceptable⁷⁸⁷. Con todo ello, a pesar del evidente agotamiento dentro del

⁷⁸⁵ *El Imparcial*, 4 y 5 de febrero de 1890, y *La Regencia*, 4 de febrero de 1890. También en Ortega Rubio, Juan, ob. cit., Tomo I, págs. 481 y 482. Gamazo, en efecto, había propuesto al Gobierno la subida de los aranceles, incluso existiendo tratados y acuerdos comerciales con otras naciones. Además, debían fijarse nuevos proyectos y convenios con otros países, anulándose si así fuera preciso, la cláusula de nación más favorecida. Véase Calzada del Amo, Esther, ob. cit., pág. 222.

⁷⁸⁶ Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., pág. 240.

⁷⁸⁷ En efecto, parece que las negociaciones estuvieron lideradas por Montero Ríos y Alonso Martínez. Véase *El Imparcial*, 18 de junio de 1890.

partido liberal, los conservadores no encontraron los argumentos suficientes para absorber por completo las posiciones gamacistas⁷⁸⁸.

Con la unidad aparentemente renovada y fortalecida, los presupuestos aprobados y la puesta en marcha de la ley de sufragio universal, fueron muchos los que creyeron ver la continuidad de los liberales en el poder. Durante las consultas llevadas a cabo por la Reina, tampoco faltaron quienes apoyaban la continuidad del Gobierno del partido liberal. Precisamente, la nueva ley de sufragio invitaba a mantener al frente de las tareas gubernativas al propio partido promotor del precepto legislativo. No obstante, la fatiga política surgida como consecuencia de las sucesivas disidencias, así como la lógica del relevo en las urnas en favor del partido conservador, dieron lugar a la propuesta para transformar el poder ejecutivo. El proceso terminaba el 7 de julio con la presentación ante la Reina de un nuevo Ejecutivo presidido por Antonio Cánovas del Castillo⁷⁸⁹.

Solo unos días después de estrenado el Gobierno, Adolfo Bayo se separaba momentánea y circunstancialmente de la Presidencia de la *Liga Agraria*. Aun con la llegada al poder de un programa económico de porte proteccionista, la *Liga* había decidido «atar» su continuidad a las Cámaras Agrícolas, agotando su actividad justo en unos momentos en los que apenas podía servir ya como instrumento y baluarte político a las organizaciones que habían luchado contra el librecurso. Precisamente, la aparición de las Cámaras a finales de 1890, consolidado finalmente el Gobierno de Cánovas, se tradujo en muchos ámbitos del mundo rural y de la propiedad agrícola, como un intento más por acceder al control de las ligas y de las reivindicaciones trigueras contra el librecurso.

⁷⁸⁸ En la sesión del Congreso del 21 de junio se pasó a dar lectura a una comunicación en la que se autorizaba al Gobierno para que, en vista del resultado de la información que se estaba llevando a cabo, pudieran reformarse los aranceles, modificando, además, las disposiciones vigentes, siempre y cuando favorecieran a los intereses nacionales. Asimismo, todos los periódicos hablaban de que la conciliación de los elementos liberales sobre una base racional era un hecho cierto. *El Correo*, 22 de junio de 1890; *El Imparcial*, 22 de junio de 1890; *El Liberal*, 22 de junio de 1890; *El Globo*, 22 de junio de 1890, y *El Correo*, 22 de junio de 1890.

⁷⁸⁹ Entre hombres consultados por la Reina Regente se encontraban Alonso Martínez, López Domínguez, Sagasta o el propio Germán Gamazo. En un primer momento se trató de organizar un Ministerio «intermedio», compuesto por liberales y conservadores que pudieran llevar a cabo un primer desarrollo del sufragio. En Pirala, Antonio, Libro II, ob. cit., págs. 241 y 242.

Cabe pensar hoy que las tesis proteccionistas, en los últimos años del siglo XIX, hubieran resultado algo más impracticables de no ser por la aparición de la *Liga Agraria* y del grupo gamacista en el seno del partido liberal. Durante el corto período de existencia, la *Liga* sirvió como una prueba palpable de que el sistema político establecido y conexo a la figura de Cánovas del Castillo, precisaba, además del consabido turno político, una estructura democrática más desarrollada y profunda que minimizara los riesgos derivados de contar con dos únicas fuerzas mayoritarias como soportes de la política nacional. Una España finisecular en la que, por otra parte, se había comenzado ya a advertir un incuestionable auge en el desarrollo del asociacionismo en todas sus vertientes. En cierta forma, la historia de la *Liga Agraria* aquí expuesta, así como la del partido liberal, caminaron de la mano durante los años en los que aquélla se mantuvo vigente en los sectores económicos y agrarios del país. Comodín del partido conservador en ocasiones y blanco de las iras liberales en otras, lo cierto es que durante el tiempo que la Asociación mantuvo su actividad, ésta llegaría a significarse como uno de los elementos decisivos en la comprensión del compromiso adquirido por quienes habían sido llamados a mantener el turno y los dictámenes canovistas durante la primera etapa de la Restauración decimonónica en España.

CONCLUSIONES

En 1891 el tejido asociativo agrícola en España era, además de diverso, cuantioso en lo que al número total de organizaciones se refería. Esta situación de acompasamiento en la implantación y articulación de asociaciones de propietarios agricultores era ya un hecho incuestionable a comienzos de los años setenta del siglo XIX, alternándose proyectos tan heterogéneos como los casinos agrícolas y de labradores, los círculos y ligas, amén de otros patrones asociativos de propietarios vinculados con la agricultura. Esta circunstancia prueba, una vez más, la pluralidad tipológica y refuta cualquier intento por situar a nuestro país en el tópico inmovilista y de atraso comparativo respecto a terceros Estados y regiones próximas a nuestro entorno social, político y económico.

Entre 1820 y 1855, la defensa colectiva de los intereses agrícolas estuvo patrocinada por una importante actividad llevada a la práctica por los diferentes gobiernos liberales, al liquidar antiguas vinculaciones jurídicas que venían incapacitando un excesivo número de tierras de labor, aboliendo señoríos y desamortizando grandes extensiones de suelo, favoreciendo, de esta forma, la roturación de abundantes campos de cultivo. A ello se sumó el advenimiento de una nueva conciencia dentro de la clase productora y terrateniente, apoyada por unas políticas arancelarias promovidas por unas Cortes donde el número de propietarios con vinculaciones a la agricultura era ya considerable.

Desde que se aprobara el Arancel de 1820 y hasta el celebrado en 1891, el asociacionismo agrario voluntario se vio inmerso en un proceso gradual de aumento, casi siempre promovido conforme a las necesidades de la clase productora rural y del campo, desarrollándose estrategias de «reclutamiento» y de presión, frente a gobiernos que demostraron no estar siempre a la altura de una sociedad en desarrollo frente a los nuevos retos de la economía española decimonónica. En este mismo sentido, tampoco faltó el apremio, por parte de los grandes propietarios, para proceder a la adecuación de aquellas instituciones públicas que venían sirviendo de

estímulo a la agricultura, promoviéndose, además, una Administración específica manejada a través del Ministerio de Fomento, y con la implicación de instituciones como el Consejo, o las Juntas provinciales de Agricultura.

Por otra parte, y a través de entidades asociativas privadas como la *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*, el *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* en Barcelona, la *Asociación de Propietarios de España*, la *Sociedad Valenciana de Agricultura*, o el *Círculo de Labradores de Sevilla*, entre otras, pudieron impulsarse sistemas y técnicas de modernización en los cultivos a través de ensayos sobre el terreno, mediante abonados y maquinaria mejorada, generalizándose, asimismo, el uso de publicaciones específicas y escuelas de agricultura. A estas mismas asociaciones cabría incorporar la mitigación sucesiva de las insuficiencias surgidas desde la Administración hacia el sector agrícola, matizándose así la posible desconexión entre la propiedad rural y los diferentes gobiernos surgidos en España hasta comienzos de los años setenta del siglo XIX.

La singularidad mostrada por la clase propietaria agrícola durante toda la primera mitad de la mencionada centuria en nuestro país, evidencia a todas luces una más que notable capacidad de movilización y de creación de instituciones practicada para su defensa, siempre que ésta se hacía precisa. Una prueba de todo ello fue la disposición del «eje» asociativo establecido entre Barcelona, Sevilla y Valencia, al que terminaron adhiriéndose, solo unos años más tarde, numerosos hacendados castellanos, cuyo punto de referencia se encontraba en la provincia de Valladolid. Dicho foco participativo se estableció conforme a una línea de actuación decididamente contraria a la liberalización de los mercados agrarios, especialmente en lo que concernía a la introducción de cereales, vinos y aceites procedentes del extranjero. Una conducta que estuvo siempre dirigida a mantener las tesis que avalaban el repliegue asociativo ante cualquier atisbo de proximidad hacia el librecambio en España. Frente a organizaciones como la *Asociación para la Reforma de los Aranceles y Aduanas*, no tardaron en surgir otras desde los sectores más proteccionistas como la *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, el *Círculo Salmantino* o las *Ligas de Propietarios* y de *Contribuyentes*, demostrándose así el pulso constante y la actividad de las clases propietarias en contra de la importación de productos agrícolas. A éstas últimas no tardaron en unirse, ya en las postrimerías de los años setenta y primeros compases de los

ochenta, un nutrido grupo de asociaciones libres que, bajo distintas denominaciones y tipologías, siempre actuaron en defensa de la pequeña y mediana propiedad comprometida con el mundo rural.

Comenzados los años noventa del siglo XIX, la acción colectiva puesta en marcha desde los sectores propietarios agrícolas se había consolidado a través de diferentes formas de sociabilidad, acompañándose en ocasiones de congresos y asambleas que garantizaban las rentas de una clase productora, otrora dispersa y en pugna por el liderazgo agrario en España. Este discurso promovido esencialmente para sostener los intereses económicos terminó, además, coadyuvando al reforzamiento de la sociedad civil, transformándola y dotándola de nuevos instrumentos con capacidad para acentuar las reivindicaciones del colectivo de agricultores, y aumentando los efectos de las mismas en los momentos de mayor incertidumbre económica.

Con la dinámica conferida a la capacidad asociativa durante los primeros momentos de la Restauración canovista, y próximo a iniciarse el último cuarto de siglo, las movilizaciones agrarias a través de su asociacionismo lograron de manera puntual conferir un carácter político a su ideario, tesitura que no se interrumpiría hasta los primeros decenios del siglo XX. Esta interacción entre la política y los intereses de los colectivos de propietarios agrícolas, tuvo su punto más álgido después de la aparición de la *Asociación General de Agricultores*, constituida a continuación de la celebración de un Congreso de agricultores y ganaderos realizado en Madrid en 1880, pero especialmente con la aparición de la *Liga Agraria*, auspiciada por hombres como Bayo, Gamazo y Muro, significándose como el más claro ejemplo surgido hasta entonces en España de una organización de propietarios con notables señas de identidad y aspiraciones a «quebrar» el bipartidismo.

Otro de los aspectos más influyentes en la propiedad agrícola de finales del siglo XIX fue la llegada de cereales procedentes de mercados exteriores a los puertos nacionales, hecho que supuso la disminución moderada de los beneficios en la producción y comercialización de los productos españoles, a favor de los obtenidos principalmente en el Este europeo y en los Estados productores de granos del Norte de América.

En este orden de cosas, fueron precisamente las élites hacendadas castellanas las primeras en solicitar los apoyos precisos que posibilitaran el auxilio a sus productos, instando a la utilización exclusiva de los mercados nacionales para la comercialización de los trigos y cereales producidos en el interior peninsular. Conviene recordar, tal como se ha indicado en esta Tesis Doctoral, el elevado nivel de nuestros aranceles existente durante el período correspondiente a los años ochenta del siglo XIX, lo que motivó una cierta flexibilización y atonía en materia de tributación arancelaria por parte de los distintos gobiernos «turnistas».

En cierta medida fue el Estado, a través de sus representantes con vinculaciones a la agricultura, quien terminó desempeñando un papel decisivo en la articulación de leyes y decretos, permitiendo la creación de plataformas participativas, logrando de esta forma una mayor dimensión y captación de las fuerzas sociales y económicas presentes en todo el país. Desde la propia Administración y desde los poderes políticos, se alimentó la conciencia de que la toma de decisiones públicas, más tarde o más temprano, habría de hacerse incorporando la opinión de los interlocutores sociales, lo que venía a suponer una mayor legitimidad a las mismas. En este sentido, desde que comenzara la crisis relativa a la merma de intereses económicos en una gran parte de la propiedad agraria de nuestro país, las organizaciones afectadas demandaron una participación más efectiva y más directa en el poder y en la toma de decisiones públicas.

Desde esa misma perspectiva, las élites productoras buscaron, tanto desde la *Liga Agraria* como desde las asociaciones ya consolidadas a finales de siglo, una defensa a ultranza de las tesis económicas, basadas en un proteccionismo férreo que permitiera el uso exclusivo de los mercados nacionales para la admisión de un mayor volumen de la producción cerealícola interior. Sin embargo, una de las mayores reivindicaciones que terminaría asumiendo en 1891 el partido conservador, fue la subida arancelaria mediante formas selectivas de ataques al gobierno liberal, presidido entonces por Práxedes Mateo Sagasta. Precisamente, la supuesta ineficacia del gobierno «sagastino» terminaría siendo la pieza esencial en la vertebración del discurso de la *Liga* en aquellos años.

La consecuencia de todo aquel sistema bien trazado de propaganda y de actuaciones en derredor de personas vinculadas a la producción agraria y

asociadas, dio como resultado la formación de un «bloque» rural en el que finalmente quedaron integrados los grandes tenedores de tierras junto a los pequeños productores del campo, estos últimos perfectamente distanciados y sin la necesaria capacidad de actuación. No obstante, el intento por situarse al mismo nivel que los grupos de presión catalanes o vascos habían recabado en otros sectores ajenos a la agricultura, fracasaron pronto, en tanto algunas asociaciones de propietarios como la propia *Liga Agraria* o la *Asociación General de Agricultores*, no lograron consolidarse entre los grupos más preponderantes dentro de los ámbitos económicos y políticos a nivel nacional. Pese a ello, los éxitos alcanzados en la política arancelaria, así como la capacidad para mejorar la representatividad y la implantación de asociaciones más solícitas entre productores y propietarios agrícolas, deben interpretarse como un balance suficientemente valioso para la historia del asociacionismo patronal y agrario hasta 1891.

En alusión a la *Liga Agraria*, luego de las reiteradas acometidas contra la ineficacia en las políticas económicas de Sagasta, se produjo en el seno de la misma una indefectible «frustración» al no encontrar los patrones adecuados de representación, tanto dentro del Gobierno como en los grupos de políticos más competentes que pretendían llevar adelante las reivindicaciones ligueras. Este hecho determinó la politización ineludible de la *Liga*, como única solución de presión ante la firmeza esgrimida desde las instancias administrativas del Estado. En consecuencia, la *Liga* apenas pudo trabajar, desde un punto meramente político, como si de un bloque indiviso se tratara. El pluralismo ideológico, antes aludido, así como la falta de compromisos exhibida frente a los partidos que conformaban el espectro político y representativo de la sociedad durante la Restauración, fueron el germen del alejamiento, ruptura y posterior desaparición del primer intento por constituir un verdadero *lobby* agrario en España. Esa actitud, perfilada por la falta de un compromiso directo con la realidad política del «turnismo», resultó esencial en la privación de cohesión interna y, en definitiva, en una notable carencia para establecerse como organización política de ámbito agrario y nacional.

Junto al ya comentado crecimiento y evolución notables del asociacionismo agrario a lo largo de todo el siglo XIX en España, la movilización de las fuerzas económicas encuadradas en las asociaciones de propietarios del último cuarto de dicha centuria en España, constituyó un

factor de primera magnitud en lo que más tarde se significaría como un serio episodio de inestabilidad política y estructural en los primeros años de Restauración borbónica. Precisamente, para comprobar el verdadero alcance del protagonismo patronal en el mencionado debilitamiento estructural del régimen canovista, son precisas todavía una serie de investigaciones globales que abarquen un mayor y más amplio período, además de una mayor y más compleja visión de las diferentes formas organizativas que se desarrollaron en el ámbito político y social en la España de los siglos XIX y XX.

Aprobada la Ley de Asociaciones de 1887, uno de los factores que más terminaría influyendo en la reactivación del asociacionismo agrario fue la posibilidad de actuar dentro del marco político, motivado por la desconfianza, cada vez mayor, dirigida hacia las fuerzas políticas que venían interviniendo a lo largo de toda la Restauración. En tal caso, la utilización de asociaciones como *Liga Agraria* como plataforma de presión dirigida hacia el partido liberal, condujeron, no solo al propio partido en sí, sino al sistema político avivado por Cánovas y Sagasta, a hendir una importante brecha en el sistema bipartidista, proclive a eliminar cualquier oposición que presentara serios riesgos de sesgar su propia continuidad.

Conviene no olvidar que durante una gran parte del siglo XIX, la determinación de la propiedad y el peso de la clase agraria más privilegiada llegaron a estar identificadas, especialmente en los ámbitos rurales, con los sectores dirigentes de los llamados partidos dinásticos. Incluso en un sistema tan garante como era el de la Restauración canovista, y en gran medida gracias al sufragio universal, resultaba complejo que una parte significativa de los representantes de los partidos dinásticos, con participación en los ámbitos agrarios, no alcanzaran el poder. Con todo ello, amén de la aparición generalizada de asociaciones de propietarios agrícolas en España, quedaba reforzado el régimen liberal iniciado en el Trienio, dando lugar en los últimos años del siglo XIX a la gestación de lo podría denominarse una «protodemocracia». Circunstancia que sería sostenida, merced a la participación de numerosos ciudadanos que, desde las distintas tipologías asociativas permitidas, denotaron el carácter reivindicativo y asociacionista de las clases agrícolas y ganaderas, ya estuvieran éstas referidas al ámbito puramente rural o al de las zonas productoras próximas a los núcleos urbanos.

En definitiva, y antes de que pudiera concluir el siglo XIX, las asociaciones de propietarios referidas únicamente al ámbito agrícola en España habían demostrado una trayectoria lo suficientemente reflexiva y ponderada sobre el valor de la representatividad, alcanzando un alto grado de responsabilidad a la hora de manifestar sus intereses de forma colectiva. En la misma medida que mucha de la maquinaria agrícola llegada desde países extranjeros había necesitado una adecuada adaptación a las tierras de labor en las provincias españolas, los proyectos asociativos en nuestro país se mostraron prudentes en su concepción y desarrollo, en consonancia con los cambios sociales, económicos y políticos que habrían de conformar el país a lo largo de casi siete décadas.

Precisamente las actitudes debidas a esa moderación y adecuación, fueron en buena medida las responsables del señalado dinamismo social alcanzado en España en los últimos compases del siglo XIX, así como de la confección de modelos más solventes de representación de una clase agrícola que, aunque dueña de un cierto poder e influencias adquiridas en 1820, quiso a finales de la centuria acceder a niveles de gestión y de gobierno que se le había negado hasta esos momentos. Las asociaciones agrícolas, nacidas al ritmo que determinaban los propietarios en función de sus necesidades, nutrieron adecuadamente la evolución en el campo español, ya se tratara de cuestiones vinculadas a la modernización en los cultivos, la enseñanza agronómica o las reivindicaciones de carácter económico que afectaban a dicho sector de la producción. Todo ello debe hacernos comprender, una vez más, el rechazo al retraso, en relación a países próximos y con procesos de crecimientos sociales y económicos análogos, debiendo ser sustituida definitivamente por la idea de una lógica adaptación en relación a las particulares características que mantuvo nuestro país durante todo el siglo XIX.

En último término, esta Tesis Doctoral proporciona una perspectiva consecuente del tejido asociativo agrícola, de sus inicios, así como de la actividad emprendida por una gran parte de los propietarios rurales en España, que desde mediados del siglo XVIII había girado alrededor de las Sociedades Económicas de Amigos del País y de las hermandades de agricultores, principalmente. Corroborar, asimismo, las hipótesis de partida, tanto en aquellos procesos relacionados con los colectivos que promovieron el desarrollo y la transformación en la mecanización y los avances

biotecnológicos como en las iniciativas privadas surgidas para conformar asociaciones de propietarios. Una circunstancia, esta última, que se mantendría prácticamente a lo largo de toda la segunda mitad el siglo XIX. Con su contribución a la consolidación del Estado liberal, el apoyo a los postulados en favor del asociacionismo y a su consolidación a nivel legislativo, los distintos colectivos de propietarios de tierras agrícolas terminaron contribuyendo a la formación de grupos de presión que tendrían su culminación en el transcurso de los primeros años de la siguiente centuria en nuestro país.

ABSTRACT

• Introduction

Since relatively a few years ago research work regarding the genesis and evolution of agrarian organizations in our country has been carried out. Studies with a marked regional emphasis that, rarely were able to reference the true state of the associational framework during the nineteenth century, exception made of the *Sociedades Económicas* and of very concrete monographic studies. It is necessary to go back to the first years of the past century to find the first descriptions and working papers alluding the agrarian associational framework in Spain. On this respect, José Elías de Molins already did a study entitled *La Asociación y Cooperación Agrícolas*, published in the year of 1912, in which a recount of confraternities and brotherhoods verified by the *Consejo de Castilla* in 1770 was done.

The first of modern references related to the agrarian organizations, properly speaking, corresponds to Juan Pan-Montojo in his well known work “La naissance des associations agraires en Espagne 1833-1898”, in which the consequences and changes effected in economic power structures were reflected, once the suppression of privileges linked to the land had started, as a consequence of the strengthening of liberalism in a large portion of the state’s farms. After him, came he important works of, among others, Jordi Planas and Germán Rueda.

On a comparative level, the formation of agrarian societies with mobilization capacity in other European states certainly took the same amount of time to happen. Thus, the *Société des Agriculteurs de France* or the *Société Nationale et Centrale d’Agriculture*, in 1867 and 1871, respectively, came to remind the *Sociedades Económicas de Amigos del País* in Spain. Others like the *Associação Central da Agricultura Portuguesa*, in 1860 or the *Lega di difesa agraria* in Italy, back in 1885, reflected the existing interest during the second half of the nineteenth century, of pooling

in independent associations a large portion of landlords and agricultural owners in Europe.

In Spain, the *Sociedad de Agricultura del Ampurdán*, the *Instituto Agrícola Catalán de San Isidro* in Barcelona, or the *Sociedad Valenciana de Agricultura*, all of them created before 1855, were the first ones to demonstrate the viability of agricultural associationism, far from what up until then had been the farmer confraternities and guilds, as well as the previously mentioned *Sociedades Económicas*. The arrival of liberalising economic policies to our country in 1868, led to the creation of associations of a more protectionist nature, especially with the emergence in Valladolid, in the year of 1869, of the *Asociación Agrícola por la Iniciativa Privada*, a large owners association that was able to gather more than 500 followers around the defense of cereal and flour production in Castilla and León provinces.

Upon the arrival of the seventies during the nineteenth century, the *Ligas de Propietarios* and the *Ligas de Contribuyentes* were created almost simultaneously in the cities of Valencia and Cádiz, respectively, provoking important repercussions among the producers and agricultural landlord's classes against free-exchange-rate initiatives. Other entities quickly added themselves to the former so that, by following the associative model above, they soon established an important associative framework in different cities and locations such as the *Unión Agrícola Orcehitana* in Orihuela, the *Sociedad Agrícola de Málaga*, or *Fomento Agrícola de Jerez de la Frontera*, within a wide repertoire of types and entities of very diverse nature, always related to the rural and agricultural world.

As a result of the so called «crisis agrícola y ganadera», during the eighties and first instants of the nineties of the nineteenth century, the consolidation of farming associations in Spain became more evident, first thanks to the *Asociación de Agricultores de España*, in 1881, and later with the *Liga Agraria*, established in 1887. Some signs of corporate identity that, eventually, would be the result of conflicts with different governments and their economic policies. An associative framework whose foremost aspiration was the implementation of a clear promotion policy towards productive sectors within agriculture, demands which also included a protectionist

model based on restrictive tariffs, specially applied to the national cereal, flour, wines and oils markets.

The end result was a substantial increase in pressure groups linked to agriculture and rural life, and its legitimization in liberal Spain of the end of the nineteenth century. This made evident a remarkable change in the correlation of emerged economic and political forces, first with the arrival of liberal governments during the first half of the century and, later, with the Restauración canovista and the «turnos» system established in our country.

- Objectives

In the same line as set forth above, this work explains the establishment of associations of agricultural nature in Spain, playing attention to its development during the period within 1820 and 1891, considering the formation process of an organized elite of landlords, emerged as a result of the liberal process and seated, along that period, in the different power levels adapted by the State. The identification and subsequent analysis of the associative framework related to the agricultural property, in a moment of absence of a legislative body that could regulate mentioned activities, requires the observation of relations that could have existed among the different collectives of landlords and their evolution towards a true framework of pressure groups, aimed mainly to mediate in economic decisions, with special emphasis in tariff processes and protectionist attempts promoted by them.

On the other hand, among purposes covered is that of interpretation and analysis of those determinants that, supposedly, led to a relative delay in the emergence of farmers and landlord associations in our country. Associations that, on the other hand, started a process of advances in the field of agronomy and in farm mechanisation through publications, schools and on-the-field experimentation that would lead inevitably to a more substantial and ostensible development by the end of the nineteenth century.

Lastly, attention has been given to the evolution of agricultural landlord associations, with the objective of explaining its access to social, political and economic influence forums, considering the delicate mechanisms that allowed reaching the cusp of institutions, through the course of different phases of liberalism in Spain. Within this context, it was necessary to determine the evolution of associative legislation emerged since the Trienio Liberal until the later approval of the Ley de Asociaciones of 1887, equally valuing the participation in economic and political processes of the different collectives of owners emerged during all the studied period.

- Results and conclusions

The articulating process of free associations in the agrarian property sector during the nineteenth century in Spain, generated a sufficiently solid movement that refutes the idea of immobility and backwardness in rural societies and field producers in our country. The constitution of associations with this objective came to be, additionally, as a function of the ever larger capacity of mobilization of the large agrarian property beginning with the acceptance of the Arancel in 1820 and with the liberal postulates of the Trienio. Thus, the «call» campaigns until mid nineteenth century were to be developed according to needs related to economic interests manifested by medium and large landlords of the country.

This position of force even permitted adapting the agrarian Administration, through the Ministerio de Fomento and of institutions such as the Consejo de Agricultura and the Juntas Provinciales de Agricultura, allowing during a long time for maintaining rent guarantee mechanisms, through markedly protectionist policies being requested by landlord associations mainly established in Castilla, Cataluña and Andalucía.

The activity of mentioned associated groups allowed for modernization and application of new cultivation techniques, be it through publications, in field experiments, or through the so called school-farms, generally supported by a farming bourgeoisie ever more established in those municipalities that were not province capitals.

Also, it is worthwhile noting the importance the advocacy of economic interests attained against successive governments until 1891, reinforcing and modifying behaviours in civil society, making this society the owner of new rights and of a recognition attained through the participation of farmers, landlords and traders in free and solidary societies. All of these are even better understood when noting the interaction taking place during the last quarter century, between the economic interests emerged from the most prominent agrarian sectors such as cereals, vines and olive, and the political ones mobilized by the different governments emerging from the Restauración starting in 1875. In this way through more than seven decades, a transition took place from an associational framework practically unneeded for the interests of landlords and large farmers, due to the weight of the agricultural sector, to a clear politisation of property in the field, as a direct consequence of liberal policies risen in 1868 and out of fears of permanently losing the Spanish agrarian protectionism bonanza.

Along with all of the above, the associational capacity of rural property in our country was at all times dedicated to the modernization of the agrarian sector through congresses, publications, educational institutions, etc., always having in sight the protection of interests, most of the time immersed in an economy full of structural misalignments and, in governments little perceptive to the true rural «señores» of nineteenth century Spain.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

1.- ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS

* *Archivo Central del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.*

- Sección Fondos del siglo XIX

* *Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.*

Secciones:

- Agricultura
- Comercio
- Correspondencia de Sociedades
- Industria y Artes
- Socios: nombramientos y correspondencia
- Varios

* *Archivo del Antiguo Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas.*

* *Archivo Histórico Nacional.*

- Sección Consejos, Expedientes Generales
- Sección Diversos
- Sección Gobernación

* *Archivo Municipal de Alcázar de San Juan.*

- Libros de Actas (1844, 1872 y 1876)

* *Archivo Municipal de Córdoba.*

- Sección 17

* *Archivo Municipal de Orihuela.*

- Libro de Actas del Pleno del Ayuntamiento de Orihuela

* *Biblioteca de la Diputación de Palencia.*

* *Biblioteca del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Barcelona).*

* *Biblioteca del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid.*

* *Biblioteca del Real Círculo de Labradores (Sevilla).*

* *Biblioteca Nacional de España, Madrid.*

* *Biblioteca y Hemeroteca de Castilla y León, (Valladolid).*

* *Biblioteca y Hemeroteca de la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes (Valencia).*

* *Biblioteca y Hemeroteca de la Universidad de Castilla-La Mancha. Biblioteca General (Toledo).*

* *Biblioteca y Hemeroteca del Congreso de los Diputados (Madrid).*

* *Hemeroteca de El Norte de Castilla (Valladolid).*

* *Hemeroteca Municipal de Madrid.*

2.- PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Adelante, periódico científico y literario, Salamanca, 1860-1861, 1879-1880.

Anales de Agricultura, Madrid, 1877-1878, 1880.

Boletín de la Asociación General de Agricultores de España, Madrid, 1882-1883, 1885, 1887-1888, 1923.

Boletín de la Asociación de Propietarios de Madrid, Madrid, 1899 y 1900.

Boletín de la Real Sociedad Económica del País de Valencia. Tomo I, años 1839-1841.

Boletín de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia; periódico oficial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Año Sesto, Tomo X. Primer semestre de 1859, Imprenta de la Revista de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, 1859.

Boletín de la Sociedad Económica de Amigos del País de Córdoba. Tomo 2º, Imprenta, librería y litografía del Diario de Córdoba, año 1878.

Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, Madrid, junio de 1883.

Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Tomo XII, Imprenta de Ignacio Cumplido, México, 1866.

Boletín Oficial de la Provincia de León, León, 1857.

Boletín Oficial de la Provincia de Soria, Soria, 1871.

Boletín Oficial del Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas, Madrid, 1848, 1849, 1851.

Boletín Oficial del Ministerio de Fomento, Madrid, 1862.

Boletín Oficial del Ministerio de Hacienda. Segundo Semestre de 1852, Tomo VI, Imprenta Nacional, Madrid, 1852.

Boletín Oficial de la provincia de Cáceres, Cáceres, julio de 1843.

Boletín Oficial de la Provincia de Gerona, abril de 1850.

Boletín Oficial de la provincia de Orense, Orense, 1842-1843, 1846, 1848.

Boletín Oficial de la provincia de Valladolid, Valladolid, enero de 1844.

Boletín Oficial de Valladolid, Valladolid, 1844 y 1846.

Boletín-Revista de la Universidad de Madrid. Tomo Primero, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1869.

Crónica de Badajoz, Badajoz, mayo de 1865.

Diario de Avisos de Madrid, Madrid, abril de 1834.

Diario de Barcelona, Barcelona, julio-agosto 1820.

Diario de Córdoba, Córdoba, 1859, 1862-1865, 1867, 1871-1874, 1876-1879, 1881-1884.

Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1820-1823, 1838, 1844-1845, 1849-1851, 1855, 1858-1865, 1876-1877, 1884.

Diario de las Familias de Avisos y Noticias de Madrid, número 6.668, miércoles 8 de marzo de 1876.

Diario Mercantil de Cádiz, Cádiz, marzo de 1825.

Eco de Alicante, Alicante, agosto de 1871.

Eco de Salamanca, Salamanca, junio de 1858.

El Album. Revista Semanal de Literatura, Artes, Teatros, Salones y Modas, Córdoba, marzo de 1873.

El Amigo, Madrid, 1881.

El Amigo del País. Periódico de la Sociedad Económica Matritense, Madrid, 1844.

El Áncora, Palma de Mallorca, 1880 y 1886.

El Arte, órgano especial de la Escuela de Nobles y Bellas Artes de San Eloy, junio de 1873.

El Ateneo. Órgano del Ateneo de Lima. Revista mensual de Ciencias y Bellas Artes, Lima, 1800.

El Avisador Numantino. Revista semanal de intereses morales y materiales de la provincia de Soria, Soria, abril de 1860.

El Balear, Palma de Mallorca, 1885.

El Bien del País, periódico de las Sociedades Académica y Recreativa de Figueras, y de Agricultura del Ampurdán, Figueras, 1845-1846, 1848-1849.

El Bien Público, Mahón, 1875-1876, 1878-1879, 1883, 1885.

El Buen Deseo. Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, Guadalajara, septiembre de 1846.

El Campo, Madrid, noviembre de 1877-1878.

El Clamor, Madrid, septiembre de 1890.

El Clamor Público, Madrid, 1858.

El Comercio, Cádiz, 1875-1877, 1881.

El Constitucional. Diario Liberal de Alicante, (variante del título *El Constitucional Dinástico*), Alicante, 1873, 1875-1879, 1881, 1885.

El Constitucional. Órgano del partido de la Izquierda liberal dinástica de la Provincia de Gerona, Gerona, mayo de 1885.

El Constitucional. Periódico liberal de Gerona, Gerona, julio de 1882.

El Correo, Madrid, 1887-1891.

El Defensor de los Secretarios de Ayuntamiento y demás funcionarios de la Administracion Local, Salamanca, julio de 1884.

El Demócrata, Gerona, mayo de 1885.

El Día, Madrid, 1882.

El Diario Mercantil de Zaragoza, Zaragoza, septiembre de 1889.

El Eco de la Provincia, Alicante, 1882.

El Eco de la Provincia de Gerona, Gerona, 1882-1883.

El Escolar. Revista de Intereses Materiales de Salamanca, Salamanca, septiembre de 1874.

El Esla, León, marzo de 1860.

El Español, Madrid, 1846.

El Estudiante. Periódico de Madrid satírico y festivo, político y literario, Madrid, julio de 1839.

El Fomento. Revista de Intereses Sociales, Salamanca, 1883, 1886-1887.

El Globo, Cádiz, julio de 1841.

El Globo, Madrid, 1876, 1878-1879, 1882, 1889, 1881, 1890.

El Graduador, Alicante, 1878, 1881-1882.

El Guadalete, Jerez de la Frontera, 1862-1866, 1883, 1885, 1887.

El Liberal, Madrid, 1880-1882, 1885-1891.

El Liberal. Diario Democrático de Menorca, Menorca, 1882, 188, 1886.

El Imparcial, Madrid, 1872, 1874-1875, 1877-1878, 1885, 1887-1891, 1894.

El Mercantil Valenciano, Valencia, febrero de 1879.

El Municipio. Órgano del Partido Republicano Federal de la Provincia de Alicante, enero de 1873.

El Museo Universal, Madrid, 1857 y 1868.

El Norte de Castilla, Valladolid, 1860-1861, 1865, 1869, 1885, 1887-1889.

El País, Madrid, 1890-1891.

El Patriota, Madrid, julio de 1842.

El Porvenir, Sevilla, 1858-1859, 1874.

El Progreso, Salamanca, 1884.

El Progreso Agrícola y Pecuario, Madrid, junio de 1902.

El Propagador del Libre Comercio. Periódico de la Asociación Mercantil Española, Cádiz, 1847.

El Pueblo Español, Madrid, 1877-1878.

El Serpis, Alcoy, 1878-1879, 1881-1882, 1885-1886.

El Tajo. Crónica decimal de la Provincia de Toledo, Toledo, 1866.

El Turolense, Teruel, 1877, 1879.

Elementos de Agricultura, Madrid, 1817.

Gaceta Agrícola del Ministerio de Fomento, Madrid, 1876-1883, 1885-1887, 1891.

Gaceta de Madrid, Madrid, 1817, 1832, 1836, 1839, 1847-1848, 1851-1853, 1855, 1859, 1862-1863, 1865, 1867-1869, 1871, 1873, 1875, 1887, 1890.

Gaceta Economista. Periódico de Comercio, de Navegación mercantil y de Seguros. Guía de los Caminos de Hierro, Madrid, noviembre de 1860.

La Agricultura Española, periódico andaluz de intereses materiales, Sevilla, 1858-1861, 1863.

La Agricultura Valenciana, Valencia, 1864-1867, 1873.

La Alborada. Diario de ciencias, literatura, artes, noticias, comercio y anuncios, Córdoba, febrero de 1861.

La Asociacion Agrícola por la Iniciativa Privada. Revista de Agricultura, Valladolid, 1869-1872.

La Correspondencia de España, Madrid, 1860-1865, 1868, 1871-1879, 1881-1889.

La Correspondencia de la Mañana, Madrid, 1875.

La Crónica, (anteriormente *La Crónica de Badajoz*), Badajoz, 1865, 1871, 1875, 1877.

La Crónica, Huesca, febrero de 1886.

La Crónica, Orihuela, enero de 1887.

La Crónica de Leon, León, 1875 y 1881.

La Crónica Mercantil, Valladolid, 1879.

La Crónica Meridional, Almería, 1874-1877, 1882-1883, 1885, 1887.

La Discusion, Madrid, 1858 y 1882.

La Época, Madrid, 1858, 1874, 1876-1879, 1882, 1888-1891.

La España, Madrid, agosto de 1858.

La España Agrícola, Madrid, 1843.

La España Agrícola, periódico oficial de la Asociación general de Labradores, y del Depósito de máquinas para la agricultura y la industria rural, Madrid, 1863-1866.

La España Regional, Barcelona, 1891.

La Estafeta del Noroeste, León, enero de 1886.

La Granja. Revista de Agricultura y biblioteca rural, periódico de la Sociedad de Agricultura del Ampurdán y Órgano Oficial de las Juntas provinciales de Agricultura de Barcelona y Gerona, Figueras, 1850, 1853.

La Iberia, Madrid, 1858, 1875, 1878-1879, 1881-1882.

La Ilustración Española y Americana, Madrid, 1871, 1877, 1878.

La Izquierda Dinástica, Madrid, septiembre de 1888.

La Liga Agraria, Madrid, 1888-1891.

La Liga de Contribuyentes de Salamanca, Salamanca, 1883-1886.

La Lucha. Órgano de Partido Liberal de la provincia de Gerona, Gerona, 1872-1873, 1877-1879, 1886.

La Mañana, Madrid, 1877-1881.

La Nueva Lucha, Gerona, abril de 1887.

La Opinion, Palma de Mallorca, 1882.

La Opinion, Valencia, 1865.

La Palma de Cádiz, Cádiz, junio de 1886.

La Propaganda, Burgo de Osma, 1884-1885.

La Regencia, Madrid, 1887-1890.

La Union, Béjar, julio de 1879.

La Union Católica, Valencia, septiembre de 1888.

La Union Democrática, Alicante, abril de 1883.

La Vanguardia, Barcelona, mayo de 1885.

Las Provincias. Diario de Valencia, Valencia, 1866, 1878-1879.

Lau-Buru, Pamplona, 1885.

Lecciones de Agricultura, Madrid, 1815.

Revista Contemporánea, Madrid, 1882, 1886-1888.

Revista de Agricultura Práctica, Economía Rural, Horticultura y Jardinería.
Publicada por el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Barcelona,
1853, 1855-1864, 1867, 1921.

Revista de Montes, Madrid, enero de 1925.

Revista del Círculo Agrícola Salmantino, Salamanca, 1878-1881.

Revista del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Barcelona, 1855-1856,
1888-1891.

Revista Hidalguía. La Revista de genealogía, nobleza y armas, Madrid, 2001.

Revista minera metalúrgica y de ingeniería, Madrid, 1905

Semanario de Agricultura y Artes, Londres, 1829.

Semanario de Agricultura y Artes dirigido á los párrocos, Madrid, diciembre de 1797.

Semanario Industrial, destinado especialmente a ilustrar a los labradores, á los artesanos, y á todas las clases industriosas de la sociedad por medio de conocimientos útiles, económicos y de fácil aplicación en las necesidades de la vida, en adelante *Semanario Industrial*, Madrid, 1840.

3.- MEMORIAS, ESTATUTOS, REGLAMENTOS, CENSOS, ANUARIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES DE ÉPOCA

ABAD DE APARICIO, Hilario, y CORONEL Y ORTIZ, Rafael, *Constituciones vigentes de los principales Estados de Europa y América, precedidas de una reseña histórica de los mismos. Tomo II. Europa*, Imprenta de J. Antonio García, Madrid, 1863.

ALBA, Santiago, «La Liga Agraria», *Nuestro Tiempo*, Madrid, 1902.

- *Durante la Regencia. Movimientos organizados de opinión*, Madrid, 1902.

- *Problemas de España*, Editorial Hesperia, 4ª edición, Madrid, 1916.

Almanaque Político y Literario de La Iberia para el 1861, Imprenta y redacción de La Iberia, Madrid, 1861.

ANTON RAMIREZ, Bráulio, *Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la agricultura; seguido de un índice de autores y traductores con algunos apuntes biográficos*, Imprenta y estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1865.

Anuario-almanaque del Comercio, de la Industria, de la Magistratura y de la Administración o Directorio de las 400.000 señas de España, estados hispano-americanos y Portugal, Carlos Bailly-Baillièrre, Madrid, 1879.

Anuario de historia contemporánea, volumen 14, años 1887-1991, Universidad de Granada, 1991.

Anuario Estadístico de España 1860-1861, Imprenta Nacional, Madrid, 1862.

Añadiduras á la correccion fraterna y suplemento al Suplemento de Miñano, ó sea, Tomo XX de su Diccionario geográfico estadístico, Imprenta de Don Eusebio Aguado, Madrid, 1830.

Agricultura General de Gabriel Alonso de Herrera, corregida segun el testo original de la primera edición publicada en 1513 por el mismo autor, y adicionada por la Real Sociedad Económica Matritense, Imprenta Real, Madrid, 1819.

AGUILAR MENDOZA, Enrique, *Memoria histórica del origen y vicisitudes de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y de los trabajos en que se ha ocupado desde su fundación*, redactada por el secretario general D. Enrique de Aguilar y Mendoza y leída en la sesión pública que en 14 de julio de 1876 celebró para solemnizar el primer centenario de su existencia, *Anales de la Sociedad Económica de Amigos del país de Valencia*, Imprenta de Nicasio Rius Monfort, Valencia, 1876.

AGULLÓ, José Joaquín, conde de Ripalda, *Cartilla agrícola del labrador de la Huerta de Valencia*, Imprenta Monfort, Valencia, 1845.

ALVERA DELGRAS, Antonio, *Consultor Métrico y Monetario, cuentas hechas de todas clases, a todos los precios, por mayor y menor*, Librería de León Pablo Villaverde, Madrid, 1834.

ARAUJO, Fernando, *La Reina del Tormes. Guía histórico-descriptiva de la ciudad de Salamanca*, Imp. y lit. de Jacinto Hidalgo. Antes de Cerezo, Salamanca, 1884.

ARIAS Y COSTA, Antonio Sandalio de, *Lecciones de Agricultura esplicadas en la Cátedra del Real Jardín Botánico de Madrid el año de 1815*. Tomo Primero. Segunda Edición corregida, y considerablemente aumentada por el mismo autor, Imprenta de Fuentenebro, Madrid, 1818.

ARRAZOLA, Lorenzo, *Enciclopedia Española de Derecho y Administración, ó Nuevo Teatro Universal de la legislación en España e Indias*, Imprenta de los Señores Andres y Diaz, Madrid, 1851.

ASSO, Ignacio, *Historia de la economía política de Aragón*, Imprenta de Francisco Magallon, Zaragoza, 1798.

AVIRANETA, Eugenio de y Bertrán Soler, Tomás, *Mina y los proscritos*, Imp. de la Colonia, Argel, 1836.

BALMACEDA, Fermín Martín de, *Decretos y resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por su Majestad desde que fue libre del tirano poder revolucionario, comprensivo al año de 1823*, Imprenta Real, Madrid, 1824.

Bases para la Asociación de Propietarios Territoriales de España, Madrid, 1842.

BERTEMATI, Manuel, *Memoria histórico-crítica de la Real Sociedad Económica Jerezana y de los tiempos anteriores y posteriores a su fundación de 1781 a 1833*, Jerez, 1862.

BISSO, José, *Crónica de la provincia de Sevilla*, Editores Rubio, Grilo y Vitturi, Madrid, 1869.

BONA, Félix de, "El sistema protector perjudica á las industrias que trata de proteger", *Conferencias libre-cambistas. Discursos pronunciados en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, por varios individuos de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduanas, en el curso de 1862 á 1863*, Imprenta de Manuel Galiano, Madrid, 1863.

BORREGO, Andrés, *Manual electoral, para el uso de los electores de la opinion monárquico-constitucional*, Imprenta de la Compañía Tipográfica, Madrid 1837

BOUTELOU, Claudio, *Elementos de Agricultura*, Don Francisco Martínez Dávila, Impresor de Cámara de S. M., Madrid, 1817.

BOUTELOU, Esteban, *Memoria sobre el cultivo de la vid en Sanlúcar de Barrameda y Xerez de la Frontera*, Imprenta de Villalpando, Madrid, 1807.

CABALLERO, Fermín, *Memoria sobre el fomento de la población rural, premiada por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso de 1862*, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1863.

CANGAS ARGÜELLES, José, *Diccionario de Hacienda con aplicación a España*. Tomo segundo, Imprenta de Don Marcelino Calero y Portocarrero, Madrid, 1834.

CÁNOVAS DEL CASTILLO, A., *De como he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista*, Madrid, 1891.

CARDELLI BRINGAS, Bringas, Alberto, *Derecho industrial y obrero comparado: doctrina, legislación y jurisprudencia*, J. Roldán y cia, Buenos Aires, 1929.

Catálogo de la Biblioteca de la Escuela Central de Agricultura, Imprenta Nacional, Madrid, 1856.

CÁRDENAS, Francisco de, *El Derecho Moderno, Revista de Jurisprudencia y Administración*, Establecimiento tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, Editor, Madrid, 1849.

CAXA DE LERUELA, Miguel, *Restauracion de la Antigua Abvdancia de España o Prestantissimo, unico, y facil reparo de su carestia presente*, Impr. Felix Tamb. Vic. Gen., Nápoles, 1631.

Censo de la población de España de el año de 1797. Ejecutado de Orden del Rey en el de 1801, Imprenta de Vega y Compañía, Madrid, 1801.

Censo de la población de España, según el recuento verificado en 25 de diciembre de 1860 por la Junta General de Estadística, Imprenta Nacional, Madrid, 1863.

Círculo de Labradores de Sevilla. Reglamento aprobado en Junta General celebrada el 16 de enero de 1859, Imprenta del Porvenir, Sevilla, 1859.

Círculo Mercantil de Sevilla, reglamento aprobado en Junta General de 13 de marzo de 1853, y reformado en diciembre de 1855, en abril de 1859, y en enero de 1864, Imprenta y Litografía de las Novedades, Sevilla, 1864.

Coleccion de los decretos y ordenes que han expedido las Cortes Generales y Extraordinarias desde 24 de febrero de 1813 hasta 14 de setiembre del mismo año, en que terminaron sus sesiones, Imprenta Nacional, Madrid, 1814.

Coleccion de los decretos y ordenes generales de la primera legislatura de las Cortes Ordinarias de 1820 y 1821, desde 6 de julio hasta 9 de noviembre de 1820. Tomo VI, Imprenta Nacional, Madrid, 1821.

Coleccion de los decretos y ordenes generales expedidos por las Cortes desde 1º de marzo hasta 30 de junio de 1822. Tomo IX, Imprenta Nacional, Madrid, 1822.

Coleccion de las leyes, decretos y declaraciones e las Cortes, y de los reales decretos, órdenes, resoluciones y reglamentos generales expedidos por las Secretarías del Despacho desde 1º de julio hasta fin de diciembre de 1837, Tomo XXIII, Imprenta Nacional, Madrid, 1838.

Coleccion de leyes, reales decretos y demas disposiciones de interés general referidas al ramo de agricultura, expedidas desde el 30 de Noviembre de 1833 hasta 3 de Agosto de 1866, Imprenta del Colegio de Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1866.

Coleccion legislativa de España (continuacion de la coleccion de Decretos). Segundo cuatrimestre de 1848, Imprenta Nacional, Madrid, 1849.

Coleccion legislativa de España. Primer Cuatrimestre de 1847, Tomo XL, Imprenta Nacional, Madrid, 1849.

Coleccion legislativa de España (continuacion de la coleccion de Decretos). Segundo Cuatrimestre de 1850, Tomo L, Imprenta Nacional, Madrid, 1850.

Coleccion legislativa de España (continuacion de la coleccion de Decretos). Tercer Trimestre de 1856. Tomo LXIX, Madrid, 1856.

Coleccion legislativa de España (continuacion de la coleccion de Decretos). Segundo Trimestre de 1858. Tomo LXXVI, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1858.

COLMEIRO, Miguel, *La botánica y los botánicos de la Península hispano-lusitana: estudios bibliográficos y biográficos*, Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra, Madrid, 1858.

Comisión para el estudio de la producción y consumo del trigo. Su nombramiento. Actas de sus sesiones. Dictamen y Apéndices, Imprenta de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Madrid, 1909.

Compendio de la obra inglesa intitulada Riqueza de las Naciones, hecho por el Marques de Condorcet, y traducido al castellano con varias adiciones del original, por Don Cárlos Martinez de Irujo, Oficial de la Primera Secretaria de Estado, Imprenta Real, Madrid, 1792.

Constitucion Politica de la Monarquia Española. Promulgada en Cadiz á 19 de Marzo de 1812, reimpresa en la Imprenta Nacional de Madrid, 1820.

CORRALES Y SÁNCHEZ, Enrique, *Apuntes biográficos de D. Germán Gamazo*, Madrid, 1902.

COSTA Y MARTÍNEZ, Joaquín, *Reconstitución y europeización de España. Programa para un partido nacional*, Madrid, 1900.

Crónica General de España, ó sea historia ilustrada y descriptiva de sus provincias, sus poblaciones mas importantes de la Península y Ultramar. Zaragoza, Editores Rubio y Compañía, Madrid, 1867.

D'AYOT, Manuel Lorenzo, "Los intereses agrícolas y los partidos políticos", en *Revista Contemporánea*, 30 de agosto de 1887.

Decretos de S. M. la Reina Doña Isabel II, dados en su Real Nombre por su Augusta Madre La Reina Gobernadora, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1836, Tomo XXI, Imprenta Nacional, Madrid 1837.

Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. en los seis meses contados desde 1º de enero hasta fin de junio de 1824, Tomo octavo, Imprenta Real, Madrid, 1824.

Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1825, por Don Josef Maria de Nieva. Tomo X, Imprenta Real, Madrid 1826.

Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII, y de la Reina su Augusta Esposa: Reales Ordenes, Resoluciones y Reglamentos Generales expedidos por las Secretarías del Despacho Universal y Consejos de S. M. desde 1º de enero hasta fin de diciembre de 1832, Tomo decimoséptimo, Imprenta Real, Madrid, 1833.

Decretos y Resoluciones de la Junta Provisional, Regencia del Reino y los expedidos por su Magestad desde que fue libre del tiránico poder revolucionario, comprensivo al año de 1823, Tomo VII, Imprenta Real, Madrid, 1824.

Diario de las actas y discusiones de las Cortes. Legislatura de los años de 1820 y 1821. Tomo IV, Imprenta especial de las Cortes, Madrid, 1820.

Diario de las discusiones y actas de las Cortes. Tomo XVIII, Imprenta Nacional, Cádiz, 1813.

Diario de las Sesiones de las Cortes. Legislatura de 1820, Tomos I, II y III, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1871.

Diario de las Sesiones de las Juntas Generales de Agricultura, Imprenta a cargo de Don Manuel de Rojas, Madrid, 1849.

Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados en la legislatura de 1844 á 1845, Tomo III, Imprenta Nacional, Madrid, 1845.

Diario de las Sesiones de Cortes celebradas en Sevilla y Cádiz en 1823, Imprenta Nacional, Madrid, 1858.

Diario de Sesiones de las Córtes Constituyentes. Tomos IV, V y XII, Apéndice Segundo al número 289, Imprenta de J. A. García, Madrid, 1870.

Diccionario de Agricultura Práctica y Economía Rural, redactado bajo la dirección de D. Agustín Esteban Collantes y D. Agustín Alfaro, Gefes Superiores de Administración Civil, individuos de la Sociedad Económica Matritense y de otras corporaciones científicas y literarias, Imprenta de Don Luis García, Madrid, 1852.

Diccionario de Agricultura Práctica y Economía Rural, redactado bajo la dirección del Exmo. Sr. D. Agustín Estaban Collantes y D. Agustín Alfaro. Tomo I, Madrid, 1855.

Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Tomo II, Madrid, 1847.

DOMINGO LÓPEZ, Fernando, *El Indicador de Madrid para 1858, ó sea Índice General de los principales habitantes con las señas de sus habitantes, asi como de los contribuyentes y oficinas públicas y particulares, con un breve resúmen de noticias de esta capital*, Imprenta Nacional, Madrid, diciembre de 1857.

El Canal de Urgel. Reglamento y régimen de los riegos, Lérida, 1934.

Enciclopedia Española de Derecho y Administración, ó Nuevo Teatro Universal de Legislación de España e Indias. Tomo IV, Imprenta de los Señores Andrés y Díaz, 1851.

ESPEJO Y GARCÍA, Eloy, *Memoria o reseña histórica de cien años de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Provincia de Jaén*, Diputación, 1886.

Estadística de España. Territorio, población, agricultura, industria, comercio, navegación, colonias y rentas. Por Al. Moreau de Jonnés. Puesta en castellano por D. José Garriga y Baucís, Imprenta de Cabrerizo, Valencia, 1835.

Estatutos de la Asociación General de Labradores, Imprenta y Librería de la Señora Viuda é Hijos de Don José Cuesta, Madrid, 1863.

Estatutos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Imprenta de Sancha, Madrid, 1816.

Estatutos de la Sociedad Castellana de Emulacion y Fomento. Proyecto presentado por la Comisión interina, Imprenta, Librería Nacional y Extranjera de los Hijos de Rodríguez, Libreros de la Universidad, Valladolid, 1860.

Estatutos de la Sociedad Valenciana de Agricultura, Imprenta de El Valenciano, antes de B. Monfort, Valencia, 1859.

Estatutos de la Sociedad Valenciana de Fomento, Imprenta de Lopez y C^a., Valencia, 1846.

Estudio sobre la Exposicion Vinícola Nacional de 1877, Imprenta y Fundición de Manuel Tello, Madrid, 1878.

Espocicion al Congreso de Señores Diputados por la Comision Directiva de la Asociacion de Propietarios de la provincia de Barcelona contra el Proyecto de Ley sobre Reforma de Laudemios presentado por el Señor D. José Manuel Planas y otros diputados en la Sesion de 4 de marzo de 1847, Imprenta de José Tauló, Barcelona, 1847.

Exposición de la Liga Agraria a las Cortes sobre el Proyecto de Ley de Alcoholes, Tipografía de Manuel G. Hernández, Madrid, 1888.

Exposicion de las razones que la Sociedad Riojana y los comisionados por los pueblos de sus Distrito presentan al Congreso Nacional en apoyo de su solicitud para que en la Rioja se forme una Provincia separada é independiente, Imprenta de Álvarez, Madrid, 1820.

Exposicion General de Castilla La Vieja. Convocatoria, Catálogo, Circular, é Instrucciones de la Junta directiva, Imprenta y Librería de los Hijos de Rodríguez, Valladolid, 1859.

Exposicion pública en Valladolid para el mes de setiembre de 1871. Programa Reglamentado, Imprenta y Librería Nacional y Estranjera de Hijos de Rodriguez, Libreros de la Universidad y del Instituto, Valladolid, 1871.

Exposicion que la Liga de Propietarios de Valencia y su provincia eleva al Excmo. Sr. Presidente del Poder Ejecutivo de España sobre la ruina inevitable que ha de causar en la propiedad la exaccion del empréstito forzoso, Imprenta de José Domenech, Valencia, 1873.

Extracto de los trabajos de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Leon en el año de 1863, Establecimiento Tipográfico de Miñon, León, 1864.

FAGES DE ROMÁ, Narciso, *Memoria acerca de los medios de mas fácil y oportuna aplicacion para promover los adelantamientos de nuestra economía rural, presentada á la Junta de Agricultura de la provincia de Gerona en su primera sesion general, Imprenta y Librería de Gregorio Matas de Bodalles, Figueras, 1849.*

- *Exposicion y proyecto de programa para el establecimiento de una granja-escuela, presentados por el Sr. Comisario Régio de Agricultura de la provincia de Gerona y adoptados por acuerdo de la Junta provincial de Agricultura de la misma, Imprenta de Grasés, Gerona, 1854.*

FERRER DEL RÍO, Antonio, *La desamortización en España, Edición del "Globo", México, 1868.*

FIGUEROLA, Laureano, *La reforma arancelaria de 1869*, Imprenta y Fundición de M. Tello, Madrid, 1879.

GARCÍA DE LA HUERTA, Luis, *Discurso sobre la obligacion que tiene la Nacion de contribuir al fomento de las Sociedades Económicas*. Casa de Salvador Savall, Mallorca, 1785.

GARCÍA ORMAECHEA, Rafael, *Supervivencias feudales en España. Estudio de legislación y jurisprudencia sobre señoríos*, Editorial Reus, Madrid, 1932.

GARRIDO, Fernando, *Historia de las asociaciones obreras en Europa ó las clases trabajadoras regeneradas por la asociación*. Tomos I y II, Imprenta y librería de Salvador Manero, Barcelona, 1864.

Geografia general de Catalunya. Dirigida per Francesch Carreras y Candi, Casa Editorial Alberto Martín, Barcelona, 1908.

GOMEZ ZARZUELA, Manuel, *Guia de Sevilla. Su provincia, Arzobispado, Capitanía General, Tercio Naval, Audiencia Territorial y Distrito Universitario. Para 1866*, La Andalucía, Sevilla, 1866.

GONZALEZ, Tomas, *Censo de poblacion de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI*, Imprenta Real, Madrid, 1829.

GÜELL, Antoni M., “Hipótesis y variables”, en Boudon, R. y Lazarsfeld, *Metodología, de las ciencias sociales. I. Conceptos e índices*, traducción de Jaume Melendres, Editorial Laia, Barcelona, 1873.

GÜELL Y FERRER, Juan, *Cereales, Reflexiones sobre esta y otras cuestiones arancelarias sugeridas por la reunion de ciento y un diputados celebrada en Madrid el 21 de febrero de 1859*, Imprenta del Diario de Barcelona, á cargo de Francisco Gabañach, Barcelona, 1859.

- *Observaciones a la Reforma Arancelaria ejecutada y á la propuesta á las Córtes por el Exmo. Sr. Ministro de Hacienda D. Pedro Salavarría, precedidas de una reseña histórico-económica de los reinados de las tres Isabeles, 1ª y 2ª de España é Isabel de Inglaterra*, Tipografia de Narciso Ramirez y Rialp, Barcelona, 1863.

Guia de Casa Real y Patrimonio. Año de 1848, Aguado, Impresor de Cámara de S. M. y de su Real Casa, Madrid, 1847.

Guia de forasteros, 1871-1872, Imprenta Nacional, Madrid, 1871.

Guia de forasteros de la ciudad de Sevilla, capital de Andalucía, situada en la orilla izquierda del rio Guadalquivir, á los 37.º 23.' 12." de latitud N. y 2.º 6.' Longitud occidental, con arreglo al meridiano del Real seminario de nobles de Madrid, Imprenta del Diario de Comercio, Sevilla, junio de 1832.

Guia de Zaragoza, ó sea breve noticia de las antigüedades, establecimientos públicos oficinas y edificios que contiene. Precedida de una ligera reseña histórica de la misma, Imprenta y librería de Vicente Andres, editor, Zaragoza, 1860.

Guia Legislativa, Imprenta de D. Alejandro Gómez Fuentenebro, Madrid, 1859.

Guia Oficial de España, 1877, Imprenta Nacional, Madrid, 1877.

Guía Oficial de España 1902, Sucesora de M. Minuesa de los Ríos, Imprenta de la Gaceta de Madrid, 1902.

Guía práctica de Alicante y su provincia, Imprenta de Antonio Marzo, Madrid, 1908.

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, Benito, *Códigos ó Estudios fundamentales sobre el derecho civil español*, Tomo II, Imprenta de D. F. Sánchez, Madrid, 1863.

HERRERA, Alonso de, *Agricultura General, que trata de la labranza del campo, y sus particularidades, crianza de animales, propiedades de las plantas que en ella se contienen, y virtudes provechosas a la salud humana*, 1645.

HIDALGO, Dionisio, *Diccionario de Bibliografía Española*, Tomo I, Imprenta de las Escuelas Pías, Madrid, 1862.

HIDALGO TABLADA, José de, *Curso de Economía Rural Española*. Tomo I, Imprenta y Librería de la Sra. Viuda é Hijos de D. José Cuesta, Madrid, 1864.

Historia de La Francia, por M. Ph. Le Bas. Traducida al castellano por una sociedad literaria. Tomo II, Imprenta del Nacional, Barcelona, 1841.

Home Kames, Henry, *The Gentleman farmen. Being an attempt to improve Agriculture, by subjecting it to the test of Racional Principless*. The fourth edition, with the author's last corrections and additions, Printed for Bell and Bradfute, Edinburgh, 1798.

Indice General de las cosas más notables contenidas en los tomos del Diario de las Discusiones y Actas de las Cortes, desde el 1º al 11º, en que se comprenden las sesiones de legislatura de 1820, Imprenta Nacional, Madrid, 1821.

Informacion parlamentaria iniciada por la Comision del Congreso de los Diputados y consecuencia del proyecto de ley sobre reforma de aranceles, presentado á las Córtes en 5 de Enero de 1863, Imprenta Nacional, Madrid, 1863.

Informe presentado á la Junta de gobierno por la Comision nombrada para estudiar el estado actual del proyecto de ferro-carril del Ferrol á Betanzos y proponer los medios de conseguir su pronta construcción, Imp. de El Correo Gallego, Ferrol, 1883.

Informe sobre la creación de una Sociedad general protectora de la agricultura española, Fondos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia, 28 de marzo de 1878.

Informe descriptivo, y diseño de una sembradera inventada y presentada á la Real Sociedad Económica de Valladolid, por su individuo Don Antonio Regás, visitador general de las fábricas de Madrid y sus cercanías, miembro de la Real Academia de Ciencias naturales y artes de la ciudad de Barcelona, y de mérito de varias Sociedades económicas el Reyno, Imprenta de la Real Compañía, Madrid, 1817.

Instituciones Económicas de la Sociedad de Amigos del País de la ciudad, i Reino de Valencia. Primera Parte, 1777.

JAUBERT DE PASSÁ, François, *Canales de Riego de Cataluña y Reino de Valencia, leyes y costumbres que los rigen: Reglamentos y ordenanzas de sus principales acequias: obra escrita en francés por Mr. Jaubert de Passá, traducida al castellano por el Señor D. Juan Fio, Socio de Mérito, Magistrado Honorario de esta Audiencia y Juez de primera instancia de Madrid. Publicada y Adicionada por la Sociedad Económica de Amigos del País. Tomo I, Imprenta de D. Benito Monfort, Valencia, 1844.*

JOVELLANOS, G. M., *Informe de la Sociedad Económica de esa Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria, extendido por su individuo de numero el Sr. D. Gaspar Melchor de Jovellanos, á nombre de la Junta encargada de su formación, y con arreglo á sus opiniones, Imprenta de Sancha, Madrid, 1.795.*

Junta General celebrada por la Liga de Contribuyentes de Málaga el día 25 de junio de 1883, Imp. de el Reformista Andaluz, Málaga, 1883.

Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Alicante. Resumen de sus trabajos durante el año 1866, con arreglo al artículo 32 del reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859, Imprenta y litografía de la V. de Juan J. Carratalá, Alicante, 1867.

Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Huelva. Resumen de los trabajos ejecutados por la misma durante el año de 1863, formado con arreglo al art. 32 del Reglamento orgánico del 14 de Diciembre de 1859, sesión del 25 de enero de 1863, Imprenta de D. J. M. Herrera y Pinzon, Huelva, 1864.

Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la Provincia de Sevilla. Resumen de sus trabajos durante el año 1861, con arreglo al art. 32 del Reglamento orgánico del 14 de Diciembre de 1859, Imprenta y Litografía de La Agricultura Española y Revista Mercantil, Sevilla, 1862.

Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Sevilla. Resumen de los trabajos en que se ha ocupado durante el año de 1862, con arreglo al artículo 32 del Reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859, Imp. y lib. De D. A. Alvarez, Sevilla, 1863.

Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Sevilla. Resumen de los trabajos en que se ha ocupado durante el año de 1863, con arreglo al artículo 32 del Reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859, Imp. y lib. De D. A. Alvarez, Sevilla, 1864.

Junta General celebrada por la Liga de Contribuyentes de Málaga el día 25 de junio de 1883, Imprenta de El Reformista Andaluz, Málaga, 1883.

Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Teruel. Resúmen de sus trabajos durante el año de 1863, con arreglo al artículo 32 del Reglamento orgánico de 14 de Diciembre de 1859, Imprenta de S. Pedro Pablo Vicente, Teruel, 1864.

Junta Pública de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, celebrada el día 9 de diciembre de 1800, Imprenta Don Benito Monfort, Valencia, 1801.

LABORDE, Alexandre, *Del espíritu de asociación aplicado a cuanto puede interesar al pro-comunal de una nación y al fomento de la riqueza pública.* Traducción del marqués de Sanfelices, Valladolid, 1834.

LABRA, Rafael María, *Las Sociedades Económicas de Amigos del País. Su razón histórica, sus medios y su misión actual,* Madrid, 1906.

LATASSA Y ORTIZ, Félix de, *Biblioteca Nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año de 1795 hasta el de 1802,* Oficina de Joaquin de Domingo, Pamplona, 1802.

LATOUR BROTONS, José, “Antecedentes de la primitiva Ley Hipotecaria: su génesis, circunstancias y efectos de la misma”, *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, julio-agosto de 1862.

LESEN Y MORENO, José, *Historia de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, escrita con la autorización de la misma y en vista de*

los datos que existen en su Archivo y Biblioteca, Colegio de Sordomudos y Ciegos, Madrid, 1863.

Ley hipotecaria, Reglamento General para su ejecucion e instrucción sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos a registro, Imprenta del Ministerio de Gracia y Justicia, Madrid, 1861.

Lista de los Señores Diputados á las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821, Imprenta de Doña Rosa Sanz, Madrid, 1820.

Los Códigos españoles. Concordados y anotados. Tomo noveno, Imprenta de La Publicidad, a cargo de M. Rivadeneyra, Madrid, 1850.

LÓPEZ MORALES, Blas, *Informe presentado a la Junta General de Comerciantes con el programa de las bases sobre que debe reorganizarse el comercio de Valladolid*, Imprenta de D. M. Aparicio, Valladolid, 1847.

LLANTA, Santiago, *Los diputados pintados por sus hechos. Colección de estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869*, Tomo I, R. Labajos y Compañía, Editores, Madrid, 1865.

MADOZ, Pascual, *Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar*, 16 tomos, Imprenta del Diccionario Geográfico, Madrid, 1845-1850.

MAESTRE Y CARDONA, Manuel, *Junta Provincial de Agricultura, Industria y Comercio de Toledo. Memoria y resumen de los trabajos ejecutados por la misma durante los años de 1860 al 66 inclusive*. Imprenta de José de Cea, Toledo, 1867.

MARTÍNEZ ALCUBILLA, Marcelo, *Diccionario de la Administracion Española, compilacion ilustrada de la novísima legislacion de España en todos los ramos de la Administracion Pública*. Tomo IV, Segunda Edición, Imprenta de A. Peñuelas, Madrid, 1871.

MARTÍNEZ QUINTANILLA, Pedro, *La provincia de Gerona. Datos Estadísticos*, Imprenta de F. Dorca sucesor de J. Grases, Gerona, 1863.

MASIP Y MOLLÁ, Félix, *Diccionario analítico de todas la palabras castellanas que pueden tener en la oración diferente significado*, Imprenta de José María Ayoldi, Valencia, 1866.

MELCHOR DE JOVELLAOS, Gaspar, *Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de la Ley Agraria, extendido por su individuo de número el Señor Don Gaspar Melchor de Jovellanos, y con arreglo a sus opiniones*, edición facsímil realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para conmemorar el bicentenario de dicha publicación en el año 1795, Madrid, 1994.

MELLADO, Francisco de P., *Enciclopedia moderna. Diccionario Universal de literatura, ciencias, artes, agricultura, industria y comercio*. Tomo I, Establecimiento Tipográfico de Mellado, Madrid, 1851.

Memorias de Agricultura y Artes. Tomo XII, Junta Nacional del Gobierno del Comercio de Cataluña, Barcelona, junio 1821.

Memoria de la Junta de calificacion de los productos de la Agricultura, industria y artes, presentados á la primera exposicion pública de Valladolid en el año de 1850. Seguida del catálogo de los expositores y de los premios, recompensas, y menciones que han obtenido, Imprenta de M. Aparicio, Valladolid, 1850.

Memoria de los trabajos hechos por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de Burgos, durante el año de 1877, segundo de su creacion, leída en Junta General por el Secretario de dicha Asociacion, D. Federico Martinez del Campo, Imprenta de D. Timoteo Arnaiz, Burgos, 1878.

Memoria de los trabajos y asuntos de que se ha ocupado la Liga de Propietarios de Valencia y su provincia, desde su fundacion en 8 de enero de 1871 hasta 31 de diciembre de 1882, Imprenta de Domenech, 1883.

Memoria de los trabajos y gestiones realizados por la Junta Directiva de la Liga de Contribuyentes de Málaga, durante el año de 1886, leída por el Señor Presidente en la Junta General ordinaria celebrada el día 26 de enero de 1887, Imprenta del Diario Mercantil, Málaga, 1887.

Memoria descriptiva-estadística de las entidades agrícolas y pecuarias: (cámaras agrícolas, comunidades de labradores, federaciones agrarias, sociedades, sindicatos agrícolas...), Ministerio de Fomento, Imprenta de Ricardo F. de Rojas, Madrid, 1915.

Memoria elevada al Excmo. Sr. Ministro de Fomento por la Direccion General de Agricultura, Industria y Comercio sobre el estado de los ramos dependientes de la misma en octubre de 1861, Imprenta Nacional, Madrid, 1861.

Memoria leída por el Presidente de la Liga de Contribuyentes de Cádiz, en la Junta General ordinaria celebrada el día 12 de enero de 1872 en cumplimiento de lo que previene el artículo 21 del Reglamento, Imprenta de la Revista Médica, Cádiz, 1872.

Memoria leída por el Presidente de la misma, Excmo. Señor D. Pablo Díaz y Ximénez, en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 18 de febrero de 1883, Imprenta de El Defensor, 1883.

Memoria leída por el Señor Presidente accidental de la Liga de Contribuyentes de Santander en la Junta General Ordinaria celebrada el día 29 de enero de 1885, Imprenta d J. M. Martinez, Santander, 1885.

Memoria leída por la Junta Directiva de la Asociacion agrícola por la iniciativa privada, en la Asamblea general de 26 de setiembre de 1870.

Memoria presentada por la Junta Directiva de la Asociacion agrícola por la iniciativa privada en la Asamblea general de 27 de setiembre de 1871.

Memoria sobre los males que sufre el comercio español y medios de repararlos. Escrita y dirigida á las Córtes por una Comisión del comercio de Cádiz, Imprenta de Roquero, Cádiz, 1820.

Memoria sobre los productos de la agricultura española reunidos en la Exposición General de 1857, presentada al Excelentísimo Señor Ministro de Fomento por la Junta Directiva de aquel Concurso, Imprenta Nacional, Madrid, 1859-1861.

Mercurio Histórico Político que contiene el estado presente de la Europa, lo sucedido en todas las Cortes, los intereses de los Príncipes, y generalmente todo lo mas curioso, perteneciente al mes de marzo de 1779. Con reflexiones políticas sobre cada Estado, Imprenta Real de la Gaceta, Madrid, 1779.

MOLINS, José Elías de, *La asociación y cooperación agrícolas: estudio social agrario*, Imprenta barcelonesa, Barcelona, 1912.

MONTOJO Y VIGIL, Pedro, *Guia General de Sevilla. Ó sea manual histórico-topográfico, estadístico y administrativo*, Imprenta, librería y litografía de D. Carlos Santigosa, Sevilla, 1851.

MORATILLA, Bernardo, *Estadística del personal y vicisitudes de las Cortes y de los Ministerios de España*, Imprenta Nacional, Madrid, 1858.

MOREIRO PRIETO, Julián, *Julián Sánchez Ruano. Un personaje, una época (1840-1871)*, Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca, 1897.

MORILLAS Y ALONSO, Victoriano, *Guia General de Sevilla y su provincia*, Imprenta y Litografía de la Revista Mercantil, Sevilla, 1860.

MORQUECHO Y PALMA, Genaro, *Principios razonados e ideas de economía rural*, Imprenta de Manuel Minuesa, Madrid, 1858.

- *La controversia económica en 1859. Colección de artículos publicados en varios periódicos en defensa del sistema proteccionista*, Imprenta de Manuel Minuesa, Madrid, 1860.

MURO, José, *Fragmentos de una Campaña Parlamentaria, 1884-1885*, Establecimiento tipográfico de H. de J. Pastor, Valladolid, 1886.

NIDO Y SEGALERVA, Juan del, *Historia política y parlamentaria del Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo Sagasta*, Imp. de R. Velasco, Viuda de Prudencia Pérez, Madrid, 1915.

NOMBELA, Julio, *Los Ministros en España desde 1800 a 1869*, Tomos primero y segundo, J. Castro y Compañía, editor, Madrid, 1869-1870.

Novísima Recopilación de las leyes de España. Dividida en doce libros. Tomo XII, Título XI, Ley V, Madrid, 1805.

Novísima Recopilación de las Leyes de España. Tomo VI, Razola, Madrid, 1829.

Novísima Recopilación de las leyes de España. Tomo II, Libro VII, Galvan y Rosa, librero, Méjico y París, 1831.

Observaciones que varios fabricantes de hierro hacen sobre la exposición presentada á S. M., con fecha 15 de diciembre de 1862, por la Asociacion para la Reforma de Aranceles, Imprenta de Manuel Tello, Madrid, 1862.

Ordenanzas de la Real Sociedad de Agricultura, creada en la Villa de Pareja y sus Aldeas el año de 1816, Imprenta de López y Hermano, Madrid, 1817.

ORTEGA RUBIO, Juan, *Vallisoletanos ilustres*, Valladolid, 1893.

- *Los pueblos de la provincia de Valladolid*, Imprenta y Encuadernación del Hospicio Provincial, Valladolid, 1895.

- *Historia de la Regencia de María Cristina Habsbourg-Lorena. Tomo I*, Imprenta, Litografía y Casa Editorial de Felipe González Rojas, Madrid, 1905.

PAÍÑO Y HURTADO, Vicente, *Memorial ajustado, hecho en virtud de decreto del Consejo del expediente consultivo, que pende en él, en fuerza de Real Orden, comunicada por la Secretaría de Estado, y del Despacho Universal de Hacienda, con fecha en San Ildefonso del 20 de Julio del año de 1764*, 2ª parte, Librería de Francisco Fernández, Madrid, 1771.

PANTOJA, José M. y Lloret, Antonio M., *Ley hipotecaria, comentada y explicada, concordada con las leyes y códigos extranjeros; comparada con las disposiciones de la legislación española que ha servido de precedente para redactarla; precedida de una introducción histórica y de la exposición de sus motivos y fundamentos*, Tomo I, Librería de D. Leocadio Lopez, Madrid, 1861.

PIRALA, Antonio, *España y la Regencia. Anales de diez y seis años (1885-1902)*, Establecimiento Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1905.

PONS Y UMBERT, Adolfo, *Organización y funcionamiento de las Cortes según las Constituciones españolas y reglamentación de dicho Cuerpo colegislador: exposición sintética por Adolfo Pons y Umbert*, Congreso de los Diputados, Hijos de M. G. Hernández, Madrid, 1906.

Pragmatica Sancion de S. M. en fuerza de Ley, por la qual se prescribe el orden con que se ha de proceder contra los que causen bullicio ò commociones populares, Imprenta de Pedro Marin, Madrid, 1774.

Programa y Reglamento de la Sociedad Española de Agricultura, Industria y Comercio, Imprenta de Antonio Martínez, Madrid, 1852.

Protesta ante el nuevo plan de impuestos y contribuciones, presentada por la Liga de Contribuyentes de Lora del Río, Imprenta Ibérica, Cádiz, 1882.

RAMÍREZ Y DE LAS CASAS-DEZA, Luis María, *Indicador Cordobés, ó sea Manual Histórico-Topográfico de la ciudad de Córdoba*, Imprenta, librería y litografía del Diario de Córdoba, 1867.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Tomo sexto que contiene las letras S, T, V, X, Y, Z*, Imprenta de la Real Academia Española, Madrid, 1739.

Real arancel general de entrada de frutos, géneros y efectos del extranjero, para gobierno de las Aduanas del Reyno, Imprenta Real, Madrid, 1825.

Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, Por la cual se prohíben de nuevo y absolutamente para en lo sucesivo en los dominios de España é Indias todas las Congregaciones de Franc-masones, Comuneros y otras Sociedades secretas, cualquiera que sea su denominación y objeto; y se declara que los que hayan pertenecido á ellas hasta ahora gocen del indulto concedido en Real Decreto de 1º de Mayo de este año, en los términos y con las excepciones que se expresan, Imprenta Real, Madrid, 1824.

Real Consejo de Agricultura, Industria y Comercio: Real decreto de su reorganizacion en 14 de diciembre de 1859 y Reglamento de 5 de setiembre de 1860, Imprenta Nacional, Madrid, 1861.

Recopilación extractada, ordenada y metódica de las leyes y reales disposiciones promulgadas en el año 1845, Imprenta de D. Ramón Martín Indar, Barcelona, 1846.

Reglamento de la Asociación de Propietarios Territoriales de España, Compañía Tipográfica, Madrid, 1843.

Reglamento de la Asociacion ó Liga de Contribuyentes de Cáceres, Imp. de Santiago Fernandez, Cáceres, 1877.

Reglamento de la Asociacion ó Liga de Contribuyentes de Cadiz. Aprobado en Junta General celebrada el 17 de marzo de 1872, Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly y Velasco, Cádiz, 1872.

Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Cadiz. Aprobado en Junta General celebrada el 17 de marzo de 1872 y reformado con arreglo a las modificaciones aprobadas en las Juntas Generales de 18 de enero de 1874 y 10 de enero de 1875, Imprenta de la Revista Médica, de D. Federico Joly, Cádiz, 1875.

Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Huesca, aprobado en Junta General de la misma, en sesion del 22 de octubre de 1876, Imprenta y librería de Jacobo M. Pérez, Huesca, 1876.

Reglamento de la Liga de Contribuyentes de Murcia, Estab. Tipográfico de La Paz, Murcia, 1876.

Reglamento de la Asociacion ó Liga de Contribuyentes de Segovia, Imprenta de Segundo Rueda, Segovia, 1882.

Reglamento de la Liga de Propietarios de Tembleque, aprobado en Junta General celebrada el 12 de setiembre de 1875, Imprenta de Cea, Toledo, 1876.

Reglamento de la Liga de Propietarios de Valencia y su provincia, Imprenta de José Rius, Valencia, 1871.

Reglamento del Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla aprobado en Junta General celebrada el día 5 de Marzo de 1868, Imprenta y Librería de D. José M^a Geofrin, Sevilla, 1868.

Reglamento del Círculo Granadino, Imprenta de El Mensajero, Granada, 1862.

Reglamento del Instituto Agrícola Catalan, Imprenta de Don Agustin Gaspar, Barcelona, 1851.

Reglamento del Nuevo Casino de Pamplona, Imprenta y Librería de Regino Bescansa, 1869.

Reglamento General de la Liga de Contribuyentes de Tarragona, Imprenta de José Antonio Nel-lo, Tarragona, 1879.

Reglamento General del Casino Industrial, Agrícola y Comercial de Córdoba, Imprenta, librería y litografía de D. Rafael Arroyo, Córdoba, 1865.

Reglamento para la creación y servicio de Guardias Rurales, proyectado por la Comisión Directiva de la Asociación de propietarios de la provincia de Barcelona, y sometido por la misma á la aprobación de S. M., con exposición de 31 de Mayo de 1846, Imprenta de José Tauló, Barcelona, 1846.

Repertorio General. Índice Alfabético de los principales vecinos de Madrid, con indicación de sus domicilios: ó Nueva Guía de la Corte para el año 1852, Imprenta de J. Martín Alegría, Madrid, 1852.

Resumen de los trabajos de la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Badajoz, durante el año de 1.861, Imprenta y librería de D. Jerónimo Orduña, Badajoz, 1862

REUS Y GARCÍA, José, *Manual de desamortización civil y eclesiástica, por los Directores de la Revista General de Legislación y Jurisprudencia. Segunda edición, corregida y considerablemente aumentada con las disposiciones legales publicadas hasta fin de 1891*, Imprenta de la Revista de Legislación, Madrid, 1862.

Revista General de Legislación y Jurisprudencia, publicada por una reunión de abogados del ilustre Colegio de esta Corte. Año Primero, Tomo I, Imprenta de Díaz y Compañía, Madrid, 1853.

RODRÍGUEZ, Pedro de, conde de Campomanes, *Discurso sobre el fomento de la industria popular*, Imprenta de D. Antonio de Sancha, Madrid, 1774.

ROJAS CLEMENTE, Simón de; LA GASCA, Mariano, y GARCÍA, Donato, "Introducción a la criptogamia de España", en *Anales de Ciencias Naturales*, número 5, págs. 135 a 215, Madrid, 1802.

- *Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía*, Madrid, 1807.

SALAS, Ramón, *Lecciones de derecho público constitucional, para las escuelas de España*. Tomo I, Imprenta del Censor, Madrid, 1821.

SANTILLÁN, Ramón, *Memoria histórica de las reformas hechas en el sistema general de impuestos de España y de su Administración desde 1845 hasta 1854, añadida con notas de sus ampliaciones y efectos hasta 1863*, Imprenta de A. Pérez Dubrull, Madrid, 1888.

SEMPERE Y GUARINOS, Juan, *Historia de los vínculo y mayorazgos*. Segunda Edición, Ramón Rodríguez de Rivera, Editor, Madrid, 1847.

SIERRA, Luis María de la, *Cuestión de harinas. Contestación al Sr. D. Mariano Torrente*, Imprenta de Martínez, Santander, 1845.

SILVESTRE MARTÍNEZ, Manuel, *Librería de jueces, utilísima, y universal para todos los que desean imponerse en la Jurisprudencia Práctica, Derecho Real de España, y Reales Resoluciones mas modernas de rigurosa observancia; y en especial para Abogados, Alcaldes, Corregidores, Intendentes, Prelados Regulares, y Jueces Eclesiasticos, Parrocos, Regidores, Escribanos, Diputados, Syndicos, y Personeros*. Tomo séptimo, Imprenta de Blas Román, Madrid, 1774.

Exposiciones que la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del país, ha elevado al Regente del Reino y a las Cortes contradiciendo y refutando una memoria que la Sociedad Económica de Cádiz dirigió á la Rejencia provisional del reino sobre un tratado de comercio con la Inglaterra, reforma del sistema prohibitivo, y fomento de las fábricas nacionales, Imprenta de José Tauló, Barcelona, 1842.

TORRES AMAT, Félix, *Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña*, Imprenta de J. Verdaguer, Barcelona, 1836.

Traslado de la Real Pragmática dada en Aranjuez, 17 abril, relativa a la prevención de bullicios y conmociones populares, 1774.

VIDALIN, Félix, *Revue des Deux Mondes*, T. 13, 1876.

XUCLÁ MAURICIO, Manuel, *Las grandes revoluciones jurídicas y el problema social*, 1897, Hernando y Compañía, Madrid, 1897.

4.- BIBLIOGRAFÍA

ABEL, Wilhelm, *La Agricultura: sus crisis y coyunturas. Una historia de la agricultura y la economía alimentaria en Europa Central desde la Alta Edad Media*, Fondo de Cultura Económica, México, 1978.

ACCOMINOTTI, Olivier y FLANDREAU, Marc, "Does bilateraalism promote trade? Nineteenth century liberalization revisited", *Discussion paper series*, nº 5.423, Centre for Economic Policy Rechearch, London, January, 2006.

AGUILAR PIÑAL, Francisco, *La Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Conferencia pronunciada en el Aula Cultural del Ayuntamiento de Madrid el día 6 de abril de 1977*, Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1977.

AGULHON, Maurice, *La sociabilité méridionale. Confréries et associations en Provence orientale dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle*. Aix-en-Provence, 1966.

- *“La République au village: les populations du Var de la révolution à la Ile République*, Paris, 1970.

- *La vie sociale en Provence intérieure au lendemain de la Révolution*, Paris, 1971.

- *Le cercle dans la France bourgeoise, 1810-1848: étude d’une mutation de sociabilité*, Paris, 1977.

ALARCÓN CARACUEL, Manuel R., *El derecho de asociación obrera en España (1839-1900)*, Madrid, 1975.

ALBA, Víctor, *Las ideologías y los movimientos sociales*, Plaza & Janes, Barcelona, 1977.

ALBERRO SOLANGE, Serge Gruzinski, “La historia de las mentalidades: trayectoria y perspectiva”, *Revista Hmex*, XLII, número 2, 1992.

ALBERT BERENGUER, Isidro, *La Imprenta en la provincia de Alicante (1602-1925)*, Instituto de Estudios Alicantinos, 1971.

ALDECOA CALVO, José Serafín, “La restauración: propietarios y jornaleros (1874-1923)”, Benedicto Gimeno Emilio (coordinador), *Historia de Monreal del Campo*, Centro de Estudios del Jiloca, Ayuntamiento de Monreal del Campo, 2006.

ALONSO PASCUAL, Rogelio, *Irlanda del Norte. Una historia de guerra y la búsqueda de la paz*, Editorial Complutense, Madrid, 2001.

ALVAR EZQUERRA, Jaime (coord.), *Diccionario de historia de España*, Istmo, Madrid, 2003.

ALLEN, Robert C., *Enclosure and the yeoman: the agricultural development of the South Midlands 1450-1850*, Oxford University, 1992.

- “Tracking the agricultural revolution in England”, *Economic History Review*, vol. LII, nº 2, 1999.

ALMANSA MORENO, José Manuel, “Arquitectura del ocio en la Úbeda decimonónica”, *Iberian, Revista digital de Historia*, número 5, septiembre a diciembre de 2012.

ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Celso, *La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894)*, Institución Cultural de Simancas, Diputación Provincial de Valladolid, Tomos I y II, 1977.

- “El regionalismo castellano-leonés: orígenes y primeras reivindicaciones político-económicas (1859-1923)”, *El pasado histórico de Castilla y León. Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León celebrado en Valladolid, del 1 al 4 de diciembre de 1982*, Tomo III, Junta de Castilla y León, Burgos, 1984.

- “Empresarios y empresariales. La «burguesía harinera» castellana: un «nuevo» tipo de empresario”, *Anales de estudios económicos y empresariales*, número 4, 1989.

ALTABELLA, José, *«El Norte de Castilla» en su marco periodístico (1854-1965)*, Editora Nacional, Madrid, 1966.

ANES, Gonzalo, *Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII*, Barcelona, 1969.

- “Los pósitos en la España del siglo XVIII”, *Moneda y Crédito*, número 105, año 1968.
- *Las crisis agrarias en la España moderna*, Editorial Taurus, Madrid, 1979.
- “Del «Expediente de la Ley Agraria» al Informe de Jovellanos”, en García Sanz, Ángel y Sanz Fernández, Jesús (coordinadores), *Reformas y políticas agrarias en la historia de España (De la Ilustración al primer franquismo)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1996.

ARAGÓN MATEOS, Santiago, *La nobleza extremeña en el siglo XVIII*, Consejo Ciudadano de la Biblioteca Pública Municipal Juan Pablo Forner, Badajoz, 1991.

ARANEGUI Y COLL, Manuel de, “Síntesis de las peculiaridades de las Entidades locales alavesas”, *Ponencias, Comunicaciones y Conclusiones del I Congreso Italo-Español de Historia Municipal y de la V Asamblea de la Asociación de Hidalgos*, celebrada en Roma los días 5 al 10 de octubre de 1958, Instituto Luis Salazar y Castro (CSIC), Madrid, 1958.

ARGEMÍ, Lluís, “La revolución agrícola en España”, *Historia de la Ciencia y de la Técnica*, número 29, Akal, Madrid, 1993.

ARIAS DE SAAVEDRA, Inmaculada, “El asociacionismo en la España del siglo XVIII”, Maza Zorrilla, Elena (coordinadora), *Asociacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis interdisciplinar*, Universidad de Valladolid, 2003.

ARMENGOL I CUSTAL, Dolors, “La agricultura en el Alto Ampurdán a mediados del siglo XIX”, *Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos*, vol. 14, 1979.

ARÓSTEGUI, Julio, *La investigación histórica: teoría y método*, Barcelona, 1995.

ARTILLO GONZÁLEZ, Julio, “La reforma agraria en la España contemporánea”, *Revista de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada*, número 32, julio-septiembre 1978.

ARTOLA, Miguel, *La burguesía revolucionaria (1808-1878)*, Alfaguara, Madrid, 1974.

- *Antiguo Régimen y revolución liberal*, Ariel, Barcelona, 1978.

- *La burguesía revolucionaria: (1808-1874)*, Alianza Editorial, Madrid, 1990.

- “El sistema político de la Restauración”, en *La España de la Restauración. Política, economía, legislación y cultura*, Siglo XXI, Segunda edición, Madrid, 1990.

ASTON, T. H. y PHILPIN, C. H. E. (eds.), *El debate Brenner. Estructura de clases agraria y desarrollo económico en la Europa preindustrial*, Crítica, Barcelona, 1988.

AZAGRA ROS, Joaquín, *La desamortización de Godoy en Valencia (1799-1807)*, Alfons El Magnànim, Valencia, 1986.

AZCÁRATE LUXÁN, Isabel, *Plagas agrícolas y forestales en España (siglos XVIII y XIX)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1997.

- BADENES, Miquel. A., “La venta de bienes eclesiásticos en las comarcas castellonenses. Desamortización de Mendizábal (1836-1845), *Estudis Castellonencs*, número 1, Diputació de Castelló, 1983.
- BAHAMONDE, Ángel, *España en democracia. El Sexenio, 1868-1874*, Historia 16, Madrid, 1996.
- BAHAMONDE MAGRO, Ángel y MÉRIDA TORO, Julián, *Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX*, Siglo XXI, Madrid, 1978.
- BARCALA MUÑOZ, Andrés, “Tierra, familia y política. Los inicios del caciquismo en la Vega Baja del Segura”, Roura i Aulinas, Lluís y Fuentes Aragonés, Juan Francisco (coordinadores.), *Sociabilidad y liberalismo en la España del siglo XIX: homenaje al profesor Alberto Gil Novales*, Editorial Milenio. Instituto de Estudios Altoaragoneses, Lleida, 2001.
- BARÓ PAZOS, Juan, *La Codificación del Derecho civil en España (1808-1889)*, Universidad de Cantabria, Santander, 1993.
- BARQUÍN GIL, Rafael, “Precios del trigo en el Norte de España (1814-1883), *VII Congreso de Historia Agraria. Baeza, 31 de mayo a 3 de junio de 1995: libro de comunicaciones*, Universidad de Jaén, Universidad Internacional de Andalucía, 1995.
- *Precios de trigo e índices de consumo en España: 1765-1883*, Universidad de Burgos, Burgos, 1995.
 - *Precios de trigo e índices de consumo en España. 1765-1883*, Universidad de Burgos, 2001.
- BARROS, Carlos, “Historia de las mentalidades, Historia social”, *Historia Contemporánea*, número 9, Universidad del País Vasco, 1993.

- BAYONA FERNÁNDEZ, Gloria, “Élites e instituciones como bloque de poder en Murcia (Evolución y reconversión. Siglo XIX-1ª mitad del siglo XX)”, *En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX: actas del IV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, vol. 1, 24-26 septiembre, 1998.
- BELTRÁN VILLALBA, Miguel, *Burguesía y liberalismo en la España del siglo XIX. Sociología de una dominación de clase*, Universidad de Granada, 2010.
- BENNASSAR, Bartolomé, *Valladolid en el Siglo de Oro: una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI*, Ayuntamiento de Valladolid, 1989.
- BENTABOL Y URETA, Horacio, *Las aguas de España y Portugal*, Est. tip. de la viuda é hijos de M. Tello, Impresor de Cámara de S. M., Madrid, 1900. Edición facsímil publicada por Ediciones El Viso, Madrid, 1995.
- BERNAL, A. M., *La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen*, Taurus, Madrid, 1979.
- BERNAL, A. M.; FLORENCIO PUNTAS, A., y MARTÍNEZ RUIZ, J. I., *El Empresariado Andaluz, en Perspectiva Histórica*, Escuela Andaluza de Economía, Sevilla, 2010.
- BERNAL, A. Miguel y LACROIX, Jacques, “Aspects de la sociabilité andalouse. Les associations sevillanes (XIXe - XXes.)”, *Mélanges de la Casa de Velázquez*, tome XI, É. des Hautes Études Hispaniques, Paris, 1975.
- BERNECKER, Walther L., *España entre tradición y modernidad. Política, economía, sociedad (siglos XIX y XX)*, Siglo XXI, Madrid, 2009.
- BLANCO, Alda, *Cultura y conciencia imperial en la España del siglo XIX*, Universitat de València, 2012.

- BLANCO GARCÍA, Julio, *Historia de las actividades financieras en Zaragoza. De la conquista de Zaragoza (1118) a la aparición del Banco de Aragón (1909)*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007.
- BONO, Emèrit, *Naranja y desarrollo. La base agrícola exportadora de la economía del País Valenciano y el modelo de crecimiento hacia afuera*, Universitat de València, 2010.
- BOTREL, Jean-François y PASTRANA, Luis, *La fundación del Casino de León en 1851*, F.M. Nueva Comuniación, S.L., León, 2002.
- BOULAIN, Jean, *Histoire de l'Agronomie en France*, Tec Doc, París, 1992.
- BOZAL FERNÁNDEZ, Valeriano, *Juntas revolucionarias: manifiestos y proclamas de 1868*, Cuadernos para el diálogo, número 7, Edicusa, Madrid, 1968.
- BRAOJOS, Alfonso, "La Sevilla Romántica (Aproximación histórica a sus rasgos sociales y políticos)", *El Gnomon: Boletín de estudios becquerianos*, número 2, año 1993.
- BREY, Gérard, "La sociabilidad burguesa en la Andalucía de Isabel II (1833-1868)", *Les sociabilités dans le monde hispanique (XV^e-XX^e siècle). Formes, lieux et représentations*, Brenot, Anne M. y Martín, Luis P., (eds.), Université de Valenciennes, 2000.
- BURGUERA, Mónica, "La política de los paisajes campesinos en la ciudad: mujeres, niños y resistencia familiar en la Valencia de la segunda mitad del siglo XIX", Burguera, Mónica, y Schmidt-Novara, Christopher (eds.), *Historias de España Contemporánea. Cambio social y giro cultural*, Universitat de València, 2008.
- BUSTOS RODRÍGUEZ, Manuel, *Burguesía de negocios y capitalismo en Cádiz: los Colarte (1650-1750)*, Excma. Diputación de Cádiz, 1991.

CABRAL CHAMORRO, Antonio, “Decadencia y crisis de la Sociedad Económica de Sanlúcar de Barrameda: La respuesta de Herranz Dávila a la circular del Consejo de Castilla en fecha de 14 de julio de 1786”, *Estudios Regionales*, número 38, Universidades Públicas de Andalucía, 1994.

CABO ALONSO, Ángel, “La Arnuña y su evolución económica”, *Estudios Geográficos*, números 58 y 59, año 1955.

CABRERA, Mercedes, *La patronal ante la II República. Organizaciones y estrategia (1931-1936)*, Siglo XXI, Madrid, 1983.

Cafè i quilombo. Els diaris de viatge de Joaquim Miret i Sans (1900-1918), Edició crítica i estudi a cura de Philip D. Rasico, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 2005.

CALATAYUD GINER, Salvador, “Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 5, 1993.

CALATAYUD, Salvador; MILLÁN, Jesús y ROMERO, M^a Cruz, “El ideal del propietario agrícola y estabilidad de la sociedad de clases. Discurso y gestión en la nobleza valenciana del siglo XIX”, *VIII Congreso de Historia Agraria. Salamanca, 28-30 de mayo de 1997*, Universidad de Salamanca, Departamento de Economía e Historia Económica, 1997.

- “El Estado en la configuración de la España contemporánea. Una revisión de los problemas historiográficos”, en Calatayud, S.; Millán J., y Romeo, M. C., eds., *Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques*, Universitat de València, 2009.

CALVO CABALLERO, Pilar, *Defensa de intereses y cultura de la patronal castellano-leonesa (1876-1931)*, Tesis de doctorado, Universidad de Valladolid, 1999.

- "El modelo asociativo patronal palentino (1876-1931), entre representativo y singular de Castilla", *Asociacionismo en la España contemporánea: vertientes y análisis interdisciplinar*, Maza Zorrilla,

Elena (coordinadora), Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2003.

- “La identidad corporativa de los trigueros castellano-leoneses: gestación, naturaleza y proyección política”, Beramendi, Justo y Baz, M^a Xesús (coords.), *Memoria e Identidades. VII Congreso da Asociación de Historia Contemporánea. Santiago de Compostela-Ourense, 21-24 de setembro de 2004*, Universidad de Santiago de Compostela, 2004.

CALZADA DEL AMO, Esther, *Germán Gamazo. Poder político y redes sociales en la Restauración (1840-1901)*, Marcial Pons, Madrid, 2011.

CAMINAL I BADIA, Monserrat, *L’Institut Agrícola Català de Sant Isidre (1851-1901)*, Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, 1979.

- “La fundació de l’Institut Agrícola Català de San Isidre: els seus homes i les seves activitats (1851-1901)”, *Recerques*, número 22, Universitat Pompeu Fabra, 1989.

CAMPS I ARBOIX, Joaquim de, *Història de l’agricultura catalana*, Editorial Tàber, Barcelona, 1969.

CANAL I MORELL, Jordi, “La sociabilidad en los estudios sobre la España contemporánea”, *Historia Contemporánea*, número 7, Universidad del País Vasco, Bilbao, 1992.

- “Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895). De hombre de Estado a conspirador compulsivo”, en Burdiel, Isabel y Pérez Ledesma, Manuel, *Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX*, Espasa Calpe, Madrid, 2000.

CANO PAVÓN, José Manuel, Cano Pavón, José Manuel, *La Escuela Industrial Sevillana (1850-1866). Historia de una experiencia frustrada*, Universidad de Sevilla, 1996.

- “La Sociedad Sevillana de Emulación y Fomento: aproximación a su historia”, en *Archivo Hispalense. Revista histórica, literaria y artística*, Tomo LXXXIII, número 254, Sevilla, año 2000.

CÁNOVAS SÁNCHEZ, Francisco, *El partido moderado*, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1982.

CARASA, Pedro (dir.), *Élites castellanas de la Restauración. Una aproximación al poder político en Castilla*, 2 vols., Salamanca, 1997.

- *Élites castellanas de la Restauración. Diccionario biográfico de Parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923)*, Vol. I, Salamanca, 1997.

- “Un análisis microhistórico del poder local en Castilla: La familia Aparicio y Ruíz en la ciudad de Burgos durante la Restauración”, Sánchez Mantero, Rafael (ed.), *En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX: actas del IV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, vol. 1, 24-26 septiembre, 1998.

CARMONA, Juan, *Aristocracia terrateniente y cambio agrario en la España del siglo XIX: la casa de Alcañices (1790-1910)*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 2001.

CARNERO I ARBAT, Teresa, *Expansión vinícola y atraso agrario (1870-1900)*, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980.

CARO CANCELA, Diego, “Las élites locales de Jerez, entre el absolutismo y el liberalismo (1808-1823)”, Caro Cancela, Diego (ed.), *El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868). Política, economía y sociabilidad*, Universidad de Cádiz, Cádiz, 2005.

- *Diccionario biográfico de Parlamentarios de Andalucía, 1810-1869 A/G*, Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces, Sevilla, 2010.

CARR, Raymond, *España 1808, 1975*, Ariel Historia, Barcelona, 2008.

CARRERAS, Albert, “La industrialización: una perspectiva a largo plazo”, *Papeles de Economía Española*, número 73, año 1997.

CARRERAS I ODRIOZOLA, Albert, “La industrialización: una perspectiva a largo plazo”, *Papeles de economía española*, número 73, Ejemplar dedicado a los nuevos historiadores ante el desarrollo contemporáneo de España, Fundación de las Cajas de Ahorros, 1997.

CARTANÀ I PIÑÉN, Jordi, “Las estaciones agronómicas y las granjas experimentales como factor de innovación en la agricultura española contemporánea (1875-1920)”, *Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales*, Universidad de Barcelona, número 69, 1 de agosto de 2000.

- Cartañà i Pinén, Jordi, *Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo XIX*, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2005.

CASTÁN ANDOLZ, Ignacio Javier, “La sociología del carlismo durante la guerra de los «matiners»”, *Hispania Nova: Revista de historia contemporánea*, número 2, años 2001-2002.

CASTELLS, Irene y MOLINER, Antonio, *Crisis del Antiguo Régimen y Revolución Liberal en España (1789-1845)*, Ariel Practicum, Barcelona, 2000.

CASTELLANO, Juan Luis, *Luces y reformismo. Las Sociedades Económicas de Amigos del País del Reino de Granada en el siglo XVIII*, Diputación Provincial-Universidad de Granada, Granada, 1984.

CASTILLO GARCÍA, José Vicente, *La política de los camaleones. Los conservadores valencianos durante la Restauración (1875-1923)*, Universitat de València, 2002.

CASTRILLEJO IBÁÑEZ, Félix M^a, *La desamortización de Madoz en la provincia de Burgos (1855-1869)*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987.

- “Transformaciones en los grupos sociales de compradores”, *Ayer*, número 9, año 1993.

CASTRO, Concepción de, *La Revolución Liberal y los municipios españoles (1812-1868)*, Alianza Editorial, Madrid, 1979.

- CASAUS BALLESTER, María José, “La repercusión del decreto de 1811 y de la ley de 1823 en los señoríos nobiliarios a través de la casa ducal e Hjar”, *Cuadernos de Investigación Histórica*, número 22, Fundación Universitaria Española, 2005.
- CECILIA ZULUETA, María, "La prensa agrícola del porfiriato como Fuente para la historia económica. (Ensayo de fuentes), *Revista Semestral Signos Históricos*. Volumen 1, número 2, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, julio-diciembre 1999.
- CLARK, Gregory, “The Agricultural Revolution and the Industrial Revolution: England, 1500-1912”, University of California, Davis, June 2002.
- CLAVERO, Bartolomé, *Mayorazgo. Propiedad feudal en Castilla, 1369-1836*, Siglo XXI, Madrid, 1989.
- CLAVERO, Bartolomé y otros, *Estudios de la Revolución Burguesa en España*, Madrid, 1979.
- COLMEIRO Manuel, *Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII*, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 5ª edición, Madrid, 1979.
- COLOMER VIADEL, Antonio y LÓPEZ GONZÁLEZ, José Luis, “Las garantías jurisdiccionales del derecho de reunión y manifestación”, *Los derechos fundamentales y libertades públicas: XII Jornadas de Estudio*, Vol. II, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia, Madrid, 1992.
- COLL MARTIN, Sebastián y GUTIÉRREZ BRINGAS, Miguel Ángel, “Estimando cantidades a partir de precios: el caso de la agricultura española del siglo XIX”, en *VII Congreso de Historia Agraria. Baeza, 31 de mayo a 3 de junio de 1995: libro de comunicaciones*, Universidad de Jaén, Universidad Internacional de Andalucía, 1995.
- COLLINS, E. J. T., “Ciencia, educación y difusión de la cultura agrícola en Inglaterra desde la fundación de la Royal Society hasta la Gran Guerra (1660-1914), en *Noticiario de Historia Agraria*, número 8, año 1994.

- “Labour supply and demand in European agricultura 1800-1880”, in Jones, E. L. y Woolf, S. J. (edited by), *Agrarian Change and economic development. The historical problems*, First published in 1969. Reprinted in 2006 by Routledge, Abingdon, Oxon.

- COMELLAS, José Luis, *Del antiguo al nuevo régimen: hasta la muerte de Fernando VII*, Rialp, Madrid, 1981.

- COMÍN, Francisco, “El sector público y la economía: Hacienda, regulación y proteccionismo en la España liberal”, en Fernández García, Antonio (coord.), *Los fundamentos de la España liberal (1834-1900). La sociedad, la economía y las formas de vida*, Espasa Calpe, Madrid, 1997.

- COMÍN COMÍN, Francisco, y VALLEJO POUSADA, Rafael, *Alejandro Mon y Menéndez (1801-1882): Pensamiento y reforma de la Hacienda*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2002.

- COMÍN, Francisco; MARTÍN ACEÑA, Pablo, y VALLEJO, Rafael (editores), *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2006.

- CONGOST, Rosa, "Presión demográfica, relaciones de clase y producción agrícola en la región de Gerona (1768-1862)", *Agricultura y Sociedad*, número 50, enero-marzo 1989.

- *Els propietaris i els altres. La regió de Girona 1768-1862*, EUMO Editorial, Vic, 1990.

- “De pagesos a hisendats: Reflexions obre l’anàlisi dels grups socials dominants. La regió de Girona (1780-1840)”, en *Recerques*, número 35, Universitat Pompeu Fabra, 1997.

- CORONAS, SANTOS, Santos M., *Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el siglo XVIII*, Ministerio para las Administraciones Públicas, Madrid, 1991.

CUÉLLAR VILLAR, Domingo, "Política de obras públicas y políticas liberales. El Ministerio de Fomento (1851-1874)", *Revista de Historia TsT: Transportes, Servicios y Telecomunicaciones*, número 2, año 2002.

CUCÓ, Alfons, "Las agitaciones campesinas de la Huerta de Valencia (1878-1879). Sus orígenes históricos", *Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història*, Universitat de València, número 24, año 1974.

- *Republicans i camperols revoltats*, Eliseu Climent Editor, Valencia, 1975.

CHARLE, Christophe (ed.), *Histoire sociale, histoire globale?*, Maison des Sciences de l'Homme, París, 1993.

CHARMASSON, Thérèse; LELORRAIN, Anne-Marie et RIPA, Yannick, *L'enseignement agricole et vétérinaire de la Révolution à la Libération*, Institut National de Recherche Pédagogique, Publications de la Sorbote, Paris, 1992.

DARDÉ, Carlos, *El partido liberal de la Restauración: 1875-1890*, Tesis inédita, Madrid, 1973.

- "El comportamiento electoral en España, 1875-1923", *Documentos de Trabajo del Seminario de Historia Contemporánea*, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Documentos de Trabajo del Seminario de Historia Contemporánea, volumen I, 1996.

- *Historia de España. La Restauración, 1875-1902. Alfonso XII y la regencia de María Cristina*, Historia 16, vol. 24, Madrid, 1996.

- "El conservadurismo canovista", en Tusell, J., Montero, J., y Marín, J. M. (Eds.), *Las derechas en la España contemporánea*, Madrid, 1997.

DEMERSON, Jorge y Paula, y AGUILAR PIÑAL, Francisco, *Las Sociedades Económicas de Amigos del País en el siglo XVIII*. Guía del investigador, San Sebastián, 1974.

- “La decadencia de las Reales Sociedades de Amigos del País”, *Boletín del Centro de Estudios del siglo XVIII*, números 4 y 5, Universidad de Oviedo, 1977.

Desamortización y Hacienda Pública, presentada por Francisco Tomás y Valiente, Tomo I, Ministerio de Economía y Hacienda, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el año 1986.

DÉSSERT, Gabriel, “Machinisme et agriculture dans la France du XIX^e siècle”, *Historical Papers, Communications historiques*, vol. 19, número 1, 1984.

DÍAZ MARÍN, Pedro, *Las estructuras de poder durante la década moderada: Alicante, 1844-1854*, Tesis Doctoral dirigida por Emilio La Parra López, Departamento de Humanidades Contemporáneas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Alicante, 1997.

- “Crisis de subsistencia y protesta popular: los motines de 1847”, *Historia Agraria*, número 30, SEHA, agosto 2003.

DÍEZ ESPINOSA, J. R., *Revolución liberal en Castilla: tierra, nobleza y burguesía*, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987.

- “Estructura de la propiedad y revolución liberal en Valladolid. Tierra, nobleza y burguesía”, Saavedra, Pegerto y Villares, Ramón, eds., *Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. Volumen 1. «Os señores da terra»*, Editorial Crítica, Barcelona, 1991.

DÍEZ RODRÍGUEZ, Fernando, *Prensa agraria en la España de la Ilustración: el Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los Párrocos (1797-1808)*, Servicio de Publicaciones Agrarias, Madrid, 1980.

DOMÍNGUEZ LEÓN, José, *La sociedad sevillana en la época isabelina. Una visión a través de la religiosidad (1833-1868)*, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1999.

DUQUE, Félix, *La Restauración. La escuela hegeliana y sus adversarios*, Akal, Madrid, 1999.

EGIDO, Teófanés, *Pobreza y sociedad en España: siglos XV-XVIII*, Institut Universitaire Europeen, Florencia, 1980.

El derecho de reunión, Subdirección General de Estudios y Documentación, Ministerio del Interior, Madrid, 1984.

ENCISO RECIO, Luis Miguel, *Las Sociedades Económicas en el Siglo de la Luces*, Real Academia de la Historia, Madrid, 2010.

ESCALERA REYES, Javier, *Sociabilidad y asociacionismo: Estudio de Antropología social en el Aljarafe sevillano*, Sevilla, 1990.

ESCARTÍN GONZÁLEZ, Eduardo, *Estudio y traducción de la obra: Reflexiones sobre la formación y la distribución de las riquezas de R. J. Turgot (noviembre 1776)*, Universidad de Sevilla, 2003.

ESPÍN CÁNOVAS, Diego, “Fermín Caballero y el pensamiento jurídico agrario español en el siglo XIX”, en Carrasco Perera, Ángel y Carretero García, Ana (coordinadores), *El Derecho Agrario entre la Agenda 2000 y la Ronda del Milenio. Actas del VIII Congreso Nacional de Derecho Agrario, Toledo 16 y 17 de noviembre de 2000*, Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2001.

ESTAPÉ FABIÁN, *Textos Olvidados. Presentación y selección de Fabián Estapé y Rodríguez*, Instituto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, 1973.

FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor, *Cánovas, su vida y su política*, segunda edición, Madrid, 1972.

- *Historia política de la España contemporánea*, vol. I, Tercera edición, Madrid, 1972.

FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy, “La enseñanza de la agricultura en la España del siglo XIX”, *Agricultura y Sociedad*, número 56, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990.

FERNÁNDEZ ESCUDERO, Agustín, "El duque de Sevillano: banquero de la revolución de 1854", *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, número 11. Separata, 2013.

FERNÁNDEZ NAVARRETE, Donato, "La evolución histórica de la Contribución Territorial Rústica", *Agricultura y Sociedad*, número 8, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1978.

FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, "La política agraria del Estado español contemporáneo hasta 1936. Del propietario innovador al fomento de la innovación en la pequeña explotación", *Historia Contemporánea*, número 17, 1998.

FIGUEROLA, Laureano, *Estadística de Barcelona en 1849*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1968.

FLAQUER MONTEQUI, Rafael, "Los derechos de asociación, reunión y manifestación", *Revista Ayer*, número 34, año 1999.

FLOMBART, Vicente, *Absolutismo e Ilustración: la génesis de las Sociedades Económicas de Amigos del País*, Real Sociedad Económica de Amigos del País, Valencia, 1979.

FONTANA I LÁZARO, Josep, "Colapso y transformación del comercio exterior español entre 1792 y 1827", *Moneda y Crédito*, 1970.

- *La quiebra de la Monarquía Absoluta 1814-1820*, Ariel, Barcelona, 1972.

- *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Ariel, Barcelona, 1973.

- *La Revolución Liberal (Política y Hacienda en 1833-1845)*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1977.

- "La crisis agraria de comienzos del siglo XIX y sus repercusiones en España", García Sanz, Ángel y Garrabou Ramon (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea*, vol. 1, Crítica, Barcelona, 1985.

- “La desamortización de Mendizábal y sus antecedentes”, García Sanz, Ángel y Garrabou, Ramon (eds.), *Historia de la España Contemporánea I. Cambio social y nuevas formas de propiedad (1800-1850)*, Crítica, Barcelona, 1985.

- *La época del liberalismo*, Crítica y Marcial Pons, Barcelona, 2007.

FORNIÉS CASALS, Casals, José Francisco, *La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País*, Madrid, 1978.

FRADERA, Josep María., “El comercio de cereales y la prohibición de 1820 (el caso del mercado catalán)”, *Agricultura y Sociedad*, número 30, Ministerio de Agricultura, 1984.

- *Indústria i mercat: les bases comercials de la indústria catalana moderna (1814-1845)*, Crítica, Barcelona, 1987.

FRAILE BALBÍN, Pedro, *Industrialización y grupos de presión. La economía política de la protección en España 1900-1950*, Alianza, Madrid, 1991.

FRIERA ÁLVAREZ, Marta, *La desamortización de la propiedad de la tierra en el tránsito del Antiguo Régimen al liberalismo (La desamortización de Carlos IV)*, Caja Rural de Asturias, Gijón, 2007.

FUERTE, Jaime, *Real Círculo de Labradores y Propietarios de Sevilla, 150 años al servicio de la sociedad sevillana*, Almuzara, Sevilla, 2009.

FUMIAN, Carlo, “Propietari, imprenditori, agronomi”, en Lanaro, S. (ed.), *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. Il Veneto*, Turín, 1987.

GALA DURÁN, Carolina, y ESPUNY ROMÁS, María Jesús, “Ordenación jurídica de las relaciones laborales (II)”, *Teoría de las relaciones laborales. Desafíos*, Blanch Ribas, Josep María (coordinador), Barcelona, 2003.

GALLEGO MARTÍNEZ, Domingo, “Historia de un desarrollo pausado: integración mercantil y transformaciones productivas de la agricultura española (1800-1936)”, Pujol, Josep; González de Molina, Manuel; Fernández Prieto, Lourenzo; Gallego, Domingo y Garrabou,

Ramon (autores), *El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea*, Editorial Crítica, Barcelona, 2001.

- “La formación de los precios del trigo en España (1820-1869): el contexto internacional”, *Historia Agraria*, número 34, diciembre 2004.

GALLEGO PALOMARES, José Ángel, “El asociacionismo en la reproducción del poder. El Casino de Alcázar”, *Notas históricas sobre Alcázar de San Juan y su Casino*, Patronato Municipal de Cultura, Alcázar de San Juan, 2010.

- "Nuevas y viejas elites manchegas en un entorno económico renovado (1850-1936)", *Notas históricas sobre Alcázar de San Juan y su Casino*, Patronato Municipal de Cultura, Alcázar de San Juan, 2010.

GAMERO ROJAS, Mercedes, “Nobleza y desvinculación en la Sevilla de fines del Antiguo Régimen”, en *Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX)*, Tomo IV, Sarasa Sánchez, Esteban y Serrano Martín, Eliseo (eds.), Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1993.

GARCÍA ABELLÁN, Juan García, *Curso de Derecho Sindical. Segunda edición revisada y puesta al día*, Universidad de Murcia, 1986.

GARCÍA ÁLVAREZ COQUE, José María, “Los proyectos de la *Económica*. Prestigio, poder y modernidad en el desarrollo capitalista valenciano”, Bas Martín, Nicolás, y Portolés, Manuel (coordinadores), *Ilustración y progreso. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2009)*, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, año 2010.

GARCÍA GARCÍA, Jesús María, *Prensa y vida cotidiana en Salamanca (siglo XIX). Aproximación a la historia del periodismo salmantino*, Acta Salmanticensia, Estudios Históricos y Geográficos, número 70, Universidad de Salamanca, año 1990.

GARCÍA GUERRA, Elena María, *Moneda y arbitrios: consideraciones del siglo XVII*, CSIC, Madrid, 2003.

GARCÍA PÉREZ, Juan, “Efecto de la desamortización sobre la propiedad y los cultivos”, *Ayer*, número 9, 1993.

GARCÍA RUIPÉREZ, Mariano, *Nuevas aportaciones al estudio de las Sociedades Económicas de Amigos del País*, CSIC, Madrid, 1988.

- *Manual de Hacienda para archiveros municipales*, Archivo General de la Región de Murcia, Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, 2008.

GARCÍA SANZ, Ángel, “Introducción. Crisis de la agricultura tradicional y revolución liberal (1800-1850)”, García Sanz, Ángel y Garrabou Ramon (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985.

- “Desarrollo del capitalismo agrario en Castilla y León en el siglo XIX. Algunos testimonios, algunas reflexiones y un epílogo”, Yun Casalilla, Bartolomé (coord.), *Estudios sobre el capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos XIX y XX)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991.

GARCÍA SANZ, Fernando, *Historia de las relaciones entre España e Italia. Imágenes, Comercio y Política Exterior (1890-1914)*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1993.

GARCÍA-BAUERO GONZÁLEZ, Antonio, *La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración*, Diputación Provincial de Cádiz, 1991.

GARRABOU, Ramon, “Sobre la formació del mercat català en el Segle XVIII. Una primera aproximació a base dels preus dels grans a Tárrega (1732-1811)”, en *Recerques*, número 1, 1970.

- “La crisi agrària de finals del s. XIX: una etapa del desenvolupament del capitalisme”, *Recerques*, número 5, año 1975.
- “La información arancelaria sobre el comercio de cereales y de la lana de 1847: datos para la historia de la formación del mercado interior”, *Agricultura y Sociedad*, enero-marzo de 1979.

- “Un testimonio de la crisis de subsistencia de 1856-57: el expediente de la Dirección General de Comercio”, *Agricultura y Sociedad*, número 14, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1980.
- *Un fals dilema. Modernitat o endarreriment de l'agricultura valenciana (1850-1900)*, Institució Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'estudis i investigació, Valencia, 1985.
- “Sobre el atraso de la mecanización agraria en España (1850-1933), en *Agricultura y Sociedad*, número 57, octubre-diciembre de 1990.
- “Revolución o revoluciones agrarias en el siglo XIX: su difusión en el mundo mediterráneo”, Sánchez Picón, Andrés (coordinador), *Agriculturas mediterráneas y mundo campesino*, Instituto de Estudios Almerienses, Almería, 1994.
- “Crecimiento agrario, atraso y marco institucional”, Pujol, Josep; González de Molina, Manuel; Fernández Prieto, Lourenzo; Gallego, Domingo y Garrabou, Ramon (autores), *El pozo de todos los males. Sobre el atraso en la agricultura española contemporánea*, Editorial Crítica, Barcelona, 2001.

GARRABOU, Ramon y SANZ, Jesús (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985.

GARRIDO, Samuel, PLANAS I MARESMA, Jordi y SABIO, Alberto, “Asociacionismo y cooperativismo agrario: España en el contexto europeo”, *Historia Agraria*, número 40, Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA), Universidad de Valladolid, diciembre 2006.

GARZÓN, Dionisio, *Desde el brocal del pozo. De la universidad de Salamanca al Muro de Berlín. Las teorías y la práctica en política*, AGABA Ediciones, Madrid, 2007.

GAVIGNAUD-FONTAINE, Geneviève, *Les campagnes en France au XIX^e siècle (1780-1914)*, Tome I, Ophrys, Paris, 1990.

GEAS (Grupo de Estudios de Asociacionismo y Sociabilidad), “Transformaciones agrarias y cambios en la funcionalidad de los poderes locales en la Alta Andalucía, 1750-1950”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 10, 1995.

- *España en sociedad. Las asociaciones a finales del siglo XIX*, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 1998.

- *Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898*, Cuenca, 1999.

GIL NOVALES, Alberto, *Las Sociedades Patrióticas (1820-1823)*, Tecnos, Madrid, 1975.

GIL SOTO, José Luis, “La agricultura en el siglo XIX”, Espiga Hidalgo, Sara (coordinadora), *Dioses, mitos y demonios: la agricultura extremeña en el siglo XIX*, Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, Badajoz, 2009.

GIRALT I RAVENTÓS, Emili, *Empresaris, nobles i vinyaters. 50 anys de recerca històrica*, Universitat de València, 2002.

GODDARD, N. “Agricultural Societies”, en Mingay, G. (ed.), *The Victorian Countryside*, Volume I, Routledge and Kegan Paul, London, 1981.

GONZÁLEZ TURNO, Isabel, *Sevilla, banquetes, tapas, cartas y menús, 1863-1995. "Antropología de la alimentación"*, Área de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 1996.

Grupo de Estudios Agrarios, “Transformaciones agrarias y cambios en la funcionalidad de los poderes locales en la Alta Andalucía, 1750-1950”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 10, SEHA, año 1995.

- “Propiedad y explotación en la Historia Agraria de Andalucía. Una visión de conjunto”, González de Molina, Manuel (Editor), *La Historia de Andalucía a debate. II. El campo andaluz*, Diputación Provincial de Granada, Anthropos Editorial, Barcelona, 2002.

Grupo de Estudios de Historia Rural, “Los precios del trigo y de la cebada, 1874-1906”, Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985.

- “Más allá de la «propiedad perfecta». El proceso de privatización de los montes públicos españoles (1859-1926)”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 8, 1994.

Grupo de Historia de los Precios en Andalucía, *Estudio de los precios agrarios y de la formación del mercado regional en Andalucía en la segunda mitad del siglo XIX*, Universidad de Jaén, 2005.

Grupo de Historia Social Agraria Andaluza, “Terratenientes, labradores y poder local en Córdoba (siglo XIX)”, VI Reunión del Seminario de Historia Agraria, Centro de Estudios Rurales de Cabezón de la Sal, Cantabria, 1993.

GÓMEZ CARBONERO, Sonsoles, “Mecanismos y estrategias del poder local en el mundo rural castellano durante la Restauración: Villalón de Campos”, *En torno al 98: España en el tránsito del siglo XIX: actas del IV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, vol. 2, 24-26 septiembre, 1998.

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Juan, *Formar hombres de bien. La enseñanza en el Puerto de Santa María en el siglo XIX*, Universidad de Cádiz, 2006.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, *Repartimiento de El Puerto de Santa María*, Universidad de Sevilla, 2002.

GONZÁLEZ DE MOLINA NAVARRO, Manuel, *Desamortización, deuda pública y crecimiento económico en Andalucía, 1820-1823*, Diputación Provincial de Granada, 1985.

GONZÁLEZ DIOS, Estíbaliz, “La reestructuración de las antiguas comunidades rurales guipuzcoanas en Sociedades de Propietarios”, Comunicación presentada a la 2ª Sesión del XI Congreso de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, entre los días 15 al 18 de junio de 2005,

Organizado por la Sociedad Española de Historia Agraria (SEHA),
Universidad de Valladolid.

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel, “Repoblación de El Puerto de Santa María”,
González Jiménez, Manuel (Ed.), *Repartimiento de El Puerto de Santa
María*, Universidad de Sevilla, 2002.

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, R. M., *La Real Sociedad Económica de Amigos del
País de León*, León, 1981.

GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, “La desamortización eclesiástica en el
trienio liberal (1820-1823). Un primer acercamiento a los datos
generales”, *Estudios de Historia Social*, números 36 y 37, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986.

- “Las bases sociales de los poderes locales y las transformaciones de
la sociedad agraria en la España del siglo XIX”, *Noticiario de Historia
Agraria*, número 6, 1993.

GROENEWEGEN, Peter, *The economics of A. R. J. Turgot*, The Hagues, M.
Nijhoff, edición de 1977.

GUAITA, Aurelio, *El Ministerio de Fomento, 1832-1931*, Instituto de Estudios
de Administración Local, Madrid, 1984.

GUEREÑA, Jean-Louis, “Fuentes para la historia de la sociabilidad en la
España contemporánea”, *Estudios de Historia Social*, números 50-51,
1989.

- “Espacios y formas de la sociabilidad en la España contemporánea”,
Revista Hispania, Volumen 63/2, número 214, Instituto de Historia
(CSIC), Madrid, 2003.

GUEREÑA, J. L. y TIANA, A. (eds.), *Clases populares, Cultura, Educación.
Siglos XIX-XX*, Casa de Velázquez y UNED, Madrid, 1989.

GUERRERO, Ana Clara, *Viajeros británicos en la España el siglo XVIII*,
Aguilar, Madrid, 1990.

- GUERRERO LATORRE, Ana Clara, JULIÁ DÍAZ, Santos y TORRES BALLESTEROS, Sagrario, *Historia económica y social moderna y contemporánea de España. Tomo I. Siglos XV-XIX*, UNED, 4ª reimpresión, Madrid, 1997.
- GUTIÉRREZ BRINGAS, Miguel Ángel, “La productividad agraria e España, 1752-1945”, *VII Congreso de Historia Agraria. Baeza, 31 de mayo a 3 de junio de 1995: libro de comunicaciones*, Universidad de Jaén, Universidad Internacional de Andalucía, 1995.
- GUTIÉRREZ NIETO, Juan Ignacio, “El pensamiento económico, político y social de los arbitristas”, *Historia de España Menéndez Pidal, El siglo del Quijote (1580-1680): Religión, filosofía, ciencia*, Espasa Calpe, Madrid, 1986.
- HAMILTON, Earl J., *American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650*, Harvard University Press, Cambridge, 1934.
- HELGUERA, Juan, “La Ilustración: una recuperación incompleta (siglo XVIII)”, *Historia de Castilla y León*, Editorial Ámbito, Tomo 8, Valladolid, 1986.
- HÉRAN, François, *Tierra y parentesco en el campo sevillano: la revolución agrícola del siglo XIX*, Serie estudios, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980.
- “Tierra y parentesco en el campo sevillano. La revolución agrícola del siglo XIX: los comienzos de una agricultura capitalista, Garrabou, Ramon y Sanz, Jesús (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985.
- HERNÁNDEZ MONTALBÁN, Francisco J., *La abolición de los señoríos en España (1811-1837)*, Universitat de València, Valencia, 1999.
- HERR, Richard, “Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV”, *Moneda y Crédito*, número 118, 1971.

- “El significado de la desamortización en España”, *Moneda y Crédito*, número 131, 1974.
 - “Spain”, D. Spring (ed.), *European Landed Elites in the Nineteenth Century*, Baltimore, 1977.
 - *España y la Revolución del siglo XVIII*, Aguilar, Madrid, 1979.
- HOBBSBAWM, Eric, *La era de la revolución, 1789-1848*, Crítica, Barcelona, 2005.
- HONRUBIA, José, “El proceso de modernización de la agricultura en el contexto de la economía valenciana”, Honrubia López, José, coord., *Globalización y desarrollo local. Una perspectiva valenciana*, Universitat de València, 2004.
- HOYO SIMÓN, Josxé Félix del, *Casino de Tolosa, 1885-1985*, Zarautz, 1986.
- HUDSON, K., *The Bath and West: A Bicentenary History*, Bradford o Avon, Monraker Press, 1976; M. D. Hall, Vance, *A history of the Yorkshire Agricultural Society 1837-1987: in celebration of the 150th anniversary of the Society*, Batsford, 1987.
- IZARD, Miquel, *Manufactureros, industriales y revolucionarios*, Editorial Crítica, Barcelona, 1979.
- JAS, Natalie, “La promoción de la investigación agronómica en Francia durante el siglo XIX. Louis Grandeau, las estaciones agronómicas y el control de los fertilizantes”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 13, SEHA, año 1997.
- JUARRANZ DE LA FUENTE, José María, *Las revoluciones de 1848*, Akal, Madrid, 1984.
- JULVE BENEDICTO, Antonio, “Las Cámaras Agrarias”, en *Revista de Estudios Agrosociales*, número 112, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1980.

- KONING, Niek, *The Failure of Agrarian Capitalism: Agrarian politics in the United Kingdom, Germany, the Netherlands and the USA, 1846-1919*, Routledge and Taylor & Francis e-Library, London and New York, 2001.
- KRUGMAN, Paul R. y VELS, Robin, *Introducción a la economía. Microeconomía*, traducción de Sonia Benito Muela y Jesús Ruiz Andújar, Editorial Reverté S. A., Barcelona, 2006.
- LAGUNA PLATERO, Antonio y MARTÍNEZ GALLEGÓ, Francesc A., “Moderados, progresistas y unionistas (1844-1868)”, en Chust, Manuel (Dir.), *Historia de la Diputación de Valencia*, Diputació de València, Valencia, 1995.
- LASSO GAITE, Juan Francisco, *Crónica de la codificación española, vol. 6. Codificación mercantil*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1999.
- LAYANA ILUNDAIN, César, *Elecciones generales en Navarra (1876-1890)*, Universidad Pública de Navarra, 2011.
- LECUYER, Marie-Claude, “Algunos aspectos de la sociabilidad en España hacia 1840”, *Estudios de Historia Social*, números 50-51, 1989.
- “Las aportaciones de los historiadores e hispanistas franceses: Balance de una década”, *Sociabilidad en la España contemporánea: historiografía y problemas metodológicos*, Maza Zorrilla, Elena (Coordinación), Instituto Universitario de Historia, Simancas, Universidad de Valladolid, 2002.
- LEÓN, Virginia, *La Europa Ilustrada*, Istmo, Madrid, 1989.
- LIVI BACCI, M., “Fertility and nuptiality changes in Spain from the late 18th to the early 20th century”, *Population Studies*, number 22, 1968.
- LOMBARDEO SUÁREZ, Manuel, *Otro don Juan. Vida y pensamiento de Juan Valera*, Editorial Planeta, Barcelona, 2004.
- LÓPEZ-CORDÓN, María Victoria, *La revolución de 1868 y la I República*, Siglo XXI, Madrid, 1976.

- LÓPEZ ESTUDILLO, Antonio, “Crisis finisecular, transformaciones agrarias y atraso económico. Andalucía 1870-1930”, González de Molina, Manuel (Editor), *La Historia de Andalucía a debate. II. El campo andaluz*, Diputación Provincial de Granada, Anthropos Editorial, Barcelona, 2002.
- LÓPEZ GONZÁLEZ, José Luis, *El derecho de reunión y manifestación en el ordenamiento constitucional español*, Madrid, 1995.
- LÓPEZ LINAJE, Javier y ARBEX, Juan Carlos, *Agricultores, botánicos y manufactureros en el siglo XVIII*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1989.
- LÓPEZ MARTÍNEZ, Antonio Luis, *Ganaderías de lidia y ganaderos. Historia y economía de los toros de lidia en España*, Universidad de Sevilla, 2002.
- LÓPEZ SANTAMARÍA, Jesús, y ESTEBAN DE VEGA, Mariano, “El Congreso Agrícola de Salamanca de 1887. Un episodio de la movilización proteccionista castellana”, en *Studia histórica. Historia contemporánea*, número 4, Universidad de Salamanca, año 1986.
- LOSA SERRANO, Pedro y CÓZAR GUTIÉRREZ, Ramón, “Los pósitos municipales. El ejemplo de Tobarra (1753-1764)”, *El mundo rural en la España Moderna*, Aranda Pérez, Francisco José (coordinador), Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2004.
- LUQUE BALLESTEROS, Antonio, *Hacendados, labradores y agrónomos en el marco de la Administración Agraria, Córdoba, 1847-1885*, Diputación de Córdoba, 2011.
- LLANOS Y TORRIGLIA, Félix de, *Germán Gamazo, el sobrio castellano*, Espasa, Madrid, 1942.
- LLOPIS AGELÁN, Enrique, “Otras caras «menos amables» de la agricultura española contemporánea”, *Historia Agraria*, número 28, 2002.

- “España, la «revolución de los modernistas» y el legado del Antiguo Régimen”, Llopis, Enrique (coord.), *El legado económico del Antiguo Régimen en España*, Editorial Crítica, Barcelona, 2004.

LLUCH, Ernest, “El caso de la no fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País de Barcelona”, *Revista de Occidente*, número 115, octubre de 1972.

- *El pensament econonòmic a Catalunya (1760-1840). Els orígens ideològics del proteccionisme i la presa de consciència de la burgesia catalana*, Edicions 62, Barcelona, 1973.

- “La «gira triomfal» de Cobden per Espanya (1846)”, *Recerques; Història, economia i cultura*, numero 21, (Ejemplar dedicado a: Homenatge a Pierre Vilar). Vol. II, 1988.

- *Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración*, Crítica, Barcelona, 1999.

MACHICADO, Jorge, *Libertad de asociación profesional*, Universidad San Francisco Xavier, Sucre, 2010.

MAIER, Charles S., “La historia comparada”, *Studia Historica*, X-XI, Salamanca, 1992-1993.

MALATESTA, Maria, “Une nouvelle stratégie de reproduction: les organisations patronales agraires européennes (1868-1914)”, *Histoire, économie et société*, número 2, 1997.

MANERO, Fernando, *La industria en Castilla y León*, Editorial Ámbito, Valladolid, 1983.

MARCOS CHACÓN, Gonzalo, “Las organizaciones agrícolas en España”, *Revista de Estudios Agrosociales*, número 5, Ministerio de Agricultura, 1953.

MARTÍ, Manuel, “Los grupos agrarios en la política urbana del País Valenciano: Castelló de la Plana, ss. XIX-XX”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 11, 1996.

MARTÍ GILABERT, Francisco, *La desamortización española*, Rialp, Madrid, 2003.

MARTÍ Y THOMAS, J., “Amillaramientos. Medio seguro de llevarlos a cabo”, *Revista del Círculo Agrícola Salmantino*, número 386, sábado 8 de enero de 1881.

MARTÍN ARTILES, Antonio, “Teoría sociológica de las relaciones laborales”, Blanch Ribas, Josep Maria (coordinador), *Teoría de las relaciones laborales. Fundamentos*, Editorial VOC, Barcelona, 2003.

MARTÍN DE MARCO, José Antonio, *El Casino y el Círculo de la Amistad-Numancia 1848-1992*, Diputación Provincial de Soria, 1992.

MARTÍN JIMÉNEZ, Ignacio, *El sistema educativo de la Restauración: primaria y secundaria en el distrito universitario de Valladolid, (1875-1900)*, Consejería de Cultura y Turismo, Valladolid, 1994.

MARTÍN MARTÍN, José María, *Ensayo histórico sobre Boecillo*, Valladolid, 1995.

MARTÍNEZ DE SAS, María Teresa, *Cartas, comunicaciones y circulares de la Comisión Federal de la Región Española*, Ediciones de la Universitat de Barcelona, 1987.

MARTÍNEZ MARTÍN, Manuel, *Revolución liberal y cambio agrario en la Alta Andalucía (1750-1930)*, Universidad de Granada, 1995.

- *Mancha Real: un modelo de crecimiento agrario y campesinización, (1750-1875)*, Universidad de Jaén, 1995.

MARTÍNEZ RODA, Federico, *Valencia y las Valencias: su historia contemporánea (1800-1975)*, Fundación Universitaria San Pablo C.E.U., Valencia, 1998.

MARTÍNEZ RUIZ, Enrique, *La Casa de Borbón: ciencia y técnica en la España Ilustrada* (catálogo de la exposición celebrada en el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat [MUVIM], enero-marzo de 2006), Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Generalitat Valenciana, Valencia, 2006.

MARTÍNEZ RUIZ, José Ignacio, “La mecanización de la agricultura española: de la dependencia exterior a la producción nacional de maquinaria (1862-1932), en *Revista de Historia Industrial*, número 8, año 1995.

- *Trilladoras y tractores. Energía, tecnología e industria en la mecanización de la agricultura española (1862-1967)*, Universidad de Sevilla y Universitat de Barcelona, Sevilla, 2000.

- “El mercado internacional de cereales y harinas y el abastecimiento de la periferia española en la segunda mitad del siglo XVIII: Cádiz, entre la regulación y el mercado”, *Investigaciones de Historia Económica*, número 1, Universidad de Salamanca, 2005.

MARTÍNEZ VARA, Tomás, *Santander de villa a ciudad (un siglo de esplendor y crisis)*, Ayuntamiento de Santander, 1983.

- “Aproximación al comercio marítimo de Santander en los siglos XVIII y XIX”, en Martínez Vara, Tomás (coord.), *Mercado y desarrollo económico en la España contemporánea*, Siglo XXI, Madrid, 1986.

MARTÍNEZ VARA, Tomás y GUIGÓ, Miguel Ángel, “Fluctuaciones estacionales e integración de mercados en Santander y Castilla durante la primera mitad del siglo XIX,” *Studia Histórica. Historia Contemporánea*, número 17, AÑO 1999.

MATILDA TASCÓN, Antonio, *Catálogo de documentos notariales de nobles*, Instituto Salazar y Castro (CSIC), Madrid, 1987.

MAURI VILLANUEVA, Ramón, *La burguesía mercantil santanderina, 1700-1850: cambio social y de mentalidad*, Universidad de Cantabria, Santander, 1990.

MAURICE, J., MAGNIEN, B. y BUSSY GENEVOIS, D. (eds.), *Peuple, mouvement ouvrier, cultura dans l'Espagne contemporaine. Cultures populaires, cultures ouvrières en Espagne de 1840 à 1936*, Presses Universitaires de Vincennes, Saint-Denis, 1990.

MELARA SILVA, Ángel, *Historia del Casino de la Unión 1850-2005*, Badajoz, 2005.

MELCÓN BELTRÁN, Julia, *La formación del profesorado en España (1837-1914)*, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1992.

MILLÁN Y GARCÍA-VARELA, Jesús, “Poderes locales, conflictividad y cambio social en la España agraria. Del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 6, 1993.

- *El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo Segura en la época del liberalismo, 1830-1890*, Instituto de Cultura “Juan Gil-Albert”, Alicante, 1999.

MOLAS RIBALTA, Pedro, *Los gremios barceloneses del siglo XVIII. La estructura corporativa ante el comienzo de la Revolución Industrial*, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1970.

MOLINER I PRADA, Antoni, *Revolución burguesa y movimiento juntero en España: la acción de las juntas a través de la correspondencia diplomática y consular francesa, 1808-1868*, Milenio, Lleida, 1997.

MOLL, Isabel y SALAS Pere, “Las pequeñas élites agrarias y su participación en la vida política durante la segunda mitad del siglo XIX”, *Ayer*, número 48, año 2002.

MONTAÑÉS PRIMICIA, Enrique, “La consolidación del prohibicionismo en el comercio del trigo (1820-1847)”, Caro Cancela, Diego (coord.), *El primer liberalismo en Andalucía (1808-1868): política, economía y sociabilidad*, Universidad de Cádiz, 2005.

- *Grupos de presión y reformas arancelarias en el régimen liberal 1820-1870*, Universidad de Cádiz, 2009.

MORDENTI, Raul, "«Quaderni dal carcere» di Antonio Gramsci", *Letteratura Italiana Einaudi. Le opere. Il Novecento. La ricerca letteraria*, vol. IV.II, a cura di Alberto Asor Rosa, Einaudi, Torino, 1996.

MORENO LÁZARO, Javier, *La industria harinera en Castilla y León, 1841-1864*, Asociación Empresarial de Fabricantes de Harinas de Castilla y León, Valladolid, 1990.

- "La fiebre harinera castellana: la historia de un sueño industrial (1841-1864)", Yun Casalilla, Bartolomé (coord.), *Estudios sobre capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla: (siglos XIX y XX)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991.
- "Harina, azúcar y esclavitud: las relaciones comerciales entre Castilla y Cuba en el siglo XIX", Diego García, Emilio de y Velarde Fuertes, Juan (coord.), *Castilla y León ante el 98*, Junta de Castilla y León, Valladolid, 1999.
- "La harinería castellana y el capitalismo agrario en el tránsito a la industrialización, 1778-1868, en *Historia Agraria*, número 27, SEHA, agosto de 2002.

MORENO PEÑA, José Luis, *La gran propiedad agraria en la provincia de Burgos*, Memoria de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, 1983.

MORAL RONCAL, Antonio Manuel, *Gremios e Ilustración en Madrid (1775-1836)*, Editorial Actas, Madrid, 1998.

MORAL RUIZ, Joaquín del, "Sociedades secretas «Apostólicas» y partidas «Realistas» en el Trienio Constitucional (1830-1823)", Varios autores, *Sociedad, política y cultura en la España de los siglos XIX-XX*, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1973.

- *Hacienda y sociedad en el Trienio Constitucional, 1820-1823*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1975.

- *La agricultura española a mediados del siglo XIX. 1850-1870. Resultados de una encuesta agraria de la época*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1979.
- *Hacienda Central y Haciendas Locales en España, 1845-1905*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1984.

MORALES MOYA, A., *Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII: la posición de la nobleza*, Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1983.

MORÁN MARTÍN, Remedios, “«Abajo todo: fuera Señoríos y sus efectos» El Decreto de 6 de agosto de 1881”, *Revista de Derecho Público*, número 82, UNED.

MORENO NAVARRO, Isidoro, *Propiedad, clases sociales y hermandades en la Baja Andalucía. La estructura social de un pueblo de Aljarafe*, Madrid, 1972.

- *Cofradías y Hermandades Andaluzas. Estructura, simbolismo e identidad*, Sevilla, 1985.

MORNET, Daniel, *Les origines intellectuelles de la Révolution française, 1715-1787*, Edition La Manufacture, Lyon, 1989.

MOYANO ESTRADA, Eduardo, *Acción colectiva y cooperativismo en la agricultura europea*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993.

MUÑOZ, Juan; ROLDÁN, Santiago, y SERRANO, Ángel, “La involución nacionalista y la vertebración del capitalismo español”, *Cuadernos económicos de I.C.E.*, número 5, año 1978.

MUÑOZ-PEIRATS, María José, *Nobleza valenciana. Un paseo por la Historia*, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport, Valencia, 2006.

NADAL, Jordi, "La industria fabril española en 1900, una aproximación", Nadal, Jordi; Sudrià, Carles, y Carreras, Albert (compiladores), *La economía española en el siglo XX*, Ariel, Barcelona, 1987.

- *El fracaso de la Revolución industrial en España, 1814-1913*, Ariel Historia, 15ª reimpresión, Barcelona, 1997.

OCAÑA OCAÑA, Carmen, *Latifundio, gran explotación y modernización agrícola: una reflexión sobre Andalucía*, Universidad de Málaga, 1987.

OLTRA CLIMENT, Francisco, "La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2008) Una apuesta permanente por el conocimiento", Bas Martín, Nicolás y Portolés Sanz, Manuel (coordinadores), *Ilustración y Progreso. La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (1776-2009)*, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 2010.

O'ROURKE, Kevin H. y WILLIAMSON, Jeffrey G., *Globalización e historia. La evolución de una economía atlántica del siglo XIX*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006.

ORDUÑA REBOLLO, Enrique, *Municipios y Provincias*, Instituto Nacional de Administración Pública; Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y Federación Española de Municipios y Provincias, Madrid, 2003.

ORTIZ DE ORRUÑO, Legarda, José María, *Álava durante la invasión napoleónica: reconversión fiscal y desamortización en el término municipal de Vitoria*, Diputación Foral de Álava, Vitoria, 1983.

PABÓN, Jesús, *Cambó 1876-1947*, Editorial Alpha, Barcelona, 1999.

PACHECO, Germán, *Agricultura, modernización y ciencias agrícolas en Venezuela. De la ilustración borbónica a los ilustrados del gomecismo, 1770-1935*, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 2007.

PALAFOX GAMIR, Jordi, “La economía valenciana en los siglos XIX y XX”, *Papeles de economía española*, número 20, Fundación Fondo para la Investigación Económica y social, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Madrid, 1984.

PALMA GARCÍA, Dolores, “Las escuelas patrióticas creadas por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en el siglo XVIII”, *Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea*, vol. 5, Universidad Complutense, Madrid, 1984.

PALOMARES IBÁÑEZ, Jesús María, *La Comisión de Reformas Sociales y la condición obrera en Valladolid*, Universidad, Secretariado de Publicaciones, Valladolid, 1985.

PALOMAS I MONTSERRAT BRAVO, Joan, "Víctor Balaguer, la diputació catalana i la lluita pel proteccionisme (1881-1890)", *Recerques*, número 25, 1992.

PAN-MONTOJO, Juan, “La administración agraria en España, 1847-1907”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 10, 1995.

- “La naissance des associations agraires en Espagne 1833-1898”, en *Histoire, économie et société*, volume 16, n° 2, 1997.

- “La Asociación General de Agricultores de España y el asociacionismo agrario en la primera Restauración, 1881-1899”, *XI Congreso de Historia Agraria*, Sociedad Española de Historia Agraria, Aguilar de Campoo, 2005.

- “La Asociación de Agricultores de España y la clase política, 1881-1942”, *Ayer*, número 66, 2007.

PARDINAS, Felipe, *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*, Editorial Siglo XXI, trigesimaoctava edición, México D.F., 2005.

PARIAS SAINZ DE ROZAS, María, *El mercado de la tierra sevillana en el siglo XIX*, Universidad de Sevilla, 1989.

- PASCUAL GETE, Hilarión, *El sexenio revolucionario en Toro y su comarca, 1868-1874. Crisis de subsistencias y comportamientos políticos*. Tesis Doctoral, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1994.
- PAU PEDRÓN, Antonio, *Azaña, Jurista*, Ministerio de Justicia, Madrid, 1990.
- PEDROSA SANZ, Rosario, *Capital extranjero en la industria de Castilla y León*, Universidad de Valladolid, 1986.
- PEIRÓ MARTÍN, Ignacio y PASAMAR ALZURIA, Gonzalo, *Diccionario Akal de Historiadores españoles contemporáneos*, Akal, Madrid, 2002
- PELAYO OLMEDO, José Daniel, “El derecho de asociación en la historia constitucional española, con particular referencia a las leyes de 1887 y 1964”, en *Revista Electrónica de Historia Constitucional*, número 8, año 2007.
- PERDICES BLAS, Luis, *Pablo de Olavide (1725-1803), el Ilustrado*, Editorial Complutense, Madrid, 1992.
- PEREIRA LEITE, Pedro, *Memórias da Herdade Rio Frio*, Lisboa, 2009.
- PÉREZ DE CASTRO, José Luis, "La obra inédita de Caveda y Nava", *Boletín del Instituto de Estudios Asturianos*, número 92, año 1977.
- PÉREZ JUAN, José Antonio, *El Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas (1847-1851)*, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Madrid, 2008.
- PÉREZ PICAZO, María Teresa, “Mayorazgo y desvinculación en el municipio de Murcia, 1750-1850”, *Historia, instituciones, documentos*, número 16, Universidad de Sevilla, 1989.
- *El mayorazgo en la historia económica de la región murciana: expansión, crisis y abolición (siglos XVII-XIX)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1990.

PÉREZ PULIDO, Margarita, "Bibliotecas, sociedades y fomento de la agricultura en el siglo XIX", *Boletín de la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, ANABAD*, Tomo 48, número 1, 1998.

PÉREZ RIOJA, José Antonio, *Cien años de Casino de Numancia (1848-1948)*, Imp. Casa de Observación, Soria, 1948.

- "La Sociedad Económica Numantina de Amigos del País de Soria y su provincia", *Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y su obra*, San Sebastián, 1972.

PÉREZ-DÍAZ, Víctor, "Transformaciones de una tradición. Campesinos y agricultura en Castilla entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XX", *Homenaje a Miguel Artola*. Vol. 1, Visiones generales, Alianza Editorial, Madrid, 1994.

PESET, Mariano, y PALAO, Javier, "Escenas de la vida universitaria", Piqueras Sánchez, Norberto (coordinador), *Sapientia Aedificavit. Una biografía de l'Estudi General de la Universitat de València*, Universitat de València, 1999.

PINILLA NAVARRO, Vicente, "Sobre la agricultura y el crecimiento económico en España (1800-1935)", *Historia Agraria*, número 34, diciembre 2004.

PIQUERAS ARENAS, J. A., *La revolución democrática (1868-1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión*, Madrid, 1992.

PIQUERAS HABA, Juan, *La agricultura valenciana de exportación y su formación histórica*, Instituto de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios, Madrid, 1985.

- *Sociedades Económicas y fomento de la Agricultura en España 1765-1850*, Generalitat Valenciana, 1992.
- "Exportación agraria y transporte en Valencia: 1850-1930", Morilla, J.; Gómez-Pntoja, J., y Cressier, P. (eds), *Impactos exteriores sobre el*

mundo rural mediterráneo, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1997.

PLAZA ORELLANA, Rocío, *Real Círculo de Labradores. Ciento cincuenta años de historia*, Almuzara, Sevilla, 2009.

PONS I ALTÉS, J. M., “Los grupos dirigentes en la Cataluña urbana y su relación con el Estado centralista (1844-1868)”, S.; Millán J., y Romeo, M. C., eds., *Estado y periferias en la España del siglo XIX. Nuevos enfoques*, Universitat de València, 2009.

PLANAS I MARESMA, Jordi, “La crisis agraria de fines del siglo XIX: nuevas contribuciones y nuevos enfoques”, *Noticiario de Historia Agraria*, número 3, 1992.

- *Catalanisme i agrarisme. Jaume Maspons i Camarasa (1872-1934): escrits polítics*, Eumo Editorial, Barcelona, 1994.

- *Cooperativisme i associacionisme agrari a Catalunya: Els propietaris rurals i l'organització dels interessos agraris al primer terç del segle XX*, Tesi doctoral elaborada per Jordi Planas i Maresma sota la direcció del Dr. Ramon Garrabou i Segura, Departament d'Economia i Història Econòmica. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales, Universitat Autònoma de Barcelona, setembre de 2003.

- *Els Propietaris i l'associacionisme agrari a Catalunya, 1890 1936*, Girona, 2006.

- *Els propietaris i l'associacionisme agrari a Catalunya (1890-1936)*, Associació d'Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca d'Història Rural (ILCC-Secció Vicens Vives) de la Universitat de Girona i Documenta Universitaria, Girona, setembre de 2006.

- “El Instituto Agrícola Catalán de San Isidro y la organización de los intereses agrarios (1880-1936)”, *Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros*, número 217, Madrid, 2008.

- PONSOT, Pierre, "En Andalousie Occidentale: systèmes de transports et développement économique (XVI^e-XIX^e siècle), *Annales. Economies, Sociétés, Civilisations*, volumen 31, número 6, año 1976.
- PRADOS ARRATE, Jesús, *Don Álvaro Flórez Estrada, un español excepcional (1766-1853)*, Real Academia Española, Madrid, 1982.
- PRADOS DE LA ESCOSURA, L. *De Imperio a nación. Crecimiento y atraso económico en España (1780-1930)*, Alianza, Madrid, 1988.
- PRO RUIZ, Juan, "Las élites en la España liberal: clases y redes en la definición del espacio social (1808-1931)", *Historia Social*, número 21, 1995.
- "La formación de la clase política liberal en España (1833-1868)", *Historia Contemporánea*, número 23, 2001.
- PULGAR ARROYO, Jaime, *Máquinas para la siega y trilla de cereales: segadoras, trilladoras, cosechadoras*, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1958.
- RAMÓN DEL VALLE, Ángel, *Desamortización y cambio social en La Mancha, 1836-1854*, Diputación de Ciudad Real, 1996.
- RAMOS SANTANA, Alberto, "Cádiz en el siglo XIX. De ciudad soberana a capital de provincia", en *Historia de Cádiz*, Sílex ediciones S.L., Madrid, 2005.
- REDERO SAN ROMÁN, Manuel y BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés, "Castilla y España en la élites castellanas durante la implantación del Estado liberal (1808-1868)", Esteban de Vega, Mariano y de la Calle Velasco, M^a Dolores (Eds.), *Procesos de nacionalización en la España Contemporánea*, Ediciones Universitarias de Salamanca, 2010.
- REHER, David S., "Producción, precios e integración de los mercados regionales de grano en la España preindustrial", *Revista de Historia Económica*, número 3, Otoño-Invierno, 2001.

REHER, David S. y BALLESTEROS, Esmeralda, “Precios y salarios en Castilla la Nueva: la construcción de un índice de salarios reales, 1501-1991”, *Revista de Historia Económica*, año XI, I, año 1993.

REIS, Jaime, “Latifúndio e progresso técnico: a difusão da debilha mecânica no Alentejo, 1860-1930”, en *Análise Social*, vol. XVIII (7), año 1982-2.

- “How poor was the European periphery before 1850? The Mediterranean vs Scandinavia”, Pamuk, S. y Williamson, J. G., *The Mediterranean Response to Globalization Before 1950*, Routledge, Londres, 2000.

REY REGUILLO, Fernando del, *Propietarios y patronos. La política de las organizaciones económicas en la España de la Restauración (1914-1923)*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1992.

RENOM I FERRER, María Teresa, *Miquel Ferrer i Bauçà protagonista en la sociedad de Mallorca*, Barcelona, 1999.

RENYER, Josep, *Historia del canal d'Urgell (1346-1862)*, Fondarella, Palestra, D. L., 1990.

REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, *Política religiosa de los liberales en el siglo XIX*, CSIC, Madrid, 1973.

RIVERO CORREDERA, Juan, *Los cambios técnicos del cultivo de cereal en España (1800-1930)*, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid, 2013.

RICO LINAJE, Raquel, *Constituciones Históricas. Ediciones Oficiales*, Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones, Imprime Pedro Cid, S. A., Madrid, 1999.

RINGROSE, David R., *Los transportes y el estancamiento económico de España. 1750-1950*, Tecnos, Madrid, 1972.

ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo, *La renta de la tierra en Castilla y León (1836-1913)*, Banco de España, Madrid, 1984.

- “La liberalización del mercado de tierras en Castilla-León: aproximación regional”, *El pasado histórico de Castilla y León. Actas del I Congreso de Historia de Castilla y León*. Tomo III, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1984.
 - *Economistas y reformadores españoles: La cuestión agraria (1760-1935)*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1993.
- ROBLEDO, Ricardo, “El ascenso de una burguesía agraria: los «granjeros». Salamanca, 1780-1840”, Saavedra, Pegerto y Villares, Ramón, eds., *Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. Volumen 1. «Os señores da terra»*, Editorial Crítica, Barcelona, 1991.
- RODRÍGUEZ CHIMILLAS, Isabel, *Vivir de las rentas. El negocio del inquilinato en el Madrid de la Restauración*, Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la Comunidad de Madrid, 2002.
- ROEL PANIAGUA, Guillermo, *El arbitraje del conflicto en caso de huelga y su procedimiento*, Universidad Nacional Autónoma de México, 1966.
- RODRIGUES BERNARDO, Maria Ana, “Las élites agraires portugaises au XIXe siècle: entre groupes de pression et associations”, *Histoire, économie et société*, número 2, 1997.
- RODRÍGUEZ CHUMILLAS, Isabel, “Asociacionismo y defensa de la propiedad urbana. Madrid durante la Restauración”, en *Historia Contemporánea*, número 24, 2002.
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Guillermo, *El socialismo del Siglo XXI*, Centro de Economía Política Juan de Mariana, Caracas, 2006.
- RODRÍGUEZ LABANDEIRA, José, *El trabajo rural en España: 1876-1936*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1991.
- RODRÍGUEZ LÁZARO, Francisco Javier, *Los primeros ferrocarriles españoles*, Akal, Madrid, 2000.
- ROIG CONDOMINA, Vicente M^a, “La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia como promotora de las Bellas Artes: el ejemplo de

las exposiciones del siglo XIX”, *Real Sociedad Económica de Amigos del País. Anales 1999-2000*, vol. II, Valencia, 2001.

ROJAS SÁNCHEZ, Gonzalo, *Los derechos políticos de asociación y reunión en la España contemporánea (1811-1936)*, Universidad de Navarra, Pamplona, 1981.

ROLDÁN DE MONTAUD, Inés, "Joaquín López Puigcerver: un hacendista liberal en épocas de crisis (1841-1906)", Comín, Francisco; Martín Aceña, Pablo, y Vallejo, Rafael (editores), *La Hacienda por sus ministros. La etapa liberal de 1845 a 1899*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006.

ROMAGOSA CASALS, Francesc, *Els aiguamolls de l'Empordà: un paisatge en transformació*, Tesi Doctoral, Departament de Geografia. Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona, juliol de 2007.

ROMÁN CERVANTES, Cándido, *V Concurso de Historia de la Región Ciudad de Cartagena (1989). Accésit. El Comercio de Granos y la política de abastos en una ciudad portuaria. Cartagena 1690-1760*, Ayuntamiento de Cartagena, 1990.

ROMÁN COLLADO, Rocío, *La Escuela Economista Española*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Sevilla, 2003.

- "José Joaquín Mora y Sánchez (Cádiz, 1783-Madrid, 1864)", Sánchez Lissen, Rocío (coordinadora), *Economía y economistas andaluces. Siglos XVI al XX*, Ecobook. Editorial del Economista, Madrid, 2013.

ROMERO, Carmelo y CABALLERO, Margarita, "Oligarquía y caciquismo durante el reinado de Isabel II (1833-1868)", *Historia Agraria*, número 38, 2006.

RONCALÉS SORIANO, Vicente, "Propiedad y riesgo en los inicios de la expansión citrícola valenciana durante el último tercio del siglo XIX", en *Historia Agraria*, número 16, 1998.

RUBÍ, G. y FERRÁN TOLEDANO, Ll., “A propòsit de la història social crítica alemanya”, *L’Avenç*, número 170, mayo de 1993.

RUEDA HERNANZ, Germán, “Los beneficiarios del proceso desamortizador en una zona de Castilla la Vieja (1821-1891)”, *Móneda y Crédito*, número 137, Madrid, 1976.

- *La desamortización en España: un balance (1766-1924)*, Arco Libros, Madrid, 1997.

- *España 1790-1900. Sociedad y condiciones económicas*, Istmo, Madrid, 2006.

- *La desamortización de Mendizábal en Valladolid (1836-1853). Transformaciones y constantes en el mundo rural y urbano de Castilla la Vieja*, Diputación de Valladolid, Valladolid, 2009.

- “El proceso de la desamortización de bienes de origen eclesiástico (1769-1964) en España. Cuantificación y consecuencias socioeconómicas”, Bodimier, Bernard, Congost, Rosa y Luna, Pablo F. (editores), *De la Iglesia al Estado. Las desamortizaciones de bienes eclesiásticos en Francia, España y América Latina*, Sociedad Española de Historia Agraria, Zaragoza, 2010.

RUIZ, David, *Asturias contemporánea 1808-1975. Síntesis histórica: textos y documentos*, Siglo XXI, Madrid, 1981.

SÁINZ DE VARANDA, Ramón; LAGUNA ARANDA, Federico, y SÁNCHEZ CASAJÚS, Tomás, *Colección de leyes fundamentales*, Acribia, Zaragoza, 1957.

SALOM CARRASCO, Julia, “La introducción de la agricultura comercial en el País Valenciano y la teoría de la difusión de las innovaciones”, *Cuadernos de Geografía*, número 49, Valencia, 1991.

SAN MARTÍN PAYO, J., “La Sociedad Económica de Palencia. Su fundación y actividades”, *Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y su obra*, San Sebastián, 1972.

SÁNCHEZ ALBORNOZ, Nicolás, *Las crisis de subsistencias en España en el siglo XIX*, Instituto de Investigaciones Históricas, Rosario, 1963.

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José, *La España Contemporánea. De 1875 a 1931*, Istmo, Madrid, 1991.

SÁNCHEZ LEÓN, Pablo, *Libertad económica versus pluralismo político: la movilización a favor del libre comercio en Inglaterra y en España, 1840-1849*, Instituto Universitario Ortega y Gasset, Madrid, 1999.

SÁNCHEZ LOZANO, María José, “La Real Sociedad Económica de Jaén: El destierro de la ignorancia”, *Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén. Edición facsímil de los estatutos del año 1790. Estatutos actuales e historia*, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén/Caja Rural de Jaén, 2002.

SÁNCHEZ MARROYO, F., *El proceso de formación de una clase dirigente. La oligarquía agraria en Extremadura a mediados del siglo XIX*, Universidad de Extremadura-Caja de Salamanca, Salamanca, 1991.

- “Notas sobre los orígenes de la oligarquía agraria extremeña de mediados del siglo XIX”, Saavedra, Pegerto y Villares, Ramón, eds., *Señores y campesinos en la Península Ibérica, siglos XVIII-XX. Volumen 1. «Os señores da terra»*, Editorial Crítica, Barcelona, 1991.

SÁNCHEZ PADILLA, Andrés, “La apertura del mercado cubano a los productos estadounidenses: las relaciones comerciales hispano-norteamericanas, entre distintos *modus vivendi* y tratados fallidos (1884-1894)”, Barrio Alonso, Ángeles (coord.), Hoyos Puente, Jorge de (coord.), y Saavedra Arias, Rebeca (coord.), *Nuevos horizontes del pasado. Culturas políticas, identidades y formas de representación. Actas del X Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea* (edición en CD-Rom), Ediciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2011.

SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, *La desamortización de Mendizábal en la provincia de Alicante: el clero regular, 1836-1850*, Instituto de Estudios Juan Gil-Albert, Excma. Diputación Provincial, 1983.

- SÁNCHEZ SALAZAR, Felipa, “Incidencia de la ocupación francesa en el medio rural: venta de tierras de propios y comunales. Una aproximación al estado de la cuestión”, *Agricultura y Sociedad*, nº 55, MAPA, Madrid, abril-junio 1990.
- SANZ FERNÁNDEZ, Jesús, “Estructura, desarrollo agrario y formación del mercado regional. Siglos XIX y XX”, *El pasado histórico de Castilla y León, Junta de Castilla y León*, Volumen 3, Salamanca, 1984.
- “Historia contemporánea de los montes públicos españoles, 1812-1930. Notas y reflexiones”, Garrabou, Ramon y García Sanz, Jesús (eds.), *Historia agraria de la España contemporánea. 2. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985.
- SANZ LAFUENTE, Gloria, *En el campo conservador. Organización y movilización de propietarios agrarios en Aragón, 1880-1930*, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2005.
- SARDÀ, Joan, *La Política Monetaria y las fluctuaciones de la Economía española en el siglo XIX*, Instituto de Economía «Sancho de Moncada», Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1948.
- SEGOVIA AZCÁRATE, José María, *Cien años en la vida del Círculo Mercantil y Agrícola de Huelva, 18863-1963*, Tip. Girón, Huelva, 1964.
- SEGURA, Antoni, “El mercat de cereals i Llegumes a Barcelona, 1814-1868, *Recerques*, número 14, 1983.
- SARRAILH, Jean, *La España Ilustrada en la segunda mitad del siglo XVIII*, Fondo de Cultura Económica, México, 1957.
- SEGURA GRAIÑO, Cristina (Directora), *Historia de los regadíos en España (... a.C. – 1931)*, Asociación Cultural Al-Mudayna, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1991.
- SERRANO GARCÍA, Rafael, *El sexenio revolucionario en Valladolid: cuestiones sociales (1868-1274)*, Consejería de Educación y Cultura, Junta de Castilla y León, 1986.

- *La Revolución de 1868 en Castilla y León*, Universidad de Valladolid, 1992.
- *Revolución liberal y asociación agraria en Castilla (1869-1874)*, Universidad de Valladolid, 1997.
- “Coyuntura económica y cambio político en Castilla la Vieja y León, 1867-1969,” Serrano García, Rafael (coord.), *España, 1868-1874: nuevos enfoques sobre el sexenio democrático*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid, 2002.
- "La exposición castellana de 1859", en *Alcores*, número 1, año 2006.
- "Aproximación al Sexenio Democrático y sus elites políticas en Castilla la Vieja y León”, Rededero San Román, Manuel y de la Calle Velasco, M^a Dolores (Eds.), *Castilla y León en la Historia Contemporánea*, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, febrero 2009.

SERRANO SANZ, José María, *El viraje proteccionista en la Restauración. La política comercial española, 1875-1895*, Siglo XXI, Madrid, 1987.

SCHONHARDT-BAILEY, Cheryl, *From the Corn Laws to Free Trade. Interests, ideas, and institutions in historical perspective*, Massachusetts Institute of Technology, 2009.

SHAFER, R. J., *The Economic societies in the Spanish world (1763-1821)*, University Press, Syracuse, 1958.

SHUBERT, Adrian, *Historia social de España (1800-1990)*, Madrid, 1991.

SIERRA, Luis Antonio, *Irlanda del Norte. Historia del conflicto*, Sílex, Madrid, 1999.

SILVA SUAREZ, Manuel, “Apuntes biográficos”, Silva Suarez, Manuel (ed.), *Técnica e ingeniería. El ochocientos, profesiones e instituciones civiles*. Tomo V, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2007.

SIMÓN SEGURA, Francisco, “La desamortización de 1855”, *Economía Financiera Española*, números 19 y 20, año 1967.

- *La desamortización española del siglo XIX*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1973.

SLICHER VAN BATH, Bernard H., *Historia agraria de Europa occidental: 500-1850*, Serie Universitaria, Ediciones Península, Barcelona, 1974.

SOBOUL, Albert, LEMARCHAND, Guy y FOGEL, Michèle, *El siglo de las Luces. Los inicios (1715-1750)*. Tomo I. Libro I, Akal, Madrid, 1992.

SOBRINO, Julián, *Arquitectura de la industria en Andalucía*, Instituto de Fomento de Andalucía, Sevilla, 1998.

SOLDEVILA, Ferran, *Un segle de vida catalana, 1814-1930*, Volumen I, Editorial Alcides, Barcelona, 1961.

SUBACCHI, Paola, “Organisations économiques et groupes de pression en Europe au XIXe siècle et au début du XXe siècle”, *Histoire, économie et société*, número 2, 1997.

TEDDE DE LORCA, Pedro, “Revolución liberal y crecimiento económico en la España del siglo XIX”, *Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola*. Vol. 1, Visiones generales, Alianza Editorial, Madrid, 1994.

TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio, “La Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Cien años de investigaciones”, *IX Congreso de Estudios Vascos, Bilbao 1983. Antecedentes próximos de la sociedad vasca actual. Siglos XVIII y XIX*, Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, 1984.

TOLEDANO MORALES, Carlos, “Junta General de Agricultura de 1849”, *Estudios de Historia Contemporánea*, Vol. 1, Instituto Jerónimo Zurita, CSIC, Madrid 1976.

TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, “Algunos ejemplos de jurisprudencia civil y administrativa en materia de desamortización”, Tortella Casares,

Gabriel y Nadal, Jordi (coord.), *Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea: actas del Primer Coloquio de Historia Económica de España*, Ariel, Barcelona, 1974.

- “El proceso de la desamortización de la tierra en Escapa”, *Agricultura y Sociedad*, número 7, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1978.
- “Recientes investigaciones sobre la desamortización”, Hernández Andreu, Juan, *Historia Económica de España*, Confederación Española de Cajas de Ahorros, Madrid, 1978.

TORIJANO PÉREZ, Eugenia, *Los Nuevos Propietarios de Ledesma 1752-1900. De la propiedad territorial feudal a la propiedad territorial capitalista*, Ediciones de la Diputación de Salamanca, 1999.

TORRE CAMPO, Joseba de la, *Los campesinos navarros ante la guerra napoleónica: financiación bélica y desamortización civil*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1991.

TORRE DEL RÍO, Rosario de la, “El falso tratado secreto de Verona de 1822”, *Cuadernos de Historia Contemporánea*, Volumen 33, año 2011.

TORRES, Manuel de, y PARÍS EGUILAZ, Higinio, *La naranja en la economía española*, Sindicato Nacional de Frutos y Productos Agrícolas, Madrid, 1950.

TORTELLA, Gabriel, “Producción y productividad agraria, 1830-1930” Sánchez Albornoz, Nicolás (ed.), *La modernización económica de España 1830-1930*, Alianza Editorial, Madrid, 1985.

- “La historia económica de España en el siglo XIX: un ensayo comparativo con los casos de Italia y Portugal” Prados de la Escosura, Leandro y Zamagni, Vera (eds.), *El desarrollo económico en la Europa del Sur: España e Italia en perspectiva histórica*, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
- *El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX*, Alianza Universidad, Segunda edición, Madrid, 1995.

- TRIGUERO CANO, Ángela, “La persistencia del subdesarrollo agrario”, Pardo Pardo, Miguel R. (coordinador), *Historia económica de Castilla-La Mancha (siglos XVI-XX)*, Celeste Ediciones, Madrid, 2000.
- TUÑÓN DE LARA, M., “La burguesía y la formación del bloque d poder oligárquico (1875-1914)” en *Estudios sobre el siglo XIX español*, Siglo XXI, Madrid, 1982.
- ÚBEDA BALAGUER, Vicent A., *La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes a través de sus Presidentes (1859-2009)*, Valencia, 2009.
- URQUIJO GOITIA, José Ramón, *Gobiernos y ministros españoles en la edad contemporánea*, CSIC, Madrid, 2008.
- VALLE CALZADO, Ángel Ramón del, *La desamortización eclesiástica en la provincia de Ciudad Real, 1836-1854*, Tesis Doctoral publicada por la Universidad de Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones, Cuenca, 1995.
- VALLEJO POUSADA, Rafael, “El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal en la España de la segunda mitad del siglo XIX: un impuesto no exclusivamente urbano”, *Revista de Historia Económica*, año XIV, número 2, primavera-verano 1996.
- “Actores y Naturaleza de la Reforma Tributaria de 1845”, *Revista de Economía Aplicada*, número 21, volumen VII, año 1999.
 - “La Estadística territorial española desde 1845 a 1900 ¿Por qué no se hizo un Catastro en el siglo XIX?”, *Catastro*, Abril, 2010.
- VARELA ORTEGA, José, “El proteccionismo de los trigueros castellanos y la naturaleza del Poder político en la Restauración”, en *Cuadernos económicos de I.C.E.*, número 6, año 1978.
- *Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la Restauración (1875-1900)*, Marcial Pons Historia Estudios, Madrid, 2001.

- “Apéndice: Diputados a Cortes 1876-1923”, en *El poder de la influencia. Geografía del caciquismo en España (1875-1923)*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001.

- VARIOS AUTORES, *Solidarités et sociabilités en Espagne (XVI^e-XX^e siècles)*, (Estudes réunis et présentées por Rafaël Carrasco), Annales Littéraires de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Besançon, 1991.

- VARIOS AUTORES, *Sociabilidad fin de siglo. Espacios asociativos en torno a 1898*, Sánchez Sánchez, Isidro y Villena Espinosa (Coordinadores), Cuenca, 1999.

- VELLOSO JIMÉNEZ, Luisa, “Los orígenes constitucionales del derecho de asociación en España (1868-1923)”, *Anuario de la Facultad de Derecho*, número 1, 1982.

- VICEDO RIUS, Enric, “Crisis de las solidaridades tradicionales y nuevas formas de asociación y resistencia campesina en la Cataluña Occidental”, *Historia Agraria*, número 18, Sociedad Española de Historia Agraria, 1999.

- VIGREUX, Marcel, *La Société d’agriculture d’Autun (1833-1914)*, Editions Universitaires de Dijon, Publications de l’Université de Bourgogne, 1990.

- VILLENA ESPINOSA, Rafael y LÓPEZ VILLAVERDE, Ángel, “Espacio privado, dimensión pública: hacia una caracterización del casino en la España contemporánea”, *Hispania*, LXIII/2, número 214, año 2003.

- VIVES VICENS, Jaime, *Historia social y económica de España y América. Burguesía. Industrialización. Obrerismo. Los siglos XIX y XX. América Independiente*, Volumen 5, Editorial Teide, Madrid, 1957.

- *Coyuntura económica y reformismo burgués*, Ariel, Barcelona, 1974.

- VILLARES, Ramón, *La propiedad de la tierra en Galicia 1500-1936*, Siglo veintiuno, Madrid, 1982.

WINDLER, Christian, “Landarbeiter und Kleinbauern als Kläger. Die Auseinandersetzungen um die Verteilung des Gemeindelandes von Morón de la Frontera (Sevilla) im späten 18. Jahrhundert”, Scholz, Johannes-Michael, ed., *Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Justiz 15. bis 20. Jahrhundert*, Vittorio Klostermann, Frankfurt-am-Main, 1994.

YOSHIYUKI KONDO, Agustín, *La agricultura española del siglo XIX*, Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Editorial Nerea, Madrid, 1990.

YUN CASALILLA, Bartolomé, “Mercado de cereal y burguesía en Castilla, 1750-1868: (sobre el papel de la agricultura en el crecimiento económico regional)”, Yun Casalilla, Bartolomé (coord.), *Estudios sobre el capitalismo agrario, crédito e industria en Castilla (siglos XIX y XX)*, Junta de Castilla y León, Salamanca, 1991.

- *La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII)*, Akal, Madrid, 2002.

- “Crisis del Antiguo Régimen y «crisis de la aristocracia», *Ayer*, número 48, 2002.

ZORRILLA ARENA, Santiago, *Cómo aprender económica. Conceptos básicos*, Noriega editores, México, 2004.

ZOZAYA MONTES, María, *Del ocio al negocio. Redes y capital social en el Casino de Madrid, 1836-1901*, Catarata, Madrid, 2007.

